

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN  
PERÚ

# INFORME FINAL

TOMO V

PRIMERA PARTE  
EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS







COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN

PERÚ

# INFORME FINAL

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue suscrito por el pleno de comisionados el 27 de agosto de 2003 y se presentó al Presidente de la República, doctor Alejandro Toledo Manrique, al Presidente del Congreso Nacional, doctor Henry Pease García, y al Presidente de la Corte Suprema, doctor Hugo Sivina Hurtado, el 28 de agosto de 2003.

Dr. Salomón Lerner Febres  
Presidente

Dra. Beatriz Alva Hart

Dr. Rolando Ames Cobán

Mons. José Antúnez de Mayolo Larragañ

Tnte. Gral. FAP (r) Luis Arias Graziani \*

Dr. Enrique Bernales Ballesteros

Lic. Carlos Iván Degregori Caso

Rvdo. Padre Gastón Garatea Yori

Pastor Humberto Lay Sun

Sra. Sofía Macher Batanero

Ing. Alberto Morote Sánchez

Ing. Carlos Tapia García

Mons. Luis Bambáren Gastelumendi

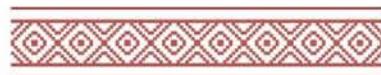
Observador

\* El teniente general FAP (r) Luis Arias Graziani ha dejado constancia, en carta dirigida al Presidente de la CVR, de que suscribe con reservas el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, de la cual es miembro. El contenido de dicha carta, donde aparece fundamentada su reserva, figura al final de las conclusiones generales (tomo VIII) y forma parte del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN  
PERÚ

**INFORME FINAL**  
TOMO V

PRIMERA PARTE  
EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS



Primera edición, noviembre de 2003  
Tiraje, 1000 ejemplares

***INFORME FINAL***

© 2003 de esta edición,  
Comisión de la Verdad y Reconciliación  
Dirección URL: [www.cverdad.org.pe](http://www.cverdad.org.pe)

En virtud de lo dispuesto por las leyes 27806 y 27927, el presente Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es de carácter público y puede ser consultado por cualquier ciudadano o persona que lo requiera. Se autoriza la reproducción total o parcial de su contenido, siempre y cuando sea fiel al original y se cite adecuadamente la fuente:  
Comisión de la Verdad y Reconciliación. *Informe Final*. Lima: CVR, 2003.

*Secretario Ejecutivo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación*  
Javier Ciurlizza Contreras

*Comité Editorial del Informe Final*

Coordinadores generales: Carlos Iván Degregori Caso y Félix Reátegui Carrillo  
Miembros: José Burneo Labrín, Javier Ciurlizza Contreras, Eduardo González Cueva, Iván Hinojosa Cortijo, Iris Jave Pinedo, David Sulmont Haak y Viviana Valz Gen Rivera  
Editora general: Estrella Guerra Caminiti

Diseño de carátula: Édgar Thays Vélez

ISBN: 9972-9742-4-3

9972-9742-9-4

Depósito Legal: 1501372003-6758

Impreso en el Perú – Printed in Peru

## **TABLA DE CONTENIDO GENERAL**

### **TOMO I**

#### **PRIMERA PARTE: EL PROCESO, LOS HECHOS, LAS VÍCTIMAS**

Prefacio

Introducción

##### *SECCIÓN PRIMERA: EXPOSICIÓN GENERAL DEL PROCESO*

Capítulo 1: Los períodos de la violencia

Capítulo 2: El despliegue regional

Capítulo 3: Rostros y perfiles de la violencia

Capítulo 4: La dimensión jurídica de los hechos

### **TOMO II**

##### *SECCIÓN SEGUNDA: LOS ACTORES DEL CONFLICTO*

Capítulo 1: Los actores armados

1. El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso
2. Las Fuerzas Policiales
3. Las Fuerzas Armadas
4. El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru
5. Los comités de autodefensa

### **TOMO III**

Capítulo 2: Los actores políticos e institucionales

1. El gobierno de Acción Popular
2. El gobierno del Partido Aprista Peruano
3. La década del noventa y los dos gobiernos de Alberto Fujimori
4. Los partidos de izquierda
5. El Poder Legislativo
6. El Poder Judicial

Capítulo 3: Las organizaciones sociales

1. El movimiento de derechos humanos

2. Los sindicatos, los gremios empresariales y las organizaciones de mujeres
3. La Iglesia Católica y las iglesias evangélicas
4. Los medios de comunicación
5. El sistema educativo y el magisterio
6. Las universidades

## TOMO IV

### *SECCIÓN TERCERA: LOS ESCENARIOS DE LA VIOLENCIA*

#### Capítulo 1: La violencia en las regiones

1. La región del sur central
2. La región del centro
3. La región del sur andino
4. La región del nororiente
5. La región de Lima Metropolitana
6. Los ejes complementarios

## TOMO V

#### Capítulo 2: Historias representativas de la violencia

1. El PCP-SL en el campo ayacuchano: los inicios del conflicto armado interno
2. La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca
3. Los casos de Chungui y de Oreja de Perro
4. El caso Uchuraccay
5. La SAIS Cahuide
6. Los sindicatos mineros
7. Los Molinos: derrota del MRTA en la región central
8. Los pueblos indígenas y el caso de los asháninkas
9. El PCP-SL durante el auge de la hoja de coca en el Alto Huallaga
10. El frente nororiental del MRTA en San Martín
11. La violencia y el narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo
12. La estrategia contrasubversiva en la margen izquierda del río Huallaga
13. La violencia en Huaycán
14. Raucana: un intento de «comité político abierto»
15. Los sindicatos de la carretera central: entre el radicalismo y la resignación
16. La batalla por las barriadas de Lima: el caso de Villa El Salvador
17. El PCP-SL y la batalla por Puno
18. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga
19. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta
20. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos
21. La Universidad Nacional del Centro
22. Las cárceles
23. Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción

## TOMO VI

### SECCIÓN CUARTA: LOS CRÍMENES Y VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

#### Capítulo 1: Patrones en la perpetración de crímenes y violaciones de los derechos humanos

1. Los asesinatos y las masacres
2. Las desapariciones forzadas
3. Las ejecuciones arbitrarias
4. La tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes
5. La violencia sexual contra la mujer
6. La violación del debido proceso
7. El secuestro y la toma de rehenes
8. La violencia contra niños y niñas
9. La violación de los derechos colectivos
10. Cuadros estadísticos

## TOMO VII

#### Capítulo 2: Los casos investigados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación

1. Ejecuciones extrajudiciales en el hospital de Ayacucho (1982)
2. Atentado contra el local de Acción Popular (1983)
3. Ejecución extrajudicial en la base militar de Totos (1983)
4. Asesinatos en Canchacancha (1983)
5. Ejecuciones extrajudiciales en Sillaccasa (1983)
6. Ejecuciones extrajudiciales en Lucanamarca (1983)
7. Ejecuciones extrajudiciales en Socos (1983)
8. Ejecuciones extrajudiciales en Ccarpaccasa (1983)
9. Desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en la base militar Los Cabitos (1983-1985)
10. Ejecuciones extrajudiciales de creyentes evangélicos en Callqui (1984)
11. Ejecuciones extrajudiciales comprobadas en las fosas de Pucayacu (1984)
12. La desaparición del periodista Jaime Ayala (1984)
13. Tortura y ejecución extrajudicial de Jesús Oropeza (1984)
14. Ejecuciones extrajudiciales en Putis (1984)
15. Ejecuciones extrajudiciales en Accomarca (1985)
16. Asesinato de campesinos en Lucmahuaycco (1984)
17. Atentado contra la vida de Domingo García Rada (1985)
18. Ejecuciones extrajudiciales en Pucayacu II (1985)
19. Ataque del PCP-SL a la localidad de Marcas (1985)
20. Asesinatos del comando paramilitar autodenominado Rodrigo Franco (1985-1990)
21. El asesinato del almirante Ponce Canessa (1986)
22. Ejecuciones extrajudiciales en Pomatambo y Parcco Alto (1986)
23. Ejecuciones extrajudiciales en los penales de El Frontón y Lurigancho (1986)
24. El asesinato de Rodrigo Franco (1987)
25. El asesinato de César López Silva (1987)
26. Violaciones de los derechos humanos en la base militar de Capaya (1987-1989)
27. Desapariciones en la base militar de Santa Rosa (Checcasa) (1988)
28. Ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento en Cayara (1988)
29. Masacre en la comunidad de Aranhua (1988)
30. Asesinato de autoridades comunales de Chongos Alto y Chicche (1989)
31. La desaparición del jefe asháninka Alejandro Calderón (1989)

32. La masacre de los pobladores de Pacchas en Huamanga (1989)
33. Las ejecuciones extrajudiciales de Abel Malpartida Páez y Luis Álvarez (1989)
34. Asesinatos durante el ataque al puesto policial de Uchiza (1989)
35. Los asesinatos de Bárbara D'Achille y Esteban Bohórquez (1989)
36. El asesinato de Fermín Azparrent (1989)
37. El ataque al regimiento Húsares de Junín (1989)
38. Ejecuciones extrajudiciales en Los Molinos (1989)
39. Ejecuciones extrajudiciales en Pucará (1989)
40. Asesinato de nueve pobladores en Yumbatas, San Martín (1989)
41. Ejecuciones extrajudiciales durante la estrategia contrasubversiva en la margen izquierda del río Huallaga (1989-1994)
42. La desaparición de Ángel Escobar Jurado (1990)
43. Desapariciones y torturas en la base militar Los Laureles (1990)
44. Desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Chumbivilcas (1990)
45. El asesinato de Orestes Rodríguez (1990)
46. Las desapariciones de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (1990-1992)
47. Ejecuciones extrajudiciales en Barrios Altos (1991)
48. Desapariciones forzadas y asesinato de autoridades en Chuschi (1991)
49. Desapariciones de los candidatos a la alcaldía de Huancapi (1991)
50. El asesinato de Porfirio Suni (1991)
51. Los asesinatos de los sacerdotes Strzalkowski, Tomaszek y Dordi (1991)
52. Ejecuciones extrajudiciales en Santa Bárbara (1991)
53. Las ejecuciones extrajudiciales de Luis Morales Ortega, la familia Solier, Leonor Zamora y otros (1991)
54. Lesiones graves producidas a Ana Lira (1992)
55. Ejecuciones extrajudiciales en Apiza (1992)
56. Desaparición de campesinos del Santa (1992)
57. El secuestro y asesinato de David Ballón Vera (1992)
58. El asesinato del coronel PNP Manuel Tumba (1992)
59. El secuestro del empresario Samuel Dyer Ampudia (1992)
60. Asesinatos en Huayao (1992)
61. Ejecuciones extrajudiciales de universitarios de La Cantuta (1992)
62. Los asesinatos de María Elena Moyano (1992) y Pascuala Rosado (1996)
63. El asesinato de Pedro Huillca Tecse (1992)
64. Ejecuciones extrajudiciales en el penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro (1992)
65. La desaparición de Pedro Yauri (1992)
66. Asesinatos y lesiones graves producidos en el atentado de Tarata (1992)
67. La tortura y el asesinato de Rafael Salgado Castilla (1992)
68. Asesinatos en Pichanaqui (1993)
69. La injusta incriminación y tratos crueles a Juan Mallea (1993)
70. Asesinato de policías, autoridades locales y candidatos en Ajoyani y Antauta (1993)
71. Asesinatos y violaciones de los derechos humanos en Mazamari (1993)
72. El asesinato de Indalecio Pomatanta (1995)
73. Ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997)

## TOMO VIII

### SEGUNDA PARTE: LOS FACTORES QUE HICIERON POSIBLE LA VIOLENCIA

- Capítulo 1: Explicando el conflicto armado interno
- Capítulo 2: El impacto diferenciado de la violencia

1. Violencia y desigualdad de género
2. Violencia y desigualdad racial y étnica

#### **TERCERA PARTE: LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA**

Capítulo 1: Las secuelas psicosociales

Capítulo 2: Las secuelas sociopolíticas

Capítulo 3: Las secuelas económicas

#### **CONCLUSIONES GENERALES**

Carta del comisionado Luis Arias Graziani

#### **TOMO IX**

#### **CUARTA PARTE: RECOMENDACIONES DE LA CVR. HACIA LA RECONCILIACIÓN**

Capítulo 1: Fundamentos de la reconciliación

Capítulo 2: Recomendaciones

1. Reformas institucionales
2. Plan Integral de Reparaciones
3. Plan Nacional de Intervención Antropológico-Forense
4. Mecanismos de seguimiento

Agradecimientos

#### **ANEXOS**

Anexo 1: Memoria institucional

Anexo 2: Cronología 1978-2000

Anexo 3: ¿Cuántos peruanos murieron?

Anexo 4: Compendio estadístico

Anexo 5: Lista de víctimas

Anexo 6: Informe de la base de datos para la investigación cualitativa (BDI)

Anexo 7: Informe de la unidad de salud mental

Anexo 8: Iniciativa de desaparecidos

Anexo 9: Plan Integral de Reparaciones

Anexo 10: Audiencias públicas

Anexo 11: Sesiones de balance y perspectivas

Anexo 12: Bases de datos digitales



**TOMO V**



# ÍNDICE

CAPÍTULO 2	
HISTORIAS REPRESENTATIVAS DE LA VIOLENCIA	25
1. El PCP-SL en el campo ayacuchano: los inicios del conflicto armado interno	27
1.1. El Comité Zonal Fundamental Cangallo-Víctor Fajardo, comité principal	27
1.2. La efervescencia política no empieza con el PCP-SL	28
1.3. El retorno de los maestros y la inserción del PCP-SL en el circuito educativo	29
1.3.1. El discurso de la igualdad del PCP-SL	30
1.3.2. Del discurso a la acción consecuente	30
1.3.3. Construcción del «nuevo estado»	31
1.3.4. Tomar a los pueblos por asalto	34
1.3.5. Orden y justicia en el «nuevo estado»	36
1.3.6. La primera víctima de la guerra	37
1.4. Ataques al puesto policial de Vilcashuamán	40
1.5. ¿Entre dos fuegos?	41
1.5.1. La base militar de Vilcashuamán y la espiral de la violencia	42
1.5.2. Seguridad y fiscalización por cuenta propia	45
1.6. Epílogo	47
1.7. Conclusiones	47
2. La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca	48
2.1. Factores que favorecieron la entrada y el desarrollo del PCP-SL en la región	48
2.1.1. El poder local: características de las élites	49
2.1.2. Educación y modernidad	50
2.1.3. El colegio Los Andes	50
2.1.4. La pedagogía del PCP-SL	51
2.1.5. Las «escuelas populares»	52
2.2. El PCP-SL y la «república popular de nueva democracia»	52
2.2.1. Perfil de los líderes y los jóvenes del PCP-SL	53
2.2.2. Las mujeres del PCP-SL	53
2.2.3. Características de la vida cotidiana	54
2.3. Los puntos de quiebre	57

## ÍNDICE

2.3.1. Ataque a la economía familiar	57
2.3.2. Contradicciones entre la ideología y la práctica del PCP-SL	57
2.3.3. Instalación de la muerte en el centro de la vida cotidiana	58
2.3.4. Pugnas al interior del PCP-SL	59
2.4. Las respuestas locales	59
2.4.1. La respuesta de Sacsamarca	59
2.4.2. La respuesta de Sancos	61
2.4.3. La respuesta de Lucanamarca	62
2.5. La represión del PCP-SL	63
2.6. La respuesta de las fuerzas del orden	66
2.7. Conclusiones	67
 3. Los casos de Chungui y de Oreja de Perro	68
3.1. Datos generales	68
3.1.1. Chungui y Oreja de Perro: consideraciones geopolíticas	68
3.1.2. Chungui: una zona ausente de haciendas	70
3.1.3. Oreja de Perro: un punto olvidado en el mapa	70
3.2. Primera etapa: el PCP-SL se infiltra a través del circuito educativo	73
3.3. El inicio del conflicto armado	74
3.3.1. La «fuerza principal» del PCP-SL ingresa al distrito de Chungui	74
3.3.2. El PCP-SL toma por asalto la comunidad de Chapi (1982)	75
3.3.3. La masacre de Santa Carmen de Rumichaca	75
3.3.4. El PCP-SL toma por asalto Chungui	77
3.3.5. El PCP-SL y las escuelas en la zona de Chungui	78
3.3.6. ¿Desde dónde llegó el PCP-SL a la zona de Chungui?	78
3.4. El nuevo poder: las «retiradas» como estrategia (1982-1987)	79
3.4.1. La organización del PCP-SL en las «retiradas»	79
3.5. Las incursiones del Ejército	83
3.5.1. La llegada del Ejército a Chungui	83
3.5.2. La incursión del Ejército en Oreja de Perro	84
3.6. Conclusiones	87
 4. El caso Uchuraccay	88
4.1. Los antecedentes y hechos de la masacre	89
4.1.1. Uchuraccay	89
4.1.2. Antecedentes	90
4.1.3. Los hechos del 26 de enero	96
4.1.4. Los días posteriores	99
4.2. La historia desconocida: violencia y represión contra Uchuraccay	104
4.2.1. Los ataques y la diáspora	104
4.2.2. El retorno	107
4.3. El contexto de interpretación	108
4.3.1. El Informe de la Comisión Investigadora	108
4.3.2. Los medios y la construcción de la responsabilidad	113
4.3.3. El proceso judicial	117
4.4. Conclusiones	122
Apéndice: lista de fallecidos en Uchuraccay	124
 5. La SAIS Cahuide	127
5.1. Importancia y contradicciones de la SAIS Cahuide	127
5.2. El ingreso del PCP-SL a la zona	128
5.3. Exacerbando las contradicciones	129

## ÍNDICE

5.4. La violencia se incrementa: 1987-1990	130
5.5. La destrucción de la SAIS Cahuide en la mira	132
5.6. La contraofensiva: instalación de la base militar	134
5.7. La formación obligada de rondas de autodefensa	135
5.8. Epílogo	135
5.9. Conclusiones	136
6. Los sindicatos mineros	136
6.1. La minería en el Perú: gran generadora de divisas	136
6.2. Minas de Huancavelica: bancos de dinamita del PCP-SL	137
6.3. La importancia de la región central para el PCP-SL	139
6.4. El PCP-SL en las minas de Cerro de Pasco	139
6.5. Nuevos actores en el escenario	140
6.6. Violencia en los centros mineros de Junín: la doble lucha de los mineros. El sindicato metalúrgico de La Oroya	143
6.7. El PCP-SL en el asiento minero Morococha	145
6.8. La presencia de los militares	147
6.9. Conclusiones	149
7. Los Molinos: derrota del MRTA en la región central	150
7.1. El MRTA en la región central	150
7.2. La fallida toma de Tarma	151
7.2.1. El Ejército y los planes del MRTA	152
7.2.2. Encuentro en la pampa Puyhuan	153
7.3. Huida de Los Molinos	154
7.4. Operación de rastillaje	156
7.5. De la morgue a la fosa común	157
7.6. Acciones del Ejército después del enfrentamiento	158
7.7. Epílogo	159
7.8. Conclusiones	161
8. Los pueblos indígenas y el caso de los asháninkas	161
8.1. Preguntas e hipótesis centrales	162
8.1.1. Importancia del estudio	162
8.1.2. Trabajo de campo y estrategia de recolección de datos	162
8.2. Escenarios del conflicto armado interno en la selva central	163
8.3. Primeras acciones del PCP-SL	164
8.3.1. Otica, el papel de los líderes en la simpatía inicial hacia el PCP-SL	165
8.3.2. Cutivireni, una comunidad desplazada por vía aérea	167
8.4. El «nuevo estado» en el monte: la vida de las «masas»	167
8.4.1. Los mártires asháninkas del Tambo	168
8.4.2. Escape de los «comités populares» Wacapú y Vista Alegre de Otica	171
8.5. Contraofensiva militar (1991-1994)	172
8.6. Los núcleos poblacionales	173
8.6.1. La marginación de Otica en Poyeni	174
8.7. El conflicto armado interno en la zona de la carretera Marginal	175
8.7.1. El control de Satipo por el PCP-SL (1987-1990)	175
8.8. Contraofensiva militar	177
Conflictos internos en Cushiviani	177
Matanza en Tahuantinsuyo	178
8.9. El difícil camino de retorno	180
8.10. El ejército asháninka y el MRTA en Oxapampa (1989-1990)	181

## ÍNDICE

8.10.1. Zona de la provincia de Chanchamayo	182
8.11. Recursos culturales de supervivencia	184
9. El PCP-SL durante el auge de la hoja de coca en el Alto Huallaga	186
9.1. La figura del policía corrupto como precursor del PCP-SL	187
9.2. La manera como llegó el PCP-SL	189
9.2.1. Desplazamiento del PCP-SL hacia el norte: Uchiza, Paraíso y Tocache	191
9.3. Segunda etapa: primeros conflictos entre narcotraficantes y el PCP-SL	194
9.3.1. Asalto al pueblo de Uchiza	195
9.4. El fin del apogeo	197
9.5. Una visita inesperada	199
9.6. Conclusiones	205
10. El frente nororiental del MRTA en San Martín	208
10.1. El Movimiento de Izquierda Revolucionaria–Vanguardia Revolucionaria (MIR-VR)	208
10.1.1. Formación de bases políticas del MIR-VR	208
10.1.2. Formación militar del MIR-VR	209
10.2. Organización política y militar del frente nororiental	210
10.2.1. Organización del ET del FNO	210
10.3. El impacto del trabajo político de las agrupaciones de izquierda en San Martín	212
10.3.1. La importancia del trabajo político del MIR-VR	214
10.4. Incursiones armadas del frente nororiental en San Martín	215
10.4.1. Primera toma de Juanjuí	216
10.4.2. Incursión en San José de Sisa	218
10.5. El descalabro del ET del frente nororiental	218
10.5.1. Toma de Yurimaguas	220
10.5.2. Segunda toma de Juanjuí	222
10.6. El avance del PCP-SL y el narcotráfico hacia el norte del departamento de San Martín	222
10.6.1. Enfrentamientos en el valle del Ponaza	223
10.6.2. Enfrentamientos en el valle del Huallabamba	223
10.6.3. <i>Vaticano</i> : el otro gran escollo para el PCP-SL	224
10.7. El final del frente nororiental	226
10.7.1. El PCP-SL y su presencia en San Martín	227
10.7.2. Desarticulación de la base política del frente nororiental	227
10.7.3. Corrupción y abusos de los miembros del MRTA	227
10.7.4. La represión del Ejército	228
10.7.5. El papel de la Oficina Prelatural de Acción Social de Moyobamba (OPASM), la Comisión de Pacificación de la Región San Martín y los efectos de la ley de arrepentimiento	228
11. La violencia y el narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo	231
11.1. Antecedentes	232
11.2. Ingreso de grupos subversivos en la zona	232
11.2.1. La presencia del MIR-EM en Ucayali	233
11.2.2. El trabajo del MIR-EM en Pucallpa (1982-1986)	234
11.2.3. Consolidación del MIR-EM en Pucallpa y presencia del MRTA	234
11.2.4. Auge y caída del MRTA en Ucayali	235
11.3. La inserción del PCP-SL en el departamento de Ucayali	236
11.3.1. La imposición de la organización del PCP-SL en los caseríos de la provincia de Padre Abad	237
11.3.2. El ingreso del PCP-SL a la provincia de Coronel Portillo	238
11.3.3. El fracaso del PCP-SL al intentar organizar las comunidades nativas de Padre Abad y Coronel Portillo	239
11.3.4. El PCP-SL y su alianza con el narcotráfico	245

11.4. Lucha contrasubversiva en el Ucayali	247
11.4.1. Acciones contrasubversivas del Ejército	247
11.4.2. La presencia de la Marina de Guerra en Ucayali	248
11.5. Respuestas de la ciudadanía a la violencia en Ucayali	250
11.5.1. Los cashibo-cacataibo: el uso del mito y la cultura como mecanismos de defensa	250
11.5.2. Los shipibo-conibo: el rechazo y el aprovechamiento para sobrevivir a la violencia	252
11.5.3. El CAD de Puerto Alegre: actor estratégico para la derrota del PCP-SL	254
11.5.4. La respuesta de la población urbano-rural campesina asentada en la CFB	256
11.6. La Iglesia Católica y su defensa de los derechos humanos en Ucayali	257
11.7. Conclusiones	258
 12. La estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga	259
12.1. Una zona convulsionada	259
12.2. El PCP-SL irrumpie en la zona	262
12.3. Combatiendo el narcotráfico y la violencia	264
12.3.1. Los operativos relámpago (1984-1990)	264
12.3.2. El viraje de la estrategia contrasubversiva (1990-1994)	265
12.4. Los objetivos de la Operación Aries (abril-mayo de 1994)	267
12.5. Desarrollo de la operación Aries	268
12.6. La versión oficial transmitida por algunos medios de prensa	272
12.7. La versión no oficial de los hechos	273
12.8. El papel de la CNDDHH	277
12.9. La Comisión de Derechos Humanos del CCD	278
12.10. Conclusiones	279
 13. La violencia en Huaycán	281
13.1. Antecedentes	282
13.2. El otro lado del proyecto: los pobladores	283
13.3. Los hijos de los inmigrantes	284
13.4. Organizándose para vivir	284
13.5. Una experiencia novedosa	285
13.6. Hacia el primer Congreso	287
13.7. La presencia del PCP-SL	287
13.8. Las movilizaciones	288
13.9. El PCP-SL en la educación	290
13.10. La nueva población y los nuevos problemas	290
13.11. Imaginando al otro: el PCP-SL en las partes altas	291
13.12. Entran los militares	292
13.13. Una heroína	293
13.14. El papel de la Iglesia Católica	293
 14. Raucana: un intento de «comité político abierto»	294
14.1. Antecedentes	295
14.2. ¿Un pueblo pasivo?	297
14.3. Venciendo obstáculos	299
14.4. ¿Hubo «escuelas populares» en Raucana?	301
14.5. La reacción del PCP-SL frente al desalojo	303
14.6. Conviviendo con una base militar	304
14.7. La acción cívica	305
14.8. La tropa y la población	306
14.9. La desarticulación del PCP-SL	307
14.10. Los héroes silenciosos	312

15. Los sindicatos de la carretera central: entre el radicalismo y la resignación	313
15.1. Entre el colapso económico y la violencia	314
15.2. Incendiando la ciudad	315
15.3. El pez que se toma el agua	317
15.4. Un héroe sindical: Enrique Castilla	323
15.5. Conclusiones	327
16. La batalla por las barriadas de Lima: el caso de Villa El Salvador	327
16.1. VES: de los orígenes a la violencia	329
16.1.1. Los orígenes de VES: la época velasquista	329
16.1.2. El repliegue del Estado y la crisis de la CUAVES	329
16.1.3. La IU en VES: una hegemonía en disputa	330
16.2. Sembrando el terreno: la organización subterránea del PCP-SL en VES	333
16.3. Destruyendo el mito: la política del enfrentamiento	334
16.3.1. El aumento de la violencia en VES	334
16.4. La resistencia local: una lucha desigual	336
16.5. La lucha por el parque industrial	336
16.5.1. El asesinato de María Elena Moyano	337
16.5.2. Ejemplo de fortaleza	339
16.5.3. ¿Aliarse con el Estado en contra del PCP-SL?	340
16.5.4. Respuestas a la muerte de María Elena Moyano: entre la indignación y el miedo	340
16.5.5. Los comedores populares: ¿amortiguadores del sistema o potenciales «bases de apoyo»?	342
16.5.6. Las repercusiones de la muerte de María Elena Moyano en VES	343
16.6. Pachacamac: levantando las demandas de la población	343
16.7. La batalla por la CUAVES	344
16.7.1. El conflicto CUAVES-Municipio	345
16.7.2. El MRTA y el PCP-SL disputan el control de la CUAVES	346
16.7.3. La toma de la CUAVES	347
16.8. Captura de Abimael Guzmán y repliegue del PCP-SL en VES	348
16.9. Las secuelas de la violencia en VES	349
16.10. Conclusiones	350
17. El PCP-SL y la batalla por Puno	351
17.1. La reestructuración de las empresas agrarias	351
17.2. Ande Rojo <i>versus</i> Trapecio Andino	353
17.3. El 19 de mayo de 1987	358
17.4. La aplicación del «pensamiento Gonzalo»	363
17.5. Lucha armada <i>versus</i> tercera vía	368
17.6. Adiós a la tercera vía	377
17.7. Los caminos de la contrainsurgencia	379
17.8. A manera de conclusión	382
18. La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga	383
18.1. La UNSCH retorna al escenario ayacuchano	384
18.2. Masificación sin proyecto universitario (1970-1978)	386
18.3. Inicio de la violencia (1978-1982)	391
18.4. La UNSCH en el proceso de militarización (1983-1988)	394
18.5. La UNSCH cercada por la violencia (1989-1991)	395
18.6. La posguerra (1992-2000)	398
18.7. Conclusiones	399
19. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta	401

## ÍNDICE

19.1. Antecedentes: breve recuento histórico (1951-1980)	401
19.2. Reapertura de la Universidad y los distintos actores en escena	403
19.3. Presencia del MRTA en la UNE	405
19.4. El PCP-SL en el escenario	405
19.4.1. El PCP-SL y su revolución radical	407
19.5. El PCP-SL se posesiona del espacio	408
19.6. La crisis del espacio universitario y la respuesta represiva del Estado (1987-1991)	411
19.7. Militarización de la vida estudiantil (1991-1995)	412
19.8. Intervención administrativa y cambio generacional (segunda mitad de los años noventa)	416
19.9. Conclusiones	417
 20. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos	418
20.1. Contexto sociodemográfico	419
20.2. El complicado panorama de los grupos de izquierda	419
20.3. Las etapas de la violencia en la UNMSM	422
20.4. Resistencias al PCP-SL y la última elección a la FUSM	425
20.4.1. Abriendo trocha en la UNMSM	426
20.5. La intervención militar	431
20.6. Desaparición de estudiantes	432
20.7. Intervención administrativa de la UNMSM	432
20.8. Conclusiones	433
 21. La Universidad Nacional del Centro	434
21.1. Preludio: década del setenta	434
21.1.1. El discurso de la violencia	434
21.1.2. Los partidos políticos y sus expresiones estudiantiles	435
21.1.3. El gobierno militar y las universidades públicas	436
21.1.4. Planes de estudios y contenidos curriculares	436
21.2. El PCP-SL en la Universidad	437
21.2.1. Antecedentes	437
21.2.2. Los inicios (1980-1986)	438
21.2.3. Consolidación (1987-1989)	439
21.2.4. Control de la Universidad (1990-1992)	443
21.3. El MRTA	445
21.4. Las acciones contrasubversivas	448
21.4.1. Estrategia contrasubversiva en la UNCP	448
21.5. Los años de la impunidad	452
21.5.1. La reacción universitaria	453
21.6. La decadencia académica	454
21.7. Expectativas	455
21.8. Conclusiones	456
 22. Las cárceles	458
22.1. Cárcel: la guerra que no cesa	459
22.1.1. Tierra de nadie	459
22.1.2. Cambio de régimen	461
22.2. Detenidos y torturados	464
22.2.1. Graves violaciones de los derechos humanos en dependencias policiales (DINCOTE, DIRCOTE, comisarías y jefaturas)	464
22.2.2. Violaciones de los derechos humanos en dependencias militares (bases, cuarteles)	467
22.3. Intramuros	472
22.3.1. La cárcel como escenario del conflicto armado	472

## ÍNDICE

22.3.2. La doble cárcel	473
22.3.3. Los desvinculados	474
22.4. Obligado aprendizaje	475
22.4.1. El INPE y las políticas penitenciarias	475
22.4.2. Los comités de familiares	475
22.4.3. Reconciliación y propuestas	476
Apéndice: algunas cartas escritas en las cárceles	480
 23. Narcotráfico, conflicto armado interno y corrupción	485
23.1. La expansión de los cocaleros y la lógica de la política antidrogas	485
23.2. El PCP-SL y el narcotráfico	487
23.2.1. El <i>boom</i> de la coca: «Entre la suerte y la muerte hay un paso»	488
23.2.2. Geografía social	489
23.2.3. El poder y los negocios	490
23.2.4. El PCP-SL se expande con la coca	492
23.3. La corrosión de la droga	495
23.3.1. A sangre y fuego	496
23.3.2. Policía y corrupción	496
23.3.3. Se fortalece la DIGIMIN	497
23.3.4. Uchiza: el mejor ejemplo, hito crucial	498
23.3.5. El Ejército entra al Huallaga	499
23.3.6. Pistas y bases militares	500
23.3.7. Informe Chanamé	501
23.3.8. El SIN en el negocio	503
23.4. Conclusiones	504
Apéndice: algunos procesos contra militares por TID: 1992-1995	506
 Bibliografía del capítulo	510

## CAPÍTULO 2

### HISTORIAS REPRESENTATIVAS DE LA VIOLENCIA

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha considerado necesario estudiar en profundidad y presentar en este Informe un conjunto de casos para comprender de una manera más cabal cómo el conflicto armado interno impactó en las distintas regiones.

Las historias regionales que preceden a esta sección indican que aquellas regiones donde se evidenció una relación conflictiva con los proyectos de modernización inacabados fueron particularmente permeables al mensaje del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-SL). Los estudios de casos que se presentan a continuación muestran cómo se tradujo este proceso en la vida diaria de las comunidades durante los años que son objeto de este estudio. Si el recuento del proceso nacional y regional de la violencia explica la gran diversidad que ésta tuvo a través del tiempo y del espacio, los estudios de casos se detienen a indagar sobre hechos particulares del conflicto armado interno.

Los estudios en profundidad demuestran que, ante la ausencia de propuestas alternativas de desarrollo en estas regiones, el PCP-SL surge llenando inicialmente este vacío con sus promesas de orden, seguridad y justicia. En el caso de los pueblos indígenas y el caso de los asháninkas, el PCP-SL representaba la promesa del acceso a beneficios materiales y, por lo tanto, al progreso económico y social. Es claro, entonces, que el problema no se reduce a que la violencia caló en sectores pobres y marginales, sino en aquellos lugares donde se evidenció de manera dramática la expectativa trunca de un mayor reconocimiento de parte del Estado y la posibilidad de una vida digna y un futuro mejor: no es tanto la escasez en sí misma, sino el contraste entre la precariedad de recursos y la posibilidad de superar de manera inmediata una situación agobiante y, a todas luces, injusta.

La complejidad y diversidad cultural, por otro lado, se hace claramente manifiesta en los estudios de casos, donde se aprecia que no hubo respuestas uniformes de parte de la población hacia los procesos de la violencia. Si, en un momento inicial, las comunidades se vieron atraídas por el discurso del PCP-SL, en otro contexto, las comunidades cashibo-cacataibo y shipibo-conibo, en Ucayali, más bien utilizaron a esta organización para su propio provecho. Aunque es cierto que, cuando eso sucede, al PCP-SL le interesaban más los réditos económicos que brindó el control de las actividades alrededor del narcotráfico que el desarrollo de una base social de apoyo y fundamento de su «*nuevo estado*».

En un análisis más profundo se encuentra igualmente que el PCP-SL fue muy hábil en identificar fricciones y conflictos interpersonales y capitalizarlos a su favor. La manera como ganaba aliados —primero a través del circuito educativo y luego exacerbando las contradicciones locales— se tornó perversa, azuzada, finalmente, por el terror de ser eliminado cruelmente. Como lo demuestran los casos de los asháninkas y de diversas comunidades en Ayacucho, en reiteradas ocasiones, los propios vecinos y familiares terminaron acusándose y matándose

unos a otros en este conflicto descarnado y defendiendo lo único que les quedaba: el derecho a la vida. Los estudios en profundidad muestran enseñan que la división entre víctimas y perpetradores fue muchas veces difusa y tenue. La noción de quién era el contendor y quién el coadjutor se fue diluyendo en pleno fragor del conflicto armado interno. Resulta claro que precisamente una de las secuelas, factor que influyó en el proceso de investigación, fue la desconfianza reinante en los pueblos y el gran temor al resurgimiento de la violencia.

La base de datos de la CVR, construida a partir de testimonios de declarantes, muestra la magnitud de la violencia en las cifras de las víctimas del conflicto armado interno. Los estudios en profundidad ilustran en forma complementaria la intensidad del proceso de la violencia, su significado e impacto en la vida cotidiana de las comunidades y circuitos familiares.

Si bien la base de datos de la CVR señala que las víctimas que son responsabilidad del PCP-SL exceden a las atribuidas a las fuerzas del orden, en todos los casos coincide que la población guarda un recuerdo particularmente negativo de la presencia de bases militares. No se pretende con esto medir el sufrimiento ocasionado por uno y otro actor armado. Sin embargo, la CVR quiere llamar la atención sobre el hecho —que aparece tanto en los estudios de casos como en las audiencias públicas— de que el dolor ante un evento se hace más intenso cuando a él se añade la incomprendición de los acontecimientos y la incapacidad de procesar con una lógica determinada los sucesos que la persona experimenta.

Mal que bien, los pobladores entendieron qué perseguía el PCP-SL, pero la estrategia de matanza indiscriminada perpetrada por parte del Estado los tomó por sorpresa. Las fuerzas del orden desataron un proceso de violencia sin advertencia ni explicación alguna. ¿Por qué esperar una cabal comprensión de la violencia de parte de los pobladores? Tanto en los estudios de casos como en las audiencias públicas surge la interrogante: ¿por qué a nosotros? ¿Qué hemos hecho? ¿De qué somos culpables? Si bien la población mantuvo una actitud ambivalente ante las fuerzas del orden —las necesitaban pero repudiaban sus actos de injusticia y corrupción—, la indignación aumentó con la sinrazón.<sup>1</sup>

Los relatos incluidos en el estudio sobre Chungui y Oreja de Perro, narran cómo el PCP-SL arrastró a límites extremos a un sinnúmero de comunidades y familias campesinas del sureste de Ayacucho, que terminaron viviendo, al igual que en el caso asháninka, en un estado de esclavitud y precariedad total en las «*retiradas*» del PCP-SL por varios años.

Los estudios de casos también permiten entender que no todos los actores se comportaron de la misma manera. En Chungui y Oreja de Perro, por ejemplo, el comando político militar, ante las reiteradas demandas de los comuneros, modificó la estrategia contrasubversiva a fines de 1987 en beneficio de la población. Esto lleva a afirmar que la población también tuvo un papel activo durante el proceso de la violencia. Desde el inicio del conflicto armado interno, se producen brotes de resistencia y rebelión ante el PCP-SL, como lo demuestra el caso de Lucanamarca, que marcó el inicio de una etapa de represión por parte del PCP-SL contra aquellas poblaciones que decidieron sublevarse frente al *nuevo poder* de este grupo maoísta.<sup>2</sup>

El estudio sobre «El frente nororiental del MRTA en San Martín» muestra claramente la distinta lógica de inserción del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en la población. Mientras éste se valía del trabajo de organizaciones regionales ya constituidas que no habían satisfecho sus demandas ante el Estado, el PCP-SL ejerció, en la práctica, un férreo control sobre la vida y sentimientos de las personas que lo llevó incluso a prohibir estados de ánimo que denotaran hartazgo, tristeza y descontento. Como dueño soberano de las personas bajo su control, el PCP-SL terminó por destruir aquello que proclamaba defender. En el fondo, se ha constatado que el PCP-SL despreciaba a las «masas» y que prefirió construir su «nuevo estado» sobre la base de una élite de cuadros cuidadosamente seleccionados.

El PCP-SL siempre estuvo presente en las ciudades, aunque fue hacia finales de la década de 1980 que intensificó su actividad. En el caso de la ciudad de Lima, el examen de Raucana, en contraste con el caso de Villa El Salvador, muestra cómo las poblaciones más permeables a la estrategia del PCP-SL fueron las más marginadas, con escasa o nula conexión a redes políticas y sociales. El patrón se repitió en otros términos: el PCP-SL aprovechó los vacíos dejados por las organizaciones políticas y sociales, estatales y privadas, y ganó aliados

<sup>1</sup> La adhesión de la población PCP-SL, como se expone en la historia sobre «El PCP-SL durante el auge de la droga en el Alto Huallaga, se explica, en parte, como reacción ante el repudio que la población tenía a los miembros de la Policía Nacional».

<sup>2</sup> Véase la historia de «La violencia en las comunidades de Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca» en este tomo.

exacerbando las contradicciones existentes. Ante la ausencia de orden y seguridad, por ejemplo, el PCP-SL se encargó de crear su propia forma de gobierno, como en Raucana, donde instauró el único «comité político abierto» de Lima el 28 de julio de 1990, aprovechando el cambio de gobierno. A escala regional, este mismo tipo de conclusiones es válido para localidades y regiones como se señala en el estudio sobre Puno, donde el PCP-SL apenas ingresó precisamente porque tuvo que enfrentar una sólida amalgama de redes sociales y organizaciones previamente constituidas, a las cuales poco o nada tenía que ofrecer.

Cuando las fuerzas del orden empezaron a recuperar terreno a finales de los años ochenta, y cambiaron de estrategia *contrasubversiva*, el PCP-SL se replegó hacia el Alto Huallaga y luego hacia la zona del Ucayali. Así, en el estudio sobre «El PCP-SL durante el auge de la droga en el Alto Huallaga», se ve cómo se desvirtúa esta organización en pleno «equilibrio estratégico». Ello también queda manifiesto en el estudio sobre «La violencia y el narcotráfico en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo».

Finalmente, es preciso resaltar que los prejuicios y estigmas que atraviesan la sociedad peruana, magnificados muchas veces por los medios de comunicación y por las políticas gubernamentales, sirvieron de excusa para implementar estrategias «contrasubversivas» injustificadas. Así sucedió en algunas universidades estatales donde se exageró la magnitud de la presencia de las fuerzas subversivas. Del mismo modo, uno de los casos más dramáticos dentro de esta perspectiva fue el despliegue de «la estrategia de pacificación en la margen izquierda del río Huallaga», donde —a pesar de haber cambiado de estrategia contrasubversiva— las fuerzas del orden bombardean los *bolsones* Cuchara y Primavera del distrito de José Crespo y Castillo, en el departamento de Huánuco, zonas donde, al parecer, ya no existía mayor peligro subversivo.

## 1. EL PCP-SL EN EL CAMPO AYACUCHANO: LOS INICIOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO

### 1.1. EL COMITÉ ZONAL FUNDAMENTAL CANGALLO-VÍCTOR FAJARDO, COMITÉ PRINCIPAL

El «Comité Regional Principal», eje fundamental de acción del PCP-SL, comprendía cuatro «comités zonales»: Huancavelica, Ayacucho (Huanta, Huamanga, La Mar), Apurímac y el Comité Zonal Cangallo-Víctor Fajardo, que es designado como «Comité Fundamental» (CZ CF).

Desde fines de los años setenta, el PCP-SL empezó a preparar el terreno con un trabajo proselitista en forma simultánea en varios lugares como los distritos de Vinchos y San José de Ticllas, al suroeste de la ciudad de Huamanga, y Santo Tomás de Pata en Huancavelica. Fue en el espacio del CZ CF donde, sin embargo, se dieron condiciones propicias para que el PCP-SL ensayara, reclutara, adoctrinara y entrenara a jóvenes elegidos para lo que denominó el «Inicio de la Lucha Armada» (ILA). Luego, el CZ CF fue el espacio donde el PCP-SL construyó de manera más temprana sus «comités populares». Dado que esta zona era eminentemente rural, el objetivo del PCP-SL fue desarrollar una masa campesina con una «sólida cabeza proletaria».³ El CZ CF, en este sentido, fue considerado simbólicamente por el PCP-SL como una «locomotora que avanza a todo vapor abriendo trocha».

De acuerdo con los documentos del PCP-SL, la provincia de Huancasancos estuvo también bajo control del CZ CF.<sup>4</sup> Huancasancos es una provincia inserta en mayor grado a los circuitos comerciales de la costa, cuya población se movilizaba frecuentemente hacia áreas que el PCP-SL no controlaba. De esta manera, de acuerdo con las entrevistas realizadas por la CVR, se encontró un mayor esfuerzo por parte del PCP-SL por fiscalizar, desde un inicio, la circulación de personas y bienes en Huancasancos en contraste con lo acontecido en la provincia de Vilcashuamán, donde no surgió una resistencia grupal cohesionada y abierta hacia el PCP-SL.

La complejidad del conflicto armado fue tal que, en una misma zona, las respuestas de los pobladores al PCP-SL fueron distintas. En efecto, mientras que en lugares como Lucanamarca, Sancos y Sacsamarca se encuentra relatos de rebeliones tempranas de un grupo importante de la población que se enfrentó al PCP-SL, en

<sup>3</sup> «Hace años nos planteábamos que hay que pensar en desarrollar campesinos con cabezas proletarias, hay que insistir más en este problema, que sobre la vigorosa combatividad del campesinado se sustente una sólida cabeza proletaria, esto es, armada de marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo, armada en la política y en el estilo partidario, en el espíritu del Partido, eso es lo que necesitamos» («Sobre el Comité Zonal Cangallo Fajardo. Cuestiones Políticas Fundamentales. Documento para el III Pleno»).

<sup>4</sup> Reuniones del buró político con los comités partidarios sobre sus planes. CZ CF del 6 de julio de 1985.

Vilcashuamán, las respuestas fueron más tardías y fragmentadas. Una parte de los pobladores en los lugares estudiados terminó conviviendo entre dos fuegos, mientras otros decidieron formar parte de los comités de autodefensa (CAD) o continuar apoyando al PCP-SL.<sup>5</sup>

### 1.2. LA EFERVESCENCIA POLÍTICA NO EMPIEZA CON EL PCP-SL

El PCP-SL tuvo una presencia temprana en las provincias de Cangallo, Vilcashuamán y Víctor Fajardo, pero no incursionó en el escenario político en forma solitaria pues tuvo que competir con otros partidos y grupos políticos para ganar el control de la zona. La atracción hacia un discurso político que apostara por la «transformación del país y la revolución» no era un hecho desconocido en la zona.

En efecto, Vilcashuamán fue una de las zonas de Ayacucho donde hubo mayor presencia de una variedad de partidos y movimientos políticos desde inicios de los años sesenta y, en especial, en los setenta. De acuerdo con las entrevistas, en la zona hubo dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) departamental, de la Federación de Estudiantes Secundarios de Ayacucho (FUESA), del FER y del Partido Comunista del Perú Bandera Roja, además de partidarios del Partido Aprista Peruano (PAP), Acción Popular (AP) y el Frente Obrero Campesino Estudiantil (FOCEP).

La paulatina inserción y extensión del PCP-SL en la zona a mediados de los años setenta coincide con el incremento de las expectativas económicas y sociales de parte, sobre todo, de maestros y estudiantes, que las reformas implementadas por el gobierno militar habían contribuido a exacerbar. El PCP-SL se benefició de este ambiente reivindicativo, donde diversas demandas se vieron frustradas debido a la crisis económica desatada desde 1976, que redujo los puestos de trabajo estables y los salarios en el país. El PCP-SL se insertó y aprovechó el ambiente político febril, sobre todo entre maestros de escuela, que exigían mejores condiciones de vida, quienes se sienten atraídos por su discurso desde un primer momento. Ayacucho fue precisamente el único lugar en el país donde el PCP-SL obtuvo el control del SUTEP departamental. Sumado a esto, la represión política de parte del gobierno militar exasperó aquello que buscaba aplacar: la efervescencia política de distinto signo y radicalidad, expresada en las huelgas nacionales a fines de los años setenta.

Los puntos más álgidos en la historia regional fueron la toma de la hacienda Pomacocha en Vilcashuamán en 1961 por un grupo de campesinos, los movimientos estudiantiles de Huanta y Ayacucho en el año 1969, y las huelgas magisteriales de fines de la década del setenta. A pesar del gran repudio del PCP-SL por los partidos políticos de izquierda, Pomacocha ha quedado en el discurso del PCP-SL como una referencia importante y un ejemplo movilizador de la posibilidad real de formación de un territorio liberado.<sup>6</sup>

Según datos del INEI, las provincias de Cangallo y Vilcashuamán,<sup>7</sup> que incluyen la cuenca del río Pampas, son eminentemente rurales y figuran como una de las zonas más postergadas en Ayacucho, con una débil articulación al mercado. Junto con la precariedad económica y social, también es notoria la ausencia de los servicios del Estado. Para el PCP-SL fue relativamente fácil asentarse en la zona dada la ausencia casi total del Estado. Incluso, los insuficientes contingentes de la Guardia Civil (GC), por ejemplo, habían sido expulsados mucho antes de la ILA por una población descontenta con el trabajo de las Fuerzas Policiales.<sup>8</sup> Pero también es una zona de contrastes; pues, junto con esta marginación, se constata un decisivo aumento en términos absolutos de jóvenes que, en los años previos al conflicto armado, consiguieron proseguir estudios superiores.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Este estudio enfatiza lo sucedido en Vilcas, Pujas, Huambalpa y Accomarca en la provincia de Vilcashuamán. Véase el caso de Huancasancos en «Estudio sobre Lucanamarca».

<sup>6</sup> Al respecto se había producido un acercamiento entre los líderes de la toma de Pomacocha, en especial con Manuel Llamocca Mitma, y dirigentes del PCP-SL (Gorriti. Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú. Cuarta edición. Lima: Apoyo, 1991, p. 82).

<sup>7</sup> Es importante recordar que la provincia de Vilcashuamán formó parte de Cangallo hasta 1984.

<sup>8</sup> Gorriti. Ob. cit. p. 87.

<sup>9</sup> Este incremento no se debe a un aumento de la población infantil y juvenil. De acuerdo con los censos nacionales, la población total de Cangallo sufrió, más bien, un decrecimiento en los años previos al conflicto armado interno de 0.12, donde descendió de 69,872 pobladores en 1972 a 69,155 en 1981. El porcentaje de jóvenes de 15 a 24 años se mantuvo más o menos estable entre 1961 y 1981. Para los años 1961, 1972 y 1981, del total de la población de Cangallo, el 13.9%, 12.2% y 13.7% son jóvenes de 15 a 24 años. En el caso de la población menor de 15 años, para los mismos años, del total de población de Cangallo, hubo un ligero crecimiento expresado en 45.1%, 47.4% y 47.4%, respectivamente. Véanse los censos nacionales y Degregori, Carlos Iván. Ayacucho, raíces de una crisis. Ayacucho: IER José María Arguedas, 1986, pp. 117, 130, 134 y 137. Para 1993, la población de Cangallo sumada a la de la provincia de Vilcashuamán era

En suma, más allá de toda planificación previa, el PCP-SL encontró en esta zona una situación política propicia y un ambiente rico en ideas y demandas a favor de un cambio radical de la situación económica y social del país. En ese contexto, difundió sus ideas de orden y justicia en una población especialmente receptiva de maestros de escuela y jóvenes estudiantes.

El PCP-SL capitalizó los sentimientos de marginación, olvido y desigualdad que existían en la zona. Sin embargo, la situación fue mucho más compleja y no se puede reducir a la afirmación de que todo maestro y todo estudiante ayacuchano marginado se adhirió sin cuestionamientos al PCP-SL. Es innegable que las respuestas fueron diversas e incluyeron el sometimiento pasivo, la curiosidad, el estado de alerta y, sobre todo, el temor.

### 1.3. EL RETORNO DE LOS MAESTROS Y LA INSERCIÓN DEL PCP-SL EN EL CIRCUITO EDUCATIVO

El incremento de la población estudiantil y la oferta de plazas educativas en la zona coinciden con el ingreso y la paulatina inserción del PCP-SL en la zona de Cangallo.

En 1966 se creó en Vilcashuamán el colegio secundario General Córdoba, que se convirtió, en pocos años, en uno de los colegios más importantes de la provincia de Cangallo.

En los años previos al inicio del conflicto armado, entre 1972 y 1977, la población estudiantil del Córdoba tuvo un crecimiento importante. El número más alto de estudiantes se registró en 1977, donde se reconoció la asistencia de 414 alumnos. A partir de ese año el número de estudiantes en el Córdoba sufrió un decrecimiento constante, debido, entre otras razones, a la competencia y construcción de colegios secundarios en otras localidades.

Esta presión por educación se convirtió también en una demanda notoria por estudios superiores, particularmente en el área de Educación. No fueron infrecuentes los casos de estudiantes que retornaron a su zona de origen para emplearse como maestros.

Así, el incremento de la población estudiantil se plasmó en el aumento de estudiantes provenientes de Cangallo en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSC). En efecto, de Cangallo y Vilcashuamán provino, en 1976, el segundo grupo más grande de estudiantes de la UNSC (364 de un total de 2,309). De dichas localidades también provino el segundo grupo más grande de estudiantes de la especialidad de Educación (41 de 316 estudiantes). El primer lugar lo ocupaban los provenientes de Huamanga.<sup>10</sup> Más aún, la población estudiantil procedente de Cangallo había crecido seis veces (de 58 a 364 estudiantes) en menos de ocho años (1968 a 1976).

Según los testimonios recogidos, mientras el PCP-SL iniciaba sus labores de proselitismo en las escuelas, los integrantes de la Confederación Campesina del Perú (CCP) trabajaban directamente con los campesinos, especialmente en la localidad de Pomacocha. Los testimonios recogidos señalan que el PCP-SL no tuvo influencia entre los campesinos. Básicamente fueron los profesores y los estudiantes, hijos de campesinos, quienes simpatizaron con su discurso político.

Algunos jóvenes que salieron de Vilcashuamán hacia fines de la década del sesenta a realizar estudios de educación secundaria retornaron luego a ocupar cargos de maestros en localidades de origen, donde muchos maestros titulados rechazaban ir a trabajar. Por ejemplo, profesores de la localidad como José —a quien señalan como uno de los responsables de la quema de ánforas de Chuschi— enseñaron en las comunidades de Chuschi, Accomarca y Pujas.

*Marcos*, originario de Pujas, quien volvió a su pueblo para desempeñarse como maestro, es mencionado en reiteradas ocasiones en las entrevistas. Participó en los movimientos estudiantiles de Huanta y Ayacucho en 1969 en torno a la defensa de la gratuidad de la enseñanza cuando era estudiante de Educación en la UNSC, donde se incorporó al FER antes de pertenecer al PCP-SL. Los pobladores lo recuerdan como un estudiante *aplicado*, perteneciente a una familia campesina de escasos recursos económicos.

El caso de *Lauro* es distinto, pues se casó con una comunera y se convirtió en «yerno» de Accomarca como refieren los testimonios. Según éstos, *Lauro* fue dirigente del SUTEP y con él se *inició* el PCP-SL en Accomarca.

---

de 56,135, es decir, descendió aun más como consecuencia de muertes y desplazamiento de personas. Fue un descenso de 18.8% con respecto a las cifras de 1981.

<sup>10</sup> UNSC. Dirección de Planificación.

Antes de desempeñarse como profesor en Accomarca, había enseñado en Ahuaqpampa. *Lauro*, natural de Guacho, no hablaba quechua pero trabajó con niños y jóvenes sin mayores dificultades. Tal como señalan las entrevistas, *Lauro* «tenía mal genio»<sup>11</sup> y «cuando no podíamos resolver un problema, nos tiraba palo, cocachos y jalones».<sup>12</sup> Los testimonios recogidos señalan que *Lauro* se encargaba de reclutar jóvenes para adoctrinarlos en las escuelas populares de Lloqllapampa. A *Lauro* se le asocia con la decisión drástica de eliminar a las autoridades de Accomarca y de Ahuaqpampa como manifiesta el siguiente relato:

Nos ha reunido a todas las autoridades para quitarnos los sellos y ese mismo día mataron al señor Narciso Pulido, teniente gobernador de Accomarca. También a Bartolomé Mendoza en Ahuaqpampa, quien era teniente gobernador, mataron con bala por el estómago, luego remataron con cuchillo el cuello. En reuniones, nos amenazaban: «si no están con nosotros, los matamos». En cambio, el resto aceptaron por ser débil de corazón, principalmente los jóvenes del colegio. Uno de ellos, *Lauro*, y un tal Aurelio (huambalpino), los dos eran promotores principales aquí. Los padres de los alumnos por miedo aceptaron. Yo dos veces me escapé de la muerte, por ser autoridad. Los terreros [sic] venían en grupos de diez, cinco, seis, entre hombres y mujeres (muchachas). A las muchachas obligaban su jefe para reclutar a los jóvenes, para reclutar a los varones. (CVR. BDI-I. Notas de campo P51. Accomarca (Ayacucho), junio de 2002. Varón, agricultor, su esposa murió en la masacre de Lloqllapampa)

### 1.3.1. El discurso de la igualdad del PCP-SL

Los profesores de distinto signo político del colegio General Córdoba solían organizar debates ideológicos. En varias ocasiones, estas discusiones políticas se hicieron públicamente en la plaza de Vilcashuamán. El discurso que el PCP-SL propalaba en las aulas del Córdoba estaba sostenido no solamente en la autoridad del maestro sino en las expectativas de un futuro mejor. Sus enseñanzas se basaban en manuales marxistas que circulaban en el medio universitario, que resumían verdades universales no cuestionables, ofreciendo con ellos respuestas a una generación signada por inquietudes y cuestionamientos. Según este discurso, el mundo se dividía entre explotadores y explotados y, por tanto, el nuevo sistema que planteaba la revolución debía cambiar radicalmente las estructuras en las cuales se basaba este «viejo orden».

Por ello, el PCP-SL llegaba proclamando un discurso de igualdad entre ricos y pobres:

Bueno, en primeros momentos, ellos [el PCP-SL] han entrado con buenas condiciones porque yo he escuchado [...] Entraron y dijeron que nosotros estábamos luchando para la gente pobre, para que seamos iguales, para que no tengamos diferencia con ricos y pobres y así vamos a luchar. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P162, Vilcashuamán, septiembre de 2002. Mujer, líder local de organización local de mujeres de base de Vilcashuamán)

No creo que la gente concientemente conociendo [...] Ahí no sabían qué cosas era el Sendero [el PCP-SL] en la realidad, ¿no? [...]. Entonces, aprovechando esos problemas, esa coyuntura problemática que el pueblo vivía, Sendero [el PCP-SL] estaba ahí [...] ¡Señor, vamos a levantarnos para reclamar nuestros derechos! Entonces, ¿quién decía que no? Unos cuantos de repente. Al que decía que no, no lo obligaban los senderos [integrantes del PCP-SL], sino que llegaban a la parte débil. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P3. Grupo focal, Vilcashuamán, junio de 2002. Asistieron cuatro varones)

Totalmente olvidado. Hace cuenta que el pueblo no existía no solamente en Pujas, sino de Huamanga [...] Siempre ha sido así. Para mí, en una parte, Sendero [el PCP-SL] tuvieron razón en reaccionar [...] Donde hay dinero, el juez come a las leyes. Donde hay dinero, hay justicia. Para mi modo de decir, en una parte tuvieron razón, pero lo que pasa es que las actitudes que tomaron no eran razonables. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P133, agosto de 2002. Varón 60 años, obrero retornante de Pujas)

Este discurso de igualdad confluyó con el sentimiento de expectativas frustradas, sobre todo de los profesores, que exigían mejores condiciones desde mediados de los años setenta.

### 1.3.2. Del discurso a la acción consecuente

Los cambios que paulatinamente el PCP-SL introdujo en la organización política y económica de las comunidades de Vilcashuamán no implicaron, en un inicio, restricciones de movimiento ni afectaron en mayor

<sup>11</sup> CVR. BDI-I P29. Notas de campo de la entrevista informal hecha a una pobladora de Accomarca en junio de 2002. Ella es presidenta del club de madres, tiene 36 años y fue alumna del profesor mencionado.

<sup>12</sup> CVR. BDI-I P48. Grupo focal con mujeres de Accomarca, 22 de junio de 2002.

grado las actividades regulares de los comuneros, siempre y cuando mostraran adhesión al grupo subversivo. Esta situación era diferente a la que se dio en otros lugares como las alturas de Huanta, por ejemplo, donde el PCP-SL había prohibido a los pobladores establecer relaciones comerciales con las zonas bajas y acudir a ferias semanales.

En Vilcashuamán, las comunidades siguieron cultivando sus tierras, produciendo maíz, tubérculos y cereales, además de seguir acudiendo a la feria de la capital a proveerse de productos como sal, aceite y azúcar. No obstante, paulatinamente, el control sobre los movimientos fue incrementándose conforme progresaba el conflicto armado interno y la sospecha de deserción: «si no los quieres a ellos, ya te cuidan, ya no puedes ir a ninguna parte, te cuidan, te vigilan y, si te encuentran yendo, estás muerto». <sup>13</sup>

El PCP-SL logró imponerse en las escuelas y luego activó la creación de «comités populares» por medio precisamente de la captación de maestros con vínculos familiares locales. Este trabajo se vio luego reforzado por la presencia de jóvenes estudiantes foráneos, quienes, junto con los maestros locales, se dedicaron al adoctrinamiento de la población. Estos jóvenes estudiantes militantes del PCP-SL, a quienes los comuneros llamaban visitantes, provenían de diversos lugares y su presencia en la comunidad era aceptada pues eran presentados como parientes de familias de la localidad cuyos hijos estudiaban en la UNSCH y con quienes el PCP-SL había establecido relaciones.

Estos jóvenes, identificados como estudiantes universitarios sin necesariamente serlo, enfatizan la situación de desigualdad e injusticia en la que vivían los campesinos.

En diversos testimonios recabados, se recuerda la etapa inicial del PCP-SL como un momento en el que sus miembros demuestran una serie de principios férreos y de compromiso con la comunidad en el manejo de los quehaceres cotidianos. De esta manera, el PCP-SL practicó, en pequeña escala, su propuesta de «nuevo estado» para cubrir aquellas demandas que el «viejo estado caduco» no había logrado satisfacer:

En un principio, los estudiantes se preocupaban por los problemas y las necesidades del pueblo como, por ejemplo, la refacción de la escuela, faenas, ayudaban a las mujeres viudas sin pago alguno, entre otras actividades caritativas. Hubieron hasta casos de mujeres que se llegaban a enamorar de VA por la amabilidad que éste mostraba. (CVR. BDI-P150. Notas de campo P150, agosto de 2002. Mujer de 55 años, partera, conoce los detalles de la violencia, fue amenazada por el PCP-SL para que entregara a sus hijas)

El inicio de Sendero Luminoso [el PCP-SL] está relacionado con la aparición de estudiantes universitarios. Recuerdo una chica María, de un señor al que le decían *Chino*. Ellos ayudaban a las madres solteras. También ayudaban cuando se realizaban faenas; ellos hablaban de las cosas que debíamos hacer como el techado de la iglesia. (CVR. BDI-P13. Notas de campo P139, agosto de 2002. Mujer de 55 años, partera, conoce los detalles de la violencia, fue amenazada por el PCP-SL para que entregara a sus hijas)

### 1.3.3. Construcción del «nuevo estado»

Una vez instalado en las comunidades, el PCP-SL se propagó según las entrevistas, por radio de las «escuelas populares» clandestinas, a las cuales asistía un grupo escogido de jóvenes de distintas localidades para ser adoctrinados, pero sobre todo para formar parte del Ejército Guerrillero Popular (EGP) y recibir entrenamiento militar. Los jóvenes escogidos pasaban así a formar parte del destacamento especial de la estructura militar, es decir, de la «fuerza principal».

Sendero [el PCP-SL] escogía para adoctrinar a los jóvenes más inteligentes, a los líderes que podían influenciar más sobre sus compañeros. Como escuelas populares y a través de ello, salían al campo algunos a organizar, esos años, a campesinos, organizaban por barrios. (CVR. BDI-P8. Notas de campo P8, Vilcashuamán, junio de 2002. Varón de 50 años, ex director de USE de Vilcashuamán)

Las escuelas populares eran más profundas [...] Se tocaba más que nada cómo era las estrategias de las guerrillas, cuando uno salía en la lucha armada con sus pelotones, los cuidados, los arrasamientos, qué desplazamientos se iba a hacer. Cuáles eran las reglas de uno cuando uno entraba a una comunidad, cuando entraban a una casa. Todas esas cosas más que nada se analizaba. Cómo era la guerra ahí en China, en Rusia, de eso se analizaba.

<sup>13</sup> CVR. BDI P133. Entrevista a obrero retornante de Pujas de 60 años, agosto de 2002.

(CVR. BDI-Entrevista en profundidad P15, Vilcashuaman, septiembre de 2002. Varón de 36 años, profesor de la USE de Vilcashuamán)

Las «escuelas populares» se realizaban por grupos. Cada profesor se ocupaba de capacitar a un grupo de 15 estudiantes. Una vez obtenido el compromiso de parte de los jóvenes, la asistencia a las escuelas era obligatoria:

[Los profesores] MC y JC hablaban al pueblo de las necesidades que éste podía tener. Hablaban en cada barrio. También cuando se realizaban faenas, ellos hablaban de las cosas que debíamos hacer como el techo de la iglesia, del colegio. Cuando los C se fueron, los universitarios se quedaron organizando. Los que no iban a las escuelas populares eran marcados; la organización era por barrios. En aquellos años, sólo eran nueve barrios: Plaza Vieja, Plaza Nueva, Tranca, Tenería, Atocpuquio, Marayjata, Billullo, Chacchapa, Tucuna y Yanama, que era el más alejado pero que ya no existe. Estos barrios estaban separados unos de otros. (CVR. BDI-P139. Notas de campo P139, agosto de 2002. Mujer de 55 años, partera, conoce los detalles de la violencia, fue amenazada por el PCP-SL para que entregara a sus hijas)

Sin embargo, cuando el PCP-SL logra una importante adhesión de maestros y jóvenes, el conflicto armado se complica y la captación de maestros se vuelve cada vez más violenta. Un poblador relata que, en la Navidad de 1983, ingresó un grupo de subversivos en Huamanmarca para comunicar de manera prepotente y con insultos a los maestros que «tienen plaza hasta fin del año» y «olvídense de recoger su miserable cheque» que «las clases se iban a convertir en escuelas populares» (CVR. BDI-Notas de campo P82, Huambalpa, agosto de 2002. Varón, autoridad en los años setenta, fue rondero en la época del conflicto armado interno, fue amenazado por el PCP-SL).

Según varios testimonios, las «escuelas populares» se establecieron en lo que los pobladores identifican como campamentos —concepto y denominación que no existe en el léxico y práctica del PCP-SL—, que eran además lugares de refugio, escondite y tránsito,<sup>14</sup> con viviendas precarias camufladas con follaje. Los datos que posee la CVR señalan que el PCP-SL había establecido un campamento en Lloqlapampa, en el distrito de Accomarca, que operó entre 1983 y el 14 de agosto de 1985, fecha en la que la patrulla Lince 7, comandada por el subteniente EP Telmo Hurtado, asesinó a 69 comuneros entre mujeres, ancianos y niños:

En el campamento de Lloqlapampa se daban clases a los jóvenes que provenían de lugares diferentes y del lugar. (CVR. BDI-Notas de campo P34, Accomarca, junio de 2002. Varón de 40 años)

Ayudé a construir un campamento en Lloqlapampa que utilizaron durante el 84 y el 85. En este lugar, adoctrinaban a los jóvenes del PCP-SL y reunían a la población cada tres semanas, tanto a jóvenes y niños como a adultos. Los senderistas [integrantes del PCP-SL] les pedían comida y animales a la gente como colaboración. (CVR. BDI-P25. Notas de campo. Testimonio 201614, Accomarca. Varón)

Eso era 1984, por ahí. Entonces, fui a la invitación de ellos a Lloqlapampa, donde hacían fulbito así y los senderistas [miembros del PCP-SL] venían de todas partes también. Eran trescientos y tantos. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P76, Huambalpa, agosto de 2002. Varón)

Igualmente, el PCP-SL estableció otros lugares de encuentro o campamentos en Saywa (un monte cerca de Huamanmarca) y cerca de Huambalpa:

Otro campamento senderista [del PCP-SL] funcionó en Saywa. Eran campamentos rústicos construidos de adobe y quincha; también había comentarios de que existían túneles. (CVR. BDI-P65. Notas de campo, Accomarca, septiembre de 2002. Varón)

En Huambalpa, también hubieron campamentos, almacenados de enseres de cocina para la preparación de alimentos. (CVR. BDI-P65. Notas de campo, Accomarca, septiembre de 2002. Varón)

El campamento era todo techado, solamente con ramas de molle verde nomás. Nadie se veía dentro del molle y almacenaban todo cereales, para el consumo de ellos. Habrían habido otros productos, ya no he entrado, solamente donde cocinaban las mujeres he visto sacos. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P76, Huambalpa, agosto de 2002. Varón)

---

<sup>14</sup> El PCP-SL no solamente no utiliza el término campamentos, sino que su estrategia militar no se asienta, como en el caso del MRTA, en campamentos propiamente dichos.

La CVR tiene información que señala que el PCP-SL había exigido la construcción de túneles como estrategia de preparación para el conflicto armado interno en los campamentos de Accomarca y Umaru: «Sendero [el PCP-SL] había dicho que deben hacer túneles en distintos sitios para que puedan guardar sus cosas. Todo eso habían enseñado, a llevarse todas sus cositas, ponerlos ahí» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P56, Accomarca, junio de 2002. Varón de 50 años, docente). Otro testimonio refiere que las rondas encontraron cuevas de cinco metros de profundidad en Huamanmarca:

Bueno, así, haciendo un seguimiento, los rastros de ellos ya después que todo pasado ya, ya lo hemos hecho un allanamiento, emboscadas así, en cuevas, ¿no? [...] Ellos ya tenían su bandera [...] y martillo, después folleto, alambres cortados. Así, por lo mucho, dos rollos a tres rollos [...] Eso será para bomba. También latas [...] Tenían, pues, cuevas de más o menos de cinco metros de profundidad acá atrás de altura de Huamanmarca. Ahí hemos encontrado grabadores, máquina de escribir, máquina de coser, mantas, zapatillas, frazadas. Ya totalmente deshecho, pero nuevo, pero ya podrido ya. Hasta zapatos también, pero totalmente podridos ya. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P89, agosto de 2002. Varón, ex rondero de Huambalpa, actualmente comerciante, incursionó con los rondas de Vilcas en la zona de zona de Huamanmarca)

A partir de ciertos testimonios, es posible concluir que, en Huamanmarca, además de existir un lugar de encuentro (o campamento de acuerdo con los pobladores), había una «base de apoyo» del PCP-SL, así como también en Accomarca, en localidades como Yanto, Huanquispa, Ansarqui, Rimariq Huambalpa y Churiacocha, entre otras. En esas bases, las mujeres estaban reunidas bajo una secretaría, que organizaba las tareas que el PCP-SL encomendada, especialmente labores domésticas para el sustento del EGP. Ocasionalmente, las mujeres debían realizar pailas comunales, en especial después de saqueos o robos a tiendas:

Cuando Sendero Luminoso [el PCP-SL] dominaba el pueblo, hasta la comida se hacía en pailas comunes y, para no ser sorprendidos, los vigías cuidaban los cuatro lados del pueblo. (CVR. BDI-P64. Notas de campo P64, Accomarca, junio de 2002. Varón agricultor de 30 años, durante la época del conflicto armado interno estudiaba en el colegio General Córdoba)

En la casa de BG, las mujeres viejitas preparaban chicha, hilaban para ponchos y chalinas para los tucos [miembros del PCP-SL]. Preparaban comida, molidos de trigo, cebada y maíz y preparaban cancha. Toda la gente estaba obligada a llevar sus productos y todo ello era controlado por BG. Una de las mujeres me comentó lamentándose «maquiyupas manañan karqañachu, huasaycupas tukurruq qinañam nanahuaqku» [las mujeres no descansamos ni un solo instante]. (CVR. BDI-P82 Notas de campo P82, Huambalpa, agosto de 2002. Varón, autoridad en los años 70, en la época del conflicto armado interno fue rondero, fue amenazado por el PCP-SL)

Cuando venían estos grupos, los líderes de acá los recibían y se alojaban en la casa de GB. Ahí hacían reuniones y comían lo que la gente les daba, lo que ellos decomisaban. Dicen [los comuneros] que, en esa casa, cocinaban, almacenaban productos y las mujeres cocinaban, algunas hacían tejidos y otros hilaban para que luego confeccionen ropa y abrigos para esta gente que tenía que ir de zona en zona. (CVR. BDI-P110. Notas de campo P110, Huambalpa, agosto de 2002. Varón, jubilado, en la época del conflicto armado fue docente y organizó un CAD)

Sin embargo, en estos lugares, la población femenina mantenía definitivamente una posición subordinada:

Aproximadamente a una semana del atentado de Lloqlapampa, A y los hermanos Q tenían previsto realizar una recepción a los senderistas [integrantes del PCP-SL] que llegarían de diferentes lugares. Para ello, se realizarían diversos preparativos en el campamento de Lloclla. Las mujeres tenían que estar a cargo de los preparativos de la comida. (CVR. BDI- P68. Notas de campo P68, Accomarca, junio de 2002. Mujer campesina de 45 años, su hijo desaparece en la masacre de 1985 en Accomarca)

Las mujeres tenían que trabajar pelando papa y maíz en bastante cantidad, sus manos estaban heridas y no les daban ni comida. (CVR. BDI-P70. Notas de campo P70, agosto de 2002. Mujer campesina, su hijo desaparece luego de la masacre de Accomarca en 1985)

A la fuerza nos hicieron todo esto. Nos obligaban a hacer cosas. Nos obligaban a cocinar y, con el temor, nosotros obedecíamos. Al ver a las personas que mataban, nosotros teníamos miedo y cómo no íbamos a obedecer. Pensábamos que a nosotros también, de la misma manera, nos iban a matar. Cuando venían los otros, venían también, teníamos miedo cuando venían los soldados. De igual manera, ambos mataban, tanto los soldados como los senderistas [integrantes del PCP-SL]. (CVR. BDI-P48. Grupo focal, Accomarca, junio de 2002. Participaron cinco mujeres)

Los campamentos sirvieron de lugares de preparación para el conflicto armado, pero también fueron escondites cuando ingresaron las Fuerzas Armadas a la zona y la violencia aumentó en 1983: «Su plan de ellos [del PCP-SL] era cuestión de amenazar, no más nadie vaya con cuentos a ninguna parte. Que estén tranquilos. Cuando vengan los militares hay que escapar al monte y eso era su organización» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P131, Pujas, agosto de 2001. Varón antiguo líder de la comunidad).

Sin embargo, cuando la población se encontró entre dos fuegos, cualquier lugar era bueno para escapar y esconderse:

Nos escondíamos en los montes, en las cuevas, debajo de los árboles. A veces, sin cama dormíamos. No sólo era miedo a Sendero [el PCP-SL], sino miedo a los dos [también a los militares], porque, cuando estabas sembrando o cosechando o siquiera un rato estás en tu casa, y cuando decían ¡vienen los militares!, entonces tenías que correr como sea para esconderte donde sea, a los huaycos, al monte. Porque, cuando llegaban los militares, acá a la población hasta kerosene echaban a nuestros cereales que estaban almacenados. Orinaban a ese trigo o cebada que estaban depositados. Ahí orinaban, mezclando con sus heces. (CVR. BDI-P48. Grupo focal Accomarca, junio de 2002. Participaron cinco mujeres de Accomarca)

Estar en calidad de clandestino significaba que la comunidad no supiera de la existencia de las «escuelas populares» y de los lugares de encuentro. Lo importante era no divulgar su presencia más allá de las fronteras de la localidad; por ello, cuando el conflicto armado interno se intensifica, los sospechosos de ser delatores y sus familiares eran castigados muchas veces con la muerte:

Cuando salíamos del pueblo, los de Sendero [el PCP-SL] nos decían soplones, ovejas negras, están yendo a soplar a sus padres decían. (CVR. BDI-P48. Grupo focal Accomarca, junio de 2002. Participaron cinco mujeres de Accomarca)

Pero, cuando trabajamos así, reconstruir nuestras casas o a nuestras instituciones no nos dejaba trabajar. Hay veces cuando conversamos con militares, con policías, nos decían soplones, doble caras, chupa medias; diciendo nos hacían corretear, incluso nos ponían en la lista negra, incluso en esa lista nosotros estábamos buscados, varios autoridades. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P89, agosto de 2002. Varón, ex rondero de Huambalpa, actualmente comerciante, incursionó con los rondas de Vilcas en la zona de Huamanmarca donde se dice cometieron muchos abusos contra la población)

Así, cuando estaban organizados, pues, las rondas habían muerto; por eso, hemos tenido miedo. En esa su primera incursión, cuando estaban organizados, a ese señor Azursa lo han matado, entonces lo habían cortado miembro viril (*hari kainintpas kuchurusqa*) y en todo acá lo habían pegado en su cuerpo papeles [que decían] ¡así mueren los soplones sirvientes de los militares! diciendo en la plaza señor. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P104, Huambalpa, agosto de 2002. Mujer de 43 años autoridad club de madres)

Tras revisar la documentación del PCP-SL, se colige que la base principal del CZ CF no fue ninguno de estos centros poblados, pues el llamado «punto clave» fue la localidad de Concepción.

#### 1.3.4. Tomar a los pueblos por asalto

Desde 1984, la «fuerza principal» se desplazaba por la cuenca del Pampas entre diversos campamentos que formaban un corredor, cercanos al río, especialmente a través de caseríos y anexos de distritos alejados de la carretera y de la capital del distrito, con el fin de evitar toparse con militares.

De acuerdo con los documentos del PCP-SL, la «fuerza principal» de esta zona estaba compuesta por 48 miembros; la «fuerza local» la integraban 250 personas; y la «fuerza de base» en total sumaba 1,310 pobladores.

La «fuerza principal» del EGP —o lo que la población conoce como patrullas— estaba integrada exclusivamente por jóvenes que provenían de distintos lugares. Hay evidencias que corroboran el hecho de que no todos los jóvenes se plegaron al PCP-SL y a la «fuerza principal» por decisión propia. La tarea de la «fuerza principal» era tomar por asalto los puestos policiales, por ejemplo, para proveerse de armamento, dinero y ropa. El armamento que portaban distaba en gran medida de ser sofisticado y las condiciones de vida durante los recorridos eran difíciles. Salir en patrullas no era sinónimo de vivir una aventura épica:

Habían personas que se resistían a pertenecer a las patrullas, pero Sendero [el PCP-SL] empezó a obligar. Las armas que portaban las patrullas fueron bombas fabricados de lata y pólvora, cuchillos, lanzas. Estas patrullas, al regresar,

traían dinero, ropa, repartiéndose sólo entre los que habían salido. (CVR. BDI-P6. Notas de campo P64, Accomarca, junio de 2002. Varón, en la época del conflicto armado interno era estudiante del colegio General Córdoba)

Cuando salían en las patrullas, la gente sufría frío, hambre y el temor de ser sorprendidos por el Ejército (no tenían suficiente armamento para defenderse). Cuando llegaban a la comunidad, contaban a sus parientes del sufrimiento y del riesgo que éstos corrían; ya en la comunidad, los jóvenes eran atendidos de las heridas que habían sufrido y de otros males que aquejaban (bronquios) en esas filas. Sólo dos chicas participaron; éstas tenían como armamento tan sólo las bombas caseras. (CVR. BDI-P65. Notas de campo P65, Accomarca, septiembre de 2002. Varón)

Otra misión de la «fuerza principal» fue tomar por asalto a los pueblos para organizar en ellos «comités populares» como ocurrió en Accomarca:

En la plaza, nos reunió. Estaban todos armados. No recordamos la fecha. Estaban encapuchados. Los niños temblaban de miedo así como las mujeres. Nos decían [que] si no asistíamos, nos matarían con hacha, cuchillo. Así, rodearon la plaza y hablaban que al entrar al comunismo vamos a estar alimentados por igual. Comeremos de una sola olla. Nos vestiremos con una sola ropa. El gobierno no nos recuerda. Nos está dando comida de perro, del chancho. A este pueblo haremos formar e iremos adelante. Subiendo al cerro empezó a predicar. Después de hacer entender a la gente, empezaron a nombrar a la gente. Ya al irse nos avisaron que no nos teníamos que mover a ninguna parte. (CVR. BDI-P30)

Por lo general, en las zonas que se «liberaban» las autoridades tradicionales eran destituidas. En muchos casos, se les pedía la renuncia o se amenazaba con la muerte para que dejaran el cargo. En Pujas, las autoridades fueron acusadas de «soplones» por el PCP-SL y fueron asesinadas en 1981. En el caso de Accomarca, sin embargo, las autoridades originales no fueron reemplazadas supuestamente para confundir a la base militar de Vilcashuamán: «Las estrategias eran adoctrinar a los representantes de la comunidad para despistar a la base de Vilcas que constantemente pedía informes sobre la situación del pueblo. La gente iba a presentarse a Vilcas» (CVR. BDI-Notas de campo P37, junio de 2002, Accomarca, Vilcashuamán, varón 58 años).

Un poblador afirma que las comunidades de Concepción, Carhuanca, Huambalpa y Accomarca fueron también «zonas liberadas» (CVR. BDI-P8). A ello se suman las «bases de apoyo» en Parqo, Pujas, Saurama y Huaccaña (CVR. BDI-P152).

Los pobladores que no «estaban llamados en las patrullas», eran designados para producir en las chacras, organizados en cuadrillas para los trabajos de siembra y cosecha. Un tercer grupo estaba encargado de realizar la vigilancia y proveerse de materia prima para la fabricación de explosivos, como latas de leche o atún. Había vigías en los cuatro lados del pueblo. Estos dos últimos grupos de pobladores pasaban a formar lo que el PCP-SL denominaba la «fuerza local».

A diferencia de lo ocurrido en otras zonas del departamento —como Chungui, por ejemplo— en esta zona no existieron parcelas de producción comunal destinadas a beneficiar al grupo. La producción se hacía en parcelas familiares. En la siembra y la cosecha se ayudaban en *minka* y, una vez recogidos los productos, la producción era para la familia que usufruía del terreno. En Accomarca, los mandos del PCP-SL establecieron un sistema de responsables de producción por barrios. Los comuneros de cada barrio debían cultivar sus chacras y turnarse en *minka* para ayudar a sus vecinos. Este sistema se utilizaba para la cosecha y la siembra, pero el resto del tiempo cada familia se hacía cargo de su chacra:

Sendero [el PCP-SL] había logrado organizar al pueblo en cuadrillas para trabajos de sembrío y cosechas; en estas actividades todo el pueblo participó. Los trabajos eran realizados en *ayni* y *minka*, pero era para el consumo individual [familiar] y no comunal [...]. (CVR. BDI-P67. Notas de campo, Accomarca (Vilcashuamán), junio de 2002. Varón, agricultor)

Con Sendero [el PCP-SL], empezaron a sembrar las tierras de la gente en *minka*, divididos en grupos estaban dirigidos por personas encargados de poner orden e informar al jefe de barrio. (CVR. BDI-P67. Notas de campo, Accomarca (Vilcashuamán), junio de 2002. Varón, agricultor)

De esta manera, el PCP-SL simplemente fortalece el aspecto comunitario de un sistema de trabajo ya existente: «Trabajábamos de forma conjunta la chacra de tales, tales, tales; acabamos pero lo que sacábamos era para cada uno. Por ejemplo, lo que sacaba de mi chacra era para mí, no era para ellos y así era con todos» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P76, Huambalpa (Vilcashuamán), agosto de 2002, varón, docente).

Sin embargo, una parte de la producción debía darse al PCP-SL en forma de colaboración para la alimentación de los visitantes. En Huambalpa y en Pujas, el sistema practicado fue que cada familia cultivaba su chacra y proporcionaba una colaboración al PCP-SL, que consistía en dar molidos, granos y tubérculos. En el caso particular de Pujas, algunos entrevistados afirman que el PCP-SL propuso repartir las chacras de quienes tenían más tierras, lo cual afectaba directamente los intereses de los mandos del PCP-SL de la localidad, que se opusieron y, por ello, fueron ejecutados en 1982.

Cuando aumentó el desplazamiento de algunas familias hacia la ciudad de Vilcashuamán y Huamanga, la población en Pujas se redujo de tal manera que el PCP-SL llevó campesinos de Umaru a Pujas en 1986. En estos casos, el PCP-SL no se apropió de las chacras de personas que abandonaron la comunidad o de quienes fueron asesinados. Éstas fueron tomadas por los comuneros trasladados, quienes las cultivaron y entregaban parte de la producción al PCP-SL.

#### 1.3.5. Orden y justicia en el «nuevo estado»

Se formaron los comités populares en los diversos lugares. ¿Qué representa el comité popular? El poder de la masa y, bien nos dijo en alguna ocasión el presidente Gonzalo, si estamos entregando poder al pueblo, nos tenemos que sujetar también nosotros a ese poder, no podemos obrar como nos dé la gana en el campo y me alegro de que eso hubiera ocurrido, porque en algunos lugares, como en el Pampas, cuando alguien de las fuerzas del ejército guerrillero popular se portó mal, el comité popular tomó medidas y, cuando se planteó al propio presidente Gonzalo y se nos comunicó, nos dijo tienen derecho a ejercer ese poder y, si no han respetado a la masa, tiene que agachar la cabeza ante ello. (CVR. BDI-I P267. Entrevista a Osmán Morote, 25 de junio de 2002 al final de la primera visita de la CVR, sede sur andino)

Pero, además, lo reitero. Eso está dentro de lo que expresamente desde el comienzo definimos y establecimos en nuestras normas de disciplina. Hoy no lo voy a detallar, sólo quiero destacar dos, partiendo de que no se toca ni una aguja ni un hilo de las masas, no se les malogra sus chacras. No se comete abuso con las mujeres. Eso es sancionado y luego no se tortura a los prisioneros. Si en algún momento ha habido un hecho de tortura o de un acto, que si lo ha habido, inmediatamente lo hemos advertido y corregido, porque obviamente, doctor, en un acto de guerra, en el cual los campesinos se levantan en contra del abuso de los gamonales, centenaria explotación, muchas veces el odio concentrado se presta. El problema nuestro era explicarle de que el problema no era simplemente un afán de venganza, pero no íbamos simplemente a sancionar a la persona que lo hizo. El problema era educarlo en el sentido de orientar correctamente toda esa acción. (CVR. BDI-I P252. Entrevista a Osmán Morote, junio de 2002)

Estas citas contrastan con las manifestaciones de los pobladores. Cuando el PCP-SL ingresó en la cuenca del Pampas, la gran propiedad latifundista, basada en un sistema semi-feudal, no existía. Entonces, hay que poner en duda la afirmación de Morote sobre la existencia de campesinos que «se levantan contra el abuso de los gamonales». No fue el gran poder terrateniente lo que azuzó a las huestes de comuneros de esta parte de la región en contra del Estado. La atracción hacia el PCP-SL surgió porque se presentó como una oferta de circuito alternativo de movilidad social, entre otros factores.

De acuerdo con las declaraciones obtenidas, es cierto que, en los primeros tiempos del PCP-SL, antes del ILA, se respetó el principio de «no tocar ni una aguja, ni un hilo de la masa». Los testimonios de Huambalpa, por ejemplo, señalan la existencia de un mando local (*AP*) que ejecutaba a las personas en forma arbitraria y sin el consentimiento del PCP-SL. Peor aun, este mando aprovechaba su poder para obtener bienes y productos de los comuneros, además de demandar favores sexuales a las mujeres jóvenes de la comunidad. Cuando la gente de la comunidad comunicó estos hechos a los mandos que venían de afuera, éstos capturaron a *AP*, lo llevaron al cementerio, donde le hicieron cavar su tumba, y lo ejecutaron con un disparo en la cabeza.

Desde el punto de vista de Morote, la ética del PCP-SL contempló un espacio para la rectificación y el perdón. Sin embargo, en los hechos, encontramos un férreo sistema de justicia donde no se toleraba el error y simplemente no existía oportunidad alguna para la reconciliación. El PCP-SL sólo entendía dos cosas: se estaba a favor de ellos o, de lo contrario, se tenía que morir.

Los «soplones» eran identificados por pobladores-espías designados por el PCP-SL. Cuando ocurría una incursión del Ejército, se le encomendada a campesinos de la comunidad —generalmente mujeres— vigilar y detectar quiénes hablaban con los militares y quiénes no. Los primeros eran acusados de «soplones» ante los mandos políticos y militares del PCP-SL, los cuales, a su vez, tenían la responsabilidad de informar a un mando superior. Este mando político, que venía de afuera, reunía a toda la comunidad en una asamblea pública y comunicaba a los comuneros la presencia de un «soplón» en el grupo, luego de lo cual se consultaba supuestamente a la población qué castigo debía darse a esa persona: «Cuando venía esa gente de afuera, él daba cuenta y los otros decían: “a ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo están?”. La gente decía “esto pasó, esto fue así, esto fue así” y los que venían preguntaban “¿y qué dicen?”. Entonces, respondían: “¡Hay que ejecutarlo!”. O sea, la misma gente del pueblo vendía a sus compañeros de barrio» (CVR. BDI- Entrevista informal P113, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán). Autoridad).

Al igual que en otros lugares, la información recogida, particularmente en Huambalpa y Accomarca, indica que el PCP-SL aprovechaba los conflictos familiares, exacerbándolos, por lo que no es raro encontrar el caso de miembros de un mismo núcleo familiar, quienes, víctimas de celos, rencores o envidias, se acusaban mutuamente ante el PCP-SL y ante los militares:

Cuando Sendero [el PCP-SL] estaba dentro del pueblo, la gente se empezaba a acusar. Es así que acusan a uno de los paisanos, a QC, por haber participado en el izamiento de bandera [la bandera peruana] [...]. (CVR. BDI-P64. Notas de campo, Accomarca (Vilcashuamán), junio de 2002. Varón, 30 años, agricultor, en la época del conflicto armado interno era estudiante del colegio General Córdoba)

Pero aquí basta que uno se burlaba de alguien, que te acusen por tenerle cólera de envidia, ya era para que te maten. (CVR. BDI-Entrevista informal P113, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán). Varón, 40 años, autoridad)

Como acto de revanchismo [sic], con el acto de resentido, algo resentido ya. Con quien, contra quien van a luchar con sus propios paisanos [...] Ya, el otro también igual, por venganza ni siquiera era por cuestión político, ni siquiera cuestión del partido; era cuestión de venganza de terreno o de ciertos intereses, por ejemplo, por aquellos que han unido al Sendero [al PCP-SL] eso mayormente ha pasado. O sea que, desde 1984, la gente de Sendero [el PCP-SL] ya no se unía así por convicción, no por ideología, sino por venganza (CVR BDI-P153, septiembre de 2002,Vilcashuamán. Varón 36 años, profesor trabajador de la USE de Vilcashuamán)

Solamente por envidia hacen eso, hasta inclusive mis primos se han metido allí a la fracción de Sendero [del PCP-SL], solamente para dañar a mi familia. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P161, junio de 2002, Vilcashuamán. Varón, 50 años, ex director de la USE de Vilcashuamán, según los comentarios fue militante de PCP-SL hasta que asesinaron a su familia)

### 1.3.6. La primera víctima de la guerra

El conflicto armado interno se inició en la región con la incursión del PCP-SL en la hacienda Ayzarca, pequeño fundo que no había sido afectado por la Reforma Agraria, el 24 de diciembre de 1980. Un grupo de doscientas y trescientas personas fue reunido en Pujas para asaltar durante la noche la hacienda vecina de Ayzarca, donde asesinaron en forma cruel a Benigno Medina, el propietario, y a su mayordomo, el señor Morales. Su esposa, María Zea, y su hijo lograron escapar. Al día siguiente, llegaron policías de Vilcashuamán, quienes interrogaron a los comuneros pero no hubo detenidos. Medina se convirtió así en la primera víctima mortal del conflicto armado interno.

Luego de asesinar a Medina, la columna del PCP-SL no ocupó la hacienda ni realizó reparto alguno de tierras. Entonces, si no buscaban tierras, ¿con qué finalidad fue atacada y por qué mataron a Medina con tanta crueldad? Detrás de las declaraciones de Osmán Morote a la CVR se vislumbra una respuesta:

Yo le digo somos responsables, por ejemplo, de la acción en las haciendas del Pampas. Sí lo asumimos y ahí en esa acción murió el hacendado de esa hacienda, ahorita no recuerdo, de Ayzarca. Yo le diría que sí y hay responsabilidad y una exigencia y una demanda de las propias masas de sancionar a una de las personas que tenía larguísima situación no sólo de humillación sino de tortura, de opresión en reiteradas veces contra la gente. Entonces, yo entiendo que los familiares de los dueños de Ayzarca transmitan eso. Lo hemos planteado, lo reitero públicamente en los documentos dice, hemos hecho la acción de saludar, ésa es nuestra responsabilidad [...] Lo que tendría que decir es explicarle por qué se obró en cada uno de los casos. Sólo le planteo una cosa. Por lo ge-

neral, creo de que en el caso —y en el de 100% de los casos cuando se han hecho— cuando se han dado sanciones a determinadas personas, previamente ha habido una reunión con las masas de tal manera de que la propia población del lugar o la inmensa mayoría de ellos han planteado una decisión de ese tipo. Luego, nosotros hemos asumido como responsabilidad [...]. Si se acepta lo referente a la autoridad del Estado peruano como la única que tiene que establecer esas leyes, hemos estado en guerra y, así como el Estado pretendía aplicar una política, una justicia, nosotros estábamos desarrollando y creando un «nuevo estado». Lo que en todo caso habría que juzgar es si se ajustaba o no a las demandas y a las exigencias de la propia población. Nosotros nos hemos planteado el problema de que, en los casos en los cuales se afectara seriamente al interés de las masas, había incluso que llegar hasta la sanción de esas personas [...]. (CVR. BDI-I P292. Entrevista a Osmán Morote, 19 de junio de 2002)

Es decir, desde la lógica del PCP-SL, son supuestamente «las masas» las que tomaron la decisión de eliminar a Medina por el hecho de ser la encarnación de una larga tradición de «humillación, tortura y opresión». Morote equipara en su discurso a hacendados, gamonales y Fuerzas Armadas, que resultan siendo parte de las «mesnadas, dueños de vidas, abusivos, saqueadores y destructores». En la misma entrevista, Morote califica a los generales jefes político-militares como los «nuevos amos, dueños de vidas y haciendas, redituivos gamonales engalonados de horca y cuchillo». Tal como se explica en el capítulo de historias regionales, Cangallo y Víctor Fajardo, en la década previa al ingreso del PCP-SL, eran fundamentalmente territorios compuestos por comunidades campesinas con una frágil y precaria economía, salpicados por unos cuantos fundos y cooperativas en quiebra. Ayzarca era un fundo cuya situación y dinámica distaban mucho del gran latifundio. La mayor parte de informantes recuerda a Medina como «una persona generosa» y señalan, por ejemplo, que «[además de haber sido un] «gran amigo, teníamos una relación armoniosa, respetuosa», «bien humano, bien cristiano, comprensivo, colaborador» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán). Varón, 60 años, retornante de Pujas, esposo de Marilú Rúa) y «[fue] un señor que nos dio la mano en el momento más necesitado» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán). Varón, 60 años, retornante de Pujas). Es más, existe una calle en Pujas con su nombre: «La calle tronca que pasa por abajo que viene de Vilcas, le hemos puesto su nombre: Benigno Medina. Avenida Benigno Medina porque se la merece» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán). Varón, 60 años, retornante de Pujas).

Medina es recordado por haber sido belaundista, promotor de la construcción de carreteras, productor de caña y aguardiente. Para la población femenina, la situación es diferente. Los recuerdos, en este caso, se tiñen de amargas acusaciones que nos transmiten un comportamiento que cuenta con el consentimiento de la población masculina. De acuerdo a Rosa, Benigno Medina «tenía la costumbre de acostarse con mujeres que eran sus propias clientas» (CVR. BDI-Notas de campo P150, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán). Mujer, 55 años, nuera de Pujas, partera que conoce los detalles de la violencia, fue amenazada por PCP-SL para que entregara a sus hijas al partido, por lo cual se retiró de la zona). Más aún, «Los esposos de las mujeres sabían lo sucedido con Medina, pero la cantidad de alcohol que recibían —un poco más de lo normal— hacía que no se rindieran más cuentas. Los hombres cambiaban a sus mujeres por trago» (ibidem). Conociendo la lógica del PCP-SL, parece extraño que ningún entrevistado identifique el doble error de Medina: concentrar propiedad que él no trabajaba directamente, pero igualmente producir una sustancia asociada a los vicios de una «clase corrupta». En estas circunstancias, no sorprende que los cultivos de caña hayan sido quemados la tercera vez que fue tomada la hacienda (CVR BDI-Entrevista en profundidad P152).

En las entrevistas, se ha encontrado indicios de un discurso ambivalente y contradictorio cuando se trata de explicar tanto la presencia y adhesión al PCP-SL en la zona como caracterizar a los vecinos notables, autoridades y hacendados. Este hecho hace que la labor de identificar y entender quién y por qué fue atraído por el PCP-SL haya sido particularmente compleja. Lo que sí queda claro es que las declaraciones están signadas por el miedo y la desconfianza. Existen, en este sentido, distintas razones por las cuales se cometió este crimen. Las diferentes explicaciones de lo ocurrido involucran, en diverso grado, a los pobladores de las comunidades circundantes: «Ante la muerte de Medina, mucha gente reaccionó favorablemente, decían *allinta ruan-chun* (bien hecho), mientras otros decían qué pena, por qué lo habrán matado si no era malo [...]» (CVR. BDI-Notas de campo P149, agosto 2002, Pujas (Vilcashuamán). Mujer, 53 años, comerciante).

La mayor parte de entrevistados que acepta la participación de los pobladores en este crimen, explica que éstos no tuvieron la culpa directamente porque fueron engañados o dopados con licor, drogas o pastillas. A partir de las declaraciones de los informantes, la CVR ha identificado distintas posiciones que revelan no so-

lamente el caso de una comunidad dividida, fragmentada. Igualmente, en estos relatos contrapuestos, se constata la existencia de una comunidad atemorizada de ser sindicada como simpatizante del PCP-SL. Es, por lo tanto, el ejemplo de muchas otras.

#### *1.3.6.1. Los autores*

- Los autores fueron básicamente visitantes foráneos que engañan a la población

La decisión de tomar Ayzarca no solamente fue externa a la comunidad, sino realizada por un grupo foráneo:

He escuchado rumores de que, en Santa Rosa, por Concepción, habían personas que estaban preparando. Había gente que venía y hacían reuniones años antes, en el año ochenta. Vienen a matar a un hacendado, a Benigno Medina, quien vivía a dos kilómetros hacia abajo, cerca al río Pampas. Venían con caras bonitas, te hablaban y decían que estaban luchando por los pobres [...] con esas palabras confundieron a la gente pobre, a los campesinos, quienes no sabían de política y engañaron a la gente. (CVR. BDI-P413. Taller con desplazados, Huamanga (Ayacucho), octubre de 2002)

- Los autores fueron principalmente comuneros de la zona

Algunos relatos indican que «los pujinos fueron en su mayoría los que participaron en el asesinato de Medina». Un entrevistado detalla incluso quiénes eran: «El PCP-SL asesina a Medina con apoyo de muchos comuneros, entre ellos, los pujinos, pero éstos eran más humildes, gente analfabeta. Sin embargo, habían también intelectuales, hijos de Pujas como RR, AP y los hermanos MC y JC» (CVR. BDI-Notas de campo P151, septiembre de 2002, Vilcashuamán. Varón, 38 años).

#### *1.3.6.2. Las razones*

- ¿Acto de justicia?

El asesinato de Medina fue en defensa propia, sea porque representaba al gamonal abusivo o porque atacó primero. Esta interpretación se ubica en el plan del PCP-SL de «batir el campo» y ajusticiar a autoridades y terratenientes abusivas del «viejo orden»: «A Medina lo matan en el año ochenta. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Licor fue un poco, lo que nos estaba contando la gente. Era, ya vamos a matar al hacendado, vamos a tomar posición de la hacienda para repartir» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P132, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán). Varón, 55 años).

El PCP-SL se presentó como la posibilidad inmediata de acabar con los abusos y desarrollar un sistema más justo e igualitario:

Entonces, una vez llegado al poder, las tierras eran, o sea, compartidas por todos, para todos, tierras para todos, o sea, para todos por igual. [...] No deberían existir un pobre y un rico, sino que todos por igual. Ésa era la pretensión de ellos. (CVR. BDI-Notas de campo P64, agosto 2002, Accomarca (Vilcashuamán). Varón, 30 años, agricultor, en la época del conflicto armado interno era estudiante del colegio General Córdoba)

El discurso senderista [del PCP-SL] de igualdad era lo que más atraía a la gente: «seremos iguales, tierras grandes y chicas se nivelarán». (CVR. BDI-Notas de campo P64, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán). Varón, 30 años, en la época del conflicto armado interno era estudiante del colegio General Córdoba)

En este mismo sentido, otro informante señaló que el PCP-SL no tuvo intenciones de matarlo, pero que se vieron obligados a hacerlo porque «lo encuentran en estado de ebriedad y éste intentó defenderse con su arma» (CVR. BDI-Notas de campo P150). Además de ello, Medina fue advertido previamente pero «no se ha retirado; entonces, ellos ya hicieron venganza» (CVR. BDI- Entrevista en profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán). Varón, 60 años, retornante de Pujas).

- Terror y sometimiento

Según algunos testimonios, los comuneros fueron sometidos a la fuerza por medio del terror. Dice un poblador que el PCP-SL, «valiéndose de las armas, obligaron a la comunidad contra su voluntad» a participar en este asesinato. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán). Varón, 60 años, retornante de Pujas).

Un testigo menciona que fue capturado por el PCP-SL junto con otros jóvenes en circunstancias poco claras, donde «no sabíamos qué hacer. Se reunieron a unas doscientas a trescientas personas que fueron de Pujas con dirección a la hacienda Ayzarca. En esa ocasión, a todos les dieron carne, recogieron fruta y caña» (CVR. BDI-Notas de campo P150, septiembre de 2002, Vilcashuamán. Varón, 36 años, profesor trabajador de la USE de Vilcashuamán).

- Fue un acto involuntario

En otros testimonios los pobladores narran que actuaron sin tener plena conciencia de sus actos: «Ellos han actuado mediante la pastilla [...] no sienten nada. Ni padre, ni su madre, no existe. No tenía miedo a matar a nadie [...] los senderistas [integrantes del PCP-SL] eran personas anormales en estado de drogadicción» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P133, agosto de 2002, Pujas (Vilcashuamán). Varón 60 años, retornante de Pujas).

- Rendición de cuentas

Sólo en un caso este acto sanguinario fue interpretado como una venganza. En efecto, de acuerdo con un dirigente campesino, este hecho se originó por conflictos entre Benigno Medina y trabajadores de Pujas, de Sarca y también de Parqo, «porque Medina había asesinado a tres comuneros de Pujas a golpes, de ahí que los campesinos habían entrado y habían asesinado» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P670. Varón, 73 años, dirigente campesino de la zona de Vilcashuamán, presidente de la Confederación Campesina del Perú en los años setenta).

#### 1.4. ATAQUES AL PUESTO POLICIAL DE VILCASHUAMÁN

En Vilcashuamán —que nunca llegó a ser declarada «zona liberada» por el PCP-SL—, estudiantes del colegio General Córdoba atacaron el puesto policial del distrito el 31 de marzo de 1982. No fue la primera vez. Anteriormente, se habían movilizado contingentes de Vischongo, Pomacocha y otros lugares para expulsar a los miembros de las Fuerzas Policiales y al director del Núcleo Educativo que había cesado a profesores que participaron en la huelga del SUTEP.<sup>15</sup> Los alumnos rompieron puertas e hicieron pintas. Si estos ataques fueron posibles, tal como indican las entrevistas, sólo cabe pensar que el puesto policial era cubierto por pocos miembros de las Fuerzas Policiales, que realizaban su trabajo en las peores condiciones. En efecto, los informantes afirmaron que el destacamento policial no era suficiente para el área que debían cubrir. Durante esos años (1981-1982), salvo escasos patrullajes, la Policía Nacional no tuvo presencia importante en los distritos ni comunidades alejadas a Vilcashuamán. Cuando se indica que hubo un ataque al puesto policial, hay que tener en cuenta que éste formaba parte de un conjunto de otras instituciones del Estado que funcionaban en la misma casona; no todos los inquilinos que compartían el espacio eran miembros de las Fuerzas Policiales. Por la información recogida, se sabe que profesores foráneos y policías pernoctaban en el mismo lugar. Dicho edificio era, pues, un símbolo contundente del «viejo Estado caduco» y abatirlo de la forma que fuere, de acuerdo con el PCP-SL, era necesario.

El punto culminante de los ataques al puesto policial de Vilcashuamán fue el atentado perpetrado el 22 de agosto de 1982 cuando un destacamento armado del PCP-SL ingresó a Vilcas y bombardeó dicha construcción toda la noche. El saldo de esta incursión fue de siete policías muertos y varios heridos. Ésta sería la peor ofensiva que sufriría el puesto policial luego de los atentados del 31 de marzo y 25 de julio del mismo año. El local municipal y el puesto policial quedaron completamente destruidos. A la mañana siguiente, la prensa nacional llegó a Vilcashuamán acompañando al ministro del Interior Gagliardi y al general GC Humberto Catre, jefe de la GC. Presidía la comitiva el presidente Fernando Belaunde Terry, quien consultó a la población sobre la instalación de una «base de *sinchis* para proteger a la población».<sup>16</sup> El resultado final fue la instalación de una base militar en Vilcashuamán en 1983.

---

<sup>15</sup> Gorriti, Gustavo. Ob. cit., p. 87.

<sup>16</sup> La CVR ha constatado que la población civil estudiada no hace una clara distinción entre militares y *sinchis*, que, junto con los llapan atic, constituían una fuerza especial de las Fuerzas Policiales (la primera perteneció a la GC y la segunda a la Guardia Republicana). En varios testimonios, indistintamente se les denomina *sinchis* a los militares.

### 1.5. ¿ENTRE DOS FUEGOS?

Si inicialmente el PCP-SL se había visto favorecido por la existencia previa de un discurso radical en la zona y el ambiente de expectativas frustradas, con el tiempo, la población se vio situada literalmente entre dos fuegos.

Mi vida no vale nada. Viene uno, te mata. Viene el otro, te pega [*viday carajo valenñachu, quknin qamun wañuchin, quknin qamun payakun*]. (CVR. BDI-Notas de campo P17, informante anónimo)

Acaso éramos como gente. Allí estábamos como en nuestros sueños [...] los de Sendero [el PCP-SL] nos mataban, los militares nos mataban, quién ya pues nos miraría [todos recuerdan y lloran]. (CVR. BDI-Grupo focal Loqlapampa P30, junio de 2002, Accomarca, Vilcashuamán)

Para algunos, el momento de definirse por uno u otro bando dependía de las circunstancias, bien sea por protección y defensa de la vida —como en el caso de algunos miembros de los CAD— o por venganza cuando sufría la pérdida de algún familiar:

Yo estaba en la lista negra [del PCP-SL]. Por esa razón, yo —con capricho—, yo me he metido como comando autodefensa [de un CAD]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P89, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán). Varón, 50 años, ex rondero de Huambalpa, actualmente es comerciante)

Cuando lo mataban los militares, con ese resentimiento se comprometían y algunos ya, también, cuando lo mataban los senderos [integrantes del PCP-SL] a sus familiares, a los militares siempre se comprometían. (CVR.BDI-Entrevista en profundidad P162, septiembre de 2002, Vilcashuamán. Mujer, 48 años, líder local de organizaciones de base de mujeres en Vilcashuamán)

En un grupo de cinco mujeres de Accomarca sobre la actuación de las Fuerzas Armadas y del PCP-SL, los militares reciben las peores calificaciones. Mientras el PCP-SL fue símbolo del miedo y el terror selectivos, los militares constituyeron una amenaza y peligro perenne, sobre todo para la población femenina. Es especialmente alrededor del caso de la masacre de Accomarca que se han encontrado las referencias más descarnadas a crímenes, abusos y violaciones de parte de los militares como lo expresa el siguiente testimonio:

Los militares venían algo de cuarenta o cincuenta con perros. Así llegaron a mi casa como treinta. El resto ya también estaba reuniendo a toda la gente diciendo asamblea. La mayoría nos escapamos al monte. Han quedado muerto algo de noventa personas, ancianos, niños, mujeres embarazadas. A los bebés, los arrojaron en medio del fuego como si fueran sapos. Reunieron a toda la gente. Luego comenzaron a reventar bala. Así como los ha llevado allá a casa de mi madre, pero antes las mujeres violaban en la pampa Chilcamonte [...] Yo estaba viendo desde Salvia-ayuq. Ahí en la puerta de nuestra casa comenzaron a clasificar mujeres, varones. A los varones, a la casa de ichu. A las mujeres, a la casa de teja. Comenzaron a disparar por la puerta. Igual a las mujeres. Las mujeres y varones gritaban, pero seguían disparando. Cuando ya no escuchaban gritos, empezaron a quemar las casas. Después de todo esto, estaban festejando. Hacía la fiesta en la casa de TP. Tenía trago, caña, vermu. Ahí bailaban después de matarlos. Luego se fueron hacia Pitecc y se fueron a Vilcas. Al día siguiente y los días siguientes, continuaban viniendo. Los soldados cada vez que venían se comían una vaca, una oveja que ya no tenían dueño. Era total silencio. Los perros nomás aullaban. (CVR. BDI-Notas de campo P23, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán). Varón, 65 años, testigo de la masacre de Accomarca, sus familiares murieron en la masacre)

Los profesores tampoco guardan un buen recuerdo de la presencia de los militares en la zona. Dos informantes revelan que, en el mes de mayo de 1989, los militares detuvieron a 33 profesores de distintos lugares y los llevaron a la base de Vilcashuamán a cargo del teniente Oso.<sup>17</sup> Allí se quedaron aproximadamente una semana. Diez fueron trasladados a Pampa-Cangallo y cuatro de ellos a la base de Huamanga. En ambos lugares, fueron torturados reiteradamente en las bases militares:

En Vilcashuamán, nos colgaron arriba, amarrados las manos atrás. Había un palo y nos empujaron a tirar palo, puntapiés, puñetas, con piedra nos tiraban cuando estábamos colgados. Cuando se cansaron, nos sueltan a un pozo de agua. Así amarrado a cinco metros de profundidad con agua [...] Así, semimuertos nos sacan, nos llevan a un cuarto especial y nos amarran del cuello, de la cintura, de las manos como crucificados [...] [en Huamanga] nos castigaban feamente. Nos pisaban en la cabeza. Tenían tipo martillo. Con eso te daban en la cara [...] Los cuatro nomás en un

<sup>17</sup> La base de datos registra otros casos de tortura donde también se menciona la presencia del teniente Oso. Véanse los testimonios 204452, 204470, 204600, 204461, 204377, 201033, 201057, 203931 y 201005.

ambiente nos dejaron y a las tres de la mañana otro grupo entra con aparatos y nos cuelgan. [...] Ese aparato, al otro mi pata le han puesto al año. A mí me puso en las orejas y empiezan dar manijuela [...] Yo quedé muerto.

*¿De qué los acusaban?*

Por el hecho que trabajábamos en zonas rurales y además habrá habido alguien quien informaba en contra de nosotros. Hasta ahora no sabemos [...] Yo cuando llegué en el año 72, ya habían grupos políticos en el Córdoba. Me invitaban a reuniones. Asistía. Sí, asistía [...] Yo era antifacista. Esa fecha vi dos grupos: antifacista y Sendero Luminoso [el PCP-SL] [...] entre grupos nos agarrábamos, entre partidos, en trabajos, en faenas escolares. Eso era en Vilcashuamán y, cuando había paros, huelgas, también salíamos en contra. Si el otro no participaba, seguro son gobiernistas, oportunistas. Así, entonces, teníamos que participar obligado. Hasta 1976 no había problemas graves. Era más o menos 1978, esos años. Los alumnos salían ya casi de frente a las plazas, hablando de lucha armada y quemaban los puentes, bloqueaban las carreteras. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P147, agosto. Varón, 60 años, profesor, alcalde de Pujas, estudiante en la época del conflicto armado interno)

De acuerdo con el grupo de mujeres de Accomarca antes mencionado, el PCP-SL «es el que hacía a la gente un maltrato físico, psicológico [...] nos ha dejado alteraciones nerviosas», pero «eran tranquilos, no robaban ni violaban a las mujeres». El PCP-SL «castigaba [con azote] a los hombres borrachos que maltrataban a sus esposas» (CVR. BDI-Grupo focal de mujeres P48, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán)). Los militares, en cambio, «han dejado a las chicas con hijos» y «los de Sendero [el PCP-SL] [en cambio] no» (*ibidem*). Pero el PCP-SL también asesinó, aunque de manera selectiva, solamente «a gente que no querían participar. A las autoridades. A ellos les decían que eran los que llevaban la ley del gobierno [...]. El deseo de ellos era que no existan autoridades» (*ibidem*).

En contraste con los hechos reportados sobre los militares, los pobladores varones se refieren a sucesos sanguinarios donde mujeres integrantes del PCP-SL fueron las protagonistas. Es el caso de *Marcela*. El testimonio 201057 indica que ella ordenó la tortura y muerte de *VEG*, que trabajaba de panadero para la base militar de Vilcas. El 20 de noviembre de 1991 por la noche, *Marcela* ingresó a la comunidad de Pillucho con varios hombres más. Como no encontraron a *VEG* sino a su hermano, lo detienen, torturan y matan. *Marcela* ordenó que «por su hermano, muere ese perro mantenedor de moro *allqo*». Ella dispuso primero que «lo ahorquen con hilo nylon». Luego, «con un cuchillo le cortaron el cuello y le sacaron la lengua». Posteriormente, refiere el testimonio, «hicieron vivas y obligaron a la comunidad de Pillucho para que lo entierren al día siguiente» (CVR. Testimonio 201057).

### 1.5.1. La base militar de Vilcashuamán y la espiral de la violencia

Cuando el Ejército instaló una base en Vilcashuamán, en 1983, una de sus primeras órdenes fue que todas las autoridades debían de reportarse en ella y enviar informes en los cuales constara que eran las autoridades de la comunidad.

Varios relatos recogidos por la CVR dan cuenta de las matanzas indiscriminadas perpetradas por las Fuerzas Armadas en la zona. Aquí solamente se mencionarán dos. El primer caso revela que, antes de la masacre de Lloqlapampa, más conocida como la masacre de Accomarca, hubo otras que no han sido dadas a conocer por los medios de comunicación.

#### 1.5.1.1. *El asesinato de once miembros de una familia en Vilcashuamán*

Existen varias versiones sobre las causas de la masacre de una familia en Vilcashuamán en septiembre de 1993, pero todas coinciden en señalar que fue el estudiante *Mauro*, hermano del profesor *GC*, quien los delató un día que se había embriagado. La versión afirma que *MC* llegó borracho a la comunidad de *Chiara* [sic] y

[...] sobre la torre de la iglesia comienza a doblar la campana y toda la gente se reúne y comienza hablar jesto es la lucha armada! ¡Qué viva Mao! En eso, uno de los comuneros al toque corrieron con caballo a avisar a los militares de Vilcas. Vinieron y capturaron a ese *C*, terrucos [miembros del PCP-SL] de mierda, por qué tienen que hablar esa cojudez [...] Como estaba huasca [ebrio], habló y lo han llevado casa por casa. (CVR. BDI-Notas de campo P28, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán). Varón, 70 años, autoridad en la época del conflicto armado interno y testigo de la masacre de Lloqlapampa)

Un segundo informante señala que *Mauro* era músico y «cuando estaba borracho en Vilcas, había hablado de Sendero [el PCP-SL] en la comunidad. Los militares se dieron cuenta y lo alcanzaron en Churiacuto, donde le

preguntaron por los líderes senderistas [del PCP-SL] y lo exigieron que los entregue» (CVR. BDI-Notas de campo P37, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán). Varón 58 años, primer sanitario de la posta, llegó en 1985).

Una tercera versión lo convierte en el *profesor Mauro* que «había sido detenido por la gente en Churia y entregado a los militares en Vilcas y ellos seguramente lo habrían golpeado y habló que en Accomarca hay terrucos [miembros del PCP-SL]» (CVR. BDI-Relato de testimonio P26, agosto de 2002, Accomarca (Vilcashuamán). Varón, 38 años, comerciante, presunto ex integrante del PCP-SL).

Finalmente, un cuarto testimonio relata que, la noche del 1 de septiembre de 1983, el *profesor Mauro* viajó a Vilcashuamán, donde se puso a beber licor en una tienda. En un momento, una joven presente le comentó que su padre había desaparecido. El *profesor Mauro* le respondió que sabía el paradero de su padre. Al escuchar esto, otra joven sale de la tienda e informa de la conversación al cuartel. Los militares capturaron y torturaron a *Mauro* en las instalaciones del cuartel para que revele el nombre de los miembros del PCP-SL (CVR. Testimonio 201544). Enseguida, los soldados ingresaron violentamente a la casa del profesor CQ y dispararon en forma indiscriminada, matando a once miembros de una misma familia, entre ellos seis mujeres (una en estado de gestación), tres varones y dos niños de once y tres años de edad.

#### *1.5.1.2. La masacre de Lloqllapampa e inicio del desenlace para el PCP-SL*

Este hecho, conocido como la masacre de Accomarca, tuvo importantes repercusiones pues significó el final del control del PCP-SL en Accomarca y el inicio del dominio militar. A pesar de ello, el PCP-SL no desapareció de la zona, lo cual queda demostrado por sus incursiones a varios anexos del distrito, donde asesinó a quienes consideraba como traidores. Así sucedió en 1990, por ejemplo, cuando los puestos policiales de los distritos de Huambalpa, Carhuanca y Vischongo se retiraron, pues «inmediatamente los terroristas han entrado. Empezó a quemar el Concejo» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P89, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuaman). Varón, 50 años, ex rondero de Huambalpa).

Los medios de comunicación nacionales dieron a conocer la masacre de Accomarca casi un mes después de haber ocurrida. *El Diario*, portavoz del PCP-SL, fue el primer medio que difundió la noticia el 11 de septiembre de 1985.<sup>18</sup> La prensa en ese entonces comentaba el entusiasmo que el flamante gobierno de Alan García Pérez había despertado en la población peruana. A ello se sumaba la noticia de hechos tan contrastantes como la reorganización y moralización de las Fuerzas Policiales; el caso Villa Coca, que involucraba a miembros de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP); y el anuncio de la tregua hecha al gobierno por el MRTA. La noticia de la masacre de Accomarca coincidió también con el terremoto de México, ocurrido el 16 de septiembre de 1985, que llenó las primeras planas de los medios por varios días.

#### Los hechos<sup>19</sup>

Ante la denuncia formulada por el senador César Rojas Huaroto y por iniciativa del senador Javier Diez Canseco, el pleno del Senado, en sesión celebrada el día 11 de septiembre de 1985, acordó por unanimidad designar una comisión investigadora de los hechos producidos en Pucayacu y Accomarca.

De acuerdo con dicha comisión investigadora, el Ejército detuvo a un grupo de personas en Accomarca que delataron la existencia del campamento del PCP-SL de Lloqllapampa. El informe proporcionado por el Ejército a dicha comisión enfatizaba los aspectos bélicos de este descubrimiento. Según éste, en Accomarca, a los detenidos «los esperaban sus compañeros con comida» y tenían un túnel en Lloqllapampa, donde «hay escondidas dos FAL, dos SIMA y granadas caseras y, en otra cueva, tres FAL, un revólver, una granada piña, 15 cajas de dinamita». En un informe militar, se señala que existe «la compañía Accomarca [del PCP-SL] con un total de sesenta hombres que conformaban los pelotones 13, 14, 15, 16, 17, pertrechada de seis FAL y dos metralletas». Teniendo en cuenta esta información, la base militar de Vilcashuamán dispuso una operación conjunta de varias patrullas, que el día 8 de agosto de 1985 salieron hacia varias localidades, entre ellas Accomarca, Accomay, Cayara y Lloqllapampa.

<sup>18</sup> Véase Caretas 868, 16 de septiembre de 1985, p. 23.

<sup>19</sup> Los hechos han sido reconstruidos gracias al material proporcionado por Aprodeh y fichas cedidas por Desco, así como también recortes de prensa de la época.

El informe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a la comisión investigadora consigna que una de estas patrullas, Lince 7, comandada por el subteniente EP Telmo Hurtado, ingresó el 14 de agosto en la quebrada de Huancayocc y, «al llegar a un lugar denominado Lloqlapampa, observa que la gente que estaba reunida comienza a correr al notar la presencia de la patrulla, por lo que hace disparos al aire para que se detengan y, como no lo hacían, a cinco individuos que se alejaban más les dispararon eliminándoles». El subteniente EP Telmo Hurtado dividió su patrulla en dos grupos para cercar al resto de los pobladores. Consiguió capturar a 25 personas, incluyendo cinco niños. Seguidamente, comenzó a separar a los hombres de las mujeres y los niños e inició el interrogatorio con la ayuda de un guía traductor (los relatos de los testigos no mencionan la presencia de un guía) que ayudó en «la identificación, determinando que la gran mayoría eran terroristas, ya que fueron encarados con el guía que los conocía». Finalmente, fueron «conducidos a una casa, donde [el subteniente EP Telmo] Hurtado ordena a los soldados abrir fuego. Para rematar el acto, arroja una granada de mano al interior de la casa, además de reunir a las cinco personas eliminadas anteriormente y las introduce a otra casa, la misma que también es incendiada». Este informe no menciona el hecho de que los soldados violaron a las pobladoras durante la matanza, que hayan seguido a las víctimas con perros o que el crimen finalizara con una celebración.

De acuerdo con las entrevistas, cuando los comuneros se percataron de que una patrulla militar había llegado a Accomarca, los varones adultos y jóvenes, así como las mujeres jóvenes, escaparon a ocultarse en huaycos y cerros. Muchos de los comuneros creyeron que —tal como había sucedido en incursiones anteriores— a las mujeres mayores, a los ancianos y a los niños, no les ocurriría nada. Todos los entrevistados coinciden en señalar, al llegar a Lloqlapampa, los militares reunieron a los pobladores y separaron a los varones de las mujeres. Los informantes manifiestan que a estas últimas las reunieron en una casa y las violaron a todas, incluyendo mujeres mayores, embarazadas y niñas. Seguidamente, reunieron a las mujeres con los varones en la casa de Cipriano Gamboa, les dispararon y luego les prendieron fuego.

Los testigos de la masacre, que lograron observar los hechos ocultos en los cerros, se organizaron para enviar una comisión a Lima, encabezada por Clemente Baldeón Tecse y Víctor Baldeón Reza, para que denuncie lo sucedido.<sup>20</sup> La acusación llegó hasta el Senado y el Poder Judicial.

Descubiertos los hechos, el gobierno obligó a renunciar al general FAP César Enrico Praeli, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 15 de septiembre de 1985. El 17 de septiembre, el general FAP Luis Cavallerino, nuevo presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, anunció en un comunicado oficial el relevo del general de división EP Sinesio Jarama Dávila, comandante general de la II Región Militar, y del general de brigada EP Wilfredo Mori Orzo, jefe político-militar de la Subzona de Seguridad Nacional N.º 5. En el mismo comunicado se explica que había sido aceptada la solicitud de pase al retiro de este último. Todas estas remociones no vendrían, sin embargo, acompañadas de un cambio de la estrategia contrainsurgente, la cual continuaría realizando matanzas indiscriminadas hasta fines de la década de 1980.

Interrogado por la comisión investigadora en Ayacucho, el subteniente EP Telmo Hurtado justificó su actuación explicando que «según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Según el punto de vista de ustedes y lo que están pensando en estos momentos, lo van a tomar de otra manera. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. No tienen experiencia ni ven las situaciones que nosotros pasamos acá. Las penurias que se tienen o las cosas que se tiene que vivir». Igualmente, añade que «uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño [...] los subversivos [los] comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, llevando cosas [...] poco a poco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa».

Los sucesos de Lloqlapampa del 14 de agosto fueron precedidos por otros operativos realizados desde inicios de agosto en Accomarca, Huampalpa, Carhuanca, Pujas, Vilcashuamán, Vischongo y Cangallo.<sup>21</sup> A esto se suman las incursiones posteriores que, de acuerdo con el *Diario de Marka*, entre el 8 y 10 de septiembre las fuerzas del Ejército acantonadas en el cuartel Los Cabitos de Vilcashuamán realizaron en Accomarca con el

<sup>20</sup> Véase *Caretas* 868, 16 de septiembre de 1985, p. 23. De acuerdo con el informe de la comisión investigadora, los testigos entrevistados fueron Clemente Baldeón, Víctor Baldeón, Félix Palacios Ramírez, Alberto Palacios Ramírez y el niño Teodolio Palacios.

<sup>21</sup> Véase informe de la comisión investigadora y el *Diario de Marka*, 18 de septiembre 1985, p. 4.

propósito de «borrar las huellas de la horrenda matanza», para lo cual «asesinaron a siete campesinos, testigos del vandalismo perpetrado el pasado 14 de agosto».<sup>22</sup>

En marzo de 1986, la Primera Sala Penal de la Corte Suprema entregó los expedientes del juicio a la justicia militar, que absolió al teniente EP Telmo Hurtado del delito de homicidio, negligencia y desobediencia, y lo sentenció por abuso de autoridad a seis años de prisión y al pago de 500 soles por concepto de reparación civil a los deudos de las víctimas, que nunca fueron pagados. El resto de militares fue absuelto.

### 1.5.2. Seguridad y fiscalización por cuenta propia

En términos generales, tal como concluye la investigación sobre los CAD, las provincias del sur de Ayacucho, a diferencia de las del norte, se mostraron más renuentes a conformar rondas campesinas contrasubversivas. Los testimonios recogidos en este caso señalan que los grupos de autodefensa en las comunidades estudiadas se formaron a iniciativa de las bases militares de Cangallo y Vilcas: «La ronda nace a la fuerza, organizado por la fuerza militar» (CVR. BDI-Grupo focal de estudios en profundidad P3, junio de 2002, Vilcashuamán).

De acuerdo con un testimonio, los ronderos empezaron a organizarse en 1987. Al inicio no tenían armas y «sólo servían como alarma de la base» (CVR.BDI-Notas de campo P37, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán). Varón, 58 años, primer sanitario de la posta, llegó en 1985). Asimismo, se señala que «la base obligó a la formación de ronderos, primero para que cuidaran la base» (CVR. BDI-Notas de campo P54, junio de 2002, Accomarca (Vilcashuamán). Varón, 40 años, profesor, presunto ex integrante del PCP-SL).

Es recién cuando se institucionalizan las rondas, a partir de la promulgación del decreto legislativo 741 de noviembre de 1991, que las Fuerzas Armadas les dan entrenamiento militar y armamento (armas tipo Mauser y Winchester).

Un testimonio refiere, de manera bastante elocuente, el apoyo inicial del gobierno de Alberto Fujimori a los CAD: «Los militares nos preparaban en las instrucciones. Físicamente cómo se puede enfrentar, cómo se puede defender, cómo se puede cuidarse, cómo se puede parapetarse, cómo se puede tirar granadas o dinamitas, en cuántos segundos, en cuántos minutos» (CVR. BDI-Notas de campo P90, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán). Varón, 50 años, comerciante, ex rondero de Huambalpa).

Este CAD se crea debido a que «no había un puesto policial acá». En otras palabras, la población asume una función que, en realidad, era competencia del Estado. De otro lado, otros testimonios afirman que también se creó un CAD para defenderse de los militares que «tiraban mucho abuso», es decir, como forma de control del desempeño de las funciones del Estado mismo:

En muchos casos, quienes inicialmente participaron en las rondas, eran militantes senderistas [del PCP-SL] que, por venganzas y rencillas familiares, se «voltean» hacia el lado del Ejército amparándose en la ley de arrepentimiento. (CVR. BDI-Notas de campo P90, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán). Varón, 38 años, autoridad del concejo, presunto militante de PCP-SL que participó en los cuadros jóvenes de ese grupo)

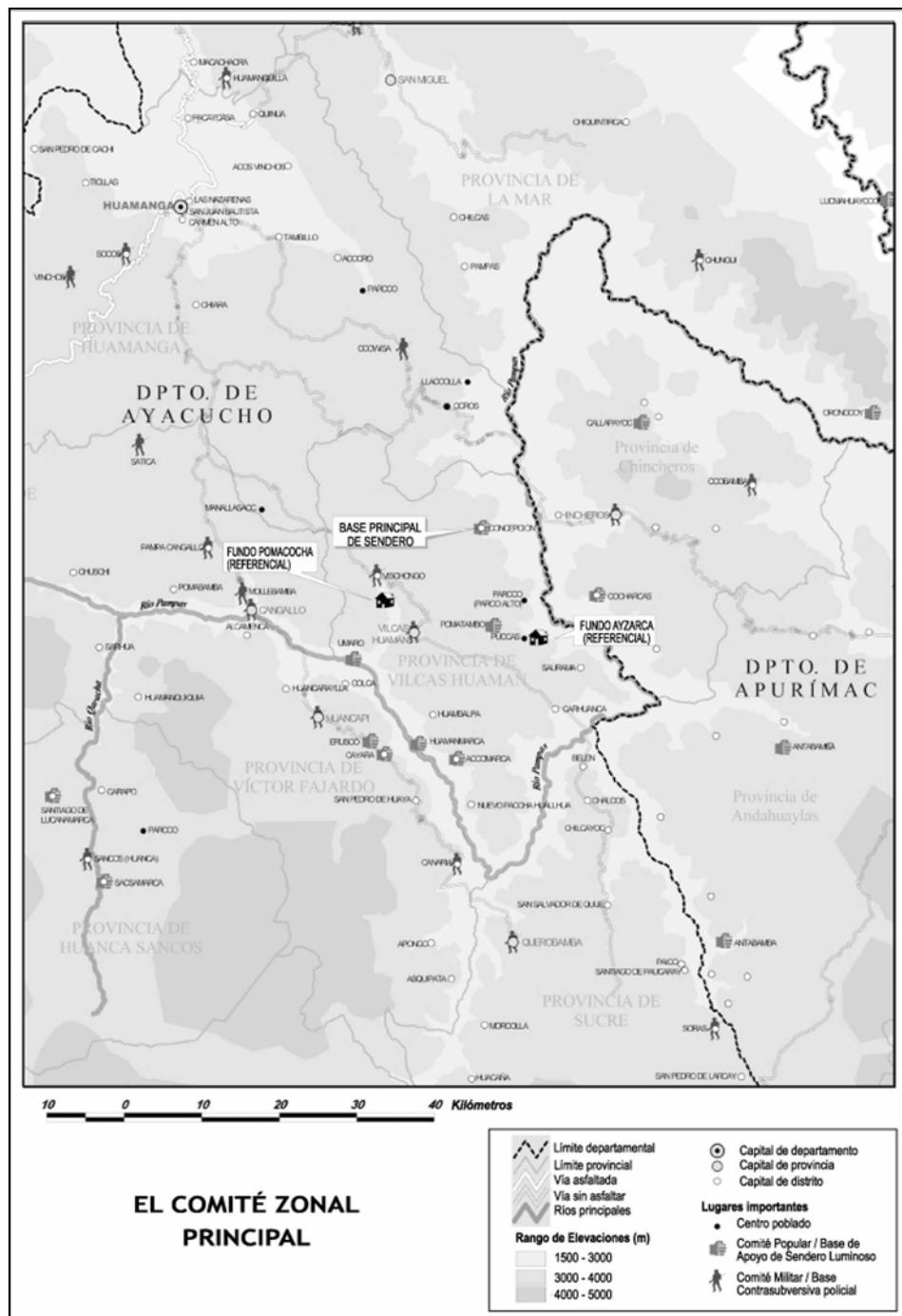
En 1991, los primeros en conformar las rondas campesinas fueron los desertores del PCP- SL por resentimientos personales. Esto se organizó con apoyo de los militares; formaron los CAD con los resentidos, especialmente GR, que se convirtió en el comando [...]. (CVR. BDI-Notas de campo P15, septiembre de 2002, Vilcashuamán. Varón, 38 años, profesor director de mujeres, era estudiante del colegio General Cordova en la época del conflicto armado interno)

Entonces, a su hermano de GR lo mata el Sendero [el PCP-SL] en Huayllán y él también se mete por capricho. O sea, trata de organizarse con los ronderos. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P154, septiembre de 2002, Vilcashuamán. Varón, 36 años, profesor trabajador de la USE de Vilcashuamán, era estudiante y participó en las incursiones del PCP- SL en los años del conflicto armado interno)

Muchos de los que formaron parte del PCP- SL se voltearon y formaron parte de los CAD, amparándose en la ley de arrepentimiento [la ley de arrepentimiento se promulga en los noventa, durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori]: AA, los P, R, LP [...]. (CVR. BDI-Notas de campo P98, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashua-

<sup>22</sup> Diario de Marka, 15 de septiembre de 1985, p. 3.

mán). Mujer, 37 años, agricultora, estudiante en la época del conflicto armado interno, su madre fue asesinada por el PCP-SL en 1983)



Los CAD fueron entrenados por los militares y envueltos en una lógica donde todo aquel que pareciera sospechoso era eliminado sin mayores indagaciones:

[...] cuando conversé con el comando de autodefensa, con el comando *Darío*, con el comandante *Gasparín*, cuando informé, me dijo ¡antes que te mate, tú tienes que enfrentarle bastante, matando uno, dos, aunque sea mueres! Ahora tú mismo vas a enfrentar. Si no matas nada, tú vas estar cobarde. ¡Tú estás entregando tu cuerpo a la gente, a esos terrucos [miembros del PCP-SL]! Empezó a decirme [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P89, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán). Varón, 50 años, comerciante, ex rondero de Huambalpa)

Algunos testimonios se refieren también a los abusos cometidos conjuntamente por el Ejército y los CAD.

Solamente venía y malograba ¡Ustedes han sido terrucos [miembros del PCP-SL]! ¡Paj! Lo mataba. En una, ni siquiera venía a explicar. No venía, ¿cómo te puedo decir? Hacernos entender de cómo debería ser, sino venían a malograr, maltratar. Muchas cosas se aprovecharon de ahí los ejércitos [miembros del Ejército]: violación, robos, saqueos. Hasta los ronderos mismos ya. Después ya cambió poco a poco la ley y ellos tampoco ya no cometieron más error. (CVR. BDI-Notas de campo P74, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán). Varón, 35 años, alcalde de Huambalpa, era estudiante en la época del conflicto armado interno)

#### 1.6. EPÍLOGO

Cuarenta pobladores de Huambalpa retornaron en diciembre de 1985 a su localidad con ayuda de Cáritas. El retorno fue liderado por un profesor apellidado Cárdenas, que «dicen que hablaba a la gente para que apoyara al progreso del pueblo y que no se uniera a los senderistas [al PCP-SL]» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P121, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán). Mujer, 37 años, agricultora, estudiante en la época del conflicto armado interno, su madre fue asesinada por el PCP-SL en 1983).

Tres meses después, el profesor Cárdenas fue asesinado por el PCP-SL. Luego de este suceso, algunos retornantes abandonaron nuevamente la localidad. El grupo que se quedó demandó instalar un puesto policial, pero éste se desactiva en 1990 por «los abusos que cometían» (CVR. BDI-Notas de campo P98, agosto de 2002, Huambalpa (Vilcashuamán). Mujer, 37 años, agricultora, estudiante en la época del conflicto armado interno, su madre fue asesinada por PCP-SL en 1983). A penas se retiró el puesto policial, el PCP-SL ingresó a la comunidad a incendiar el municipio.

Desde 1985 se desarrolla la historia de una población que vive a salto de mata, aún pendiente de ser escrita. Existe un gran contingente de personas que se desplaza, vuelve y nuevamente se desplaza. A pesar de la existencia de las bases militares en Vilcashuamán, Accomarca y Cangallo, el PCP-SL siguió teniendo una presencia activa en la zona, hasta el inicio de los años noventa.

#### 1.7. CONCLUSIONES

Este Informe, sustentado en relatos de los propios actores, ilustra lo que representó la presencia del PCP-SL en la zona de Cangallo y Vilcashuamán y muestra una diversidad de situaciones en el ámbito del CZ CF que forman parte de un proceso cuyo punto más álgido fueron las matanzas de Lloqllapampa, Huamblapa y Umaro-Bellavista.

El PCP-SL quiso convertir al CZ CF no solamente en la encarnación de la revolución y el cambio, sino en la región desde donde avanzaría en «su guerra» hacia la conquista de «zonas liberadas». Esta idea descansaba en el supuesto apoyo total que la población le brindaría en su afán de combatir a los gamonales y grandes hacendados que, en la práctica, paradójicamente, nunca existieron en esta parte de Ayacucho.

El objetivo de la CVR, sin embargo, es mostrar qué factores favorecieron la entrada del PCP-SL a la zona.

Por un lado, el PCP-SL se asentó en un ambiente político efervescente, en una de las regiones más posteriores de Ayacucho, donde existía una presencia variada de grupos y movimientos que igualmente mantenían un discurso radical. En la zona comprendida en el CZ CF sin una sólida inserción al mercado, la presencia de los servicios del Estado era bastante débil. No obstante, en los años setenta, al momento del ingreso del PCP-SL, se dio en ella un crecimiento de la población estudiantil.

El PCP-SL no fue el único partido que proclamaba hacer la revolución o que consideró a la escuela y la universidad como medios a través de los cuales imponer sus acciones e ideología y captar seguidores. Sin embargo, a diferencia de otros grupos políticos, fue el único que logró trascender la escuela y el partido merced a un calculado proselitismo que tradujo en acción un discurso basado inicialmente en el despliegue de un altruismo consecuente. Una vez iniciado el conflicto armado, el apoyo de la población al PCP-SL, sin embargo, se basó no sólo en una convicción voluntaria, sino en la coerción y una efectiva campaña de terror.

Este estudio corrobora la importancia que tuvo el circuito educativo para que el PCP-SL captara adeptos en las escuelas secundarias de la región y fuera visto por la población como una figura justiciera en un ambiente donde las expectativas por una vida más segura y digna habían rebasado lo que el Estado podía ofrecer.

Por la información recibida, la CVR puede concluir que la población de las provincias de Cangallo, Víctor Fajardo y Vilcashuamán no apoyó de manera total al PCP-SL como éste pretendía para convertir esta zona en el motor de una historia que nos hubiese podido llevar al país al totalitarismo más extremo y radical.

## 2. LA VIOLENCIA EN LAS COMUNIDADES DE LUCANAMARCA, SANCOS Y SACSAMARCA

La escalada de rebeliones en la provincia de Huancasancos contra el PCP-SL empezó en febrero de 1983, en Sacsamarca, con el asesinato de líderes importantes de esta organización. Le siguen Sancos y Lucanamarca. En represalia, el 3 de abril de 1983, el PCP-SL ingresó en la comunidad de Lucanamarca, provincia de Huancasancos, departamento de Ayacucho, y asesinó, en diferentes lugares y en forma despiadada con machetes y cuchillos a 69 comuneros, entre niños, mujeres y ancianos. Junto con los ataques a las comunidades de altura de Huanta, ésta fue la primera matanza masiva que ejecutó el PCP-SL contra poblaciones por las que decía luchar. Es a partir de ese momento que el PCP-SL, en su lógica de construir el «nuevo estado», desató una cruel represión contra aquellas poblaciones que se resistían a su sometimiento.

Más tarde, en 1988, Abimael Guzmán recordó Lucanamarca como una acción «contundente» para diezmar las «mesnadas contrarrevolucionarias». Sin embargo, reconoció que la matanza, aprobada por el «Comité Central», había sido también un «exceso».

Éste es uno de los tantos casos que pasaron casi inadvertidos para la opinión pública nacional. La poca difusión de este hecho se debió a que los medios de comunicación habían centrado su atención en la matanza de ocho periodistas en Uchuraccay, ocurrida el 26 de enero de 1983.

El estudio de la masacre de Lucanamarca es importante porque, en primer lugar, marca el inicio de la política de represión masiva de parte del PCP-SL. Igualmente, es un caso que ilustra claramente que la población no fue un agente meramente pasivo, sino que también hubo muestras de resistencia frente a los grupos subversivos.

Este hecho se produjo en una coyuntura de inflexión y en una zona dentro del ámbito del Comité Zonal Fundamental Cangallo-Víctor Fajardo del PCP-SL.<sup>23</sup>

Lucanamarca se rebeló contra el PCP-SL y sufrió represalias. El caso muestra cierta similitud con los de Uchuraccay y Huaychao, pero, sobre todo, evidencia las complejidades de la violencia en la región y los patrones de crímenes y violaciones de los derechos humanos en la nueva etapa del conflicto.

Entre enero y abril de 1983, un conjunto de acontecimientos marcaron un punto de inflexión en la historia de la violencia política en Ayacucho y en todo el país. En resumen:

- A fines de diciembre de 1982, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo del combate contra la subversión en Ayacucho y se desató una represión sangrienta en la región.
- Por la misma época, algunas comunidades comenzaron a rebelarse contra el PCP-SL. Los casos más conocidos son los de Uchuraccay, Huaychao y otras comunidades de las alturas de Huanta.
- En ese contexto, con el fin de mantener su control sobre el campesinado y resistir así la contraofensiva de las Fuerzas Armadas, el PCP-SL realizó matanzas indiscriminadas de campesinos, especialmente en las provincias de Huanta y Huancasancos. En esta última, la matanza más violenta se produjo en la comunidad de Lucanamarca.

### 2.1. FACTORES QUE FAVORECIERON LA ENTRADA Y EL DESARROLLO DEL PCP-SL EN LA REGIÓN

Huancasancos se creó como provincia el 23 de septiembre de 1984. Se trata de una zona tradicionalmente ganadera, que cuenta con importantes recursos naturales, sobre todo extensos pastizales naturales y agua, que permitieron el desarrollo de una ganadería de calidad. A inicios de los ochenta, Huancasancos, a diferencia de otras zonas (como las vecinas zonas bajas del río Pampas), tenía una economía mucho más dinámica y vinculada al mercado, pues las comunidades ganaderas asentadas en la zona conforman un eje comercial estrecha-

---

<sup>23</sup> Véase la historia sobre «El Comité Zonal Fundamental Cangallo Víctor Fajardo, comité principal».

mente ligado a ciudades de la costa como Nazca, Ica o Lima. De manera paralela, mantienen una relación activa con Huamanga, Cusco y Puno.

Los primeros vínculos con el PCP-SL se establecieron en el barrio de Carmen Alto de la ciudad de Huamanga, barrio tradicional de arrieros, en donde desarrollaron redes sociales importantes que han servido de nexo para la incursión de cuadros del PCP-SL en Huancasancos, ya que hubo profesores de Carmen Alto, militantes del PCP-SL, que trabajaron como docentes en Huancasancos.

### 2.1.1. El poder local: características de las élites

Las élites locales se convirtieron en el primer objetivo del PCP-SL. Ellas fueron el blanco de saqueos y robos de ganado. Con estas acciones, el PCP-SL imaginaba que estaba legitimando su discurso de igualdad y justicia mediante el castigo a supuestos gamonales y demostrando al pueblo que estaban luchando por los pobres de la comunidad.

Aunque las élites —identificadas como *mistis*— no fueron necesariamente gamonales, sí es posible distinguir que se desarrolló en la zona un sistema de poder y relaciones serviles.

Como es usual en zonas rurales del interior del Perú, las élites de Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca poseían tanto el control económico como el político de la comunidad. Coincidía que las autoridades eran los ganaderos más prósperos, que contaban con abundante ganado ovino y vacuno, varias estancias y cercos privados, que dejaban a cargo de pastores de la misma comunidad. Su poder económico les permitió acceder desde temprano a la educación y relacionarse con la ciudad de Huamanga. En los años cuarenta, los hijos de estas élites se educaron en Huamanga y en Lima. Por lo general, al terminar sus estudios regresaron a sus comunidades para hacerse cargo de sus propiedades.

En la década de 1970, la élite en Sancos estaba constituida por familias militantes de AP y el PAP que concentraban el poder económico y político. Ellos eran, por ejemplo, los únicos que sabían leer y escribir. El poder del conocimiento se consolidaba con el poder de decidir sobre los aspectos clave de la comunidad:

Acá había una familia Sumari enquistada en todos los centros educativos y ellos se tomaban todos los años el cargo de autoridades. Tomaban cargos de autoridades y si ellos no eran autoridades. Ellos tenían, pues, un compadrazgo único porque, como personas visibles, tenían ahijados, compadres, sobrinos y, a través de esta familiaridad, ellos controlaban. Incluso he visto profesores foráneos que venían. Eran marginados, maltratados, moral, psicológicamente. Tenían que renunciar a su cargo, irse. Entonces, todos los centros educativos estaban copados por sus ahijados sobrinos, hijos, familias, parientes.

E: ¿Y a qué se debe ese poder alcanzado por ellos?

LM: Es que ellos son económicamente, tienen, tienen ganado. Además del ganado, son profesores. Como tienen dinero, se han educado, pues. Mientras el resto, la mayoría no entendía el valor de la educación, muy pocos. Incluso se nota que ellos tienen las mejores estancias. Entonces, la gente tiene los cerros rocosos, pequeños ¿por qué? Porque desde mucho más antes, pasaban cargos de autoridades y, en esos tiempos, entonces, como había tierras del Estado, pasando cargo de autoridades con una resolución se hacían otorgar posesiones, los terrenos del Estado en pugna. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P334, Lucanamarca (Huancasancos), abril de 2002. Docente del colegio Los Andes)

Se abrió una mayor oportunidad para que un sector social antes excluido pueda acceder a la educación. Este fenómeno, que se da a escala nacional con mayor fuerza a partir de los años sesenta, coincide con un progresivo desarrollo de una conciencia política y el cuestionamiento del monopolio de poder de las élites locales en este caso.

Los informantes de la CVR afirman que había una diferencia entre los primeros profesores de la década de 1960 y los profesores de las décadas de 1970 y 1980. El primer grupo procedía esencialmente de las élites que ejercían el poder económico y político. El segundo grupo de profesores provenía de los sectores sociales antes excluidos que lograron acceder a la educación. Hacia finales de los años setenta, al igual que en otras regiones de Ayacucho, los profesores desarrollaron en Huancasancos un discurso donde se criticaba constantemente la situación de injusticia en la cual vivía el campesinado, donde los ricos se aprovechaban de la ignorancia de los pobres y débiles, especialmente de los pastores.

Cuando llegó el PCP-SL a estas comunidades, lo primero que hizo fue capitalizar en beneficio propio estos sentimientos colectivos de malestar, expresados principalmente entre los maestros. Así, logró reelaborar un discurso a su favor y tener mayor acogida en un sector de la población:

Venían diciendo: «Nosotros somos pobres, compañeros, trabajamos en nuestras chacras y, en Lima y en otros países, las personas son millonarias, tienen haciendas; por eso, nosotros nos hemos levantado, estamos en lucha, hemos visitado ya varios pueblos. Nosotros hemos venido por los pueblos, estamos dejando nuestra sangre, estamos muriendo, pero eso lo hacemos por ustedes». Así diciendo han venido, nosotros escuchábamos calladitos. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P355, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002. Mujer, 45 años, comerciante y ganadera)

A diferencia de las comunidades de Sancos y Lucanamarca, en Sacsamarca parecería que la diferencia socioeconómica entre «pobres» y «ricos» no era tan grande y, por lo tanto, podría hablarse de una comunidad económicamente más homogénea. Así, se encuentra una élite distinta a la de Lucanamarca y Sancos desde los años sesenta, que legitimaba su poder básicamente en el hecho de ser profesores antes que en sus propiedades.

### 2.1.2. Educación y modernidad

Al igual que en la provincia de Vilcashuamán, fue en los maestros y jóvenes que el PCP-SL encontró un mecanismo para instalarse en las comunidades tratando de construir en ellas una «nueva realidad» frente al «abuso y opresión» de los poderosos. Las viejas élites comenzaron así a ser cuestionadas por el nuevo sector educado de la población.

Mediante las estrechas conexiones comerciales que los comuneros desarrollaron con diversas ciudades debido a su actividad ganadera, se constituyeron redes importantes que luego habrían de permitir el ingreso del PCP-SL a la región. La temprana relación con las ciudades les exige el manejo de ciertas herramientas como leer, escribir y hablar castellano, por lo que la educación se convirtió, desde épocas tempranas, en una preocupación importante para las élites y también para los propios pobladores.

De acuerdo con la información recogida, Huancasancos fue regionalmente reconocido como un lugar donde la élite local desarrolló un temprano interés por el estudio y la lectura.

Antes de los años sesenta, los hijos de estas élites salían a Huamanga, Lima o Ica para concluir la secundaria. En algunos casos, incluso, continuaron estudios superiores en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) o en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en Lima. Al regresar y convertirse en autoridades del pueblo, comenzaron a desarrollar una política de construcción de escuelas, de las cuales ellos fueron los primeros maestros. Ésta no es una zona donde existiera una lucha por tierras; pero, por medio de estas familias que se autodefinieron como intelectuales, se desarrolló un discurso político que vinculaba el interés por el progreso del pueblo con el desarrollo de la educación.

### 2.1.3. El colegio Los Andes

Con el transcurrir de los años, las autoridades en Huancasancos vieron la necesidad de fundar un colegio de educación secundaria para facilitar el acceso a la educación a los jóvenes de la localidad, que tenían que trasladarse hasta Huancapi o Huamanga para acceder a este servicio. Así, en 1967, se crea el colegio secundario Los Andes que luego se formaliza como colegio nacional Los Andes.<sup>24</sup> Los fundadores del colegio fueron las autoridades de la comunidad y del distrito, las cuales, fieles a su discurso, se mostraron interesadas en la educación como medio importante de desarrollo y modernización: «Como alcalde, mi preocupación estaba orientada a la educación, mandé a construir aulas y la conclusión de la obra del local del colegio mixto Los Andes de Huancasancos-Ayacucho» (Molina 2000: 49).

Los comuneros de Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca empezaron a enviar a sus hijos al colegio Los Andes, mientras las élites locales continuaron enviando a sus hijos a Huamanga o Lima.

El colegio Los Andes tenía buena reputación y la calidad de la enseñanza era reconocida a escala regional. Esta fama llegó hasta las comunidades de la zona baja del río Pampas y animó a los comuneros con mayores

---

<sup>24</sup> En realidad, se ignora la fecha exacta de la creación del colegio Los Andes, pero se sabe que sucede durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963-1968).

recursos económicos a enviar a sus hijos al colegio Los Andes. Así, empezaron a llegar alumnos de los interiores, como llaman los comuneros de Huancasancos a los pueblos más pobres de Sarhua, Tiquihua, Umaru, Cayara, Hualla, comunidades de donde provenían los peones que venían a trabajar en las chacras y estancias de las familias pudientes de la provincia de Huancasancos.

Como ha sido mencionado anteriormente, los primeros profesores del colegio eran de la localidad y fue sólo a partir de la década del setenta que empezaron a llegar profesores de otros lugares, formados en la UNSCH. En aquellos años, entre los profesores del colegio Los Andes empezó a predominar una línea política de izquierda radical, acorde con el discurso político de la época, ambiente que dio pie a la organización de un frente de estudiantes.

Dentro del grupo de profesores que llegó a Huancasancos proveniente de la UNSCH, se encontraban también profesores ideológicamente formados por el PCP-SL. Paralelamente, grupos del PCP-SL empezaron a visitar las comunidades y realizaban reuniones en casas particulares.

#### 2.1.4. La pedagogía del PCP-SL

El PCP-SL encontró en el maestro a un personaje capaz de ejercer un papel importante dentro de la comunidad. En muchos casos, además de ser maestro, ejercía algún cargo público. Era un líder con prestigio y autoridad, lo cual resultaba muy conveniente para el PCP-SL. En resumen, los maestros se convirtieron en aliados estratégicos para el PCP-SL para cumplir sus objetivos de convertir la «serranía en columna vertebral para desenvolver la guerra y conquistar el poder». <sup>25</sup>

De acuerdo con los entrevistados, en los años setenta los profesores que llegan al colegio Los Andes provenían, en su mayoría, de la UNSCH y estaban formados por una corriente radical de izquierda propia de la época.<sup>26</sup> Estos profesores llegaron con ideas revolucionarias. Entre ellos, llegaron militantes y cuadros intelectuales importantes del PCP-SL como parte de su estrategia de formación de militantes. Esta estrategia implicaba la utilización de la estructura del Estado y buscaba su destrucción. El PCP-SL pretendió controlar el sector Educación, donde la corrupción existente le permitía comprar cargos y lograr nombramientos en zonas de interés.<sup>27</sup>

EL PCP-SL desarrolló una pedagogía en la cual ellos eran los maestros y los que poseían el poder del conocimiento para sacar a la población rural de la ignorancia y la ceguera en la cual habían permanecido durante siglos al recordarles la brutal explotación de la cual habían sido víctimas tanto ellos como sus antepasados:

A nosotros nadie nos recordaba y decían nosotros no comemos carne, no tomamos leche. El trabajo de ustedes se lo van a llevar. Lo que crían sus animales se lo van a llevar. Lo que trabajan sus chacras se lo van a llevar. Les van a explotar y no les van a pagar. Nosotros sabemos, decían, «a nosotros no nos cuenta nadie. Tenemos orejas y sabemos». (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P321, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Pastora de puna, 70 años)

EL PCP-SL construía una realidad adecuándola a los objetivos del partido. Esta realidad se centraba en el análisis de la lucha y contradicciones de clases; el resto de elementos carecía de importancia.

El PCP-SL encontró en los profesores un vínculo importante para llegar al campo. Así sucedió con el profesor Juan, (a) Víctor, a quien los campesinos señalan como el principal líder del PCP-SL en Huancasancos. Él fue el primero que llegó con el propósito de adoctrinar a los jóvenes del colegio.

Las lecturas de los estudiantes se centraban en las obras de Marx, Lenin, Mao y Mariátegui (según datos proporcionados por el Juez de Paz de Huancasancos) y tenían conocimiento de la Revolución China y los acontecimientos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Los jóvenes eran seducidos por los ofrecimientos de acceso al poder para cambiar la estructura tradicional de la comunidad y el mundo, donde las masas serían las que gobiernen: «Ellos como profesores han seducido, bien palabreado, una cosa fácil, “tú vas a ser director, tú capitán”, así es la política de Mao Tse Tung, no sé

<sup>25</sup> Véase entrevista con el «presidente Gonzalo». Lima, julio de 1988.

<sup>26</sup> Es difícil precisar cuáles eran los grupos de izquierda más importantes, pero se sabe que el Partido Comunista del Perú Patria Roja tenía un interés en el área educativa. Sin embargo, existe una multiplicidad de partidos de izquierda que van desde las posiciones más radicales como el PCP-SL hasta las más moderadas que terminaron integrándose en los ochenta al escenario electoral. Al respecto, véanse los estudios sobre la violencia en universidades estatales.

<sup>27</sup> Véase el estudio sobre el magisterio y el sistema educativo en el tomo III.

qué cosas hay y eso te estarían leyendo, qué lindo para ellos era» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P335, Sancos (Huancasancos), marzo-mayo de 2002, comerciante y ex autoridad, 70 años).

#### 2.1.5. Las «escuelas populares»

EL PCP-SL comenzó su inserción valiéndose de grupos de militantes que se desplazaban en la noche entre Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca hacia fines de los setenta. Estos grupos, que realizaban visitas a las comunidades cada quince días, conformaron los embriones de la «fuerza principal». La primera llegada se dio en Sancos. Los comuneros recuerdan que los primeros rumores sobre la existencia del PCP-SL provenían de la zona de Vilcashuamán. Muchos de los profesores que luego enseñarían en el colegio Los Andes trabajaron en esta zona, que llegó a ser uno de principales bastiones del PCP-SL.

Al igual que en Vilcashuamán, el PCP-SL formó e instruyó a los jóvenes de la comunidad en estrategias de guerra en las «escuelas populares», realizadas por las noches en casas particulares apartadas de la población, en la localidad u otras comunidades. Al principio, era sólo un grupo el que participaba activamente y se invitaba a los profesores tanto del colegio como de las escuelas para dictar algún curso sobre marxismo o política en general.

En las «escuelas populares» los asistentes eran adoctrinados con el dictado de clases de marxismo y política y se les entrenaba militarmente para luchar contra las fuerzas del orden con cenizas, ají y huaracas. Las «escuelas populares» carácter obligatorio para los captados y estaban divididas según edades. El PCP-SL se preocupó por formar a quienes serían los futuros líderes, educando niños según la ideología del PCP-SL y, en muchos casos, como en Sacsamarca, llevándolos de la comunidad hacia otros lugares para formarlos militarmente. Así también existía la «escuela popular» para los jóvenes, para las mujeres y las personas mayores.

No todos los profesores, sin embargo, estaban a favor del PCP-SL. Los profesores y maestros de las escuelas primarias, especialmente en Sacsamarca, no se aliaron con éste. Uno de los principales factores para explicar este hecho puede haber sido que ellos eran las autoridades locales y, por lo tanto, tenían el poder; otro es su militancia en partidos políticos como el PAP y AP.

#### 2.2. EL PCP-SL Y LA «REPÚBLICA POPULAR DE NUEVA DEMOCRACIA»

En Sancos, donde se encontraba el puesto policial en 1982, un día se armó una trifulca con uno de los policías, a quienes un grupo de comuneros acusó de violar a una joven de la comunidad. El pueblo estaba dispuesto a lincharlo, pero personajes notables de la comunidad salieron en su defensa. Luego de este hecho, los policías se retiraron a Huancapi y dejaron el campo libre para la entrada del PCP-SL en las tres comunidades. Este caso expresa la frágil presencia del Estado en la zona, pues bastó que la comunidad enfrente a los policías para sacar de la escena a los supuestos vigilantes del orden oficial:

La gente ya sabía [de la existencia del PCP-SL en la comunidad], ya estaban preparadas. Había un guardia, un joven, un buen militar era. Le hicieron un jueguito: que este guardia la ha violado a ésta, una mujer indefensa, joven así como para inculpar a ese guardia [...] se iban a la turba, a linchar, a quitar su arma [...] es la primera vez. Ya estaban las consignas. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P346, Sancos (Huancasancos), abril de 2002. Ganadero, ex autoridad, 70 años)

Según relatan los comuneros, el PCP-SL entró para tomar el poder en Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca en octubre de 1982:

En octubre-noviembre de 1982, entraron un hombre y una mujer desconocidos al pueblo y me reclamaron la llave del Concejo. Esta pareja venía de Pampa Cangallo. Me reclamaban que deje el cargo como secretario del Concejo porque, si no, me iban a matar, pues, a partir de ese momento, decían que el Partido [el PCP-SL] iba a cambiar el orden de la comunidad, ya no iban a haber adulterios ni abigeos [...]. (CVR. BDI-Notas de campo P327, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002. Director de la escuela de Colcabamba, era autoridad del Concejo en los años del conflicto armado interno, 55 años)

Al entrar a cada comunidad, los mandos del PCP-SL, que venían de otra región, procedieron a tomar el control total del pueblo y exigieron que todas las autoridades renunciaran a sus cargos bajo amenaza de

muerte. Una vez declarada la vacancia del poder tradicional, los mandos proclamaron a las comunidades a nombre del PCP-SL como «comités populares».

De acuerdo con los informantes de la CVR, las autoridades decidieron retirarse en forma pacífica. En el caso de Sancos y Sacsamarca, las autoridades accedieron a quedarse y someterse al PCP-SL.

Los contingentes de la «fuerza principal» que llegaron a Sacsamarca fueron recibidos con frazadas, leña y alimentos, especialmente por parte de jóvenes estudiantes. En los tres casos, tomaron el local municipal, obligaron a la población a reunirse en asamblea en la plaza y nombraron a la «fuerza local» del Ejército Guerrillero Popular (EGP), que, en adelante, sería quien detentara el poder y el control total sobre la comunidad y sus pobladores. La «fuerza local» estaba a cargo de un líder y diez militantes aproximadamente, entre varones y mujeres, que se repartían los cargos de primer responsable, comisario de seguridad, comisario de producción, comisario de asuntos comunales y comisario de organización.

Las versiones de los comuneros en Huancasancos y Lucanamarca no precisan bien cómo fue la toma de poder del PCP-SL mientras que, en Sacsamarca, sí señalan que vienen personas foráneas a nombrar a los líderes y a establecer el nuevo orden.

Por los datos recogidos en las entrevistas, se puede deducir la existencia de una jerarquía de mando, donde el mayor poder estaba concentrado en el «Comité Popular de Sancos», a cargo de *Juan*. Esta jerarquía de mando generó descontentos en los otros mandos y en la población en general, ya que reforzaba una antigua rivalidad existente entre Sancos y el resto de los distritos.

### **2.2.1. Perfil de los líderes y los jóvenes del PCP-SL**

Los profesores, como ha sido mencionado, se convirtieron en el nexo entre los cuadros más importantes del PCP-SL y los jóvenes. Muchos de ellos habían sido formados por los principales cuadros intelectuales del PCP-SL. Uno de los lugares importantes para la captación fue la UNSCH.

Los jóvenes fueron captados por el PCP-SL con un discurso que proponía que ellos accederían al poder y todos serían iguales. Así, los jóvenes, motivados por ambiciones de poder e ilusiones de formar parte de la revolución para cambiar el orden tradicional en el que vivían, se aliaron al PCP-SL. Por primera vez, estos jóvenes empezaron a sentir el poder que les había conferido el PCP-SL: «Ella me contaba, pues, “qué lindo, es lindo agarrar el arma, e irse así”» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P322, Sancos (Huancasancos), marzo de 2003. Varón, ganadero de 70 años).

Si bien es cierto que un grupo de pobladores participó por temor, no hay que olvidar que otros participaron en el PCP-SL por voluntad propia. El PCP-SL, como en otros lugares, logró también exacerbar los conflictos personales y despertar los resentimientos contra el sector económicamente poderoso de la comunidad. Es la conjunción de estos factores la que explica, en parte, la adhesión de un grupo de jóvenes al PCP-SL: «“¡Carajo! Esas gentes de plata a barrer las calles, bien ordenaditos, nada de sacavueltera [sic]”. A esos que era waqras, no había eso; a esos, al toque castigo [...], todo bien limpiecito era, pues, esas veces» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P335, Sancos (Huancasancos), entre marzo y mayo de 2002. Comerciante y ex autoridad, 70 años).

### **2.2.2. Las mujeres del PCP-SL**

De acuerdo con las informantes, el PCP-SL ofreció un espacio de desarrollo personal a las mujeres que se adhirieron a él: «Las mujeres siempre hemos sido marginadas, teníamos miedo de opinar. El PCP-SL valoraba a las mujeres. La camarada *Carla* decía “las mujeres tenemos que actuar, tenemos nuestras ideas, somos iguales a los varones”» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P363, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Mujer, 35 años, ama de casa).

Si bien las mujeres no tuvieron un papel protagónico en el PCP-SL local, lo seductor de la militancia —sobre todo para las mujeres más jóvenes— era haber ganado un espacio de reconocimiento importante en el proyecto político del PCP-SL, lo cual fue mal visto por el poder tradicional como lo afirma la siguiente declaración: «Chicas así armadas me llevaron a la plaza [...] sí, chicas que no valían la pena, pero, como tenían arma, teníamos que obedecer, pues [...] ¡Repugnante esta situación! Si tenía arma, yo hubiera parado» (CVR. BDI-Entrevista en Profundidad P363, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Varón, 35 años).

Así, la «república popular de nueva democracia» planteaba cambios que atentaban contra la organización tradicional. Si bien el PCP-SL llegó a las comunidades cuestionando la legitimidad de las autoridades por los abusos que cometían contra el pueblo, al dejar el poder y el control en manos de jóvenes inexpertos, motivó que un grupo importante de la población cuestionara el proceder del PCP-SL, sobre todo las personas mayores.

### 2.2.3. Características de la vida cotidiana

Cuando el PCP-SL tomó el poder, su primera acción fue confiscar armas y explosivos. Por ser zona ganadera, los dueños de ganado poseían armas en sus casas o estancias para proteger a sus animales de los zorros, pumas o abigeos. En Sacsamarca, quienes tenían carabinas se dedicaban a la caza de vicuñas.

El PCP-SL manejaba toda la información de «quién era quién y quién poseía qué cosa». El trabajo previo de redes y la captación de adeptos en la comunidad, le permitió tener un panorama preciso de la comunidad, de las autoridades y sus élites.

El régimen impuesto por el PCP-SL obligaba a los comuneros a reportarse constantemente ante los mandos del «comité popular», quienes mantenían el control de la entrada y salida de todos los comuneros, incluyendo la salida a sus chacras y a sus estancias.

Diariamente se realizaban asambleas donde se daban vivas al «presidente Gonzalo» y se marchaba por la plaza. Todos estaban obligados a participar, incluyendo el cura de la localidad: «Esto es del Partido: «¡a marchar! Viva la lucha armada, ¡que viva Gonzalo! ¡Que viva Gonzalo!». Hasta el cura [...] todos los principales: Ranulfo, Óscar, Matías, principales han marchado por las calles» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P335, Sancos (Huancasancos). Varón, 70 años).

Estas arengas debían ser aprendidas y recitadas de memoria; pues, de lo contrario, se castigaba a los comuneros.

La presión y las amenazas para asistir a estas actividades era muy fuerte y aún la gente tiene muy presente cómo entró el PCP-SL y qué era lo que decían. Hasta hoy en día recuerdan lo que era vivir bajo la amenaza del terror que les producían «los mil ojos y mil oídos del Partido»: «También nos decían: "Ustedes sólo se van a escapar cuando se vayan al cielo; aunque se vayan a otra nación van a morir". [Así] nos decían» (Varón, 40 años, Sacsamarca).

El orden vertical se había instalado en la vida cotidiana, en las relaciones familiares y de parentesco. Muchos jóvenes, convencidos de la legitimidad de morir por una causa, terminaron abandonando a sus familias y cambiaron completamente el sentido de sus vidas.

Si los comuneros no asistían a las reparticiones, reuniones y asambleas que realizaban las distintas organizaciones del PCP-SL, eran castigados. Los castigos tenían una escala y dependían de la falta y la recurrencia en ella. Por ejemplo, si era la primera vez que faltaban a una asamblea, se les daba un aviso; a la segunda falta, se les castigaba físicamente en una asamblea pública. La organización de seguridad registraba las faltas cometidas por cada comunero y aplicaba sanciones a quienes figuraban en la lista, que luego llamaron «lista negra». La escala, de acuerdo con nuestros informantes, era:

- Amonestación
- Corte de cabello y otros castigos físicos
- Ejecuciones

Primero advertían. Si seguían, le cortaban el pelo. Y ya a la tercera, si seguía igual, se le hacía juicio popular [...]. A Emilio se le dijo, pero no hizo caso. Ricardo y Sebastián se moderaron [...]. (Varón, 40 años, Sacsamarca)

Estos castigos pretendían de ilustrar la rigidez y la disciplina que ejercía el PCP-SL en las comunidades; sin embargo, existían también sutilezas particulares en cada caso, como la exoneración de ciertos castigos y la nueva oportunidad para enmendar las faltas.

El tercer nivel, y el más cuestionado por la población, era la ejecución. Si, a pesar de habersele avisado y castigado, la persona seguía cometiendo una falta, era ejecutada en la plaza pública bajo la figura de un «juicio

popular». Este nivel correspondía a las faltas más graves que alguien podía cometer contra el PCP-SL, como la traición a la causa.

El primer «juicio popular» se realizó en Sancos el 1 de noviembre de 1982; mientras que, en Sacsamarca, ocurrió en enero de 1983 y, en Lucanamarca, en febrero del mismo año.

El primer «juicio popular» en Sancos fue contra el juez de paz y profesor Alejandro Marquina el 19 de noviembre de 1982. Los militantes del PCP-SL sacaron de sus casas a Alejandro Marquina, junto con William Molina, la esposa de Cesario Sumari y otro comunero. Trasladaron a los detenidos con las manos atadas, los ojos vendados y la boca llena de algodón. Un informante señala que los hicieron arrodillarse; seguidamente, según las entrevistas, acusaron a Alejandro Marquina de abusivo, explotador y mujeriego. Luego le dieron un disparo en la sien a la voz de «¡Compañeros, viva la lucha armada! ¡Que muera este gamonal!» (CVR. Testimonio 203197). Un testigo afirma que, en aquella oportunidad, los mandos del PCP-SL liberaron a varios presos que estaban en la cárcel de Sancos.

Alejandro Marquina pertenecía a la élite de la comunidad, pero provenía de una familia de escasos recursos. Los comuneros de Sancos lo acusaban de pagar un precio muy bajo por el ganado que compraba, que luego vendía a un precio alto, lo cual le generaba una ganancia importante. Se ha encontrado varias opiniones sobre el profesor Alejandro Marquina. Para algunos fue una persona buena, mientras otros afirman que habían escuchado que, más bien, «prepotente era, egoísta, así dicen». Sin embargo, nadie estuvo de acuerdo con su muerte.

Un poblador explica por qué se dio este hecho y resume el efecto que produjo:

Un día, sorpresivamente, los policías han hecho su misa a la Virgen Santa Rosa de Lima y luego nos han dejado, sin nada. Por eso, ellos [el PCP-SL] han aprovechado. En 1982, se habrán ido. Luego, ellos [el PCP-SL] entraron y mataron en vista de todos nosotros al señor Alejandro Marquina y eso nos traumó. Desde que yo nací nunca había visto matar a una persona. A la vista de nosotros mató y eso ha sido causante, otros se han ido a Lima, otros a la puna, eso ha sido el trauma. Como no teníamos ninguna fuerza que nos ampare, ellos [el PCP-SL] hacían lo que querían, ellos nos han obligado, ha sido el miedo. Asimismo, cuando llegó los militares, los sinchis, de nosotros hacían lo que querían, hasta casas nos robó, yo he sufrido un robo cuando estaba de jefe Yanawiku. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P366, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Mujer, 50 años, jueza de paz no letrada, era ganadera en la época del conflicto armado interno)

En el caso de Lucanamarca, el primer «juicio popular» ocurrió el 17 de febrero de 1983 contra Marciano Huancahuari, su esposa y su yerno, quien estaba de visita en la comunidad. Marciano Huancahuari era uno de los líderes de más edad; al momento de ser ejecutado, tenía 74 años de edad y era el vicepresidente de la comunidad. Había pasado por casi todos los cargos tanto de la comunidad como del distrito. Sus hijos seguían estudios superiores en Lima. Para algunos pobladores, era una de las personas con mayor cantidad de pastos naturales y ganado, que maltrataba a sus pastores y abusaba de sus vecinos quitándoles terrenos con documentos fraguados de compra y venta o con usurpaciones ilícitas. Para otros, en cambio, no había razón para matarlo y sólo pendían falsas acusaciones sobre él. Así como en Sancos, las tres personas fueron amarradas, sus ojos vendados y les leyeron una lista de acusaciones. Una vez terminada la lectura de las imputaciones, un subversivo procedió a sentenciarlos a muerte:

[...] este señor [proclaman los mandos del PCP-SL] era así, que él era engañador, explotador, no sé qué cosas más. Tantas otras cosas. Yo era menor de edad. Habrá sido alguien que le denuncie, ¿no?, y así lo han declarado con sentencia. Entonces, algunos lloraban [...] [unos reclamaban] ¡no, no lo maten! [mientras otros denunciaban] ¡está bien que lo maten! [...] Sale del Consejo de acá y lo buscan. Lo ha hecho firmar enseguida nomás, sale corriendo y después sentencia, sale corriendo estas tres tiendas y se mantenía y eso le han tirado, a la escopeta. Así, así muere y, entonces, para acabar, le ha matado al Walter y así [...] ese Walter le han sacado también sus cosas. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P352, Lucanamarca (Huancasancos), marzo de 2002. Hombre, 55 años ganadero, presunto ex integrante del PCP-SL)

En Sacsamarca, unos afirman que fue durante los carnavales del 1981 (CVR BDI- Entrevista en profundidad P354) y otros en 1982 (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P329) cuando el PCP-SL llevó a cabo el primer «juicio popular» y el asesinato del profesor Teodoro Fernández, docente y yerno del anexo de Palcca. Este caso pone en evidencia las dificultades del PCP-SL para asentarse en la zona, debido a pugnas por el poder e intereses contrapuestos tempranamente entre éste y la población. De acuerdo con un entrevistado, Teodoro Fernández se enfrentó a los mandos subversivos en una «asamblea popular», donde protestó por las restric-

ciones impuestas a la población. Las entrevistas sugieren que Teodoro Fernández fue portavoz de un malestar que ya se venía evidenciando en la población. Otro testigo refiere que, cuando llegó una brigada del Comité Zonal Fundamental Cangallo-Víctor Fajardo, recibieron las quejas de los mandos locales sobre el comportamiento de Teodoro Fernández, a quien acusan de oveja negra, traidor, soplón y tener doble cara. Estas dos últimas acusaciones eran las peores para el PCP-SL. De acuerdo con este testigo, Teodoro Fernández quería «dominar el partido de Sendero», «quería estar en el poder», «él quería liderar»:

Entonces los senderistas [los miembros del PCP-SL] han dicho así son éstos que están en contra de la patria, éstos van a morir, diciendo lo han metido adentro y dice le han metido en la boca bastante plástico para taparle y después lo han sacado afuera, así mueren los que están en contra del partido, diciendo le han metido bala ante todo el público, de ahí toda la gente se ha escapado a los cerros. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P354, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002. Varón, ganadero, ex autoridad, 72 años)

Las acciones más importantes del PCP-SL en la región fueron los arrasamientos de ganado y bienes particulares comunales. El PCP-SL saqueó el ganado y los bienes de las familias más «ricas» de la comunidad. De esta manera, Huancasancos se convirtió en un ejemplo para los militantes del PCP-SL de cómo castigar a las personas que hicieron fortuna a costa de los pobres.

En Sancos, el PCP-SL expropió el ganado de Adán y Cesario Sumari, Sócrates Salcedo, Alejandro Marquina y Antenor Molina. Todas estas personas habían sido autoridades en épocas anteriores y se contaban entre las familias que tenían mayor cantidad de ganado.

Cuando arrasaron el ganado de Antenor Molina, los subversivos tomaron sus ocho estancias: 1,800 ovinos, 80 vacunos y 120 alpacas, que fueron repartidos a los comuneros de Huancasancos, Lucanamarca, Carapo, Sacsamarca, Manchiri, Porta Cruz, entre otros. También fueron saqueadas sus dos tiendas. Cuando su ganado fue confiscado, Antenor Molina presentó una denuncia a las Fuerzas Policiales de Ica, que capturaron a uno de sus pastores: «Mi padre trabajaba con Matías y él lo acusó de haber robado su ganado para Sendero [el PCP-SL]. De ahí lo han metido a la cárcel. Mi mamá murió y perdimos todo. Yo andaba por la puna con mis hermanitos» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P363, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Mujer, 35 años, ama de casa, presunta integrante del PCP-SL).

Uno de los acontecimientos más importantes, que tuvo repercusiones a escala regional, fue el arrasamiento del ganado de la granja comunal de Caracha, en Sancos, en diciembre de 1982. A este acto acudieron, según recuerdan los comuneros, cientos de personas de diferentes comunidades: Lucanamarca, Sacsamarca, Sarhua, Tiquihua, Manchiri, Umaru, Hualla, Pampa Cangallo, etc. Todos ellos, comandados por *Juan*, llegaron a Caracha y se llevaron el ganado vacuno y ovino de la comunidad:

Eso habrá sido en diciembre de 1982. Llegamos a Huancasancos y el dirigente máximo dijo: «hay una tarea que cumplir». Tres días caminando en fila hasta Caracha. En eso, llega una señora a buscar al camarada *Carlos* [...] ahí todos cantaban, no sabíamos cómo cantar ni cómo aplaudir [...] [los miembros del PCP-SL] empezaron a decir tenemos más poder que ellos, empezó a repartir de todos los sitios habían venido la gente de Cangallo, Huancapi, Hualla, todos los interiores gente cantidad y pobres [...] en Huancasancos repartieron [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P323, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002. Varón, 65 años, es teniente alcalde y era autoridad en la época del conflicto armado interno)

Este hecho causó malestar entre los comuneros de Sancos, porque el PCP-SL repartió su ganado a gente de los interiores de la zona baja del Pampas, a quienes consideraban que no tenían por qué recibir nada, puesto que el ganado no era suyo sino de la comunidad.

En Sancos, los subversivos también saquearon locales comerciales, como el de *Raúl*, y la tienda comunal. Los bienes fueron repartidos en la plaza a los comuneros.

En Lucanamarca, el PCP-SL expropió el ganado de Marciano Huancahuari antes de asesinarlo. También saqueó la tienda comunal, repartió los bienes y obligó a los comuneros a hacer fila para recibirlas.

En Sacsamarca hizo lo mismo con la granja comunal que, aunque no tenía el número ni la calidad de los animales de la granja de Sancos, también conmovió a la población, pues el ganado de la comunidad fue repartido a comuneros de otras localidades. Pero en Sacsamarca fueron más importantes los saqueos a las tiendas comerciales y a los carros que venían con productos desde la costa; desde diciembre de 1982, los subversivos interrumpieron la carretera con trancas y sólo permitieron el ingreso de ciertos camiones previo pago de cupo.

### 2.3. LOS PUNTOS DE QUIEBRE

Así se fue gestando un contexto en el cual la propia práctica del PCP-SL terminó minando sus propósitos y generando rebeliones contra los líderes y el «comité popular», a la vez que permitió a los comuneros establecer una alianza con la Policía Nacional y el Ejército.

La CVR considera que fueron cuatro las causas principales que hicieron que el PCP-SL terminara rechazado por la población:

- Ataque a la economía familiar
- Contradicciones entre la ideología y la práctica del PCP-SL
- Instalación de la muerte en el centro de la vida cotidiana
- Pugnas al interior del partido

#### 2.3.1. Ataque a la economía familiar

El orden establecido por el PCP-SL restringió las posibilidades de intercambio comercial y de movilidad en la zona e impuso un régimen casi de autoconsumo. La acción subversiva se centró en un estricto control de entrada y salida de las comunidades, que impidió el libre tránsito de los comuneros hacia sus chacras o sus estancias. Esto fue un grave obstáculo al desarrollo de la economía local, pues, por ejemplo, entre los meses de enero y marzo los ganaderos deben subir a las zonas altas para aprovechar la abundancia de pastos. Los meses en que el PCP-SL declaró Huancasancos como «territorio liberado» fueron precisamente los meses de lluvia, cuando los pastores deben trasladarse a las estancias.

En Sacsamarca, quizás debido a su posición estratégica cerca de la carretera, los controles de entrada y salida fueron aún más estrictos. Estaba prohibido que los comuneros vayan a sus estancias por períodos prolongados y se les castigaba si desaparecían varios días. No se impidió ni el comercio ni la entrada de camiones provenientes de la ciudad, pero éstos debían pagar cupos para poder ingresar a las comunidades. Se restringieron los viajes a la zona quechua para realizar trueque. Las relaciones de intercambio fueron controladas por el PCP-SL.

La interrupción de la vida cotidiana, el acoso a la economía familiar y local, la obligación de asistir a asambleas antes que ir a cuidar sus animales, sin tener libertad para trasladarse libremente, terminaron provocando un malestar general. El discurso de igualdad y de justicia no se estaba manifestando en los hechos, pues, en lugar de progresar las condiciones de vida, estaban deteriorándose de manera peligrosa.

Si bien es cierto que las expropiaciones más importantes se realizaron contra quienes tenían mayor cantidad de ganado, ello no quiere decir que fueran los únicos afectados. Los comuneros acusan a líderes locales del PCP-SL de cometer robos en la puna a comuneros y pastores, además de pedirles comida:

El PCP-SL controló todas esas situaciones. Ellos ya no eran dueños de su ganado; el PCP-SL era dueño de su ganado [...] entonces, les dolió en el alma, entonces, con qué va a vivir [...]. Según me cuentan, eso no lo he visto, los senderistas [miembros del PCP-SL] ya no dejaban salir a la población a sus chacras a ver sus ganados, eso motivó desesperación. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P334, Sancos (Huancasancos), abril de 2002. Abogado, 60 años, era docente del colegio Los Andes en la época del conflicto armado interno)

#### 2.3.2. Contradicciones entre la ideología y la práctica del PCP-SL

Cuando el PCP-SL «bate el campo» y se produce un repliegue inesperado de las Fuerzas Policiales, busca reemplazar el «viejo orden» por una nueva organización de gobierno local antes de lo planificado. Con este fin, reemplazó a las «viejas autoridades» por jóvenes de la localidad que calificó como más capaces de conformar una «fuerza local». En muchos casos, sin embargo, la conducción de los «comités populares» por estos jóvenes presenta una serie de contradicciones cuando se ve filtrada por intereses y revanchas personales.

Para el grupo de pobladores a quienes el PCP-SL había expropiado bienes, éste estaba conformado por un grupo de jóvenes vagos que pretendía obtener todo fácil a costa del trabajo honrado. Para otro grupo de comuneros, el problema era que el PCP-SL y sus militantes no ponían en práctica lo que decían en su discurso. Hablaban de la igualdad y de la justicia, pero no la practicaban. Las entrevistas mencionan que, cuando el

PCP-SL realizaba expropiaciones de ganado o saqueos a tiendas comerciales, la «fuerza local» se apropiaba de los mejores bienes y animales, mientras que al pueblo le daban las sobras:

Mataban las vacas para el consumo de ellos, a la comunidad, le repartían cosas inservibles, estaban al servicio de ellos [los comuneros]; es por eso el descontento [...]. (CVR. BDI- Entrevista en profundidad P329, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002. Varón, 67 años, docente jubilado, era profesor en Sacsamarca en la época del conflicto armado interno)

Estábamos tristes, tomaban cerveza, leche de las mejores vacas y no compartían con nosotros, sólo con las milicias. Eso no es partido decíamos [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P329, Sacsamarca (Huancasancos), abril de 2002. Varón, 67 años, docente jubilado, era profesor en Sacsamarca en la época del conflicto armado interno)

Aunque el PCP-SL planteara una sociedad igualitaria, en los hechos persistían las diferencias; pues, sin duda alguna, la «fuerza local» estaba por encima del resto del pueblo. A su vez, los «comités populares» de Sacsamarca y Lucanamarca estaban subordinados al centro de la «base de apoyo» que se hallaba en Sancos.

El PCP-SL restringió, las fiestas y rituales religiosos, así como también la celebración de funerales. Sin embargo, se ha recogido información en la cual los campesinos señalan que pedían permiso a los mandos locales para la realización de sus fiestas como el aniversario del pueblo y carnavales. En Lucanamarca, se pidió a los dirigentes del PCP-SL celebrar el aniversario del pueblo y accedieron. Las fiestas se convirtieron en celebraciones políticas donde se daban vivas al «presidente Gonzalo». De acuerdo con los informantes, el PCP-SL prohibió que los comuneros consumieran alcohol, sin embargo, los militantes y los líderes podían hacerlo. Las mejores comidas estaban reservadas para ellos. En la memoria colectiva quedó fijada la idea de que sólo los miembros del PCP-SL tenían derecho a celebrar: «El cargante tenía que pedir permiso al partido [al PCP-SL] para hacer la fiesta y sólo para ellos la hacían, la demás gente ya no participaba» (CVR. BDI-Entrevista P372, Lucanamarca (Huancasancos), marzo de 2002. Varón, presidente de la FADA, era docente en la época del conflicto armado interno).

Por temor al castigo nadie se pronunciaba, a menos que estuviese ebrio como sucedió con comunero de Lucanamarca. Luis Enrique, quien se emborrachó para el aniversario de Lucanamarca el 29 de enero de 1983, empezó a reclamar a viva voz a los mandos por qué los tenían así y les prohibían celebrar. También les reclamó por la coerción que ejercían sobre los comuneros. Fue asesinado por el «comité popular» el 30 de enero de 1983.

El PCP-SL empezó a cometer abusos contra aquellos que pretendía defender. La expropiación de la granja comunal fue un acto que causó estupor entre la población. Si el PCP-SL actuaba en beneficio del pueblo, ¿por qué, en el arrasamiento de la granja comunal de Caracha, repartió animales a otras comunidades si eso era propiedad de la comunidad de Sancos?: «Repartían a otros pueblos, ¿por qué si era nuestro?» (CVR. BDI-Entrevista P372, Lucanamarca (Huancasancos), marzo de 2002. Varón, presidente de la FADA, era docente en la época del conflicto armado interno).

### 2.3.3. Instalación de la muerte en el centro de la vida cotidiana

La población en general aceptaba el castigo a los abusivos, a los explotadores y a los abigeos, pero no concebía su asesinato:

De repente, la preparación hubiera sido, te digo, más participativa. Demostrando la verdad como dicen en el campo. Haciendo que la justicia fuera igual para todos, que todos trabajen, que todos tengan comodidades. Para mí, habría sido eso, de repente hubiera tenido acogida. Pero, en cambio, acá parece que mayormente vino la matanza de los más humildes. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P334, Sancos (Huancasancos), abril de 2002. Abogado, 60 años, ex profesor del colegio Los Andes, presunto ex integrante del PCP-SL)

En vez de que maten, ¿por qué ni siquiera le habrán sacado la oreja? Por decir, yo soy una mujer mañosa me cortan la oreja [...] no matarlo, matando, ¿qué saca? Nada [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P368, Sancos (Huancasancos), abril de 2002. Varón, aproximadamente 40 años, comerciante, ex estudiante del colegio Los Andes)

Los propios miembros del PCP-SL empezaron a cuestionar los criterios con los cuales eran seleccionados los próximos a ser ejecutados, ya que, en muchos casos, se trataba de sus familiares. Cuando algún militante tenía la osadía de oponerse y cuestionaba la situación, era severamente castigado. Tal como se ha visto líneas más arriba en el caso del profesor Teodoro Fernández, el castigo implicaba la muerte.

El hecho de no poder expresar libremente sus opiniones y sentirse obligados a cumplir normas y patrones de conducta que rompián con sus rutinas diarias, provocó una psicosis que hizo que muchos, sin estar necesariamente convencidos de la doctrina del PCP-SL, actuaran por miedo. No obstante, el temor tiene un límite; por ello, escapaban a las punas y a la ciudad buscando proteger sus vidas: «A quién no le va a dar, pues, miedo; esos políticos inhumanos no respetaban nada, demonios eran, Satanás, parece que espiritualmente el demonio les dominaba [...]» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P, Lucanamarca (Huancasancos), marzo de 2002. Varón, sanitario de 58 años, testigo de la masacre de Lucanamarca).

El PCP-SL termina así convirtiéndose en una autoridad injusta y violenta. Los componentes de violencia, muerte y destrucción son elementos que los campesinos no esperaban encontrar al aceptar al PCP-SL.

#### 2.3.4. Pugnas al interior del PCP-SL

EL PCP-SL tomó el poder en las comunidades por medio de los jóvenes mientras muchas de las autoridades legítimas aceptaron al PCP-SL por miedo. En Sacsamarca, el grupo de «poder local», liderado por los profesores, no estuvo conforme y cuestionó la práctica del PCP-SL. De esa manera, se agudizaron los conflictos por el poder y el control del pueblo. El PCP-SL pretendió canalizar estos conflictos pero la violencia que generó terminó siendo más dura que estas pugnas internas por terrenos, venganzas, etc.

Con estas acciones, el PCP-SL abrió una «caja de Pandora» que después no pudo controlar, pues los intereses individuales se mezclaron con los del partido. Ésta fue una de las consecuencias imprevistas no deseadas por la directiva del PCP-SL. La dinámica incontrolable impuesta por la «guerra popular» exacerbó las contradicciones anteriormente existentes. La supremacía de Sancos sobre los demás distritos se agravó. Sobre los actos del conflicto armado, se montaron antiguos conflictos interpersonales, familiares y locales:

Existe mucho resentimiento contra Sancos, siempre han sido centralistas, ellos querían que la carretera fuese por Llauta y no por Putaqasa, así nos obligaban a trabajar en la carretera. Al día siguiente de la rebelión, los sanquinos llegan y nos toman presos, me duele en el alma cómo [los sanquinos] me llaman hermano [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P357, Sacsamarca (Huancasancos), marzo de 2002. Varón, 45 años, es presidente del CAD del barrio de Túpac Amaru, ganadero)

### 2.4. LAS RESPUESTAS LOCALES

La rebelión de Sacsamarca constituyó el punto de inicio de las sucesivas rebeliones contra el PCP-SL, que comenzaron en Huancasancos y terminaron en Lucanamarca. La matanza de Lucanamarca, el 3 de abril del 1983, representó la acción más emblemática. En los propios términos de Abimael Guzmán, tenía que ser «contundente y ejemplar».

#### 2.4.1. La respuesta de Sacsamarca

Rubén me dijo que nos rebeláramos. ¿Acaso nosotros somos sus perros para que nos maten? ¿Acaso el gobierno dice al ratero, al ladrón, hay que matar? [...] Ellos nos van a matar. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P358, abril de 2002, Sacsamarca (Huancasancos). Varón, 40 años, rondero, obrero, participó en la rebelión de Sacsamarca)

Es difícil precisar el hecho que detonó la situación. En las comunidades estudiadas, el PCP-SL siempre se sintió seguro de su poder y de la sumisión del pueblo, pues había impuesto una lógica de sometimiento sobre la base del terror y el miedo. Así, más que encontrar el punto de quiebre, lo que se da es un conjunto de factores que sumados terminan por romper el poder del PCP-SL.

En una conversación informal con comuneros del anexo de Colcabamba, en el distrito de Sacsamarca, se afirma que, en la fecha en que se produce la rebelión (15 o 17 de febrero del 1983), los periódicos de la capital habían publicado mapas en las que se señalaban las zonas de mayor presencia y dominio del PCP-SL. En estos mapas, aparecían Huancasancos, Lucanamarca y Sacsamarca como «zonas rojas», por lo que, según la explicación de los propios comuneros, esto habría sido el motivo por el cual el Ejército no intervenía en la zona, pues temía el poder y la respuesta de la denominada «zona roja». En efecto, en la edición de la revista *Oiga* del 30 de agosto de 1982 figura un mapa señalando los focos subversivos en Ayacucho (página 12): Ccute, Sacsa-

marca, Canaria, Cayara, Huancapi en Huancasancos; Accomarca, Vilcashuamán, Vischongo, Concepción, Ocros en Vilcashuamán; Chiara y Acocro en Huamanga. Al norte de Ayacucho estarían las comunidades de Huanta, Luricocha, Huayllay, San José de Secce, Lirio y Sachabamba.

Los sacsamarquinos residentes en Lima, enterados de la situación, acudían insistentemente a las distintas instancias del Estado y exigían la autorización respectiva para que el Ejército o la Policía Nacional intervengan en la zona y pongan fin al desorden que el PCP-SL había ocasionado. Al mismo tiempo, enviaban misivas a la comunidad mostrándoles su preocupación por la publicación de estos mapas, e instaban a la población a asumir una decisión para resolver el problema y evitar una intervención del Ejército que implique un alto costo social. Es decir, exigían orden y, al mismo tiempo, temían una intervención dura del Ejército.

Por otra parte, en la versión de *Narciso* (40 años, de Sacsamarca), se habría filtrado una «lista negra» en la que aparecían los nombres de algunas personas próximas a ser ejecutadas por el PCP-SL. En ella figuraban los nombres de quienes lideraron la rebelión. Según *Narciso*, era cuestión de «matarlos antes que nos maten» y fue así como habrían decidido enfrentarse al PCP-SL.

De acuerdo con Hernán (ex integrante del PCP-SL, 40 años, Sacsamarca), al interior del PCP-SL había «compañeros» que filtraban información, no sólo a la población sino también a la base del Ejército en Huancapi. Es posible, por lo tanto, que la mencionada «lista negra» se haya filtrado y que ello sea el punto que atizó la rebelión.

Sea como fuere, un número no determinado de comuneros de la comunidad de Sacsamarca preparó un plan de resistencia clandestina en las noches en los cerros o puntos distantes de la población para no levantar sospechas. Un requisito clave fue mantener la rebelión en absoluta reserva. Era cuestión de vida o muerte. No estaba permitido comentar el hecho a nadie, incluyendo a sus esposas.

Nadie tenía que saber, porque era cuestión de vida o muerte, era prohibido avisar a nuestras esposas, porque decían ellas son chismosas [...] Incluso cuando empezó la rebelión yo estaba con mi esposa en mi casa y mi esposa, al darse cuenta, me decía vámonos, hay que escaparnos, pero yo le decía, tranquila, no va a pasar nada, porque yo sí sabía lo que estaba pasando, pero mi esposa no sabía, por eso se desesperaba [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P323, abril de 2002, Sacsamarca (Huancasancos). Varón, 65 años, teniente alcalde de Sacsamarca, era autoridad en la época del conflicto armado interno)

El plan consistía, en primer lugar, en asaltar los domicilios de dos líderes locales del PCP-SL —*Elio* y *Wilfredo*— y asesinarlos en el acto. En segundo lugar, apresar a sus seguidores y, por último, tomar el local donde almacenaban sus armamentos.

Así, decidieron aprovechar la fiesta de carnavales, entre el 15 y el 17 de febrero de 1983, para llevar adelante la revuelta. Se suponía que, en ese día, los miembros del PCP-SL festejarían los carnavales, bailarían y se emborracharían; era, pues, el mejor momento para actuar:

Claro, habían prohibido la fiesta, pero teníamos que aprovechar los carnavales que se acercaba; por eso, hicimos una trampa; teníamos que exigir para festejar y de tanta insistencia nos aceptaron [...] Yo soy músico, por eso, mi misión era tocar en el cortamonte con otras tres personas más; no tenía que tomar porque tenía que observar todos los movimientos de estos terrucos [los miembros del PCP-SL] y asegurar para que se emborracharan. Por eso, cuando me servían, yo me disimulaba y, en un descuido, lo echaba, por eso, yo no me emborraché [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P323, abril de 2002, Sacsamarca (Huancasancos). Varón, 65 años, teniente alcalde de Sacsamarca, era autoridad en la época del conflicto armado interno)

La estrategia surtió efecto. A las diez de la noche, los líderes del PCP-SL decretaron el fin de la fiesta. Quienes tenían la orden de tomar el domicilio de *Wilfredo*, ingresaron por el techo y le incrustaron una barreta a la altura del estómago. Seguidamente lo apedrearon hasta matarlo. Igual suerte corrió *Elio*. Mientras tanto, los otros «camaradas» fueron tomados presos y encerrados en un calabozo junto con sus seguidores. Una vez capturados, estos líderes locales del PCP-SL no fueron entregados a las autoridades correspondientes. Ante la pregunta de por qué se procedió de esa forma, uno de los entrevistados responde lo siguiente: «No podíamos entregarlo al Ejército, porque no había autoridades y porque temíamos que Sendero [el PCP-SL] nos atacase en el camino [...] la decisión era matarlo [...]» (*Marcos*, 60 años, Sacsamarca).

Sin embargo, algunos miembros del PCP-SL habían logrado escapar. Entre ellos, estaba *Carmen*, quien llegó a Huancasancos, donde dio cuenta de la rebelión a los mandos locales máximos del PCP-SL. Al día si-

guiente, se organizó la respuesta. Toda la población se reunió en la plaza. Los mandos evaluaron la situación y decidieron ir a vengarse:

Cuando volví, igualito como en esa fecha, silencio estaba el pueblo; entonces, llego y no había gente. ¿Qué, dónde están? No había gente. Entonces, sólo en la directiva comunal estaba hirviendo una olla con comida y había dos viejitos que estaban tomando. ¿Qué pasa tío? Y me dice, se han ido a Sacsamarca a capturar a esos reaccionarios, nosotros nada más, viejitos que no podemos, nos hemos quedado; entonces, me dio pánico. (CVR. BDI- Entrevisita en profundidad P350, Sancos (Huancasancos ), marzo de 2002. Varón, 65 años, sanitario de la posta)

Un destacamento del PCP-SL llegó a Sacsamarca y tomó presos a un número aproximado de cuarenta personas, entre ellos a 14 de los involucrados en la rebelión. Fueron conducidos a Huancasancos para ser ejecutados. Antes habían ordenado enterrar los cadáveres de sus mandos muertos, «con homenajes, dando vivas a Sendero [al PCP-SL]».

Una vez en Huancasancos, los prisioneros son encerrados en un calabozo, a la espera de *Julio*, (a) *Víctor*, líder máximo del PCP-SL en Huancasancos, quien en un «juicio popular» ordenó la ejecución.

El PCP-SL no había previsto que, simultáneamente a la rebelión de Sacsamarca, una comisión de esa comunidad había sido enviada a Huacacapi para dar cuenta al Ejército y pedir su intervención: «La familia X fue comisionado para ir a Huancapi y dar cuenta al Ejército, además de pedir su apoyo para que nos apoyaran [...]» (Marcos, 60 años, Sacsamarca).

Al tercer día, llegaron miembros del Ejército, que los pobladores identificaron erróneamente como sinchis, a bordo de dos helicópteros. Al percatarse de ello, la población que se había concentrado en la plaza para asistir al «juicio popular» decidió escapar como pudo. Se produjo, entonces, una trifulca. Los militares dispararon indiscriminadamente y mataron a 14 personas, entre las cuales había nueve miembros del PCP-SL: «En helicóptero vinieron los militares y mataron sin ninguna explicación a cualquier persona, entre ellas a dos señoritas, que en ese año habían venido de Lima de vacaciones y que no tenían nada que ver en el asunto» (Vitaliano, 45 años, Sancos).

El Ejército logró controlar la situación, los *presos* de Sacsamarca fueron liberados y nombraron a las autoridades locales entre las personas más distinguidas (alcalde, gobernador, juez de paz, etc.). Los informantes afirman que el Ejército instó a la población a tomar posición contra el PCP-SL y les ordenó matar al principal líder del PCP-SL —*JLL* o camarada *Víctor*—, o de lo contrario deberían atenerse a las represalias: «Entonces, ahí se establecieron [el Ejército], después de dos, tres días, se establecieron las autoridades; entonces, habían dejado órdenes: ustedes me hacen esperar para tal fecha al jefe, a los jefes, vivo o muerto; si no, ustedes van a ser castigados [...] entonces, no sabíamos qué hacer» (Javier, 70 años, Sancos).

#### 2.4.2. La respuesta de Sancos

En Sancos se había concentrado la principal cúpula dirigencial del PCP-SL en la zona, liderada por un profesor de matemáticas del colegio Los Andes, *Julio* o *Víctor*. Tras el levantamiento de Sacsamarca y ante la presencia del Ejército, *Julio* abandonó la zona. Refugiado en las punas, reorganizó sus cuadros a fin de recobrar el poder que había perdido: «Hay un túnel de agua potable arriba, allí lo habían llenado, después dos camiones de la comunidad había, eso dice estaban llenos, cargados de comestibles [...] entonces, había dicho el domingo le van a repartir a cada uno su ración. Estaban por acá arriba nada más, el jefe con su gente tomando acuerdos para contraatacar» (Javier, 70 años, Sancos).

Apenas se retiró el Ejército, en febrero de 1983 aproximadamente, *Julio* y sus seguidores hicieron su aparición como a la una o dos de la tarde. Todos estaban con los rostros cubiertos; sólo cuatro o cinco estaban armados y los demás portaban bombas caseras. En ese instante, la gente decidió enfrentarlos. Las mujeres tomaron la iniciativa y una de ellas logró impactar con una piedra en uno de los ojos de *Julio*, quien cayó al suelo.

Entonces, ahí lo agarraron, a uno de ellos lo mataron, después a una chica también y ahí es justo donde aprovechan dispararle a *JLL*, cuando el otro estaba entrando a dispararle, ahí lo madrugaron, entonces, sintió al toque, y el concejo, que es ahora coliseo municipal, había una casucha grande, ahí se habían corrido casi todos los de Sendero [del PCP-SL], entonces, la comunidad ya los había seguido. *JLL* ya estaba herido; entonces, lo han seguido y ahí lo han destrozado, inclusive del arma también ya se habían apoderado, eran carabinetas nada más, pero se

han apoderado sin tiro [sin municiones], nada, así lo han hecho. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P350, marzo de 2002, Sancos (Huancasancos). Varón, 65 años, sanitario de la posta)

Los cuerpos de los caídos, incluido el de *Julio*, fueron llevados y abandonados en un paraje de la quebrada que va hacia el río Caracha. Al día siguiente, llegó el Ejército y obligó a la población a que los entierren.

Así la población decidió enfrentar y poner fin al poder de la cúpula más importante del PCP-SL en la zona, encabezada por *Julio*. A partir de ese momento, se restablecieron las rutinas diarias en la zona, se eligieron nuevas autoridades y comenzó una nueva etapa en la historia de Huancasancos, en la cual resaltó la formalización de la alianza entre el Ejército y la comunidad.

#### 2.4.3. La respuesta de Lucanamarca

Lucanamarca, al igual que las otras dos comunidades estudiadas, fue uno de los bastiones más importantes del PCP-SL. *Óscar*, natural de la zona, había asumido el liderazgo local. *Edwin* era su lugarteniente. Asimismo, se sabe que estos líderes locales gozaban del apoyo y la aceptación de un gran sector de la población, principalmente joven; sin embargo, no es posible precisar si dicho respaldo era consciente y voluntario. *Óscar* compartía el poder con *Nilo* y *Gregorio*, sus hermanos. Los informantes mencionan que el padre de *Óscar*, *Atilio*, y su madrastra *Zenaida*, habían decidido formar también parte de las filas del PCP-SL.

En febrero de 1983, el PCP-SL dominaba el escenario local, mientras que, en Sacsamarca, la población había decidido enfrentarlo. El 24 de febrero de aquel año, el Ejército ingresó en Lucanamarca de manera sorpresiva, en momentos en que algunos de los líderes locales del PCP-SL estaban reunidos en el Concejo. Al percatarse de ello, intentaron huir hacia una quebrada. Los militares les dieron el alcance y se produjo un enfrentamiento en el cual murieron nueve personas, entre éstas *Nelson*, uno de los jefes importantes del PCP-SL en la zona. Si bien el Ejército había decidido ingresar a Lucanamarca con el apoyo de algún sector de la población, lo que no queda claro es el momento en que se produce esta alianza entre la población y el Ejército.

Una vez controlada la situación, el Ejército reunió a la población en la plaza, en donde, al igual que en Huancasancos, nombró a las autoridades entre las personas más notables con la intención de restablecer el orden y exhortó a la población a rebelarse contra el PCP-SL, tomar preso a *Oscar*, importante líder local del PCP-SL de la zona y entregarlo al Ejército o, en todo caso, matarlo. De lo contrario, el Ejército arrasaría con la población.

La población, desconcertada, decidió acatar las órdenes del Ejército, pero además acordó enfrentar decididamente al PCP-SL. Una de las primeras acciones, en ese sentido, fue retomar el sistema de vigías que el mismo PCP-SL había impuesto, pero ahora para defenderse de éste. Una vez ubicado el paradero de *Óscar*, la población organizó un pelotón para ir en su búsqueda, apresarlo y conducirlo hasta la plaza. El pelotón llegó al lugar donde se escondía *Óscar* a la una de la madrugada y lo capturó. Los pobladores afirman que, en el trayecto, *Óscar* pedía a gritos clemencia, perdón y suplicaba que no lo mataran, que lo entregaran vivo al Ejército, que estaba dispuesto a aceptar sus errores y corregirlos, a pagar cualquier precio como multa e incluso a donar sus bienes a la comunidad con tal de que lo dejaran vivo:

*Óscar*, según dicen, se dio cuenta de que lo estaban buscando; entonces, en la estancia le han buscado y él estaba viviendo ahí. Entonces, han ido las autoridades citadas por el pueblo de acá, han ido como ocho personas y [...] entonces, por el llano lo han traído, así no más con engaño dice y, llegando acá, se han vengado, lo han tapado, le han vendado los ojos. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P340, marzo de 2002, Lucanamarca (Huancasancos). Varón de 48 años, pastor evangélico)

Al amanecer del 22 de marzo de 1983, quienes lideraron la rebelión concentraron a la población en la plaza, supuestamente para decidir en conjunto la suerte de este líder del PCP-SL. En este punto, la CVR considera importante mencionar cuando tocó el tema con los entrevistados, aparecieron dos versiones distintas sobre el móvil del apresamiento y ejecución de *Óscar*. La versión más generalizada señala que habría sido la propia población furiosa la que había tomado la iniciativa y la decisión no sólo de capturarlo sino también asesinarlo: «Prácticamente, él era un enemigo total [...] porque, a causa de ellos, tantas cosas han estado sucediendo en el pueblo, las matanzas, las venganzas, o sea, es el autor intelectual de ellos, lo condenan el pueblo, por eso es todo eso capricho de ajusticiamiento» (Varón, 50 años, Lucanamarca). Otra interpretación, principalmente la de los miembros del PCP-SL entrevistados, sostiene que no fue así, que, más bien, habría sido la decisión de los propios colaboradores de *Óscar*:

Porque sabían que, si lo entregaban vivo al Ejército, éste los delataría y el Ejército también tomaría represalias contra ellos; por eso es que mataron a Óscar, porque sólo así quedaban bien ante el Ejército. La presencia de la gente era sólo pretexto para hacer parecer ante el Ejército que la acción contra este líder era una decisión que el conjunto de la población había tomado [...]. (Varón, 55 años, Lucanamarca)

Así, Óscar es condenado a muerte: mariatado y con los ojos vendados fue puesto en el frontis de la iglesia, delante de la gente que había sido concentrada. De acuerdo con los protagonistas de la rebelión, las mujeres tomaron la iniciativa lanzándole piedras. Óscar pedía clemencia y perdón. La población enardecida no lo escuchó. Seguidamente, arremetieron contra él con palos y tiraron de sus cabellos hasta dejarlo inconsciente, «semimuerto». Luego pusieron su cuerpo sobre una ruma de ichu, le echaron kerosene y le prendieron fuego.

Los familiares de Óscar también estaban presentes en el momento de su ajusticiamiento, sin embargo, no se atrevieron a impedirlo por temor a correr la misma suerte.

De acuerdo con un testimonio, se difundió la noticia de la conveniencia de presentarse ante los militares para deslindar responsabilidades; pero, el 25 de marzo de 1983, los hermanos Tinco Paucarhuanca, que decidieron hacerlo, fueron acusados de subversivos, apresados y pateados salvajemente, tras lo cual fueron llevados al puente Marita a dos kilómetros de Sancos y ejecutados a balazos. Éste no fue el único caso de ejecución extrajudicial ocurrido en la zona en estas fechas.

## 2.5. LA REPRESIÓN DEL PCP-SL

La respuesta de Sacsamarca contra el PCP-SL constituyó el punto de inicio que puso fin al poder del PCP-SL en la zona. Hasta este momento, el PCP-SL había logrado hacer de Huancasancos, Sacsamarca y Lucanamarca «zonas liberadas», en las que había logrado expulsar el poder tradicional e imponer una lógica de sometimiento sobre la base del terror y el miedo, en la que, como ya se dijo, el partido se constituía en el eje central de la vida comunal.

Este revés contundente sufrido por el PCP-SL terminó con el asesinato de Óscar, líder subversivo de Lucanamarca. A partir de este momento, el PCP-SL se replegó. La población empezó a entablar una relación más fluida con las fuerzas del orden, principalmente con el Ejército, las que visitaron la zona con más frecuencia. Tal como se verá más adelante, el antiguo sistema de vigías impuesto por el PCP-SL fue retomado por el Ejército e impuesto a la población para defenderse de aquel. Los antiguos líderes locales del PCP-SL de Lucanamarca lucharon contra éste. Sin embargo, continuó latente el temor ante una posible respuesta del PCP-SL.

El 3 de abril de 1983 ha quedado grabado en la memoria colectiva como una de las fechas más importantes de la historia reciente del lejano distrito de Lucanamarca. Aquel día, el PCP-SL arremetió de la manera más despiadada contra esta población indefensa y asesinó a 67 campesinos entre mujeres y hombres, niños y ancianos. La magnitud del evento lo convierte en uno de los hechos más traumáticos que opaca los múltiples y pequeños episodios ocurridos a lo largo del proceso del conflicto armado interno.

Posteriormente, Lucanamarca apareció en la justificación del propio Abimael Guzmán sobre la necesidad de responder con contundencia a quienes habían decidido enfrentar el poder del PCP-SL:

La lucha ha sido intensa, dura, han sido momentos complejos y difíciles. Frente al uso de mesnadas y la acción militar reaccionaria, respondimos contundentemente con una acción: Lucanamarca. Ni ellos ni nosotros la olvidamos, claro, porque ahí vieron una respuesta que no se imaginaron, ahí fueron aniquilados más de ochenta, eso es lo real; y lo decimos, ahí hubo exceso, como se analizara en el año 1983, pero toda cosa en la vida tiene dos aspectos: nuestro problema era un golpe contundente para sofrenarlos, para hacerles comprender que la cosa no era tan fácil; en algunas ocasiones, como en ésa, fue la propia Dirección Central la que planificó la acción y dispuso las cosas, así ha sido. Ahí lo principal es que les dimos un golpe contundente y los sofrenamos y entendieron que estaban con otro tipo de combatientes del pueblo, que no éramos los que ellos antes habían combatido, eso es lo que entendieron; el exceso es el aspecto negativo. Entendiendo la guerra y basándonos en lo que dice Lenin, teniendo en cuenta a Clausewitz, en la guerra, la masa en el combate puede rebasar y expresar todo su odio, el profundo sentimiento de odio de clase, de repudio, de condena que tiene, ésa fue la raíz; esto ha sido explicado por Lenin, bien claramente explicado. Pueden cometerse excesos, el problema es llegar hasta un punto y no pasarlo, porque, si lo sobrepasas, te desvías; es como un ángulo, hasta cierto grado puede abrirse, más allá no. Si a las masas les vamos a dar un conjunto de restricciones, exigencias y prohibiciones, en el fondo, no queremos que las aguas se desborden; y lo que necesitábamos era que

las aguas se desbordaran, que el huayco entrara, seguros de que, cuando entra, arrasa pero luego vuelve a su cauce.  
 («Entrevista con el presidente Gonzalo». *El Diario*, julio de 1988)

En la versión de los comuneros, la muerte de Óscar habría sido la causa principal para que el PCP-SL arremetiera contra ellos. Sin embargo, se cree que a ello se suman las ejecuciones de los otros líderes subversivos tanto de Sacsamarca como de Huancasancos. De igual forma existe otra posibilidad y es que, en la primera incursión del Ejército en Lucanamarca, en febrero de 1983, se produjo un enfrentamiento en el que murió el camarada Nelson, que, en opinión de los comuneros, era el mando más importante del Comité Zonal Fundamental Cangallo-Víctor Farjardo.

Los pobladores explican que luego de la ejecución de Óscar, sus padres y hermanos se habrían retirado hacia la zona de Vilcanchos (distrito de la provincia de Víctor Fajardo) para, juntamente con la base subversiva de estos lugares, organizar la respuesta. Mientras una versión refiere que fueron los padres de Óscar quienes fueron a Vilcanchos a dar cuenta de lo que sucedió a la base subversiva y planificar la respuesta, otra versión refiere que habrían sido sus hermanos los que planificaron la acción con la base de Vilcanchos.

El 3 de abril de 1983, el PCP-SL atacó Lucanamarca y se produjo una de las peores masacres de población civil en la historia del conflicto armado interno. Un número aproximado de ochenta miembros del PCP-SL entre hombres y mujeres, en opinión de algunos entrevistados, ingresó a Lucanamarca al mando de Horacio, líder principal del PCP-SL en la zona de Paras, Espite y Totos, en donde, se habría planificado la acción. Se sabe que el operativo se inició en la madrugada de aquel día y comenzó por las estancias ubicadas en la puna, donde asesinaron a cuanta persona encontraron en el camino. A las diez de la mañana, quienes habían logrado escapar de la masacre comunicaron el hecho a los que se encontraban en la faena comunal de refacción de la carretera que va hacia Huancasancos. Entonces, la población organizó una comisión de diez personas para pedir auxilio al Ejército acantonado en Huancasancos. Mientras unos regresaron al pueblo, otros se fueron a sus estancias a resguardar a sus animales, ya que pensaban que los subversivos arrasarían con ellos. Mientras tanto, la columna subversiva llegó a la carretera y asesinó a quienes encontró en su ruta. La desesperación cundió en la población. Aunque intentaron escapar, la geografía de la zona no lo permitió, ya que el pueblo se encuentra rodeado por barrancos y sólo existen dos vías de entrada y salida, las cuales habían sido tomadas por los atacantes.

A viva fuerza, varones, mujeres, niños y ancianos fueron conducidos a la plaza. A los que ponían resistencia, los mataban en el acto. Al parecer, entre la propia población había miembros del PCP-SL infiltrados, que desde días antes del evento habían permanecido en el pueblo para planificar la acción desde dentro y estar al tanto de los movimientos de la gente. Esta versión fue corroborada por los propios comuneros, porque, en el momento mismo en que se ejecutaba la acción, algunos comuneros que habían logrado escapar a las zonas altas fueron llamados por estos infiltrados diciéndoles que no se escapen, que no les harían nada, que sólo se realizaría una asamblea. Creyendo esto, los comuneros volvieron al pueblo y fueron inmediatamente capturados y sumados al grupo que posteriormente sería ejecutado.

La población concentrada en la plaza fue obligada a echarse boca abajo en el piso. Seguidamente, se ordenó la ejecución. Empezaron por el lado de los varones, a quienes les taparon el rostro con sus ponchos para que no vieran la forma como serían ejecutados. Los hombres fueron asesinados con hachas, machetes, palos y picos. Los heridos recibieron un tiro de gracia con el fin de no dejar sobrevivientes. A un costado, las mujeres presencianban estas escenas de muerte. Los entrevistados comentan que, en el instante en que las mujeres habían sido rociadas de kerosene para ser quemadas, un niño gritó desde la torre de la iglesia, «compañeros, los guardias están entrando, escápense». Al oír esto, los integrantes del PCP-SL abandonaron el pueblo. En opinión de muchos informantes, este atinado grito de alarma salvó a la población de ser completamente masacrada. Dos personas sobrevivieron a la matanza, el entonces alcalde Fermín y el comunero Alberto. Este último nos narra pasajes de la cruel incursión:

Ya estaban viendo tres personas y me llaman y no le hice caso y me fui a mi casa, pero ellos me siguieron y me agarraron y me decían dónde está la plata del negocio, no tengo le dije [...] en eso, cuando entro, nos comenzó a pegar, tanto a mí como a mi esposa; en eso, mi esposa le dio en un mantel el dinero, pero yo escapé; en eso, me alcanzaron cerca de la puerta y me amarraron y me llevaron a la plaza y me pusieron boca abajo [...] Mi cabeza me envolvieron con poncho, yo gritaba que me suelte y decían vas a morir [...] en eso, el arma como el sonido de hacer cancha empezó a sonar y, por mi cabeza, como piedras llegaron; en eso, quedé desmayado [...] y dicen que de mucho tiempo comencé a moverme, entonces de nuevo me lanzaron con hacha y cuchillo. (CVR. BDI- Entrevista en profundidad P371, Lucanamarca (Huancasancos). Varón, 50 años, ganadero)

Nadie puede entender aún por qué fueron ejecutados de esa manera estos 69 campesinos. Hachas, cuchillos, piedras, palos y picos fueron los instrumentos del crimen. Será tal vez que la acción tenía que tener un componente ejemplar o es que, como dicen algunos entrevistados, se tenía que ahorrar municiones para enfrentarse contra el Ejército:

Todo con hacha, nada más, con sus propios picos de trabajo. Entonces, ya estaban los guardias. Fuimos y no había chofer, yo mismo tuve que manejar; como un poquito sabía, fuimos. Llegamos, pobres estaban ahí, con sus canchitas todo, hasta los sesos desparramados, qué pena, eso estaba clarito. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P350, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Varón, 65 años, sanitario de la posta)

Al día siguiente, algunos de los sobrevivientes irrumpieron en el domicilio de los padres de Óscar y los asesinaron en el acto en señal de venganza. La población siempre pensó que ellos fueron los que los acusaron ante la base subversiva de la zona de Vilcanchos, Paras o Totos de haber asesinado a su hijo, motivo de la cruel represalia.

Algunos entrevistados refieren que la incursión se hubiera evitado si, inmediatamente después de tomar conocimiento de los hechos, el Ejército hubiera intervenido. El Ejército se hizo presente al tercer día de ocurrida la masacre a bordo de dos helicópteros, al mando del entonces general EP Clemente Noel Moral, quien ordenó el traslado de los heridos a la ciudad de Huamanga, mientras que algunos muertos fueron enterrados en el cementerio de la localidad. Asimismo, el general EP Clemente Noel Moral ordenó el establecimiento del puesto policial que, desde entonces, asumiría la seguridad del distrito.

No sólo Lucanamarca, sin embargo, fue sancionada por sublevarse contra la revolución. El PCP-SL organizó otra respuesta en Sacsamarca. En la madrugada del 21 de mayo de 1983, un número no precisado de miembros del PCP-SL entre varones y mujeres, venidos de la parte baja (Hualla, Tiquihua, Canaria, etc.) y dirigidos por *Omar*, prepararon el ataque. Sin embargo, cuando éstos se encontraban en el anexo de Pallcca, uno de los comuneros logró escapar y llegó a Sacsamarca, donde encontró a un mayor de la Policía Nacional que había ido en misión de inspección. Al ser informado de la posible incursión del PCP-SL, éste organizó a la población para responder el ataque. Tres policías más un aproximado de veinte personas fueron al encuentro de la columna del PCP-SL, decididos a enfrentarla. A las diez de la mañana se produjo el enfrentamiento en las alturas de Sacsamarca. Sólo los mandos del PCP-SL tenían armamento relativamente bueno; el resto de militantes portaban armas caseras, por lo que no pudieron contener la respuesta de la fuerza mixta. Algunos miembros del PCP-SL cayeron abatidos, entre ellos *Omar* y *Andrés*. Por el otro bando, murieron once personas, entre ellos un *sinchí* apellidado Dueñas.

A ese *Omar* lo agarraron dice así vivo. Quisieron hacerle hablar, dice que no quiso hablar. Mátenme, mátenme decía y estaba con las piernas destrozadas. Lo habían eliminado, pues qué iban a hacer. El guardia también estaba herido, estaba mal herido, lo han traído, ha fallecido en el camino dice. El mayor también estaba herido, le había pasado una bala por acá, raspetón nada más por el cuello casi, qué tal si era un poquito más, lo hubiera matado, casi de milagro se ha salvado el mayor. (Varón, 70 años, Sancos)

Veinte integrantes del PCP-SL fueron tomados presos y conducidos a Sacsamarca. Era un grupo de varones y mujeres, en algunos casos menores de edad, quienes suplicaban clamorosamente su libertad aduciendo haber sido engañados u obligados por el PCP-SL. Los *sinchis* los encerraron en el calabozo y los sometieron a intensas torturas. Varios entrevistados comentan que estos presos fueron privados de ingerir alimento. Después de tres días fueron sacados del encierro para conducirlos a Jinquilpata, paraje cercano a la carretera que va a Huancasancos; allí los hicieron pararse en fila y los fusilaron. Luego, los cuerpos de los caídos fueron conducidos más abajo por la propia población de Sacsamarca y enterrados en una fosa común.

Un mes después sucede el caso de Huancasancos. El PCP-SL aprovechó la celebración de la fiesta del Corpus Christi del 24 de junio de 1983. En la víspera, un número no precisado de miembros del PCP-SL ingresó violentamente a la casa de los *carguyuq* (responsables de organizar la fiesta) y arrojaron a los presentes al suelo, los golpearon y los acuchillaron: el pretexto era que éstos estaban gozando mientras ellos estaban en guerra. Mientras tanto, otro grupo irrumpió en las demás casas y maltrató de igual forma a las personas. En muchos casos, saqueó sus bienes.

Para entonces se había instalado formalmente el puesto policial, que contaba con quince hombres aproximadamente. La directora del jardín de niños había organizado una *kermesse*, en la cual se encontraban bebiendo licor algunos de los policías, incluido el capitán jefe de la base. Los miembros del PCP-SL ingresaron deto-

nando cartuchos de dinamita y dando vivas al partido. Al oír esto, el capitán tomó su revólver y salió a enfrentarlos. De inmediato, le dispararon y cayó muerto. Por su parte, la población, presa del pánico se escondió en sus casas y algunos corrieron intentando refugiarse en los cerros. Mientras tanto, los atacantes procedieron a asesinar a algunos comuneros. En la madrugada, se retiraron dando vivas, algunos en dirección de Sacsamarca y otros en dirección a Carapo.

Al amanecer, la ciudad se mostraba desolada. La gente desesperada comenzó a buscar al único sanitario de la zona para que auxilie a los heridos que sumaban treinta personas aproximadamente, mientras que los muertos sumaban ocho:

En eso, un hombrecito apareció, me estaba buscando, pucha, de repente los terrucos [los miembros del PCP-SL], dije. No, señor, los guardias están heridos, me dijo. Entonces, fuimos, todos los guardias estaban heridos y dos estaban muertos, triste era la vida. Después de allí, comenzamos a buscar casa por casa, comenzaron comisiones, en tal sitio está muerto diciendo. Así, a la plaza lo juntaron para atender a toditos, fuimos a la posta y sacamos dextrosa, había un estudiante de veterinaria, él ya tenía que ayudarme. Los heridos todos a cuchillazos, tenía que hacer suturas, había un señor que tenía las tripas afuera, entonces tuve que lavarlo, tender unas frazadillas, hay que coserlos, pues, lavando los intestinos, meter adentro y coserlos. Todas esas noches pasamos bravo, yo tenía que amanecerme en la plaza con los heridos. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P350, Sancos (Huancasancos), marzo de 2002. Varón, 65 años, sanitario de la posta)

Los pobladores dejaron, entonces, de entender cuál era el sentido del PCP-SL: «Si dicen que [el PCP-SL] trabajan para los pobres, ¿por qué matan a los pobres? ¿Qué tipos de hombres serán que matan a sus semejantes [*runa masinta*]?».

## 2.6. LA RESPUESTA DE LAS FUERZAS DEL ORDEN

Al inicio [las fuerzas del orden], uno, dos, tres, cuatro meses, por ahí muy bien. Se compadecían de nosotros. Amigos todos éstos y se inició a formar grupos de comuneros, para hacer vigías, para que los subversivos no puedan entrar fácilmente. Y pasaron días, meses se descansó, como recién casado, una vida feliz, todo igualito que se cansa la mujer del marido, igualito ya se nos cansó. Ya era otro terror. Era otro terrorista, para nosotros igual que los subversivos. (Cristian, 50 años, Lucanamarca)

Los miembros de la entonces Guardia Civil (GC) no sólo se mostraron incapaces de contener el avance del PCP-SL, sino que no recibieron ningún apoyo del gobierno. Las Fuerzas Policiales se replegaron y abandonaron sus puestos. Ante esta ausencia, el PCP-SL tomó el control se organizó la vida comunal. El PCP-SL cayó en una serie de contradicciones y la población afectada auspició y exigió la intervención de las fuerzas del orden. Luego de la matanza del 3 de abril en Lucanamarca, se instaló un puesto policial, al igual que en Sancos, cuya circunscripción abarcaba también el vecino distrito de Sacsamarca. Empero, luego de la batalla de Sacsamarca del 21 de mayo de 1983, se autorizó la instalación de una base policial compuesta principalmente por miembros de la sección especial contrasubversiva los sinchis. Mientras, en Sancos, luego de la incursión subversiva del 24 de junio del mismo año, se retiró el puesto policial y, en su reemplazo, se instaló la base militar que permaneció en el lugar hasta 1994.

Carentes de una clara y adecuada estrategia contrasubversiva, las fuerzas del orden se limitaron a utilizar todo tipo de mecanismos que les permitieran controlar a la población, desde detenciones, secuestros y torturas hasta violaciones de mujeres.

*Vitaliano* (Sancos, 40 años) recuerda que una noche, cuando se encontraba en su cuarto haciendo las tareas del colegio, «llegan los sinchis, militares o policías» y le tocan la puerta: «compañero, sal un rato, necesitamos medicinas porque vamos a atacar el puesto». *Vitaliano* abrió la puerta y, sin mediar explicación alguna, lo patearon en el pecho diciendo: «Así que tú eres, ¿no?, concha tu madre» y lo llevaron a Huaqanapata. Eran «como ocho tombos [policías]» —afirma *Vitaliano*—. En un primer momento, no reconoció la voz de sus captores. Sólo cuando era conducido a Huaqanapata logró identificar la voz de uno de ellos. Eran los policías, «porque yo jugaba con ellos pelota y conocía su voz». Una vez llegado a Huaqanapata lo hicieron arrodillarse en el piso y lo golpearon con patadas, puñetazos y la culata de sus fusiles al borde de una peña, diciéndole que colaborara con ellos, que revelara el nombre de los profesores que hablaban mal de los militares.

La relación entre las fuerzas del orden y la población no dejó de ser ambivalente. La población se dividió, ya que existía un sector importante que aprobaba su presencia, mientras que otro no.

Las fuerzas del orden retomaron el sistema de vigías impuesto por el PCP-SL. Se formaron grupos para patrullar con los militares los cerros y se ubicaron lugares estratégicos para dar señales de alarma en caso necesario. Este sistema de defensa implicó asumir conductas militarizadas a la vez que un gran esfuerzo físico: «El 84 justamente había un capitán Canán. Era un terror. Nos formó vigías por las esquinas. Ya no nos dejaba ni respirar. Con un carajazo, todos estaban tranquilos. Por las puras maltrataba a la gente» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P324, Lucanamarca (Huancasancos), marzo de 2002. Varón, aproximadamente 45 años, ganadero).<sup>28</sup>

La población fue obligada a entregar leña, carne y demás enseres para la manutención del puesto. Si al inicio esta forma de apoyo era una obligación, con el paso del tiempo, la propia población la vio como una necesidad, porque, no hacerlo, significaría el retiro de la base y, consiguientemente, la vuelta a un pasado en el que el PCP-SL hacía del lugar un espacio *sin control*. El tema de la seguridad se convirtió en el asunto más importante para la población, sin embargo, estas comunidades de Huancasancos formaron comités de autodefensa civil (CAD) a diferencia de otras zonas de la región norte de Ayacucho.<sup>28</sup>

En 1994, el Ejército decidió retirarse de Sancos. En ese momento, el jefe de la base exigió a la población que se organizara en los CAD. Consideraba que, si bien la intensidad de la violencia había disminuido sustancialmente, la población tenía que estar alerta ante cualquier eventualidad. Por ello, en una asamblea comunal, la población nombró a ocho personas para encargarse de la seguridad y les asignó las ocho armas que el Ejército había entregado antes de retirarse. Sin embargo, al poco tiempo se abandonó la expectativa, debido a que el proceso de pacificación se hizo evidente, pero también debido a la falta de voluntad de la población.

Cuando el Ejército se establece en Huancasancos, muchos jóvenes que se habían afiliado al PCP-SL se retiraron a las punas para evitar ser arrestados o asesinados. Otros decidieron arrepentirse, abandonar sus filas y reincorporarse a la vida comunal. Conocedor de ello, el jefe de la base militar de Sancos, de apelativo *Yanahui-co*, realizó una campaña en la que solicitaba a todas aquellas personas que voluntariamente quisieran arrepentirse se presentasen a la base militar para recibir la autorización que les permitiera reinsertarse a la vida comunal. Como ha sido mencionado, hubo casos de jóvenes arrepentidos que desaparecieron una vez que ingresaron a la base militar de Huancasancos o aparecieron muertos:

Por eso lo pusieron [a mi hijo] a al cárcel, pues, dos días, lo maltrataron y, al final, el Ejército, la reacción se retiró, se lo habían llevado mientras que yo no había vuelto de la puna, se lo llevaron a Tranca, que queda más arriba de Sacsamarca, ahí se lo llevaron bastantes muchachos, lo mataron a tres, dos sacsamarquinos y a mi hijo, este lo habían soltado del carro, les habían dicho que escapen y, en el momento que comenzaron a escapar, a unos pocos pasos, les dispararon, ahí mataron a mi hijo Nicanor. Cuando regresé de la puna, quise recoger el cuerpo de mi hijo y las autoridades no quisieron que lo recoja ni lo entierre en el cementerio, así que enterré aquí en Marita. Ni querían asentar la partida de defunción. (CVR. BDI-Estudios en profundidad P332, Sancos (Huancasancos), marzo 2003. Varón, aproximadamente 70 años, ganadero)

## 2.7. CONCLUSIONES

La masacre de Lucanamarca es una respuesta a la rebelión campesina contra los líderes locales del PCP-SL en los tres distritos de la provincia de Huancasancos (Sacsamarca, Sancos y Lucanamarca). Más específicamente, una respuesta a la emboscada que tendió la población, en coordinación con las Fuerzas Armadas, contra algunos líderes locales y regionales del PCP-SL que estaban de visita en la comunidad.

Hacia 1980, el PCP-SL encontró en la provincia comunidades al margen de los programas del Estado, con una élite deslegitimada de ganaderos y comerciantes que controlaban el poder económico y político. Frente a los abusos de los poderes locales –corrupción, usurpación de tierras comunales, maltratos a los más pobres– el PCP-SL propuso la construcción de un «nuevo estado», donde la igualdad y el respeto habrían de primar.

Por su ubicación geográfica al suroeste, dentro del ámbito del Comité Zonal Cangallo Fajardo del PCP-SL, y su relativa prosperidad como zona de ganaderos, Huancasancos adquirió importancia estratégica para el PCP-SL y se convirtió en un espacio pedagógico donde pudo legitimar por un tiempo su discurso de igualdad y justicia.

<sup>28</sup> Véase el capítulo sobre los comités de autodefensa en el tomo III.

cia: expropiar a los «ricos» para redistribuir entre los más pobres. Al mismo tiempo, las comunidades de Huancasancos se convirtieron en la despensa de las comunidades de la zona baja del río Pampas o «frente principal».

En un primer momento, el discurso de orden del PCP-SL ganó simpatías entre sectores importantes de la población. Su nexo con ella lo constituyeron los sectores más educados.

En efecto, el PCP-SL tuvo mayor aceptación en sectores donde el interés por la educación y el desarrollo intelectual era mayor. Maestros provenientes de Ayacucho convirtieron al colegio Los Andes de Huancasancos en un espacio de adoctrinamiento y captación de jóvenes escolares.

Algunos de los maestros que enseñaron hacia finales de los setenta en Huancasancos fueron cuadros importantes del PCP-SL. A partir de la investigación realizada, se cree que varios de ellos cayeron en la emboscada de Lucanamarca y que ésta es una de las razones por las cuales la respuesta del PCP-SL fue tan brutal y por lo que Abimael Guzmán recuerda Lucanamarca.

El PCP-SL encontró en los jóvenes a sus principales aliados, entre otros factores, porque su conocimiento del mundo y de la realidad del país terminaba siendo moldeada por los maestros-guías. Queda por investigar otras razones por las cuales los jóvenes se alían al PCP-SL más allá de la seducción del poder que la doctrina del PCP-SL y el fusil les ofrecían.

El ascenso de estos jóvenes al poder quiebra las estructuras de relaciones locales y provoca la consiguiente rebelión de las personas mayores de la comunidad frente al ejercicio autoritario de la violencia y el nuevo orden establecido. En algunos casos, la rebelión fue literalmente contra sus propios hijos.

Sin embargo, el «nuevo estado» que el PCP-SL ofrecía se construía en una realidad cultural y política compleja, que haría de la violencia un vaso de agua rebalsado por pequeños conflictos locales. Así, lo que en un primer momento significó orden terminó convirtiéndose en un escenario teñido por pequeños conflictos locales y familiares que exacerbaron los conflictos previos.

La transformación del comportamiento en el contexto del conflicto armado interno muestra cómo los campesinos alteraron sus valores a tal punto que, en ciertas circunstancias, fueron capaces de llegar a matar a sus vecinos y familiares.

La desconfianza y temor sigue pautando las relaciones y vida cotidiana en estas comunidades, lo que plantea preguntas hacia el largo plazo: ¿cómo construir comunidad si no hay confianza entre ellos? ¿Qué implica reconstruir la comunidad y qué obstáculos encuentran para lograrlo? La gran desconfianza para hablar sobre la época de la violencia y el miedo a represalias hacen pensar que en éstas comunidades viven víctimas y victimarios de ambos lados. Esto ha provocado cambios importantes en la comunidad, donde los conflictos y los rencores están presentes en el discurso formal de reconciliación, que aún dista mucho de ser real.

### 3. LOS CASOS DE CHUNGUI Y DE OREJA DE PERRO

#### 3.1. DATOS GENERALES

##### 3.1.1. Chungui y Oreja de Perro: consideraciones geopolíticas

El distrito de Chungui, al extremo este de la provincia de La Mar, en Ayacucho, colinda con los departamentos de Apurímac y Cusco. En él se pueden identificar dos zonas que se diferenciaron por sus distintas dinámicas históricas: Chungui al oeste y Oreja de Perro, al este (véase el mapa). La zona de Chungui comprende las actuales comunidades de Chungui, Huarcca, Ccarín, Anama, Angea, Rumichaca, Huecchues, Espinco, Churca, Qotopuquio, Tantarpata, Santa Rosa de Marco, Tiqsipampa, Cachimira, Villavista, Villa Aurora, Chinchibamba, Chineti y Moyabamba. La subregión denominada Oreja de Perro abarca las comunidades de San José de Soccos, Sonccopa, Pallqas, Chupón, Totora, Putucunay, Tastabamba, Oronqoy, Chillihua, Occoro, Pallqa, Vacahuasi, Huallhua, Yerbabuena, Ninabamba, Mollebamba y Santa Carmen (véase el mapa). En cada una de estas zonas, el proceso de violencia se superpuso a los circuitos comerciales que se habían establecido a lo largo del tiempo.



Entre Chungui y Oreja de Perro no existen vínculos territoriales fluidos. En términos generales, el distrito de Chungui es un lugar de difícil acceso, internamente desarticulado, que carece de una infraestructura vial que vincule entre sí a todas las comunidades de la localidad. Las únicas posibles vías de acceso terrestre a Chungui son por San Miguel al oeste y por Andahuaylas al este. La carretera que viene de San Miguel —capital de la provincia de La Mar— termina en Chungui. El recorrido desde la ciudad de Huamanga a este distrito es de aproximadamente siete horas en carro. Las comunidades de Oreja de Perro tienen escasa vinculación con la capital del distrito. La vía más accesible a Oreja de Perro es desde Andahuaylas. Sin embargo, los vehículos solamente pueden llegar hasta el puente peatonal de Cutinachaca después de tres horas de viaje en carro (no llegan camionetas de servicio rural). Desde allí se continúa por un camino de herradura empinado que llega hasta Oronqoy en una caminata que tarda un promedio de ocho horas. De Oronqoy a Chungui no existen carreteras; solamente hay vías sin pavimentar que atraviesan esta ruta que tarda tres días aproxima-

damente en ser recorrida. La falta de conexión entre Chungui y Oreja de Perro la convirtió en una zona atractiva para el PCP-SL, debido a la imposibilidad de recorrer el área de manera rápida y efectiva, lo que, a su vez, abría posibilidades para que dicho grupo realizará su trabajo proselitista.

La provincia de La Mar abarca distintos pisos ecológicos —el valle del Pampas, el territorio altoandino y la selva del río Apurímac— donde habita una población que, desde tiempos remotos, se desplaza entre la sierra y la ceja de selva. La selva es importante para la población chunguina en tanto la provee de diversos productos comerciales como café, cacao, maní y, en la actualidad, la hoja de coca. Todas estas características constituyeron ventajas desde el punto de vista del PCP-SL para establecer los cimientos de su llamado «nuevo estado».

La comunidad de Chungui era, en la década de 1980, una organización con importantes recursos, tanto naturales como económicos, pues recababa considerables sumas de dinero a través de impuestos por la salida de productos como café y cacao hacia la feria de Sacharaccay, en el distrito de Anco, provincia de La Mar (véase el mapa). Además, la comunidad contó con un fondo monetario que provenía del arriendo de tierras a terceros —especialmente en la selva— hasta finales de la década de 1970.

Por su parte, Oreja de Perro está articulada con distritos de la provincia de Andahuaylas (departamento de Apurímac) como Ongoy, Ocobamba y Andarapa (véase el mapa). Las relaciones comerciales con Andahuaylas se basan, especialmente, en el comercio de ganado en pie. Por lo general, los comerciantes andahuaylinos provenientes de Ongoy y Andarapa acudían a Oreja de Perro en busca de ganado, que luego vendían en la ciudad de Andahuaylas. Al igual que los comerciantes acudían a esta región, muchos comuneros de Oreja de Perro se desplazaban hacia los distritos andahuaylinos para vender sus animales a mejor precio.

La zona de Oreja de Perro es aún hoy considerada como una zona rica en pastos por los andahuaylinos. En la actualidad, familias de Andahuaylas contratan a los comuneros de la zona para alimentar a su ganado en estas tierras; a cambio de ello, por ejemplo, les dan como pago un becerro al año.

### **3.1.2. Chungui: una zona ausente de haciendas**

Como ya ha sido mencionado, Chungui —en su estatus de comunidad— arrendaba terrenos, especialmente los de la selva, por los cuales recaudaba fondos en beneficio de la comunidad. Los arrendatarios se convertían en comuneros temporales que debían cumplir una serie de obligaciones y, a la vez, debían pagar cierta cantidad de dinero al año por el terreno que arrendaban. Procedían de distintas zonas, pero especialmente de Mara Mara y Huaccana (Andahuaylas).

En Chungui, los conflictos por linderos, sobre todo aquellos ubicados en la parte de la selva, eran conocidos. El caso más recordado es el de Salvador Arce, abogado huamanguino que se estableció como arrendatario en el anexo de Chinchibamba y llegó a apropiarse de tierras de la comunidad estableciendo relaciones de compadrazgo con las autoridades de la comunidad y fraguando títulos de propiedad. Salvador Arce tenía, además, la intención de formar una empresa de procesamiento de aguardiente de caña. La comunidad reaccionó expulsando a Salvador Arce de Chungui y expropiando los terrenos de Chinchibamba, para lo cual ingresaron a sus tierras y, junto con sus bienes, lo maniataron y lo enviaron a caballo a San Miguel. Salvador Arce denunció el hecho en la ciudad de San Miguel y la directiva en pleno fue trasladada y encarcelada en dicha ciudad.

### **3.1.3. Oreja de Perro: un punto olvidado en el mapa**

A diferencia de Chungui, Oreja de Perro había sido un territorio poblado de haciendas, especialmente productoras de aguardiente de caña. El sistema de haciendas había colapsado, en particular a raíz de dos grandes acontecimientos: la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de 1965 en la provincia de La Mar y la toma de tierras, liderada por Vanguardia Revolucionaria (VR) en 1974, como respuesta a la demora en la implementación de la Reforma Agraria en las provincias de Chincheros y Andahuaylas.

El hecho que más recuerda la población —tanto de Chungui como de Oreja de Perro— con relación a la guerrilla del 1965 es el asesinato de los hermanos Carrillo, dueños de la hacienda Chapi, una de las más grandes de la zona. Lo que también recuerdan bien los pobladores es la violenta incursión de la GC en la zona después de este suceso. Ésta exigió alimentos, reprimió a los campesinos y cometió torturas y asesinatos.

La guerrilla de 1965 ha quedado grabada en la memoria de los pobladores de Oreja de Perro como una acción exitosa y como el gran movimiento que los liberó de la opresión y del abuso gamonal a pesar de la autocrítica que los mismos actores de la guerrilla hicieron más adelante.<sup>29</sup> Esta visión cobró fuerza sobre todo en los hijos de los ex feudatarios de las haciendas y empató con la imagen que el PCP-SL proyectaba en la zona. En un primer momento, el PCP-SL fue confundido —por los comuneros y los jóvenes—, con una línea de continuidad de esta guerrilla, donde el discurso era aparentemente similar, pues buscaban la igualdad y afirmaban luchar por los campesinos.

La provincia de Andahuaylas vivió intensos momentos entre julio y septiembre de 1974 cuando cerca de 30 mil campesinos se movilizaron para invadir tierras y haciendas. A la cabeza del movimiento estaba VR y la Federación Provincial de Campesinos (FEPICA) (véase en el capítulo «La violencia en las regiones» la parte correspondiente a la zona IV de la región sur central: Andahuaylas-Chincheros). La prolongación indefinida del proceso de afectación y adjudicación de tierras, sumado al hecho de que el Estado tomaba decisiones sin consultar con la población campesina, provocaron masivas movilizaciones cuyo punto culminante fue la protesta de alrededor de 15 mil campesinos —según algunos— el 1 de mayo de 1973 en la ciudad de Andahuaylas.<sup>30</sup>

Luego de la ocupación de setenta haciendas —que incluyeron «juicios populares» y la expulsión de los hacendados—, miembros del gobierno, conjuntamente con la FEPICA y VR, firmaron el Acta de Toxama y Huancahuacho entre el 4 y 8 de agosto de 1974, donde se estableció el compromiso de parte del Estado de aceptar las demandas y la ocupación de tierras a cambio del reconocimiento de la deuda agraria.<sup>31</sup> Sin embargo, el Estado rompió rápidamente estos acuerdos y reprimió el movimiento campesino entre septiembre y octubre de 1974, luego de lo cual varios dirigentes campesinos, así como de VR, fueron apresados. A consecuencia de estos sucesos, tanto el movimiento campesino como VR se fragmentaron. La posterior autocrítica de la firma del Acta de Toxama y Huancahuacho que realizaron los dirigentes de la FEPICA y VR y de la traición de la cual, desde su punto de vista, fueron víctimas por parte del Estado llevó a los representantes más radicales de VR a plantear que «solamente una guerra revolucionaria, la destrucción del Estado burgués y la construcción de un nuevo estado resolverían los problemas del pueblo».<sup>32</sup>

De acuerdo con la información recogida, el PCP-SL impulsó un trabajo de proselitismo político desde mediados de los años setenta a través del circuito educativo centrado en los colegios de enseñanza secundaria en Ongoy, Acobamba y Andarapa en Andahuaylas (véase también, en el capítulo sobre «La violencia en las regiones», la parte dedicada a la zona IV de la región sur central).

El final del sistema de haciendas en la zona de Oreja de Perro se produjo sin que la guerrilla haya enfrentado a los propietarios, pues el asesinato de los hermanos Carrillo en Chapi generó como reacción que el resto de propietarios vendieran sus haciendas o simplemente las abandonaran ante la amenaza que representaba la presencia de guerrilleros y el hecho de que también pudieran ser asesinados. El poco apoyo con el que contaban de parte de la población, a final de cuentas, facilitó el desencadenamiento de los hechos y la consecuente creación de comunidades campesinas en Oreja de Perro, salvo el caso de la hacienda Ninabamba, cuyas tierras fueron compradas individualmente por los pobladores como muestra la siguiente relación (véase también el mapa):

- La hacienda Chapi, propiedad de la familia Carrillo, se convirtió en la comunidad campesina de Chapi —hasta 1987 en que el Ejército le cambió el nombre a comunidad campesina Belén Chapi— y comprendía los ex pagos de Chupón, Chapi, Chillihuá, Pallqa, Huallhua, Yerbabuena, Occoro y Oronqoy.
- La hacienda Cunaywa, propiedad de la familia Altamirano, se convirtió en la comunidad de Tastabamba, con los anexos de Putucunay y Totora.
- La hacienda de Ninabamba se transformó en la comunidad privada de Ninabamba con sus anexos de Mollebamba y Santa Carmen.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Véase Béjar 1973. Igualmente, véase el documento del II Comité Central del MRTA (agosto de 1988), donde se analizan las razones por las cuales la guerrilla de 1965 fue derrotada.

<sup>30</sup> Mallón, Florencia. «¿Crónica de un sendero anunciado? Velasco, Vanguardia Revolucionaria y “presagios luminosos” en las comunidades indígenas de Andahuaylas» En Steve J. Stern. Los senderos insólitos del Perú. Lima: IEP-UNSCH, 1999, p. 107.

<sup>31</sup> Mallón, Florencia. Ob. cit., p. 113.

<sup>32</sup> Véase como ejemplo el testimonio de Quintanilla, Lino. Andahuaylas: la lucha por la tierra (testimonio de un militante). Lima: Mosca Azul, 1981.

<sup>33</sup> Comunidad privada se le llama a la hacienda cuyos feudatarios compraron las tierras del hacendado, por lo cual cada miembro de la comunidad tiene un título de propiedad al que puede dar el uso que deseé.

- La hacienda de Soccos se convirtió en la comunidad de Soccos.
- La hacienda de Sonccopa se convirtió en la comunidad de Sonccopa.
- La hacienda de Pallqas se convirtió en la comunidad de Pallqas.

La desaparición del sistema de haciendas en la zona permitió a los comuneros mejorar sus ingresos al poder administrar directamente sus tierras de cultivo, pastos y ganado. El desarrollo de la ganadería estaba alentado por el comercio con las zonas de Andahuaylas y La Mar desde donde los comerciantes continuaban acudiendo para comprar ganado y realizar trueque con productos industriales como azúcar y ropa. Otros cambios importantes que se produjeron al finalizar la guerrilla y crearse las comunidades fueron el desarrollo de la educación mediante el establecimiento de más escuelas en la zona. Los comuneros de Oreja de Perro empezaron a enviar a sus hijos a las escuelas de los distritos de Andahuaylas, Ongoy y Andarapa, especialmente quienes contaban con mayores recursos económicos, es decir, más cabezas de ganado.

El mejoramiento económico de las familias de la zona, sin embargo, no se dio por igual. Mientras los que tenían mayor experiencia y relaciones con Andahuaylas incrementaban su capital y sacaban sus productos a Ongoy y a Ocobamba, otros no lograban vender suficiente ganado a los comerciantes de Andahuaylas.

Por otra parte, paralelamente al cambio de la propiedad de la tierra, se intensificaron los conflictos entre comunidades por linderos entre las nuevas comunidades, muchas veces basados en las rivalidades heredadas del antiguo sistema de haciendas. Mientras la comunidad campesina de Chapi, por ejemplo, poseía 4 mil hectáreas, las comunidades de Soccos, Sonccopa y Pallqas eran mucho más pequeñas.

El conflicto por la tierra incluía también el conflicto por la posesión de pastizales y terrenos de cultivo en la selva, los cuales eran muy importantes porque ahí se cultivaban los principales productos destinados al mercado: café, cacao, caña y, especialmente, hoja de coca.

Así, se acentuó un proceso de diferenciación social sobre la base de la tenencia de tierras entre las comunidades que se formaron oficialmente luego de la Reforma Agraria. Cuando ingresó el PCP-SL en la zona, se sirvió de esta situación para ganar aliados:

No todos éramos iguales. Sólo una parte éramos pobres. A ellos, a los que tenían, eran a quienes los subversivos buscaban al inicio. Había también odio entre pobres y ricos, los contrarios te decían «tú tienes tu animal», entonces, te odian, tienes más que ellos, o tienes tu selva aquí o allá, por eso también te odiaban. Los que tenían te odiaban; tu casa te hacías donde podías y te odiaban. (CVR. BDI-I-P662. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer, 60 años)

Los senderos [integrantes del PCP-SL] nos fastidiaban porque nos tenían envidia, como esa fecha teníamos bastantes becerros. En total, teníamos como 600 animales; por eso, nos decían gamonales. (CVR BDI-I-P612. Entrevisita en profundidad, Sonqopa (Chungui). Mujer, profesora, 34 años)

Uno de los testimonios se refiere, por ejemplo, a los conflictos existentes —debido al paso de ganado entre los terrenos colindantes— entre las comunidades de Oronqoy, Yerbabuena, Panto y Vacahuasi con Santa Carmen y Mollebamba, que eran propiedades privadas de los campesinos compradas a las familias Portugal y Cáceres. Las mutuas acusaciones se exacerbaron durante el período de la violencia: «La intención de la gente de Mollebamba había sido terminar con toda la gente de Chapi, de la Oreja [de Perro] y quedarse con todo nuestro territorio» (CVR.BDI-I-P618. Entrevista en profundidad, Yerbabuena (Chungui). Varón, 40 años, evangélico).

En la comunidad de Oronqoy se hicieron graves acusaciones contra los pobladores de Mollebamba, Chungui y Pallqas:

Las primeras personas que nos tildaron de terroristas fueron los comuneros de Mollebamba, después de sacar una patrulla de militares y establecerlo en sus casas. Pero estas mismas personas fueron los primeros en venir a favor de los terroristas anteriormente, seguro que ellos también han sido engañados. Estas personas de Mollebamba, Jarin, Chungui y, como ellos se encontraban unidos, llegaron ellos como los soldados y nosotros no hemos podido reconocer cuál de ellos era y estuvimos con miedo; como si fuéramos unos animales nos encontrábamos y así, pues, los comuneros de Mollebamba entraron a matarnos, de la misma forma también entraron los comuneros de la parte de Chungui, Pallqas. (CVR BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui)

Por el hecho de ser comunidades privadas, los propietarios de Mollebamba y Santa Carmen eran percibidos por los pobladores de Oronqoy como «campesinos que tenían poder económico y ocupaban sus tierras»

(CVR. Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio de 2002). El PCP-SL, más adelante, se benefició de esta situación creando, como lo reconocen los mismos pobladores, «mayor confusión entre las comunidades», «divisionismo» y «pugna» (ibídem).

En resumen, si bien la desaparición de las haciendas representó el fin de una etapa de explotación, no significó el final de las pugnas por tierras y linderos. El antiguo sistema de haciendas no fue reemplazado por otro que haya implicado un efectivo sistema de control, seguridad y organización. Al entrar el PCP-SL, las comunidades no contaban con mecanismos que regularan eficientemente la convivencia y los conflictos entre familias y comunidades. Esta situación se sintió con mayor intensidad debido a que el Estado, ausente en la zona, no brindaba suficiente seguridad ni una administración de justicia adecuada.

### 3.2. PRIMERA ETAPA: EL PCP-SL SE INFILTRA A TRAVÉS DEL CIRCUITO EDUCATIVO

Después de la guerrilla de 1965, comoya ha sido mencionado, además de la destrucción del sistema de haciendas, los comuneros accedieron con mayor facilidad a la educación.

Los informantes de Oreja de Perro manifiestaron que, antes de la guerrilla, los hacendados no veían con buenos ojos que sus trabajadores envianran a sus hijos a la escuela. Por ésta y otras razones características, el espacio de la hacienda fue sinónimo de vil explotación como lo manifiesta la siguiente declaración:

Te diré que, en esta hacienda de Chapi, pues, también murió mi abuelo trabajando, vomitando sangre y, muchas veces, cuando las personas morían trabajando en las haciendas y dejaban vivas a sus mujeres. Este hacendado, cuando iba a la hacienda, estas viudas muchas veces las violaba. Una de las víctimas también fue la madre de mi madre. Ellas tenían que ir a estas haciendas a trabajar, dejando a sus hijos. Nosotros nacimos cuando la situación estaba de esta misma forma, esto era desde el tiempo de mis padres y mis abuelos, que ellos también prestaban servicios en la hacienda, cuando yo tenía más o menos dos o tres hijos que este problema llegó a su fin y es por esta razón que recién, pues, nos preocupamos por la educación de nuestros hijos, porque los hijos de las personas de anterior generación, pues, seguían siendo ignorantes, tanto varones como mujeres, todos somos ignorantes. (CVR. BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

En forma similar a lo ocurrido en los casos de Huancasancos y el valle del Pampas, el PCP-SL comenzó su actividad en Chungui captando jóvenes en las escuelas. El trabajo del Comité Zonal de Andahuaylas del PCP-SL entre 1975 y 1980 se centró en la formación de cuadros jóvenes y en la captación de escolares en los colegios de educación secundaria de Ongoy, Ocobamba y Andarapa, donde estudiaban los hijos de los campesinos de Oreja de Perro provenientes de los anexos de Tastabamba, Oronqoy, Putucunay, Socco, Santa Carmen y Mollebamba: «Mi hermano mayor estudió en Ongoy [...] en ese colegio le enseñaban profesores de ese partido. Yo también estudié ahí pero sólo un año porque tenía miedo; los profesores me obligaban a participar haciendo pintas y a hablar de ese partido; ellos [el PCP-SL] hablaban de la igualdad» (CVR. BDI-I-P627. Chungui (Chungui). Mujer, 40 años).

Estos colegios de educación secundaria contaban con la presencia de maestros de la zona que se habían formado en la UNSCH, donde habían tenido contactos con el PCP-SL. Fue de esta manera que maestros de Ocobamba y Ongoy regresaron a enseñar a los colegios de su localidad con la finalidad de formar cuadros para la «lucha armada» que el PCP-SL pretendía iniciar.

Un maestro de Oronqoy que estudió en el colegio de Ongoy relató que conoció a Abimael Guzmán, quien llegó al colegio de Ongoy en 1975 como profesor invitado de la UNSCH. Durante su visita Guzmán dio charlas a los jóvenes estudiantes sobre la realidad nacional y el problema del campesinado. El maestro afirma que Abimael Guzmán hizo una evaluación negativa de los resultados de la Reforma Agraria y de la toma de tierras de 1974. Igualmente, de acuerdo con él, Abimael Guzmán señaló que el principal problema de la guerrilla del ELN había sido la falta de formación de cuadros y «bases de apoyo» en el campesinado. Alegó que lo más importante para la revolución era adoctrinar al campesinado y formarlo dentro de una ideología lo bastante sólida como para enfrentar una revolución a largo plazo como había sucedido en China en la época de Mao Tse Tung.

El trabajo que venía realizando el PCP-SL en los colegios de Andahuaylas se difundió hasta Oronqoy, que, a mediados de 1978, ya contaba con un colegio comunal por iniciativa de autoridades que habían sido educadas en Andahuaylas. Seguidamente, se creó también en el anexo de Oronqoy el colegio secundario Neri García Zárate.

En términos generales, si bien el recuerdo de los pobladores acerca de la entrada del PCP-SL se sitúa en un momento posterior a los hechos, es muy probable también que la población no se haya percatado de inmediato de la posición que asumían algunos maestros en la zona. Ello indica, según los relatos, que el ingreso del PCP-SL fue paulatino y que el grupo mantuvo un perfil clandestino y bajo durante los primeros años:

[...] [Don EH] era la persona quien construyó la escuela [en 1978]. Él, durante dos años más o menos, enseñó y todos los comuneros le pagábamos y después es que ya tuvimos que exigir un profesor que se quede en este mismo lugar. Cuando CP enseñaba en esta escuela es que empezaron los problemas, cuando ya eran numerosos alumnos. Pero nosotros éramos personas muy confiadas, además aquejados por nuestra ignorancia. No nos dimos cuenta que el profesor del colegio les enseñaba a nuestros hijos sobre el partido político. No nos dimos cuenta que el profesor era subversivo. (CVR. BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

En este colegio dice que el profesor le decía a algunos alumnos que hicieran la hoz y el martillo para ganarse un dinero y, entonces, profesores como PZ empezaron a presentir que algo iba a pasar y, a partir de ahí, los profesores dejaron de ser estables. Los profesores del colegio estaban buscados. (CVR. BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

La presencia del PCP-SL en Oreja de Perro se hizo evidente a raíz de un hecho aparentemente aislado. Despues de sufrir múltiples robos, la población con mayores recursos de Mollebamba presentó una denuncia en Andarapa. De manera simultánea, de acuerdo al informe de Proande (2002: 11), el 27 de septiembre de 1982 se produjo un asalto al puesto policial de Erapata (distrito de Incahuasi, Cusco, en la margen derecha del río Apurímac). En este atentado murió un policía. A consecuencia de ello, la Policía Nacional, situada en Illahuasi (distrito de Andarapa, provincia de Andahuaylas en Apurímac), ingresó en Mollebamba, donde tomó presos a siete comuneros. Las Fuerzas Policiales expulsaron a los subversivos de Mollebamba y apoyaron la formación de un sistema de vigías que luego se transformó en uno de rondas campesinas.

En 1982 los ronderos de Mollebamba ingresaron a Oronqoy —lugar considerado base de los subversivos—, capturaron a Venancio, mando local del PCP-SL, reunieron a toda la población en la plaza y, frente a ella, lo torturaron quitándole las uñas y cortándole la lengua. Finalmente, lo colgaron de un poste del colegio. Luego obligaron a la población a organizarse en rondas campesinas como se expresa en las siguientes declaraciones:

Tranquilo era todo, pero, cuando empezaron a hacer la ronda y empezaban a decir «hay que cuidarnos del enemigo que está cerca de nosotros, tenemos que cuidarnos», cuando decían eso, teníamos miedo. Nosotros decíamos «quiénes serán los enemigos», no sabíamos que eran gente como nosotros nomás. Como éramos niños, no sabíamos. (CVR. BDI-I-P641. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer, 37 años)

Siempre hacían ronda; entonces, cuando habían venido, creo que habían venido más antes los y los habían organizado y ahí a mi papá le habían nombrado autoridad [...] y andaban de noche con huaracas y con yachi, haciendo reventar, hay, un látigo que suena como arma, haces dar vuelta y suena «plaf, plaf». Con eso andaban y andaban y, a veces, nosotros hacíamos hervir café; cuando prestaban servicio de ronda, hacia mucho frío, hacíamos hervir agua y, cuando regresaban, tomaban. (CVR. BDI-I-P641. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer, 37 años)

### 3.3. EL INICIO DEL CONFLICTO ARMADO

#### 3.3.1. La «fuerza principal» del PCP-SL ingresa al distrito de Chungui

Si la primera etapa se resume en la inserción silenciosa que hizo el PCP-SL desde las escuelas, una segunda etapa, al inicio de lo que se conoció como el «Inicio de la Lucha Armada» (ILA), se inauguró cuando la «fuerza principal» del PCP-SL tomó por asalto a las comunidades para formar «comités populares». El recuerdo de la población sitúa el ingreso del PCP-SL en el distrito de Chungui por dos frentes: el primero desde Andahuaylas hacia Oreja de Perro y, posteriormente hacia 1984, cuando el Ejército cobró presencia en Ayacucho, desde Cangallo.

Sin embargo, hubo una influencia anterior del PCP-SL en las comunidades de Oreja de Perro. Ésta provino de Andahuaylas y Chincheros desde mitad de la década de 1970 y tuvo como objetivo iniciar acciones de proselitismo en Andarapa, Ocobamba y Ongoy, zonas próximas a Oreja de Perro.

De esta manera, los pobladores de Oronqoy identificaron a Andarapa (distrito de Andahuaylas) como el lugar desde donde se desplazó el PCP-SL hacia Oreja de Perro, territorio que fue precisamente uno de los focos de VR durante la toma de tierras de los años setenta. Existe, de otro lado, consenso entre los informantes en afirmar que los primeros cuadros del PCP-SL ingresaron a la comunidad de Mollebamba desde Andahuaylas y que los primeros en llegar con ideas subversivas, las cuales luego se extendieron hacia Oroncoy, fueron maestros de escuela:

De Andahuaylas dicen que ha venido, así cabecillas, netamente personas que tenían estudios. Llegan a diversas comunidades: Mollebamba, Oronqoy, Yerbabuena. Llegan para conquistar gente y, como todo joven, quiere cambios [...] entonces, se unen [...]. (CVR. BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Hombre, 30 años)

El terrorismo [la subversión] ha empezado en Mollebamba con las muertes, en sus casas encerrándolos los han matado con cuchillo, todo le habían amarrado. Después han ido a Huallhua y a otros pueblos. (CVR. BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua, Anco (La Mar). Mujer, 65 años)

Los comuneros de Mollebamba fueron los que vinieron a organizarnos por vez primera para pertenecer a las filas subversivas. Argumentaban que éramos personas muy pobres. Y estas mismas personas fueron las que nos denunciaron después y trajeron a los soldados; ellos [los pobladores de Mollebamba] ya no eran subversivos sino que ya estaban de parte de los militares. (CVR. BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

Llegaron como subversivos de Mollebamba, no pudimos reconocerlos porque estaban con pasamontañas. Te preguntaban el nombre y te anotaban, luego se iban y después de esto ya empezaron a reunirnos, hasta que después nos quedamos con los subversivos y después empezamos a unir nuestros animales para todos y hacíamos todo para todos. (CVR. BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

### 3.3.2. El PCP-SL toma por asalto la comunidad de Chapi (1982)

Para el caso de Oreja de Perro, de acuerdo con un testimonio, «el inicio del terrorismo [la subversión] es cuando por primera vez, en 1982, llegaron los subversivos a la comunidad de Chapi; allí quemaron la fábrica de cañazo y organizaron a la gente para que les siga y apoye». Cuando los sinchis se enteran de esta incursión, llegaron al lugar e interrogaron a los pobladores. La población negó haber alimentado y alojado a los subversivos. Al no darse por satisfechos con la respuesta, los miembros del orden rastillaron la población y en una de las viviendas encontraron una escopeta, prueba suficiente para los sinchis para no solamente para acusar a su dueño de subversivo sino para querer asesinarlo. Para salvar su vida, este poblador se vio obligado a delatar a presuntos subversivos. A los dos días, los sinchis retornaron a la comunidad con las personas que habían sido acusadas de pertenecer al PCP-SL. Después de hacer que la población los identificara como los causantes del incendio de la fábrica de cañazo, los llevaron a un sector llamado Chinchihuasi y los fusilaron (CVR. Testimonio 202014. Chungui (La Mar), 22 de marzo de 2002). Fue entonces que los subversivos retornaron para averiguar quiénes habían sido los delatores y vengar la muerte de sus partidarios. Un comunero señaló a tres personas como delatores. Éstas fueron llevadas a la comunidad de Vacahuasi y ahorcadas sin mayor miramiento (*ibíd*em).

Como en una especie de juego perverso, los *sinchis* retornaron a la comunidad de Chapi, pero solamente encontraron ancianos, mujeres y niños, quienes fueron sacados de sus casas. Al preguntarles por sus hijos y esposos, contestaron que se habían ido a trabajar a la selva. A los dos días, regresaron los subversivos y, después de lanzar arengas y un discurso, pasaron a organizar a la población en grupos y designaron a la comunidad de Chapi como «base de Miraflores».

### 3.3.3. La masacre de Santa Carmen de Rumichaca

El 8 de diciembre de 1982 ingresó un grupo de personas armadas con uniformes de militares en la comunidad de Santa Carmen de Rumichaca preguntando por las autoridades (CVR. Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio de 2002).<sup>34</sup> A los tres días, regresaron por la tarde y convocaron a toda la población tocando la campana de la escuela, a una asamblea.

<sup>34</sup> Una característica constante en las investigaciones de la CVR es que los pobladores denominaban indistintamente militares a policías y miembros del Ejército.

Los supuestos policías (que, en realidad, eran subversivos) separaron a las mujeres de los varones en dos autoridades distintas y les preguntaron «quiénes eran las personas que estaban haciendo la ronda campesina, porque esas personas iban a ser premiadas» (CVR. Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio de 2002). Aquellos que fueron señalados como responsables de la ronda fueron asesinados por el PCP-SL esa misma noche (ibídem). Entre los asesinados, que de acuerdo a este testimonio fueron nueve (otra versión menciona que fueron ocho), se encontraban el presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), líderes y autoridades comunales (ibídem). Otro testimonio añade también que una de las víctimas era el presidente de la ronda campesina.

Varios pobladores decidieron irse de la comunidad y escaparon hacia las ciudades, mientras que otros se refugiaron en sus viviendas. Otra versión también se refiere a la confusión que hubo frente a estas personas que llegaron sin identificarse portando pasamontañas:

Esos [los subversivos] ya en los morros se habían puesto y veían de dónde venía la gente en una de esas cuando estaban hablando, hablando, hablando. A mi papá, pues, le echan látigo a su arma con su huato [cordón], le echan látigo yo digo «por qué le estarán echando látigo» y después a mi tía le dije «*tia papaytam subaycuchcan* [tía, a mi papá le están dando con el látigo]» y mi tía me dice «*jinam chayna castigacun guardiacunan ñuqapamanpas qamura qinaspanmi chayna mana imatapas allinta rurachirachu jinaptinka castigan* [así es, siempre los policías castigan, yo me recuerdo que también vinieron donde nosotros y castigaban, ellos castigan porque de repente no hizo cumplir lo que tenían que hacer]». (CVR. BDI-I-P641. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer, testigo de la masacre de Rumichaca)

El PCP-SL ajusticiaba a las autoridades con brutalidad:

Entonces seguíamos y a toda la gente le reúne, a todos los niños, a todos los reúne, y a un negociante que había venido de Talavera le quitan su grabadora y la llevan a la escuela y ahí adentro tenían reunión, no sé qué harían pues, porque ahí adentro estaban y las señoras haciendo bailar a sus bebés con la música. ¡Todos felices bailaban huaynos! Todo para que haya más bulla y la gente no escuche lo que gritaban y yo de la cocina que tenía una pequeña ventanita de ahí estaba viendo todo lo que hacían. Unos estaban en una reunión y otros están en otra parte. Yo estaba escondida en la cocina de mi tía y miro pues. Nosotros no habíamos visto ni sospechábamos esto. Sólo otra gente vino y éste pues no dejaba que le conocieramos, pues él era así, así, estaba con pasamontañas, quién habrá sido pues, pero nos preguntó nuestro nombre y nosotros sin saber, como tontos, nos hicimos anotar y el resto de la gente ya tenían muchos apuntes. Esos hombres tenían un libro grande y llaman lista y dicen su nombre de mi papá, pronuncian XZ diciendo dice pues y de ahí le sacan y a mi papá, le dicen XZ, «presente, jefe» dijo mi papá. Decían ya muy bien, muy bien, te están llamando, corre, corre, te están llamando allá, le dicen, y le hacen correr a la escuela y detrás le estaban esperando varios, más o menos como seis o siete estaban esperando, y alrededor de la muralla también estaban. Entonces, mi papá llega y, ni bien estaba volteando a la espalda de la escuela, uno le agarró de atrás y le empezó a patear y mi papá, al querer defenderse más, ya lo acuchillaron. Un cuchillo se lo meten por la espalda y mi papá empieza a agarrar a puñete y patada y «paj, paj, paj». Lo tiran y, en el suelo, lo pisotean y mi papá no muere y, cuando le meten otro cuchillo en la barriga y en el corazón, grita mi papá «ayyyyyyy, ayyyyyyy, nooo». Gritó sólo tres veces. Y, después de esto, al otro señor ya también le llama lista y él le dice presente y otra vuelta; el otro también corre, corre, y el otro también igualito corre y en la lista le llaman, ocho personas habían muerto. Los ocho eran autoridades; ellos eran como teniente, presidente de la ronda creo que ha sido el señor PJ, creo que él ha sido el presidente de la ronda. (CVR. BDI-I-P641. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Mujer, 37 años, testigo de la matanza de Santa Carmen)

Una semana más tarde, el 15 de diciembre, apareció otro grupo de 12 personas uniformadas cuando los pobladores de la comunidad campesina de Santa Rosa (un anexo de Santa Carmen de Rumichaca) estaban en asamblea. Estas personas igualmente separaron a varones de mujeres en la escuela y los encerraron. A las ocho de la noche, «victimaron a mi padre sin explicación alguna con un cuchillo en la cabeza, sacándoles fuera de la escuela. De igual manera asesinaron a mi hermana» (CVR. Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio de 2002). En una tercera incursión, los subversivos mataron a más de treinta personas, incluidos niños y bebés, y «obligaron a la gente a que se refugie en el monte, ya no querían que vivan en sus casas. Era necesario que abandonen, porque les decía que la represión iría a la zona y ellos también iban a sufrir» (ibídem).

Es a partir de estos acontecimientos que los comuneros de Oronqoy, Santa Rosa y Yerbabuena se refugiaron en el monte, abandonando sus casas, animales y pertenencias. Así, empezó la vida en las «retiradas».

### 3.3.4. El PCP-SL toma por asalto Chungui

De acuerdo con algunos testimonios de los pobladores de Chungui, el PCP-SL ingresó en 1983. La etapa de adoctrinamiento finalizó en 1983 y el curso de los acontecimientos cambió a partir de diciembre del mismo año cuando hizo su ingreso un grupo subversivo de aproximadamente treinta personas (CVR. Testimonio 202695. Chungui (La Mar), 22 de julio de 2002), algunas de ellas encapuchadas para no ser reconocidas. Los mandos que llegaron a la comunidad de Chungui reunieron a la población en la plaza y les hablaron del «partido». Ingresaron a la escuela, separaron a los profesores en un ambiente donde les dieron una charla y a los niños les enseñaron cánticos subversivos:

Llegaron un día, toda la noche hicieron una asamblea popular así y al día siguiente ya no estaban. Casi todos se habían ido. (CVR. BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años)

Ahí mismo de frente llegaron a la escuela y llegaron al salón. Se presentaron «nosotros hemos venido, estamos en la lucha armada, queremos que estudien. Las cosas que está estableciendo este gobierno de [Fernando] Belaunde tenemos que derrotar. Ya no hay azúcar, ya no hay kerosene, no hay nada y el costo de vida sube cada día. Nosotros tenemos que cambiar esto, somos la última opción. Tenemos que vivir en igualdad y estos miserables que tienen plata tienen que morir. A nosotros el pueblo nos toca gobernar». Entonces, el profesor salió y ellos [el PCP-SL] escribieron un himno en la pizarra para que lo aprendiéramos. (CVR. BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años)

Nos enseñaron una canción que era así: «por los valles y los Andes, guerrilleros libres van, los mejores luchadores son del campo y la ciudad. Ni el dolor ni la miseria nos harán retroceder, seguiremos adelante sin jamás desfallecer, sin jamás desfallecer». Otra era «pueblo nos ordena combatir hasta el final, adelante compañeros nuestra consigna es vencer. Venceremos al fascismo en la batalla final, abajo el imperialismo, ¡viva nuestra libertad! Las banderas de Gonzalo como mantos cubrirán a los bravos guerrilleros que en la lucha caerán ¡Viva el PCP!». (CVR. BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años)

*Leoncio*, entonces presidente de la comunidad de Chungui, se dirigía a su sembrío de papa que tenía al otro lado del pueblo cuando fue detenido por un grupo de subversivos el 14 de diciembre de 1983; luego fue asesinado a cuchillazos (CVR. Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002). Esa misma madrugada había sido colgado de un árbol y asesinado el juez de paz del distrito de Chungui en la comunidad de Marco (cerca de Chungui) por las huestes subversivas. Finalmente, *Ramiro*, considerado próspero comerciante, fue también detenido y asesinado con hacha y cuchillo por un grupo de 15 a veinte subversivos entre varones y mujeres (ibíd). Seguidamente a estos asesinatos, *David* (intregrante del PCP-SL) informó a la población que habían muerto los miserables *ñam sucarun* y que ya estaban con san Pedro (ibíd).

A continuación, los subversivos obligaron a la población a festejar. El PCP-SL también repartió las mercaderías que habían sido propiedad de *Ramiro*. Además, se llevaron ropas, telas y grabadoras. Antes de retirarse, los subversivos dejaron la comunidad a cargo del comunero *Gregorio*, al que le cambiaron de nombre por «camarada» *Pepe* (CVR. Testimonio 202695. Chungui (La Mar), 22 de julio de 2002). Igualmente la responsabilidad cayó en *Justo* (cuyo nombre cambió a *David*), *Noel* (que pasó a ser llamado *Carlos* por el PCP-SL) y otros jóvenes como *Modesto*. Esto significaba que el PCP-SL ya había identificado quiénes eran los jóvenes más aptos para la destrucción del «viejo estado». A las personas más capaces, las convirtieron en líderes y, posteriormente, éstas captaban adeptos y los organizaban para pertenecer al PCP-SL (CVR. BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 35 años).

Más adelante, *Pepe* fue identificado como el que comandó a la población al momento de realizar las «retiradas» (CVR. Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002). Aparentemente —por las informaciones recogidas tanto en Oronqoy como en Chungui—, la reacción de la población no fue rebelarse. Sin embargo, esto no es indicador de plena adhesión, ya que hubo pobladores que se refugiaron en sus hatos y migraron a la ciudad por temor a las incursiones subversivas, que hacia 1984 se tornaban cada vez más violentas.

Hasta el momento, el PCP-SL había sido un actor lejano. Los pobladores habían escuchado del PCP-SL por las noticias en la radio y los rumores que circulaban en los alrededores de la comunidad, las pintas que veían en el pueblo y porque pobladores de Chungui que acudían a la feria de Sacharaccay solían encontrarse con personas extrañas, de las cuales decían que eran «buenas y bondadosas» porque «comparten» las cosas. Nada todavía hacía presagiar lo que esa aparente generosidad implicaba para el respeto del derecho a la vida:

«Y un día llega la gente de la feria de Sacharaccay diciendo que los compañeros venían. La misma gente decía que ya estaban en Anco y que son buena gente y dice que normal agarran las cosas y comparten y normal no hacen nada» (CVR. BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años).

### 3.3.5. El PCP-SL y las escuelas en la zona de Chungui

En 1983, la presencia del PCP-SL no solamente se hizo más abierta y agresiva sino también más persistente: tomó por asalto comunidades, asesinó autoridades, eliminó y castigó a todo aquel que consideraba representante del desorden (abigeos, mujeriegos, mujeres infieles), así como del «viejo estado», la riqueza ilícita y el abuso.

Resulta claro por qué la población tiene anclado el recuerdo del ingreso del PCP-SL posteriormente a lo que realmente ocurrió, ya que, la cruzan la información, se percibe que tuvo presencia a través del circuito educativo.

En Chungui, la asamblea comunal impulsó la creación del colegio de educación secundaria Túpac Amaru II en 1978 con recursos de la comunidad. El gestor de la obra fue Helí La Rosa, natural de Chungui, que veía necesario desarrollar la educación en la comunidad. Para ello, invitó a los residentes chunguinos de Lima y Ayacucho a regresar a su comunidad (Libro de actas de la comunidad de Chungui, 1977). En ambos centros educativos primario y secundario, la presencia de profesores subversivos fue muy importante para la captación de jóvenes estudiantes, pero también para convercer a jóvenes adultos de la población y sus familias, especialmente aquellas que contaban con menos recursos.

Los profesores que enseñaban en el colegio Túpac Amaru II de Chungui —según señalaron los entrevistados— estaban afiliados a partidos de izquierda, entre los cuales se encontraban algunos militantes del PCP-SL:

Mi hermana estaba en secundaria y ella decía que sus profesores, especialmente uno que enseñaba Ciencias Sociales, hablaba de todo lo que era comunismo y les explicaba todas esas cosas. Ella decía «¡Qué bonito todo lo que es Rusia, lo que es el socialismo, lo que fue la revolución China del 47!». Y entonces todo eso ya les explicaban. (CVR. BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años)

En el 81, 82, esos años aparecen las primeras pintas. Pero nunca sabíamos de qué se trataba, qué cosa era. Eran pintas color rojo sangre. Aparecían en la plaza, en las piedras, pero no causaba ninguna impresión. ¿Por qué habrá sido? Los profesores decían «ah son comunistas». Entonces, nos explicaban que, en otro país, Cuba, ya habían tomado el poder. (CVR. BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años)

En los años ochenta, los hermanos Paredes, que habían sido captados al PCP-SL por Edith Lagos, iniciaron, a su vez, la captación de jóvenes estudiantes del colegio y de otros jóvenes de la comunidad de Chungui. Realizaban reuniones donde hablaban de la inminente presencia del PCP-SL en la zona y de cómo éste iba a luchar a favor de los campesinos. Las primeras acciones de este grupo de jóvenes fueron la realización de pintas en la comunidad en las cuales se arengaba a favor de la lucha armada y se amenazaba a las autoridades para que dejen sus cargos.

Junto a estos maestros de escuela había jóvenes pobladores, especialmente aquellos que mantenían un contacto estrecho con las ciudades que apoyaban la labor de adoctrinamiento del PCP-SL.

### 3.3.6. ¿Desde dónde llegó el PCP-SL a la zona de Chungui?

De acuerdo con los informantes, el PCP-SL llegó a Chungui desde Oreja de Perro. Los pobladores señalan que la primera incursión armada provino de Ayacucho. Ésta ingresó por Chungui hacia los anexos de Jarín, Churca, Pallqas, Totora, Tastabamba, Putucunay, Chillihuá, Chapi, Yerbabuena, Mollebamba y Oronqoy. Los pobladores de Chungui recuerdan dos mandos importantes del PCP-SL en sus inicios:

Había un joven que no comprendía quechua, sólo hablaba castellano [...] también había una chica, la camarada Nancy, ella tenía su revólver en la cintura. (CVR. BDI-I-P602. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 55 años, ex rondero de Chungui)

El compañero Coco era el primero que llegó. Era alto, muy alto, pero yo no sé quién era. También había la camarada Elena que llegó. (CVR. BDI-I-P602. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 55 años, ex rondero de Chungui)

Entonces ya llegó el PCP-SL primero a Chungui y luego pasó a la Oreja [de Perro], y empezaron a matar. Mataron en la comunidad de Chupón y de ahí pasaron a otro sitio y regresaron acá a Chungui y también mataron gente. (CVR. BDI-I-P604. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 50 años, ex presidente del Comité de Autodefensa)

Comenzaron, entonces, una asamblea popular; esa noche nos han obligado a todo el pueblo a asistir, han roto las banderas y solamente lo rojo se lo quedaban, lo blanco lo quemaban, también quemaron la foto del presidente [Fernando] Belaunde. (CVR. BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años)

El PCP-SL decía nosotros estamos a favor de los campesinos y casa en casa venían a visitarnos y nos invitaban a reunirnos en el estadio. (CVR. BDI-I-P618. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Varón, 40 años, evangélico)

### 3.4. EL NUEVO PODER: LAS «RETIRADAS» COMO ESTRATEGIA (1982-1987)

Las «retiradas» fueron organizadas por el PCP-SL con el fin de huir y despistar a las fuerzas del orden, pero también para constituir las «bases de apoyo» del «nuevo estado». La población de Oreja de Perro vivió en «retiradas» a lo largo de casi cinco años. Entre 1982 y 1987, los comuneros de las localidades de Oronqoy, Santa Carmen, Tastabamba, Putucunay y el resto de anexos se habían dispersado en grupos hacia la selva y la quebrada: «Rápido hicieron que se retirasen y comenzaron a organizar con los responsables que ya habían nombrado. Así empezaron las «retiradas» y nos esparcieron por aquí y por allá, ya estábamos completamente organizados» (CVR. BDI-I-P638. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Varón, 58 años).

En Oreja de Perro, el PCP-SL dispuso que la población de las comunidades fuera organizada en cuatro grupos, los cuales debían dispersarse por los alrededores de la zona:

A la «retirada» salíamos, por ejemplo, los que vivíamos en Orongoy a la parte baja junto con los que vivían ahí. Estábamos organizados en cuatro grupos y cada uno estaba en un sitio diferente, porque antes vivíamos todos separados en nuestros hatos en Puquiora, Jabas Huayco, Jerona, Sarachacra y Ccanjahua. Pero de todos también teníamos casa en el mismo pueblo. Entonces, en la «retirada» hemos estado así separados en cada sitio, estábamos en cuatro grupos que estaban en Sarachacra, Ccanjahua, Puquiora y Accopampa, junto con el pueblo mismo y en cada grupo había un mando político y otro militar. (CVR. BDI-I-P657. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Varón)

En Chungui, se organizó una «retirada» dos años más tarde, en febrero de 1984, ante la amenaza de una incursión del Ejército en el distrito como lo manifiesta la siguiente declaración:

Lo que pasó es que los militares empezaron a venir al pueblo [a Chungui]. Los Sendero [miembros del PCP-SL] decían que debíamos escaparnos a los cerros y a los montes. Algunas personas empezaron a huir a los montes. El 84 empezaron las «retiradas». Cuando estábamos en el mes de la cosecha de papa —mes de junio—, en plena cosecha, ya estábamos en *retirada*. (CVR. BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años)

#### 3.4.1. La organización del PCP-SL en las «retiradas»

Dentro de la estructura organizativa del PCP-SL, la población reclutada en «retiradas» era organizada en «bases de apoyo», que representaban la forma de gobierno del PCP-SL en la zona. La población de las comunidades que fueron organizadas en «retiradas» pasó a representar lo que en el léxico del PCP-SL se conocía como la «masa», que tenía como objetivo formar la base del gobierno del PCP-SL. Asimismo, estas familias proveían a la «fuerza local» de militantes.

Todos en la *masa* eran tratados y atendidos por igual, sin que existieran diferencias. Las parejas, viudas y madres solteras dormían juntas con sus hijos cuando éstos aún eran pequeños y no habían pasado todavía a formar parte de la *fuerza local*. En las mujeres recaía el cuidado de los niños huérfanos.

La «fuerza principal» era un grupo itinerante que transitaba por toda la zona y supervisaba las acciones tanto de la «fuerza local» como de la «masa». La composición de este grupo era también de jóvenes pero los mandos no eran de la zona. Eran desconocidos como dicen los pobladores de Chungui. En términos generales, su armamento era bastante precario y no portaban uniforme. Solían llegar con víveres y ropa para la masa, producto de sus patrullajes y tomas de comunidades. Estos bienes eran repartidos por la «fuerza principal» que llegaba cada cierto tiempo a supervisar el desarrollo del conflicto armado en la zona:

Igual que en otros pueblos, teníamos niños abandonados. Cuando morían sus padres, nosotros les dábamos alimentación y ropa. (CVR. BDI-I-P608. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Varón, 35 años)

Utilizábamos la poca ropa que ya teníamos y un poco de ropa que nos traía el grupo que venía con el camarada *Aurelio*. Ellos nos entregaban algunas ropas y sandalias. El camarada *Aurelio* se las entregaba al mando de nuestro grupo y él hacía la entrega de acuerdo a la necesidad. (CVR. BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años)

Las directivas se daban a través de una compleja red de mandos, desde la dirección central, pasando por los comités regionales y zonales. La responsabilidad del grupo estaba a cargo de un mando político y uno militar, los que a su vez, habían nombrado a un responsable de producción, uno de organización, uno de vigilancia y una responsable de las mujeres. Los varones se dedicaban a abrir trocha a través de la selva para cultivar maíz, calabaza y camote. La población también se transformó en recolectora de frutos de la selva, labor en la que participaban los niños. Las chacras eran cultivadas comunalmente y la producción debía repartirse en forma equitativa entre todos los miembros de la «retirada». En teoría, nadie debía recibir más que otro, ni siquiera los mandos:

Los mandos mandaban llevar comida, ordenaban lo que se cultivaba, mandaban a otros lugares donde estaban los caminantes. Había vigilantes para que nos avisen qué sucedía [...] también había un mando encargado de la organización. (CVR. BDI-I-P613. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Varón, 60 años)

En estos lugares, sembrábamos en los lados extremos de Chapi. Después de poner vigilancia en los lados extremos de los terrenos, los quemábamos para sembrar luego maíz, zapallo y esas cosas que comíamos. También sembrábamos Yuca, camote. (CVR. BDI-I-P616. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Mujer, 50 años)

Los niños que tenían entre 8 y 10 años de edad eran designados «niños pioneros». Ellos ayudaban a sus madres acarreando agua, alimentos y leña al campamento. Paralelamente a estos deberes, debían asistir a las escuelas populares. Uno de los mandos les enseñaba canciones sobre el conflicto armado interno, así como a dibujar la hoz y el martillo como símbolo de la revolución y estrategias para escapar en caso de producirse una incursión militar. Toda la clase se impartía en forma oral y utilizando gráficos, ya que la mayoría de estos niños no sabían ni leer ni escribir:

Sí, estaba con los niños y niñas pioneros. Nos enseñaban canciones y nos decían constantemente que íbamos a llegar al poder y que, si escapábamos, los militares nos iban a matar. (CVR. BDI-I-P667. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Varón, 38 años)

No nos enseñaban a leer o a escribir, todo era verbalmente. Sólo ellos [los mandos subversivos] tenían un cuaderno para poder dibujar: graficaban cómo debíamos de escapar de los militares, cómo esquivar las balas y todo eso. (CVR. BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años)

Desde pequeños los formaban en una ideología de enfrentamiento con las fuerzas del orden. El PCP-SL se convertía para ellos en una especie de manto protector. Al cumplir los doce años, los niños y niñas eran separados de sus padres y llevados a la fuerza local, donde eran entrenados para convertirse en militantes de la «fuerza principal». Solamente los más listos y fuertes eran reclutados y preparados para soportar las duras condiciones de vida que iban a enfrentar como parte de la «fuerza principal». Este grupo estaba compuestos por jóvenes, adolescentes y, en muchos casos, niños de 12 años, tanto varones como mujeres. Caminaban por los montes con un mando político y uno militar y pernoctaban en los campamentos, donde eran atendidos por la «masa». Dormían aparte de la «masa», varones y mujeres juntos, intercalados por sexo. A esta forma de dormir le llamaban acuchillarse: «Debíamos dormir pegados, nos intercalaban hombre, mujer, hombre, mujer y, entonces, a eso le llamaban ellos "acuchillarse"» (CVR. BDI-I-P665. Entrevista en profundidad, Oronqoy (Chungui). Varón, 33 años).

Conforme avanzaba el conflicto armado, la «masa» empezó a vivir a salto de mata: «Nueve años ya creo que tenía. Con esta gente estuvimos caminando por Chapi, Achira y por los montes caminábamos trabajando y, cuando venían los soldados, nos escapábamos y, a veces, a muchos de nosotros lo mataban y muchos de nosotros nos escapábamos; en fin, así andábamos» (CVR. BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años).

Cuando las mujeres quedaban embarazadas, no recibían ningún trato especial. Sólo cuando estaban a punto de dar a luz eran separadas y llevadas a una cueva para que los niños nacieran. Luego, regresaban a la «masa». En el caso de que se tratara de una mujer de la «fuerza local», durante su embarazo pasaba a la «masa»; luego regresaba a la «fuerza local»: «Muchas veces a causa de la desnutrición, nosotras las mujeres en los montes dábamos a luz en las cavernas, a niños retrasados o no sobrevivían» (CVR. BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui). Mujer, 60 años).

La violencia recrudecía y la comunicación entre las tres fuerzas del PCP-SL se deterioró, especialmente entre la «fuerza principal» y la «fuerza local». Mientras pasaba el tiempo, las supervisiones de la «fuerza principal» se iban haciendo cada vez más esporádicas, lo cual permitía que tanto la «fuerza local» como los mandos de la «masa» fuesen adquiriendo mayor autonomía y poder. Los entrevistados señalan que la mayor parte de los abusos provenían de la «fuerza local» abusos contra sus propios paisanos, a los que castigaban y, en muchos casos, ejecutaban con armamentos rústicos, algunas granadas y carabinas. Muchas veces también las rencillas personales y familiares se convertían en los móviles de las ejecuciones a nombre del PCP-SL: «De los mandos [de la «fuerza local»] no conocíamos sus [verdaderos] nombres. Ellos [los mandos de la «fuerza local»] nada más te organizaban o te hacían escapar, entonces tenías que estar de acuerdo con ellos. Si en caso te oponías, te amarraban, te castigaban y luego te mataban» (CVR. BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer, 60 años).

Asimismo, las violaciones sexuales teóricamente prohibidas y castigadas con la muerte, empezaron a presentarse con mayor frecuencia.

El PCP-SL implantó un férreo orden y control. No perdonaba ninguna traición o sospecha de traición ni que osaran cuestionar su «nuevo orden»:

Ellos [el PCP-SL] venían a ver si estaban haciendo caso, si estaban organizándose bien, si todos están comiendo igual, a ver qué errores cometíamos y, a los que cometían errores, los han amarrado y los han matado. (CVR. BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer, 60 años)

Yo estaba preocupada porque los compañeros llamaban a asamblea y los que no asistían iban a morir. De mucho miedo fui a la asamblea. A mi esposo y a mi papá, como no fueron, les dieron mil látigos hasta que se enfermen. Luego cocinábamos juntos porque, cuando nos encontraban cocinando individualmente, se molestaban y nos castigaban. (CVR. BDI-I-P608. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer, 35 años)

La vida en las «retiradas» se convirtió en un tormento infernal. Un testigo que en aquel entonces tenía 7 años de edad cómo eran. Relata especialmente la «masa» poseía menores ventajas que la «fuerza principal» y «local» para mantenerse viva y escapar:

Tuve mucha pena. En mi base, quedamos pocos y escapamos hacia la puna donde comimos papas. Al enterarnos que los sinchis se fueron, volvimos los que quedamos de mi base al sector de Achira, donde volvieron a venir los subversivos para organizarnos nuevamente. Nos dijeron: nosotros somos bastantes, como la arena del río y los militares son como las piedras grandes del río. La organización de las masas en mi base era: las señoritas se ocupaban en cocinar y —si los adultos trabajaban en la chacra—, llevar la comida; los adultos y jóvenes participaban en la «fuerza principal» y, a la vez, eran agricultores. Todos trabajaban para todos. No había individualismo. Los niños mayorcitos ayudaban en lo que podían y, a los más pequeños, el senderista SF nos enseñaban a leer, escribir, nos hacían cantar y jugar. Yo tenía siete años en ese entonces. Lo que me duele recordar es cómo las masas morían porque no podían escapar de los ataques que hacían los militares. La fuerza local y principal casi nunca caía. Eran jóvenes a partir de los 12 años y los adultos hasta los cuarenta años de edad, quienes podían escapar fácilmente de los militares, pero no podían enfrentarse, porque sólo eran veinte combatientes y estaban armados con palos, hondas, dos escopetas y dos fusiles. Así iban muriendo muchas «masas» [integrantes de la «masa»] y quedábamos pocos. (CVR. Testimonio 202014. Chungui, La Mar, 22 de marzo de 2003)

Este mismo testigo informa que, en 1986, desaparece la «base» de Yerbabuena al irse muriendo la gente. Los sobrevientes de la «base» de Miraflores pasaron a la base de Pucallacta. Las 27 víctimas regresaron a Chapi buscando comida. Allí decidieron presentarse a los militares:

[...] emprendimos un viaje a la comunidad de Tastabamba, caminamos dos noches [...] cuando llegamos al río Pampas, teníamos tanta hambre que comíamos raíces, troncos podridos y fruta verde. Cuando pasábamos al departamento de Apurímac, en las alturas de la comunidad de Cabaña, un anciano nos da de comer y nos aconseja

que nos presentemos a la base militar de Ocobamba (provincia de Chincheros, departamento de Apurímac). (CVR. Testimonio 202014. Chungui, La Mar, 22 de marzo de 2003)

La «masa» se encontró atrapada entre dos fuegos:

Estos subversivos, al igual que los militares, llegaron también matándonos a muchos de nosotros; éstos nos mataban argumentando que nosotros éramos soplones y, por esta razón, le teníamos miedo a los subversivos y, como también a los militares, y posteriormente con el miedo empezamos a escapar al monte, como a mi hermano también le habían matado. Nosotros no podíamos apoyar a ninguno de los dos porque uno de ellos nos buscaba y, si nos encontrábamos con el otro, nos mataba y, por esta razón, nosotros no sabías qué hacer. Yo creo que es Dios quien me ha salvado de muchos incidentes horribles. Como le decía, es que por todas estas razones nosotros salimos de nuestra casa porque nos quemaba junto con todos nuestros hijos y, cuando estuvimos en nuestra casa de campo, venían también con unas dos personas más que habían capturado y ellos al rendirse traían a los militares como guía al lugar donde nos encontrábamos y, al encontrarnos, nos mató a muchos de nosotros junto a nuestros hijos; mas la verdad es que en acontecimientos como éstos han muerto muchas personas y es por esta razón que salimos de nuestra casa y estuvimos en los montes en pequeñas casas que habíamos construido, además como nosotros no conocíamos ninguna ciudad, ni conocíamos el camino para poder irnos a otros pueblos, es por esta razón que nosotros nos quedamos en nuestro pueblo. Nosotros nunca le hicimos daño a ninguna persona, nosotros permanecimos puramente muchas veces hasta comiendo sin sal, trabajábamos. Pero, a pesar que nos mataban a muchos de nosotros, las personas que quedábamos seguíamos trabajando, cuidándonos y protegiéndonos cada uno de nosotros, sembrábamos maíz, papa, y de esto nos alimentábamos en nuestro pueblo mismo. Sólo nos hacía mucha falta la sal; por ello, comíamos sin sal y a veces preparábamos mazamorra de calabaza. Siempre comíamos sin sal, además no conocíamos ningún pueblo para poder ir a adquirir la sal. Nosotros parecíamos unos niños en nuestro pueblo [...] si queríamos irnos del lugar, tampoco podíamos debido a que el único puente de Punki lo habían volado por donde hubiéramos pasado, pero no sabemos cuál de ellos cortó este puente, de repente la patrulla o tal vez los subversivos. Quiénes habrán sido. Ni siquiera eso sabemos nosotros porque estuvimos en el monte ocultos y no salímos y, cuando los militares nos acechaban, no tenías nada para comer y es cuando sobrevivíamos comiendo hierbas, tomando agua y, en fin, estuvimos así de hambre. Es todo lo que sé, mamita. (CVR. BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

Las mujeres con niños no podían esconderse y escaparse tan rápidamente: «Escapar con niños era más difícil, te alcanzaba entre dos y te mataban» (CVR. BDI-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer, 60 años). La situación de las «retiradas» empeoró cuando entraron los militares a eliminarlos:

Cuando empezaban con esta búsqueda, nosotros nos escondíamos en los montes, en los huecos, las cavernas, en las aguas, etc. Nosotros pasamos todo tipo de peripecias; después de todo esto, sólo hemos podido sobrevivir unos cuantos nada más y retornamos a nuestro pueblo a pesar de estar buscados, perseguidos y después tuvimos que huir a las ciudades y, conforme van pasando los años, sólo pudimos volver a nuestro pueblo sólo pocas personas. En estas caminatas que realizábamos, muchos de nosotros murieron por hambre, disparados con bala que a muchos de nosotros nos llegaba en la cabeza, en la mano, en el cuerpo etc. Algunos en la fuga se rompián los pies y de otros modos diferentes más pues fallecieron y otros a causa de ellos quedamos sin brazo, sin manos, perforados por la bala pues no estuvimos ilesos sino dañados, desnutridos. Te diré que hasta el día de hoy yo me encuentro desnutrida, con poca sangre porque no tenemos para alimentarnos bien, muchas veces por causa de la desnutrición nosotras las mujeres en los montes dábamos, en las cavernas a luz niños retrasados y, si muchas veces estos niños sobrevivían, hasta ahora sufren una desnutrición y estos niños no se encuentran bien. Los hijos de muchas personas han muerto agujereado por bala, y otros en manos de los soldados y nuestros padres muchas veces asesinados por los subversivos; otros murieron arrastrados por el cauce del río cuando estuvimos escapando, arrastrados por las piedras, etc. Nosotros nos fuimos a los diferentes pueblos en completo abandono sin prendas, con las justas llevábamos nuestra ropa encima, ni siquiera teníamos una manta, ni una ropa, así nos íbamos del lugar y aquellos que retornaban nuestro pueblo mucho más antes que nosotros aprovechaban de nuestros animales y de las cosas que quedaban. (CVR BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

Los informantes recuerdan cómo los militares abusaban de las mujeres: «En tiempo de militares, también era así, cochino, cualquiera te agarraban los militares y te violaban. Estés donde los terroristas, de respetar, te están respetando, pero los pasan al pelotón, ellos con cuchillo te hacen dormir, entonces ahí lo violaban a las chicas» (CVR. BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer, 60 años).

En las «retiradas» no tenían sal ni ropa, menos zapatos para caminar. Empezaron a morir de tifoidea y de paludismo. Las muertes por causa natural, las emboscadas y las amenazas para no escapar aumentaban,

mientras los ánimos de la «masa» bajaban; sin embargo, los mandos constantemente les decían que ya estaban cerca del poder, que ya estaban en la puerta del Palacio de Gobierno:

Muchas veces caminábamos por toda la quebrada sin calzado y, como nos encontrábamos en una situación de extrema pobreza (parece que ahora hay alguna ONG ahí [...]), eso nos obligaba a fabricar una protección para nuestros pies. Para protegernos de las espinas, envolvíamos nuestro pie con la hoja seca del plátano y éste lo sujetábamos con la fibra del plátano. Nos duraba muy poco tiempo y, apenas caminábamos unos dos o tres kilómetros, éste se nos acababa y nuevamente caminábamos despacio. (CVR. BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Varón, 30 años)

Ya no teníamos ropa, era marzo y el río había bajado, y no nos dejaban solos, nos amenazaban diciéndonos que nos iban a volar en pedazos. (CVR. BDI-I-P608. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer, años)

Moríamos con muchas enfermedades aparte de todo esto, pues imagínate con qué alimento vamos a estar bien en esos lugares. En ese monte que no había absolutamente nada. Comíamos hierba en el monte y, cuando nos perseguían los militares, hasta nuestros niños comían hierba y tierra. Al no poder soportar el hambre, estos niños comían como especie de una cabra hierbas y tierra, como había peligro, no podíamos salir a ningún lugar. (CVR. BDI-I-P616. Entrevista en profundidad, Chungi (La Mar). Mujer, 50 años)

Los niños estaban desnutridos y lloraban de hambre, por lo que los mandos de la «masa» y de la «fuerza local» decidieron ejecutarlos. En varios de los campamentos de Oreja de Perro, obligaban a las madres a matar a sus propios niños. Algunas los ahogaban en su pecho; pero, cuando la madre no quería acatar la orden del mando político del campamento, éste tomaba a los niños pequeños por los pies y les golpeaba la cabeza contra una piedra. Otras veces les amarraban una soga alrededor del cuello y los ahorocaban. El argumento para asesinar a estos niños era que los llantos los delataban frente a las patrullas militares:

La propia madre mató a su hijo, lo mató en Patawasi. Era de noche y no sé adónde lo habrán llevado, tampoco sé si lo han enterrado [...] era un bebito, habrá tenido aproximadamente medio año [...] lloraba mucho y, para que no lo oyeron los soldados, llamaron a la madre y le dijeron «miserable, calla a tu hijo» y, cuando le obligó a callarlo, ella [la madre] lo apretó entre sus senos al bebé y éste murió asfixiado, le quitó la respiración. (CVR. BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años)

Cuando lloraban de hambre los niños, lloraban pues y ellos los mataban cruelmente. ¡Qué iban a hacer los niños, tenían hambre y lloraban! [...] los mataban ahorcándolos, los apretaban del cuello y le tapaban la boca, así le mataban a los niños [...] yo he visto que han matado a una niña de una señora que estaba junto a mí, yo estaba viendo. (CVR. BDI-I-P616. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Mujer, 50 años)

A pesar de las constantes amenazas de los mandos locales, algunos decidieron escapar, más aún cuando por la radio comenzaron a escuchar que los militares ya no estaban matando a los *capitulados*. Por ello, los arrepentidos se presentaban ante las patrullas militares o se dirigían hacia sus bases.

### 3.5. LAS INCURSIONES DEL EJÉRCITO

#### 3.5.1. La llegada del Ejército a Chungui

La primera incursión del Ejército en Chungui se realizó en marzo de 1984. Al llegar los militares, al mando del capitán EP Terrones, encontraron un pueblo vacío. A los pobladores que encontraron en los alrededores los llamaron para regresar a la comunidad y acercarse a la patrulla; aproximadamente 15 personas regresaron. Este grupo que se acercó a los militares no había salido de la comunidad hacia la selva —como había sido la orden de PCP-SL— sino que se quedaron en sus hatos en las alturas con sus animales, cerca del pueblo. Ellos acudieron al llamado del Ejército por miedo y porque probablemente no estaban de acuerdo con el PCP-SL. En una segunda incursión del Ejército, a inicios de abril de 1984, el capitán EP Édison Rivas formó el grupo de defensa civil, que tiempo después cambiaría de nombre a ronda campesina (CVR. Testimonios 202695 y 204052). Junto con el grupo de defensa civil, los militares empezaron a salir a patrullar la zona. Tenían la orden de matar a quien encontraran en la selva, así se hallara indefenso.

A fines de abril de 1984 se instaló la base militar en Chungui (CVR. Testimonio 204052). La base obligó a la población a concentrarse en el pueblo y restringió la salida a la selva y a la feria de Sacharaccay. La pobla-

ción, en un primer momento, debía dormir en la base, que era el local municipal. Se instaló un sistema de vigías y el patrullaje junto con defensa civil fue constante.

El PCP-SL no había logrado tener mayor acogida en la población de Chungui, pues a la primera incursión militar varios pobladores regresaron a su comunidad y se organizaron junto con los militares en comités de defensa civil para iniciar la resistencia contra los subversivos. Cada vez que salían a patrullar, los militares iban al medio, protegidos por atrás y por delante por los miembros del grupo de defensa civil. Cuando traían gente que capturaban en el monte —en el caso de que los trajeran con vida— pedían a toda la población de Chungui que se formara en fila y la obligaban a insultar y golpear a los capturados a su paso de lo contrario, la población era castigada.

Capturaban a cantidad de gente y nos hacían reunir en la plaza. Nos decían «tienen que meterle palo a los sendistas [miembros del PCP-SL]». Si no le metías palo, creían que eras parte de ellos [del PCP-SL]. Entonces, todos, hasta los chiquitos, metíamos palo. Y si te veían que no pegabas, entonces al toque te recluía y comenzaba a golpearte. A los niños, nos hacían comer bosta si no golpeábamos. (CVR. BDI-I-P610. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 30 años, agrónomo)

Quienes participaron en la organización de defensa civil en la zona de Chungui —que fueron todos los varones y niños a partir de los 14 años— señalan que la etapa más cruel y sangrienta del conflicto armado fue entre 1984 y 1988, especialmente por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que realizó el Ejército. Los que fueron miembros de defensa civil intentan constantemente excusarse de algún tipo de responsabilidad y culpan de todas las acciones a los militares y a quienes están muertos: «Entonces el capitán nos inculpó y, como castigo, me mandaron con dos terrucos [miembros del PCP-SL]. Ahí es que lo han colgado de un árbol y empezamos a quemar con chamizos, con todo desperdicio, con tronquitos y empezaron a quemarlo y no se moría. Calatito nomás estaba, con las manos atadas. Eso fue nuestro castigo porque se nos escaparon terrucos [subversivos]» (CVR. BDI-I-P602. Entrevista en profundidad, Chungui (Chungui). Varón, 60 años).

La población de Chungui señala al capitán *Samuray* —responsable de la base en 1985— como uno de los militares más sanguinarios y violentos que haya tenido la base de Chungui. Por ejemplo, el primer presidente del comité de defensa civil de Chungui fue Maurino Quispe, quien, por órdenes del capitán *Samuray*, fue asesinado junto con su vicepresidente, José Jaycuri, en 1985. Las razones no son claras, sin embargo, la gente de Chungui presume que el capitán *Samuray* lo castigó porque creía que era subversivo.

### 3.5.2. La incursión del Ejército en Oreja de Perro

La zona de Oreja de Perro había sufrido la incursión de los sinchis de Andahuaylas, quienes ingresaban esporádicamente desde 1982 a la zona para supervisar el funcionamiento del sistema de vigías, que desapareció en la mayor parte de las comunidades con las ejecuciones que el PCP-SL realizó en 1983, salvo en Mollebamba, donde continuó funcionando hasta que se convirtió en un sistema de comités de defensa civil.

La base militar de la comunidad de Chungui, se estableció en 1984. Ésta dependía de Ayacucho. En Mollebamba se estableció la base militar en 1985. Ésta dependía de Apurímac. A su vez, se estableció, en 1986, una base militar en Pallqas, pero luego de un ataque fue desplazada a Chapi en 1987.

Entre febrero y marzo de 1984, miembros del Ejército acantonados en Andahuaylas ingresaron a Oreja de Perro por Mollebamba, donde organizaron a la población en comités de defensa civil. Apartir de entonces se iniciaron incursiones más sistemáticas a la zona de la Oreja de Perro tanto del Ejército como de los miembros de Defensa Civil de Mollebamba.

Desde Mollebamba, los policías que se habían establecido en esta localidad, programaban salidas hacia las comunidades mencionadas. Solamente encontraron comunidades despobladas. De esta manera, de acuerdo con un informante:

[...] acordaron hacer redadas y salir en busca de la gente. Entonces, a los que encontraban, ya les mataban. Por otro lado, saqueaban sus casas y se llevaban sus pertenencias, arreaban sus animales. En ese momento, empezó el pillaje. Se llevaron miles de cabezas de ganado en complicidad con los ganaderos de Andahuaylas y Ayacucho. Los propios mollebambinos se aprovecharon de los bienes patrimoniales de todas las comunidades que sufrieron el flagelo. (CVR. Testiminiario 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio del 2002)

Los causantes de la represión, de acuerdo con los pobladores de Oronqoy, fueron los comuneros de Mollebamba:

Las primeras personas que nos tildaron de terroristas fueron los comuneros de Mollebamba, quienes después de sacar una patrulla de militares y establecerlo o instalarlo en sus casas. Pero estas mismas personas fueron los primeros en venir a favor de los terroristas anteriormente; seguro que ellos también han sido engañados, estas personas de Mollebamba, Jarin Chungui, etc. Y como ellos se encontraban unidos, llegaron ellos como los soldados y nosotros no hemos podido reconocer cuál de ellos era y estuvimos con miedo, como si fuéramos unos animales nos encontrábamos y así pues los comuneros de Mollebamba entraron a matarnos, de la misma forma también entraron los comuneros de la parte de Chungui, Pallqas. Ellos vinieron proponiéndonos de cómo deberíamos de ser porque somos pueblos hermanos. (CVR. BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui))

Los pobladores piensan que los militares solos no hubieran podido llegar hasta Oreja de Perro: «Yo creo que los soldados solos no podrían venir a este lugar porque ellos eran personas de otros lugares e impulsados por los comuneros del lugar, donde les había instalado el gobierno, desde estos lugares venían estos militares con los mismos comuneros de Molle y lugares cercanos para matarnos» (CVR. BDI-I-P643. Grupo focal con mujeres, Oronqoy (Chungui)).

Algunos de los antiguos subversivos se pasaron al lado de los militares, especialmente en Mollebamba. En una de sus incursiones, tanto Defensa Civil como el Ejército de Andahuaylas ingresaron a Oronqoy; ahí sólo encontraron un pueblo abandonado con animales esparcidos en las pampas. Aprovechando la ausencia de la población, tanto Defensa Civil de Mollebamba como el Ejército saquearon, quemaron las casas y se llevaron los bienes que la gente había dejado. También algunos empezaron a llevarse animales que encontraban en su camino: «Entonces vino los militares de Mollebamba junto con los civiles y ahí empezó todo. Quemaron casas y todos los pueblos los quemaron. De ahí empezaron a traerse los animales. En todo eso ha participado Wálter Díaz; él trabajaba con los militares y el Partido [el PCP-SL] lo buscaba porque él se había escapado de PCP-SL» (CVR. BDI-I-P638. Entrevista en profundidad, Huallhua (Amco). Varón, 60 años).

Las matanzas y el arrasamiento de los pueblos se generalizaron. En toda la zona no existió comunidad o anexo que se librara de alguna incursión militar, con todo lo que ello implicaba: robo de bienes, animales, ejecuciones si encontraban gente cerca y la respectiva quema de casas. De acuerdo con los testimonios, la violencia provenía tanto de militares como de ronderos: «La gente de Mollebamba decía “mátenlos. Maten al ratero, al terrucho [subversivo] que nuestra comida se llevó, que hicieron masacre”. Así decían los de Mollebamba» (CVR. BDI-I-P619. Entrevista en profundidad, Yerbabuena (Chungui). Varón, 38 años).

Según los testimonios, en las siguientes incursiones que realizaron el Ejército y los grupos de Defensa Civil de Mollebamba, mataban toda persona que encontraban en el campo, pero antes la torturaban y mutilaban. A las mujeres —incluyendo a las niñas—, las violaban desde el oficial de mayor rango hasta el último miembro de los grupos de Defensa Civil: «Le teníamos más miedo a los ronderos y a los militares, especialmente a los ronderos porque mataban así nomás. Sus ojos de las mujeres sacaban, sus senos los cortaban, sus dedos le sacaban, sus orejas cortaban, entonces de eso tenía miedo. Así aniquilaban» (CVR. BDI-I-P633. Entrevista en profundidad, Huallhua (Anco). Mujer, 60 años).

Manifiesta un informante (CVR. Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio del 2002) que, en Sillapata, a orillas del río Pampas, fuerzas represivas encontraron a sesenta mujeres que fueron asesinadas a mansalva formándolas en columnas.<sup>35</sup> Igualmente, denuncia que arrojaron al vacío desde Sonqo María a 120 mujeres que se habían escondido en la puna. Finalmente, reporta que, en Oronqoy, en un sector llamado Tayaccata, encerraron a 120 personas entre varones, mujeres y niños, en una casa para quemarlos vivos. Este informante también explica que —a raíz de estas matanzas extrajudiciales, acciones rapaces y actos de pillaje cometidos por miembros del Ejército— pobladores naturales de Santa Carmen se aproximaron al cuartel de Andahuaylas en 1986 a denunciarlos. De acuerdo con este testigo, el mismo comandante de la base, al tomar conocimiento de estos crímenes, llamó a la prensa. Este hecho constituye un viraje importante para el cambio de actitud y estrategia de las fuerzas del orden. Fue a partir de ese momento que empezó el rescate de los pobladores que estaban en manos de los subversivos. Estas acciones permitieron rescatar a 1,215 personas de Oronqoy, Chapi, Pallqa, Vacahuasi, Putucunay y Totora, las cuales permanecieron varios meses en Andahuaylas.

<sup>35</sup> Esta afirmación no precisa si los perpetradores fueron policías, ronderos o miembros del Ejército.

A la par de estas medidas, se estableció una base militar en Chapi a finales de 1987, a donde retornan 150 personas.

Otra versión afirma que, a raíz de la extorsión, los abusos y las violaciones sexuales cometidas por los militares, los pobladores de la zona de Chungui mandaron un memorial al cuartel de Ayacucho. Cuando llegaron al cuartel, «sólo en la mesa de partes les recibieron el documento y no les dejaron hablar con el general» (CVR. Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002). Es más, esta comitiva fue detenida por esa acción y tuvieron que pagar con un «poncho de Villa» para salir en libertad (ibíd). Los pobladores no desistieron y, al año siguiente, volvieron a mandar «una nueva queja, con otro comisionado al cuartel de Ayacucho».

Lo cierto es que la población recuerda que es con la llegada del mayor EP Miguel Seminario, conocido como Ayacuchano (CVR. Testimonio 202678), designado como jefe de la base de Chapi entre octubre y diciembre de 1987, que la actitud del Ejército cambió: «Ese mayor Ayacuchano no permitía que se le golpee a los detenidos. Él reúne a la gente de los montes y hace el repoblamiento de Chapi antes del 25 de diciembre de 1987» (CVR. Testimonio 202678. Chungui (La Mar), 5 de noviembre de 2002). A partir de esa fecha, las acciones del mayor Ayacuchano «lograron algo de pacificación» (CVR. Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002):

Cuando me agarraron, me encarcelaron los soldados, me agarraron en Matachacra, pero no nos mataron sino nos juntaron. Los que querían matarnos eran los ronderos de Mollebamba, pero, entonces, un oficial nos libró. (CVR. BDI-I-P19. Entrevista en profundidad, Yerbabuena (Chungui). Mujer, 38 años)

Ya no los castigaban mucho, sólo golpeaban a todo los que agarraban y en el río los bañaban, pero ya no mataban a los que capturaban, los mandaban aquí a la base de Pallqas y a otros lugares, pero no los mataban. Sólo los agarraban a veinte, a treinta hasta a cuarenta. Los agarraban con sus ollitas, con sus mantitas venían. Otros venían con sus bebitos, otras mujeres estaban embarazadas y lloraban. Ellos decían [los *capitulados*] «teníamos miedo de morir, por eso escapábamos». (CVR. BDI-I-P636. Entrevista en profundidad, Pallqas (Chungui). Mujer, 40 años)

La misión central de las fuerzas del orden ya no era ejecutar de manera indiscriminada a todo aquel que encontraran a su paso en las «retiradas». Ahora la consigna era salvar a los pobladores y recuperarlos (CVR. Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002):

Los militares habían venido de Chungui, Mollebamba y también vinieron los civiles [la patrulla de Defensa Civil], también de los mismos lugares y otros anexos. Nos capturaron a todos, pero ya nos tenían de forma normal. Nos dijeron: «¡Alto! Ya no escapan que no los vamos a matar». Y después nos llevó hacia los sembríos de papa, que ya estaban buenos para comer y, al lado de este sembrío, teníamos un local que habíamos construido y ahí se pusieron a cocinar las señoritas para que pudiéramos comer papa. Ahí es cuando nos pusimos a recuperar del hambre y después de esto nos condujo hacia Chapi. Ahí en Chapi sólo habían helicópteros que transportando a los militares. Después de esto ya estuvimos contentos porque ya no mataban. A los mandos subversivos les tomaban su manifestación y después se los llevaron en helicópteros. Los llevaron presos y ellos estuvieron presos en diferentes lugares. (CVR. BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Mujer, 30 años)

A partir de 1987 confluyeron varios factores que determinaron el fracaso del PCP- SL en la zona. La población que se encontraba viviendo en las «retiradas» con PCP-SL, tanto la «masa» como la «fuerza local», empezó a desertar y se presentó a las distintas bases militares existentes. Las condiciones de vida en la selva se tornaron insoportables. Los niños morían de hambre y de sed; comían semillas de calabaza, maíz crudo y no tenían sal. Por lo tanto, la desnutrición se hacía más crónica y las muertes más frecuentes. Asimismo, fueron importantes los rastrillajes que el mayor *Ayacuchano*, junto con los capitanes de la base Mollebamba y Pallqas, comenzó a realizar. Capturaban a los pobladores que encontraban en la selva y los protegían de las rondas campesinas, ya que, en muchos casos, éstas reclamaban que los ejecuten por ser subversivos. Los capitanes y el mayor *Ayacuchano* prohibieron este tipo de acciones así como cualquier clase de tortura :

La gente de Mollebamba nos agarró primero. Entonces nos dijeron «¡los vamos a cortar como a perros, como a corderos! Nosotros los vamos a matar de una vez». Entonces, pensábamos ya estamos en sus manos y seguro íbamos a morir, pero después aparecieron los soldados y nos rescataron. (CVR. BDI-I-P19. Entrevista en profundidad, Yerbabuena (Chungui). Mujer, 38 años)

Entonces, nosotros [los soldados] teníamos que ayudarlo a caminar, los chiquitos no podían caminar y teníamos que cargarlos, cargábamos sus cosas, sus ollas, sus frazadas [...] nosotros teníamos que ayudarlos. (CVR. BDI-I-P19. Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Varón, ex sanitario del Ejército de la base de Chungui)

Una vez recuperados, los niños eran ofrecidos y «repartidos» a las familias del distrito. En algunos lugares, se propició el tráfico de niños que fueron usados como servidumbre:

Cuando llegué aquí a la base de Chungui me sacó la señora Emilia. Es que cuando estábamos en la base ofrecían a los pobladores quién quería llevarse a uno de nosotros. Entonces, esta señora me preguntó si quería irme a vivir con ella, entonces ya estuve sana y salva. (CVR. BDI-I-P616. Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Mujer, 50 años)

Para esto los militares habían dicho que en la base habían varios niños y que, si querían, podían sacarnos. Entonces vino este señor y me escogió, como yo tenía el mismo nombre que su madre. Él me sacó para que pudiera ayudarle en su trabajo. (CVR. BDI-I-P606. Entrevista en profundidad, Chungui (La Mar). Mujer, 30 años)

En 1988 se desactivó la base de Chapi y las personas retornaron a Andahuaylas. En 1992 se implementó un programa de retorno a Yerbabuena, Putucunay, Belén de Chapi, Oronqoy, Santa Carmen, Chillihuá y Tastabamba (CVR. Testimonio 201316. Chungui (La Mar), 24 de junio de 2002).

Al final del conflicto armado interno, según los datos reunidos por la CVR, se registran 1,381 personas muertas y desaparecidas en Chungui entre 1980 y el 2000, casi un 17% de la población del distrito censada 1981.

Al comparar los censos de 1981 y 1993 en el distrito de Chungui, se constata un descenso de cerca de 47.5% de la población total (de 8,257 habitantes en 1981 a 4,338 en 1993). Es especialmente la población en áreas rurales la que ha descendido de 7,682 habitantes en 1981 a 3,797 pobladores en 1993, lo que representa una baja del orden del 51%. No existen datos exactos que indiquen cuántas de estas personas se han desplazado a otros lugares y cuántos han sido asesinados o han desaparecido.

### 3.6. CONCLUSIONES

En el recuerdo de la población entrevistada en Oreja de Perro, el PCP-SL aparece inicialmente identificado como continuación de la guerrilla de 1965. No obstante, la realidad muestra que, con el PCP-SL, se inauguró una estrategia inédita en la historia de los conflictos armados internos en el Perú, una de las más autoritarias, despiadadas y crueles.

Cuando el PCP-SL ingresó a la zona, el sistema de haciendas había desaparecido por completo. En Oreja de Perro hubo seis haciendas, entre las cuales destacaba Chapi. Todas ellas habían sido desmembradas hacía mucho tiempo atrás, principalmente a raíz de la guerrilla de 1965, la Reforma Agraria de los años setenta y la toma de tierra por VR en 1974. No todos los comuneros, sin embargo, se beneficiaron de la misma manera con estos hechos, puesto que se dio un proceso de diferenciación interna. En muchos casos, los problemas se derivaban de anteriores conflictos por linderos. Fue en medio de este complejo panorama que ingresó el PCP-SL, que fue muy hábil para identificar los conflictos, situarse en sus intersticios, exacerbarlos a su máxima expresión y ganar de esa manera aliados a su causa.

Al colapsar el sistema de haciendas, desapareció un tipo de orden determinado. Se produjo un vacío de poder en el campo y el PCP-SL apareció llenando ese vacío con un nuevo tipo de orden. Este caso ilustra claramente el tipo de Estado que el PCP-SL ofrecía: autoritario y sanguinario, cuyo horizonte se diluía con la destrucción de los pueblos e individuos que no estaban de acuerdo con ellos.

El ingreso del PCP-SL fue paulatino y silencioso a través de las escuelas, a partir de las cuales pudo asentarse en la zona.

El control y coacción que ejerció el PCP-SL en las «retiradas» en la zona de Oreja de Perro, superó lo humanamente permisible. En estos lugares, la vida entera de los pobladores era controlada al punto que incluso estaban obligados a quererse y a no mostrar sentimientos de desaprobación, duda o tristeza. En otras palabras, el PCP-SL se había convertido en amo y señor de los pobladores, quienes pasaron a ser esclavos que tenían que obedecer sus mandatos, de lo contrario eran vilmente asesinados.

Vivir en «retiradas» significó no solamente el desmembramiento de las comunidades, sino también de las familias. Hasta el día de hoy se encuentran historias de pobladores que eran niños en esos años, que fueron entregados a diversas familias en calidad de empleados y que continúan buscando a sus familiares.

En este estudio, se distinguen claramente dos etapas en la estrategia contrasubversiva. En un primer momento, los pobladores fueron coaccionados por los militares para formar rondas de autodefensa. En caso de no cumplir con estas órdenes, los comuneros eran detenidos y torturados. Era la misma lógica utilizada por el PCP-SL: «o te unes a mí o mueres». (CVR. Testimonio 202660. Chungui (La Mar), 24 de septiembre de 2002). La tortura se convirtió, de acuerdo con los pobladores, en sinónimo de confesión. Así, se vieron obligados a delatar a personas que colaboraron en distinto grado con el PCP-SL. El círculo se completa cuando los acusados, sin posibilidad de explicación alguna, eran ejecutados sin mayor cuestionamiento (*ibidem*). En la segunda etapa se produjo un cambio de actitud en los militares frente a la población civil en cuyo territorio se estaba llevando a cabo el conflicto armado interno. En ese sentido, hay que reconocer la actuación del mayor EP Miguel Seminario, conocido como *Ayacuchano*, quien, en lugar de seguir aniquilando indiscriminadamente a la población, decidió recuperarla de manos de la subversión. Ello favoreció que muchos se animaran a desertar del PCP-SL y se incorporaran a los comités de autodefensa. Este cambio en la estrategia contrasubversiva coincidió con un hartazgo de la «masa» del trato que recibía del PCP-SL y de la situación que se veían forzados a soportar bajo las órdenes de los subversivos.

En efecto, la vida en el monte se había tornado insopportable. Los pobladores que conformaban la «masa» se encontraban completamente desmoralizados, porque, mientras los mandos les prometían el poder, ellos no encontraban más que sufrimiento y muerte en manos del PCP-SL y del Ejército. Ello fue mermando el apoyo con el que contaban los subversivos inicialmente. Este desencanto gradual tubo como consecuencia que, hacia 1986, aumentara el número de desertores del PCP-SL. La situación se vio favorecida por la sequía, gracias a la cual los pobladores podían cruzar con facilidad el río Apurímac. Algunos, en la huida, eran atrapados por militares; los que se entregaban pacíficamente y colaboraban eran liberados y podían emigrar hacia Andahuaylas. También se ha registrado el caso de un campamento de alrededor de veinte personas de Tastabamba que escapó junto con sus mandos hacia Ongoy.

#### 4. EL CASO UCHURACCAY

Uchuraccay es una comunidad quechua ubicada en las alturas de la provincia de Huanta (Ayacucho), a 4 mil metros sobre el nivel de mar (véase el mapa de la ubicación de Uchuraccay). El 26 de enero de 1983 fueron asesinados allí los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán de *El Diario de Marka*; Jorge Luis Mendivil y Willy Retto de *El Observador*; Jorge Sedano de *La República*; Amador García de la revista *Oiga*; y Octavio Infante del diario *Noticias de Ayacucho*, así como el guía Juan Argumedo y el comunero uchuraccáin Severino Huáscar Morales.

Durante los meses siguientes, Uchuraccay continuó siendo escenario de violencia, muerte y desolación: 135 comuneros fueron asesinados como consecuencia de los ataques del PCP-SL y de la represión de las fuerzas contrasubversivas y de las rondas campesinas. A mediados de 1984, Uchuraccay dejó de existir debido a que las familias sobrevivientes huyeron, refugiándose en las comunidades y pueblos cercanos de la sierra y selva de Ayacucho, así como en las ciudades de Huanta, Huamanga y Lima. Sólo en octubre de 1993, algunas familias se aventuraron a retornar a sus antiguos pagos.

El asesinato de los periodistas motivó dos investigaciones. La primera estuvo a cargo de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, nombrada por el presidente Fernando Belaunde Terry el 2 de febrero de 1983 y presidida por el escritor Mario Vargas Llosa, la cual presentó su informe un mes después, en el que señalaban como responsables del crimen a los campesinos de Uchuraccay. La segunda investigación fue realizada por el Poder Judicial en un proceso penal sumamente confuso y dilatado, cuyo fallo definitivo fue emitido el 9 de marzo de 1987. En éste se sentenciaba por homicidio a los campesinos Dionisio Morales Pérez, Simeón Aucatoma Quispe y Mariano Ccasani González y se ordenaba la captura de otros 14 campesinos de Uchuraccay.

La muerte de los 135 uchuraccáin, así como la desaparición de la comunidad por largos años, nunca alcanzaron notoriedad pública y quedó en la memoria privada de los familiares y comuneros hasta el 1 de junio

de 2002, día en que la población entregó a los representantes de la CVR la «Lista de uchuraccaínos asesinados» elaborada en dos asambleas comunales.

Por todos estos sucesos, Uchuraccay es un referente emblemático de la violencia y el dolor en la memoria colectiva del país, así como de las demandas de justicia y verdad efectuadas durante todos estos años. Al olvido que durante veinte años recubrió la muerte de los comuneros, se suma el carácter controvertido de las investigaciones sobre la muerte de los periodistas.

Esta parte del Informe de la CVR se basa en las investigaciones realizadas por el Área de Estudios en Profundidad y el Equipo Móvil de Recojo de Testimonios de la Sede Sur Central de la CVR. Las fuentes analizadas, fueron:

- 21 testimonios recogidos por el Equipo Móvil de Recojo de Testimonios
- La «Lista de uchuraccaínos asesinados» proporcionada por los comuneros de Uchuraccay en junio de 2002
- El expediente del proceso judicial
- El manuscrito de un mando local del PCP-SL de sobrenombre *Suni Puni*, escrito en 1985
- Libro de actas de los Comités de Defensa Civil (CDC) de las comunidades de Balcón, Carhuapampa y Acco (1984-1985)
- Entrevistas realizadas por el Equipo de Estudios en Profundidad de la CVR
- Asamblea con las autoridades de la comunidad y entrevistas realizadas por el comisionado Alberto Morote Sánchez el día 27 de abril de 2003
- Entrevistas realizadas anteriormente como parte de una investigación antropológica del historiador y antropólogo ayacuchano Ponciano del Pino (entre los entrevistados figuran comuneros sobrevivientes de Uchuraccay, familiares de los periodistas y comuneros asesinados, abogados, periodistas, militares y policías)
- El informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, presidida por Mario Vargas Llosa
- La transcripción de la asamblea comunal realizada con dicha Comisión Investigadora en Uchuraccay el 11 de febrero de 1983, la cual ha sido proporcionada por el periodista Phillip Bennet
- Diversas fuentes periodísticas y bibliográficas

#### 4.1. LOS ANTECEDENTES Y HECHOS DE LA MASACRE

##### 4.1.1. Uchuraccay

El 10 de octubre de 1993, 24 familias retornaron a Uchuraccay después de un largo período de ausencia, desarraigo y diáspora. Habían pasado diez años desde que abandonaron sus hogares, tierras y animales huyendo de la violencia. Durante esos años vivieron refugiados en diversos caseríos del valle del río Apurímac y en algunos asentamientos humanos de ciudades como Ica, Huanta, Ayacucho y Lima.

Una de las novedades que trajo consigo el retorno fue la formación del nuevo pueblo de Uchuraccay, compuesto por medio centenar de pequeñas casas contiguas hechas con paredes de adobe y techos de teja y calamina, recostadas sobre una inmensa ladera, desafiando el viento frío y cortante de la puna. El antiguo Uchuraccay, en cambio, era una comunidad con patrón de asentamiento disperso, cuyas familias vivían en pequeños pagos bastante distantes entre sí, dispersos por el territorio comunal.<sup>36</sup> Desde el nuevo pueblo, todavía puede observarse el antiguo centro de Uchuraccay con los restos de la plaza, la iglesia de piedra, el local comunal y el cementerio.

En 1981, la población de Uchuraccay era de aproximadamente 470 habitantes, de los cuales alrededor del 30% sabían leer y escribir, según la profesora Alejandrina de la Cruz Llamocca, quien tuvo a su cargo el censo de ese año en la comunidad.<sup>37</sup> En la plaza del pueblo, se ubicaban la casa hacienda, la iglesia, el cementerio, el cabildo y la escuela, y en sus alrededores vivían unas ocho familias. Hacia el este, en la parte alta de la plaza,

---

<sup>36</sup> Esta modalidad de ocupación del espacio, común en poblaciones de altura dedicadas al pastoreo, permite a las familias manejar eficazmente el difícil territorio de la puna.

<sup>37</sup> Declaración de la profesora Alejandrina de la Cruz Llamocca, a fojas 1642 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

se encontraba el pago de Wachwasaqa y, a unos 15 o veinte minutos a pie, Uchuraccaypata y Huantaqasa. Tikllaqocha y Wachubamba se encontraban a unos cuarenta minutos a pie de la plaza del pueblo.

Ubicadas a más de 3,800 metros de altura, las punas de Uchuraccay eran una zona de frontera entre la selva y los valles de Huanta y Tambo, un lugar estratégico para el PCP-SL, que consideró dicho territorio como corredor para incursionar en esos valles desde el Rasuwilca, nevado y *apu* tutelar más importante del norte de Ayacucho que los subversivos convirtieron en base de operaciones.

#### 4.1.2. Antecedentes

A mediados de 1981 llegaron a Uchuraccay algunas personas desconocidas que se presentaron ante los pobladores «como negociantes o buscando trabajo». <sup>38</sup> Los forasteros visitaron la escuela y las casas de algunas familias, buscando intercambiar sus productos por chuño y ocas. Algunos ofrecían botones, agujas, hilos, prendedores, anillos y medallas; otros, condimentos de cocina como pimienta, comino, sal y palillo. Uno de estos negociantes comenzó a visitar la comunidad de manera constante. Era un hombre adulto que se presentó como *Martín* y dijo ser natural de Macachacra;<sup>39</sup> se hizo conocido en la comunidad mediante la entrega de sus productos:

[...] caminaba de casa en casa repartiendo estos productos y diciéndoles que regresaría otro día para que le pagaran con chuño, pero el tema de conversación era la situación de pobreza en que se encontraban los pobladores y la situación de los policías y la gente rica.<sup>40</sup>

[...] yo le dije para cancelar con chuño blanco y nos dice que sólo dejaría y vuelve luego [...] no quiso recibir y nos dejó varias cosas que ni recuerdo qué cosas eran, había también pimientitas, imperdibles [...] Cuando vuelva me van a dar *muray* [chuño blanco] nos dijeron.<sup>41</sup>

Al cabo de un tiempo, *Martín* y sus acompañantes lograron entablar amistad con algunas familias, ganándose su apoyo y haciéndose compadres «por levantar del suelo a los recién nacidos con varios pobladores».<sup>42</sup> De ese modo, realizando reuniones en la escuela de la comunidad, logró convencer a algunos a unirse a la «guerra popular»:

Haciéndose compadres los ha convencido [...] Los engañaba y la maestra les decía está bien que anden en eso, porque ustedes para que salgan de lo que están pobres tienen que apoyarlos, así tendrán otra vida mejor. Todo eso decía la profesora todas las noches cuando se reunían en la escuela [...] a toda la gente, a sus compadres, co-madres y ahijados los juntaba la maestra, y a las personas que venían del otro lado les daba comida, incluso con los chicos, o sea, sus alumnos, mandaba pedir alimentos y los hacía llamar a sus padres porque la profesora necesitaba verlos y, a cambio, a los chicos les regalaba caramelitos o galletitas. Entonces, esta gente extraña se alojaba junto con la maestra por dos o tres días.<sup>43</sup>

Otros comuneros, en cambio, comenzaron a sospechar de los forasteros: «[...] empezó a hablar que las haciendas tenían que desaparecer y mi esposo al escuchar esto se aburrió [...] este cojudo tonterías me conversa [...] no entiendo por qué tiene que desaparecer las haciendas si nosotros somos los que estamos trabajando en esas tierras».<sup>44</sup>

El PCP-SL se estableció de esa manera en Uchuraccay bajo el mando de *Martín* y contó con algún tipo de apoyo de la profesora del pueblo<sup>45</sup> y de varios pobladores. Hacia mayo de 1982, los miembros del PCP-SL habrían logrado el apoyo de alrededor de 15 pobladores.<sup>46</sup> Un manuscrito subversivo fechado unos años después se refiere a Uchuraccay como una de las comunidades en las cuales el PCP-SL había logrado conformar «bases de apoyo»:

<sup>38</sup> CVR. Testimonio 201681.

<sup>39</sup> CVR. Testimonio 201681.

<sup>40</sup> CVR. Testimonio 201695.

<sup>41</sup> CVR. Testimonio 201679.

<sup>42</sup> CVR. Testimonio 201679.

<sup>43</sup> CVR. Testimonio 201681.

<sup>44</sup> CVR. Testimonio 201681.

<sup>45</sup> Los testimonios que insisten al respecto son varios: 201681, 201687, 201690, 201995.

<sup>46</sup> CVR. Testimonio 201695.

Desde 1981, Uchuraccay, Iquicha y Huaychao eran bases de apoyo donde existían ya pelotones de la fuerza local y unidades guerrilleras. Entre los combatientes de esta zona, figuraba el compañero *Severino*, comisario del Comité Popular de Uchuraccay. Varias de nuestras compañías de la fuerza principal habían permanecido en esta zona por varios días. Desde aquí fueron nuestros combatientes a sacudir al soñoliento enemigo que dormía en los puestos GC [de la Guardia Civil] de Huanta y de Tambo.<sup>47</sup>

Este manuscrito pone en evidencia la formación de células miembros del PCP-SL en las comunidades de las alturas de Huanta y la participación activa de algunos comuneros de Uchuraccay como *Severino*.

El PCP-SL buscó controlar las comunidades de las punas de Huanta con la finalidad de utilizar dicha zona como un corredor estratégico para el desarrollo de sus acciones, por su ubicación intermedia entre los valles y la ceja de selva ayacuchana. La ubicación de Uchuraccay, a su vez, calzaba plenamente con dichos objetivos, debido a que era la comunidad más cercana al Rasuwilka, en cuyas inhóspitas faldas las huestes del PCP-SL encontraron un lugar ideal para su refugio y desplazamiento militar. Así, pues, en enero de 1982, luego del asalto al puesto policial de San José, las columnas del PCP-SL huyeron hacia Uchuraccay para ocltarse y luego dispersarse hacia diversas localidades: «los que asaltaron se fueron para arriba [...] incluso bailaron en la puerta del cementerio del pueblo y de allí se separaron para allá y para acá».<sup>48</sup>

Durante los años 1981 y 1982, el incremento de las acciones del PCP-SL en el marco de su II Plan Militar, dirigido a «desarrollar la guerra de guerrillas»,<sup>49</sup> significó también la intensificación de sus acciones a lo largo del corredor estratégico de las alturas de Huanta y el paulatino aumento de su presión sobre las comunidades de la zona. Uno de los efectos de esta escalada subversiva fue el repliegue de la presencia policial en el campo: muchos puestos policiales de los pequeños pueblos y capitales de distrito fueron retirados y concentrados en las capitales de provincias. Con ello, dejaron desguarnecidas las zonas rurales justamente cuando las maniobras políticas y militares de las columnas del PCP-SL aumentaban al poner en práctica su estrategia de «liberar» el campo destituyendo y reemplazando a las autoridades locales por sus comisarios.

El ataque al puesto policial de Tambo, ocurrido el 11 de octubre de 1981, mostró la debilidad de los puestos policiales, que no habían sido diseñados para resistir ataques de este tipo y, en su mayoría, contaban con apenas media docena de policías.<sup>50</sup> Cinco meses después de ese ataque, el 15 de mayo de 1982, el PCP-SL atacó nuevamente Tambo y encontró «un pueblo totalmente desguarnecido de vigilancia policial: toda la dotación había sido retirada a la capital provincial».<sup>51</sup> Este panorama de abandono se extendió durante todo 1982. El ataque al puesto policial de Vilcashuamán, el 22 de agosto, con el saldo de cuatro policías muertos y tres heridos, representó la gran victoria del PCP-SL en las provincias del norte de Ayacucho. Los ataques a los puestos policiales tenían un impacto significativo en la imagen de avance incontenible que el PCP-SL quería proyectar entre sus bases en el marco de su II Plan Militar.<sup>52</sup>

*Severino*, que en el manuscrito subversivo es nombrado como «comisario del Comité Popular de Uchuraccay», era Severino Huáscar Morales Ccente, uchuraccaino que vivía en Huantaqasa, uno de los pagos de la

<sup>47</sup> Suni Puni (seud.). «Plumas y montañas». Manuscrito de un mando local del PCP-SL fechado en marzo de 1985, p. 22.

<sup>48</sup> CVR. Testimonio 201681.

<sup>49</sup> Se trató del segundo plan militar del PCP-SL, implementado bajo la consigna «Desarrollar la guerra de guerrillas» y programado entre enero de 1981 y marzo de 1983. Este plan, conocido también como «La gran ola», estuvo compuesto por dos momentos (olas) de acción estratégica: la primera se desarrolló entre enero y mayo de 1981 bajo la consigna «abrir zonas guerrilleras en función de las bases de apoyo» y la segunda se desarrolló entre mayo de 1981 y marzo de 1983 bajo la consigna «desplegar la guerra de guerrillas». Esta segunda ola, a su vez, se componía por tres oleadas dirigidas a «conquistar las armas y medios» (mayo a septiembre de 1981), «remover el campo con acciones guerrilleras» (octubre de 1981 a marzo de 1982) y «batir al enemigo» (noviembre de 1982 a marzo de 1983), estableciendo finalmente los llamados comités populares. (Véase «Resumen de planes y campañas durante nueve años de guerra popular». En Documentos de la III Sesión –18 al 29 de junio de 1989– del I Congreso del PCP-SL).

<sup>50</sup> Tanto en el ataque al puesto policial de Tambo como al de Huancasancos, el PCP-SL encontró contingentes de seis policías que, frente a los ataques, se replegaron, el primero a San Miguel y el segundo a Huancapi, capitales de sus respectivas provincias. En Huanta, durante 1982, los puestos policiales de San José de Santillana, Mayocc y Luricocha terminaron igualmente replegándose. El ataque a puestos policiales fue una de las grandes estrategias militares del PCP-SL, junto a las emboscadas a patrullas policiales y militares.

<sup>51</sup> Caretas, nº 699, 24 de mayo de 1982, p. 18.

<sup>52</sup> Un documento del Comité Central del PCP-SL, fechado en 1982, señalaba la realización de 2,900 acciones —entre ellas los ataques a los puestos de Tambo y San José de Secce— como evidencia de que la guerra de guerrillas se había «fortalecido y conquistado un gran salto en su desarrollo», logrando el «surgimiento y desarrollo de zonas guerrilleras, cuya importancia está en que son los ámbitos en que, a través de la pujanza y creciente marea armada de la guerra de guerrillas, hemos de levantar nuestras futuras bases de apoyo» (PCP-Comité Central. Desarrollemos la guerra de guerrillas. Lima: Bandera Roja, 1982).

comunidad. *Severino*, tenía 31 años de edad, era músico arpista y comerciante de ganado con muchas relaciones en otras comunidades. Su esposa, su hijo<sup>53</sup> y la gente del pueblo reconocen que fue él quien permitió el establecimiento del PCP-SL en Uchuraccay. En una ocasión, se perdieron vacas, caballos y ovejas de su propiedad; al no lograr recuperarlos, *Severino* viajó a buscar apoyo y regresó con una persona que comenzó a exigir bajo amenazas a los presuntos responsables del robo que le restituyeran los animales. Posteriormente, «la comunidad se dio cuenta que la persona desconocida era un senderista [miembro del PCP-SL], pues, antes de resolver el problema del robo, buscó el apoyo de Sendero Luminoso [el PCP]. A partir de esa fecha, esta persona frecuentaba la comunidad acompañado de otras más».<sup>54</sup>

Por intermedio de *Severino*, así como de colaboradores cercanos como Gregorio Cárdenas, Francisco Morales y otros,<sup>55</sup> los miembros del PCP-SL llegaron a visitar casa por casa a los uchuraccainos y recibieron algún tipo de apoyo. Bajo el mando de *Martín*, estos miembros del PCP-SL —jóvenes que en su mayoría venían de Huanta y Tambo— convocaban a las reuniones en casa del responsable local y adoctrinaban a los jóvenes del pueblo que participaban de ciertas acciones en la zona:

*Martín* y otros miembros del PCP-SL convocaron a una reunión a todos los pobladores y nombraron a seis milicias [...] estas milicias, junto a *Martín* y otros miembros del PCP-SL, durante cuatro meses, desaparecieron de la comunidad, sólo refieren sin dar mayores comentarios que habían salido a caminar.<sup>56</sup>

Sin embargo, el PCP-SL no logró establecerse del todo en Uchuraccay e imponerse sobre la estructura tradicional de poder. Aunque *Severino* era el comisario local del PCP-SL, y «los que se agarraban de los miembros del PCP-SL ya eran intocables»,<sup>57</sup> las autoridades comunales y los varas tradicionales seguían ejerciendo su mando en Uchuraccay, al igual que en las comunidades vecinas de la zona como Huaychao, Macabamba, Cunya, Ccarhuahurán, entre otras. Tal situación de ejercicio paralelo del poder en Uchuraccay entre las autoridades comunales tradicionales y el responsable del PCP-SL se diferenciaba sustancialmente de lo que venía sucediendo en esos momentos en comunidades de la provincia de Víctor Fajardo como Sancos, Lucanamarca y Sacsamarca, por ejemplo, donde el PCP-SL impuso su poder por medio de sus comisarios locales.<sup>58</sup> Esta diferencia puede explicarse por la ausencia de una base social juvenil, colegiales de secundaria especialmente. En Uchuraccay, la escuela era muy pequeña y contaba con una sola profesora encargada de enseñar cada año a cuarenta o cincuenta alumnos agrupados en una sola aula, en su mayoría varones de diferentes edades que cursaban hasta el cuarto año de primaria.<sup>59</sup> Por ello, la escuela de Uchuraccay no tuvo tanta fuerza como punto irradiación de la ideología del PCP-SL y su nuevo poder.<sup>60</sup> La permanencia de la organización communal, además, permitió a las autoridades articular poco a poco a los comuneros opuestos a la presencia subversiva, cuyo rechazo se hizo evidente hacia octubre de 1982. En las comunidades de Víctor Fajardo, en cambio, no existía ya el sistema de varayocs.

Las tensiones afloraron conforme los miembros del PCP-SL aumentaron sus presiones sobre los pobladores y los conminaron a participar de sus acciones, sobre todo a los más jóvenes.<sup>61</sup> De igual modo buscaron adoctrinar y organizar a las mujeres del pueblo a través de la formación de una «escuela de mujeres»:

[...] nombraron a personas responsables para que se movilicen con ellos, para que realicen asambleas y para que agrupen a las personas. Era como autoridades nombradas por ellos, en el 82. En esa fecha, hacían asambleas, es-

<sup>53</sup> Su viuda dio su testimonio al responsable zonal de la CVR en Ayacucho y lo confirmó en una entrevista anterior hecha en Uchuraccay el 9 de febrero de 2002. Su hijo también ha ofrecido su testimonio (203432).

<sup>54</sup> CVR. Testimonio 201687.

<sup>55</sup> CVR. Testimonio 201681. Se mantienen en reserva otros nombres de colaboradores cercanos del PCP-SL porque actualmente están vivos.

<sup>56</sup> CVR. Testimonio 201695.

<sup>57</sup> CVR. Testimonio 201679.

<sup>58</sup> A partir de 1984 esas comunidades-distrito pasaron a constituir la provincia de Huancasancos. Véase el estudio de caso de estas comunidades.

<sup>59</sup> Declaraciones de Alejandrina de la Cruz Llamocca, profesora de Uchuraccay, a fojas 1642 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>60</sup> Aunque había sido inaugurada en 1959, el mismo año de la reapertura de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, el escaso desarrollo de la escuela y las dificultades de su articulación con la vida comunal fueron consecuencia de la pobreza generalizada y no tanto de la falta de interés de los campesinos. La debilidad de la escuela fue percibida por el asesor lingüístico de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, Rodolfo Cerrón Palomino, quien mencionó en su informe que se trataba de una «escuelita» que «no parece jugar un rol significativo para la población estudiantil» («Informe de la Comisión de Lingüistas». En Informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay. Lima, 1983, p. 106).

<sup>61</sup> CVR. Testimonio 201695.

pecialmente en las noches, diciendo estamos haciendo escuela de mujeres. Entonces, las autoridades de la comunidad empezaron a oponerse y a discutirles, diciendo que eso está mal y que no podían hacer lo que quieren.<sup>62</sup>

[...] en octubre de 1982, los miembros del PCP-SL y las seis milicias regresaron nuevamente y empezaron la creación de la escuela para mujeres; a todas las mujeres las invitaron a participar en esta escuela, pero las mujeres avisaron a sus esposos y padres, esto sembró una sospecha a los varones.<sup>63</sup>

Tal vez «tenían otra intención», según uno de los entrevistados, sobre todo porque las señoritas y jóvenes eran convocadas por las noches: «¿Qué tipo de reunión va a ser? Nosotros también vamos a escuchar, queremos conocer, somos sus parientes y esposos, diciendo». <sup>64</sup> Así es como se organizan clandestinamente para oponerse a la formación de la «escuela de mujeres» bajo el liderazgo de Alejandro Huamán Leandro — presidente de la comunidad —, Dionisio Morales Pérez, Alejandro Morales Pérez y Sacarías Mauli.

Poco después la población captura a *Martín* y otros cinco jóvenes miembros del PCP-SL, entre ellos una mujer. Los jóvenes lloraron pidiendo perdón y rogaron que los dejen irse. *Martín* fue el único que no quiso hacerlo. Las autoridades habían decidido asesinarlos, sin embargo, la comunidad se opuso y decidió perdonarlos y dejarlos ir, advirtiéndoles que no volvieran nunca más:

Estuvimos varias horas discutiendo, más o menos hasta las cuatro de la tarde. Nosotros seguíamos tomando nuestro traguito para seguir teniendo valor. A esa hora empezamos a agarrar a *Martín* y éste sacó de su bolsillo un arma chiquito. De entre todos lo agarramos, lo tumbamos y le pisamos las manos, pero no soltó su arma, tampoco disparó. Mientras tanto, los demás también agarraban a los cinco acompañantes de *Martín*. Los queríamos matar, pero a oposición de la mayoría los dejamos ir, advirtiéndoles nunca más volvieran.<sup>65</sup>

Al cabo de unos días, durante la fiesta de la Virgen del Rosario, el PCP-SL colocó una bandera roja en uno de los cerros, la cual fue arrancada y quemada por el presidente de la comunidad, Alejandro Huamán:

Nosotros fuimos organizadores de la fiesta de octubre y esa noche lo plantaron banderolas en el cerro del frente, allí empezó. Se reventó cohetes porque era la víspera de una fiesta, luego allí pues Alejandro Huamán, cuando estaban retornando de la fiesta, encontró la banderola de los subversivos y diciendo: «carajo, esta banderola para qué hacen flamear aquí» y empezó a despedazar y quemarlo. Pero antes de colocar la bandera roja, los subversivos pasaron por la casa de NN<sup>66</sup> y éste les dijo: «yo camino con mi negocio», pero ellos le gritaban que avisara quiénes estaban en contra de ellos porque si no eres un cómplice carajo, tienes que hablar, y éste contestó: «ya no voy hablar de nada a nadie ni en contra de nada porque no pueden acusarme de nada». Eso le había comentado a mi esposo Ale Huamán cuando rompieron la banderola y quemaron.<sup>67</sup>

Estas primeras acciones de rechazo abierto de la comunidad frente a la presencia del PCP-SL fueron pacíficas, pero la situación cambió cuando, hacia fines de noviembre o inicios de diciembre, el PCP-SL asesinó a Alejandro Huamán, así como al comunero Venancio Auccatoma. En el caso de Alejandro Huamán, «dos grupos de los *tuta puriqauna* que aproximadamente sumaban sesenta» lo detuvieron en su vivienda a las tres de la madrugada frente a su familia diciéndole «llevántate, carajo». Lo acusaron de ser un «soplón» y «yana uma» [cabeza negra]. Su nuera, Dionicia Chávez Soto, fue herida de bala en ambos muslos al intentar defenderlo, mientras algunos de los miembros del PCP-SL allanaron la casa de ichu y luego la quemaron. Alejandro Huamán fue conducido a la plaza del pueblo, fue sometido a un «juicio popular» y encerrado en el local comunal. En la tarde, a pesar de los ruegos de su esposa, hermanos e hijos, Alejandro Huamán fue asesinado con un disparo de bala en la frente. Cometido el asesinato, «ya nadie quería acercarse por lo menos a ver el cadáver, quien lo hacía o recogía, corría la misma suerte y nos tildaban de *yana umas* [cabezas negras]; habían personas como espías que estaban viendo quiénes se acercan».<sup>68</sup>

El hijo de Alejandro Huamán recuerda que después «sólo quedaba llorar amargamente. Toda la familia quedó muy mal. Nunca antes habíamos visto tanta violencia, sangre. Lo único que nos quedaba era dedicar-

<sup>62</sup> CVR. Testimonio 201690.

<sup>63</sup> CVR. Testimonio 201695.

<sup>64</sup> CVR. Testimonio 201679.

<sup>65</sup> Ibídem.

<sup>66</sup> Nombre ininteligible en el testimonio.

<sup>67</sup> CVR. Testimonio 201681.

<sup>68</sup> Ibídem.

nos a trabajar en la chacra, al igual que toda la comunidad, pero siempre con ese temor de que iban a regresar en cualquier momento».⁶⁹

Los miembros del PCP-SL habían tomado venganza y mostrado lo que pasaría a quienes osaran asumir la actitud de Alejandro Huamán. Lo mismo hicieron por esos mismos días con el presidente y teniente gobernador de la vecina comunidad de Huaychao, Eusebio Ccente y Pedro Rimachi, asesinados en plena plaza del pueblo. Sin embargo, antes que neutralizar el descontento, estas acciones cambiaron la imagen con la cual el PCP-SL buscaba legitimarse entre los campesinos, provocando el rechazo violento de las comunidades. Como señala un testimonio: «allí empezó la matanza ya entre nosotros».⁷⁰

Bajo el mando de sus autoridades tradicionales, como los presidentes de comunidad, *varayocs* y tenientes gobernadores, las comunidades se organizaron para enfrentar a los miembros del PCP-SL reuniéndose en el local comunal de Uchuraccay:

[...] realizaron una asamblea comunal reuniéndose en esta casa comunal cada domingo, acordando por unanimidad de votos realizar los actos de legítima defensa de sus vidas y de sus integridades físicas contra los terroristas, causándoles muerte [...] asimismo, acordaron pedir ayuda a las comunidades de Huaychao, Cunlla, Ccocha Ccocha, Cochani, Paria con el fin de combatir a los terroristas [subversivos].<sup>71</sup>

De esta forma, Uchuraccay fue asumiendo el liderazgo de lo que fue la primera rebelión multicomunal contra el PCP-SL. Los campesinos de las comunidades ayacuchanas más pobres, ubicadas en las punas, escapaban así al libreto del PCP-SL que les adjudicaba el papel de aliados estratégicos y «fuerza principal» de su revolución. Por el contrario, buscaron el apoyo de las fuerzas del orden, para lo cual enviaron emisarios a las ciudades de Huanta y Ayacucho y solicitaron garantías y protección:

En una reunión de los comuneros, siempre bajo la dirección de las autoridades, acordamos formar una comisión para ir a la ciudad de Huanta ante las autoridades a pedir garantías [...] a su retorno nos manifestaron que habían entrado a la policía y que les había ofrecido prestarles toda clase de garantías y que los habían exhortado para que siempre les comuniquen de cualquier acontecimiento.<sup>72</sup>

El 21 de enero, a menos de un mes de la intervención de las Fuerzas Armadas en el departamento de Ayacucho y del establecimiento de la Infantería de Marina en la provincia de Huanta,<sup>73</sup> se produjo la matanza de siete miembros del PCP-SL en las comunidades de Huaychao y Macabamba (véase el mapa de ubicación de Uchuraccay). Los comuneros, luego de recibir amistosamente a la columna subversiva en el local comunal, coreando sus arengas en pro de la «lucha amada» y el «camarada Gonzalo», como solía ocurrir, detuvieron y asesinaron a cuatro miembros del PCP-SL en Huaychao y a tres en Macabamba.

Por esos mismos días, cinco miembros del PCP-SL fueron asesinados en Uchuraccay:<sup>74</sup>

[...] aparecieron cinco terroristas [subversivos] hacia el camino de la herradura que viene de San José de Secce, con dirección a este pueblo por el lugar denominado Champacoca, por lo que los comuneros de Uchuraccay, entre varones, mujeres y niños, después de reunirse, lograron interceptar a dichos terroristas [subversivos] en el sitio denominado Chancahuayco que queda a unos tres kilómetros de distancia hacia arriba de esta casa

<sup>69</sup> CVR. Testimonio 201692.

<sup>70</sup> CVR. Testimonio 201679.

<sup>71</sup> Declaración informativa del regidor mayor vara del anexo de Uchuraccay, don Dionisio Ramos Ricra, a fojas 1521 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>72</sup> Declaraciones de Dionisio Ramos Ricra en el acta de la diligencia realizada por el juez Juan Flores Rojas el 3 de marzo de 1983 en Uchuraccay.

<sup>73</sup> El 12 de octubre de 1981, mediante el decreto supremo 026-81-IN, el gobierno declaró en estado de emergencia a las provincias ayacuchanas de Huamanga, Huanta, Cangallo, La Mar y Víctor Fajardo. El 29 de diciembre de 1982, mediante el decreto supremo 068-82-IN, se encargó a las Fuerzas Armadas asumir el control interno en estas cinco provincias. El general EP Roberto Clemente Noel Moral fue nombrado Jefe del Comando Político Militar de la Zona de Emergencia, a la cual fueron destacados 2 mil miembros de las fuerzas armadas. La Infantería de Marina asumió el control de la provincia de Huanta y se instaló allí durante las primeras semanas del enero de 1983.

<sup>74</sup> Los partes policiales dan cuenta del ajusticiamiento de los cinco miembros del PCP-SL en Uchuraccay hacia el 22 de enero. En el informe final de la Comisión Vargas Llosa, así como en su anexo 2, este hecho fue mencionado apenas como un dato adicional, sin reparar en su importancia como muestra del proceder violento adoptado por los campesinos y de la rápida recomposición de alianzas que ocurría en la zona debido a la resistencia iniciada por las comunidades contra el PCP-SL (Informe de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay, pp. 31 y 99). El ajusticiamiento de los cinco miembros del PCP-SL en Uchuraccay fue mencionado también por algunos diarios de Lima (véase «El pueblo se defiende». El Comercio, 26 de enero de 1983).

comunal y, cuando les interrogaron, supieron manifestarles de que los terroristas [subversivos] de San José de Secce y Pacchanca van a ingresar a Uchuraccay a matarlos, por lo que todos los comuneros los mataron, empleando huaraca, piedras y a puñetes y a puntapiés, y luego enterraron sus restos en el cementerio de Polvorín [...] estos terroristas [subversivos] no llevaban ninguna clase de armas, sino solamente portaban dos de ellas, cada una un tarro de leche Gloria vacío. De estos hechos no hicieron aviso a los *sinchis*, quienes los habían visitado en los primeros días de enero del presente año.<sup>75</sup>

Este hecho resulta sumamente ilustrativo, pues muestra lo convulsionada que se encontraba la comunidad después del asesinato de Alejandro Huamán, así como el rápido giro hacia la violencia por los campesinos desde que perdonaran la vida a *Martín* y a otros miembros del PCP-SL sólo tres meses atrás.

Luego de producidas las muertes de los presuntos miembros del PCP-SL en Huaychao, Macabamba, Uchuraccay y otras comunidades<sup>76</sup> la población se organizó rápidamente temiendo represalias. Las autoridades de las comunidades coordinaron el patrullaje de la zona y establecieron sistemas de vigilancia desde las cumbres de los cerros, usaron cornetillas como señal de alarma y pernoctaron en las laderas de las montañas.<sup>77</sup> En la memoria de los uchuraccaínos, este momento es recordado por el estado de alarma en que vivían. Los comuneros sabían que los miembros del PCP-SL buscarían venganza, pues habían contraído lo que el PCP-SL llamaba una «deuda de sangre con el partido».

Los hechos que trascendieron a los medios fueron los de Huaychao. El 23 de enero, en una conferencia de prensa realizada para informar al país sobre las muertes ocurridas en esa comunidad, el jefe político militar de la zona de emergencia, general EP Roberto Clemente Noel Moral, afirmó: «Hay una respuesta muy significativa del pueblo ayacuchano de desterrar el terrorismo. Con esta acción, los hombres y mujeres están demostrando coraje y virilidad para no continuar siendo mancillados por un pequeño grupo con ideas descabelladas».<sup>78</sup>

En Lima, el propio Presidente de la República saludó la acción violenta de los comuneros, brindando las siguientes declaraciones televisadas: «[espero que en Ayacucho] se restablezca la tranquilidad y que la presencia y el valor de estos pueblos sea suficiente y no se requiera acudir a la fuerza para acabar con el terrorismo».<sup>79</sup> Justificando la muerte de los siete miembros del PCP-SL, señaló también que la respuesta campesina era un ejemplo de patriotismo que hacía palpable el «resurgimiento de Ayacucho» frente a la «basura ideológica» del PCP-SL.<sup>80</sup>

El general EP Roberto Clemente Noel Moral informó del envío de una patrulla terrestre y de un comando helitransportado para prestar protección a las comunidades, la cual llevaba consigo alimentos para las comunidades como reconocimiento del presidente Fernando Belaunde Terry por las acciones emprendidas contra los miembros del PCP-SL.<sup>81</sup> Así, ese día llega en helicóptero a Uchuraccay un comando de 15 *sinchis*,<sup>82</sup> quienes se quedaron a pernoctar en la comunidad. El mensaje que dejaron a los campesinos fue claro: continuar con ese tipo de respuestas matando a todo extraño que llegara a la comunidad a pie.<sup>83</sup> La incitación realizada por

<sup>75</sup> Declaración informativa del regidor mayor vara del anexo de Uchuraccay, don Dionisio Ramos Ricra, a fojas 1521 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>76</sup> En total, habrían sido aproximadamente 24 los miembros del PCP-SL muertos en diferentes comunidades. El manuscrito del mando subversivo citado anteriormente se refiere a estas acciones de las comunidades como «mesnadas» y «bandas paramilitares».

<sup>77</sup> Hacia el 23 de enero, cuando los *sinchis* llegaron a Uchuraccay llevando alimentos, éstos se sorprendieron de la organización adoptada por la comunidad para su defensa. A pesar de ello, sentían algo de temor y desconfianza de los campesinos. Esta información fue proporcionada en Ayacucho el 12 de octubre de 2000 por un ex *sinchí* que participó de esa patrulla policial.

<sup>78</sup> El Comercio, 24 de enero de 1983, p. 1.

<sup>79</sup> Citado en Violencia política en el Perú. Lima: Desco, 1989, tomo I, p. 93.

<sup>80</sup> El Comercio, 24 de enero de 1983, p. 1.

<sup>81</sup> El Comercio, lunes 24 de enero de 1983, p. 12. Esta información revela que el presidente Fernando Belaunde Terry se hallaba debidamente informado de los sucesos que ocurrían en Ayacucho.

<sup>82</sup> *Sinchis* es el nombre de un destacamento contrainsurgente de las Fuerzas Policiales.

<sup>83</sup> Esta información fue repetida insistentemente por los comuneros: en las declaraciones recogidas por el periodista Luis Morales el día 30 de enero de 1983; en la asamblea que organizó la Comisión Investigadora presidida por Mario Vargas Llosa el 11 de febrero de 1983; en los testimonios brindados ante el juez Juan Flores Rojas en marzo y mayo de 1983; y en las declaraciones efectuadas durante el juicio oral. Es uno de los puntos que resalta en la memoria actual de los uchuraccaínos: «Los mismos *sinchis* dijeron: nosotros no vendremos por tierra, sólo en helicóptero. Y, si algún desconocido viene por tierra, lo matan. Así pasó» (CVR. BDI-II p479. Entrevista realizada por el comisionado Alberto Morote Sánchez el 27 de abril de 2003 en Uchuraccay. Se mantiene en reserva la identidad del declarante por razones de seguridad).

las fuerzas del orden a los campesinos de Uchuraccay para rechazar a los miembros del PCP-SL usando la violencia fue asumida como un respaldo a la decisión comunal de enfrentar al PCP-SL.<sup>84</sup>

#### 4.1.3. Los hechos del 26 de enero

Conocidos los sucesos de Huaychao, sectores importantes de la opinión pública dudaron de las informaciones ofrecidas por el general EP Roberto Clemente Noel Moral. Lo que se conocía entonces sobre el PCP-SL y sobre lo que estaba ocurriendo en el campo ayacuchano era muy poco. Así, un grupo de ocho periodistas de medios limeños y ayacuchanos decidieron viajar hasta Huaychao, motivados por su incredulidad ante las informaciones oficiales, con el ansia de descubrir la verdad de los hechos. Al amanecer del 26 de enero, el taxista Salvador Luna —a quien habían contratado la tarde anterior— pasó a recogerlos de su hospedaje en el Hostal Santa Rosa. Media hora después, luego de recoger a Octavio Infante, director del diario ayacuchano *Noticias*, el vehículo hizo una breve parada en el Óvalo de la Magdalena, donde los viajeros compraron algunas provisiones. A las 6:30 de la mañana, aproximadamente, luego de cruzar sin dificultades el control de La Magdalena, los periodistas dejaron atrás la ciudad de Ayacucho sin imaginar que jamás retornarían.

Esa misma mañana, en Uchuraccay, un joven comunero dedicado al comercio de ropa fue detenido a su arribo al pueblo y fue acusado por las autoridades de seguir colaborando con los miembros del PCP-SL<sup>85</sup> y de ser uno de los responsables de la presencia de esa organización en la comunidad, junto a su pariente Severino Huáscar Morales Ccente. Gracias a la intervención de su abuelo, lo dejaron libre, no sin antes golpearlo y amenazarlo de muerte si seguía «caminando» con sus «compinches».

Alrededor de las 8:30 de la mañana, dos horas después de partir de Ayacucho, el taxi contratado por los periodistas llegó a Yanaorco, luego de realizar una breve parada en Palla, donde desayunaron y tomaron algunas fotografías. De acuerdo con lo previsto, los periodistas le solicitaron al taxista que los dejara un poco más allá de la laguna de Tocto, en un punto de la carretera de Huanta a Tambo en que una trocha usada por los campesinos de la zona comenzaba su ascenso hacia las montañas, permitiéndoles llegar más rápido a sus comunidades sin tener que llegar hasta Tambo. El grupo continuó el viaje a pie siguiendo ese atajo, guiado por Octavio Infante García, quien conocía esa ruta y tenía familiares en Chacabamba.<sup>86</sup> Al llegar a esa localidad, después de una caminata de dos horas que resultó sumamente fatigosa para algunos —sobre todo para Jorge Sedano, que estaba subido de peso y tenía 52 años— fueron atendidos por los familiares de Octavio Infante. Los Argumedo (Rosa, Juana Lidia, Juan y Julia; madre, hermana, hermano y cuñada de Octavio Infante, respectivamente) compartieron una limonada con los periodistas, quienes les contaron que su objetivo era llegar a Huaychao.

A pesar de tener conocidos en las comunidades, doña Rosa y Juana Lidia se opusieron al pedido de Octavio Infante para que su medio hermano Juan Argumedo García los acompañara como guía, «porque ya sabían por radio sobre las matanzas que estaban produciéndose en Uchuraccay y Huaychao».<sup>87</sup> A pesar de esos temores, Juan Argumedo se ofreció a guiarlos «con la condición de que volviera solamente del lugar de Wach-waqasa»,<sup>88</sup> abra ubicada a la entrada de Uchuraccay desde la cual no era difícil continuar camino hasta Huaychao pues no había más cerros que subir, disminuyendo la posibilidad de extraviarse.

Unos minutos después, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, los periodistas retomaron el viaje guiados por Juan Argumedo, quien prestó una mula, en la cual iba montado Jorge Sedano, y un caballo en el que cargaron los maletines y cámaras fotográficas.

<sup>84</sup> Ello no ocurrió solamente en Uchuraccay, sino también en otras comunidades. En Iquicha, según lo declarado por el alcalde menor, «en todas las veces [los sinchis] les ha advertido en la reunión de comuneros a fin de que no se metan a los actos subversivos de los terroristas y, al mismo tiempo, les ha instruido para que los mataran si estos terroristas se presentaban a este pueblo» (declaración de Hipólito Vicania, alcalde menor de Iquicha, a fojas 1508 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

<sup>85</sup> CVR. No se menciona el nombre de este comunero por estar vivo (entrevista realizada en agosto de 2000). Hosoya, Hiromi. La memoria post-colonial: tiempo, espacio y discursos sobre los sucesos de Uchuraccay. Documento de Trabajo. Lima: IEP, 2003.

<sup>86</sup> El itinerario del viaje seguido por los periodistas fue reconstruido por la Comisión Investigadora presidida por Mario Vargas Llosa y fue descrito minuciosamente en su informe final (pp. 5-14). Fue recorrido, asimismo, durante la diligencia judicial de reconstrucción de hechos realizada el 31 de enero de 1984, cuyas actas corren a fojas 3231 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>87</sup> Declaración de Juana Lidia Argumedo a fojas 265 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>88</sup> Ibídem.

En Uchuraccay, como a las 3 o 4 de la tarde, las autoridades se hallaban reunidas en casa de Fortunato Gavilán García, teniente gobernador de la comunidad, discutiendo sobre las posibles represalias del PCP-SL y bebiendo el alcohol que esa mañana el joven capturado había pagado en retribución por su perdón. Uno de los temas delicados de la discusión era que no sólo tenían que vigilar hacia fuera, en previsión de cualquier incursión del PCP-SL, sino también hacia dentro, pues consideraban que entre la población todavía seguían habiendo colaboradores del grupo subversivo, como el joven a quien habían castigado por la mañana. En esa reunión, también discutieron sobre las quejas de Silvio Chávez Soto, secretario de la comunidad, contra Severino Huáscar Morales Ccente, quien había sido responsable del PCP-SL, por el robo de un caballo.

[...] parecía que discutían [...] en eso vi que empezaron a pelear y a golpear a los desconocidos. Llamaron a los de la comunidad y todos salieron y se dirigieron hacia la casa de Fortunato Gavilán. Y de allí salieron diciendo así van hablar y de pronto empezaron a maltratar a los desconocidos. Yo dije, ¿quiénes serán? ¿Qué será de la vida de estas personas? Empecé a llorar, ahora seguro nos matarán a todos.<sup>91</sup>

Los periodistas intentaron explicar que no eran terroristas, palabra que los uchuraccaíños habían escuchado sólo poco tiempo antes de boca de los sinchis, quienes les habían dicho que ellos vendrían siempre en helicóptero y uniformados, mientras que los extraños que vendrían por tierra eran los terroristas a quienes debían matar. Pero el diálogo fue imposible. Los periodistas buscaron la mediación de un joven de la comunidad, quien vestía ropa de ciudad y hablaba castellano, para que les hiciera comprender a los comuneros el motivo de su visita.<sup>92</sup> Sin embargo, no fue posible. Una de las autoridades sacó a golpes al joven que intentó mediar en el diálogo acusándolo, de apoyar a los forasteros. Frente a la imposibilidad del diálogo, los periodistas sugirieron a las autoridades que los entregaran a la Policía de Tambo. Sin embargo, cuando parecía haberse llegado a ese acuerdo, Silvio Chávez Soto, secretario de la comunidad, ordenó matarlos convencido de haber capturado a subversivos.

Habrían participado en la matanza unas cuarenta personas, entre varones y mujeres, jóvenes y adultos, muchos de ellos bajo la presión de las autoridades.<sup>93</sup> A quienes no lo hicieron, los buscaron casa por casa para que explicaran las razones de su ausencia. Por ejemplo, a uno de ellos lo acusaron de seguir colaborando con el PCP-SL y casi lo matan. Otro, que se encontraba enfermo, tuvo que pagar su ausencia con alcohol.<sup>94</sup> Sería esa la bebida que tomarían luego para enterrar los cadáveres y vigilar esa noche frente a cualquier eventualidad de ataque del PCP-SL.

La matanza fue cruel y no duró más de treinta minutos. Esa misma noche mataron al guía Juan Argumedo y a Severino Huáscar Morales. A este último, por su vínculo con el PCP-SL, lo responsabilizaron por defender a los periodistas y al guía<sup>95</sup> y lo acusaron de haberlos traído en abierto desacato a las decisiones adoptadas por la comunidad: «tú también adónde has ido. Tú también estás apareciendo por abajo y ellos

<sup>89</sup> Es como recuerdan varios entrevistados. Los comuneros de Uchuraccay supieron que los miembros del PCP-SL también eran llamados «terroristas» al ser incitados por los sinchis a matar a todo extraño que llegase a pie a la comunidad.

<sup>90</sup> Uno de ellos era Olimpio Gavilán Huaylla, quien vivía en Lima desde niño y había llegado a Uchuraccay sólo unas semanas antes. Hacia mediados de 1983, fue secuestrado y presumiblemente asesinado por el PCP-SI. Su cadáver nunca fue encontrado por sus familiares.

<sup>91</sup> CVR. BDI-II P477. Entrevista realizada por el comisionado Alberto Morote Sánchez el 27 de abril de 2003 en Uchuraccay. Por seguridad, no se menciona el nombre de la entrevistada.

<sup>92</sup> No se menciona el nombre de este comunero por estar vivo.

<sup>93</sup> Entre ellos Severino Huáscar Morales, a quien obligaron a participar del crimen diciéndole: «Mata a tu compinche, si no, tú también vas a morir». (CVR, Testimonio 20423).

<sup>94</sup> Entrevista realizada en Uchuracay el 23 de septiembre de 2000.

<sup>25</sup> Lo que dicen los campesinos es que lo asesinan el «espíritu de lado» de ellos [sayapakurca kastan masinkunatal].

por arriba, aquí se están encontrando. ¿Acaso por eso, ellos van a ser periodistas? No. Ellos son tus compinches terrucos [subversivos], diciendo».⁹⁶ Lo mataron cruelmente sin tomar en cuenta su situación familiar y a pesar de su condición de comunero: «dicen que lo golpeaban con piedras y palos como a cualquier animal, dicen que en eso sus ojos también ya han salido».⁹⁷ Cuando agonizaba, arrastrado por la mula de Juan Argumedo a la cual fue amarrado, un comunero reclamó a los presentes: «cómo es posible que hacen sufrir de esta manera a su copoblano. O bien deben de perdonarle sano o bien deben de matarlo de una vez, diciendo, se le acerca y le apuñala con un cuchillo».⁹⁸

También quisieron matar a su esposa temiendo que pueda delatarlos; sin embargo, Teodora Soto Ticlla, madre de Silvio Chávez Soto, se interpuso sollozando para que la dejaran: «cómo ya es esto, cómo es posible a nuestro vecino van a terminar esposo y esposa. Si es así, cómo van a quedar los niños, diciendo».⁹⁹ La esposa de Severino Huáscar Morales recuerda:

Me acorralaron. «Si me matan, mátenme con mis hijos, si no quién los va a criar. ¡Traigan a todos mis hijos y mátennos!». Mi hijo estaba llorando. Yo no lloré; mi cuerpo se endureció totalmente. «Me matarán como a mi esposo», dije. Teodora Soto habló con [Silvio] Chávez: «déjenla a esa mujer, a quién se va quejar contra ustedes. Perdónenle. Si la matan, mátenla con sus hijos, si no, quién los va criar».¹⁰⁰

Le perdonaron la vida pero bajo la amenaza de no contar a nadie lo sucedido: «si hablas, cuentas, tú vas a morir ese mismo rato», le dijeron. Se impuso la decisión de callar para evitar que esas muertes fueran conocidas más allá de la comunidad. Por eso, también le ordenaron esconderse: «Cuando aparecía el helicóptero, venían [los comuneros] y nos hacían correr [a ella y a sus hijos], “escápense a los cerros”, y no nos encontrábamos con nadie. La gente de acá no me permitía que me viera con nadie, si no, van a morir, nos van a llevar preso, nos van a quemar, no nos confiábamos».¹⁰¹

Los campesinos estaban seguros de que habían dado muerte a miembros del PCP-SL; por eso mismo los sultaron fuera del cementerio y sin velatorio: «a estos perros ladrones y terrucos [subversivos] no podemos enterrar en nuestro cementerio, diciendo».¹⁰² También los cuerpos de los periodistas fueron depositados muy cerca de la plaza, a sólo doscientos metros, sin ningún afán de ocultamiento. Debido a que caía la noche y había que mantener la vigilancia, sólo pudieron cavar cuatro fosas no muy profundas, en las cuales fueron colocados los ocho cadáveres: «[...] y como ya era muy tarde y estaba por anochecer, todos los comuneros [incluyéndose el declarante] abrieron cuatro fosas empleando chaquitaklla y lampa, luego enterraron en cada fosa dos cadáveres colocándolos superpuestos [...] si hubiera habido tiempo, hubieran abierto una fosa para cada cadáver».¹⁰³

No ocurrió lo mismo con los cuerpos de Severino Huáscar Morales y Juan Argumedo. El primero fue enterrado en la parte trasera de su casa, en Huantaqasa, y el segundo al lado de un riachuelo.¹⁰⁴ La muerte de ambos fue ocultada desde esa misma noche de manera absoluta, porque su descubrimiento delataría frente a los *sinchis* y militares la presencia que el PCP-SL había tenido en la comunidad.

<sup>96</sup> CVR. Testimonio 203432.

<sup>97</sup> Ibídem.

<sup>98</sup> Ibídem.

<sup>99</sup> Ibídem.

<sup>100</sup> Entrevista a Saturnina Figueroa, viuda de Severino Morales, realizada en Uchuraccay el 9 de febrero de 2002.

<sup>101</sup> Ibídem.

<sup>102</sup> CVR. Testimonio 203432.

<sup>103</sup> Declaración de Daniel Chocce Ayala a fojas 1530 del expediente judicial del proceso Uchuraccay. Otra declaración en el mismo sentido indica que «las fosas se han abierto empleando chaquitaclla, pico, pala y lampa, que como estaba por anochecer y sería como a las 5:30 a 6:00 de la tarde» (declaración de Mariano Ccasani González a fojas 2551 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

<sup>104</sup> En las noches siguientes, los pobladores retiraron los cadáveres. El cuerpo de Severino Huáscar fue trasladado al cementerio de la comunidad y el de Juan Argumedo fue llevado secretamente a uno de los cerros. El cadáver de Severino Huáscar Morales fue exhumado del cementerio de Uchuraccay el 14 de mayo de 1983, encontrándose «en el rincón del lado norte del cementerio, donde se hallaban, en la parte superior amontonadas varias piedras; se le encontró cubierto con un hábito de ballesta color blanco», con perforaciones realizadas por un instrumento punzo cortante (acta de la diligencia de exhumación y autopsia del cadáver de Severino Huáscar Morales, a fojas 1550 del expediente judicial del proceso Uchuraccay). La ubicación del cadáver de Juan Argumedo fue averiguada por su hermana Juana Lidia, quien se acercó a Uchuraccay con el juez Juan Flores Rojas el día 11 de febrero para la exhumación respectiva, la cual no pudo realizarse por no encontrarse el cuerpo. Tiempo después, Juana Lidia se enteró de que el cadáver de su hermano había sido trasladado al paraje de Juriputuna, en uno de los cerros de Uchuraccay, de donde lo llevó secretamente al cementerio de Chacabamba, donde fue exhumado el 15 de agosto de 1986 (pericia del cadáver de Juan Argumedo, a fojas 6312 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

#### 4.1.4. Los días posteriores

Al día siguiente, 27 de enero, la resistencia emprendida por las comunidades contra el PCP-SL continuó. Uchuraccay se convirtió en el centro de los acontecimientos. Según lo acordado, dos semanas antes en una asamblea intercomunal, llegaron a Uchuraccay muchos campesinos de Huaychao, Cunya, Paria, Ccarhuahurán, Pampalca y otras comunidades.<sup>105</sup> Un grupo numeroso se dirigió hacia Iquicha, comunidad que era considerada simpatizante de los miembros del PCP-SL. Allí capturaron a catorce campesinos que fueron golpeados y luego conducidos a Uchuraccay para ser juzgados. Durante el trayecto, Fortunato Gavilán, teniente gobernador de Uchuraccay, los amenazó con matarlos «haciéndoles chicharrones», diciéndoles que «los iquichanos ya no eran cabecillas sino los de Uchuraccay».<sup>106</sup> Entre los capturados se hallaba Julio Huayta, teniente gobernador de Iquicha, quien llegó a Uchuraccay bastante golpeado y con una bandera roja amarrada al cuello.<sup>107</sup>

Ese mismo día llegó a Huaychao un helicóptero en el cual viajaron los periodistas Gustavo Gorriti y Óscar Medrano de la revista Caretas. Encontraron a los campesinos movilizados, portando banderas blancas y en espera de represalias de miembros del PCP-SL. Al preguntarles por lo que ocurría, fueron informados que el alcalde de la comunidad y cincuenta comuneros habían salido hacia Uchuraccay, donde estaba ocurriendo «una guerra».<sup>108</sup>

Por la tarde, llegaron a Uchuraccay Rosa García de Argumedo y Juana Lidia Argumedo, madre y hermana del guía, pues un joven residente en Yuracyacu les contó que éste había sido apresado en dicho lugar por los uchuraccaínos. Al acercarse a la comunidad con dirección a la casa de Teodora Soto, quien era hija de juramento de doña Rosa, oyeron los gritos de alarma: «ahí vienen los terroristas, escápense, vamos a matarlos». Asimismo, vieron que la hija de Teodora Soto se escapaba con su bebé en brazos. Corrieron tras ella y lograron alcanzarla, así ésta pudo reconocerlas y calmar a quienes se habían reunido para atacarlas diciéndoles «que eran personas conocidas y que nada iba a pasar».<sup>109</sup>

En esos momentos, retornaba el grupo de campesinos que se había dirigido a Iquicha. Doña Rosa y Juana Lidia —así como la esposa del guía, Julia Aguilar, quien llegó posteriormente— estuvieron otra vez a punto de ser linchadas, pero fueron salvadas gracias a la intervención de otra mujer que apaciguó a los comuneros:<sup>110</sup>

[...] observé que se acercaba un grupo de hombres campesinos a caballo y también a pie; los de caballo eran más o menos alrededor de cincuenta campesinos gritando «vamos a matar o no», siendo Antonio Chávez Soto quien se interpuso y dijo que nada pasaba [...] Luego se hicieron presentes a pie cerca de ochocientas personas agrupadas según el pago o lugar al que pertenecían, cada grupo traía presos en un total de 13 personas entre hombres, mujeres y niños, a quienes se les acusaba de haber dado alojamiento a los terroristas [subversivos], incluso de estar conspirados con ellos. Luego de aproximadamente media hora se hizo presente mi cuñada Julia Aguilar de Argumedo, a quien también amenazaron con darle muerte, circunstancias en que nuevamente la esposa de Lucio Gavilán Morán, Isabela González Hinostroza, dijo que iba a apaciguar y que quien venía era su familia y conocida, en ese momento mi cuñada llegó desesperada diciendo «¿dónde está mi esposo Juan? Entréguelme», a la vez que lloraba. En esos instantes, la comunidad se encolerizó y la rodeó, incluso uno de ellos le tiró un lapo en la cara diciéndole «¿a qué han venido ustedes? Está prohibido andar allí», siendo así que quienes hablaban así eran los de Huaychao, los comuneros de Uchuraccay ya se habían calmado.<sup>111</sup>

<sup>105</sup> Las declaraciones brindadas en el proceso judicial por Juana Lidia Argumedo y Julia Aguilar, así como por los campesinos interrogados por el juez Juan Flores Rojas, abundan en detalles sobre esta impresionante movilización multicomunal. Algunos testigos mencionan que se reunieron entre setecientas y ochocientas personas provenientes de diversas comunidades. Otros mencionan 4 mil y hasta 5 mil personas.

<sup>106</sup> Declaración de Claudio Huamán Morales, uno de los iquichanos detenidos, a fojas 589 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>107</sup> Esa bandera, que había sido retirada días antes por el teniente gobernador de Iquicha de uno de los cerros de esa comunidad, fue la que los comuneros de Uchuraccay entregarian a las fuerzas del orden dos días después, diciendo que era de los periodistas. Fue la bandera a la cual se refirió posteriormente el general EP Roberto Clemente Noel Moral al mencionar que los periodistas llegaron a la comunidad portando una bandera roja.

<sup>108</sup> «Trágicos linchamientos». Caretas, 31 de enero de 1983.

<sup>109</sup> Declaraciones de Juana Lidia Argumedo en el atestado ampliatorio 14 de la Policía de Investigaciones del Perú, de fecha 14 de febrero de 1983, a fojas 469 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>110</sup> El importante papel de las mujeres en estos conflictos es desarrollado con amplitud en este mismo informe.

<sup>111</sup> Declaraciones de Juana Lidia Argumedo en el atestado ampliatorio 14 de la Policía de Investigaciones del Perú, de fecha 14 de febrero de 1983, a fojas 469 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

Las tres mujeres fueron apresadas en el local comunal, donde pasaron la noche temiendo por sus vidas. Al día siguiente, 28 de enero, los comuneros reunidos en la plaza juzgaron a los iquichanos presos y, posteriormente, también a ellas:

[...] proseguían juzgando a los presos llevándoles a la plazoleta uno por uno para declarar ante la comuna [...] es así que conforme declaraban los presos según la gravedad del caso los soltaban a los que no tenían culpa y a los que sí los hacían permanecer en ese sitio, para entregarlos a los *sinchis* según decían, pero que, si no venían, ellos mismos los matarían. Más o menos a las dos de la tarde terminaron el juicio con los presos, llamándonos de inmediato a nosotras para declarar ante todos, siendo el teniente gobernador de Uchuraccay, Fortunato Gavilán, quien me preguntó públicamente en qué forma había venido yo y que declarara. Él estaba amargo y agresivo, procediendo yo a explicar que había venido en busca de mi hermano Juan Argumedo, a lo que la comuna empezó a gritar a iniciativa del *varayoc* de Iquicha: «¿A qué habían venido sabiendo que aquí nadie pasa? ¿No sabían ustedes que aquí nadie pasa?». Siendo Lucio Gavilán Morán y Silvio Chávez Soto quienes se ofrecieron de garantías de nosotras, ya que nos conocían, insistiendo en que nos dejaran libres y caso contrario nos mandaran a Huanta o a Tambo detenidas y no hacer justicia en ese lugar.<sup>112</sup>

Las tres mujeres fueron perdonadas por tener conocidos en la comunidad, siendo garantizadas por seis comuneros de diferentes comunidades, entre ellos Silvio Chávez Soto por Uchuraccay. Las liberaron sólo después de hacerles juramentar: «[...] ante el crucifijo de la vara les han tomado juramento a cada una de ellas advirtiéndoles para que no avisen a nadie de la muerte de los periodistas y su hermano referido, en caso contrario, ellas también serían muertas».<sup>113</sup>

Posteriormente a estos hechos, los comuneros Constantino Soto Aguilar y Mariano Ccunto fueron enviados al puesto de la Guardia Civil de Tambo para informar a las autoridades sobre las muertes ocurridas y la detención de los presuntos miembros del PCP-SL de Iquicha.

El secreto de la muerte de Juan Argumedo y Severino Morales fue guardado por todos los comuneros frente a los familiares del guía.<sup>114</sup> La cohesión comunal, que no existía en la vida diaria debido a las tensiones y conflictos subsistentes, se construyó al ritmo de los acontecimientos. Desde entonces, los uchuraccaínos buscaron mostrar una identidad consolidada, un «nosotros» homogéneo, eficaz como discurso silenciador de las tensiones del pasado inmediato; una identidad cerrada, monolítica.<sup>115</sup> Trataron de evitar cualquier fisura que alterara la imagen de una comunidad férreamente unida en su lucha contra los miembros del PCP-SL, a los que identificaron como enemigos foráneos y amenazantes. Decidieron negar, por tanto, que el PCP-SL hubiera estado en la propia comunidad. Desde entonces, en las declaraciones de los comuneros, los miembros del PCP-SL aparecen calificados como *chay suwa terrorista* [esos terroristas ladrones].

El 28 de enero, la desaparición de los periodistas estaba en camino de convertirse en noticia, temiéndose lo peor. Dos patrullas de las fuerzas del orden, acantonadas en Tambo y Huanta, fueron comisionadas para ir hacia las comunidades en su búsqueda. La primera de ellas fue una patrulla mixta compuesta por 18 infantes de marina y diez guardias civiles, al mando del teniente AP Ismael Bravo Reid y el teniente GC Hugo Vidal Ulloa. Los miembros de esta patrulla viajaron en jeep desde Tambo hasta Chalhuamayo y desde allí emprendieron la ruta a pie hasta Uchuraccay. En el trayecto, se encontraron con los comuneros Constantino Soto Aguilar y Mariano Ccunto, quienes habían sido destacados por la comunidad para ir hasta Tambo a informar a las autoridades sobre los hechos ocurridos. Estos comuneros guiaron a la patrulla hasta Uchuraccay, adonde llegaron alrededor de las nueve de la noche. Las autoridades comunales informaron a la patrulla sobre las muertes y detenciones de los supuestos subversivos y los alojaron en el local comunal. Al amanecer del día siguiente, muy temprano, alrededor de las 6:00 a.m., las autoridades les mostraron las cuatro tumbas y les entregaron los enseres de los muertos: una bandera roja, un teleobjetivo, doce rollos de películas y algunas prendas de vestir.<sup>116</sup> La patrulla regresó a Tambo llevándose dichos enseres y a dos iquichanas detenidas: Claudia Huamán Morales y Epifanía

<sup>112</sup> Ibídem.

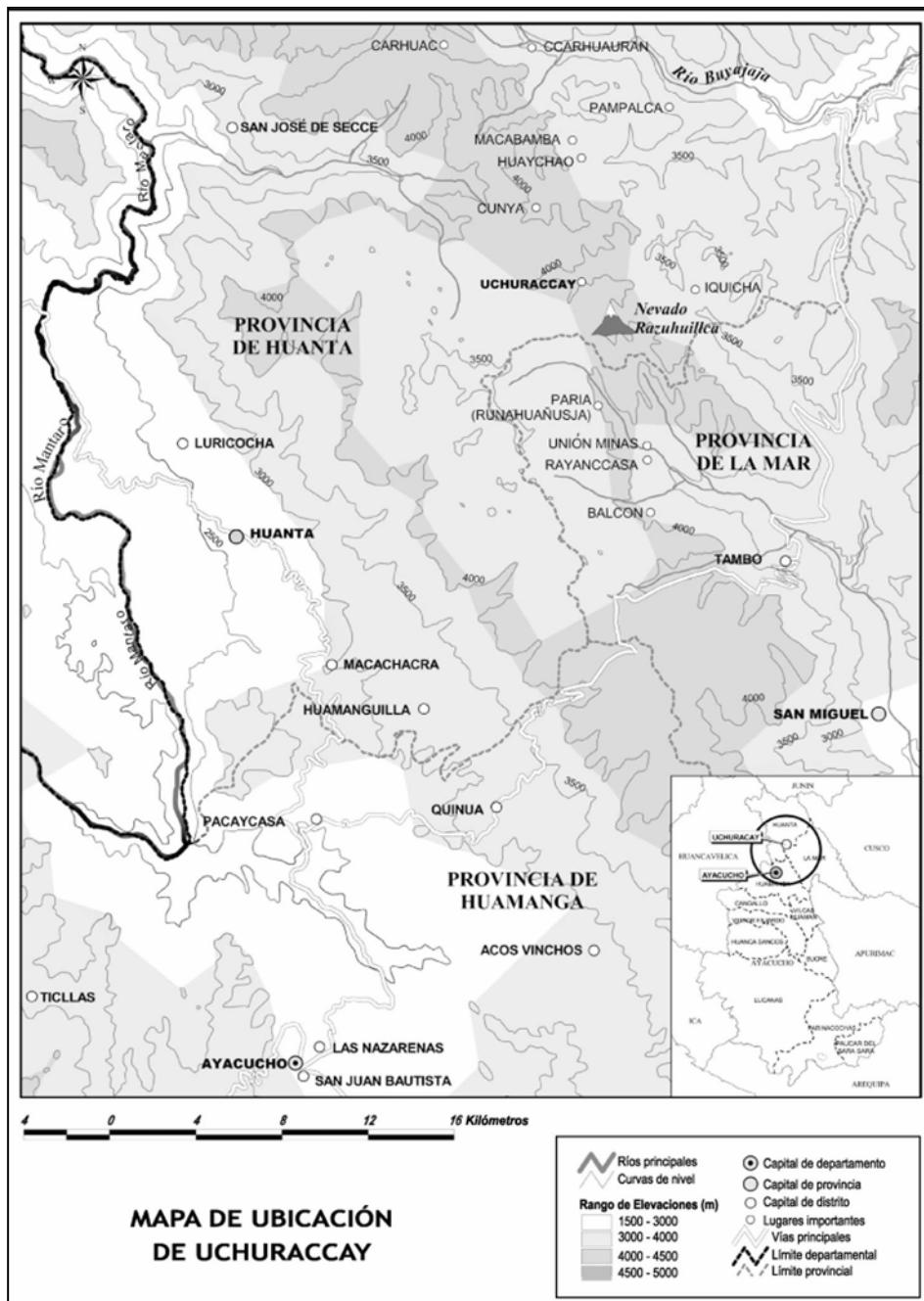
<sup>113</sup> Declaración informativa de Juana Lidia Argumedo, a fojas 265 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>114</sup> Juana Lidia Argumedo, Rosa García de Argumedo y Juana Aguilar relataron repetidas veces esos hechos durante el juicio posterior, como consta en sus declaraciones recogidas en el expediente judicial del proceso Uchuraccay. Juana Lidia también prestó declaraciones a El Diario de Marka en repetidas ocasiones.

<sup>115</sup> Fue lo que halló la prensa cuando se realizó la exhumación de los cadáveres el 30 de enero y también la Comisión Investigadora en la asamblea comunal realizada el 11 de febrero de 1983.

<sup>116</sup> Nota informativa de la patrulla mixta, a fojas 2353 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

Huayta Lapa. Hacia la una de la tarde, al llegar a Tambo, el jefe de esta patrulla, teniente AP Ismael Bravo Reid, informó al comando político militar de Ayacucho sobre lo hallado en Uchuraccay.<sup>117</sup>

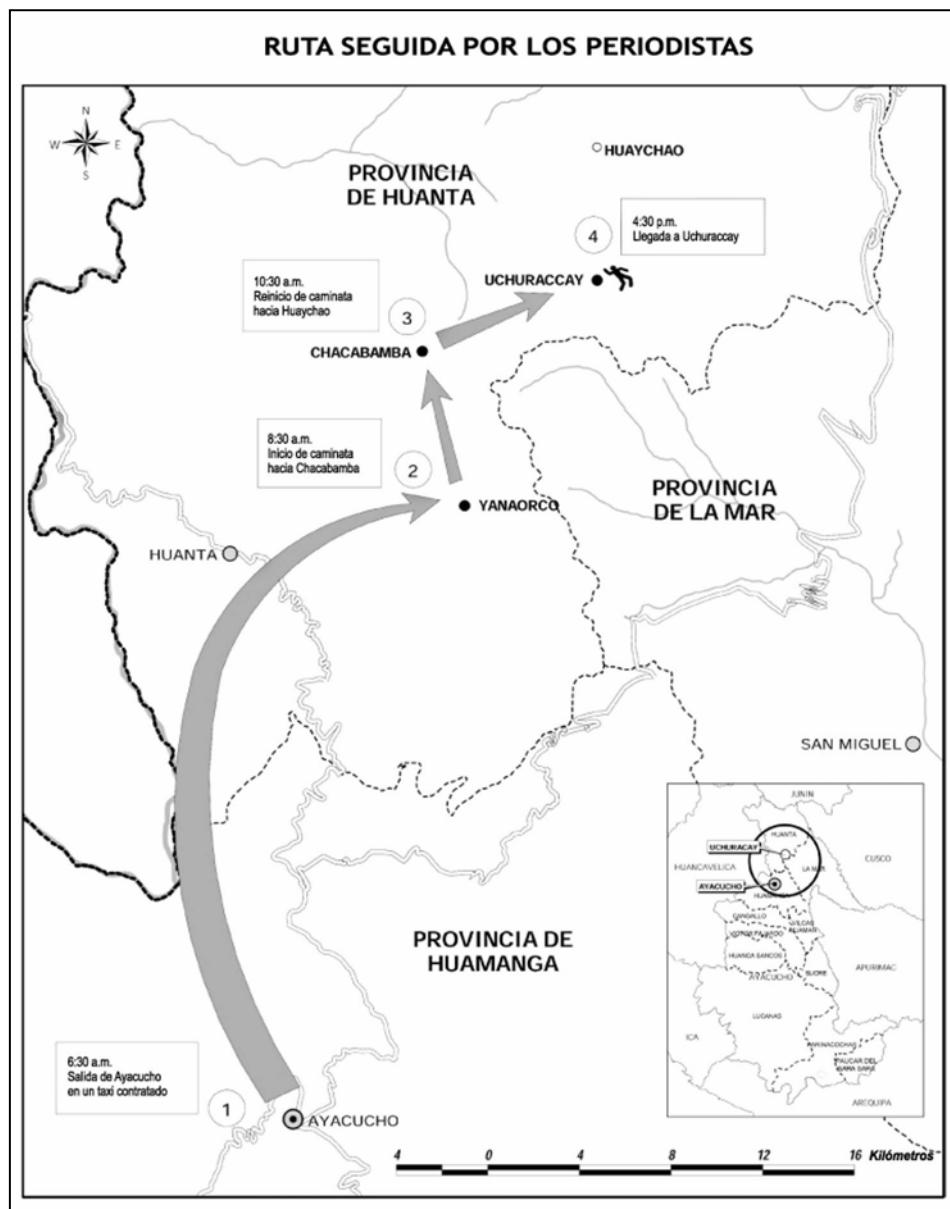


La segunda patrulla, al mando del capitán GC Novato Soto Barreda, jefe del Comando Contrasubversivo de Huanta, llegó a Huaychao el 28 de enero alrededor del medio día y pernoctó en esta comunidad. Al amanecer del día siguiente, varios comuneros de Huaychao acompañaron a los miembros de esta patrulla hasta Uchuraccay, adonde llegaron alrededor de las 8:30 a.m. Allí fueron informados por los campesinos de que la primera patrulla ya se había retirado llevándose las pertenencias de los ocho «terroristas» muertos.<sup>118</sup> Regresaron a Huaychao llevándose al detenido iquichano Dionisio Huachaca Sulca. En esta comunidad, se encontraron con un helicóptero comandado por el mayor FAP Jorge Ernesto Barboza Salaverry, quien alrededor de las

<sup>117</sup> Declaraciones del teniente AP Ismael Bravo Reid, a fojas 1216 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>118</sup> Declaraciones del capitán GC Novato Soto Barrera, a fojas 5584 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

seis de la tarde aterrizó en Uchuraccay para constatar la existencia de las tumbas. Regresó rápidamente a Huaychao y Ayacucho y se llevó al iquichano detenido.<sup>119</sup>



Para entonces, en Ayacucho crecía la preocupación de los corresponsales de prensa. Los primeros rumores e informaciones extraoficiales indicaban que los periodistas habían sido atacados rumbo a Huaychao, donde habrían muerto dos de ellos y habrían quedado heridos los otros seis. Alrededor de las siete de la noche, se confirmó que todos habían muerto a manos de los campesinos de Uchuraccay.<sup>120</sup>

Ante la gravedad de los acontecimientos, los hombres de prensa actuaron rápidamente. A la mañana del día siguiente, domingo 30 de enero, luego de un incidente producido por la cancelación del vuelo del avión presidencial, arribó a Ayacucho un avión fletado por el diario La República que conducía a un numeroso grupo de reporteros nacionales y extranjeros, parlamentarios, eclesiásticos y familiares de los periodistas asesinados. En la conferencia de prensa realizada seguidamente, el general EP Roberto Clemente Noel Moral negó haber conocido del viaje de los periodistas hasta la tarde del 28 de enero y señaló que los periodistas llegaron a Uchuraccay por-

<sup>119</sup> Ibídem.

<sup>120</sup> Thorndike, Guillermo. Uchuraccay, testimonio de una masacre. Lima: E.I.R.L. 1983, p. 53.

tando una bandera roja, por lo que fueron asesinados por los comuneros en defensa de la legalidad. Asimismo, mencionó en un momento que los campesinos pudieron confundir las cámaras fotográficas con armas.<sup>121</sup>

Esa misma mañana, desde temprano, arribaron a Uchuraccay varios helicópteros. En uno de ellos llegó el periodista ayacuchano Luis Morales Ortega, corresponsal del Diario de Marka, quien obtuvo las primeras declaraciones de los campesinos.<sup>122</sup> La exhumación, que inició el largo proceso judicial del caso, fue realizada de manera irregular, en ausencia del Fiscal Provincial en lo Penal y del Secretario Judicial, por lo cual el Juez nombró a un sinchi como testigo actuario. Dicha situación fue producida por la intromisión del comando político militar, que, en lugar de conducir a Uchuraccay al juez instructor de Huanta, a cuya jurisdicción correspondía el caso, convocó al juez instructor de Huamanga, doctor Hugo Molina Ordóñez. Se encontraban además 13 especialistas en criminalística de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) llegados desde Lima.<sup>123</sup> El Juez interrogó a algunos comuneros y recogió algunas evidencias de los hechos, pero no habló con las principales autoridades comunales porque habían viajado hacia Tambo para cumplir con la citación realizada el día anterior por el jefe de la patrulla mixta, teniente AP Ismael Bravo Reid. Cuando el grupo de periodistas llegados desde Lima arribó a Uchuraccay, fue necesario sacar los cadáveres de las bolsas negras de polietileno en que habían sido depositados. Horas después, las imágenes de los cuerpos linchados propagadas por la televisión transmitieron también una sensación de horror hasta entonces desconocida para la mayoría de hogares peruanos.<sup>124</sup>

Las fuerzas del orden no se quedaron ni un solo día en Uchuraccay. Se fueron luego de realizadas las exhumaciones y dejaron a los comuneros completamente desguarnecidos. Además, en adelante, disminuyeron sus patrullajes en la zona. En Lima, en vista del carácter sumamente controvertido de los hechos, el gobierno nombró una Comisión Investigadora integrada por el escritor Mario Vargas Llosa; el entonces decano del Colegio de Periodistas del Perú, Mario Castro Arenas; y el jurista Abraham Guzmán Figueroa.

La comisión se reunió con los comuneros de Uchuraccay en una asamblea realizada el 11 de febrero, tres semanas después de la masacre. A lo largo del diálogo de casi tres horas, efectuado mediante traductores debido a que ninguno de los comisionados hablaba quechua, los campesinos reconocieron que fueron los autores del asesinato de los periodistas e insistieron en que habían sido autorizados por los *sinchis* para matar a los «terroristas» pero callaron completamente sobre las muertes de Juan Argumedo y Severino Huáscar Morales. Asimismo, exigieron garantías y declararon su apoyo incondicional al presidente Fernando Belaunde Terry:

- Ñoqaykuja siñor presidentitam apuyaniku, siñor, paymanmi sayaniku, siñor, manan pimanchu, siñor [Nosotros, señor, apoyamos al Presidente, señor, apoyamos a él, señor, y no a nadie más].
- Wañuchiwanankupaqmi tuta armadu yaykumunku. Chaymi wañuchiwanankumanta tuta iskapaniku orqokunaman, siñur [Vienen por las noches para matarnos. Por eso de ser matados, en la noche nosotros nos escapamos hacia los cerros, señor].
- Chaynapitaq yaykumuwanmanku, siñor, chayna reqsiwaspankuqa, paymantam wañusaq. Kupus kay paguntin paguntin kumunidad, siñor mayqenniykupas, siñor, wañusaqku, chaypaqmi qarantiwanaykikupaq kankiku, siñor [Así, cuidado que en esa forma nos entren, conociéndonos así, por él vamos a morir. Aquí pago tras pago, las comunidades, señor, cualquiera de nosotros vamos a morir. Para eso están ustedes, para darnos garantías, señor].<sup>125</sup>

La demanda de protección fue uno de los temas que resaltó en la asamblea. Los comuneros pedían a gritos seguridad. Sabían que el PCP-SL los atacaría. Ya para entonces habían escuchado rumores procedentes de otras comunidades: «*Uchuraqaytaqa wañuchisaqmi*» [a los de Uchuraccay los mataremos], «*wañuchiwaytan pin-*

<sup>121</sup> Al reseñar dichos acontecimientos varios años después en su polémico libro de memorias como jefe del comando político militar de Ayacucho, el general EP Clemente Noel Moral mencionó que las intervenciones de algunos parlamentarios y periodistas durante la rueda de prensa exhibían el deseo de culpar al comando político militar por la tragedia (Noel Moral, Roberto Clemente. Ayacucho, testimonio de un soldado. Lima: Publinor, 1989, p. 92).

<sup>122</sup> Luis Morales —quien había planificado el viaje junto a los ocho periodistas muertos— recogió, grabadora en mano, las declaraciones de Saturnino Ayala, Francisco Ñaupa, Olimpio Gavilán, Julia Aujatoma, Vicente Quispe Figueroa, Teodosio Soto, Alfonso Pérez, Mariano Figerba, Marcia Gálvez, Juanita Gavilán y Pedro Ramos, entre otros. Estas declaraciones son analizadas en la sección correspondiente al papel de los medios de comunicación («Así murieron los periodistas. Excepcional testimonio de tres comuneros». El Diario de Marka, 31 de enero de 1983; «Estos son los testimonios de Uchuraccay». El Diario de Marka, 12 de febrero de 1983, pp. 22-27).

<sup>123</sup> Acta de la diligencia de exhumación, a fojas 4 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>124</sup> Véase el apartado sobre el papel de los medios de comunicación.

<sup>125</sup> Transcripción de la asamblea entre los comuneros de Uchuraccay y la Comisión Vargas Llosa, realizada el 11 de febrero de 1983.

*sanku»* [están pensando matarnos]. Se escuchaba en sus demandas el clamor por seguridad y la presencia semanal de los *sinchis*:

- Imaynayariki, siñur hifikuna sapa simana watukamuwachunku icha kayna [...] tardinkunapas yakyuramwanmanku chay Aqomanta. Miskapampamanta, chay Challwamayu, usnumanta [...] Chay tirruristakunan, siñur. Chaya kaynan sapa simanamriki watukamuwachunku, siñur [Cómo va a ser que los señores jefes nos visiten cada semana o tal vez como ahora [...] por la tarde podrían entrarnos de Aqo, Michkapampa, de Challhuamanyo, de Usnu [...] esos terroristas señor. Por esa razón, señor, cada semana que nos visiten].
- [Mario Vargas Llosa]: Eso vamos a transmitirlo al señor Presidente y vamos a decírselo a la autoridad ahora en Ayacucho que los comuneros de Uchuraccay deben de estar protegidos por los soldados, por las fuerzas del orden [...] y también contra los terroristas [subversivos].
- Munaniqutaqmi, siñur, mitrallata, huk iskay kinsallatapas difindikunaykupaq, manachu siñur prisdinti faburta ruwaykamanmanku [...] chay llaqtaykupi difindikunaykupaq, siñur. [También queremos, señor, unas dos o tres metralletas para defendernos, ¿no podría hacernos ese favor el señor Presidente? [...] para que aquí en este pueblo nos defendamos].<sup>126</sup>

Sin embargo, esa misma tarde la Comisión Investigadora emprendió el regreso a Lima y la comunidad volvió a quedar librada a su suerte. La región vivía sus meses más violentos. Las acciones de las fuerzas contrainsurgentes y del PCP-SL teñían de sangre Ayacucho, pero la tragedia se desarrollaba en sordina, pues, luego de los sucesos del 26 de enero, el comando político militar bloqueó el acceso de la prensa a las zonas rurales.

#### 4.2. LA HISTORIA DESCONOCIDA: VIOLENCIA Y REPRESIÓN CONTRA UCHURACCAY

##### 4.2.1. Los ataques y la diáspora

Durante los meses siguientes, el PCP-SL incursionó varias veces en Uchuraccay y asesinó a quienes habrían tenido alguna participación en la matanza de los periodistas. Los comuneros recuerdan, sobre todo, tres ataques realizados durante 1983: el 20 de mayo, el 16 de julio y el 24 de diciembre. El recuerdo sobre el número exacto de muertos en cada ataque varía y los nombres se confunden, pero las fechas son registradas con exactitud por su asociación con el calendario religioso, pues las masacres ocurrieron durante las fiestas del Espíritu Santo (Corpus Christi), la Virgen del Carmen y Navidad. Los días de fiesta fueron ocasiones propicias para las irrumpencias de los miembros del PCP-SL, pues en esas fechas todos los pobladores se encontraban reunidos, ocasión excepcional debido al patrón disperso de la comunidad. Las distracciones propias de las fiestas —cohete, fuegos artificiales, música, corridas de toros, alcohol— relajaban la vigilancia; además, el arribo de muchos visitantes permitía a los miembros del PCP-SL infiltrarse en celebraciones y aplicar una economía de violencia perversa y deliberada.

Durante la fiesta del Espíritu Santo murieron alrededor de veinte campesinos. El PCP-SL llegó buscándolos por sus nombres casa por casa. El ataque se inició a las 4:00 a.m. en Huantaqasa, luego llegó al centro del pueblo y a Wachwaqasa. Un comunero relata que los atacantes dijeron a gritos: «Uchuraccaya, lliutam tukusaq, uma calaveraykichichpim traguta, yawarta tomasaqku [a los de Uchuraccay, a todos los vamos a terminar, en la calavera de sus cabezas vamos a tomar trago y sangre]».<sup>127</sup>

Esa madrugada murieron Marcia Gálvez Ñawpa y Juana Gavilán García —esposa y hermana del teniente gobernador Fortunato Gavilán García—, Paula Ccasani Figueroa, Marina Ccasani Figueroa, Alberto Romero Nawpa, Telésforo Ayala Díaz, Sacarías Mauli y Alejandro Chávez, entre otros.<sup>128</sup>

El segundo ataque ocurrió a la medianoche del 16 de julio, luego de concluida la fiesta de la Virgen del Carmen. Los varones habían tomado y estaban dormidos. Entonces, alrededor de cincuenta miembros del PCP-SL entraron al pueblo por la parte alta de Tikllaqocha, donde se encontraba la casa de uno de los mayor-

<sup>126</sup> Ibídem.

<sup>127</sup> CVR. Testimonio 201695.

<sup>128</sup> Esta información, así como las que se ofrecen más adelante consignando el nombre de las víctimas, proviene de distintas entrevistas realizadas los años 2000, 2001 y 2002, contrastadas con los testimonios que la CVR recogió.

domos de la fiesta: Alejandro Pérez Garagondo. En esta incursión, fueron asesinadas unas veinte personas, entre ellas Alejandro y su hijo Marcial Pérez Rimachi, Pablo Taype, Baltazar Nawpa Ticlla, Benedicta Llancce Gavilán, Francisca Llancce Gavilán, Esteban Huachaca, Teófilo Huamán Cunto, Alejandra Figueroa Llancce, Melquíades Gavilán Romero, Miguel Solier Quispe, quien era violinista de Llaulli y vino a Uchuraccay para la fiesta por invitación de su suegro Julián Ayala, maestro arpista de la comunidad. A Simón Figueroa Cunto lo hicieron arrodillar y le dijeron «ahora pues, habla mal del partido, grita, y le dieron un tiro en la cabeza con una escopeta».<sup>129</sup> Un comunero recuerda que, al día siguiente, cuando los pobladores se reunieron para reconocer los cuerpos: «se nubló el poblado, por haber sucedido la masacre [...] A Pérez le habían ahorcado. A Pablo Taipe le habían baleado en la barriga, por eso los chanchos también le habían sacado los intestinos».<sup>130</sup>

Los cadáveres fueron depositados en la escuela, mientras los sobrevivientes se organizaban para cuidarse y dormir fuera de sus viviendas; se formó además una comisión que viajó a Huanta para informar a las autoridades. Sólo al día siguiente, el 19 de julio, llegaron los militares y autorizaron el entierro de los muertos.

El tercer ataque se dio en la víspera de la Navidad, el 24 de diciembre de 1983. Después de ingresar violentamente al pueblo, el PCP-SL sacó nuevamente de sus casas a los campesinos, con una lista, y luego de reunirlos en la escuela asesinó a ocho, entre ellos a Ignacio Figueroa Gavilán, Baltazar Figueroa Gavilán, Lorenzo Figueroa Cunto, Daniel Chocce Ayala, Benito Auccatoma Quispe, Teodora Soto Ticlla y Teófila Chávez Soto, madre y hermana de Silvio Chávez Soto, el secretario de la comunidad:

Nadie había podido dormir después que se fueron, en la mañana todos nos ayudamos a recoger a nuestros muertos, para velarlos y enterrarlos; pero teníamos mucho miedo de que fueran a volver, no podíamos estar tranquilos, estábamos muy asustados. Era imposible vivir así, pero qué podíamos hacer, nada [...] Yo lloraba todo el tiempo, hasta cuando comía, un día que estaba comiendo mi pan, mi hijita me dice mamita, no llores, come tranquila que yo te estoy cuidando. Así, cuando me veían llorar mis hijitos, me acompañaban llorando también. No teníamos a nadie.<sup>131</sup>

En esta espiral de destrucción, no sólo el PCP-SL agredió a Uchuraccay. En 1984, las comunidades organizadas en CDC habían estrechado sus coordinaciones con los militares. Las rondas de Ccacas, Ccanis y Pata-sucro, ubicadas en las partes altas de la ciudad de Huanta, así como las de Tambo, Balcón, Acco, Challhuamayo y Ccarhuahurán, hacían campañas de rastillaje por toda la zona buscando miembros del PCP-SL.<sup>132</sup> Uchuraccay fue visitada en varias ocasiones por estar ubicada en dirección al nevado Rasuwilca, que se había convertido en una base del PCP-SL desde donde las columnas atacaban los pueblos. Muchas veces estos rastillajes eran acciones conjuntas entre las rondas campesinas y los militares, que se convirtieron en violentas incursiones punitivas contra los uchuraccaínos.

Este último capítulo comenzó apenas unos días después del tercer ataque del PCP-SL. Los militares ingresaron al pueblo y se ensañaron con los sobrevivientes:

Después de cinco días volvieron los del helicóptero, los de la naval [Marina de Guerra], se bajaron allá al frente y entraron al pueblo a robarnos todo lo que teníamos, ¡ustedes son terrucos [subversivos]! nos decían. Todas nuestras ropas, nuestras ollas, platos, lo que teníamos papita guardado, todo buscaban, y se lo llevaban; hasta nuestra comida se lo han llevado, nuestro chuño, caya, pellejos donde dormíamos; todo se lo llevaban. Despues, saliendo quemaban la casa, así hacían [...] a todos nuestros animales arreando se los han llevado insultándonos, empujándonos, nos han quitado todo lo que teníamos, han destrozado lo que han querido, ¡terrucos [subversivos] son, carajo! nos decían; nos han dejado sin nada, ni siquiera para comer teníamos, han quemado nuestras casas.<sup>133</sup>

Las incursiones continuaron en los meses siguientes:

[...] los senderistas [subversivos], miembros de Comité de Autodefensa y los militares, indistintamente llegaban y quemaban las casas, robaban los enseres y ganados, ovejas, llamas, caballos, no respetaban a varones, mujeres ni niños, eran maltratados delante de la gente, violaban a las mujeres y después las mataban; además, cuando que-

<sup>129</sup> CVR. Testimonio 201695.

<sup>130</sup> CVR. Testimonio 201679.

<sup>131</sup> CVR. Testimonio 201681.

<sup>132</sup> Esta información proviene de la transcripción del Acta de Organización de los comités de Defensa Civil de los pagos de Balcón, Carhuapampa y Acco, organizados desde 1984.

<sup>133</sup> CVR. Testimonio 201681.

rían, mataban a los niños; nadie podía reclamar porque, si no, los mataban; por eso, los pobladores vivían escondiéndose en los cerros.<sup>134</sup>

Raspando la tierra hacíamos hueco. Así pasábamos todas las noches, así dormíamos, totalmente en el cerro, en el frío. Mi hijo también llorando. Al amanecer regresábamos a nuestras casas. Así en los huaycos escondiéndonos dormíamos.<sup>135</sup>

Luego de los ataques, muchos sobrevivientes huyeron hacia la selva y los valles de Huanta y Tambo. Quienes se quedaron al cuidado de los animales y cultivos fueron sobre todo mujeres y niños. En abril de 1984, incursionaron las rondas de carhuahurán y se llevaron las campanas de la iglesia y las carpetas y el techo de la escuela. En agosto, fueron asesinados por el Ejército la esposa y el pequeño hijo de Faustino Gómez, así como la hija menor de Paulino Figueroa. Ese mismo mes, cinco mujeres que escapaban en dirección a las cumbres del Rasuwilka fueron acribilladas desde un helicóptero. Lo escucharon venir y comenzaron a huir, como lo hacían cada vez que llegaban los miembros del PCP-SL y los militares. Buscaron refugio entre los cerros. Murieron Angelina Llancce Puylla, Inocencia Llancce, Bonifacia Gálvez Farfán, Emilia Ccahuana Cunto y María Maule.<sup>136</sup>

Por fin, hacia agosto de 1984, a los uchuraccaínos no les quedó más opción que vivir «esparcidos por todos lados».<sup>137</sup> La comunidad quedó deshabitada. Para entonces, hacía ya tiempo que Silvio Chávez Soto, el secretario de la comunidad que encabezó el ataque contra los periodistas, se había suicidado, acosado por el PCP-SL y presagiando la persecución de los meses siguientes. También Fortunato Gavilán, el teniente gobernador, quien trató de huir hacia la selva, terminó asesinado por el PCP-SL el 2 agosto de 1983 en Tacataca, en el kilómetro 48 de la carretera Tambo-Ayacucho. Sobre su cadáver se halló un cartel que decía «Fortunato Gavilán, cabeza negra de Uchuraccay, asesino de guerrilleros, campesinos y ocho periodistas. Así mueren los traidores del pueblo, serviles de Belaunde».<sup>138</sup>

Los comuneros que decidieron huir tampoco estuvieron libres de ser asesinados. Al pasar por las alturas de Carhuapampa, mientras escapaban de Uchuraccay hacia Tambo en busca de refugio, los hermanos Juan Manuel Romero Araujo y Pablo Romero Araujo fueron asesinados por los ronderos e infantes de marina de la base de Tambo. La misma suerte tuvieron Patrocina Gavilán Curo, Emilia Huachaca y Esteban Huachaca Cárdenas,<sup>139</sup> quienes murieron cuando huían hacia Santillana y Huanta. En Chaca, cuando huían hacia Huanta, Justina Huamán y su hijo de 17 años fueron acribillados por los militares y sus cuerpos fueron arrojados.

El vía crucis de los uchuraccaínos continuó en las zonas de refugio. La agrupación de desplazados de Ccarhuapampa,<sup>140</sup> hacia donde huyeron muchos uchuraccaínos, fue atacada por el PCP-SL en 1988. Murieron Paulina Ccasani Huicho, Fortunato Soto Ccasani, Dionisio Nawpa Gavilán y Angélica Huachaca Gavilán. Un sobreviviente recuerda que los miembros del PCP-SL llegaron «aproximadamente a las ocho de la noche, varones y mujeres entraron, algunos pobladores empezaron a escapar pero otros, que no pudieron, se quedaron. Mataron a varias personas, los mataron con hacha en la cabeza».<sup>141</sup>

Los uchuraccaínos recuerdan ese tiempo como una época de caos, confusión y extremo dolor: «muspaypa hina karaniku [como entre sueños hemos estado, como atontados hemos vivido]», dice Martina Gavilán Huamán, cuyo esposo Marcial Pérez Rimachi había sido asesinado la noche del 16 de julio, en plena fiesta de

<sup>134</sup> CVR. Testimonio 201695.

<sup>135</sup> Entrevista a Teófila Huaraca realizada en Uchuraccay el 9 de enero de 2001.

<sup>136</sup> CVR. Testimonios 201695 y 201693.

<sup>137</sup> CVR. Testimonio 201690.

<sup>138</sup> Oficio del juez Hugo Molina Ordóñez, juez de primera instancia de La Mar, al presidente de la Primera Sala Mixta de la Corte Superior de Ayacucho, en el expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>139</sup> CVR. Testimonios 201691 y 201690.

<sup>140</sup> Las llamadas «agrupaciones» fueron asentamientos de desplazados provenientes de diversas comunidades que se instalaron en los contornos de los cuarteles como consecuencia de la violencia. Estas agrupaciones cobijaron a las familias campesinas más pobres: aquellas que no tenían recursos económicos ni familiares para migrar lejos de sus comunidades de origen. Muchos uchuraccaínos huyeron a la agrupación Ccarhuapampa, ubicada en Tambo, la cual albergó familias provenientes de diversas comunidades de las alturas de Huanta, como Paria, Ccarhuac, Tantacocha, Balcón, Polanco, Rucacyacu, Chululla y Uchuraccay.

<sup>141</sup> CVR. Testimonio 201695.

la virgen del Carmen: «ya nadie estaba en el pueblo, sólo aullaban los perros. Nosotros empezamos a correr por aquí por allá en esa hora, no podemos ir a ningún lado».<sup>142</sup>

Las cifras son catastróficas. Murieron 135 personas en una comunidad que, en 1981, tenía 470 habitantes. La残酷 con la que los mataron ahonda la tristeza y el dolor; muchos recuerdan que sus familiares y amigos fueron asesinados con hachazos, apedreados, acuchillados o ahorcados. En varios casos, los cuerpos fueron arrojados en los cerros, donde fueron comidos por los perros. Algunos nunca fueron hallados. Tampoco fueron denunciados como desaparecidos.

La idea de vivir «muspaypa hina» no sólo muestra la confusión generalizada, sino también el estado emocional de zozobra e incertidumbre. Por contraste, algunos recuerdan que antes del tiempo de la violencia vivían tranquilos: «punta tiempopicca himapas tranquilullan karcca [en los tiempos anteriores, todo era tranquilo]».<sup>143</sup>

El estigma y la persecución obligaron a los uchuraccainos desplazados a negar su propia identidad comunal y personal, «por todas las zonas donde se refugiaban [...] tenían que negar su procedencia»<sup>144</sup> debido a la persecución cotidiana y las acusaciones de «salvajes», «chutos» y «mata periodistas». Así, cuando llegaron desplazados a Ccarhuapampa, en agosto de 1984, los uchuraccainos se asentaron como originarios de Huantaqasa.<sup>145</sup> El testimonio de Saturnina Figueroa grafica bien esta situación: «La gente de Tambo más nos odiaba porque éramos de Uchuraccay. Decían que éramos asesinos porque mataron a los periodistas; nosotros más nos defendíamos diciendo que éramos de Huantaqasa, será de Uchuraccay quienes mataron, así nos defendíamos».<sup>146</sup>

Los años transcurrían y la vorágine de la violencia continuaba. En 1992, un comunero uchuraccaino enrolado en el comité de autodefensa de una comunidad vecina volvió a ver la comunidad: «[...] como parte de la patrulla civil de San José de Secce, llegué a un cerro de donde se veía mi pueblo, estaba totalmente silencio. Observé que mis árboles que los había dejado pequeños, ya se veían grandes. Miré a Rasuwilka y estaba todo negro, seguramente por las cosas que pasaban, y me puse muy triste y lloré al ver a mi pueblo».<sup>147</sup>

#### 4.2.2. El retorno

Los años de la dispersión fueron muy duros para los uchuraccainos sobrevivientes, quienes hicieron de la negación y del silencio una estrategia de defensa frente a situaciones límite. Por todo ello, a inicios de la década de 1990 fue muy difícil plantearse la posibilidad del retorno, aunque en el fondo era algo muy querido. El líder de esta iniciativa fue el comunero Elías Ccenté, quien siendo presidente de la Asociación de Comunidades Desplazadas de la Provincia de Huanta (ACODEPH) convocó durante varios meses al reencuentro de las familias uchuraccainas desplazadas en Huanta, Tambo, Ayacucho, Lima y el valle del río Apurímac, mediante cartas, visitas personales y avisos por radio. Fue un proceso sumamente intrincado por la persistencia del miedo, la estigmatización de Uchuraccay y la incertidumbre sobre las posibilidades reales de reconstruir la comunidad. El grupo de uchuraccainos residentes en Huanta, dirigidos por Elías Ccenté, logró el compromiso de apoyo de diversas instituciones gubernamentales y privadas. Por fin, el 10 de octubre de 1993, ante la disminución de la acción subversiva en la zona, un grupo de 24 familias, apoyadas por el Concilio Nacional Evangélico Peruano (CONEP), volvió a Uchuraccay. Después de muchas discusiones respecto de si era conveniente o no adoptar un nuevo nombre para la comunidad, los retornantes decidieron mantener el de Uchuraccay, sobreponiéndose así al estigma que los persiguió durante tanto tiempo.

Debido a razones militares, y para alejarse de las «memorias malas»,<sup>148</sup> los retornantes decidieron emplazar el nuevo Uchuraccay en plena ladera, encima del antiguo centro del pueblo, en un lugar más frío pero seguro, adecuadamente resguardado ante la eventualidad de ataques. Después de tantos años, a pesar de la carencia de semillas y ganado, los uchuraccainos volvieron a sembrar poco a poco los surcos de sus chacras y

<sup>142</sup> Entrevista realizada en Uchuraccay el 7 de enero de 2001.

<sup>143</sup> CVR. Testimonio 201691.

<sup>144</sup> CVR. Testimonio 201695.

<sup>145</sup> En 1984, en el libro de actas de constitución de la Agrupación Carhuapampa, los uchuraccainos registrados mencionaron ser originarios de Huantaqasa, lo cual no ocurrió con los desplazados de las otras 14 comunidades, que mencionaron el nombre original de sus pueblos. «Uchuraccay era un nombre buscado y daba vergüenza», será lo que recuerde el líder del retorno, Elías Ccenté.

<sup>146</sup> Entrevista realizada en Uchuraccay el 9 de febrero de 2002.

<sup>147</sup> CVR. Testimonio 201679.

<sup>148</sup> Starn, Orin. «Uchuraccay y el retorno a los Andes». Quehacer, n.º 77. Lima: Desco, 1994, p. 84.

a pastar sus animales. Una base militar instalada en el pueblo brindó la seguridad necesaria para el retorno de otras familias desplazadas. Ésta se quedó en la zona hasta marzo de 1997.

Durante esos años, el gobierno de Alberto Fujimori utilizó el proceso de volver a poblar las comunidades ayacuchanas como prueba del éxito de su política de pacificación. La comunidad fue mostrada como ejemplo de esa política y, en 1995, el propio presidente inauguró el Nuevo Uchuraccay, compuesto por medio centenar de pequeñas casas contiguas, construidas por el Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) de acuerdo con un modelo arquitectónico urbano. El presidente entregó a la comunidad también una posta de salud, una ambulancia y tres computadoras (a pesar de que ésta no contaba con energía eléctrica).

El 26 de enero de 1998, en conmemoración de los 15 años de la muerte de los ocho periodistas, se realizó el «I Encuentro de la paz y la reconciliación nacional», impulsado por un grupo de periodistas ayacuchanos y por las autoridades del distrito de Tambo, quienes se contactaron con los familiares de los periodistas y difundieron ampliamente la convocatoria a dicha actividad. Como parte de los actos conmemorativos, se realizó una caravana desde Tambo hasta Uchuraccay, facilitada por la nueva carretera que se había construido hasta la comunidad. La caravana se ha venido repitiendo el 26 de enero de cada año bajo el nombre de «Ruta por la paz y la reconciliación nacional».

Sin embargo, para los uchuraccaínos, la conmemoración más importante es el 10 de octubre, día del retorno, en que celebran la reconstrucción de la comunidad y recuerdan los dolorosos sucesos ocurridos durante el tiempo de la violencia y la diáspora.

En mayo de 2002, al enterarse de que la CVR llegaría a la comunidad, algunos comuneros pensaron que ésta iba para «juzgarlos por la matanza de los periodistas». <sup>149</sup> Superada la primera desconfianza, los comuneros elaboraron, en dos asambleas, la lista de los uchuraccaínos muertos a causa de la violencia. Era el primer acto de reconocimiento, mediante el cual comenzaban a darle rostro e identidad a sus muertos. El presidente de la comunidad, Emilio Ccente, hizo entrega de esta relación al representante de la CVR de la sede de Ayacucho.

#### 4.3. EL CONTEXTO DE INTERPRETACIÓN

Después de la masacre de los periodistas, se realizaron investigaciones de distinto tipo, que buscaron identificar a los culpables y explicar las razones de lo ocurrido. Las más importantes fueron las realizadas por la Comisión Investigadora nombrada por el gobierno, por la prensa limeña y por el Poder Judicial.

##### 4.3.1. El Informe de la Comisión Investigadora

La Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay fue constituida el 2 de febrero de 1983, una semana después de ocurrida la masacre de los periodistas, mediante la resolución suprema 0016-83-PCM, del 2 de febrero de 1983, que le encargaba elaborar un informe sobre los sucesos en el plazo de un mes. La Comisión fue presidida por el escritor Mario Vargas Llosa e integrada además por el periodista Mario Castro Arenas y el jurista Abraham Guzmán Figueroa. Los comisionados convocaron a un selecto equipo de asesores compuesto por tres antropólogos, un psicoanalista, un jurista y dos lingüistas.

Cumpliendo su mandato, en ceremonia especial realizada en Palacio de Gobierno, la Comisión entregó su informe al presidente Fernando Belaunde Terry a inicios de marzo. Ante la expectativa generada, el contenido del informe fue expuesto en la televisión por Mario Vargas Llosa. Diversas partes de éste fueron publicadas por los medios de prensa y el texto completo, acompañado por cinco anexos elaborados por los asesores especialistas, referidos a los aspectos antropológicos, jurídicos, psicoanalíticos y lingüísticos del problema, así como por algunas fotografías, fue editado tres meses después en un libro que tuvo circulación muy restringida.<sup>150</sup>

El informe está organizado en dos partes. La primera de ellas, titulada «Cómo fue», busca reconstruir los hechos: describe cronológicamente los preparativos del viaje de los periodistas, el itinerario seguido y las circunstancias del encuentro fatal con los campesinos de Uchuraccay. La segunda parte, titulada «¿Por qué

<sup>149</sup> CVR. Entrevistas realizadas en Uchuraccay el 29 de mayo de 2002.

<sup>150</sup> *Informe de la Comisión Investigadora de los sucesos de Uchuraccay*. Lima: Editora Perú, 1983. Citada en adelante como *Informe...*

fue?», busca explicar la masacre presentando las «causas inmediatas» y las «causas mediadas» del escenario de violencia en que ocurrió.

A pesar de las limitaciones en la recolección de testimonios,<sup>151</sup> el informe pudo describir el contexto en el que se produjo la masacre: la violencia generalizada que vivía la zona por el enfrentamiento abierto desatado entre comunidades y miembros del PCP-SL. Logró reconstruir verazmente, asimismo, los sucesos ocurridos desde que los periodistas iniciaron los preparativos del viaje hasta que ocurrió la tragedia y estableció con «convicción absoluta» que «el asesinato de los periodistas fue obra de los comuneros de Uchuraccay, posiblemente con la colaboración de comuneros de otras comunidades iquichanas, sin que, en el momento de la matanza, participaran en ella fuerzas del orden».<sup>152</sup>

El silencio de los comuneros respecto del modo de ejecución de la masacre, motivado por su afán de ocultar la muerte del guía Juan Argumedo y del comunero Severino Huáscar Morales,<sup>153</sup> impidió a la Comisión llegar a establecer los pormenores de lo ocurrido el 26 de enero, por lo que el informe supuso, con «convicción relativa», que los periodistas «debieron ser atacados de improviso, masivamente, sin que mediara un diálogo previo».<sup>154</sup> Posteriormente, el hallazgo de las fotografías tomadas por Willy Retto<sup>155</sup> demostró que dicha suposición era falsa. Esto, para diversos sectores de la opinión pública, desacreditó el conjunto del informe, a pesar de que éste precisaba líneas abajo que «no se puede descartar, tampoco, que este intento de diálogo se produjera y fuese inútil debido al exceso de suspicacias, pánico y furor de los comuneros o a alguna imprudencia o error en el curso de la conversación por parte de los periodistas que agravase el malentendido en vez de disiparlo».<sup>156</sup>

Aunque niega la presencia de miembros de las fuerzas del orden el 26 de enero en Uchuraccay, el informe señala que los campesinos fueron alentados a usar la violencia por los *sinchis*, quienes les indicaron los días previos que debían matar a todo subversivo que llegara al pueblo. El informe determinó que, en el desenlace de los hechos, «jugó un papel importante, y acaso decisivo, la seguridad de los comuneros de que tenían autorización para actuar así por parte de la autoridad representada por los *sinchis*».<sup>157</sup> Sin embargo, la Comisión concluyó que dicha incitación no fue sistemática ni respondió a una política implementada por el comando político militar, excluyendo de esa manera a los altos mandos militares de cualquier responsabilidad.

El informe determinó que los ejecutores directos del crimen fueron los campesinos de Uchuraccay, reconstruyó fehacientemente los hechos ocurridos hasta el momento de la llegada de los periodistas a dicha comunidad y entrevió el contexto de violencia imperante. No obstante, brindó una explicación sumamente controvertida de los hechos, que tuvo consecuencias significativas en el contexto del conflicto armado interno de esos años.<sup>158</sup> La masacre fue presentada como resultado de un malentendido generado por las diferencias culturales existentes entre los campesinos quechuas y el país urbano.

Para explicar este malentendido cultural, la Comisión reprodujo la contraposición entre un «Perú profundo» y un «Perú oficial» y concluyó que la masacre mostraba la propia tragedia del Perú como país y nación. Por ello, existía «una responsabilidad histórica anterior y más vasta detrás de las piedras y palos sanguinarios de Uchuraccay que nos incumbe a una mayoría de peruanos».<sup>159</sup>

El supuesto malentendido cultural subyacente a los hechos fue destacado posteriormente por Mario Vargas Llosa, quien presentó a Uchuraccay como parte de un mundo completamente diferenciado del resto del

<sup>151</sup> Ninguno de los comisionados hablaba quechua y apenas pudieron realizar una visita a Uchuraccay el 11 de febrero, recogiendo las declaraciones de los comuneros en una Asamblea Comunal en la cual hablaron, sobre todo, los varones. La transcripción de esta asamblea nunca fue publicada.

<sup>152</sup> *Informe...*, p. 19.

<sup>153</sup> Véase la parte del presente informe referida a los hechos ocurridos el 26 de enero.

<sup>154</sup> *Informe...*, p. 15.

<sup>155</sup> El 14 de mayo de 1983, al realizarse un patrullaje de búsqueda ordenado por el juez Juan Flores Rojas, fue hallado un maletín oculto en una pequeña cueva del cerro Raccaccasa, el cual contenía varios rollos fotográficos y los documentos personales de Willy Retto, Amador García y Pedro Sánchez. Fue hallada también una cámara fotográfica marca Minolta perteneciente a Willy Retto, la cual contenía un rollo con nueve fotos que captan los momentos previos a la matanza (acta de incautación a fojas 1544 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

<sup>156</sup> *Informe...*, p. 15.

<sup>157</sup> Ibídem, p.20.

<sup>158</sup> La invisibilidad de la muerte de 135 campesinos es, por ejemplo, causa y consecuencia del tipo de interpretaciones que aquí se analizan.

<sup>159</sup> *Informe...*, p. 40.

país, congelado en el tiempo, «atrasado y tan violento», con hombres que viven «todavía como en los tiempos prehispánicos». <sup>160</sup> De acuerdo con esa visión, la distancia cultural entre los «dos Perú», entendida también como una distancia histórica, aparece formulada como el gran problema nacional:

El que haya un país real completamente separado del país oficial es, por supuesto, el gran problema peruano. Que al mismo tiempo vivan en el país hombres que participan del siglo XX y hombres como los comuneros de Uchuraccay y de todas las comunidades iquichanas que viven en el siglo XIX, para no decir en el siglo XVII. Esa enorme distancia que hay entre los dos Perú está detrás de la tragedia que acabamos de investigar. <sup>161</sup>

El énfasis en la absoluta diferenciación cultural guió también las interpretaciones desarrolladas por los antropólogos asesores de la Comisión, quienes buscaron la clave de los hechos analizando el trasfondo mágico-religioso de la matanza. El tipo de ajusticiamiento —con golpes concentrados en los ojos y la boca, sobre todo— así como la forma de entierro —fuera del cementerio, con dos cuerpos por cada fosa, semidesnudos y boca abajo— mostraron que los periodistas fueron considerados «diablos» o «seres que en vida hicieron pacto con el mal», <sup>162</sup> ya que fueron enterrados «según otros rituales destinados a los “no bautizados” o “no cristianos” o los “anticristos”». <sup>163</sup>

Otro elemento que guió las explicaciones del informe fue considerar la pertenencia de las comunidades de las punas de Huanta al «grupo étnico de Iquicha» o «iquichanos». Se trataría de un grupo étnico de orígenes prehispánicos, heredero de una historia caracterizada «por largos períodos de aislamiento casi total y por intempestivas irrupciones bélicas de esas comunidades en los acontecimientos de la región o de la nación». <sup>164</sup> El rasgo característico de esas comunidades —su cultura arcaica y ancestral— fue denominado en el informe como «tradición iquichana»: una «actitud atávica», determinada por el rechazo a las influencias externas y el uso esporádico de la violencia contra los foráneos:

La celosa preservación de un fuero propio, que, cada vez que se siente transgredido, los arranca de su vida relativamente pacífica y huraña, y los precipita a luchar con bravura y ferocidad, aparece como una constante en la tradición iquichana y es la razón de ser de esa personalidad belicosa e indómita que se les atribuye en las zonas de abajo, sobre todo en las ciudades.

De su voluntad de retramiento o, de su resistencia a ver profundamente alterados o interferidos una cultura y unos modos de vida que, a fin de cuentas, son lo único que los iquichanos tienen (y es, por lo tanto, lo máspreciado de su existencia), la Comisión ha recogido abundantes ejemplos contemporáneos. <sup>165</sup>

Sin embargo, la ancestral «etnia iquichana» no existió antes del siglo XIX y fue, más bien, una identidad creada por las élites regionales ayacuchanas interesadas en diferenciarse de los campesinos de las zonas altas. Así, aquellos eran presentados como herederos de la belicosa tribu prehispánica de los Pokras, integrante de la Confederación Chanka. <sup>166</sup> Esta imagen de las comunidades de las alturas como un grupo étnico cerrado, atrapado en sus propias fronteras, contrasta con las demandas que los campesinos de Uchuraccay formularon a la propia Comisión en la asamblea realizada el 11 de febrero de 1983:

— Ari ñoqayku nisitaniku, manam kaypi kanchu ni kachiyku, bilayku, icha terruristakuna atakamuwaptinku nisitaniku kintirna, pila, chaykunata, señor, imawanmi tutakuna ataka wanmanku, imawanmi chay terrorista-kunata abir hapiymanku ñoqayku, señor [Sí, nosotros necesitamos, aquí no tenemos ni nuestra sal, nuestra ve-la, tal vez si los terroristas [subversivos] nos atacaran necesitamos linterna, pila, esas cosas, señor, si no, con qué cosa si nos atacaran de noche, con qué cosa los agarraríamos a esos terroristas [subversivos], señor].

<sup>160</sup> «Después del informe: conversación sobre Uchuraccay». Entrevista a Mario Vargas Llosa realizada por Alberto Bonilla. *Caretas*, n.º 738, 7 de marzo de 1983. Semejante imagen fue ofrecida por Mario Vargas Llosa en un extenso relato literario sobre la masacre publicado en la edición dominical del diario *The New York Times* («Inquest in the Andes». *The New York Times*, agosto de 1983. Publicado en castellano como «Historia de una matanza». En *Contra viento y marea* 3. Lima: PEISA, 1990, pp. 139-170).

<sup>161</sup> Ibídem.

<sup>162</sup> *Informe...*, p. 37.

<sup>163</sup> Ossio, Juan y Fernando Fuenzalida. «Informe antropológico: la comunidad de Uchuraccay y la región iquichana». *Informe...*, anexo n.º 1, p. 64.

<sup>164</sup> *Informe...*, p. 38.

<sup>165</sup> Ibídem, p. 39.

<sup>166</sup> La denominación de «iquichanos» y el propio pueblo de Iquicha fueron creados desde la tercera década del siglo XIX según lo establecen recientes estudios históricos (véase Méndez, Cecilia. *El poder del nombre, o la construcción de identidades étnicas y nacionales en el Perú: mito e historia de los iquichanos*. Lima: IEP, documento de trabajo n.º 115, 2002).

- [Mario Vargas Llosa]: ¿Qué otros asuntos quisieran que habláramos, qué otras cosas quisieran que le dijéramos al Presidente?
- [Rumor]: Chaymantan karritira chayamuwaqtinku [...] kaypi tranquilu kanaykupaq. [Si luego llega la carretera [...] para que aquí estemos tranquilos]
- [Mario Vargas Llosa]: El Presidente quisiera saber cómo funciona la escuela de Uchuraccay.
- Kay bin hamuytaqa hamuwankum prufisurakuna, siñur. Hinaptinmi mana kayna famillakunataqa allintaqa yachachinchu kumu innuranti kaniku [...] Ñoqaykuqa munaniku kayna innuranti kasqaykuman hina ñawiyku munaniku, siñur. Aski karritiratapas, aski iskwilakuna kananpaqpas munanikum, siñur, kayna wawayuq churiyuq kakqa, siñur, idukayta hina hay llaqtaykupi, siñur, munaniku, siñur [Aquí, bien, de venir nos vienen las profesoras, señor. Y así a las familias como nosotros no nos enseñan bien, somos como ignorantes [...] Nosotros queremos, de acuerdo a lo que somos así ignorantes, queremos tener ojos, señor. Aunque sea carretera también, que haya escuelas también queremos, señor, los que tenemos niños e hijos señor, queremos educar aquí en nuestro pueblo señor].
- [Mario Vargas Llosa]: A mí me gustaría saber si quisieran que los profesores éstos les dieran las clases en quechua o en castellano.
- [Se oyen respuestas, entre ellas]: Castillanupi yachachiwanankuta iskayninpí yachachinantán munaniku [Que nos enseñen en castellano, en los dos que nos enseñen, queremos].<sup>167</sup>

De acuerdo con esa imagen de tradicionalidad extrema de Uchuraccay, el informe construyó, asimismo, su *otredad jurídica*. El asesor legal de la Comisión, Fernando de Trazegnies, consideró que «las comunidades de altura no tienen una clara conciencia del Estado peruano y, en cambio, viven intensamente su propia identidad étnica constituyendo verdaderas nacionalidades dentro de la Nación».<sup>168</sup> Sin embargo, las investigaciones de la CVR permiten afirmar que, desde un primer momento, los uchuraccainos eran conscientes de la existencia del orden jurídico nacional y de sus organismos de seguridad. Por eso, desde octubre de 1982 y hasta el día mismo de la masacre, acuden en diferentes momentos a la GC para que los proteja y restablezca el orden.

Por otro lado, el orden jurídico comunal se hizo invisible en el informe a pesar de que los propios campesinos, así como los familiares de Juan Argumedo, describieron en sus declaraciones el proceder de los tenientes gobernadores, presidentes, *varayocs* y demás autoridades comunitarias. Como se ha visto, de manera paulatina, a medida que los acontecimientos se sucedieron, las acciones de los campesinos transitaron desde el rechazo pacífico en octubre de 1982 a la expulsión violenta de los miembros del PCP-SL, hasta el punto de decretarse una auténtica rebelión intercomunal contra el PCP-SL, dirigida por las autoridades tradicionales. En tal contexto, se realizaron juicios intercomunales como los ocurridos el 27 de enero en Uchuraccay, en que fueron juzgados los iquichanos sospechosos de pertenecer o apoyar al PCP-SL, así como la esposa, madre y hermana del guía Juan Argumedo, quienes solamente fueron absueltas después de prestar juramento ante el crucifijo de la vara, símbolo máximo de la autoridad comunitaria.<sup>169</sup>

Sin embargo, el informe determinó que los campesinos resolvían sus conflictos guiados por un instinto casi natural de supervivencia, prácticamente al margen de cualquier normatividad, considerando que, en medio de la violencia, «creen por su tradición, por su cultura, por las condiciones en que viven, por las prácticas cotidianas de su existencia, que en esta lucha por la supervivencia todo vale y que se trata de matar primero o de morir».<sup>170</sup> La distancia cultural de los uchuraccainos, además, pondría en tela de juicio incluso su condición de ciudadanos y sujetos de derecho: «¿Es posible hacer aquellos distingos jurídicos, clara y precisamente establecidos por nuestra Constitución [Política] y nuestras leyes, ante hombres que viven en las condiciones de primitivismo, aislamiento y abandono en Uchuraccay?».<sup>171</sup>

Al respecto, la CVR señala con énfasis que, durante el conflicto armado interno, los principales perpetradores fueron el PCP-SL, inspirado según sus propios dirigentes y documentos por una «ideología científica», y los agentes del Estado.<sup>172</sup> Asimismo, que en los días previos a la masacre de los periodistas, tanto los *sinchis* como el jefe del comando político militar y el propio Presidente de la República, que deberían hacer los «dis-

<sup>167</sup> Transcripción de la asamblea entre los comuneros de Uchuraccay y la Comisión Vargas Llosa, realizada el 11 de febrero de 1983.

<sup>168</sup> De Trazegnies, Fernando. «Informe». En Informe..., anexo n.º 5, p. 152.

<sup>169</sup> Véase la parte correspondiente a los hechos del 27 de enero en la primera sección del acápite sobre Uchuraccay.

<sup>170</sup> Informe..., p. 33.

<sup>171</sup> Informe..., p. 34. Al hablar de distingos jurídicos, dicho informe se refirió a la distinción entre legalidad e ilegalidad.

<sup>172</sup> De acuerdo con los testimonios recogidos por la CVR, el PCP-SL es responsable de alrededor del 54% de las víctimas mortales del conflicto armado interno.

tingos jurídicos clara y precisamente establecidos en nuestra Constitución [Política] y nuestras leyes», saludaron los asesinatos de presuntos miembros del PCP-SL en Huaychao y alentaron sucesivamente a los comuneros de las alturas de Huanta a tomar la justicia en sus propias manos.

Por otro lado, en 1983, Uchuraccay distaba mucho de la imagen congelada e inmóvil brindada por el informe. Desde 1959, la comunidad contaba con una pequeña escuela, sostenida, sobre todo, por los propios campesinos, la cual ofrecía los primeros años de educación primaria. También había dos pequeñas tiendas, las cuales vendían productos de consumo básico: sal, azúcar, fideos, conservas, etc. Dos comuneros se dedicaban al comercio de ropa, la cual traían de Huanta y Tambo; otro al comercio de artefactos domésticos como radios, máquinas de coser, etc., que los traía desde Lima y Huancayo. Muchos otros eran comerciantes de ganado.

Casi todos los varones salían temporalmente a trabajar hacia la selva de Ayacucho para la cosecha de coca, cacao y café. Algunas familias ya tenían tierras compradas en el valle. Esta tradición migratoria de los uchuracáinos, que se desplazaban tanto a los valles de Huanta como a la selva del Apurímac, era bastante antigua, y Uchuraccay era una ruta de tránsito antes de que se construyera la carretera Ayacucho-Tambo-San Francisco en 1964.<sup>173</sup> Desde la década de 1960, además, algunos uchuracáinos habían emigrado hacia Lima. Es el caso de Olimpio Gavilán, uno de los comuneros vestidos con ropa de ciudad el día que mataron a los periodistas. Otro emigrante, que había partido bastante joven a la selva, hacia 1983 ya tenía un carro que circulaba entre Huanta, Tambo y el valle del río Apurímac, llevando productos como ropas, abarrotes y verduras.

Así, mientras los uchuracáinos soñaban y construían una mejor vida, emigrando y participando del mercado local, aunque en condiciones de extrema pobreza, el informe de la Comisión supuso que, para ellos, «la noción misma de superación o progreso debe ser difícil de concebir».<sup>174</sup>

Esta imagen primitiva de Uchuraccay fue tal vez construida viendo la indumentaria de los campesinos, hecha de la bayeta confeccionada de la lana de sus animales, la cual los protegía bien del duro frío de la puna. Sin embargo, no todos usaban la misma indumentaria; había jóvenes que usaban casacas y pantalones confeccionados en la ciudad. Algunos de ellos ya tenían relojes de pulsera. El uso de estos objetos modernos por parte de los campesinos sería el origen de las sospechas de quienes buscaron hallar las pruebas de la presencia de «agentes externos», suponiendo que se trataba de sinchis o infantes de marina infiltrados entre los comuneros.

Este modo de interpretación ha sido denominado «paradigma indigenista».<sup>175</sup> Se trata de un discurso que esencializa las diferencias culturales y presenta a los campesinos como reliquias vivientes de un pasado milenario, subsistente a pesar de las influencias de la sociedad moderna u occidental. Las interpretaciones desarrolladas por la Comisión Vargas Llosa muestran los límites de dicho paradigma, el cual funcionó como un lente que enfatizó las fronteras, convirtió en esenciales las diferencias culturales y construyó la imagen de una comunidad totalmente aislada y casi primitiva. Pero no sólo dicha Comisión buscó explicar de ese modo los acontecimientos ocurridos en Uchuraccay. Hacia 1983, dicho ese razonamiento estaba bastante extendido entre diversos sectores de la opinión pública y la intelectualidad. Incluso los medios de prensa y los magistrados reprodujeron tal visión y buscaron explicar el caso mediante interpretaciones que subrayaron la diferencia cultural de los campesinos quechuas con respecto al conjunto del país como causa fundamental de la tragedia. Tal perspectiva no sólo contribuyó a bloquear el acercamiento a la realidad de los hechos, sino también a reforzar la imagen paternalista según la cual los campesinos —considerados como seres extraños e incapaces pero, en el fondo, buenos— no podían actuar ni pensar por sí mismos.

---

<sup>173</sup> El anexo antropológico del informe mencionó que los comuneros consumían productos de origen urbano como fideos, azúcar, alcohol y que poseían tocadiscos, linternas y otros artefactos eléctricos, por lo cual «las comunidades de la zona iquichana no pueden ser calificadas de primitivas, salvajes o aisladas por completo» (*Informe antropológico: la comunidad de Uchuraccay y región iquichana*. En *Informe...*, p. 73). Sin embargo, el informe final consideró que: «La Comisión tiene testimonios que prueban que en la comunidad hay artefactos como linternas, radios y tocadiscos a pilas. No es éste el primer caso de una sociedad en la que el primitivismo y el arcaísmo culturales pueden coexistir con el uso de ciertos productos manufacturados modernos» (*Informe...*, p. 23).

<sup>174</sup> *Informe...*, p. 36.

<sup>175</sup> Véase Mayer, Enrique. «Peru In Deep Trouble: Mario Vargas Llosa's "Inquest in the Andes" Reexamined». En George Marcus (ed.). *Rereading Cultural Anthropology*. Durham y Londres: Duke University Press, 1992.

#### 4.3.2. Los medios y la construcción de la responsabilidad

Al momento de ocurrir la matanza de los periodistas, era muy poco lo que se conocía sobre el PCP-SL. Sectores significativos de la opinión pública, especialmente aquellos de izquierda y centroizquierda, lo veían como un grupo guerrillero equivocado pero impulsado por el anhelo de transformación social del país. Aun cuando ya comenzaban a producirse asesinatos y atentados contra la infraestructura productiva, difíciles de comprender incluso dentro de la lógica de la lucha guerrillera,<sup>176</sup> los hechos de más impacto fueron los asaltos a puestos policiales —que obligaron al rápido repliegue de las Fuerzas Policiales de las zonas rurales de Ayacucho— y el asalto del centro penitenciario de Huamanga en marzo de 1982. Poco se sabía de la construcción del «nuevo poder» del PCP-SL en el campo.

Por el contrario, desde que Ayacucho fue declarado en emergencia en 1981 se multiplicaron las denuncias contra las Fuerzas Policiales y, en especial, contra los *sinchis*. Este rechazo se agudizó luego del asesinato, en el hospital general de Ayacucho, de tres miembros del PCP-SL vueltos a capturar luego de fugar del centro penitenciario. En ese contexto, el entierro de la militante del PCP-SL Edith Lagos en septiembre de ese mismo año convocó a miles de huamanguinos y se convirtió en una manifestación de reivindicación regional y rechazo a los abusos cometidos por las fuerzas del orden.

Poco después, en ese contexto de cierta legitimidad urbana del PCP-SL y creciente des prestigio de las fuerzas policiales, el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas asumir el control de las provincias ayacuchanas en estado de emergencia. La masacre de los periodistas ocurrida apenas un mes después de la instalación del comando político militar de Ayacucho conmovió a la opinión pública, des prestigió al gobierno y polarizó al país. Los medios de prensa participaron activamente en la disputa por la construcción de imágenes comunes de un país que recién tomaba conciencia de la gravedad del conflicto armado interno.

Algunos medios de prensa convirtieron el caso en una batalla política contra el gobierno y enfatizaron la supuesta responsabilidad del comando político militar y del propio Presidente de la República. Aunque *El Diario de Marka* fue el medio más insistente en esta campaña desde una oposición de izquierda al régimen,<sup>177</sup> también participaron en ella otros periódicos como *La República* y *El Observador*. El semanario *Caretas* y el diario *El Comercio*, por su parte, disputaron el acceso a información y la búsqueda de primicias desde una posición editorial que otorgó más credibilidad a las informaciones oficiales.

Diversos intelectuales ejercieron también la autoridad de la palabra frente a una audiencia deseosa de explicaciones. Los elementos culturales y mágico-religiosos de la masacre, presentados en el informe de la Comisión Investigadora como «índicios muy claros respecto de la atmósfera dentro de la cual se han producido todos estos acontecimientos»,<sup>178</sup> fueron también el centro de la argumentación desarrollada por quienes criticaron dichas conclusiones. El mismo paradigma indigenista, preocupado sobre todo por la autenticidad cultural de la conducta campesina, permitió sustentar la tesis contraria: que los comuneros de Uchuraccay no podían haber sido los ejecutores de la masacre porque, en el mundo andino, no se entierra a los muertos semidesnudos, ni en parejas, ni en fosas superficiales.<sup>179</sup> Estas tesis fueron sostenidas en momentos en que el conflicto armado interno se extendía rápidamente, alterando patrones culturales vigentes en tiempos normales, como se puso en evidencia, por ejemplo, el 3 de abril de 1983 en Lucanamarca, donde fueron masacradas 69 personas.<sup>180</sup>

*El Diario de Marka* asumió la matanza de los periodistas como un campo de lucha mediática desde el cual combatir la militarización y la guerra sucia, responsabilizando al gobierno por lo ocurrido. Era el periódico

<sup>176</sup> Como el asesinato del director de la filial ayacuchana del Instituto Nacional de Cultura o la destrucción del fundo experimental Allpachaca, de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.

<sup>177</sup> A través de *El Diario de Marka*, los partidos políticos de izquierda se pronunciaron consistentemente en torno a los hechos. El 31 de enero de 1983, el Comité Directivo Nacional de Izquierda Unida hizo público un comunicado responsabilizando directamente al comando político militar de Ayacucho por los sucesos de Uchuraccay (*El Diario de Marka*, 31 de enero de 1983, p. 2).

<sup>178</sup> Ossio, Juan y Fernando Fuenzalida. «Informe antropológico: la comunidad de Uchuraccay y la región iquichana». En *Informe...*, anexo n.º 1, p. 64.

<sup>179</sup> Véanse las opiniones de los antropólogos Juan Ossio y Rodrigo Montoya, quienes analizaron los elementos mágico-religiosos de la masacre sosteniendo tesis contrapuestas en el conversatorio «Uchuraccay: ¿crimen sin castigo?». *La República*, 19 de marzo de 1983.

<sup>180</sup> Entre los atacantes participaron campesinos reclutados por el PCP-SL en las comunidades del río Pampas (véase el encarte periodístico: Lucanamarca: una tercia esperanza. Lima: CVR, 2002). Son muchos los testimonios recogidos por la CVR que relatan actos de violencia de niveles inconcebibles ocurridos en diversas regiones del país.

más golpeado por la tragedia, pues tres de sus reporteros —Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán— habían muerto en la fatídica expedición.<sup>181</sup> Las sospechas de este diario respecto de la responsabilidad gubernamental por lo que sucedía en las alturas de Huanta surgieron a raíz de la muerte de los siete miembros del PCP-SL en Huaychao. El último reporte de Eduardo de la Piniella sobre Huaychao, publicado antes de su viaje a Uchuraccay, afirmaba que: «testimonios de los lugareños ponen en duda que los comuneros puedan actuar de manera tan violenta con hijos de la zona».<sup>182</sup> Al conocerse los sucesos de Uchuraccay, la presunta responsabilidad de los militares y del gobierno fue presentada como verdad irrefutable. El domingo 30 de enero, día en que se exhumaron los cuerpos de los periodistas, *El Diario de Marka* informó sobre algunas versiones contrarias a las informaciones oficiales, las cuales terminarían convertidas en la versión de dicho diario sobre lo ocurrido: «Según versiones que circulan en Ayacucho, serían *sinchis* disfrazados de campesinos. Los reporteros fueron asesinados por *sinchis* cuando conversaban con campesinos».<sup>183</sup> Ese día la prensa llegó por primera vez a Uchuraccay y el país fue impactado por las imágenes televisadas de la exhumación de los cadáveres, pero *El Diario de Marka* ya había hecho pública la tesis de la responsabilidad militar.

Al día siguiente, 31 de enero, *El Diario de Marka* publicó tres de las entrevistas realizadas por el periodista ayacuchano Luis Morales<sup>184</sup> y las presentó como evidencia de la culpabilidad militar a pesar de que ninguna de ellas mencionaba la presencia de *sinchis* el día del crimen. El comunero Saturnino Ayala relató claramente la incitación de los *sinchis* días antes de la masacre y se refugió en la ignorancia ante las incisivas preguntas del reportero:

- ¿Los *sinchis* les han dicho que deben matar?
- Han venido en helicóptero y se han sentado en esa pata [morro] y nos han dicho «sáquenle los ojos, la lengua a la gente que no conocen, que son enemigos».
- ¿Así les han dicho?
- Sí.
- Está bien, señor, eso es lo que nosotros queríamos saber. ¿Cuándo fue eso?
- El 20 más o menos han venido los *sinchis*.
- ¿En diciembre?
- En enero han venido los *sinchis*. Por eso, nosotros, que somos ignorantes, hemos hecho caso a lo que nos han dicho.
- Cuéntame claro, ¿cuántos días han pasado desde que les han dicho eso hasta que llegó esa gente? ¿Los periodistas han venido el miércoles más o menos a la hora de la *tojra* [hora de *chacchar* la coca], a las 4:00 p.m.?
- Sí.
- ¿Qué día les han dicho eso los *sinchis*?
- Han venido casi terminando la semana [pasada], más o menos el jueves o viernes. De eso no sabemos mucho, porque somos ignorantes.<sup>185</sup>

Otro comunero, cuyo nombre no fue mencionado en el reportaje, también negó la presencia de policías el día de los hechos:

- ¿Dónde han matado a esa gente?
- Los hemos alcanzado allá por la casa de Antonio Chávez, más arriba de la casa del teniente [gobernador].
- ¿En su casa o en la puerta?
- No, más acá.
- ¿Hubo policías?
- No, sólo la gente.
- ¿Sólo gente?
- Sí, la gente de acá.<sup>186</sup>

<sup>181</sup> Se detalla el caso de *El Diario de Marka* por tratarse del medio que sostuvo de manera más influyente la tesis de la responsabilidad militar. Esta posición editorial no impidió, sin embargo, que, en sus páginas, se publicasen algunos artículos que dudaban de dicha responsabilidad o asumían como cierta la culpabilidad colectiva de los comuneros.

<sup>182</sup> *El Diario de Marka*. Lima, 25 de enero de 1983, p. 3.

<sup>183</sup> *El Diario de Marka*. Lima, 30 de enero de 1983, p. 3.

<sup>184</sup> «Así murieron los periodistas. Excepcional testimonio de tres comuneros». *El Diario de Marka*, 31 de enero de 1983.

<sup>185</sup> Ibídem.

<sup>186</sup> Ibídem.

Posteriormente, el 12 de febrero, se publicó la totalidad de testimonios recogidos por el periodista Luis Morales.<sup>187</sup> Dichos testimonios desmienten los titulares publicados por el propio *Diario de Marka* durante todos esos días. El periodista, visiblemente contrariado por la muerte de sus compañeros, entrevistó a los campesinos usando un lenguaje que oscilaba entre el paternalismo y la agresividad:

- ¿Cómo están, hijos? ¿Cuándo hicieron esto?
- Anteayer, señor.
- ¿Anteayer nomás? ¿Pero, por qué los mataron?
- Porque los «terrucos» no nos dejan.
- Pero ellos vinieron sin armas.
- Porque continuamente nos molestan. Tenían bandera roja.
- Ellos [por los periodistas] vinieron sin bandera roja, en eso de la bandera roja mienten ¿Por qué mienten?
- Sin bandera roja han venido.<sup>188</sup>

Momentos después, el campesino condujo al reportero al lugar donde se hallaban las tumbas y afirmó que procedieron al desentierro de los cadáveres «por orden de los señores jefes». Pero el titular principal que acompaña los testimonios señala: «Los primeros testimonios: “Los señores jefes nos mandaron enterrarlos”. Las autoridades lo saben todo».<sup>189</sup> El periodista estaba convencido de que recién esa mañana habían sido enterrados los muertos por orden de los *sinchis*:

- A ver, llévame.
- Los señores jefes han ordenado que se abran las tumbas... [Alguien les indica que se callen].
- ¿Por qué los jefes han ordenado que los enterraran?
- Sí, señor... No señor. En este momento...
- Esto han enterrado ahora. ¿Por qué lo han hecho?
- Yo no soy quien ha enterrado. Aquí están señor [indica las tumbas]. Nosotros sólo estamos viendo.
- Mientes. ¿Quién ha ordenado que se haga esto? ¿Por qué dices que vinieron con bandera roja? ¿Cuántos fueron los que vinieron?
- Ocho, señor.<sup>190</sup>

Constantemente, *El Diario de Marka* confunde la presencia de los *sinchis* en la comunidad en los días previos y su incitación a la violencia con su responsabilidad directa en la masacre del 26 de enero. Antes que facilitar el relato de los hechos, las preguntas de Luis Morales buscan imponerse sobre las opiniones del entrevistado y le impiden narrar completamente su versión sobre lo ocurrido. Así, por ejemplo, al entrevistar a Vicente Quispe:

- ¿Por qué los mataron entonces?
- Aquí no consentimos nada. Por eso les dimos muerte.
- ¿A ustedes nadie les enseñó para que mataran?
- No, no han enseñado, señor.
- ¿Nadie?
- Sí, señor.
- ¿Cómo es que tus copoblanos dicen que vinieron las tropas y les enseñaron?
- Sí, señor. Así va a ser. Éstos son gamonalistas [refiriéndose a las víctimas]. No consentimos a gente extraña.
- Lo que te enseñaron, cuéntame.
- Yo no sé más, señor.
- Si no sabes, ¿por qué hablas, entonces?
- Sí, señor, así es, pues, señor.
- ¿Si no sabes por qué hablas? ¿Por qué mientes?
- No miento, señor.
- ¿Entonces viste o no viste?
- Sí, señor, todos hemos visto.
- Pues entonces cuéntame lo que has visto
- Sí, hemos visto, señor. Sí hemos visto a esa gente [se refiere a los periodistas masacrados]

<sup>187</sup> «Estos son los testimonios de Uchuraccay». *El Diario de Marka*, 12 de febrero de 1983, pp. 22-27.

<sup>188</sup> Declaraciones de un comunero no identificado. Ibídem, p. 23.

<sup>189</sup> Ibídem, p. 23.

<sup>190</sup> Ibídem. Sólo posteriormente, al entrevistar a Teodosio Soto, el reportero aclaró sus dudas respecto de la fecha del entierro a pesar de lo cual se publicó el titular mencionado.

- ¿Qué cosa viste en ellos?
- Habían venido el miércoles por la tarde, por eso hemos visto.
- ¿Con qué les dieron muerte?
- Les hemos dado muerte con palos, nada más.
- ¿Les dieron muerte con palos nada más? ¿Sin armas, sin ningún motivo?
- Sí, señor.
- ¿No tuviste pena de dar muerte a un hombre como tú?
- De tener pena, hemos tenido pena.<sup>191</sup>

«Así será, pues, señor [como usted diga]». La clásica respuesta defensiva del campesino ante el mestizo en posición dominante es traducida como «así es». Al margen de su calidad personal y profesional, Luis Morales se revela en sus entrevistas como un *misti*,<sup>192</sup> que trata a los campesinos como «hijos» y parece acostumbrado a que le respondan lo que quiere escuchar. Éstas son sólo algunas de las transcripciones de las entrevistas publicadas por *El Diario de Marka*, todas en tono similar. No sólo se advierte la tergiversación de las declaraciones de los campesinos, sino también la ausencia de interés por otorgarle credibilidad a sus voces. En ningún momento se les toma en cuenta a pesar de que todos los entrevistados afirman reiteradamente que fueron ellos quienes mataron a los periodistas.

Las declaraciones de Juana Lidia Argumedo, la hermana del guía de los periodistas, quien llegó a Uchuraccay al día siguiente de la matanza junto a su madre y cuñada, también fueron incorporadas dentro de esta visión de la comunidad como radicalmente ajena al resto del país. Juana Lidia Argumedo contó que, entre los comuneros, figuraba «un joven alto, moreno con pelo crespo, vestido de campesino. Llevaba también una casaca y llevaba reloj. Hablaba perfectamente el castellano».<sup>193</sup> *El Diario de Marka* publicó dicha declaración como prueba de la responsabilidad militar, exponiendo en su titular: «Extraño que habla castellano estuvo en masacre de mártires».<sup>194</sup>

Aunque ni los campesinos de Uchuraccay ni Juana Lidia Argumedo mencionaron la presencia de los *sinchis* al momento de ocurrir la matanza, *El Diario de Marka* terminó sindicándolos como responsables directos de la matanza a pesar de la ausencia de evidencias y de las primeras declaraciones de Juana Lidia Argumedo, en las cuales mencionó que dicho joven era un campesino de Putka.<sup>195</sup>

También las fotografías publicadas por *Caretas*,<sup>196</sup> así como las que valientemente logró tomar Willy Retto momentos antes de la matanza,<sup>197</sup> fueron presentadas como evidencia de la presencia de supuestos militares o policías entre los comuneros. *El Diario de Marka* y *La República* reprodujeron una visión estereotipada de la vestimenta campesina y la presentaron como absolutamente tradicional y sin ningún componente urbano. Los supuestos infantes de marina o *sinchis* fueron reconocidos por usar relojes, anteojos, pantalones de un material diferente a la bayeta común entre los campesinos y, además, por su «porte».<sup>198</sup>

Las voces de los campesinos, testigos directos de los hechos, quedaron así silenciadas o fueron recogidas para tratar de acumular evidencias de la manipulación, la ignorancia y la diferencia cultural. Los testimonios considerados válidos por la prensa opositora fueron los de quienes sostenían que los verdaderos culpables del

<sup>191</sup> Declaraciones de Vicente Quispe. Ibídem, pp. 25 y 27.

<sup>192</sup> Nombre quechua para denominar a los mestizos vinculados a los poderes locales y al comercio dentro de la sociedad andina tradicional, anterior a la Reforma Agraria.

<sup>193</sup> *El Diario de Marka*, 10 de febrero de 1983, p. 3.

<sup>194</sup> Ibídem.

<sup>195</sup> «[...] inmediatamente los acorralaron a su cuñada y luego tres campesinos de ese grupo lo agredieron a sopapos en la cabeza, por lo que un joven alto, al parecer licenciado del Ejército y versado en castellano, residente en el pago de Putka, salió en defensa de su cuñada, expresando que no sean abusivos por su ignorancia por maltratar a mujeres y les sugirió que solamente les llevara presa, cumpliendo la sugerencia de este joven los comuneros les llevaron a la casa comunal» (declaración informativa de Juana Lidia Argumedo, a fojas 265 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

<sup>196</sup> Sobre todo las publicadas en su edición n.º 733, que mostraban a los campesinos de Huaychao acompañados por miembros de las fuerzas del orden.

<sup>197</sup> El revelado original de las nueve fotografías, realizado en el Laboratorio Fotográfico Interamericano, se halla a fojas 1885 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>198</sup> De las nueve fotos tomadas por Willy Retto los instantes previos a su muerte, sólo una distingue con claridad el rostro de dos campesinos: Teodora Soto Ticlla y su hijo Antonio Chávez Soto, quienes posteriormente fueron asesinados. Estos nombres han sido proporcionados por dos comuneros uchuraccaínos sobrevivientes de los hechos, cuyos nombres se mantienen en reserva por razones de seguridad.

crimen no podían ser los campesinos, como el periodista Luis Morales de *El Diario de Marka*, la profesora Alejandrina de la Cruz y Juana Lidia Argumedo, convertida por los medios de oposición en testigo clave del caso, a pesar de no haber estado presente en la comunidad cuando ocurrieron los hechos.

Luego de los sucesos de Uchuraccay, la estrategia de guerra sucia puesta en práctica por el comando político militar de Ayacucho contribuyó a generar un clima proclive a la creencia en la culpabilidad de los sinchis e infantes de marina en la matanza de los periodistas. Al prohibir la presencia de la prensa en las zonas rurales, las fuentes de información se restringieron principalmente a los comunicados oficiales. De esta forma, Uchuraccay aparecía como parte de un complot para justificar la política de desinformación impuesta por las autoridades militares. De hecho, fue un pretexto y sirvió para poner en sordina el rápido incremento de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden en las zonas declaradas en estado de emergencia. Juana Lidia Argumedo fue una de sus víctimas. A mediados de septiembre de 1984, fue detenida por un grupo de infantes de marina y conducida al cuartel militar de Tambo, donde fue torturada y violada a pesar de contar con las garantías del Episcopado Peruano y del Ministerio del Interior por ser testigo del caso Uchuraccay. Luego de tales hechos, las constantes declaraciones de Juana Lidia Argumedo fueron una de las principales evidencias de las denuncias públicas efectuadas por los medios de oposición contra las Fuerzas Armadas y el gobierno.

#### 4.3.3. El proceso judicial

El expediente judicial del proceso Uchuraccay se encuentra en posesión del Séptimo Juzgado de Procesos en Reserva de Lima. Se trata de un expediente voluminoso, compuesto por aproximadamente 10 mil folios que guardan toda la información utilizada por las autoridades judiciales para determinar la responsabilidad de la muerte de los periodistas.

El proceso judicial se inició el 30 de enero de 1983, día de la exhumación de los cadáveres. Desde entonces, jueces, fiscales y abogados buscaron resolver el caso, recogiendo pruebas y analizando alrededor de un centenar de declaraciones.<sup>199</sup> El conjunto del proceso —abierto con la toma de conocimiento de los hechos por parte del juez y culminado con la sentencia en segunda instancia— fue sumamente accidentado y complejo y se prolongó durante cinco largos años hasta que, finalmente, el 14 de junio de 1988, fue emitida la sentencia definitiva.

Sin embargo, el proceso aún no ha terminado y se encuentra en situación de reserva debido a que 14 de los 17 inculpados nunca fueron capturados. La orden de requisitoria de estos catorce campesinos todavía sigue vigente hasta que se los capture, se certifique su muerte o finalmente se prescriba el caso.<sup>200</sup> Periódicamente, el Séptimo Juzgado de Lima libra órdenes de captura contra estos requisitoriados no habidos, la mayoría de los cuales fallecieron debido a las represalias sufridas por la comunidad de Uchuraccay después del 26 de enero de 1983. Otros viven todavía sin saber que la justicia los busca.

Desde el inicio, el proceso estuvo colmado de irregularidades. El 30 de enero de 1983, el juez instructor de Huamanga, doctor Hugo Molina, tomó conocimiento del caso a pesar de que Uchuraccay no se encontraba en su jurisdicción. Esta irregularidad fue ocasionada por la interferencia de los altos mandos del comando político militar de Ayacucho, quienes solicitaron al Juez conducir la diligencia de exhumación y lo trasladaron con premura hasta Uchuraccay.<sup>201</sup> Una vez en el lugar de los hechos, el Juez procedió a la exhumación de los cadáveres y a la realización de las primeras indagaciones, acompañado por 13 especialistas en criminalística de la PIP llegados desde Lima. Sin embargo, dicho procedimiento no contó con la presencia del Fiscal Provincial en lo Penal y del Secretario Judicial encargado de certificar y legalizar el acta, por lo cual el Juez nombró como testigo actuario al sinchi Luis Mesías Román.<sup>202</sup> Al término de la diligencia, el

<sup>199</sup> Entre los citados a declarar figuraron campesinos, periodistas, policías, altos mandos militares, familiares de las víctimas, especialistas en medicina forense y educadores. También los miembros de la Comisión Investigadora nombrada por el gobierno.

<sup>200</sup> En enero de 2003, al cumplirse veinte años de la masacre, se esperaba que fuese dictada la resolución de prescripción, pero las autoridades judiciales consideraron que el plazo legal de permanencia de la situación en reserva del proceso es de treinta años, por lo cual éste no prescribirá hasta dentro de una década, es decir, hasta el año 2013.

<sup>201</sup> El 30 de enero, por órdenes del general EP Roberto Clemente Noel Moral, el coronel PIP Víctor Pizarro de los Santos envía un oficio al juez Hugo Molina en el que solicitaba que su despacho tome conocimiento del caso y proceda a la exhumación de los cadáveres, debido a la ausencia del Juez Instructor de Huanta y al arribo de peritos llegados desde Lima (Oficio Urgente 11-JBP, a fojas 1 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

<sup>202</sup> Acta de exhumación de los cadáveres, a fojas 4 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

Juez, también de manera irregular, determinó que se abriera instrucción «contra los que resulten responsables», incumpliendo las normas que disponen la individualización de los presuntos responsables al momento de abrir instrucción. Tampoco se realizaron detenciones a pesar de encontrarse pruebas contundentes del crimen, como un hacha con restos de sangre y una olla con sangre y restos de masa encefálica, que fueron hallados en la casa del teniente gobernador, Fortunato Gavilán.<sup>203</sup>

Debido a las graves irregularidades cometidas durante el inicio del proceso, el 2 de febrero, la Corte Superior de Ayacucho separó al juez Hugo Molina y nombró como juez instructor *ad hoc* al doctor Juan Flores Rojas. Aunque esta medida permitió la regularización jurídica del proceso, resultaba imposible subsanar los errores cometidos durante la diligencia de apertura. Además, dichas irregularidades generaron la desconfianza de los familiares de los periodistas y diversos sectores de la prensa respecto de la probidad e independencia de las autoridades judiciales de Ayacucho para resolver el caso.

Entre tanto, fue elevado el atestado 11-IC-JDP, del Departamento de Investigación Criminal de la PIP, el cual identificó a cuatro comuneros como presuntos responsables del crimen: Fortunato Gavilán, Silvio Chávez Soto, Santiago Ccenté y «un tal Arone».<sup>204</sup> El atestado concluyó, además, que los campesinos de Uchuraccay mataron a los periodistas por haberlos confundido con miembros del PCP-SL debido a que portaban una bandera roja.

El 7 de febrero, con base en los atestados policiales, la Fiscalía Provincial de Huamanga denunció a Fortunato Gavilán, Silvio Chávez Soto y Santiago Ccenté y ordenó su detención. Posteriormente, dicha denuncia fiscal fue ampliada contra más de una decena de comuneros de Uchuraccay, así como contra el periodista Luis Morales, quien fue responsabilizado por el general EP Roberto Clemente Noel Moral por la muerte de los periodistas, acusándolo de alentar el viaje a Huaychao y no haber comunicado sobre éste a las autoridades. Debido a estas denuncias efectuadas por el Ministerio Público, el Juez *ad hoc* amplió el auto de apertura de instrucción y procedió a tomar las instructivas de ley.

Conforme transcurrió el proceso se fue ampliando la lista de inculpados y se llegó a identificar a un total de 17 comuneros, entre ellos a dos mujeres.<sup>205</sup> Los criterios seguidos por el juzgado para la identificación de los presuntos responsables fueron básicamente dos: la presunta responsabilidad de las autoridades comunales de Uchuraccay y los testimonios de Juana Lidia Argumedo y Julia Aguilar, quienes identificaron a algunos de los comuneros que estuvieron en Uchuraccay cuando fueron detenidas, los días 27 y 28 de enero. Los 17 comuneros identificados fueron acusados por el juez instructor y fueron detenidos solamente tres de ellos: el presidente de la comunidad Dionisio Morales Pérez, el varayoc Simeón Auccatoma Quispe y el comunero Mariano Ccasani González.<sup>206</sup>

Entre marzo y mayo de 1983, el juez ad hoc Juan Flores Rojas viajó a las alturas de Huanta y tomó las declaraciones de los campesinos que podían haber sido testigos de los hechos. El 3 de marzo se reunió con 18 hombres y cinco mujeres de Uchuraccay y recogió sus declaraciones sobre los hechos del 26 de enero.<sup>207</sup> Posteriormente, del 9 al 14 de mayo recorrió las comunidades de Uchuraccay, Huaychao e Iquicha y recogió las declaraciones de diversas autoridades y campesinos.<sup>208</sup> La cámara fotográfica de Willy Retto fue hallada el último día de esta diligencia judicial al realizarse una inspección ordenada por el juez en los cerros de Uchuraccay.

<sup>203</sup> El periodista Luis Morales, que presenció la diligencia judicial, narró el momento en que se realizó dicho hallazgo. Grabó, además, el breve interrogatorio realizado por el juez a Marcia Gavilán, esposa del teniente gobernador, quien informó que su esposo y el resto de autoridades se habían ido a Tambo, cumpliendo una citación realizada por la primera patrulla mixta que llegó al pueblo el día anterior. («Mi esposo conversó con esos señores. Declaraciones de Marcia Gálvez, esposa del gobernador Fortunato Gavilán». *El Diario de Marka*, 12 de febrero de 1983, p. 27).

<sup>204</sup> Posteriormente, gracias a algunas declaraciones, se pudo determinar que el «tal Arone» era el presidente de una comunidad cercana a Uchuraccay, que participó el 27 de enero en la expedición intercomunal realizada a Iquicha en búsqueda de miembros del PCP-SL.

<sup>205</sup> La lista de los 17 comuneros acusados es la siguiente: Dionisio Morales Pérez, Simeón Auccatoma Quispe, Mariano Ccasani González, Celestino Ccenté Figueroa, Fortunato Gavilán García, Silvio Chávez Soto, Mariano Figueroa Rojas, Dionisio Ccenté Auccatoma, Francisco Ñaupa Ticlla, Dionisio Ramos Ricra, Daniel Chocce Ayala, Antonio Chávez Soto, Teodora Soto Ticlla, Lorenzo Figueroa Cunto, Olimpio Gavilán Huaylla, Marcia Gálvez Ñaupa y Juan Ayala Cahuana.

<sup>206</sup> Dionisio Morales Pérez fue detenido el 17 de mayo de 1983; Mariano Ccasani González, el 5 de julio de 1983; y Simeón Aucatoma Quispe, el 20 de julio de 1983.

<sup>207</sup> Entre los campesinos que brindaron declaraciones al juez, figuran Dionisio Ramos Ricra, Esteban Chávez Soto, Antonio Soto, Dionisio Ccenté, Feliciano Soto, Mariano Gutiérrez, Esteban Marces Gavilán, Alejandro Ayala y Florencia Figueroa.

<sup>208</sup> Entre estas declaraciones, figuran las de los comuneros de Iquicha que fueron apresados y conducidos a Uchuraccay el 27 de enero.

La investigación realizada por el Juzgado de Instrucción *ad hoc* finalizó el 17 de febrero de 1984, un año y un mes después de ocurridos los hechos, con la transferencia del expediente a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El 14 de agosto de 1984, el Ministerio Público formuló la acusación fiscal contra los 17 campesinos inculpados y solicitó como pena mínima 25 años de prisión por el delito de homicidio múltiple.

Después de formulada la acusación fiscal, el Primer Tribunal Correccional, presidido por el doctor Hermenegildo Ventura Huayhua, dictó el auto de enjuiciamiento contra los 17 campesinos acusados, declaró como ausentes a 14 de ellos y procedió al inicio del juicio oral. Éste se inició con gran expectativa el día 28 de septiembre de 1984 en la Sala de Audiencias de la Corte Superior de Ayacucho. Los 3 acusados presentes fueron desde entonces el centro de atención de los asistentes y de la prensa.

Debido a que los acusados eran quechuhablantes, el juicio se realizó con la asistencia de intérpretes, quienes repetidas veces señalaron la dificultad de traducir al quechua las preguntas formuladas por los miembros de la sala, así como de interpretar literalmente las declaraciones de los acusados.<sup>209</sup> La carencia de una adecuada comunicación entre los miembros de la sala y los acusados fue una de las mayores dificultades presentes a lo largo del proceso. A ello se añadió la situación de desigualdad y evidente discriminación de que fueron objeto los acusados. En una de las audiencias, Mariano Ccasani González llegó a solicitarle a uno de los vocales «que le haga preguntas como a una persona mortal sin tratarlo de hacerlo confundir».<sup>210</sup> Momentos después, dicho vocal trató de desacreditarlo, diciéndole que además de evangelista era ignorante, ante lo cual el acusado replicó: «están viendo que es ignorante y por el hecho de que es ignorante en el juzgado han puesto en su manifestación lo que han querido y ahora también le están tratando de sacar cosas, aprovechando de esta su ignorancia seguramente que Lidia Argumedo también lo mandó apresar aprovechando de su ignorancia y si es posible a él lo pueden mandar a donde sea que nada le puede ocurrir [...] porque está bajo la protección de Dios».<sup>211</sup>

Pero esa actitud fue una excepción, pues durante todas las audiencias los acusados se mostraron sumamente afectados y sumisos, sobre todo Simeón Auccatoma Quispe, quien irrumpió varias veces en llanto rogando a los magistrados creer en su inocencia y ser justos.<sup>212</sup> Los tres acusados señalaron en diversos momentos del juicio que desconocían las razones de su detención y encarcelamiento y solicitaron ser liberados por no haber participado de la masacre y ser «ignorantes» por no saber leer, escribir ni comprender el castellano. De ese modo, la situación de subordinación de los comuneros debido a su condición de acusados también estuvo marcada por la discriminación étnica y diferenciación social prevalecientes en Ayacucho y en el país.

El juicio oral se prolongó a lo largo de diez meses, hasta el 24 de julio de 1985, fecha de la última audiencia. Durante ese tiempo, además de los acusados, declararon casi un centenar de testigos, los cuales expusieron diferentes versiones que reflejaron la complejidad de los acontecimientos.

Al carácter sumamente controvertido de los hechos investigados, se añadió una serie de circunstancias que desacreditaron la actuación judicial ante la opinión pública, como las reiteradas opiniones del juez Ventura Huayhua ante los medios de prensa nacionales e internacionales, en las que anunciablea haber «descubierto» las razones del crimen y a los reales culpables. Asimismo, fue de conocimiento público que el comando político militar de Ayacucho se negó a brindar las facilidades requeridas para el desarrollo del proceso judicial: negó apoyo, recursos e información aduciendo para ello supuestas razones de seguridad.

Durante la audiencia del 26 de marzo de 1985, el fiscal Óscar Guerrero solicitó, ante el asombro de los asistentes, nada menos que el retiro de la acusación contra los tres procesados y su puesta inmediata en libertad, así como la reserva del proceso hasta que fuesen habidos los 14 procesados restantes. El argumento del fiscal fue que no se había logrado probar la participación de los acusados en la masacre. Ello generó la airada protesta de los familiares de los periodistas presentes en la sala y el llamado al restablecimiento de la calma por parte del Juez, quien enseguida desestimó la petición del Fiscal. Producto de ese hecho, se

<sup>209</sup> El intérprete Edilberto Lara señaló que sólo podía realizar una traducción semiliteral, debido a las diferencias entre el quechua y el castellano (Fojas 3690 del expediente judicial del proceso Uchuraccay). Por su parte, el intérprete Clodoaldo Soto Ruiz señaló que en la audiencia existía «una contextura cultural muy diferente», por lo que resultaba muy difícil realizar la traducción del quechua al castellano y viceversa (Fojas 3727 del expediente judicial del proceso Uchuraccay). Ambos intérpretes eran profesores de quechua de la Universidad de Huamanga. Clodoaldo Soto se desempeña hoy como profesor en una universidad de los Estados Unidos.

<sup>210</sup> Declaraciones de Mariano Ccasani González, a fojas 3933 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

<sup>211</sup> Ibídem, fojas 3955.

<sup>212</sup> Declaración de Simeón Auccatoma Quispe, a fojas 3733 del expediente judicial del proceso Uchuraccay.

inició un conflicto entre el Tribunal y el Ministerio Público, a lo cual se sumaron las denuncias de los familiares y algunos medios de prensa, que culparon al comando político militar de Ayacucho de presionar al Poder Judicial para que el caso quedase impune.

El 12 de septiembre de 1985 fue declarada fundada la solicitud de los familiares de transferencia del proceso a Lima y, posteriormente, el 25 de noviembre del mismo año, el Octavo Tribunal Correccional de Lima fue designado para asumir la continuación del proceso.

Ya en Lima, el expediente fue elevado al Octavo Tribunal Correccional, el cual, desde mediados de abril de 1986, se convirtió en un Tribunal Especial dedicado exclusivamente al caso Uchuraccay y fue presidido por el doctor Luis Serpa Segura e integrado por los vocales César Tineo Cabrera y Arsenio Oré Guardia.

Se reinició así el juicio oral del proceso. Los magistrados volvieron a tomar las declaraciones de los familiares y principales testigos de los hechos, pero no pudieron realizar otra diligencia en el escenario de los hechos.<sup>213</sup> Así, se limitaron a tomar conocimiento de que Uchuraccay se había convertido en una comunidad fantasma, debido a que sus pobladores habían sido asesinados o habían huido hacia otras localidades. Durante este último período del juicio, fue descubierto el cuerpo del guía Juan Argumedo, el cual había sido trasladado secretamente por sus familiares desde Uchuraccay al cementerio de Chacabamba.

El Tribunal Especial emitió sentencia el 9 de marzo de 1987, cuatro años después de iniciado el proceso. Dionisio Morales Pérez, Mariano Ccasani González y Simeón Auccatoma Quispe fueron condenados a las penas de diez, ocho y seis años de reclusión, respectivamente. A pesar de que el fiscal había solicitado 25 años de reclusión para los tres acusados por el delito de homicidio calificado, la sala determinó que no existían elementos de juicio para atribuirles la intención de aumentar deliberadamente el padecimiento de las víctimas y que además se trataba de campesinos semianalfabetos sin antecedentes penales ni judiciales «sometidos a un estado genérico de violencia y, por así decir, entre dos fuegos».<sup>214</sup> El tribunal resaltó la inaplicabilidad del artículo 45 del Código Penal entonces vigente por no tratarse de «indígenas semicivilizados o degradados por la servidumbre y el alcoholismo» sino de «peruanos que viven en el marco de una cultura que, no por diferente, deja de ser creadora, eficaz y digna de todo respeto».<sup>215</sup>

La sentencia declaró comprobada la presencia de personal militar y policial en Uchuraccay el día de la masacre basándose en los siguientes indicios: la visita regular de patrullas a las comunidades; las fotografías de Willy Retto que mostrarían una persona con pantalón de material diferente al usado en el atuendo tradicional, con zapatos y un porte distinto; la presencia de personal encubierto reconocido por el uso de relojes y sortijas; y las declaraciones de Juana Lidia Argumedo sobre la presencia de un joven extraño el día de su detención, el cual hablaba castellano, usaba reloj, encendedor y tenía autoridad sobre el resto de comuneros. A la luz de lo que se ha denominado paradigma indigenista, todos estos elementos fueron percibidos por los magistrados como indicios de la presencia militar o policial en Uchuraccay el día del crimen.

A pesar de que a lo largo de sus 47 considerandos la sentencia buscó diferenciarse del informe elaborado por la Comisión Vargas Llosa, terminó suponiendo —de manera semejante— que Uchuraccay era una comunidad absolutamente tradicional en términos culturales. De allí que, en los considerandos dedicados a describir los rasgos del contexto sociocultural de los hechos, la sentencia consideró que la modalidad de entierro podía brindar valiosos elementos de juicio sobre los hechos y determinó que la costumbre de los comuneros era enterrar a sus muertos «siempre en su cementerio, individualmente, con el cuerpo boca arriba, vestidos con hábito o mortaja, en fosas profundas».<sup>216</sup> La deducción de los magistrados fue que los comuneros debieron ser obligados por personas extrañas a enterrar a los periodistas incumpliendo sus costumbres funerarias tradicionales.

<sup>213</sup> A lo largo del proceso, las únicas diligencias judiciales realizadas en el escenario de los hechos fueron las siguientes, todas en 1983:

- 30 de enero: primera diligencia judicial (exhumación de los cadáveres)
- 11 de febrero: segunda diligencia judicial (exhumación del cuerpo de Juan Argumedo, el mismo día en que Mario Vargas Llosa está reunido en asamblea con los campesinos de Uchuraccay. Sin embargo, no encontraron el cuerpo del guía).
- 3 de marzo: tercera diligencia judicial (el juez Juan Flores Rojas visita Uchuraccay y tiene una reunión con los comuneros).
- 9 al 14 de mayo: cuarta diligencia judicial (el juez Juan Flores Rojas llega a Uchuraccay, Huaychao e Iquicha y entrevista a las autoridades).

<sup>214</sup> Considerando cuadragésimo tercero de la sentencia judicial.

<sup>215</sup> Ibídem. El Código Penal de 1924, entonces vigente, caracterizaba a los indígenas «semicivilizados o degradados» como inimputables.

<sup>216</sup> Considerando décimo sexto de la sentencia judicial.

Sin embargo, fueron los propios comuneros quienes relataron durante el proceso que, al final de la tarde del 26 de enero, depositaron los cadáveres de los periodistas en cuatro fosas cercanas a la plaza del pueblo, sin ningún afán de ocultamiento, debido a la premura del tiempo, pues caía la noche y temían las represalias de los miembros del PCP-SL.<sup>217</sup> Uno de los testimonios recogidos por la CVR en Uchuraccay<sup>218</sup> señala que los campesinos se negaron deliberadamente a usar el cementerio del pueblo por no enterrar allí a quienes fueron considerados extraños, ladrones y subversivos. Pero, como se vio anteriormente, eso no ocurrió con el cadáver del comunero Severino Huáscar Morales, quien fue trasladado al cementerio luego de ser ocultado en un primer momento. Éste fue enterrado de acuerdo con las costumbres locales por sus familiares. Al realizarse la exhumación del cadáver de Severino Huáscar Morales, se encontró que había sido enterrado de acuerdo con las costumbres descritas por testigos como Mariano Ccasani González<sup>219</sup> y la maestra Alejandrina de la Cruz.<sup>220</sup> Lo mismo ocurrió con el cuerpo de Juan Argumedo, que fue trasladado secretamente al cementerio de su pueblo por su hermana Juana Lidia. Los cuerpos de los periodistas, en cambio, sólo fueron depositados en las fosas, sin que dicha acción corresponda propiamente a un entierro.<sup>221</sup>

Después de emitida la sentencia, los familiares de los periodistas presentaron un recurso de apelación y solicitaron que el Poder Judicial determine la responsabilidad del presidente Fernando Belaunde Terry y los altos mandos militares. Dicha revisión fue efectuada por la Corte Suprema de Justicia, que emitió su fallo el 14 de junio de 1988, en el cual aumentaba a 15 años la pena de reclusión de los acusados Dionisio Morales Pérez y Mariano Ccasani González, por el delito de homicidio simple, y confirmaba el resto de la sentencia. El fallo contra el tercer acusado, Simeón Auccatoma Quispe, fue declarado nulo debido a que seis meses antes había fallecido a causa de una tuberculosis contraída en el penal de Lurigancho.<sup>222</sup>

Al final, la responsabilidad de los hechos recayó sobre los tres únicos detenidos a pesar de que los magistrados no lograron comprobar su participación directa el día de la masacre. El Tribunal quiso probar la culpabilidad de los inculpados suponiendo que al menos dos de ellos, Dionisio Morales Pérez y Simeón Auccatoma Quispe, debieron participar de los hechos en su condición de autoridades de la comunidad. Y aunque esta circunstancia resultaba insuficiente como prueba que permitiera desechar la presunción de inocencia, los tres comuneros fueron condenados de todas maneras.

¿Qué verdad se quiso descubrir durante todos los años que duró el proceso Uchuraccay? De modo infatigable, los magistrados buscaron comprobar la responsabilidad directa de militares o policías en la muerte de los periodistas. A pesar de lo dilatado del proceso, las pruebas jamás fueron halladas. El comando político militar, por su parte, se encargó de obstaculizar reiteradamente las indagaciones judiciales.

Más allá de las fallas de fondo y de forma del proceso, y de la voluntad de obstrucción del comando político militar, al cerrar los varios tomos del expediente resulta inevitable concluir que la condena contra los comuneros uchuraccainos era irrelevante.<sup>223</sup> El objetivo real del proceso, que no varió a pesar de los cambios de jurisdicción, fue descubrir aquella supuesta verdad que la Comisión Vargas Llosa no había revelado: la culpabilidad de los infantes de marina o de los *sinchis*, quienes habrían actuado cumpliendo órdenes superiores.<sup>224</sup>

<sup>217</sup> Lo hicieron de modo similar que los campesinos de Huaychao, quienes enterraron a los siete miembros del PCP-SL asesinados el 21 de enero de 1983 en una sola fosa. Véase la sección del presente informe correspondiente a los hechos del 26 de enero.

<sup>218</sup> CVR. Testimonio 203432.

<sup>219</sup> «Se entierran en el panteón. La gente que tiene dinero le pone el hábito y las zapatillas. Luego del entierro, encima de la fosa le colocan una piedra que ellos llaman fábrica rume» (declaración de Mariano Ccasani González, a fojas 3,897 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

<sup>220</sup> «[...] cavan en la tierra una profundidad regular, luego hacen una especie de empedrado en la base de la fosa, colocan al muerto boca arriba y a un costado de éste una jarra con agua, porque tienen la creencia que el alma en la otra vida no padezca de sed, luego lo cubren con tierra y sobre la tumba colocan una cruz» (declaración de Alejandrina de la Cruz, a fojas 4,202 del expediente judicial del proceso Uchuraccay).

<sup>221</sup> Son innumerables los testimonios recogidos por la CVR Verdad que relatan hechos terribles cometidos en medio del conflicto armado interno, que no encuentran correspondencia con las costumbres locales en tiempos de paz.

<sup>222</sup> Simeón Auccatoma Quispe murió en prisión el 29 de diciembre de 1987. Su cuerpo —que pudo ser arrojado a la fosa común— fue enterrado gracias a la intervención del Consejo Indio de Sudamérica.

<sup>223</sup> En el expediente, se encuentran constantes atestados policiales que señalan la destrucción y desolación sufrida por Uchuraccay durante esos años hasta quedar convertida en una comunidad fantasma. Sin embargo, para algunos sectores de la opinión pública, los comuneros estaban siendo desaparecidos por los militares con la finalidad de eliminar a los testigos.

<sup>224</sup> El considerando quincuagésimo sexto de la sentencia judicial refleja el ánimo de los magistrados ante la Comisión Vargas Llosa. Luego de señalar que su nombramiento transgredió la Constitución Política, «pues la facultad de nombrar comisiones investigadoras de esa

La posibilidad de que los campesinos pudiesen ser capaces de defenderse violentamente ante una situación de conflicto armado, nunca fue considerada por los jueces. Durante los cinco años del proceso, las voces de los comuneros ni siquiera fueron escuchadas.

#### 4.4. CONCLUSIONES

A partir de los testimonios recogidos y de las investigaciones realizadas, la CVR considera:

- Que el PCP-SL no respetó la autonomía, las formas de organización y cultura de los campesinos de Uchuraccay y desencadenó una escalada de violencia a partir del asesinato del presidente de la comunidad.
- Que esos y otros asesinatos de dirigentes campesinos en comunidades vecinas llevaron a que un conjunto de comunidades de las alturas de la provincia de Huanta se organizara para su autodefensa y buscara tomar la justicia en sus propias manos. Así, protagonizaron la primera rebelión intercomunal contra el PCP-SL.
- Que diversos agentes del Estado —los *sinchis* e infantes de marina, el jefe del comando político militar y el propio Presidente de la República— alentaron esta conducta y fomentaron la ruptura del monopolio del uso de la violencia legítima por parte del Estado.
- Que, en diversas oportunidades, desde que el gobierno ordenó a las Fuerzas Armadas asumir el control interno del departamento de Ayacucho, mediante el decreto supremo 068-82 IN del 29 de diciembre de 1982, las patrullas de infantes de marina y *sinchis* visitaron las comunidades de las punas de la provincia de Huanta, entre ellas Uchuraccay, incitando a los campesinos a matar a todo extraño que llegase a pie.
- Que, en medio del conflicto armado interno y miedo que se había impuesto en las alturas de Huanta y creyendo que contaban con el aval del Estado, el 26 de enero de 1983, los comuneros de Uchuraccay asesinaron a los periodistas Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez, Félix Gavilán, Jorge Luis Mendivil, Willy Retto, Jorge Sedano, Amador García y Octavio Infante, así como al guía Juan Argumedo García y al comunero Severino Huáscar Morales Ccenté, pues consideraron que eran miembros del PCP-SL o que apoyaban al PCP-SL.
- Que, en los sucesos del 26 de enero de 1983, no se constata la presencia de infantes de marina ni de miembros de la entonces GC (*sinchis*) como perpetradores directos de los hechos.
- Que los comuneros no pensaron ocultar los cuerpos de los periodistas, por lo cual enviaron emisarios al pueblo de Tambo para comunicar a las fuerzas del orden sobre lo ocurrido y enterraron provisionalmente a los cadáveres muy cerca del núcleo de la comunidad.
- Que, después de los sucesos del 26 de enero, el comando político militar restringió severamente el acceso del periodismo a las zonas rurales de Ayacucho, lo cual llevó a que muchas masacres cometidas en los años siguientes no fueran conocidas.
- Que, a pesar de las demandas de protección formuladas por los comuneros de Uchuraccay, el Estado no cauteló sus mínimos derechos, especialmente el derecho a la vida. Ello llevó a la muerte de más de un centenar de miembros de la comunidad en el año posterior a la masacre, mayoritariamente a manos del PCP-SL.
- Que, con el asesinato de decenas de comuneros de Uchuraccay con perfidia y a traición, el PCP-SL cometió crímenes de lesa humanidad, repudiables moralmente y punibles penalmente.
- Que, de acuerdo con los testimonios recogidos por la CVR, el Estado no sólo dejó desguarnecidos a los comuneros a manos de la subversión, sino que, en varias ocasiones, las fuerzas del orden se convirtieron también en agentes perpetradores de masacres en coautoría con los entonces denominados CDC de comunidades vecinas, que asesinaron a comuneros y saquearon los bienes comunales, hasta que la comunidad quedó totalmente despoblada.
- Que la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay nombrada por el gobierno logró reconstruir, en líneas generales, los hechos ocurridos el 26 de enero, pero ofreció una interpretación que reprodujo la imagen de infranqueable lejanía y diferencia cultural de los campesinos quechuas de Uchuraccay.

---

naturaleza es potestad del Congreso de la República», menciona que también violó la garantía de administración de justicia y la exclusividad de la función jurisdiccional del Poder Judicial, «ya que se le encomendó investigar un hecho delictuoso». Enseguida destaca que, «a pesar de los recursos y facilidades de que dispuso, la citada Comisión Especial incurrió en sorprendentes omisiones» y que sus conclusiones «contribuyen en algunos aspectos a la averiguación de lo ocurrido, pero también, por desgracia, al margen de la buena voluntad y las calificaciones de sus integrantes y de manera indirecta, a dilatar el descubrimiento de la verdad, distorsionando lo acontecido y diluyendo responsabilidades». Pero los magistrados descartaron enjuiciar a los miembros de la Comisión por el delito de usurpación de autoridad «por cuanto su nombramiento emanaba de una Resolución Suprema».

- Que, en su afán de esclarecer los hechos, los medios de prensa de oposición construyeron la tesis de la responsabilidad militar. Ello les sirvió de argumento para sostener su rechazo a la guerra sucia. Asimismo, transmitieron a la opinión pública una versión sobre lo ocurrido que, con el paso del tiempo, se convirtió en una idea bastante común y generalizada.
- Que el juicio realizado por el Poder Judicial a raíz del asesinato de los periodistas, estuvo colmado de irregularidades desde que se inició. Así, se condenó a 15 años de prisión a los tres campesinos detenidos a pesar de que nunca logró probarse que participaron de manera directa en la ejecución del crimen.
- Que, en dicho juicio, volvieron a exhibirse la discriminación y los estereotipos con respecto a los campesinos indígenas, que atravesaron en mayor o menor medida al conjunto de actores implicados en estos trágicos sucesos.
- Que, con el propósito de lograr la reconciliación nacional, es necesario mantener vivo en la memoria el recuerdo de los periodistas asesinados como mártires del periodismo y la libertad de expresión.
- Que, con el propósito de lograr la reconciliación nacional, es necesario también que el país incorpore a su memoria colectiva el recuerdo de los 135 uchuraccaínos muertos entre 1983 y 1984, recuerde que la vida de todos y cada uno de los peruanos y peruanas tiene el mismo valor, recuerde que esa comunidad impulsó la primera rebelión campesina contra la subversión y se comprometa a impedir que estos hechos se repitan alguna vez.

#### APÉNDICE: LISTA DE FALLECIDOS EN UCHURACCAY

Relación de periodistas:

- Amador García Yanque
- Félix Gavilán Huamán
- Octavio Infante García
- Jorge Luis Mendívil Trilles
- Jorge Sedano Falcón
- Eduardo de la Piniella Palao
- Pedro Sánchez Gaviria
- Willy Retto Torres

Guía de los periodistas:

- Juan Eudes Argumedo García

Relación de comuneros de Uchuraccay (que obra en poder de la CVR):

- Alejandro Huamán Leandro
- Venancio Auccatoma
- Severino Huáscar Morales Cuente
- Silvio Chávez Soto
- Paulina Ccasani Figueroa
- Marina Morales Gavilán
- Juana Gavilán García
- Fortunato Gavilán García
- Ignacia Gálvez Nawpa
- Alejandro Romero Quispe
- Telésforo Ayala Díaz
- Alberto Romero Nawpa
- Sacarías Mauli
- Marina Ccasani Figueroa
- Pablo Taype
- Alejandro Chávez
- Benedicta Llancce Gavilán
- Francisca Llancce Gavilán
- Alejandra Figueroa Llancce
- Miligildo Solier Quispe
- Simón Figueroa Cunto
- Enrique Huamán Mauli
- Teófilo Huamán Mauli
- Baltazar Nawpa Tiilla
- Simón Figueroa Cunto
- Melquiádez Gavilán Romero
- Alejandro Pérez Garagondo
- Marcial Pérez Rimachi
- Baltazar Figueroa Gavilán
- Ignacio Figueroa Gavilán
- Ezequiel Figueroa Gavilán
- Daniel Chocce Ayala
- Lorenzo Figueroa Cunto
- Simeón Auccatoma Quispe
- Benito Auccatoma Quispe
- Teodora Soto Ticlla

- Teófila Chávez Soto
- Francisco Ramos Ricra
- Jorgencio Quispe Ccasani
- Clemencia Ccente Ccasani
- Gregorio Quispe Huamán
- Jesusa Mauli Figueroa
- Justina Figueroa Ramos
- Juan Mauli Figueroa
- Francisco Mauli Quispe
- Cristina Lapa Peña
- Angelina Huachaca Gavilán
- Jesús Mauli Huaranqa
- Martina Gavilán García
- Juan Ayala Ccahuana
- Alejandro Ayala Ccahuana
- Marcelina Mauli Ticlla
- Emilia Ccahuana Canto
- Lucas Ayala Nawpa
- Saturnino Ayala Gómez
- Candelaria Nawpa
- María Huamán Núñez
- Inocencia Llancce Huamán
- Cipriano Llancce Huamán
- Antonia Chávez Huichí
- Alejandro Gavilán Figueroa
- Santiago Gavilán Figueroa
- Justina Peña Pacheco
- Juan Cárdenas Quispe
- José Ayala Gavilán
- Bonifacia Gálvez Farfán
- Demesia Huamán Llancce
- Rosa Gómez Gálvez
- Teodora Gómez Gálvez
- Lucra Huachaca Mayhua
- Angélica Llancce Puclla
- Luis Ccente Auccatoma
- Faustino Quispe Huamán
- Marcial Huamán Peña
- Juan Huachaca Pérez
- Félix Huachaca Gavilán
- Esteban Huachaca Cárdenas
- María Huachaca Pérez
- Sivestra Huachaca Pérez
- Adrián Mauli Huamán
- María Mauli
- Justina Huamán Llancce y su hijo
- Patrocina Gavilán Curo
- Alejandra Figueroa Leandro
- Segundino Leandro Huamán
- Vicente Huachaca Maywa
- Remigio Soto Morales
- Dionisio Morales Leandro
- Erminio Gavilán Wicaña
- Juan Manuel Romero Araujo

- Pablo Romero Araujo
- Alejandro Quispe Huaylla
- Eulogia Quispe Huaylla
- Rufina Ramos Quispe
- Augusto Ccurimanya Cayetano
- Víctor Rimachi Llancce
- Julia Nawpari Fajardo
- Emilio Quispe Llancce
- Demetrio Quispe Llancce
- Vicente Urbano Guzmán
- Leandro Guzmán Urbano
- Juliana Farfán Ccoroq
- Ezequiel Huaranqa Mauli
- Alberto Huamán Arone
- Paula Clarení Figueroa
- Dionisio Nawpa Gavilán
- Anselmo Quispe Huachaca
- Félix Quispe Huachaca
- Olimpio Gavilán Huaylla
- Florencio Gavilán Huaylla
- Feliciano Soto Gavilán
- Francisco Romas Rivera
- Constantino Soto Gavilán
- Saturna Gavilán García
- Feliciano Quispe Huachaca
- Saturna Huamán Figueroa
- Pelayo Rosa Gavilán
- Amadio Auccatoma Peña
- Clemente Figueroa Llamocca
- Patricio Auccatoma Núñez
- Marcelino Mauli Morales
- Ignacio Pérez Gavilán
- Elomina Cuchuri Ramírez
- Teófilo Chocce Nawpa
- Félix Chocce Nawpa
- Francisco Nawpa Tiilla
- Gregorio Soto Ayala
- Celestino Ccenté Figueroa
- Teófila Hualla Inga
- María Figueroa Chocce
- Polinario Huaylla Taype
- Salomón Sánchez
- Paulina Ccasani Huichí
- Fortunato Soto Ccasani
- Esposa e hijo de ocho años de Faustino Gómez Gálvez

## 5. LA SAIS CAHUIDE

### 5.1. IMPORTANCIA Y CONTRADICCIONES DE LA SAIS CAHUIDE

La Sociedad Agraria de Interés Social (SAIS) Cahuide no solamente fue la empresa campesina más extensa del departamento de Junín creada por la Reforma Agraria, sino del país entero. Abarcó los distritos de Pariahuana, Chongos Alto y Santo Domingo de Acobamba (provincia de Huancayo), Yanacancha (distrito de Chupaca) y Comas (provincia de Concepción) en el departamento de Junín. En el departamento de Huancavelica, se localizó en el distrito de San Marcos de Rochac (provincia de Tayacaja). Esta empresa tuvo una extensión de 270 mil hectáreas, alrededor de 42 mil cabezas de ganado ovino y 4,500 vacas de raza Brown Suisse. Incluyó a 28 comunidades campesinas como socias de una cooperativa de servicios conformada por novecientos trabajadores. Sus unidades de producción se localizaron sobre las antiguas ex haciendas Laive (37 mil hectáreas), Antapongo (36 mil hectáreas), Tucle-Río de la Virgen (18 mil hectáreas), Acopalca (37 mil hectáreas), Huari (36 mil hectáreas), Runatullo (102 mil hectáreas) y Punto (20 mil hectáreas), ubicadas en ambas márgenes del río Mantaro (véase el mapa).

La SAIS Cahuide contaba con una oficina principal de gerencia ubicada en la ciudad de Huancayo y oficinas de administración en cada unidad de producción, que se hacían cargo de más de mil cabezas de ganado vacuno, y 2 mil aproximadamente de ovino. Quienes laboraban en estas oficinas (gerentes, subgerentes y administradores) eran, en su mayoría, profesionales que no eran de la zona del Canipaco y percibían un sueldo que casi siempre provenía de la venta de ganado y de la producción de lácteos. Los campesinos se beneficiaban con las raciones de carne y leche que se les daban; algunos, con las esporádicas capacitaciones en asistencia técnica; otros pocos trabajando como obreros en el mantenimiento de los equipos y maquinaria y otras labores.<sup>225</sup> Muchos lograron integrarse a la administración o gerencia de la SAIS Cahuide en calidad de delegados de la SAIS en sus comunidades, con el propósito de mejorar la situación y defender los intereses de los comuneros.

La SAIS Cahuide fue creada con la idea de transformarse en eje y motor económico de la región. Sin embargo, no pudo evitar los efectos de la crisis económica de 1976 y las contradicciones propias de su estructura y organización a las cuales se vio sometida desde su creación. La drástica baja en las ventas de producción ganadera y de lana de ovino fue determinante para la dramática reducción de sus ingresos desde 1979 y, finalmente, para su liquidación en 1988. Sus ingresos en 1971, valorados a precios de 1979, fueron de 599'077,830. En 1985, éstos se redujeron en términos reales —siempre teniendo como año base 1979— a 337'774,227, es decir, al 56% de lo que habían representado en 1971 y al 48% de lo que fueron en 1979, que había sido el último año con más altas ganancias en su historia.<sup>226</sup> A su vez, el descontento de las comunidades socias fue creciendo no solamente debido a la caída de la producción y los ingresos, sino también porque al interior de la SAIS se produjeron conflictos entre comuneros socios y personal administrativo, debido fundamentalmente a los ingresos y privilegios diferenciados de unos y otros. La mayor parte de los ingresos, casi las tres cuartas partes del total, se destinaron a cubrir sueldos y salarios de los técnicos y funcionarios de la empresa.<sup>227</sup>

Más adelante, el grupo de delegados de las comunidades campesinas fue contratado para laborar en la unidad de producción, lo que motivó resquemores entre los demás socios no asalariados. En el caso de la unidad de producción Laive, sin embargo, se había logrado que algunas comunidades establecieran empresas comunales para la producción y venta de lácteos, de modo que generaran pequeños ingresos para los comuneros.

El panorama se complica cuando al revisar la historia de la creación de la SAIS por la Dirección General de Reforma Agraria y se advierte que hubo, en efecto, una desigual distribución de la tierra entre las comunidades campesinas. Las empresas asociativas, junto con las cooperativas agrarias de producción, se beneficiaron con el 75.4% del total de las tierras intervenidas. De otro lado, solamente el 1.1% del total fueron entregados a las comunidades campesinas que no eran parte de las empresas asociativas. A consecuencia de ello, se

<sup>225</sup> Reina 2002: 9.

<sup>226</sup> Caballero 1990: 177.

<sup>227</sup> Ibídem, p. 177.

suscitaron enfrentamientos entre las comunidades socias y aquellas que quedaron fuera del esquema de la Reforma Agraria del gobierno militar.

De otro lado, la urgencia de las comunidades socias de solicitar la fragmentación de la empresa fue creciendo a lo largo de los años. Esta petición era opuesta a los intereses de los funcionarios remunerados de la SAIS, que clamaban por la continuidad de ésta. De esta manera, en mayo de 1988 se aprobó en asamblea general de socios la reestructuración de la empresa. Igualmente, el 29 de diciembre de 1988 se ratificó la liquidación de la empresa. Así, en enero de 1989 las comunidades socias pasaron a formar empresas multicomunales en la margen derecha del río Mantaro.<sup>228</sup>

## 5.2. EL INGRESO DEL PCP-SL A LA ZONA

La inserción del PCP-SL en la zona tiene dos momentos claramente identificables. Uno primero de avance entre 1983 y 1984, hecho que coincidió con una acción de repliegue del PCP-SL desde la zona de Manta y Vilcas (departamento de Huancavelica) en 1983, cuando ahí se instaló una base militar. El segundo momento correspondió a la etapa de ataques sistemáticos a la infraestructura y a los funcionarios de la SAIS Cahuide, que se incrementaron a partir de 1987, cuando el PCP-SL buscó expandir y consolidar su base social en la región central y pretendió atraer a los trabajadores y comuneros descontentos sobre la base de crímenes contra los altos directivos de esta empresa.

La SAIS Cahuide, por su alta concentración de trabajadores campesinos y por el importante lugar que ocupaba en la economía rural regional, se convirtió en un objetivo de primer orden para el PCP-SL, pues le posibilitaría consolidar su presencia en la zona y ganar adeptos para su «lucha armada». La primera incursión de PCP-SL a la SAIS Cahuide se produjo en diciembre de 1983 cuando atacó, en forma simultánea, las unidades de producción Laive, Antapongo y Tucle-Río de la Virgen con el objetivo de apropiarse de explosivos, municiones y cabezas de ganado. En esta acción, también destruyeron maquinarias e incendiaron algunas instalaciones. La unidad más afectada fue la de Tucle-Río de la Virgen.

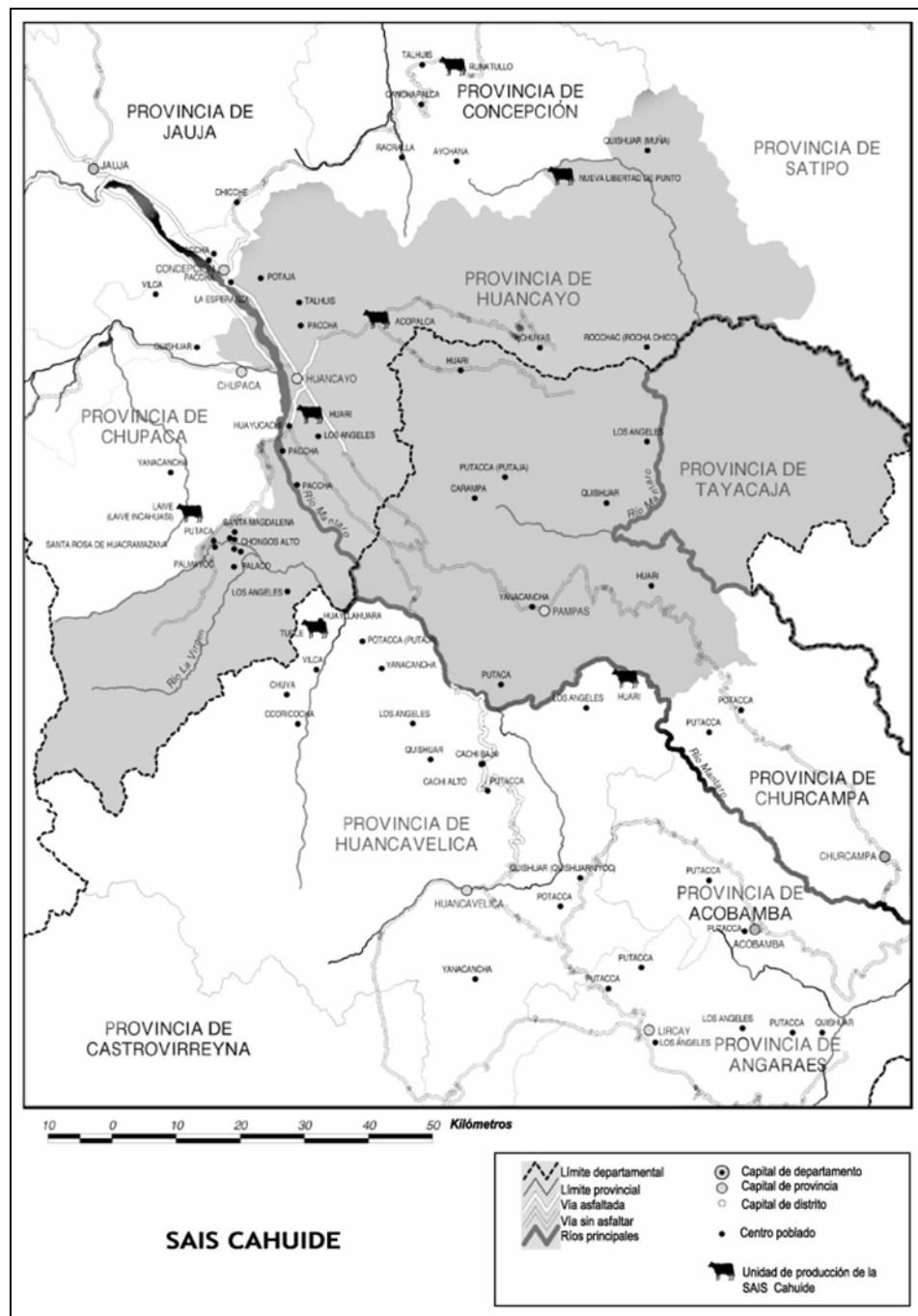
Por la información recogida, se sabe que esta irrupción estuvo dirigida por los subversivos *Raúl* y *Nelly*, quienes encabezaron la «fuerza principal», integrada por jóvenes reclutados de manera forzada de las comunidades del norte del departamento de Huancavelica, principalmente de Manta, Vilca, Laria, Nuevo Occoro y Yauli. Ellos ingresaron por Huancalpi hacia el valle del Canipaco. De acuerdo con un testigo reclutado oblidadamente, los sucesos se dieron de la siguiente manera:

Sendero Luminoso [el PCP-SL] lo tenía todo organizado: dos jóvenes enviaron a destruir el puente de La Virgen; durante la noche, todos los convocados (seiscientos aproximadamente) caminaron rumbo a la unidad de producción de Tucle. En el camino, decíamos qué vamos a hacer. Ahora el Ejército vendrá con helicópteros y van a bombardear a todos. Los senderistas [miembros del PCP-SL] nos decían que los íbamos a atacar con bombas preparadas en latas de leche. (CVR. Testimonio 310558)

En la madrugada, nos dividieron por grupos y salimos a diferentes direcciones. El camarada *Raúl* salió con dirección a la unidad de producción Laive, aproximadamente con noventa personas y yo salí en el grupo de la camarada *Nelly*. Nos trasladamos hacia la unidad de producción de Tucle y Antapongo [...] los subversivos tenían todo planificado. Decían entre ellos que a las 7:30 de la noche es el asalto y así fue. Regresamos al día siguiente a la misma hora. Sacaron cualquier cantidad de animales. Todas las ovejas sustraídas llegaron a Santa Ana (aproximadamente 6 mil ovinos). Los senderistas [miembros del PCP-SL] entregaron las ovejas de acuerdo a la cantidad de participantes por cada pueblo. Algunos campesinos que acompañaron a los senderistas [miembros del PCP-SL] vinieron en carros y luego los devolvieron a la unidad de producción Tucle. Ahí volaron con dinamita estos carros. (CVR. Testimonio 310553)

Los daños ocasionados con esta acción, especialmente en el caso de la subunidad Tucle de Chuya, fueron enormes. Por temor, al poco tiempo, los comuneros desactivaron la granja comunal de crianza de alpacas, ovinos y ganado vacuno de Chuya.

<sup>228</sup> Ibídem, p. 172.



### 5.3. EXACERBANDO LAS CONTRADICCIONES

El PCP-SL aprovechó los conflictos por linderos para introducirse en las comunidades, ganar aliados y hacer que se agudicen los enfrentamientos entre los pobladores.

En los últimos meses de 1987, los caseríos más pequeños y alejados, ubicados al sudeste de esta meseta, empezaron a ser víctimas de saqueos de alimentos, caballos y reclutamiento forzoso por el PCP-SL. Al mismo tiempo, las comunidades de Chongos Alto y Huasicancha se enfascaron nuevamente en una contienda de terrenos que tanto había caracterizado sus relaciones en el pasado: esta vez eran las tierras de la Unidad de Producción Antapongo, que comprendía más de 10 mil hectáreas de pastos naturales, las que estaban en disputa. Luego de los embates que sufriera esta unidad en 1983 y durante ese año 1987, se hizo insostenible la continuidad de Antepongo, por lo que sus propios asociados empezaron a señalar que las tierras de esta unidad deberían pasar

nuevamente a posesión de las comunidades socias, es decir, Chongos Alto, Llamasipsillon, Palaco y Palmayoc. En estas circunstancias, la comunidad campesina de Huasicancha —que no era socia de la SAIS— presentó una demanda contra la SAIS Cahuide y la Dirección de Reforma Agraria en la que exigía la restitución del inmueble con relación a los terrenos de la ex hacienda Antapongo y Río de la Virgen. Era precisamente esta extensión territorial la que la SAIS Cahuide debía de entregarle a la comunidad de Chongos Alto.

Para hacer efectiva la mencionada demanda, la comunidad campesina de Huasicancha presentó un título de propiedad del año 1607, que le fuera otorgado por el gobernador de indios sobre el dominio de los pastos y estancias de la comunidad de Huasicancha. El representante legal de la SAIS Cahuide, por su parte, alegó que el documento que presentó la comunidad de Huasicancha no cumplía con los requisitos suficientes para ser considerado un título de propiedad formal. Además, sostuvo que, según la adjudicación de las tierras realizada por decreto ley, los terrenos de Antapongo y Río de la Virgen estaban en los registros públicos dentro del proceso de reestructuración y éstos deberían retribuirse a favor de las comunidades campesinas socias.

Ante estos hechos, la comunidad campesina de Huasicancha decidió apelar. De igual manera, la comunidad de Chongos Alto presentó una copia certificada de un notario público de Matucana y mostró un título de 1817 que encontró en sus archivos, así como también la solicitud de copia certificada de la existencia de tres parcelaciones comprendidas entre Chongos Alto, Chongos Bajo y Yanaolo, la que con fecha 20 de noviembre de 1817 fue entregada por el corregidor autónomo de Ulloa, en representación de su majestad el Virrey José Antonio de Manso de Velasco.

En medio de estos desacuerdos y reclamos, en enero de 1988, el PCP-SL tomó por asalto la comunidad de Chongos Alto con el fin de organizar un «comité popular». Los comuneros se vieron obligados a convivir con una forma de gobierno que impartió una drástica manera de ejercer justicia, donde los infractores eran severamente castigados, incluso con la vida misma. Los comuneros de Chongos Alto, sin embargo, lograron negociar con los integrantes del PCP-SL que se impidiera la participación de los menores de 18 años en incursiones subversivas. Asimismo, exigieron un margen de libertad para que los jóvenes puedan decidir abandonar o quedarse en el distrito si así lo quisieran.

Por esos años, las diferencias entre Chongos Alto como comunidad «madre» y las comunidades «hijas» (Llamapsillón, Palaco y Palmayoc) también se exacerbaron. El motivo fue un conflicto por linderos y por la distribución de terrenos que fueron entregados por liquidación de la SAIS Cahuide (que no incluyó el predio Antapongo en conflicto con Huasicancha). La razón de este conflicto interno fue la distribución desigual de terrenos realizada por la SAIS Cahuide, porque la mayor extensión se la entregó a la comunidad de Chongos Alto. Los pobladores de las comunidades campesinas de Palaco y Palmayoc alegaron que poseían documentos que los acreditaban como propietarios de los terrenos que los pobladores de la comunidad de Chongos Alto reclaman como propios.

El Consejo Directivo de Administración Transitoria y de Disolución y Liquidación de la SAIS Cahuide intentó sin éxito solucionar dicho conflicto en las instancias judiciales y, más adelante, en 1990, emitió una resolución en la cual explicaba que, al haber sido acordada la disolución de la SAIS Cahuide en 1988, se realizaría la respectiva transferencia de dominio de los terrenos a las comunidades socias de la SAIS, con la excepción de los terrenos que se encontraban en procesos judiciales, tales como el predio Antapongo y Río de la Virgen. Para esta fecha, la comunidad campesina de Chongos Alto ya había tomado posesión de la zona en conflicto mientras esperaba el resultado del proceso judicial. Este conflicto sigue sin ser solucionado hasta el día de hoy.<sup>229</sup>

#### 5.4. LA VIOLENCIA SE INCREMENTA: 1987-1990

Hasta 1987 no se detectaron mayores incursiones del PCP-SL en la zona. La estrategia de PCP-SL de captación de nuevos militantes fue, primero, mediante la identificación ideológica y, posteriormente, por medio del miedo y la fuerza. A partir de ese año hasta 1989, las apariciones del PCP-SL se volvieron cada vez más constantes y violentas. No es más el mismo grupo que hizo su aparición hacia 1983, sino se trata ahora de militantes de la zona en estrecha relación con el trabajo que el PCP-SL venía realizando en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) a través de su trabajo académico (prácticas de la Facultad de Zootecnia por ejem-

<sup>229</sup> Reina 2002: 6.

plo) o el trabajo político que, desde algún tiempo atrás, desarrollaban agrupaciones maoístas (como Pukallaca y Vanguardia Revolucionaria Proletario Comunista).

Durante los últimos meses de 1987, el PCP-SL irrumpió más de una vez en estancias pequeñas y alejadas, ubicadas en la zona alta del Canipaco, del Alto Cunas y de las alturas de Yauyos (Lima). También fueron frecuentes los asaltos a pequeñas minas localizadas en las alturas de Chupaca y en los límites de Huancayo y Yauyos, polvorines en los cuales el PCP-SL se pertrechaba de dinamita y explosivos para sus atentados.

Una testigo de sus primeras incursiones narra que, en la zona de Yauyos, venía actuando una «fuerza principal» del PCP-SL al mando de un varón que se hacía llamar *Roly*, acompañado de su mujer *La Gringa*. Un segundo testigo señala que los subversivos estaban al mando de *Daniel*, quien se trasladaba acompañado de dos chicas y de seis a siete varones (CVR Testimonio 302690).

A la fuerza liderada por *Roly* y *La Gringa*, se le atribuyen acciones en los poblados de Allauca, Tauripampa, Pilas, Tallar, Quinches, Quisque, Langaico y otros, en los cuales asesinaron a autoridades diversas, dirigentes comunales, comerciantes y miembros de las fuerzas del orden. En un enfrentamiento en Quisque (frente a Yauyos), los subversivos fueron rodeados por los soldados y cayeron *Roly* y su «masa», incluyendo *La Gringa*. Afirman los testimonios que *Roly* logró escapar herido de bala y que fue socorrido en la comunidad de Ayaviri. Anduvo un tiempo deambulando en forma solitaria por las comunidades de la zona. En Picamarán, fue capturado por la comunidad, llevado a Yauyos y entregado a las fuerzas del orden (no se sabe si a policías o militares), quienes acabaron con su vida. Se dice que *Roly* fue natural de Huantan, que también es un distrito de la provincia de Yauyos (CVR. Testimonio 300525).

Los testimonios afirman que el PCP-SL azuzaba los ánimos en cada arremetida y afirmaba la necesidad de destruir el Estado actual, «lleno de injusticias», y construir uno nuevo con equidad, donde los pobres gobernarían y no hubieran actos de inmoralidad. La población era obligada a unirse a los «alzados en armas» y se coaccionaba a las autoridades para que renuncien a sus cargos. Repitiendo la amenazante frase de que «el partido tiene mil ojos y mil oídos», se retiraban no sin antes haber designado a sus delegados y establecido «comités populares».

Según los testimonios:

[...] los terroristas [los subversivos] nos decían a la población que ellos eran el ejército de los pobres, por ello había que luchar, para lo cual teníamos que organizarnos en grupos, que cambiar la forma de gobierno y, por eso, había que abastecernos de todo. (CVR. Testimonio 301373)

Los miembros de Sendero Luminoso [del PCP-SL] nos hablaban que estábamos siendo explotados por los dueños de la SAIS, y que nos pagaban una mínima cantidad en comparación a lo que ellos [dueños y jefes] se llevaban y beneficiaban, que se enriquecían a nuestras costas y nos jodían bien [...]. Escuchábamos atentos todo lo que ellos decían, creíamos que tenían razón en muchas cosas y que lo mejor sería apoyar [...] teníamos miedo en algún momento, escuchábamos que se enfrentaban a los militares, tenían sus ideas y tal vez estaban equivocados, pero nosotros todos tuvimos que escuchar nada más [...] también decían que el gobierno era el enemigo del pueblo ya que las cosas subían de precio constantemente, por lo que debíamos combatir en la «guerra popular». (CVR. Testimonio 301694)

Uno de los objetivos primordiales del PCP-SL era destruir la Unidad de Producción Laive. Previamente, había reunido a los comuneros de Laive, les ordenó su desactivación y señaló que el ganado sería repartido entre todos equitativamente. Sin embargo, esta unidad de producción era precisamente la que mejor venía trabajando y era aceptada por la mayoría de las comunidades. Por ello, resultó difícil tal mandato. Como lo afirma un poblador: «Un número considerable de pobladores de Yanacancha laboraban en la Unidad Productiva de Laive, que era la más cercana y completa. Los pastos y tierras de esta zona eran de alta calidad, por eso aproximadamente el 90% de la población se dedicaba al pastoreo y crianza de animales propios o de la SAIS Cahuide» (CVR. Testimonio 301694).<sup>230</sup>

Al principio, los comuneros y la administración se resistieron a las disposiciones del PCP-SL. Ante este hecho, el PCP-SL asesinó al administrador de la Unidad de Producción de Laive, Luis Capcha, el 17 de noviembre de 1987, colgándolo en su propia oficina. El PCP-SL había aprovechado el ánimo adverso que algu-

<sup>230</sup> Muchos coinciden en señalar que los pobladores de esta zona había logrado tal grado de especialización para el pastoreo que muchos de ellos están en Estados Unidos o Europa, donde trabajan como ovejeros o pastores.

nos trabajadores mantenían contra Luis Capcha: «Primero lo sometieron a una especie de «juicio popular». Algunos trabajadores que habían sido sancionados por él se quejaron. [...] El ingeniero no era abusivo y respetaba los derechos laborares, sólo quería ser recto» (CVR. Testimonio 301685).

A partir de este hecho, se precipitó la liquidación de esa unidad de producción en forma inminente e ineludible. Posteriormente, el PCP-SL llegó hasta la Unidad de Producción Antapongo, donde la desactivación ya estaba en ciernes y ya se había iniciado el proceso mediante la repartición de algunos ganados. Los comuneros no pensaban liquidar del todo aún dicha unidad, pero la desactivación y el reparto total del ganado se realizó con mayor celeridad con la presencia del PCP-SL. La Unidad de Producción Tucle-Río de la Virgen también fue desactivada y destruida.

La Policía Nacional vigilaba la zona por medio de puestos policiales situados en Chongos Alto y Yanacancha, los cuales fueron destruidos por el PCP-SL a mediados de 1988. El Ejército venía realizando algunos rastriajes desde 1984, desde su base militar instalada en el distrito de Vilca (provincia de Huancavelica). Las acciones de los militares no impidieron, sin embargo, la destrucción de estas unidades de producción. En los últimos meses del año 1988, se decretó el estado de emergencia en todo el departamento de Junín, lo cual inicialmente no afectó el control del PCP-SL sobre los pobladores del valle. Se creó, más bien, una atmósfera de terror.

Entre fines de 1988 y los primeros meses de 1989, el PCP-SL había realizado un aproximado de cinco a seis incursiones en el anexo de Llamapsillon. En ellas, obligaron a las personas a quemar documentos, a las mujeres a tejerles capuchas, prohibieron realizar fiestas y castigaban a las personas cuando no hacían lo que les mandaban (CVR. Testimonio 301374).

Los atentados perpetrados por el PCP-SL en este período siguieron cierto patrón como el de ajusticiamientos masivos en plazas públicas de las principales autoridades y dirigentes comunales y los golpes constantes contra la infraestructura de las SAIS y unidades de producción con el objetivo de desestabilizar a la autoridad y crear un vacío de poder. Asimismo, el PCP-SL ejercía una gran coacción sobre los jóvenes de la zona, a quienes reclutaba para realizar actos de sabotaje, pintas, tomas de puestos policiales o simplemente para coordinar con la «fuerza principal» la próxima acción.

##### 5.5. LA DESTRUCCIÓN DE LA SAIS CAHUIDE EN LA MIRA

A inicios de 1989, el PCP-SL arremetió contra la Unidad de Producción Laive y destruyó la maquinaria de procesamiento de leche y derivados. No contento con esta acción, incendió los pastos, saqueó la casa-hacienda y, finalmente, distribuyó el ganado a los trabajadores presentes. En ese mismo año, arrasó también con las unidades de producción Tucle-Río de la Virgen y Antapongo. Las comunidades vecinas de Palmayoc, Palaco, Llamapsillón y Chongos Altos, azuzadas por los subversivos, concluyeron con el saqueo y repartición de bienes de estas unidades de producción. Como consecuencia de estos hechos, se vendieron 120 mil cabezas de ganado ovino, 9 mil vacunos y 600 equinos de primera calidad en los camales de la región. De acuerdo con un testimonio, los subversivos quemaron carros, tractores y equipos. Incluso calcinaron a las vacas más finas que tenían crías, «les rocían gasolina y luego les prenden fuego, daba pena ver como sufrían esos animales y no podíamos hacer nada» (CVR. Testimonio 301685). Todas las instalaciones de la Subunidad Laive fueron destruidas y bombardeadas; es más, «cuando alguien quería salvar algo, los amenazaban». A consecuencia de este hecho, no solamente los empleados perdieron su puesto de trabajo, sino que se destruyó una importante fuente de desarrollo e ingreso de la región central. Después del atentado, los subversivos ordenaron que los animales fueran repartidos entre los pobladores de las comunidades de Chicche, Santa Rosa, Vista Alegre, Quishuar, Magdalena, Huayucachi, Huancán, Chupaca, Santo Domingo de Cachi, San Juan de Jarpa, San José de Quero, Chaquicocha y Shicuy entre otras.

En enero de 1989, el PCP-SL secuestró a Víctor Lozano, autoridad comunal de Chicche y delegado de su comunidad ante la SAIS Cahuide, junto a Manuel Soto, antropólogo y promotor de la ONG CICEP, que mantenía proyectos en el lugar. Luego de torturarlos, los asesinaron a tiros en un paraje desolado de la comunidad de Palmayoc.

En este período, un buen número de personas se sumó a las huestes subversivas. El PCP-SL exacerbó con mucha habilidad para su propio provecho los conflictos y disputas previamente existentes entre las comunida-

des. Según los pobladores del valle, los subversivos tenían como sus más cercanos aliados a los comuneros de Langaico, comunidad que pertenece a la zona andina de Laraos, provincia de Yauyos, departamento de Lima.

Los problemas locales se entremezclaron con el conflicto armado interno en detrimento de la propia población. Un poblador de Chongos Alto señala que los pobladores de las comunidades de Langaico (distrito de Laraos, provincia de Yauyos), Atcas (distrito de Huantan, provincia de Yauyos) y Huasicancha (provincia de Huancayo) invadieron los terrenos de Chongos Alto apoyados por los miembros del PCP-SL (CVR. Testimonio 302713).

El 16 de marzo de 1989, los comuneros del valle del Canipaco llegaron a la zona que había sido ocupada por los langainos e iniciaron el desalojo. Los invasores se retiraron del lugar porque los pobladores del Canipaco, que se autoproporcionaban los verdaderos propietarios, eran mucho más numerosos. En el desalojo, tres personas se enfrentaron a los comuneros del valle del Canipaco, argumentando que el PCP-SL había autorizado tal posesión. Estos tres rebeldes fueron trasladados hasta la comunidad de Chongos Alto, donde los encarcelaron por tres días. Más tarde, por mayoría, determinaron entregarlos a la Policía Nacional de Huancayo. Cuando éstos eran trasladados, aseguraron que se vengarían por todo lo acontecido. Después de una semana, la Fiscalía Provincial de Huancayo dejó en libertad a los detenidos por falta de pruebas concretas.

El PCP-SL contaba con una red de información bastante efectiva y se enteraba de todo lo que ocurría con mucha rapidez. Con la misma velocidad comenzaron a preparar la contraofensiva, que sería la masacre más estremecedora de toda la zona del Canipaco. Los «mil ojos y mil oídos» funcionaron por última vez.

El 11 de abril de 1989, día de la feria semanal en el distrito de Chongos Alto, autoridades y pobladores representativos de las comunidades de Chicche, Chongos Alto, Llamapsillón, Palaco, Vista Alegre y Palmayoc se reunieron clandestinamente en algún lugar de este distrito con el propósito de planificar acciones de defensa frente a la presencia del PCP-SL en la zona. En la madrugada del día siguiente, debían retornar a sus lugares de seguridad (muchas autoridades que vivían en las comunidades del valle del Canipaco, debido a la presencia subversiva, habían emigrado hacia distritos cercanos a la ciudad de Huancayo, lugares donde había presencia policial o del Ejército). Pero ese día en la madrugada llegaron cuarenta subversivos al valle del Canipaco, se dividieron en dos grupos. Uno de ellos se quedaría en Chongos Alto y Llamapsillón y el otro se iría hasta Chicche. Sacaron de sus casas a doce autoridades de las comunidades de Chicche, Llamapsillón y Chongos Alto, cuyos nombres tenían anotados en listas, y los condujeron hacia la plaza de Chongos Alto. Echados boca abajo con las manos atadas, fueron asesinados con un tiro en la cabeza; las suplicas y ruegos de sus familiares fueron en vano. Ellos fueron:

- De Chongos Alto:

Amadeo Vilcapoma Camposano, presidente del consejo de administración de la comunidad campesina de Chongos Alto  
 Melanio Castillón Román, vicepresidente de la comunidad de Chongos Alto y profesor de educación secundaria  
 Julián Ricardo Porta Tarma, comunero  
 Genaro Chanco Ricse, gobernador  
 Mario Molino Chávez, comerciante cuzqueño

- De Chicche:

Elías Orihuela, presidente del consejo de administración de Chicche  
 Flores Orihuela Lozano, alcalde del distrito  
 Macario Lozano Meza, comunero  
 Vidal Orihuela Acuña, secretario del consejo de administración  
 Donato Chagua Sauñe, teniente gobernador

- De Llamapsillón:

Zócmo Rodríguez Porta, teniente gobernador  
 Roque de la Cruz Cerrón, comunero

Al retirarse, los subversivos incendiaron el local del municipio de Chongos Alto (con la intención de quemar toda la documentación y títulos de los terrenos) y el local de la sucursal del Banco de la Nación. Luego se fueron caminando hasta Chicche, donde abordaron el ómnibus que los llevó hasta las alturas, donde desaparecieron. Algunos pobladores alcanzaron a observar a los subversivos cuando éstos se dirigían a Chic-

che y aseguraron que la mayoría de ellos llevaba la vestimenta típica de los pobladores de altura y que únicamente 15 personas estaban armadas. ¿Fue acaso un acto de venganza suscitada a raíz de la alianza entre langainos y subversivos como especulan los testigos?

Un testigo recuerda el horror vivido:

Los que fueron llamados estaban en el centro del parque y nosotros no podíamos hacer nada, porque el distrito estaba rodeado de senderistas [miembros del PCP-SL] y tuve que esconderme con las señoritas y observar de lejos cómo mataban a los convocados. De pronto, un grupo de senderistas [miembros del PCP-SL] se subió a un carro y se dirigieron a Chicche, por lo que corrí por una trocha que hay para transeúntes, de allí todavía pude ver cómo las señoritas se pusieron fuertes y no les dejaban quemar el municipio. Sin embargo, lograron arrojar una dinamita al local de la empresa comunal, que era tienda y donde se vendía leche, queso, ovinos, carne y lana de la misma comunidad a precio de costo para tener algo de dinero. También dinamitaron el local de la posta de salud, que tenía implementos y medicina. Estos locales funcionaban en los bajos del municipio. Ese día destruyeron una granja de ovinos, los canales de irrigación también los dinamitaron. (CVR. Testimonio 301710)

Sin embargo, igualmente se afirma que otro de los motivos de la masacre fue el conflicto de tierras existente entre huasincanchinos y chonguinios. *Víctor*, comunero de Chongos Alto, había participado en más de una oportunidad en invasiones de terrenos que afectaban a los comuneros de Huasicancha. A raíz de estos hechos, los comuneros de Huasicancha lo amenazaron de muerte por medio de una carta (CVR. Testimonio 301034). *Simón* explica que la ambición por poseer las tierras hizo que los dirigentes del distrito de Huasicancha se confabularan para provocar la matanza de las autoridades de Chongos Alto en 1989, masacre de la que él mismo logró escapar (CVR. Testimonio 302713).

##### 5.6. LA CONTRAOFENSIVA: INSTALACIÓN DE LA BASE MILITAR

Los militares llegaron por primera vez al valle del Canipaco después del suceso del 12 de abril de 1989. Fueron ellos los que se encargaron del levantamiento de los cadáveres del suceso de Chongos Alto. Desde entonces, regresaron esporádicamente para realizar acciones de rastillaje. Posteriormente, durante el gobierno de Alberto Fujimori, en 1990, se instalaron bases militares en los distritos de Chicche (anexo de Vista Alegre) y San Juan de Jarpa; luego, en 1991, en los distritos de Chongos Bajo, Huamancaca Chico y Chupaca.

Con la instalación de la base militar en el anexo de Vista Alegre en 1990, la presencia del PCP-SL disminuyó notoriamente en toda la zona. Además, se eligieron formalmente a las autoridades comunales y políticas de todas las comunidades del valle en reemplazo de las recientemente asesinadas. En 1990, el Ejército desplegó una importante acción de rastreo por todo el valle del Canipaco, que llegó inclusive hasta las comunidades más alejadas. Este hecho provocó la desaparición casi absoluta del PCP-SL. También en este proceso los militares se encargaron de desaparecer a todos los sospechosos y presuntos subversivos. Éste fue el caso de Luis, comunero de Langaico sindicado por los pobladores de Chongos Alto y alrededores como subversivo. En un suceso poco claro, en el momento del «ajuste de cuentas», Luis fue presentado a los militares como jefe «terrorista». <sup>231</sup>

Los militares de la base de Vista Alegre rápidamente obtuvieron la fama de crueles y abusivos, en especial el capitán que se encontraba a cargo, quien, por sus acciones, recibió el apelativo de *Malacho*. Desde esta base, los soldados ingresaban a las diferentes comunidades andinas de la cuenca del Canipaco, ya sea con caballos o camiones, para patrullar la zona y buscar a los posibles subversivos. En estas acciones, los soldados cometían una serie de abusos: se introducían a las casas de los pobladores para destruir utensilios, vajillas y mezclar semillas con kerosene o fertilizantes; obligaban a los pobladores a entregar comida y animales; mataban a balazos a las llamas y ovinos o los subían a su camión para preparar su rancho. También se llevaron cientos de caballos de las diferentes comunidades (CVR. Testimonio 302054).

Como se observa, tanto las rivalidades comunales como las personales, llevaron a que muchos fueran acusados —injustamente o no— de ser subversivos. Es el caso de *Miguel*, comunero de Chuya, quien tenía terrenos por la zona de la mina de Cercapuquio en Chongos Alto. A consecuencia de la destrucción de Laive y

<sup>231</sup> Una versión sostiene que una de sus principales acusadoras habría sido su propia pareja. Los militares fusilan a Luis «pero las balas no le impactaron». Los militares sorprendidos piensan que Luis «es un Satanás, ni las balas lo matan». Los militares decidieron soltarlo, pero su pareja insistía en que había que eliminarlo porque Luis se iba a vengar de todos. Fue así que los militares le respondieron: «bueno, ya que quieres que lo matemos, mátalo pues tú». Los militares trajeron un cuchillo de cocina, agarró el cuchillo y lo mató (CVR. Testimonio 302730).

el reparto masivo de los animales, *Miguel* había incrementado sus ganados. Por esta razón, las autoridades comunales de Chongos Alto le reclamaron por el uso excesivo de los pastos a la vez que le solicitaron incorporarse como comunero a una de las cuatro comunidades de Llamapsillon, Palaco, Palmayoc o Chongos Alto y reducir la cantidad de animales. *Miguel* se negó a cumplir tales pedidos. Frente a esta resistencia, las autoridades comunales de Chongos Alto lo amenazaron con acusarlo de subversivo y denunciarlo a la base militar de Vista Alegre. En efecto, al poco tiempo, fue denunciado. Sus familiares presumen que él y su familia fueron «desaparecidos» por venganza de las autoridades comunales por el uso de los pastos comunales. Sus familiares afirmaron, además, que, después de la detención de *Miguel* y su familia, *Malacho* regresó a Chongos Alto a entrevistarse con las autoridades comunales y a informar que ya habían sido ejecutados, pero las autoridades no le creyeron y le pidieron su cabeza. Ante esta presión, el militar regresó a la base militar, asesinó a *Miguel* y le llevó la cabeza a las autoridades (CVR. Testimonio 302027).

#### 5.7. LA FORMACIÓN OBLIGADA DE RONDAS DE AUTODEFENSA

El proceso de formación de las rondas campesinas en esta región se inició en 1991. Los militares reunieron a la mayor cantidad de pobladores de cada comunidad y les explicaron los motivos y necesidades para organizar las rondas. En un primer momento, la población no mostró interés en el asunto, por lo que los militares empezaron a coaccionar a los comuneros. Como relata un comunero de Chicche, al instalarse las rondas campesinas en las comunidades de Magdalena, Quisuar y Chinche (distrito de Chicche), el Ejército repartió armamentos para ser compartidos por las tres comunidades. Asimismo, cuenta que los ronderos, a veces, iban a la base Vista Alegre, donde les enseñaban a armar, desarmar y limpiar las armas: «En Chicche, también hemos tenido varias capacitaciones en tiro libre con fusiles. Todos trabajábamos» (CVR. Testimonio 302368).

Otro rondero comenta que los militares de la base de Vista Alegre les decían que «el que no sirve para la base es tuco [subversivo]». Asimismo, señala que muchos de los comuneros que participaban en las rondas campesinas fueron amenazados por los miembros de los grupos subversivos; por eso, tuvieron que abandonar su pueblo y establecerse en otras ciudades. Si bien los militares no cometieron excesos con los familiares de los ronderos, llegaban a la casa de éstos en cualquier momento y les exigían que salieran a realizar las rondas a los pueblos cercanos y nadie podía oponerse a esta orden (CVR. Testimonio 302710).

#### 5.8. EPILOGO

En un panorama bastante complicado, un grupo de comuneros que se opusieron a la continuidad de la SAIS Cahuide con anterioridad a la llegada del PCP-SL respaldó sus ideas destructivas. No obstante, una vez que perdieron sus trabajos, terrenos y animales, se dieron cuenta del error de su alianza.

Las reparticiones de ganado después de la destrucción de la SAIS Cahuide no fueron necesariamente justas. De acuerdo con un testimonio, «según conveniencia se entregaba, no era justo, no podíamos hablar nada porque nos marcaban y gritaban para apoyar a repartir [...] Ahí nos dimos cuenta de algunos atropellos que se cometían» (CVR. Testimonio 301694).

Muchos pobladores, a partir de estos hechos, se decepcionaron del PCP-SL y se dieron cuenta del gran error cometido. Otro testimonio afirma: «Más nos convencimos cuando la destruida hacienda Laive no servía para nada, los buenos pastos que se habían mejorado se empezaron a perder, no había animales ya que habían obligado a regalarlos o comerlos» (CVR. Testimonio 301694).

No había quedado tampoco ningún animal de buena raza en los pastos y los comuneros perdieron la oportunidad de vender el ganado y obtener un ingreso económico. A esto se suma una economía inflacionaria que llevó a la quiebra a los comuneros como lo manifiesta otro testimonio: «si uno vendía un toro a 1,500 intis, con este dinero no podías hacer nada, ya que se devaluaba y sólo se podía comprar, en cambio, una bolsa de fideos, una caja de leche, arroz y alguna que otra cosita más» (CVR. Testimonio 301694). Las escasas ganancias que se obtenían no les permitían iniciar ni siquiera un pequeño negocio. Este mismo testimonio refiere, además, que no se pudo activar la SAIS pues todo estaba destruido. Otro poblador, después de la destrucción de la SAIS Cahuide, recuerda que:

La SAIS Cahuide, nos apoyaba con equipos pesados (volquetes, camiones) para limpiar y mejorar nuestras vías de comunicación, para la limpieza de canales de irrigación, entre otras actividades. Pero, como ya fue desaparecida esta SAIS, no tenemos estos beneficios ni tampoco podemos seguir aprendiendo nueva tecnología para mejorar nuestros pastos, la calidad del agua, sanidad de los animales, porque destrozaron nuestra empresa comunal, nuestra tienda [...] Los pobladores que tenían animales en su poder y los cuidaban independientemente, no sabían las técnicas para mejorar la raza. (CVR. Testimonio 301710)

En palabras de los propios afectados: «Sendero [el PCP-SL] llegó a destruir una organización campesina que sobresalía en el ámbito nacional, siendo a favor de los millonarios y no de los pobres. Añade que a nivel nacional tenían los mejores ganados y no tenía competencia alguna, así que iban a competir con la ganadería de Argentina. Pero, para esto, la SAIS ya se había destruido» (CVR. Testimonio 302708).

### 5.9. CONCLUSIONES

La SAIS-Cahuide constituyó un referente importante para la economía rural de la región a pesar de su paulatino decaimiento. Su destrucción significó una oportunidad irremediablemente perdida para la región. Lamentablemente, no hay cifras que den cuenta del grado y magnitud de destrucción habido. Ningún estudio ha realizado alguna vez la contabilidad de los daños personales ni materiales ocasionados por el conflicto armado interno para este caso.

¿Cómo fue posible su destrucción por el PCP-SL? La SAIS Cahuide se había asentado sobre terrenos que arrastraban una larga historia de conflictos sobre la propiedad de la tierra. A este difícil panorama, cruzado por disputas por tierras y linderos entre las comunidades socias y las que no lo eran, se sumaban las dificultades personales surgidas entre los mismos socios, donde solamente una parte fue empleada en tareas administrativas con un sueldo fijo. El PCP-SL hábilmente se ubicó sobre estos conflictos y contradicciones locales exacerbándolos para ganar aliados en su trastornada carrera por destruir el «viejo estado» y establecer uno nuevo destruyendo de raíz una empresa que nunca más pudo volver a ser reconstruida. A esto se suma el terror que el PCP-SL desplegó en la zona a través de sus «juicios populares» contra quienes no seguían sus pautas. Por estas razones, ya sea por miedo, interés directo por acceder a la maquinaria de las empresas asociativas o ambivalencia hacia los planes destructivos del PCP-SL, éste contó, en determinado momento, con el apoyo de una parte de la población.

¿Qué enseñanzas deja este capítulo dentro del conflicto armado interno? La SAIS Cahuide estaba signada a desaparecer como empresa asociativa desde su nacimiento debido a las profundas contradicciones a las cuales estuvo sometida desde el inicio. El PCP-SL supo, ante el vacío creado, ubicarse rápidamente en los intersticios de estos conflictos y captar aliados para su causa. En otras palabras, los conflictos al interior de la SAIS y entre las comunidades fueron utilizados para generar una base social que apoyara sus acciones destructivas. Cuánta sangre se hubiera podido ahorrar con una política más clara y justa de parte del Estado en lo referente a distribución de tierras y repartición de las ganancias en una empresa con objetivos comunes y desarrollo potencial para la región.

## 6. LOS SINDICATOS MINEROS

### 6.1. LA MINERÍA EN EL PERÚ: GRAN GENERADORA DE DIVISAS

El desarrollo de la minería en el Perú se remonta a antes de la época de la Conquista. Su importancia, sin embargo, no se traduce en la cantidad de estudios socioeconómicos sobre este trascendental rubro de la economía peruana, mucho menos en investigaciones que muestren el impacto del conflicto armado interno en este sector.

Desde inicios del siglo XX, la sierra central se había convertido en el centro principal de producción minera del país y, como tal, en parte importante de la creciente economía peruana de exportación. La región poseía los recursos necesarios para el crecimiento de esta actividad: ingentes reservas minerales y suficiente mano de obra para las actividades de extracción en las comunidades aledañas a los campamentos mineros. La gran

mayoría de los obreros que laboraban en estos centros mineros provenía de las comunidades campesinas ubicadas en las partes altas del departamento de Huancavelica, del valle del Mantaro y de Cerro de Pasco.<sup>232</sup>

Los productos mineros han tenido siempre un peso considerable en las exportaciones peruanas. En el año 1969, constituían el 52% de nuestras exportaciones. Desde 1977, las exportaciones de concentrados y refinados han representado más del 40% de las exportaciones totales del Perú. En 1977 y 1983, alcanzaron una participación superior al 50%, 45% en 1987 y 1988, para rebrotar, en 1989, hasta 62% a pesar de las políticas de exportación, los precios internacionales, los conflictos laborales y la violencia que se vivió durante esos años.<sup>233</sup>

En 1991, más del 50% del valor de la producción de los seis productos minero-metalúrgicos (cobre, plata, zinc, polo, oro y hierro) estaban concentrados en cuatro empresas estatales y una privada: Centromín Perú, Minero Perú, Hierro Perú, Tintaya S.A. y Southern Perú Copper Corporation (esta última privada). Estas cinco grandes empresas generaban el 75% de los activos totales de sector en 1991.<sup>234</sup>

La minería ha venido empleando igualmente un importante número de trabajadores. En 1989, el total de trabajadores mineros llegó a 58,160 y registró una tasa de crecimiento negativa de 1.1% anual para el período comprendido entre 1980 y 1989.<sup>235</sup> Del número total de obreros y empleados, los obreros representaban aproximadamente el 75% del total del personal ocupado en las minas.<sup>236</sup>

## 6.2. MINAS DE HUANCAYA: BANCOS DE DINAMITA DEL PCP-SL

El departamento de Huancavelica tiene varios centros mineros importantes, ubicados en las provincias de Castrovirreyna, Angaraes y Churcampa. La empresa Buenaventura era la más grande y sus unidades se encontraban en San Genaro y Julcani. Cobriza, ubicada en la provincia de Churcampa, era unidad de Centromín Perú. Otras unidades mineras eran Caudalosa Grande, Caudalosa Chica y La Mejorada.

En los años 1979 y 1980, los sindicatos mineros de Huancavelica se caracterizaban por su alto grado de politización y porque gran parte de sus trabajadores militaban en diversos grupos políticos. Las organizaciones políticas que más destacaban eran el Frente Obrero, Campesino y Estudiantil del Perú (FOCEP), UDP, PAP, entre otros. En esos años, también apareció la Unidad Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR) representada por algunos profesores de las escuelas de los campamentos mineros. En un primer momento, el UNIR tenía como únicos miembros a los profesores del lugar, pero luego fue creciendo con la incorporación de trabajadores mineros. Según manifiestan ex trabajadores mineros de la zona, los primeros militantes del PCP-SL habrían llegado con estos profesores.

Mientras que la presencia del PCP-SL fue relativamente tardía en los centros mineros de Cerro de Pasco y Junín, para los últimos meses de 1980, el PCP-SL ya había tomado contacto con algunos asentamientos mineros de Huancavelica, sobre todo con los que se ubicaban cerca del departamento de Ayacucho, como Cobriza, Julcani y La Mejorada (ubicados en Churcampa y Angaraes, respectivamente).

Las relaciones entre los propietarios de las minas huancavelicanas y los obreros, igualmente, siempre fueron conflictivas. Los constantes paros y huelgas que protagonizaban los mineros hacia 1982 habían exacerbado los ánimos de algunos propietarios de las empresas, quienes, enterados de la violencia y destrucción que causaba el PCP-SL en las comunidades campesinas, constantemente trasladaban contingentes militares para brindar seguridad a los campamentos mineros.<sup>237</sup>

Militares y empresarios también buscaban intimidar a los dirigentes y desarticular los sindicatos:

Entonces, poco a poco aparecieron, inclusive era cuando ni siquiera había llegado con fuerza Sendero [el PCP-SL], pero el mismo Ejército se vestían de senderistas [miembros del PCP-SL] y entraban porque pedían al super-

<sup>232</sup> Long, Norman y Roberts Bryan. Mineros, campesinos y empresarios en la sierra central del Perú. Lima: IEP, 2001, p. 25.

<sup>233</sup> Sobre la contribución del sector minero al desarrollo nacional, véase La importancia económica de la minería en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Económicos Mineros, 1991.

<sup>234</sup> Ibídem, pp. 44-45.

<sup>235</sup> Ibídem, p. 101.

<sup>236</sup> Ibídem, p. 103.

<sup>237</sup> En el departamento de Huancavelica se instalaron las bases militares en Castrovirreyna, Santa Inés y Churcampa en 1982, 1982 y 1983, respectivamente.

intendente o pedían al relacionador que intervenga, o sea, entonces, manejaban a su antojo. Es una violencia que nosotros en oportunidades anteriores no hemos podido decir [...] inclusive algunas dinamitas han salido de la mina de la propia mano de los empresarios para que con eso traten de asustar a la gente; entonces, poco a poco, avanza y Sendero [el PCP-SL] hace lo mismo y comienza a entrar, pero no tan violento como los del Ejército.<sup>238</sup>

Desde los primeros años de la década de 1980, las minas de Huancavelica representaban para el PCP-SL el centro de abastecimiento de material explosivo con el cual realizaban sus atentados en las comunidades del noroeste de Ayacucho y del sudeste de Huancavelica. En estos años, los centros mineros aún no eran el blanco de los atentados: «A las empresas mineras no atacaron al principio, sino que entraban a quitarles, sobre todo, las dinamitas y cometer sus actos terroristas en otros lugares».<sup>239</sup>

Para 1983, el PCP-SL había logrado tener algunos simpatizantes en los sindicatos, los mismos que, por su trabajo en el interior de las minas, sustraían explosivos para entregárselos a los subversivos. En estos años, el PCP-SL también ingresaba casi sin violencia a las reuniones sindicales, arengaba a todos para que se unan a la «guerra popular» y, después de distribuir volantes y realizar pintas, se retiraban. No obstante, los obreros siempre se negaron a formar parte de las huestes del PCP-SL.

A partir de 1984, los centros mineros de Huancavelica empezaron a vivir situaciones mucho más violentas. El PCP-SL incrementó el terror y la violencia en las comunidades campesinas aledañas a los centros mineros y provocó una gran convulsión en toda la zona por constantes enfrentamientos con los militares.

A media noche del 1 de enero de 1984, el PCP-SL atacó el centro minero de Cobriza con gente reclutada en las alturas de la comunidad ayacuchana de Ayahuanco (que limita con la provincia de Churcampa, Huancavelica). En ese momento, la policía particular de la empresa, el personal administrativo y los obreros se refugiaron dentro de los socavones. Los subversivos aprovecharon la situación y saquearon los almacenes de la mina y todas las tiendas comerciales del campamento. A las pocas horas de la incursión subversiva, llegaron los militares y fueron en persecución de los sediciosos, pero no lograron darles alcance. Aduciendo que se trataba de una acción para proteger a los trabajadores mineros, los subversivos destruyeron el puente metálico que unía Cobriza con el distrito de Ayahuanco. Días después de la destrucción del puente, el superintendente del centro minero John Broadle reclamó airadamente a los militares por el hecho y, en respuesta, éstos lo golpearon salvajemente. Después de estos sucesos, a fines de 1983, se instaló una base militar en esta unidad de producción de Centromín Perú.

En noviembre de 1985, la mina de Caudalosa Grande (provincia de Castrovirreyna) es atacada por los subversivos, quienes dinamitaron parte de sus instalaciones, golpearon y amenazaron a los superintendentes para que éstos les entregaran dinamita y guías explosivas. A partir de ese momento, los superintendentes fueron inestables en las minas, lo que provocó el retraso en los pagos a los trabajadores.

Otra de las empresas que fue atacada violentamente por los subversivos en esos años fue San Genaro, también ubicada en Castrovirreyna. Ante estos atentados, las empresas convocaron el apoyo de los militares para enfrentar al PCP-SL; pero, al mismo tiempo, desarrollaron acciones que iban contra los sindicatos: comenzaron a acusar de subversivos a algunos dirigentes y despidieron a algunos sin ningún beneficio laboral. Las relaciones entre la empresa y los trabajadores se complicaron aún más con estos hechos:

La guerra sucia estaba implementada por el Estado, puesto que tenían mercenarios adiestrados para golpear y para calumniar. De noche, ingresaban a los campamentos, a las casas de los dirigentes y los sacaban a plena luz del día poniéndole dinamita, poniéndole afiches de los subversivos y calumniándoles de esa manera; eso sabemos perfectamente porque nosotros somos dirigentes y hemos sido testigos (ex trabajador minero de Caudalosa Grande).

En octubre de 1986, un grupo del PCP-SL incursionó en la unidad minera Santa Rosa (Cobriza) y saqueó todo su material explosivo (dinamita, fulminantes y guías). Este hecho provocó el cierre definitivo de la unidad minera y dejó sin empleo a cientos de obreros de la zona. Después de este saqueo, los atentados dinamiteros se incrementaron por todos los poblados de la zona.

En 1988, el PCP-SL nuevamente incursionó en el centro minero de San Genaro (Cistrovirreyna) y asesinó cruelmente al jefe de relaciones industriales y a un contratista de apellido Ponce porque no tenía un

<sup>238</sup> Entrevista realizada por la CVR a Sixto Vilcas, ex dirigente minero de Julcani.

<sup>239</sup> Ibídem.

«buen trato» con los trabajadores. Antes de retirarse, los subversivos dinamitaron torres de energía eléctrica y gran parte de las instalaciones. Ante estos hechos, la empresa minera Buenaventura decidió cerrar temporalmente esta unidad: «Dinamitaron campamentos mineros como el caso de San Genaro, asesinaron al jefe de relaciones industriales, propiedad de Buenaventura, al contratista minero que explotaba [...] que trataba mal a los trabajadores, como el caso de Ponce, lo ajusticiaron entre comillas [...] es lo que yo recuerdo cosas así concretas» (ex trabajador minero).

Similares acciones ocurrieron en la mina Caudalosa Grande (Castrovirreyna) y, al igual que en Buenaventura, los propietarios también cerraron las minas y dejaron sin empleo y sin beneficios a todos los trabajadores. Según señalan los ex trabajadores, la mayor presencia subversiva se registró en el centro minero de San Genaro. Éste fue un factor más para que los propietarios cerraran la mina. Después de estos atentados, los militares detuvieron a ocho dirigentes de San Genaro y los acusaron de subversivos. Éstos fueron encarcelados injustamente durante ocho meses; así lo recuerda un ex dirigente minero: «Por ahí entró Sendero [el PCP-SL], inclusive han estado ocho compañeros en la cárcel acusados de senderistas [de ser miembros del PCP-SL], se han solidarizado todos los mineros del departamento y a nivel nacional e internacional y salieron después de ocho meses [...]» (Ex trabajador minero).

Luego de estos hechos, en algunos centros mineros aparecieron personas extrañas que, haciéndose pasar de subversivos, cometían robos a las tiendas comerciales del lugar y a los domicilios de los trabajadores mineros.

#### 6.3. LA IMPORTANCIA DE LA REGIÓN CENTRAL PARA EL PCP-SL

El Comité Regional del Centro (CRC), integrado por los departamentos de Junín y Pasco, estuvo a cargo de Óscar Ramírez Durán, *Feliciano*, entre 1981 y 1985. Con el CRC, el PCP-SL abrió por primera vez una zona de entrenamiento bélico en la quebrada de Chaupihuaranga, donde preparó a sus cuadros, militantes y simpatizantes para la «lucha armada». Es en este lugar donde se ajustició por primera vez en la región a alcaldes, dirigentes comunales y policías.

De manera simultánea, cuando el PCP-SL inició su «guerra popular» con la quema de los padrones y ánforas electorales en la comunidad de Chuschi, en el departamento de Ayacucho, atacó con petardos de dinamita el Concejo Provincial y el Centro Educativo 34004 de la ciudad de Cerro de Pasco el 17 de mayo de 1980. Esta primera incursión estuvo dirigida por Feliciano y Johan. Con estos atentados, el PCP-SL hizo su aparición en este departamento, pero es sólo en los últimos meses de 1983 cuando apareció con fuerza en la zona minera.

La violencia subversiva se extendió a los centros mineros en la década de 1980, se insertó en algunos sindicatos y logró su control, a partir del cual intentó, de manera sangrienta, cooptar a los demás sindicatos del sector. Hay que resaltar la resistencia de los trabajadores que batallaron por preservar su independencia gremial, demandas y aspiraciones, así como también de los funcionarios y empresarios mineros que hicieron frente de manera consecuente a las huestes subversivas.

A la llegada del PCP-SL a la región central, mientras el PAP tenía mayor presencia entre los empleados, en los diversos sindicatos de obreros convergían distintos grupos políticos como el PCP Patria Roja, el PCP Bandera Roja, Pukallacta<sup>240</sup>, el Partido Unificado Mariateguista (PUM), Izquierda Unida (IU) y UNIR. A estas agrupaciones, a pesar de sus diferencias ideológicas y políticas, las unía un propósito común: el liderazgo de la masa obrera con el fin de subordinarla a su propio proyecto político.

#### 6.4. EL PCP-SL EN LAS MINAS DE CERRO DE PASCO

El PCP-SL reapareció en 1983 en la zona con algunos profesores de la Universidad Daniel Alcides Carrión dirigidos por *Johan*, quien había regresado de Huánuco junto a *Piter* para realizar una serie de actos sanguinarios. Desde ese momento, Huánuco se convirtió en el departamento que abasteció de cuadros subversivos a Cerro de Pasco. Durante 1983, 1984 e inicios de 1985, los integrantes del PCP-SL captaron a algunos dirigentes mineros y realizaron las primeras pintas llamando a «lucha armada» y haciendo vivas al «presidente» *Gonzalo*. Para ese período, el FOCEP había logrado ser el grupo más organizado y el que tenía mayor liderazgo en-

<sup>240</sup> Pukallacta, que en quechua significa patria roja, era, en realidad, una escisión de la agrupación PCP Patria Roja.

tre los dirigentes sindicalistas, donde además se formaban líderes como Seferino Requis y Teófilo Rímac Capcha, quienes más adelante fueron asesinados por el PCP-SL y los militares, respectivamente.

En abril de 1985, fue asesinado de un balazo en la cabeza el dirigente minero Demetrio Martínez, quien había propuesto a la empresa en varias oportunidades que otorgara una bonificación especial y los beneficios médicos que cubrieran especialmente las consecuencias de los reactivos químicos que utilizaban los obreros en la extracción de minerales. Los trabajadores atribuyeron el asesinato a la empresa minera Centromín Perú, sin embargo, no se ha podido comprobar quién finalmente fue el autor de este hecho. Se sabe, además, que para azuzar las contradicciones el PCP-SL cometía actos que incidían en la polarización de los conflictos.

Un ex trabajador recuerda el hecho:

El 85 fue el año más difícil para mí, porque, en primera instancia, el 25 de abril lo asesinan a mi primo Demetrio [Martínez]. Él también por entonces era dirigente sindical, pero él estaba luchando por el logro de un rubro muy importante. Nosotros en las minas sufrimos los efectos de toxicidad de los gases de los productos químicos. Entonces, se formula para exigir a la empresa que, de alguna forma, nos considere una remuneración y, ya cuando se encontraba en la parte final, lo asesinan a mi primo. Yo más supongo que también ha sido de un comando de la misma empresa. Incluso han existido comandos de aniquilamiento internamente que han matado a dirigentes. (Ex trabajador de Centromín Perú en Cerro de Pasco)

Un grupo del PCP-SL ingresó a la planta concentradora de una de las unidades de la empresa y dinamitó los molinos. Un testigo de la destrucción manifiesta:

Yo estaba trabajando en horas de la noche, me faltaba una hora nomás para salir cuando ingresaron un grupo de terroristas [subversivos] bien armados a la concentradora. Me agarraron de sorpresa, me tiraron al suelo y me dijeron: «¡Quiero que pares todos estos molinos!». En realidad, yo me encontré encañonado en el piso. Incluso había varones y mujeres y yo pude reconocer a uno de ellos. Era un servidor de la Universidad [Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión]. Luego me dieron un golpe en la cabeza y vi que pasaban costales de anfo, de dinamita y lo ubicaban en la base de los molinos y así desencadenó una explosión en cadena. (Trabajador minero, testigo del atentado dinamitero del PCP-SL)

Después de esa acción, los integrantes del PCP-SL intentaron consolidar su trabajo en los sindicatos presionando a todos los dirigentes para que se unieran a las filas de su partido. Los comunicados anónimos sobre la «lucha armada» y el «presidente» Gonzalo aparecían constantemente en los comedores y los vestuarios de los socavones.

En 1986, nuevamente el PCP-SL hizo sentir su presencia. Hasta ese momento, los blancos de sus atentados habían sido las instalaciones de las empresas. La más afectada había sido Vinchos, donde el PCP-SL logró ingresar a las oficinas de la empresa y asesinar a balazos al gerente, subgerente y superintendente de mina; luego dinamitaron la planta concentradora causando irreparables daños materiales.<sup>241</sup> Este hecho provocó el cierre de esta empresa. De acuerdo con la información recogida, Hernán y Nelly comandaron el atentado a la empresa Vinchos, los mismos que también arremetieron en las comunidades de Pasco. Luego de los atentados a la unidad minera de Vinchos, con el propósito de evitar los atentados contra sus instalaciones, la empresa minera Centromín Perú gestionó la instalación de una base militar dentro de su jurisdicción en 1983.

## 6.5. NUEVOS ACTORES EN EL ESCENARIO

Después del atentado a la empresa minera Vinchos, los integrantes del PCP-SL ingresaban libremente a los sindicatos y asambleas de los trabajadores. El PCP-SL había logrado captar a algunos dirigentes en detrimento del FOCEP y de las demás facciones de izquierda. Adicionalmente, habían logrado contactarse con algunos obreros que trabajaban en el interior de las minas, a quienes les ofrecían soles y dólares a cambio de material explosivo. Luego de un tiempo, frente a demostraciones de resistencia de los trabajadores mineros, el PCP-SL empezó a combatir a los dirigentes que no asimilaban su discurso, muchas veces asesinándolos. Mientras esto sucedía, la empresa minera buscó el diálogo con los dirigentes para superar el panorama violento y evitar el enfrentamiento con los trabajadores ante la creciente presencia subversiva.

---

<sup>241</sup> Vinchos era una empresa minera particular ubicada en la provincia de Pasco.

A mediados de 1986, la situación sindical se complicó. Algunos dirigentes captados por el PCP-SL en 1983, reaparecieron en 1986 como candidatos a la dirigencia sindical pero con un estilo político distinto y con un nuevo discurso.<sup>242</sup> Los obreros en general y los otros dirigentes no aceptaron la inclusión de estos candidatos en la dirigencia sindical. Además, los militares empezaron a asistir a las asambleas y seguir de cerca a los dirigentes.

El 19 de marzo de 1986, los obreros realizaron una marcha pidiendo la aprobación del pliego de reclamos. Uno de los delegados, Tomás Miranda, que se mostraba reacio ante la doctrina del PCP-SL lideraba la marcha junto a otros dirigentes. Los manifestantes eran custodiados estrictamente por un centenar de militares que trataban de impedir la marcha. En esos momentos, entre la muchedumbre se escuchó un estruendoso disparo de bala que impactó en la cabeza del dirigente. Inmediatamente, los manifestantes y los militares reaccionaron y lograron capturar a Florentino Cecones, autor del disparo, quien luego de su detención declaró abiertamente ser militante del PCP-SL. Luego del hecho, los militares detuvieron a decenas de trabajadores que participaban en la marcha y los trasladaron hasta la base militar de Carmen Chico. Según manifiestan los ex trabajadores, una vez fallecido el dirigente Tomás Miranda, los demás dirigentes y los obreros se enteraron de que éste llevaba información confidencial de los obreros para la empresa.<sup>243</sup>

A partir de entonces, los militares incrementaron sus patrullajes por todos los campamentos mineros. Éstos solían ingresar violentamente a los domicilios de los trabajadores buscando material subversivo y para detener a presuntos integrantes del PCP-SL y trasladarlos a las bases de Quillacocha y Carmen Chico.<sup>244</sup> Los trabajadores empezaron a ser presionados tanto por los integrantes del PCP-SL como por los militares.

El 23 de junio de 1986, los militares llegaron hasta la casa de Teófilo Rímac Capcha, dirigente del FOCEP, a quien detuvieron y, junto a otros, lo trasladaron hasta la base militar de Carmen Chico. Fue el único que nunca salió de ésta como lo relata el siguiente testimonio:

El 23 de junio ingresan los militares a mi casa y agarran a mi esposo; se lo llevaron hasta la base militar de Carmen Chico; nunca más volví a verlo [...] desde aquel entonces empecé a pedir ayuda para saber el paradero de mi esposo, porque temía por su vida [...] el 27 de junio yo ya tenía noticias de que mi esposo había sido asesinado [...] el Secretario General de Centromin me mandó llamar a su casa y me dijo: «a su esposo lo han matado y tiene que buscar justicia. A él lo han torturado duramente, lo han puesto en un costal y han jugado fútbol con él, tenía las mandíbulas destrozadas, las costillas rotas, le han introducido el FAL por la boca, el mango de la escoba por el recto y él no ha podido soportar todo eso; sin embargo, antes de fallecer me ha dejado un encargo para usted; él me ha dicho: "dile a Doris, mi esposa, que cuide a mis hijos, que haga de Iván un gran hombre, a mí me matan sin culpa alguna"». Después que desapareció Teófilo [Rímac], durante dos años dormía sentada con mis hijos [...] fui detenida hasta en tres oportunidades, me golpearon, me amenazaron para que callara la situación de mi esposo, pero yo tenía que buscar a mi esposo.<sup>245</sup>

La familia de la víctima hizo todos los esfuerzos por ubicar el cuerpo del dirigente, pero nunca lo logró.

La situación de violencia se agudizó aun más en 1987. Los integrantes del PCP-SL veían fracasar sus planes de extender la «lucha armada» en el sector minero e incrementaron sus acciones de represión contra aquellos que trataban de desligarse del PCP-SL. El dirigente sindical Carlos Melo en un inicio fue convencido por el discurso subversivo y pasó a ser miembro de este partido; pero luego, por la violencia que imponía el PCP-SL, cambió de parecer y decidió dejarlo. A la semana siguiente, apareció muerto cerca de su domicilio y sobre su cadáver encontraron un cartel que decía: «Así mueren los traidores». Después del hecho, los militares intensificaron sus patrullajes por los campamentos; los sospechosos fueron detenidos y trasladados hasta la base militar de Carmen Chico.

En 1988, el PCP-SL logró debilitar los sindicatos amenazando a los dirigentes. En uno de los enfrentamientos entre un grupo del PCP-SL y los militares, muere *Johan*. Ese mismo año se llevó a cabo la huelga nacional minera que terminó con la radicalización de los sindicatos que plantearon un pliego único a escala nacional en el que exigían, entre otras demandas, una homologación de salarios para los mineros en general. En diciembre del mismo año, en el poblado de Huariaca, el PCP-SL destruyó una planta eléctrica que abastecía a

<sup>242</sup> Habían incluido en sus arengas una fusión de la propuesta del PCP-SL y los reclamos del sector minero.

<sup>243</sup> Entrevista a un ex trabajador minero.

<sup>244</sup> Las bases militares de Carmen Chico y Quillacocha, en la provincia de Pasco, se instalaron en 1984 y 1986, respectivamente.

<sup>245</sup> Testimonios de dolor y coraje. Fotografías de Nelly Plaza. 2002.

los asentos mineros de Milpo, Atacocha y Chicrín. Con ello, provocó la paralización de las labores de miles de trabajadores durante dos semanas.

En vísperas de una nueva huelga nacional, la noche del 13 de febrero de 1989 el dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní y la promotora social Consuelo García Filomenas fueron asesinados a balazos por un grupo paramilitar, cerca del local de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros en Lima. La muerte de este dirigente minero provocó una gran movilización nacional. En la Región Central, La Oroya y todas las unidades de producción de Centromin Perú, al igual que las otras empresas mineras de los departamentos de Junín y Cerro de Pasco, acataron un paro de 24 horas convocado por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP).

El 2 de marzo de 1989, el PCP-SL asesinó a balazos a uno de los más representativos dirigentes sindicalistas de Cerro de Pasco, Seferino Requis:

Los mineros no asimilaban los principios que ellos querían, porque, en realidad, había limitaciones, o sea, no conocían en su real dimensión lo que era Sendero Luminoso [el PCP-SL]; además hablar de muertes, de desastres y de situaciones de esa naturaleza a uno lo ponían en una situación más crítica. Siendo Pasco una ciudad minera por excelencia, el asunto de ellos era de todas maneras tomar posesión y dirigir dentro del sindicato. Ésa es la idea del objetivo de Sendero Luminoso [del PCP-SL], cosa que ellos fracasaron porque ellos consideraban que los mineros eran unos brutos, «no asimilan lo que nosotros queremos», eso fue la idea de ellos y, al final de cuentas, no logró. Entonces, lo que buscó simplemente es reaccionar como una revancha [...] eliminando a personas. (ex trabajador minero)

Seferino Requis era secretario general del sindicato de trabajadores mineros y metalúrgicos de Cerro de Pasco y había convocado a una asamblea extraordinaria para informar el plan de trabajo después de su viaje a Lima. A los pocos minutos de iniciada la asamblea, ante la mirada perpleja de los asambleístas, ingresó un grupo armado de ocho integrantes del PCP-SL, arengando la «guerra popular» y haciendo vivas al «presidente» Gonzalo. Éstos llamaron a los dirigentes Seferino Requis y Hugo Poves. Éste último aún no llegaba a la asamblea. Entonces, al único que asesinaron fue a Seferino Requis, aduciendo que «había traficado con los intereses de la clase obrera y que, de acuerdo con los principios del Partido Comunista, tenía que ser aniquilado». Lo pusieron en el piso boca abajo y le dispararon en la cabeza. Los asistentes nada pudieron hacer para evitar el asesinato, pues los integrantes del PCP-SL se habían ubicado estratégicamente en el local y lograron apuntar a todos con sus armas de fuego. Un testigo del hecho cuenta: «Llegaron con chalinas y gorras [...] quedamos casi hipnotizado por ese accionar y lo peor fue cuando llamaron [...] y uno de ellos no estuvo [...] y ellos decían que había actuado en contra de la clase trabajadora [...] entonces, lo tenían pisado en el piso y le dispararon» (ex trabajador minero).

El 7 de abril de 1989, el PCP-SL dinamitó la locomotora 32 de la empresa Centromin Perú, lo que provocó la paralización del traslado de mineral de la unidad de Cerro de Pasco a la fundición de La Oroya.

Después del asesinato de Seferino Requis, los militares realizaron exhaustivos operativos por toda la zona en los que resultó baleado Hernán cuando intentaba escapar de los militares y capturada Nelly. Ambos contaban con el apoyo de algunos comerciantes y se refugiaban en los pueblos aledaños de Chinchan, Huariaca y Pucuruguay. En la redada, también cayeron personas inocentes que estuvieron varios días detenidas en las bases de Quillacocha y Carmen Chico. Con estas capturas, el PCP-SL perdió notoriamente poder en el sector minero. Asimismo, después de la muerte del dirigente Seferino Requis, disminuyó la participación de los obreros en los sindicatos. Casi nadie aceptaba ser dirigente por el temor a las represalias del PCP-SL. Así, los sindicatos llegaron debilitados para los noventa: «La gente ya no quería ir al sindicato, “para qué voy a ir al sindicato si va haber muerte allí, si Sendero [el PCP-SL] va a matar, ya no voy al sindicato”, decía la gente; el sindicato es el único lugar donde uno se reúne para informar todos los problemas de los trabajadores y la gente ya no quería ir» (ex trabajador minero).

En 1990 fue elegido como secretario general del sindicato de trabajadores mineros el obrero Juan Santiago y, en la noche del mismo día, un grupo del PCP-SL intentó asesinarlo en su domicilio. El dirigente logró salvarse del atentado. A partir de ese momento, al saber que su vida estaba amenazada, decidió hacerle frente al PCP-SL y organizó la guardia obrera, conformada por sesenta obreros que laboraban en su misma sección y que trabajaban independientemente de los militares y la empresa. En poco tiempo, lograron detectar la pre-

sencia de integrantes del PCP-SL en los campamentos más alejados y, bajo el mando de Juan Santiago, planificaron una acción que llevaría a la captura de diez presuntos integrantes del PCP-SL:

Esa noche yo ya tenía toda mi gente y más o menos eran unos veinte. Estábamos en toque de queda, pero el toque de queda era a partir de las once de la noche, faltaba dos horas, entonces, le entregamos a los militares, eran bastantes pero se fugaron. Había gente campesina que no son de acá, no sé de dónde, pero seguramente vivían en pueblos jóvenes, gente campesina, gente pobre [...] algunos tenían armas, tenían dinamita, tenían afiches, tenían sus botas.<sup>246</sup>

Pero los subversivos detenidos en la base, en venganza, dijeron a los militares que Juan Santiago también era miembro del PCP-SL, por lo que éstos lo detuvieron y lo llevaron a la base de Carmen Chico, donde lo torturaron. Al no encontrar pruebas en su contra, lo liberaron a las dos semanas.

Este hecho representó un duro golpe para el PCP-SL. Los pocos subversivos que lograron escapar se replegaron en las comunidades de la zona. Juan Santiago recuerda ese momento:

Sendero Luminoso [el PCP-SL] tiene fuerte presencia hasta el noventa más o menos, hasta que nosotros lo desarticulamos, lo expulsamos de la ciudad y de nuestro centro de trabajo. Sí, hasta esa fecha claro que ha tenido presencia, pero no como años anteriores [...] nosotros desactivamos todo Sendero [el PCP-SL], todos los nidos de Sendero [el PCP-SL] [...] No podían hacer nada porque detrás de mí estaban más de sesenta personas; entonces, lo único es que me han tirado dedo todos los que han caído presos, por eso, hasta último estuve requisitoriado.<sup>247</sup>

Hacia 1990, los rezagos del PCP-SL que aún permanecían en los campamentos mineros se replegaron hacia las comunidades de la zona, donde algunos de sus miembros fueron capturados y asesinados en enfrentamientos con los militares y, más adelante, desaparecieron.

Para los primeros años de la década de 1990, los sindicatos mineros ya no concentraban tantos trabajadores obreros, debido al proceso de privatizaciones y el cambio de leyes laborales en el sector minero llevados a cabo por el gobierno de Alberto Fujimori. Las privatizaciones trajeron consigo los despidos masivos. Los nuevos propietarios de las empresas despidieron primero a los sindicalistas y ex sindicalistas y, con ello, prácticamente desaparecieron los sindicatos:

Como ya había cambiado la política de gobierno, había cambiado la política laboral y, justamente, era, pues, privatizar todas las empresas del Estado y para privatizar las empresas del Estado tenía que disminuir personal y básicamente personal que trabajaba en los servicios y personal que ya habían sido dirigentes sindicales ya no deberían quedarse ya, porque la empresa privatizada va necesitar que han sido trabajadores sin conducta de dirigente sindical.<sup>248</sup>

Actualmente, la población de Cerro de Pasco enfrenta las consecuencias del proceso de violencia a escala familiar, social y económica, sólo desea que la experiencia vivida jamás vuelva a ocurrir:

Cerro de Pasco ha quedado en la penumbra, es un pueblo apático e indiferente, un pueblo que no sabe sus derechos, que vive su vida, que defiende sus asuntos personales y no les interesa, digamos, el aspecto social, el aspecto comunitario [...] políticamente hemos decaído por ambos lados, por el armamentismo creado por [Alberto] Fujimori y esta de los senderistas [miembros del PCP-SL] [...] el miedo, el temor [...] los militares aparte de los policías también hacían lo suyo, entraban en el terror. (Ex trabajador minero)

## 6.6. VIOLENCIA EN LOS CENTROS MINEROS DE JUNÍN: LA DOBLE LUCHA DE LOS MINEROS.<sup>249</sup> EL SINDICATO METALÚRGICO DE LA OROYA

La ciudad de La Oroya es el núcleo metalúrgico más importante del centro del país desde la construcción de la fundición en 1922 por la compañía Cerro de Pasco Corporation.<sup>250</sup> En 1974, la empresa Cerro de Pasco Corporation pasó a manos del Estado y se convirtió en Centromin Perú y, desde ese momento, La Oroya se convirtió en el centro de operaciones de la nueva empresa estatal.

<sup>246</sup> CVR. Entrevista 223 con Juan Santiago, ex trabajador y secretario general del sindicato de trabajadores mineros en 1990.

<sup>247</sup> Ibídem.

<sup>248</sup> Ibídem.

<sup>249</sup> Esta parte del informe ha sido elaborada sobre la base de veinte entrevistas a dirigentes, ex dirigentes y asesores de los trabajadores de este sector en Cerro de Pasco, La Oroya, Morococha, Huancavelica, Huancayo y Lima. La información de estas entrevistas fue completada con testimonios tomados en los centros mineros y también con información bibliográfica.

<sup>250</sup> La Oroya es la capital de la provincia de Yauli en el departamento de Junín.

Cabe señalar que Centromin Perú fue la única gran empresa productora de zinc y plomo por excelencia. Del mismo modo, fue el primer productor de plata en aquellos años. De otro lado, la importancia de Centromin Perú radicaba también en la alta concentración de trabajadores obreros mineros, cuya federación de trabajadores agrupaba, en 1983, a 12,500 obreros.<sup>251</sup>

El PCP-SL buscó rápidamente vincularse con los sindicatos y captar a los principales dirigentes. No obstante, a diferencia de los centros mineros de Cerro de Pasco y Huancavelica, donde realizó un trabajo político más consistente, en La Oroya no tuvo mucha presencia debido a que, en 1983, se instaló una base militar en Marcavalle.

Según manifiestan algunos ex trabajadores, era difícil identificar a todos los que ingresaban en las asambleas; sin embargo, se sabía que, a estas reuniones, asistían tanto los «comandos laborales» de la empresa, que mantenían informados a los empresarios mineros de los acuerdos a los que arribaban los trabajadores, como también militantes del PCP-SL. El PCP-SL nunca pudo realizar un trabajo efectivo en el sindicato metalúrgico porque muchas veces los militares y la Policía Nacional estaban presentes en sus reuniones.

En un primer momento, un grupo de trabajadores percibió al PCP-SL como un partido que ayudaría a hacer efectivos sus reclamos ante la empresa debido a su discurso inicial, que propugnaba luchar por los más necesitados. Pero entre los trabajadores obreros primaban las demandas laborales sobre la idea de la «guerra popular» del PCP-SL. Entonces, como en muchos otros lugares, en su afán por imponer su proyecto, el PCP-SL comenzó a presionar y desarrollar violencia, dinamitando una locomotora de la empresa Centromin Perú.

La FNTMMSP presentó en 1987 el pliego nacional en el cual solicitaban mejorar las condiciones de trabajo, los salarios y otros beneficios laborales ante la Sociedad Nacional de Minería, propuesta que no fue aceptada. Los trabajadores respondieron con una huelga nacional en 1988, en la que participaron los sindicatos de todas las empresas mineras; un año después, por circunstancias similares, se produjo la segunda huelga nacional de trabajadores mineros.

El 18 de octubre de 1988, el ex dirigente y militante del Partido Comunista del Perú Fidencio Coronel fue asesinado cerca al domicilio de su hermana.<sup>252</sup> Un día antes, se había opuesto a que su sindicato acatara la segunda huelga nacional y, en efecto, los trabajadores metalúrgicos laboraron normalmente el día 17 de octubre. Fidencio Coronel se había enfrentado en asambleas con militantes del PUM por el hecho de que estos últimos exigían que el sindicato acatara la huelga nacional. Algunos atribuyeron el asesinato al PCP-SL, otros al PUM, y otros al SIN, pero al final nunca se confirmó quiénes fueron los autores del crimen: «Acá se tiene que analizar tres cosas, una es Sendero [el PCP-SL], otro es el soplón y otra es el SIN, porque el mismo Servicio de Inteligencia acá tiene sus infiltrados, en toda asamblea y eso siempre se hizo, entonces, no se puede deducir si lo hizo Sendero [el PCP-SL] o lo hizo la empresa o lo hizo el SIN, porque no se ha llegado a descubrir, no se sabe a ciencia cierta quién lo eliminó».<sup>253</sup>

En diciembre de 1988, los integrantes del PCP-SL dinamitaron tres torres del sistema de cable carril que trasladaba minerales de San Cristóbal hasta Marh Túnel, unidades ubicadas a unos 12 kilómetros de La Oroya y pertenecientes a Centromin Perú. Ese mismo mes destruyeron, además, tres locomotoras eléctricas Diesel que transportaban mineral de las unidades de Cerro de Pasco a La Oroya. Para entonces, la actuación del PCP-SL no sólo se limitaba a la destrucción de las instalaciones de la empresa, sino que también inició la convocatoria de «paros armados», los cuales eran acatados por algunos sindicatos mineros por temor.

Cuando los trabajadores estaban próximos a la realización de la tercera huelga nacional, el 13 de febrero de 1989 fueron asesinados en Lima el dirigente minero Saúl Cantoral Huamaní y la promotora social Consuelo García. A continuación, la FNTMMSP convocó a un paro nacional de 24 horas, que fue acatado por todas las empresas mineras de la región.

El 8 de julio de 1989, los integrantes del PCP-SL dinamitaron una subestación eléctrica, cerca al conjunto habitacional Santa Rosa. Este atentado paralizó el funcionamiento de las refinerías de cobre y plomo, así como el fluido eléctrico local. Más adelante, el 22 de julio, dinamitaron tres torres eléctricas y, durante los últimos

<sup>251</sup> Sulmont, Denis y Alfredo Silva. La minería y los mineros en el Perú. Lima: Asociación Trabajo y Cultura, 1983.

<sup>252</sup> Fidencio Coronel fue dirigente sindical en 1978 y, al momento de su asesinato, era trabajador y militante del PCP.

<sup>253</sup> CVR. Entrevista con ex trabajador de Centromin Perú Rodolfo Basilio.

meses del mismo año, las amenazas de muerte contra los dirigentes complementaban el clima de violencia y terror que provocaban los atentados dinamiteros; las llamadas telefónicas y las cartas anónimas eran parte de la estrategia del PCP-SL para intimidar a los dirigentes.

En noviembre de 1991, la empresa minera Centromin Perú empezó a retrasar los pagos de los trabajadores sin darles explicación alguna y los obligaron a iniciar una huelga indefinida; los trabajadores, entonces, decidieron realizar una manifestación por las principales calles de la ciudad. Los militares de la base de Marcavalle interceptaron a los manifestantes y detuvieron a todos los dirigentes y delegados acusándolos de subversivos. Entre los detenidos se encontraba el dirigente Emiliano Yurivilca, quien, junto a otros dirigentes, fue trasladado, primero, a la base militar de Marcavalle y, luego, junto a otro grupo reducido, hasta el penal de Huamancaca, de donde lograron salir todos menos él. Los familiares de Emiliano Yurivilca hicieron todos los esfuerzos por ubicarlo, pero hasta hoy se desconoce su paradero:

Dicen que acá los del sindicato estaban haciendo una manifestación, entonces, dice, vinieron los soldados y empezaron a llevar a los carros, a unos camiones los subieron [...] y de ahí, dice, le llevaron a Marcavalle y, en Marcavalle, los amarraron las manos y, al amarrarles las manos boca abajo, les echaron y de ellos, dice, que llevaron de acá para Huamancaca [...] eran algo de ocho a diez personas [...] y ahí, dice, los metieron a un depósito, así un cuarto oscuro, entonces de ahí, dice, salían por turno [...] y a los que salían libres, dice, les decían «salga de acá y te callas la boca y si tú hablas algo te va a suceder», porque a los trabajadores les estaban golpeando duro [...] pero mi papá nunca salió.<sup>254</sup>

A partir de ese año, la situación de los dirigentes mineros se complicó aún más. La Policía Nacional y los militares intensificaron las detenciones de dirigentes sindicalistas: «El Servicio de Inteligencia se infiltraba dentro del movimiento sindical, era una realidad, gente preparada que se infiltraba al movimiento y participaba en las asambleas y el informe le daba a la empresa el servicio de inteligencia».<sup>255</sup>

La lucha contrasubversiva impuesta por el Estado contrarrestó la actividad del PCP-SL, pero también debilitó a los sindicatos porque sus tácticas estaban dirigidas igualmente contra los partidos de izquierda que tenían presencia en aquéllos. Muchas veces, los dirigentes eran vinculados directamente con el PCP-SL y detenidos arbitrariamente.

En 1992, se empezaron a debilitar los sindicatos. Los dirigentes eran injustamente acusados de subversivos pese a que el PCP-SL ya casi no tenía presencia. En este año, el dirigente Donato Bernal apareció muerto por las inmediaciones del barrio Club Peruano con un balazo en la cabeza. Nuevamente, la población quedó desconcertada porque nunca se supo quiénes fueron los autores del crimen.

A partir de 1993, se inició el proceso de privatización de la empresa Centromin Perú, que vino acompañado del despido masivo de miles de trabajadores, todo lo cual redundó en una mayor impotencia de los sindicatos.

#### 6.7. EL PCP-SL EN EL ASIENTO MINERO MOROCOCHA<sup>256</sup>

En los sindicatos de Morococha predominaba el grupo Puka Llacta, una facción radical del PCP Patria Roja que se uniría al PCP-SL en 1987. No se descarta la posibilidad de que algunos integrantes del PCP-SL que desarrollaban su trabajo en La Oroya hayan llegado hasta Morococha e influenciado a los pukallactas y otras fracciones de izquierda para que se unan a los «alzados en armas».<sup>257</sup> En poco tiempo de trabajo organizativo, los militantes del PCP-SL llenaron con pintas de la hoz y el martillo y vivas al «presidente» Gonzalo todos los lugares visibles de la población.

En los primeros meses de 1988, los integrantes del PCP-SL se caracterizaban por su trato sutil con las personas a las que querían captar: «Se acercaban amablemente y de frente te pedían que seas partidario de ellos, de su partido, y no eran violentos, no entraban así con armas nada, si no como cualquier persona desconocida

<sup>254</sup> CVR. Entrevista con Ana Luz Yurivilca Chávez, hija de Emiliano Yurivilca, ex dirigente sindical desaparecido por los militares de Marcavalle en noviembre de 1991.

<sup>255</sup> CVR. Entrevista con el ex trabajador Juan Santiago.

<sup>256</sup> Morococha es un distrito de la provincia de Yauli, ubicado en la carretera Central, a unos 25 kilómetros aproximadamente de la ciudad de La Oroya. En este distrito se ubicaban, además de una unidad de Centromín Perú, otras empresas mineras como Austria Duvaz, Santa Rita, Centraminas y Alpamina (minera Yauli).

<sup>257</sup> Los integrantes del PCP-SL se habrían replegado hacia Morococha por la fuerte presencia militar en La Oroya.

[...] entonces, ellos se acercaban, me acuerdo que una vez vinieron a la tienda que mi mamá atendía, pero trataban de convencer a mi papá de forma tranquila, así».<sup>258</sup>

El 16 de abril del mismo año, el PCP-SL inició sus «ajusticiamientos». La primera víctima fue Alejandro Patiño Flores, militante del PAP, regidor del municipio y ex dirigente del Sindicato de Trabajadores Mineros de Morococha. Al igual que Fidencio Coronel en la Oroya, Alejandro Patiño también se había opuesto a la realización de la huelga nacional minera.

El 21 de julio de 1988 se realizó un paro nacional en el que participó la gran mayoría de los trabajadores, quienes bloquearon la carretera Central. Hasta el lugar se habían trasladado diversos vehículos militares y fuerzas especiales de la Policía Nacional con el objetivo de evitar el caos y controlar a los manifestantes. En esas circunstancias, se produjo un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y un reducido grupo de madres de familia que se habían sumado al paro, en el que un exaltado policía disparó a quemarropa contra la señora Francisca Quispe.<sup>259</sup> Despues del asesinato, los policías acusaron de subversivos a algunos manifestantes. Los detenidos y el cadáver de la señora Quispe fueron trasladados a la base militar de Marcavalle.

El 26 de diciembre, el PCP-SL ejecutó uno de los más grandes atentados en Morococha. En la noche de ese día, un grupo del PCP-SL ingresó hasta las instalaciones de la casa de compresoras y, luego de maniatar a los trabajadores de turno, dinamitaron toda la maquinaria. El hecho no causó víctimas humanas pero sí cuantiosos daños materiales a la empresa Centromin Perú. Despues del atentado, el PCP-SL se ganó más opositores de los que ya tenía, pues todos los trabajadores paralizaron sus labores durante 15 días a falta del aire comprimido para el funcionamiento de maquinarias y ventilación en los socavones.

El 15 de abril de 1989, en otro acto terrorista, dinamitaron las oficinas de relaciones industriales y la tubería de aire de ocho pulgadas de Centromin Perú.

Más adelante, el 7 de mayo, cuando salía de una asamblea, asesinaron de un disparo en la cabeza a Antonio Cajachagua Leiva, secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de Morococha. Sus ex compañeros manifiestan que él también estaba en contra de las paralizaciones y atribuyeron el asesinato a los integrantes del PCP-SL.

Los atentados dinamiteros contra las maquinarias de la empresa Centromin Perú continuaron. El 29 de junio de ese mismo año, los subversivos destruyeron una vez más por completo las instalaciones de la casa de compresoras de Centromin Perú y los trabajadores de esta empresa empezaron a tildar de subversivos a los trabajadores de las otras empresas mineras ubicadas en Morococha por el hecho de que a las instalaciones de éstas no les sucedía nada. A las dos semanas, la empresa Centromin Perú terminaba de reparar las maquinarias de la casa de compresoras y el PCP-SL atentó nuevamente contra sus instalaciones. Esta vez dinamitó las tuberías de ventilación, parte de la casa de compresoras y la central eléctrica, la misma que abastecía de energía a las empresas mineras vecinas de Austria Duvaz, Santa Rita, Minera Yauli y Centraminas.

En los últimos meses de 1989 se llevó a cabo el XIV Congreso Ordinario de la Federación de Trabajadores de Centromin Perú con el objetivo de discutir la situación laboral de los trabajadores. En la inauguración del certamen, los trabajadores conformaron la brigada de defensa denominada «Antonio Cajachagua Leiva», en honor al dirigente asesinado. El propósito de la brigada era proteger a los trabajadores de agresiones y acciones violentas que podrían provenir del PCP-SL o de «cualquier otro grupo violentista»; pero los miembros de la brigada nunca tuvieron enfrentamientos con los integrantes del PCP-SL, pues, al poco tiempo de su formación, se instaló una base militar en el campamento minero de Morococha.

Los militares comenzaron a realizar incursiones violentas en los domicilios de todos los trabajadores con el objetivo de capturar a algún sospechoso. Si éstos militares encontraban algún libro de Mariátegui o Lenin, detenían a sus portadores y los trasladaban violentamente hasta la base, donde eran golpeados y torturados:

Empezaron a venir a nuestros cuartos a las seis de la mañana, por ejemplo, entraban y decían operación rastillo y empezaban a revisar todo [...] lo que buscaban eran cajas donde decía explosivos o bolsas, o esos libros de [José Carlos] Mariátegui, los siete ensayos, por ejemplo [...] yo recuerdo que algunos vecinos decían: «entierren todo

<sup>258</sup> CVR. Entrevista con Olinda Parra, hija de un ex trabajador de Centromin Perú en Morococha.

<sup>259</sup> Francisca Quispe era esposa de un trabajador de la empresa minera particular Austria Duvaz; se caracterizaba por su coraje y liderazgo en las marchas y manifestaciones. Su asesinato nunca fue esclarecido.

eso, no tengan nada de eso, los van inculpar». Entonces, la gente empezaba a enterrar esos libros [...] yo recuerdo que un profesor de Biología, Ospina se llamaba, él tenía una bolsa de esos libros, lo agarraron y lo llevaron al calabozo y lo maltrataron.<sup>260</sup>

Los militares también ingresaban violentamente a los locales de los sindicatos donde se desarrollaban las asambleas y detenían a los dirigentes. Muchos de ellos eran trasladados hasta la base de Morococha y otros hasta la base de Marcavalle en La Oroya. Estas acciones, según los militares, tenían como objetivo la búsqueda de elementos subversivos, mientras que los dirigentes manifestaron que el propósito de esos operativos era «atemorizar a los trabajadores para que no se plieguen a las huelgas». A partir de 1991, los militares utilizaron una nueva estrategia de detención denominada la «leva», que consistía en detener en las plazas y calles a todas las personas indocumentadas y trasladarlas a la base militar. Ahí, los que eran identificados salían y los que no eran trasladados hasta la base de La Oroya. La actuación de las Fuerzas Armadas motivó muchas quejas por los excesos que cometieron contra los dirigentes y la población en general.

Con la llegada de los militares, el PCP-SL desapareció totalmente. Después de su último atentado, no volvieron a tener presencia en toda la zona de Morococha.

#### 6.8. LA PRESENCIA DE LOS MILITARES

Después de la realización de la huelga nacional minera en 1988, la economía del sector quedó muy afectada. Los principales empresarios en los medios de comunicación acusaron a los dirigentes sindicales de subversivos. Paralelamente, gestionaron la instalación de bases militares. En 1989, se instalaron más bases militares en las provincias de Castrovirreyna y Churcampa y se incrementaron los patrullajes a todos los centros mineros de la zona. Estas incursiones militares generaron mucho malestar por las detenciones arbitrarias de dirigentes y por los hurtos y maltratos a los trabajadores:

Quien más arremetía era el Ejército y la Policía contra los mineros, porque simplemente los empresarios les pagan a los policías y al Ejército; cuando van a las minas, les dan buenas propinas [...] entonces, hacen de la suya. Las Fuerzas Armadas disfrazados sí robaban, les quitaban todo, entraban a las casas y les robaban todo y no pasaba nada, el pueblo es consciente de cómo actuaban las Fuerzas Armadas, que se hacían pasar por senderistas [miembros del PCP-SL].

El 8 de octubre de 1989, en un operativo militar en el centro minero de Julcani, Santiago Lizana Acha fue asesinado de un tiro en la cabeza. Según Sixto Vilcas, el dirigente habría puesto resistencia en el momento en que era intervenido por los militares:

[...] después Lizana Acha estaba jugando billar, entonces entra y sin decir nada lo agarró a culatazos y le metió un balazo en la cabeza y el policía se hizo el loco y se corrió, lo agarraron, lo llevaron preso, pero, al final, todo quedó entre ellos, los policías así se protegen, ha habido una arremetida fuerte. Realmente a nosotros nos han tildado de terroristas por ser trabajadores mineros y el trabajador minero utiliza explosivos por naturaleza de trabajo.

Estos actos de violencia protagonizados por los militares debilitaron notoriamente la organización sindical en la mayoría de los centros mineros de Huancavelica. En los primeros años de la década de 1990, la situación de los sindicatos empeoró debido a la radicalización de la lucha contrasubversiva puesta en marcha por el nuevo gobierno.

El PCP-SL disminuyó sus incursiones a los centros mineros, pero aún tenía presencia en las comunidades campesinas de la zona. Los integrantes del PCP-SL planificaban minuciosamente su ingreso a los asentamientos mineros para evitar enfrentamientos con los militares. De este modo, en varias oportunidades lograron reunir sin mucha violencia a los trabajadores para insistir en que se incorporen a su partido y exigir la renuncia a sus cargos de las autoridades y representantes del Estado. Señalaban, asimismo, que ellos eran distintos a los militares, a quienes se les tenía que combatir. Advertían que si, no acataban sus órdenes, serían aniquilados. Sin embargo, los trabajadores mineros no se dejaban persuadir por la prédica subversiva y se preocupaban más por la mejora de sus salarios y la estabilidad laboral.

A partir de los últimos meses de 1989, el Servicio de Inteligencia empezó a trabajar sigilosamente en todos los asentamientos mineros de la región. Los ex trabajadores de las minas Julcani y La Mejorada (provincia de

<sup>260</sup> CVR. Entrevista con Olinda Parra, hija de un ex trabajador de Centromin Perú en Morococha.

Angaraes) señalan que, en esos años, arribaron a los campamentos nuevos profesores y asistentas sociales, quienes llegaban a la empresa en calidad de practicantes. Refiere Sixto Vilcas: «Entraban también practicantes, profesores, sastres, asistentas sociales y se pasaban de practicantes, eso sí, en el hablar nomás conocíamos de quién se trataba, al toque; ellos, primero te dicen: «¿cómo no vienen los compañeros, algo quisiera saber?». Ya está, esto era suficiente». Otro ex dirigente refiere: «Así, en las señoritas, también iban, muchas señoritas han hablado, muchas señoritas han dicho: «por mi estancia han pasado, no sé qué le habrá dicho a mi esposo»; y qué hacían, lo cancelaban poco a poco de alguna manera, porque ya estaba en la lista, así han bajado a la gente».



Aparentemente, el trabajo del Servicio de Inteligencia era coordinado con las empresas mineras y tenía doble función: identificar a los integrantes del PCP-SL y a sus colaboradores y luego indagar sobre las actividades de los dirigentes sindicalistas para que la empresa los despida. Sostiene un ex dirigente:

Entonces ya el Servicio de Inteligencia decía: fulano de tal, fulano [...] porque simplemente la señora le dijo a alguien: «no sé, mi esposo dice se ha encontrado con...» [...] «Ah, ya, éste es el contacto». Entonces, ya estaba en la lista [...] reducción de personal y hasta luego [...] Los del Servicio de Inteligencia como que detectaban supuestos senderistas [miembros del PCP-SL], pero a la vez la empresa se servía de eso para sacar personal.

En 1993, en una de sus últimas acciones sanguinarias en los centros mineros, el PCP-SL asesinó al relacionista industrial de la mina Julcani. A partir de este hecho, los militares y policías realizaron mayor control en los centros mineros e incluso llegaron a asesinar al trabajador Juvenal Martínez. Un ex trabajador minero narra este suceso:

Juvenal Martínez, uno de los trabajadores de Julcani, fue baleado por un mayor [Rubén Rodríguez Rebanal], por ejemplo; así, a quemarropa, en una movilización, y de eso son testigos todos los trabajadores; a Juvenal Martínez lo mataron en una movilización porque el relacionista era abusivo: a la profesora le sacó de su trabajo, se fue contra todos los padres de familia [...] y todo por hacer esa movilización le sigue al hombre y le mete bala, eso fue el [año] 93 más o menos.

Los ex trabajadores señalan que estas acciones habrían sido coordinadas entre la empresa minera y las Fuerzas Policiales y Militares con la finalidad de contrarrestar la presencia del PCP-SL y, de paso, desarticular la organización sindical.

Como la gran mayoría de los centros mineros de Pasco y Junín, los de Huancavelica también entraron en el proceso de privatizaciones a partir de 1993. En este departamento, igualmente, los despidos masivos de trabajadores fueron una constante en esos años y la situación de los dirigentes era aún peor, pues ellos salían casi sin ningún beneficio laboral. El ex dirigente sindical Samuel Aroni recuerda lo sucedido:

Toda esta guerra ha contribuido para el colapso de la minería, puesto que los dueños de las empresas han optado por retirarse sistemáticamente y, de este modo, dejaron sin trabajo a muchos trabajadores; por ejemplo, Caudalosa Grande ha sido vendido a otra empresa y así ha habido transferencias, concesiones y, en ese sentido, de todos modos hubo dejadez. Todo esto ha contribuido al colapso de la minería, a esta guerra sucia [...] y todo ha disminuido bastante. Por ejemplo, de lo que era Caudalosa Grande, había 1,500 trabajadores en el ochenta; en el 2000, sólo había cien trabajadores; eso demuestra que ha habido un despido masivo, sobre todo en muchos casos arbitrarios y eso realmente duele [...] botan y despiden sin darle los beneficios sociales.

## 6.9. CONCLUSIONES

Desde comienzos del siglo XX, la región central fue —y sigue siendo— el núcleo principal de la actividad minera en el país y, como tal, parte gravitante en la economía peruana que, en un porcentaje considerable, se apoya en la exportación de minerales para la captación de divisas.

En la región central, casi desde el inicio de esta actividad, la relación entre las empresas y los trabajadores se ha caracterizado por el conflicto permanente debido a las demandas salariales y de beneficios sociales de estos últimos. A partir de 1975, los trabajadores mineros iniciaron un proceso de manifestaciones y reclamos en el que exigían la nivelación de sus salarios y otros beneficios. En 1978, esta situación se agudizó. Durante este período la década de 1980, la presencia de las diversas agrupaciones de izquierda en el sector fue bastante significativa y activa, lo que contribuyó al proceso de radicalización de los sindicatos mineros de toda la región.

En este sentido, al iniciar su «lucha armada», el PCP-SL encontró en el sector minero de la región central un escenario bastante convulsionado y a los obreros en un creciente proceso de radicalización, sobre el cual puso su atención buscando capitalizar esta situación para los propósitos de su «guerra popular». Este caso ilustra la importancia de contar con políticas sociales y económicas que garanticen el apoyo de los trabajadores de las empresas de gran envergadura. Finalmente, los trabajadores constituyen una base social ganada y los empresarios tienen que tener estrategias para legitimarse ante ellos como autoridad y también como aliados; de lo contrario, sólo se genera una violencia que trae consigo más violencia.

Por su parte, a mediados de los años ochenta, el MRTA también intentó desarrollar una labor política en algunos sindicatos de las provincias de Pasco y Yauli (La Oroya), pero su presencia se vio opacada por el PCP-SL que, a diferencia de los primeros, había iniciado sus incursiones antes y todavía mantenían la simpatía de un sector de los dirigentes sindicales.

No obstante, el período más cruento para el sector minero de la región central fue entre 1986 y 1989. Durante este período, ante el rechazo de los trabajadores a su proyecto político, el PCP-SL vanamente intentó radicalizar sus luchas, buscó controlar los gremios e intensificó sus ataques contra las instalaciones, agrediendo y asesinando a dirigentes sindicales. Sin embargo, la heroica resistencia de los obreros se superpuso al terror que pretendía doblegarlos. Los obreros mineros no se dejaron persuadir ni intimidar por el PCP-SL.

La violencia de las acciones del PCP-SL en el sector minero y las millonarias pérdidas y paralizaciones que causaron sus atentados afectaron seriamente la actividad y propiciaron, en la práctica, la total militarización de los centros y campamentos mineros.

El proceso de privatizaciones emprendidas por el gobierno de Alberto Fujimori a partir de los años noventa establecerá el marco legal para el despido masivo de miles de trabajadores mineros, los despidos arbitrarios y sin beneficios de centenares de dirigentes sindicales, la legalización de los contratos eventuales y sin beneficios, entre otras medidas que terminaron por desarticular a la debilitada organización gremial de los trabajadores mineros de la región central.

## 7. LOS MOLINOS: DERROTA DEL MRTA EN LA REGIÓN CENTRAL

El enfrentamiento de más de cien soldados del Ejército, el viernes 28 de abril de 1989 en la pampa Puyhuan, entre los distritos de Huertas y Los Molinos, provincia de Jauja, departamento de Junín, contra un contingente, compuesto por 67 integrantes del MRTA que se dirigía hacia Jauja con el objetivo de tomar la ciudad de Tarma, marcó el inicio de la debacle militar de esta organización en la sierra central.

Inicialmente, se creía que el objetivo del MRTA era ocupar la ciudad de Concepción. Sin embargo, diversos testimonios señalan que era la ciudad de Tarma, por lo que el encuentro con el Ejército no fue planificado y tomó por sorpresa a ambos bandos. Luego del enfrentamiento, el Ejército continuó con acciones de rastrillaje realizando detenciones a pobladores igualmente sorprendidos por los acontecimientos. Algunos de estos figuran actualmente como desaparecidos.

### 7.1. EL MRTA EN LA REGIÓN CENTRAL

Es difícil precisar la real dimensión que alcanzó el MRTA en la región central, pues se trataba de una organización subversiva clandestina y muchas de sus acciones se desdibujaron en la multitud de hechos de violencia ocurridos en el campo y las ciudades.<sup>261</sup>

En 1984, ya existía en Huancayo un núcleo de militantes del MRTA. Sus operativos iniciales fueron básicamente de propaganda como la colocación de banderas de su organización en Jauja, Concepción y Huancayo; el trazado de pintas con sus lemas y consignas; la difusión de mensajes en emisoras radiales; y la distribución de víveres «expropiados» a grandes distribuidores en sectores empobrecidos de Huancayo. Igualmente, empezaron a participar en debates y actos de protesta realizados en la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) por los estudiantes. Más aún, en la UNCP se formó el núcleo primigenio del MRTA, de donde saldrían militantes que jugarían papeles importantes en los denominados frente nororiental y frente central.<sup>262</sup> Paralelamente, empezaron a incursionar en colegios de educación secundaria y también desplegaron esfuerzos por ganar influencia en los gremios sindicales y organizaciones populares, donde la izquierda legal también actuaba, aunque con una lógica diferente. La pugna con el PCP-SL por aquellos espacios se hizo evidente desde 1986.

Como parte de su estrategia, el MRTA formó dos destacamentos militares en Junín, uno en la sierra y otro en la selva, y estableció dos zonas para su trabajo proselitista y militar. La primera comprendía los distritos de Mariscal Castilla, Cochabamba, Comas, Andamarca, Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca. La segunda abarcaba Pichanaqui, Perené, San Luis de Shuaro, La Merced, San Ramón, Monobamba, Uchubamba y Curimarcata. El MRTA estableció un corredor geográfico que le permitía desplazarse entre los departamentos de

<sup>261</sup> Véase el apartado sobre el conflicto armado interno en la región central.

<sup>262</sup> Véase el estudio sobre la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Pasco y Junín. El objetivo, a corto plazo, era formar su llamado frente central, integrado por estos dos departamentos. La acción que daría inicio a dicho frente sería la toma de la ciudad de Tarma.

## 7.2. LA FALLIDA TOMA DE TARMA

La madrugada del viernes 28 de abril de 1989, una columna del MRTA salió de Curimarcá con dirección a Jauja a bordo de dos camiones con el propósito de tomar por asalto la ciudad de Tarma. Esta acción, de acuerdo con declaraciones de sus militantes, buscaba impactar en la opinión pública y ubicar al MRTA en un lugar preponderante de la escena política nacional. Además, con este golpe intentaba dar confianza a sus militantes y mostrar que podían revertir los reveses sufridos hasta entonces en el frente nororiental.<sup>263</sup>

No obstante, cuando preparaba la toma de Tarma, el MRTA sufrió un duro revés al ser capturado Víctor Polay Campos, máximo dirigente subversivo, en el Hotel de Turistas de Huancayo el 4 de febrero de 1989.

Para la toma de Tarma, la organización subversiva había seleccionando militantes de la región y de otros lugares del país,<sup>264</sup> integrados en los destacamentos de la selva y de la sierra. Entre estos militantes se encontraban dirigentes campesinos como Antonio Meza Bravo, dirigentes universitarios como Martín Meza González de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex combatientes del Movimiento 19 de Abril (M-19) de Colombia que habían participado en el frente nororiental en noviembre de 1987 y jóvenes incorporados recientemente al autodenominado Ejército Popular Tupacamarista (EPT).

Una vez definido el objetivo y seleccionados los oficiales y combatientes, ambas unidades comenzaron a organizar su desplazamiento hacia Uchubamba, de donde saldrían hacia su objetivo. El destacamento de la sierra contaba con dos subunidades, una que salía de Parahuancá rumbo a Santo Domingo de Acobamba, pasando por Pasla Alta, conformada por aproximadamente 15 hombres. La segunda, que se encontraba en la zona de Cochas-Comas, estaba integrada por 22 hombres armados. Ambas subunidades se encontraron en San Rafael, a pocas horas a pie de Uchubamba, donde acamparon. San Rafael se encuentra en el anexo de Paltay, que pertenece al centro poblado de Curimarcá (distrito de Los Molinos). Es un lugar donde la ceja de selva se une a la sierra. Por su vegetación y la existencia de pantanos, era una zona ideal para ocultarse.

En tanto, el destacamento de la selva, formado por 31 subversivos, salió desde el anexo de Cuyani, Pichanaki, con la intención de dirigirse a la sierra de Concepción, por el anexo de Runatullo. Sin embargo, los planes se cambiaron y siguieron el recorrido por San Ramón, subiendo por La Esperanza, La Florencia, Pucará, Aguas Nieve y Rondayacu. A este último poblado llegaron en la tarde, reunieron a la población y durmieron en la casa de una pareja de ancianos, fuera del poblado. Al día siguiente, partieron por la tarde y llegaron a la medianoche a Cedruyoc, para seguir por Chacaybamba hasta Uchubamba.

Pero los planes iniciales se modificaron debido a múltiples factores. Entre ellos, el jueves 20 de abril a las 7:30 de la noche, tras varias explosiones y un posterior corte de fluido eléctrico, una columna del PCP-SL tomó la plaza principal de Acolla, apresó al alcalde aprista Víctor Mayta Galarza y, luego de un «juicio popular», lo asesinó con dos balas en la cabeza. Procedieron luego al incendio del local municipal y dinamitaron la posta de salud, el Banco de la Nación y el Registro Electoral. A la misma hora, fue dinamitado el frontis del Centro Cívico del distrito metropolitano de Yauyos por otro contingente del PCP-SL. Asimismo, en el cruce de las localidades de Pucacocha, Marco y Acolla, los subversivos dinamitaron la zona utilizada para trabajos de rehabilitación en la vía Jauja-Tarma.

Estos hechos retrasaron la llegada del destacamento del MRTA de la selva al campamento de San Rafael, ya que, en su intento por cambiar la ruta y salir por Runatullo, se perdió. En su recorrido, sus integrantes se enteraron de la presencia del Ejército en las inmediaciones: «Fue en Monobamba cuando nos alertaron de que el Ejército había entrado a Monobamba en esos días. Parece que ya el Ejército se había alertado y empezaron a hacer algunas exploraciones, algo por los movimientos que se habían dado; entonces, nosotros, en esa vez,

---

<sup>263</sup> Véase el capítulo sobre el MRTA en el tomo II.

<sup>264</sup> En su edición del 5 de mayo de 1989, Cambio menciona los nombres de 31 de los integrantes del MRTA muertos y, en algunos casos, señala su procedencia. Cambio, 5 de mayo de 1989, año V, n.º 52, pp. 11-13.

tratamos de meternos hacia el monte y esperar que el Ejército salga para continuar nuestra ruta» (sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos).<sup>265</sup>

Conscientes del retraso y de los movimientos del Ejército por la zona, los mandos de ambos destacamentos, reunidos en el campamento, evaluaron la situación y discutieron entre ellos, pues unos se oponían a seguir con el proyecto de tomar Tarma. Una militante del MRTA relata este episodio, que le fue narrado por uno de los sobrevivientes:

Hay una discusión entre los dos grupos, porque cada grupo tiene su comandante. Entonces, empiezan a ver el problema que podía haberse suscitado posteriormente. Entonces, ellos prefieren no tomar Tarma, o sea, suspender esa tarea. Pero, ¿qué pasa? Que entre discusión y diálogo que hubo, deciden mejor consultar a la dirección. Y la dirección, como ellos nunca han estado por esa zona, no conocen; ellos ordenan que sí tiene que salir. Porque si la dirección hubiese dicho que se suspende esa tarea, simplemente no [se] hubiese ido. Pero la orden ya estaba dada. Simplemente es un ejército y tenían que cumplir [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P179, Huancayo (Junín), 20 de julio de 2002. Mujer, militante del MRTA)

Finalmente, decidieron tomar Tarma y optaron por continuar en el camino a Jauja, atravesando Curimarcia. Carlos fue el responsable de ir en búsqueda de un camión para el traslado de ambos destacamentos. Este militante no regresó, pero cumplió con enviar el camión, que esperó a los subversivos en el puente Violeta Correa, a una hora de Curimarcia. Sin embargo, el chofer les explicó que no podrá llevarlos, debido a que el camión no estaba en buenas condiciones. Así, los subversivos subieron a Curimarcia a buscar otra movilidad.

En Curimarcia, al igual que en las demás zonas visitadas, los integrantes del MRTA aprovecharon para conversar con la población y hablarles sobre su proyecto político. Allí abordaron y coaccionaron al dueño de otro camión, que había ido a Curimarcia junto con sus dos hermanos transportando productos. Uno de ellos lo recuerda:

[...] cuando estábamos tomando lonche tocan a la puerta y salí; estaba un uniformado a pedir un servicio para que le lleve hasta la cumbre, pero yo le he negado, «no tengo gasolina» y me dijo que me iba a poner gasolina y tuvimos que ir. [...] como todavía faltaba descargar, nos llevaron a una casa en la plaza, allí hemos descargado y nos han hecho esperar, ya van a llegar ya, nos dijeron [...] eran cantidad, no se podía ver porque estaba oscuro [...] como ochenta más o menos yo había calculado. Cantaban, hacían sus chistes, sólo escuchaba que subían nomás porque no me dejaban bajar. Por el peso puedo decir que han subido unos cuarenta. [El otro camión] también estaba esperando, para que cargue igual. A él también seguro que le han dicho lo mismo. Con él, no conversamos nada porque estaba cuadrado más atrás. [...] a mí no me dejaron bajar para nada del carro. Estaban haciendo guardia para no escaparme, porque dos días antes se habían llevado un carro de acá, lo habían contratado. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P177, Jauja (Junín), 29 de mayo de 2002).

De esta manera, dos camiones con 67 subversivos salieron rumbo a Tarma.

### 7.2.1. El Ejército y los planes del MRTA

Algunos medios de comunicación señalaron que el Ejército conocía las intenciones del MRTA de realizar una incursión a Concepción más grande que la ocurrida en Juanjuí (San Martín) en noviembre de 1987:

Un grupo de soldados del cuartel Teodoro Peñaloza [...] realizaba una patrulla controlando la carretera que, desde Tarma, viene por la ruta de Lomo Largo [...] Se sabía, por información de inteligencia del Ejército, que el MRTA planeaba un ataque a Concepción y que pretendían que la acción fuera más espectacular que la de Juanjuí en 1987. [...] El Comando del Ejército dispuso la movilización de dos destacamentos de las fuerzas operativas especiales — consideradas una de las más eficientes — hacia la zona. El plan de operaciones consistió en lo siguiente: los destacamentos, cada uno con cien efectivos, debían avanzar por los lados del camino principal por donde iban a venir los del MRTA; de manera tal que, cuando fueran interceptadas por una tercera patrulla, éstas pudieran cercar toda la zona. Así se evitarían las minas que generalmente se colocan en el camino principal. La patrulla que debía detenerlos no podía ser mayor de seis u ocho hombres a fin de que se creyera que no había capacidad de respuesta.<sup>266</sup>

La revista Oiga señaló que «los noventa soldados de la base militar Pachacútec que conformaban las patrullas» fueron los que tomaron parte en esta acción.<sup>267</sup> Otras fuentes señalan que se trataría de tres unidades, cada

<sup>265</sup> La CVR entrevistó a los sobrevivientes y militantes del MRTA en distintos penales.

<sup>266</sup> Caretas, 2 de mayo de 1989, p. 34.

<sup>267</sup> Oiga, 2 de mayo de 1989, p. 16.

una conformada aproximadamente por treinta individuos, provenientes de Lima o Piura, en patrullaje de rutina: «parece que fue una unidad que vino de Lima, ya que luego venían personas preguntando por sus familiares que habían estado en servicio en el fuerte Cáceres» (CVR. Testimonio 301719. Huertas (Junín). Mujer).

Finalmente, el diario *Correo* de Huancayo señaló que «fuentes dignas de crédito informaron que la patrulla militar se dirigía en plan de trabajo rutinario a la localidad de Quero». <sup>268</sup>

### 7.2.2. Encuentro en la pampa Puyhuan

Puyhuan, en traducción, para nosotros significaría corazón del mundo. Eso es su significado para nosotros o donde se origina la vida o donde late la vida (CVR. BDI-Entrevista en Profundidad P200, Los Molinos (Junín). Varón, teniente alcalde del distrito de Los Molinos)

El viernes 28 de abril de 1989, cuando los dos camiones que transportaban a los integrantes del MRTA transitaban por la pampa Puyhuan, se toparon repentinamente con un contingente del Ejército que se encontraba patrullando la zona.

[el Ejército] nos hizo parar, paró el otro carro que estaba adelante y a su atrás paré. Un teniente le dijo al terrucho [subversivo] «¿qué llevas?». Éste le dijo «papa, olluco, soy comerciante». Y le pidió documento y no le ha querido dar su documento y no quería bajar tampoco [...] Como los vio nerviosos, ordenó el EP [Ejército Peruano] que abriera la puerta de la carrocería. Al abrirla, escuchó disparos desde el interior. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P177, Jauja (Junín), 29 de mayo de 2002. Varón, chofer secuestrado por el MRTA)

Cuando el teniente EP Jhonny Morales, acompañado de algunos soldados, abrió la compuerta del camión para revisar la supuesta carga de papa, se encontró con los miembros del MRTA armados y en posición de ataque.<sup>269</sup> Inmediatamente, el teniente y sus acompañantes el sargento EP Efraín Huaranga, Yuri Portocarrero, Ulises Rivera, Ladislao Choque y el cabo EP Jorge Flores cayeron fulminados por las ráfagas de los fusiles.

En la versión de uno de los sobrevivientes del MRTA, se constata que el Ejército tomó totalmente desprevenidos a los subversivos:

[...] siento voces. Y primero el camión se detiene y comienzan a alumbrar con una linterna y el camión continúa [...] y, de repente, se ven soldados por ahí, los detienen y preguntan «¿qué hacen?», «estamos llevando papa». Después un teniente o suboficial venía, alumbró y los dejó pasar. Entonces, el compañero supuso que era una patrulla, una patrulla son treinta hombres, si no se han dado cuenta, mejor paso nomás, pero, cuando el camión continuaba la marcha, se dieron con la sorpresa que venían columnas por los lados de la carretera, el camión tuvo que ir despacio; ya pasando más de la mitad, lo detienen ya por segunda vez. Ahí parece que estaba el oficial que estaba a cargo, mayor, y él ordena revisar. Yo me despierto ahí cuando escucho bulla, «bajen, bajen» decían, y los compañeros que estaban delante esperan, el chofer ha bajado, los soldados quisieron abrir la puerta de atrás y nosotros teníamos la puerta asegurada, habían compañeros indicados para eso. El chofer ha subido, le mandaron para que abra la puerta, los compañeros preguntaron «¿qué pasa?», «ellos son los soldados», le indicaron que se retire, bajó el chofer y los soldados seguían forcejeando la puerta. [...] ellos seguramente pensaron en un camión con campesinos, entre ellos uno o alguien sospechoso [...] vieron algo sospechoso, no sé, escucharon algo sospechoso, ¿por qué pararon por segunda vez? Pero lo que sí que, cuando ellos siguieron forcejeando la puerta, nosotros escuchamos disparos, estaban disparando y los compañeros que estaban en la puerta salieron disparando ya. Los compañeros que iban adelante también. Había dos compañeros adelante y el grueso atrás. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos)

La experiencia de otro de los sobrevivientes del MRTA en el enfrentamiento es la siguiente:

[...] yo estaba despierto cuando ocurre todo el hecho, antes de llegar a Molinos vi por las rendijitas del carro que pasamos una casa con luz eléctrica, entonces, el carro más adelante empezó a bajar la velocidad, no fue un ritmo normal que llevaba [...] se escuchan voces y, al rato, se escucha una voz más fuerte que decía que abran la puerta de atrás y, en eso, sube el chofer a la parte de arriba y nos pasa la voz que era el Ejército; en ese momento, bueno, a uno se le cruza en la mente que en fin ahí nos capturaban y todas esas cosas, en eso se escuchan los disparos y yo lo que hago simplemente [es] tratar de calmarme, ponerme sereno. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos)

<sup>268</sup> *Correo*, 30 de abril de 1989, p. 7.

<sup>269</sup> *Caretas*, 2 de mayo de 1989, p. 34.

La sorpresa fue grande para ambos bandos:

Ahí comienza el combate, hemos salido casi la mayoría de los compañeros del primer camión, los compañeros que estuvieron adelante también lograron salir [...] Cuando nosotros escuchamos los tiros, nosotros hemos salido disparando también, o sea, bajo, disparo, agoto mis municiones de una cacerina, tuve que cambiar, en ese momento ya sabíamos que eran los soldados, cuando tienes ese tipo de situaciones, lo que tienes que hacer es ponerte siempre a buen recaudo, o sea, parapetarte, buscar un parapeto, fuimos a un lado y nos chocamos, los soldados estaban corriendo, o sea, ellos fueron más sorprendidos, yo vi que bajaban y un poco más podía agarrarle las botas y así hemos tenido que combatir. Más de la mitad estábamos afuera, o sea, en el mismo camión veníamos como 23, entonces, había varios compañeros que estaban heridos, venían disparos de diferentes lados, ellos no solamente estaban a nuestro alrededor, sino también por los costados, habían por diferentes lados. Lo que yo sé es que, en ese lado que han estado de la carretera, de ahí también han estado disparando hacia los camiones, nosotros estábamos alrededor de los camiones [...]. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos)

Otro de los sobrevivientes del enfrentamiento añade:

[...] y en eso se ve de que las balas empiezan a atravesar los costados de los camiones y a cruzarse las balas del lado derecho y de la izquierda. Ya, bueno, veo que los compañeros estaban saliendo, yo estaba en la parte del fondo, pegado a la caseta, entonces veo que algunos salen corriendo y otros agachados, otros empiezan a rampar y también veo que algunos compañeros caen ahí heridos de bala, lo único que hice yo, como las balas venían de la parte baja hacia arriba, entonces se encontraban más o menos a media altura de la carrocería del camión, entonces, yo trato de agacharme y paso por abajo, entonces ahí había incluso una llanta de repuesto del carro, entonces me acerco ahí, me detengo un poco y sigo avanzando hasta llegar al piso, al suelo; los compañeros de mi costado también comenzaron a bajar, ese fue el punto por donde salimos, el centro del carro, porque, en los costados, ya habían muerto algunos. Entonces, al llegar al suelo, encuentro a un compañero que estaba herido, el compañero *Víctor*. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos)

Los miembros del Ejército estaban, sin embargo, mejor situados:

Se presenta combate en ambos lados. Del primer carro, yo vi en el suelo a muchos. Llovían las balas. El Ejército tenía mejor posición, mejor control que nosotros. Entonces, los disparos de los que salían hicieron que el Ejército se repliegue más abajo y otro grupo por arriba se tiraban para la chacra por los chaguales [magüey]. Era el amanecer, era semi oscuro, pero ya se vislumbraba el día. Yo estando en el suelo abajo, he sentido un bombardeo por la nuca, normalmente los disparos nuestros, no sabíamos cuál era el origen, no sabíamos de dónde viene, yo he mirado alrededor y todo era sangre, y muchos heridos, muertos, he contado un promedio de diez a quince hombres [...]. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos)

De acuerdo con los sobrevivientes entrevistados por la CVR, algunos subversivos solicitaron el alto al fuego, pero fueron igualmente abatidos por los miembros del Ejército:

Cuando yo escucho esas voces «alto al fuego, alto, alto» [...] hay un momento en que se controló, se calló, silencio, silencio total. Pero no amanecía todavía. En ese momento, es que nosotros tratamos de llegar a los heridos y sacarlos, pero no se podía, era imposible. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos)

[...] «Nos rendimos» no escuché, pero sí «alto al fuego», el compañero *Cava Cord* [dijo] «alto al fuego», él no era el mando ahí [...] Él estaba ordenando el alto al fuego y ahí le disparan. [...] Todavía se da un tiempo, «alto al fuego, alto al fuego», y nosotros hicimos un poco de alto al fuego, pero los soldados siguieron disparando y ahí cae [...]. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos)

Poco después, llegaron refuerzos del Ejército que, según la versión de los subversivos sobrevivientes, dispararon a discreción:

El helicóptero llega más o menos a las 5:30. El helicóptero es el que arrasa con todo, o sea, a los que han estado en el Ejército, a los del helicóptero no les ha importado que han sido miembros del Ejército o del MRTA, han arrasado con todo [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P179, Huancayo (Junín), 20 de julio de 2002. Mujer, militante del MRTA)

### 7.3. HUIDA DE LOS MOLINOS

Uno de los conductores del camión se salvó de morir al igual que nueve de los 67 subversivos de acuerdo con la versión de los miembros del MRTA sobrevivientes.

Según el testimonio de una pobladora:

Aparecen como unos seis hombres que corrían, todos estaban mojaditos y uno de ellos nos mira y dice: «si alguien les pregunta, ustedes no han visto nada ni a nadie, mejor váyanse a Jauja, porque hubo un enfrentamiento entre el MRTA y el Ejército. Salva a tu familia». Le dicen a mi esposo y descansaron como diez minutos y siguieron corriendo rumbo al norte de Huertas. Pudimos darnos cuenta que tenían unos armamentos grandes y vestían con un uniforme oscuro, parecía plomo o azul marino. Al parecer, estaban mojados porque habrían tenido que cruzar el río. (CVR. Testimonio 301726. Huertas (Junín). Mujer)

Los sobrevivientes del MRTA relatan la ruta que siguieron después de huir de Los Molinos:

Primeramente, nos quedamos en los alrededores de Jauja, llegamos a salir casi a la Laguna de Paca. Finalmente, yo me retiré a la ciudad. [Nosotros estábamos] por Hualá, Pancán [...] ya en la tarde nos hemos desplazado hacia Jauja, pasamos por el aeropuerto de Jauja, los soldados estaban patrullando, hemos pasado por medio de ellos [...] uniformados, con armas, todo [...]. Había un compañero que estaba herido, yo estaba con una herida ahí [en la mano], herida de bala y no se podía caminar mucho, saltar, porque se venía la hemorragia, no es que te impedía caminar, sino que se venía la hemorragia y te debilitaba y el hecho de haber perdido sangre te daba mareo. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos)

Ahí hay cosas que no te podría precisar, por ejemplo, hemos tenido que contar con el apoyo de las masas para eso, o sea, solo no haces. [...] tres hombres con armas, en medio de todo un despliegue militar, peinando, ya se había anunciado por la prensa, nosotros hemos llegado al otro día a Huancayo; entonces, eso no es posible si no tienes el apoyo de la masa, o sea, la gente te cobijaba, te protegía en lugar de delatarte, te atendían, te curaban. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos)

Otro sobreviviente narra la retirada:

[...] Nosotros empezamos la retirada, Álvaro, Jorge Cusi, después otros dos compañeros de la sierra [...] y salimos de esa zona, más o menos a las seis de la mañana habríamos llegado a un cerrito, una loma, pero ahí atrás de la loma también empezamos a escuchar disparos [...] después llega el helicóptero cuando nosotros ya bajamos al riachuelo, empieza a sobrevolar el helicóptero a no mucha altura, entonces, primero el helicóptero empieza a bombardear por el lado derecho de nosotros pero después se acerca más hacia donde estábamos nosotros y empiezan los rocketeos [sic] y disparos de ametralladora del helicóptero [...] habremos avanzado a las nueve de la mañana menos de un kilómetro [...] entonces, por el compañero herido que teníamos nos pusimos a descansar ahí, detuvimos el avance, la retirada, ahí es donde nosotros escuchábamos los disparos y los bombardeos que el helicóptero hacía por toda la zona y también los disparos que se escuchaba en la zona donde habíamos tenido el combate, de tiempo en tiempo se escuchaba unos disparos, aislados, no había unas ráfagas [...] Salimos del lugar ese a las cinco y media o seis de la tarde, emprendimos la retirada en sí [...] yo no conozco bien, pero nos hemos ido para [...] nosotros hemos llegado a la zona de Punto, pero eso está mucho más lejos de donde nosotros hemos tenido el enfrentamiento. [...] Para llegar a Punto, nosotros caminamos, hemos tenido que pasar una cordillera, un nevado, por Comas, antes de llegar a Comas hemos entrado por estancias; al momento que salimos a las seis de la tarde hemos llegado a una estancia que estaba, todavía de ese cerro se veía la zona de combate que habíamos tenido, entonces, pernoctamos ahí hasta las dos de la mañana, de ahí continuamos nuestra ruta, pero más allá se queda el compañero que estaba herido de bala. (Sobreviviente del MRTA del enfrentamiento en Los Molinos)

Varios pobladores de las comunidades recuerdan haberlos vistos en su huida:

[en] eso llega uno, a partir de las cinco creo, un subversivo que había escapado del enfrentamiento y donde dijo que «hemos tenido una, un enfrentamiento» [...]. Me dijeron que dice él había llegado con un costalito y una manta y alzada su ametralladora nada más y con su radio de comunicación, nada más dice, y acá le pidió comida, se comió y ese mismo rato se pasó, dice, ya a Palta, ahí, estaba pasando [...] está pasando [...] dice los helicópteros que han llegado de Lima le ha alcanzado y al momento de alcanzar, dice, se tapaba con las ramas de eucalipto, para que no lo miran y así ha escapado y no sabía cuántos han muerto, nada. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P201, Curimarcá (Junín), 6 de mayo de 2002. Varón, poblador de Curimarcá, testigo de la presencia del MRTA)

Durante la huida de estos miembros del MRTA, la llegada de los helicópteros y los refuerzos por tierra y las primeras noticias en las radioemisoras, la población de Huertas, Los Molinos e incluso Jauja no sabía a ciencia cierta lo que sucedía:

La gente del lugar que había salido y estaba chismoseando regresaron, porque dice que más arriba [hacia Los Molinos] encontraron a un joven que corría y les dijo que estaban matando a mucha gente, por eso es que nos quedamos. Luego de ello, vimos a los helicópteros, sería las 7:00 a.m. [...] como estábamos haciendo nuestras co-

sas normal en el establo, un helicóptero que volaba bajito dando vueltas tenía a un militar que, con su arma, apuntaba hacia abajo, cuando en eso le gritan a mi esposo «¡Perro de mierda, identifícate, si no, te matamos!» Pero mi esposo no le hizo caso y no se identificó porque también me vio quizás que estaba ahí cerca con mi bebé cargada en la espalda. (CVR. Testimonio 301726. Huertas (Junín). Mujer)

#### 7.4. OPERACIÓN DE RASTRILLAJE

Casi inmediatamente después de finalizado el enfrentamiento, y cuando ya el Ejército tenía noticias claras de lo acontecido en la pampa Puyhuan, dispuso la movilización de más militares para dar inicio a las operaciones de rastrillaje en todo el perímetro.

El Ejército ordenó cercar la zona por motivos de seguridad e impidió la entrada de cualquier persona ajena al Ejército, incluida la prensa y la ambulancia del hospital Olavegoya de Jauja, que pretendía ingresar a recoger a los heridos y muertos. Este cerco se dispuso a la entrada del distrito de Huertas. La protección permitiría realizar las operaciones de rastrillaje con más seguridad y hermetismo para poder identificar a extraños sospechosos. Los soldados iban a pie con pasamontañas, mientras un helicóptero se desplazaba por las zonas altas, alejadas y de difícil acceso para los soldados.

Un poblador de Jauja señala:

[...] ni bien llegamos a la casa que está situado en el barrio Acoria [Huertas], nos detuvieron dos soldados que salieron de un patrullero con amenazas de dispararnos; entonces, nos pidieron mis documentos y el soldado agarró mis documentos y se lo llevó al bolsillo y me dijo «ahora estás indocumentado». Entonces, caminamos como dos cuadras y, en el tramo, salió otro soldado de la chacra, estaba tan nervioso que no podía sostener su arma y empezó a disparar, incluso al soldado que estaba detrás mío. Felizmente, las balas sólo me rozaron, nos tiramos al suelo, estuvimos tirado como dos horas en el suelo. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P189, Jauja (Junín), 2 de mayo de 2002. Varón, profesor detenido el día del enfrentamiento, salió en libertad ocho horas después)

Una pobladora relata los pormenores del rastrillaje:

A mi casa entraron diez a ocho militares, pedían que se les diga la verdad, preguntaban por emerretistas [integrantes del MRTA] heridos o escondidos, entraron de cuarto en cuarto, a mi papá lo sacaron a viva fuerza, mis hermanas salieron llorando [...] nos sacaron a todos fuera de la casa, nos pusieron con las manos a la pared y a mi papá le golpearon, como mis hermanas eran más chicas y gritaban llorando, quizás eso hizo que se compadecieran [...] factor suerte [...] En cada cuarto de mi casa, buscaron [...] quizás si había un subversivo escondido, seguramente, no lo encontraron [...] por eso se tranquilizaron y se fueron. (CVR. Testimonio 301719. Huertas (Junín). Mujer).

En el distrito de Huertas fueron detenidos Nicolás Chocas Cavero, Fredy Flores Salas, Raúl Salas Chocas, Wilson Salas Huánuco y Teódulo Fermín Simeón Yaringaño. Estas personas figuran en la actualidad como desaparecidas. Al igual que en Huertas, en Los Molinos, las operaciones de rastrillaje empezaron inmediatamente después de finalizado el enfrentamiento.

Ese día, cuando ya termina ese enfrentamiento, el Ejército Peruano ha ingresado domicilio por domicilio; en aquellas temporadas, estas horas, nueve, diez de la mañana, la gente se va a la chacra, cierran su casa y se van, pero ¿qué es lo que han hecho? Han disparado, han roto el candado, han ingresado a buscar todo lo mínimo que se puede. Pobre de aquel que tenían de repente pintura negra, roja o de repente propaganda subversiva, eso es lo que han buscado [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P183, Los Molinos (Junín). Varón, gobernador actual del distrito de Los Molinos)

En Los Molinos, los esposos Flora Mayta Curi y Simeón Estelito Aranda Camarena y también Teófilo Franco Orihuela fueron detenidos por los militares. Posteriormente, sus cuerpos fueron encontrados en la morgue de Jauja. José Jacob Camarena Peña, poblador de Los Molinos, y Jaime Rolando Jesús Montalvo, poblador del distrito de San Pedro de Chunán, se encuentran hasta hoy en calidad de desaparecidos. Muchos testigos presenciaron estas detenciones y observaron que los detenidos eran llevados en camiones del Ejército y helicópteros con rumbo desconocido.

Los soldados heridos fueron trasladados al hospital Olavegoya de Jauja para su rápida atención. Aparentemente, esto ocurrió a las 7:30 de la mañana y, desde ese momento, el hermetismo que imperaba en el hospital fue tanto o más estricto que el que había en Huertas. Muchas personas, entre civiles, soldados y parientes de integrantes del MRTA, se concentraron en la entrada del hospital indagando por sus familiares. La noticia

ya para entonces había dado la vuelta al mundo. La importancia de la noticia fue tal que el Presidente de la República se hizo presente en el lugar de los hechos el mismo día:

Al promediar las 3:30 de la tarde, el presidente de la República, Alan García, llegó al aeropuerto Francisco Carlé de Jauja [...] Lo hizo acompañado del ministro de Defensa, general Enrique López Albújar<sup>270</sup> y el comandante general del Ejército, Artemio García. Inmediatamente, se dirigió al hospital Olavegoya de Jauja, donde se informó de los policías heridos [...] Dijo que su visita al lugar tenía como objetivo respaldar la acción de las Fuerzas Armadas, que [...] habían dado un duro golpe a la subversión. Dijo el Presidente a los periodistas: «Es necesario e imprescindible que las armas legales de la República y el gobierno elegido por el pueblo se pongan a trabajar contra esta amenaza». Luego agregó que la acción «es un golpe fuerte para la subversión, pero no será el último que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional darán al terrorismo».<sup>271</sup>

#### 7.5. DE LA MORGUE A LA FOSA COMÚN

El 1 de mayo fueron inhumados en el cementerio general de Jauja los cuerpos de los subversivos muertos en Los Molinos. En los dos días anteriores, personal seleccionado del hospital Olavegoya y miembros del Juzgado Penal Provincial de Jauja realizaron las autopsias de ley, redactaron los protocolos de necroscopia e identificaron los 63 cadáveres ingresados a la morgue, de los cuales 58, según algunos testimonios, eran de militantes del MRTA. Los protocolos de necroscopia de los subversivos señalan que la mayoría de los cadáveres mostraban muerte por:

[...] herida de bala o PAF [Proyectil de Arma de Fuego]. Algunos tenían en la cabeza [...] la mayoría tenía orificio de entrada por la distancia y por el armamento que tenían, eran prácticamente FAL, porque eran precisos y dejaban secuelas, era impresionante ver. [¿Estaban los rostros destrozados?] Sí... en su mayoría. Era impactante, para llorar [...] podría ser que los soldados en venganza o, que sé yo, se han ensañado [...] Para mí es producto de la emoción violenta que esos momentos todo soldado al ver vencido al enemigo, no contento con eso, aflora esa conducta reprimida, por ejemplo, cuando cantan lemas alusivos a la victoria, a los subversivos los tratan como su peor enemigo, algo así ha ocurrido. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P187, Huancayo (Junín), 9 de mayo de 2002. Varón, asistente en la elaboración de los protocolos de necropsias en el hospital Olavegoya)

La seguridad en los exteriores del hospital se mantenía de forma estricta e impedía el paso de cualquier persona no autorizada. El mismo 28 de abril habían ingresado por emergencia más de veinte soldados heridos según lo testifica el registro de emergencias del hospital Olavegoya.

Igualmente, fueron conducidos al hospital los seis soldados muertos, quienes fueron transferidos a la morgue, ubicada en la parte posterior del referido nosocomio. El 29 de abril fueron enterrados en sus lugares de origen:

Los seis valerosos miembros del Ejército [...] fueron sepultados ayer en medio de la congoja general [...] En la tarde de ayer [...] fueron sepultados en el cementerio El Ángel los restos del teniente de infantería Jhonny Morales Rodríguez, del sargento Yuri Portocarrero y del cabo Ulises Rivera Flores [...]. El cortejo fue presidido por el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Artemio Palomino Toledo [...] Los otros tres valerosos militares fueron trasladados en aviones de la FAP a sus lugares de nacimiento: el sargento segundo Ladislao Choque Enríquez fue sepultado en el Cusco; Hernán Camavilca, en Jauja; y Jorge Flores Papuchi, en Chiclayo.<sup>272</sup>

El domingo 30 de abril se permitió el ingreso de algunos familiares para que reconocieran los cuerpos. Un poblador de Los Molinos, que trabajaba en el hospital como técnico sanitario relató que ese mismo día el hospital seguía fuertemente resguardado por soldados, quienes permitían el ingreso sólo a trabajadores y algunos miembros de la prensa. Todos los empleados fueron prohibidos de dar alguna declaración. El informante de la CVR relata que cuando entró a la morgue vio que había cadáveres amontonados con las piernas destrozadas por disparos, así como los rostros «abiertos como flor». Logró ver que había tres cadáveres aparentemente sin heridas. Dijo que eran «los colombianos», los únicos que estaban vestidos, eran altos y blancos, con barbas. Los demás eran jóvenes, señoritas, niños y niñas. No había soldados: «Medio colorado era, estaba con su letrero, «colombiano» decía, después estaba un señor, ése que me han dicho número cuarenta, pero era diente de oro, mi esposo

<sup>270</sup> El general EP Enrique López Albújar fue asesinado por un comando del MRTA en Lima en enero de 1990. El MRTA justificó su asesinato afirmando que éste había ordenado el «repase» de heridos y el asesinato de los miembros del MRTA rendidos

<sup>271</sup> *La República*, 29 de abril de 1989, p. 3.

<sup>272</sup> *La República*, 30 de abril de 1989, pp. 20-21.

no tenía diente de oro [...] ya no se conocía por su cara, estaban desquebrados por eso he buscado por las huellas de sus pies» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P167).

Un poblador muestra su indignación:

A Estelito Aranda [...] realmente lo destruyeron, lo metieron [...] eso lo torturaron [...] es inaudito que, quienes eran nuestros paisanos, estaban totalmente desfigurados; mientras los terroristas [subversivos], propiamente nada, estaba igual como si hubieran muerto simplemente sin tortura, sin nada. Eso, entonces, a mí realmente me dolió, gente que no tenía nada [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P200, Los Molinos (Junín). Varón, teniente alcalde del distrito de Los Molinos)

Los cuerpos de los esposos Estelito Aranda Camarena y Flora Mayta Curi, Teófilo Franco Orihuela y de los choferes Adril Hinostroza Molero y Rosendo Celestino Aquino Quito, así como de tres miembros del MRTA, fueron reconocidos y retirados por sus familiares para enterrarlos. 55 cadáveres de militantes del MRTA nunca fueron reconocidos.

Al día siguiente, en el cementerio, se mantuvo el hermetismo:

Como a las diez de la mañana, [antes de que los cadáveres fueran trasladados desde la morgue, los soldados] estaban en todo el contorno [...] serían unos veinte más o menos [...] no podían ingresar otras personas, porque los del Ejército habían anulado todo acceso [...] Afuera había personas, pero no podían ingresar [¿Usted fue la única persona civil que estuvo allá adentro?] Sí, después ya llegó un colega para el turno de tarde. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P202, Jauja (Junín), 20 de junio de 2002. Varón, encargado del cementerio general de Jauja la mañana en que inhumaron los 55 cadáveres)

A las 11 de la mañana del 1 de mayo, los 55 cadáveres de los subversivos llegaron varios volquetes. Un grupo de cinco soldados procedió a poner los cuerpos en una sola fosa.

A los quince días, los familiares de los miembros del MRTA muertos compraron el terreno de la fosa y levantaron allí un mausoleo recordatorio que, al poco tiempo, fue destruido por paramilitares.

Los días siguientes, el Ejército continuó visitando el cementerio y trató de identificar a los familiares de las víctimas no reconocidas que se acercaban a poner flores a sus parientes muertos.

Un trabajador del cementerio recuerda:

[...] al mes han venido [soldados], preguntando. Yo les dije que han venido los familiares y han hecho la verja, inclusive al centro han puesto una placa de bronce, donde decía «Aquí yacen los restos de los que murieron en el enfrentamiento del combate de Molinos» y estaba con el nombre de todos. Pero cuando vino el Ejército ya no estaba, lo habían sacado el comando de Rodrigo Franco de noche [...]. Habían dejado una nota [...] decía «El comando de Rodrigo Franco» [...] estaba en ese cuadrilátero pegado con cinta adhesiva [...] como en la placa decía «A los héroes de Molinos». En la nota decía: «Nunca serán héroes los...» no sé qué término usar, o sea, que no había sido un combate o algo así. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P202, Jauja (Junín), 20 de junio de 2002. Varón, encargado del cementerio general de Jauja la mañana en que inhumaron los 55 cadáveres)

## 7.6. ACCIONES DEL EJÉRCITO DESPUÉS DEL ENFRENTAMIENTO

El Ejército, con el objetivo de buscar sobrevivientes o simpatizantes del MRTA, prolongó sus incursiones por algunos meses más: «Durante un mes, continuaron los militares patrullando la zona de Los Molinos» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P171, Los Molinos (Junín), 3 de mayo de 2002. Varón, ex alcalde de Los Molinos entre 1987 y 1989).

Durante ese tiempo, los pobladores de la zona prácticamente convivieron con los militares y también con el maltrato de algunos como lo manifiesta un poblador: «[...] revisaron, sacaron cosas los soldados, encontraron dinero, se embolsillaban, pues, eso fue, casi, casi común en todas las casas [...] lo que encontraron a mano, dinero, relojes, eso fue lo que llevaban; se llaman soldados, eso son los que se llaman soldados» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P200, Los Molinos (Junín). Varón, autoridad del distrito de Los Molinos).

Una semana después del enfrentamiento, el Ejército llegó de manera abrupta a Uchubamba:

[...] empezaron a hacer una búsqueda, esa vez yo era presidente de APAFA [Asociación de Padres de Familia] del jardín de niños, todo el dinero se llevaron, también tenía un reloj [...] dijeron que estaban buscando a los emerretistas

[miembros del MRTA] que se habían escapado de Molinos. [...] Han agarrado personas, porque tenían una lista, los han llevado a una esquina de la plaza y les han metido adentro y les han tirado golpe. Incluso a un muchacho que había venido de la sierra le han castigado, le han hecho correr con los ojos vendados, chocándose, chocándose escapaba [...] Esas personas eran los que habían venido de Tambillo, cerca de Comas [...] ellos habían venido a comprar acá, siempre venían a hacer el trueque, ellos traían papa y nosotros le dábamos maíz, esas cosas. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P197, Uchubamba (Junín), 8 de junio de 2002. Varón, poblador de Uchubamba)

Una pobladora de Huertas recuerda que incluso la búsqueda y el hostigamiento continuaron durante todo ese año:

En una oportunidad vinieron a la casa de mi abuelita, donde yo vivía con mis hijos y nos sacan afuera de la casa junto a mis tíos Domingo y Pablo, pero a ellos, quizás por ser varones, los golpean, no se los llevaron, pero preguntando de mala manera por los emerretistas [miembros del MRTA]. Luego de eso, nos insultaron, «ya lárquense, concha su madre, ahora sí, carajo, ahora voy a matar a todos los que hospedan a los terroristas, ya saben, no hospeden a los terroristas!». Teníamos miedo de denunciar esto, además, ¿adónde podíamos hacerlo si los malos tratos y las amenazas teníamos de los militares no de los terroristas, como también los desaparecidos fueron por obra de los del EP [Ejército Peruano], que eran militares y no terroristas? Eran muy abusivos. (CVR. BDI-Testimonio 301726. Mujer, pobladora de Huertas, testigo del enfrentamiento)

El rastrillaje se prolongó por varias semanas y abarcó casi todas las zonas que utilizaron los subversivos en su recorrido desde la selva central:

[...] estaban apoyando por Chacaybamba, Uchubamba, hasta mi casa ha llegado el Ejército [...] mi mamá estaba sacando leche a los animales y llegaron los soldados bien armados, en siguiendo de los emerretistas [miembros del MRTA] y nosotros le hemos informado, es cierto, han venido una vez no más acá, ya más no vuelven, «ya murieron», dijeron los soldados, pasó en el Molinos, entonces, ahora estamos yendo por Monobamba, dijeron los del Ejército. Un grupo del Ejército han pasado para Monobamba. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P203, Cedruyoj (Monobamba), 5 de mayo de 2002. Entrevista colectiva con pobladores de Cedruyoj)

## 7.7. EPILOGO

Luego de este golpe, los subversivos, «con grupitos pequeños sacados de la Universidad [Nacional del Centro del Perú], de algunos barrios populares», retomaron el trabajo proselitista y militar en el distrito de Parahuancan; pero, como sostiene un ex dirigente del MRTA, «nosotros nos dábamos cuenta que había, no rechazo, pero había cierto temor, indiferencia, la gente prefería estar lejos, ya no cerca [...] no nos habíamos integrado tan profundamente. [Este trabajo] era recién, era superficial y esta debacle [de Los Molinos] nos separa de la población».

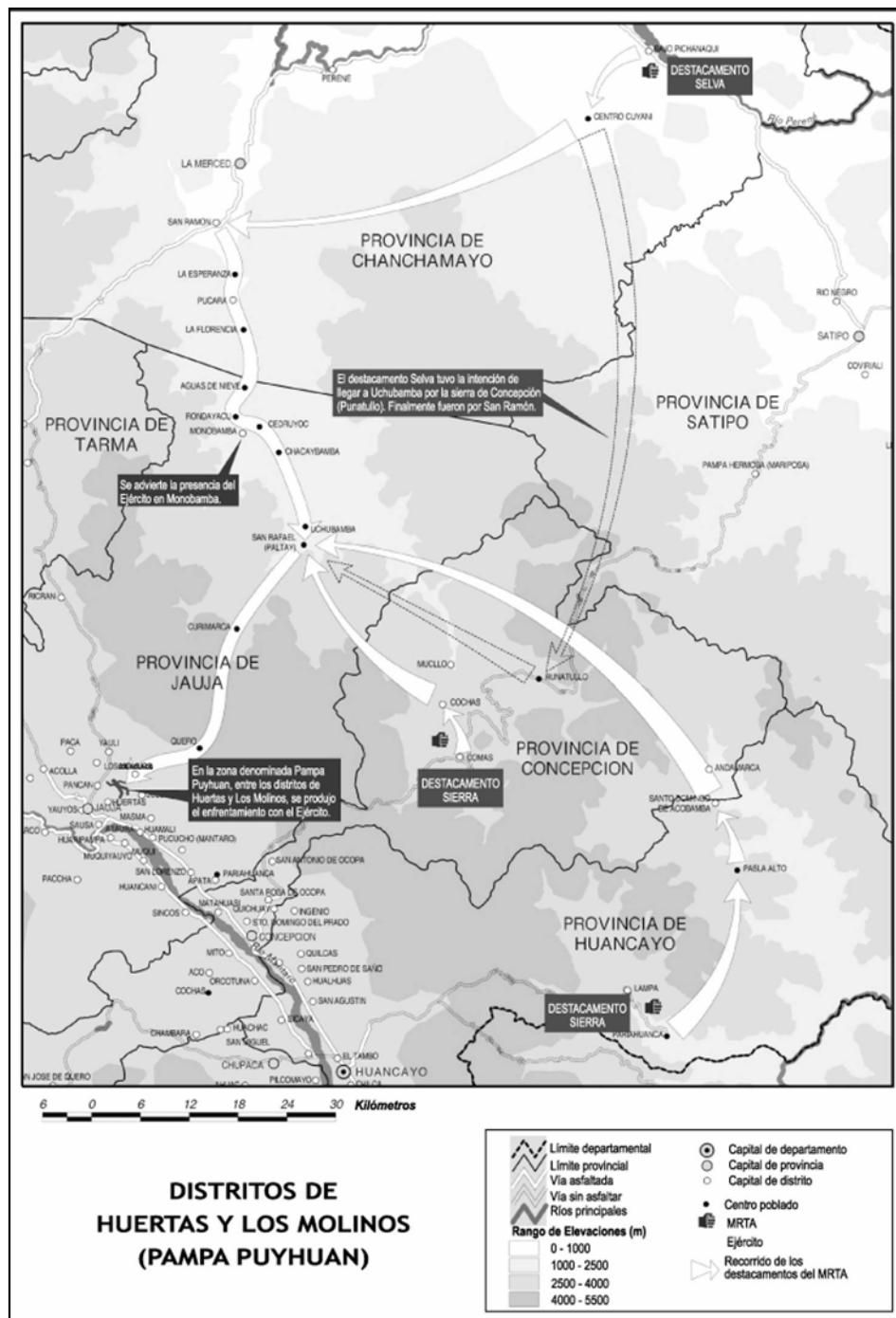
Pese a ello, tiempo después lograron formar otra columna:

Estuvimos como un mes o mes y medio. Volvió otro grupo [...] salieron también, volvió otra vez otro grupo y más o menos como casi un año estuvieron así, en volver y salir, volver y salir. Era algo quijotesco en ese momento. Fue muy duro, no sólo por el temor que se había generado, sino también por la ineeficacia política del asunto [...] estás como esos personajes de Juan Rulfo, eres una especie de fantasma: todos te ven, te sienten, te hablan, pero nadie cree que eres real, eres un fantasma [...]. (CVR. BDI-II P461. Entrevista a dirigente del MRTA actualmente en prisión, ex estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Septiembre de 2002).

Mientras tanto, el PCP-SL intensificó sus acciones en la región no sólo en las zonas donde habitualmente actuaba, sino que se proyectó con intensidad en los espacios que el MRTA había abandonado como consecuencia de la pérdida de sus militantes en Los Molinos. Así, por ejemplo, la paridad de fuerzas que mantenía en la UNCP fue rota por el PCP-SL con el asesinato de algunos militantes del MRTA y el retiro de otros tantos.

A ello se sumó la labor cada vez más eficaz de las fuerzas del orden, que facilitó la desarticulación del MRTA en la ciudad de Huancayo:

También en la zona urbana el MRTA ha sido golpeado fuertemente, hay muchos desaparecidos, desapariciones simultáneas, incluso en los años del 91, 92, 93 han desaparecido muchos estudiantes, integrantes del MRTA. Más aún cuando sale esta ley de arrepentimiento, ahí es donde muchos buenos cuadros de la zona urbana han sido desaparecidos. Y, entre ellos, también hay gente sobreviviente de Molinos, que caen después. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P179, Huancayo (Junín), 20 de junio de 2002. Mujer, militante del MRTA)



Ante el retroceso del MRTA, el PCP-SL avanzó rápidamente en el campo. Muchos testimonios dan cuenta de esta situación:

[...] después de que había el enfrentamiento, creo que hasta hoy, ya no se le ha visto a los MRTA, pero había habladurías de que andan dos, tres, así nomás dijeron, pero yo, francamente desde esa fecha no he visto a nadie ya, después del enfrentamiento, se han desaparecido total [...] hasta hoy. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P201, Curimarcia, 6 de junio de 2002. Varón, testigo de la presencia del MRTA en Curimarcia)

[...] el MRTA desaparece, ya no tuvo presencia ni en Curimarcia ni en ninguna parte. En cambio, éstos [los militantes del PCP-SL] sí continuaron [...] inclusive llegaban al colegio de Yauli, le hacían marchar a todos los alumnos, a los padres de familia que estaban trabajando, ahí les hacían marchar por todas las calles, viviendo al camarada Gonzalo. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P214, Huancayo (Junín). Mujer)

Un año después de los sucesos de Los Molinos y una vez reorganizadas sus fuerzas, el MRTA ejecutó su última acción de envergadura en el valle del Mantaro: el 27 de abril de 1990, aproximadamente sesenta miembros del MRTA atacaron el puesto policial del distrito de Chupaca, ubicado a 12 kilómetros al oeste de la ciudad de Huancayo, y ocuparon la capital del distrito. Luego del ataque, que duró dos horas, se retiraron sufriendo dos bajas.

A mediados de 1991, el MRTA había logrado formar algunos destacamentos armados en Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba, los que operaron hasta 1993. Ese año, como consecuencia de la ofensiva del Ejército, se replegaron a la selva central. El repliegue hacia la provincia de Chanchamayo y la recomposición de sus filas en ella le permitió sobrevivir hasta 1998 desarrollando constantes enfrentamientos con patrullas militares en los que de ambos lados sufrían bajas. Paulatinamente, el Ejército fue diezmándolo y reduciendo el espacio donde se movía hasta desaparecerlo casi por completo.

En suma, para el MRTA, Los Molinos constituyó un punto de inflexión en el conflicto armado interno en la región central. En ese sentido, el Ejército apareció como un organismo eficaz en su lucha contra la subversión; en tanto, el MRTA, duramente golpeado, se replegó tiempo después hacia la selva central, aislándose y dejando el terreno libre al PCP-SL, que ocupó gran parte de los espacios donde el MRTA se había asentado desde años atrás.

#### 7.8. CONCLUSIONES

Este caso ilustra tanto la estrategia equivocada del MRTA como a una tropa del Ejército con capacidad de reacción inmediata, que se defendió ante el ataque directo de dicha organización, pero el Ejército careció de una estrategia contrasubversiva con un plan de inteligencia más certero. El equipo de investigaciones especiales de la CVR ha encontrado múltiples indicios que lo llevan a concluir que el Ejército ultimó a un grupo de integrantes del MRTA que se había rendido. Igualmente, ha quedado demostrado por la información recogida que el Ejército asesinó extrajudicialmente y desapareció a pobladores inocentes en su desesperación por solucionar el conflicto armado interno. Así, aniquiló y borró del mapa cualquier indicio y sospecha de subversión sin miramiento alguno, manejando poca o nula información. A ello, se suma una gran arbitrariedad en su proceder.

Es cierto que el encuentro fatídico entre el Ejército y el MRTA en pampa Puyhuan marcó un punto de quiebre en la historia del MRTA, que quedó derrotado en la región central, pero no hay que negar el hecho de que esta acción se llevó a cabo con un alto riesgo y costo para pobladores inocentes que nunca pensaron tener la pésima suerte de encontrarse físicamente próximos a un hecho que terminó en un enfrentamiento armado cuyas consecuencias los afectaron directamente.

#### 8. LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL CASO DE LOS ASHÁNINKAS

Para nosotros, dónde vamos a ir, si es nuestro. Sabemos que los colonos en la ciudad tienen su chacra, pero nosotros dónde vamos a ir. Luchar, bien morir o recuperar nuestro terreno.<sup>273</sup>

Este apartado tiene como objetivo principal reconstruir los procesos del conflicto armado interno y sus efectos en la población indígena de la selva central.<sup>274</sup>

A diferencia de lo ocurrido en otras regiones del país, el componente cultural constituye un elemento clave para comprender los procesos de violencia vividos por estos pueblos indígenas. Esta marca especial se puede apreciar en las condiciones que posibilitaron el inicio de la violencia en la región, los factores que la mantuvieron y el proceso de reconstrucción.

<sup>273</sup> Varón, 36 años, autoridad comunal. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

<sup>274</sup> La región del país conocida como selva central comprende las provincias de Satipo y Chanchamayo del departamento de Junín y la provincia de Oxapampa del departamento de Pasco. También se suele incluir en esta región a zonas fronterizas con el departamento de Ucayali, en particular al Gran Pajonal. La mayor parte de este territorio está ubicado en la selva alta, razón por la cual esta región ha sido conocida tradicionalmente como «la montaña».

La selva central del Perú es el territorio tradicional de los pueblos asháninka, yanesha y nomatsiguenga. Estos pueblos indígenas –principalmente los asháninka– fueron muy golpeados por el conflicto armado interno debido al alto número de víctimas directas, situación que ha exacerbado la exclusión y marginación que han sufrido durante siglos. No existen datos precisos, pero la mayoría de especialistas e instituciones calculan que de 55 mil asháninkas, cerca de 10 mil fueron desplazados forzosamente en los valles del Ene, Tambo y Perené; 6 mil personas fallecieron y cerca de 5 mil personas estuvieron cautivos por PCP-SL. Asimismo, se calcula que durante los años del conflicto desaparecieron entre treinta y cuarenta comunidades asháninka.<sup>275</sup>

### 8.1. PREGUNTAS E HIPÓTESIS CENTRALES

¿Qué tipo de relación se desarrolló entre la población asháninka y los grupos subversivos? Dado el carácter autoritario de los proyectos de PCP-SL y del MRTA, la relación entre éstos y los asháninkas reprodujo el mismo tipo de relación discriminatoria que existe entre los colonos mestizos y los pueblos indígenas amazónicos.

En segundo lugar, se ha constatado que durante los años de violencia los asháninkas hicieron uso de recursos culturales y psicológicos para enfrentar el impacto del conflicto armado interno; sin embargo, muchos de estos recursos socioculturales no les fueron siempre útiles para manejar las secuelas derivadas de este proceso.

La serie de tensiones al interior de las comunidades asháninkas y entre las distintas comunidades fue funcional a los planes de PCP-SL para asentarse en la zona y ganar adeptos.

#### 8.1.1. Importancia del estudio

Esclarecer y dar a conocer el conflicto armado interno en la selva central, largamente ignorado por la opinión pública nacional, se convierte en una tarea indispensable de la CVR. Denunciar estos hechos de destrucción masiva de una parte importante de las comunidades asháninkas se torna una acción perentoria si se quiere contribuir a su reconstrucción.

#### 8.1.2. Trabajo de campo y estrategia de recolección de datos

Dada la amplitud y la complejidad social de la selva central, el estudio se circunscribió a las zonas que concentran la mayor parte de la población asháninka<sup>276</sup> en la región y que fueron afectadas de manera directa por el conflicto armado interno.

Con el objetivo de entrevistar a pobladores y autoridades de las comunidades asháninkas y discutir con ellos los resultados de los informes, se realizaron cuatro visitas a la zona en tres fechas espaciadas: del 16 al 29 de septiembre, del 10 al 29 de octubre y del 19 de noviembre al 9 de diciembre. Del 15 al 25 de enero, se entrevistó a representantes de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI) y de la Comisión de Emergencia Asháninka (CEA) en la ciudad de Satipo.

Inicialmente se propuso realizar el estudio en profundidad en tres zonas: los distritos del Río Tambo y Pangoa en la provincia de Satipo y la región de Puerto Bermúdez en la provincia de Oxapampa. Asimismo, se previó seleccionar en cada una de ellas dos comunidades nativas. Los criterios de selección consideraron los temas e hipótesis de la investigación e identificaron aquellas comunidades que permitían visualizar problemáticas específicas. Asimismo, se tomaron en cuenta las sugerencias de las organizaciones indígenas, las ONG y oficinas de la CVR en la zona.<sup>277</sup>

Debido a las difíciles condiciones de acceso y a la presencia de PCP-SL cerca de las comunidades previstas en el distrito de Pangoa, se decidió elegir, como alternativa, la zona de la carretera Marginal, cercana a ciudades importantes en la provincia de Satipo. Aquí se seleccionó dos comunidades: Tahuantinsuyo, en el distrito

<sup>275</sup> En 1995, el comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Francis Deng visitó esta zona para dar a conocer la situación de los asháninkas. En 1995, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos publicó un informe sobre la desaparición de estas comunidades.

<sup>276</sup> El resto de la población asháninka que vive en otros departamentos constituye una minoría al interior del pueblo asháninka.

<sup>277</sup> Las oficinas descentralizadas y los equipos de recojo de testimonios, en algunos casos, ya habían ingresado a la zona. Por ello, contaban con información importante para la selección de las comunidades de acuerdo con los objetivos de la investigación.

de Mazamari, víctima de una matanza en 1993, y Cushiviani, en el distrito Río Negro, donde conflictos inter-familiares e intracomunales se agudizaron durante el período de la violencia.

El estudio en profundidad no se pudo llevar a cabo en la provincia de Oxapampa, pues la organización indígena regional de la zona señaló que habían acordado no hablar sobre temas relacionados con el conflicto armado interno. Además, la coyuntura de elecciones municipales había generado algunos conflictos entre las comunidades indígenas y las comunidades colonas. Por esa razón, la información sobre esta zona se basa en publicaciones y algunos testimonios recogidos en la zona por la oficina de enlace de la CVR de La Merced.

En el distrito Río Tambo, se eligieron tres comunidades. La comunidad de Quempiri, en la margen derecha del río Ene, era relativamente accesible y era un caso emblemático para conocer el proceso de inserción de PCP-SL desde el Apurímac, las condiciones de vida en cautiverio con el PCP-SL y el rescate de la población por el Ejército y las rondas. Para conocer el proceso de inserción en las comunidades del río Tambo, se eligió a Puerto Ocopa, ubicada en la entrada a este distrito desde Satipo y al río Tambo, así como a Otica, ubicada en el Medio Tambo, una de las comunidades cerca de la frontera. Puerto Ocopa permitía también conocer el proceso de sujeción de la población por los mandos subversivos y la formación de rondas nativas por propia iniciativa. Otica, además, permitía describir las formas de resistencia de la población frente a PCP-SL, su escape y el desplazamiento hacia comunidades en busca de seguridad.

Asimismo, fueron incluidas dos organizaciones indígenas para conocer su visión sobre el conflicto armado interno y sus respuestas frente a éste: la Central Asháninka del Río Tambo, organización representativa de esta cuenca, y la Comisión de Emergencia Asháninka, cuya sede se encuentra en la ciudad de Satipo y tiene como bases a diferentes comunidades de los distritos de Satipo.

## 8.2. ESCENARIOS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LA SELVA CENTRAL

El conflicto armado se inició en la selva central a principios de la década del ochenta cuando un importante contingente del PCP-SL ingresó a la región por los ríos Apurímac y Ene huyendo de la contraofensiva militar de Ayacucho. En un principio, ésta fue una zona de tránsito, de aprovisionamiento y de refugio para los grupos alzados en armas que actuaban en las zonas andinas de Junín y Ayacucho, hasta que finalmente lograron afincarse en ella.

Los primeros subversivos en llegar al Ene lo hicieron junto con grupos de colonos que se dedicaron al cultivo de la coca y que se habían asentado en la margen izquierda del río Ene. Este Comité de Colonización del río Ene sirvió como punta de lanza para insertarse en esta región e iniciar actividades proselitistas.

Hacia mediados de los años ochenta, el MRTA comenzó a expandirse también hacia la región amazónica colindante con la sierra central, huyendo del valle del Mantaro y de las serranías de Pasco.

El MRTA desarrolló sus actividades en las provincias de Oxapampa y Chanchamayo, mientras que el PCP-SL lo hizo, principalmente, en la provincia de Satipo. La zona fronteriza, en las inmediaciones de la ciudad de Pichanaqui, sobre el valle del Perené, siempre fue disputada por ambos grupos subversivos.

En la selva central, se podrían distinguir cuatro grandes zonas, ya que en cada una de éstas se ha vivido la violencia de una manera peculiar. Cada una corresponde a una provincia diferente.

La primera incluye el valle del Perené y forma parte de la provincia de Chanchamayo. En esta zona cohabitaban colonos de origen serrano y nativos asháninkas yaneshas. Fue la zona donde estuvo más activo el MRTA, cuyos militantes eran llamados «los negros» por la población local. La presencia de el MRTA llegó a desplazar a PCP-SL, que limitó su presencia a acciones esporádicas.

La segunda zona corresponde a la provincia de Oxapampa, en el departamento de Pasco. Está habitada por colonos y asháninkas (principalmente en el valle del Pichis) y cuenta con la mayor concentración de población yanesha. Aquí también tuvo una fuerte presencia el MRTA, pero fueron expulsados de las zonas indígenas a principios de 1990 y se limitaron luego a realizar acciones aisladas en las ciudades o ataques a los cuarteles del Ejército. Un contingente del PCP-SL también actuó en la zona de manera esporádica.

La tercera zona corresponde a la provincia de Satipo. El grupo subversivo con mayor presencia en la provincia de Satipo fue —y sigue siendo todavía— el PCP-SL. En 1988, la provincia de Satipo fue declarada

en estado de emergencia. En 1989, el PCP-SL intensificó sus acciones y llegó, en 1990, a tener un control absoluto en todo el río Ene y en el Alto Tambo (hasta el codo de Poyeni). Existe una base de los sinchis en Mazamari desde los años sesenta y un cuartel del Ejército (Natalio Sánchez) en Satipo, además de otras guarniciones y destacamentos que se fueron creando como parte de la lucha contrasubversiva en los valles del Tambo y del Ene y en el distrito de Pangoa.

Satipo también ha sido la única zona en la selva central en la que se crearon rondas campesinas y comités de autodefensa (CAD). La mayoría de estas rondas fue promovida por el Ejército para enfrentar y detener el avance del PCP-SL, aunque también muchas otras fueron creadas por iniciativa propia.

En esta tercera zona es posible distinguir tres grandes subzonas. La primera incluye las principales ciudades de la provincia conectadas por la Carretera Marginal, así como las zonas rurales aledañas a estas ciudades. Esta zona corresponde, en gran medida, al territorio de los distritos de Río Negro, Satipo y Mazamari. En ella, existen numerosas comunidades asháninkas y nomatsiguengas, así como asentamientos de colonos mestizos. La segunda es el distrito de San Martín de Pangoa, limítrofe con el distrito de Río Tambo por la zona alta de la cuenca del río Ene. En esta zona se concentra la mayor parte de las comunidades nomatsiguengas. La última subzona corresponde al distrito del Río Tambo, donde la mayoría de la población es asháninka y una minoría colona.<sup>278</sup> Las vías de comunicación por excelencia son los ríos Ene y Tambo, que vinculan a todas las comunidades. La comunidad de Puerto Ocopa, la puerta de ingreso al distrito, se conecta por medio de una carretera afirmada con la ciudad de Satipo.

El río Ene, continuación del río Apurímac, constituye un corredor fluvial que se relaciona con Ayacucho. Fue precisamente por este río por donde llegaron muchas familias asháninkas huyendo de la presión de la colonización sobre sus tierras en la selva de Ayacucho, durante la década de 1960. Posteriormente, por ahí llegaron miembros del PCP-SL y narcotraficantes. El río Tambo se intercepta con el río Ucayali y permite el acceso a la ciudad de Pucallpa y luego, a través de la carretera con Aguaytía, Tingo María y el Alto Huallaga, o por río, a Iquitos. Por otro lado, desde Satipo se puede tener acceso por carretera a la sierra central (Tarma, La Oroya y el valle del Mantaro). Ésta también fue la misma ruta que emplearon las familias campesinas provenientes de la sierra sur y luego los integrantes del PCP-SL.

La cuarta y última zona principal es la meseta del Gran Pajonal, habitada por el pueblo asháninka, que pertenece administrativamente al departamento de Ucayali. El PCP-SL pretendió ingresar a este territorio pero fue rechazado de manera categórica por este pueblo.

### 8.3. PRIMERAS ACCIONES DEL PCP-SL

Entre los años 1985 y 1988, los mandos del PCP-SL realizaron asesinatos selectivos de supuestos delincuentes o soplones en los poblados de colonos. Ante el avance de PCP-SL y los primeros ajusticiamientos en la zona, los colonos que no simpatizaban con esa organización subversiva huyeron fuera del valle del Ene desplazándose de sus comunidades de origen o emigrando hacia Satipo u otras ciudades de la región. La población asháninka sentía temor de estas ejecuciones pero, al mismo tiempo, les reconocía un aspecto positivo ya que la mayoría de colonos eran considerados como invasores de su territorio o como gente de mal vivir que había traído consigo el narcotráfico, la prostitución y el abuso. Por estos años, el PCP-SL también expulsó a las firmas de narcotraficantes de la zona.

Las acciones del PCP-SL en la zona siguieron un patrón similar en casi todas las comunidades, que también fue empleado en otras regiones del país. Inicialmente, los mandos subversivos ayacuchanos convocaron clandestinamente a algunos profesores y promotores asháninkas. Estos últimos se caracterizaban por tener mayor instrucción, contacto con la ciudad y movilidad por la zona.

Alrededor de 1988, el PCP-SL comenzó una campaña más constante para afirmar su presencia en la zona e incrementó sus visitas a las comunidades nativas. Para ello, utilizó como intermediarios a aquellos asháninkas adoctrinados. Estos últimos servían de enlace entre los mandos andinos y las comunidades asháninkas.

<sup>278</sup> El distrito del Río Tambo concentra el mayor número de población asháninka de la provincia de Satipo. Este distrito fue creado el 27 de enero de 1943. De acuerdo con el censo de 1993, la población total del distrito se calculaba en 10,704 personas; 97 % de ésta era asháninka (10,338) y el resto era población colona proveniente de los departamentos de Junín, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, entre otros.

Para 1989, la presencia del PCP-SL en la zona era generalizada y abierta. Los mandos colonos llegaban cada fin de semana para coordinar y adoctrinar a las autoridades de la comunidad. Un caso típico para conocer la estrategia de inserción en una comunidad nativa es el de Puerto Ocopa. Para el PCP-SL, tomar el control de la comunidad de puerto Ocopa era clave por ser la entrada al distrito y al río Tambo desde Satipo.

Un elemento importante en la estrategia utilizada por el PCP-SL para el reclutamiento y adoctrinamiento de asháninkas fue la oferta persistente de cosas que se podrían calificar de utópicas. Según los testimonios recogidos, el PCP-SL les ofrecía carros, dinero y todo tipo de bienes venidos de fuera.

El caso de Otica ilustra cómo los líderes asháninkas jugaron un papel importante en el convencimiento de la comunidad para aceptar las promesas del PCP-SL.

### 8.3.1. Otica, el papel de los líderes en la simpatía inicial hacia el PCP-SL

*HP*, líder de Otica, había destacado como promotor de salud y como laboratorista. Por ello, viajaba frecuentemente a distintas comunidades de los ríos Tambo y Ene. A mediados de la década del ochenta, *HP* había sido captado por la base del PCP-SL en Puerto Prado.

La política del PCP-SL ingresó poco a poco a la comunidad a través de la difusión que realizaba *HP*. Gracias a su credibilidad y aceptación en la comunidad, ganó la simpatía de los comuneros hacia el PCP-SL: «*HP* nos hablaba que había esa política para los pobres, que todo podía ser diferente [...].»<sup>279</sup>

Dentro de este contexto, se produjo la primera incursión de PCP-SL en Otica. El 29 de octubre de 1987, saquearon la posta y la casa de los trabajadores de las dos ONG presentes en la comunidad (el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica - CAAAP y Save the Children). Éstos tuvieron que abandonar la zona por seguridad.

Inicialmente, la comunidad había expresado un contundente rechazo al PCP-SL. Sin embargo, la labor de convencimiento de *HP* hizo que la comunidad asumiera estas acciones como un error de los subversivos.

El mismo año de la incursión, *HP* fue elegido presidente de la comunidad. A partir de entonces, *Javier*, el mando político de PCP-SL en Puerto Prado y compadre de *HP*, comenzó a visitar Otica de manera periódica. Ambos realizaban un trabajo de politización en cada clan familiar. Cada familia extensa vivía en una sola vivienda y tenía como jefe de familia a la persona mayor, padre, abuelo o bisabuelo.

Luego, comenzaron a llegar periódicamente dos mandos colonos. Realizaban charlas, con discursos similares a los de Poyentima. Después de unos meses, informaron a las familias que el PCP-SL iba a crear un «nuevo estado» y que la comunidad tenía que aceptarlo: «Él era el jefe, él decía, uno tenía que aceptar. ¡Cómo no vas a aceptar si es el jefe!». <sup>280</sup>

Evidentemente, no todos los asháninkas aceptaron la presencia del PCP-SL. Muchos no entendían exactamente en qué consistía su ideología. Otros, que habían tenido contacto con las ciudades, dudaban seriamente acerca de si las promesas podían cumplirse: «Decían que iban a luchar contra el Ejército [...] que iban a tomar el poder. Yo le decía a la gente, ¿cómo va a ser posible? Eso no es así. Pero no entendían. Como les ofrecían cosas, tiendas, carros [...] pero yo no creía, ¿cómo van a vencer al Ejército? Si son un montón, están en Lima, están en todas partes [...] Por eso me fui». <sup>281</sup>

Algunos se habían enterado de los daños y asesinatos cometidos por el PCP-SL en Ayacucho. Un comunero de Quempiri cuenta que, en Chichireni, había escuchado sobre el PCP-SL e intentó huir, pero fue capturado y llevado con el resto de la gente.<sup>282</sup> Otro caso es el de un pastor evangélico de Quempiri, quien, aprovechando un viaje a Satipo para un curso de capacitación del ILV, decidió refugiarse en dicha ciudad. Hubo otros que rechazaron las propuestas del PCP-SL. Algunos lograron escapar a tiempo del control del PCP-SL, otros huyeron a esconderse en el monte y unos pocos se desplazaron a las ciudades cercanas como Satipo. Para entonces, la mayoría de colonos que no simpatizaba con el PCP-SL ya había abandonado el valle del Ene.

<sup>279</sup> Carlos. Otica, septiembre de 2002.

<sup>280</sup> CVR. Reunión con mujeres. Otica, noviembre de 2002.

<sup>281</sup> CVR. Entrevista con Matías Antúnez. Otica, septiembre de 2002.

<sup>282</sup> Chichireni es una comunidad situada en el distrito de Pangoa, en la margen derecha del río Ene.

y se había dirigido hacia Satipo u otras ciudades. A diferencia de los colonos, el desplazamiento a la ciudad no era una opción real para las comunidades asháninkas. En primer lugar, porque no podían huir, ya que el PCP-SL había cercado la zona y controlaba todos los ingresos y salidas. En segundo lugar, porque no tenían adónde ir. Pero, sobre todo, porque tradicionalmente los asháninkas prefieren buscar refugio en el monte o bosques tropicales de la región antes que vivir en la ciudad.

Para lograr el control de las comunidades, el PCP-SL hizo uso de diversos mecanismos de dominación y disuasión. Uno de los principales medios utilizados fue el miedo. Los asháninkas eran amenazados constantemente con castigos, torturas y la muerte si no cumplían con lo que se les indicaba o incluso si alguien manifestaba su descontento o desconfianza frente al PCP-SL.

En Puerto Ocopa, por ejemplo, los mandos subversivos amedrentaban y amenazaban a quienes se rehusaban a comprometerse: «Se paseaban de día con bolsitas de arena haciendo creer que era munición, y granadas de juguete. Amenazaban en la chacra. Cada semana hacían reuniones»;<sup>283</sup> «[...] Vas a tu casa, cuando escuchen que hay reunión, vienen, si no, los mato»;<sup>284</sup> «El que no quiere estar con el partido, le vamos a matar».<sup>285</sup>

El PCP-SL fomentaba la vigilancia y las acusaciones mutuas. Los mandos y los simpatizantes actuaban como los «mil ojos y mil oídos del partido»: «Las gentes que iban infiltrando en los grupos que tomaban, lo que escuchaban iban a informarle. Mientras que el pueblo no sabía, ya estaban contactados. A veces, decían no vas a hablar porque hay mil ojos, mil oídos. Mentira. Ese palo, ese árbol era mil ojos, mil oídos. Era mentira, ese no era, eran personas».<sup>286</sup>

Igualmente, se expandió la desconfianza al interior de las comunidades e incluso al interior de las familias. También se temía a las fuerzas del orden. El PCP-SL logró convencer a los asháninkas de que los militares iban a matarlos o violarlos. De esta manera, colocó a la población civil en contra de los militares y, además, militarizó a la comunidad:

[El PCP-SL] ha hecho trincheras para que estén cuidando de los militares [...] Te ha dicho que no te vayas, te [va a] matar, te va a quitar a tu señora o te va a violar [los militares] y por eso se ha asustado [...] Ha dibujado PCP-SL [a] una persona que estaba ahí en papel, una persona que estaba violando [...] El PCP-SL le ha enseñado y le ha dicho, si sales, si vas con militares, así le van a violar a tu mujer y a ti mismo. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P737. Varón, poblador de Quempiri)

El PCP-SL logró aislar física y psicológicamente a los asháninkas. Mantenía un control estricto sobre el «territorio liberado»: había cerrado todos los aeropuertos y restringido el acceso fluvial. Sólo podían navegar por el río quienes tenían autorización del partido.

En esa época, el PCP-SL comenzó a llevarse a los niños asháninkas entre 10 y 15 años para adoctrinarlos y entrenarlos militarmente. Un joven, llevado por el PCP-SL cuando tenía 10 años, contó lo siguiente: «[...] [te] enseñaba[n] cómo matar, saquear, cómo traumar a la gente, asustar para que huyan y quedarse con las cosas. Nos llevaban para saquear, mataban a las gentes [asháninkas]. A las mujeres, les enseñaban a trabajar. Una mujer era comando. Mataban a la gente que flojeaba, [que] estaban pensativa o por traición a tu patria».

El mismo joven relató que el PCP-SL lo llevó a Tacna, Ayacucho, Cerro de Pasco, donde se escapó. Muchas familias se resistían, escondían a sus hijos o los enviaban al monte para evitar que el PCP-SL se los llevara. El adoctrinamiento de los niños y jóvenes incluía el entrenamiento militar y la concientización.

Hacia 1989, el PCP-SL ya había conformando dos «comités populares» en Otica. Para reforzar esta nueva situación, el PCP-SL cambiaba los nombres de la gente por otros nuevos y eliminaba cualquier referencia a lazos previos: «La gente no se trataban *nosháninka*,<sup>287</sup> sino como compañero. Cuando a mí me llamaron compañero, me enojé, pero la gente se acostumbraba a decirle así. Uno dijo así: estamos en el nuevo estado».<sup>288</sup>

<sup>283</sup> CVR. Entrevista con Matías Antúnez. Otica, septiembre de 2002.

<sup>284</sup> Ibídem.

<sup>285</sup> CVR. Entrevista con Ernestina, 30 años aproximadamente. Puerto Ocopa, noviembre de 2002.

<sup>286</sup> Varón, 45 años. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

<sup>287</sup> «Nosháninka» significa amigo, hermano asháninka.

<sup>288</sup> Varón, 36 años. Comunidad Nativa Puerto Ocopa, 2000. Testimonio recogido por el CAAAP.

Durante 1989, el PCP-SL incrementó sus acciones en la zona. Realizaban incursiones para saquear las comunidades, sobre todo si había misiones, proyectos de desarrollo o comerciantes. Estos saqueos iban acompañados del adoctrinamiento inicial de la población en reuniones que llegaban a durar varias horas.

El 13 de febrero de ese año, el PCP-SL asesinó a Isaías Charete, presidente de OCARE, en la comunidad nativa Tzomaveni, en el Ene.<sup>289</sup> Ese mismo año la comunidad Cutivireni, también ubicada en el Ene, fue atacada varias veces.<sup>290</sup> La comunidad de Cutivireni y las comunidades del Bajo Tambo fueron las que mostraron una mayor resistencia al avance del PCP-SL y, por ello, sufrieron ataques reiterativos.

### 8.3.2. Cutivireni, una comunidad desplazada por vía aérea

Desde 1988, el PCP-SL incursionó en Cutivireni, donde adoctrinaba a la población y reclutaba a jóvenes. Desde entonces, las incursiones, saqueos, secuestros de jóvenes y asesinato de opositores se fueron multiplicando. Después de sufrir varios ataques, los asháninkas de la comunidad que no se habían plegado al PCP-SL huyeron al monte, a una parte alta del valle llamada Tzibokiroato. Sin embargo, aquí también fueron atacados por el PCP-SL en varias ocasiones.

Finalmente, en septiembre de 1991, un grupo de 169 asháninkas de Cutivireni, con el apoyo del padre franciscano Mariano Gagnon, párroco de la misión, fueron trasladados por vía aérea al otro lado de la cordillera, al valle del Urubamba, que corresponde al territorio tradicional del pueblo matsiguenga.<sup>291</sup> Aquí encontraron refugio en la comunidad matsiguenga de Kiriketi (o Kirigueti) y, posteriormente, crearon una nueva comunidad autónoma en dicho valle. Actualmente, un grupo sigue viviendo allí, mientras que otros se han reubicado en el río Tambo.

En 1991, el Ejército instaló en Cutivireni una base militar y se formó una ronda o CAD asháninka. Cutivireni se convirtió en un lugar de refugio o núcleo poblacional y llegó a recibir a más de 2 mil asháninkas desplazados que provenían de otras comunidades del Ene, como Kamantavishi, Kachingari, Tinkarení, Potoshi, y Shaboroshari.

Hacia fines de 1990, el PCP-SL tenía el control de todo el Ene y la parte alta del Tambo (hasta el codo que forma el río frente a la comunidad de Poyeni). A esta zona se le comenzó a llamar la frontera.

### 8.4. El «NUEVO ESTADO» EN EL MONTE: LA VIDA DE LAS «MASAS»

Entre 1990 e inicios de 1992, el Ejército realizó una serie de operativos en las cuencas del Tambo y el Ene en los cuales atacó varias comunidades controladas por el PCP-SL. Sin embargo, el PCP-SL y las comunidades ya se habían preparado ante esta posibilidad. Así, la población huyó rápidamente hacia el monte. En Quempiri, por ejemplo, el 13 de mayo de 1990, luego de escuchar a tres helicópteros del Ejército, la comunidad huyó hacia sus chacras. En el Alto Tambo, en Puerto Ocopa, un grupo de docentes que había escapado meses antes de la comunidad, coordinó con los sinchis la expulsión del PCP-SL de la comunidad. Con tres de estos profesores como guías, el 14 de mayo de 1991, los sinchis ingresaron a Gloriabamba, una comunidad ubicada a media hora de Puerto Ocopa. Al escuchar las bombas en Gloriabamba, la población de Puerto Ocopa huyó hacia el monte.

Mientras tanto, en el río Tambo, el asesinato del líder asháninka Pablo Santoma fue determinante para que las comunidades del Bajo Tambo, bajo el liderazgo de Poyeni, formaran el «ejército asháninka» o ronda de Poyeni.

---

<sup>289</sup> OCARE es la Organización Central Asháninka del Río Ene, federación que agrupa a todas las comunidades ubicadas en el valle del Ene.

<sup>290</sup> En uno de estos ataques, el 14 de noviembre, el PCP-SL asesinó a seis personas.

<sup>291</sup> Este dramático suceso adquirió notoriedad mundial gracias al reportaje del periodista peruano Gustavo Gorriti, quien ganó un premio internacional precisamente por este trabajo. Posteriormente, el franciscano canadiense, padre Mariano Gagnon, párroco de Cutivireni durante muchos años y protagonista principal en esta huida, ha publicado un libro en el que cuenta con detalle esta experiencia.

#### 8.4.1. Los mártires asháninkas del Tambo

Desde fines de 1989, un grupo de dirigentes de la CART tenía la idea de formar un ejército asháninka para oponerse al PCP-SL. Pero no lograron implementarlo debido a que *HP*, también dirigente de la CART, era un mando subversivo.

En 1990, el VI Congreso CART expresó oficialmente su rechazo hacia el PCP-SL. En pleno congreso, un contingente de sesenta integrantes del PCP-SL, entre colonos y asháninkas, al mando de *HP*, ingresó a la comunidad de Mayapo, donde se realizaba el evento. La mayoría de delegados logró escapar, con la excepción de Pablo Santoma y de dos dirigentes invitados Óscar Chimanca (de CONOAP)<sup>292</sup> y Dante Martínez (de CONAP).<sup>293</sup> El PCP-SL los capturó y llevó río arriba, a la comunidad Anapati, donde luego fueron ejecutados. Cuentan que: «Pablo Santoma estaba tranquilo, tomaba masato y cantaba; mi suegro Andrés Torres le dice “¿por qué no te escapas, nadie te vigila?”. Pablo le responde: “si me escapo, te culparán a ti de haberme dejado escapar y te podrían matar a ti y a tu familia. Si voy a morir, debo hacerlo solo, por mi pueblo».<sup>294</sup> Así, Santoma, Chimanca y Martínez se convirtieron en los mártires asháninkas de la lucha contra el PCP-SL.<sup>295</sup>

Emilio Ríos, jefe de Poyeni, junto con Jaime Velásquez, convocó a una asamblea extraordinaria de la CART, en la que se confirmó la decisión de formar un ejército asháninka. Se eligió como nuevo presidente de la federación al alcalde del distrito, el líder asháninka Pedro Tomón. Poyeni, además, se convirtió en comunidad de refugio para los asháninkas que buscaban protección.

El 23 de septiembre de 1990 se creó formalmente el Comité Central de Autodefensa y Desarrollo Asháninka n.º 25 oficialmente reconocido por la jefatura del Ejército en Huancayo.<sup>296</sup> Su primer presidente fue Emilio Ríos, quien adoptó el nombre de combate Kitóniro.<sup>297</sup> El Alcalde de la Municipalidad del Río Tambo y, a la vez, presidente de la CART se hizo cargo del aspecto logístico. Durante cuatro años, el Comité desempeñó un papel importante en la organización y liderazgo de las comunidades del Bajo Tambo, mientras que la CART adquiría un perfil bajo, ya que el principal tema de preocupación de los asháninkas era su defensa frente al PCP-SL.

El ejército asháninka pidió apoyo a la Marina de Guerra, pero ésta se la negó. En 1990, el *ejército asháninka* comenzó a patrullar la zona. El mismo año se produjeron varios ataques contra la «fuerza principal» del PCP-SL, sobre todo en Cheni y Anapati, comunidades vecinas a Otica. Estos continuos ataques de la Marina de Guerra, si bien no causaron muertes, obligaron a la población, ya agrupada en «comités de base» del PCP-SL, a desplazarse hacia otros lugares.

Como resultado, desaparecieron 14 comunidades asháninkas de la zona del alto Tambo<sup>298</sup> y todas las comunidades del río Ene (treinta en total). Cerca de 10 mil asháninkas fueron conducidos por el PCP-SL al monte o huyeron.

En el monte, el PCP-SL reagrupó a los asháninkas en lugares preparados anteriormente y se retiraron en forma progresiva hasta llegar a la zona de Alto Tsikireni, en la cuenca del Ene,<sup>299</sup> o a otros lugares que no habían sido ocupados tradicionalmente por las comunidades. Por lo general, se trataba de lugares que proporcionaban escondite y protección frente a posibles ataques aéreos de las Fuerzas Armadas. Por ello, los «comités populares» se encontraban en medio del bosque, algo alejados de los ríos y, muchas veces, en lugares elevados, para así poder tener una mejor posición de vigilancia. Aquí, el PCP-SL dividía a las comunidades en grupos más pequeños llamados «pelotones». Dos o tres «pelotones» conformaban un «comité popular». Los «pelotones» eran ubicados en zonas estratégicas de tal manera que siempre pudieran tener acceso a las chacras, así como a rutas de escape. En principio, cada familia tenía una choza y el conjunto de éstas formaba una especie de círculo. Los «pelotones» también contaban con un ambiente para centralizar los alimentos que se distribuían

<sup>292</sup> Confederación Nomatsiguenga y Asháninka del Pangoa.

<sup>293</sup> Confederación de Nacionalidades de la Amazonía Peruana. Organización indígena nacional.

<sup>294</sup> Isabel Oliviano de la comunidad de Cheni y actual regidora de la Municipalidad. En el bote a Betania, 18 de noviembre de 2002.

<sup>295</sup> Estos dirigentes son recordados en todos los congresos y sus nombres consignados en las pancartas alusivas a estos eventos.

<sup>296</sup> Los presidentes del Comité Central posteriores a Emilio Ríos fueron Pablo Zumaeta, José Antúnez, Avelino Portero. Actualmente lo preside César Domínguez, de Poyeni, y Joel Santillán, de Betania, es el vicepresidente.

<sup>297</sup> Kitóniro, en asháninka, significa alacrán.

<sup>298</sup> En todo el río Tambo existen 35 comunidades.

<sup>299</sup> Testimonio recogido por Leslie Villapollo de asháninkas refugiados en Puerto Ocopa, entre los años 1993 y 1995.

luego y una especie de cancha donde se ejercitaba a la población y realizaban las reuniones. A unos quince minutos de camino, se ubicaba un puesto de vigilancia, donde hacían guardia dos varones. Cada semana se cambiaban las claves de identificación que permitían el ingreso o salida del «pelotón».

Un día normal en el «pelotón» comenzaba a las 3:00 a.m. Primero se levantaban los mandos y despertaban a la «masa». La primera orden de los mandos era acicalarse y arreglar las pertenencias en canastas «listos para escapar si venían los miserables [el Ejército]». Luego, por turnos, las mujeres preparaban la comida. Estaba prohibido hacer fuego durante el día para evitar ser detectados por los militares o ronderos. La comida era servida a las 5:00 a.m. Primero comían los mandos: «Cuando [los mandos] comen una cucharada, dicen “¡viva Gonzalo!” y recién vienen los demás [la «masa»] a servirse» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P737. Varón, poblador de Quempiri).

Los mandos, además, se servían la mejor comida, mientras que la «masa» tenía que comer, en muchos casos, cosas que eran consideradas como desperdicios o impropias para seres humanos: «sopa aguada nomás, hoja de chalanca nomás comían, tierra, hasta culebra». Después de comer, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., la «masa» trabajaba en las chacras y regresaba cerca de las 5:00 p.m. A aquellos que no podían con el trabajo agrícola, como los enfermos y ancianos, se les asignaba tareas apropiadas, como fabricar púas o armas. Los productos de la jornada, como la yuca y el pescado, eran entregados a los mandos logísticos para ser centralizados y, posteriormente, distribuidos.

La «escuela popular» funcionaba para los niños de 8 a 10 años, quienes asistían una hora diaria. Los niños «no jugaban, les decía[n] que tenían que cuidar porque van a venir los militares y les van a matar»<sup>300</sup> (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P763, Quempiri. Mujer, aproximadamente 38 años, con quinto de primaria. Su esposo es el presidente de la comunidad).

En la «escuela popular» les enseñaban «la sujeción y respetar al presidente *Gonzalo*, [la] autocrítica y sujetarse al partido y presidente *Gonzalo*, osheki [bastantes] canciones». Los niños más grandes, los «niños pioneros», tenían más responsabilidades, tanto en el trabajo diario como en la actividad militar. El entrenamiento militar también tomaba una hora diaria. El entrenamiento de las milicias era muy duro y había poca comida. Muchas veces, los asháninkas sólo se podían alimentar de raíces y gusanos.

Las milicias tenían armas rudimentarias, generalmente arcos y flechas. En el mejor de los casos, tenían escopetas viejas. Sólo los mandos poseían armas más sofisticadas como revólveres, fusiles FAL y ametralladoras AKM, obtenidas como botín de guerra luego del asesinato de policías o militares.

Al terminar la jornada, comían y se «bañaban un poco, porque no hay jabón». A las mujeres las obligaban a trenzarse el cabello. Todos debían usar ropa limpia: «harapientas, no importa, pero limpio». En los primeros meses, el día terminaba con la reunión de los miembros de la familia para conversar sobre los hechos del día. A veces, cantaban huaynos en castellano con letras que el PCP-SL les había enseñado. Sin embargo, posteriormente, se restringió todo tipo de reuniones familiares y de visitas con la finalidad de ir minando cualquier relación que no se basara en la disciplina y en el cumplimiento de las órdenes recibidas. En estas reuniones, no podían expresarse libremente: «[...] no podía decir cosas malas del partido, no va a decir es difícil trabajar, sino mil ojos y mil oídos les avisarán a los mandos» (CRV. BDI-Entrevista en profundidad P737. Varón, poblador de Quempiri).

Las manifestaciones de tristeza, así como la falta de apetito, también estaban prohibidas. Eran vistas por los mandos subversivos como sospechosas: «[...] cuando están pensativo [triste], te dice [el mando] ¡en qué estás pensando, seguro piensas escapar!».<sup>301</sup>

La desconfianza y el temor a incumplir las normas establecidas se acentuaron en esta época. En cualquier momento, podían ser denunciados por la más mínima infracción. Durante las reuniones semanales convocadas por la «fuerza local», los que estaban presentes acusaban las faltas cometidas por otros miembros del «pelotón». Las acusaciones podían recaer incluso sobre miembros de la propia familia. Por ello, un comunero afirma sin dudar: «ahí no hay cariño».<sup>302</sup> Cuando una persona cometía una falta, hablaba mal del partido o

<sup>300</sup> CVR. Informante mujer de Quempiri, 35 años aproximadamente.

<sup>301</sup> Testimonio recogido por el CAAAP. Puerto Ocopa, 1994.

<sup>302</sup> CVR. Informante varón de Quempiri, 40 años aproximadamente.

demostraba tristeza, sabía que debía disculparse por medio de la autocrítica. Ésta consistía en sujetarse al partido y al «presidente» *Gonzalo*, reconocer ante los demás los errores cometidos y prometer no repetirlos:

Aprendimos a la fuerza. Hacía saludar a su presidente, haber sujeción única al presidente *Gonzalo* [...] «Pido la palabra, compañeros. Partiendo con mi más alta sujeción al maestro y guía, querido y respetado presidente *Gonzalo*, que es el jefe de nuestro partido y revolución». Si no cumples [las tareas o normas dictadas por el PCP-SL], hablas de lo que piensas y sientes, uno mismo se critica: soy vago, ocioso, ¡qué diablos, a veces, pienso! «Eso es toda mi palabra». Tres veces nomás puedes hacerlo; a la tercera aplican violencia [asesinato].<sup>303</sup>

Todos conocían la regla citada en el testimonio anterior y fue aplicada frecuentemente y sin distinciones; no se libraban de ella ni los menores de edad.

Según el testimonio de los asháninkas que lograron escapar o fueron rescatados, los «comités populares» funcionaban como una especie de campos de concentración, donde el trabajo forzado, los horarios estrictos, las normas de conducta rigurosas, el incumplimiento de las promesas hechas y la pérdida de la libertad individual condujeron a los asháninkas a rechazar al PCP-SL. A partir del uso de recursos psicológicos personales o culturales, cada persona o familia desarrolló distintas formas de resistir interiormente la dominación del PCP-SL.<sup>304</sup> Algunos recurrieron al sentido del humor y la risa como forma de lidiar con el sufrimiento. En Otica, por ejemplo, un comunero relató: «No podíamos ni estar tristes. Uno sufría solo en el monte sin que lo vieran, para evitar los castigos».<sup>305</sup> Cuando podían, se las ingenian para buscar alimento para sí mismos. Una mujer de Quempiri contó cómo, en una ocasión, cuando los mandos la habían enviado a pescar «[...] escondió el pescado, no le enseñaba; [el mando logístico] llamaba a todos para ver cuánto ha pescado. Y luego comía en la noche con su familia»<sup>306</sup> (CVR. BDI-Entrevista en profundidad. Mujer, pobladora de Quempiri).

En Otica, algunas familias ocultaron a sus hijos en el monte para evitar que el PCP-SL se los lleve a guerrear. Cuando iban a cumplir con sus tareas, aprovechaban para ver a sus hijos. Este tipo de ardides implicaba un gran riesgo y podía conducir al castigo físico (se le podía amputar la mano, por ejemplo) o incluso a la muerte.

Cuando el PCP-SL iba a ejercer violencia sobre los que violaban sus normas de conducta, los supuestos infractores, *soplones* o *individualistas* eran llevados ante la *fuerza principal*.<sup>307</sup>

Un ex mando de Quempiri recuerda que, a los infractores, se les colocaba al interior de un círculo y se elegía a algún miembro de la fuerza principal para asesinarlo con una soga o con un cuchillo por la espalda. Aunque la mayoría de estos asesinatos no eran presenciados por la masa, los mandos obligaban al pelotón, especialmente a la familia, a festejar la muerte, a reír, tomar masato y hacer vivas al partido y al presidente Gonzalo tras ella.

Durante este tiempo, fueron varios los asesinatos selectivos y *ajusticiamientos* debidos a la desobediencia. El número de muertes debido a la anemia, la desnutrición y enfermedades también fue alto: «Dice que, cuando ya no había qué comer, los niños ya era... con anemia, ya comían tierra, ya no comían ni sal, iba a sacar su... de palmera, su... chonta. [...] A veces, comían tierra los niños y bastantes morían»<sup>308</sup> (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P737. Varón poblador de Quempiri).

Sólo sobrevivían los más fuertes: «[...] su hijo, a uno lo ha dejado porque no podía andar, tenía anemia. Le ha dejado porque ella no tenía fuerza, no podía cargarlo, ni su papá. Por eso le ha dejado [...] se ha muerto»<sup>309</sup> (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P763. Quempiri. Mujer, aproximadamente 38 años, con quinto de primaria, comunera. Su esposo es dirigente de la comunidad).

En algunos casos, los familiares enterraban a sus familiares difuntos; pero, en otros casos, eran tirados en fosas comunes: «Los niños murieron por anemia. Hacían hueco hondo, o roca con hueco, ahí los tiraban los

<sup>303</sup> Informante mujer de Puerto Ocopa, 48 años. Testimonio recogido por Leslie Villapolo (CAAAP). Puerto Ocopa, 1995.

<sup>304</sup> Lo que Scott denomina «las armas de los débiles». (Scott, J. Weapons of the Weak. Everyday forms of peasant resistance. New Haven: Yale University Press, 1985).

<sup>305</sup> Carlos. Otica, septiembre de 2002.

<sup>306</sup> Informante mujer. Quempiri, septiembre de 2002.

<sup>307</sup> El PCP-SL denominó «individualistas» a los que no cumplían con la norma de «centralizar» el fruto de su trabajo en la chacra, pesca u otras actividades de recolección. Es decir, que no entregaba todo el producto de su trabajo al mando logístico para luego redistribuirlo a la «masa». También era considerado «individualista» aquel que no quería participar en las faenas grupales encomendadas por los mandos.

<sup>308</sup> CVR. Informante varón, 40 años aproximadamente. Quempiri, septiembre de 2002.

<sup>309</sup> CVR. Informante mujer. Quempiri, septiembre de 2002.

del PCP-SL [...] Mi hijo mayor, de 7 años, se murió por anemia, pero nosotros sí lo enterramos».<sup>310</sup> También hubo casos en que los enfermos fueron enterrados vivos.

Los asháninkas recuerdan la vida con el PCP-SL como una etapa deshumanizante: «Como chanchos, escondidos bajo el monte, durmiendo en el barro y comiendo sopa aguada [...] Ya no sentimos alegre. Sí sentíamos triste, ya no comías, pensábamos en la familia, pensábamos en la chacra, no teníamos para comer, ya no dejaban libertad para comer para nuestros hijos, esclavizados. Ya no hacía masato en la vida».<sup>311</sup>

Estas prácticas y castigos, la fuerte presión para acusarse mutuamente, el clima cada vez más generalizado de desconfianza y temor, y la experiencia traumática de ver a seres queridos sufriendo o asesinados, o incluso de tener que matarlos uno mismo, contribuyeron no sólo al debilitamiento y destrucción de los lazos de parentesco y de comunidad, sino, sobre todo, al sometimiento total del espíritu de cada asháninka frente al PCP-SL: «Eras como un animal, ya no hay familia, a veces te hace matar a tu familia, a tu hijo, porque ya no es tu familia. Ésa es orden del pueblo [dicen los subversivos]. Mentira, ésa es orden de él mismo [del mando del PCP-SL]».<sup>312</sup>

Por ello, entre 1992 y 1993 se incrementó el número de asháninkas que intentaban o lograban huir del PCP-SL. Sin embargo, la huida al monte tenía un alto costo. Algunas personas tuvieron que dejar atrás a sus familiares más débiles o pequeños. Además, existía el temor de ser encontrados por los comandos de aniquilamiento del PCP-SL.

Finalmente, tenían que superar el temor al Ejército y a los ronderos que les había inculcado el PCP-SL durante años de adoctrinamiento y poder así acudir a las comunidades refugio o núcleos poblacionales. Un comunero relató cómo escapó del PCP-SL gracias a una radio que logró mantener escondida donde escuchaba los mensajes del Ejército invitando a los asháninkas a regresar a sus comunidades (o hacia las comunidades de refugio) sin temor a represalias. Además, para poder lidiar con el peligro que implicaba escapar, los asháninkas apelaron a recursos culturales tradicionales como el conocimiento del medio ambiente para sobrevivir en el monte o a la interpretación de sueños para decidir cuándo escapar, cuándo callar, qué decir. Los escapes masivos fueron menos frecuentes.

#### 8.4.2. Escape de los «comités populares» Wacapú y Vista Alegre de Otica

En febrero de 1993, los mandos de los «comités de base» Wacapú y Vista Alegre, *Máximo* y *Javier*, se reunieron para coordinar la huida de ambos grupos: «Yo hice el plan para fugarnos. Conversé con Máximo; estaba de acuerdo. Había miedo. Como todos se acusaban, no le contamos a nadie. Sólo le dijimos a los hombres que hagan las balsas y que las oculten en el monte. No se les dijo nada más y les dijimos que no cuenten ni a sus mujeres ni a los niños, a nadie [...] así lo hicimos hasta que llegó el día [...].»<sup>313</sup>

Estos mandos esperaban que la fuerza local realizara su vigilancia habitual, pero no lo hicieron el día acostumbrado. Entonces, decidieron realizar la fuga un sábado por la noche. Esa noche llegó la «fuerza local». *Jesús*, hermano de *Javier*, vino acompañado por una mujer ayacuchana de 17 años de edad. *Jesús* se dio cuenta de las intenciones de su hermano y lo quiso acusar. Ante este peligro, *Javier* ató a la mujer ayacuchana mientras otro grupo se llevaba a *Jesús*. Cuando *Javier* llegó a la playa, encontró a su hermano ya muerto: «No tuve qué sentir, lo miré, y tuve que seguir adelante nomás [...] Nos escapamos y ya no pensé hasta después».<sup>314</sup>

La comunidad recuerda este hecho de otra manera. La mayoría dice que *Javier* mató a su hermano para poder escapar y resalta así su sacrificio. Por ello, es visto como el salvador del grupo que escapó: «[...] *Jesús* llegó a la playa y *Javier* tuvo que matarlo para que no nos delate, para poder escaparnos [...].»<sup>315</sup>

La fuga se realizó el domingo a las 3:00 a.m. La noche anterior habían soñado con el color blanco; era una buena señal. Escaparon aproximadamente 187 personas, entre mujeres, hombres y niños, hacia Poyeni: «Navegamos toda una noche y todo un día. No sabíamos si llegaríamos vivos. Tuvimos suerte porque ese día corrió

<sup>310</sup> CVR. Ernestina, 32 años aproximadamente. Puerto Ocopa, noviembre de 2002.

<sup>311</sup> Mujer, 28 años. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

<sup>312</sup> Varón, 41 años. C.N. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

<sup>313</sup> Javier. Conversación camino Puerto Ocopa a Satipo. Diciembre de 2002.

<sup>314</sup> Ibídem.

<sup>315</sup> Carmen. Otica, septiembre de 2002. Reunión grupal con mujeres, noviembre del mismo año.

viento y empujó las balsas. Por las playas, había algunos senderistas [integrantes del PCP-SL] que nos llamaban y nos querían disparar, pero pasamos rápido todas las balsas. Tuvimos suerte. Llegamos a Poyeni [...].<sup>316</sup> Algunos no quisieron ir con Javier y Máximo por temor a morir. Otros decidieron ir a buscar a sus familiares que estaban ocultos en el monte. Se calcula que los que no huyeron fueron unos 147, entre adultos y niños.

Frente al número creciente de fugas, los mandos del PCP-SL incrementaron el terror con propósitos disuasivos y para lograr la dominación total. Una de las nuevas estrategias fue separar a los miembros de las familias. De esta manera, si alguno intentaba escapar, se tomaban represalias contra los que quedaban. Otro mecanismo fue el ajusticiamiento ejemplar. También se intensificó el adoctrinamiento y se recordaban las promesas iniciales que motivaron la adhesión de la población al proyecto del PCP-SL. Sin embargo, el deseo de escapar era más fuerte

#### 8.5. CONTRAOFENSIVA MILITAR (1991-1994)

El año 1991 constituye el punto de quiebre en la ofensiva del PCP-SL en la región. A partir de ese año, las Fuerzas Armadas, junto con la población asháninka organizada en rondas o en CAD, iniciaron una importante contraofensiva que golpeó duramente al PCP-SL, sobre todo en la zona del río Ene.

Si bien es cierto que las rondas campesinas o CAD asháninkas han tenido una organización y funcionamiento similares, es posible distinguir dos tipos diferentes, de acuerdo con sus orígenes y su relación con las Fuerzas Armadas. Existe una notable diferencia entre las que dependían directamente del Ejército —como las del valle del Ene— y las que fueron creadas de manera autónoma por los asháninkas —como las rondas del río Tambo—.

Cada comunidad organizó su propia ronda, pero además todas contribuían al Comité Central de Autodefensa. Por ello, el PCP-SL no pudo avanzar más en su desplazamiento por el río Tambo y Poyeni pasó entonces a ser la frontera entre la zona del río controlada por el PCP-SL y la zona donde vivían con libertad los asháninkas.

La creación de ejércitos asháninkas no es algo nuevo. Constituye una práctica tradicional a la que los asháninkas se han visto obligados a recurrir en distintos momentos de la historia cuando han tenido que defender sus tierras o sus vidas.<sup>317</sup> Esta tradición fue reactivada frente a la situación de violencia subversiva. Así, todos los varones adultos pasaron a conformar las rondas nativas, CAD u *Ovayerite*.<sup>318</sup> Las rondas se crearon «con un solo objetivo: recuperar la familia, trabajar por la tradición asháninka».<sup>319</sup> Para ello, los ronderos nativos apelaron a la tradición de guerreros de sus abuelos:

Antes, en la época de mis abuelos, habían guerreros. [...] No sabían cómo era la vivencia, no le orientaba nadie. Si una persona venía a fastidiar, iban a guerrear, ésa era su estratégica.<sup>320</sup> Los asháninkas tenían una sola visión de lograr la pacificación a costa de su sangre, de su sacrificio, de su esfuerzo, entre otros esfuerzos que unen la unidad del pueblo asháninka guerrero.<sup>321</sup>

Durante 1991 y 1992 hubo fuertes y continuos enfrentamientos entre el PCP-SL y las rondas. Poyeni fue atacada por el PCP-SL en diferentes ocasiones. En los enfrentamientos fallecieron varios asháninkas. En 1991, la comunidad nativa Puerto Ocopa creó también, por propia iniciativa, la ronda nativa.

En el caso del río Ene, las comunidades nativas también formaron CAD, pero éstos dependían directamente del Ejército y las rondas de colonos, lo que ocasionó conflictos entre ambos. Éste fue el caso de Quempiri. Cuando dicha comunidad se encontraba refugiada en la base Natalio Sánchez, contribuyó con la cuota obligatoria de varones para los patrullajes realizados por el Ejército y las rondas colonas. Cuando retornaron a sus tierras, el Ejército apoyó la organización de la ronda en la comunidad, al principio armados con arcos y flechas, y luego con armas donadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Para 1995, esta ronda, que hasta entonces había estado bajo el comando de la ronda colonia de Natalio Sánchez, buscó su independencia. Finalmente, lograron ser reconocidos como un CAD autónomo según consta en los documentos de la comunidad.

<sup>316</sup> Máximo. Otica, septiembre de 2002.

<sup>317</sup> Espinosa, Óscar (1993), ob. cit.; Espinosa, Óscar. Rondas campesinas y nativas en la Amazonía peruana. Lima: CAAAP, 1995.

<sup>318</sup> Nombre dado a las rondas en el Pangoa por la organización indígena Kanuja.

<sup>319</sup> Varón, 36 años. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

<sup>320</sup> Mujer, 28 años. Puerto Ocopa. Testimonio recogido por el CAAAP, 2000.

<sup>321</sup> Memorias escritas por un comunero de Puerto Ocopa, 2000.

Entre 1991 y 1993, se intensificó la lucha contrasubversiva y se multiplicaron los operativos conjuntos entre el Ejército y los ronderos en los valles de los ríos Tambo y Ene. Con estos operativos, se fueron recuperando de manera paulatina algunas zonas que estaban bajo control del PCP-SL y se logró liberar a numerosos indígenas que se hallaban secuestrados y por el PCP-SL. A principios de 1991, se calculaba que éstos eran cerca de 10 mil. Ese mismo año, sólo en la zona del río Ene fueron rescatados cerca de 3 mil asháninkas. La recuperación de los asháninkas secuestrados no fue fácil. Tal como se ha descrito, el PCP-SL les había dicho que, si eran recuperados por los ronderos o por el Ejército, iban a sufrir torturas terribles. Por eso, cuando los ronderos o los militares se les acercaban en el bosque, huían despavoridos a pesar de que tampoco deseaban continuar bajo el mando de los subversivos. Al mismo tiempo, los integrantes del PCP-SL se defendían militarmente y seguían hostigando a las poblaciones desplazadas a través de tiroteos periódicos y la destrucción de sus chacras y sembríos.

#### 8.6. LOS NÚCLEOS POBLACIONALES

Entre 1993 y 1995, el número de asháninkas rescatados de manos del PCP-SL creció. Las personas recuperadas eran llevadas a las comunidades de refugio o núcleos poblacionales,<sup>322</sup> donde eran vigiladas de cerca. En muchos casos, los recuperados fueron sometidos a intensos interrogatorios por los militares. Durante estos años, Puerto Ocopa, Poyeni y Betania en la cuenca del Tambo, y Cutivireni y Valle Esmeralda, en el río Ene, se convirtieron en comunidades que recibieron a cientos de familias que escaparon del PCP-SL o que fueron rescatadas en patrullajes.

Las condiciones de hacinamiento, aislamiento y escasez de recursos hicieron difícil la supervivencia en las comunidades de refugio. Los niveles de morbilidad y mortalidad eran altos debido a la desnutrición o malnutrición con que llegaban los asháninkas refugiados. El hacinamiento aceleraba la propagación de enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, cólera y malaria. Esta situación se agudizó por la escasez de recursos, el aislamiento debido a la destrucción de vías de acceso y la presencia constante del PCP-SL en la región. Los espacios para la producción y para la vivienda eran reducidos. Los servicios de salud y educación eran insuficientes, así como el acceso al soporte de instituciones de las ciudades más cercanas. El deterioro en las condiciones de vida en estos centros poblados hizo que se requirieran con urgencia ayuda alimentaria y asistencia médica.<sup>323</sup> Sin embargo, muchos asháninkas no deseaban recibir alimentos a los que no estaban acostumbrados (como harina de soya, leche o trigo). La desnutrición se acentuaba en la medida en que faltaba una alimentación adecuada. La dieta básica de una familia nativa se compone usualmente de carbohidratos (yuca, plátano) y proteínas (maní, frijol, carne de monte y pescado). No obstante, dadas las condiciones, en las que era prácticamente imposible cultivar, cazar o pescar con tranquilidad, las fuentes proteínicas se redujeron considerablemente. Las condiciones de salud de los recién llegados era la peor, sobre todo la de los niños.

Para la mayoría de los asháninkas, fueran desplazados o anfitriones, esta experiencia fue muy dura. En general, sentían un gran malestar por tener que someterse a una vida en común y tener que adquirir costumbres nuevas. A algunos, el trabajo en común, las formaciones y prácticas paramilitares, así como las ollas comunes y otras costumbres, les hacía recordar, además, las obligaciones impuestas por los subversivos y, por ello, las rechazaban con firmeza. Los ancianos y ancianas eran los que menos toleraban los cambios y la disciplina y muchos fallecieron deprimidos por este motivo, mientras que varias parejas y familias jóvenes huyeron al monte buscando su libertad. Muchos niños no querían ir a la escuela, sino que preferían jugar todo el día o acompañar a sus padres en sus tareas. En sus juegos, los niños hacían referencia constante a la realidad de violencia a la que fueron sometidos y que no llegaban a comprender del todo. A esta situación, se sumaba el constante temor ante posibles ataques o represalias del PCP-SL. Por ello, se construyeron trincheras debajo de las casas para refugiarse en caso de ataques.<sup>324</sup> Estos temores no eran infundados, ya que grupos del PCP-SL hostigaban constantemente a estas comunidades disparando en dirección de

<sup>322</sup> El término núcleo poblacional fue acuñado por algunos estudiosos debido a que la legislación internacional no reconoce la existencia de refugiados internos sino tan sólo de desplazados.

<sup>323</sup> La Iglesia Católica, por medio del CAAAP, implementó un proyecto de emergencia para los asháninkas desplazados. Este proyecto incluía programas de alimentación, salud, organización y asesoría legal. Asimismo, el gobierno central apoyó con ropa, frazadas, armamento, entre otros. El municipio apoyó con combustible para el desplazamiento de los ronderos por el río.

<sup>324</sup> La mayoría de casas asháninkas en la zona se hallan construidas a cierta altura del suelo. Ésta es una práctica común en la Amazonía para evitar que el suelo húmedo perjudique la salud de sus habitantes. Por ello, resultaba posible construir trincheras debajo de las casas.

las casas, o destruyendo, durante la noche, las chacras y cultivos. Ningún comunero podía alejarse de las casas sin protección y las actividades usuales para conseguir alimentos, como la pesca, caza o agricultura, se vieron restringidas y tenían que realizarse siempre bajo la protección de las rondas. Sin embargo, estas medidas de precaución no pudieron evitar la muerte de varios asháninkas que fueron emboscados mientras iban a sus chacras o a pescar en el río. También se multiplicaron las tensiones y conflictos, solapados o explícitos, entre familias provenientes de diferentes comunidades, o debido al grado de simpatía o de rechazo que se tuvo hacia el PCP-SL.<sup>325</sup> Tal fue el caso de los refugiados de Otica en Poyeni.

#### 8.6.1. La marginación de Otica en Poyeni

Cuando los refugiados de Otica llegaron a Poyeni, los ronderos de Poyeni dejaron entrar al grupo: «Cuando llegamos, ya estaba ahí mi compadre; él me reconoció y me defendió de los ronderos [...] Por eso, nos dejaron entrar». <sup>326</sup> De no ser así, «los ronderos hubieran dado muerte a los hombres y mujeres mandos, como lo hicieron con los refugiados que llegaron de otras comunidades [...] nosotros veíamos pasar después los cuerpos flotando en el río [...].»<sup>327</sup>

La base de la Marina de Guerra en la ciudad de Atalaya envió un destacamento para instalarse en Poyeni. La Marina de Guerra interrogó a todo el grupo de Otica y los ubicó en diferentes sectores de la comunidad. Al finalizar los interrogatorios, se asignó un sector para los de Otica, pero algunas personas eran rotadas periódicamente. Esto es, varias familias eran sacadas del sector Otica y eran colocadas en medio del sector Poyeni para ser vigiladas. Los huérfanos fueron repartidos en diferentes casas y muchas veces fueron maltratados. Incluso se presentaron casos de violación sexual. El caso más grave fue la violación de un bebé de meses de nacido, que murió a causa de dicha violación.<sup>328</sup>

La gente de Poyeni estigmatizaba a la de Otica como subversivos. Ello generaba rencillas y discusiones. A pesar de que se apoyó a la comunidad de Otica con algo de alimentación, ropa y cultivos, las familias de Otikeñas recibían un trato discriminatorio en el reparto del apoyo recibido de instituciones públicas o privadas.

Otica, como las demás comunidades refugiadas, tenía un jefe, pero éste no tenía poder. Sus funciones se restringían principalmente a la organización del trabajo comunal de su grupo. Los jefes de las comunidades refugiadas estaban bajo el mando del jefe de Poyeni. Los hombres refugiados de todas las comunidades formaban parte de la ronda de Poyeni. En el caso de Otica, realizaron diversos patrullajes para recoger al grupo que no escapó con ellos: «Todos los hombres participamos en la ronda, después de que nos interrogaron y que nos observaron. Nosotros [de Otica] fuimos con los ronderos de Poyeni a buscar a nuestra gente que se quedó [oculta] en el monte». <sup>329</sup>

La gente de Poyeni sentía temor de que Otica se organizara para atacarlos, debido a que sospechaban que éstos seguían con el PCP-SL. Este temor persistió aun después de que Otica retornó a sus propias tierras.

Otra consecuencia de la violencia ha sido el cambio en las características demográficas del distrito. Se ha elevado el número de mujeres y niños, pero no de varones jóvenes o adultos, ya que muchos de ellos murieron en las incursiones o en los enfrentamientos armados. Tampoco existen muchas personas mayores, ya que gran cantidad de ancianos y ancianas murieron cuando estuvieron en los «comités de apoyo» o en los núcleos poblacionales, además de la poca expectativa de vida que comparte la mayoría de los pobladores de la región. Estos cambios demográficos obligaron a redefinir muchos aspectos de la vida cotidiana asháninka. Así, algunas de las tareas agrícolas que realizaban los varones adultos tuvieron que ser asumidas por las mujeres, que recargaron aún más sus tareas en la familia y en la comunidad. Los pocos varones adultos también vieron su trabajo recargado durante los años de violencia al tener que dedicarse a sus tareas de ronderos.

<sup>325</sup> Espinosa, Óscar (1995), ob. cit.; Vásquez, Norma y Leslie Villapolo. «Las consecuencias psicológicas y socioculturales del conflicto armado interno en la población infantil asháninka». En América Indígena 53 (1993): 103-124; Villapolo, Leslie. El PCP-SL del desengaño: construcción de memorias, identidades colectivas y proyectos de futuro en una comunidad asháninka. Lima: en prensa.

<sup>326</sup> Testimonio del mando político del «comité de base» Wacapú. Otica, noviembre de 2002.

<sup>327</sup> Información proporcionada por una profesional que trabajó en la comunidad en la década del noventa. Lima, noviembre de 2002.

<sup>328</sup> Información proporcionada por una profesional que trabajó en la comunidad en la década de 1990 cuando los otikeños vivieron como refugiados. Lima, noviembre de 2002.

<sup>329</sup> Máximo. Otica, septiembre de 2002.

Debido a la cantidad relativamente baja de varones, el número de ronderos era bastante reducido, aun en el caso de los núcleos poblacionales que agrupaban a diversas comunidades. Se calcula que, en el valle del Ene, había unos quinientos ronderos, mientras que, en el valle del Tambo, superaban los mil que, para una población de aproximadamente 20 mil personas, constituía un número relativamente pequeño. Sin embargo, toda la comunidad colaboraba con las rondas en las tareas de autodefensa, bajo la dirección de sus respectivas autoridades. Así, algunos ancianos, por ejemplo, apoyaban en tareas de vigilancia, aunque solamente durante las horas de luz y en los lugares menos peligrosos. Las mujeres también colaboraban con los ronderos, principalmente en las ollas comunes y asumiendo tareas que tradicionalmente correspondían a los varones asháninkas.

Debido a la existencia de guarniciones militares dentro de algunos de los núcleos poblacionales, los límites entre la vida civil y la vida militar se volvieron más tenues. Muchos aspectos de la rutina de las comunidades se militarizaron. Por ejemplo, los ronderos tenían que formarse, izar la bandera y cantar el himno nacional antes de pasar lista, todos los días, antes y después de volver de sus labores habituales, a las seis de la mañana y a las cinco de la tarde. También se puede apreciar esta militarización en el lenguaje utilizado por los ronderos, docentes y autoridades, así como en las formas de resolver conflictos. Esta influencia militar es tan fuerte que incluso en lugares como Poyeni, después de que la Marina de Guerra retiró su base, los ronderos continuaron realizando dichas prácticas. Como es de esperarse, también se produjeron tensiones entre los asháninkas y los militares. Si bien es cierto que esta relación dependía fundamentalmente de las actitudes individuales de los oficiales responsables de las guarniciones militares o de las decisiones provenientes del comando político militar, hay que señalar que, en muchos casos, la población civil tuvo que pagar un alto precio por el apoyo militar. La mayoría de los militares provenía de la costa o sierra y desconocía las costumbres de la selva. Debido a este desconocimiento, se cometieron muchos abusos por razones de intolerancia cultural. Nunca faltaba, además, algún militar que se aprovechaba de las mujeres o de los recursos y bienes de la comunidad. También surgían discrepancias para definir quiénes eran los protagonistas de las victorias locales.

En 1995, el PCP-SL se replegó hacia el Ene. En el Tambo, se comenzó a sentir tranquilidad. Se inició el proceso de retorno de las comunidades que habían permanecido en los núcleos poblacionales. Sin embargo, los ronderos eran conscientes de que la amenaza del PCP-SL no había desaparecido. Hasta la actualidad continúan realizando rondas de vigilancia en la comunidad.

#### **8.7. EL CONFLICTO ARMADO INTERNO EN LA ZONA DE LA CARRETERA MARGINAL**

La Carretera Marginal es la vía que une las ciudades de La Merced y Satipo y conecta, además, los distritos de Río Negro, Satipo y Mazamari y las zonas rurales alrededor de las ciudades principales. Una característica de esta zona es la fuerte presión de la ola colonizadora que ha sufrido este territorio tradicional de los pueblos asháninka y nomatsiguenga desde fines del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, ante la penetración colonizadora de Satipo, Chanchamayo y Oxapampa, los asháninkas fueron forzados a retirarse a las zonas periféricas y, durante el siglo XX, estos pueblos han visto fragmentado y reducido su territorio. Actualmente, sus comunidades se encuentran cercadas por anexos o parcelas de colonos. Éste es el caso de Cushiviani, comunidad que fue parte de este estudio. En esta zona conviven, pues, asháninkas, nomatsiguengas y colonos mestizos.

En esta zona, el PCP-SL tuvo una fuerte presencia y realizó ataques, saqueos, secuestros de niños y jóvenes y asesinatos selectivos. Ello generó el desplazamiento masivo de muchas comunidades nativas y colonas hacia las ciudades. Los integrantes del PCP-SL llegaron principalmente por los corredores o quebradas desde la cuenca del río Ene a partir de mediados de la década de 1980. Asimismo, hubo cierta presencia del MRTA, aunque sus miembros fueron desplazados por el PCP-SL.

##### **8.7.1. El control de Satipo por el PCP-SL (1987-1990)**

En 1987, el PCP-SL cometió los primeros asesinatos selectivos de autoridades en las comunidades colonas. A partir de ese año, se comenzaron a producir incursiones esporádicas del PCP-SL en la zona de la carretera Marginal. En el distrito Río Negro, por ejemplo, los comuneros presenciaron el tránsito de subversivos armados desde 1988. El PCP-SL ingresaba a las asambleas de las comunidades más lejanas. Estas incursiones eran acompañadas de saqueos. Lo mismo ocurría en el distrito de San Martín de Pangoa. Durante 1989, el PCP-SL intensificó el reclutamiento de jóvenes y niños tanto en las ciudades como en las zonas rurales vecinas a la

carretera. El PCP-SL ingresó en repetidas oportunidades en los centros educativos, dio charlas de adoctrinamiento e identificó a aquellos estudiantes que tenían las notas más altas. Luego, pedía adeptos voluntarios y ofrecía riquezas, mientras que, en otros casos, secuestraba a los jóvenes.<sup>330</sup>

Entre 1989 y 1990, el PCP-SL inició también aquí el proceso de adoctrinamiento clandestino de líderes y autoridades de las comunidades colonas, y continuó con el asesinato selectivo de colonos. Debido a su estrategia de terror, hacia 1990 llegó a controlar gran parte de la provincia de Satipo.

Ante estos hechos, las comunidades reactivaron sus sistemas tradicionales de vigilancia con personas ajenas a la comunidad. Esta especie de ronda secreta trataba de determinar cuándo y qué personas extrañas transitaban por la comunidad para estar alertas ante cualquier posible ataque. En varias comunidades, los comuneros pernoctaban en sus casas o escondites del monte y bajaban al poblado durante el día para asistir a la escuela y realizar otras actividades.

Por esos mismos años, el MRTA también recorría esta zona. En 1990, en el valle de Tsiriari, distrito de Mazamari, algunas comunidades colonas tenían cierta simpatía hacia el MRTA, dado que les ofrecía protección frente al PCP-SL. En la comunidad colona Dos de Mayo, MC, quien había simpatizado previamente con el PCP-SL, decidió apoyar al MRTA después de regresar de Huancayo en 1990. Al regresar a Dos de Mayo, comprometió a toda su comunidad con el MRTA para protegerse del PCP-SL: «Lo buscaban los rojos por haberle traicionado».<sup>331</sup>

El mismo año, tres varones de Dos de Mayo fueron acusados por su comunidad de pertenecer al PCP-SL, ya que no tenían documentos. Un grupo de ronderos sacó a los tres comuneros y, con el pretexto de llevarlos a la Comandancia de Mazamari, los asesinaron y desaparecieron.<sup>332</sup> Luego, regresaron a la comunidad y la obligaron a organizarse en rondas aduciendo que los integrantes del PCP-SL se vengarían, pues los tres hombres capturados habían escapado y les avisarían: «[...] el día del asesinato se organizan en comunidad en ronda porque ellos dijeron que se escapó, que con los rojos [integrantes del PCP-SL] se ha ido, que él puede buscar la venganza entonces [...] se ha ido con los rojos [integrantes del PCP-SL] y, en cualquier momento, puede venir a matar a nuestras casas, así ha hecho creer».<sup>333</sup>

La ronda campesina de Dos de Mayo comenzó a presionar a las demás comunidades colonas y nativas del valle de Tsiriari para que se organicen también en rondas:

[...] la ronda Dos de Mayo, de ahí empezaron a golpearlos acá a la gente, acá de cada anexo, de ahí obligatoriamente cada noche teníamos que organizarnos porque había contradicciones, comunidad que no están organizados. «Por qué, por qué no quieren organizarse ellos, tal vez ellos están juntos con ellos, tal vez, tal vez ellos estaban de acuerdo con el PCP-SL». Entonces, para evitar problemas todos las comunidades teníamos que organizarnos en las rondas campesinas.<sup>334</sup>

En 1990, el PCP-SL cometió asesinatos selectivos en las comunidades colonas Unión, Santa Isabel, Dos de Mayo y San Francisco de Cubaro. En la comunidad colona Monterrico, llevó a cabo una primera matanza.<sup>335</sup>

Después de la matanza de 15 ronderos en Dos de Mayo, las condiciones de inseguridad se hicieron intolerables. Las comunidades del valle de Tsiriari se desplazaron masivamente a la ciudad de Mazamari. El rechazo hacia PCP-SL se generalizó. El 17 de febrero de 1990, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) publicó un comunicado en el que denunciaba la violencia en la selva central, demandaba una exhaustiva investigación y sanción de responsables y exigía que el Estado asumiera su papel en la pacificación. Ese mismo año, la comunidad de Cushiviani marchó hacia Satipo gritando consignas contra la subversión y a favor de la pacificación. El 25 de septiembre de 1990 se produjo un enfrentamiento entre los ronderos y el PCP-SL en la zona conocida como La Roca.<sup>336</sup> Este enfrentamiento fue interpretado por los desplazados

<sup>330</sup> Un caso emblemático de esta práctica fue el secuestro de Juan Beto Umaña Chiricente, segundo hijo de Luzmila Chiricente, conocida dirigente asháninka, que presentó su testimonio en la Audiencia Pública realizada por la CVR en Huancayo.

<sup>331</sup> Ibídem.

<sup>332</sup> El asesinato de uno de los comuneros habría saldado un problema familiar interno en la comunidad de Dos de Mayo. Apuntes de campo. Entrevista con comunera de Dos de Mayo, diciembre de 2002.

<sup>333</sup> CVR. Informante mujer, 35 años aproximadamente.

<sup>334</sup> Asamblea Comunal, octubre de 2002.

<sup>335</sup> En esta comunidad ocurrieron tres matanzas: en 1990, 1993 y 1994.

<sup>336</sup> Lugar situado cerca del kilómetro 14 de la carretera Mazamari - Puerto Ocopa.

como una derrota del PCP-SL. Por ello, muchos pobladores del valle de Tsiriari decidieron regresar a sus respectivas comunidades a partir de junio de 1991.

### 8.8. CONTRAOFENSIVA MILITAR

La provincia de Satipo dependía militarmente del comando político militar del Frente Mantaro. Cuando el general EP Pérez Documet estuvo a cargo del comando político militar en Huancayo, el Ejército le dio gran importancia a la formación de rondas campesinas en todo el territorio bajo su mando, incluyendo la provincia de Satipo. En la selva central, el Estado comenzó a fomentar de una manera más sistemática estas organizaciones de la población civil y a darles armas como parte de una estrategia *contrasubversiva* más decidida. El mismo presidente Alberto Fujimori fue en varias ocasiones a Satipo a entregar armas a los ronderos. Por su parte, desde 1990, algunas de las organizaciones indígenas de la región, como la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (CECONSEC) o la Federación de Comunidades Nativas Campa (FECONACA), también promovieron la organización de rondas o CAD asháninkas. Se calcula que, en estos años, había entre 10 mil y 14 mil ronderos, entre colonos y asháninkas, en la provincia de Satipo.

Tanto la estrategia del PCP-SL de tomar represalias contra aquellas comunidades que formaban rondas como la estrategia de considerar como posibles integrantes del PCP-SL a aquellas comunidades que se oponían a formar rondas, polarizó a la población civil y colocó a aquellos que no querían participar activamente entre dos fuegos.<sup>337</sup>

Un caso emblemático fue el de la comunidad de Cushiviani, ubicada a 3 kilómetros de la carretera Marginal, a unos veinte minutos en auto de la ciudad de Satipo.

#### 8.8.1. Conflictos internos en Cushiviani

El 3 de enero del año 1991, se produjo la única incursión del PCP-SL en Cushiviani. Luzmila Chiricente, presidenta de la comunidad en ese entonces, recuerda lo que ocurrió esa mañana:

Vino el PCP-SL a querernos matar porque yo era motivadora de rondas. Tomaron el local comunal. Primero vinieron dos mandos, era muy temprano, buscaban al jefe. Se presentaron como compañeros y les encañonaron con metralletas. [Luzmila les preguntó] ¿Quién les ha dado permiso que tomen el local? [Le contestaron] Tú motivas a formar la ronda. [Ella refutó] Yo no voy a ir al local, yo quiero conversar de jefe a jefe. [Los subversivos] fueron al local comunal a traer al jefe. Apareció un pequeño, detrás venían hombres y mujeres armados. Ahí me asusté, mandé esconder a los chicos con el número de CAAAP y CIPA para que avisen si algo me pasa. Acorralaron mi casa. Entre los subversivos estaba mi sobrino [también llevado por el PCP-SL desde su escuela] [...] Después vino Pepe Campos y David Fernández; nos defendieron. Alguien que había visto desde arriba les avisó. Les dijeron a los senderistas [subversivos] de qué iban adoctrinar. Fue como un debate que duró hasta las dos de la tarde. Los senderistas [integrantes del PCP-SL] dijeron [que] como no están convencidos de nuestro trabajo van a regresar otras personas, en 15 días, que no van a ser tan compasivos como nosotros. [Ella les dijo] Tú devuélveme a mi hijo. [Le contestaron] Tu hijo va a regresar a matarte; él te llevará al cielo o al infierno.<sup>338</sup>

Mientras que la familia Chiricente recuerda estos hechos como una forma valiente de oponerse al PCP-SL, para la familia de AC era un hecho que demostraba la simpatía de los Chiricente hacia el PCP-SL. Desde fines de 1989, habían surgido tensiones entre Luzmila y AC y entre sus respectivas familias, debido a problemas administrativos dentro de FECONACA, organización regional a la cual pertenecían.<sup>339</sup> Los conflictos se agudizaron debido a que la familia de AC asumió rápidamente la propuesta del Ejército de formar un CAD y conformar una ronda en Yavirironi, mientras que la familia Chiricente consideraba que debían mantenerse al margen: «Como en la Constitución [Política] dice bien claro que zonas [de emergencia] más bien los militares deben asegurar a los ciudadanos [...] Y nosotros la vamos agarrar la Constitución [Política] cada vez que venía militares, para evitar que nos diga que [somos del] PCP-SL. Y hasta el último le hemos dicho, dime, esa Constitución Política, ¿quién ha elaborado: el gobierno o el PCP-SL? Queremos saber».<sup>340</sup>

<sup>337</sup> Veáse el sub capítulo sobre los CAD en el tomo II de este Informe.

<sup>338</sup> CVR. Testimonio de Luzmila Chiricente. Lima, mayo de 2002.

<sup>339</sup> Veáse el anexo del informe de la comunidad nativa Cushiviani.

<sup>340</sup> CVR. Testimonio de Luzmila Chiricente. Cushiviani, octubre de 2002.

Hacia 1992, el distanciamiento entre ambas familias se había agudizado. Las personas afines a Luzmila Chiricente eran sindicadas por las rondas de Yavirironi como supuestos integrantes del PCP-SL. Soldados de la base de Satipo, al mando del capitán EP Carlos Méndez, ingresaban a la comunidad ante cualquier acto sospechoso, incluyendo reuniones donde se coordinaban las tareas de construcción de una posta y una escuela con FONCODES; realizaban revisiones domiciliarias, los reclamaban y castigaban por no organizarse en rondas. Su relación con el CAAAP y CIPA fue un recurso para evitar que estos operativos se convirtieran en excesos.

Finalmente, la comunidad aceptó organizar su ronda: «[Cushiviani estaba considerado zona roja] porque solamente éramos la comunidad sobreviviente que no aceptaba la ronda [...] Comenzamos a decir en asamblea qué vamos hacer, ¿no? Y la gente ya nos viene [a presionar] y hasta la Federación nos manda ronderos diciendo si no hacemos, cualquier momento vienen los ronderos y ya veremos qué es lo que va a pasar. Entonces, ya, pues, acatamos crear la ronda campesina; al final, es la misma cosa».<sup>341</sup> Pero esto no significó la reconciliación entre ambas familias.

En 1992, Luzmila fue invitada por el capitán EP Carlos Méndez para despedirse: «Este convenio [mediante el cual las rondas campesinas daban información sobre la presencia de probables subversivos al Ejército] voy a romper delante de ti [...] porque crea problemas internos. El Ejército ha perdido tiempo». Poco tiempo después, en 1993, el Ejército se retiró de la zona.

En esta época, se presentaron varias denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército o los ronderos contra la población civil. Por ejemplo, una noticia periodística daba cuenta de que el 28 de octubre de 1991, los ronderos de la comunidad de Pitatos secuestraron a la dirigente Lidia López y a otros seis miembros de su familia, entre los que se encontraban varios niños. Según esta información, los ronderos obedecían las órdenes de jefes militares (Desco, 28 de noviembre de 1991). Sin embargo, la noticia que puso a los pueblos indígenas de la selva central en la escena nacional e internacional fue la matanza realizada por el PCP-SL, el 18 de agosto de 1993 en ocho comunidades (seis colonas y dos asháninkas) del valle de Tsiriari.

La tarde del 18 de agosto de 1993, tres columnas subversivas, integrada cada una por unos setenta colonos y nativos aproximadamente,<sup>342</sup> ingresaron a ocho comunidades del valle de Tsiriari. Seis de éstas eran colonas (Monterrico, San Isidro, Sol de Oro, Unión Cubaro, San Francisco de Cubaro y Santa Isabel) y dos nativas (Pueblo Libre y Tahuantinsuyo). Se presentaron como ronderos y asesinaron cruelmente a muchos colonos y nativos y luego saquearon las casas, llevándose enseres domésticos, medicinas y animales menores.

### 8.8.2. Matanza en Tahuantinsuyo

Alrededor de las 4:00 p.m., un grupo del PCP-SL llegó a la comunidad nomatsiguenga Tahuantinsuyo. Algunas familias se encontraban en sus chacras y otras en el pueblo. Rodearon la casa del presidente de la comunidad y convocaron a toda la gente que estaba en el pueblo a una asamblea. Sacaron por la fuerza a aquellos que se encontraban en sus casas. Se identificaron como un grupo de ronderos.

Cuando estábamos [...] nosotros trabajando en la chacra, mi esposo estaba cortando plátano el día miércoles, estaba cortando [...] y le digo a mi esposo, yo me voy para la casa, no tengo ganas de trabajar [...] Váyate, cocíname, me dijo [...] y ahí ya estaba cocinándole y primero ha llegado el mayor de mis hijos y dice mamá, ha venido rondero. ¡Qué rondero va a venir acá, si rondero nunca ha venido hijito! [Uno de estos supuestos ronderos] de frente me apuntó cuando estaba ahí en cocina, me apuntó y le dije ¡qué cosa, si tú eres rondero, debes venir bonito! [...] Yo no te he hecho nada para que me apunte[s]. ¡Tu marido!, me dice, ¡tu marido! No está mi marido, se ha ido a trabajar a la chacra. ¡Avísale rápido!, me ha dicho, ¡si no, te mato! Y me dice y ya me dejó, y ya mi esposo había venido de la chacra y ahí nomás le han agarrado [...] Agarrando su mano y le ha llevado y yo [...] por seguir a mis hijos también he seguido en su atrás y para llegar a la plaza había bastantes [...] Conocido había ido enmascarado, debe ser de vecino [...]<sup>343</sup>

Reunieron a las familias en el local comunal. Allí les reclamaron por haberse organizado en rondas. Uno a uno, hombres y mujeres fueron sacados del local comunal y eran entregados a dos subversivos para que éstos

<sup>341</sup> Ibídem.

<sup>342</sup> No se cuenta con la cifra exacta de sus integrantes, sin embargo, los testigos calculan que fueron entre cien y trescientos hombres, mujeres y niños, colonos y paisanos.

<sup>343</sup> CVR. Testimonio de sobreviviente de la matanza, mujer de 38 años aproximadamente.

les dieran muerte: «cuando he escuchado, cuando se han gritado las mujeres, cuando le han matado, jay, me está matando! ¡Del PCP-SL es, no es rondero! Ahí recién la gente se ha dado cuenta [...].»<sup>344</sup> Los niños fueron macheteados en el local comunal, «vamos al local [a su tía] le dijeron, y yo quise escaparme, y yo tenía mi primo y, como éramos chibolos [niños], nos hemos ido juntos y hemos llegado a la plaza [en el local comunal] y a uno de mis tíos les han llevado afuera ¿Qué le habrán hecho? Nos han empezado a machetear a nosotros [los niños], nos han cortado con machete, nos han caído al suelo [...] y nos hemos quedado ahí. Parece que me he bañado con agua [...] los demás estaban tirado ahí, no sentía nada de dolor». <sup>345</sup>

Al oír los gritos de sus paisanos, el resto de la población que se encontraba en sus chacras se escondió en el monte y pasó la noche allí. Al día siguiente, algunos bajaron y encontraron los cuerpos dispersos en la carretera, la plaza del pueblo y la posta. Otros pobladores se quedaron tres días en el monte. Fueron 21 los muertos entre niños, varones y mujeres.

Los asesinatos habrían sido cometidos con arma blanca (flechas y machetes); otros fueron ahorcados con pitas. De las cinco mujeres asesinadas, dos tenían aspecto de haber sido violadas. A dos de ellas les habían cercenado uno de los senos y a la quinta se le extrajo el feto del vientre. «Sí, después que le han matado, le habrán violado así pues, todo calata le han dejado, todo su ropa, todo le han llevado, no tiene ropa, visible cuando está botado ahí, no hay ropa [...].»<sup>346</sup>

El jueves 19 de agosto, los pobladores que bajaron del monte dieron aviso al Ejército de la base de Mazamari. Éste puso a disposición un helicóptero para el traslado de los 11 sobrevivientes a las ciudades de Lima y Satipo. Uno de ellos murió en el hospital de Satipo. El Ejército ayudó a cavar la fosa donde posteriormente fueron enterrados los cadáveres. El entierro no se pudo concluir: «[Los miembros del Ejército] se fueron y han aparecido [los miembros del PCP-SL], al toque cuando estábamos enterrando [...] Ya nos hemos escapado para el monte ya, al rincón. Eran las cinco de la tarde, escapamos, y ahí nos camuflamos en el monte y toda la noche han pasado [PCP-SL] por acá, o sea, toda la noche se pasaron con su gallina, chancho, pollo, plato, olla, no sé cuánto han pasado [...] Hemos estado escuchando [...].»<sup>347</sup>

El viernes 20 de agosto terminaron de enterrar a los muertos con la ayuda de cuatro comuneros que llegaron de Mazamari. La exposición de los cadáveres durante un tiempo prolongado ocasionó su rápida descomposición, acelerada además a causa del calor y la lluvia. El olor y el estado de putrefacción de los cuerpos es una de las cosas que los pobladores recuerdan de los días posteriores a la matanza: «Ya no se podía ni comer, ni ganas, ni comida, ni hambre, el olor está en el cuerpo, todo su estómago está como líquido, está cortado. Por acá lo alzamos, se le había hinchado la barriga y la pestilencia. Nos pusimos a vomitar, ya no se podía aguantar, vómito, vómito, así hemos tenido que acabar de enterrar, así hemos acabado de enterrar, triste [...].»<sup>348</sup>

Varios medios de comunicación difundieron la noticia como la «masacre asháninka», ocurrida en la comunidad de Tsiriari (Mazamari) el 19 de agosto de 1993, con un total de 65 asháninkas muertos.<sup>349</sup> La información fue equivocada tanto en el lugar como en la fecha y en el número de víctimas. La matanza fue en el valle de Tsiriari, el miércoles 18 de agosto. Del total de víctimas, sólo 21 eran nomatsiguenga; el resto eran colonos. Sin embargo, debido a la mala información, en más de una ocasión, el apoyo llegó a la comunidad de Tsiriari. En varias oportunidades, los desplazados que se encontraban en San Cristóbal tuvieron que caminar hasta la comunidad de Tsiriari con la finalidad de poder recibir las donaciones de frazadas, alimentos y ropa. Muchos de los pobladores afectados no recibieron nada. La noticia tuvo trascendencia internacional. El 20 de septiembre, el gobierno denunció ante las Naciones Unidas la masacre cometida por el PCP-SL en el valle de Tsiriari. El Congreso de la República pidió realizar una investigación e identificar a los culpables.

La残酷 de los hechos de agosto de 1993 podía haberse debido a uno o a varios motivos. Una posible causa podía haber sido la venganza del PCP-SL ante la muerte de dos de sus principales mandos en manos de los ronderos de la zona. Otra posible explicación era la reacción del PCP-SL ante el anuncio reiterado del go-

<sup>344</sup> Ibídem.

<sup>345</sup> CVR. Testimonio de sobreviviente, varón, 18 años.

<sup>346</sup> Ibídem.

<sup>347</sup> Ibídem.

<sup>348</sup> Informante, varón, 45 años aproximadamente.

<sup>349</sup> Véanse La Nación, 23 de agosto de 1993; La República, 3 de septiembre de 1993; El Comercio, 21 de septiembre de 1993; Expreso, 21 de septiembre de 1993; La República, 21 de septiembre de 1993 .

bierno y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la derrota militar del PCP-SL. En este sentido, esta acción tan sangrienta buscaba mostrar a la población que dichos anuncios eran excesivamente triunfalistas y, al mismo tiempo, enviaba un mensaje a la opinión pública nacional e internacional sobre su poderío militar. La proximidad al 12 de septiembre, fecha en que se capturó a Abimael Guzmán, refuerza esta última hipótesis. No hay que olvidar, además, que *Feliciano*, el sucesor de Abimael Guzmán en la conducción del PCP-SL actuaba en esta región. Finalmente, se ha argumentado que los conflictos entre asháninkas y colonos también han podido jugar un papel en estos hechos. Los comuneros de Tahuantinsuyo no tienen un discurso homogéneo sobre el motivo de la matanza. Niegan haber tenido contacto con el PCP-SL. Algunos piensan que la masacre fue una represalia del PCP-SL porque el ex presidente Fernando Quintimari, captado por el PCP-SL, no había cumplido con el compromiso, asumido poco antes de la matanza, de entregar a tres jóvenes.

#### 8.9. EL DIFÍCIL CAMINO DE RETORNO

En la selva central, el proceso del retorno de las familias desplazadas se inició oficialmente el 17 de septiembre de 1994 como parte de una campaña impulsada por el gobierno y las Fuerzas Armadas. En esta fecha, se dio inicio a lo que los medios de comunicación denominaron «la gran marcha asháninka», que llegó a congregar a más de quinientas personas. Sin embargo, fue sólo a partir de 1995 que la mayoría de familias desplazadas comenzó a retornar a los lugares donde quedaban sus comunidades originales. En muchos casos, los que volvían no eran los mismos que vivieron allí antes de las incursiones del PCP-SL. Muchos habían muerto; otros habían preferido huir al monte o hacia otras comunidades más lejanas. Algunos decidieron quedarse en las comunidades que los habían refugiado y otros, en fin, decidieron seguir a sus nuevas parejas o familias.

El retorno de las comunidades asháninkas desplazadas tampoco ha constituido un proceso homogéneo. Por el contrario, cada comunidad ha seguido un patrón distinto de retorno. Esto indica claramente que no ha existido un plan o estrategia de parte del gobierno para facilitar este proceso a pesar de la información que algunos medios de comunicación transmitieron al respecto. Así, se ha podido detectar diversas estrategias de retorno utilizadas por las comunidades: en algunos casos, se trasladaron comunidades enteras sin contar con recursos adecuados para su subsistencia y su reasentamiento; en otros casos, se produjo un retorno gradual o progresivo, que aseguró condiciones mínimas para el reasentamiento; finalmente, otras comunidades contaron con el apoyo de instituciones de fuera de la comunidad. De estas modalidades, la que mejor resultado ha tenido ha sido el retorno gradual y progresivo liderado por la misma comunidad retornante. Ha fracasado el reasentamiento de aquellas comunidades que fueron forzadas a acelerar su retorno sin las condiciones adecuadas. En esos casos, incluso han tenido que volver a las comunidades donde se encontraban refugiadas o han tenido que buscar refugio en otras comunidades. Este fracaso, además de su costo psicológico (expectativas frustradas, dificultades para insertarse de nuevo en otra comunidad anfitriona, etc.) ha supuesto también la muerte de las personas más débiles de la comunidad, en particular de niños y ancianos.

Luego del retorno, las actividades familiares y comunales fueron recuperándose paulatinamente y los papeles, la comunicación y las relaciones familiares se fueron regularizando, aunque también son evidentes los traumas y secuelas de la violencia hasta el día de hoy.<sup>350</sup> También han existido problemas con las condiciones materiales necesarias para normalizar la vida de los asháninkas. Las casas y chacras de las comunidades originales habían sido destruidas por el PCP-SL o por el tiempo. En muchos lugares, el bosque había devorado las zonas de cultivo. Volver a la propia tierra significó un esfuerzo muy grande. Para muchos, también el regreso significaba reabrir heridas que habían sido ocultadas por el olvido. El recuerdo de la violencia sufrida, de las pérdidas y separaciones se hizo más patente. A partir de 1995, se comenzó a regularizar el tránsito por vía terrestre y fluvial interrumpido por varios años. En 1994, ya se había reactivado la CART, que organizó su VII Congreso. En esta época, las rondas de Poyeni y Puerto Ocopa recién se conocieron y se unificaron. Hacia fines de la década de 1990, algunas familias también pudieron retomar sus cultivos orientados hacia el mercado (el café, por ejemplo), así como actividades de comercialización, aunque todavía de forma incipiente. En estos años, retornan o ingresan organizaciones no gubernamentales para trabajar con las comunidades del Tambo, que ayudan a afrontar las secuelas del conflicto armado interno. No obstante, también han llegado empresas madereras y petroleras nacionales y extranjeras y grupos de colonos de origen andino. La aparición

<sup>350</sup> Villapol, «Informe 94: Trabajo de apoyo psicológico y sociocultural a la población asháninka de Puerto Ocopa». Documento interno inédito del CAAAP, 1994.

de estos últimos ha significado, en muchos casos, la reapertura de tensiones y conflictos en torno a la propiedad de las tierras, así como el recuerdo de la llegada de PCP-SL y del narcotráfico asociados con ellos.

#### 8.10. EL EJÉRCITO ASHÁNINKA Y EL MRTA EN OXAPAMPA (1989-1990)

La provincia de Oxapampa constituye un corredor hacia el nororiente, en particular hacia Ucayali (a través de los ríos Pichis y Palcazu). Al mismo tiempo, constituye una vía de acceso hacia Cerro de Pasco y de ahí hacia Huánuco y el Alto Huallaga o bien hacia Aguaytía y el Ucayali.

A fines de 1989, una columna del MRTA asesinó a tres dirigentes asháninkas, entre ellos a Alejandro Calderón, *pinkázari* [gran jefe] y presidente de la ANAP (Apatyawaka Nampitsi Asháninka), la federación que agrupa a 52 comunidades nativas del río Pichis y afluentes. Esto motivó un levantamiento y la conformación de un ejército propio para combatir al MRTA.

El origen de este conflicto entre el MRTA y los asháninkas del Pichis se remonta a la época de las guerrillas que actuaron en la zona en la década de 1960. En dicha época, se creó el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), uno de varios partidos políticos que, inspirados en la revolución cubana, optaban por la lucha armada foquista.<sup>351</sup>

En ese entonces, la columna liderada por Lobatón y Velando, que contaba ya con varias bajas y heridos, se vio obligada a replegarse hacia la selva central en busca de refugio, donde entraron en contacto con los asháninkas. A pesar de no simpatizar mucho con los indígenas, los guerrilleros encontraron cierto apoyo entre ellos, pero también encontraron resistencia y rechazo de parte de otros. Conforme los guerrilleros se iban replegando hacia la selva, el Ejército iba acercándose más y reprimiendo también a la población civil sospechosa de apoyar a la guerrilla. Por ello, muchos asháninkas se vieron obligados a abandonar sus casas y huir hacia el monte para protegerse. Finalmente, a principios de 1966, el Ejército detuvo a los últimos guerrilleros con la colaboración de algunos asháninkas. La mayoría de los integrantes del MIR y los asháninkas que los acompañaban fueron muertos en combate o en ajusticiamientos extrajudiciales. Los pocos sobrevivientes fueron encarcelados. Al parecer, uno de los asháninkas que colaboró con el Ejército en la captura de los guerrilleros había sido Alejandro Calderón, que ya entonces era un importante líder de las comunidades ubicadas en el valle del río Pichis. Por ello, 25 años después, el MRTA lo asesinó. Sin embargo, unos días después, algunos de los principales dirigentes del MRTA reconocieron el error táctico de este ajusticiamiento.

Los asháninkas reaccionaron rápidamente ante el asesinato de su líder. Decidieron organizar un ejército asháninka para expulsar al MRTA y a cualquier grupo armado de su territorio. Como se ha descrito, la conformación de ejércitos temporales constituye una práctica tradicional de los asháninkas. En este caso, los asháninkas del Pichis y afluentes no sólo reaccionaban ante el asesinato alevoso de sus dirigentes, sino también sentían que ya no toleraban más abusos. Según los indígenas de la zona, con el pretexto de ayudar a los pobres, lo único que hacía el MRTA (y también el PCP-SL) era destruir y matar, llevarse a los jóvenes y quitarles sus tierras. Por ello, decidieron poner un alto a la violencia.

La decisión de los líderes asháninkas fue imponer su autoridad dentro de la provincia de Oxapampa. Así, tomaron las ciudades de Puerto Bermúdez y Ciudad Constitución, y colocaron puestos de vigilancia para controlar el tránsito por las principales vías y carreteras. También empadronaron y dieron carnés a los nativos y colonos. En algunos casos, se produjeron abusos contra colonos en manos de indígenas. A pesar de todas estas acciones, no se llegó a producir ningún enfrentamiento militar con el MRTA como se temía, ya que justamente, en diciembre, el Ejército tomó el campamento de El Chaparral, la base más importante del MRTA en la zona. Los subversivos tuvieron que dispersarse por distintos lugares. Durante todo ese tiempo, el Ejército y las Fuerzas Armadas no intervinieron contra el ejército asháninka. Incluso llegaron a realizar coordinaciones entre ellos. Finalmente, en marzo de 1990, el ejército asháninka dio por concluida su labor al haber expulsado al MRTA de su territorio. Sin embargo, esta expulsión no significó la desaparición de la violencia en la provincia. A fines de 1991, apareció una columna del PCP-SL que realizó incursiones en las comunidades y anexos, ajusticiando y

---

<sup>351</sup> El MIR, al igual que el MRTA después, tenía sus orígenes en el Partido Aprista Peruano (PAP). Un grupo de jóvenes disidentes del PAP, bajo el liderazgo de Luis de la Puente Uceda, formó el PAP-Rebelde, que luego se convertiría en el MIR.

asesinando cruelmente a numerosos campesinos. En esta misma época, el MRTA comenzó una fuerte campaña, esta vez contra objetivos militares, y realizó ataques frecuentes contra la base militar de Villa Rica.



#### 8.10.1. Zona de la provincia de Chanchamayo

Esta zona es la puerta de entrada a la región amazónica desde la sierra central (La Merced/Huancayo-Tarma) y posee, por lo tanto, un gran valor estratégico. Cuenta con dos ciudades importantes La Merced y San Ramón con muy poca distancia entre ambas, que constituyen el centro urbano más importante de toda la región.

En esta provincia se produjeron numerosos atentados y asesinatos, sobre todo ajustes de cuentas entre miembros de los grupos subversivos, así como detenciones y abusos por las fuerzas del orden. La presencia subversiva también trajo consecuencias negativas para la economía de la región: afectó la producción agrícola,

la comercialización, la industria (pago de cupos), así como otros ámbitos de la vida social como la educación (deserción escolar y ausentismo de profesores), la salud (saqueo de botiquines comunales y secuestro de promotores de salud), etc. La población nativa o campesina, en muchos lugares, decidió organizarse para defender sus vidas y sus tierras. Algunas organizaciones nativas presentes en la zona, como la CECONSEC y la FECONACA, promovieron, desde 1990, la formación de rondas nativas. La Iglesia Católica, ante la situación de violencia, creó la Oficina Vicarial de Pastoral Social (COVIPAS) del Vicariato de San Ramón. Una de sus principales funciones fue la defensa de los derechos humanos.



Chanchamayo tuvo una fuerte presencia del PCP-SL y del MRTA y los pobladores locales distinguían entre ambos grupos subversivos llamándolos por colores: *negros* a los del MRTA y rojos a los del PCP-SL. En algunas zonas, se produjo una lucha entre el PCP-SL y el MRTA por el control político y militar. La principal

zona de acción del MRTA se ubicaba en los alrededores de la ciudad de Pichanaki, y a lo largo de la carretera que atraviesa el valle del Perené, con dirección a Satipo. El MRTA detenía frecuentemente a los vehículos que se desplazaban por la carretera, cobraba cupos (muchas veces en especies) y reunía a los pasajeros por espacio de dos o tres horas para adoctrinarlos. El centro urbano de Pichanaki creció mucho durante los años de la violencia debido a la migración de campesinos desplazados. Hacia fines de la década de 1980, el PCP-SL quiso intensificar su presencia en esta zona para consolidar el control territorial que ya incluía la provincia de Satipo. En 1989, el PCP-SL incursionó en diversas comunidades nativas y anexos campesinos, realizó «juicios populares» y asesinó autoridades y pobladores. Uno de los casos más conocidos fue el de La Florida, en el que asesinaron a una familia y a una religiosa de la congregación del Buen Pastor en 1989. Sin embargo, la relación relativamente menos violenta que estableció el MRTA con la población civil de la zona logró consolidar su presencia, mientras que se reducía la del PCP-SL. Muchas comunidades que fueron controladas por el PCP-SL pasaron a estar bajo el control del MRTA. El conflicto entre el PCP-SL y el MRTA fue muy violento y, hacia principios de la década de 1990, fueron frecuentes los asesinatos y ajusticiamientos en manos del bando enemigo. Este conflicto logró crear un ambiente de mucho temor y desconfianza entre la población civil, pues ésta no sabía a quiénes tenía delante: a los rojos o a los negros.

La estrategia contrasubversiva se intensificó hacia principios de la década de 1990. El principal cuartel militar de la zona era el del batallón de ingeniería Ollantaytambo (base de La Merced), pero éste tenía como especialidad la construcción y mantenimiento de carreteras y no la lucha *contrasubversiva*. Por ello, tuvo que solicitar apoyo de cuarteles militares ubicados en la sierra central (Jauja), que también asumieron el control de la base de Satipo. En varios casos, el Ejército cometió abusos como realizar patrullajes usando a campesinos como escudos, además de numerosas desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias, etc. También se sabe que el Ejército bombardeó más de una vez la zona desde helicópteros.

#### 8.11. RECURSOS CULTURALES DE SUPERVIVENCIA

Los estudios antropológicos sobre los asháninkas han destacado su cosmovisión, el grado de elasticidad y flexibilidad de su organización social,<sup>352</sup> su idioma y la fidelidad étnica a su territorio<sup>353</sup> como elementos que les han permitido mantener su cohesión e identidad cultural.<sup>354</sup> Varios autores describen a los asháninkas como «enamorados y orgullosos de su libertad».<sup>355</sup> A lo largo de la historia, los asháninkas han debido apelar a su tradición de guerreros para defender su territorio y su libertad.<sup>356</sup> Predominan entre ellos los valores de vida, relacionados con la actividad, movimiento, autonomía y utilidad.<sup>357</sup> La cosmovisión asháninka expresa y sustenta los nexos íntimos que mantiene con su sistema ecológico e ideológico. Así, por ejemplo, a través del mito de *Pachakamaite*, los asháninkas expresan sus expectativas de acceso a los bienes foráneos. Esperan el retorno de un ser divino, enviado por el Sol (Pavá, Tasoréntsi o Dios) para devolverles el acceso a los bienes y prosperidad que los foráneos les habrían arrebatado a lo largo de los siglos.<sup>358</sup>

---

<sup>352</sup> Veáñse Varese, S. La sal de los cerros. Una aproximación al mundo asháninka. Lima: Retablo de papel, 1973 y Weiss, G. «Campa cosmology: the world of a forest tribe in South America» En Anthropological papers of the American Museum of Natural History, vol. 52, n.º (5), 1975.

<sup>353</sup> Tradicionalmente, las movilizaciones se daban por razones culturales (matrimonio, desgaste de la tierra) sin sobrepasar las fronteras étnicas del grupo.

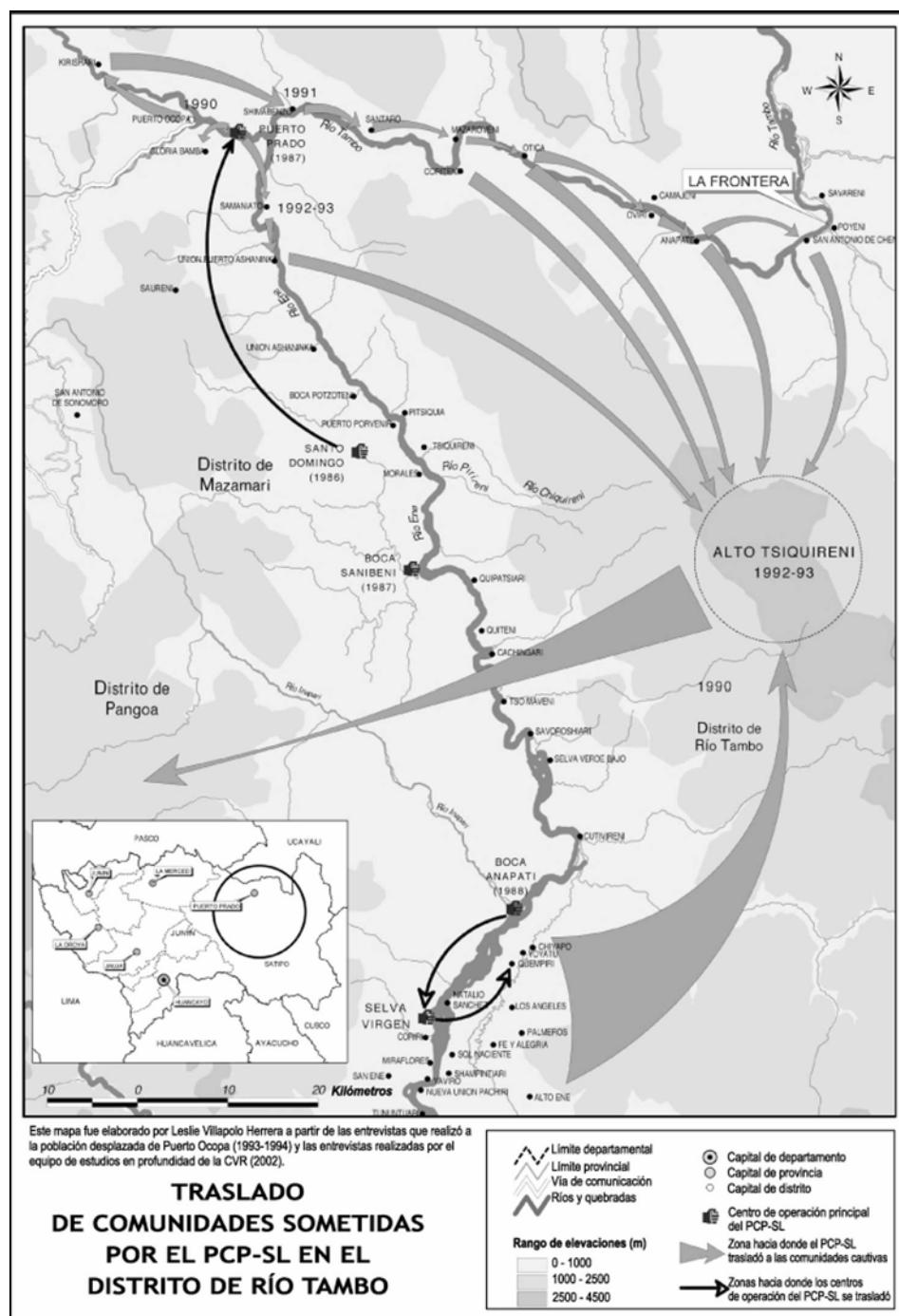
<sup>354</sup> Barclay, F. La colonia del Perené. Iquitos: Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA), 1989; Brown, M. y E. Fernández, E. War of Shadows; The struggle for Utopia in the Peruvian Amazon. California: University of California Press, 1991; Fernández, E. Para que nuestra historia no se pierda: testimonios de los asháninka y nomatsiguenga sobre la colonización de la región Satipo-Pangoa. Lima: CIPA, 1986; Chirif, A. «Identidad y movimiento organizativo en la Amazonía peruana» En Horizontes antropológicos: sociedades indígenas, año 3, vol. 6, n.º 6, 1996, pp. 135-159; Santos, F. «Integración económica, identidad y estrategias indígenas en la Amazonía». En Perú: problema agrario en debate. A. Chirif, N. Manrique, y A. Quijandría (ed.) Lima: SEPIA.

<sup>355</sup> Padre Gridilla, citado por Brown, M. y E. Fernández (1991). Ob. cit.

<sup>356</sup> Varese (1973). Ob. cit.; Weiss (1975). Ob. cit.; Espinosa, O. «Los asháninkas: guerreros en una historia de violencia». En: América indígena, vol. 53, n.º 4, 1993, pp. 45-60.

<sup>357</sup> Villapol, Leslie. Diagnóstico psicológico y sociocultural de la población infantil asháninka de Puerto Ocopa - Río Tambo. Documento interno inédito del CAAAP 1993.

<sup>358</sup> Esta creencia es similar al mito de Inkarrí andino y quizás también mezcle elementos indígenas y occidentales. Brown y Fernández 1991.



Los asháninkas han demostrado durante el conflicto armado interno y después de éste una serie de recursos culturales importantes que deberían ser fortalecidos. Entre los más destacados habría que mencionar:

- Aquellos que fueron más efectivos para lidiar con el trauma de la violencia: los lazos de parentesco extenso, la medicina tradicional para procesar secuelas psicosomáticas, la tradición de guerreros, la identidad cultural que tiene como eje la defensa de la tierra y la comunidad, la educación informal que fomenta la autonomía.
- Estrategias de protección, resistencia y rechazo frente a la dominación del PCP-SL: obediencia aparente a las normas, engaño, uso del idioma, sentido del humor, ocultar sentimientos y pensamientos, sus conocimientos sobre el medio ambiente y del bosque, entre otros.

- Los que no fueron efectivos: ritos para procesar duelos, culpas, procesos de reconciliación, administración de justicia, medicina tradicional para afrontar enfermedades psicosomáticas. En algunos casos, se acude a ritos cristianos para purgar culpas, pero la población sigue desconfiando de ellos.
- La flexibilidad de las mujeres para desarrollar mecanismos de supervivencia grupal y protección de la familia. Frente al olvido, la mujer se presenta como portadora de la memoria.
- Las organizaciones indígenas que comienzan a funcionar a fines de los años ochenta, se reestructuran hacia 1992 o 1993 y se convierten en interlocutores importantes frente al Estado y otras instituciones. Estas organizaciones articulan demandas alrededor de la defensa territorial, el rescate de población en manos del PCP-SL y la atención de población refugiada en emergencia. Se convierten también en espacios de formación para aquellos líderes ronderos que ganaron legitimidad durante el conflicto armado.
- La alianza estratégica con instituciones privadas, principalmente de las iglesias Católica y evangélicas, algunas ONG y los municipios, que funcionan como redes de soporte para algunas comunidades, principalmente en lo que respecta a recursos para la supervivencia y control frente a amenazas del Ejército y las rondas campesinas.

## 9. EL PCP-SL DURANTE EL AUGE DE LA HOJA DE COCA EN EL ALTO HUALLAGA

Mi pregunta es: ¿cómo se puede separar a la persona de mal vivir de la gente de buen vivir si todos están juntos?

Ex mando militar de pelotón.

El propósito de esta parte es examinar la manera como el PCP-SL, en su aspiración de proyecto de Estado alternativo, intervino en los puntos vitales del mercado de los derivados de la hoja de coca y reguló las relaciones sociales que se formaron alrededor de éste durante el auge de la droga en el Alto Huallaga. El PCP-SL no fue el único grupo que sostuvo una relación estrecha con el narcotráfico en el Huallaga. También lo hicieron, aunque de forma no declarada, las instituciones armadas, policiales y judiciales del Estado. Sin embargo, el PCP-SL fue la única fuerza que pretendió colocarse como administradora tanto del mercado como de la población en general en el contexto del *boom* de la hoja de coca.

Los años del apogeo del mercado de la droga fueron tiempos de exuberancia, desborde y experiencias límite, donde el anhelo personal era vivir lo más intensamente posible aunque en un ambiente social donde la vida humana se cotizaba cada vez a un menor precio. Encontrar un cadáver en cada esquina dejó de causar sorpresa e indignación. «Habrá sido por algo» era la explicación más frecuente que se daba ante estos hechos, lo que sugería que la propia persona se habría buscado aquel destino fatal. Ahora en el Alto Huallaga no hay un apogeo del narcotráfico pero el negocio ilícito continúa. Por eso, es importante señalar que apogeo no es sinónimo de narcotráfico y que la diferencia radica en un cambio de magnitud de las dimensiones sociales de la empresa de la droga.

Los cambios bruscos en los flujos de comercio y dinero liberados por el acontecimiento del boom tuvieron fuertes repercusiones en la gobernabilidad de la zona. La actividad económica de toda la región del Alto Huallaga dependía y se organizaba alrededor del narcotráfico, lo cual devino en la generalización y normalización de esta actividad a tal punto que se alteró el carácter ilegal de la droga, que se convirtió —en términos prácticos— en un producto lícito. Esta transformación tuvo consecuencias desastrosas para la legitimidad del Estado y, a la par, creó oportunidades inimaginables para el naciente proyecto del PCP-SL. Tales oportunidades liberaron, a su vez, otras fuerzas independientes, si no contrarias, que fueron perjudiciales para los fines declarados de su revolución.

La influencia del PCP-SL en el Alto Huallaga siguió un vector temporal que se inició a principios de la década de 1980 y comenzó, a partir de 1993, a perder fuerza rápidamente sin llegar a desaparecer por completo hasta la actualidad. Sin embargo, la dinámica del PCP-SL como organización a lo largo del apogeo del mercado de la droga en el Alto Huallaga es una historia relativamente mal entendida. La importancia de este estudio radica en que no sólo identifica en una de las dimensiones temporales más complejas del conflicto armado interno, en la que confluyeron una serie de intereses individuales e institucionales, sino también proporciona mayores elementos para entender el relativo éxito del PCP-SL y el descalabro de la presencia del Estado en el Alto Huallaga durante ese período.

¿Cuál fue la relación entre el proyecto político-militar que se conoce como el PCP-SL y el apogeo del narcotráfico en el Alto Huallaga? ¿Qué hizo el PCP-SL para convertirse, a los ojos de la población del Alto Huallaga, en un agente más eficaz y sensato que el Estado? ¿Cómo se convirtió el PCP-SL, con el transcurso del tiempo, en un obstáculo no sólo para las aspiraciones de las personas que llegaron al Alto Huallaga sino para el desarrollo del apogeo de la droga?

El espíritu del proyecto del PCP-SL fue altamente moralista. Es esencial, pues, considerar que el Alto Huallaga debió haber ejercido una fuerza de atracción para el PCP-SL en tanto centro de desorden social, fuera del control estatal, y que, por lo tanto, exigía o reclamaba su intervención. ¿En qué medida la vida desenfrenada del apogeo de la droga creó las condiciones en las cuales el mensaje justiciero del PCP-SL encontraría eco? ¿Es posible ver entre el PCP-SL y el apogeo de la droga, por lo tanto, una atracción ineludible de los extremos? ¿Una afinidad de opuestos que no se redujo a un interés meramente de este grupo subversivo en el sentido de sólo acaparar beneficios económicos del narcotráfico? Finalmente, ¿en qué forma intentó el PCP-SL regular el gasto irracional que produjo el apogeo de la droga y, progresivamente, acopiarlo para sus propios fines?

Esta serie de preguntas es relevante para la discusión sobre las diferentes expresiones que tuvo la subversión en el país. Es particularmente importante para determinar si, como se ha afirmado muchas veces, el PCP-SL en el Huallaga constituyó una desviación o degeneración de la organización que se forjó en Ayacucho o del proyecto tal como fue concebido por Abimael Guzmán.<sup>359</sup> Dichas apreciaciones poseen fundamentos, pero habría que examinar la realidad que el PCP-SL encontró en el Huallaga y las maneras específicas en que su proyecto político-militar se acopló a la economía del narcotráfico. Sobre todo, es importante entender cómo el PCP-SL, por medio de la imposición de una estructura de prohibiciones y sus correspondientes mecanismos de aplicación, buscó generar una legalidad propia —es decir, un sistema de reglas y sanciones alternativo al del Estado— que incorporara la producción y comercialización de los derivados de la coca en el Alto Huallaga como actividades lícitas.

Por último, es esencial reconocer, especialmente en lo que se refiere al Alto Huallaga (y su fuerza corruptora), que la zona marcó tanto al PCP-SL como el PCP-SL marcó a la zona. Por lo tanto, hay que tener presente, aunque sólo sea en forma de pregunta, la suerte que corrieron sus cuadros dentro del mismo ambiente frenético e impredecible del apogeo de la droga y en qué medida éste llegó a abrumar o corroer las estructuras y la disciplina interna de la organización subversiva.

#### 9.1. LA FIGURA DEL POLICÍA CORRUPTO COMO PRECURSOR DEL PCP-SL

El PCP-SL llegó al Alto Huallaga en un momento en que se había acumulado un resentimiento generalizado hacia las Fuerzas Policiales.<sup>360</sup> Los operativos antinarcóticos que se inauguraron con el Verde Mar I y II (ejecutados por los comandos de los *sinchis* a lo largo de la margen derecha del río Huallaga en 1979 y 1980, respectivamente) son muy conocidos.<sup>361</sup> Menos se ha comentado de las maneras en que la corrupción de los cuerpos regulares de la Policía Nacional —que estaban en contacto más continuo y cotidiano con la población— constituyó un antecedente importante al ingreso del PCP-SL.

Es común escuchar decir que el PCP-SL apareció por «culpa de la Policía». Si bien dicha aseveración es simplista, cuando no engañosa, apunta a un sentir popular muy arraigado. Resulta evidente para cualquiera que la imagen abominable de las Fuerzas Policiales ha quedado ampliamente registrada en la memoria de grandes sectores del Alto Huallaga.<sup>362</sup> Se le critica, sobre todo, por usar la ley y el uniforme para el lucro per-

<sup>359</sup> Incluso la idea de que los militantes no tuvieron las mismas características que los de Ayacucho. Véase, por ejemplo, de la Puente Mejía, Juan «En el Huallaga aún es noche». Quehacer, n.º 87, enero-febrero de 1994, p. 41: «El senderista del Alto Huallaga es más cosmopolita y frívolo y menos ideologizado. A diferencia del militante maoísta ayacuchano, el del Huallaga tiene pocas motivaciones políticas e ideológicas».

<sup>360</sup> En el sur del Alto Huallaga (Tulumayo hasta la Morada), las Fuerzas Policiales incluían a la Policía de Investigaciones Peruana (PIP), la Guardia Civil (GC), los *sinchis* y, posteriormente, la UMOPAR (a comienzos del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry). La Guardia Republicana (GR) tuvo una intervención mayormente a partir de la provincia de Tocache, entre Nuevo Progreso y Pólvora.

<sup>361</sup> Si bien en las memorias locales se destacan los operativos Verde Mar, según José González, las interdicciones de gran envergadura comenzaron con el operativo Cerrojo (1976), seguido por Verde Mar I (1979), Verde Mar II (1980), Bronco (antes de julio 1984), Cóndor (1985 a 1989 en siete etapas) y Snowcap (1988 a 1990).

<sup>362</sup> Es evidente que la policía como término general esconde la complejidad de las estructuras y divisiones internas de la institución policial.

sonal haciendo degenerar su labor en una rapiña abierta y descarada. En estas versiones, se alude a coimas, presiones y asaltos a los que fueron expuestos los productores de la hoja de coca o campesinos durante los primeros años del apogeo de la droga. Se comenta cómo los agentes de la PIP entraban a las chacras en ambos lados de la Carretera Marginal para exigir cupos bajo amenaza de detención. Cuando no había dinero, los policías incautaban bienes, violaban mujeres o mataban animales. Las confiscaciones —se cuenta— se justificaban bajo la presunción de que todo dinero y artículo de valor (sea artefacto electrodoméstico, automóvil o motocicleta) provenía del narcotráfico. Era una acusación que se podía aplicar a todos con mucha facilidad, ya que, directa o indirectamente, todos se beneficiaban del movimiento económico de la droga, lo cual daba a la Policía Nacional licencia para decomisar a su antojo y a criterio propio.

La corrupción de los policías fue generalizada y sistemática. Y, según lo que se asegura, había pocos policías que no se dejaban comprar. Las detenciones se practicaban menos para combatir al narcotráfico que como pretexto para obtener dinero mediante el chantaje y la extorsión. El subterfugio se hizo evidente al ver que el detenido siempre salía libre después de un pago fuerte; en el caso de que faltara dinero, podría entregar las llaves de su carro o cuanto otro bien tuviera.<sup>363</sup> En una zona donde la instancia más cercana del Poder Judicial estaba a varias docenas de kilómetros en Tingo María, la mayoría de los casos se resolvieron antes de que se abriera expediente alguno. La lógica económica y legal enseñaba que convenía llegar a un trato lo más rápido posible, porque, cuanto más se acercara el detenido a Huánuco o a Lima, el costo de ser liberado se multiplicaba por las manos que reclamaban su parte.

En una zona donde la economía se sostenía en una actividad ilícita, era de esperar que los encargados de hacer valer la ley fueran mal vistos, considerados de alguna manera enemigos del pueblo. De hecho, en el Alto Huallaga, sería difícil encontrar una institución vista con mayor menosprecio por la población local. Sin embargo, contra lo que podría pensarse, el hastío e incluso la repugnancia que se expresa hasta la actualidad hacia las Fuerzas Policiales no se originan en su labor oficial de entorpecer el mercado de la droga. Curiosamente, las críticas a las Fuerzas Policiales se basan no tanto en haber reprimido al narcotráfico como en haber sido excesivamente abusivas y desleales. No las critican por la simple corrupción, es decir, aceptar dinero o sobornos, sino por ser demasiado exigentes y prestarse al juego sucio: no respetar los tratos o arreglos a los cuales se llegaban.

La desconfianza y recelo se extendían también a la lucha contrasubversiva. En la zona de Aucayacu, se cuenta que, durante los años ochenta, era peligroso pasar información a la Policía Nacional, porque ellos no garantizaban una seguridad mínima para sus informantes. Incluso se asegura que hubo un tiempo en que los policías hasta vendían los nombres de sus fuentes a los mismos subversivos. La rutina era así: con los datos que había dado el informante, la Policía Nacional detenía personas. Para mostrar que sabían que los detenidos pertenecían o colaboraban con el PCP-SL, les revelaban el nombre de quién los había señalado. Delatar al informante serviría como medida de presión para que los detenidos accedieran a pagar el monto que quería la Policía Nacional. Luego, estas personas, que saldrían libres después de recolectado el pago, buscaban su venganza contra quien los hubiera delatado.<sup>364</sup> Este tipo de sucesos hacía pensar que, para las Fuerzas Policiales, aplicar la ley no era más que un alegato, que la ley, en el fondo, servía para traficar con ella y nada más.<sup>365</sup>

Para explorar el tema con referencia al narcotráfico, se requeriría rastrear la historia de cada unidad o cuerpo por separado, entender su función particular, su cultura institucional y relación con los otros cuerpos policiales, pues el actuar de cuerpo a cuerpo puede resultar muy divergente. Además, habría que explorar la continua necesidad de reorganizar unidades, la interdicción que se realizaba con unidades que llegaron desde fuera de la zona y su relación con los cuerpos que permanecían día a día en las zonas cocaleras.

<sup>363</sup> Considerense las afirmaciones de una ex autoridad municipal (provincia de Leoncio Prado): «Esta UMOPAR y la PIP eran los más extorsionadores de estos policías; muchos de estos miembros, sus comandantes, mayores, capitanes se han hecho millonarios. Yo recuerdo que hubo un comandante Cano. Ese pata [sujeto] sacaba como cuatro Volvos [automóviles de marca Volvo] cargados de artefactos que le regalaban los narcotraficantes cuando le salió su cambio de Tingo María a Lima. Imagínate la cantidad y, además, el dinero que les daban. Tú sabes, tú eres narcotraficante. Bueno, no tengo plata, acá está mi carro, llévelo, mi ahorro, llévelo señor comandante. Acá está, le hago la transferencia porque a veces los narcotraficantes no tenían plata a la mano. Entonces, para no llevarte preso, para no entregarte, jefe, aquí está mi carrito, llévelo, mi auto tiene tres meses, imagináte, así. O sea, la Policía también se ha hecho millonaria».

<sup>364</sup> Si se da crédito a las versiones que circulan como verdad social en el Alto Huallaga, la práctica de pagar para conseguir la excarcelación fue una constante en la lucha contrasubversiva tanto de parte de las Fuerzas Policiales como luego del Ejército: una suma de varios miles de dólares entregada al puesto policial cuando no a la base militar bastaba para liberar al detenido. Así que la detención por fuerzas del Estado no se distinguía fácilmente de un secuestro que se resolvía por medio del rescate. Lo que se escuchan menos son casos en que el mismo Ejército vendiera los nombres de informantes al PCP-SL.

<sup>365</sup> Considerese la siguiente historia recopilada en la zona de Nuevo Progreso-Paraíso. Los hechos ocurrieron a mediados de los años noventa:

## 9.2. LA MANERA COMO LLEGÓ EL PCP-SL

Si bien la historia del apogeo de la droga data desde 1974 o 1975 en los pueblos inmediatamente al norte de Tingo María, cuyo centro inicial fue el caserío de Anda,<sup>366</sup> la presencia del PCP-SL en el Alto Huallaga no comenzó a notarse sino unos seis años después, en 1980-1981. Se barajan distintas versiones sobre el lugar preciso y el porqué de la aparición del PCP-SL en el valle<sup>367</sup> pero muchas personas en la zona de Aucayacu coinciden en que, poco después de los operativos antinarcóticos Verde Mar I y II, una comitiva de cocaleros<sup>368</sup> fue a Ayacucho para conseguir la ayuda de este movimiento subversivo para defender a los cocaleros de la represión estatal. La comitiva regresó trayendo a varios dirigentes del PCP-SL. Estos subversivos habrían iniciado el trabajo político de su partido en el campo tomando como causa la defensa de la coca; se incorporaron clandestinamente en las organizaciones cocaleras e incentivaron cada vez más que los campesinos recurrieran a medios violentos en sus manifestaciones y marchas.

Si para esta versión todo comienza con los operativos de los *sinchis*, otra historia busca el hilo por la extorsión de los policías. Al norte de Aucayacu, entre los caseríos de La Victoria y Siete de Octubre, vivía una familia muy conocida en la zona que había sufrido especialmente los maltratos de la PIP y la GC. De «pura cólera», se plegaron al PCP-SL los cuatro hijos, quienes llegaron a ser combatientes del Ejército Guerrillero Popular. Una variante señala que uno de los hermanos, un tal *Leonidas*, había estudiado en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, lugar donde se incorporó al grupo de Abimael Guzmán. Sabiendo de los abusos que sufría su familia en su chacra, regresó al Huallaga para iniciar la «lucha armada», acompañado por tres personas más: un tal *Gabriel, Richard o el Manco*<sup>369</sup> y Artemio, persona que hoy en día se presume es el dirigente máximo del Comité Regional del Huallaga.

Pobladores de Aucayacu, como también autoridades municipales de ese entonces, señalan una huelga de cocaleros en 1981 como el acontecimiento en que se sentía una presencia oculta del PCP-SL por primera vez. Aunque no se sabe a ciencia cierta a qué sitio ingresó primero, serían tres las zonas donde el PCP-SL se asentó y empezó a organizar el campo. Dos estaban en la margen izquierda del río Huallaga: el puerto Venenillo y caseríos de La Merced de Locro, Corvina, los Cedros, entre otros, que luego conformarían el llamado «bolsón» Cuchara; y en los caseríos de San José de Pucate,<sup>370</sup> San Martín de Pucate y Primavera, frente a Aucayacu. La tercera zona fue el sector Gocen-Nueva Esperanza, situado en la margen derecha del río Huallaga, al norte de Pucayacu, cerca al caserío de Consuelo.<sup>371</sup>

«Había un señor llamado de apodo Veloz. Vivía en el mismo del Puerto [Megote], más acá. Él, un día, sale a Progreso, sacaba plátano, casi 15 toneladas de plátano. Se va a Progreso y, en Progreso, ve a un grupo de personas caminando por Progreso, que eran de la guerrilla. Y éste se va, este señor, señor de edad, se va a la Policía, capitán, le dice, ¿sabe qué, mi capitán? Esos señores que están andando por ahí son de la guerrilla. La Policía va, lo interviene, lo lleva a la comisaría, investigan y era cierto. Entonces, ¡cómo se traficó con la vida de este hombre! [...] O sea, la Policía le trajo a él. ¿Por qué le digo esto? Mire ve, cuando [...] ya estaba en celda, en calabozo, el capitán le dice a uno de ellos, bueno muchacho, si tú me das tanto, yo te digo quién te ha vendido. Así, de frente. Entonces, qué sucede; llegan a un acuerdo. Entre la guerrilla y la Policía llegan a un acuerdo. No sé de cuánto de dinero han hablado en ese momento. Le dice: «¿sabes quién te ha vendido? Quien te ha denunciado fue el tal señor Veloz» [...] Entonces, ese tal señor Veloz no sabía nada. Salen ellos [y] a los dos días un tal Bigotes, un tal Pucallpa, después no sé quién más, vienen, lo intervienen al pata [tipo] y lo matan a hachazos al señor. Lo han cortado su cabeza, lo han decapitado al hombre delante de su señora, sus hijos y lo han dejado así entre las seis y media de la tarde y siete de la noche».

<sup>366</sup> Los focos tempranos de apogeo de la droga a mediados de los años setenta fueron relativamente discretos. La droga se elaboraba en lugares escondidos en el monte y, una vez procesada, no circulaba de modo abierto en los caseríos o pueblos. El apogeo se manifestaba, más bien, en el consumo suntuario de la población local, en las fiestas alborotadas y la aparición de artículos de lujo: carros, motocicletas, ropa ostentosa, joyas y relojes.

<sup>367</sup> Tanto José González, (ob. cit.), como Raúl González («Coca y subversión en el Huallaga» en Quehacer), señalan que los primeros subversivos habrían entrado por el sur y norte del valle, por Aucayacu y Puerto Pizana, respectivamente. Las informaciones recopiladas durante el trabajo de campo de esta investigación indican que el PCP-SL se habría iniciado únicamente en la zona de Aucayacu alrededor de 1980 y llegó a la zona norte de Tocache (Pizana) entre cuatro y seis años más tarde.

<sup>368</sup> En otra versión, se habla de «narcotraficantes posiblemente colombianos» y no cocaleros.

<sup>369</sup> Le faltaban dos dedos.

<sup>370</sup> Un antiguo colono de la zona de Azul de Magdalena aseguró que San José de Pucate fue el primer caserío organizado por el PCP-SL.

<sup>371</sup> En una conversación realizada en Aucayacu en julio de 2002, un agricultor de Nueva Esperanza insistió en que la primera zona del PCP-SL fue Gocen-Nueva Esperanza. Afirró también haber conocido a los primeros jefes locales, incluido Artemio, y haber sido un colaborador activo de ellos debido a que tenía su chacra en el mismo sector. Señaló que una, sino la primera acción armada del grupo en el Huallaga fue un ataque al puesto policial forestal de Pucayacu en 1982, un blanco a pocos kilómetros de la zona de Gocen. Ello quizás no sea fortuito y apoya la hipótesis de que Gocen-Nueva Esperanza fue el primer núcleo del PCP-SL en el Alto Huallaga. Sin embargo, las

A principios de 1982, grupos de avanzada ya estaban visitando comunidades a lo largo de la margen izquierda del Huallaga desde Venenillo hasta la Morada y Huamuco, donde reunían a los pobladores, pregonaban su política y anuncianaban las nuevas reglas que los pobladores tendrían que acatar si querían quedarse. Vistiendo polos negros, pasamontañas y portando escopetas, tramperos y revólveres, estos primeros grupos predicaban la necesidad de emprender acciones armadas contra el Estado para reivindicar la coca en vista de que las huelgas pacíficas —aseguraron— no lograrían concesiones significativas.

A la par con el creciente control del PCP-SL sobre el campo, se vio el surgimiento de Ramal de Aspuzana como centro abierto de la droga.<sup>372</sup> En ese caserío, que debió su existencia y nombre a un pequeño camino de desviación que los trabajadores de la Carretera Marginal habían abierto al río Huallaga menos de veinte años atrás, tomaron residencia poderosos empresarios, entre ellos varios colombianos, quienes compraban base de cocaína para su posterior envío a Colombia. En las calles de Ramal se produjo una actividad comercial bulliosa donde el dólar desplazó a la moneda nacional, aunque el movimiento más importante se encontraba al otro lado del río, en el sector de Magdalena, donde operaban una serie de aeropuertos clandestinos desde los cuales se embarcaba la droga. Las primeras relaciones entre narcotraficantes importantes y miembros del PCP-SL datarían de esa época: primero, con referencia al control de las pistas, es decir, la concesión de permisos de uso a cambio de los pagos de derecho; y, segundo, con respecto a la protección que los subversivos proveerían contra los operativos que venía efectuado la UMOPAR en la zona.

En términos globales, la expansión subversiva dentro del Alto Huallaga siguió una tendencia de sur a norte por toda la zona rural del valle, donde buscó organizar el campo y acercarse poco a poco a la ciudad o centros urbanos más importantes de cada sector. Siguiendo ese patrón, los dos atentados de gran envergadura en el pueblo de Aucayacu —contra los puestos de la GC—<sup>373</sup> se dieron sólo después de la consolidación del control subversivo en las zonas aledañas al pueblo en sí. No obstante, antes de estas incursiones, hubo una serie de acciones menores. Entre ellas, podrían citarse: 1) el atentado no mortal contra el ex alcalde Augusto Tovar Tovar a fines de 1982; 2) en 1983, el intento de asesinato al gobernador en la puerta de su casa; 3) a principios de 1984, una carta firmada por el grupo de izquierda Pukallacta<sup>374</sup> en la que exigía la renuncia de todas las autoridades municipales, seguida por el atentado (incendio) contra la casa del entonces alcalde Enrique Bruckman Falcón. Todas estas acciones tuvieron como propósito principal obligar a las autoridades locales a abandonar sus puestos pero, simultáneamente, ejercer una presión constante sobre la zona urbana desde el campo.

Entre 1983 y 1985, el PCP-SL procedió a instalar sus propias autoridades, con distintos grados de clandestinidad, en la mayoría de los caseríos de la zona rural desde Tulumayo hasta Yanajanca. Su presencia abierta se concentraba en las comunidades ubicadas a la derecha de la Carretera Marginal (pero retiradas varios kilóme-

fuentes recopiladas para este trabajo son insuficientes para constatar fehacientemente la veracidad o falsedad de esta hipótesis.

<sup>372</sup> El término centro abierto de la droga se refiere a la etapa de apogeo cuando se comerciaba la PBC e insumos libremente en las calles de los pueblos. Ramal de Aspuzana brotó como mercado importante durante los primeros dos años de la década de 1980, casi paralelo al surgimiento del poblado de Paraíso y a los pueblos más grandes de Uchiza y Tocache. El grado de clandestinidad del negocio de la droga dependía de la Policía Nacional. El narcotráfico se ejercía abierta o libremente sólo en la ausencia de una represión policial, y también debido a la falta de una delegación policial o la inacción de las Fuerzas Policiales (gracias al soborno o a la amenaza de violencia en su contra). En ese sentido, el primer momento de apogeo que se vivió en la zona de Anda y Pueblo Nuevo a mediados de los años setenta fue mayormente clandestino. Allí se dedicaban a la producción y comercialización de la PBC pero de modo discreto por temor a la represión policial. El apogeo no llegaría a su expresión plena y más vertiginosa sino hasta los años ochenta, sobre todo en los lugares ya mencionados de Ramal, Paraíso, Uchiza y Tocache. Estos sitios serían seguidos posteriormente por Puerto Pizana y Sión, aunque nada impedía que un pueblo que dependía del narcotráfico oscilara múltiples veces entre centro abierto y centro cerrado o clandestino de la droga siempre y cuando hubiera momentos en que las Fuerzas Policiales dejaban de reprimir el negocio.

<sup>373</sup> Según las versiones que se pudieron recopilar, el primer ataque se dio el 31 de enero de 1984 contra el Banco de la Nación y el primer puesto de la GC, ambos en el Jirón Túpac Amaru. El banco sólo sufrió daños de infraestructura pero el puesto de la GC perdió entre seis y siete hombres de su delegación. Los subversivos liberaron a personas que estaban detenidas en el calabozo y sacaron fardos de coca del depósito del puesto, a los cuales prendieron fuego junto con los policías muertos. El segundo ataque vino cinco meses después, el 4 de julio de 1984. Esa vez la GC había trasladado su puesto al mercado principal del pueblo, al lado de dos colegios. Integrantes del PCP-SL, entre mujeres y hombres, varios vestidos con ropa distintiva de gente de la sierra, dentro de la cual escondían sus armas, dominaron rápidamente a los policías y les dieron muerte. Una unidad de la UMOPAR llegó varias horas después del ataque, cuando los subversivos ya se habían retirado, y tomó represalias contra toda persona que encontraron deambulando por la calle. Al día siguiente, la gente se asomó desde sus casas y encontró pedazos de carne humana esparcidos por las calles colindantes con el mercado, en los techos y en las paredes de las escuelas. Después del segundo ataque se declaró al Alto Huallaga una zona de emergencia por primera vez.

<sup>374</sup> Según una ex autoridad municipal, las Fuerzas Policiales en ese entonces sindicaban a Pukallacta como organización perteneciente al PCP-SL.

tros de ésta) y en la margen izquierda del río Huallaga, sobre todo en la zona Cuchara, frente a los pueblos de Aucayacu y Ramal de Aspuzana, y en los sectores de la Morada y Huamuco. En estos lugares, los «comités populares» del PCP-SL controlaban el cultivo de la hoja de coca, regulaban la compra y venta de PBC y, en los sitios en que había aeropuertos clandestinos, resguardaban la salida de vuelos que portaban droga.<sup>375</sup>

### 9.2.1. Desplazamiento del PCP-SL hacia el norte: Uchiza, Paraíso y Tocache

Fue sólo a la mitad de la década que el PCP-SL comenzó a desplazarse hacia el norte, a lo que para ese entonces había emergido como la zona más importante del mercado de la droga: Uchiza, Paraíso y Tocache. A diferencia de la parte sur,<sup>376</sup> donde en los primeros años del apogeo el narcotráfico no se ejercía acompañado de una extrema violencia, en esa zona del Huallaga era mucho más común ver a patrones o narcotraficantes andar con pequeños ejércitos de sicarios que les servían de seguridad pero también como un instrumento de poder tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La llegada del PCP-SL significó que, paulatinamente, a los narcotraficantes grandes les sería más difícil, cuando no imposible, operar a su antojo en el campo y que los campesinos cocaleros hipotéticamente tendrían quien representase sus intereses no solamente frente a las agresiones del Estado sino también frente a las presiones de los otros actores del mercado de la droga.

#### 9.2.1.1. Un infierno llamado Paraíso

El PCP-SL entró primero a Paraíso, al principio de modo clandestino y luego de modo abierto, con una incursión armada que inició su dominio sobre el pueblo; éste duraría hasta fines de los años noventa.<sup>377</sup> Paraíso resultó ser un lugar estratégico por ser un enclave de narcotraficantes donde no había presencia de las Fuerzas Policiales debido a su relativo alejamiento de una vía de acceso rápido y a sus fuertes nexos con los mercados y firmas de Uchiza y Tocache. El PCP-SL encontró en Paraíso un pueblo diverso con un movimiento económico impresionante. El estallido inesperado del apogeo en 1980 había transformado un paraje netamente rural en un pueblo bullicioso y acaudalado, que atrajo personas no sólo de todas partes del país sino de México, Bolivia y Brasil, si bien el grueso de la colonia extranjera lo formaban los colombianos.<sup>378</sup> En muy pocos años, Paraíso se convirtió en un eje de producción, comercialización y transporte para el narcotráfico. Abarcaba entre 18 y veinte caseríos, cada uno con sus respectivas zonas de cultivo. Contaba, además, con ocho pistas de aterrizaje —en realidad, simples caminos vecinales que comunicaban a los distintos sectores y funcionaban, a su vez, para despachar cargamentos de pasta básica al extranjero—.

<sup>375</sup> Principalmente en Bolognesi y Pavayacu (Aucayacu), Magdalena, La Morada y Huamuco, y Nueva Esperanza (Consuelo).

<sup>376</sup> En la parte sur (desde Anda a Ramal), los primeros narcotraficantes locales no tenían fama de hombres violentos al estilo de Catalino Escalante (Uchiza) o Edwin Castillo Pinedo, (a) Vampiro (Tocache). Eran colonos, oreros y plataneros que, gracias al auge de la coca, lograban convertirse en empresarios importantes en calidad de encargados o proveedores para los carteles colombianos. A algunos se les recuerda con cariño y se dice que se portaban como caballeros: hacían su negocio discretamente, no andaban visiblemente armados y no maltrataban a la población. Todo lo contrario a esta imagen era lo que representaban firmas como las de Cristal y Champa, cuyas bandas de matones serían el terror de la zona de Aucayacu a mediados de los años noventa.

<sup>377</sup> El 26 de agosto de 1986, reunieron a la población del caserío y varios de los sectores aledaños para ajusticiar a dos hombres desconocidos pero que, según los subversivos, eran ladrones y, por lo tanto, merecían morir.

<sup>378</sup> Una comunidad muy joven, Paraíso, fue colonizada entre 1969 y 1973, primero por un grupo de piuranos y luego por familias de ancashinos afectadas por el terremoto de Yungay según la versión del actual alcalde Artemio Miranda y otros pobladores. Estos dos intentos de radicar en el sitio fueron poco exitosos. Los colonos piuranos que se habían instalado en Megote, el puerto de Paraíso, sufrieron la inundación de su campamento después de una fuerte lluvia y decidieron desplazarse al norte, al otro lado del Huallaga, para fundar Nueva Piura. Los damnificados del terremoto, mientras tanto, llegaron después con la ayuda del gobierno militar del general EP Juan Velasco Alvarado, que les brindó asistencia en vivienda, alimentos, medicinas y ganado. Durante tres años, los nuevos colonos recibieron un subsidio casi total de parte del Estado; sin embargo, cuando el gobierno vio que no producían nada con la ayuda entregada, cortó la asistencia. Poco después, la mayoría decidió abandonar Paraíso y sólo se quedó un 20% del grupo original. Los que permanecían, junto con otros que llegaron de zonas aledañas como Uchiza, se dedicaron a la agricultura y ganadería. Fue sólo en 1978 que apareció el cultivo de coca y dos años después se convirtió en un centro de narcotráfico. Paraíso le antecedió a Uchiza como un centro totalmente abierto al comercio de la droga por dos o tres años y, según versiones netamente anecdóticas, la superó en volumen de negocio hasta que Uchiza emergió como el mercado más activo del Huallaga a partir de 1984-1985, posición que defendería hasta 1990. A diferencia de Paraíso, Uchiza era un pueblo antiguo, que había sido una zona cocalera al menos desde el siglo XIX; conocía la producción de la pasta básica de cocaína desde los años cuarenta, cuando una fábrica de cocaína operaba en el mismo pueblo como concesión del Estado. Los vuelos clandestinos de la droga habrían comenzado a salir del aeropuerto municipal de Uchiza apenas a fines de los años setenta, con el narcotráfico manteniendo cierta clandestinidad hasta los primeros años de los ochenta.

Por su potencial económico, ambiente cosmopolita y población que en los años ochenta creció a varios miles de habitantes, Paraíso desarrolló una atmósfera propia de ciudad. Poseía los mejores restaurantes, discotecas y hoteles del Alto Huallaga. Los narcotraficantes principales tenían su propio barrio donde vivían en casas de madera machimbrada que causaban la admiración del pueblo. De un día para otro, Paraíso se había levantado como pueblo grande, testigo de la fuerza urbanizadora del auge de la droga, pero a la vez sufría de un cierto aislamiento con respecto a los otros pueblos grandes de la zona. El único acceso a la carretera Marginal era por pequeños botes o deslizadoras al puerto de Nuevo Progreso, y los caminos que lo comunicaban con Uchiza eran rústicos. La ausencia del reconocimiento oficial del Estado<sup>379</sup> acentuaba su situación de pueblo, más que olvidado, escondido. Si bien esa condición recóndita lo hacía más atractivo como centro de operaciones para los narcotraficantes, posteriormente le facilitaría la entrada al PCP-SL y su eventual dominio sobre el pueblo.

Entre los grupos de narcotraficantes que operaban desde Paraíso, las organizaciones locales que destacaron eran las de Braulio Tafur, Antonio *Tío Ríos* y Marcelo Ramírez,<sup>380</sup> más conocido como *Machi*. Desde un principio, reinó una convivencia entre el PCP-SL y las firmas y sin excepción los jefes aceptaron las obligaciones que les imponían los subversivos como la mejor manera de evitar problemas<sup>381</sup> —aunque fue con *Machi*<sup>382</sup> que el PCP-SL parece haber establecido la relación más importante—.<sup>383</sup> No era del todo extraño que muchachos del pueblo de Paraíso pertenecieran a la subversión y, a la vez, trabajaran para las organizaciones de *Tío Ríos*, *Machi* o incluso Catalino Escalante en Uchiza. Para la gente común y corriente, estar con la subversión no impedía que uno, en sus momentos libres, hiciera pases de droga o proveyera seguridad a uno de los patrones. Existía una comunicación muy fluida entre ambas corrientes.

#### 9.2.1.2. Entrada paulatina a Tocache y Uchiza

A partir de su llegada al caserío de Paraíso, todo marchó muy rápido. El PCP-SL iba organizando todos los sectores de Paraíso pero también las zonas de cultivos alrededor de Nuevo Progreso, Tocache y Uchiza; poco a poco iba tomando el campo. Los patrones que antes tenían carta abierta para presionar a los campesinos con sus bandas de sicarios se vieron obligados a arrimarse más hacia las zonas urbanas por miedo a que los agricultores informaran a los delegados de los «comités populares».

Una noche, un grupo armado de integrantes del PCP-SL ingresó al pueblo de Nuevo Progreso y reunió a toda la población en la plaza de armas. Decían que venían a poner orden a causa de las muchas quejas que habían recibido: que los «traqueteros» estafaban a los agricultores en la compra de la droga y que las firmas recibían droga fiada pero no cancelaban sus deudas. Dieron un plazo de 24 horas para que todos remediaran sus problemas de pago. «Y los hombres, al ver que las cosas eran serias», cuenta un testigo, «se han puesto a derecho, creo que, desde esa fecha, la gente empezó a valorar su vida y a no deber». <sup>384</sup> Poco después se formó un «comité popular» dentro de Nuevo Progreso y, desde ese entonces, cualquiera que tuviera problemas de cobranzas podía ir donde el delegado y presentar su denuncia con la certeza de que allí «harían justicia».<sup>385</sup>

Ciudad

Pucha hermano, no sé, soy gracias a Dios. Creo por milagro he vivido, porque todo era quién podía más, quién demostraba que podía más. Y también venían otros, que eran más, chambones se les decía, más bacanes se querían dar. Venían, «¡se me cierra el bar!» y todo el mundo afuera. Caballero, tenías que salir. Caballero. Verdad, yo estuve en una oportunidad ahí en Las Brisas, el burdel. Estábamos tomando y ahí también estaban, pues, los grandes, estaba el *Vampiro*. El loco mismo [...] con su metralleta así de collar normal, oí pero, para ellos, como si nosotros no existiéramos, ¿no? Buscaban a las mejores chicas para ellos. Nosotros, a veces, de hombres, no po-

<sup>379</sup> Sólo en abril de 2002 se designó a Paraíso como poblado menor.

<sup>380</sup> Los narcotraficantes colombianos incluían a un tal Diablo, Toyota, Ministro, JR, Rambo, entre otros; aunque operaban en Paraíso, solían ser más transitorios y menos identificados con un lugar específico.

<sup>381</sup> O como describió la situación un poblador: «Así, ellos [los narcotraficantes] se sentían felices, más tranquilos y podían dormir tranquilamente, porque sino, pues, era un temor de que si venía el PCP-SL y no me ponía de acuerdo, me mataban, así era».

<sup>382</sup> Los términos exactos de su relación no han podido ser constatados. Al menos, hubo un acuerdo de convivencia, que le permitió tanto a *Machi* como a los demás narcotraficantes del lugar dedicarse a su negocio.

<sup>383</sup> *Machi* no fue el único en tener una relación estrecha: según cuenta un señor que durante los años ochenta era dueño de un hotel en Nuevo Progreso, el *Tío Ríos* fue nombrado el primer delegado en Paraíso con la responsabilidad de recaudar dinero del narcotráfico.

<sup>384</sup> Ibídem.

<sup>385</sup> La misma fuente informa que en ese momento no existía presencia policial en Nuevo Progreso. La primera delegación se instalaría el año siguiente (1987/1988), después del operativo Relámpago.

díamos hacer nada. Y ¿qué habrá pasado con este *Vampiro*, el loco? Agarró una silla así y la destrozó en la cabeza de la chica. No contento con eso, le agarró como pelota. Y pobre del que diga algo. Nadies. Mudos todos. Lo que no te interesa, no es tu problema. Pucha compadre, era una época, cómo te puedo decir, en que vivías por voluntad de Dios creo, verdad, porque yo no tenía miedo, yo no sabía tener miedo, más bien, ahora me da miedo salir hasta la esquina, me da miedo. Quizás he tomado más conciencia de lo que es la vida, ¿no? Porque en esa época, nada; al contrario, me divertía mirando la violencia. (*Alcides*, joven «traquetero»)<sup>386</sup>

La llegada del PCP-SL a Tocache sería más sutil al principio, quizás por tratarse de un pueblo más grande, vinculado al resto del país por vías de comunicación y con una presencia nominal del Estado. Según relata un ex sicario que trabajó para una de las firmas principales, una persona de confianza de *Machi* fue a Tocache para presentar a un emisario del PCP-SL a los narcotraficantes más importantes.<sup>387</sup> El representante subversivo anunció que su organización iba a entrar al pueblo, pero no para enfrentarse con los narcotraficantes sino para ayudarlos a ordenar la ciudad, tanto para poner en jaque a las Fuerzas Policiales como para acabar con la delincuencia que azotaba la zona urbana. Fue un ofrecimiento que la mayoría de los narcotraficantes recibió con agrado.<sup>388</sup> A raíz de ese primer contacto, el PCP-SL consiguió autorización para colocar tres o cuatro de sus cuadros en cada una de las firmas. Éstos no portaban armas; tenían la misión, más bien, de acompañar a los grupos de narcotraficantes: acompañar y observar.

Con la complacencia y ayuda de los narcotraficantes, lo primero que hizo el PCP-SL fue organizar una ronda dentro del pueblo. La ronda consistía en grupos de diez o 12 sicarios de las firmas con uno o dos representantes del PCP-SL. Los sicarios estaban armados pero los miembros del PCP-SL dirigían. Juntos vigilaban las calles, recibían quejas de asaltos o abusos y administraban penas.

Fue ese mismo año, 1996, que los vuelos con droga comenzaron a salir del aeropuerto municipal de Tocache con mayor frecuencia, a veces hasta cuatro o cinco veces al día. El narcotráfico estaba en pleno apogeo y la droga circulaba abiertamente. De pronto, el PCP-SL les habría sugerido a los jefes de firma que el apoyo de su organización al ordenamiento del pueblo sería más eficiente si ellos, los narcotraficantes, invertían en el trabajo de los miembros del PCP-SL, trayéndoles armamento de guerra de Colombia.<sup>389</sup>

Para los primeros meses de 1987, ya había cientos de combatientes concentrados en Tocache y el PCP-SL controlaba el pueblo. Nombró delegados en cada manzana y organizó a los varones en una ronda nueva, esta vez formada sin la presencia de los sicarios. La llamada «ronda de cuadra» vigilaba las calles de la ciudad pero sólo durante las horas nocturnas. Pequeños grupos armados con bastones de madera caminaban por sectores de tres manzanas y reportaban cualquier situación que no podían resolver en el Club Obrero, donde elementos armados del PCP-SL habían establecido un «Comité de Justicia Popular».<sup>390</sup>

Paralelamente, es decir, a fines de 1986 y a principios de 1987, el PCP-SL avanzó hacia el norte organizando a los pueblos y caseríos al norte de Tocache: Bambamarca, Nuevo Horizonte, Escote y Santa Rosa de Mishollo, entre otros. Sería una zona de expansión rápida e intensiva para el PCP-SL, alimentada por el fuerte movimiento de la droga en Puerto Pizana, que surgiría como mercado importante de la droga a fines de los años ochenta. La expansión de sus tareas organizativas llegaría hasta Punta Arenas/Campanilla y se vio frustrada a partir de Juanjuí por la fuerte presencia del MRTA.<sup>391</sup> Igualmente, fue durante esta época que el PCP-

<sup>386</sup> El menor de los hijos, Alcides, se crió escuchando hablar de los pichicateros y se hizo grande durante el boom del narcotráfico. Recuerda cómo llegaron los colombianos, primero clandestinamente, a internarse en el monte sin acercarse al pueblo, y cómo luego se iban apareciendo poco a poco hasta que anduvieron abiertamente ya por las calles de Tocache —claro, previo pago a las autoridades de turno—, cada uno con su grupo de hombres armados. Así empezó el apogeo: de la noche a la mañana. Recuerda también cómo, al poco tiempo, comenzó el pandillaje y cómo entre las distintas firmas surgió una rivalidad tan implacable que «entre ellos ni se podían ver», tanto así que los encuentros repentinos casi siempre terminaban a balazos. El *Vampiro* era uno de ellos; sólo que él era neto tocachino: el primer peruano en Tocache en armar su propio grupo, el primero y más sanguinario. Él les hizo la guerra a los colombianos.

<sup>387</sup> Entre ellos *Vampiro*, *Mashico*, *Aníbal*, *Shushupe*, *Aureo*, *el Gato Gerber*.

<sup>388</sup> Los jefes de las firmas estaban entusiasmados con el ofrecimiento y aceptaron que el PCP-SL enviara personal para ser integrado a sus organizaciones. Más tarde, llegarían a considerar su acogida al PCP-SL como un grave error.

<sup>389</sup> Fue aproximadamente entre 1987 y 1988 que se notó una transformación en el armamento que utilizaban los grupos del PCP-SL en sus acciones. Si antes portaban revólveres y escopetas, luego llevarían metralletas, AKM, FAL y RPG.

<sup>390</sup> Entrevista de la CVR. También revista Sí, 20 de julio de 1987.

<sup>391</sup> El PCP-SL mantuvo un dominio sobre la zona norte de Tocache hasta la mitad de la década de los noventa y una influencia palpable hasta el año 1999. A mediados de los años ochenta, grupos pequeños del MRTA operaban e incluso llevaban a cabo atentados en la zona urbana de Tocache, pero su peso fue mínimo en comparación con el del PCP-SL.

SL habría comenzado a organizar los «Comités de Poder Popular Paralelo» (CPPP) en pueblos que tenían presencia de fuerzas del Estado,<sup>392</sup> conocidos en el habla popular del Huallaga como «las urbanas». La función de «las urbanas» era mantener una red de espionaje, dedicarse al cobro de impuestos o colaboraciones de comerciantes y al asesinato selectivo de «malos elementos».

A fines de mayo, el PCP-SL atacaría el puesto policial de Uchiza y, en junio, declararía un «paro armado» en el Alto Huallaga. Entre Tulumayo y Nuevo Progreso, obligaría a la población rural a participar en el bloqueo de la carretera, la destrucción de asfaltado y la pinta de fachadas de viviendas a lo largo de la carretera Marginal. Estos primeros paros serían una medida de fuerza poderosa, con la cual el PCP-SL no sólo lograba cortar la comunicación de vehículos entre Tingo María y el resto del Alto Huallaga, sino también demostraba su control, a todas luces total, sobre el campo que «vaciaba» para cerrar el tráfico. Poco después comenzaría la destrucción de puentes<sup>393</sup> y luego la instalación de garitas de control por toda la carretera Marginal.

Parecía que el Alto Huallaga ya estaba bajo dominio del PCP-SL cuando, un 15 de julio de 1987, paracaidistas de unidades especializadas de la Policía Nacional tomaron el pueblo de Tocache en un gran operativo denominado Relámpago.<sup>394</sup> Aparentemente, el PCP-SL y los narcotraficantes tenían conocimiento del contraataque policial, porque ambos grupos se retiraron de la zona urbana antes del arribo de los primeros miembros de las fuerzas del orden. Unidades especiales de la Policía Nacional se instalaron tanto en Tocache como en Nuevo Progreso y, en estos centros urbanos, la presencia del PCP-SL se hizo clandestina. Si bien el abandono de Tocache debía de haber parecido en el momento sólo una retirada estratégica, el PCP-SL nunca volvería a intentar una ocupación abierta de un centro urbano dentro del Huallaga. En ese sentido, la toma y ocupación de Tocache, por ser la primera y última vez que el PCP-SL ejerció un control abierto sobre la ciudad, fue un caso límite. La regla fue, más bien, hostigar y presionar a la zona urbana desde el campo y, en ocasiones muy especiales, acumular fuerzas de todos sus «bolsones» para lanzar un ataque; en estos casos, entraban por un máximo de unas horas y salían con prisa antes de que llegaran refuerzos de las Fuerzas Policiales o castrenses.

A raíz del operativo Relámpago y de la fuga al campo de las firmas principales, Tocache decayó como centro abierto de la droga y surgió Sión como nuevo foco del mercado de ésta. Tocache, sin embargo, siguió siendo importante dentro del circuito del narcotráfico.<sup>395</sup> Continuaron saliendo los vuelos del aeropuerto municipal pero ya con menos frecuencia y de modo menos atrevido. Tocache tomó un lugar muy secundario frente a Uchiza, donde el narcotráfico se mantuvo en pleno apogeo y con una fuerza creciente hasta fines de la década de los ochenta.

### 9.3. SEGUNDA ETAPA: PRIMEROS CONFLICTOS ENTRE NARCOTRAFICANTES Y EL PCP-SL

Para mediados de 1987, comenzarían a presentarse los primeros conflictos entre el PCP-SL y los narcotraficantes cuando se enfrió la relación entre *Machi* y el grupo subversivo. Hay versiones diversas sobre la causa detonante. Algunos dicen que, mientras *Machi* estaba de viaje en Colombia, el PCP-SL habría matado a su hija o a toda su familia. Otros afirman, más bien, que los muertos eran un grupo de once trabajadores de *Machi* que los miembros del PCP-SL vieron hablando por radio con su jefe y pensaron equivocadamente que se estaban comunicando con el Ejército; el PCP-SL habría dado muerte a siete en la plaza de armas de Paraíso y habría perdonando a los cuatro restantes con la condición de que se incorporasen a las filas de su movimiento. También se recopiló una tercera interpretación: que *Machi* había ordenado que un grupo de seis de sus hombres secuestrara a un ganadero de Paraíso. Por fortuna, la víctima conocía a sus captores y logró convencerlos para que lo soltaran. Poco después, el PCP-SL se enteró del secuestro y decidió enfrentarse con *Machi*.

Fuere cual fuere el inicio del conflicto, *Machi* llegó a declarar la guerra al PCP-SL y, con la ayuda de la Policía Nacional, armó un ejército de cien hombres. Vistiendo uniforme policial, «con rango de mayor o coman-

<sup>392</sup> Aucayacu sería un caso singular, pero, más tarde, se sumarían a la lista Uchiza y Tocache y una serie de caseríos pequeños a lo largo de la carretera Marginal. El PCP-SL tuvo una presencia fuerte en Aucayacu desde 1986 a 1989 hasta que fue totalmente eliminado en 1992. En Tocache, «la urbana» duraría, según afirman algunos, hasta 1995. No se tienen datos precisos sobre su actuar en Uchiza.

<sup>393</sup> Sobre los ríos Pendencia, Pacae y Angashyacu. Con la destrucción de pistas y puentes, el viaje de cuarenta kilómetros entre Tingo María y Aucayacu, que antes se hacía en 45 minutos, se extendía a dos horas y media, sobre todo, durante la estación lluviosa.

<sup>394</sup> Revista Sí, 20 julio 1987.

<sup>395</sup> Tocache les servirá a Sión, por medio del río Huallaga, y a Uchiza, por medio de la carretera, como un centro de abastecimiento de insumos para la elaboración de la droga y productos de consumo como cerveza y gaseosa.

dante», fue de Paraíso hasta Ramal de Aspuzana matando a cualquier persona que consideraba perteneciente al PCP-SL. El momento decisivo del conflicto se presentó el mes de noviembre de 1987 cuando, en un episodio que ya ha tomado matices de leyenda, las fuerzas del PCP-SL le tenderían una emboscada en la entrada de Paraíso. La emboscada fracasó; sólo lograron herirlo de bala. Luego, *Machi* se atrincheró en el enorme fortín de concreto armado que había construido en el pueblo. Allí se inició una batalla que duró unas 24 horas y que dejó entre docenas y cientos de víctimas según la versión. Atrapado en su reducto, *Machi* sufrió numerosas bajas entre su gente, pero al final logró salvarse gracias a dos helicópteros de la Policía Nacional que llegaron a rescatarlo de su refugio. Lo que pasó con *Machi* luego es menos claro. Algunos dicen que se fue a Colombia; otros que se fue a Panamá; mientras que, para otros, lo mató la misma Policía porque sabía demasiado.

El caso de *Machi* es significativo por varias razones: por la estrecha relación y colaboración que mantuvo al principio con los miembros del PCP-SL, por ser el primer narcotraficante que se levantó en armas contra el PCP-SL, por el gran apoyo que recibió de la Policía Nacional y, finalmente, por el total misterio que encubre los detalles y la naturaleza cambiante de sus alianzas. La batalla con el PCP-SL no sólo vino a anunciar el fin de *Machi* en Paraíso, sino el comienzo del fin de Paraíso como centro importante de apogeo de la droga, ya que, al año siguiente, el movimiento social de la droga se fue desvaneciendo poco a poco y los narcotraficantes importantes se fueron a otros sitios, dejando Paraíso bajo el dominio cada vez más totalitario, de los integrantes del PCP-SL.

### 9.3.1. Asalto al pueblo de Uchiza

En 1988, el PCP-SL comenzó una serie de intentos para ganar influencias entre las firmas que operaban desde la zona urbana de Uchiza. Los detalles particulares de esa iniciativa tampoco son claros, pero el siguiente caso puede ser ilustrativo. Según cuenta un ex narcotraficante independiente,<sup>396</sup> el PCP-SL ejercía una influencia progresiva sobre el campo alrededor de Uchiza desde su ingreso a Paraíso en 1986; sin embargo, enfrentaba dificultades para implantarse en el pueblo mismo. Las firmas que se concentraban allí eran grandes, estaban bien armadas y dispuestas a pelear entre sí. Sin embargo, sucedió que el grupo de *Tío Carachupa* venía perdiendo un conflicto con tres firmas más y buscó la intervención del PCP-SL a fin de proteger sus intereses económicos y, se supone, su vida. A raíz de esa invitación, una comitiva liderada por *Mancini* viajó desde Aucayacu a Uchiza para reunirse con ese patrón.<sup>397</sup> Es factible suponer que, con esa primera reunión, se inició una serie de conversaciones con las firmas de Uchiza, entre las cuales figuraría la de Bombonaje<sup>398</sup> al año siguiente, donde *Mancini* pactó quizás el primer documento que estipulaba las condiciones a las que las firmas tendrían que sujetarse para seguir participando en el mercado de la droga.<sup>399</sup> Si bien dicho convenio estableció las tarifas de cupos que se debían pagar para operar en la zona, en sí sólo formó parte de un conjunto de condiciones que el PCP-SL quiso impulsar para mejor someter a las firmas a su control.<sup>400</sup>

---

<sup>396</sup> Se llama narcotraficantes independientes a las personas que utilizan su propio dinero para acopiar y comercializar la pasta básica de cocaína. Frecuentemente, trabajan a pequeña escala al estilo de los «traqueteros», comprando en el campo para luego vender en los pueblos grandes, pero, a diferencia de éstos, no están sometidos económicamente a los jefes de firmas o patrones sino sólo a las vicisitudes del mercado.

<sup>397</sup> El grupo de *Mancini* se hospedaba en la casa del *Tío Carachupa*, una estructura de cemento de dos pisos que luego el Ejército ocuparía para su base. El informante de la CVR afirma haber integrado la comitiva que *Mancini* llevó a Uchiza.

<sup>398</sup> Un caserío ubicado a diez kilómetros al suroeste de Uchiza. La reunión fue reportada en los medios de prensa gracias a la mención que hace Demetrio Chávez Peñaherrera, (a) Vaticano, en su declaración policial.

<sup>399</sup> Según la declaración de Demetrio Chávez Peñaherrera, dicho documento estipulaba que «cada firma debía pagar 15 mil dólares por matrícula [...] dando un plazo de ocho días para pagar dicha cantidad». El pago de dicha matrícula tenía que repetirse cada seis meses. Además, cada firma debía pagar 3.00 dólares por kilo de PBC. Vaticano afirma haber pagado la matrícula durante seis meses en 1989 y, además, colaborado «con medicinas, chompas, botas; prestaba vehículo pero menos con armas, explosivos ni municiones». Para fines de diciembre, fue convocado por un mando conocido como Liborio a otra reunión, esta vez en el caserío de Pampayacu. Las firmas fueron citadas de dos en dos y Vaticano se presentó con Greco. Luego el PCP-SL asesinó a los jefes de firma que no acudieron a su cita, entre los cuales Vaticano menciona a Valeza, Lencho y Sardino; pero, según otra fuente, serían varios los jefes de firma de Uchiza que el PCP-SL mató en esa época por haber incumplido las nuevas reglas.

<sup>400</sup> Según la revista Sí (16 de mayo de 1994), un compromiso «más orgánico e integral» se firmó el 9 de abril de 1990. Se trataba de un conjunto de «siete puntos: (1) precio, (2) peso, (3) negociación directa, (4) intermediarios, (5) acuerdos y normas, (6) delegaciones, y (7) sanciones». El punto cuatro de este convenio, de acuerdo con la revista, «[l]egaliza al PCP-SL como controlador del mercado e interlocutor único con las firmas. Norma también el control y uso de aeropuertos y hasta fija pautas sobre el tipo de cambio: en Uchiza, Huánuco, San Martín y Ucayali [...].»

No queda claro si la reunión en Bombonaje se realizó antes o después del asalto al pueblo de Uchiza el 17 de marzo de 1989. Ese segundo ataque y la matanza de policías que se produjo como resultado fue un hecho humillante para la institución policial. Humillación no sólo por subrayar una vez más el apoyo popular del que gozaban los subversivos en desmedro de ellos, sino por haber hecho dolorosamente evidente que ni siquiera contaban con la solidaridad de las otras fuerzas del Estado. El hecho de que éstas no acudieran a los múltiples pedidos de socorro que hicieron los policías durante el ataque luego crearía una situación muy incómoda para el gobierno de Alan García Pérez, que no encontró cómo explicar de modo convincente por qué la orden de enviar refuerzos no se dio a tiempo.

Si bien el asalto a Uchiza se interpretó desde Lima como señal de que el poder y la influencia del PCP-SL sobre el Alto Huallaga habrían alcanzado su punto más alto,<sup>401</sup> desde otra óptica simplemente reflejaba un ejemplo más de la táctica que venía aplicando hacia varios años: utilizar el rencor popular contra las Fuerzas Policiales para convertirlo en una fuente de poder propio. Es posible que la trascendencia del segundo ataque a Uchiza se debiera a las repercusiones que produjo a escala nacional, a raíz de las cuales se volvió a declarar el Alto Huallaga como zona de emergencia y se le dio al Ejército la autoridad máxima sobre la región. Dicho eso, habría que preguntarse también cómo el acontecimiento figuró dentro de los planes del PCP-SL, que precisamente en esa coyuntura proyectaba no sólo una dominación cada vez mayor sobre las firmas que operaban en Uchiza<sup>402</sup> sino también sobre el mercado de la droga en toda la región cocalera.

Lo que no puede negarse es que 1989 marcó un punto crítico en el despliegue del PCP-SL por el Alto Huallaga. Simultáneamente a los sucesos ya mencionados, se dio una fuerte crisis en el precio de la droga que fuentes locales suelen atribuir ahora a la persecución policial a los carteles de Medellín y Cali en esa época. El transporte de la droga al extranjero disminuyó de modo radical, lo cual causó una acumulación de PBC y una saturación del mercado local. Como consecuencia, el precio del kilo de base en el Huallaga comenzó a hundirse. De un monto que había fluctuado entre los mil y mil doscientos dólares durante buena parte de los años ochenta, perdió más de la mitad de su valor y siguió bajando hasta llegar a niveles en que ya no compensaba procesar la droga.

Con el desplome de precios, el PCP-SL no sólo recibió las quejas de los campesinos cocaleros sino que vio gravemente afectadas las economías de sus «comités populares» —de las cuales dependía para las redes logísticas que abastecían a sus estructuras partidarias y militares—. Frente a esta situación, el PCP-SL intentó hacer subir el valor de la droga declarando precios mínimos de compra/venta y, en varias ocasiones, llegando a prohibir toda transacción o salida de droga del valle. Las prohibiciones sobre la compra/venta y transporte de droga solían hacerse efectivas a través de los «paros armados», cuya función principal ya no era la de impedir el ingreso de fuerzas del Estado al valle, cosa que ya era incapaz de lograr totalmente,<sup>403</sup> y menos destruir infraestructura vial, sino la de forzar un alza en el precio de la PBC.

A partir del «paro armado» de 1989, el PCP-SL comenzó a matar «traqueteros» supuestamente por haber desacatado la orden de no comprar, aunque, en la práctica, nunca faltaban las justificaciones para eliminar a los acopiadores: fuera por «pendejadas» —traficar en dólares falsificados, droga adulterada o cometer otro tipo de estafa— o fuera por «soplones». Fuentes ligadas al narcotráfico comentan que fue en ese entonces cuando empezaron los abusos de los mandos subversivos, quienes mataban a narcotraficantes por la única razón de despojarlos del dinero o droga que llevaban o tenían almacenados. Ese tipo de malos tratos vino a negar la reputación justiciera y moralizadora que el PCP-SL tanto había querido crear y dejó, más bien, entre los que comercializaban la droga, la impresión de que el grupo armado se portaba igual y de repente muchas veces peor que las autoridades de siempre. Las matanzas, los abusos y los intentos de controlar precios e in-

<sup>401</sup> Inclusive se comentó que el PCP-SL ya ejercía el poder con un alto grado de legitimidad entre la población del valle. Véase Raúl González, *Quehacer*, n.º 58, abril-mayo 1989. No obstante, es necesario distinguir entre zona urbana y zona rural cuando se trate de la autoridad que pudiera proyectar el PCP-SL en un momento dado. Con la posible excepción de la toma progresiva de Tocache entre marzo y julio de 1987, el PCP-SL nunca logró tener una presencia totalmente pública, es decir, un «comité popular abierto», en un pueblo grande del Huallaga. En ese sentido, la zona urbana siempre constituyó un límite, un horizonte para el dominio subversivo. En el campo, el PCP-SL recurrió a mecanismos muy eficientes para sujetar a la población; en las comunidades más grandes y cosmopolitas, donde se concentraba el capital del mercado de la droga, el sistema del PCP-SL no tuvo el mismo éxito.

<sup>402</sup> Entre ellos, Ministro, Greco, Vaticano, Zancudo, Valeza, Jíbaro, Negro Coco, Sardino, Lencho, Julius, Polaco y muchos más.

<sup>403</sup> Sobre todo, en vista de que para 1989 tanto la Policía Nacional como el Ejército ya contaban con helicópteros para movilizar a sus tropas.

terferir en las prácticas o mecanismos del mismo mercado de la droga crearon un malestar creciente entre los narcotraficantes y contribuyeron a que algunos de ellos vieran al PCP-SL como su enemigo principal.<sup>404</sup>

De modo paralelo a las presiones cada vez más violentas del PCP-SL, los narcotraficantes encontraron un aliado inesperado. A raíz del segundo ataque a Uchiza, se instaló la sede de la jefatura político-militar en ese mismo pueblo, bajo el mando del general EP Alberto Arciniegas Huby. Sin entrar en detalles aquí sobre el período del general EP Alberto Arciniegas Huby y los logros que se le atribuyen y que él mismo reivindica,<sup>405</sup> se puede decir que éste determinó que no sería posible reconstituir el orden interno si el Estado continuaba reprimiendo a la población en general. Su decisión de prohibir la actuación de las Fuerzas Policiales o la continuación de los programas de destrucción de los cultivos de la coca (tanto el rociado de defoliantes como la erradicación manual) en el Huallaga reflejaba implícitamente su entendimiento de que dicha represión dañaba las posibilidades de exigir de la población una obediencia plena a su autoridad. Poner un alto a la interdicción policial y a las labores de erradicación le disputaba al PCP-SL una de sus bases de legitimidad entre la población local.

La expansión de las actividades del Ejército en el Huallaga trajo consigo otros tres cambios que, a la larga, afectaron más el avance del PCP-SL que sólo el hecho de haber parado de modo temporal la represión contra el narcotráfico. Éstos fueron la colocación de bases militares en Uchiza, Palmas del Espino (Santa Lucía), Tocache y Madre Mía (junto con la reorganización o refuerzo de la presencia del Ejército en Aucayacu); la reanudación de trabajos de inteligencia; y el mejoramiento de la carretera Marginal. Este último permitió restablecer una comunicación fluida con Tingo María por vía terrestre.

El año 1990 se consolidó la presencia del Ejército con la creación del frente Huallaga. Retomar los pueblos principales del Huallaga y los puntos estratégicos a lo largo de la carretera Marginal podría describir la táctica del Ejército, que constituyó el primer paso en revertir el avance del PCP-SL. Ese año aparecieron bases en Tulumayo, Nuevo Progreso, Pizana y Punta Arenas, las cuales servirían para apartar más a los miembros del PCP-SL de la carretera Marginal. A partir de ese entonces, la amenaza del PCP-SL sobre los centros urbanos del Alto Huallaga empezó a disminuir. Desde sus bases, el Ejército ya iba desarticulando a los CPPP, que, en poco tiempo, privarían al PCP-SL de su red de vigilancia al minar su habilidad de operar en los centros urbanos y dificultar un seguimiento cabal de las actividades de las firmas. Mientras tanto, los operativos del Ejército en el campo golpeaban cada vez más su estructura rural, hasta que, para fines de 1990, el PCP-SL ya no se encontraba en la misma capacidad de incursionar en las zonas urbanas, aunque el hostigamiento armado y presiones diversas sobre sus poblaciones continuaron a lo largo de la década de los noventa.

Para el PCP-SL, la ascendencia del Ejército significó una fuerte pérdida de influencia donde más circulaba el dinero del narcotráfico, aunque el costo no sólo se medía en términos económicos sino también de seguridad. Con el Ejército asentado en los pueblos principales, vigilar el flujo de personas entre las zonas urbanas y rurales volvería a ser una preocupación más apremiante. Ésta podría haber sido otra de las razones por la que los «traqueteros», quienes conforme con su trabajo tenían que moverse constantemente entre ciudad y campo, recibieron el grueso de la violencia subversiva, justo en un momento en que el PCP-SL empezó a dictar condiciones sobre la participación en el comercio de la droga.

El PCP-SL, en su afán de sujetar las firmas a su control, las había transformado en aliadas naturales del Ejército. Las firmas encontrarían en éste un protector más discreto y menos intruso en lo que se refería al mercado y con una apariencia además de ganador que el PCP-SL ya no podía proyectar.

#### 9.4. EL FIN DEL APOGEO

Para fines de 1989 y principios de 1990, el apogeo de la droga comenzaría a perder la fuerza que lo había caracterizado durante buena parte de la década de los años ochenta. El pueblo de Uchiza, que desde 1984 figuraba como un centro abierto del narcotráfico y quizás el mercado más grande del valle, empezó a decaer frente a una confluencia de obstáculos. Entre ellos, podrían mencionarse la instalación de la base de la Drugs Enforcement Administration (DEA) en Santa Lucía (septiembre de 1989), el comienzo de la interdicción aérea por

<sup>404</sup> Se podría citar a Vaticano, Shuco Claudio, Champa y Cachique Rivera, entre otros, que se armarían para defenderse del PCP-SL.

<sup>405</sup> Por ejemplo, la aseveración de que, durante su tiempo en el cargo, el Ejército dio un golpe casi mortal al EGP. CVR. Entrevista con el general EP Alberto Arciniegas Huby, el 10 diciembre de 2002. Véase también José González (1993), sobre los aciertos de la estrategia implementada por el general EP Alberto Arciniegas Huby.

parte de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) con apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos, la destrucción de tierras de cultivos tanto por las fumigaciones experimentales con el Spike a fines de los años ochenta como por la diseminación posterior del hongo *Fusarium Oxysporum* y las presiones del PCP-SL sobre las firmas. En conjunto, estos cambios se combinaron y privaron a Uchiza de las cualidades que la habían hecho propicia como mercado abierto del narcotráfico.

El apogeo se fugaría del Alto Huallaga en busca de mejores condiciones, volviéndose menos asentado y más nómada. Cocaleros y firmas se desplazarían hacia el Bajo Huallaga (Juanjuí, Bellavista, Picota), aunque en mayor medida hacia Aguaytía y Pichis Palcazu. Elementos del PCP-SL los seguirían con preferencia hacia el departamento de Ucayali.

El narcotráfico no abandonó el Alto Huallaga, pero ya no tuvo el volumen de negocio que experimentaba durante los años ochenta. Todavía se dieron fenómenos menores o limitados del apogeo, donde volvió por momentos breves a reinar el ambiente festivo de antaño —generalmente cuando narcotraficantes locales lo graban, previo acuerdo con el jefe de la base militar, despachar cargamentos de droga desde una pista improvisada cerca del pueblo—. No obstante, poco a poco el narcotráfico se hizo más discreto y precavido y los embarques fueron menos frecuentes debido a la cada vez mayor interceptación de vuelos por la FAP.

El PCP-SL, por su parte, trató, de modo progresivo, de crear su propia empresa a partir de la droga, absorbiendo todas las divisiones de trabajo requeridas para los ciclos de producción y embarque. Si bien ya no podía influir tanto en las firmas, que se concentraban en los pueblos grandes, operaron pequeños feudos independientes en el campo, sitios como Paraíso, la Morada o Batán, desde los cuales enviaron droga a Colombia. Era un PCP-SL cada vez más involucrado con las operaciones del narcotráfico, pero sólo dentro de sus sectores de concentración, puesto que ya no estaba en condiciones de controlar el mercado a escala del Huallaga o erguirse como estado por encima de toda la población del Huallaga. Sólo en el campo siguieron siendo una autoridad, aunque una autoridad cada vez menor debido a los operativos del Ejército.

#### Campo

A ella, por ejemplo, la agarraban y la obligaban a colaborar con su partido. ¿Por qué? Porque ella tenía su negocio. Parece que venía eso de su familia, o sea, en Panao estaban acostumbrados a eso, o sea, a trabajar. Su papá tenía una camioneta cuatro por cuatro. Andaba sin zapatos pero tenía plata, o sea, unas costumbres medias raras. Y te digo, entonces, que ella había puesto su tienda allí en Pacota, pero por lo bajo compraba o vendía insumos [...] cal, kerosene, después amoníaco, perga, todas esas cosas. Entonces, por el hecho que ella vendía, la habían nombrado delegada. A Pacota no entraba ni la Policía, ni el Ejército, como era un pueblo que estaba lejos ya. Ahí todo el pueblo era terrorista [del PCP-SL], todos, la mayoría, aunque no era porque por tu sangre corría eso, sino porque te obligaban y tenías que estar ya constante. En ese entonces, ella tenía 14 años y sucede que un día la vieron conversando con un chico *Catalino*. La vieron conversando y luego la buscó uno del mando político y le dijo que mañana en la mañana, al día siguiente, se iba a casar con *Catalino*, que los iban a hacer juntar. Entonces, ella, antes que hicieran eso, le encargó su tienda a su prima y se escapó esa misma noche a Nuevo Progreso. O sea, se vino cruzando todos los cerros, ahí estaba, cómo se llama esto, Buenos Aires, Alto Colombia, Bajo Colombia, no sé, unos pueblos que yo tampoco ni conozco y se vino, se escapó y seguía en ese negocio, trabajando sus insumos. (Yéssica, joven empresaria)<sup>406</sup>

---

<sup>406</sup> Esa historia fue contada por Yéssica, una mujer de Arequipa que pasó sus años de adolescencia en Nuevo Progreso, lugar donde se inició en el comercio de la cocaína. La muchacha que huyó de Pacot, cuya identidad Yéssica no quiso revelar, fue su maestra, la persona que la instruyó primero en el negocio de los insumos y luego de la droga. Contó, además, que la muchacha no había cursado más que la primaria pero era una persona hábil, con iniciativa. Estas cualidades, sin duda, habían despertado el interés de los mandos. El PCP-SL constantemente enfrentaba dificultades para encontrar personal capaz de asumir los puestos en los comités, tanto así que, a veces, el solo hecho de no ser analfabeto era calificación suficiente para recibir el cargo. El PCP-SL decía estar a favor de los sectores más pobres pero buscaba a sus colaboradores y militantes entre los que infundían terror y los más capacitados —al menos, con un mínimo de educación—, mejor si tenían propiedad, capital y cierta posición social en la comunidad.

Yéssica, a pesar de haber vivido buena parte de los años del apogeo en el Alto Huallaga, nunca conoció el caserío de Pacota. En el Huallaga, ha habido muchos sitios como Pacota. Para las personas que no estaban incorporadas al PCP-SL o que no contaban con los contactos requeridos, eran sitios vedados, de los cuales se escuchaba hablar pero que no presentaban las condiciones para entrar. Eran caseríos alrededor de los cuales se acumulaba una atmósfera intimidante o maligna, sitios cuyos nombres mismos parecían comunicar una amenaza. Escuchar que te iban a llevar a Manteca o a Consuelo o a Río Uchiza llegó a ser sinónimo de muerte. Eran lugares que quedaban muy cerca físicamente, pero extremadamente remotos en la geografía social.

### 9.5. UNA VISITA INESPERADA

Como un domingo cualquiera, *Willy* había salido temprano de su chacra con sus hijos y su esposa al caserío de San José de Pucate para ver el partido de fútbol. Pasaron el día divirtiéndose, conversando con la gente. Alrededor de las cinco o seis de la tarde, cuando ya era casi hora de regresar a casa, aparecieron treinta hombres, encapuchados y armados. *Willy* no sabía si eran los *sinchis* o el Ejército, pero un amigo le dijo que no, que, más bien, eran del PCP-SL.

No había forma de escapar porque los senderistas [integrantes del PCP-SL] habían puesto un vigía en cada esquina. Como gritaron: «¡Que paren! Nadie sale de acá. ¡Todos al colegio! Vamos a tener reunión». A la gente de San José le tocó obedecer, no había otra. En el colegio, dos de los encapuchados comenzaron a explicar razones de su visita y a conversar de su política. «¿Por qué estamos luchando, por qué estamos organizando a ustedes? Aunque sea, para que se defiendan sus derechos. Acá vienen las autoridades del Estado a hacer abusos, nos maltratan. ¿Cómo se puede defender? Uno se reclama, no nos hacen caso. Único reclamar [...] con sangre». Otro de los encapuchados anunció que iban a poner una bandera en el pueblo «y que nadie me saca. Tiene que venir el mismo Ejército. Si ustedes me sacan o van a informar a Aucayacu, vamos a venir y lo vamos a matar a todos, familia completa».

Así resumió *Willy* su contacto original con el PCP-SL, un encuentro tan sorpresivo como amenazante.

*Willy* no era oriundo de San José. A los 11 años se había escapado de la casa de su papá en un pequeño pueblo de Huamalíes y, acompañado por dos amigos de su edad, se enrumbó hacia Monzón, donde se decía que, por ser zona cocalera, siempre había trabajo. En Monzón estuvieron un año y medio cultivando terrenos, fumigando y cosechando coca. Luego dejaron Monzón, cada uno hacia un destino diferente. Uno fue para Pucallpa otro para Tocache; pero *Willy*, sin ir tan lejos, fue a Palo Huimba, un pueblito cerca de Tingo María. Allí siguió trabajando de peón pero no en la coca sino en la producción de plátanos, maíz y arroz. Un año después, se marcharía de nuevo, esa vez para Aucayacu, porque había escuchado que allá uno ganaba más. Recién había cumplido los 14 años.

En Aucayacu no conocía a nadie, pero consiguió empleo con un tal Romero, un «simple propietario» con un poco de ganado y cultivos, quien lo llevó a su chacra al otro lado del río Huallaga, más precisamente en el caserío de San José de Pucate.

*Willy* no se quedó mucho tiempo con Romero. A los seis meses aceptó irse con un joven del mismo San José, quien lo había invitado a trabajar en su chacra. Luego el joven le presentó a su hermana, con quien *Willy* llegó a comprometerse al año siguiente. Entre hermanos y primos, la familia de la novia era numerosa y extensa. Habían llegado de Cañete una década atrás atraídos por la oferta de tierras gratuitas y terminaron por quedarse en San José. Los padres de la novia tenían una chacra a un kilómetro del caserío. Era un terreno plano que producía plátanos, arroz y maíz, pero, cuando *Willy* se casó con la hija, los suegros se lo entregaron al nuevo yerno y regresaron a Lima. Era el año 1975.

Fue poco después que el sembrío de coca comenzó a asentarse paulatinamente en la banda de Aucayacu. *Willy* pidió autorización a la directiva comunal de San José para abrir su propia chacra. Buscó un terreno empinado en un cerro al fondo, donde puso su cocal sin saber lo que estaba por venir. Pero él no fue el único; todos los agricultores de San José se dedicaron a la coca y, cuando llegaba el momento de cosechar, iban uno por uno a empadronarse en la oficina de la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) en Tingo María. Una vez afiliados, iban a Tingo María nuevamente a vender su hoja. Sin embargo, al momento de comprar su pasaje, se encontraron con la sorpresa de que los transportistas les cobraban una doble tarifa, argumentando que quien tenía coca recibía una buena remuneración. También descubrieron que ENACO no compraba toda la cosecha, sino que seleccionaba las mejores hojas a su criterio, escogiendo sólo las más verdes y sin manchas. Las demás no las quería recibir. Aparte de eso, pagaban un precio tan bajo que apenas alcanzaba para cubrir los gastos del agricultor.

Como explicó *Willy*: «Perdíamos al llevar, ya el pasaje y encima que nos pagaban una miseria. De esa razón, todos los que estaban inscritos en ENACO ya llevaban una parte [a Tingo María] y otra parte lo vendían al otro [narcotraficante]. El otro [narcotraficante] pagaba más y al último casi a ENACO ya no lo llevaban ya, más le daban preferencia a lo que compraban para que lo elaboren [en pequeñas bolas de droga conocida como la “bruta”]».

El otro atractivo de venderle al narcotraficante era que no tenían que gastar en transporte, porque el comprador llegaba directamente a la chacra.

Poco después empezaron los operativos contra los cocaleros. De Tingo María venían los *sinchis* destruyendo con dinamita las secadoras de coca a lo largo de la carretera Marginal. *Willy* observó cómo llegaron hasta Aucayacu a recorrer el pueblo «en sus polos blancos y con sus perros amaestrados». Permanecieron por Aucayacu cerca de una semana pero no cruzaron al otro lado del río; dejaron sin tocar todos los cocalos por la margen izquierda del Huallaga.

El operativo, no obstante, alertó a los cocaleros de toda la provincia de Leoncio Prado, quienes formaron un sindicato a fin de defender sus cultivos de los intentos de erradicación. Fue a través de ese sindicato, en la versión que manejaba *Willy*, que se propagó el PCP-SL:

Vienen, pues, los nombrados, diciendo que son dirigentes, que vamos a defender nuestro trabajo, nuestro derecho decían, ¿no? Y total ahí estaba el terrorismo. Ahí nace en ese tiempo, según me contaron que vinieron de Ayacucho, porque en Ayacucho más antes ya estaba organizado, de ahí venían y se infiltraban en el comité [de cocaleros], se metían. ¡Vamos a hacer paro! ¡Vamos a reclamar! [decían] pero estaban metiendo la subversión ya.

Una vez organizado el sindicato, los cocaleros fueron a la huelga. Llamaron a los agricultores de todos los caseríos de Pueblo Nuevo hasta Pucayacu a bloquear la carretera Marginal con piedras y palos. El paro duró entre 24 y 48 horas y *Willy* contó cómo, en medio de la huelga, una patrulla de la UMOPAR llegó de Tingo María a encargarse con un grupo de huelguistas, quienes se habían reunido en el cruce de Aucayacu con la carretera Marginal. Los policías querían saber quiénes eran los dirigentes para poder, decían ellos, recibir sus reclamos. Sin embargo los huelguistas, que según *Willy* ya habían sido preparados para esa eventualidad, respondieron que nadie estaba encargado de conducir sino «que todo el pueblo somos dirigentes».

Medio año después llegó ese domingo en que un grupo de encapuchados apareció en San José por primera vez para colocar la bandera roja que nadie se atrevió a bajar: «Pucha, esa bandera flameaba pues dos, tres meses ahí», recordó *Willy*. Dentro de las próximas semanas, la gente de San José se enteró de que los otros caseríos de la margen izquierda también estaban embanderados. Eventualmente, no faltaría quien informara a las autoridades en Aucayacu y la Policía Nacional entró a San José preguntando quién había puesto la bandera. Los moradores contestaron simplemente que desconocidos habían llegado a ponerla; los policías no hicieron más que sacarla y largarse. A los pocos días, regresaron los encapuchados y volvieron a colocar la bandera: «Así nos tenían como casi un año».

Al poco tiempo, *Willy* sufrió un atraco una noche en la chacra de su cuñado. Un grupo de asaltantes lo agredió y casi lo mató. En esa época, cuando apenas se fortalecía la coca, los caseríos frente a Aucayacu se llenaban de malhechores que asaltaban en grupos. Había bandas de criminales en San José, San Martín, Primavera y en Pavayacu que se dedicaban a observar a quien estuviera por cosechar para luego sorprenderlo en la noche y llevarse el fruto de su trabajo. Robaban coca y nada más, porque, como *Willy* explicó, «Otra cosa no teníamos pues». La noche que atacaron a *Willy*, logró reconocerlos a pesar de la oscuridad. Vivían por un puente de un caserío cercano pero saber quiénes eran sólo le hizo sentir más miedo:

Yo estaba mal, pues, me pegaron, me estroppearon. Entonces, yo desesperado, yo le digo a mi señora hay que ir a otro sitio. Voy a Pucallpa mañana a buscar terreno por ahí, como tenía plata de que vendía mi hoja, ya tenía un poquito mi platita. Entonces, justo ese día en la noche estoy planeando con mi señora y, en la madrugada, llegan los terrucos [miembros del PCP-SL] en mi casa, llegan pues una cantidad, ya no eran ya treinta, eran como 100, cantidad.

Los integrantes del PCP-SL venían ya informados de lo que había pasado. Querían saber quiénes habían sido:

Ellos a su manera, «compañero», dicen ellos, «compañero te han asaltado». No, le digo yo. «Sí te han asaltado, nos han contado. Ahora ¿tú a alguien conoces o sospechas? Eso es lo que queremos saber. A usted no le vamos a hacer nada. Acá lo que vamos a matar es al soplón, al violador, a asaltantes, al delincuente, al vago, al fumón. Esos sí los vamos a aniquilar. A esos los vamos a limpiar, todo ese tipo de gente. Vamos a seleccionar a la gente, eso es lo que buscamos [...] Díganos si conoces a alguien.

*Willy* no quiso decir nada y, más bien, contestó que quería dejar San José y buscar un terreno lejos, por otro lado. Los subversivos trataron de disuadirlo. Ofrecieron trasladarlo a otro lugar que ya tenían organizado. Allí aseguraron que nadie lo vendría a asaltar: «Vas a tener seguridad, el pueblo mismo te van a cuidar». Pero *Willy* no aceptó; estaba resuelto a irse por su lado y los subversivos tampoco se opusieron. Le dijeron, más bien, «Ya compañero, tú te decides, nosotros te queremos proteger llevándote a otra zona.

Usted no quieres, pero algún tiempo que tú te das cuenta, que regresas, acá está tu chacra, tu terreno y puedes trabajar viniendo cualquier tiempo».

Willy se despidió, dejó a su esposa en la chacra y se fue a Pucallpa. A los pocos días, había encontrado un lote por la carretera a Tornavista y regresó a Aucayacu para alistar a su familia. Apenas tres días después de su vuelta a San José, llegaron nuevamente los encapuchados. Pedían saber: «¿Cómo es? ¿Vas a quedarte o irte?». Pero Willy simplemente les confirmó que estaba decidido, que incluso había comprado su terreno. «Ya, pero estamos organizando acá», contestaron. «Usted no tiene por qué hablar nada de eso. A usted le vamos a seguir su paso. Si usted algo cuentas, hablas, pierdes tu vida. Si vas, vete callado, no has visto nada, no has sabido nada, trabaja tranquilo, nosotros ya acá vamos a luchar, organizar y vamos a erradicar a toditos los delincuentes».

Willy se mudó con su familia a Ucayali. En su nuevo terreno se dedicaba a la agricultura, ya que no era una zona cocalera. Durante un año y medio trabajó sin problemas y sin volver a Aucayacu. Estaba contento. Su esposa, sin embargo, no se acostumbró; extrañaba a sus hermanos. Willy quiso regresar a Aucayacu. «Yo le digo a qué vamos a volver, le digo a mi señora, nos van a matar». Pero ella no estaba segura y decidió ir para averiguar en qué estaba la chacra que habían dejado. Al poco tiempo, regresó a Ucayali trayendo noticias de San José. Decía que ya no había los «maleantes» de antes, que el PCP-SL en su mayoría los había matado y los que no, se habían fugado «a la ciudad» [Aucayacu] y que ahora uno podría «andar libre, tú dejas tus cosas, nadie te quita, nadie te roba». Con estas palabras, llegó a convencer a Willy. Encargó su terreno con un señor y regresaron juntos a Aucayacu.

Llegaron a Aucayacu a mediados o a fines de 1985 y Willy se dio cuenta de que muchas cosas habían pasado. Durante su ausencia, el PCP-SL ingresó en el pueblo dos veces para atacar el puesto policial. Además, Willy encontró al Ejército acuartelado en el segundo piso del concejo municipal. Amigos con quien hablaba le contaron, entre otras cosas, que el PCP-SL se había apoderado prácticamente de la zona rural y, en lo que se refería al narcotráfico, ya había una nueva técnica para refinar la droga. Ya no circulaban tanto las bolas de «bruta» sino paquetes de pasta básica lavada conocida como «la base»: «Allí recién la conocí».

En el mismo San José, Willy descubrió que el caserío ya contaba con un delegado del PCP-SL. Eso fue nuevo porque la presencia del PCP-SL anteriormente se había limitado a las reuniones y charlas políticas. Ahora, sin embargo, se había instalado una autoridad propia, un «comité popular» incipiente, que gobernaba los asuntos de la comunidad. Ya no existía la directiva comunal de antes sino un «comité» mucho más fuerte. La nueva autoridad se encargaba de organizar al pueblo, es decir, de aplicar las instrucciones de la subversión y repartir las enseñanzas y tareas políticas del PCP-SL. Si llegaba una persona nueva buscando terreno, esa persona tenía que entrevistarse con el delegado, quien, antes de darle permiso para residir allí, la interrogaba exhaustivamente sobre su procedencia, su historia y sus propósitos. Sólo si conocía a alguien del caserío y venía recomendada encontraba acogida. A los forasteros los recibían con sospechas, cuando no amenazas.

Pero a Willy como ya lo conocían lo felicitaron más bien por haber vuelto. O, como él mismo recordó, se alegraron al verlo, diciendo: «Bienvenido hijo, usted te has ido de miedo, te han asaltado y casi te matan, has regresado. Ahí está tu terreno, hasta mientras lo hemos dado a otro señor para que se vaya manteniendo, para que pueda ir cosechando [...] pero ya ahora te entregamos».

En ese momento, Willy se dio cuenta de que ahora sólo se ocupaba y trabajaba la tierra con el consentimiento del PCP-SL. Y no faltaron personas que perdieron sus terrenos con la llegada del PCP-SL y tuvieron que retirarse a la zona urbana de Aucayacu.

El decomiso de tierras ocurrió, sobre todo, cuando los propietarios no quisieron «alinearse» —palabra de Willy— tras el PCP-SL y sus reglas. El PCP-SL daba dos opciones: «te vas o te sujetas». A aquel que no aceptaba ninguna de esas dos alternativas le esperaba la muerte. Si en un principio el PCP-SL mató a la gente acusada o percibida como maleante, ahora, en lo que era prácticamente otra etapa de selección, las personas que no quisieron vivir bajo el régimen del PCP-SL no tuvieron otra opción que marcharse.

Como resultado de esa política, muchos terrenos, fuera por abandono o por defunción, quedaron en manos directas del PCP-SL. Quien decidía abandonar o irse porque lo obligaron estaba prohibido de vender el terreno o la coca que producía. La persona y su familia no podían llevar más que lo que podían cargar.

Los terrenos y plantaciones que se confiscaban se convertían en «chacras del pueblo» que eran, en verdad, chacras del PCP-SL. Toda otra pertenencia decomisada o abandonada sufría similar suerte. Los delegados estaban encargados de administrar las propiedades confiscadas, convocar asambleas y, sobre todo, organizar a la comunidad en las faenas comunales: labores de cultivo, siembra, fumigación y cosecha en las «chacras del pueblo». La producción que derivaba de esas actividades llegaría a constituir uno de los ingresos principales del PCP-SL mientras que el dominio sobre la adjudicación de tierras vendría a ser quizá el primer y principal nudo del control subversivo sobre el campo.

No obstante, éstos fueron sólo algunos de los cambios que *Willy* descubrió al regresar a San José. Notó, además, que ahora, cuando aparecían los miembros del PCP-SL, siempre de sorpresa, ya no usaban capucha. Antes, cuando el pueblo no estaba concientizado, tenían que andar con la cara cubierta. Todavía era peligroso; abundaban los enemigos y fácilmente caerían si alguien informara. Pero con el pueblo organizado se sentían más seguros de circular «con la cara libre».

La demanda por coca se había incrementado considerablemente en su ausencia y, cuando *Willy* volvió a sembrar en su chacra, se dio con la novedad de que los compradores llegaban a cada rato a pedir que les vendiera hoja. Así que *Willy* amplió sus cultivos y sembró varias hectáreas. Cuando llegó el momento de cosechar, contrataba entre treinta y cuarenta peones para recoger el producto. En poco tiempo se convirtió en un cocalero relativamente próspero.

Sin embargo, cuanto más influyente se hacía, mayores obligaciones adquiría con el PCP-SL. Todos los cocaleros, a excepción de los agricultores más pobres, tenían que entregar un porcentaje de cada cosecha al «comité». El monto variaba según la cantidad o el volumen de producción. *Willy*, por ejemplo, tenía cinco hectáreas dedicadas al sembrío de coca y, con la venta de la hoja, ganaba alrededor de dos mil quinientos dólares por cosecha. De ese monto, siempre entregaba entre quinientos y seiscientos dólares al «comité», es decir, entre 20% y 25%. El aporte exacto se determinaba en la asamblea o reunión de la comunidad; pero, por lo general, solamente los que producían de cincuenta arrobas para arriba estaban sujetos al impuesto. Si bien los que cosechaban menos no tenían que aportar de esa forma, el tributo que pagaban los cocaleros sobre su producción constituía uno de los ingresos principales de los «comités populares» del PCP-SL.

No obstante, *Willy*, al volver a San José, se percató de otro cambio fundamental: la droga, que antes se trabajaba de forma clandestina, ahora se vendía públicamente por toda la margen izquierda del río Huallaga. La compra/venta era libre; libre pero controlada. Sólo se permitía la compra en sitios designados por el PCP-SL y bajo la vigilancia de uno de sus militantes. Para entrar a comprar, los acopiadores necesitaban una recomendación, es decir, contar con alguno de la zona que los contactara con los delegados del PCP-SL y los avalara antes de recibir autorización. Una vez autorizado, el acopiador podría comprar pero sólo de acuerdo con las reglas que establecía el PCP-SL.

En la zona de Aucayacu generalmente se explica la intervención del PCP-SL en la transacción misma de la droga aludiendo a los abusos que cometían los «traqueteros», quienes, según moradores del lugar, estafaban a los campesinos cocaleros al momento de comprar la droga. La estafa podía consistir en pesar los kilos de PBC con una balanza adulterada o calcular mal el descuento que le aplicaban a la droga por agua o impurezas. En parte, ese tipo de engaños eran de esperarse, porque el margen de ganancia del acopiador dependía íntegramente de la ventaja que obtuviera del precio a costa del campesino cocalero.<sup>407</sup> La habilidad para aprovecharse de la supuesta sencillez de «la gente de chacra» era motivo de orgullo para los «traqueteros», que provenían del ambiente más pijo que prevalecía en los pueblos grandes. Sin embargo, el PCP-SL encontró una solución formal a las tretas de los «traqueteros» con la instalación de la balanza administrada por el comité popular de cada comunidad.

*Willy* recalcó la situación de esta forma:

La mercadería circulaba ya [...] los traqueteros, compradores, mucho se aprovechaban pues, robaban de los paquetes que ponían pues. Ponían a la balanza como papa, así pesaban y no puedes reclamar y nada. Tanto de eso ya pues, como ya estaba zona, pueblo organizando [...] entonces, han dicho pues. Viene, pues, una orden de bolson o de Regional, ¿de dónde vendría? Pues dice prácticamente los compradores hacen abuso del pueblo. Acá tiene que controlar el pueblo, controlar la balanza. Entonces ni para ellos ni para uno, tienes que pagar. Ahora, lo

<sup>407</sup> Sobre ese punto, véase De la Puente, Juan F. «La narcomodernidad: hacia el fin del boom de la coca». Quehacer, n.º 89, mayo-junio 1994.

que tiene agua ese sí, pues, ya tú tienes que ver, el que controla balanza, qué cantidad más o menos agua, eso tiene que descontar si es justo, a veces te falta un poco, agua te descontaban pues, ya un montón descontaban. Entonces, pues, eso han dicho [...] tiene que haber balanza del pueblo.

Desde antes del retorno de *Willy* a San José, el control de la balanza ya funcionaba en puntos estratégicos a lo largo de la margen izquierda del río Huallaga. Eran sitios ubicados aproximadamente a un kilómetro de los puertos principales hacia el interior y de acceso fácil para los «traqueteros» que cruzaban el río en pequeños botes de Aucayacu o Ramal de Aspuzana. *Willy* constató que había balanzas en Cerro Alegre (frente a Aucayacu), San Martín de Pucate (frente a Las Mercedes) y San José de Pucate (frente a Cotomono), así como en los puertos de Moena y Muyuna; aunque parece ser que, en la margen izquierda del río, la institución de la *balanza legal* se extendía desde Venenillo hasta Magdalena y la Morada.

En cada sitio de control, el «comité» del sector designaba a una persona que se encargaba de velar por la rectitud de cada transacción. «Ellos», explicó *Willy*, «controlan la balanza para que no roben, para que paguen justo, ellos están mirando cuántos gramos y lo que pesa tienen que pagar [los «traqueteros»]». Estos veladores (o vigilantes) eran nombrados en asamblea, convocados por el delegado. El puesto duraba una semana y se rotaba entre todos los adultos, tanto hombres como mujeres de cada caserío. Por este servicio, los acopiadores tenían que pagar un dólar por cada kilo pesado. El controlador recibía el dinero, anotaba el monto en un cuaderno y, al final de cada día, sumaba la cantidad recolectada por concepto de pesado para su entrega o centralización posterior en el «comité».

A través de la institución de la «balanza legal», el PCP-SL proyectaba un mensaje o promesa de justicia y a la par mediatizaba dos grupos y dos esferas sociales. Garantizaba al campesino una transacción limpia, es decir, que lo que se pesaba fuera exacto y que el porcentaje de descuento que se le aplicaba a la droga no fuera exorbitante. Al «traquetero», el PCP-SL le daba la seguridad de comprar sin que nadie lo sorprendiera, ni los policías ni los asaltantes. Sólo tenía que ir directamente a una de las balanzas cuando quería negociar. En las palabras de *Willy*, «El pueblo pone para todos su seguridad; ellos están dando esa balanza; por eso, están cobrando también por dar su seguridad». Sin embargo, si el traquetero intentaba esquivar el control comprando fuera de los sitios designados, el «comité» le decomisaba la droga y el «traquetero» tenía que pagar doble por la devolución de su mercancía.

*Willy* era enfático cuando decía que, por la zona de Aucayacu, la «balanza legal» sólo funcionó en la margen izquierda del río Huallaga; si bien los caseríos de la margen derecha estaban organizados también por el PCP-SL, su cercanía a la carretera Marginal los exponía a las intervenciones constantes de las fuerzas del Estado que venían de Tingo María o Aucayacu. Mientras tanto, el río Huallaga constituyó una relativa barrera u obstáculo que, sin impedir la entrada del Ejército o la Policía Nacional, al menos dificultaba el desplazamiento de sus fuerzas. Esa relativa demora daba tiempo a la red de informantes del PCP-SL para avisar tanto a los controladores como a los «traqueteros» y campesinos y permitirles hacer una fuga inmediata al monte. Si el operativo entraba por Aucayacu, ya había gente designada para avisar a la banda, ya sea llamando por radio o pasando la voz por bote para informar al otro lado. En ese sentido, la «balanza legal» como institución dependía del servicio de inteligencia que se había organizado tanto en la zona rural como urbana. Dicho de otra forma, por el precio de balanza, el PCP-SL o la población sujeta a éste no sólo aseguraba una protección contra el robo dentro y fuera de la transacción, sino que también prevenía los actos represivos del Estado, tanto los operativos antinarcóticos de la Policía Nacional o los contrasubversivos del Ejército. Era su propio sistema de vigilancia puesto al servicio de los que producían y comercializaban la droga, es decir, prácticamente, la mayoría.

Además de la administración de cocaína confiscados y su producción, el cobro de tributo a los cocaleros y la regulación de las transacciones de la droga dentro de sus respectivos sectores, los «comités» también controlaban las pistas o aeropuertos clandestinos desde los cuales las empresas o firmas de narcotraficantes embarcaban sus cargamentos de PBC a Colombia. Cerca de San José de Pucate no había una pista pero sí, según *Willy*, en los caseríos de Sucre Alto, Pavayacu, Magdalena y La Morada. En estos sitios, el «comité» recolectaba impuestos o cupos de las firmas por cada vuelo. El cobro se calculaba conforme al tamaño de la carga y podía llegar hasta los 15 mil. Una parte del dinero se destinaba al mantenimiento de la pista pero el grueso se centralizaba hacia arriba, por la cadena de mando del PCP-SL.

Durante los primeros dos años en que *Willy* se había reincorporado a San José con su familia, observaba cómo la subversión o «los cabezas», en su manera de decir, llegaban cada cinco o seis meses con el fin de exi-

gir cuentas del delegado. Pedían un informe sobre el cumplimiento de tareas repartidas durante la última visita del PCP-SL, el estado económico del «comité» y cualquier conflicto o problema de índole social que la comunidad no había podido resolver en asamblea. *Willy* notaba que muchas veces los delegados no cumplían a satisfacción de los mandos subversivos y convocaban a toda la comunidad, entre hombres, mujeres y niños. En la reunión, los dirigentes designaban un nuevo delegado. Explicó que existía una gran presión para aceptar el cargo, porque, si la persona lo rechazaba, el grupo lo comenzaría a marginar, diciendo «tú no estás por la organización, sino tú estás con dos caras». En muchos casos, la persona aceptaba por obligación y cumplía apenas con sus responsabilidades. En otros casos, terminaba disfrutando del cargo y empezaba a «dirigir drásticamente», es decir, de forma muy violenta.

A mediados de 1987, el PCP-SL amplió la organización de los «comités» en la margen izquierda del río Huallaga y diversificó la cadena y responsabilidades de los representantes del PCP-SL. El «comité» ya no dependía de un delegado sino de cinco, de los cuales tres eran principales: el mando político, el mando militar y el mando logístico.

El mando político coordinaba las asambleas y se responsabilizaba por impartir la enseñanza política del PCP. El militar velaba por la seguridad de la comunidad, organizaba a las milicias o «fuerza de base» y seleccionaba a los mejores combatientes para su incorporación a la «fuerza local» o «fuerza principal» del EGP.<sup>408</sup> También cumplía funciones policiales como detener a personas que habían transgredido las reglas del PCP-SL. El tesorero del «comité» era el mando logístico, el encargado de administrar los fondos y propiedades «del pueblo», pero también de suministrar las medicinas o provisiones que requiriese el PCP-SL. A estos tres los acompañaban un secretario que «archiva todos los papeles ahí» y un cargo más que *Willy* no podía recordar. Debajo de la directiva del «comité», venían los delegados que coordinaban directamente con la «masa» o población. Había delegados de mujeres, delegados de niños, delegados de ancianos, del sector norte, del sector sur. Según *Willy*, «Había delegados de todo».

Los tres mandos principales eran los puntos de enlace para la subversión cuando éstos llegaban. *Willy* dijo que, generalmente, los mandos de «comité» recibían el aviso con sólo dos o tres horas de antelación y tenían que apresurarse para hacer los preparativos. El mando militar escogía un sitio seguro donde acomodarlos para que no los encontrara el Ejército y reforzaba la vigilancia en los puertos y caminos para controlar el ingreso de personas a la comunidad. El político preparaba la reunión, porque «cuando llega la guerrilla, tiene que haber reunión». Entretanto, el logístico juntaba víveres para la alimentación de la tropa y compraba los pertrechos: «ropas, mochilas, linternas, pilas, esas cosas te piden; necesitamos eso; entonces, el logístico tiene que de eso preocuparse, si no tiene fondo, aunque sea prestándose, ahí te obligan».

<sup>408</sup> En la prensa y literatura sobre el PCP-SL, el término guerrilla generalmente se asocia más con la «fuerza local» que con la «fuerza principal». No obstante, la población del Huallaga suele usar la palabra guerrilla para referirse a las dos. En la estructura militar del PCP-SL, las «fuerzas principales» conforman la llamada «red móvil»: no tiene base fija y se moviliza de sitio en sitio. La «fuerza local» generalmente se desplaza dentro de la «red territorial», es decir, las áreas ya organizadas y administradas por el PCP-SL, y promueven acciones de menor envergadura. En el Alto Huallaga, el PCP-SL llegó a dividir el valle en cuatro zonas territoriales (T1, T2, T3, T4) de Monzón hasta Campanilla y se supone que cada «fuerza local» operaba dentro de un territorio determinado, si bien las fechas de inicio y terminación de la existencia real de estos territorios no están claras. Mientras tanto, la «fuerza principal» son unidades más preparadas que se dedican a «romper trocha» en áreas que todavía no han sido organizadas o que se han perdido a raíz de las acciones contrasubversivas de las Fuerzas Armadas. Aunque la «fuerza principal» desarrollaba campañas de larga duración, desplazándose entre corredores que comunican sierra y selva, solía emprender acciones con el apoyo de las zonas (o bases) ya organizadas hacia zonas colindantes o fronterizas con éstas. Para acciones a gran escala, por ejemplo, la toma de pueblos grandes donde había presencia de los cuerpos armados del Estado no actuaba sola sino reforzaba sus números con combatientes de las «fuerzas locales» y de base (este último correspondía a las milicias que conforman la estructura militar de los «comités populares»).

A menudo, personas en el Alto Huallaga que conocieron al PCP-SL no desde los manuales sino en el contacto cotidiano no tienen una concepción clara de la organización y a veces mezclan las estructuras políticas con las militares. Tal es el caso de *Willy*. Cuando explicó la estructura de mando del PCP-SL, la unidad de menos rango del PCP-SL era el «comité». Lo seguía el «batallón», integrado por tres o cuatro «comités» (cuando es claro que la organización del PCP-SL no avanza de «comité» a «batallón», sino de «pelotón» a «compañía» y luego a «batallón»). Encima del «batallón» estaba el bolsón, conformado por entre nueve y doce «comités». En la margen izquierda del río Huallaga, *Willy* identificó al «bolsón» Cuchara (Venenillo), seguido por el «bolsón» Pucayacu (Primavera, Cerro Alegre, Bolognesi, San José y San Martín de Pucaté, entre otros), «bolsón» Magdalena, «bolsón» La Morada y «bolsón» Huamuco. En orden jerárquico, después del «bolsón», está el «comité regional», arriba del cual reinaba «la cabeza» o Abimael Guzmán. Como simple cocalero y luego mando logístico de «comité», *Willy* sólo tuvo acceso a dirigentes a escala de «batallón» y «bolsón». Nunca conoció a mandos del «comité regional», como Clae o Artemio.

Willy conoció muy de cerca las responsabilidades del logístico a raíz de que, a mediados de 1988, lo nombraron para que desempeñara dicho cargo. Durante un año le tocaba atender las necesidades del pueblo y mantener la contabilidad sobre propiedades, producción y finanzas del comité. Si alguien se enfermaba, tenía que buscar medicinas; si se declaraba un «paro armado», tenía que reunir las provisiones que pedía el PCP-SL. Y cada vez que los mandos del PCP-SL visitaban la zona, había que entregarles la mayor parte del tesoro. «¿Hay fondo o no hay fondo en este comité?», era lo que siempre querían saber. Entonces, tú tienes que dar tu balance y entregar. El 30% queda para el comité y el 70% se lo llevan ellos. No sé para qué llevarán, pero llevan ahí. En todos los comités hacían eso. Ellos tienen que llevar su 70% de entrada.

Pero no sólo pedían dinero sino los balances de todos los cocales confiscados y el estado de la producción. Si se habían apropiado de una ganadería, entonces «tú tienes que decir cuántas cabezas, todo». «Eso no lo puedes engañar», insistía Willy, «porque vienen, controlan y preguntan a uno y otro. "Compañero ¿cuántos ganados han confiscado?". "¿Cuántas hectáreas de chacra en producción has confiscado?". "¿Qué cantidad de producción sale? Todo pues". Entonces, ellos te controlan». Se presume también que evaluaban el desempeño del logístico y, por ende, su nivel de «entrega», porque nunca faltaban oportunidades para medir el consentimiento de cada persona con la política del PCP-SL.

A pesar de la revisión constante a la que sometían los jefes del PCP-SL a los nombrados del «comité», su manera y también la de sus combatientes siempre era cortés, al menos a mediados a fines de los años ochenta —es decir, antes de que el PCP-SL comenzara a sufrir serios reveses en el Huallaga—. «Como cualquier persona llegan [...] no vienen pues con prepotencia, con maltratos, nada, tranquilo llegan o, si estás trabajando algo, te hacen ayudar más bien, te daban apoyo». En ese entonces, todavía las venidas de los miembros del PCP-SL solían ser momentos de expectativa e ilusión para los moradores, sobre todo para los jóvenes y los peones, que se emocionaban al presenciar la «fuerza local» o «fuerza principal» luciendo «bien armados, bien uniformados como un ejército». Y cada vez que llegaban, ya se sabía que los jefes convocarían a una asamblea de todos para dar instrucción política y luego pedir colaboraciones e incluso voluntarios para el EGP. Willy insistió, sin embargo, en que el apoyo que pedían —tanto en dinero como en nuevos reclutas— siempre era libre, de voluntad propia, si bien hacia el final, hacia principios de los años noventa, los mandos de la «fuerza local» y «principal» se volvieron muy «espesos ya», es decir, presionaban mucho.

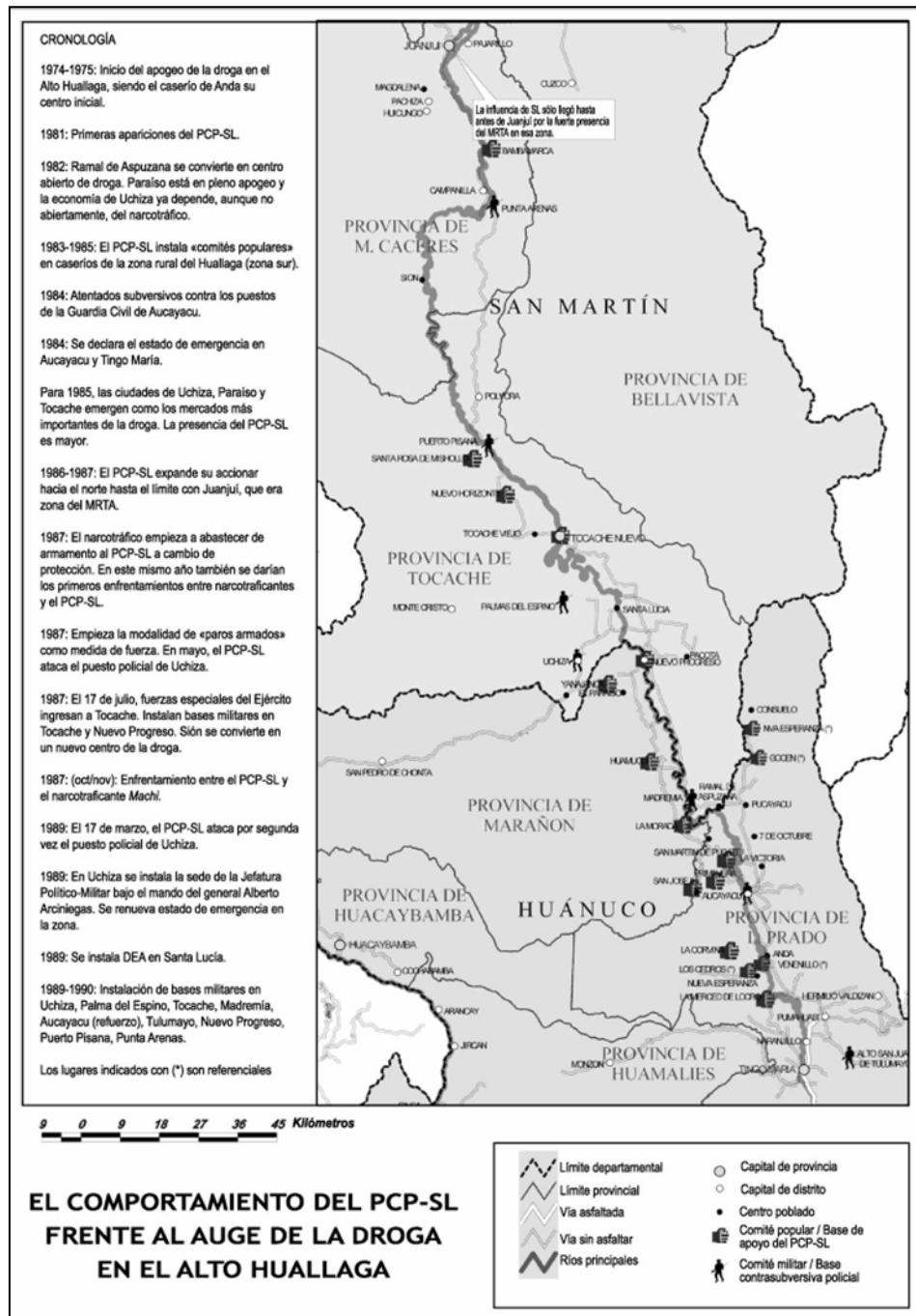
#### 9.6. CONCLUSIONES

Una de las finalidades del presente Informe ha sido mostrar la complejidad de la relación del PCP-SL con el Alto Huallaga durante los años del *boom* del narcotráfico y contribuir al cuestionamiento de una identificación del PCP-SL, como movimiento político-militar, con la empresa de la pasta básica de cocaína, tal como se sugiere con el término narcoterrorismo. El uso y valor de dicho concepto es principalmente de índole estratégica e ideológica y fusiona discursivamente a dos grupos o actores de diferente naturaleza simplemente por el hecho de operar fuera de la legalidad del Estado, empleando medios de violencia prohibidos por la ley. Esto limita la discusión a un solo nivel conceptual, cuya finalidad es únicamente señalar quiénes son los amigos y enemigos del Estado.

El PCP-SL, sin duda, desarrolló nexos muy estrechos con el mercado de la cocaína en el Perú. Sin embargo, es importante señalar que muchas instituciones del Estado, cada una a su manera, también lo hicieron. Lo que distingue la actuación del PCP-SL en el Alto Huallaga fue que entabló una relación con el mercado de la droga mucho más compleja que las otras instituciones que operaban allí, fueran éstas las Fuerzas Policiales, el Ejército o la FAP. Basta advertir la intensidad con la que el grupo maoísta intervino o participó en la producción, el comercio y la distribución de la PBC para captar la naturaleza multifacética de esa relación. Además, a diferencia de los distintos actores del Estado, sólo el PCP-SL pretendió erguirse como autoridad reguladora por encima del mercado de la cocaína y sus participantes.

Desagregar el concepto de narcoterrorismo y comenzar a captar las diferentes dimensiones que esta noción oscurece o simplifica permitirá reconocer que la relación analítica más básica debería ser la que se traza entre el Estado (como forma institucional y proyecto moral, que incluye tanto al Estado como al PCP-SL) y el capital. Asimismo, permitiría destacar la manera en que los flujos de capital rebasan o corroen los vínculos que forja el Estado (nuevamente, tanto el peruano como el subversivo) con los individuos que éste interpela como sujetos e incorpora como agentes o funcionarios. El concepto narcoterrorismo no sólo obstaculiza el tránsito a este nivel

analítico sino que contribuye activamente a negar o a minimizar la complicidad del mismo Estado, no sólo en el plano de los negocios ilícitos sino en las instancias en las que usó la violencia para sembrar el terror.



En cuanto al presente Informe, muchas preguntas y algunos temas quedan todavía sin resolver, sobre todo lo referente a la cohesión del PCP-SL como organización a lo largo del apogeo de la droga. ¿Hasta qué punto y hasta qué año sostuvo el PCP-SL acciones dirigidas desde afuera, es decir, desde la cúpula del PCP-SL, en el Alto Huallaga, si es que alguna vez las sostuvo? O, más bien, ¿fue desde un principio un experimento autónomo? Muy poco se sabe a ciencia cierta de la relación entre el «Comité Regional del Huallaga» y el resto del PCP-SL antes de la caída de Abimael Guzmán Reinoso y la mayor parte de la dirección del PCP-SL en septiembre 1992. Es, sin duda, tentador darle un orden a los acontecimientos cuando probablemente nunca lo tuvieron.

Si todo Estado es, en el fondo, un proyecto moral y la subversión del PCP-SL llevó esa moralidad hasta su punto de quiebre, la ambigüedad moral que infundía el tema de la droga no pudo haber sino creado proble-

mas que no hallaron solución a través de una política que permitía el negocio de la PBC y prohibía su consumo. Como ya se ha mostrado anteriormente, el PCP-SL intentó regular el mercado del narcotráfico y estableció un sistema centralizado de tributos que captaba el dinero, capital humano y otros valores generados por el apogeo con el fin de financiar las necesidades de su lucha. Sin embargo, se desconoce qué tipos de desacuerdos, conflictos o fisuras pudieron haberse creado al interior del partido a escala nacional por el alto grado de participación de los cuadros del Huallaga en la producción misma de la droga, que incluyó el decomiso de terrenos para convertirse en «chacras del pueblo». Cuando se agrega la imagen de una degeneración moral propiciada por el auge del narcotráfico y el abultado poder económico del «Comité Regional del Huallaga» frente a los otros «comités regionales», parecen ser suficientes las razones para suponer que Abimael Guzmán y la cúpula de su partido encontraron en el Huallaga motivos de inquietud.

Existen indicios que sugieren que, desde un principio, la dirección del PCP-SL en el Alto Huallaga se preocupó por los efectos que tendría una relación cotidiana con el narcotráfico sobre las lealtades de sus militantes. El PCP-SL intentó, a través de sus reglas internas, mantener una separación muy clara entre sus estructuras partidarias y las organizaciones de narcotraficantes, salvo con los primeros eslabones del mercado (peones y agricultores involucrados en la producción de la coca y de la PBC).<sup>409</sup> En algún momento, dicha separación se volvió más difícil de sostener. Quizá fue con la toma de Paraíso. O quizás fue una transformación gradual por el hecho de reclutar sus cuadros y combatientes año tras año de entre la población local que se había formado en el ambiente del apogeo de la droga, con todos los aprendizajes que éste ofrecía y cuyo bienestar se basaba en el narcotráfico. Había muchas personas que iban del cocal a las filas de la subversión y luego salían para volver nuevamente al cocal. Pero también era muy común que, cuando militantes o mandos eran detenidos por las Fuerzas Policiales o por el Ejército, se hicieran pasar por «traqueteros» o mafiosos con la esperanza de mejorar sus posibilidades de sobrevivir o salir en libertad. Había muchas otras maneras cotidianas en que la subversión se mezcló con las expresiones sociales del apogeo, lo cual complicó aún más cualquier pretensión de conservar una separación real.

Si el Alto Huallaga fue para el Estado una región renegada, no hay razón para pensar que no lo fuera también para la cúpula del PCP-SL. Aunque hay versiones que señalan que el mismo «presidente» Gonzalo viajó al Huallaga en una oportunidad para celebrar su cumpleaños (algunos dicen en Venenillo, otros en Paraíso), lo que prevalece en los testimonios de los moradores es la sensación de una lejanía de la cabeza o máxima autoridad del PCP-SL. A los «comités populares» del Huallaga siempre llegaban tareas y directivas que provenían —se decía— desde arriba. Asimismo, el grueso de los fondos recaudados por esos mismos «comités» se remitía «hacia arriba». Se suponía que toda orden venía de Lima y que Lima también era el destino final de lo que recolectaba el PCP-SL, aunque quedaba la duda. En medio de una atmósfera de narcotráfico, de fraudes, chantajes y traiciones, existía justificación para desconfiar. La incógnita acerca de a qué o a dónde se fue el dinero no estaba fuera de lugar, aunque quizás una pregunta aún más puntual hubiera sido dónde queda ese «arriba» si es que, en realidad, existe. Esas incertidumbres se hicieron más concretas cuando altos mandos muy conocidos dentro de sus sectores se fugaron con los fondos o tesoro del PCP-SL (llámense Uribe, Charles o Marvin). Fueron acontecimientos que le costaron credibilidad al PCP-SL entre la población organizada, la cual justificadamente podría haberse preguntado para quién es realmente esta «revolución».

Menos célebres pero más frecuentes —a juzgar por su proliferación en las memorias y recuentos de moradores— fueron los casos de mandos menores que se aprovecharon de su posición para robar, acusando a cocaleros con el fin de quitarles sus chacras o matando a «traqueteros» supuestamente por «soplones» pero con la intención de llevarse su dinero. No obstante los abusos de autoridad no se dieron sólo por razones de enriquecimiento personal, también hubo excesos en el manejo de los «juicios populares». Hubo «comités populares» que buscaban cualquier oportunidad para matar y dirigentes de la «fuerza local» que traían a perso-

<sup>409</sup> Los integrantes del EGP tenían prohibido fraternizar o establecer vínculos de camaradería con los narcotraficantes, según el testimonio de un ex combatiente de compañía del PCP-SL. Él cuenta un hecho que ocurrió en el caserío de Nuevo Chilia en 1988: en vez de quedarse en la casa de un campesino como hacían normalmente, se alojaron en la casa de un narcotraficante colombiano, que, para mayor extrañeza de los combatientes, resultó ser muy amigo del mando de su compañía. Todos los días el narcotraficante les traía víveres de Tocache y «prácticamente [los] agasajaba allí». Los combatientes se sintieron muy nerviosos por la situación porque «si el partido se hubiera enterado de eso, nos hubiera sancionado a todos los responsables de eso. Así que tuvimos que abandonar ese sitio a solicitud de todos nosotros, le agradecimos a ese narcotraficante y dijimos que no deberíamos comentar a nadie sobre eso».

nas detenidas en otros sitios y obligaban a los delegados de un «comité popular» a matarlas en una asamblea sin mostrar evidencia de sus supuestos delitos.

Como siempre, es difícil saber a estas alturas cuál fue el grado de deterioro de la disciplina interna en la estructura de mando: si fue un problema constante a lo largo del apogeo o sólo se precipitó después de los reveses de la guerra, con los operativos de gran envergadura del Ejército a partir de 1989, la captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992 o la llegada de la política de arrepentimiento al Alto Huallaga a fines de 1993. Sería equivocado atribuir todos los desgastes y fracasos del PCP-SL a los aciertos de las campañas contrasubversivas y no considerar la manera en que influyó el mismo apogeo en el orden interno del PCP-SL. Para citar sólo un ejemplo, podrían mencionarse los conflictos que surgieron entre las estructuras rurales y urbanas del PCP-SL en la zona de Aucayacu a fines de los años ochenta (pero antes de la ofensiva del Ejército) y que terminaron con la eliminación de los mandos principales de «la urbana» de ese pueblo.<sup>410</sup> No fue el único caso en el que militantes del PCP-SL se mataron entre sí y esta sugiere lo difícil que fue «mantener la cabeza» en medio del auge de la droga.

## 10. EL FRENTE NORORIENTAL DEL MRTA EN SAN MARTÍN

El MRTA se estableció en las zonas de mayor producción de arroz y maíz y, posteriormente, en las áreas cocaleras del departamento de San Martín. La estrategia utilizada para infiltrarse fue actuar como elemento de presión frente a la autoridad estatal, así como convertirse en una herramienta de control social. Estas acciones se realizaron en áreas donde la intervención estatal y el tipo de articulación productiva habían dado lugar, décadas atrás, al surgimiento de movimientos que se agrupaban en torno de demandas productivas, de autonomía regional y de servicios del Estado.

El presente acápite tiene por finalidad analizar cómo el MRTA capitalizó, para su causa política y militar, las demandas regionales de los diversos frentes de defensa de San Martín, así como de los gremios de productores agrícolas del departamento. El objetivo de esta estrategia era crear una base de apoyo social y política para instaurar y desarrollar su frente nororiental.

### 10.1. EL MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-VANGUARDIA REVOLUCIONARIA (MIR-VR)

#### 10.1.1. Formación de bases políticas del MIR-VR

Durante la década del setenta, el MIR-VR se había asentado en San Martín y, a través de sus militantes, especialmente profesores, hacia un efectivo trabajo político de captación de potenciales cuadros para su proyecto armado. Luego empezó a organizar células de militantes, en especial en las localidades de Shapaja, Shanao y Pucacaca, distritos donde algunos de sus cuadros ya trabajaban como maestros. Posteriormente, acrecentaron su radio de acción hasta alcanzar las provincias de Moyobamba y Juanjuí.

Estas células militantes hacían estudios y análisis de libros marxistas-leninistas, de la historia del MIR de Luis de la Puente Uceda, de Ernesto Che Guevara y su guerra de guerrillas, sobre la guerra de Vietnam, entre otros temas.

El trabajo de concienciación y captación política realizado por el MIR-VR tuvo como elemento de propaganda la elección de cuadros miristas en la junta directiva del Sindicato Único de Trabajadores Educativos de San Martín (SUTE-SM). A partir de este trabajo de captación, muchos profesores de caseríos, centros poblados, distritos y provincias empezaron a simpatizar con los ideales del MIR-VR. Esto ocasionó que grupos de izquierda perdieran militantes.<sup>411</sup>

<sup>410</sup> En síntesis, los dirigentes del CCPP de Aucayacu, cuyo poder se había incrementado gracias a su cercanía a las firmas locales de la droga, se negaron a plegarse a la autoridad y directivas del PCP-SL con sede en el campo. Según la versión de Willy, después de unos enfrentamientos entre militantes del centro urbano y los de la zona rural, los mandos de «bolsón» apelaron a la fuerza principal del EGP, que despidió a unos combatientes preparados para resolver el problema.

<sup>411</sup> Por ejemplo, el Partido Comunista del Perú Patria Roja pierde, a finales de la década de 1970, el control del SUTE-SM y de las

En 1981 se realizó el congreso regional del SUTE-SM en la localidad de Sauce, provincia de San Martín, donde se renovó la junta directiva del SUTE-SM por dos años. La lista ganadora estaba integrada por cuadros miristas, encabezados por Lucas Cachay Huamán. Para ese entonces, el MIR-VR ya tenía mucha influencia en Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima y Cusco, y —manteniendo a la UDP como frente político de masas— seguía captando militantes para llevar adelante su proyecto de insurrección armada.

La consolidación del MIR-VR al frente del SUTE-SM fue fundamental para captar más cuadros. Luego de un tiempo de preparación política, todas las personas captadas tenían la misión de formar células de estudio en sus respectivos lugares de trabajo para así atraer nueva gente que integre las filas del movimiento. De esta manera, se formaron células en diferentes ciudades de San Martín: Juanjuí, Tarapoto, Juan Guerra, Picota, Lamas, Sauce, Moyobamba y Rioja.

En 1981 se realizó en Tarapoto el congreso departamental del MIR-VR, donde se eligió la dirección departamental.<sup>412</sup> Esta dirección departamental tuvo como objetivo fortalecer el movimiento a través de una coordinación permanente con todos los cuadros militantes distribuidos en los diferentes distritos y provincias de San Martín.<sup>413</sup>

Como «militantes revolucionarios» disciplinados, los miristas asumieron seriamente el compromiso y la necesidad de captar más personas. Así, se infiltraron en las organizaciones campesinas, sindicales y populares. La finalidad de estas acciones era estar en el lugar «donde combaten las masas». Uno de sus mayores logros fue impulsar el FEDIP-SM, un frente que reunió a toda la población de San Martín alrededor de discursos de autonomía regional y desarrollo agrícola pero que debía, en el fondo, forjar embriones de poder popular y caminos de insurrección.

#### 10.1.2. Formación militar del MIR-VR

Para enero de 1982, el MIR había organizado una escuela doctrinaria político-militar en la zona del Alto Shanusi, donde asistieron un total de 15 combatientes aptos física e ideológicamente y decididos a iniciar la «lucha armada». Esta escuela estuvo dirigida por Darío, quien había luchado en el frente sandinista en Nicaragua.

La escuela tenía la finalidad de capacitar a los futuros combatientes en el manejo teórico y práctico de armas y explosivos de guerra, estrategias de la guerra de guerrillas y del combate cuerpo a cuerpo.

A partir de esta experiencia, importante para consolidar la estrategia militar del MIR en la zona, todo cambió para los miristas que optaron por la vía militar. Ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad y memorizar un código de reconocimiento usado entre los miembros del movimiento. Los encargados del trabajo de masa, de organización y de política no conocían ni entablaban conversación alguna con los cuadros subversivos por motivos de seguridad.

Las personas que salían de esta escuela asumían nuevas responsabilidades y eran divididas por zonas para tener una mayor área de influencia en San Martín. Cada responsable de zona tenía que presentar un informe quincenal sobre las actividades, logros y fracasos en el área. No obstante, al no tener recursos económicos disponibles, los responsables asumían los gastos de viajes, útiles, libros, folletos, correo, entre otros: «Con mi sueldo de profesor, solventaba los gastos de la organización. Todo lo compraba con mi plata; algo nos faltaba y nosotros éramos los responsables» (*Ricardo*).

Entre 1982 y 1984, los responsables de áreas tuvieron la misión de recorrer toda su zona con la finalidad de confeccionar mapas para realizar censos de población y vivienda, ubicar caseríos, caminos, senderos, tro-

organizaciones campesinas de San Martín.

<sup>412</sup> La dirección departamental estaba integrada por las siguientes personas:

Secretario General: Azul

Secretario de Política y Masas: Lucas Cachay

Secretario de Organización: Raúl

Responsable de logística y aparato militar en formación: Darío

<sup>413</sup> Al poco tiempo, el MIR-VR organizó una convención en la localidad de Shapaja, donde eligió a un grupo de miristas que hacía buen tiempo cumplían la función de captar nuevos militantes para encargarles nuevas y mayores responsabilidades dentro de la organización. Así, Ricardo fue elegido como miembro de la dirección regional en el cargo de Secretario de Asuntos Educativos.

chas, etnias nativas, puentes, riachuelos, etc. Con estas herramientas, los encargados del trabajo político de masas podían realizar una labor más rápida al momento de crear «bases de apoyo» de campesinos.

## 10.2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y MILITAR DEL FRENTE NORORIENTAL

Luego de la alianza entre el MRTA y el MIR-VR, se acordó constituir una dirección nacional y abrir un frente guerrillero con treinta combatientes de cada organización. En un primer momento se pensó que el frente guerrillero debía asentarse en la zona central del país; sin embargo, se eligió el departamento de San Martín porque el MIR-VR ya tenía, desde 1984, un destacamento con 35 combatientes; además, había realizado un efectivo trabajo político con la población a través del SUTE-SM.

El frente nororiental (FNO) estaba comandado por una dirección regional cuya misión era desarrollar la lucha política y militar. La lucha política consistía en organizar y concientizar a la población local sobre la «lucha armada».

La dirección regional tenía una estructura con áreas que abarcaba los aspectos político, militar, logístico (vestimenta, armas, medicamentos, etc.), de comunicación, de prensa y propaganda y de economía.

El comandante general era el responsable directo de las acciones militares que se ejecutaban en el territorio del FNO. Asimismo, junto al jefe político, el jefe de prensa y el jefe de logística, se encargaba de coordinar las acciones políticas del FNO.<sup>414</sup>

El jefe o responsable político y de masas tenía un consejo directivo de seis a diez personas que coordinaba todas las acciones políticas del MRTA. Este consejo tenía la misión de trabajar políticamente con las personas que conformaban la UDP, FEDIP-SM y la FASMA para organizar y captar a la población local según los intereses del MRTA. El jefe o responsable político y su consejo directivo eran personajes públicos.

El jefe o responsable de prensa y propaganda era el encargado de que los mensajes y las acciones del MRTA sean conocidos en el país y el extranjero. Para el MRTA, esta función era importante, ya que permitía mantener viva en la memoria de la gente la existencia de un grupo alzado en armas paralelo y, sobre todo, diferente del PCP-SL.

El jefe o responsable de comunicaciones cumplía la tarea de mantener comunicación radial con todos los destacamentos militares del FNO. Tenía todas las frecuencias y conocía los puntos de encuentro de los destacamentos y, además, era responsable de transmitir los mensajes de entrega de armamento y dinero.

El jefe de logística se encargaba de realizar todas las adquisiciones de materiales, equipos, indumentarias, etc.

El responsable de economía tenía la misión de administrar el presupuesto del FNO. Asimismo, distribuía el dinero para las reuniones y acciones de la dirección regional, así como para las incursiones armadas del Ejército Tupacamarista (ET) y sus destacamentos.

### 10.2.1. Organización del ET del FNO

En primer lugar, porque sólo en la lucha se foguean los cuadros, se adecuan las estructuras, se forjan los jefes, se resuelven las necesidades materiales (economía, logística, armamento, etc.) de la fuerza militar revolucionaria. En segundo lugar, porque sólo combatiendo se infunde en las masas la confianza en la victoria, la certeza de que el enemigo puede ser derrotado, con lo cual se alimenta la voluntad de lucha. En tercer lugar, porque crear una fuerza militar revolucionaria supone contar con una retaguardia, un punto de apoyo donde concentrar tropas, para armarlas, equiparlas y adiestrarlas. Esto tiene que darse en combates encarnizados con el enemigo.<sup>415</sup>

---

<sup>414</sup> Entre 1987 y 1993, los comandantes del FNO fueron: Raúl (1987-1988), Roberto (1988-1990), Ricardo (1990), Evaristo (1990-1992), Esther (1992-1993), Antonio (1993).

<sup>415</sup> Para mayor información, véase <<http://www.nadir.org/nadir/initiativ/mrta>>.

El ET tenía la misión de realizar las incursiones y tomas de ciudades, «recuperar»<sup>416</sup> armas y mantener el control de todas las ciudades del departamento de San Martín.

El FNO recibía armas, municiones y vestimenta de la dirección nacional. Con sus incursiones y asaltos a los puestos policiales, incautaba armamento que le permitió adquirir autonomía y abastecerse del material bélico necesario para realizar mayores acciones armadas. Asimismo, consiguieron armas a través de negocios con los traficantes de armas y, posteriormente, con la droga. Se organizaron pequeños talleres para la confeción de hamacas, mochilas, ropas, etc.; asimismo, mediante la instalación de tiendas de abarrotes en Tarapoto, abastecían con víveres a los diferentes destacamentos militares. Posteriormente se inició la práctica de saqueos a centros de comercio,<sup>417</sup> el cobro de cupos y bonos de guerra,<sup>418</sup> secuestros, extorsiones, etc.

La estructura del ET incluía un comandante general, quien era responsable de todas las acciones del ET y debía estar informado de cada movimiento que realizaban los destacamentos asentados en las «zonas de control» del MRTA.<sup>419</sup> Además, tenía la facultad de juntar todos los destacamentos para realizar cualquier misión militar importante (toma de ciudades, «recuperación» o robo de armas, etc.).

El estado mayor tenía la tarea de asistir al comandante general en todas las decisiones y acciones que el ET debía realizar en el FNO.<sup>420</sup>

Para cumplir con el objetivo de resguardar las zonas controladas por MRTA, el ET dividió el departamento de San Martín en ocho zonas. Cada una de ellas tenía un destacamento militar. Cada destacamento tenía, a su vez, un estado mayor que estaba conformado también por un responsable político-militar, un responsable político, un responsable logístico y un responsable de comunicaciones.

El ET destinaba para cada una de las zonas un destacamento militar conformado por cien, cincuenta, cuarenta o treinta hombres. Estos destacamentos se dividían en formas iguales y estaban descentralizados para poder tener un mejor control de toda la región. Por ello, el destacamento militar de una zona se dividía en dos o tres partes para poder cubrir toda el área de la zona. Estas divisiones podían ser de veinte y, máximo, treinta hombres, y se las denominaba subdestacamentos. La división del destacamento militar permitía mantener un mayor control sobre las acciones y la disciplina de los combatientes del ET.

La creación de las ocho zonas y subzonas, producto de la ampliación del teatro de operaciones y la descentralización del ET, también permitió evadir la ofensiva de las Fuerzas Armadas y policiales, y prolongar los enfrentamientos armados. Así, por ejemplo, la zona del Huallaga Central se dividía en dos subzonas con dos subdestacamentos: el valle de Misquiyaku y el valle del Ponasa.

Las ocho zonas controladas por el MRTA y los nombres de los destacamentos militares fueron los siguientes:

Zonas del MRTA	Destacamentos
Alto Mayo. (Instaurado en 1990. Área de influencia: provincia de Moyobamba y Rioja)	Wenceslao Saboya
Medio Mayo. (Instaurado en 1989. Área de influencia: las riberas del río Mayo en la provincia de Lamas)	Róger López

<sup>416</sup> El término de «recuperar» armas, utilizado por los integrantes del MRTA, significaba el robo de armas a los puestos policiales.

<sup>417</sup> «A partir de 1990, el MRTA ya no era el mismo, ya no traían plata ni pagaban por lo que cogían. Se veía que era otra gente, la primera vez vinieron gente educada; en ese tiempo, puros muchachos y eran medios delincuentes. En mi tienda, sacaron muchas cosas, incluso cada fin de semana pedían y sacaban productos que iban a necesitar para su gente. Así, nos hicieron pobres» (San José de Sisa, N.F.).

<sup>418</sup> «El bono es un papel que dice una cantidad que ellos te ponían y donde estaba el símbolo del MRTA. Se acercaban y decían: tú tienes que dar 10 mil para que traslades la droga de un lugar a otro. El cupo era designado por ellos y tenían diversas formas de acopiarlo, aparte de los asaltos que hacían en las carreteras. Lucas Cachay me decía que todos los cupos se le daban al MRTA porque ésa era la orden. El hecho es que todo el mundo daba, tanto así que al final fue un desastre, porque todo el mundo pedía de todo. Estoy seguro que ahí es donde mucha gente se hizo de plata, la gente aprovechó muchísimo» (Lay).

<sup>419</sup> Las «zonas de control» eran las áreas donde los destacamentos militares del MRTA podían transitar libremente. En cambio, las «zonas liberadas» por el PCP-SL se caracterizaban por la inexistencia de toda institución del Estado, las cuales eran reemplazadas por la constitución de los «comités populares abiertos».

<sup>420</sup> El Estado Mayor estaba conformado por los responsables político-militar, responsable político, de logística, logística y comunicaciones.

Bajo Huallaga. (Instaurado en 1990. Área de influencia: provincia de San Martín)	No se han identificado los nombres de estos destacamentos.
Huallaga Central. (Instaurado en 1990. Área de influencia: Chazuta, Picota, Bellavista)	Alcides Reátegui
Valle del Sisa. (Instaurado en 1987. Área de influencia: provincia de El Dorado y provincia de Saposoa)	Carlos Arango
Yurimaguas. (Instaurado en 1990. Área de influencia: Yurimaguas)	Roberto Pérez
Caynarachi-Shanusi. (Instaurado en 1990. Área de influencia: pongo de Caynarachi)	No se han identificado los nombres de estos destacamentos.
Huayabamba. (Instaurado en 1988. Área de influencia: valle del Huayabamba)	Edward Cumapa

Para 1987, la zona de control considerada estratégica por el MRTA fue el valle del Sisa, porque era un lugar de acceso a las zonas del Alto Mayo, Mayo Medio, el valle del Huayabamba y el Huallaga Central. Así, la zona del valle del Sisa sirvió de entrada, salida y refugio para el ET cuando realizó su primera campaña militar «Túpac Amaru Vive».

Las «bases milicianas» tenían la misión de realizar trabajos de inteligencia antes de las incursiones del ET a ciudades o puestos policiales. Sus acciones eran realizadas previa coordinación con el destacamento militar de su zona. Según el tamaño de la zona, el MRTA podía establecer una cantidad determinada de «bases milicianas» hasta un máximo de cinco. Cada «base miliciana» tenía de cinco a siete subversivos bajo el mando de un responsable de base, quien también se encargaba de concientizar a su personal sobre los objetivos del MRTA y de prepararlos para acciones militares y de propaganda: «Aquí, por ejemplo [valle del Huayabamba], habían cinco bases ubicadas en el centro de Juanjuí, Juanjuicillo, San Juan, La Victoria y La Merced. Todos tenían un responsable» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P492. Varón, ex mando del MRTA).

El conjunto de «bases milicianas» de una zona tenía un responsable de «base miliciana zonal», que coordinaba todas las acciones que debían realizar con los responsables de base. La decisión tomada por las «bases milicianas» se coordinaba con los destacamentos militares de la zona.<sup>421</sup>

Por cuestiones de seguridad y para evitar infiltraciones o «soplos», el MRTA estableció como táctica la compartmentación. Ésta consistía en que cada organismo de dirección sólo debía conocer lo necesario para garantizar el éxito de su trabajo. Era aplicada de forma vertical y autoritaria para preservar la identidad de los responsables político-militares del movimiento.

Las «bases milicianas» se dividieron en dos, según sus áreas de influencia: las urbanas y las rurales.

Los comandos dependían del estado mayor del FNO y estaban constituidos por combatientes muy concientizados ideológicamente, con una gran capacidad física y alto nivel de entrenamiento militar para realizar acciones armadas en la retaguardia del enemigo. Trabajaban en áreas rurales o urbanas. Generalmente, los comandos eran los encargados de planificar los asaltos a puestos policiales y militares durante las tomas de ciudades, así como de resguardar la seguridad de los mandos regionales y nacionales.

### 10.3. EL IMPACTO DEL TRABAJO POLÍTICO DE LAS AGRUPACIONES DE IZQUIERDA EN SAN MARTÍN

Es alrededor del cultivo de tabaco, durante la década de 1960, que se forman las primeras organizaciones campesinas sanmartinenses, que tienen como base central la ciudad de Tarapoto. La posterior creación del Estanco del Tabaco o la Caja de Depósitos generó el contrabando del producto. Esto originó la persecución

<sup>421</sup> Las «milicias» eran grupos de triadas y de compartmentación. Se denominaban triadas porque el responsable de una base miliciana captaba tres personas que eran preparadas política y militarmente. Después de un tiempo, cada una de estas personas debía captar otras tres personas; así, la «base miliciana» aumentaba en personal. Un mayor número de personas permitía una futura cantera de hombres que engrosarían las filas del ET.

y hostigamiento a los campesinos productores por la empresa estatal, lo que motivó la formación de la Asociación de Tabacaleros de la Provincia de San Martín, cuya principal demanda fue mejorar el precio del tabaco. En esta organización todavía no se percibía un desarrollo ideológico-político, tal como lo haría el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) durante el gobierno militar del general EP Juan Velasco Alvarado en los años setenta.<sup>422</sup>

Entre 1975 y 1977, los partidos de izquierda empezaron a tener presencia en los movimientos populares y campesinos y consiguieron que las Ligas Agrarias de San Martín, centralizadas en la FASMA, se alejasen de la influencia de SINAMOS y demandasen una mayor autonomía.

Las luchas, que en sus inicios tuvieron un carácter local, distrital o provincial, alcanzaron resonancia nacional con las protestas masivas contra el gobierno militar del general EP Morales Bermúdez en todo el país. El momento más crítico fue el paro nacional del 19 de julio de 1977.

Las movilizaciones tuvieron como principales aspectos los siguientes: una organización centralizada, la movilización y marchas en el centro de las ciudades, huelga de empleados públicos (principalmente maestros), formación de piquetes de autodefensa, toma de decisiones en asambleas públicas y una dirección independiente, muy ligada a las agrupaciones políticas de izquierda. A partir de 1980, estas luchas son complementadas con la toma de carreteras y el establecimiento de barricadas por las organizaciones campesinas.<sup>423</sup>

Para inicios de la década de 1980, la mayoría de los frentes de defensa de distrito y provinciales estaban desactivados tras el cambio de régimen y la instalación de la Asamblea Constituyente, a la vez que nuevos dirigentes comenzaban a aparecer en el espectro social.<sup>424</sup>

En Tarapoto se formó el Comando Unitario de Lucha (CUL), presidido por el profesor Lucas Cachay, como un intento de llenar el vacío de dirección evidenciado durante la huelga de 1982 en Juan Guerra y Tabalosos, que dejó un saldo de cinco muertos y más de veinte heridos. El CUL promovió el primer paro departamental de los trabajadores de la ciudad y el campo en 1984.

En abril de 1986, a raíz de otro paro regional, una comitiva oficial integrada por varios ministros y funcionarios de alto rango del gobierno del PAP se vio obligada a negociar durante 16 horas ininterrumpidas ante el CUL y doscientos delegados de las bases. En este paro, cabe destacar la formación de piquetes de autodefensa conformados por obreros. En la negociación, el gobierno se comprometió a resolver más del 50% de las exigencias, cosa que no llegó a ser cumplida. Ese mismo año, el CUL se convirtió en el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de San Martín (FEDIP-SM). En mayo de 1987 se realizó el primer congreso de fundación del FEDIP-SM, al que asistieron mayoritariamente las bases provinciales.

En noviembre de 1987 el MRTA hizo su incursión en Juanjuí y obligó al gobierno a decretar el estado de emergencia y el toque de queda en San Martín. La persecución de dirigentes sindicales y populares, en particular de campesinos; el rastrillaje de las Fuerzas Armadas en caseríos y pueblos jóvenes; la represión a las movilizaciones y las desapariciones interrumpieron por dos años el avance de las organizaciones populares. En este período, los paros decretados por el FEDIP-SM fueron acatados en forma parcial en Tarapoto.

<sup>422</sup> Posteriormente, la introducción de cultivos industriales comercializados por el Estado a través de Empresa de Producción y Servicios Agropecuarios (EPSA) permitió generar las bases de un movimiento campesino mucho más compacto en San Martín que, posteriormente, SINAMOS organizó en las Ligas Agrarias. Hacia mediados de la década del setenta, la fuerte presencia de partidos de izquierda como el PCP Patria Roja, MIR-VR, UDP, PST, PC y Pukallacta se encargaron de radicalizar las demandas de estas organizaciones agrarias.

<sup>423</sup> Durante la década de los ochenta, el cultivo intensivo de maíz y, luego, del arroz, bajo auspicio del Estado —a través de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI), la Empresa de Comercialización de Arroz S.A. (ECASA) y el Banco Agrario—, creó la necesidad de organizarse para luchar contra la insuficiencia de créditos, altos intereses, precios por debajo del costo de producción, déficit de almacenes, descuentos arbitrarios y demora en los pagos. Estas demandas sensibilizaron a toda la población local y nacional, que comenzó a apoyar las luchas campesinas.

<sup>424</sup> Los frentes de defensa surgieron en los años setenta como entes coordinadores y centralizadores de las organizaciones del campo y la ciudad y de las personas no organizadas de una provincia o distrito determinado.

### 10.3.1. La importancia del trabajo político del MIR-VR

Todo este trabajo de organización y movilización de la población sanmartinense no hubiese sido posible sin la participación de los grupos de izquierda que existían en San Martín. Pese a las evidentes discrepancias político-ideológicas entre el PCP Patria Roja, MIR-VR, PC, Pukallacta, PST y UDP, estos grupos contribuyeron en la dirección y contundencia de los paros y huelgas y al fortalecimiento del FEDIP-SM.

Es importante resaltar el exhaustivo trabajo de base realizado por el MIR-VR entre 1982 y 1984, que consistía básicamente en infiltrar a sus militantes en organizaciones populares y campesinas.

Para esos años, el MIR había copado la dirección del CUL. Anteriormente, ya había logrado el control de la FASMA, del Comité Departamental de Productores de Maíz y Sorgo y del Arroz, del Sindicato de Comerciantes y de Trabajadores Municipales del SUTE-SM. Para 1986 ya tenía el control absoluto de la dirección del FEDIP-SM.

Para lograr esta participación en los comités y frentes populares, sindicales y campesinos, el MIR-VR asumió como suyas las demandas de la población de San Martín. Ello propició que captara toda la atención de las diversas organizaciones populares que no tenía bajo su influencia y dejara sin espacio a grupos de izquierda como el PST, Pukallacta, el PCP Patria Roja y el PC.

La iniciativa del MIR-VR fue asumida en 1987 por el MRTA bajo los mismos preceptos, pero en otro contexto que incluía la maduración de una conciencia regionalista, la lucha por la descentralización, la vehemencia de luchar por reivindicaciones y los estragos de la violencia de origen político.

En estas circunstancias, el MRTA inicia su primera campaña militar «Túpac Amaru Vive» con tomas e incursiones a diferentes ciudades de San Martín. El Estado decretó el estado de emergencia en San Martín y creó el comando político-militar del Frente Huallaga.

Las subsiguientes acciones contrasubversivas del Ejército desarticularon al FEDIP-SM; se detuvo a dirigentes y pobladores sospechosos de ser integrantes del MRTA y se realizaron ejecuciones extrajudiciales.

Para defender los derechos del pueblo, el movimiento popular logró rearticulase nuevamente a través del FEDIP-SM en 1988, cuya representatividad y legitimidad a escala regional era amplia. Al mismo tiempo, el MRTA inició un proceso de reorganización tras el descalabro que sufrió su ET por la arremetida militar del Ejército.

El MRTA no pretendió mantener una relación autoritaria con el FEDIP-SM, sino, más bien, buscó articular objetivos comunes y crear un vínculo entre su acción militar y las demandas sociales, políticas y económicas de aquél. Desde entonces, los militantes del MRTA fueron consiguiendo el apoyo de la población y extendieron su ámbito de influencia.

Con el MRTA en la escena regional, la estrategia de infiltración y captación de cuadros que había iniciado el MIR-VR no cambió. Los actores políticos y sociales siguieron siendo los mismos: MIR-VR, Lucas Cachay, FEDIP-SM, Segundo Centurión, Frentes de Defensa, FASMA, etc. Tampoco cambió el objetivo de desarrollar la «lucha armada», ya que el MRTA añadió el componente militar activo con la creación del FNO.

A la par de la consolidación política del MRTA en las organizaciones de base, al hacer suyas las demandas de la población sanmartinense, aproximadamente a mediados de 1989,<sup>425</sup> los miembros del ET empezaron a asumir posiciones de autoridad y desconocieron el papel de los responsables de desarrollar la política de masas del movimiento.<sup>426</sup>

Estas contradicciones entre el aparato político y militar del MRTA en el FNO se evidenciaron durante la segunda huelga general indefinida de febrero y marzo de 1990 en San Martín. Esta huelga fue dirigida por el FEDIP-SM, y tuvo como aspecto peculiar, además de la participación de los responsables y militantes del trabajo de masas del campesinado y del MRTA, el apoyo directo del ET. Tanto los responsables del aparato polí-

<sup>425</sup> Para 1989 ya se había reconstruido el ET del FNO tras la represión ejercida por las Fuerzas Armadas entre diciembre de 1987 y febrero de 1988.

<sup>426</sup> Para este tiempo, la Cámara de Comercio y la Iglesia se habían separado del FEDIP-SM por sus evidentes inclinaciones a favor del MRTA.

tico de masas como del aparato militar del MRTA no sabían qué acciones iban a realizar. Es más, el ET asumió, muchas veces sin consulta alguna, la labor política.

Como el centro de la huelga estuvo en Tarapoto, la «milicia urbana» hizo que casi la totalidad de la población, voluntaria o involuntariamente, cumpliera la medida de lucha. Los motivos de la huelga ya no eran económicos, sino políticos y sociales, y se centraron en la petición de crear la región autónoma de San Martín, en el respeto irrestricto de los derechos humanos, la suspensión del estado de emergencia, etc.

Cuando la situación se tornó incontrolable, el gobierno aprista nombró una comisión negociadora que llegó a acuerdos importantes para la población sanmartinense: el pago de la deuda pendiente de ECASA y ENCI a los productores agrarios y el aumento de presupuesto en un 100% a la CORDE-San Martín, el cual iba a ser directamente fiscalizado por el FEDIP-SM. Sin embargo, los reclamos para derogar la ley que creaba la Región II (La Libertad-San Martín), la creación de la región autónoma San Martín y la desmilitarización de la región quedaron postergados.

Cabe señalar que la huelga se suspendió también por dos razones: primero, se acercaban las elecciones generales y, según Lucas Cachay, no se quería alterar este deber cívico ni fomentar la desobediencia civil; segundo, producto del desabastecimiento de alimentos, comenzaron a sentirse los estragos de los cuarenta días de huelga en los piquetes formados para obstruir las carreteras del departamento.<sup>427</sup> Se convocó a una asamblea popular en la que se decidió dar una tregua al gobierno y, si este no resolvía las exigencias pendientes, se volvería a la huelga en el mes de abril de 1990.

Tras el fin de la huelga, el FEDIP-SM fue reconocido como el organismo principal de dirección en la región, con verdadero poder de decisión y como interlocutor entre el pueblo y las autoridades tanto regionales como nacionales; pero también evidenció los primeros conflictos internos entre los responsables de la política de masas y los responsables militares del MRTA.

Después de constantes movilizaciones sociales impulsadas por el FEDIP-SM, en 1992 el gobierno de Alberto Fujimori promulgó la ley de creación de la región San Martín, por lo cual Lucas Cachay propuso elaborar un plan para fortalecer la presencia activa del MRTA en la sociedad civil. Este planteamiento no tuvo mucho eco en la máxima dirigencia del MRTA, cuya posición militarista ya era visible.<sup>428</sup> Ante posiciones diferentes y abiertamente discrepantes, el MRTA persiguió y amenazó de muerte a Lucas Cachay y a todos los dirigentes del FEDIP-SM para que se subordinaran a la nueva política del movimiento.

#### 10.4. INCURSIONES ARMADAS DEL FREnte NORORIENTAL EN SAN MARTÍN

Según la estrategia del MRTA en su FNO, las tomas e incursiones en centros poblados tenían dos objetivos básicos:

- Político. Se intentaba demostrar a la población local, y al país, que el MRTA no estaba debilitado frente a las acciones militares contrasubversivas. En cada toma e incursión se ofrecían discursos a la población y se la convocabía a la «lucha armada» para que la masa asuma esta lucha como propia y reconozca a los integrantes del MRTA como defensores auténticos de sus intereses y aspiraciones. Asimismo, buscaban construir bases revolucionarias y de poder popular en las ciudades donde incursionaban para así dominar todo el valle del Huallaga y ganarle la iniciativa al PCP-SL.
- Militar. El fin era mostrarse como una guerrilla en cada toma e incursión en centros poblados. Mantenían una disciplina táctica de ataque, estaban uniformados, recuperaban armas y pertrechos de guerra, comunicaban a los policías a rendirse antes de entrar en acción, atacaban las zonas que consideraban más importantes, atendían a los policías heridos, etc. En general, aducían actuar bajo los lineamientos de la Convención de Ginebra.

Las tomas e incursiones tuvieron las siguientes características:

<sup>427</sup> Véase semanario Cambio de febrero y marzo de 1990.

<sup>428</sup> Apenas en 1991, Lucas Cachay reconoció que no había logrado formar una propuesta política viable para el desarrollo del MRTA. Pero también reconoció que no tenía el equipo adecuado para discutir esta propuesta, que desarrollara el trabajo político, que organizara, que construyera nuevas fuerzas. Su problema fue: «creerse líder, porque tenía poder. Ahí está el problema del poder: el problema de la separación del dirigente con su masa, el problema de la no integración» (Mario Arévalo).

- Las milicias recibían órdenes de los destacamentos militares, asentados en sus zonas de acción, para planificar las tomas e incursiones y conseguir información sobre cuántos puestos y miembros de las fuerzas del orden había en determinada zona (dónde viven, en qué calle, qué número, a qué hora hacen servicio, a qué hora comen, a qué hora salen de franco, a qué hora pasan lista), la cantidad de armamento, croquis y mapas de la ubicación de los puestos policiales, así como la ubicación de las autoridades civiles.
- Para llevar a cabo las acciones militares, el ET juntaba varios destacamentos. Por ejemplo, para la toma de la provincia de Saposoa previamente se juntaron entre trescientos y cuatrocientos hombres de los destacamentos Alcides Reátegui (Huallaga Central) y Roberto Pérez (Yurimaguas) y juntos planificaban las acciones militares que iban a llevarse a cabo.
- Cuando se efectuaban las tomas de ciudades, los miembros del MRTA realizaban diferentes acciones coordinadas de distracción para desconcentrar a las fuerzas del orden (policiales y militares): se reducía la resistencia policial, se destruían locales públicos y privados, se realizaban asambleas populares donde se exponía el porqué de la lucha armada, se repartían alimentos entre la población que eran robados a los centros de acopio del Estado como ECASA y ENCI y, finalmente, se retiraban.
- Después de las tomas o incursiones a ciudades, el ET descansaba o se concentraba aproximadamente cuatro o seis meses hasta la preparación de las siguientes acciones. Tenían diferentes zonas de concentración: el Alto Sisa (provincia de El Dorado), Pasarraya (provincia de Saposoa), el pongo de Caynarachi (provincia de Lamas) y las zonas de Tres Unidos y el valle de Misquillaku (provincia de Picota). Durante este tiempo de concentración se realizaban escuelas de preparación político-militar: «Venían instructores militares y políticos de Nicaragua, Bolivia y Colombia. Hacían congresos, charlas y escuelas. Todo eso en nuestras bases. Cada zona seleccionaba a sus miembros para asistir a estos eventos. Dentro, nos dividían entre los que se adoctrinaban para la política y los que se adoctrinaban militarmente» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P499. Varón, ex militante del MRTA en Yurimaguas).

En 1987 se armó un ejército en San Martín, formado por militantes del MIR-VR y del MRTA que venían de Tocache. Ambas fuerzas se unieron en la zona del pongo de Caynarachi-Shanusi. En este lugar entrenaron militar y políticamente durante los meses de julio, agosto y septiembre del mismo año, liderados por Víctor Polay Campos, (a) *Rolando*; Néstor Cerpa Cartolini, (a) *Evaristo*; y Miguel Rincón, (a) *Francisco*.

El 8 de octubre iniciaron la campaña militar «Tupac Amaru Vive», comandados por *Rolando*, con la incursión en los poblados de Tabalosos y Macedas.<sup>429</sup> Posteriormente, realizaron las siguientes incursiones y tomas:

- 18 de octubre. Toma de Soritor
- 6 de noviembre. Toma de Juanjuí
- 7 de noviembre. Toma de San José de Sisa<sup>430</sup> y ataque al puesto policial de Rioja
- 9 de noviembre. Incursión en Senami
- 19 de noviembre. Toma de Chazuta
- 11 de diciembre. Toma de Shanao
- 16 de diciembre. Incursión en Yorongos

En esta primera campaña militar, la mayor acción fue la toma de la ciudad de Juanjuí.

#### 10.4.1. Primera toma de Juanjuí

La toma de Juanjuí se inició el viernes 6 de noviembre a las 2:30 a.m. cuando un grupo de integrantes del MRTA capturó el camión «Amor de la montaña», que era utilizado para trasladar al ET a Juanjuí sin ser descubiertos. Al llegar a esta ciudad, el camión abrió sus puertas y cayó una primera fila de sacos de cemento; detrás bajaron los integrantes del MRTA con todo su armamento. Primero, se distribuyeron en la ciudad para cercar a los tres puestos de las Fuerzas Policiales (Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones del Perú) y sorprenderlos. Luego, cortaron la comunicación telefónica con San Martín y Lima. Cabe resaltar que burlaron

<sup>429</sup> Se optó por esa fecha para conmemorar el vigésimo aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara. Sin embargo, el sociólogo Raúl González plantea la hipótesis de que en realidad el MRTA buscaba recuperar presencia política a escala nacional, pues días antes varios de sus dirigentes habían sido capturados en Lima, entre ellos Alberto Gálvez Olaechea (*Quehacer*, n.º 50, enero-febrero de 1988).

<sup>430</sup> El registro de la incursión a este centro poblado y la entrevista a Víctor Polay Campos, (a) *Rolando*, fueron realizados por Alejandro Guerrero, reportero de Panamericana Televisión. Sin embargo, la población afirma que el MRTA escenificó su entrada a San José de Sisa sólo para la televisión.

fácilmente el cerco policial instalado en la ciudad, debido a que la mayor parte de policías había sido trasladada al norte del departamento por anteriores incursiones y tomas realizadas por el MRTA.<sup>431</sup>

A las 4:45 a.m., la población sintió disparos de armas automáticas y explosiones de granadas. Tras varios minutos de balas y explosiones, los miembros del MRTA les decían a los policías, a través de un megáfono portátil: «Se nos está acabando la paciencia, les damos diez minutos para rendirse».

Cuando terminó el plazo para rendirse, la ciudad fue un solo de disparos y explosiones contra los puestos policiales. Para ese momento, varios miembros de las Fuerzas Policiales se habían replegado y otros fueron capturados. Según la población, dos policías llegaron a Bellavista, vía el río Huallaga, y alertaron a la población. Un policía se metió en un pozo ciego y otros dos atravesaron la pista del aeropuerto y aparecieron en el barrio de La Merced.

Los integrantes del MRTA hicieron gala de todo su poderío militar para «ablandar» al enemigo. Sin embargo, la población escuchó las voces de algunos policías heridos que decían: «Mátenme, mátenme [...] si pueden. No vamos a salir, así decían ellos ahí adentro. No lo creía, estaban muriendo de miedo, sangrando, pero no quisieron salir» (*Limderman*).

A pesar de la resistencia de los policías, entre setenta y cien subversivos del MRTA habían tomado la ciudad a las 5:45 a.m., tras un ataque sincronizado a los tres puestos policiales. El siguiente paso fue invitar a toda la población a la plaza de armas y a las calles de la ciudad para hacer alarde del botín conseguido: granadas, armas y municiones requisadas de los puestos policiales asaltados. Después se realizó un mitin en la plaza donde se dijo: «Venimos a protegerlos, no queremos matar. No nos teman, nosotros somos diferentes al PCP-SL. El pueblo debe apoyar nuestra lucha popular» (*Limderman*).

De forma paralela, un grupo de integrantes del MRTA compró pintura negra y empezaron a pintarrajear las paredes de los locales públicos y privados de la ciudad con los lemas de «No al voto, sí a la lucha armada», «Viva la toma de Juanjuí», «Abajo la represión y el alto costo de vida», «El pueblo al poder con el MRTA», «La justicia no se mendiga, se consigue con la lucha tupacamarista», «Pueblo armado, jamás será oprimido», «Abajo el estado de emergencia», etc. También pusieron pintas del MRTA en la cola de una avioneta.

Luego, llevaron a la plaza de armas a tres maniatados policías (dos guardias republicanos y uno de la Policía de Investigaciones) para presentarlos a la población. Todo el pueblo pensó que iban a realizar los famosos «juicios populares» que practicaba el PCP-SL en la parte sur del departamento de San Martín. Sin embargo, los integrantes del MRTA cominaron a los policías a portarse bien, a no abusar de la gente, a no extorsionar al pueblo. Como castigo por su «mal comportamiento», los policías permanecieron crucificados y amarrados por espacio de dos horas, custodiados por un grupo de miembros del MRTA. Por temor, nadie intercedió por ellos. Posteriormente fueron entregados al padre José Álvarez para que no salgan de la parroquia hasta que los atacantes se hayan retirado de Juanjuí.

Otro grupo quemó documentación archivada de la municipalidad, registros electorales y documentos del juzgado. Asimismo, sacaron motores fuera de borda decomisados por la PIP y los devolvieron a sus dueños, quemaron un deslizador en la plaza de armas y tres carros de la PIP en la pista del aeropuerto para que ningún avión o helicóptero con refuerzos policiales o militares aterrize con facilidad.

Varios grupos de miembros del MRTA, localizados en distintos puntos de la plaza de armas, hablaban con personas del pueblo y éstos hablaban con ellos. Los visitantes se veían convincentes porque demostraban con hechos la crisis política, económica y moral que vivía el país. Mucha gente les daba la razón y su apoyo, porque habían sido respetuosos y actuaron sin vandalismo.

Algo que cabe resaltar era la juventud de los miembros del MRTA, además de los uniformes recién estrenados y el moderno armamento que poseían. El MRTA había llegado con una correspondencia que, según los testigos, parecía de alguna agencia extranjera. Ésta tomaba fotos de todo lo que ocurría. También un integrante del MRTA, con el rostro oculto, filmaba todo lo que sus compañeros realizaban.

---

<sup>431</sup> Esta medida fue adoptada por la Policía Nacional tras los primeros ataques del MRTA a Tabalosos (8 de octubre, 6:00 a.m.) y a Soritor (18 de octubre, 4:30 a.m.), que, en realidad, fueron realizados para distraer la atención de las fuerzas del orden. La táctica dio resultado y el MRTA logró incautar la mayor cantidad de armas conseguidas por movimiento subversivo alguno. La población quedó sorprendida porque todos calculaban que un ataque subversivo a Juanjuí era poco probable a pesar de haber estado anunciado (Pepe).

Algo que impresionó a los pobladores de Juanjuí fue que los miembros del MRTA tenían dinero, y todo lo que necesitaban lo compraban. No saquearon mercados ni tiendas comerciales; sólo los puestos policiales para conseguir armas que les servirían para posteriores incursiones y tomas de ciudades.

El saldo trágico del ataque fue la muerte del capitán GC Jorge Cieza Lachos, de 36 años.<sup>432</sup> Además, hubo siete heridos, dos de ellos civiles. Los miembros del MRTA habían sacado de los puestos policiales aparatos eléctricos decomisados, los cuales fueron cogidos por los pobladores que merodeaban por la zona. Dos carros que estaban estacionados frente al puesto policial de la GC fueron desvalijados por la población: unos se llevaban el carburador, otros los faros, algunos hasta traían herramientas para llevarse los asientos y repuestos. Otras personas se llevaron los muebles de los puestos policiales; algunos caminaban por las calles con cascos antidisturbios robados. Una mujer se llevó una máquina de escribir. Al ver todo lo que habían provocado, los integrantes del MRTA dispararon al aire para poner un poco de orden porque se habían robado hasta las sábanas que el padre José Álvarez había colocado sobre el cuerpo del capitán GC Jorge Cieza Lachos.

Vestigios de esta toma fueron las fachadas policiales con los impactos de bala y algún boquete abierto por las granadas e instalazas, además de vidrios rotos, documentos esparcidos por las calles o a medio quemar, el humo negro del deslizador y los carros quemados, las pintas en las paredes de instituciones públicas y privadas, etc. Durante todo ese día, las puertas del mercado, de las tiendas comerciales, de los domicilios y de las instituciones públicas y privadas permanecieron cerradas.

Los integrantes del MRTA se fueron hacia las 9:45 a.m. en cinco camionetas decomisadas a sus dueños, que luego les fueron devueltas. En ellas, también transportaron las armas y municiones capturadas. Posteriormente comenzaron una gira por la carretera Marginal pasando por Bellavista y Sacanche (en la provincia de Saposoa). En esta última ciudad dejaron la carretera Marginal para dirigirse a San José de Sisa, donde permanecieron cerca de un día.

#### 10.4.2. Incursión en San José de Sisa

El sábado 7 de noviembre, las huestes del MRTA llegaron a San José de Sisa sin disparar un solo tiro. A las 4:00 p.m., cien integrantes del MRTA entraron libremente a la plaza de armas, pues los policías, al enterarse de lo sucedido en Juanjuí, habían abandonado el poblado: «El MRTA entró libre y lanzando balas al aire anunciando su llegada. Todos nos metimos a nuestras casas y la gente pensaba que eran senderistas [integrantes del PCP-SL] o algo así. Hasta ese momento, nadie sabía del MRTA. Recién ahí nos enteramos» (ER).

Al tener el control del pueblo, los integrantes del MRTA organizaron un mitin al que invitaron a todo el pueblo. El jefe *Rolando* disertó sobre el MRTA, sus planes y objetivos y la acción que habían realizado horas antes en Juanjuí. Además, hizo una exposición de todo el armamento recuperado: «Polay habló y nos convencía. No te imaginas, inclusive yo me la creí. Los jóvenes y los adultos se querían ir con ellos, un montón de gente. Lindo nos habló» (ER).

Acto seguido, el MRTA compró caballos, en dólares, para transportar las armas incautadas. Igualmente, organizaron una actuación cultural en la que sus miembros bailaron y disfrutaron. Al principio, la gente no participaba pero los militantes del MRTA decidieron dar premios (cartuchos de retrocargas) para quienes participaran con ellos. Así, la gente (hombres y mujeres jóvenes) bailaron hasta altas horas de la noche. Al día siguiente se fueron con dirección al Alto Sisa. Posteriormente, el Ejército entró a San José de Sisa y rebuscó las casas preguntando a la población por dónde se habían escapado los subversivos.

#### 10.5. EL DESCALABRO DEL ET DEL FRENTE NORORIENTAL

Después de la incursión a Juanjuí, el departamento de San Martín fue declarado en emergencia y, en noviembre de 1987, se estableció el comando político-militar del Frente Huallaga. El ET se retiró hacia el Alto Sisa para que los mandos superiores organizaran destacamentos militares para los diversos frentes que el MRTA tenía planeado abrir a escala nacional.

---

<sup>432</sup> Unas horas antes le acababan de comunicar su ascenso a capitán y esa misma noche lo estuvo celebrando. Estaba en Juanjuí desde hacía cinco meses (Pepe).

En ese momento, el ET del FNO se quedó al mando de *Ricardo*. Sin embargo, cuando el MRTA envió desatamentos y compañías a diferentes puntos del país para formar los frentes oriente y centro, algunos no llegaron a los lugares indicados, otros quedaron en el camino y otros más desaparecieron, mermando su capacidad militar. Los miembros del MRTA intentaban escapar de la persecución del Ejército dispersándose en pequeños grupos a diversas áreas:

Me encargaron un pelotón de catorce hombres; *Lucho* tenía que trasladarse a Huayabamba con doce combatientes; y *Puma*, con ocho compañeros, tenían que trasladarse hasta el valle del Shanusi. Éste era el acuerdo tomado por los mandos. El resto de compañeros se irían para el centro del país. Los altos mandos nacionales Víctor Polay Campos, Néstor Cerpa Cartollini y Rodolfo Kleim Samámez fueron a Lima para dirigir desde allí la organización del MRTA. (*Ricardo*)

Esta estrategia fue utilizada debido a que el Ejército había identificado las zonas de base que el MRTA usaba para recomponer y alistar a sus hombres para futuras acciones armadas. Como después de las tomas de Tabalosos y Soritor el MRTA había vuelto al Alto Sisa, el Ejército les preparó un cerco que les cerró todos los puntos estratégicos de escape a otras zonas. El enfrentamiento se produjo el 28 de noviembre de 1987:

Luego de la toma de Juanjuí, volvimos al mismo campamento que fue utilizado antes de Juanjuí; entonces, el Ejército nos persiguió. Ese sitio estaba en el Alto Sisa, donde nace el río. Cuando nos hicieron el cerco, la gente que conocíamos nos sacaron para el otro lado, para Saposoa que era el río Porotongo. Para Pasarraya, caminamos aproximadamente dos días. Los soldados nos estaban ajustando, pero logramos salir del cerco que nos habían hecho por Agua Blanca. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P495. Varón, ex combatiente militar de Lamas)

Creyendo que se habían librado del Ejército, los del MRTA fueron sorprendidos en Agua Blanca el 23 de diciembre. En ese momento empezó un tiroteo que se prolongó por tres horas: «Los soldados no nos lograron detectar. Cuando ya estábamos pasando aproximadamente cuarenta personas, un oficial que estaba rondando ve a los últimos que se iban y, en eso, empezaron los disparos» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P495. Varón, ex combatiente militar de Lamas).

Ante la superioridad numérica del Ejército, las huestes del MRTA decidieron separarse y tomar rumbos distintos. Algunos lograron unirse al resto del ET, otros perecieron en batalla, otros nunca aparecieron: «Nosotros sí logramos aparecer, caminando bastante nos salvamos. Conocíamos algunas zonas. En nuestra niñez, nuestros viejos [padres] nos hacían pasear, recordabas y te salías buscando caminos por el monte y lograba salir» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P495. Varón, ex combatiente militar de Lamas).

Los que pudieron salir del cerco militar preparado por el Ejército se fueron juntando poco a poco, mientras el MRTA buscaba refugio para los demás combatientes.

El Ejército hizo masivas detenciones de personas acusadas de colaborar con el MRTA y las sometió a torturas. Además, realizó acciones punitivas contra centros poblados con el fin de ubicar a los integrantes del MRTA.<sup>433</sup> Con estas acciones, el ET quedó diezmado. Algunos mandos regionales, como *Ricardo*,<sup>434</sup> fueron capturados y enviados a la cárcel. Luego del desmantelamiento del frente, entre fines de 1987 e inicios de 1988, se iniciaron los primeros contactos para una nueva articulación: «Comenzamos con cuatro hombres al mando de *Puma* [capturado tres días después de haberlos organizado]. Luego de esto, tuvimos que volver a iniciar los contactos para tener una cabeza visible en la organización. Ahí se logró contar con *Omar*, compañero que tenía mucha experiencia militar pero con muy poco nivel político e ideológico» (*Antonio*).

*Omar* logró recomponer todo el trabajo político y militar del FNO. En ese momento, ingresó una gran cantidad de personas que simpatizaban con el MRTA y se les empezó a adoctrinar: «En esta etapa ingresé al MRTA. Yo reforcé políticamente a la gente y empecé a hacer contactos con la Dirección Nacional. No había nadie más que lo haga, así que asumí esa responsabilidad; no había otra salida. Para suerte nuestra, la gente empieza a integrarse a nuestras tropas y a tener relación con nosotros de manera directa e indirecta» (*Antonio*).

<sup>433</sup> En enero de 1988, el fiscal superior, comisionado en el distrito judicial de San Martín, doctor Carlos Escobar Pineda, recibió denuncias por la detención ilegal de 35 personas y, posteriormente, comprobó la reaparición oficial de sólo 28 de ellas. Lamentablemente, la campaña contrasubversiva incluyó ejecuciones extrajudiciales. Para mayor información sobre casos, véase el documento de Aprodeh: Peligros de la guerra contra la coca.

<sup>434</sup> Ricardo fue capturado en Tarapoto el 23 de enero de 1988 y salió en libertad el 26 de enero de 1990.

Durante esta etapa de reconstrucción del FNO, también se logró reconstituir el ET, que logró tener mayor presencia pública a través del responsable político de masas. Con la ayuda de Lucas Cachay, se logró fortalecer ideológicamente y políticamente los nuevos combatientes que iban a realizar las futuras acciones militares para hacer sentir la presencia activa del MRTA en la región: «Nosotros empezamos a realizar escuelas político-militares. No sólo estábamos nosotros; en ese momento se llamó a Lucas Cachay para que nos proporcione personas que nos refuercen por el lado político. Así, los militares y los políticos del MRTA lograron reflotar el frente» (Antonio).

En las ciudades se formaron «milicias urbanas» que hacían los trabajos de pintado de paredes con lemas alusivos a la lucha armada y al MRTA. En el campo, se formaron nuevamente el ET y las «milicias rurales».

A inicios de 1989, el FNO comenzó a manifestarse con las siguientes acciones: el 4 de marzo, incursionó en Pilluana y Shapaja; el 27 de marzo, tomó San José de Sisa; el 3 de mayo, tomó Peleje y Papaplaya; el 25 de mayo, tomó Pacaypasa y capturaron al presidente de CORDE-San Martín, Demetrio Tafur Ruiz; el 3 de julio, volvieron a incursionar en Shapaja; y el 22 de noviembre, tomaron Pacaypasa. Asimismo, apoyó los diversos paros regionales, organizados por la FEDIP-SM, que demandaban la autonomía regional de San Martín y mejores condiciones para los productores agrarios: «Reconstruimos todo lo que se cayó y empezamos a tener presencia a nivel de la región, tanto que el Ejército volvió a preocuparse de nosotros porque, a mediados de 1989, nuevamente se retoman las acciones militares en San Martín tras las incursiones a San José de Sisa, Papaplaya, Pacayzapa, Pilluana» (Antonio).

En enero de 1990 Ricardo salió libre y se dirigió a San Martín para asumir, en abril del mismo año, la comandancia general del FNO tras la muerte del comandante Roberto:<sup>435</sup> «En el mes de abril de 1990, Evaristo me encarga el mando del frente, toda vez que él era dirigente nacional y estaba asumiendo la jefatura de la organización en vista que Rolando estaba preso» (Ricardo).

En abril de 1990 el FNO, al mando de Ricardo, ya contaba con tres destacamentos de 25 hombres cada uno, distribuidos en las siguientes zonas: Mayo Medio, valle del Huayabamba y en el Huallaga Central. Para agosto de 1990, llegó a tener quinientos combatientes, lo cual hizo posible aumentar los destacamentos militares y consolidar las ocho zonas de control del MRTA. Además, volvieron a realizar espectaculares acciones armadas: el 9 de febrero, tomaron la ciudad de Picota; el 14 de mayo, tomaron Saposoa; incursionaron en Bellavista el 18 de mayo;<sup>436</sup> el 25 de julio, tomaron Yurimaguas; el 16 de agosto, el ET del FNO, con trescientos subversivos, tomó Moyabamba; el 3 de noviembre incursionaron en Pacaysapa; y el 5 de noviembre, incursionaron en Nueva Cajamarca. En todas sus acciones militares, además de las arengas en favor de la lucha armada, pedían a la gente apoyar y organizarse en los frentes de defensa.

Como ejemplo de la realización de estas tomas se describirá la de Yurimaguas.

#### 10.5.1. Toma de Yurimaguas

Para la toma de la ciudad de Yurimaguas, el MRTA concentró en Chazuta a los destacamentos ubicados en Yurimaguas, el Huallaga Central y el Alto Mayo. El objetivo central de esta toma era ampliar su radio de operaciones hacia Loreto. Los integrantes del MRTA bajaron en bote a motor por el Bajo Huallaga. Aproximadamente, eran trescientos combatientes debidamente armados.

En Shucshuyacu, los integrantes del MRTA lograron establecerse por algunas horas hasta esperar las órdenes de entrar a Yurimaguas e iniciar la toma de la ciudad. Los combatientes involucrados en las tomas no sabían a dónde estaban yendo a pelear.

La permanencia en Shucshuyacu sirvió para recibir la información de las bases milicianas sobre los planos y mapas de los puestos policiales y de la base de la Marina de Guerra, así como para saber con qué número de personal contaban y los tipos de arma que tenían. Esta información fue distribuida al personal para que no tuvieran problemas con las fuerzas del orden.

Debido a la localización de la base de la Marina de Guerra, los integrantes del MRTA constituyeron un grupo que apoyaría en brindar los instrumentos necesarios para la entrada, la estancia y la salida del ET.

<sup>435</sup> Tras la muerte de Roberto (cuyo nombre real era Rodrigo Gálvez), el 9 de febrero de 1990 el FNO tomó su nombre en homenaje a él.

<sup>436</sup> El semanario Cambio registró que esta toma se realizó el 26 de mayo.

Previa consolidación de grupos que debían realizar actividades específicas (grupo logístico, grupos de asalto, grupos de contención y gente especializada en explosivos), a las 10:30 p.m. todo el personal del MRTA recibió las últimas indicaciones sobre las acciones que iban a realizar. Así, todos subieron a los botes que los dirigirían a Yurimaguas.

Con la ayuda de uno de los camiones de marca Volvo, un grupo de 180 integrantes del MRTA rodearon la base de la Marina de Guerra, mientras el otro vehículo se dirigió hacia el centro de la ciudad para posicionarse sobre las áreas cercanas a los puestos policiales de la Guardia Republicana, de la Guardia Civil y el centro de reclusión (CRAS). Sin embargo, la Marina de Guerra se percató del movimiento de los CRAS y empezó a atacar. Al mismo tiempo, los integrantes del MRTA empezaron el ataque a los puestos policiales y al CRAS.

Los puestos policiales fueron los primeros en caer en manos de los miembros del MRTA, que lograron capturar a varios policías, quienes fueron exhibidos durante el mitin realizado en la plaza de armas:

Al capturar el local de la Guardia Civil y tomar a dos policías como prisioneros, me avisaron que también se había tomado el local de la Guardia Republicana con seis policías que fueron hechos prisioneros. Del CRAS fueron liberados todos los presos y diez policías fueron tomados prisioneros. Eran las ocho de la mañana y ya teníamos tres puntos estratégicos controlados; faltaba la Marina. (*Ricardo*)

Al no poder tomar la base de la Marina de Guerra, Ricardo dispuso enviar refuerzos y la realización de las actividades posteriores a la toma (pintas, repartición de volantes, mitin, presentación de prisioneros, captura de armamento, liberación de reclusos) para después salir de la zona: «Le dije a Puma [el encargado de tomar la base de la Marina] que si no podía tomar la base, que todos nos retiraríamos, previa comunicación sobre la situación. En ese momento, ordené que juntaran todas las armas<sup>437</sup> recuperadas para llevarlas a un bote motor» (*Ricardo*).

Durante este tiempo, se aprovechó para realizar en la plaza de armas el mitin de presentación del MRTA, repartir volantes sobre la lucha armada y presentar sanos y a salvos a los policías que fueron tomados como prisioneros. Estos policías fueron entregados a la parroquia de la ciudad con la condición de no ser liberados hasta que el MRTA abandonara Yurimaguas. Los miembros del MRTA tuvieron algunos heridos y causaron seis muertes a la Marina de Guerra.

Un resultado negativo de esta toma fue la liberación de presos comunes del CRAS de Yurimaguas, quienes, junto a algunos miembros del MRTA, empezaron a saquear casas comerciales, cobrarse viejas rencillas con determinados pobladores y cometer abusos contra la población: «No los pudimos controlar porque estábamos más preocupados por lo que pasaba con nuestros compañeros en la base de la Marina y por salir de la ciudad. Esa toma nos hizo ver mal ante la población, aunque nosotros no quisimos que sucediera eso» (*Antonio*).

Desde Tarapoto, la dirección regional les informó que dos helicópteros con tropas contrasubversivas iban a Yurimaguas para reforzar a la Marina de Guerra, por lo que *Ricardo* ordenó la retirada de la zona, vía Shucshuyacu, al valle del Shanusi y al pongo de Caynarachi.

Cabe señalar que para ese entonces, el FNO estaba reforzado con los miembros del MRTA que habían escapado el 12 de julio de 1990 de la cárcel de máxima seguridad de Canto Grande, en Lima, junto a *Rolando*. Estos miembros del MRTA habían sido colocados en el FNO como mandos políticos y organizativos de la dirección regional.<sup>438</sup>

En septiembre de 1990, el III Comité Central de Unidad decidió nombrar a *Evaristo* como comandante general del FNO y relevó a *Ricardo*, quien cayó preso por segunda vez en Iquitos el 12 de noviembre de 1990. Sin opositores políticos ni militares, *Evaristo* impuso su visión militarista en el FNO, con lo cual las acciones militares se tornaron más violentas e incluyeron el saqueo de tiendas comerciales y el robo a entidades bancarias.

En 1991, el FNO inicia la campaña militar «Fernando Valladares», cuyo objetivo era criticar las condiciones económicas y políticas que impuso el gobierno de Alberto Fujimori. Realizaron algunas acciones militares importantes: el 10 de mayo, incursionaron simultáneamente en Juanjuí, Tarapoto, Saposoa, Moyobamba y Rioja.

<sup>437</sup> Según Ricardo y Antonio, la cantidad de armamento «recuperado» en Yurimaguas fue el doble de lo que se consiguió en la primera toma de Juanjuí en 1987.

<sup>438</sup> Esta decisión trajo muchos problemas internos y provocó rupturas que desarticularon tanto el movimiento político como el militar en San Martín.

Luego del ataque a Rioja, tomaron de rehenes a nueve policías, a quienes mantuvieron cautivos durante algunos días en el campamento del pongo de Caynarachi para llamar la atención de diversos organismos internacionales. Constantemente, *Evaristo* se contactaba con las autoridades civiles y religiosas de Moyobamba y Rioja para concretar las reivindicaciones del MRTA y darle solución al problema de los policías rehenes. En esta tarea participaron como intermediarios el obispo de Moyobamba, monseñor Venancio Orbe Uriarte, y la presidenta del Frente de Defensa de Rioja, doctora Aurora Torrejón. La participación de estas personas logró que el MRTA liberara a los policías retenidos a cambio de que los medios de comunicación difundieran un comunicado dirigido a las Fuerzas Armadas en el que se les exigía detener los abusos, torturas y desapariciones contra campesinos inocentes.

Durante la campaña militar «Fernando Valladares», el MRTA cambió su manera de hacer la lucha armada y comenzó a ser más violento. Un ejemplo de esto fue la segunda toma de Juanjuí.

#### 10.5.2. Segunda toma de Juanjuí

Los integrantes del MRTA llegaron a Juanjuí a las 2:00 a.m. del 24 de diciembre de 1991 al mando de *Rolando*, quien ya había fugado de la prisión en julio de 1990, y *Evaristo*. Distribuyeron a sus doscientos hombres en tres grupos de asalto y de contención acompañados por gente especialista en explosivos. Los puntos estratégicos eran el puesto policial (ubicada en la plaza de armas), la base militar de ingenieros del Ejército (ubicada en el barrio La Merced, ex local de ENCI) y las principales instituciones públicas y privadas de la ciudad. *Rolando* y *Evaristo* acamparon en la casa del señor Castillo (a dos cuadras de la plaza de armas), desde donde controlaban las acciones de contención al Ejército y la toma del puesto policial.

A las 5:00 a.m., el MRTA controló momentáneamente Juanjuí con la toma del puesto policial y la «recuperación» de armamento, con el lamentable saldo de seis policías y un civil muertos y 15 heridos. También murieron alrededor de 15 integrantes del MRTA y varios resultaron heridos. Durante el ataque se incendiaron los locales de la Policía Nacional y la casa parroquial, se saquearon el comercio mayorista Bruno Acosta y el Banco Amazónico. También se destruyó parcialmente el local del banco Interbank. De ambos bancos se robó dinero.

Con los grupos de contención deteniendo al Ejército, *Rolando* y *Evaristo*, con el botín en la mano, cogieron a un empleado de Córpac y lo amenazaron para que consiga una avioneta. Luego de conseguirla, pudieron salir en avioneta de Juanjuí con todo el dinero. Mientras, los integrantes del MRTA fueron saliendo de la zona con dirección a Bellavista y Alto Sisa.

Para fines de 1991, las disputas internas del FNO lo resquebrajaron peligrosamente, lo cual fue aprovechado por el PCP-SL para consolidar territorios que había ganado en la parte sur del departamento de San Martín. En este contexto, los enfrentamientos entre ambos grupos armados se agudizaron por la posesión del territorio y las rentas económicas que producía la relación con el narcotráfico.<sup>439</sup>

#### 10.6. EL AVANCE DEL PCP-SL Y EL NARCOTRÁFICO HACIA EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

Cuando el PCP-SL empezó a incursionar en las zonas controladas por el MRTA, se produjeron enfrentamientos por controlar el territorio, por tener más apoyo popular y por manejar las pistas de aterrizaje utilizadas por el narcotráfico.<sup>440</sup>

Los enfrentamientos registrados entre el MRTA y el PCP-SL<sup>441</sup> se realizaron en las siguientes zonas:

<sup>439</sup> Se tiene información de los choques entre el MRTA y el PCP-SL desde 1987 (Quehacer, n.º 50, enero-febrero de 1988, pp. 60 y 61).

<sup>440</sup> Según Ricardo, en junio de 1990, en el caserío Dos de Mayo, existían dos pistas de aterrizaje clandestinas controladas por narcotraficantes colombianos. Éstos proporcionaban alimentos y vestido al MRTA para que no interfieran con ellos. Hasta ese entonces, el MRTA no había establecido cupos ni montos por vuelo. En cambio, los narcotraficantes pagaban a las autoridades de la localidad.

<sup>441</sup> El primer enfrentamiento que se ha registrado entre ambos grupos se dio en marzo de 1987. Un grupo de cien integrantes del MRTA intentó tomar la ciudad de Tocache, pero fue atacado por una compañía del PCP-SL que dominaba la zona. Los del MRTA fueron derrotados y perdieron cuarenta hombres. Con este acontecimiento, la intención del MRTA de abarcar todo el departamento de San Martín quedó frustrada y terminó por asentarse en el valle del Sisa, provincia de El Dorado. A partir de 1989, el MRTA estableció su frontera territorial a la margen izquierda del río Huallaga, en el caserío de Dos de Mayo en el valle del Huallabamba, provincia de Mariscal Cáceres, y afirmó su dominio en el Medio y Bajo Huallaga y en el Alto Mayo.

### 10.6.1. Enfrentamientos en el valle del Ponaza

En 1991, el enfrentamiento entre estos dos grupos se dio porque los miembros del PCP-SL habían capturado a cuatro integrantes del MRTA, entre ellos una mujer. El PCP-SL se acantonó y se camufló en las partes bajas del valle del Ponaza, mientras los del MRTA los perseguían para rescatar a sus compañeros.

Según *Gustavo*, el MRTA quería arreglar las cosas de forma pacífica para evitar cualquier derramamiento de sangre. Pedían un diálogo con los cabecillas del PCP-SL pero no lograron nada: «Ellos decían, “miren tus compañeros cómo van a morir, así van a acabar muriendo todos” [...] y mataban a nuestros compañeros» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P494. Varón, ex combatiente militar del MRTA).

Por este hecho, los integrantes del MRTA se unieron a los destacamentos del Huallaga Central y Mayo Medio y decidieron atacar a los del PCP-SL. El enfrentamiento duró todo el día y los del MRTA lograron desalojar al enemigo.

Para evitar futuras infiltraciones del PCP-SL, el MRTA dispuso la instalación de puestos de control en toda la zona del Huallaga Central. Sin embargo, como el territorio controlado por el MRTA era muy extenso, el PCP-SL siempre intentaba colarse a través de los ríos, ya sea por el valle del Huallabamba o por el valle del Ponaza.<sup>442</sup> A pesar de los controles, nunca evitaron las incursiones del PCP-SL. No obstante, un factor importante para intentar detener la arremetida del PCP-SL fue la postura de la población de Juanjuí al no aceptar la presencia del PCP-SL por lo sanguinario que había sido con otros pueblos. Por eso, la población de Juanjuí, al ver movimientos del PCP-SL, siempre avisaba a los del MRTA.<sup>443</sup>

### 10.6.2. Enfrentamientos en el valle del Huallabamba

En Huallabamba, los enfrentamientos entre ambos grupos subversivos fueron constantes entre 1991 y 1993. El PCP-SL quería desalojar al destacamento militar del MRTA de Dos de Mayo por considerarla una zona potencialmente alta para el negocio de la droga.

Debido a la resistencia ofrecida por el MRTA, el PCP-SL inició trabajos de infiltración en el sector magisterial y estudiantil de Juanjuí, provincia de Mariscal Cáceres. El trabajo de infiltración de las huestes del PCP-SL en Juanjuí buscaba conocer cuáles eran las virtudes y los defectos del MRTA, así como realizar un trabajo de base con profesores y con la sociedad organizada para inculcarles los objetivos del PCP-SL. Asimismo, como el PCP-SL mandaba grupos de aniquilamiento para asesinar a los militantes del MRTA, éstos intervinieron las frecuencias de los del PCP-SL para saber de antemano la jerga utilizada por el PCP-SL para conocer a las bases del MRTA.

En una época mi radio estaba trabajando y oía que decían: «atención, atención familia de dos letras, atención, atención familia de dos letras. Esta tarde llega la familia de dos letras a «JJ» para hacer fiesta con la familia de cuatro letras». Esta clave dice: la familia de dos letras, el PCP-SL, viene a hacer fiesta [matar] a la familia de cuatro letras, MRTA. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P492. Varón arrepentido del MRTA, ex responsable de los subversivos en Juanjuí)

Al tener conocimiento de los planes del PCP-SL en Juanjuí, el MRTA constituyó grupos armados para frustrar los planes de los del PCP-SL:

[...] [Ante la incursión de miembros del PCP-SL a Juanjuí, yo dispuse] vayanse al puerto del Huallaga, deben estar llegando seis hombres sucios con pantalón jean, pelo largo y todos pálidos. Van a reunirse en algún lugar. Uno de nosotros va a ir en bicicleta, mirando dónde van a reunirse. Cuando estén distraídos los senderistas [integrantes del PCP-SL], atacamos en la noche de sorpresa. Esa vez hubo dos muertos de Sendero [del PCP-SL]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P492. Varón arrepentido del MRTA, ex responsable de los subversivos en Juanjuí)

El PCP-SL inició su trabajo de espionaje en 1989 designando a *Wally* para que entre a Juanjuí y desentrañé el enigma del poder del MRTA en la zona. *Wally* es infiltrado como sicario de una firma de narcotraficantes.

<sup>442</sup> Incluso, el PCP-SL llegó a instalar «comités populares» en Colpa y Huaccha (Saposoa) y en Shambuyacu (Picota).

<sup>443</sup> De igual forma sucedió en el poblado de Tres Unidos. El PCP-SL había reunido a la población e hizo sus habituales reuniones, pero en ese momento un destacamento militar del MRTA, procedente del distrito de Sauce, entró a Tres Unidos y los del PCP-SL se camuflaron en el pueblo. Sin embargo, como la gente estaba con el MRTA, ellos le avisaron de la presencia de extraños.

Pese a lo cuidadoso que fueron las acciones del personal infiltrado del PCP-SL, el MRTA empezó a sospechar sobre la identidad, principalmente, de *Wally*. Sin embargo, el MRTA no pudo hacer nada contra él porque estaba garantizado por una firma de narcotraficantes. En esos días llegó a Juanjuí *Chester*, integrante del PCP-SL que tenía la misión de infiltrarse en Dos de Mayo, pero es detectado y asesinado. Ante este hecho, *Wally* se dirigió a Saposoa. Tras un mes de aislamiento, retornó a Juanjuí, donde recibió indicaciones de infiltrarse en el MRTA. Para cumplir con esta tarea, *Wally* empezó a realizar acciones (secuestros, cobro de cupos, etc.) para hacerse famoso y necesario para el movimiento. Por eso, el MRTA lo captó.

Desde dentro del MRTA, los integrantes del PCP-SL infiltrados iniciaron las acciones de aniquilamiento de miembros del MRTA e identificaron a los mandos más importantes de la zona. Cuando los planes de infiltración se cumplían, los integrantes del PCP-SL se dieron cuenta de que había un grave problema por resolver en Juanjuí: la alianza del MRTA con el Ejército. Pese a ello, los del PCP-SL continuaron con los aniquilamientos nocturnos, a la vez que salían con el MRTA a realizar batidas y vigilancias nocturnas contra el PCP-SL.

Entre 1991 y 1992, el PCP-SL consolidó sus nuevos «comités populares» en la zona de Bellavista y formó un batallón en las riberas del río Abiseo para tomar definitivamente Dos de Mayo en noviembre de 1993. También logró constituir diferentes grupos de asalto divididos en tres. El primer grupo entró por Sión y se dirigió a Huicungo. El segundo grupo fue por Nuevo San Martín, vía río Abiseo y el río Chimbote, y salió al valle del Huallabamba. El tercer grupo salió de Ledoy, del sector de Soledad, Bellavista.

No entramos cien ni doscientos hombres, se vino toda la gruesa de la principal, la T4. Vino gente de apoyo de Aucayacu, del «bolsón» Cuchara. También vino personal de los «comités populares abiertos». Eran un aproximado de mil hombres. Todos distribuidos en distintos flancos. Así, entramos a Dos de Mayo y sacamos a patadas al MRTA y le hicimos chifa. Fue una matanza. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P484. Varón, mando militar del PCP-SL de la compañía de ex subversivos de Uchiza)<sup>444</sup>

En realidad, la caída del MRTA se produjo porque ya había perdido su poderío militar en la zona, así como por el desgaste y problemas internos que sufría el FNO. Esta situación obligó al MRTA a dejar lugares de antiguo control a disposición del PCP-SL.

#### 10.6.3. *Vaticano*: el otro gran escollo para el PCP-SL

Otro actor importante en las disputas entre el PCP-SL y el MRTA por el negocio de la droga y el control del territorio fue el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, (a) *Vaticano*. Su poder era tan fuerte que no permitió entrar a Campanilla, su centro de operaciones, ni al PCP-SL ni al MRTA: «Él [Vaticano] le paró macho al PCP-SL; por eso, Campanilla jamás fue tocada por el PCP-SL pero tampoco por el MRTA. Nuestras relaciones eran cordiales pero nunca logramos formar base miliciana en Campanilla; ése era territorio de Vaticano» (Antonio).

La relación que mantenía *Vaticano* con el PCP-SL fue cordial hasta que éste último decidió imponer precios de compra y venta de la droga, así como cupos a los narcotraficantes.<sup>445</sup> Para ese entonces, *Vaticano* ya tenía el control de todo el negocio de la droga en el Huallaga Central. Esto motivó que las otras firmas de narcotraficantes locales quisieran derrocarlo con ayuda del PCP-SL. En 1992, *Vaticano* armó a un grupo de sicarios con armamentos de corto y largo alcance para detener cualquier incursión del PCP-SL y sus rivales en su zona de influencia.

*Vaticano* incluso contrató a personal del ET, en ese momento sicarios, aprovechando su experiencia militar. Gracias a ello, le fue más sencillo contrarrestar las arremetidas militares del PCP-SL y de las firmas de narcotraficantes rivales:

<sup>444</sup> La versión de *Wally* se contradice con la versión ofrecida por *Acero*, quien dice que en 1993, el PCP-SL llegó a tomar Dos de Mayo, pero ya no había gente ni el destacamento militar del MRTA, porque la disidencia de Ricardo había desarticulado a la fuerza militar del movimiento. El negocio de la droga se mantenía esporádicamente, pero luego se fue perdiendo: «ya no había tanto colombiano, ya no había, se había ido» (*Acero*).

<sup>445</sup> Cabe resaltar que la relación entre *Vaticano* y el PCP-SL se inició en 1989 en Uchiza. En ese año, él aceptó pagar 15 mil dólares más un cupo de tres dólares por cada kilo de PBC que saliera del Huallaga. Como *Vaticano* empezó a convertirse en el monopolizador del negocio de la droga, rompió con el PCP-SL y se trasladó a Campanilla. Es en este lugar que *Vaticano* se enfrenta por primera vez al PCP-SL y al MRTA.

*Vaticano* contrató compañeros ya no como emerretistas [miembros del MRTA], sino como particulares. Y como eran adiestrados en la guerra, entonces conocían todo y les servían de mucho. *Vaticano* ha combatido mucho a Sendero [el PCP-SL]. Esa gente [que se fue con *Vaticano*] estaba abandonada, ya no era gente del partido. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P492. Varón, arrepentido del MRTA, ex responsable de los subversivos de Juanjui)

Tras afirmar militarmente su dominio, *Vaticano* transformó a Campanilla en la zona más importante del negocio de la coca en el Huallaga Central. Era también una zona intangible donde el PCP-SL y el MRTA no pudieron entrar ni instaurar «comités populares» ni «bases milicianas».

Para comprender la lógica de la lucha entre el PCP-SL y el MRTA por ganar el control de los territorios del valle del Huallabamba y ganarse el apoyo de la población, se deben tomar en cuenta que ambos tenían por meta el control de las zonas de producción de coca y mantener una relación con las organizaciones de base y características ideológicas y políticas diferentes.

Entre 1987 y 1990, el MRTA aducía que no le interesaba proteger a los productores de coca como lo proclamaba el PCP-SL, sino defender los intereses de productores agrarios asociados a la FASMA y las demandas de autonomía regional impulsadas por el FEDIP-SM.<sup>446</sup>

Posteriormente, el PCP-SL impuso a narcotraficantes cupos y tarifas para la compra y venta de hojas de coca, pasta básica bruta y clorhidrato de cocaína.

Durante sus incursiones en varios centros poblados de San Martín el MRTA amenazó a quienes tuvieran relación con la producción y comercialización de coca.<sup>447</sup>

Conforme la producción de coca cobraba importancia en San Martín y la mayoría de campesinos dependía de esta actividad, el MRTA comenzó a estrechar vínculos con el narcotráfico. Había visto que, a través de cupos de guerra, tal cual lo hacía el PCP-SL, podía obtener buenos recursos para seguir adelante con su campaña militar.

Previo conocimiento de las pistas de aterrizaje clandestinas para avionetas con droga en Dos de Mayo (valle del Huallabamba), el MRTA, en su III Comité Central de Unidad, realizado en septiembre de 1990, decidió cobrar cupos por cada vuelo que salía de las zonas controladas por ellos. Esta medida se empezó a ejecutar en noviembre de 1990.<sup>448</sup>

Las pistas funcionaban previo trato entre los narcotraficantes y el MRTA. Cabe resaltar que el negocio de los cupos por vuelo sirvió para el abastecimiento de las fuerzas militares del movimiento.

Cuando los narcotraficantes no querían cumplir con la cuota acordada, eran coaccionados para que lo hagan: si no pagan, no hay pistas. Por cada vuelo se recibía 5 mil dólares, que eran repartidos de la siguiente manera: 1,500 dólares eran para las autoridades de los pueblos, 1,500 dólares para el dueño de la pista y 2,000 dólares para el MRTA.

Para algunos mandos, mientras el MRTA estuvo activo, no le dio protección a los narcotraficantes, sino, más bien, el cobro de cupos era porque el negocio de la droga se realizaba en la zona del MRTA: «Jamás fuimos seguridad de los narcos [narcotraficantes]. Nosotros sólo cogíamos una porción de su dinero para nuestro autoabastecimiento. Ellos mismos venían con sus sicarios y se encargaban de todo; nosotros sólo exigíamos nuestro derecho de pista y vuelo» (*Antonio*).

<sup>446</sup> El PCP-SL buscaba destruir cualquier organización de base y construir los llamados comités populares, mientras el MRTA pensaba que el pueblo ya tenía una gran experiencia organizativa y lo único que tenía que hacer era infiltrar las organizaciones existentes para adecuarlas a sus lineamientos políticos e ideológicos. Por eso, la población le temió más al PCP-SL por su práctica coactiva y de aniquilamiento selectivo y apoyó a los miembros del MRTA porque su discurso era similar al de los frentes regionales y agrarios.

<sup>447</sup> En marzo de 1989, durante la toma de Pilluana, asesinaron a tres autoridades ediles a quienes se acusó de estar comprometidas con el tráfico ilícito de drogas.

<sup>448</sup> Para 1991, se instalaron cuatro pistas de aterrizaje en las siguientes zonas: Dos de Mayo (valle del Huallabamba), Sauce (provincia de San Martín), Bonilla (pongo de Caynarachi), Pampa Hermosa (Yurimaguas).

### 10.7. EL FINAL DEL FRENTE NORORIENTAL

Entre 1988 y 1993 el MRTA sufrió diversos problemas de rupturas internas provocadas, en algunos casos, por diferencias políticas y militares y, en otros, por rivalidades personales. Asimismo, tuvo que enfrentar el avance del PCP-SL, la represión y estrategia contrasubversiva del frente Huallaga, la puesta en vigencia de la ley de arrepentimiento, la acción en defensa de los derechos humanos de la Oficina Prelatural de Acción Social de Moyobamba (OPASM), la vinculación con el narcotráfico, así como la corrupción y el pillaje de sus miembros. Estos enfrentamientos y problemas internos y externos fueron, sin duda, un factor decisivo para la liquidación del MRTA en el departamento de San Martín.

Tras la fusión del MIR-VR y el MRTA en 1986, un grupo de militantes del MIR-VR quedó disconforme con la alianza. Entre los discrepantes estaban los miristas militares *Darío* y *Diómedes* y algunos miristas políticos liderados por *Azul*, quien, tras ser la cabeza más importante del MIR-VR, fue relegado por el profesor Lucas Cachay. A partir de entonces, estas personas mantuvieron una actitud separatista frente al MRTA.

En 1988, *Azul*, junto a unas 12 personas se propusieron romper con el MRTA y formar su propio grupo, cuyo ámbito de acción sería San Martín. Para ello, convocaron a tres personas, que habían ayudado a construir política y militarmente el FNO, y les propusieron la idea separatista.

Cuando *Antonio* tomó conocimiento de este acuerdo, decidió informar inmediatamente a Lima sobre la disidencia de un grupo de miristas. La dirección nacional del MRTA mandó aniquilar a todas las personas involucradas con el proyecto separatista. Así, asesinó a José Ojeda, (a) *Darío*, y una docena de miristas disidentes se dio a la fuga. Los demás miristas permanecieron en el MRTA contra su voluntad, por coacción de los mandos nacionales y regionales.

Con la muerte de un elemento y el escape de los disidentes miristas, se desvaneció la primera intención de dividir el MRTA.

A esto se suman las diferencias internas entre dirigentes nacionales.<sup>449</sup> Así, también se produjeron problemas por la posición militarista que estaba instaurando la dirección nacional. Los miembros del MIR-VR pensaban que no se debía militarizar toda la actividad del MRTA y se debía continuar con la labor educativa y de concientización de la gente sobre los objetivos de la lucha armada.

La presencia de Ricardo en la zona del Huallaga Central a finales de 1991, produjo un resquebrajamiento en el FNO. Había logrado convencer al destacamento de la zona del Huallaga Central de apartarse del MRTA y formar su propia guerrilla, con 120 hombres, autodenominada «Alcides Reátegui». En enero de 1992, Ricardo, junto a Pepe, Tarzán, Gato y Chávez, anunció su desvinculación del MRTA por diferencias de estrategia política y militar, como la «senderización del MRTA», por ejemplo, al asesinar indiscriminadamente a los que discrepan internamente.<sup>450</sup> La decisión de escindirse dio inicio a los primeros enfrentamientos entre el MRTA y el nuevo grupo de Ricardo.

Así, el MRTA reunió a todo el ET del FNO, que sumaban unos trescientos hombres, y, al mando de *Antonio*, se fue en la búsqueda de Ricardo. Durante la persecución, *Antonio* divulgó que Ricardo había pactado con el Ejército para dividir las fuerzas militares del FNO y preparar las condiciones para que las fuerzas del orden los aniquilen.

<sup>449</sup> En septiembre de 1990 se llevó a cabo el III Comité Central de Unidad. Ahí Rolando y Evaristo lograron controlar la elección de la dirección nacional al colocar en ella a un miembro del MRTA más. Esta elección se realizó fuera de los acuerdos de unidad contraídos en 1986. Así, la dirección nacional quedó integrada por cuatro miembros del MRTA —Víctor Polay Campos, Néstor Serpa Cartolini, Miguel Rincón Rincón y Américo Gilvonio Conde— y sólo dos provenientes del MIR-VR —Alberto Gálvez y Rodolfo Kleim—. Con el apoderamiento de la dirección nacional por parte de la cúpula del MRTA, la agrupación aliada, el MIR-VR, empezó a discrepar abiertamente de la posición militarista para el desarrollo de la lucha armada. Asimismo, los que ejercían la lucha política legal (Lucas Cachay, FEDIP-SM, UDP) empezaron a tener menos presencia en las decisiones internas del MRTA. A consecuencia de estas maniobras, en el III Comité Central de Unidad, la alianza del MRTA y MIR-VR quedó muy resquebrajada. Muchos militantes del MIR-VR se desmoralizaron al ver que Rolando manejaba todos los asuntos del movimiento según su propio criterio. Se empezó a criticar estas actitudes verticales y confiaron en que se actuara de otra manera para llevar al MRTA por «el camino triunfal de la lucha armada». Para más información, véase el apartado sobre el MRTA como actor del conflicto armado interno.

<sup>450</sup> Sobre los detalles que explican las razones de esta decisión, véase el capítulo sobre MRTA como actor del conflicto armado interno.

El Ejército rescata a *Ricardo* de los ataques del MRTA y también mata a la mitad de los miembros del MRTA que intervinieron en esa persecución.<sup>451</sup> Este hecho significó una merma importante de personal militar en el MRTA, así como el desvanecimiento del control político y militar en San Martín, única zona donde había logrado tener un asentamiento realmente significativo. Este hecho propició que el PCP-SL tuviera una mayor presencia en la zona y se iniciara una constante represión por parte del Ejército.

Entre otros factores que contribuyeron a la desarticulación del frente nororiental, está el avance del PCP-SL hacia el norte de San Martín, la represión del Ejército, el repliegue de las fuerzas militares del MRTA a las zonas del Mayo Medio y pongo de Caynarachi-Shanusi, la desarticulación de las organizaciones políticas, la corrupción y deserción de sus combatientes y la aplicación de la Ley de Arrepentimiento.

#### **10.7.1. El PCP-SL y su presencia en San Martín**

El PCP-SL comenzó a tener presencia en 1989 con la constitución de «comités populares» en los caseríos y centros poblados de las provincias de Bellavista y Mariscal Cáceres. Sin embargo, a partir de 1991 el PCP-SL fortaleció su trabajo en el extremo sur de San Martín y pretendió desplazar al MRTA de sus zonas de influencia. El PCP-SL le dio prioridad a su ingreso al Huallaga Central, en particular a los valles del Ponaza, Tres Unidos y Miskiyacu. En algunos momentos, los desplazamientos del PCP-SL lograron llegar hasta Juanjuí, Huicungo, Dos de Mayo y Campanilla, e incluso el grupo tuvo actividad en Saposoa, Bellavista, Picota y Tarapoto, zonas de predominante influencia del MRTA.

#### **10.7.2. Desarticulación de la base política del frente nororiental**

Para 1992, el frente de masas ya estaba inactivo. Lucas Cachay y Cecilia Oviedo habían sido amenazados de muerte tanto por el MRTA como por el Ejército y tuvieron que asilarse en la Embajada de México. El Ejército persiguió a los dirigentes del FEDIP-SM, quienes se refugiaron en diferentes países: Óscar Pinto en Bolivia, Julio Cachay y Manuel Arévalo en Brasil. Otros dirigentes como Segundo Centurión y Javier Tuanama fueron apresados.

Además, las diversas organizaciones políticas que apoyaban sutilmente al MRTA (UDP y FEDIP-SM) quedaron desarticuladas, con lo cual se quedó sin posibilidad de reclutar más combatientes y se mantuvieron sólo dos destacamentos militares del FNO: uno en la zona del valle del Mayo y otro en el pongo de Caynarachi-Shanusi: «Lucas Cachay era el brazo político público y debía conseguir cuadros políticos para concienciar a la masa. Esta tarea era fundamental para consolidar los cimientos ideológicos del movimiento, pero lamentablemente no funcionó. Con su huida, todo se perdió» (*Antonio*).

Diezmadas las dirigencias y atemorizadas las bases, las organizaciones sociales y el ET quedaron prácticamente liquidados.

#### **10.7.3. Corrupción y abusos de los miembros del MRTA**

Entre 1990 y 1992, el MRTA perdió apoyo de la población local debido al abuso en los cobros de cupos con los que extorsionaban a los pocos empresarios que aún quedaban en la región y, en general, a las prácticas delincuenciales en las que muchos de sus militantes, apuradamente reclutados, habían incurrido.

Entre esas prácticas delincuenciales se incluye la decisión de matar a toda persona que no estuviese de acuerdo con el MRTA.

Cabe mencionar que los «milicianos urbanos» y «rurales» habían sido los primeros en desertar del MRTA y arrepentirse ante el Ejército. Este hecho dejó sin capacidad de acción a los destacamentos militares del FNO para las tomas e incursiones a ciudades y centros poblados del departamento.

Asimismo, otro factor que causó la debacle del MRTA fue su convivencia con el narcotráfico desde fines de 1990. Esta relación generó una descomposición al interior de la organización porque se acogía a personas que no necesariamente se comprometieron con los objetivos de la guerrilla.

---

<sup>451</sup> Ricardo logra irse a Lima y luego a Venezuela. En ese país estuvo asilado aproximadamente desde 1993 hasta 1994. En septiembre de 1994 regresó al Perú y se acogió a la ley de arrepentimiento por recomendación de un amigo empresario y abogado, Carlos Gonzales.

#### 10.7.4. La represión del Ejército

Desde que el Ejército se encargó de la lucha contrasubversiva, cometió abusos, detenciones arbitrarias, robos, sustracción de objetos y dinero a los pobladores de los caseríos y centros poblados de San Martín. Los operativos contrasubversivos efectuados por el Ejército con la finalidad de acabar con los integrantes del MRTA crearon más inseguridad y miedo en la población por los constantes abusos que cometían y por involucrar innecesariamente a las personas. Así, entre 1987 y 1993 se han registrado 496 detenciones y 98 desapariciones.<sup>452</sup>

A partir de agosto de 1992, el frente Huallaga desarrolló una ofensiva militar sistemática contra el MRTA.<sup>453</sup> Pese a ello, el MRTA había realizado acciones, entre los meses de abril y mayo, con ataques a Tarapoto, Picota, Tabalosos y San Miguel del Río Mayo, además de atacar los puestos policiales de San José de Sisa y Bellavista. Lo cierto es que más que éxitos estas acciones fueron reveses.

Estos reveses fueron resultado de la nueva estrategia militar adoptada por el comando político militar del Frente Huallaga, al mando del general EP Eduardo Bellido Mora. Esta estrategia tenía como objetivo principal ganarse a la población con obras sociales benéficas, pues consideraba que la población civil no era el soporte de los grupos subversivos. Este tipo de acciones sirvió para limpiar la mala imagen de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el Ejército instauró rondas armadas de defensa civil en los distintos poblados del departamento de San Martín para neutralizar las acciones del MRTA. Progresivamente, logró controlar a todas las rondas autónomas creadas con anterioridad a su iniciativa.

Finalmente, el Ejército terminó con el campamento más importante que tenía el MRTA, ubicado en la localidad de Pampa Hermosa, distrito de Yanayacu, provincia de Lamas, departamento de San Martín.<sup>454</sup> En este operativo se empleó helicópteros artillados y tropas de asalto terrestres que requisaron armamento militar, pertrechos, radios, etc. Además, se encontró pozas de maceración de coca.

Todas estas acciones dejaron sin base de apoyo al MRTA y lo circunscribieron a espacios cerrados y, posteriormente, lo empujaron a la capitulación, arrepentimiento y rendición.

#### 10.7.5. El papel de la Oficina Prelatural de Acción Social de Moyobamba (OPASM), la Comisión de Pacificación de la Región San Martín y los efectos de la ley de arrepentimiento

Ante la violencia descarnada que se había desatado en todo el departamento de San Martín, la Iglesia Católica decidió abrir la OPASM, con sede en Tarapoto.<sup>455</sup>

La OPASM tuvo dos áreas prioritarias de atención: el área de asesoría legal, para el seguimiento de los casos de las víctimas de la violencia, y el área de formación, cuyo objetivo fue desarrollar programas que promovieran la creatividad y generasen respuestas alternativas de pacificación, así como asistir en el campo psicoafectivo a las víctimas de la violencia.

La OPASM creó espacios para que la población pueda identificar aquellos factores que habían provocado toda la vorágine de la violencia y que permitieran establecer posibles alternativas para resolverla.<sup>456</sup> También debía estar atenta a las repuestas de la población (rondas campesinas, llamados al arrepentimiento) para potenciarlas y generar una corriente de opinión en la población rural (desde las comunidades cristianas de base) y urbana (desde las diversas entidades públicas y privadas) en favor de la pacificación regional.

<sup>452</sup> Rodríguez 1996: 25.

<sup>453</sup> La labor contrasubversiva del frente Huallaga en San Martín estuvo bajo la responsabilidad de los generales EP Jaime Ríos Araico y Eduardo Bellido Mora. Este último es considerado como el verdadero artífice de la pacificación en la región por la forma como actuó frente a los integrantes del MRTA y por respetar y garantizar la vida de los arrepentidos. Para mayor información, véase la entrevista a Lincoln Rojas.

<sup>454</sup> Véase Ideele, n.o 45, diciembre de 1992.

<sup>455</sup> La OPASM fue creada el 30 de agosto de 1988 tras el acuerdo de tres instituciones: Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y la Prelatura de Moyobamba.

<sup>456</sup> Entre las actividades desarrolladas por la OPASM estuvieron encuentros de jóvenes cristianos, marchas por la paz, encuentros de niños por la paz, foros regionales por la paz, encuentros de rondas campesinas, talleres de educación en derechos humanos, etc.

Con la promoción y el afianzamiento de la pacificación promovida por la OPASM, se logró constituir instituciones importantes como las rondas campesinas en San Martín.<sup>457</sup>

En 1990, con el apoyo de la OPASM, la ronda de Shapaja se instauró legalmente. A partir de esta experiencia, se fueron creando otras rondas en el valle de Misquiyacu (Tres Unidos y Pilluana), Juan Guerra, San Antonio de Cumbaza, Buenos Aires y Chazuta. Debido a la acción de las rondas, los integrantes del MRTA fueron repelidos de estos lugares:

En 1990 el MRTA, al mando de *Ricardo*, ingresó a un poblado con una columna armada y demandó solicitudes que el pueblo no quiso cumplir. En ese momento, cerca de 1,500 personas con machetes en mano y un grupo de mujeres llevando la bandera del Perú rodearon a los subversivos. Quedaban sólo dos caminos al MRTA: hacer una masacre o retirarse sin que les signifique una derrota. Optaron por realizar una asamblea. *Ricardo* pidió disculpas por el asesinato del profesor Julio Sánchez asumiendo que fue un error, reconocieron la formación de las rondas y se retiraron. (Rodríguez 1996: 109)

En 1991 se realizó el I Encuentro Regional de Rondas Campesinas en Shapaja, donde, por decisión unánime, se eligió a la OPASM como asesora de las rondas. En 1992, la OPASM y las rondas campesinas realizaron los siguientes encuentros: I Encuentro de Rondas del Bajo Huallaga (Chazuta) y el I Encuentro de Rondas del Alto Mayo (Buenos Aires). En 1993 se realizó el II Encuentro Regional de Rondas Campesinas (San Antonio de Cumbaza).

Uno de los grandes logros de las rondas campesinas fue tomar la decisión de decir no a la violencia y, por iniciativa propia, defender su seguridad ante el abandono del Estado. Luego de esta experiencia, el Ejército les dio armas y las constituyó en rondas de defensa civil.

El 20 de abril de 1991 se creó la Comisión de Pacificación de la Región de San Martín, impulsada por la Iglesia Católica. Fue dirigida por el profesor Lincoln Rojas Salazar, secretario ejecutivo de la OPASM. Su comité directivo estuvo integrado por las siguientes entidades: Universidad Nacional de San Martín, Coordinadora de los Partidos Políticos, Asociación de Abogados, FEDIP-Departamental, Productores Agrícolas, Cámara de Comercio, Colegio de Periodistas, Colegio de Ingenieros, Asociación de Alcaldes, Colegio de Contadores y la APEMIPE.

Lo importante de esta Comisión de Pacificación fue dejar constancia de que las instituciones públicas y privadas del departamento de San Martín deseaban la paz. Sin embargo, no realizó acciones relevantes.

Una acción importante realizada por la OPASM para acelerar la erradicación de la violencia en San Martín fue el acompañamiento a familiares de mandos y militantes del MRTA para que se acogieran a la ley de arrepentimiento.<sup>458</sup> Este eficaz trabajo aceleró la descomposición del MRTA.

A fines de 1992, los miembros del MRTA empezaron a acogerse a la ley de arrepentimiento, ya sea con las Fuerzas Armadas o con la OPASM. Según Lincoln Rojas, los arrepentidos fueron bien tratados y durante todo el tiempo que estuvieron en el campamento militar recibieron atención médica, alimentación y posada.<sup>459</sup>

Para hacer un trabajo integral con las personas que se acogían a la ley de arrepentimiento, la OPASM, en coordinación con la Prelatura de Moyobamba, dispuso que cada parroquia del departamento recibiera a las personas que se acogían a la ley.<sup>460</sup> Así, muchos integrantes del MRTA acudieron a las parroquias de Juanjuí, Bellavista, Saposoa, Picota, Moyobamba, Lamas y Tarapoto.

<sup>457</sup> El asesinato del profesor Julio Sánchez en Shapaja en 1988 por elementos del MRTA propició la creación de la primera ronda campesina en el departamento de San Martín.

<sup>458</sup> El gobierno de Alberto Fujimori promulgó la ley 25499 el 12 de mayo de 1992. En ella se manifestaba que los miembros del PCP-SL y el MRTA que otorgaran información de importancia para las Fuerzas Armadas no sufrirían la pena máxima de ser enjuiciados por traición a la patria.

<sup>459</sup> Véase la entrevista con Lincoln Rojas.

<sup>460</sup> El cambio de actitud que tuvo el Ejército con la población fue importante para que los integrantes del MRTA se arrepintieran. Las diversas acciones cívicas que realizaba el Ejército fueron restándole espacio y apoyo al MRTA. Derrotados militar y políticamente, los miembros del MRTA tuvieron que arrepentirse. Al respecto, Antonio dice: «El Ejército empezó a dar comida, vestido, medicinas, construyan colegios, postas médicas, etc. Así empezó a ganarse a la población. Estas acciones hicieron que se rompan los esquemas del MRTA porque el Ejército ya no se podía presentar como el corrupto ni el abusivo».



En mayo de 1993, la OPASM, en coordinación con la familia de *Antonio*, inició una campaña de sensibilización que consistía en el llamado de la madre a su hijo integrante del MRTA para que se acoja a la ley de arrepentimiento.<sup>461</sup> La OPASM coordinó con las Fuerzas Armadas para que se decrete una tregua a fin de facilitar la entrega. Coordinó con los medios de comunicación radial y televisiva del departamento y con el fuero judicial para prepararse ante posibles resultados.<sup>462</sup>

<sup>461</sup> Se ha considerado el caso de Antonio porque fue el último comandante general del FNO. Si se conseguía que Antonio se arrepintiera, era factible que los integrantes del MRTA activos se acogieran en masa a la ley del arrepentimiento.

<sup>462</sup> El llamado tuvo los siguientes puntos:

- Exponer el dolor que vivían los padres y familiares por la vida que llevaba su hijo.
- Recordar el cuidado que recibía cuando era niño para que fuera un hombre de bien.
- La espera constante de los familiares a su retorno y el sufrimiento que esto causaba.

El llamado se difundió a través de los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales. Se utilizó el siguiente cliché: si *Antonio* se entrega, quedará demostrado que hay casos en que el llamado de una madre puede ser más fuerte que las balas del fusil (Rodríguez 1996: 123). Esta misma estrategia fue empleada para convencer a los comandantes *JJ* y *Moíco*.<sup>463</sup>

La estrategia resultó y, con los tres mandos principales entregados, la deserción de las huestes del MRTA fue inminente y rápida. Los arrepentidos proporcionaron al frente Huallaga mayor información para la captura de armamentos y la localización de las bases del MRTA. También se empezó una campaña masiva (mencionando la entrega de los principales mandos) para que los remanentes del MRTA en la zona pudieran arrepentirse.

Según la información proporcionada por Lincoln Rojas, el frente Huallaga no cambió de identidad a nadie pero dio beneficios económicos sólo a los mandos que se entregaron. Tampoco se preocupó por anular las requisitorias que pendían sobre los ex cabecillas del MRTA.

En septiembre de 1992, la dirección nacional del MRTA ordenó que Lucero Cumpa regresara de Alemania para que asumiera la comandancia general del FNO.<sup>464</sup> Tras su retorno, ella y *Antonio*, mando militar del frente, deambularon con tres pelotones de 25 hombres cada uno.

A los pocos días de que Lucero Cumpa asumió el mando, el Ejército capturó a la jefa de logística y comunicaciones del FNO, Dany Cumapa Fasabi, (a) *Flaca*. Ella comenzó a darle información al Ejército sobre los puntos de referencia de las bases del MRTA y las frecuencias de comunicación de los destacamentos militares todavía activos en la zona. De esta manera, el Ejército, al capturar a la jefa de comunicaciones y con la ayuda de los arrepentidos, desbarató todos los intentos del MRTA por reestructurarse.

Al ser capturada Lucero Cumpa, en mayo de 1993, *Antonio* quedó como mando único del FNO y se refugió en el pongo de Caynarachi porque el Ejército lo estaba hostigando mucho, mientras los destacamentos militares que aún actuaban en diversas zonas fueron incomunicados.

Con el arrepentimiento de *Antonio*, el FNO terminó por desestructurarse. Sólo quedaron dos frentes a escala nacional: el frente centro (Pichinaqui, Oxapampa y Junín) y el frente norte (Jaén, Bagua y Cajamarca), que también se fueron extinguiendo poco a poco.

## 11. LA VIOLENCIA Y EL NARCOTRÁFICO EN LAS PROVINCIAS DE PADRE ABAD Y CORONEL PORTILLO

Esta sección tiene como finalidad analizar el impacto y reconstruir la historia del conflicto armado interno y el narcotráfico entre la población urbana, rural campesina e indígena (cashibo y shipibo conibo) de las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo en el departamento de Ucayali entre fines de los años ochenta y mediados de los años noventa.

Ambas provincias se vieron afectadas por la violencia debido a la presencia del PCP-SL y el MRTA, así como al desplazamiento del narcotráfico del valle del Huallaga hacia Ucayali, producto de acciones de control y erradicación de los cultivos ilegales de coca ejecutados por el Estado en la zona del Huallaga a fines de la década de 1980.

Las firmas de narcotraficantes asentadas en Ucayali no sólo legitimaron el negocio de la droga, sino que trajeron consigo al PCP-SL, que en ese momento ya tenía una estrecha relación con los narcotraficantes. Los recursos obtenidos por el narcotráfico solventaban la «lucha popular» pero, a la vez, evidenciaban que a los mandos subversivos les interesaba más el manejo de los recursos económicos que el desarrollo político e ideo-

- 
- Deseo profundo de que lo necesitaban vivo.
  - La petición de que se acoja a la ley de arrepentimiento: «Haz caso a tu madre, hijo».
  - Canción entonada por la madre (canción que recordaba la infancia) (Rodríguez 1996: 122).

<sup>463</sup> Pese al cuidado que tenía la OPASM para el trabajo con los arrepentidos, se corrían ciertos riesgos que pudieron costar la vida o la libertad a los miembros del MRTA que se querían acoger a la ley de arrepentimiento. Entre estos riesgos, se pueden mencionar la intromisión de algún militar (en busca de ascensos) o civil (por la recompensa de 50 mil soles que el frente Huallaga ofrecía por cualquier dato que permitiese la captura de los subversivos), la infidencia de los datos recibidos, la filtración a los medios de comunicación, la desesperación de la familia por la espera y la no respuesta, etc. (Rodríguez 1996: 124).

<sup>464</sup> Evaristo había asumido el mando general del MRTA tras la captura de Rolando el 14 de junio de 1992.

lógico de los objetivos del partido en sus zonas organizadas. Cabe resaltar que estos actos ocurrieron en pleno desarrollo nacional del «equilibrio estratégico» planificado por el PCP-SL para tomar el poder.

La principal zona de control del PCP-SL estuvo en la provincia de Padre Abad, pero mantuvo otras importantes zonas en el río Ucayali, principalmente en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo. A comparación del PCP-SL, el MRTA tuvo una presencia básicamente política mediante el copamiento de las organizaciones de frentes de defensa de distrito y de provincias y de diversas organizaciones de base. Su presencia militar fue mínima y no tuvo zonas de control importantes. Ante la creciente presencia subversiva, las diversas estrategias contrasubversivas de las Fuerzas Armadas, representadas por la Marina de Guerra y el Ejército, también contribuyeron a agudizar la violencia en Ucayali.

### 11.1. ANTECEDENTES

En el territorio que comprende el actual departamento de Ucayali se hacen presentes dos tipos de poblaciones diferenciadas por su procedencia y por sus formas de asentamiento social, cultural, político y económico. Los pobladores más antiguos de esta región son los pueblos indígenas de la familia etnolingüística Pano,<sup>465</sup> principalmente cashibo-cacataibo y shipibo-conibo, cuyos lugares de asentamiento están a lo largo de las riberas de los ríos principales del departamento: Ucayali, Aguaytía y San Alejandro.

El otro tipo de población asentada en Ucayali son los miles de colonos andinos que abandonaron sus comunidades de origen acosados por la falta de tierras, la pobreza y una acentuada mercantilización de sus economías, que se asentaron en zonas aledañas a la carretera Federico Basadre (CFB) y en las riberas del río Ucayali buscando tierras y mejores oportunidades para sus familias. Esta colonización fue incentivada por el Estado, el que, a través de diversas acciones directas, fomentó la ocupación e integración de la región como zona prioritariamente dedicada a la producción agropecuaria.

Este proceso de asentamiento de la población colonia, sin embargo, ha terminado por desalojar a los nativos de las terrazas altas, que son las que ofrecen mayores ventajas para los asentamientos y cultivos. Ello los ha obligado a vivir en terrenos sujetos a inundaciones o en restingas que tienen poca productividad.<sup>466</sup>

Entre los años 1980 y 1990, la superficie de la hoja de coca se extendió hacia áreas dedicadas a diversos cultivos agrícolas y a zonas poco exploradas de Ucayali. Ante este crecimiento de la producción de coca, el Estado intentó, durante toda la década de 1980, reprimir su producción o alentar los programas de sustitución de cultivos. Ambas acciones sólo aumentaron la imagen negativa que ya tenían los productores cocaleros sobre el Estado, quienes ya habían adquirido una preponderancia social en Ucayali.<sup>467</sup>

### 11.2. INGRESO DE GRUPOS SUBVERSIVOS EN LA ZONA

Una de las políticas más importantes del gobierno de Alan García Pérez (1985-1990) fue el apoyo a los agricultores por medio de créditos con tasas de interés cero y la compra de su producción. Con la explosión de la hiperinflación en 1989, sin embargo, las empresas del Estado ENCI y ECASA no pudieron cumplir con pagar los productos de los campesinos, lo que llevó a la Confederación Campesina del Perú (CCP) a promover paros regionales de campesinos en todo el país.

En Ucayali, los campesinos, agrupados en la Federación de Campesinos del Departamento de Ucayali (FECADU), y los nativos shipibo-conibo mantuvieron la huelga por tres semanas hasta que se llegó a un acuerdo con las autoridades regionales.<sup>468</sup> Para celebrar este acuerdo, la CCP organizó una gran marcha de

<sup>465</sup> En el extremo sur del departamento de Ucayali también se encuentran los siguientes grupos étnicos: yaminahua, piro, amahuaca y población en aislamiento voluntario. También se encuentran comunidades nativas asháninkas.

<sup>466</sup> Las restingas son terrazas medias formadas por depósitos aluviales durante las crecientes extraordinarias del Ucayali. Además, se presentan como fajas angostas y pequeñas en forma paralela al cauce de los ríos. Su fertilidad es pasajera.

<sup>467</sup> El Estado sigue poniendo énfasis en la erradicación manual y compulsiva por medio del Programa de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), que ha originado diversos conflictos sociales con las asociaciones de cocaleros del departamento de Ucayali y que, hasta el día de hoy, no son resueltos mediante un diálogo en el que se planteen propuestas viables para la sustitución del cultivo de coca.

<sup>468</sup> Los nativos participaron porque también se veían afectados y buscaban la titulación de sus territorios. Quizá este último aspecto haya

campesinos y nativos en la ciudad de Pucallpa el 9 de febrero de 1989.<sup>469</sup> Ante la negativa de la prefectura de Pucallpa de autorizar la marcha, la Dirección de Operaciones Especiales (DOES) de la Policía Nacional reprimió este evento y mató a ocho campesinos. También se detuvo a una cantidad no determinada de campesinos, que luego desaparecieron.

A partir de este hecho el PCP-SL y el MRTA empezaron a incrementar sus acciones armadas en la región. Ante estos problemas, el Estado promulgó un régimen de excepción para las diferentes zonas de la selva y, el 1 de junio de 1989, se declaró a Ucayali como zona de emergencia y se instaló un comando político militar dirigido por la Marina de Guerra.

#### 11.2.1. La presencia del MIR-EM<sup>470</sup> en Ucayali

Agrupaciones políticas como el PCP Patria Roja, Partido Socialista Trotskista, Partido Comunista Unidad, Vanguardia Revolucionaria (VR), el PCP Bandera Roja, así como también el Partido Aprista Peruano (PAP), el Partido Popular Cristiano (PPC) y Acción Popular (AP), se disputaban el liderazgo de las organizaciones políticas y sindicales de la región en la década de 1970. Fue el MIR-EM, sin embargo, el que logró captar la mayor cantidad de adeptos y controlar los sindicatos donde la mayoría de personas eran simpatizantes del PCP Patria Roja.<sup>471</sup>

El MIR-EM logró controlar el Sindicato Único de Trabajadores Educativos de Coronel Portillo (SUTECOP)<sup>472</sup> y, en 1975, se posesionó del Frente Unido de Defensa de los Intereses del Pueblo de Pucallpa (FUDIPP). Así, consolidó su presencia como una importante fuerza política. La base social y política captada le permitió tener militantes en los diferentes caseríos de la provincia de Coronel Portillo y captar nuevos cuadros en las «escuelas políticas» donde se enseñaba la realidad nacional y los postulados de la izquierda peruana.

Una vez copada la dirección del SUTECOP, se puso énfasis en la captación de militantes, en su mayoría profesores, quienes tenían la misión de realizar un doble trabajo: por un lado, cumplir con sus labores de docentes en las escuelas de sus respectivas ciudades, distritos, pueblos jóvenes o caseríos; por otro, realizar reuniones de captación de militantes entre profesores y población interesada.

Esta estrategia le permitió al MIR-EM enviar a todas las personas recién captadas a cumplir la tarea de formar células de estudio en sus respectivos lugares de trabajo que atrajeran nuevos militantes. Así, se formaron células en los pueblos de San Alejandro, Aguaytía, Masisea e Iparia.

El 19 de julio de 1977 se creó el Comité de Defensa y Lucha de Coronel Portillo (CODEL-COP), donde confluyeron todas las fuerzas sindicales, campesinas e incluso nativas. También en esa época se incluyó al Comité de Trabajadores Revolucionarios del Perú (CTRP). La dirección del CODEL-COP estuvo a cargo del MIR-EM, que ya tenía consolidado su trabajo político.

Sin embargo, para el comité central del MIR-EM, Ucayali no estaba en los planes de inicio de la «lucha armada» debido a su alejada ubicación con respecto a Lima, considerada el «centro del poder». La cúpula del MIR-EM nacional ya tenía un plan de insurrección que debía empezar a cristalizarse hacia fines de los años setenta e inicios de los ochenta. En este sentido, el comité central recomendó consolidar el trabajo político realizado y esperar el momento de tomar el poder. El compromiso que se asumió fue apoyar las sedes del MIR-EM más desarrolladas en el país a través de escuelas políticas que tuvieron como invitados a Víctor Polay Campos, Peter Cárdenas, Antonio Meza Bravo, Elio Portocarrero, Hugo Avellaneda, entre otros.

Con una presencia importante del MIR-EM en la vida política de la provincia de Coronel Portillo, entre 1977 y 1978 se formó un comité organizador para constituir el Frente de Defensa de la provincia de Coronel Portillo, cuyos integrantes fueron básicamente militantes del MIR-EM. Si bien la creación del Frente de Defensa respondía básicamente a las luchas de reivindicación popular y campesina de la población de Coronel

sido el principal elemento para agitar a los shipibo-conibo. Los nativos fueron representados por la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU).

<sup>469</sup> Las cifras varían entre 3 mil y 5 mil campesinos provenientes de todo el departamento de Ucayali.

<sup>470</sup> MIR-EM: Movimiento de Izquierda Revolucionaria-El Militante.

<sup>471</sup> Véase la entrevista con Waldemar (casete n.º 102-103).

<sup>472</sup> En ese momento, el departamento de Ucayali no existía; por ello, se hace referencia a la provincia de Coronel Portillo, que pertenecía al departamento de Loreto.

Portillo, el objetivo del MIR-EM era constituir un «frente político de masas» que le sirviera como catapulta a su proyecto político.

En 1978 se constituyó el Frente de Defensa. En la elección del presidente del Frente, el MIR-EM logró colocar a Manuel Vásquez y a cinco miristas más en la dirección.<sup>473</sup> A las pocas semanas se realizó el primer *Pucallpazo*,<sup>474</sup> organizado desde las bases por la gente del MIR-EM.

Sin embargo, en 1980 el MIR-EM perdió la dirección del Frente de Defensa y ganó el ingeniero Castro Vera, del Colegio de Ingenieros. En ese momento se realizó el segundo *Pucallpazo*,<sup>475</sup> donde también el MIR-EM tuvo participación preponderante a escala de las organizaciones de base.

En 1981, el MIR-EM logró nuevamente tomar la dirección del Frente de Defensa, lo que permitió preparar el camino de la insurrección popular desde las propias bases sociales de los agricultores.

### 11.2.2. El trabajo del MIR-EM en Pucallpa (1982-1986)

Tras controlar el Frente de Defensa, el MIR-EM consolidó su trabajo de captación política con la formación de células de estudiantes en los pueblos jóvenes de la ciudad de Pucallpa. Así, creó los llamados Comités de Coordinación y Lucha Barrial (CCOLUB). Los estudiantes captados eran básicamente jóvenes de bajos recursos económicos de colegios secundarios y de institutos pedagógicos. Los estudiantes de los institutos, colegios y de la universidad conformaron la «Juventud Rebelde» del MIR-EM, la cual difundía el proyecto político del partido a través de reuniones, de la radio y de volantes. Estos estudiantes realizaban permanentemente los Consejos de Estudiantes del Movimiento del Estudiante Rebelde (MER) para compartir ideas sobre la forma de realizar la «lucha popular».

Consolidado el trabajo de captación política en los estudiantes, el MIR-EM inició, en 1984, su trabajo de formación de células de obreros en los sindicatos de choferes, trabajadores municipales y bancarios. Esta acción se realizó para contrarrestar las fuerzas de los otros grupos de izquierda e ir cimentando su proyecto político.

En las provincias y distritos de Ucayali, el MIR-EM ya contaba con células de militantes conformadas, en su mayoría, por profesores. Estos militantes lograron captar a los agricultores de los caseríos cercanos y formaron diversos Comités de Defensa de Reivindicación Campesina, cuya principal demanda fue la mejora de los precios para la producción agrícola.

### 11.2.3. Consolidación del MIR-EM en Pucallpa y presencia del MRTA

En 1984, el MIR-EM de Ucayali empezó a prepararse para el conflicto armado pero se desalentó por la preferencia del Comité Central del MRTA (MIR-EM y PSR-ml) de abrir un frente en el Cusco y no en Ucayali. Un hecho clave para entender el posterior desenvolvimiento del MIR-EM en Ucayali fue la alianza con el proyecto armado del MIR-VR en San Martín. En 1984, el MIR-VR, con Alberto Gálvez Olaechea a la cabeza, llegó a Pucallpa con sus Comandos Revolucionarios del Pueblo y apoyaron algunas incursiones en poblados y el cobro de cupos para la «revolución». Ese mismo año, la gente más preparada del MIR-EM inició su preparación militar para la «lucha armada». Así, algunos de sus miembros fueron al batallón América y otros a Nicaragua.

El 9 de diciembre de 1986, el MIR-VR y el MRTA se fusionaron formalmente y conformaron una dirección nacional compuesta por tres dirigentes de cada una de las organizaciones.<sup>476</sup> El MIR-EM de Ucayali se integró a ellos.

<sup>473</sup> Según EM y NB, el MIR-EM tenía, en cada sindicato, a sus delegados. Todo estaba preparado para que Manuel Vásquez sea el presidente del Frente de Defensa. No obstante, la pugna verdadera para controlar el Frente fue con el PAP, el PPC y el PCP Bandera Roja. Este último, con Renán Ochoa a la cabeza, tenía una posición anti MIR-EM.

<sup>474</sup> Se llamó Pucallpazo a todas las movilizaciones que reclamaban mejoras de las condiciones de vida de la población de Coronel Portillo. Con el primer Pucallpazo se logró la pavimentación de algunas calles, se inició la construcción del hospital del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), la creación del Comité de Desarrollo de Coronel Portillo (CODECOP) —que es la antecesora para la creación del departamento—, la construcción del terminal fluvial y la ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en Pucallpa.

<sup>475</sup> Con el segundo Pucallpazo se logró la creación definitiva del departamento de Ucayali.

<sup>476</sup> Por el MRTA estuvieron Víctor Polay Campos, Néstor Cerpa Cartolini y Miguel Rincón Rincón y, por el MIR-VR, estuvieron Alberto Gálvez Olaechea, Cecilia Oviedo y Rodolfo Kleim. Además, se creó una dirección central (DC), con diez miembros de cada organización.

#### 11.2.4. Auge y caída del MRTA en Ucayali

En 1987, los cuadros del MRTA de los diferentes departamentos del Perú fueron destacados al departamento de San Martín para formar parte del frente nororiental, el primer frente del MRTA. Esta experiencia debía servir como modelo a los cuadros de otros departamentos para que formasen sus respectivos frentes.

Luego de la primera campaña militar del MRTA en San Martín, los cuadros del MRTA reclutados regresaron, entre febrero y marzo de 1988, a sus tierras para formar otros frentes. Los lugares elegidos fueron el centro, el sur y el oriente.

Con la experiencia militar en San Martín, a Osler Panduro sólo le faltaba convencer a los miembros del MIR-EM de Ucayali de que la vía armada era la única alternativa para tomar el poder y que «debía ser por creación heroica». Aprovechar el trabajo político y de captación realizado por el MIR-EM en años anteriores le permitió al MRTA asentarse con mayor facilidad en las zonas urbanas pero no tanto en el campo.

Así, como primer comandante general del MRTA en Ucayali,<sup>477</sup> Osler Panduro inició el trabajo de preparación del frente oriental (FO) con la formación de una dirección regional (DR) y el Ejército Tupacamarista (ET) del FO.<sup>478</sup> Ambas instancias serían supervisadas por la dirección nacional del MRTA.

A pesar de que la DR del FO llegó a funcionar, no tuvo relevancia política ni militar, debido a los hechos ocurridos el 9 de febrero de 1989,<sup>479</sup> que significaron la desarticulación de los movimientos campesinos, populares y políticos en Ucayali. Así, la DR en Ucayali pasó a la clandestinidad porque el Ejército comenzó a perseguir a todos los dirigentes políticos y sindicales de la región. Su trabajo continuó hasta 1991 y se detuvo por las constantes amenazas que recibían sus integrantes de parte de la Marina de Guerra.<sup>480</sup>

El ET del FO intentó constituir destacamentos militares en las zonas rurales de Tahuantinsuyo (San Alejandro), Contamana, Callería, Nueva Requena, Iparia y Masisea; pero fracasó por la presencia activa y violenta del PCP-SL por controlar las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo, debido al incremento del negocio de la droga, la precariedad y mala preparación militar de sus cuadros y porque no ofrecía a la población alternativas contrarias a las del PCP-SL, que prácticamente se convirtió en abanderado de la defensa de los cultivos de coca.

A pesar de esto, entre 1988 y 1990, el ET del FO logró tener zonas de paso y estancias obligatorias en Nueva Requena y Shambo, comunidad nativa shipibo-conibo, lo cual les abrió un acceso directo entre el río Ucayali y el río Aguaytía, y en Puerto Inca y Tournavista, departamento de Huánuco, que les permitió el acceso directo de Pucallpa a Cerro de Pasco y viceversa.

El mayor logro del MRTA en Ucayali fue el trabajo con las «milicias urbanas», ubicadas específicamente en los pueblos jóvenes de la ciudad de Pucallpa. Su éxito radicó en el trabajo previo realizado por los cuadros estudiantiles del MIR-EM. Las milicias urbanas realizaban pintas y embanderaban los colegios o centros comerciales que eran objeto de cobros de cupos o «bonos de guerra».

El ET realizó algunas incursiones en las comunidades shipibo-conibo ubicadas en las quebradas del Caco y Sheshea, distrito de Iparia, y en el distrito de Tahuán. A partir de 1988, recorrió diversas comunidades como Colonia del Caco, Curiaca, Santa Rosa de Sheshea y Nueva Alianza de Sheshea.<sup>481</sup> En estas incursiones, llegaban a las comunidades y pedían a los nativos que se organizaran. No obstante, los resultados le fueron

<sup>477</sup> Los comandantes generales del FO fueron los siguientes: Mario (Osler Panduro) (1988-1989), Enrique (1989-1990), Manuel (1990-1991), Lucho (1991-1993).

<sup>478</sup> La organización y estructura del FO y el ET fueron similares a la de San Martín. Véase El frente nororiental del MRTA en el departamento de San Martín en este mismo tomo.

<sup>479</sup> El 9 de febrero se realizó en Pucallpa una de las mayores movilizaciones campesinas y nativas con la finalidad de exigirle al gobierno mejoras para la agricultura. Lamentablemente, esta acción fue reprimida violentamente por las Fuerzas Policiales. Hubo ocho muertos y una cantidad considerable de heridos.

<sup>480</sup> A partir de 1991, la Marina de Guerra asumió totalmente la jefatura del comando político militar de Ucayali.

<sup>481</sup> Algunas versiones señalan que las compañías del MRTA venían desde Puerto Inca (Pichis-Palcazú), ingresaban a Ucayali por el distrito de Tahuán y de ahí bajaban por el río Ucayali hacia la boca del Pachitea. En algunos casos, llegaban hasta el río Tamaya, aunque se desconoce cuál fue su actividad militar y si tuvo enfrentamientos con el PCP-SL, quien ya tenía presencia en la zona por su alianza con el narcotráfico.

adversos.<sup>482</sup> Este contingente militar del MRTA fue finalmente aniquilado en la boca del Pachitea por la Marina de Guerra. A partir de ahí, la presencia militar del MRTA en Ucayali se volvió mínima (véase el mapa).<sup>483</sup>

La muerte del comandante *Mario* en septiembre de 1989, por una peritonitis, generó en el FO una gran crisis organizacional que devino en su lenta desaparición. Este deceso coincidió con el repentino cambio del MRTA de privilegiar la vía militar antes que la política. Esta decisión trajo como consecuencia muchos problemas internos entre el MRTA y el MIR-VR y el MIR-EM de Ucayali. Sin embargo, el MRTA impuso a sus cuadros que habían fugado del penal con Víctor Polay Campos e impulsó la línea militarista en desmedro del trabajo político realizado por el MIR.<sup>484</sup>

Así, el control que el MRTA pretendió ejercer sobre la población tuvo como eje campañas de moralización que implicaron, en algún momento, asesinatos diarios de prostitutas, homosexuales, drogadictos y hasta cónyuges infieles, crímenes cometidos bajo el rótulo de «cruzada contra el vicio».

Entre 1990 y 1993, la desconexión del ET del FO con la DR y el escaso apoyo logístico desde la ciudad causaron el abandono de los contingentes militares. Esta situación obligó a los integrantes del MRTA a cobrar cupos y «bonos de guerra» de manera compulsiva.<sup>485</sup> Las acciones militares del MRTA se acabaron en 1993.

El MRTA, aunque lo intentó, no consiguió tener un vínculo estrecho con el narcotráfico debido a que PCP-SL ya había logrado el control de Aguaytía, lugar donde se ubicaban los narcotraficantes. Cuando el negocio de la droga se trasladó al río Ucayali, el PCP-SL también llegó y desalojó al MRTA de esa zona y se quedó con todos los beneficios que traía el comercio de droga.

### 11.3. LA INSERCIÓN DEL PCP-SL EN EL DEPARTAMENTO DE UCAYALI

La presencia del PCP-SL en el departamento de Ucayali, específicamente en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo, fue tardía, debido a que prefirió fortalecer su presencia y afianzar su dominio en el Alto Huallaga. En un primer momento, Ucayali fue considerado básicamente como una zona de descanso y escondite para las huestes del PCP-SL. El PCP-SL incrementó su interés de penetrar en Ucayali debido a que el narcotráfico, cuyas firmas más importantes venían del Alto Huallaga, ya se habían asentado en algunas zonas del departamento y constituyan una actividad productiva que proporcionaba los recursos necesarios para seguir ejecutando los proyectos del partido. La presencia del PCP-SL se hizo efectiva en dos etapas: 1984-1987 y 1988-1992.

Durante la primera etapa (1984-1987), el PCP-SL se estableció de manera clandestina en la provincia de Padre Abad. Comenzó a infiltrar militantes, especialmente profesores, en organizaciones de base para empezar a ganar adeptos y así expandir los objetivos de su «lucha armada». Al igual que en la región andina, los militantes del PCP-SL tenían la labor de realizar acciones proselitistas entre los profesores que se encontraban en las zonas rurales y marginales de la región.<sup>486</sup> Estos militantes aprovechaban su condición de profesores

<sup>482</sup> Ante el fracaso de su intento de convencer a los nativos de unirse a su «lucha armada», el MRTA aplicó una estrategia de captación muy particular: formó una empresa maderera y anunció que buscaba nativos shipibos para que trabajen en la extracción de la madera en el Tamaya, Abujao y Calleria. Varios jóvenes shipibos acudieron al llamado pero, en vez de llevarlos a trabajar la madera, los llevaron a sus campamentos donde los entrenaron militarmente. Lamentablemente, muchos de estos jóvenes murieron en la emboscada que les hizo la Marina de Guerra en la boca del Pachitea.

<sup>483</sup> No hay una fecha exacta de esta acción, aunque pudo haberse dado en 1990. Meses antes, el MRTA sufrió un duro revés frente al PCP-SL que destruyó su destacamento militar ubicado en Tahuantinsuyo (San Alejandro). Tras esta derrota, el MRTA prácticamente desapareció de la provincia de Padre Abad.

<sup>484</sup> Esta situación se consolidó en el III Comité Central de Unidad, de septiembre de 1990, en el que los cuadros del MRTA, encabezados por Víctor Polay Campos, asumieron la conducción del movimiento a escala nacional e impusieron una práctica militar que más adelante los llevaría al fracaso.

<sup>485</sup> «El MRTA copaba la ciudad, no se olviden que aquí mataron a un maderero, cobraban cupos y aquí más de un comerciante o industrial pagó fuertes cupos. A mí, me hicieron llegar cupos, como estaba al frente de esta institución [IIADU]. Por supuesto que nunca lo pagué y eso era su peor indignación» (MV. Pucallpa, Coronel Portillo).

<sup>486</sup> La base social del PCP-SL en Ucayali estuvo constituida por el profesorado (por su importancia estratégica para cimentar la actividad política e ideológica del partido y por la larga experiencia desarrollada en Ayacucho), el campesinado cocalero (para ganarlos más fácilmente, el PCP-SL les asignó tierras en los «comités populares abiertos» y en los «comités organizados» para que siembran coca y algunos productos de panllevar), los productores y comercializadores de la pasta básica de cocaína (su relación fue más económica que política) y por los escolares de primaria y secundaria, pues consideraba que la «lucha armada» iba a ser prolongada y era imprescindible ir formando nuevos cuadros.

para exacerbar los ánimos de los agricultores cocaleros de la provincia de Padre Abad y animarlos a iniciar una lucha irrestricta por la defensa del cultivo de la hoja de coca, que ya era su principal actividad económica. El cumplimiento de esta tarea permitió consolidar «bases de apoyo» logístico y de descanso del Ejército Guerrillero Popular (EGP) del Comité Regional del Alto Huallaga (CRAH): la «fuerza principal» (FP)<sup>487</sup> y la «fuerza local» (FL),<sup>488</sup> quienes, en la segunda etapa, incursionan en la zona.

Este trabajo político previo se consolidó durante la segunda etapa (1988-1992), cuando el PCP-SL asumió como consigna la defensa de la coca. La táctica utilizada por el PCP-SL, en un primer momento, fue atacar a toda institución o personas involucradas en los programas de erradicación del cultivo de la hoja de coca y a los que pretendían «engaños» a los campesinos con la aplicación de los programas de sustitución de cultivos.

En un segundo momento, el PCP-SL empezó sus acciones armadas realizando incursiones contra el puesto policial en Aguaytía y convocando constantemente a paros generales, obstaculizando y controlando varios tramos del trayecto entre Pucallpa y Tingo María.

El objetivo del PCP-SL de conformar una alianza con los agricultores cocaleros para controlar la venta y compra de la hoja de coca y de la pasta básica de cocaína se había concretado. Una vez fortalecida esta relación, el PCP-SL realizaría acciones armadas abiertas y usó las ciudades como cajas de resonancia de sus actividades en defensa de la coca contra la erradicación impulsada por el Estado. Al mismo tiempo, comenzó a instaurar su orden social por medio de ajusticiamientos extrajudiciales para castigar los abusos cometidos contra los campesinos.

Es importante señalar que los campesinos encontraron, con la presencia del PCP-SL, el orden que no habían tenido cuando el Estado, a través de la Policía Nacional o de las autoridades civiles, y luego el narcotráfico, controlaban la zona. El PCP-SL impuso normas éticas y morales que sirvieron para regular la actividad cotidiana de la población y que debían cumplirse obligatoriamente.<sup>489</sup> A partir de este momento, el comportamiento y los movimientos de las personas eran controlados y juzgados por el PCP-SL.

#### 11.3.1. La imposición de la organización del PCP-SL en los caseríos de la provincia de Padre Abad

Entre 1988 y 1989, el PCP-SL inició sus incursiones en los caseríos involucrados en la defensa del cultivo de la hoja de coca. Para ello, movilizó a la FP del EGP, asentada en el Alto Huallaga, y tomó por asalto diversos caseríos. En cada caserío donde ingresó, reunía a toda la población (hombres, mujeres y niños) y declaraba que la zona había sido organizada y liberada del «caduco sistema burgués». Luego procedía a desaparecer, si existían, oficinas públicas, ONG y agencias municipales. Finalmente, ejecutaban, previo «juicio popular», a las autoridades locales (teniente gobernador y agente municipal), sindicados como representantes del Estado «burgués semicolonial».

Éste es el inicio de una serie de asesinatos que incluyeron a dirigentes campesinos opuestos a la violencia, madres de organizaciones de base, técnicos y profesionales de proyectos de desarrollo. Luego de demostrar su fuerza y rectitud de principios, instaló el «comité organizado».<sup>490</sup> Para conformar este «comité», si bien se obligaba a cualquier persona a asumir los cargos de la nueva estructura política (delegados, mando político, mando militar y mando logístico), en algunos casos se eligió a personas que mostraban simpatía por el PCP-SL. Estos «comités organizados» se implantaron en los caseríos asentados a lo largo de la CFB.

El PCP-SL también formó «comités populares abiertos» en los caseríos de Boquerón y Huipoca (ubicados en la CFB) y en Nuevo San Martín y Bellavista<sup>491</sup> (ubicados en el río Aguaytía). Estos «comités» eran controla-

<sup>487</sup> Grupo militar de élite conformado por personas fuertemente armadas encargado de organizar a la población a escala del CRAH.

<sup>488</sup> Grupo armado encargado de recorrer el campo para fortalecer la organización de la población en las «áreas liberadas» por el Partido.

<sup>489</sup> Sobre la ley del PCP-SL, véase Gonzales 1990: 214.

<sup>490</sup> Los «comités organizados» eran la primera forma de organización de la población. Ahí se preparaba a las personas para seguir escalando en las etapas que el pueblo organizado debía seguir: «comité organizado», «comité reorganizado», «comité popular», «comité popular abierto», «comité de lucha». Esta última nunca se dio, porque el PCP-SL fue derrotado por las Fuerzas Armadas.

<sup>491</sup> A comparación de los caseríos asentados en la CFB, por cuya ubicación podían ser blancos de ataque muy fáciles de las Fuerzas Armadas, los caseríos de Nuevo San Martín y Bellavista fueron claves para montar todo el aparato político y desarrollar las acciones militares del partido. Ambos caseríos estaban geográficamente aislados con respecto a las ciudades y otros caseríos de la región. Es desde estos caseríos que el PCP-SL planificaba y dominaba todas sus acciones, incursiones y comités de Ucayali. Por ello, el PCP-SL implementó su «nuevo Estado» en ambos caseríos con la anuencia de las poblaciones.

dos por las siguientes autoridades:<sup>492</sup> un comisario secretario, el comisario de seguridad, el comisario de las organizaciones populares, el comisario de asambleas comunales y el comisario de producción.

Los «comités populares abiertos» de Padre Abad eran los responsables de impartir las órdenes en la administración de los caseríos transformados en «comité organizado». Es decir, imponían las reglas morales del orden social del PCP-SL.<sup>493</sup>

Es importante aclarar que el PCP-SL no constituyó un Comité Regional Ucayali sino que anexó Ucayali al CRAH. Esta decisión trajo como consecuencia que el PCP-SL no formara ni EGP, ni FP ni FL en Ucayali. Estos contingentes militares siempre venían del Alto Huallaga.

Pese a la forma coactiva como el PCP-SL impuso esta estructura política y administrativa en Padre Abad, en la práctica la organización fue endeble y de ejercicio tan informal que actualmente la población sólo recuerda bien la organización que el PCP-SL impuso sobre el negocio de la droga. Sin embargo, sí hace referencia al reclutamiento de personas aptas para servir al partido y enfrentamientos directos con las Fuerzas Armadas, tareas realizadas directamente por la FP del Alto Huallaga.

Entre 1988 y 1990, el PCP-SL ya había logrado captar a casi todos los pequeños campesinos que creyeron estar frente a una especie de fuerza salvadora de sus cocaes y que los defendía de los abusos que cometían los actores más fuertes, hasta ese momento, en la zona: los narcotraficantes y el Estado.

Es importante señalar que el PCP-SL también impuso, al igual que en otras ciudades de la selva como Aucayacu, Tocache o Uchiza, un contingente político-militar llamado «la urbana». Este contingente tenía una misión de inteligencia y de propaganda específica en la ciudad de Aguaytía, capital de la provincia de Padre Abad.

#### 11.3.2. El ingreso del PCP-SL a la provincia de Coronel Portillo

Una vez asentados y con el control del negocio de la droga en Padre Abad, el PCP-SL continuó su expansión política y militar hacia la provincia de Coronel Portillo ingresando al río Ucayali, principalmente a los distritos de Masisea e Iparia, a mediados del año 1989. La fuerza militar que incursionó en esta zona fue la FP del Alto Huallaga.<sup>494</sup>

El ingreso de la FP a esta zona fue más difícil que a Padre Abad, debido a que, prácticamente, la única vía de acceso a los centros poblados era el río Ucayali y sus afluentes. Para la FP, implicaba mucho riesgo viajar durante varias horas por el río para formar sus «comités», pues podrían ser víctimas de los ataques de la Marina de Guerra que realizaba sus operativos contrasubversivos mayormente en helicópteros. Por esta limitación geográfica, optaron por realizar incursiones esporádicas en los principales centros urbanos de la provincia y decidieron concentrar su acción en tres zonas: en la quebrada del río Abuja, distrito de Calleri; en el lago Imiria, ubicado en el río Tamaya, distrito de Masisea; y en la quebrada de Pomayacu, ubicada en el río Amaquiria, distrito de Iparia (véase el mapa). Es importante señalar que en estas zonas ya existían los cultivos de coca y el negocio de la droga se incrementó fuertemente. Además, su carácter casi inaccesible les servía como una forma de defensa frente a posibles ataques masivos de las Fuerzas Armadas.

El PCP-SL realizó una de sus primeras incursiones en el centro poblado de Iparia a mediados de 1989. Incendió locales públicos y nombró coercitivamente como delegados y mandos a algunos pobladores. Organizó a la población y le exigió que abriese chacras para sembrar coca y que las cosechas serían repartidas en 50% para el partido y 50% para los agricultores. No obstante, la gente no aceptó y se retiró. A los pocos días, regresaron para

<sup>492</sup> Es necesario resaltar que en muchos lugares el término «comisario» fue reemplazado por el de delegado, subdelegado, delegado de producción, etc.

<sup>493</sup> Entre ellas, estaba la vigilancia del trabajo y la producción de coca, control del consumo de bebidas alcohólicas, potestad para unir a parejas en matrimonio, así como castigar a los adúlteros, prostitutas, homosexuales, ladrones, etc. Asimismo, establecían «escuelas populares», iniciaban el adoctrinamiento político de la «masa» y captaban, de manera voluntaria o involuntaria, a nuevos militantes, especialmente hombres y mujeres jóvenes, para engrosar las filas del EGP, donde los preparaban para la «lucha armada». Finalmente, conseguía los medios económicos y militares para el buen desempeño del partido.

<sup>494</sup> La compañía de la FP del Alto Huallaga primero se dirigió hasta Atalaya y, desde ahí, bajó por el río Ucayali hacia el río Tamaya, donde instaló una importante zona de control. Esta compañía incursionó en centros urbanos importantes como Iparia y Masisea, y organizó a las comunidades nativas de Santa Rosa de Dinamarca y Vista Alegre de Pachitea, ubicadas en el Medio Ucayali.

supervisar el trabajo de los mandos y encontraron su organización muy desarticulada; además la Marina de Guerra y el Ejército empezaron a hacer sus operativos persiguiendo no sólo al PCP-SL sino también al MRTA.

Otra acción importante se realizó el 3 de noviembre de 1989. En esa oportunidad, el PCP-SL incursionó en la ciudad de Masisea con setenta hombres y mujeres armados. Quemaron el municipio y el centro médico y apresaron a algunas autoridades municipales y miembros de la micro región para someterlos a «juicio popular».

Un hecho fortuito confundió a los miembros del PCP-SL y permitió el escape de los prisioneros y la mayoría de la gente reunida. El PCP-SL no pudo nombrar a ninguna autoridad porque la mayoría de pobladores huyó hacia Pucallpa o a sus chacras e, inmediatamente, dieron aviso a las Fuerzas Armadas. Tras esta fracasada incursión, se dirigieron hacia el caserío de Charasmaná, en la boca del río Tamaya. Así como en Iparia, ésta fue la única vez que el PCP-SL incursionó militarmente en Masisea.

Pese a estos vanos intentos, sí tuvo éxito en formar «comités organizados» y «comités populares abiertos» en los caseríos ubicados en el río Tamaya y en las riberas de los ríos Suaya, Butsaya y Noaya. Este proceso se dio entre fines de 1989 e inicios de 1990.

La organización del PCP-SL en el Ucayali fue la siguiente. El «comité popular abierto» más importante estuvo en el caserío de Nuevo Horizonte. Alrededor estaban los «comités organizados» de Noaya, Butsaya, Suaya y Vinuncuro. En el Imiria, había otros «comités organizados» en los caseríos de 23 de diciembre, más conocido como Rivera, y Panuco. Asimismo, en el Abujaó había «comités populares abiertos» en los caseríos de Santa Luz de Abujaó, 28 de Julio y 24 de Setiembre, y «comités organizados» en el río Utiquiría. En todos estos lugares, prácticamente no existía ninguna institución representativa del Estado (véase el mapa).

Los «comités organizados» de Panuco y Vinuncuro eran importantes porque se encargaban de controlar el ingreso hacia el Imiria y a las zonas donde se producía la droga. Ahí, el PCP-SL había dejado compañías de la FP que controlaban la comercialización de la droga y supervisaban el desarrollo de los «comités organizados» de toda esa área.

En cada caserío, nombraron mandos y delegados de forma obligatoria e implantaron un férreo control en el movimiento tanto de personas como de embarcaciones.

Asimismo, pedían cupos a los comerciantes y a los pocos madereros que quedaron. Mientras tanto, los agricultores de todos los caseríos organizados debían cosechar dos hectáreas: una de coca para el partido y otra para lo que quiera sembrar el agricultor. Ésta fue una medida obligatoria inclusive para quienes llegaban por primera vez de la sierra o del Alto Huallaga para trabajar en la coca.

Se puede inferir que los ataques del PCP-SL a las principales localidades del río Ucayali no tenían la contundencia de los realizados en Padre Abad. Esto se debe a tres razones importantes: primero, la evidente limitación geográfica para un tránsito seguro a lo largo del río Ucayali; segundo, la mayoría de poblaciones existentes en las riberas del Ucayali y afluentes son comunidades nativas shipibo-conibo, que, al igual que los caseríos de los distritos de Masisea e Iparia, no se dedicaban exclusivamente al cultivo de la coca; por último, los constantes ataques de la Marina de Guerra y, luego, del Comité de Autodefensa (CAD) de Puerto Alegre.

### **11.3.3. El fracaso del PCP-SL al intentar organizar las comunidades nativas de Padre Abad y Coronel Portillo**

La estrategia de ingreso a las comunidades nativas cashibo-cacataibo de Padre Abad fue similar a la que realizó con las comunidades shipibo-conibo asentadas en el río Ucayali. Sólo ingresaban una vez para intentar persuadir a los nativos de que formasen «comités» y se uniesen a la «lucha armada», pero la respuesta siempre fue negativa:

Cuando llegaron a Mariscal [Cáceres], nos pidieron formar comité como lo hicieron al frente en Bellavista, pero nosotros no quisimos porque queríamos vivir en paz, ser libres como nuestros antepasados. No queríamos eso de obligarnos a sembrar coca o a querer llevarse a nuestros jóvenes. (Don Goyo. Comunidad nativa cashibo-cacataibo Mariscal Cáceres, distrito de Aguaytía. Padre Abad)

A Junín Pablo, llegan para formar comités pero nuestras autoridades no aceptaron. Al parecer, los senderos [miembros del PCP-SL] no entendían que nosotros éramos diferentes a ellos. (Eloy. Comunidad nativa shipibo-conibo de Junín Pablo, distrito de Masisea, Coronel Portillo)

Cuando nos dijeron para organizar [un «comité» en Caimito], nosotros les dijimos que para qué, si ya teníamos nuestra propia organización, teníamos nuestro jefe, nuestras autoridades; quizás les podíamos ayudar con alimentos, pero eso de política, no. (Ancón. Comunidad nativa shipibo-conibo de Caimito, distrito de Masisea, Coronel Portillo)

La FP del Alto Huallaga ya había organizado con éxito «comités» en todos los caseríos de colonos de Padre Abad. Para no ser sorprendidos por las Fuerzas Armadas cuando querían comunicar la zona de Bellavista con el caserío de Boquerón, los mandos del PCP-SL evitaban navegar por el río Aguaytía, por lo que pensaron en una ruta más corta y segura: la quebrada del Shambó. Sin embargo, ello implicaba atravesar las tierras comunales de los cashibo cacataibo.

La primera incursión a Mariscal Cáceres, comunidad cashibo, se dio en junio de 1989. Cuando entraron a la comunidad, desde Bellavista, sólo encontraron a hombres adultos, ya que, por precaución, habían escondido a las mujeres y los niños en el monte. Los reunieron en la escuela y les dijeron que la comunidad se organiza y siguiera sus leyes. Los nativos se negaron y los integrantes del PCP-SL se retiraron.

Previamente a la visita del PCP-SL a Mariscal Cáceres, el clan dominante de los Bolívar y *Caretas*, el mando político de Bellavista, hicieron un pacto de no agresión a los nativos. El acuerdo incluyó la entrega de diez hectáreas de tierras comunales en Iñeca a los colonos de Bellavista por cinco años. *Caretas* hizo conocer este pacto a otras zonas donde había controles del PCP-SL, Nuevo San Martín y Progreso, de modo que no se agrediera a los nativos.

El rechazo de los nativos hacia el PCP-SL se basó en que ellos no sembraban coca y no querían que se lleven a sus jóvenes. Además, los cashibos sabían la forma sanguinaria como el PCP-SL imponía sus leyes en los caseríos colonos y aniquilaba autoridades acusándolas de «soplones». La exacerbada violencia y el énfasis en el cultivo de coca en sus territorios eran totalmente ajenos a las costumbres ancestrales de los cashibos. Al no poder imponerse la organización del PCP-SL a todas las comunidades cashibo del río Aguaytía, se les denominó «zonas blancas».

Aun cuando los nativos se mantuvieron fuera del ámbito de influencia del PCP-SL, hubo varios casos de jóvenes cashibos que trabajaron como peones en las zonas cocaleras de Bellavista, Colorado y Shambó. Con ese trabajo obtenían buenos ingresos y podían usarlos para comprar cosas a sus familias, así como para la diversión. Además, algunas familias nativas, apremiadas por la crisis económica, se dedicaron a sembrar coca, en no más de una hectárea, pero fuera de los territorios comunales.

Los jóvenes nativos abandonaron este trabajo cuando el Ejército y la Marina de Guerra comenzaron a ejercer mayor represión en las zonas controladas por el PCP-SL y aumentó la violencia producto del narcotráfico. Si bien el dinero del narcotráfico fue aprovechado por los mandos para atraer a los jóvenes cashibos, lo que los asustó fue la inflexible aplicación de las leyes del PCP-SL: «Si te veían conversando mucho con una chica, te obligaban a casarte con ella o, si a alguna señora casada la veían con una hombre, ahí nomás la ajusticiaban y la mataban. Peor si te acusaban de soplón, así le han dado vuelta a varios» (Soldadito. Comunidad nativa cashibo-cacataibo Mariscal Cáceres, distrito de Aguaytía, Padre Abad).

Es decir, los jóvenes nativos trabajaron en el cultivo de la coca cuando estaba bajo el control de los mestizos. Pero cuando el PCP-SL llegó, a partir de 1988, e impuso sus condiciones, la mayoría decidió dejar la actividad. Además, sus familias los persuadían para que dejen esos lugares porque se volvían cada vez más peligrosos.

Es posible afirmar que las razones por las que el PCP-SL no ingresó a las comunidades cashibo - cacataibos son de índole económica y cultural. De un lado, los nativos no sembraban coca, aunque sí conocían la actividad a través de la experiencia de los jóvenes. Su principal actividad era el cultivo de plátano, yuca y maíz. De otro lado, y lo más importante, el PCP-SL ignoró la dinámica de la simbología de la cultura nativa. Esto se expresó en el desconocimiento del idioma y en un temor implícito frente a una legendaria imagen que señalaba que los cashibos habían sido antropófagos y muy buenos guerreros: «Nosotros no necesitamos sembrar coca porque es una cosa mala; las cosas buenas son para comer y vender. Sembrar coca es ganarte pro-

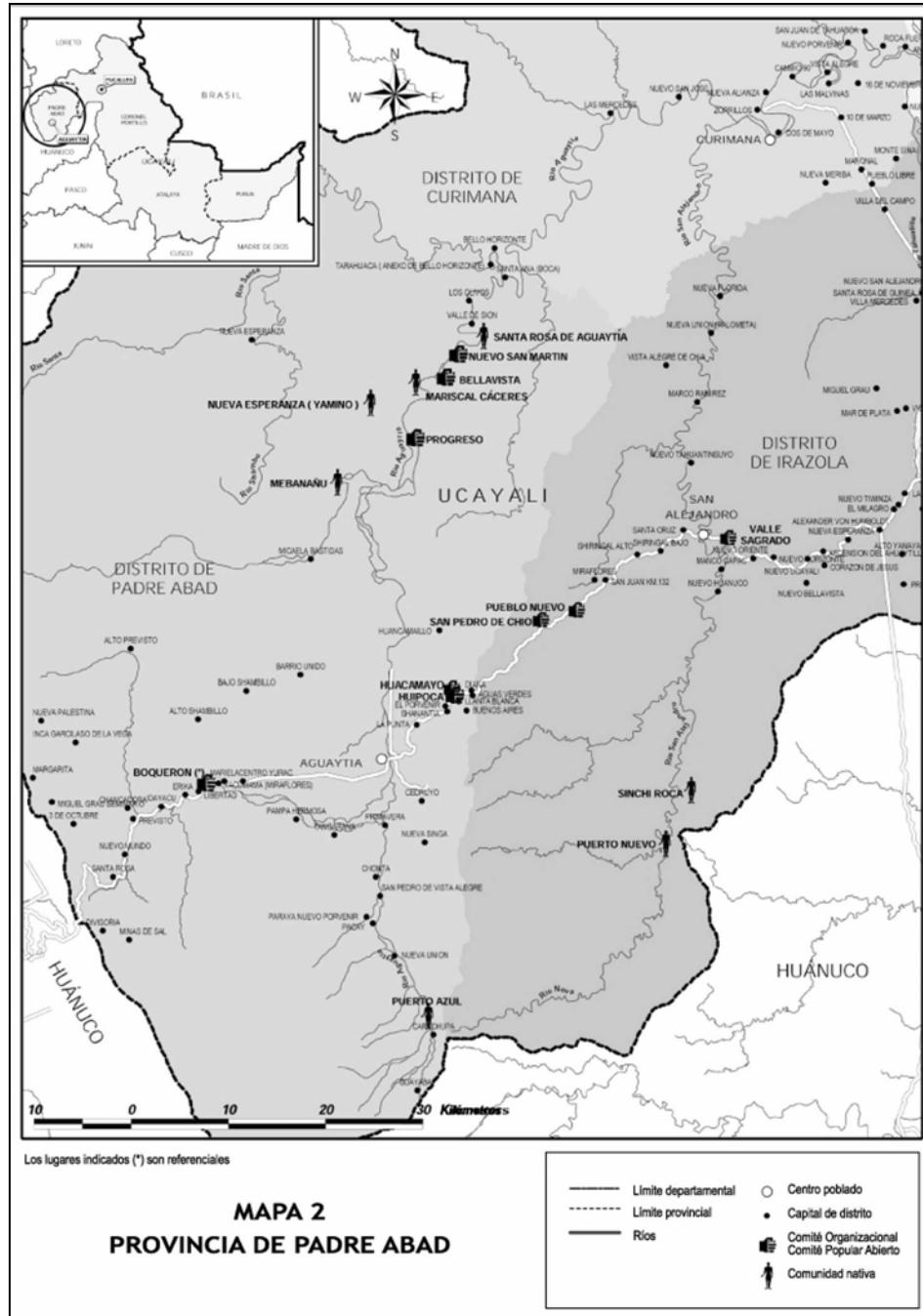
blemas y vivir como esclavos y no libremente como siempre lo hemos hecho» (Raúl. Comunidad nativa casibó-cacataibo Mariscal Cáceres, distrito de Aguaytía, Padre Abad).



Algo similar pasó con las comunidades nativas shipibo-conibo del río Ucayali. El PCP-SL incursionó, principalmente, en las comunidades ubicadas en la quebrada del Caco y en el lago Imiria.

En la quebrada del Caco, ingresó varias veces en la comunidad de Amaquiria. La razón era sencilla: Amaquiria era una especie de salida de la quebrada de Pomayacu, zona altamente cocalera, hacia el río Ucayali. La primera vez, el PCP-SL llegó desde la comunidad asháninka de selva pidiendo organizar el pueblo, pero las autoridades afirmaron que no entendían su política. La segunda vez llegaron poco antes de las elecciones de 1990. Venían desde Tahuania, donde quemaron el local municipal, y de ahí se dirigieron hacia Iparia. La tercera vez llegaron con varios guías asháninkas y shipibos, pidieron alimentos y se fueron hacia la boca del Pachitea, donde fueron emboscados por la Marina de Guerra.<sup>495</sup>

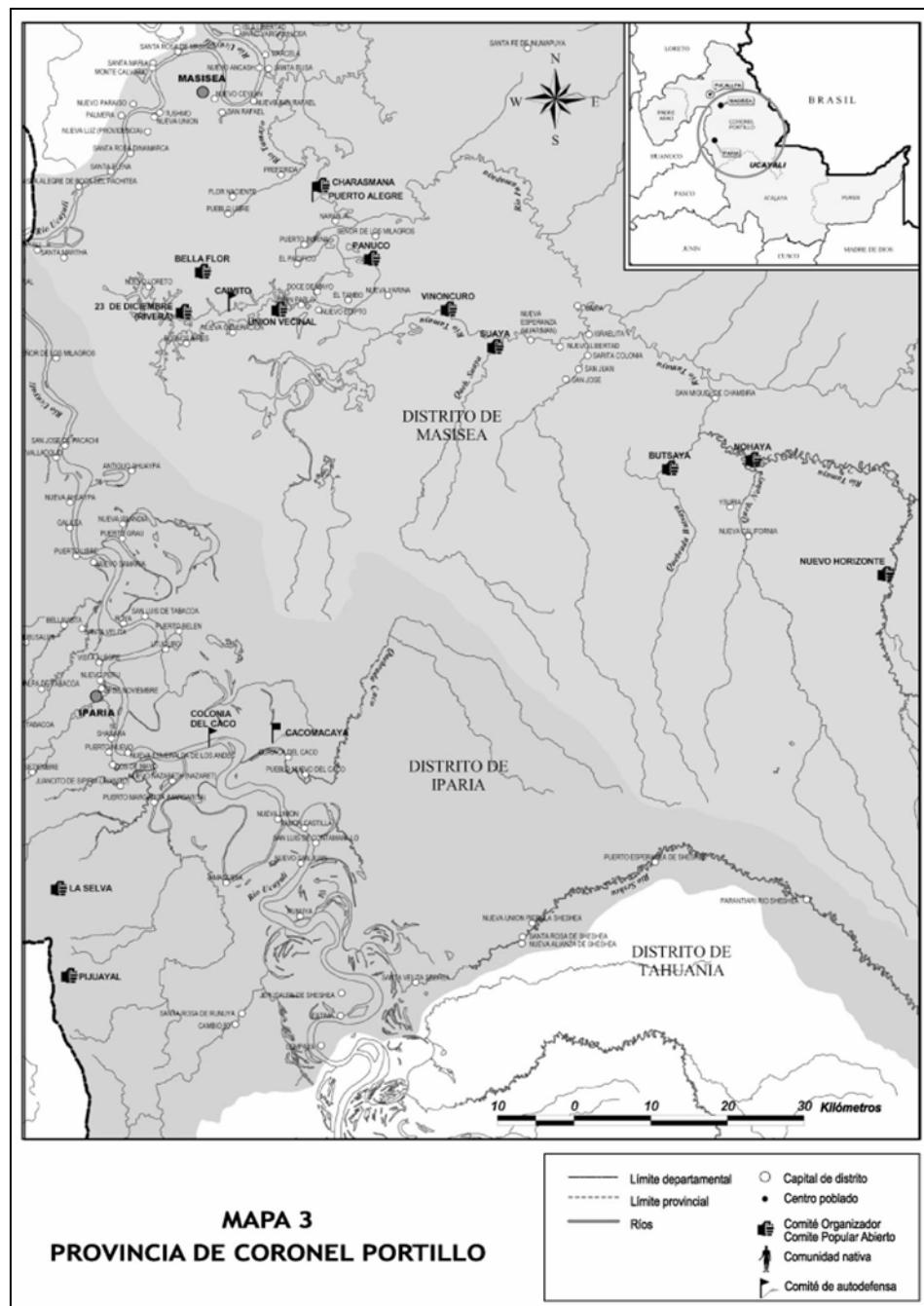
<sup>495</sup> Los nativos afirman que, al llegar a la boca del Pachitea, quisieron asaltar una embarcación de una compañía maderera, pero que, en realidad, llevaba a personal de la Marina de Guerra que estaba camuflado. Todos los atacantes fueron muertos, entre los que se



Hacia fines de 1989, el PCP-SL llegó a las comunidades shipibo-conibo asentadas en el lago Imiria. Primero lo hicieron a Junín Pablo, en el mes de noviembre, provenientes de Panuco. Su objetivo era organizarlos y les preguntaron cómo se comportaban sus autoridades y les explicaron las leyes que querían imponer: no a la poligamia, no al robo y no a los homosexuales. Los nativos se negaron y pidieron que los respetaran: «No tenían que imponernos sus leyes porque nosotros sabemos cómo comportarnos. Tenemos una sola mujer y no robamos. Acá los que tienen malas costumbres y roban son los mestizos» (Valeriano. Comunidad nativa shi-pibo-conibo de Junín Pablo, distrito de Masisea, Coronel Portillo).

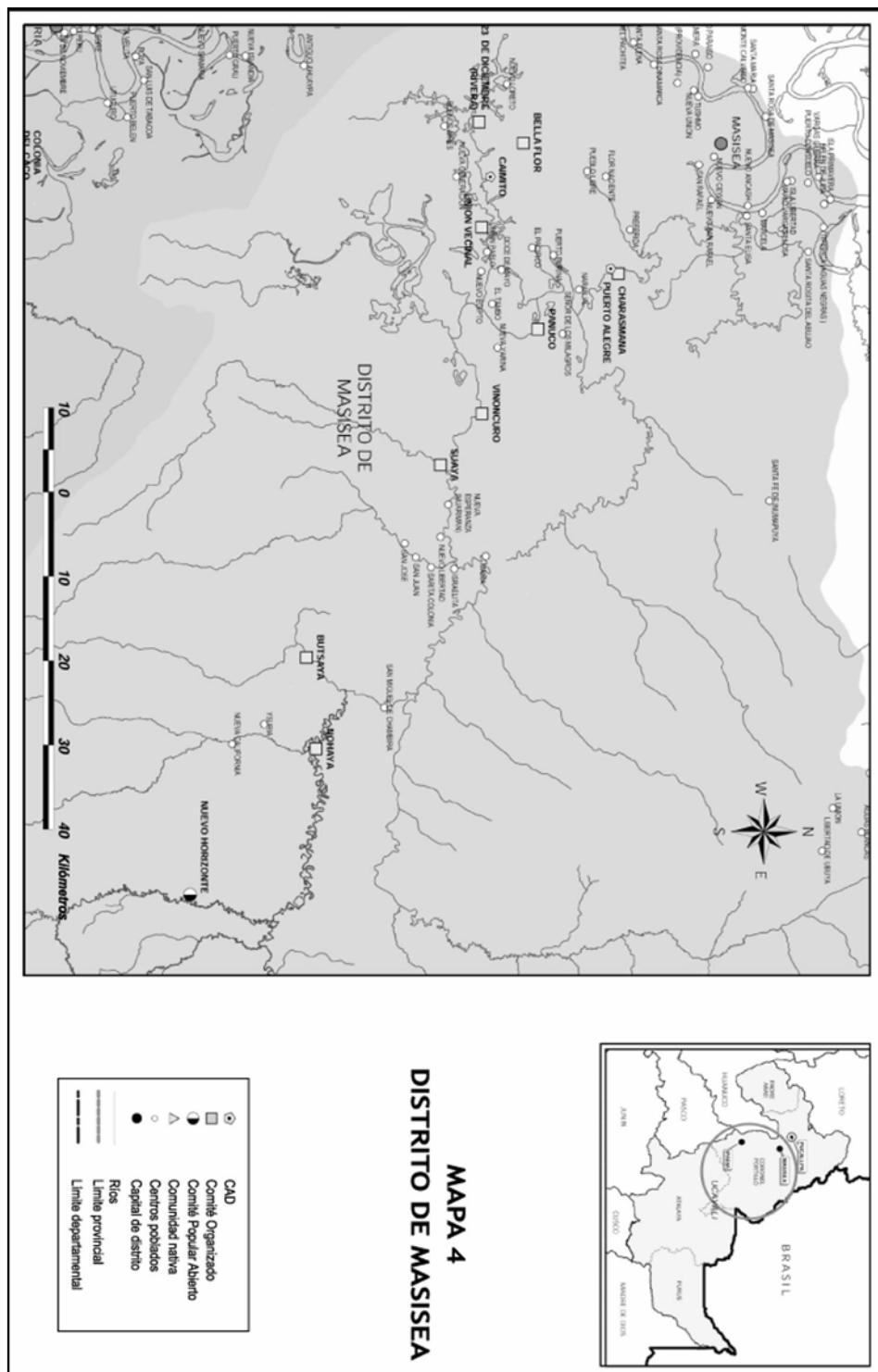
Otra acción que generó el rechazo de los nativos fue que el PCP-SL les pidió que sus jóvenes se incorporen a la «lucha armada». Al negarse rotundamente, los miembros del PCP-SL se fueron de la comunidad hacia Vinuncuro. A partir de ese momento ya no ingresaron a la comunidad; sólo pasaban con sus botes.

encontraban los guías nativos y Renán Ochoa, uno de los principales líderes del PCP-SL en Ucayali.



Una importante comunidad nativa donde incursionaron fue Caimito. En ese lugar, también pidieron a los dirigentes que se unieran a la «lucha armada» y que se dedicaran a los cultivos de coca, como lo hacían en los caseríos aledaños. Nuevamente, la respuesta de la población fue negativa. Posteriormente, en 1991, los nativos decidieron unirse al CAD del caserío de Puerto Alegre, como una subbase para combatir a la subversión (véase el mapa).

Al igual que los cashibo-cacataibo, los shipibo-conibo tampoco sembraban coca pero sí estaban incorporados en la actividad del narcotráfico con la venta de su mano de obra: «Los shipibos nunca hemos sembrado coca pero hemos tenido que trabajar como peones para los narcos [narcotraficantes] por una necesidad. Ganábamos veinte soles diarios por kilo de hoja recolectada. La droga procesada por los mestizos se sacaba hacia Pucallpa» (Valeriano. Comunidad nativa shipibo-conibo de Junín Pablo, distrito de Masisea, Coronel Portillo).



Además, estaban los choques culturales: no podían comunicarse en el idioma nativo y no conocían la cultura shipibo. A partir de estas experiencias, el PCP-SL no consideró ni a los cashibos ni a los shipibos como una «base social». Sin embargo, sí recibieron el apoyo de los asháninkas asentados en las comunidades de selva y Pijuayal, distrito de Iparia. Esto se debe a que los asháninkas les servían de guías y eran la masa trabajadora de extensas zonas cocaleras.

#### 11.3.4. El PCP-SL y su alianza con el narcotráfico

Entre 1988 y 1990, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales realizaron operativos antidrogas y contrasubversivos en Tocache, San Martín, y obligaron a las firmas de narcotraficantes asentadas ahí a instalarse en otras zonas del país. Así, el grupo de Demetrio Chávez Peñaherrera, (a) *Vaticano*, se instaló en Campanilla, San Martín; mientras que otros, como los hermanos Cachique Rivera y Cristal, se fueron hacia el Ucayali, principalmente a la provincia de Padre Abad y Coronel Portillo.

Este reacomodo geográfico de las firmas de narcotraficantes locales tuvo un efecto determinante en la distribución de las fuerzas políticas y militares del PCP-SL. El objetivo principal del PCP-SL ya no era instaurar el «nuevo Estado» sino asegurar el control del narcotráfico para asegurar la manutención de la «lucha armada» a escala nacional. Sin embargo, la estrecha colaboración que el PCP-SL y el narcotráfico habían establecido en el Alto Huallaga ya había corrompido a varios de sus militantes, al grado de hurtar dinero por la venta de la droga para usos particulares.

Durante este período, el PCP-SL y las firmas de narcotraficantes aprovecharon favorablemente la imagen adversa del gobierno por la aplicación de políticas de erradicación compulsiva de los cultivos de coca en Padre Abad. Así, el PCP-SL volvió a imponerse, como sucedió en el Alto Huallaga, y estableció un «estado de convivencia» con los productores de hoja de coca y con los narcotraficantes.<sup>496</sup>

Esto propició que el PCP-SL asumiera el control sobre el negocio de la coca, lo que causó malestar entre los narcotraficantes que querían mantener su dominio en la zona. Aunque no se registraron enfrentamientos entre ambas fuerzas, al final todas las firmas locales se resignaron al control del PCP-SL. El PCP-SL empezó de esta manera a ser mediador entre las firmas de narcotraficantes y los agricultores e impuso nuevas reglas de juego en las relaciones de explotación establecidas por los narcotraficantes anteriormente.

Los caseríos de Boquerón y Huipoca fueron organizados en «comités populares abiertos» para controlar el negocio de la droga. Igualmente, se establecieron aeropuertos clandestinos debido a que en estos lugares la CFB presentaba tramos propicios para el aterrizaje o despegue de avionetas cargadas de droga.<sup>497</sup>

El PCP-SL se había dado cuenta del auge del narcotráfico en la zona y empezó a definir la estrategia para tener un mayor control sobre la población y el negocio. El problema ya no era imponer orden en el negocio de la coca; ahora era construir una «base social» para fortalecer las acciones del partido en la zona. El PCP-SL impuso un dilema a la población: estaban con el partido o dejaban todas sus propiedades. Muchas personas aceptaron las condiciones del PCP-SL; otras retornaron a sus territorios de origen. Sus nuevos «compañeros» mantenían su interés en los cocales y no necesariamente en la causa política que el maoísmo ortodoxo les ofrecía.

Con el control del negocio y la captación de nuevos militantes, el PCP-SL empezó a cobrar cupos a los narcotraficantes por los cargamentos de hoja de coca seca y por la pasta básica bruta; asimismo, impuso «balanzas populares» de medición que permitieron tener el peso exacto de la producción comprada y calcular el cupo que le tocaba al partido. Los cupos se imponían a quienes compraban la coca.<sup>498</sup>

Además del cupo que pedía a los compradores de pasta básica o de hoja de coca, el PCP-SL empezó a recaudar más dinero a través del cobro de «colaboraciones» a los mismos agricultores cocaleros. Así, transgredieron la relación, hasta ese momento cordial, entre ambos actores sociales. A quienes se oponían a pagar los cupos se les aplicaba el «corte económico», actividad que significaba dejar de trabajar en sus chacras y ponerse al servicio de las tierras y de los cocales del partido.

El PCP-SL aprovechó la huida de las personas que no querían someterse a sus órdenes y confiscó las tierras abandonadas para su propio beneficio. Hizo trabajar a los agricultores cocaleros en esos cultivos de exclusividad del partido.

Durante casi dos años, el PCP-SL tuvo el control casi absoluto de la zona; subordinó a sus intereses a los agricultores cocaleros y a los narcotraficantes, y burló todos los operativos contrasubversivos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. En todo ese tiempo el PCP-SL logró recaudar gran cantidad de dinero del

<sup>496</sup> Véase «El PCP-SL en el Alto Huallaga durante el auge de la droga » en este mismo capítulo.

<sup>497</sup> Para mayor información, véase la entrevista con Anita (casete n.º 40).

<sup>498</sup> El PCP-SL cobraba cupos a los narcotraficantes ya sea en dinero o en ropa, víveres y armas.

narcotráfico para, supuestamente, mantener toda la «lucha armada» del país e instaurar su enclave económico y político en Ucayali.

A pesar de todo el dominio y poder adquirido en la zona, en 1991, debido al paulatino cambio de la estrategia contrasubversiva de la Marina de Guerra, el PCP-SL empezó a retirarse hacia algunas zonas del río Ucayali y perdió el control de los caseríos de la CFB, aunque no dejó de realizar incursiones para recordarles a los pobladores «el poder oculto pero activo del partido».⁴⁹⁹ Además, muchos mandos del PCP-SL se dedicaron exclusivamente al negocio de la droga y dejaron de lado el trabajo político y militar del partido. Su táctica era cobrar los cupos y no rendir cuentas de lo recabado. Muchos de ellos murieron por problemas directos con los narcotraficantes.

En este contexto, y a partir de 1991, la Marina de Guerra asumió el comando político militar de Ucayali e incentivó la formación de varios CAD en los caseríos de la región. Junto con los operativos antidrogas realizados en el Huallaga, la propia dinámica expansionista del narcotráfico obligó a las firmas nacionales a buscar nuevas zonas de producción y comercialización de la droga. Una de ellas fue la provincia de Coronel Portillo.

En la provincia de Coronel Portillo, a comienzos de la década de 1980, el procesamiento de la droga se realizaba de forma camuflada. No obstante, a partir de 1985 la droga se comenzó a producir y comercializar abiertamente en el río Tamaya, el lago Imiria y el río Abuja. Para fines de los ochenta, varias firmas venidas del Alto Huallaga se habían instalado en el Imiria y en las quebradas de los ríos Suaya, Noaya y Butsaya (véase el mapa). Entre ellas se encontraban Cachique Rivera, Cristal, Gustavo, el colombiano Lucio y, en menor medida, Vaticano.

Una consecuencia del auge del narcotráfico fue la formación de varios caseríos producto de las migraciones desde el Huallaga, Ayacucho y Apurímac. Este hecho cambió drásticamente la estructura demográfica y poblacional del Imiria. El caso más famoso fue el caserío de 23 de Diciembre, el que se convirtió en el centro de producción de droga más importante del río Ucayali. En *tributo* a este logro, se le colocó el nombre de *Rivera* porque el narcotraficante que tenía la mayor influencia en toda la zona era Cachique Rivera.<sup>500</sup>

Este auge del narcotráfico incentivó a que el PCP-SL realizase incursiones a lo largo del río Ucayali, principalmente en el río Tamaya. En este lugar formó varios «comités populares abiertos» y «comités organizados» que protegían a las firmas de los ataques de las Fuerzas Armadas y de la resistencia del CAD de Puerto Alegre.<sup>501</sup> En algunos casos estos «comités» también eran centros de producción de droga y se caracterizaban por su inaccesibilidad geográfica. Éste fue el caso de Butsaya, Noaya y Nuevo Horizonte.

El auge de la coca dolarizó de un momento a otro la economía de la región, que hasta hace unos años era una de las más pobres de la Amazonía. Este auge benefició, en parte, la producción de productos agrícolas tradicionales.<sup>502</sup>

La relación del narcotráfico con los nativos se hizo más evidente en el caso de los shipibos. Si bien no tienen dentro de sus pautas culturales ni en su simbología el sembrío de coca, sí aprovecharon muy bien el auge económico producto del narcotráfico. Uno de los casos más significativos fue el de la comunidad shipibo de Amaquiría. Esta comunidad tenía una ubicación estratégica por estar muy cerca al río Ucayali y permitía a los narcotraficantes, asentados en las comunidades asháninkas de selva y Pijuayal, tener una salida para comercializar la droga y comprar diversos productos.

En Amaquiría existía desde 1975 una pequeña pista de aterrizaje para vuelos de ayuda social que, tras el *boom* del narcotráfico, la comunidad alquiló a las firmas. Los nativos inmediatamente formaron diversos negocios como restaurantes, tiendas de abarrotes y bares que eran visitados constantemente por los cocaleros. Al

<sup>499</sup> Este cambio de estrategia implicó que la Marina de Guerra dejase de realizar sangrientos operativos en los caseríos con presencia subversiva y, por el contrario, realizase un trabajo más de inteligencia para capturar a los mandos y delegados de la CFB y del Aguaytía. Asimismo, usó a los nativos como guías para atacar los «comités» subversivos más inexpugnables.

<sup>500</sup> A partir de ese momento y hasta el día de hoy, la gente lo conoce como Rivera y no como 23 de Diciembre, que es su nombre oficial.

<sup>501</sup> Uno de esos «comités» fue el caserío de Panuco, porque estaba muy cerca de Puerto Alegre. Fue como una «zona de aguante» a las acciones armadas de las rondas.

<sup>502</sup> Por ejemplo, los agricultores de plátano llegaron a vender un racimo de diez unidades a ocho o diez soles. Asimismo, una gallina llegaba a costar cuarenta soles.

enterarse la Marina de Guerra de estos vuelos clandestinos, amenazó con bombardear la pista de aterrizaje, lo cual no hizo. Sin embargo, sí bombardeó las comunidades asháninkas de Pijuayal y Selva.

El incremento de las acciones represivas de la Marina de Guerra y la política antidrogas impulsada por el gobierno generaron que, a partir de 1993, los carteles de la droga disminuyeran su influencia en el Tamaya y el Imiria. Es importante resaltar que, para esta época, la presencia militar y política del PCP-SL era mínima, debido a sus constantes derrotas militares a manos de la Marina de Guerra, que bombardeó varios «comités organizados» y «comités populares abiertos», y a la férrea resistencia que hizo el CAD de Puerto Alegre.

#### 11.4. LUCHA CONTRASUBVERSIVA EN EL UCAYALI

El gobierno declaró a Ucayali en estado de emergencia el 1 de junio de 1989 y creó un comando político militar a cargo de la Marina de Guerra. Por la gran extensión del departamento, la Marina de Guerra y el Ejército se repartieron el terreno: el Ejército cubrió la zona comprendida entre el caserío Divisoria hasta el kilómetro 86 (Von Humboldt), de la provincia de Padre Abad, mientras la Marina de Guerra asumió la vigilancia de la ciudad de Pucallpa y de todos los caseríos asentados a lo largo del río Ucayali y afluentes. En 1991, la Marina de Guerra asumió la conducción total del comando político militar.

##### 11.4.1. Acciones contrasubversivas del Ejército

Ante la presencia del PCP-SL y del narcotráfico en la provincia de Padre Abad, el Ejército dispuso la creación, en 1989, de una base militar en Aguaytía, donde se estableció el batallón «contrasubversivo» 28, que vino desde la base Los Laureles en Tingo María. Esta base tenía la misión de combatir a las fuerzas del PCP-SL que ya habían logrado instalarse en toda la zona. Sin embargo, su tarea no fue realizada a cabalidad por el desconocimiento del territorio y por la mala estrategia para prevenir ataques y emboscadas subversivas, que cobraron muchas vidas en las filas militares.

En su afán de erradicar al PCP-SL, el Ejército nunca tuvo la capacidad de diferenciar quién era agricultor y quién era miembro de esa organización. Esto trajo como consecuencia que el Ejército mostrara poco respeto por la población civil. Sus acciones contrasubversivas se basaron específicamente en operativos militares a lo largo de la CFB para sorprender a los narcotraficantes y al PCP-SL.

El Ejército tuvo dos tipos de estrategia para enfrentar al PCP-SL según el lugar donde éste se asentaba. En la CFB, sus operativos los hacían utilizando portatropas que muchas veces eran fácilmente emboscados por el PCP-SL. En el río Aguaytía, el Ejército aplicó la estrategia de «tierra arrasada», es decir, bombardeos indiscriminados con helicópteros artillados contra caseríos ubicados en las riberas del río, luego de los cuales enviaba patrullas militares terrestres para realizar repasos de cuerpos y destrucción de bienes. Estas acciones militares incluían asesinatos extrajudiciales. Los casos más ilustrativos de esta táctica militar fueron los caseríos de Nuevo San Martín y Bellavista, ambos «comités populares abiertos» y zonas de producción de droga. Por su importancia y ubicación estratégica, el PCP-SL siempre volvía a organizar Bellavista, motivo por el cual fue bombardeado por el Ejército hasta en tres oportunidades: «Yo estaba sirviendo en el Ejército cuando una vez bombardearon Bellavista. Luego, entramos una patrulla y quemamos las casas que se salvaron del ataque. En una de esas casas habían tres personas que no querían salir, así que los quemamos adentro nomás» (Tercero. Comunidad nativa cashibo-cacataibo de Mariscal Cáceres, distrito de Aguaytía, Padre Abad).

Los más afectados eran los agricultores que no tenían hacia dónde ir. En cambio, los mandos subversivos huían de los ataques y, luego de algún tiempo, regresaban a reorganizar el caserío. Fue tanta la violencia ejercida por el PCP-SL y la represión por parte del Ejército que, en los años posteriores a la violencia, la población de Bellavista se redujo prácticamente a menos de la mitad de lo que era en 1990.<sup>503</sup>

En consecuencia, es posible afirmar que los operativos contrasubversivos no lograron resultados positivos debido a las siguientes razones:

---

<sup>503</sup> En la actualidad tiene aproximadamente 25 familias y muchas de ellas son gente que ha llegado recientemente. De los pobladores que vivieron la violencia, sólo quedan tres familias.

- El Ejército desconocía qué tipo de población iba a encontrar en la zona y a quién iba a combatir. Además, la geografía impedía un fácil desplazamiento de sus destacamentos.
- El PCP-SL brindó protección armada para cultivar la hoja de coca y consiguió ordenar el negocio de la droga. Por ello, la población los apoyó más por intereses económicos que políticos
- La mimetización del PCP-SL y los narcotraficantes entre la población civil.
- La absoluta desconfianza de la población hacia los militares debido a los excesos cometidos en las operaciones militares.

Los operativos del Ejército se desarrollaban sobre la base de la información proporcionada por las personas que huían de las zonas controladas por el PCP-SL o de personas sindicadas como subversivas que eran capturadas y torturadas para que den información. No se tiene conocimiento de si el Ejército tuvo personal infiltrado en las filas del PCP-SL.

Esta violenta e indiscriminada acción del Ejército sólo generó el aumento de las acciones violentas por parte del narcotráfico y el PCP-SL, con lo cual el negocio de la coca siguió teniendo el espacio necesario para su desarrollo. No obstante, a inicios de la década de 1990 las Fuerzas Armadas elaboraron una nueva estrategia de lucha contrasubversiva, la cual fue aplicada en Ucayali por la Marina de Guerra, ya que el Ejército retiró sus contingentes militares a Tingo María.

#### 11.4.2. La presencia de la Marina de Guerra en Ucayali

Entre 1989 y 1990, la Marina de Guerra aplicó una estrategia contrasubversiva basada en implantar el terror sobre las poblaciones asentadas en las riberas del río Ucayali y sus afluentes. Al igual que el Ejército en Padre Abad, sus operativos consistían en atacar poblados enteros sin saber exactamente si las huestes del PCP-SL estaban presentes en la zona. Otras veces también utilizaron helicópteros artillados para bombardear distintos caseríos por considerarlos, *a priori*, como zonas rojas.

Una terrible táctica para amedrentar a la población fueron los llamados «vuelos de la muerte». Éstos consistían en llevar a sospechosos de ser miembros del PCP-SL a helicópteros que sobrevolaban algunas zonas y arrojarlos en costales o amarrados. De este modo, los agujales de Pucallpa se convirtieron en cementerios ambulantes de decenas de personas que fueron secuestradas o detenidas por las fuerzas de seguridad en operaciones de rastrillaje.

El hallazgo de fosas comunes, las denuncias de desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales, según el Vicariato de Pucallpa, tenían como principal responsable a la Marina de Guerra.<sup>504</sup>

Para 1991, el cambio de estrategia contrasubversiva mejoró la imagen de las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia de Ucayali. Esta nueva estrategia tenía como objetivo básico utilizar a las Fuerzas Armadas para recuperar la presencia del Estado en las zonas ocupadas por la subversión, ganarse a la población civil a través de acciones de apoyo y, principalmente, dejar sin base social ni espacio de maniobra al PCP-SL. Sólo luego de esto se entregaría el control a las autoridades civiles.

Así, la Marina de Guerra logró el control de todo el departamento de Ucayali y estableció diferentes bases contrasubversivas en caseríos y ciudades que consideraban estratégicos. Algunas de estas bases estuvieron ubicadas a lo largo de la CFB, principalmente en la ciudad de Aguaytía y en los caseríos de Libertad, Huipoca y San Alejandro. A lo largo del río Ucayali realizó constantes operativos contrasubversivos y fomentó la formación de varios CAD en Puerto Alegre y Caimito y algunas rondas de autodefensa en caseríos y comunidades nativas.

Este cambio de estrategia revirtió la imagen negativa que la población tenía sobre la forma de actuar de las Fuerzas Armadas. Las acciones militares en la CFB cambiaron: ya no había operativos militares sorpresivos ni se forzaba a la gente a asistir a reuniones para delatar a mandos subversivos, sino que se puso énfasis en tratar mejor a la población civil y en un efectivo trabajo de inteligencia para detectar a los mandos del PCP-SL. La muestra de respeto por la población civil hizo que la población de la CFB identificase a la Marina de Guerra como un cuerpo respetuoso en comparación con el Ejército: «Con la Marina fue otra cosa. Eran hombres altos y serios. Ellos han puesto paz en el pueblo [Aguaytía]; con ellos volvió la calma y la confianza. Actuaban

---

<sup>504</sup> La represión militar con helicópteros artillados, tanto propios como los de la DEA, de todas maneras causó graves bajas al PCP-SL y lo obligó a desplazarse a otras zonas de la región.

correctamente, no eran abusivos; sólo agarraban a los mandos senderistas [del PCP-SL] y los llevaban a la base. Así acabó el terror» (Johana. Distrito de Aguaytía, Padre Abad).

El éxito de la misión implicó la ampliación de las facultades y garantías legales para las acciones de la Marina de Guerra, que fortaleció su papel como actor político en el espacio regional. Asimismo, la búsqueda de apoyo de la población, fundamentalmente por medio de acciones cívicas, se concretó con la aceptación de organizar los CAD.

A la organización de los CAD y la realización de acciones cívicas se sumaron acciones militares basadas en los datos de inteligencia proporcionados por informantes clave y por ex militantes arrepentidos que proporcionaban datos importantes para detectar campamentos y mandos del PCP-SL.

En Padre Abad, uno de los lugares donde la Marina de Guerra logró formar exitosamente un CAD fue en el caserío de Huipoca en 1992. Además, fue la primera vez que la Marina de Guerra entregó armas a un CAD de la zona porque gozaban de su entera confianza.

En Coronel Portillo, la formación de rondas de autodefensa y de varios CAD, tanto en las zonas urbanas como en las comunidades nativas, tuvo una limitada vigencia o, en algunos casos, ni se formaron, debido a las pocas incursiones militares hechas por el PCP-SL, que había decidido fortalecer su dominio en el río Tamaya y el Abuja.

Una de las razones para que los CAD no tuvieran éxito fue que la Marina de Guerra se negaba a armar a la población y sólo los motivaban para que se defendieran. En otros casos, la propia población desistió de formar las rondas de autodefensa por temor a represalias del PCP-SL, que aún tenía presencia en la zona, lo cual los llevaba a estar atrapados entre dos fuegos.

Sin embargo, en 1991 la población del caserío de Puerto Alegre decidió formar un CAD, el cual cumplió un papel fundamental en la lucha contrasubversiva y en la derrota del PCP-SL en el lago Imiria y en algunas zonas del río Tamaya. Este CAD tuvo una sub base en la comunidad nativa de Caimito. Una ronda de autodefensa impulsada por la Marina de Guerra con relativo éxito, y que después se transformó en CAD, se formó en la comunidad nativa de Colonia del Caco, la cual controlaba embarcaciones que transitaban por el Ucayali e inclusive combatió a los narcotraficantes.

Muchos de los CAD fueron acusados de ser nuevos agentes de violencia al haber sido arrastrados por algunos sectores de la Marina de Guerra a practicar actos de tortura, desapariciones, robos, detenciones y otros delitos directamente derivados de la delegación de facultades para mantener el orden interno y de operativos de rastrillaje desarrollados en las «zonas rojas»:

Una vez agarramos a seis senderistas [integrantes del PCP-SL] importantes cerca de Panuco. Entonces, llamamos por radio a la Marina [de Guerra] en Pucallpa y les informamos del hecho. Ellos nos dijeron que para qué los van a traer a Pucallpa, que por las puras íbamos a gastar gasolina y que mejor nos deshiciéramos de ellos. Así, pues, los llevamos a una explanada del río y les dimos vuelta. (Pablito. Caserío de Puerto Alegre, distrito de Masisea, Coronel Portillo)

La acción concertada entre los CAD y la Marina de Guerra logró frenar la expansión y la capacidad de movilidad del PCP-SL en Ucayali. El éxito de los CAD radicó en que la población conocía mejor su territorio, dominaba los corredores de tránsito y tenía conocimiento de los lugares de descanso que utilizaba PCP-SL. Estos aspectos fueron importantes para acorralarlo y derrotarlo, principalmente en el río Tamaya y el Imiria.

Para el trabajo de inteligencia, la Marina de Guerra utilizó a los nativos shipibo-conibo porque tenían un excelente conocimiento de la zona y de la gente asentada en los diferentes caseríos y comunidades nativas. Ellos hicieron un trabajo importante para detectar los «comités» del PCP-SL y las bases del MRTA asentadas a lo largo del río Ucayali y afluentes. Asimismo, muchos trabajaron como guías de la Marina de Guerra para explorar áreas donde estaban ubicados los campamentos o «comités» del PCP-SL:

Yo he servido a mi patria y lo volvería a hacer para derrotar al PCP-SL. Yo como shipibo he ayudado a la patria y ahora estoy tranquilo porque cumplí con todos. Nuestras labores eran difíciles porque debíamos meternos como civiles y teníamos que ver cómo ellos mataban a la gente de la nada y nosotros callados nomás. (Medardo. Pucallpa, Coronel Portillo).

Los cashibo-cacataibo también cumplieron una función importante al brindar su apoyo a la Marina de Guerra como guías en las zonas inhóspitas del Aguaytía. Gracias a esta labor, se pudieron detectar los «comités populares abiertos» y «comités organizados» establecidos a lo largo del río Aguaytía, así como los caminos utilizados por el PCP-SL para trasladarse desde el río Aguaytía a la CFB y a Pucallpa. Asimismo, informaron quiénes eran los mandos y delegados más importantes, con lo cual la Marina de Guerra incursionaba en esos lugares sólo para atraparlos. Este papel cumplido por los cashibo-cacataibo les ha traído muchos problemas hasta el día de hoy. Algunos cocaleros los acusan de «soplones» y de ser estrechos colaboradores de las Fuerzas Armadas, motivo por el cual han sufrido amenazas y vejámenes.

La Marina de Guerra también implementó de programas de acciones cívicas que cumplieron un importante papel porque era la forma de desterrar de la memoria de la población su actuación anterior. El énfasis en las acciones cívicas llevó a las Fuerzas Armadas a desarrollar campañas de reparto de alimentos y servicios médicos gratuitos en los caseríos y «zonas rojas». Asimismo, consiguió que se realizara el pintado de paredes donde había pintas de los grupos subversivos y se brindaran charlas de planificación familiar. En muchos casos, llevaron bandas de músicos y realizaron presentaciones artísticas.

A pesar de toda esta estrategia desplegada, el PCP-SL tuvo la capacidad de movilizar sus disminuidos contingentes militares y logró mantener una red de apoyo que le permitió operar, aunque de forma desordenada, en los territorios donde había organizaciones de autodefensa y bases militares de la Marina de Guerra. Sin embargo, paulatinamente fueron cayendo sus mandos y militantes hasta desaparecer de la zona.<sup>505</sup>

## 11.5. RESPUESTAS DE LA CIUDADANÍA A LA VIOLENCIA EN UCAYALI

### 11.5.1. Los cashibo-cacataibo: el uso del mito y la cultura como mecanismos de defensa

A mediados de 1989, el PCP-SL incursionó en la comunidad cashibo-cacataibo de Mariscal Cáceres.<sup>506</sup> En esa oportunidad reunió a la población en el local de la escuela y le habló sobre la lucha de clases, el «nuevo Estado» que querían implantar y le pidió que se organizara en «comités». La respuesta de la población fue unánime: rechazaron la propuesta del PCP-SL: «No podíamos formar comité, porque, si lo hacíamos, ellos van a comenzar a obligarnos a hacer cosas que no queremos, nos van a matar como perros, así que mejor le dijimos que no. Pero sí podíamos ayudarles con comida o algo así» (Don Goyo. Comunidad nativa cashibo-cacataibo Mariscal Cáceres, distrito de Aguaytía, Padre Abad).

Ante la respuesta de los nativos, el PCP-SL optó por retirarse de la comunidad pero dejó en claro que podían regresar en cualquier momento y, sobre todo, ya no de manera tan amigable. Sin embargo, el PCP-SL nunca más volvió a entrar por la fuerza a la comunidad, aunque usaban su pequeño puerto como estancia temporal o, en algunos casos, rodeaban la comunidad e impedían ingresar a ella.

Estos hechos dejan la interrogante de por qué las huestes del PCP-SL no actuaron de una forma violenta con los cashibo-cacataibo si ése era su natural forma de actuar en los diferentes caseríos en donde habían implantado sus «comités». Estas dudas se acrecientan más cuando se sabe que el objetivo del PCP-SL era buscar un puente de comunicación entre sus «comités populares abiertos» de Bellavista, en el río Aguaytía y Boquerón, en la CFB, y así evitar navegar por el río y ser emboscados fácilmente por las Fuerzas Armadas. La única opción para abrir este puente era atravesando la quebrada del río Shambo, zona que estaba dentro del territorio de los cashibo-cacataibo.

La respuesta a esta interrogante tiene connotaciones políticas y, sobre todo, culturales. En lo concerniente a la estrategia política asumida por los nativos, existió un acuerdo entre el clan Bolívar, muy influyente en la comunidad de Mariscal Cáceres, y el PCP-SL. Esto evitó la presencia de elementos subversivos en los territorios cashibos.

El clan Bolívar se entrevistó con el mando político de Bellavista, conocido como *Caretas*, para señalar las acciones que debían ejecutarse después de concretarse el pacto. El acuerdo alcanzado tuvo varios puntos: se

<sup>505</sup> Véase la entrevista con Lurem (casete n.º 74-75).

<sup>506</sup> Mariscal Cáceres es la comunidad cashibo-cacataibo más importante del río Aguaytía. Fue fundada por Simón Bolívar Odicio, líder nativo que fue el canal comunicante entre los cashibo y la sociedad nacional en la década de 1940.

hizo entrega de diez hectáreas de tierras comunales al PCP-SL en una zona denominada Iñeca, cerca de Bellavista, por un lapso de cinco años a condición de que no sembraran coca sino productos para su alimentación;<sup>507</sup> que se respetase el tránsito terrestre y fluvial de los nativos; y, finalmente, que no se llevasen de forma obligatoria a los jóvenes cashibos para integrarlos a la «lucha armada».

Este acuerdo garantizó, en parte, la seguridad de los nativos en una zona absolutamente dominada por el PCP-SL y el narcotráfico.

Y se dice que este acuerdo garantizó en parte la integridad de los nativos porque sólo regía para los miembros del PCP-SL ubicados en los «comités populares abiertos» del río Aguaytía mas no para los otros «comités» de Padre Abad ni para la «fuerza principal» que venía del Alto Huallaga.<sup>508</sup> ¿Cómo se explica que quienes desconocían el pacto no actuaran violentamente contra los nativos? Aquí entran a tallar las connotaciones míticas y culturales.

Si bien la población cashibo-cacataibo es mucho menor en comparación con otros grupos étnicos de la región, ella ha sabido aprovechar diversas imágenes construidas a partir de viejas tradiciones y mitos, lo cual le sirvió para defenderse de los ataques del PCP-SL.

Diversos trabajos etnográficos y fuentes históricas hablan del espíritu aguerrido de los cashibo-cacataibo. Sin lugar a dudas, esto era de conocimiento del PCP-SL, lo cual lo obligaba a mantener cierto «respeto» hacia los nativos. Esta percepción del PCP-SL era alimentada por el excelente conocimiento de los cashibo del territorio y el efectivo manejo del arco y la flecha a la cual se le ponía varios tipos de venenos. Con todo esto, el PCP-SL temía ser emboscado durante sus caminatas nocturnas en lugares que no eran de su absoluto dominio y, lo peor de todo, ser muertos por armas silenciosas y mortales:

Nosotros tenemos armas que no se ven, no suenan. Por eso nos tenían miedo y no nos molestaban. (Chino. Comunidad nativa cashibo-cacataibo Mariscal Cáceres, distrito de Aguaytía, Padre Abad)

Sendero [el PCP-SL] sabía que nosotros usábamos un veneno que, cuando toca algo, muere, no hay doctor que lo cure. Ellos decían: si un cacataibo te manda un flechazo, la flecha te sigue y te agarra y eso es peor. (Don Goyo. Comunidad nativa cashibo-cacataibo Mariscal Cáceres, distrito de Aguaytía, Padre Abad)

Luego de la incursión del PCP-SL a la comunidad Mariscal Cáceres, los nativos comenzaron a formar grupos de defensa. Para ello, se colocaban sus trajes de guerreros, se pintaban el rostro y cogían sus flechas. Así, cuando el PCP-SL pretendía pasar por la comunidad, ya sea a Bellavista o al Shambo, la evitaban o la rodeaban de noche: «Cuando andábamos de Huipoca a Nuevo San Martín o Bellavista, debíamos ir por las trochas, pero el único camino era por los territorios de los cacataibo. Cuando pasábamos por ahí, teníamos que pasar sin linternas y agarrados de las ropas porque, al mínimo ruido, podían soplar y ahí nomás quedábamos [...]» (Luren. Distrito de Aguaytía, Padre Abad).

Asimismo, existe una peculiar y tergiversada imagen del cashibo. La gente de otras etnias y agricultores mestizos afirman que antiguamente los cashibo eran caníbales y devoraban a sus enemigos y a todo aquel extraño que pasara por sus territorios. Esta imagen idealizada de antropofagia también fue asumida por el PCP-SL, cuyos integrantes mostraban temor al momento de entablar relaciones con los nativos y que, de cierta forma, los impulsaba a tenerles respeto o mucha desconfianza. Pero los nativos usaron esta imagen para acrecentar el temor entre integrantes del PCP-SL. A pesar de ello, la imagen de caníbal es un estigma que hasta el día de hoy los persigue: «Sí pues, dicen que comíamos gente, pero, cuando nuestros antepasados mataban a los enemigos, no se los comían, sino más bien usaban sus huesos para hacer armas. Por eso los mestizos nos dicen que comíamos gente. Nunca hemos comido gente» (Chino. Comunidad nativa cashibo-cacataibo Mariscal Cáceres, distrito de Aguaytía, Padre Abad).

Es importante señalar que el espíritu guerrero de los cashibo también les sirvió para crear fronteras étnico-culturales entre ellos y los mestizos de los caseríos. Como ellos se consideraban valientes y guerreros, a los mestizos los veían como a unos cobardes por el hecho de dejar que el PCP-SL les impusiera su organización y no tener ninguna capacidad de reacción ni defensa.

<sup>507</sup> Se desconoce si realmente los miembros del PCP-SL acataron el acuerdo sabiendo que las chacras circundantes a Bellavista se dedicaban absolutamente al cultivo de coca.

<sup>508</sup> Además, por el lado de los nativos, la existencia de conflictos entre clanes tradicionales también podía hacer peligrar el acuerdo.

Del mismo modo, el hecho de no sembrar coca era asociado a su condición natural de hombres libres, lo cual defendían en extremo, y denotaba una vinculación con las tradiciones de sus ancestros. En cambio, los mestizos que sí cosechaban coca eran relacionados con la esclavitud, la debilidad y los vicios. Esta frontera entre los cashibo y los «otros» era impulsada mayormente por los nativos adultos. Sin embargo, los jóvenes no la reproducían, ya que muchos de ellos ya conocían las costumbres de los mestizos tras su experiencia en la actividad del sembrío de coca. Esto generó un tipo especial de ruptura generacional que será desarrollado en el capítulo sobre las secuelas de la violencia.

Los cashibo-cacataibo son una etnia en proceso de extinción debido a un decrecimiento demográfico en los últimos veinte años, a su organización comunal cerrada y al uso cada vez menor de su idioma. Otra estrategia cultural para defenderse del PCP-SL fue justamente el uso de su idioma y, debido a ello, no se involucraron directamente en el proceso de violencia. A ello se añade el total desconocimiento del PCP-SL no sólo de la lengua de los cashibo, sino de las diversas etnias asentadas en la Amazonía.

Sin embargo, el uso del idioma no significó su revitalización; sino, por el contrario, se restringió a la comunidad sin la posibilidad de compartirlo con gente foránea. Es paradójico que los nativos enfaticen el uso del idioma para mantener la cohesión de la comunidad en un contexto de violencia, pero que ello, posteriormente, no se refleje en una revitalización de éste y, por lo tanto, revierta esa tendencia hacia la extinción.

Finalmente, otra estrategia de supervivencia de los cashibo fue su cooperación con la Marina de Guerra en la lucha contrasubversiva. Uno de los motivos para cooperar fue que ésta restauró, en parte, la tranquilidad en la zona al ejercer una táctica menos violenta que la que efectuó el Ejército. A ello se añade una peculiar imagen dicotómica de los nativos: la rectitud de los infantes de Marina en comparación con la irresponsabilidad de los soldados del Ejército: «Los soldados eran unos irresponsables, se ponían a tomar con mujeres. Nadie los respetaba. En cambio, cuando vino la Marina [de Guerra], fue diferente, eran hombres más serios, más altos, su presencia nomás te daba miedo» (Johana. Distrito de Aguaytía, Padre Abad).

Esta nueva manera de actuar recuperó la confianza de la población, nativos y mestizos, hacia las fuerzas del orden. Así, muchos jóvenes cashibo sirvieron de guías a los infantes de Marina en sus operativos contrasubversivos: les mostraban los caminos por donde transitaban los miembros del PCP-SL, la ubicación de sus bases más escondidas y les proporcionaban alimentos. A su vez, la Marina de Guerra los incentivaba a fortalecer las rondas de autodefensa que los nativos ya habían formado para defenderse de posibles ataques del PCP-SL. Pero en ningún momento el PCP-SL les proporcionó armas.

Esta cooperación con la Marina de Guerra fue asumida por los nativos como una forma de protección y garantía de seguridad brindadas por un actor más fuerte y confiable que el PCP-SL. Estas primeras relaciones que los involucraban con instituciones formales se reprodujeron, posteriormente, con organismos sectoriales que trabajan activamente en el desarrollo de la región. Una de ellas es DEVIDA y otra el CORAH. Los cashibo también sirvieron de guías y de mano de obra. Sin embargo, esta cooperación con el Estado les ha traído varios problemas con los cocaleros y los rezagos de las huestes del PCP-SL aún presentes en la zona. Las constantes amenazas que les hacen a los cashibo los obligan a estar permanentemente alertas ante cualquier agresión. En este sentido, su milenario espíritu guerrero los sigue impulsando a sobrevivir.

#### **11.5.2. Los shipibo-conibo: el rechazo y el aprovechamiento para sobrevivir a la violencia**

El grupo étnico shipibo-conibo se encuentra asentado a lo largo del río Ucayali, específicamente en la provincia de Coronel Portillo. Durante la época de violencia, ellos también sufrieron las incursiones del PCP-SL; pero, al igual que los cashibo, no fueron obligados a formar «comités».

La presencia de la subversión se dio desde 1988 con las incursiones del MRTA en las quebradas del Caco y Sheshea. Sin embargo, su actividad duró un corto período y no pudo convencer a los nativos que se unieran a su «lucha armada». La presencia del PCP-SL en el río Ucayali se dio entre fines de 1989 e inicios de 1990. Ellos tampoco pudieron convencer a los nativos para que se organizaran.

El fracaso del MRTA y del PCP-SL para organizar las comunidades shipibo-conibo también tuvo elementos culturales usados por los nativos como formas de supervivencia que se explicarán a continuación.

Cuando el PCP-SL llegó a las comunidades y pidió que se organicen en «comités», la respuesta de los nativos fue singular: ¿para qué organizarnos en «comités» si tenemos nuestras propias formas de organización? Es decir, no aceptaban una organización foránea que erradicara la dinámica de su organización comunal, menos aún cuando esa organización tenía connotaciones violentas, pretendía obligarlos a sembrar coca y quitarles a sus jóvenes para que se incorporen a la subversión:

Nosotros no quisimos aceptarlos en Curiaca porque no entendíamos su política y querían llevarse a nuestros jóvenes. Además, tenemos nuestra propia organización y estamos afiliados a la FECONAU. (Roger. Comunidad nativa shipibo-conibo de Curiaca del Caco, distrito de Iparia, Coronel Portillo)

En Macaya querían nombrar delegados pero nosotros nos negamos porque ya teníamos nuestros jefes. Le preguntábamos por qué venían con armas si sólo querían conversar. Les exigimos respeto por nuestras autoridades y a nuestro pueblo. (Saúl. Comunidad nativa shipibo-conibo de Caco Macaya, distrito de Iparia, Coronel Portillo)

Cuando nos explicaron sus leyes de no tener muchas mujeres, no robar, el jefe de la comunidad [de Junín Pablo] les dijo que ellos no tenían mujeres y que el robo lo habían traído los mestizos de los caseríos. (Valeriano. Comunidad nativa shipibo-conibo de Junín Pablo, distrito de Masisea, Coronel Portillo)

En efecto, los shipibos tenían toda una estructura comunal y una dinámica cultural totalmente distinta de la organización que pretendía imponer el PCP-SL. Por ejemplo, el PCP-SL desconocía su idioma nativo, su filiación matrilineal y su histórica habilidad comercial.

Sin embargo, a pesar de que dentro de las costumbres y cosmovisión de los shipibos no esté el uso de la hoja de coca, sí tenían experiencia en su cultivo porque trabajaban como peones en los cocales de los caseríos en el Imiria. Así, la estrategia de supervivencia fue involucrarse en la estructura económica creada por el narcotráfico mediante el alquiler de su fuerza de trabajo. Fue un comportamiento derivado de las carencias y necesidades económicas existentes entre los nativos y el aprovechamiento de la bonanza económica que ofreció el narcotráfico.

El aprovechamiento de estos beneficios económicos también se puede apreciar en dos situaciones concretas. Primero, durante el auge del narcotráfico, la capacidad adquisitiva de la población vinculada al narcotráfico aumentó como consecuencia del incremento de los precios de los productos que vendían en el mercado y el aumento de sus salarios como mano de obra en los sembríos de coca. Este drástico cambio en la estructura de precios y salarios fomentó una mayor demanda de mejores bienes y servicios. Esta demanda fue atendida, en parte, por los nativos al instalar pequeños negocios que abastecían a los narcotraficantes: «Llegó un momento en que un racimo de plátano [cinco unidades] podía venderse a diez soles y una gallina hasta en cuarenta soles. Todo tenía precios altos e incluso se pagaban en dólares» (Valeriano. Comunidad nativa shipibo-conibo de Junín Pablo, distrito de Masisea, Coronel Portillo).

De alguna manera esta nueva estructura de precios incentivó a los nativos a que continuaran sembrando sus productos agrícolas tradicionales y dejar paulatinamente su trabajo en el cultivo de la hoja de coca.

La segunda situación tuvo que ver con el alquiler de pistas de aterrizaje para los vuelos de narcotraficantes. Esto se dio en dos comunidades shipibo-conibo: Amaquiria y Nuevo Loreto. En Amaquiria existía una pista de aterrizaje construida en 1975 por Adra-Ofasa para vuelos de ayuda social. El aumento de la violencia hizo que ésta y otras entidades se retiraran de la zona. Con el auge del narcotráfico, las firmas le alquilaron a la comunidad la pista de aterrizaje. Los nativos y algunos colonos pusieron diversos negocios como restaurantes, tiendas de abarrotes y bares. La Marina de Guerra, enterada de esto, amenazó a la comunidad con bombardear la pista de aterrizaje. La oportuna intervención de Adra-Ofasa impidió tal acción.

En el caso de Nuevo Loreto, la calle principal fue utilizada varias veces como pista de aterrizaje por los narcotraficantes, los cuales pagaban un dinero a los dirigentes de la comunidad. La Marina de Guerra también amenazó con destruirla si seguían permitiendo vuelos ilegales. Se desconoce cuál fue el uso que se le dio al dinero que le entregaron a los nativos por el alquiler de esas pistas y quiénes fueron los reales beneficiados.

En conclusión, si los cashibo tenían ese espíritu guerrero para enfrentar al PCP-SL, los shipibo se caracterizaban por su espíritu comercial, que les permitió acomodarse a una coyuntura política y económica dominada por el auge del PCP-SL y el narcotráfico.

Finalmente, otra estrategia usada por los shipibo fue que decidieron formar varios CAD para defenderse de las incursiones del PCP-SL. No fue una actitud preponderante, aunque hubo excepciones muy importantes.

El caso más significativo fue la comunidad nativa de Caimito. El PCP-SL incursionó en el mes de noviembre de 1989 y obligó a la gente a organizarse en «comités». La población se negó porque no sembraba coca y no quería que se lleven a sus jóvenes. La intervención del antropólogo alemán Bruno Illius, residente en ese momento en la comunidad, fue importante para que el PCP-SL no insistiera:

Cuando llegaron los senderistas [integrantes del PCP-SL] y reunieron a la población, estaba Bruno [Illius] trabajando varios días con nosotros. Él tenía miedo que le rompan sus documentos. Por eso habló con los jefes senderistas [del PCP-SL] y les dijo que él comprendía lo que ellos estaban haciendo, que él había estado en China durante la época de Mao y que ésa no era la forma de ir del campo a la ciudad ni tratar a la masa. Los senderistas [miembros del PCP-SL] se quedaron escuchándolo y lo respetaron. (Ancón. Comunidad nativa shipibo-conibo de Caimito, distrito de Masisea, Coronel Portillo)

A partir de ese momento, la comunidad decidió defenderse ante cualquier nueva incursión del PCP-SL y formaron una ronda que, posteriormente, entabló contacto con la ronda de Puerto Alegre.

En 1991, tras la formación del CAD de Puerto Alegre, Caimito se convirtió en sub base y su objetivo era vigilar y combatir la presencia del PCP-SL en el lago Imiria. También brindó apoyo a la Marina de Guerra en operativos contrasubversivos en el río Tamaya y afluentes. Cuando se derrotó al PCP-SL en la zona, el CAD de Caimito se dedicó a combatir la delincuencia común, secuela no sólo de la subversión sino también de la violencia generada por el narcotráfico.

Al igual que otros CAD, el de Caimito se convirtió en una especie de fuerza garante de la seguridad y el orden, aunque varias veces sus acciones no estuvieran enmarcadas dentro de la ley. En el año 1993, el CAD llegó a un acuerdo con los narcotraficantes para brindarles seguridad ante el incremento de la delincuencia y el caos imperante en el Imiria. En ese momento, el PCP-SL prácticamente ya no tenía presencia en la zona. A cambio de seguridad, los narcotraficantes le dieron al CAD un bote y su respectivo motor y le entregaron municiones. Este convenio duró menos de un año porque el negocio de la droga comenzó a decaer.

Asimismo, hubo otras experiencias de autodefensa por propia iniciativa de los nativos, aunque muchas veces sin apoyo logístico de la Marina de Guerra. Por ejemplo, estuvo la policía comunal de Caco Macaya y el CAD de Colonia del Caco. Pero también existieron resistencias de los shipibos a formar rondas o cualquier entidad que les brindara protección por el temor de verse atrapados entre dos fuegos: la Marina de Guerra y el PCP-SL.

#### **11.5.3. El CAD de Puerto Alegre: actor estratégico para la derrota del PCP-SL**

En el río Tamaya ocurrió una de las respuestas civiles a la violencia mejor organizadas y efectivas de todo el departamento de Ucayali. El caserío de Puerto Alegre organizó un CAD, que, por su ubicación estratégica, fue un elemento fundamental para que el PCP-SL no dominara absolutamente el lago Imiria (véase el mapa).<sup>509</sup>

El PCP-SL apareció en el río Tamaya y en el Imiria a finales de 1989. En esa oportunidad, la FP del Alto Huallaga incursionó en todos los caseríos, impuso su organización y estableció «comités populares abiertos» y «comités organizados». El objetivo del PCP-SL fue dominar esta zona porque ello le permitía controlar el negocio del narcotráfico, que, para esa época, ya tenía una presencia importante. Así, todos los caseríos fueron obligados por el PCP-SL a cosechar una hectárea de coca, cuyo producto sería sólo para el partido, y una hectárea de uso propio para los agricultores.

Además, el PCP-SL ejerció un férreo control del tránsito terrestre y fluvial a los pobladores del río Tamaya y el lago Imiria. Instaló varias garitas de control y, en caso de alguna irregularidad, ejecutó a los sospechosos. Asimismo, cobraba cupos a los comerciantes y a los pocos madereros que quedaron en la zona.

---

<sup>509</sup> Si bien algunos centros poblados organizaron varios CAD, no lograron sobrevivir mucho tiempo. Uno de ellos fue el de Masisea, que se formó en 1991, con asesoramiento de la Marina de Guerra. No fueron armados por expreso pedido de la población para evitar estar entre dos fuegos, pero cometieron varios excesos contra la población y los comerciantes: «Este CAD existió sólo seis meses y más se dedicó al decomiso arbitrario de bienes de la gente y de los comerciantes. Incluso el jefe del CAD en ese tiempo se quedaba con la mayor parte de lo incautado y eso generaba peleas con los demás. Así que el pueblo decidió no tener CAD» (Profe Aroldo. Distrito de Masisea, Coronel Portillo).

El ingreso del PCP-SL a Puerto Alegre fue el 4 de noviembre de 1989, un día después de la incursión a Masisea. En esa oportunidad, reunieron a la población y nombraron coercitivamente a mandos y delegados. Uno de ellos no quiso aceptar el cargo y el PCP-SL lo apresó para hacerle un «juicio popular». Sin embargo, la propia población se opuso tenazmente a su ejecución. Durante casi nueve meses la población de Puerto Alegre soportó la presencia del PCP-SL aunque ya daba muestras de indignación frente al excesivo control sobre la población.

Durante las elecciones de 1990, los miembros del PCP-SL se apostaron en una explanada cerca de Puerto Alegre para impedir, bajo amenaza de muerte, que los habitantes del Tamaya y el Iimiria fueran a Masisea a votar.<sup>510</sup> No obstante, algunos pobladores lograron salir y buscaron a la Marina de Guerra para informarles de lo que pasaba en el Tamaya. Inmediatamente, helicópteros sobrevolaron la zona y bombardearon las principales garitas de control del PCP-SL.

Fue el momento en que los pobladores solicitaron apoyo a la Marina de Guerra para fortalecer a la ronda de autodefensa que, de forma incipiente, ya existía.<sup>511</sup> Así, se les brindó varias retrocargas y municiones. A partir de ese momento, los pobladores de Puerto Alegre establecieron una estrecha colaboración con la Marina de Guerra y una lucha frontal contra el PCP-SL. Su excelente conocimiento de la red hidrográfica del río Tamaya y sus afluentes, varaderos y trochas que comunicaban con los escondidos «comités» del PCP-SL, fueron fundamentales para la paulatina derrota de esta organización en la zona.

El CAD se formó el 21 de marzo de 1991, con asesoramiento logístico y técnico de la Marina de Guerra. Llegaron a tener hasta cincuenta miembros, todos residentes de Puerto Alegre. El servicio en el CAD se volvió obligatorio para los hombres desde los 17 años. Una vez establecidos, tuvieron enfrentamientos directos con el PCP-SL y lo derrotaron la mayoría de veces. Por su estratégica ubicación geográfica y la bravura del CAD de Puerto Alegre, el PCP-SL intentó contrarrestar esta situación instalando un «comité popular abierto» en el caserío de Panuco, que contaba con un contingente militar. Este «comité» tuvo la misión de detener las acciones contrasubversivas del CAD de Puerto Alegre. Sin embargo, no lo lograron.

Asimismo, el CAD de Puerto Alegre guió a los helicópteros de la Marina de Guerra hacia los «comités» del PCP-SL cuya ubicación por río o trocha era prácticamente imposible. Así, la Marina de Guerra llegó a bombardear los «comités» de Vinuncuro, Suaya y Butsaya. En este último estaban refugiadas las últimas fuerzas militares del PCP-SL. La derrota total del PCP-SL en la zona y, prácticamente, en la provincia de Coronel Portillo se logró en 1994.<sup>512</sup>

Actualmente, el CAD de Puerto Alegre tiene una garita de control obligatorio para las embarcaciones que surcan por el río Tamaya hacia el Iimiria y viceversa. La inexistencia de Fuerzas Policiales que resguarden y controlen el orden público en los distritos de Masisea y de Iparia convierten a los CAD en una institución informal que garantiza la seguridad de la zona ante el incremento de la delincuencia y los rezagos de violencia del narcotráfico y la subversión. A partir de 1998, la Marina de Guerra les quitó el apoyo debido a que los CAD han pasado a depender directamente de la Prefectura.

Esta situación ha devenido en el resurgimiento del narcotráfico en la zona. Según la gobernación de Masisea, mucho tiene que ver el dinero que pagan los narcotraficantes al CAD de Puerto Alegre para que puedan pasar los productos químicos para la elaboración de droga en los laboratorios que existen en Noaya, Nuevo Horizonte y Rivera.

Si bien hay que resaltar la iniciativa de los pobladores para reaccionar y organizarse frente al abuso del PCP-SL, también hay que señalar que el CAD de Puerto Alegre respondió con la misma violencia en sus operativos. En varios casos, emboscaban a patrullas del PCP-SL o apresaban a mandos subversivos en sus controles por el río y los eliminaban.

<sup>510</sup> Es importante señalar que Puerto Alegre es el primer caserío en la ruta del río Tamaya hacia el Iimiria. Por lo tanto, cualquier embarcación que transite por el río debe pasar necesariamente por su puerto.

<sup>511</sup> Entre marzo y abril de 1990, la Marina de Guerra realizó algunos operativos contrasubversivos en el río Ucayali para prevenir acciones armadas del PCP-SL durante el proceso de elecciones. Visitó caseríos cuya ubicación era estratégica y los animó a formar rondas de autodefensa. Su recorrido por el río Tamaya sólo alcanzó hasta el caserío de Panuco y no llegaron a ingresar al Iimiria. Muy pocas poblaciones lograron formar rondas por temor a las represalias del PCP-SL.

<sup>512</sup> Cabe señalar que, paralelamente, el negocio del narcotráfico había decaído notablemente. La debilidad militar del PCP-SL se debió a que la FP del Alto Huallaga prácticamente ya no incursionaba en la zona y a que los mandos subversivos se habían corrompido en demasía por su relación con el narcotráfico.

Finalmente, es importante señalar el papel cumplido por varios pobladores de nacionalidad brasileña, quienes motivaron a la población a defenderse de la agresión del PCP-SL. Esta influencia se corrobora con el hecho de que, al formarse el CAD en 1991, se nombró como primer presidente a uno de los colonos brasileños.

Los colonos brasileños se habían instalado en el río Tamaya desde la década de 1930. Posteriormente, la mayor parte de ellos se reunió en el caserío de Puerto Alegre, que fue fundado el 24 de junio de 1940. Desde entonces, han tenido mucha participación en la organización y el desarrollo económico y político del caserío.

#### **11.5.4. La respuesta de la población urbano-rural campesina asentada en la CFB**

Antes de la llegada del PCP-SL, los narcotraficantes tenían el control del comercio de la droga a través de «traqueteros» y sicarios, quienes abusaban de los campesinos quitándoles la droga procesada y las arrobas de hoja de coca o engañándolos con el peso de la droga o de la hoja. Además, se incrementaron la delincuencia y las muertes producto de ajustes de cuentas relacionados con la droga.

Cuando el PCP-SL llegó a la zona, se convirtió en el mediador entre los agricultores y las firmas de narcotraficantes. Ello modificó las relaciones de explotación que éstos habían impuesto. Incursionó en los diversos caseríos de la CFB y convocó a la población para realizar asambleas donde los adoctrinaban y los estimulaban para luchar contra el «viejo Estado» e imponer el «nuevo estado» a través de la constitución de «comités populares abiertos» y «comités organizados». Estos «comités», además de tener la tarea de imponer el «nuevo estado», buscaban reordenar el negocio de la droga. Así, al igual que en el Alto Huallaga, impuso «balanzas populares» en algunos lugares importantes y colocó personas dedicadas exclusivamente a controlar el peso de la droga.

A partir de este momento, el PCP-SL empezó a mostrar sus verdaderos objetivos: controlar totalmente a la población y el negocio de la droga.

La población de la provincia de Padre Abad asentada en la CFB asumió dos actitudes distintas para responder a la presencia del PCP-SL.

Una parte de la población asentada en la CFB optó por una respuesta pasiva frente al PCP-SL fundamentada en los siguientes aspectos:

- La existencia de un pacto de convivencia que, tácitamente, la población había firmado con el PCP-SL y con las firmas de narcotraficantes para seguir cosechando la hoja de coca y procesar la droga. Para la población, la presencia del PCP-SL significó el salvoconducto que les permitió seguir lucrando con la ilegal producción de droga, así como tener a un fiscalizador «justo» del negocio: «Nosotros agradecemos a los senderistas [miembros del PCP-SL], pues ellos impusieron el orden. Antes no se podía andar tranquilo, no había seguridad [con referencia al negocio de la droga]; los narcos [narcotraficantes] abusaban de los agricultores y hasta te mataban» (Miedo. Comunidad Nativa Cashibo-Cacataibo de Mariscal Cáceres, distrito de Aguaytía, Padre Abad).
- Con esta nueva «protección», la población accedió, sin ningún convencimiento político y más que todo por un interés económico, a organizarse en «comités organizados» y «comités populares abiertos». No obstante, existían riesgos: romper este pacto significaba abandonar las chacras, los beneficios económicos que traía consigo la comercialización de droga y, principalmente, ser sindicado por el PCP-SL como «soplón», lo que significaba una muerte segura.
- El temor que generó el PCP-SL con la aplicación de «juicios populares» fue su mejor estrategia para tener el control total de los caseríos de la CFB. Cada cierto tiempo, el PCP-SL tenía que ejecutar a alguna persona que hubiese o no transgredido las normas éticas y morales que el partido impartía. Muchas personas fueron asesinadas frente a sus hijos, familiares y amigos para infundir un gran temor en la población.
- Esta práctica del PCP-SL se añade la actividad represiva y sangrienta de las Fuerzas Armadas, especialmente del Ejército, lo que denotaba un total desconocimiento del real problema en el que se encontraba la población civil: vivir entre los fuegos del PCP-SL y el Ejército. Además, esta actitud llevó a que la población construyera una imagen negativa de las Fuerzas Armadas y que, junto a los abusos cometidos por el Ejército contra la gente y el negocio de la droga, contribuyeran a que las personas aceptaran la propuesta del PCP-SL.
- Hubo muchos pobladores que no aceptaron las condiciones impuestas por el PCP-SL y optaron por retirarse a los principales centros urbanos de la región, dejando atrás sus chacras, sus hectáreas de hoja de co-

ca y los posibles beneficios económicos de la comercialización de la droga. El PCP-SL confiscaba estas tierras abandonadas y las repartía a los peones cocaleros interesados en poseer chacras. Estas personas estaban sujetas siempre a los designios del partido.

El desplazamiento forzado por la violencia en los caseríos de la CFB incrementó el número de asentamientos humanos en la ciudad de Pucallpa.

Otra parte de la población respondió activamente contra la presencia del PCP-SL, sobre todo a partir de 1992, y se relaciona con dos acontecimientos importantes de la lucha contrasubversiva en la región: por un lado, la Marina de Guerra asumió la jefatura del comando político militar de Ucayali; por otro, el cambio de la estrategia contrasubversiva, que se basó en ganarle la base social al PCP-SL con acciones cívicas que demostrarían a la población civil que las Fuerzas Armadas respetaban la vida de las personas y participaban activamente en el desarrollo de las poblaciones.

Esta nueva estrategia de la Marina de Guerra también incentivó la organización de varios CAD en los diferentes caseríos de la CFB. Sin embargo, los resultados no fueron del todo satisfactorios, ya que los caseríos evitaron conformarlos debido al temor que todavía infundía el PCP-SL y, principalmente, a la posibilidad de quedarse sin ingresos económicos, porque estar ligados a la Marina de Guerra significaba espantar a los «trajeteros» y a las firmas de narcotraficantes.

Sólo dos caseríos aceptaron constituir sus CAD: Boquerón y Huipoca. Lamentablemente, la población de Boquerón desistió rápidamente de seguir constituyendo su CAD básicamente porque era el centro de producción y comercialización de droga más importante de Padre Abad y no quería arriesgarse a perder esa condición que les significaba beneficios económicos. En cambio, Huipoca sí constituyó exitosamente su CAD. Coincidientemente, ambos habían sido constituidos por el PCP-SL como «comités populares abiertos».

Para defenderse de las incursiones del PCP-SL, este CAD tenía veinte integrantes, de los cuales diez hacían vigilia en el día y diez en la noche. En sus inicios, este CAD no contaba con armas, ya que la Marina de Guerra instaló una base patrulla en el caserío. Además, se situaba a pocos kilómetros de la base contrasubversiva de Aguaytía.

Para desactivar el «comité popular abierto» formado por el PCP-SL e impedir las emboscadas contra sus patrullas, la Marina de Guerra optó por darle armas al CAD y apoyar a la población con herramientas para el desarrollo de su vida cotidiana:

Yo fui a entregar, fuimos en el helicóptero, aterrizamos en la cancha de fútbol; nuestra base estaba en el colegio y le regalé a la gente cocinas y otras cosas. Desfilaron muy bonito. Hacíamos todo tipo de actividades, hasta deportes hacíamos. Tratábamos de que las bases se integren con esta gente. Incluso, cuando tenían alguna fiesta, se le regalaba a veces cerveza, se les mandaba cocinas, todo lo que nos mandaba el Comando Conjunto [de las Fuerzas Armadas]. (Almirante. Pucallpa, Coronel Portillo)

Si bien no realizaron capturas de mandos del PCP-SL, el CAD de Huipoca cumplió un papel importante para detener el avance y la presencia del PCP-SL en la CFB. Su estrecha relación con la Marina de Guerra no sólo impidió que el PCP-SL volviera a Huipoca, sino que también el negocio de la droga disminuyó su presencia.

#### 11.6. LA IGLESIA CATÓLICA Y SU DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN UCAYALI

Ante la violencia desatada en el departamento de Ucayali, la Iglesia Católica, a través de la Vicaría de Pucallpa, estableció en 1988 la Oficina de Derechos Humanos de la Vicaría, con sede en Pucallpa. Esta Oficina tuvo dos áreas prioritarias de atención: el área de denuncias de violaciones de los derechos humanos, con una asesoría legal para las víctimas de la violencia, y el área de formación, cuyo objetivo fue desarrollar programas de acompañamiento afectivo-racional a fin de promover la creatividad y generar respuestas alternativas de pacificación y el tratamiento psicoafectivo a las víctimas de la violencia política.

Las acciones desarrolladas por el personal de la Vicaría se centraron específicamente en la ciudad de Pucallpa. Por la magnitud de la violencia, no lograron articular una red de comunicación directa con la población afectada. Quizá por ello no se involucró en el posterior proceso de arrepentimiento de mandos del PCP-SL o del MRTA ni tuvo un papel preponderante para incentivar a la población a organizar su autodefensa contra el PCP-SL.

Sin embargo, fue la propia población afectada la que se trasladó desde sus caseríos hasta Pucallpa para denunciar las desapariciones, abusos o asesinatos perpetrados por los grupos alzados en armas o por las Fuerzas Armadas. A partir de estas denuncias, los abogados de la Oficina de Derechos Humanos indagaban sobre los hechos e inclusive, cuando el causante era el Ejército o la Marina de Guerra, se lograba tener acceso a información directa de las bases militares.

La Iglesia, a través de la Oficina de Derechos Humanos, denunció la masacre de los ocho campesinos en la movilización del 9 de febrero de 1989 y constató el asesinato de gente que era arrojada viva desde helicópteros en los agujales de Pucallpa. Estas personas fueron conocidas como los «caídos del cielo».

Sólo en 1993, la Oficina de Derechos Humanos logró conformar una red de apoyo nombrando agentes pastorales que tenían la misión de difundir el apoyo de la Iglesia a las víctimas de la violencia, así como informar a la Oficina sobre los movimientos o acontecimientos ligados a la violación de derechos humanos. Con esta estrategia, la Oficina de Derechos Humanos de la Vicaría logró crear nuevos espacios para que la población pudiera identificar aquellos factores que habían provocado la violencia y consiguió que la gente identificara las posibles alternativas para resolver este problema.<sup>513</sup> También debía estar atenta a generar una corriente de opinión en la población rural (desde las comunidades cristianas de base) y urbana (desde las diversas entidades públicas y privadas) a favor de la pacificación regional.

En la actualidad, es la organización que maneja la base de datos más importante sobre la magnitud y el grado de afectación de los derechos humanos en la región de Ucayali.

#### 11.7. CONCLUSIONES

El departamento de Ucayali no ajeno al proceso de violencia que se dio en el resto del país debido, principalmente, a la actividad del PCP-SL y el MRTA. Sin embargo, la expansión y asentamiento de los grupos subversivos en estas lejanas tierras amazónicas tuvo connotaciones muy particulares. En primer lugar, la difícil geografía de Ucayali fue un factor para que el PCP-SL y el MRTA no lograran articular su trabajo político con acciones militares contundentes, como sí lo hicieron en otros lugares del país. Si bien el PCP-SL logró establecer una serie de «comités organizados» y «comités populares abiertos» en las riberas de los ríos Aguaytia y Tamaya, así como en la CFB, éstos no tuvieron la consistencia organizativa suficiente, sino, más bien, tuvieron poco trabajo político y militar como para que derivasen en «comités de lucha» y se ejecutases los planes del «equilibrio estratégico» que se venían desarrollando a escala nacional. Esto se vio claramente en la forma de administrar los «comités organizados» de la CFB y el río Aguaytía. Cuando el PCP-SL entró a los caseríos a organizarlos, nombró como delegados y mandos a gente del lugar, pero, en ningún momento, dejó un contingente de la FP o formó una FL. Por eso, en la mayoría de casos el funcionamiento efectivo de los «comités organizados» sólo se hacía cuando estaba presente la fuerza coercitiva de la FP del Alto Huallaga; pero cuando ésta estaba ausente, la población seguía con su vida cotidiana. Esto no significó que la población haya dejado de sufrir la violencia; porque, cuando no estaba la FP, entraban las Fuerzas Armadas a buscar a los mandos del PCP-SL o efectuar detenciones ilegales.

La limitación geográfica como un factor importante para que el PCP-SL no organizara los caseríos como lo hacía en otras partes del país fue mucho más evidente en la provincia de Coronel Portillo.

La CVR considera que un paso decisivo para enfrentar legalmente a la violencia, en cualquiera de sus manifestaciones, debe ser de carácter económico y debe estar dirigido a enfrentar la situación de miseria en la que vive la población (urbano-campesina mestiza e indígena) en la región Ucayali, de tal manera que puedan encontrarse respuestas concretas a las necesidades reales de la población. Esta aguda crisis puede convertirse en condición favorable para el desarrollo de nuevas experiencias subversivas.

En la investigación, se ha señalado que el MRTA y el PCP-SL instituyeron su base social en aquellos sectores sociales marginados por el Estado y que se hallaban en un creciente proceso de deterioro y marginación. Por ello, el Estado debe modificar sustancialmente su política de asignación de recursos y toma de decisiones en este rubro. Aun cuando la crisis económica por la que atraviesa el país impide contar con los

---

<sup>513</sup> Entre las actividades desarrolladas por la Oficina de Derechos Humanos se pueden mencionar los encuentros de jóvenes cristianos, marchas por la paz, encuentro de niños por la paz, foros regionales por la paz, talleres de educación en derechos humanos, etc.

recursos suficientes para invertirlos en el desarrollo regional, es necesario tomar la decisión política de apoyar a estas poblaciones afectadas duramente por la violencia y el narcotráfico. Es posible reemplazar la actividad del cultivo de la hoja de coca con verdaderos programas de desarrollo agrícola alternativos, más aún si existe la voluntad entre los agricultores para cultivar otros productos legales en condiciones de mercado favorables y de apoyo estatal incondicional.

## 12. LA ESTRATEGIA DE PACIFICACIÓN EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO HUALLAGA

Desde 1980, el valle del Huallaga fue un espacio atravesado por el conflicto armado interno. Fue un escenario complejo donde paralelamente actuaban el PCP-SL, el narcotráfico y las Fuerzas Armadas. Estos actores fueron componentes importantes para la agudización de la violencia en la zona y crearon situaciones de convivencia de impunidad, confusión, ilegalidad y corrupción.

Como resultado de este contexto, se produjeron múltiples violaciones de los derechos humanos, muchas de las cuales nunca fueron denunciadas a las autoridades competentes por el temor a los agentes de seguridad del Estado o también porque las víctimas no pudieron ser identificadas al tratarse de emigrantes temporales para las cosechas de coca. Ello se complicó por la imposición del PCP-SL de llamar a las personas por seudónimos, lo que hizo igualmente difícil la identificación de las víctimas. Similares casos ocultos e impunes sucedieron con los propios aniquilamientos del PCP-SL y militares, lo cual creó temor entre la población y familiares de las víctimas, por lo que muchos hechos nunca fueron de conocimiento de las autoridades competentes ni de la opinión pública. La década de 1990 estuvo signada en esta parte del país por detenciones arbitrarias, violaciones sistemáticas al debido proceso, arrasamiento de comunidades enteras por considerarlas subversivas y los arrepentimientos masivos relacionados con el diseño de un marco legal contrasubversivo.

Esta sección tiene como finalidad analizar cómo y cuál fue el impacto y la repercusión de las estrategias contrasubversivas vinculadas estrechamente con intereses políticos del gobierno de turno en el Perú en las zonas conocidas como «bolsón» Cuchara y «bolsón» Primavera, poniendo especial énfasis en la Operación Aries. Resulta sorprendente que las Fuerzas Armadas realizaran un operativo militar de gran magnitud en una zona donde, supuestamente, ya imperaba el orden impuesto por ellas, manteniendo arrinconados a los desarticulados contingentes del PCP-SL en la margen izquierda del Huallaga.

### 12.1. UNA ZONA CONVULSIONADA

La zona del Alto Huallaga fue ocupada con mayor intensidad desde inicios de los años cincuenta por colonos y migrantes provenientes principalmente de la sierra de Huánuco, Huancayo, Junín y Cerro de Pasco, incentivados, la mayoría de veces, por el Estado por medio de proyectos de colonización (como el de Tingo María-Tocache-Campanilla) o por iniciativa propia, obligados a desplazamientos masivos por la aguda escasez de tierras en la zona andina.

La construcción de la carretera Marginal fue la vía que propició la colonización dirigida y espontánea y la migración andina hacia la selva alta desde la década de 1960. A partir del primer gobierno de Fernando Belaunde Terry, el Estado se convirtió en el principal promotor de la colonización en la selva. El gobierno de Fernando Belaunde Terry puso gran énfasis en la construcción de carreteras, pues el objetivo era fomentar la colonización para ampliar los mercados nacionales y acceder a los internacionales con una producción diversificada para que la economía nacional no dependiera sólo de la minería. Al impulsar tales colonizaciones, su preocupación se centró en el estímulo a la producción individual (Aramburú 1990, Barclay 1990, Martínez 1988). Para consolidar la colonización espontánea, Fernando Belaunde Terry asumió que el Estado debía desarrollar la infraestructura necesaria para la población, así como generar los mecanismos para facilitar la producción agrícola y crear nuevos mercados regionales que consumieran la oferta producida por los colonos. Estas condiciones lograron incentivar a buen número de colonos, que se establecieron en el Alto Huallaga, no completamente exento de algunos conflictos debido a la heterogeneidad de los colonos y a las distintas funciones que éstos asumían (Belaunde 1953, Villanueva 1990).

En 1964 se oficializó el primer programa de colonización dirigida. Se identificaron 456,800 hectáreas libres en el valle del Huallaga, específicamente en las provincias de Leoncio Prado y Marañón (Huánuco), así como en Tocache y Mariscal Cáceres (San Martín). De esta cantidad, 180 mil hectáreas fueron clasificadas como aptas para el uso agrícola del proyecto colonizador Tingo María-Tocache-Campanilla (Aramburú 1982 y 1987, Belaunde 1959, Martínez 1988).

El proyecto de Fernando Belaunde Terry entregó títulos a 3,794 campesinos en 122,685 hectáreas y cumplió más del 90% de sus metas. Muchos de los campesinos que obtuvieron sus títulos de propiedad se habían asentado en las zonas de Tingo María, Tocache y Campanilla años antes del proyecto colonizador del Estado (Fundación para el Desarrollo Nacional 1981).

A pesar del esfuerzo y la inversión realizada por el Estado, el proyecto estatal de colonización fracasó debido a la falta de planificación en el uso racional de las tierras de aptitud agrícola (producto del conocimiento insuficiente de los suelos, que, en el mejor de los casos, se basaba en aproximaciones acerca de su disponibilidad y capacidad de uso mayor), así como en el uso de las tierras de protección y el progresivo reemplazo de la producción agrícola de policultivo por cultivos comerciales (café y cacao) dirigidos al mercado internacional. Entre otros errores, se pueden mencionar el virtual desconocimiento de prácticas agrícolas adecuadas para los ambientes amazónicos, el lento establecimiento de la infraestructura de servicios y de comunicación, la introducción de la actividad agraria donde antes se desarrollaba básicamente la actividad forestal y la no creación de mercados regionales que pudieran consumir los productos agrícolas de los colonos (Aramburú 1989, Villanueva 1989).

El incremento de la nueva población colonia originó conflictos entre los nuevos colonos y los colonos asentados con anterioridad al proyecto estatal de colonización; un severo deterioro ambiental (la degradación de los suelos y la consiguiente baja productividad de los sembríos); la inseguridad en la tenencia de la tierra, y la fragmentación de las parcelas. Además, la creciente demanda internacional por pasta básica y clorhidrato de cocaína produjo, en su momento, la masiva sustitución de los cultivos legales por los cultivos de hoja de coca (Aramburú 1989, Gallo Rivera y Tello 1994, Villanueva 1989). Sólo en el Alto Huallaga, durante 1940 se albergaba a 11,623 habitantes. El 35.2% de esta población era urbana y el 64.8%, rural. En 1981, alcanzó los 134,600 habitantes y, en 1988, contó con una población de 200 mil personas (INEI 1981 y 1988). Es decir, en el lapso de cuarenta años la población creció más de 17 veces, algo que no ocurrió ni en Lima. La razón de este incremento fue un proceso de migraciones estimulado por la construcción de la carretera Marginal y el supuesto apoyo del Estado, que permitió la movilización de grandes contingentes de pobladores. Por esta razón, surgieron nuevos pueblos como Venenillo, Santa Martha, Los Cedros, Moena, Primavera, Moyuna, San José de Pucate, Santa Lucía, Sión, etc.

En estas circunstancias, el narcotráfico ingresó al Alto Huallaga, originó un verdadero *boom* económico y exhibió públicamente la enorme incapacidad del Estado para enfrentarlo, así como hizo evidente las contradicciones en el ámbito internacional que, por un lado, pagaba grandes cantidades de dólares pero que, por otro lado, forzaba a los Estados a reprimir el cultivo de la hoja de coca de una forma inadecuada.

Hasta 1975, la producción de la hoja de coca estuvo principalmente destinada a abastecer la demanda tradicional. Sus consumidores principales fueron los campesinos de Huánuco, Cerro de Pasco, Junín y los inmigrantes andinos de Lima y otros departamentos de la costa norte (Aramburú 1989). Aparte de circular a través de un sistema de trueque bastante extendido entre las regiones altas y bajas, la producción de la hoja de coca ingresó al mercado nacional controlada por el Estado a través del Estanco de la Coca, que luego se convirtió en la Empresa Nacional de la Coca (ENACO).<sup>514</sup> El negocio debió de ser muy rentable, pues muchos comerciantes costeños y serranos del Alto Huallaga se convirtieron en un grupo de poder que, aparte de controlar el mercado de la coca, tuvo injerencia en los abarrotes y productos de primera necesidad y se transformaron, además, en los dueños de los medios de transporte (Aramburú 1981, Bedoya 1982, Gonzales 1989). En este contexto, se dio inicio a la más grande transformación económica del Alto Huallaga por el estímulo de un grupo de colombianos que vieron en la región un gran potencial para desarrollar la industrialización de la hoja de coca.

---

<sup>514</sup> ENACO realizó un registro indiscriminado de productores autorizados a cultivar la hoja de coca y se encargó de diferentes aspectos del acopio y comercialización de la hoja de coca: monopolio del acopio de la hoja de coca, la determinación de precios de compra-venta de la hoja y la imposición de reglas para la comercialización interna y externa de la hoja de coca. El poder que acumuló ENACO perjudicó económicamente al productor y al consumidor tradicional (Aramburú 1989, Gallo y Rivera 1994).

El negocio comenzó a rendir dividendos paulatinamente y se fue imponiendo el imperio de la hoja de coca. Fundos que antes compartían el cultivo de la coca con el de frutales se volcaron al monocultivo de la primera. El nuevo mercado que se abrió a los campesinos de la región fue mucho mejor que el que tenían antes. Aparte de los altos costos que demandaba la producción de frutales y de otros productos legales, la comercialización fue bastante insegura por la inestabilidad de los precios y por el sistema de intermediarios, enganchadores y asaltantes que copaban la oferta y la demanda de los productos. A esto se sumaban las eternas barreras burocráticas del Estado para la adquisición de insumos, el otorgamiento de préstamos y el control de precios.

Frente a tales inconvenientes, el negocio de la coca y la droga ofrecía mercado seguro, precios estables, bajos costos de producción y eliminación de trabas burocráticas. Nadie dudaba de que la ilegalidad traía también riesgos, pero la experiencia enseñaba que en esas regiones apartadas, si las autoridades no contaban con un respaldo popular, sucumbían ante otros más poderosos. Poco a poco la precaria autoridad del Estado en la zona se fue mermando y comenzó a imperar la ley del más fuerte. En este caso, los más fuertes eran los colombianos que traían el capital para promover el negocio e introdujeron la pena de muerte para quien se les resistiese. Frente a semejante agresividad, los antiguos comerciantes de hoja de coca les dejaron el terreno libre, pues no había a quién acudir para solicitar protección (Villanueva 1989, Barclay 1990).

Conforme empezó el incremento de la demanda de la coca, aumentó la tasa migratoria a la selva y la presencia de traficantes dispuestos a pagar mejores precios que el Estado o los antiguos compradores particulares. De esta manera, en el Alto Huallaga surgieron las firmas de narcotraficantes locales (Vampiro, Machi, Tío Ríos, Vaticano, Cholo Claudio, Champa, Cristal), que se distribuyeron entre sí el control de la región y sometieron bajo su jurisdicción a unidades que comprendían poblados de acopio y aldeas de producción. En esta distribución hubo una especie de pacto de caballeros por el que cada jefe local se comprometió a operar en su área correspondiente, además de pagar el precio señalado por los colombianos. Pero muchos compromisos no se cumplieron, y pronto se suscitaron enfrentamientos entre firmas locales. En tales circunstancias, se produjeron asaltos y asesinatos entre los compradores de droga, mientras los productores de hoja de coca eran engañados, explotados por las firmas de narcotraficantes locales o asesinados por los sicarios de las firmas locales al negarse a soportar sus abusos y órdenes.

En este contexto de caos y violencia, en agosto de 1990 el precio de la hoja de coca sufrió una severa disminución como resultado de la guerra desatada por el gobierno colombiano (Gallo, Rivera y Tello 1994). Esta situación produjo una reducción en los ingresos del campesino y severos trastornos en la economía de los caseríos del Alto Huallaga. Por ello, se debe tomar en cuenta que, aunque el cultivo de la hoja de coca significó el aumento de ingresos económicos para las familias campesinas, los productores de la hoja nunca tuvieron el control de la comercialización de su cosecha: siempre la compra-venta y los precios de la hoja de coca y de la pasta básica bruta estuvieron supeditados al mercado internacional.

Entre las profundas modificaciones provocadas por la creciente extensión de los cocaleros y la influencia del narcotráfico figuran:

- La mayor permanencia del colono en su parcela. Por ser la hoja de coca un cultivo que exige una extrema limpieza y el recojo continuo de sus hojas, todos los miembros de las familias, incluyendo a los hijos pequeños y peones contratados, participaban de la actividad.
- La mayor utilización de tierras marginales, lo que aumentó peligrosa e irremediablemente la erosión por el uso de bosques de protección.
- La reducción de áreas que se destinaban a producir café, cacao, frutas y alimentos de demanda fundamentalmente local (plátano y Yuca).
- La creciente utilización de mano de obra asalariada con montos imposibles de competir con los que se ofrecían por otros cultivos y la inserción de personas de lugares lejanos que antes jamás habían incursionado en la selva, incitados por los buenos salarios o por una relativamente fácil y pronta obtención de riqueza al conducir una parcela propia, materializó extrañamente el anhelo de los viejos colonizadores.<sup>515</sup>
- La evidente corrupción de funcionarios y el prevaricato de magistrados en asociación con el narcotráfico.
- A pesar de percibir grandes cantidades de dinero por la venta de hoja de coca y pasta básica bruta, la situación económica del campesino no fue boyante. Su ganancia estuvo sujeta a muchos riesgos: las varia-

<sup>515</sup> Véanse los estudios sobre narcotráfico en este tomo.

- ciones del precio, las presiones de los intermediarios de las firmas de narcotraficantes locales, los operativos policiales y militares, las extorsiones que sufrían por parte de policías y militares.
- El uso ilegal de la hoja de coca para la preparación del estupefaciente alcanzó tales magnitudes en la zona del Alto Huallaga que ha dejado en serio peligro su ecosistema.

Además de todos los efectos negativos que esta actividad acarreó al medio ambiente, sus repercusiones para el conjunto de la sociedad fueron fatales. La más grave de todas fue haber desatado una violencia generalizada de la cual son principales protagonistas, por un lado, la población civil, el narcotráfico y el PCP-SL, y, por otro, las Fuerzas Policiales y las Fuerzas Armadas. Pero tan grave como esta violencia fue haber puesto a prueba, en uno de los momentos más álgidos de la historia del Perú, la moral de las autoridades estatales, policiales y militares y comprobar que fueron tan débiles frente a los sobornos y a la corrupción, lo cual impidió que asumieran realmente el reto de enfrentar al PCP-SL y a los narcotraficantes.

Este clima de caos social creado por el narcotráfico fue aprovechado por el PCP-SL para presentarse, en 1981, como verdugo de un estado burocrático corrupto e ineficiente y asumir la supuesta defensa de los intereses de los agricultores cocaleros, agredidos por los abusos de los narcotraficantes y la represión del Estado contra el cultivo de la hoja de coca:

[El PCP-SL] Aprovecha este resentimiento de un problema social que teníamos sobre la cosecha de la coca, allí pone sus bases [...] ellos haciendo ver al pueblo que ha llegado el momento también de que el pueblo deba defenderse de esta presión que hace el Estado, indiscriminadamente erradicando, quemando sus chacras de coca, todo eso pe. Entonces, Sendero [el PCP-SL] aprovecha ese momento para que forma sus bases, en distintos caseríos, pero empieza en 7 de Octubre. (Junio de 2002. Huánuco. MA, varón, empleado en empresa minera; en la época del conflicto armado interno era campesino)

La paulatina desaparición de las instituciones estatales significó que la población no encontrara el amparo necesario para su seguridad y supervivencia, más aún cuando las acciones violentas del narcotráfico y el PCP-SL aumentaron al no modificarse el diagnóstico que el gobierno tenía sobre el problema. De su concepción emanan las decisiones para tratar de solucionar el problema mediante la represión policial y militar en la zona, la sustitución de cultivos que sean rentables frente a la coca e incluso la aplicación indiscriminada de biocidas, como el Spike (1989), que afectaron la ecología regional. Por ello, el ciclo de la coca siguió teniendo el espacio necesario para su mayor desarrollo y, con él, la violencia que generó en su entorno.

## 12.2. EL PCP-SL IRRUMPE EN LA ZONA

El PCP-SL se encontró no solamente con la necesidad económica de los campesinos por la tierra y por el cultivo de la hoja de coca, sino también con la insuficiencia de seguridad y orden. Estas carencias empataron con la necesidad del PCP-SL de ganar adeptos. Por ello, el PCP-SL instaló sus cuadros en aquellos lugares con cierto prestigio de ser comunidades combativas por la hoja de coca, a ambos márgenes del río Huallaga. De esta manera, el PCP-SL escogió, en la margen derecha del Huallaga, el caserío de Campo Grande (según JM. Caserío de Pueblo Nuevo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado) que tenía fama de haberse formado por la invasión de colonos y peones del complejo agroindustrial SAIPAI.

La influencia del PCP-SL también llegó a los caseríos de Pampa Hermosa, Pueblo Nuevo, La Esperanza, El Árabe, 7 de Octubre, Pucayacu, Pacae, Alto Pacae, La Roca, Riofrío, entre otros, ubicados en la margen derecha del río Huallaga. En todos estos caseríos, el PCP-SL formó «comités de defensa de los campesinos», con la misión de luchar contra los abusos de los compradores de pasta básica de cocaína (PBC) y contra la represión del Estado.

En la margen izquierda del Huallaga, en el «bolsón» Cuchara, el PCP-SL se concentró en el caserío de Corvina. De ahí nació el Frente de Defensa de los Intereses de Corvina y, luego, pasaron caserío por caserío hasta controlar todo el «bolsón», dominio aprovechado por el PCP-SL para dominar también el «bolsón» Primavera.

El PCP-SL tuvo como consigna la defensa de la coca. La táctica que utilizó el PCP-SL fue realizar incursiones armadas contra toda institución o persona involucrada en los programas de erradicación de la hoja de coca y a los que querían «engaños» a los campesinos con estos programas. La primera acción subversiva registrada ocurrió en 1983 contra las instalaciones del proyecto Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), ubicado en Tingo María. En 1984, el PCP-SL asesinó a un grupo de trabajadores de

este proyecto y destruyó el puesto policial de Aucayacu (Desco 1990). Además, el PCP-SL convocó constantemente a paros generales, los que obstaculizaron y controlaron un amplio tramo del trayecto entre Tingo María y Aucayacu. Con estas acciones, el PCP-SL pretendió alcanzar la hegemonía política «encauzando» las luchas regionales y las de los comités de productores dentro de su propio calendario político.

La estrategia del PCP-SL fue establecer una alianza con los agricultores cocaleros, que luego fueron incorporados como la «fuerza de base» del partido, y controlar el negocio de la venta y compra de la hoja de coca y pasta básica de cocaína. A partir de este «pacto de convivencia», los productores de hoja de coca y los narcotraficantes tuvieron protección armada del PCP-SL para seguir con el cultivo y el comercio de la coca. Asimismo, el PCP-SL se benefició de esta convivencia porque encontró efectivas «bases de apoyo», no necesariamente con un real compromiso ideológico, que le facilitaron su trabajo político y militar y la consecución de una provechosa fuente de financiamiento gracias al narcotráfico. El PCP-SL empezó sus operativos armados y usó a las ciudades como cajas de resonancia de sus actividades en defensa de la coca y contra la acción de los erradicadores, así como inició la instauración de su orden social a través de asesinatos para «castigar» los abusos cometidos contra los campesinos. Este comportamiento originó que se les designara como «narcoterroristas», por las evidencias de control y alianza que el PCP-SL asumió en las transacciones de la hoja de coca.

Asimismo, los campesinos encontraron con la presencia del PCP-SL el «orden» que no habían tenido cuando los narcotraficantes controlaban la zona. El orden impuesto por el PCP-SL se basó en un catálogo de leyes que sirvieron para regular la actividad cotidiana de la población.

La posición del PCP-SL de controlar el negocio local y regional de la compra-venta de hoja de coca y droga causó malestar entre los narcotraficantes que querían mantener su dominio en la zona. Debido a esto, hubo muchos enfrentamientos entre ambas fuerzas (el PCP-SL y las firmas de narcotraficantes locales). Al final, todas las firmas locales se resistieron al control del PCP-SL. En ese momento, el PCP-SL había conseguido el apoyo incondicional de los agricultores cocaleros de la zona.

Con la imposición del PCP-SL en la zona, éstos, en 1988, «liberaron» las áreas conocidas como «bolsón» Cuchara y «bolsón» Primavera e instauraron su «nuevo estado». <sup>516</sup> Asimismo, empezó a ser el mediador entre las firmas de narcotraficantes locales y los agricultores e instauró un nuevo orden a las relaciones impuestas por los narcotraficantes. A partir de este momento, el PCP-SL se dio cuenta del gran negocio que existía en la zona y empezó a definir la estrategia de tener un mayor control sobre él.

El problema ya no era imponer orden en el negocio de la coca; era tener verdaderos cuadros potenciales para fortalecer las acciones del partido en la zona. Ahí el PCP-SL optó por la coacción de la población: estaban con el partido o dejaban todas sus propiedades. Mucha gente aceptó las condiciones del PCP-SL; otras retornaron a sus territorios de origen:

[El PCP-SL] a veces les amenazaban [a los propietarios de las chacras]; ¡el que no quiere estar con nosotros, que se vaya! [...] algunos por sus tierras nomás aguantaban, pero muchas personas se fueron [...] yo trabajaba como peón con mi familia en Venerillo y nos quedamos. De ahí yo estoy más o menos como propietario; y de ahí a un año o año y medio nos obligaban a ir a las reuniones; qué vamos a hacer pues, nos obligaban. (Mayo de 2002, caserío de Venerillo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. JO, varón, 41 años, campesino, era peón en la época del conflicto armado interno)

Con el control del negocio y la captación de la masa, el PCP-SL empezó a cobrar cupos a los narcotraficantes por los cargamentos de hoja de coca seca y por pasta básica bruta, así como impusieron «balanzas de medición popular» que le permitieron tener el peso exacto de la producción que estaban comprando y calcular la cantidad (cupos) que le tocaba al partido.

Así, el PCP-SL canalizó los reclamos de la población referidos al precio justo, al peso justo y a la negociación directa del campesino productor de la hoja de coca con el comprador (firmas extranjeras y nacionales). Asimismo, el PCP-SL determinó que el precio de la hoja de coca debía ser establecido por la «delegación» (los delegados de los «comités populares abiertos») y que, antes de todo vuelo, se debía hacer la contraentrega de apoyo por hoja de coca y la no aceptación de «vuelos fiados».

---

<sup>516</sup> Véase el estudio sobre Aucayacu y el comportamiento del PCP-SL.

El PCP-SL aprovechó la huida de las personas que no querían someterse a sus órdenes y confiscó las tierras abandonadas para su propio beneficio. También hizo trabajar a los agricultores cocaleros en los cultivos de exclusividad del partido, a semejanza de las tierras del inca o del sol:

[...] [¿Hacían faenas?] Sí, sólo para los rojos [subversivos]. [¿Ellos quitaban chacras a la gente?] Solamente a los que tenían grandes platanales, cacahuales y a los que mataban, como Carlos Fernández, que dejó veinte hectáreas de cacao, cuya cosecha fue para el bolsillo de los mandos [...] [¿Quién cosechaba eso?] La gente cosechaba todo; los que se oponían eran castigados; si no venían a la faena, mandaban a dos o tres y los traían amarrados [y eran castigados] [...] [El PCP-SL] decía vas a obedecer o si no la puerta está libre, vete nomás, decían. Cómo vamos a ir dejando nuestras chacras; teníamos que obedecer, sujetarnos a ellos. (Mayo de 2002, caserío de Venenillo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón. 61 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno)

Desde 1986 hasta 1992, el PCP-SL tuvo el control de la zona y subordinó a sus intereses a los agricultores cocaleros y a los narcotraficantes y superó todos los operativos contrasubversivos de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales.

Esta relación denotó un proceso de «narcotización» de las huestes subversivas. Esta idea se comprueba no sólo con este estrecho vínculo sino también porque los mandos del PCP-SL dejaron de lado los objetivos de la lucha popular y el impulso del «equilibrio estratégico» para dedicarse a controlar el negocio de la droga.

Aquí se encuentra otro de los factores determinantes para afirmar que el PCP-SL creó una estructura política que era sólo una fachada, ya que el objetivo principal era un mejor manejo y control del negocio de la droga. Por ejemplo, en el «bolsón» Cuchara, la población afirmó que, si bien el PCP-SL llegó a organizarlos, lo primero que les exigió fue abrir, en forma obligatoria, una hectárea de coca exclusivamente para el partido. Además, los campesinos sostienen que la violencia en la zona fue más producto de los sicarios del narcotráfico que de miembros del PCP-SL.

A pesar del dominio y poder adquirido en la zona, en 1992, debido a diversas acciones contrasubversivas de las Fuerzas Armadas, el PCP-SL empezó a retirarse hacia la margen izquierda del río Huallaga y perdió el control de los caseríos de la margen derecha, aunque no dejó de realizar incursiones en todos los poblados para hacer recordar el poder oculto, pero activo, del partido. En este contexto, y a partir de 1994, las Fuerzas Armadas asumieron el control de la zona.

### 12.3. COMBATIENDO EL NARCOTRÁFICO Y LA VIOLENCIA

#### 12.3.1. Los operativos relámpago (1984-1990)

Desde 1984 hasta 1990, el Ejército empezó a realizar sucesivos operativos relámpago en ambas márgenes del río Huallaga con la finalidad de sorprender a los narcotraficantes y a la organización del PCP-SL que actuaban en la zona. Éstos eran operativos terrestres de entrada y salida a la zona donde se consideraba que existían compañías subversivas. Eran realizados por grupos de aproximadamente treinta o cincuenta soldados. Sin embargo, esta estrategia contrasubversiva no logró resultados positivos principalmente porque:

- El PCP-SL y los narcotraficantes se habían mimetizado con la población. No fue fácil identificar quién era campesino y quién era miembro del PCP-SL.
- La población, al tener protección armada para cultivar la hoja de coca y ordenar el negocio de su venta, apoyó al PCP-SL.
- El Ejército no sabía qué tipo de población iba a encontrar en la zona ni a quién iba a combatir en una geografía de difícil desplazamiento, lo cual dificultó muchas veces sus movimientos y los hizo presa fácil de las emboscadas del PCP-SL.

Los operativos relámpago del Ejército se efectuaron según las informaciones que se conseguían de la ubicación de contingentes militares del PCP-SL en ambas márgenes del Alto Huallaga. Llevaron, en algunos casos, a enfrentamientos con compañías del PCP-SL que actuaban en ambas márgenes del río Huallaga. Se produjeron muchos muertos de ambas partes, pero también mucha gente inocente murió por permanecer en la zona cuidando sus chacras o esperando que todo acabara para seguir sembrando y viviendo como antes de la violencia:

[...] tanta gente que fue muerta por los morocos luego los cumpas [subversivos]. Todos pasaban, aquí Juan, ese Juan no me recuerdo su nombre, lo mató el Ejército porque estaba mirando cómo venían al pueblo [...] [El PCP-SL, en 1987] había matado como ocho, diez personas, Manuel Asiento, su yerno Lucho, después su hermano de Lucho, cómo se llama, ¡Ángel!, después a otro Teodoro, Herminio Yanac, después Samuel Romero, Deodoro no sé qué, ¿ah!, Deodoro Calderón ha sido ése, es lo que correteaba, después le mataron a Gamanie, le mataron con orden de X. Ahora ese hombre estaba adentro por Pucayacu. (Mayo de 2002, caserío de Venenillo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 61 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno)

### 12.3.2. El viraje de la estrategia contrasubversiva (1990-1994)

Se puede resumir la batalla militar en cuatro etapas. La primera se refiere a los meses de enero y agosto de 1990 en el marco de las elecciones generales. La segunda, de agosto de 1990 al 31 de julio de 1992, se basó en recuperar las «zonas liberadas» por el PCP-SL. La tercera, del 1 de agosto de 1992 a 1994, se centró en operaciones de limpieza. La cuarta, en 1995, desarrolló acciones complementarias.<sup>517</sup>

En 1991, el cambio de estrategia contrasubversiva mejoró la imagen de las Fuerzas Armadas en las zonas de emergencia del Alto Huallaga. Esta nueva estrategia tuvo como objetivo básico utilizar a las Fuerzas Armadas para recuperar la presencia del Estado en las zonas ocupadas por la subversión, ganarse a la población civil por medio de acciones de apoyo y, principalmente, dejar sin «base social» ni espacio de maniobra al PCP-SL.

Este cambio de estrategia revirtió la imagen negativa que la población tenía sobre la forma de actuar de las Fuerzas Armadas. Las acciones militares en los caseríos asentados en la margen derecha del Huallaga cambiaron: ya no había operativos militares sorpresivos ni se forzaba a la gente a asistir a reuniones para delatar a mandos subversivos; sino, más bien, se puso énfasis en tratar mejor a la población civil y en un efectivo trabajo de inteligencia para detectar a los cabecillas del PCP-SL.

El éxito de la misión implicó la ampliación de las facultades y garantías legales para la actuación del Ejército y fortaleció su papel como actor político en el espacio regional, así como la búsqueda de apoyo de la población fundamentalmente a través de acciones cívicas, implementación de Comités de Autodefensa (CAD) (que finalmente no logró hacer) y establecimiento de Comités de Desarrollo.

Si bien es cierto que los lineamientos de esta nueva estrategia se aplicaron en las zonas de emergencia, toda acción dependía de las prioridades y de la evaluación de la situación de la región por cada jefe político militar. De esta manera, el énfasis de la nueva estrategia contrasubversiva estuvo puesto en los siguientes puntos de agenda:

- No a los CAD pero sí a los Comités de Desarrollo

El objetivo de querer establecer CAD se sostuvo en la premisa de que la población debía interactuar con el Ejército para que ambos lucharan contra un enemigo común: el PCP-SL. Esta adhesión se lograría gracias a la estrategia combinada de acción militar con obras de desarrollo económico local.

Lamentablemente, el Ejército nunca pudo organizar un CAD en el Alto Huallaga. Una de las razones para que los CAD no tuvieran éxito fue que el Ejército se negaba a armar a la población y sólo la motivaba para que se defienda. En otros casos, la propia población desistió de formar las rondas de autodefensa por temor a represalias del PCP-SL que aún tenía presencia en la zona, lo cual los llevaba a estar atrapados entre dos fuegos.

Después del fracaso de los CAD, el Ejército logró constituir en cada caserío una organización llamada Comité de Desarrollo.

La acción concertada entre los Comités de Desarrollo y el Ejército logró frenar la expansión y la capacidad de movilidad del PCP-SL en el Alto Huallaga. El éxito de los Comités de Desarrollo radicó en que la población proporcionó mucha información sobre la ubicación de mandos del PCP-SL. El Ejército aprovechó que la gente conocía mejor su territorio, dominaba los corredores de tránsito y tenía conocimiento de los lugares de descanso que utilizaba el PCP-SL.

- Realización de acciones cívicas

<sup>517</sup> Para mayor información, véase Obando 1991: 46-50.

Otra de las acciones del Ejército fue la implementación de programas de acciones cívicas que cumplieron un papel importante porque era la forma de desterrar de la memoria de la población su anterior desempeño desarrollando campañas de reparto de alimentos y servicios médicos gratuitos en los caseríos y «zonas rojas». Asimismo, consiguió que se realizara el pintado de paredes donde había pintas subversivas, se ofrecieran charlas de planificación familiar y, en muchos casos, se llevaran bandas de músicos y presentaciones artísticas. Ese instante era aprovechado para empadronar a la población y recoger información sobre las organizaciones existentes en esas zonas.

- Acciones de inteligencia

Estas acciones se sostenían en agentes encubiertos vestidos de civil que patrullaban los alrededores de sus bases. Los campesinos de la zona no sabían si eran militares o de miembros del PCP-SL. Esta situación ha producido muchas desapariciones y muertes de gente inocente. Esta misma táctica fue empleada por el PCP-SL para comprobar que los pobladores estaban realmente a favor de ellos:

Sí, también mucha gente [...] le decían compañero y ellos decían: ¿cuál compañero? Yo no soy compañero. Y los mataban. Así habían muertos varios en Primavera, toditos de esa zona han muerto [...] [(¿Y podían identificarlos?] No, si paraban iguales y decían ¡hola compañeros! Te daban cuenta [por su forma de hablar], no eran compañeros, eran soldados [...] En cada comunidad, iban disfrazados de soldados, engañando, iban y decían ¿tú conoces a tal fulano? Y decían sí, conozco, ¿dónde viven, qué cargo tiene tal fulano? Arribita vive, muy bien, yo no soy soldado y lo sacaban [lo mataban]. (Mayo de 2002, Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 33 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno)

También se aprovechó la información proporcionada por los arrepentidos para detectar campamentos y mandos del PCP-SL. Entre el 27 de febrero y el 4 de abril de 1994, en poco más de un mes, y sólo ante el cuartel de Tingo María, se presentaron más de 2 mil arrepentidos. El número de combatientes, de otra parte, habría disminuido de 1,050 a 360 cuadros militares entre enero de 1992 y octubre de 1993 según la apreciación de las fuerzas subversivas, graficada en sus correspondientes mapas, elaborados por el frente Huallaga (revista Sí, abril-mayo de 1994: 74). Cabe resaltar que muy pocos mandos y gente inocente de la margen izquierda del río Huallaga se arrepintió, porque el PCP-SL tenía un control muy fuerte sobre el territorio y las personas. Según el jefe militar del frente Huallaga, en el mes de enero de 1994, tras operaciones de inteligencia, se capturó a los mandos del PCP-SL Viajero, Rayo y Pescador, cuyos testimonios fueron sumamente importantes para emprender la ofensiva total contra la subversión que tuvo amenazada a la población (La República, abril de 1994).

Asimismo, el Ejército empezó a realizar operativos con mayor frecuencia en «zonas liberadas» por el PCP-SL con la ayuda de helicópteros artillados que, supuestamente, ocasionaban muertes de miembros de la organización y de la población que involuntariamente vivía parte de este conflicto armado:

[...] [En 1992] el Ejército venía primero con helicópteros y bombardeaba; ahorita como estábamos sentados, el helicóptero metían cohetes, misil, mandaban; la gente se escapaban; Sendero [el PCP-SL] se metían al monte y, a los que viajaban con bote, les mataba, sean chico, grande o mujer. (Mayo de 2002, caserío de Venenillo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 61 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno)

El Ejército también perdió mucho personal y, por ello, tomó venganza a través de ataques aéreos con cohetes y ráfagas de bala. Esta versión se pudo encontrar en ambos «bolsones» donde se efectuó la Operación Arias:

[En 1991] en el Puerto de Mantaro, hubo un enfrentamiento entre Sendero [el PCP-SL] y el Ejército. Del [PCP-SL] no murió nadie; a los del Ejército sí los mataron, los atacaron en este mismo río, donde cruzan para Mantaro, ahí esperaron en el cerro, de eso es lo que empezaron a disparar y ahí han muerto los capitanes, tenientes [...]. (Mayo de 2002, caserío de Primavera, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Mujer, 28 años, campesina, también lo era en la época del conflicto armado interno)

Las constantes operaciones militares realizadas por el Ejército hicieron que la población esté vigilante debido a sus arremetidas y abusos por creerlos del PCP-SL. La vida cobró un ritmo inusitado y estar constantemente alerta para salvar la vida propia y la de su familia se hizo un asunto cotidiano:

Cuando el Ejército entraba, no encontraba a nadie, todos paraban escondidos [...] si ves, te mandas a mudar, porque, si te encontraban, era muerte fija [...] aquí toda la gente ha sido senderistas [miembros del PCP-SL] porque venían a obligar y alguna gente que tenía que estar sujetas a ellos por no querer dejar sus chacras [...]. (Mayo de

2002, caserío de Primavera, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 28 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno)

A partir del uso de estas estrategias, el Ejército logró, según los pobladores, un relativo repliegue del PCP-SL de sus zonas de control en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco. Así, el Ejército retomó el control de Venenillo, en la margen izquierda del río Huallaga, y estableció una base militar en la entrada al «bolsón» Cuchara en 1993 y controló los caseríos ubicados a lo largo de la carretera Marginal, sobre la margen derecha del río Huallaga.

En suma, desde aproximadamente 1990 hasta los dos primeros meses de 1994, las poblaciones asentadas en la margen izquierda del río Huallaga sufrieron constantemente incursiones y operativos por parte del Ejército y el PCP-SL. Estas acciones vulneraron y atentaron contra los derechos más elementales de la población como el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito en el territorio nacional, el derecho a la defensa, el derecho a ser considerado ciudadano peruano, etc.:

[...] todos nos escondíamos en el monte, ahí muy raro que nos tiren [maten los del Ejército]; ellos no entraban por miedo; pero nosotros conocíamos, cuando todo acababa, recién salíamos; nada podíamos salir; si lo hacíamos, Sendero [el PCP-SL] no lo quería; si salíamos, el Ejército nos perseguía y hasta nos desaparecía. (Mayo de 2002, caserío de Santa Martha, distrito de José Crespo y Castillo, Tingo María. Varón, 37 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno)

#### 12.4. LOS OBJETIVOS DE LA OPERACIÓN ARIES (ABRIL-MAYO DE 1994)

A pesar de los operativos del Ejército, en 1993 el PCP-SL tuvo una fuerte presencia en la margen izquierda del río Huallaga en dos áreas a las que denominó «bolsón» Cuchara y «bolsón» Primavera, donde impuso su organización de manera forzada. Las operaciones militares en la zona del «bolsón» Cuchara y «bolsón» Primavera ya eran muy frecuentes y eran complementadas con mensajes disuasivos transmitidos por medio de volantes: «Arrepíéntanse porque están sufriendo en el monte y tu familia llora en tu casa» (extracto del mensaje que contenían los volantes que invitaban al arrepentimiento a los subversivos. Luis Iberico, canal 2, 19 de abril de 1994). Un poblador de Santa Martha («bolsón» Cuchara) manifiesta: «No sé cuándo fue, pero caían del avión muchos papeles; algunos le hacían caso, otros no; pocos saben leer acá, eran esas cosas del arrepentido pero, si hacías eso, luego no podías volver, ya Sendero [el PCP-SL] estaba para exterminarte» (Pedro Andrade. Caserío de Santa Martha, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado). Muchas personas quisieron acogerse a la oportunidad que ofrecía el gobierno, pero el PCP-SL, que controlaba los puertos existentes en la zona, les prohibió la salida.

En 1994, el gobierno de Alberto Fujimori, al golpear duramente la organización del PCP-SL con la captura de Abimael Guzmán y la implementación de la ley de arrepentimiento para mandos del PCP-SL, decidió coordinar con las Fuerzas Armadas (el Ejército y la Marina de Guerra) un plan definitivo para terminar con el PCP-SL en el Alto Huallaga. El plan era la aplicación de una operación a gran escala que fue llamada Operación Aries. Su objetivo fue imponer la pacificación en el país. El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) también intervino en la implementación del plan.

Las justificaciones de las Fuerzas Armadas para realizar la operación fueron principalmente dos:

- El proceso de arrepentimiento no había producido la deserción de mandos del PCP-SL en la margen izquierda del Huallaga; por ello, se suponía que todos los asentados en la zona formaban parte del PCP-SL.
- En ambos «bolsones» estaban establecidas huestes del PCP-SL que mantenían la organización del partido.

Con la aceptación política del gobierno y la decisión de realizar una actividad militar conjunta y de largo alcance para la destrucción total del PCP-SL, el Ejército y la Marina de Guerra empezaron a preparar a los comandos especiales que intervinieron en toda la margen izquierda del Huallaga. También se utilizó información de mandos del PCP-SL arrepentidos para reconocer las áreas donde había que combatir y planear la estrategia que era necesario implementar en el teatro de operaciones.

El gobierno apoyó, además, la realización de la Operación Aries como medida para consolidar la figura mediática de vencedor de la subversión que el presidente Alberto Fujimori había creado para postular con éxito a su primera reelección (1995).

Según el testimonio de *Juan Pérez*, testigo que participó en la Operación Aries, las Fuerzas Armadas prepararon compañías especializadas en estrategias contrasubversivas procedentes de Lima (compañía de comando 19), Tarapoto (compañía de comandos), Tingo María (compañía contrasubversiva 33) y Ayacucho (compañía Pachacútec):<sup>518</sup>

Era una preparación especial por medio de un curso avanzado donde se seleccionaba a la gente; entraban quinientos al curso y quedaban doscientos, o sea, los mejores siempre quedaban porque, como te decía, sabíamos a qué íbamos, sabíamos del enemigo oculto, [lo que] no sabíamos [era] en qué momento nos iban a disparar, no sabíamos en qué momento iban a salir y no sabíamos dónde estaban, porque ellos dominaban bien la zona. (Junio de 2002. Varón, 30 años, comerciante, participó en la Operación Aries en la época del conflicto armado interno)

Para la preparación de estos comandos especiales, hubo un especial apoyo del gobierno, que facilitó armamento sofisticado, municiones y alimentos especiales (hubo dos refrigerios aparte de los desayunos y las cenas). Además, contaron con un experto de nacionalidad israelita: «Para el tipo de operación que se tenía que realizar, que era fuera de lo normal, nos enseñaron las operaciones militares de guerra, reales operaciones de combate con un israelí, y las estrategias de cómo entrar a la zona y enfrentar al enemigo: ejecutivo<sup>519</sup> o selectivo<sup>520</sup>».

Del número de comandos especiales se sabe que «La primera promoción fue de 250 hombres que se traen de Tarapoto; en Tingo María, había como doscientas personas, trescientos comandos que habían preparado para hacer esta operación; y, en Lima, se preparó casi mil hombres, que estaban listos. Primero vino un grupo de quinientos hombres, más tarde cuatrcientos y de ahí entramos mil [...] a hacer esta operación y unas veinte o cuarenta».

La preparación de los comandos fue supervisada por el general EP Nicolás Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y por el presidente de la República, Alberto Fujimori. Inclusive, horas antes de embarcarse, los comandos fueron visitados por el Presidente, quien les pidió que hicieran el máximo esfuerzo por el bien de la patria y de todas las familias del país:

[...] de quien tuvimos apoyo moral [fue del general EP Nicolás Hermoza Ríos] para todos los comandos que se estaban preparando para realizar este tipo de operación y, cuando llegó la hora cero para empezar la operación, estuvimos con el Presidente de la República, que muchas veces fue a visitarnos anticipadamente en los entrenamientos. Al final, nos dijo que quería hablar con nosotros sobre la importancia de la misión y la importancia que tenía este trabajo por el bien del país, de nuestra familia y de nuestro futuro mismo. Habló con nosotros bastante, fue como una antesala antes de salir al campo

[...] [los comandos terrestres] como ya teníamos las coordenadas, teníamos los planos, en sí teníamos objetivos específicos contra las columnas de Sendero [del PCP-SL], agarrar mandos, a sus cabezas.

## 12.5. DESARROLLO DE LA OPERACIÓN ARIES

La Operación Aries se ejecutó en dos fases: la primera, entre los meses de abril y mayo de 1994; la segunda, a mediados del mes de junio hasta julio de 1994. Se desarrolló en la margen izquierda del río Huallaga en las zonas conocidas como «bolsón» Cuchara<sup>521</sup> y «bolsón» Primavera<sup>522</sup> (distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco), donde, según la evaluación del gobierno, los desarticulados contingentes del PCP-SL trataban de reagruparse luego de las consistentes acciones que habían determi-

<sup>518</sup> Juan Pérez participó en la Operación Aries. Por medida de seguridad, el nombre que aparece en el presente informe no es el real.

<sup>519</sup> Se refiere a que cualquier persona encontrada en la zona debe ser ejecutada por considerarla peligrosa a los fines de la operación.

<sup>520</sup> Se refiere a que los comandos debieron hacer una selección de quién era el enemigo y quién no.

<sup>521</sup> Área geográfica ubicada en la margen izquierda del río Huallaga, cuyos límites se encuentran entre el río Monzón y el río Cuchara. Uno de los accesos principales a este «bolsón» es el caserío de Venenillo, frente al puerto del caserío de La Roca, que es la vía de tránsito obligada para visitar a los otros caseríos que conforman el «bolsón» Cuchara.

<sup>522</sup> Área geográfica ubicada en la margen izquierda del río Huallaga, cuyos límites se encuentran entre el río Cuchara y el puerto de Magdalena. Uno de los accesos principales a este «bolsón» es el caserío de San Isidro, frente al puerto del distrito de Aucayacu, que es una de las vías de tránsito obligadas para visitar los otros caseríos que conforman el «bolsón» Primavera.

nado su derrota militar a partir de la captura de Abimael Guzmán (septiembre de 1992). El tiempo de duración fue de un mes y medio.

En la primera fase se utilizó como información primordial la versión de los arrepentidos de la zona por considerar que era una acción estrictamente militar; mientras que, en la segunda etapa, los comandos fueron acompañados por los propios arrepentidos, lo que les otorgó mucha más confianza, porque los arrepentidos señalaban la localización de los «comités», los armamentos, etc.<sup>523</sup> En este segundo momento, de acuerdo con un informante, las Fuerzas Armadas volvieron a lanzar volantes de difusión sobre la Operación Aries, dando oportunidad a que la población asentada en la zona de combate pueda salir. De acuerdo con las declaraciones de *JP*, en este momento también se modificó la estrategia y se hizo más violenta con la finalidad de hacer sentir al enemigo que existía una fuerza mucho más poderosa que ellos y que tenía presencia en la zona. La particularidad de esta segunda fase, si es que efectivamente se llegó a dar, es que los medios de comunicación no registran ningún tipo de hechos graves en la zona durante estos meses. Por esta razón, muchos incluso dudan de que se haya llevado a cabo efectivamente.

La fecha de inicio de la Operación Aries fue el 5 de abril. Las Fuerzas Armadas utilizaron, según versión oficial del frente Huallaga, a doscientos militares para realizar el cerco y a 150 para la persecución de los objetivos (revista Sí, 1994).<sup>524</sup> Sin embargo, la versión del combatiente Juan Pérez es que fueron 2 mil soldados distribuidos en cinco grupos de comandos terrestres (cada grupo tenía aproximadamente cuatrocientos comandos).

Un grupo entró por Venenillo, otro entró por el sur en este caso Palo de Acero, Cachicoto, otro entró hacia el lado extremo de Huacrachuco. Así todo se centralizó en Tingo María y los comandos también entraron por la parte central [del «bolsón» Cuchara], Santa Martha, Ochurumayo. Pero, ante el ablandamiento, todos teníamos de una forma que irnos encontrando, ¿no? Ir cerrando el cerco para que no puedan escapar, al menos tratar de lograr el objetivo que se había propuesto. (Junio de 2002. Varón, 30 años, comerciante, participó en la Operación Aries)

El inicio de la Operación Aries fue una sorpresa porque era considerada una misión secreta: no se sabía cuándo se iba a realizar, ni a qué hora, ni qué día: «simplemente la hora llegó de arriba y se dio inicio a la operación».

Asimismo, cuando los comandos llegaban al monte y se encontraban con población supuestamente civil, ellos no podían identificar quién era quién. En ese momento, los comandos optaron por utilizar la táctica «ejecutiva» (arrasar) aprendida en su preparación para desarrollar la operación. La lógica de estos actos violentos se basó en la idea preconcebida de que toda la población era subversiva y en demostrar la ferocidad de las Fuerzas Armadas frente al enemigo:

[...] tú no podías decir quién es quién ahí; por eso, tenías que actuar de cierta forma, o sea, hubo muchos casos de muertes, porque, si tú dejabas a un grupo, estabas dejando un futuro terrorista, porque ese hombre ha visto morir a su gente e íbamos [el Ejército] y encontrábamos ese resentimiento en la zona. Así, tuvimos que eliminar, tratar de eliminar todo lo que es malo y, durante el transcurso de la operación, hubo muchas cosas, muchas muertes.

Durante la operación, los comandos tuvieron que soportar el resentimiento de la gente por matar a pobladores inocentes, las emboscadas del PCP-SL e incluso el envenenamiento de los alimentos de la chacra. Debido a esto último, los comandos tuvieron que comer cualquier cosa: tallos, vegetales, etc.:

No podíamos coger nada de esos lugares por miedo a estar envenenado. Las frutas eran envenenadas con jeringa porque por dentro estaban todas negras, eso no se podía comer. Nosotros teníamos que llevar nuestro rancho pero se acababa rápido porque sólo era para una semana y era mucho peso además de los armamentos. Los comandos tuvieron que subsistir comiendo tallos o algún vegetal que se encontraba en el monte o cazar algo para poder comer, tampoco podíamos hacer mucho humo porque, si no, seríamos blanco fácil para Sendero [el PCP-SL]. A veces, el apoyo aéreo nos abastecía con comida pero no eran todos los días porque, si no, estaríamos entregando nuestra posición al enemigo.

<sup>523</sup> La presencia de los arrepentidos durante la Operación Aries fue corroborada por el reportaje de Luis Ibérico (canal 2, 19 de abril de 1994), donde se mostró la participación activa de los arrepentidos en señalar los lugares clave donde el PCP-SL había establecido sus «comités populares abiertos» y sus recursos logísticos.

<sup>524</sup> La cantidad proporcionada por el jefe militar del frente Huallaga difiere de la estimada por el entrevistado Juan Pérez, quien asegura que las patrullas ingresaron a los «bolsones» Cuchara y Primavera por cuatro frentes para atacar a las fuerzas del PCP-SL (Junio de 2002. Varón, 30 años, comerciante, participó en la Operación Aries).

Si se revisa el mapa diseñado por las Fuerzas Armadas, puede constatarse el desplazamiento de los comandos de la siguiente manera (véase el mapa adjunto):

- La primera entrada fue por «bolsón» Cuchara a través de Venenillo y el río Monzón, donde se encontraban los «comités populares abiertos» de Santa Martha y Corvina.
- La segunda entrada se realizó por el extremo sur del «bolsón» Primavera a través de Moena, donde se encontraban los «comités populares abiertos» de Salvador y Bijao (en este último lugar, se identificó una «fuerza principal»).
- La tercera entrada fue efectuada por el centro del «bolsón» Primavera a través de San Isidro, donde se encontraban los «comités populares abiertos» de Bolognesi, Blanquillo (aquí se ubicó una «fuerza local») y San Isidro.
- La cuarta entrada se realizó en el extremo norte del «bolsón» Primavera, a través de Alto Pucate, donde se identificaron «comités populares abiertos» en San José de Pucate y Primavera, y el Comité Regional del Huallaga.

El recorrido de los comandos especiales terrestres de la Operación Aries fue apoyado por helicópteros artillados que dispararon armas pesadas de largo alcance (*rockets*) a las casas. Las órdenes que tenían los comandos militares era arrasar con todo contingente del PCP-SL, sea hombre, mujer o niño.

Mucha gente murió en estos ataques. La población sobreviviente no recuerda la fecha en la que sucedieron, pero sí cómo los soldados del Ejército hacían todo lo que querían con las personas aduciendo que eran subversivas:

[Ese año 1994] la gente también escapaba y ahí metían su balazo [...] le dejaban, a veces, le cortaban [...] lo cortaban sí y le dejaban, a veces, cuando agarraban vivos, lo llevaban pero siempre lo mataban, porque desaparecían [...] En ese tiempo, nosotros no estábamos acá, vivíamos más al fondo en mi chacra, a veces teníamos cuidado porque mataban, en ese tiempo desaparecían. (Mayo de 2002. Caserío de Venenillo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 41 años, campesino, era peón en la época del conflicto armado interno)

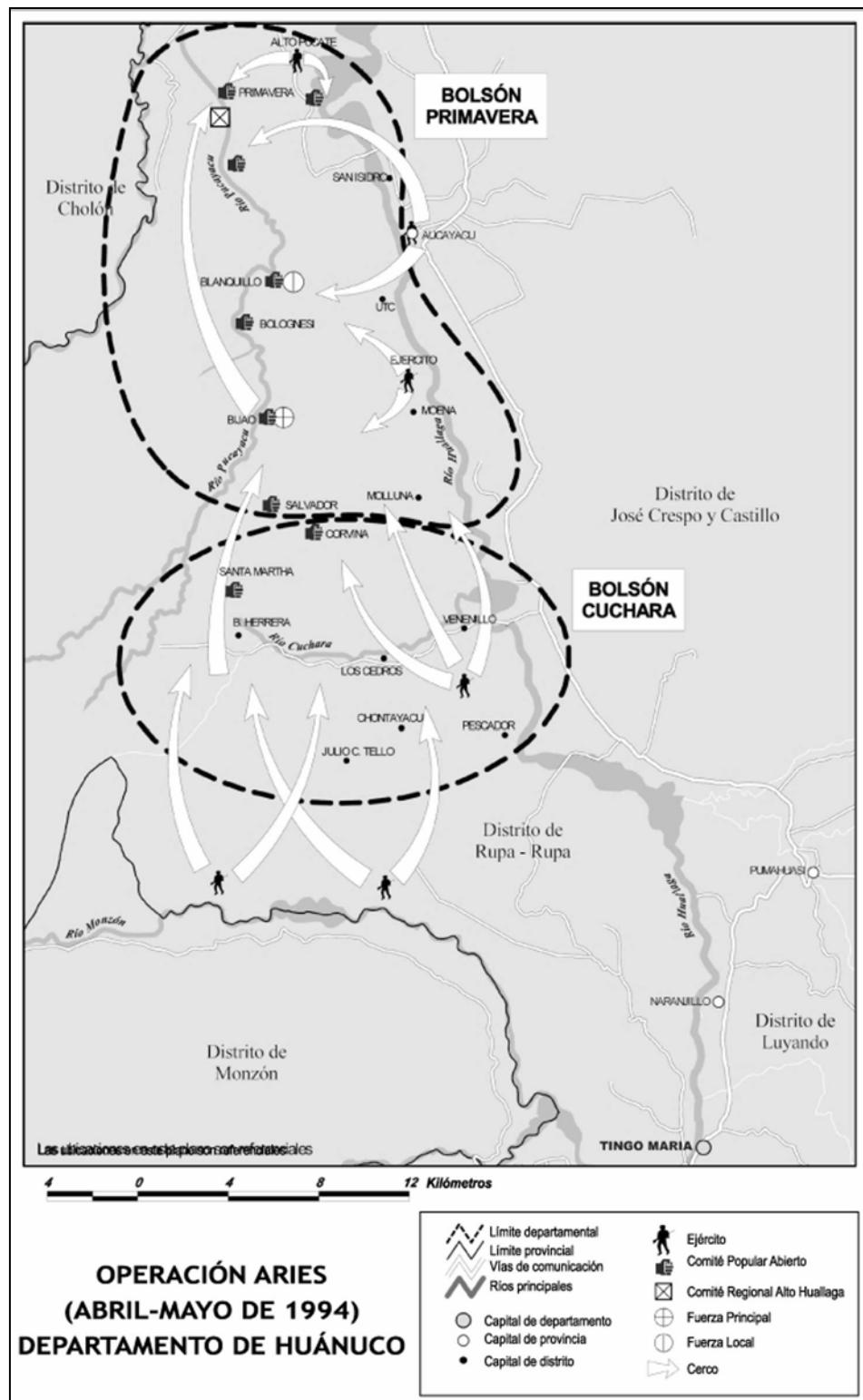
[...] pasaban por las chacras también, destruyendo todo un área grande completamente [...], destruyeron toda la cosecha, todo eso, más bien, alguna gente se les escapó obviamente. (Mayo de 2002, Lima. Varón, 50 años, sacerdote, fue miembro externo de la comisión del Congreso Constituyente Democrático que investigó la Operación Aries)

Asimismo, en las operaciones realizadas por los comandos del Ejército, también se incautó armamento de corto y largo alcance, así como volantes que apoyaban las actividades del PCP-SL y «libros de contenido ideológico, como las obras de Mao Tse Tung, cuadernos con simbología que utilizaban para comunicarse y hasta las famosas cartas de sujeción» (*La República*, abril de 1994: 14).

El 20 de abril de 1994, el coronel Jano, jefe del Estado Mayor Operativo del frente Huallaga, mencionó que el éxito de la Operación Aries se medía por la efectividad al controlar todas las salidas existentes de la margen izquierda del río Huallaga para no dejar escapar a ningún miembro del PCP-SL que operaba en la zona: «Se les ha bloqueado todas las salidas, prácticamente encerrados, porque hemos taponeado todas las salidas de Moena, Moyuna, Aucayacu, Pucate, Bijao, Bolognesi y Blanquillo. No tienen escapatoria. Sus jefes, de un momento a otro, caerán y así lograremos la tan ansiada meta de la pacificación en esta golpeada región del Perú» (*La República*, 20 de abril de 1994: 2).

El coronel Jano aseguró que, por los feroces ataques propinados por los comandos del Ejército, las huestes del PCP-SL habían huido hacia diferentes zonas del Huallaga: «[...] se reveló que las dos columnas subversivas, integradas por 180 hombres y mujeres, no soportaron el sistemático ataque en los últimos días y, por esa razón, se han visto obligados a huir a la frontera con San Martín de Pucate. Mientras que la otra, compuesta por unos cuarenta combatientes, se ha desplazado hacia Huánuco» (*La República*, 20 de abril de 1994: 2).

Confirmando esta versión, el general EP Alfredo Rodríguez, jefe militar del frente Huallaga, también resaltaba el avance de los comandos militares sobre el teatro de operaciones de la margen izquierda del Huallaga: «[...] el Operativo Aries es un éxito porque se ha avanzado en un 60% en la lucha contra los últimos bastiones de Sendero Luminoso [del PCP-SL], que aquí dominaba a la población a través del accionar de la compañía Mar Rojo y la fuerza local, comando de élite dotados de gran armamento» (*La República*, 25 de abril de 1994: 3).



Sin embargo, un informante clave nos indica que los enfrentamientos fueron encarnizados y los miembros del PCP-SL recurrieron a muchas tretas gracias a su conocimiento de la zona. Eso propició que los soldados retrocedieran. Por esta razón, hubo muchas bajas también entre las fuerzas del orden:

[Hubo] muchos muertos [...] muchas bajas de compañeros de las compañías que se quedaban inválidos y no pensábamos ya en que tanto terreno había conseguido controlar Sendero [el PCP-SL] en esta zona. A nosotros nos hostigaban cada diez o 15 minutos, hostigar era ráfagas de balas o detonaban explosivos y, de repente, paraba todo y nunca más oías ni veías nada y ya tenías dos o tres bajas y tú no sabías de dónde te habían disparado.

Por ahí el mismo bosque te confundía porque el eco de las balas te confundía, tú pensabas que era del frente o pensabas que era de atrás, o sea, te aturdías y te mandaban más. No teníamos contacto directo con el enemigo pero ya teníamos bajas y es como un poco traumático y así se decide sacar a la gente de esta operación y meter otra gente para que esa gente tome un poco de aire porque en sí fue muy duro.

Con los avances de la Operación Aries, también aparecieron denuncias sobre abusos de las Fuerzas Armadas contra la población civil. Ante estas denuncias, intervino la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que, al visitar la zona y entrevistar a los sobrevivientes, constató que las Fuerzas Armadas habían cometido violaciones de los derechos humanos en las poblaciones civiles asentadas en la zona de la operación. Debido a ello, la CNDDHH los publicó a escala nacional los atropellos que cometieron en el Alto Huallaga. El jefe militar del frente Huallaga arguyó, en diferentes conferencias de prensa, que las zonas donde los comandos estaban combatiendo no eran poblados sino conjuntos de casas aisladas y desperdigadas en las áreas conocidas como «bolsón» Cuchara y «bolsón» Primavera. El 21 de abril de 1994, el comando político militar del frente Huallaga, en comunicado entregado a la prensa el 20 de abril, desmintió «supuestos bombardeos a la población civil en las operaciones antiterroristas que las fuerzas del orden ejecutan en toda la zona del Huallaga» (*La República*, 21 de abril de 1994). Asimismo, el coronel Jano, el 21 de abril de 1994, declaró que las Fuerzas Armadas no habían realizado bombardeos sino rocketeos, cuyo armamento no alcanza grandes extensiones.

Según las fuentes militares de la Operación Aries, ante la inminente caída de los últimos bastiones del PCP-SL en el Huallaga, el comando político militar del frente Huallaga incluyó una estrategia psicosocial a través de volantes, lanzados desde helicópteros, que recomendaban a los mandos del PCP-SL, que intentaban escapar de las fuerzas del orden, acogerse a la ley de arrepentimiento:

[...] en las próximas horas, emitirá [el comando político militar del frente Huallaga] un comunicado oficial invocando a los mencionados senderistas [miembros del PCP-SL] a que se acojan a la Ley de Arrepentimiento. Esta mañana y con el objetivo de lograr que los extremistas en fuga del asedio militar depongan las armas, varios helicópteros sobrevolaron la extensa zona donde se encontrarían dispersos los sediciosos y arrojó unos 100 mil volantes invocándoles acogerse a la Ley de Arrepentimiento. (*La República*, 21 de abril de 1994: 5)

La Operación Aries tuvo que detenerse definitivamente el 26 de mayo de 1994 por las graves denuncias de violación de los derechos humanos acogidas por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente Democrático (CCD):

Tras cincuenta días de operaciones envolventes y capturas, que se iniciaron el 5 de abril, finalizó hoy la operación antiterrorista Aries, que se efectuó en el ámbito del frente Huallaga, especialmente en la provincia de Leoncio Prado (Huánuco), según informó el jefe de esa circunscripción, general de brigada EP Alfredo Rodríguez Riveros. Prestó declaraciones, luego de presentar a 23 de los treinta terroristas [subversivos] capturados en las últimas operaciones y de mostrar gran cantidad de armamento, municiones, medicinas y documentación requisada a los subversivos. (*El Comercio*, 26 de mayo de 1994; CNDDHH 1994: 81)

#### 12.6. LA VERSIÓN OFICIAL TRANSMITIDA POR ALGUNOS MEDIOS DE PRENSA

El diario *Expreso* encarnó la versión oficial de la Operación Aries difundiendo información en grandes titulares y amplio despliegue en las páginas interiores que transmitían a la opinión pública la importancia de su prosecución como parte de la pacificación del país en que estaba empeñada el gobierno.<sup>525</sup> Además, tuvo una posición privilegiada, como el mismo diario lo reconocía, ya que su corresponsal de guerra recibía datos de primera mano del vocero militar del frente Huallaga.

El diario *Expreso* transmitió información contradictoria y variada. Sostuvo, de un lado, que el PCP-SL estaba desarticulado y, de otro, que su eliminación era un tema prioritario para el gobierno de Alberto Fujimori, pero que la paralización de las operaciones militares, ocasionada por la visita de los defensores de los derechos humanos (cuando se hicieron las denuncias sobre el alcance del operativo), alentaba peligrosamente su reorganización.

Igualmente, el número de los supuestos integrantes del PCP-SL se sobredimensionó según el criterio de los voceros militares: «El general Rodríguez informó que, según datos de inteligencia, el batallón Mar Rojo

<sup>525</sup> Uno de ellos era, por ejemplo, «En contundente ofensiva. EJÉRCITO LIBERA EL HUALLAGA».

estaba integrado por alrededor de un centenar de combatientes altamente fanatizados. Esa división militar está jefaturada por los dirigentes *Rayo y Pescadito*» (*Expreso*, 22 de abril de 1994).

Dos días después, en la revista *Caretas* n.º 1298 y 1309, apareció un informe de inteligencia del frente Huallaga, donde se indicaba que el PCP-SL contaba, en el Alto Huallaga, con 180 hombres, divididos en cuatro compañías, una de las cuales, Mar Rojo, tenía unos cuarenta integrantes. El general EP Nicolás Hermosa Ríos, dio otra versión: «El comandante general del Ejército, general EP Nicolás Hermoza Ríos, dijo anteayer que el batallón Mar Rojo, que tenía 450 hombres en enero, se redujo a 150 hombres hace tres días y a menos de cincuenta ahora [...] explicó que la reducción se debió a [...] bajas y rendiciones» (*Expreso*, 24 de abril de 1994).

Algunos días después, el diario *Expreso* señaló: «Del batallón, integrado por no menos de trescientos hombres, quedan unos cincuenta, de los cuales una parte huye hacia el noroeste y la provincia de Marañón, dentro del departamento de Huánuco, dirigiéndose hacia el nuevo cerco tendido por el Ejército» (*Expreso*, 26 de abril de 1994). Y al día siguiente señalaba: «Se conoce, por ejemplo, que las fuerzas militares son comparativamente iguales o ligeramente superiores a las de los subversivos» (*Expreso*, 27 de abril de 1994). En los párrafos iniciales de la misma noticia, el general EP Alfredo Rodríguez mencionaba: «El nuevo «bolsón» [cerco militar] impedirá que lo que queda del derrotado batallón [Mar Rojo], que huye hacia donde está el Ejército, no pueda reunirse con otros pelotones senderistas [del PCP-SL] que operan en San Martín» (*Expreso*, 27 de abril de 1994).

Sobre el armamento que poseía el PCP-SL, hay también variaciones sustantivas que se fueron modificando en el curso de los días. Según *Expreso*: «[El Ejército Guerrillero Popular] Son unos 250 hombres, armados con fusiles automáticos de fabricación checa y ametralladoras norcoreanas AKM» (*Expreso*, 20 de abril de 1994). Por su parte, el Ejército combatía con: «Armamento [...] ligero: metralletas FAL y granadas» (*Expreso*, 27 de abril de 1994).

El mensaje que transmiten ambas noticias es que el Ejército enfrentó a un enemigo en desiguales condiciones cuando la verdad es que tenía apoyo aéreo y estaba dotado de armas de mayor capacidad ofensiva (además de fusiles FAL, ametralladoras, bazookas, morteros, instalaza, etc.); mientras el PCP-SL, según lo reconocían los analistas, no poseía ametralladoras, sino fusiles de asalto AKM calibre 7.62, en su mayoría robados de la Policía Nacional o adquiridos con el dinero que obtenía del narcotráfico.

Una contradicción más notoria es la que publica *Expreso* el 29 de abril. Según un artículo, los miembros del PCP-SL aparentemente se encontraban desarmados; pero, al mismo tiempo, habían incrementado el número de sus integrantes: «Fuentes confiables indicaron que la columna subversiva cuenta con unos 150 hombres que se hallarían carentes de alimentos y material bélico» (*Expreso*, 29 de abril de 1994). Al parecer, éste sería el mismo contingente militar del PCP-SL que, de acuerdo con la información obtenida por *Expreso*, tenía, en el mes de enero, 450 hombres, cincuenta el 27 de abril, y 150 el 29 de abril.

## 12.7. LA VERSIÓN NO OFICIAL DE LOS HECHOS

Poco antes de que se diera inicio a la operación Aries, según Juan Pérez, las Fuerzas Armadas alertaron a la población de las acciones armadas de gran alcance que se iban a realizar a través de volantes lanzados desde los helicópteros, en los que se recomendaba a los que no eran subversivos salir de la zona; en caso contrario, debían atenerse a las consecuencias:<sup>526</sup> «[...] ya se había anticipado a la población civil que tenían que salir, que se aproximaba un operativo con mucha fuerza, se les había anticipado [...] faltando 15 días se volanteó [sic] toda la zona desde las alturas de Cachicoto hasta la Morada, Madre Mía, la gente de Progreso y se volvió a volantejar [sic] tres 3 veces [...]».

No obstante, esta difusión no tuvo el impacto esperado sobre la población por tres motivos:

- La alta tasa de analfabetismo existente en la zona, lo que impidió que los mensajes fuesen entendidos por la mayoría:

Sí, por ahí debe estar metido, fui andando siempre con ese papelito [...] hasta que tuve que salir de mi casa para salir por otro lado caminando cinco días al sur [Monzón]. (Didario Alvarado. Caserío de Venenillo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado).

---

<sup>526</sup> Comunicación con Gloria Helfer.

[¿Qué fue de la Operación Aries?] ¿Aries? [vinieron los lagartos] ¡Ah!, ya, ya, ah, esos lagartos vinieron acá, bombardeaban. (Mayo de 2002. Caserío de Primavera, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 38 años, campesino, lo era también en la época del conflicto armado interno)

- Aquellas personas que tenían conocimiento de la realización de la Operación Aries no pudieron abandonar las zonas de los «bolsones» Cuchara y Primavera, debido a presiones del PCP-SL: «El problema era que, cuando había un aviso de que salga la gente, ya nos cerraban el paso [los del PCP-SL], por donde salíamos, éramos o no éramos [de ellos], teníamos que morir, así era» (Grupo focal. Caserío de Venenillo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado).
- Por las condiciones geográficas y climatológicas, los volantes no llegaron a sus remitentes y se destruían:

[...] nos dijeron [el Ejército a la Comisión del CCD] que habían arrojado desde helicópteros volantes anunciando la operación. ¿Dónde habrán caído esos volantes? Quizá en las chacras o en los cocalos y ahí se destruyeron por la humedad. Tal vez ese fue uno de los motivos de que mucha gente no estuviera enterada de la operación, además mucha gente era analfabeta.<sup>527</sup>

Una vez que el comando estimó que la población estaba enterada del Operativo Aries, dio inicio a las acciones con la intervención de helicópteros artillados que lanzaron *rockets* y ráfagas de metralla contra las ubicaciones del PCP-SL el 5 de abril de 1994, luego de lo cual ingresaron las fuerzas terrestres disparando de manera indiscriminada, según la versión que recogiera la población de los mismos militares:

[...] según que va corriendo la gente adelante, tiran la bomba, por detrás está también el Ejército, a veces hasta dos helicópteros, yo estoy seguro que la totalidad de esa ya no vive. (Melquiades Penadillo. CNDDHH 1994: 119)

[Un capitán de los comandos se comunicó a la base de Tingo María y preguntó] qué debemos hacer con los niños y ancianos, porque hay niños y ancianos, y le dijeron barre con todo, así le contestaron de la base de Tingo. (María Rivera. Cerro Cóndor. CNDDHH 1994: 130)

No es posible conocer el número de integrantes del PCP-SL y de pobladores que murieron a causa de las acciones; en cambio, hay testimonios de la forma en que los soldados practicaban las capturas o ingresaban a las propiedades y sembríos.

Ante estos acontecimientos, muchas familias optaron por escapar y se refugiaron en el bosque o se separaron en pequeños grupos o individualmente para no ser detectados por los comandos terrestres o los helicópteros que estaban alertas a cualquier movimiento para intervenir. Sólo cuando salieron de la zona de influencia (aproximadamente sesenta metros a ambas márgenes de las trochas) trataron de indagar por la suerte corrida por el resto de la familia, vecinos o amigos:

Corriendo íbamos para salvar la vida, unos en los árboles calladitos para que no nos escuchen, ya después ahí nos encontrábamos por ahí, por arriba [...] ¿Quién va a esperar a otro? Nadie, porque saben que lo matan. (Mayo de 2002, caserío de Santa Martha, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 59 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno)

[...] cuando corría, me encontré con un grupo grande de personas que venía de otros sitios, eran cincuenta, así eran, yo felizmente no me le junté porque tenían un chancho que se les escapó y lo perseguían, a ellos nunca más los vi [...] el Ejército los llevó, no sé [...]. (Mayo de 2002, caserío de Santa Martha, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 37 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno)

Después de diez o 15 días, cuando estimaron que la presión militar había disminuido, la población retornó a sus propiedades y encontró que todo estaba en escombros o inutilizado, ya que uno de los objetivos militares era la destrucción total de las supuestas bases del PCP-SL, lo que incluyó las fincas y sembríos de la población civil en el entendido de que sus propietarios eran colaboradores de la subversión: «[...] han quemado tres cuartos [se refiere a una casa de chacra], todo [quedó] deshecho [...] tenían víveres, frazadas, arroz, fideos; todo lo han deshecho [...] El Ejército quemó todo [...] entrando a pie le han incendiado [...]» (Mayo de 2002, caserío de Venenillo, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 61 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno).

<sup>527</sup> Ibídem.

Asimismo, según estos testimonios, el camino que conecta a los diferentes caseríos del «bolsón» Cuchara estaba lleno de cadáveres de hombres, mujeres y niños, que presentaban extremos maltratos y signos de violaciones de derechos humanos (torturas, degollamientos, pedazos trozados, violación sexual, etc.):

[...] muchas personas las vimos cortadas con hacha, tiradas en el suelo, toda una fila era de gentes arrojadas en el camino. Otras estaban con cuchillo, tapada la cara. Siempre lo hacían así, seguro para que no le vean. Hasta miedo nos daba ir por ahí con tanto muerto [...]. (Mayo de 2002, caserío de Santa Martha, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 37 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno)

Una señora hace poco iba a dar a luz; la han descuartizado, le han sacado el bebe y lo han botado al agua. A los niños, le cortan su cuellito. (Luisa de Espinoza. CNDDHH 1994: 118)

A una niña de seis años la han violado y la han dejado calatita. [Otra voz dice] A dos señoritas también las han dejado calatas. Boca abajo. (Delia Falcón de Julcarima. CNDDHH 1994: 124)

En el «bolsón» Primavera también se registraron atropellos que presentaban similares características a los del «bolsón» Cuchara. Las evidencias y testimonios de estos actos violentos fueron difundidos a la opinión pública, primero, por la CNDDHH y periodistas, y, después, por la Comisión de Derechos Humanos del CCD. Los reporteros Cecilia Valenzuela y Óscar Medrano de la revista *Caretas*, Gilberto Hume de canal 9 y Josefina Townsend de la cadena estadounidense CNN estuvieron en la zona del conflicto armado el último fin de semana con la finalidad de entrevistar a testigos que hablaron de los bombardeos y ametrallamientos a caseríos ubicados en el «bolsón» Cuchara y «bolsón» Primavera. La percepción de los periodistas sobre los hechos registrados se refiere a acciones militares que buscan la liquidación de un fuerte contingente del PCP-SL, pero que desgraciadamente sólo costó víctimas civiles (*Caretas*, 21 de abril de 1994: 13).

El 21 de abril de 1994, el semanario *Caretas* presentó un artículo en el que se describía el hallazgo del cadáver de una joven y cinco cuerpos irreconocibles en Moyuna:

Un cráneo desprendido del cuerpo asomaba entre las hojas de un cocal [...] Un campesino había encontrado los restos de su hija y trataba de meterlos en una bolsa. Los demás miembros del grupo [periodistas y campesinos] avanzaron bordeando una pequeña colina —cada uno de ellos buscaba, por lo menos, a un familiar desaparecido— y, de pronto, empezaron los alaridos: cinco cuerpos picoteados por las aves de rapiña, prácticamente irreconocibles, yacían desparramados en un sembrío. (*Caretas* 1994: 12)

Con el desesperado afán de salvar su vida, los agricultores de «bolsón» Primavera se desplazaron en dos direcciones: unos (alrededor de quinientas personas) se dirigieron al sur, hacia las orillas del río Magdalena, pero lamentablemente fueron detectados y confundidos por las patrullas militares, que iniciaron su persecución:

Al otro lado, Moena, Salvador [...] Allí era la balacera, el bombardeo. Por donde yo vivo, no ha habido ningún enfrentamiento, escuchamos lo que la gente gritaba pidiendo auxilio. Por eso, más nos hemos escapado [...] toda la gente nos reunimos, sesenta, setenta, para subir para el monte, para escondernos, para sobrevivir. Hemos tenido que subir, cuanto más nos concentrámos [formando un grupo que llegó a tener quinientas personas], nos perseguían los militares y más y más; por último, nos hemos metido al monte, nos hemos extraviado y hemos salido al río Magdalena [...] los niños lloraban, se han agusanado sus cabecitas, los insectos les han penetrado. Y de hambre [...] Yo he salido, como sé manejar balsa he tenido que hacer una balsita [...] [así] tomando el río Magdalena hemos llegado sin novedad [...] la gente me suplicaba que encuentre la salida, vas a regresar don... para que nos trates de sacar de acá [...] como comisionado tengo que cumplir este trabajo. Por eso, he venido a buscar esa protección. (Gregorio Asca. Moyuna. CCDDHH 1994: 137-140)

Otro grupo de campesinos se dirigió al este del «bolsón» Primavera y llegó a una de las orillas del río Huallaga, donde quedó atrapado porque la creciente de las aguas le impidió cruzarla. Entonces, los agricultores decidieron esconderse en los alrededores. Desgraciadamente, no todos lograron ese propósito y fueron alcanzados por las patrullas. Ni siquiera los agentes encubiertos del Ejército pudieron sortear el peligro. Ése fue el caso de Jesús Vera Vigilio,<sup>528</sup> cuya esposa, Amalia Tolentino, reconoció que era un agente de inteligencia del Ejército destacado en el «bolsón» Cuchara:

<sup>528</sup> En casi todo el Alto Huallaga, el Ejército tenía gran cantidad de agentes encubiertos que trabajaban como comerciantes o choferes para obtener información sobre el PCP-SL, sus movimientos, sus mandos políticos, logísticos y militares. Jesús Vera Vigilio fue uno de ellos.

[Luego de escapar de los comandos militares, Amalia Tolentino fue en busca de Jesús y lo encontró muerto] [...] Jesús tenía las manos atadas en la espalda, con su camisa negra [...] Aparte, le colocaron un polo amarillo en la cabeza [...] Cuando le saqué el polo, vi espantada que le habían cortado el cuello. Habían matado a mi Jesús. ¡Y él era inocente! [en esta oportunidad, fueron ocho los varones muertos]. (Amalia Tolentino. CNDDHH 1994: 160; *La República*, 2 de mayo de 1994)

Casi todos los testimonios mencionan los actos de violación sexual a las mujeres. Los comandos militares agrupaban a las personas capturadas por sexo. El grupo de los hombres siempre era el primero en ser asesinado, bajo el supuesto de que podían rebelarse ante el maltrato sexual a sus esposas, hijas o vecinas. Luego, los soldados se distribuían a las mujeres para violarlas y matarlas:

Entraron los del Ejército y nos corretearon; a los que huían, los abaleaban y, a los que encontraban por la playa, los cortaban con cuchillo [...]. Grandes, chiquitos y viejos eran despedazados. Por miedo a ellos es que nos hemos escapado al monte. Yo he salido después de 21 días con otros diez vecinos [...] Otros [...] [dicen] que han detenido a muchas personas y los separaban a hombres y mujeres. Primero han matado a los hombres y después han violado y matado a las mujeres. (Alfonso Ponce. CNDDHH 1994: 164).

A mi lado estaba una chica de trece años que se llamaba Lourdes [...] Estaba muy nerviosa y no quería separarse de mi lado [...] [pero] varios soldados se la llevaron. Entonces, Lourdes comenzó a gritar y a llorar. Después no la volví a ver más [...] Hasta que se calló. Más tarde, me vinieron a buscar a mí. Los soldados decían «¡Qué rica que estaba Lourdes!». Entonces, supe que la habían violado y que me tocaba a mí. Los soldados empezaron a manosearme las piernas, distintas partes del cuerpo. Cuando ya me estaban arrastrando, mi bebé Cinthya se puso a llorar. Sólo así se fueron [Al día siguiente fue utilizada como guía de los soldados pero se escapó y encontró muerto a su esposo]. (Amalia Tolentino. CNDDHH 1994: 160).

[...] contó también que, en otras casas, escuchó que tenían algunas mujeres, casi toda la noche violándolas, porque los muchachos [soldados] decían «ahora me toca a mí, ahora entre el otro, el otro» y después decían «yo le hice esto, yo hice esto», vanagloriándose [...]. (Testigo que habló con Daniel Le Blanc. CNDDHH 1994: 134)

Después de las violaciones sexuales, los comandos militares dejaban a una mujer con vida para que les sirviera de guía. Ése fue el caso de Amalia Tolentino, quien con bebé en brazos escapó de los comandos militares, aunque es posible que se salvara porque manifestó a sus captores que su esposo era colaborador del Ejército: «[En Moyuna] A mí no me mataron porque yo debía servir de guía; según ellos, yo sabía dónde estaban los tucos [miembros del PCP-SL] [...]» (Amalia Tolentino. CNDDHH 1994: 114-115).

No hay una cifra aproximada del número de muertos y desaparecidos, debido a que los parlamentarios del CCD que visitaron la zona después de las denuncias que hiciera la CNDDHH no constituyeron una comisión investigadora. Sin embargo, según los testimonios brindados a la CNDDHH, los entrevistados mencionaron un número muy alto y subrayaron la extrema violencia con que actuaron los militares:<sup>529</sup>

Ellos hablan de sesenta, ochenta, porque ha pasado el helicóptero barriendo con toda la gente [...]. (Hugo Oliva, pároco de Aucayacu. CNDDHH 1994: 122)

En todo el camino dicen que hay muertos, hay niños, hay adultos. O sea, donde uno choca con ellos, ya es muerto. Ya no puedes salvarte ni con nada. (María Campa. CNDDHH 1994: 127)

[Delia Falcón preguntó a una señora que venía de la margen izquierda del Huallaga] ¿De dónde sale? De allá, de la otra banda, me dice: señora hay muertos bastante; de los treinta, hemos escapado dos; los 28 son desaparecidos; los demás hemos visto que han matado con machete; le han sacado su ropa. (CNDDHH 1994: 145)

A otro le han sacado de acá [señala la parte de la garganta] hasta acá [señalando a la altura del vientre], el corazón le han sacado y hace días lo han dejado. (María Rivera, Cerro Condor. CNDDHH 1994: 130)

[...] [Los del Ejército] le cortaban la cabeza, hacían desaparecer la cabeza, le sacaban el intestino, les cruzaba las piernas, los pies y lo dejaban ahí tirado como para no reconocerlo nada [...]. (Mayo de 2002. Caserío de Primave-

<sup>529</sup> A pesar de todos los atropellos cometidos por el PCP-SL, los pobladores mencionan que, cuando el PCP-SL encontraba a alguna persona que había trasgredido las normas y el orden impuesto por el partido, ésta tenía opción a un «juicio popular», cosa que no pasaba con el Ejército, que mataba sin preguntar. Si bien muchas personas han muerto en los «juicios populares», otras pudieron salvarse por decisión de la población.

ra, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Varón, 75 años, campesino, también lo era en la época del conflicto armado interno)

## 12.8. EL PAPEL DE LA CNDDHH

Las primeras informaciones que tuvo la CNDDHH sobre las violaciones de derechos humanos procedieron de personas que lograron escapar de los primeros bombardeos y acciones de la Operación Aries. Eso facilitó la tarea de alertar a la opinión pública sobre el objetivo que parecía buscar la campaña militar en la margen izquierda del río Huallaga, donde poblaciones civiles, con alta densidad de niños, jóvenes, mujeres y ancianos, habían sido consideradas objetivos militares como si se tratase de bases del PCP-SL. Según las noticias recibidas por la CNDDHH, los caseríos más afectados por las operaciones militares eran Moena y Moyuna (ubicados frente al caserío de Anda, margen derecha del Huallaga), donde se encontraron 13 cadáveres.

Ante la magnitud de las denuncias, el 16 de abril de 1994 viajó al Alto Huallaga una comitiva de la CNDDHH conformada por Pablo Rojas, Róger Niego, Ivonne Montoya, José Nalvarte y Ernesto de la Jara, además del congresista Róger Cáceres Velásquez y el sacerdote Daniel Le Blanc, responsable del Servicio de Justicia y Paz para América Latina de la Orden de los Oblatos de María Inmaculada, congregación religiosa que se encuentra en el Huallaga desde 1962. La comitiva recogió numerosos testimonios de personas que lograron escapar de las operaciones militares, como se puede constatar en las grabaciones magnetofónicas y videos que presentó la CNDDHH a la Fiscal de la Nación<sup>530</sup> y a la ciudadanía en general a través de diversos medios de comunicación. Un ejemplo de ellos es el siguiente fragmento, en el que se relata la violación y asesinato de una menor de edad:

Yo conté 150, uno, dos, tres, cuatro [...] [eran] 150 soldados. Nosotros estábamos ahí toda la noche; esa noche con lluvia, es la que matan a la Lourdes; gritaba [...] ahí más abajo había una casita; ahí ellos se habían hospedado y nosotros nos habíamos subido más arriba. Ellos [los comandos militares] en esa casa han estado durmiendo; ellos dijeron nosotros acá nomás nos quedaremos. (Junio de 2002. Mujer campesina, también lo era en la época del conflicto armado interno)

Asimismo, la CCNDHH mencionó que estos actos de violación de los derechos humanos de la población no sólo se habrían cometido en Moena y Moyuna, sino que pudieron extenderse al resto de caseríos de los «bolsones» Cuchara y Primavera: «[...] el número de muertos podía ser alarmantemente alto, y que “se tenía documentación y testimonios directos de la matanza de por lo menos diez campesinos en Moyuna y 13 en Moena, además de indicios del exterminio de cuarenta personas más, cuyos cadáveres habían sido vistos en el paraje de Ganadería”» (Rosa Mujica. CNDDHH 1994: 46).

El 19 de abril de 1994, la CNDDHH dio a conocer, a través de su primer comunicado titulado «Que no vuelva el horror», su preocupación porque la Operación Aries continuara sin tomar en cuenta las denuncias de civiles muertos e hizo un llamado a las autoridades pertinentes y a la Fiscal de la Nación para poner fin de inmediato a estas prácticas, porque, en su opinión, reinstalaban la «guerra sucia» que el país sufriera desde 1980; al mismo tiempo, exigía garantías para que los familiares de las víctimas pudieran dar su versión de los hechos y se permitiera el ingreso de los representantes de la Cruz Roja Internacional<sup>531</sup> a la zona de conflicto:

<sup>530</sup> Después de sobrevolar la zona donde se desarrolló la Operación Aries, Blanca Nélida Colán, fiscal de la nación, consideró que las denuncias formuladas por la CNDDHH sobre presuntas violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas no eran ciertas: «He podido verificar que son inexactas las afirmaciones que se están diciendo en algunos medios de comunicación como ustedes han sido testigos; hemos visitado Venenillo, una serie de pueblos que se dice habrían sido bombardeados y cometido una masacre» (El Comercio, 24 de abril de 1994). Sin embargo, Colán nombró a un fiscal ad-hoc, Carlos González Ortiz, quien realizó las primeras investigaciones en Moyuna y Moena. Este fiscal manifestó inicialmente que, en Moyuna, donde realizó una visita de inspección, no había muertos; pero el 29 de abril volvió al lugar, acompañado de una patrulla militar y dos médicos legistas. En esa oportunidad, afirmó haber realizado la necropsia de cinco cadáveres (cuatro hombres y una mujer), quienes, según su evaluación, habían fallecido hacía seis meses: «Estos cuerpos fueron enterrados porque eran osamentas y no había necesidad de traerlos; por eso, llevé a los médicos legistas para que les hicieran las necropsias y los enterré. Sobre los otros dos cuerpos encontrados afirmó que sí los trajo porque estaban más cerca» (Caretas, 19 de mayo de 1994). Las denuncias sobre violaciones de los derechos humanos durante la Operación Aries fueron posteriormente archivadas.

<sup>531</sup> Durante el tiempo que duro la Operación Aries, la Cruz Roja Internacional no logró ingresar a la zona de conflicto. Infructuosamente, esperó tener acceso a las zonas en las que se venían produciendo enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el PCP-SL. El 23 de abril de 1994, el comandante general de las Fuerzas Armadas, general EP Nicolás de Bari Hermoza Ríos, invitó a los representantes de la Cruz Roja a inspeccionar la zona en conflicto, pero siempre acompañados por una patrulla de comandos del Ejército (La República, 23 de abril

«[...] los peruanos habíamos empezado a creer que lo peor de la tragedia de violencia y muerte había acabado en nuestro país [...] [pero] recientes informaciones [...] nos indican que los horrores de la «guerra sucia» estarían regresando, tanto por la práctica criminal del senderismo [del PCP-SL] como por determinadas acciones de las Fuerzas Armadas» (CNDDHH 1994: 46).

Como una respuesta a estas declaraciones, el 20 de abril de 1994 el comando político militar del Frente Huallaga emitió un comunicado oficial (019/RRPP/F-H) donde especificó que las versiones de la CNDDHH estaban equivocadas y resaltó que las Fuerzas Armadas respetaban los derechos humanos de las poblaciones asentadas en la margen izquierda del Huallaga:

Este comando aclara que las operaciones que se producen desde el 5 de abril a la fecha (no el 1 de abril como menciona la CNDDHH), en el área rural de los distritos de José Crespo y Castillo y Rupa Rupa, de la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, se realizan sin afectar en lo absoluto a los pobladores que viven en las colinas conocidas como Moyuna, Moena, Salvador, Bijao, Venenillo y otras. Y, en ningún momento, han sido o están siendo bombardeadas o atacadas por las fuerzas del orden como algunos elementos (como la CNDDHH) están propalando a la opinión pública (CNDDHH 1994: 230; *La República*, 21 de abril de 1994).

Uno de los miembros de la CNDDHH, el sacerdote Daniel Le Blanc, quien participó en las entrevistas con los pobladores, replicó que la posición del Ejército pretendía ocultar las bajas civiles ocurridas en lugares donde no se habían producido enfrentamientos entre fuerzas del orden y elementos del PCP-SL: «Puedo decir que los lugares donde encontramos los cadáveres no mostraban ninguna señal de que ahí hubiera existido algún tipo de enfrentamiento. Por otro lado, todos los testigos responsabilizan a los militares» (Daniel Le Blanc. *Caretas*, 2 de abril de 1994: 74).

Ante el cruce de comunicados y conferencias de prensa entre la CNDDHH y las Fuerzas Armadas, tuvo que intervenir la Comisión de Derechos Humanos del CCD.

## 12.9. LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CCD

La delegación de la Comisión de Derechos Humanos del CCD viajó a Tingo María el 23 de abril para investigar las denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos. Estuvo conformada por cuatro congresistas oficialistas (Carlos Blanco de Oropeza,<sup>532</sup> presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gilberto Siura, Hugo Zamata y Demetrio Patsías) y por dos congresistas de la oposición (Róger Cáceres y Gloria Helfer), además de Róger Niego y José Nalvarte, como representantes de la CNDDHH, y el padre Daniel Le Blanc y Francisco Diez Canseco, representantes del Consejo por la Paz, en calidad de invitados.

Por espacio de tres días (23, 24 y 25 de abril), la Comisión del CCD recibió los testimonios de las personas afectadas por la Operación Aries en Tingo María, Aucayacu y Anda. A pesar de que encontró algunas dificultades para desempeñar sus funciones, logró visitar los caseríos de Moyuna y Moena, donde comprobó la existencia de personas muertas: «La delegación del CCD, conducida por pobladores, identificó un paraje de Moyuna, conocido como Shipingo, en el que, en presencia del fiscal provincial, fueron desenterrados dos cadáveres; uno de ellos fue identificado por un poblador de la zona: eran los restos de Félix Loyola. Los dos cadáveres fueron trasladados a Tingo María por disposición del fiscal provincial» (CNDDHH 1994: 58).

La composición de la Comisión del CCD, con congresistas oficialistas y de oposición, dio como resultado dos versiones contrapuestas sobre lo sucedido en la operación Aries. Por un lado, los oficialistas manifestaron que no era posible adelantar juicios sobre las características de la campaña militar ni tampoco sobre el número de muertos, identidad y la forma en que habrían fallecido:

El congresista fujimorista Carlos Blanco Oropeza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del CCD, reconoce que se ha comprobado que no existen los cien cadáveres de pobladores civiles masacrados por elementos del Ejército Peruano ni los bombardeos sobre poblados de la zona del Alto Huallaga como lo denunciaron días

de 1994: 2). El 27 de abril, George Comnínios, representante de la Cruz Roja en el Perú, respondió a dicha invitación e incidió en que, en el Perú, como en todas las situaciones de conflicto en el mundo donde actúa, la Cruz Roja tiene por principio desplazarse sola, bajo la única protección del emblema de la Cruz Roja (*La República*, 27 de abril de 1994).

<sup>532</sup> Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del CCD, Carlos Blanco Oropeza estuvo en Huánuco desde el 11 de abril de 1994. Su temprana presencia en la zona fue para investigar los sucesos de violaciones de los derechos humanos cometidos por el Ejército en Cayumba Chico.

atrás algunos organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos en el país. (CNDDHH 1994: 65; *Gestión*, 27 de abril de 1994)

Por otro lado, los congresistas de oposición afirmaron que los testimonios recogidos en la zona señalaban al Ejército como el autor de las muertes: «Por lo que escuché, el Ejército fue el responsable directo de las muertes ocurridas en el Huallaga; no había cómo entender lo que hicieron; eran personas como nosotros. Eso no importó cuando torturaban, violaban y degollaban a las mujeres y a los hombres» (comunicación con Gloria Helfer).

El oficialismo replicó en los medios y asumió una posición de poseedores de la *versión* verdadera, según la cual las acciones militares contra el PCP-SL no habían afectado a la población civil: «[Dice el congresista Carlos Blanco Oropeza] Las fuerzas contrasubversivas en el frente Huallaga no incurren en excesos contra la población civil; sus acciones están focalizadas contra los grupos subversivos ubicados en «bolsones», en la selva norte del río Monzón [...]» (CNDDHH 1994: 65; *La República*, 27 de abril de 1994).

Además, a su regreso a Lima, el congresista fujimorista Oswaldo Sandoval presentó una moción de condena contra la CNDDHH por haber difundido, «sin pruebas objetivas y reales», las denuncias contra las Fuerzas Armadas. Ésta fue aprobada por la mayoría del CCD:

[El CCD acuerda] Condenar la forma irresponsable en que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha difundido versiones negativas sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en la zona del Huallaga en su lucha contra los últimos reductos del terrorismo, versiones que ha comprobado no se ajustan a la realidad, pero que, lamentablemente, han dañado la imagen y el prestigio del Perú. (*La República*, 29 de abril de 1994)

La moción de condena a la CNDDHH fue refrendada incluso por los congresistas fujimoristas que presenciaron los hallazgos de cuerpos mutilados y degollados y habían escuchado los testimonios de los sobrevivientes, en cuya ocasión reconocieron verbalmente la magnitud de los hechos como lo recuerda el sacerdote Daniel Le Blanc:

Al escuchar los testimonios de varias personas de Moena, me causaron tan gran impacto que busqué a los congresistas oficialistas más recalcitrantes [Blanco y Siura, no recuerda a quién más], que no creían en lo sucedido. Después, camino al helicóptero que nos llevaría a Mohena, el señor Siura me dijo, en alusión a la Operación Aries, «esta vez sí se han pasado» [...]. (Daniel Le Blanc, 50 años, era miembro externo de la comisión del CCD que investigó la Operación Aries en la época del conflicto armado interno)

Frente a la moción de censura de la mayoría parlamentaria, la CNDDHH presentó al CCD mayor documentación y advirtió que:

Nos preocupa también [...] que ya se haya aprobado con su voto [del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del CCD, Carlos Blanco Oropeza] en el CCD una moción de *condena* a la Coordinadora por haber *exagerado* los hechos. En el mismo sentido, nos sorprenden las declaraciones que usted ha hecho públicas, reiteradas veces, con el mismo propósito sin haber siquiera escuchado completamente, como su carta indica, los testimonios de la población ni menos aun tenido oportunidad para evaluarlos. (CNDDHH 1994: 82).

Es suma, el caso fue archivado y nunca más vuelto a tratar.

## 12.10. CONCLUSIONES

El narcotráfico inauguró una etapa de insólita prosperidad en el Alto Huallaga, pero también de una violencia inusitada donde compitieron varios grupos de poder. Incapacitado el Estado para hacer frente a esta situación, comenzó a imperar la «ley del más fuerte». Dada la composición social de la zona y el flujo constante de inmigrantes andinos atraídos por el botín de la hoja de coca y la droga, los conflictos sociales se volvieron endémicos. A esta población sólo la unía un absoluto rechazo al Estado, moralmente debilitado, pero capaz de realizar graves daños a determinados productores por medio de las acciones represivas de erradicación de los cultivos de coca.

A pesar de los esfuerzos del Estado (a través de sus instituciones civiles y militares) por corregir sus errores en la colonización y la fallida erradicación de la hoja de coca, éste no pudo interpretar correctamente el problema y su dimensión. Ya no era sólo la coca, los productores, los narcotraficantes, sino que había un actor mucho más violento que deseaba instaurar su «nuevo estado»: el PCP-SL. Al ensayar medidas aisladas e infructuosas que no afectaron las causas del problema, perdió autoridad y credibilidad. A ello contribuyeron los

fracasos de los operativos Verde Mar I (1979) y Verde Mar II (1981) y de otros operativos de erradicación forzada que alejaron al productor cocalero del Estado.

En estas circunstancias apareció el PCP-SL (1982), que luego de un lento trabajo de captación y adoctrinamiento al campesinado, por un lado, y de intentar la eliminación del Estado, por otro, impuso sus propias formas de regulación social. El establecimiento de alianzas con el campesinado y con los narcotraficantes permitió que el PCP-SL se fortaleciera en la zona entre 1986 y 1992, y la convirtiera en enclave político y en su principal fuente de recursos para sostener el conflicto armado interno.

¿Por qué se desarrolló la Operación Aries si la nueva estrategia contrasubversiva estaba dando buenos resultados? Para entenderlo se deben relacionar dos hechos estrechamente vinculados entre sí:

- La llegada de Alberto Fujimori al poder inició una nueva manera de enfrentar el problema de la violencia e incorporar una estrategia efectiva para derrotar al PCP-SL. La estrategia se planteó como una batalla política y militar. La batalla política se basó en la participación conjunta del Estado con los gobiernos regionales, gobiernos locales y organizaciones sociales de base. Se concibió que la unidad de todas las instituciones a escala local, regional y nacional posibilitaría una mayor resistencia a la presencia del PCP-SL. Esta batalla debía estar relacionada íntimamente con las acciones militares.
- Es quizás pensando en este plan que el presidente Alberto Fujimori señaló con mucha seguridad que la subversión sería derrotada antes de que concluyera su primer gobierno. Esta estrategia contrasubversiva fue coordinada entre el gobierno y las Fuerzas Armadas para efectivamente derrotar al PCP-SL; pero, a la vez, para consolidar una memoria salvadora que identificara a Alberto Fujimori como el vencedor de la subversión y poder fortalecer así su postulación a su primera reelección a la presidencia del Perú.

No es extraño que, luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori haya autodenominado a su gobierno como el «gobierno de emergencia y reconstrucción nacional». Éste tenía una misión a largo plazo: enmendar los crasos errores políticos y económicos cometidos por sus antecesores y sacar al país de la crisis económica, política, social y moral que atravesaba.

Vincular ambos hechos lleva a comprender que la Operación Aries formó parte de la tercera etapa de la estrategia contrasubversiva aplicada por las Fuerzas Armadas y el Estado. Esta tercera etapa se refirió a la realización de operaciones de limpieza en las zonas donde el PCP-SL todavía tenía presencia, especialmente en la margen izquierda del Huallaga. No obstante, también esta estrategia y, especialmente, la Operación Aries, se transformaron en uno de los principales argumentos políticos que un gobernante y su cúpula de poder podía presentar al país para conseguir su primera reelección.

La CNDDHH cumplió un papel importante para descubrir los horrores (torturas, muertes, violaciones sexuales, etc.) de la Operación Aries. Las personas todavía recuerdan cómo los comandos militares torturaron, degollaron y descuartizaron a sus paisanos. La denuncia hecha por este organismo para develar las matanzas de población civil llevaron al gobierno, al CCD, a la prensa oficialista (*Expreso*, canal 2) y a las Fuerzas Armadas a sindicarlos como «personas no patrióticas» porque, supuestamente, habían dañado la imagen y el prestigio del país, así como entorpecido la pacificación nacional. Igualmente, la CNDDHH es importante, porque les dio voz a las personas que salvaron su vida de los ataques militares. Por ello, los testimonios de estos pobladores refrendan la afirmación de que las Fuerzas Armadas cometieron matanzas contra la población civil en reiterados e indiscriminados operativos militares en los que utilizó helicópteros artillados que bombardeaban y baleaban a cualquier persona. Asimismo, se identificó la presencia de comandos terrestres del Ejército que incendian viviendas, abusaban sexualmente de mujeres, torturaban y mataban a la población. Estas acciones no sólo se efectuaron en Moena y Moyuna, sino que constituyeron una secuencia de hechos en todos los caseríos de los «bolsones» Cuchara y Primavera.

El gobierno consiguió que la denuncia sobre los graves atropellos de los derechos humanos cometidos en el Alto Huallaga sea silenciada y olvidada por la opinión pública. Además, se logró que uno de los más execrables crímenes cometidos en el país permaneciera impune y oculto en aquellos sectores de la memoria que no quieren ser recordados.

El control de los medios de comunicación jugó un papel importante para fortalecer el recuerdo del conflicto armado interno. Esta situación hizo posible la construcción de una «memoria salvadora» donde el Presidente, su asesor y las Fuerzas Armadas aparecían como los vencedores de la subversión y que llevaba a pen-

sar que la forma en que triunfó el Estado era la única posible: imponiendo el terror al terror. Con ello, se transmitía que Alberto Fujimori era indispensable al igual que su cúpula de poder para el desarrollo y la pacificación del país.

### 13. LA VIOLENCIA EN HUAYCÁN

El cono este de Lima Metropolitana fue el principal escenario de la violencia en la capital. En primer lugar, por las consideraciones estratégicas del denominado «equilibrio estratégico» en el ámbito urbano del PCP-SL, entre las que destacaban el hecho de ser una zona donde se localizaban sectores obreros con larga tradición organizativa, un considerable número de asentamientos humanos de reciente creación y una vía importante de abastecimiento para la ciudad. En segundo lugar, porque, dada la importancia de la presencia subversiva en esta zona de Lima, la política contrasubversiva llevada a cabo desde 1988 la consideró como prioritaria para sus objetivos. De esta manera, se instalaron dos bases militares y fue el lugar donde se iniciaron los operativos de rastrillaje.

Entre los diversos escenarios locales de la violencia en el cono este de Lima destacan, sin lugar a dudas, dos: la Comunidad Autogestionaria de Huaycán y la Asociación de Vivienda Jorge Félix Raucana.

Los asentamientos humanos de Huaycán (1984) y Raucana (1990) fueron creados en distintos momentos, pero comparten una característica: existieron en la imaginación de sus promotores políticos antes de hacerse realidad. Huaycán fue un proyecto concebido por la Izquierda Unida (IU) desde la Municipalidad de Lima. Raucana fue, por otro lado, un asentamiento humano concebido y organizado por el PCP-SL en función de sus objetivos políticos.

En los dos casos, la idea política debió enfrentarse con las expectativas de los pobladores en un marco de consensos y disensiones bajo una situación de violencia generalizada en el país. Las dificultades fueron entendidas por la opinión pública como una mera manifestación de la acción de los grupos subversivos, especialmente del PCP-SL. Sin embargo, detrás de esa interpretación es posible encontrar la respuesta de una serie de estrategias de supervivencia en situaciones extremas, de las cuales el PCP-SL fue un referente pero no el único.

En la historia de los asentamientos humanos, que aparecieron en Lima desde 1950, Huaycán ocupa un lugar importante por la forma en que la Municipalidad de Lima, administrada entonces por IU, intentó concretar un ambicioso proyecto de vivienda comunitario y autogestionario, aunque debe señalarse que los pobladores de Ate-Vitarte ya habían concebido la idea de poblar la zona.

El PCP-SL también tendría presencia en el desarrollo de la nueva comunidad y la inscribiría en su denominado «Plan de conquistar bases de apoyo» (incluido en el cuarto hito estratégico llamado «Desarrollo de la guerra de guerrillas», que se inició en mayo de 1983 y se prolongó hasta septiembre de 1986).<sup>533</sup> Según la evaluación del PCP-SL, había llegado el momento de expandir la «guerra popular», incorporando por primera vez a la ciudad de Lima entre sus prioridades y presionando en espacios clave, como Ate-Vitarte y la carretera Central para establecer sus denominadas «bases de apoyo».<sup>534</sup>

Sin embargo, nunca pudo enraizarse por la tradición organizativa previa y la experiencia política de sus dirigentes que impidieron la infiltración subversiva. En buena cuenta, podría afirmarse que no fue la política contrasubversiva la que derrotó en Huaycán al PCP-SL, sino la firme voluntad de sus pobladores, aun al precio de muchas vidas sacrificadas.

A inicios de los años noventa, la fisonomía que hasta entonces mostraba Huaycán empezó a variar. El lugar empezaría a recibir grupos de pobladores con características socioeconómicas diferentes a los que ya resi-

<sup>533</sup> Para mayor información sobre los tres niveles de la lucha armada —hitos, planes y campañas— y la diferencia entre estrategias y tácticas en el PCP-SL, consultar <[www.maoism.org/misic/peru/docs\\_sp/elecc1.htm](http://www.maoism.org/misic/peru/docs_sp/elecc1.htm)>.

<sup>534</sup> Había varias razones para esta elección: primera, Ate-Vitarte es un distrito con una antigua e importante zona industrial donde residen numerosos contingentes de obreros con larga tradición de lucha y organización sindical; segunda, el crecimiento demográfico explosivo debido a un desplazamiento acelerado de inmigrantes y a la proliferación consecuente de asentamientos humanos de reciente creación, muy pobres y sin gran capacidad de organización; tercera, el control del abastecimiento a Lima, lo que para el PCP-SL era de gran valor estratégico político-militar.

dían allí. Ello motivó una caótica lotización del terreno, que incluyó el uso de las laderas, destinadas originalmente a la forestación y no a la residencia. Entre los nuevos afincados se encontraban los desplazados. Ello generalizó erróneamente la sospecha de que el PCP-SL estaba detrás de ellos.

A partir de entonces, uno de los efectos del proceso de violencia fue el quiebre del sistema de organización que, a pesar de haber resistido exitosamente a la subversión, debilitó a una generación de hábiles dirigentes sin que tuviera tiempo de formar un grupo de recambio; a esta situación se añadió la comprobación de casos de corrupción, que dañó ostensiblemente su legitimidad, y la burocratización, que los fue alejando de una práctica de relaciones dinámicas con la población.

La política autoritaria que estableció el gobierno del presidente Alberto Fujimori durante los años noventa agudizó aún más estos problemas. El gobierno instaló en Huaycán una base del Ejército que ejecutó un plan combinado de operaciones clandestinas (rastrillajes, detenciones arbitrarias, etc.) y acciones cívicas (reparto de alimentos, construcción de obras públicas, cortes de pelo). Paralelamente, las rondas urbanas, que habían surgido como un mecanismo de defensa contra la delincuencia, fueron cooptadas por el aparato militar con la anuencia de algunos dirigentes.

Asimismo, la incondicionalidad y el bajo perfil de la dirigencia produjeron un vacío que alentó la aparición de un nuevo grupo de dirigentes dúctiles al clientelismo. La expansión de la asistencia social financiada con dinero público fue vista por los beneficiarios como una concesión y no como un derecho adquirido. Todo esto se realizó renunciando a la autonomía frente al Estado que actuaba según la lógica de sus fines políticos y no de la organización popular.

En la actualidad, a pesar de lo vigoroso y dinámico que fue el sentido participativo y autogestionario de Huaycán, la organización comunal no ha podido restablecerse y los liderazgos carecen ostensiblemente de legitimidad. Por un lado, existen dos juntas directivas que reclaman para sí la representatividad de la comunidad. Sus conflictos revelan la importancia que han adquirido el caudillismo y el clientelismo. Y por otro lado, las organizaciones naturales, como los comedores populares, los comités del vaso de leche y otros, no tienen canales de coordinación con las otras instancias de gobierno y administración local.

Sin embargo, las consecuencias de la violencia en Huaycán no se reducen a la destrucción de la organización y la extrema debilidad que muestra ahora la participación otrora ejemplar. Una secuela evidente de esta experiencia es el arraigo del miedo y el temor entre los pobladores, un factor que genera mucha desconfianza y obstruye la debida socialización entre ellos y con el entorno externo.

Ello no obstante, la investigación de campo realizada por la CVR pudo comprobar que, entre los pobladores, aún es fuerte el recuerdo positivo de la experiencia participativa y, por lo mismo, es un elemento que debería potencializarse para la aplicación de proyectos de desarrollo en la zona. De igual manera, a pesar de que la organización social presenta un panorama complicado, hay instituciones que, durante la etapa de violencia, desempeñaron un papel decisivo de contención y que aun ahora son una referencia de identidad para los residentes y eje para proyectos de desarrollo local. Entre ellas destaca la Iglesia Católica, representada por la parroquia San Andrés, conducida por la orden monfortiana.

### 13.1. ANTECEDENTES

El Programa de Habilitación Urbana del Área de Huaycán (PEHUh) fue creado el 3 de mayo de 1984 por resolución de alcaldía n.º 40 de la Municipalidad de Lima Metropolitana (MLM). La MLM definió su papel como promotora de la gestión popular y buscó la consolidación de organizaciones vecinales apoyando la autoconstrucción y desarrollando tecnologías urbanas apropiadas. Para ello, designó un equipo técnico estable en la zona que propiciara una gestión democrática de los pobladores y la aplicación de innovaciones técnicas, lo que en la práctica significaba la voluntad de que los pobladores tomaran parte en el diseño.

Los principales aspectos considerados en el proyecto Huaycán fueron:

- El equipo técnico debería discutir las propuestas urbanísticas con la totalidad de las familias en asambleas generales. Las unidades comunales de vivienda (UCV) ocuparían un área de aproximadamente una hectárea.

tárea con una densidad neta que oscilaría entre 420 y 550 habitantes por hectárea.<sup>535</sup> La intención era que la UCV reforzara los lazos de vecindad e identidad entre sus miembros, diseñando los lotes de manera tal que confluieran hacia espacios abiertos y se evitara que los vecinos se aislaran. Esto favorecía, además de una utilización óptima del espacio, el uso de las calles como puntos de encuentro más que de circulación.

- La forma de propiedad ofrecía un sistema que combinaba los lotes unifamiliares y el aspecto colectivo de las áreas comunes, así como de algunos servicios como parques y núcleos sanitarios, entre otros.
- Se planteó que la población misma construyera un conjunto de núcleos con el propósito de satisfacer colectivamente las necesidades y luego su reutilización de acuerdo con el desarrollo del asentamiento. Entre esas obras, se consideraban:
- Construcción de locales comunales de uso múltiple.
- Construcción de un reservorio en una esquina de la UCV, que sirviera a cuatro pilones y a una lavandería en el local comunal.
- Construcción de cuatro letrinas múltiples con seis cabinas en cada UCV.
- Construcción de microrrelenos sanitarios por cada UCV.
- Electrificación: en la medida en que cada UCV contaba con un medidor, debía utilizar postes de madera y fluorescentes para el alumbrado público y redes aéreas, con la finalidad de bajar los costos y optimizar el servicio.
- Apoyo a la autoconstrucción: orientación legal y financiera, asistencia técnica, capacitación y creación de la Unidad de Abastecimientos y Servicios.

### 13.2. EL OTRO LADO DEL PROYECTO: LOS POBLADORES

La ocupación de Huaycán no fue producto solamente de la iniciativa municipal. Desde 1982, en Ate-Vitarte y otros distritos populares de Lima se dieron diversas acciones para dotar de vivienda a la población, estimulando la formación de asociaciones de pobladores que incluso intentaron invadir Huaycán infructuosamente, como ocurrió en 1982 por parte de la Asociación Las Malvinas (Chaclacayo).

Luego vendría la experiencia de la Asociación Andrés Avelino Cáceres, cuyo origen se remonta a 1983 y aglutinó a residentes de Ate-Vitarte, aunque en su caso sus integrantes se contactaron casi de inmediato con la Municipalidad de ese distrito. En estas circunstancias, empezó a esbozarse lo que luego sería el proyecto Huaycán, nutrido por la concurrencia de las asociaciones José Carlos Mariátegui (El Agustino), José Carlos Mariátegui (Ate-Vitarte), Julio C. Tello y otras agrupaciones formadas esencialmente por empleados y trabajadores del sector público.<sup>536</sup> En total, fueron 23 las asociaciones que estuvieron comprometidas inicialmente, entre las cuales predominaba la asociación Andrés Avelino Cáceres porque representaba a más de la mitad de los futuros pobladores. Por otro lado, la cercanía política de sus dirigentes con los miembros del equipo técnico de la MLM hizo que las coordinaciones fuesen más fluidas.<sup>537</sup>

---

<sup>535</sup> La forma de organización que tiene Huaycán se denomina comunidad urbana autogestionaria, lo cual significa una organización estructurada en forma de pirámide, donde las bases son las unidades comunales de vivienda, más conocidas como UCV. Cada UCV agrupa a sesenta lotes, es decir, a sesenta casas, entre las cuales eligen a un presidente que los va a representar ante la dirigencia central. Una zona, identificada por una letra del alfabeto, representa una cantidad variable de UCV. En cada zona se elige una secretaría zonal que representa a las bases de la organización vecinal. Dichos secretarios zonales coordinan sus esfuerzos con la dirigencia central de la comunidad denominado Consejo Ejecutivo Central (CEC) de la Comunidad Urbano Autogestionaria de Huaycán. Inicialmente se proyectaron doscientos UCV (hoy son 235 sólo en las zonas, sin incluir las ampliaciones) y cada una de ellas tiene una extensión de una hectárea (10 mil metros cuadrados) y acogen sesenta lotes unifamiliares. Cada lote tiene un área de noventa metros cuadrados, lo que permite optimizar el espacio, en vez de los 120 metros que tienen las viviendas tradicionales. La reducción del espacio en cada lote se debe a que las áreas verdes son consideradas fuera de las casas. Si se multiplica sesenta familias por noventa metros cuadrados, se tiene que las viviendas sólo ocupan el 56% del área total de la UCV. Las casas se disponen al borde del perímetro de la UCV y dejan un área libre en el centro. El espacio libre restante es de propiedad común; por allí pasan dos calles que obligatoriamente deben cruzar cada UCV y se ubican las áreas verdes y comunales. Con este diseño, el espacio se organiza más eficientemente, se agrupan los servicios y queda un espacio para un local comunal de la misma extensión de un lote, en donde se pueden hacer reuniones, y funcionan un comedor y un botiquín comunal.

<sup>536</sup> Entre las últimas estaban la Cooperativa de Vivienda del Instituto Nacional de Cultura, la Cooperativa de Vivienda de los Trabajadores de la Municipalidad de Lima, la Asociación Pro-Vivienda del Concejo Distrital de Ate-Vitarte, la Asociación Pro-Vivienda del Colegio Teresa Gonzales de Fanning y la Cooperativa de Vivienda del Colegio de Arquitectos del Perú.

<sup>537</sup> Eduardo Figari, director del equipo técnico y líder de VR-PC, era muy amigo del líder de la Asociación Andrés Avelino Cáceres, Alfonso Gutiérrez, y esto le permitía obtener información que no tenían los otros dirigentes.

### 13.3. LOS HIJOS DE LOS INMIGRANTES

Los primeros pobladores de Huaycán eran, en su mayoría, hijos de inmigrantes, cuya socialización primaria ocurrió en la ciudad. Habían participado en los procesos electorales, en la renovación de sus dirigencias vecinales, en acciones sindicales, en los paros nacionales y en las luchas barriales por terrenos y servicios. De acuerdo con un censo realizado en 1985 por los propios pobladores inmediatamente después de la ocupación del terreno, un 48% de los jefes de familia nació en Lima; la población estaba compuesta por jóvenes familias que habitaban anteriormente en barriadas del distrito de Ate-Vitarte (38%) o de distritos aledaños como El Agustino, Chac lacayo y Lurigancho, en condición de alojadas o inquilinas; un 49% era menor de 18 años y un 35% se encontraba entre los 19 y 35 años.

El 5 de julio de 1984 se llevó a cabo una reunión en la MLM, en la que participaron los representantes de 18 de las 23 organizaciones, quienes se comprometieron a respetar el Plan Integral de la MLM y ésta, a su vez, a respaldar legalmente la ocupación. Diez días después, 2 mil de las 12 mil familias inscritas procedieron a ocupar el terreno en una acción que no estuvo libre de grandes tensiones: las obras de habilitación demoraron más de lo previsto y, por otro lado, circularon los rumores de que la asociación Horacio Zeballos pretendía invadir la zona.

El 23 de julio de 1984 el diario *La República* afirmaba que, en Huaycán, una columna de 5 mil personas, armada con palos y piedras, había rechazado a los 4 mil integrantes del asentamiento humano Horacio Zeballos que trataban de ocupar terrenos en dicha quebrada.<sup>538</sup> Los enfrentamientos —continuaba la nota— fueron detenidos por la mediación de los principales dirigentes de los sectores en pugna. La Asociación Horacio Zeballos, controlada por el PCP Patria Roja, había participado inicialmente en el proyecto pero decidió retirarse de las coordinaciones con la Municipalidad y continuar su proceso de inscripciones por cuenta propia.

Los proyectos de la MLM y el del PCP Patria Roja tenían diferencias sustanciales, que iban más allá de los intereses de Huaycán y evidenciaban los tensos reacomodos del frente IU, por entonces la segunda fuerza política del país. Los diarios reconocieron al concejal César Rojas Huaroto y al senador Ángel Castro Lavareillo, dirigentes nacionales del UNIR, la alianza de la que formaba parte el PCP Patria Roja, entre quienes arreglaban a los invasores. Como respuesta, las asociaciones Andrés Avelino Cáceres y José Carlos Mariátegui emitieron un comunicado conjunto en el que afirmaban que el proyecto Huaycán no era una invasión sino una acción debidamente aprobada por la Municipalidad de Lima y las únicas inscripciones válidas eran aquellas que habían sido registradas por este organismo.

Horacio Zeballos había abierto inscripciones en plazas y otros lugares públicos sin preocuparse de que los interesados reunieran los requisitos exigidos (por ejemplo, constancia de no tener vivienda en otro lugar de Lima). Su objetivo era tener la mayor cantidad de afiliados para negociar en mejores condiciones, y esto fue advertido por los dirigentes de Huaycán, quienes estaban muy presionados por sus miles de afiliados que veían escapar su última esperanza de obtener un lote. En otras palabras, los dirigentes tuvieron que acceder al reclamo de las bases para no verse rebasados, como sostiene Arturo, ex secretario general de Huaycán.

Las disputas entre Huaycán y el asentamiento Horacio Zeballos culminaron con el asesinato de Jaime Zubia, un dirigente de este último (noviembre de 1984). La autoría del crimen se desconoce hasta ahora, pero, según una actual residente, nadie duda de que fue el PCP-SL, aunque en el asentamiento Horacio Zeballos hay muchos pobladores que sospechan que el crimen fue meditado por los dirigentes de Huaycán. Finalmente, la asociación conducida por el PCP Patria Roja logró posesionarse de unos terrenos aledaños, en la parte derecha, y creó un nuevo asentamiento que, según estimaban, podía beneficiarse de las obras y servicios que se le proporcionarían a Huaycán.

### 13.4. ORGANIZÁNDOSE PARA VIVIR

Apenas ocupado el terreno, los dirigentes procedieron a organizar las estructuras de gestión y de seguridad. Un primer grupo actuaba en el perímetro de la ocupación, que estaba situado en lo que ahora es la Zona A. Otro grupo, muy numeroso, se colocó en las cercanías de la zona arqueológica, donde estaban las ruinas de

<sup>538</sup> La República, 23 de julio de 1984. Banco de datos de Desco.

Huaycán de Pariachi. Un tercer grupo fue instalado en la parte central, por donde llegaba la pista que atravesaba las tierras de Poppe y El Descanso. Era el sector por donde transitaban los que llegaban, y podían hacerlo sólo los ocupantes que tenían credenciales de sus organizaciones. Dos grupos de defensa más estaban en la zona de la arenera, en el extremo derecho del perímetro, a unos cuatrocientos metros el uno del otro, pues se temía que por este lugar podría llegar cualquier invasión. De esta manera, se cerraba el acceso hacia las partes altas que se iban a ocupar conforme se fuera desarrollando el plano urbano y se formaran los barrios, las llamadas UCV. La estructura de seguridad incluía tres niveles: la denominada seguridad externa que debía prevenir cualquier eventualidad surgida contra la comunidad en el ámbito externo; la seguridad interna que aseguraba un mínimo de control y orden entre los pobladores, conformada por patrullas que circulaban entre los campamentos para evitar cualquier tipo de robo, escándalo o trasgresión a la ley seca; y la seguridad especial que dependía de la dirigencia de la Asociación Andrés Avelino Cáceres.

Luego de la ocupación era necesario solucionar las necesidades básicas de la población, para lo cual los dirigentes buscaron el apoyo de algunas instituciones en Santa Clara. Así, convencieron a una línea de buses para que ampliara su recorrido hasta Huaycán y a unos propietarios de camiones cisternas para que llevaran agua hasta la quebrada.

La escasez de agua, energía eléctrica y saneamiento convertía la salud de los pobladores en uno de los problemas más urgentes. Por eso, el mismo día de la ocupación se instaló una posta médica. Para ello, se convocó a los paramédicos y enfermeras que se encontraban entre los ocupantes para organizar turnos de atención. Luego llegaron varios médicos pertenecientes al Hospital Hermilio Valdizán y al Centro de Salud de Vitarte a ofrecer sus servicios gratuitamente, pues se habían enterado de las necesidades de Huaycán por los diarios.

También las necesidades educativas surgieron desde el primer momento y trataron de ser atendidas con la participación de ochenta profesores de Vitarte, organizados en el Comité de Apoyo Magisterial. Éstos formaron parte de los primeros pobladores que buscaron lotes. Ellos elaboraron un primer censo educativo y descubrieron que había 150 niños a los que se tenía que atender prioritariamente. Luego hicieron un llamado general a través de radio bocinas a los maestros titulados, bachilleres y estudiantes de Educación del asentamiento y les propusieron trabajar voluntariamente y sin pago en el colegio que pensaban fundar. Resultó que había casi tantos maestros como alumnos; por eso, se seleccionó a los más preparados. Las asociaciones, por su parte, se comprometieron a facilitarles la manutención mientras se tramitaba el reconocimiento oficial del colegio.<sup>539</sup> Acto seguido, entre todos se construyó el local escolar un domingo de faena comunal. Tenía siete aulas, servicios higiénicos y hasta una oficina para el director. Los vecinos aportaron palos, maderas, una que otra pizarra, motas, tizas e hicieron las primeras carpetas. De esta manera, muchos niños pudieron estudiar ese año. El 15 de agosto de 1984, al mes exacto de la ocupación, comenzaron las clases en Huaycán. Dos meses después, la Dirección de Educación de Lima dio reconocimiento oficial al Centro Educativo 1236, que hasta hoy funciona en la Zona A.

### 13.5. UNA EXPERIENCIA NOVEDOSA

Superada la etapa de ocupación, Huaycán debía prepararse para su asentamiento definitivo y, previsiblemente, la distribución de los sectores tampoco estuvo libre de problemas. La quebrada de Huaycán es un espacio de características físicas desiguales: compuesta de un sector bajo, predominantemente horizontal y adecuado para el uso urbano, presenta también zonas verticales y pedregosas, por lo que debió emplearse gran esfuerzo para habilitarlas como zonas de residencia.

Naturalmente, todos los pobladores deseaban ubicarse en la mejor zona, pero el hecho de que la Asociación Andrés Avelino Cáceres reuniera casi la mitad del total de los beneficiados le dio prioridad. Aun así hubo al menos tres enfrentamientos motivados por la extensión que ocupaba cada asociación.<sup>540</sup> Paradójicamente, el más grave de ellos culminó con la conciliación entre las asociaciones Andrés Avelino Cáceres y José Carlos Mariátegui. Tras ese suceso, se estableció el acuerdo de crear un frente de defensa que actuase como interlocutor ante la MLM.

<sup>539</sup> ADELH. Diagnóstico socioeconómico de Huaycán. Lima, 1998.

<sup>540</sup> De estos tres enfrentamientos, el más importante se produjo a los 15 días de la llegada a Huaycán. La Asociación José Carlos Mariátegui de Vitarte consideró que el espacio que le habían asignado no cubría sus expectativas y, de esa manera, los dirigentes convocaron a sus afiliados, que se hicieron presentes en un número entre trescientos y quinientos para tomar otros terrenos.

En agosto de 1984 ya vivían en Huaycán 4 mil familias. En noviembre, éstas iniciaron la ocupación del área que les correspondía como UCV. El retraso se debió a las diferencias de intereses, lo que llevó a constituir el Comité de Gestión —denominado «la tripartita»— con el propósito de regular la participación organizada de la población.<sup>541</sup>

En octubre del mismo año se inició el proceso de ubicación de los beneficiarios en las denominadas UCV. En la búsqueda de un criterio justo, se dispuso que las prioridades se ajustasen a las necesidades familiares. Así, por ejemplo, una madre sola con más de dos hijos menores de edad tenía preferencia frente a una pareja sin hijos y esta última sobre una persona joven y soltera. Se estableció, además, un sistema de puntajes sobre la participación en faenas comunales, en las guardias nocturnas y otros compromisos que resaltasen la solidaridad y los aportes a la organización. En suma, la oportunidad de obtener lotes mejor ubicados dependía del registro de cada afiliado en esas tareas.

Los dirigentes de esa época pasaban la jornada calificando a cada familia y visitando cada campamento para determinar si los socios efectivamente vivían allí. Las familias elegidas llegaban hacia la zona señalada llevando a cuestas sus enseres. Una vez ubicados, se realizaba una asamblea entre todos los socios de la UCV, se declaraba oficialmente su creación e inmediatamente después se elegía una junta directiva que debía organizar los trabajos de limpieza.

Poca diferencia había entonces entre las UCV y los campamentos: se mantenían instituciones de solidaridad como las ollas comunes —fueron el germen de los comedores populares— y la rotación de las mujeres en la atención de los niños. Casi siempre comenzaban construyendo precariamente el local comunal en donde realizaban esas actividades y en las márgenes de la UCV levantaban las primeras chozas, dejando un espacio en el centro para el futuro local comunal.<sup>542</sup>

Según el criterio comunitario del proyecto, se pensó en un esquema de servicios compartidos que, aparentemente, era apropiado en un ambiente de recursos tan escasos. Por ejemplo, cada UCV había previsto la construcción de cuatro silos; asimismo, acordaron que sólo hubiese un medidor de luz por cada unidad y que el pago de la energía fuese compartido por todos los vecinos de acuerdo con la forma que ellos decidieran. Sin embargo, estos criterios no eran compartidos por amplios sectores de la población:

Nos querían hacer vivir comunitariamente y pensábamos qué era lo que tenían ellos en su cabeza. Seguramente pensaban que ellos son tan pobres que nunca van a tener carro. ¿Para qué necesitan garaje? Van a ser tan pobres que van a vivir sin baño. Como no puede tener medidor cada uno, van a pagar ahí según lo que gasta. O sea, en su cabeza estaba pues esa idea. Esas ideas de ellos, pero nosotros veíamos que eso era irreal, ¿no? Porque esos baños, ¿quién los limpia, quién los administra? La luz, tampoco. ¿Quién gasta más? ¿Quién gasta menos? (Profesor Miguel, 4 de mayo de 2002)

En poco tiempo, estos servicios se abandonaron y fueron reemplazados por los unifamiliares: «Con el tiempo, anulamos esa costumbre de la luz, anulamos esa costumbre de los baños en cuatro partes; no era funcional, no daba resultados, pues, hacemos el baño ahí, ¿quién lo usaba? Nadie lo limpiaba, las cosas se desaparecían. ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a cerrar?» (Ibidem).

A esto se agregó el asunto de los espacios públicos. El proyecto había estimado que la vida social más importante debía realizarse en las UCV y, por lo mismo, no le otorgó mucha importancia a los espacios más amplios de los modelos urbanos tradicionales como una plaza de armas. Al respecto, un poblador se preguntaba:

Cuando queremos reunirnos, por ejemplo, para hacer nuestros mítines, para celebrar algo, o bueno, pues, ¿dónde está la plaza de armas? Se olvidaron de la plaza de armas [...] no estaba el consejo parroquial, no [había] áreas grandes para hacer un parque recreacional o un estadio, no había. Todo era chiquito, chiquito, chiquito, locitas, locitas, o sea, espacios pequeños, pero no había áreas verdes grandes.

Surgen entonces los primeros desencuentros entre la dirigencia y el equipo técnico de la MLM. Lo que se interpretó como una imposición fue contrarrestada con la creación del Frente de Defensa de Huaycán, presidido por Guillermo Castro, de breve trayectoria, que luego fue reemplazado por una Asociación de Pobladores.

<sup>541</sup> En este Comité estaban representados cada asociación, la MLM y la Municipalidad de Ate-Vitarte. Su misión se centró en las tareas de habilitación urbana. El diseño que terminó por darle a Huaycán su fisonomía peculiar fue producto de la relación establecida entre estas instancias, lo que fue facilitado, en gran medida, por la identificación política existente entre ellas, es decir, su pertenencia a IU.

<sup>542</sup> ADELH. Ob. Cit.

Con respecto a la figura legal sobre la propiedad, que era el condominio (no lo era en sentido estricto), hubo también problemas. El condominio implicaba que, cada cierto período, los propietarios debían comprometerse a no ejecutar una acción de partición, procedimiento poco operativo entre sectores pobres, que además podía alimentar malentendidos o comportamientos disgregadores.

### 13.6. HACIA EL PRIMER CONGRESO

Los desencuentros de la administración municipal de Alfonso Barrantes, que aspiraba a plasmar en Huaycán un proyecto urbano socialista, contra la voluntad de muchos pobladores, podrían ser materia de otro análisis que bien puede explicar la posterior desarticulación de IU. Lo que interesa dejar claro en este apartado es que este signo bautismal arrastró a Huaycán a las vicisitudes de la política peruana y a que fuera considerado desde entonces como un asentamiento «rojo» en el contexto del conflicto armado interno. Ésa fue evaluación del PAP, rival de IU, cuando ganó las elecciones generales (1985) y no era muy forzado anticipar el orden de prioridades que le adjudicaría a Huaycán, lo que reactualizó en la población viejos comportamientos clientelistas para aproximarse al poder. No fue coincidencia que, durante dicho período, no se abrieran locales de ese partido en la zona. *Maria* nos refiere lo siguiente:

Aquí había dos... varias posiciones políticas, ¿no?, que eran de izquierda y el PAP, que en ese momento estaba Alan García. Creo que la gente no quería, pues, dirigentes sin puestos, sino lo que querían era el voto popular. La gente quería, nosotros mismos poner nuestros dirigentes. Le guste o no le guste al otro grupo. No que por haber sido primero dirigentes, pues a veces, muchas veces se creen dueños de Huaycán. Alcaldes, como ahora también está sucediendo, que ahora todo el mundo quiere ser cabeza y al final de cuentas han descabezado Huaycán y ahora no tienen dirigentes. No se sabe ni quién es dirigente. Hay unas elecciones, gana las elecciones un dirigente, hay otro grupo, dicen no, no me gusta. Así, entonces, yo digo, ¿a quién respetamos, la voluntad del pueblo o respetamos al grupo de dirigentes que toda la vida quiere manejar el destino de Huaycán? Entonces, ése es el problema. Y siempre ha habido ese problema. Sino que esa vez, con mayor fuerza, ganó Raúl Rodríguez y eso lo que han tenido simple y llanamente es respetar el voto popular ¿no?, porque, eso yo pienso que, cuando hay elecciones, hay unas votaciones de por medio que son, pues, este, votaciones este secretas, en ánforas. Eso habla por sí solo. El pueblo cuando hay veces se te dice elecciones directas. El dirigente volteá, le ve a una persona, a veces no quiere levantar la mano, no quiere emitir su voto. Pero si yo voy a un ánfora y emito mi voto, nadie me ve y mi voto es secreto y eso es mi deseo. Y el deseo de esa vez fue pues que realmente salga Raúl Rodríguez. (23 de mayo de 2002)

El distanciamiento de los dirigentes de Huaycán, mayoritariamente de IU, se vio claramente cuando se convocó el primer congreso para elegir a la junta directiva de la Asociación de Pobladores, cuyo tema central era el tamaño de los lotes. Las posiciones se radicalizaron y mientras IU intentaba respetar los criterios técnicos (noventa metros cuadrados), los apristas adoptaron el deseo de los pobladores (120 metros cuadrados). Durante las elecciones, los delegados representantes ante el Congreso aprobaron por mayoría la posición de IU, pero éste fue un triunfo pírrico. El segundo tema de la agenda —la modalidad de voto para elegir a la primera junta directiva de Huaycán— reveló que las simpatías de ese momento se inclinaban por los apristas. El asombro que ello causó en los socialistas no era comprensible: el PAP venía promoviendo el Programa de Asistencia para el Ingreso Temporal (PAIT), que ofrecía trabajo eventual a pobladores y, además, podía ejecutar algunas obras necesarias en Huaycán. Por último, los dirigentes apristas mostraban ante los pobladores más capacidad de gestión por su cercanía con el gobierno.

### 13.7. LA PRESENCIA DEL PCP-SL

Aun así, la vigencia momentánea del PAP no socavó la legitimidad de los dirigentes de IU, pero contribuyó al radicalismo de algunos sectores ya identificados con el PCP-SL. Así, se inició una campaña intensa y persistente de desprecio apoyada en supuestas denuncias de corrupción. El PCP-SL, que nunca había aportado una alternativa al proyecto Huaycán, se presenta ante los pobladores con el argumento de que las necesidades cotidianas debían ser resueltas apelando al recurso de la violencia. No obstante, en la práctica, sus acciones fueron contrarias a los intereses de la población. Un ejemplo de ello fue la quema de ómnibus de ENATRU, imprescindibles para desplazarse en busca de trabajo y abastecimiento. Por otra parte, la autogestión era, según el PCP-SL, un mecanismo del sistema que tenía que destruirse para ceder paso a un

elemental y nunca bien explicado «autosostenimiento», de la misma manera como lo habían impuesto en las comunidades campesinas de la sierra.

No cabe duda de que el PCP-SL tuvo influencia y, eventualmente, legitimidad en algunas zonas, como la E. Asimismo, era evidente que su objetivo, desde el inicio, era hacer converger los objetivos de su partido con los de la organización vecinal. No obstante, a pesar de sus incontables acciones de propaganda, como marchas relámpagos, volanteos y, esporádicamente, captura y uso de los altoparlantes para propagar sus consignas, siempre tuvo grandes dificultades para enraizarse: «Aquí en Huaycán las posiciones que Sendero [el PCP-SL] participó a través de las organizaciones con propuestas, ¿no?, como combatir, resistir [...] lo difundían libremente a partir de las cuatro de la mañana a todo volumen. Fue, digamos, un poco, marcando la distancia entre nosotros» (Ibidem).

Otro factor que impidió su desarrollo fue el rápido y tajante deslinde de los dirigentes identificados con IU, a quienes no pudo rebasar, pese a emplear tácticas de amedrentamiento como presentarse en los congresos con gente armada y, en algunos casos, ejerciendo la amenaza directa contra algunos de ellos.

Hoy varios militantes del PCP-SL de base consideran que el aislamiento en el cual se produjo su derrota militar se debió precisamente a una mala lectura de las necesidades locales. Su problema, lo reconocen, no fue táctico sino de concepción: era imposible lograr una legitimación sostenida bajo premisas doctrinarias e ideológicas que rechazaba la población. El profesor *Miguel*, que ha recogido algunas de esas opiniones, nos dice:

Eso era uno de sus anhelos de ellos [los subversivos], lograr sobre todo la dirigencia central, que era, en ese caso, podríamos decirlo, era el punto crítico [...] Ahora que se infiltraban en muchos de los eventos que el pueblo organizaba para reclamar, sí es cierto. Eso no lo podemos negar [...] siempre lograban ingresar uno o dos, pero el consenso de la dirigencia siempre [...] lograba manifestarse como pueblo. Huaycán se expresaba como un pueblo organizado, ¿no?, que no iba a permitir ni por un lado que en este caso la violencia tomara el control, ni por otro lado, tampoco dejar. Decíamos nosotros queremos construir. ¿Por qué Sendero [el PCP-SL] no decía construir? Sino simplemente ellos tenían bueno pues combatir, resistir, la toma del poder. A ellos no les interesaba que se organicen las UCV, a ellos no les interesaba, qué te puedo decir, que se haga la pista, ¿no? A ellos lo que les interesaba era el objetivo político, el poder, el poder. En cambio, nosotros hemos desestimado el poder. Nosotros éramos demócratas, íbamos a las elecciones con la burguesía, como se le llamaba y se le llama, pero nosotros nunca hemos dejado la visión de querer seguir trabajando por el desarrollo de la comunidad. Entonces, yo sí soy claro en el sentido de que, si hubiera sido la política del PCP-SL, Huaycán no hubiera sido lo que es, definitivamente, estaríamos en esteras de repente. (4 de mayo de 2002)

Nadie recuerda una movilización multitudinaria del PCP-SL en Huaycán. Los pobladores afirman hoy que «los senderistas [integrantes del PCP-SL] eran como los partidos de ahora que arriba, con toda la publicidad, parecen grandes y abajo no son nada» (AC, 4 de mayo de 2002). En otras palabras, nunca pudo mostrarse como un partido estructurado, de manera contraria a lo que sucedió con los partidos de izquierda antes de que se debilitaran.

### 13.8. LAS MOVILIZACIONES

Cuando Alfonso Barrantes fue reemplazado en la alcaldía de Lima por el dirigente aprista Jorge del Castillo (1987), el proyecto Huaycán empezó a desmontarse. La oficina técnica fue retirada del asentamiento y reubicada en Lima con cada vez menos personal. Lo mismo se hizo con el proceso de titulación, la habilitación de caminos y la ampliación de las zonas urbanizables que se realizó abandonando su diseño original, es decir, dejando de lado el criterio técnico y participativo. Paulatinamente, las organizaciones políticas de izquierda fueron entrando en un proceso de deterioro. Los cambios fueron muy difíciles de procesar por los dirigentes que se encontraron solos repentinamente y tuvieron que actuar con un alto grado de autonomía con los organismos de base.

Previamente, se había efectuado el primer congreso ordinario, considerado el más importante de la historia de Huaycán, entre el 19 y el 21 de julio de 1985, al que asistieron entre seiscientos y setecientos delegados. Los dirigentes de izquierda, confiados en la legitimidad de sus posiciones políticas, decidieron que la junta directiva sea elegida por votación universal y no por delegados como querían las facciones radicales y no consideraron lo determinante que podía ser la expectativa formada en torno al recientemente elegido presidente Alan García. De esta manera, sorprendentemente, la primera directiva de Huaycán fue aprista. Se inició así una etapa muy conflictiva entre dirigentes que sustentaban su práctica en criterios políticos opuestos a los delegados de base.

Al siguiente año, esta situación se recompuso con el triunfo de la lista de izquierda. Dada la polarización y para evitar situaciones irresolubles, se decidió integrar la junta directiva con representantes zonales prescindiendo de elecciones universales. Ésta fue una de las últimas oportunidades en que la izquierda mostró su fuerza, desplazando al PAP, que poco después desapareció como fuerza política porque no tenía representatividad a escala zonal, pero no pudo remontar la crisis política que tenía visos de irreversible. Estos dirigentes debieron soportar una pérdida de legitimidad muy grande y rápida ante denuncias de corrupción y de negociar con el gobierno aprista, sin considerar la pérdida de independencia que eso significaba. Su posición se volvió muy complicada.

Todo esto ocurría mientras las demandas de las bases eran cada vez mayores. Un hecho grave ocurrió entonces. El 25 de julio de 1986, el dirigente aprista de Huaycán Andrés Tapia, responsable del PAIT, fue asesinado en las puertas del comedor popular Víctor Raúl Haya de la Torre. Según los testigos, tres hombres y una mujer le dispararon en la cabeza. Los diarios de la época adjudicaron este crimen al PCP-SL, ya que otros atentados, que tenían como objetivos a militantes y locales apristas, se sucedieron en respuesta a los eventos sangrientos del 18 y 19 de junio, donde 244 subversivos, presuntos subversivos e inocentes murieron en tres penales limeños (Lurigancho, El Frontón y la cárcel de mujeres del Callao) por la intervención militar ordenada por el gobierno del presidente Alan García.

Huaycán resintió la pérdida de Andrés Tapia, pues era uno de los dirigentes apristas que gozaba de mayor reconocimiento. Este hecho coincidió con la necesidad de llevar a cabo acciones para exigir a las autoridades el cumplimiento de las reivindicaciones de la comunidad. Así, se planificaron varias movilizaciones masivas en el centro de la capital que tenían un doble mensaje: rechazar al PCP-SL y el veto del PAP, cuyas suspicacias contra la población iban en aumento. La primera de ellas fue el 17 de febrero de 1987 con una participación masiva. En cada UCV apenas quedaron tres personas encargadas de la vigilancia, porque la población entera se volcó a la Plaza San Martín, donde un grupo de autoridades los esperaba. Según un informante, fueron recibidos «con mariachis, con todo, nos hicieron bailar [...] [pero fue un] saludo a la bandera, nos prometieron y nunca volvieron con nada» (*Luis*, 3 de mayo de 2002). Durante la marcha, el PCP-SL intentó realizar actos de violencia y los dirigentes debieron multiplicar sus esfuerzos para neutralizarlos. Sus aprensiones no eran gratuitas. El comité de lucha formado para llevar a cabo esta jornada tenía entre sus miembros a *Arturo*, líder visible del PCP-SL, quien vanamente pretendió radicalizar las acciones apartando a la dirigencia.

Los resultados de esta marcha fueron nulos; Huaycán no consiguió que se le atendiera, de modo que los vecinos quisieron volver a las calles el 19 de junio de 1987 sin recordar que esa fecha era el primer aniversario de la matanza de los penales y que el PCP-SL conmemoraba dicha fecha como el «Día de la Heroicidad». Otra vez *Arturo* pretendió forzar la coincidencia pero la movilización se postergó hasta el 27 de marzo de 1988. El comité de lucha la condujo centralizando los acuerdos adoptados por los comités que se habían formado en cada zona.

Llegada la ocasión, fue notable la organización mostrada en las calles, que puso un cuidado especial en la identificación de los asistentes, en la conformación de los contingentes (que fueran de una misma zona) y en la confidencialidad de la trayectoria. La movilización fue duramente repelida por la Policía Nacional con gases lacrimógenos y vehículos contra manifestaciones, uno de los cuales atropelló y mató a Rafael Flores Echevarría y dejó incapacitado a *Luis*. Además de estas pérdidas, la Policía Nacional detuvo entre doscientos y trescientos manifestantes. La jornada obtuvo el éxito esperado. A los pocos días, el presidente Alan García convocó al alcalde Jorge del Castillo para dar luz verde a las peticiones de Huaycán licitando las obras requeridas, incluso sin los proyectos correspondientes, y agilizando los trámites de titulación. Sobre la presencia del PCP-SL en esta movilización, comenta *Luis*:

En el comité de lucha de 1988, Sendero [el PCP-SL] tuvo presencia fuerte. Claro, eso sí no lo vamos a negar [...] Creo que ellos son los que más trabajaron. Pero, ¿la movilización de qué tipo fue? De tipo reivindicativo que a todo el mundo le convenía. No fue digamos una movilización en función a la toma de poder del Palacio de Gobierno, sino a exigir que nos resuelvan el problema de todas las necesidades.

Entonces en eso, ¿quién no coincidía? ¿Cómo le podías decir a una posición senderista [del PCP-SL], tú no?; definitivamente, yo no podía. Porque había una necesidad fundamental de poder aunar fuerzas con el contrario; tenían pues aparatos, tenían seguramente, tan igual que nosotros, parlantes sembrados en todas las avenidas. Se difundía a todo lo ancho. O sea, había capacidad de organización. La necesidad de la gente era tan urgente de contar y, además de eso, la gente se movilizaba porque no contaba con título de propiedad, no contaba con nada, era una inseguridad y los propietarios necesitaban pues su saneamiento físico legal.

¿Ahora la gente por qué no se moviliza? Tiene luz, tiene agua, tiene cable, tiene teléfono, tiene, tiene todo pues. Vivimos bien, lo único que no tenemos es el dinero de repente para hacer una linda vivienda pues, muy elegante, pero al menos hemos hecho. (3 de mayo de 2002)

Huaycán nunca más pudo realizar movilizaciones de esta magnitud.

### 13.9. EL PCP-SL EN LA EDUCACIÓN

Todas las versiones coinciden en señalar que fue en el colegio Manuel González Prada (empezó a funcionar a inicios de los noventa) donde el PCP-SL realizó su trabajo más visible.<sup>543</sup> Sin embargo, el profesor *Juan* asegura que ningún profesor del primer contingente pertenecía a dicha organización:

Yo me siento muy orgulloso de haber sido cuasi fundador del colegio González Prada. Entonces, yo puedo dar fe firme que en el primer grupo de docentes que llegaron estaban limpios y puros de todo. Primero, porque eran todos jóvenes. Segundo, porque si bien es cierto algunos venían de la universidad Cantuta, como en mi caso, un gran grupo venía de otras universidades de Lima, ¿no? De San Marcos, por ejemplo, nadie. Unos de Villarreal, que para nada tenían comuniún con la expresión comunista y de la San Martín, ¿no?, de la Católica. O sea, un grupo realmente, creo yo con toda certeza, excelente. (24 de mayo de 2002)

Durante los primeros meses del gobierno del presidente Alberto Fujimori, vendrían otros grupos de profesores, algunos de los cuales se habían formado en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y la Universidad Nacional del Centro del Perú, e hicieron gestiones para ser reasignados a Huaycán. Este dato no deja de ser interesante, puesto que, como advierte el profesor *Juan*, el nuevo colegio González Prada no era precisamente una plaza atractiva: «Al comienzo nadie quería trabajar aquí. [...] Uno por la zona ¿no?, zona roja, zona peligrosa, zona de terrorismo, y otra porque el colegio estaba en esteras, estaba en tierra» (24 de mayo de 2002).

Estos profesores, según *Juan*, exponían su discurso radical entre sus colegas y en las aulas, de manera especial en los cursos de Filosofía, y contaban con alguna audiencia del alumnado. Por eso, los profesores que no estaban de acuerdo con ellos; asumieron que debían actuar frontalmente, debatiendo con sus colegas radicales y desarrollando un espíritu plural entre los estudiantes. La acción magisterial del PCP-SL fue más persuasiva y, aunque era conocido que estos profesores conducían algunas «escuelas populares» en Huaycán, a la que asistían alumnos del González Prada, no utilizaron los ambientes del colegio para estos fines ni tampoco fueron escenario de algún acto violento.

Cuando se impuso la política gubernamental contrasubversiva, un profesor y un auxiliar de este colegio fueron detenidos y se incluyó en el plan de estudios el curso de Instrucción Premilitar. Se asignó para ello a dos militares como profesores.

### 13.10. LA NUEVA POBLACIÓN Y LOS NUEVOS PROBLEMAS

Desde fines de los años ochenta ingresaron a Huaycán nuevos pobladores que cubrieron rápidamente las áreas destinadas a viviendas. Éstos se asentaron en lugares improvisados, sin condiciones mínimas para ser habilitados (las zonas altas, a diferencia de los pobladores originarios que se ubicaban en las partes baja y media).

Esta circunstancia modificó la fisonomía de Huaycán y la forma en que sus habitantes se percibían a sí mismos. Tras la división geográfica, otros factores profundizaron los contrastes. Los recién llegados eran pobres o extremadamente pobres, a diferencia de los que ya estaban allí, que habían logrado cierta estabilidad. A ellos se añadiría el excedente juvenil de los invasores originales que también se desplazaba buscando un lugar donde vivir. El resultado fue un mayor deterioro de las condiciones de vida. Hasta hoy, la pobreza en la zona alta de Huaycán es crítica: casi el 70% de hogares tiene tres o más necesidades básicas insatisfechas.<sup>544</sup> La señora *Chávez* relata lo siguiente:

<sup>543</sup> El PCP-SL tuvo más actuación en el SUTE-Huaycán que en otra parte de la estructura del SUTEP. Aprovecharon que un director de la USE 06, por influencia de otros profesores radicales enquistados en el SUTE noveno sector, les otorgó un cupo en el nombramiento de profesores.

<sup>544</sup> Para mayor información, consultese al Instituto de Promoción de la Economía Social (IPES). *Diagnóstico socioeconómico del distrito de Ate-*

Mire [...] eso de las ampliaciones: yo sé que hay mucha necesidad para un hogar, pero tampoco estoy de acuerdo con las ampliaciones porque traen mucha delincuencia, gente de mal vivir, cosa que no ha pasado en la zona; ha entrado gente registrada con documentos y no es así como entran a las ampliaciones; entra cualquiera y ahí es donde vienen todos estos problemas; anteriormente, aquí no había delincuencia; me acuerdo que un grupo entró a mi casa y la gente los agarraron y los hicieron trabajar [...] hasta que vinieran sus familiares a recogerlos. (14 de mayo de 2002)

Otro aspecto importante que abrió un nuevo conflicto fue la aparición de los comités de autosubsistencia como los comedores autogestionarios, vaso de leche y comedores populares. Inicialmente, en Huaycán las mujeres se habían organizado garantizando la alimentación de la población en su conjunto, y la distribución de tareas siempre fue muy clara.

Tanto el vaso de leche como los comedores populares funcionaban por zonas, en cada una de las cuales había una junta directiva encargada de organizar la preparación de los alimentos. No obstante, en 1990, con el ingreso de Alberto Fujimori al gobierno, los comedores populares comenzaron a adquirir mayor notoriedad. Si durante el gobierno del PAP el acaparamiento de puestos se dio en el PAIT, durante el de Alberto Fujimori se dio en estas organizaciones de apoyo a la extrema pobreza. Éstas se incrementaron exponencialmente y, con ellas, los problemas por el intento de manipularlas. La presión hacia las dirigentes fue tanto del PCP-SL como del gobierno. El primero exigía la relación de las personas, para hacerles seguimiento, y el segundo las desplazaba de los cargos bajo la amenaza de recortarles las raciones de alimentos y de negarles el ingreso a los centros acopiadores. *María* nos cuenta:

La gente del gobierno me invitó para que yo trabaje inclusive en Pronaa, pero que les deje trabajar porque yo era la piedra en su zapato en los clubes de madres. Yo nunca dejé que se manoseen los clubes de madres. Tampoco quería la injerencia política ¿no? Hubo resistencia de mi parte y es por eso que tuve muchos problemas con el gobierno, ¿no?, bastantes problemas, muchísimos. Hubo ensañamiento terrible y, al ver que ya no pudo con los clubes de madres, no pudo con los comedores, optaron por [...] buscar gente de confianza, aliados, diría yo, de lo que fueron. Más que gente de confianza fueron aliados y fraccionaron en varios centros de acopio [...] empezaron a dividir, a fraccionar [...] en vez de trabajar con nosotros y de repente esto [nos ayudó a] reforzar nuestra organización y asociación de clubes de madres. Lo único que hicieron era dividir para que ellos puedan manosear lo que es la organización de los clubes de madres y utilizarlas, ¿no? Es lo que han hecho durante tanto tiempo. Y, a veces, para opacarnos a nosotros, lo primero que decían, si van a la asociación de los clubes de madres, les quito el subsidio, les corto los víveres. Y era en complicidad con un grupo de personas de los centros de acopio, ¿no? (23 de mayo de 2002)

Los diez años que permaneció Alberto Fujimori en el gobierno fueron muy complicados para las dirigentes que defendieron la autonomía de sus organizaciones. En algunos casos, se recurrió a la irrupción sistemática en sus domicilios en horas de la madrugada; en otros, a la detención de sus hijos sin motivo justificado; finalmente, al divisionismo, que debilitó seriamente a la organización.

### 13.11. IMAGINANDO AL OTRO: EL PCP-SL EN LAS PARTES ALTAS

A fines de los años ochenta, la falta de relaciones fluidas entre las zonas alta y baja de Huaycán, con una dirigencia parcializada que no estaba dispuesta a ampliarlas, creaba una sensación de inseguridad y vacío de autoridad que el PCP-SL aspiró cubrir. Ambas lo habían combatido, pero los antiguos dirigentes conocían un PCP-SL más político, mientras en la experiencia descarnada de los nuevos su fantasma seguía siendo presencia activa, más aún cuando detrás de ellos había quienes simpatizaban o eran abiertos militantes que utilizaban las partes altas como zona de refugio. Los desplazamientos de algunas columnas tampoco eran inusuales.

En febrero de 1989 el Ejército Guerrillero Popular (EGP) estimó que era necesario dar un escarmiento a un propietario de apellido italiano (Poppe) para forzar la adhesión de las «masas» aprovechándose de sus necesidades. De acuerdo con un documento del PCP-SL, éstos fueron los hechos:<sup>545</sup>

Entre Huaycán y Horacio Zeballos existe un área agrícola de cinco hectáreas perteneciente al explotador italiano llamado Poppe. Allí se cultivan papas, maíz y otros vegetales. Estos cultivos son trabajados por las masas reci-

*Vitarte*. Lima: s/e, 1997.

<sup>545</sup> PCP-SL. Reporte desde el campo de batalla. 1995.

biendo el jornal mísero de un sol y una porción de la cosecha [...] El partido organizó el levantamiento de la cosecha de papas, movilizando a las masas de Huaycán, Horacio Zeballos y otros lugares [...].

El plan fue desarrollado entre las 11 y 12 del mediodía, cuando los sacos llenos de papas estaban listos para ser enviados a Poppe, un contingente capturaría el tractor, los dos camiones y el carro del supervisor [un individuo enviado por Poppe]. Los miembros del Ejército Guerrillero Popular tomaron el control de la plaza [...] las armas del Ejército Guerrillero Popular aseguraron que el levantamiento de cosecha se cumpla hasta el final [...].

El partido realizó acciones de agitación con eslógans, banderas y las masas expresaron su profunda felicidad: ¡Larga vida al partido! Y luego se retiraron con sus productos. La noticia se difundió y mayores masas acudieron al lugar [...] al comienzo de la acción, los empleados de Poppe intentaron oponerse y uno de ellos fue liquidado, un miserable [...] Su muerte fue celebrada con júbilo por las masas.

Mientras tanto, otro contingente del Ejército Guerrillero Popular bloqueó la carretera Central a la altura del kilómetro 17. En Huaycán, otras acciones rápidas de agitación y propaganda llamando al pueblo para que acuda a la cosecha [...] la acción de levantamiento de cosecha en Huaycán fue culminada con éxito. Hubo una amplia participación de las masas, organizadas bajo el liderazgo del partido, a través del Ejército Guerrillero Popular. Fue una justa y correcta acción. Y las masas mostraron su adhesión a la guerra popular completamente, para siempre, y su decisión de luchar por el comunismo [...]

*María*, dirigenta por muchos años de los comedores populares de Huaycán, recuerda este evento de la siguiente manera:

La gente fue porque por los parlantes alguien les dijo vayan, que van a regalar papa. Entonces, la gente por el regalo fue, pero a nadie sacaron de las casas para ir, vamos a hacer esto, no. Fue así, simple y llanamente, por el parlante invitaron que van a regalar papas y el pueblo se volcó pues donde van a regalar papas a la chacra. Pero sin imaginar que realmente iba a ocurrir una tragedia, que iba a haber muertos ahí [...] Iban a aparecer personas y prácticamente pues iban a matar a uno, disparar, abrir los costales y decir, llévense la papa y la gente, bueno pues. El tiempo también apremiaba porque la misma necesidad obligó a coger lo que estaban dando, ¿no? Pero no fue que Sendero [el PCP-SL] sacó a las casas, no, no, no fue así. (23 de mayo de 2002)

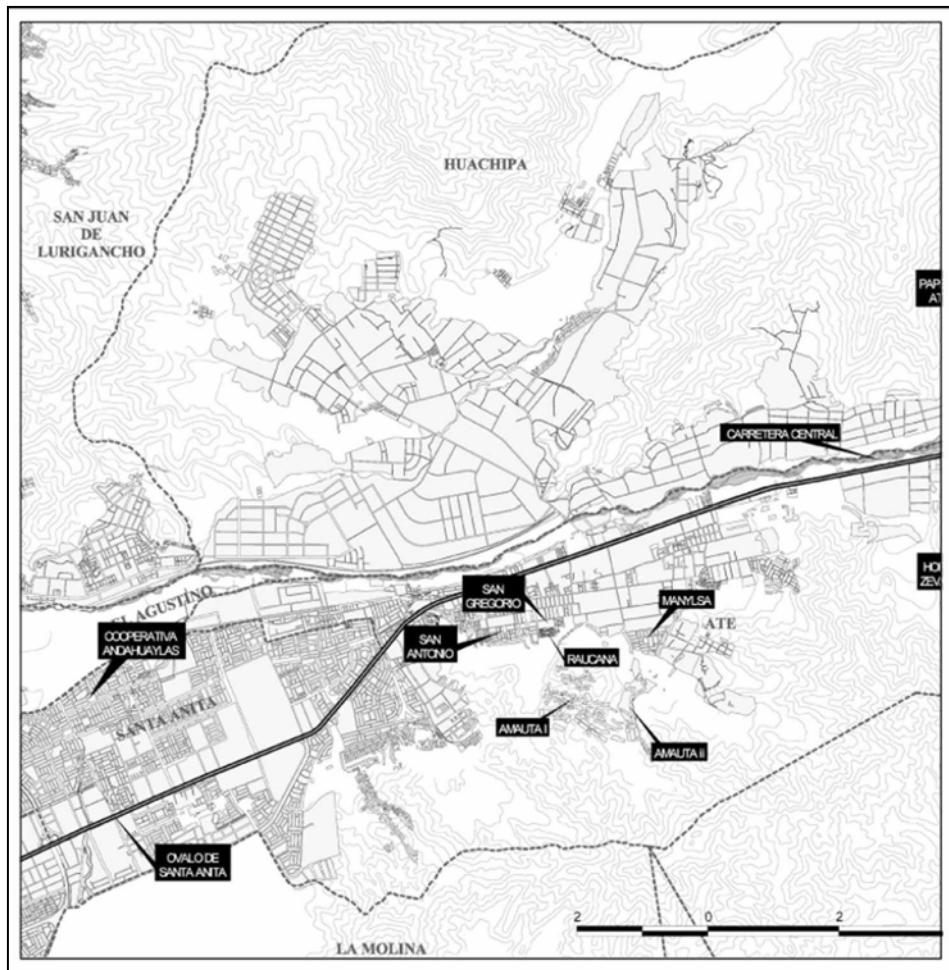
Esta acción de propaganda con el epílogo de una ejecución permite anticipar que, contra lo que muchos suponen, el mayor número de asesinatos no ocurrió en los años ochenta, sino la década siguiente, incluso después de la captura de Abimael Guzmán: el promotor de la ONG Ideas, Zacarías Magallanes (31 de marzo de 1992), los ronderos urbanos José Galindo y Erasmo Rojas (1993) y los dirigentes David Chacalizaza (20 de junio de 1994) y Pascuala Rosado (6 de marzo de 1996). No hay que dejar de mencionar que ya en Huaycán se habían creado rondas urbanas y que, por las gestiones personales de Pascuala Rosado ante los generales Antonio Ketín Vidal (Policía Nacional del Perú) y Luis Pérez Documet (Ejército), se instaló la primera comisaría y, finalmente, una base militar.

### 13.12. ENTRAN LOS MILITARES

En lo sucesivo, Huaycán tendría que convivir con un huésped atemorizante y los dirigentes se vieron forzados a coordinar con los mandos castrenses, de manera especial los del sistema de autodefensa. Los integrantes de estas rondas fueron reclutados tomando en cuenta sus antecedentes, principalmente los licenciados del servicio militar, quienes, luego de ser trasladados a los cuarteles de Chorrillos, recibían instrucción durante unos veinte días y eran abastecidos con escopetas de retrocarga, como las rondas campesinas.

Los militares, por su parte, combinaron las actividades cívicas —como obras comunales, servicios médico y dental, corte de pelo, reparto de alimentos— con operaciones represivas, especialmente rastrellajes para ubicar y capturar a posibles subversivos y también a cualquiera que se opusiera al gobierno, quienes eran tildados de subversivos.

Cuando los pobladores de Huaycán rememoran esa época, opinan que el sistema del cual formaban parte causó más inseguridad. Sostienen que ni siquiera el PCP-SL produjo tanto temor como cuando llegaron las fuerzas del orden. Por eso, no dudan en afirmar que el gobierno de Alberto Fujimori hizo más daño.



### 13.13. UNA HEROÍNA

El nombre de Pascuala Rosado trascendió de Huaycán porque fue una de sus víctimas más notables.<sup>546</sup> Arequipeña de origen y casada con un trujillano, vivía en Santa Clara compartiendo el hogar con su madre, cuando Huaycán apareció en su destino con la ilusión de la casa propia. Entonces, se trasladó con sus hijos y destacó muy pronto entre la legión de mujeres que tomaron decisivamente la función de la ayuda social.

Consciente de que necesitaba de mayores conocimientos —tenía sólo instrucción primaria—, decidió capacitarse como promotora de salud. El dinamismo que impuso pronto la hizo sobresalir. Así, llegó a ser elegida secretaria general de la Zona A en reemplazo nada menos que de *Arturo*, el conocido dirigente visible que el PCP-SL tenía en Huaycán.

Pascuala Rosado era una persona muy energética; pero, a diferencia de los dirigentes de su generación, que contaban con una amplia experiencia partidaria, su visión política se reducía a las vicisitudes de Huaycán, a cuyo destino le otorgó todas sus fuerzas. Por ello, fue elegida secretaria general de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán. Era el máximo cargo al que podía aspirar y, paradójicamente, fue el que más problemas le ocasionó. Le provocó la muerte en 1996.

### 13.14. EL PAPEL DE LA IGLESIA CATÓLICA

El papel que le tocó cumplir a los sacerdotes y agentes pastorales de la Iglesia Católica en el proceso del conflicto armado interno en Huaycán fue muy importante para que la violencia no se expandiera a niveles mayo-

<sup>546</sup> Véanse los testimonios 102143 y 101865.

res a los vistos. Desde el día mismo de la ocupación de los terrenos, el 15 de julio de 1984, Tadeo Passini, un sacerdote italiano perteneciente a la orden de los monfortianos, fue un asiduo visitante de Huaycán. La parroquia a la que pertenecía, ubicada en Ñaña, tenía un área bastante grande que atender —Ate y Chaclacayo— y logró convencer a los otros sacerdotes de la necesidad de tener presencia en el recién nacido poblado.

Además de los trabajos concernientes a su oficio, el padre Passini pronto se involucró de manera muy activa en las actividades comunales y se convirtió en un personaje popular entre los que acababan de llegar. Así, algunos dirigentes le sugirieron que se estableciera entre ellos y le acondicionaron un ambiente en el colegio 1236 aprovechando que los estudiantes estaban en esos momentos de vacaciones. El 11 de febrero de 1985 se terminó de construir la primera capilla, en un lugar que luego sería la sede definitiva del centro parroquial. El padre Passini solicitó un lote en la UCV 86, se hizo socio de Huaycán y colaboró en todas las actividades. Incluso, fue un entusiasta participante de las grandes movilizaciones hacia Lima de los años 1987 y 1988.

El 25 de noviembre de 1992 se fundó la parroquia San Andrés, nombre sugerido por el padre y aceptado por el cardenal Augusto Vargas Alzamora, entonces arzobispo de Lima. Sobre esta base se construyó el complejo parroquial que se puede ver en la actualidad, que incluye una serie de servicios, biblioteca y una estación de radio. Ese mismo año y preocupados por las secuelas evidentes que había dejado el conflicto armado interno, la parroquia decidió llevar a cabo un plan quinquenal que buscó formar lo que se llamó comunidades eclesiales de base (CEB). Esta idea tenía sus antecedentes en una experiencia realizada en Comas y su objetivo era descentralizar la labor pastoral e incrementar la participación de los feligreses.

De esta manera, la primera responsabilidad de las CEB fue la evangelización en sus respectivas UCV, con la esperanza de que ellas, con el transcurso del tiempo, administraran la mayor parte del programa pastoral en esos espacios. Inicialmente, estos objetivos no se cumplían —se habían establecido sólo 22 CEB— y el progreso hacia las metas se hacía de manera lenta.

Al evaluar la situación, los promotores notaron que la participación y dinamismo de las CEB eran afectados por la creciente crisis económica, sobre todo porque los pobladores debían dedicar mucho tiempo a las actividades informales para generar ingresos para sus respectivas familias, lo que disminuía el tiempo y las energías de aquellos que potencialmente podían participar en las actividades de los grupos.

A fines de 1996, algunas CEB estaban bien establecidas; pero, al poco tiempo, la mayoría de ellas funcionaba muy débilmente o simplemente dejaron de existir. En 1997 se relanzó el programa reafirmando el objetivo de formar CEB en cada UCV. El nuevo sentido que se le imprimió a este esfuerzo fue acercarse más a la vida cotidiana de los pobladores enfatizando la reconstrucción del tejido social básico, es decir, la familia.

Los sacerdotes subrayaron este aspecto en sus homilías y los debates al interior de la CEB se centraron en estos puntos. En parte, el renovado interés que mostraron los pobladores allí donde las CEB pudieron funcionar bien se debió a los cambios en su situación socioeconómica. Los que habitaban en las zonas bajas y medias ya habían consolidado su situación a estas alturas y, si bien habían podido acceder a infraestructura y servicios, no tenían medios adecuados para desenvolverse con las situaciones más agudas de pobreza, desempleo, delincuencia violenta, nutrición y desajustes morales.

Por ello, la estrategia desde ese momento fue que las familias mejor estructuradas sean el primer paso en el proceso de incorporación y así se multiplique el ejemplo mediante un efecto demostración. Sin lugar a dudas, esta labor de carácter celular fue una contención importante a la actividad subversiva y, posteriormente, un mecanismo eficaz para contrarrestar los efectos de la violencia.

#### 14. RAUCANA: UN INTENTO DE «COMITÉ POLÍTICO ABIERTO»

El PCP-SL otorgó gran importancia al proselitismo político en los asentamientos humanos de Lima, luego de haber concluido su primer congreso partidario en 1988, en el que estableció las pautas para trasladar su «guerra popular» hacia las ciudades. De esta manera, dado que el cono este limeño fue una zona que priorizó en términos de presencia política, inició su penetración en torno a la Carretera Central por el asentamiento humano San Antonio, ubicado muy cerca de la Municipalidad de Ate-Vitarte. Seguidamente, extendió sus células, por un lado, hacia San Gregorio, la Asociación de Vivienda Ricardo Palma y la Cooperativa de Vi-

vienda MANILSA. Asimismo, logró infiltrarse en la Asociación de Vivienda Santa Cruz, Bardillo, Cooperativa de Vivienda Alfa y Omega, el asentamiento humano Micaela Bastidas I y II, Amauta I y II y Los Ángeles. En otras palabras, el PCP-SL ya estaba arraigado en el cono este cuando decidió formar el asentamiento humano Jorge Félix Raucana.

El proyecto Raucana tuvo dos diferencias sustanciales con respecto a Huaycán. En primer lugar, fue pensado desde sus orígenes como un proyecto del PCP-SL y como un «comité popular abierto» en medio del distrito de Ate-Vitarte. Otra diferencia destacable es que Raucana no tuvo la solidez organizativa de Huaycán, lo cual fue un factor importante para la derrota del PCP-SL en este último asentamiento.

Inicialmente, se tenía la percepción equivocada de que Huaycán y Raucana obedecían al mismo esquema ideado por el PCP-SL. El equipo de campo de la CVR ha comprobado que se trató de dos experiencias radicalmente distintas, surgidas en momentos diferentes.<sup>547</sup> De otro lado, Raucana tampoco era un asentamiento humano relativamente joven elegido por el PCP-SL, tal como se pensaba, sino que fue formado deliberadamente por esta organización en 1990 para convertirlo, hasta donde se sabe, en el único «comité popular abierto» que existió en Lima.

Se ha constatado también que, si bien Raucana fue un proyecto imaginado por el PCP-SL, esto no significó automáticamente que los pobladores se convirtieran en militantes de esta organización con todas las consecuencias que ello implicaba. Raucana fue el punto culminante de todo un trabajo previo que realizó el PCP-SL entre los asentamientos humanos que lo rodeaban y estaba conducido al fracaso desde el inicio. Sin embargo, este fracaso no se materializó. Antes de que empezaran a madurar las contradicciones, sobrevino la intervención militar.

#### 14.1. ANTECEDENTES

El 28 de julio de 1990 —el día en que Alberto Fujimori juramentaba por primera vez como Presidente de la República— un numeroso grupo de personas invadió un pequeño terreno cercado de propiedad de la familia Ísola, ubicado en Ate-Vitarte. En ese momento el hecho no mereció mayor atención de la prensa, por lo que tuvo que pasar algún tiempo para saberse que lo que había sucedido allí era una acción de gran envergadura realizada por el PCP-SL con el objetivo de consolidar su protagonismo político en Lima.<sup>548</sup>

Ni el momento ni el lugar fueron arbitrariamente escogidos empezando por la fecha: no sólo era feriado patrio sino ocasión de un dramático cambio de gobierno, por lo que las fuerzas del orden no darían una respuesta inmediata a la invasión. Los alrededores del futuro Raucana ya habían sido previamente infiltrados por el PCP-SL y la nueva invasión se ubicaba casi al centro del área que controlaba:

El partido, sujetándose a lo que el presidente Gonzalo ha establecido, nos plantea desarrollar más profundamente el trabajo en los barrios y barriadas movilizando a las masas y organizándolas armadamente sujetos al marxismo-leninismo-maoísmo, pensamiento Gonzalo.

Luego de un reconocimiento minucioso, la dirección determina confiscar la tierra siguiendo la política del partido. El lugar estaba ubicado en Vitarte y estaba en venta para una zona turística; era una regular extensión de tierras, de propiedad de un italiano de apellido Ísola.<sup>549</sup>

Según los documentos del PCP-SL, habían reclutado a personas provenientes de El Agustino y Yerbabuena, además de lugares cercanos pertenecientes al distrito de Ate-Vitarte como Granja Azul, San Gregorio, Vitarte, Nueva Esperanza y Vista Alegre. Existen indicios, a partir de las conversaciones de la CVR con los pobladores, de desplazamientos desde otras zonas de Lima que los documentos de Raucana no consignan; por ejemplo, la llegada de un grupo desde Villa El Salvador en el que estuvo incluido Miguel Cuno, actualmente preso en el penal de Challapalca (Tacna), ex dirigente barrial en ese distrito del cono sur y sindicalista en el Ministerio de Agricultura.

<sup>547</sup> El trabajo de campo fue llevado a cabo entre julio y septiembre de 2002. En total se realizaron 15 entrevistas grabadas y tres que se registraron a mano.

<sup>548</sup> En un recuadro —titulado «Raucana roja»— que acompaña a la nota firmada por Antonio Morales en el suplemento Domingo del diario La República, en su edición del 1 de septiembre de 1991, se afirma: «La prensa la descubrió [a Raucana] tres semanas atrás a ocho kilómetros de Lima, en Vitarte». La mayor parte de referencias han sido tomadas del archivo de Desco y no consignan número de página.

<sup>549</sup> PCP. «Un mundo que ganar». n.º 21, 1995. <[www.csrp.org/espanol/e\\_batalla.htm](http://www.csrp.org/espanol/e_batalla.htm)>.

La mayoría de personas que llegó a Raucana residía en Lima y una fracción provenía de las zonas rurales, de donde habían salido huyendo de la violencia.

De acuerdo con el censo nacional de 1993, la principal ocupación de los pobladores del distrito de Ate era la de obrero. Más de la mitad de ellos —sumados vendedores ambulantes, trabajadores no calificados y otro— declararon una situación laboral precaria, casi de supervivencia.<sup>550</sup> En suma, se trataba de una población con una situación laboral inestable, además de ser marginal, y, como otros casos en Lima, no había concluido de procesar el desalojo de sus zonas de origen y tampoco empezaba su asimilación en el contexto urbano. Este hecho fomenta un ambiente cultural muy débil donde se hace difícil impulsar solidaridades capaces de cristalizar formas organizativas dinámicas, participativas y autónomas.

Terminada la inscripción durante la noche del 27 de julio, los invasores fueron movilizados de sus respectivos sitios de origen. El grupo más numeroso procedía de la Cooperativa de Vivienda Andahuaylas. Según el declarante *P1*, de allí vinieron 150 personas. El dirigente *CS* confirma este dato, aunque estimó en trescientas la cantidad de personas provenientes de Andahuaylas. Esta importancia cuantitativa se tradujo, según *CS*, en cualitativa, pues los dirigentes de Andahuaylas habían sido los conductores de la invasión y se instalaron en lo que hasta ese momento era la caballeriza de los Ísola de Lavalle.

La amenaza de desalojo de un sitio que legalmente no les pertenecía era un peligro siempre presente. Los dirigentes, sin embargo, difundieron la idea de que lo realizado, en términos estrictos, no estaba fuera de la ley. Ellos se movilizaron por diversas instancias del aparato público, incluyendo el Congreso de la República, y adujeron que el Estado debía velar por los derechos de sus ciudadanos, y, simultáneamente, recurrieron a la Municipalidad de Ate-Vitarte, de la que consiguieron la difusión de comunicados de apoyo contra la acción policial. Además, como forma de legitimar su acción, el PCP-SL compuso una interpretación histórica sobre quiénes eran en realidad los verdaderos dueños de esa propiedad: «Durante muchos años llegaron al Perú japoneses e italianos, que se apoderaron de todas las tierras de la costa. Nosotros, que somos los descendientes de los verdaderos dueños de este país, lo único que hacemos es recuperar lo que nos pertenece y que alguna vez nos quitaron los extranjeros».<sup>551</sup>

Subrayar la condición de italianos de los Ísola fue importante para lograr el consentimiento de la población, ya que daba respuesta a la incertidumbre que generaba un acto ilegal. El mismo argumento se constató en Huaycán, donde se resaltó el origen europeo de la familia Poppe.

Luego de producido el hecho, los medios de comunicación destacaron, sin prueba algunas, que los invasores se habían organizado inmediatamente en comités de defensa, cuyas primeras tareas fueron «levantar barricadas, abrir zanjas para impedir el tránsito de vehículos y formar los piquetes de lucha». No era algo novedoso en este tipo de eventos, pero otras distorsiones noticiosas empezaron a propagarse sobre Raucana. Al sobredimensionar las acciones de defensa, los medios de comunicación omitieron que el PCP-SL se esforzaba en llevar adelante un rápido, amplio y profundo trabajo político con la población. Éste fue un tema que salió a la luz algún tiempo después, promovido además por la autopropaganda subversiva y no por iniciativa de la prensa.

Otra apreciación errónea que difundió la prensa fueron los criterios urbanísticos que aparentemente el PCP-SL utilizó para organizar el espacio invadido. Se enfatizó que había renunciado a la construcción habitual de una plaza de armas rodeada de mercados, iglesia, escuelas y otros servicios públicos. En realidad, el PCP-SL no aplicó una distribución espacial alternativa a las que estilaban las invasiones: su fundamento principal era una división transitoria, mientras no se asegurara la permanencia definitiva en el terreno. Por eso, como se verá luego, durante el tiempo que duró su influencia, el panorama de Raucana era de un conjunto abigarrado de chozas que daban la impresión de ausencia de algún orden que sí existió en otros aspectos.

El PCP-SL no sólo se preocupó de las acciones defensivas contra el desalojo, sino que organizó casi todos los aspectos de la vida diaria de los pobladores y respondió a sus expectativas para desenvolverse frente a los retos cotidianos con relativo éxito. Más aún, a diferencia de las habituales invasiones y de los traficantes de terrenos, el PCP-SL estableció relaciones de confianza con los pobladores. Así, desde el inicio de la invasión, los preparó para un eventual enfrentamiento con las fuerzas del orden. Según los relatos de los testigos, la

<sup>550</sup> Para mayor información, consultese al INEI. «Asentamientos humanos. Características sociodemográficas». Tomo II. Lima Metropolitana. Lima: INEI, 1996.

<sup>551</sup> Entrevista no grabada a poblador anónimo.

primera aparición de la Policía Nacional ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del 28 de julio de 1990 cuando los grupos no terminaban aún de ingresar al recinto escogido. Un grupo de policías, no muy numeroso, se concentró en la esquina de la avenida La Esperanza y, desde allí, empezó a desplazarse hacia Raucana, disparando sus armas, lo que produjo la muerte de Jorge Félix Raucana. PJ recuerda que él:

Vivía acá abajo, era vecino de San Antonio; como era 28, estaba también un poquito tomado. Había niños que gritaban porque disparaban bombas lacrimógenas, seguro que su hijo lo despertó, salió y se fue primero; todos estábamos corriendo normal pero se cayó, lo volteamos, botó un poco de sangre nomás y allí quedó.

Raucana muere por torpe; este pata no era para que muera; le dijeron que no se meta muy adelante y él se metió nomás y se amarró con trapo, estaba medio ebrio y se metió nomás; dijo «no, qué me van a hacer a mí, soy de la clase trabajadora, estoy por defender un techo». No le interesó que la Policía le apuntara con un arma. El pata Raucana se aventó, le dije «¡retrocede, retrocede, no avances más!». Él dijo «qué me van a hacer esos traidores malditos» y le dispararon al cuerpo porque a un policía le cayó una Molotov encendiendo su uniforme. Se amargaron más [los policías], comenzaron a decir «¡son malditos estos desgraciados, hay que matarlos!» y metieron bala al cuerpo con perdigones; a una señora le hicieron hueco en sus piernas, en el estómago. Ese día murieron como tres; el que murió primero fue Raucana. Toda la gente decía que ése es un hombre valeroso que defendió nuestro terreno, lo trajimos acá, hicimos su misa y pusimos el nombre de Raucana. Éste es el hombre héroe de la invasión y de aquí en adelante se llamará la tierra Félix Raucana. (PJ, 17 de julio de 2002)

La represión policial creó un héroe local que fue perennizado cuando los invasores utilizaron su nombre para bautizar a su asentamiento al que inicialmente pensaban llamar La Estrella o La Esperanza. No era la primera vez que el PCP-SL promovía mártires populares para legitimar la «lucha armada». El caso de Jorge Félix Raucana es un buen ejemplo, aunque la construcción del ícono fue, a la larga, defectuosa. La población valoraba el sacrificio de esta persona, pero no terminó idealizándola. El recuerdo que se tiene de él es el de una persona que murió para que otros pudieran obtener un lote de terreno, pero fue una muerte que pudo evitarse si no hubiera estado bajo los estragos de alcohol. Un hecho ocasional impidió su transformación en héroe popular.

#### 14.2. ¿UN PUEBLO PASIVO?

Una vez alcanzado el objetivo de ingresar al lugar escogido y resistir el embate policial, los dirigentes se dedicaron a organizar los aspectos vitales de la población, mientras su maquinaria publicitaria proclamaba ante el mundo este logro político:

La dirección cohesionó firmemente al Ejército Guerrillero Popular (EGP) con el programa del partido y las citas del presidente Mao. La misma situación determinó realizar [sic] en las masas previamente organizadas en sectores, cada uno de los sectores con su propio responsable; se organizó el Movimiento Clasista Barrial y se realizó una remoción en toda la masa reafirmándole en la violencia revolucionaria, en la disciplina proletaria y sujeción a la dirección del partido [...].<sup>552</sup>

Según la estimación del PCP-SL, las «masas» invasoras estaban firmemente cohesionadas bajo sus consignas políticas, concientes de movilizarse para y por el partido. Entendido así, en Raucana no existía otro interés aparte del partido y, para ello, debió hacerse un previo «trabajo de remoción [sic]». Sin duda, para el PCP-SL, Raucana era un «comité base» del Movimiento Clasista Barrial.

Para la versión periodística, el PCP-SL era un grupo dentro de Raucana que, infundiendo miedo, subordinó al resto de la población. Sus dirigentes naturales habían sido defenestrados y los subversivos se impusieron convirtiendo a los invasores en colaboradores pasivos, a quienes había que justificar porque vivían amenazados, y al terreno invadido en un campo de entrenamiento y refugio. Inversamente, los subversivos eran «febris», «sanguinarios», «violentos» y «feroces», ante lo cual la población no podía negarse a participar en futuros enfrentamientos con las fuerzas del orden. Nadie intentó averiguar cuál era la opinión del poblador común y corriente de Raucana.

Los pobladores crean una dirigencia transitoria conformada por una junta directiva, delegados por cada sector (eran siete al comienzo y luego se aumentó a ocho) y subdelegados que apoyaban a los anteriores. Sobre esta red visible actuaba un núcleo de dirigentes que eran cuadros del PCP-SL, denominado el «comité central», o, como refieren habitualmente los pobladores de Raucana, la «central». Era un organismo paralelo y

<sup>552</sup> PCP-SL. «Un mundo que ganar», ob.cit.

clandestino, donde se gestaban las decisiones más importantes y se determinaba qué debía hacerse. Asimismo, desde este nivel emanaban y se transmitían las iniciativas para las faenas comunales.

Existen varias versiones acerca de cómo se formaban las decisiones. Para algunos pobladores, eran mandatos verticales originados por en la «central» y dados a conocer a través de sus dirigentes; para otros, los delegados efectivamente transmitían las órdenes de arriba hacia abajo pero los delegados también servían para elevar sugerencias de la población; para un tercer grupo, las acciones se acordaban en asambleas, aun cuando hay que anotar que algunos de los que reconocían cierta voluntad democrática habían sido anteriormente dirigentes de base, delegados o subdelegados.

Por otro lado, estaban las organizaciones de supervivencia (comedores, minigranjas) y de seguridad que, a diferencia de otros lugares, no se desarrollaron como organismos naturales sino dependientes de la estructura dirigencial.

Puede afirmarse, entonces, que la concepción organizativa era de naturaleza vertical y centralizada, aunque cabe preguntarse cuáles eran sus límites y hasta qué punto los líderes podían imponer sus decisiones. La información recogida señala que era decisión de cada dirigente definir su vinculación con el PCP-SL. Un actual dirigente comenta que:

Hubo casos en que la gente del partido estaba infiltrada, pero ellos decían que no habían venido a obligarnos, eso depende de cada persona que quiera incluirse. A mí me dijeron, como estaba puntual en mis aportaciones, que asuma un cargo: fui subdelegado de un sector, dirigía los trabajos de picar la tierra, trabajar en el local. Yo asumí esa responsabilidad no por el partido sino por el bienestar del sector, por ganarme el terreno. Yo no me inclino por ningún partido político, yo vine por el terreno. (CS, 18 de julio de 2002)

La señora CA, líder femenina, enfatizó que los dirigentes controlados por el PCP-SL no empleaban métodos coercitivos y, por ello, los recuerda con respeto:

Yo veía que lo que hablaban y lo que decían [los dirigentes de la «central»] era para bien de nosotros. No era cosa de que ellos te decían vas a hacer esto, vamos a hacer lo otro y a nosotros nos parecía que estaba mal. No. La manera de organizar era cómo hacer la guardia, los elementos que teníamos, por ejemplo, ese día para bloquear la Carretera Central. Nos decían tienen que llevar vinagre para la vista y, más que todo, nos dijeron deben llevar piedras chicas para las hondas, era para defensa. Ellos dijeron que si nos agreden, hay que responder de esa manera, si había personas, por eso yo los respeto, porque no nos obligaban a hacer cosas [...] Yo llegué y no sabía cómo organizarse para hacer el rancho que le llamábamos esa vez. Como ellos ya sabían, nosotros nos agrupábamos en grupos de diez que le tocaba la cocina; cuando llegué, yo me acuerdo que eran por sector; éramos siete sectores y yo estaba en el 5; cada sector tenía su delegado [...] era el que tenía reuniones con esas personas y llevaba lo que nosotros sugeríamos, luego bajaban a los sectores; si estaba bien, aceptábamos y, si estaba mal, no, decíamos esto no debe ser así, debe ser así. Así trabajábamos [...]. (18 de julio de 2002)

¿Cómo evalúan los entonces invasores su experiencia con este tipo de organización? PJ afirma que:

La organización sí estaba magnífica; porque, a través del esfuerzo de ellos, se hizo todo, un año más o menos duró el trabajo. Como le vuelvo a decir, el objetivo era cuidar el terreno; en eso, nos exigíamos todo, no sólo ellos, nosotros conscientemente sabiendo nuestros objetivos, nuestra necesidad teníamos que asumir a conciencia, no esperar tampoco que nos obliguen. Los que no querían se han ido. Hemos entrado muchos, un montón, los que realmente no necesitábamos a los traficantes de terreno, acostumbrados a buscar terrenos por acá, por allá. Los otros se fueron, más de la mitad se ha ido. [No hubo tráfico de terrenos] en ese aspecto, éramos conscientes que [...] estábamos apoyados por el PCP-SL, éramos conscientes de que no se podía estar jugando en ese aspecto; de hecho, tampoco ellos no nos obligaban que vayamos a asumir en otro sitio, vayamos asumir de acá para afuera [...]. (17 de julio de 2002)

PJ resalta que, en relativamente poco tiempo, fue evidente la presencia del PCP-SL por la información desproporcionada de los medios de comunicación: «Eso ha sido poco tiempo, hasta que llegó el Ejército. Claro que venían [los subversivos] pero no como salía en la televisión: "Raucana es zona roja, base número dos del PCP-SL". Así salía en los medios de comunicación: Huaycán decían era zona uno, no sé, cada uno con su zona. No era así, acá venían nuestros familiares a visitarnos también [...]» (17 de julio de 2002).

El sobredimensionamiento de la presencia del PCP-SL en Raucana también fue resultado de la acción propagandística de este grupo:

Ya se decía que, en provincias, el terrorismo estaba aumentando; acá también había. Eran pocos, no eran todos o a veces uno por temor de que nos iban a botar se inclinaba, pero no eran todos. Ellos también hacían mucha publicidad, comenzaban a votar globos con la hoz y el martillo en el aniversario de la asociación; eso vio la gente y dijo que era el foco del PCP-SL, pero no era verdad, era un grupito nomás. (CS, 18 de julio de 2002)

Cuando se le preguntó si la población alguna vez consideró perjudicial la presencia del PCP-SL, manifestó:

Nos decían más bien los compañeros que el partido era para el bienestar del pueblo, para que progrese y no se deje engañar por los yankis y los partidos democráticos. Ellos lo que querían era luchar con la verdad, no dejarse engañar, porque sabemos que, en las empresas, a los trabajadores los explotan, no les pagan el sueldo como debe ser, los explotan y les pagan mal, como sucede ahora, por ejemplo: eres un buen trabajador y la empresa no sabe valorar la calidad humana del trabajo, igualito te paga una miseria, eso está mal [...]. (CS, 18 de julio de 2002)

En suma, el sentido que la gente de Raucana le dio a su relación con el PCP-SL fue muy diferente del que estimaba la prensa y, lo que es peor aún, de las evaluaciones de los servicios de inteligencia. No era por los férreos combatientes comunistas, como se les pretendía presentar (y que el PCP-SL hubiera deseado), ni por el temor de las personas subyugadas las razones por las cuales el PCP-SL lograba imponerse en la zona.

A diferencia de lo que ocurrió en zonas rurales al inicio del conflicto armado, el comportamiento de los mandos del PCP-SL no se basó en la imposición del terror sino la utilización de mecanismos legitimadores, ideológicos y políticos, que trataban de fundir en un discurso las necesidades de la gente con sus objetivos políticos. La percepción general en Raucana sobre ellos es de consideración y respeto.

#### 14.3. VENCiendo OBSTÁCULOS

Los dirigentes organizaron a los invasores por sectores de acuerdo con su lugar de inscripción, tomando en cuenta su ubicación durante la defensa, es decir, privilegiando su aspecto combativo. Apenas instalados, los invasores debían ver la forma de cobijarse del húmedo frío del invierno limeño, agravado por el hecho de que el terreno (era una caballeriza) tenía sectores inundados que facilitaban el crecimiento del forraje para la alimentación de los animales. Otro problema fueron los parásitos. La presencia de caballos los atraía, especialmente a las pulgas. Sobre este terreno instalaron sus campamentos en tortuga o en «U». La señora CA recuerda: «Justo era el mes de julio, con un frío atroz, con la llovizna, imagínate dormir bajo esas chozitas; nosotros le decíamos nuestro nicho, como nichos de cementerio. Lo que más nos hacía sufrir eran las pulgas, esto era una caballeriza y había pulgas, pero así teníamos que estar [...]» (18 de julio de 2002). Según el dirigente CS: «[A mí] que vivía en Lince me chocó, pero qué voy a hacer, así es la vida para luchar por el terreno; incluso cuando dormía en esteritas en “U” me picaban las pulgas [...]» (18 de julio de 2002).

Esta situación duró año y medio. Durante la época que predominó el PCP-SL, los antiguos dueños entablaron un juicio y el desalojo era una posibilidad siempre presente, la cual se convirtió en un tema central. Por eso, fue relativamente largo el período en que tuvieron que vivir en lotes asignados de manera provisional, donde no podían levantar construcciones. Según los testimonios, en Raucana hubo dos y hasta tres procesos de «lotización», en cada uno de los cuales salía gente e ingresaba otra, lo que dio motivo a sospechas de tráfico de tierras.

Una de las cuestiones que hubo que resolver inmediatamente fue el abastecimiento de agua. Los camiones cisternas no podían ingresar en Raucana por las profundas zanjas que se habían cavado para evitar la entrada de los vehículos de las fuerzas del orden. La solución momentánea fue salir a las poblaciones vecinas, como San Antonio y San Gregorio, con baldes y tinas para abastecerse diariamente:

Buscábamos agua en San Antonio, la gente de allá nos negaba, sufríamos bastante. No había a veces qué comer [...] comíamos camote sancochado y su agüita nos tomábamos. La gente de San Antonio no nos quería dar, nos negaba, a veces sacábamos a la media noche, a las 3 de la mañana para poder siquiera cocinar algo [...] los primeros días no teníamos ni para lavar ropa, andábamos todo sucios [...]. (Señora V1, 19 de julio de 2002)

El otro problema era del agua, no tenía agua, nos íbamos a San Gregorio por un poronguito de agua; me acuerdo mucho de la higiene de mis hijos, los traje porque no tenía con quién dejarlo, siempre tuve en la mente que vivir pobre no es vivir sucio, con dos tazas de agua los bañaba. ¿Cómo hacía?, con una taza mojaba un trapo, lo jabinaba bien y con eso les pasaba todo el cuerpecito y con otra taza lo enjuagaba; siempre me acuerdo de eso [...] Para lavar la ropa, como no había agua, nos teníamos que ir al río, de acá saliendo por la avenida Esperanza de frente salías al río [...]. (CA, líder femenina, 18 de julio de 2002)

Estas tribulaciones acabaron cuando decidieron explorar el subsuelo de Raucana. Procedieron a realizar sondeos y encontraron depósitos de agua a una profundidad de 17 a 18 metros, cuyas pruebas llevaron a los laboratorios para asegurarse si era apta para el consumo humano. Los exámenes también salieron positivos.

A partir de ese momento, se diseñó un plan de faenas comunales que tenía como objetivo abrir ocho pozos, uno por cada sector, con la sola fuerza humana disponible en el asentamiento. Todos los domingos se armaban las cuadrillas de trabajadores, por sectores, controladas mediante una relación previamente elaborada. Las jornadas individuales eran aproximadamente de tres horas semanales —otras versiones hablan de dos horas—. Se excavaba con lampa, pico y barreta. La tierra se extraía en baldes y los derrumbes se evitaban mediante la técnica del «chicoteo» con cemento.

De igual manera, los servicios higiénicos se construyeron inicialmente recurriendo a las faenas comunales y eran usados colectivamente por sector. «Por sector también hacíamos silos grandes y para prevenir las enfermedades le echábamos cal a los pozos», afirma la señora CA. A medida que se iba asentando la población en el lugar, los grandes silos comunales se abandonaron y los pobladores construyeron uno propio en sus respectivos lotes. La proliferación de silos pronto contaminó las corrientes de agua del subsuelo e intentaron resolver este problema mediante el uso de cloro. La medida resultó inútil. Luego se usó el sistema de tanques de rebote. La instalación de redes de agua y desagüe en Raucana se realizó apenas en el año 2002 y todavía no están en pleno funcionamiento. Esto quiere decir que sus pobladores vivieron durante una década en severas condiciones de insalubridad.

De otro lado, la «central» había organizado un botiquín que controlaba directamente. Según un grupo de informantes, las medicinas eran abastecidas por «los que salían a trabajar». También buscaban las donaciones. Otras versiones afirman que el PCP-SL contaba con un *stock* para la población y señalan que el botiquín era atendido por personas desconocidas que llegaban a la comunidad, pero dejó de funcionar cuando los subversivos abandonaron Raucana en 1991. Once años después, el 15 de agosto de 2002, se inauguró un local especializado en enfermedades infantiles con el apoyo de la cooperación internacional.

La «central» tomó igualmente la iniciativa de crear huertos familiares y minigranjas colectivas en donde se criaban animales menores. Esto era factible porque, mientras los pobladores se encontraban en una situación legal incierta, que los desalentaba de levantar construcciones, dejaron espacios disponibles en cada lote. La decisión fue importante en el contexto del *fujishock* que descalabró las economías familiares en un momento, como se recuerda, de completa desorganización del aparato estatal que debía socorrer a los más afectados:

Comíamos lo que había, pero fue tan doloroso y, justo en esos días fue el paquetazo, el *shock*; no había de dónde comer, las tiendas se cerraron, los mercados también se cerraron y lo único que podíamos conseguir era el atún y el arroz [...] no había nada, así lo pasamos [...] La central ordenó, vio que había tanta gente pobre, dijimos que la tierra era productiva, dijimos vamos a probar, todos trabajamos en común porque había personas que sabían de siembra y otros, como yo, que no sabíamos y entre vecinos nos ayudábamos; para qué, dio buenos frutos; lo más bonito era que yo tenía habas, otro vecino tenía alverjas, la mayoría tenía camotes. (CA, líder femenina, 18 de julio de 2002)

El trabajo en estos espacios productivos también se realizaba por turnos controlados por medio de padrones levantados en cada sector. La «central» había planificado incluso lo que debía sembrarse. La etapa de las ollas comunes fue quedando atrás y empezaron a organizarse los comedores comunales, uno por cada sector, donde se destinaba todo lo producido en las áreas agrícolas. Al inicio las mujeres usaban latas de aceite vacías para cocinar y los hombres recolectaban leña para los fogones; poco a poco, cada sector empezó a organizar actividades para equipar los comedores y cocinas.

Pese a lograr altos niveles de autosubsistencia, Raucana no podía satisfacerse de otros productos de primera necesidad (arroz, azúcar, aceite). Además, no siempre lo sembrado pudo ser cosechado de manera exitosa:

Todos aportábamos, pero era un mínimo de cincuenta céntimos o un sol, pero era lo mínimo que se daba, por aportación salía para cada persona; en caso de mi sector, era para cuatro menús entre sopa y segundo; pero si veíamos que la familia era más grande, le dábamos más, teníamos que ser justo. Tratábamos de ayudar a las madres solteras y a los ancianos; en eso fue como se han hecho las ayudas» (CS, dirigente, 18 de julio de 2002).

A medida que las familias fueron integrándose y organizando sus vidas, los comedores cayeron en desuso; las huertas también tuvieron el mismo destino. Desaparecieron definitivamente cuando sobrevino la lotización, luego de asegurar la propiedad del terreno.

#### 14.4. ¿HUBO «ESCUELAS POPULARES» EN RAUCANA?

Siempre se sostuvo que las escuelas en Raucana fueron aprovechadas por el PCP-SL, que las convirtió en «escuelas populares» donde se adoctrinaba políticamente a los niños. Sin embargo, entonces no había centros educativos (tampoco ahora). Ello no quiere decir que no se establecieran ciertas pautas y normas de conducta para la convivencia entre vecinos:

Lo primordial era cambiar un poco en cuanto al respeto; por lo menos los niños ya sabían saludar; hoy en día ya se han olvidado, no saludan ya. Esos niños, lo primero que se ha incentivado era el respeto de los niños hacia los adultos; eso era lo más lindo que debería haber. Lamentablemente, no hay, de cualquier idea política y cualquier persona que tenga deseo de mejorar debe quedar algo bueno o malo, así que lamentablemente no hay respeto ni siquiera de los niños. (P1, 17 de julio de 2002)

Los dirigentes del PCP-SL tuvieron un cuidado especial con la seguridad interna y emplearon un sistema que respondía a las necesidades de su organización política. Fue un aspecto crucial para la vida de los pobladores. El muro perimétrico se dejó como defensa, cavaron zanjas en los exteriores y levantaron torres de vigilancia en las esquinas del recinto, «para que puedan avisarnos cuando venía la policía». Todo se hizo mediante faenas comunales, como asevera CS, «se hacía por faena comunal para que todos se mojen la mano, todos tenían que trabajar».

Además del servicio en las torres, se organizaron rondas internas y piquetes de control en cada una de las entradas, realizadas por cuadrillas de vecinos en turnos diurnos y nocturnos. Mientras que la vigilancia de las torres servía para prevenir la llegada de policías, militares o matones que podían desalojarlos, las rondas internas mantenían el orden y la disciplina entre los pobladores, es decir, evitaban la comisión de delitos entre ellos. Al parecer, inicialmente existió una especie de toque de queda impuesto por los dirigentes. Un poblador afirmó que: «Había hora de entrada y de salida. Para los que salen a trabajar, era solamente hasta las 11 de la noche. Después de las 11, cada uno debía estar en su lote. No se podía circular por el interior» (CS, 18 de julio de 2002). La señora CA también admite que hubo restricciones: «Los primeros días cuando llegué, no nos dejaban salir, nos habíamos quedado por miedo a que nos desalojaran; si te ibas, tenías que dejar a tu reemplazo, un familiar; era así, eso sí nos obligaban» (Ibidem).

En efecto, hubo la obligación de dejar a algún familiar dentro del asentamiento cuando alguien salía para evitar momentos del día en los que sólo estuvieran los ancianos y los niños. Así, se evitaba crear un estado de vulnerabilidad que posibilitara el desalojo. En todo caso, este sistema no fue algo circunscrito a las prácticas del PCP-SL, sino que está generalizado en las invasiones urbanas.

El riguroso control en las puertas de acceso no duró mucho. La opinión general de los pobladores es que no hubo mayores impedimentos: «bajo la condición de que dejemos nuestras aportaciones para la comida, porque ellos sabían que teníamos que salir a trabajar» (PJ, 17 de julio de 2002). Los extraños tenían prohibido el paso y los familiares de los pobladores sólo podían visitarlos los días domingos.

Los piquetes para cada una de estas labores —puerta, torres y rondas internas— estaban integrados por diez vecinos que se turnaban de acuerdo con los padrones existentes en cada sector.<sup>553</sup> Asimismo, la totalidad de la población era continuamente adiestrada para cuando se acercaran las fuerzas del orden. Esto incluía entrenamiento permanente (también sobre la base de grupos formados por diez personas) y ejercicios de alerta.

Los pobladores eran instruidos en la elaboración y uso adecuado de bombas Molotov, el desplazamiento en las marchas, la quema de llantas, la selección y uso de piedras y en cómo enfrentar a las fuerzas del orden. Es importante anotar, como indicó un poblador, el hecho de que los días previos a las fechas establecidas para realizar una marcha, una movilización o una «jornada de lucha», llegaban a Raucana personas que no vivían en el sitio. Ellos los denominaban «los universitarios» (probablemente eran estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta o la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero también pobladores de otros lugares).

La transmisión de estos conocimientos no fue percibida como obligatoria. Gran parte de los invasores de Raucana no sabía cómo defenderse del desalojo y guarda mucha estima a quienes «les enseñaron a defenderse». En algún momento del día o la noche, los dirigentes ordenaban la movilización del poblado. Ante esa

<sup>553</sup> Esta organización sobre una base decimal era la que se utilizaba en todas las faenas (huertos, granjas, pozos, etc.).

señal, los delegados y subdelegados tocaban un silbato y la población procedía a hacer lo que previamente se le había indicado. Al grito de «¡desalojo!, ¡desalojo!», hombres y mujeres se agrupaban en piquetes y se desplazaban hacia los lugares acordados, guardaban sus pertenencias y utensilios y los niños eran conducidos a un ambiente donde una persona (al parecer, un subversivo) debía cuidarlos.<sup>554</sup> Esta suerte de policía interna tampoco duró mucho. Según Sánchez: «La guardia duró algo de dos años hasta que se hizo trato directo con Ísola; allí se cortó la guardia» (18 de julio de 2002).

Un correlato de las actividades para mantener el orden fueron los castigos impuestos a aquellos que lo violaban. En Raucana, como en otros sitios donde el PCP-SL tuvo presencia, se estableció una suerte de código muy simple, rígido y con castigos ejecutados mediante procedimientos sumarios. Este papel sancionador, por un lado, sirvió para engrosar los atestados acusatorios de algunos de los dirigentes cuando fueron apresados; pero, por otro lado, fue visto por la población como algo muy positivo —por su eficacia— dado el contexto de altísima inseguridad en que tenían que desenvolverse. No sólo eso: el éxito del PCP-SL en este sentido tuvo relación directa con la percepción de inoperancia de las instancias públicas que debían prevenir y sancionar los delitos:

La justificación para aquellos que me detuvieron es que acá no permitíamos las enfermedades sociales, porque las enfermedades sociales no conducen al desarrollo de un pueblo; donde haya enfermedades sociales, directa o indirectamente, nuestro pueblo se corrompe. Cuando digo enfermedades sociales, ¿a qué me estoy refiriendo? Las discotecas, los bares, los pandilleros, los alcohólicos, las prostitutas, etc., etc., etc. Esas enfermedades a nada bueno conducen a nuestro pueblo. Solamente lo destruye. Eso es lo que no queríamos. No es otra cosa, señores. Después, todo fue trabajado de acuerdo a ley. (FC, dirigente, 18 de septiembre de 2002)

¿Cuáles eran las faltas castigadas, además de las mencionadas por FC? A partir de las versiones dadas por los pobladores es posible citar las siguientes: robo, maltrato familiar, bigamia, drogadicción, entre otras. Los castigos siempre se aplicaban en la noche y, de acuerdo con las referencias recogidas, no eran decididos necesariamente por los subversivos:

Eso no fue imposición de la directiva directamente, sino sabiendo que esos actos que hacían mal era proveniente de los mismos pobladores, qué castigo merece su mal comportamiento. La directiva misma no decía hacemos esto; aquí no ha sucedido eso, especialmente en Raucana, que la directiva imponga un castigo. Cómo debemos castigar nacía de la asamblea, de nosotros mismos: hay que darle chicote y le dábamos chicote [...]. (Dirigente, 17 de julio de 2002)

Los castigos eran públicos y tomaban diversas formas. Una de ellas era el empleo del «chicote», el «callejón oscuro», el rapado de cabellera, el paseo por los poblados vecinos con un cartel acusador, etc. En algunos casos, especialmente de infidelidad, al parecer, primero se recriminaba públicamente a los implicados y, si reincidían, se les sometía a las penas descritas:

Agarrábamos a los rateros, hasta de Ceres venían trayendo su queja aquí porque sabíamos cómo agarrar y castigar. De Ceres nos llamaban por teléfono; el dirigente contestaba «a tal hora íbamos a mandar milicos [sic]», así les decíamos, eran entre diez personas bien campeones para agarrar, mandábamos y lo traían desde Ceres. Hacíamos un callejón oscuro con todos los pobladores, a las nueve o diez de la noche, y los botamos, les cortaban el pelo al choro [ladrón], poníamos un letrero en su espalda y su pecho y lo llevábamos a San Gregorio, lo amarramos al bosque, le poníamos el letrero «está cortado su pelo por delincuente», así hacíamos [risas], para risa también eran. (V2, 19 de septiembre de 2002)

Una constante en los relatos de los pobladores sobre este punto es que casi siempre terminaban haciendo una comparación entre ese pasado ordenado, que promovía la seguridad y la confianza, con un presente de características contrarias:

En cuanto a la necesidad de poner orden, todos participábamos, era casi similar a que hoy en día se han formado las juntas vecinales, lo mismo por entonces había robos, rateros por este sector. Cuando hemos ingresado, no hubo nada de eso [...] por el contrario, cuando hubo represión del gobierno y la base militar viene, allí nuevamente empezó: los soldados en vez de apoyarnos cuando íbamos, al contrario, nos ha implicado, tratamos de detener a los rateros, tratamos de quejarnos a la base y ellos nos decían cualquier cosa, pero al final los soltaban y, más bien, después nos han implicado de que el PCP-SL nuevamente está empezando, no era justo decir que el PCP-SL estaba regresando; ahora, como ya se han ido, nuevamente hemos formado las juntas vecinales con el alcalde que nos está apoyando [...]. (P1, 17 de julio de 2002)

<sup>554</sup> La existencia de este espacio infantil fue referido por una joven que debió tener unos 6 años de edad en 1990-1991. Comentó que allí había «una señorita» [profesora] que no conocía.

Prácticamente, en ese sentido, yo he visto que la disciplina era buena; se nos prohibía tomar cerveza, podíamos tomar chicha nada más; ésa era su disciplina; nos dijeron «compañeros, acá nadie puede tomar cerveza, puede tomar chicha, coman sus alimentos normales y trabajar por su terreno, que es un derecho para sus hijos». Así nos aconsejaban, no nos decían «van a entrar al partido». (Cipriano Sánchez, 18 de julio de 2002)

Existió también un sistema especial de seguridad. La prueba es lo que ocurrió el 21 de agosto de 1991: semanas después de una movilización violenta de los pobladores de Raucana para la ejecución de la orden judicial de desalojo, los dirigentes localizaron y capturaron a tres agentes de inteligencia infiltrados en el poblado: el capitán PNP César Basauri García, el capitán EP Luis Vélchez Vera y el suboficial EP Richard Carles Talledo.<sup>555</sup> Los retuvieron dos días y luego fueron presentados a la prensa. El diario *La República* publicó un recuadro en el que describía este suceso:

El rostro del general EP Jorge Torres Aciego, ministro de Defensa, palideció la noche en que tres de sus hombres aparecieron vendados y atados de manos en la pantalla de su televisor. Eran agentes de inteligencia con más torpeza que astucia. Debían haber profundizado las pesquisas sobre la presencia senderista [del PCP-SL] en un asentamiento humano de la carretera Central (Raucana); al final, cayeron en poder de una turba. Dos días después, la prensa era llamada de urgencia por los presuntos dirigentes del poblado. Detrás de los detenidos, aparecía un grupo de niños y, a un lado, un puñado de madres. Un cuadro de candor e inocencia que pintaba a los intrusos como los malos de la película y a sus captores como gente indefensa, víctima de la satanización [...].<sup>556</sup>

#### 14.5. LA REACCIÓN DEL PCP-SL FRENTE AL DESALOJO

Mientras los invasores organizaban un sistema de defensa asistidos por los dirigentes del PCP-SL, la familia Ísola de Lavalle, propietaria del terreno, dispuso que sus abogados organizaran una acción judicial. El proceso fue lento. El juez Rubén Mansilla debió dar curso a maniobras dilatorias de los asesores legales de los invasores, y además recibió amenazas veladas y luego directas que llegaban anónimamente. La decisión judicial fue la previsible y, ante la inminencia de desalojo, Raucana entró en alerta roja.

El 7 de agosto de 1991, un año después de la invasión, y enterados de la orden de desalojo, los dirigentes de Raucana movilizaron a los pobladores. Un grupo, estimado en 2 mil personas, integrado por vecinos de otros poblados además de los de Raucana, marchó hacia la Municipalidad de Vitarte para exigir a la alcaldesa Asurza su intercesión; otros grupos bloquearon la carretera Central, en un tramo que se calcula de cuatro kilómetros, con árboles, piedras y llantas quemadas.

Cuando la Policía Nacional intentó despejar la vía, fue atacada por encapuchados armados de piedras y hondas. Ello la hizo retroceder. Cuando pretendieron iniciar el contraataque, fueron disuadidos por la firmeza con que dispusieron al frente a mujeres y niños. La situación se tornó delicada cuando menudearon los tiroteos y las explosiones; sólo la intervención de refuerzos combinados de la Policía Nacional y el Ejército logró finalmente controlar la situación.

Cuatro horas después, rodeados de algunos pobladores, los dirigentes organizaron una conferencia de prensa en la que justificaron su acción. Esta ocasión fue crucial para la historia de Raucana. Por primera vez, después de un año de existencia, la opinión pública pudo conocer lo que estaba ocurriendo allí. Sin embargo, eso no fue todo. A las 7:50 p.m. de esa noche, en un lugar alejado de Raucana (cuadra veinte de la avenida Argentina), un coche bomba que contenía treinta kilos de dinamita y anfo fue lanzado contra la fábrica textil Perteger S. A., propiedad de los Ísola de Lavalle y dedicada a la elaboración de tejidos de punto. El atentado dejó como resultado a cuatro obreros heridos, dos de ellos en estado agónico. El hecho trajo como consecuencia la renuncia de los Isola a seguir con la causa judicial. Para el gobierno, además, una ofensiva inmediata podía crear nuevos mártires y la concentración de importantes recursos que necesitaba en otras partes de Lima.

<sup>555</sup> ¿Este suboficial de inteligencia EP Richard Carles Talledo es el suboficial de inteligencia EP Mesmer Carles Talledo? Como se recuerda, Mesmer Carles Talledo fue recluido en el penal de Yanamayo acusado, «por equivocación», de colaborar con la subversión. En 1998, denunció desde su prisión la comisión de delitos por parte del grupo Colina y afirmó que se le encarceló por no estar de acuerdo con los malos manejos que había detectado en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Hasta diciembre de 1992, Mesmer Carles Talledo se desempeñaba como enlace entre el grupo Colina y los agentes infiltrados en el PCP-SL.

<sup>556</sup> Antonio Morales. «La tenaza senderista». *La República*, suplemento Domingo, 1 de septiembre de 1991.

#### 14.6. CONVIVIENDO CON UNA BASE MILITAR

Las Fuerzas Armadas ya tenían un diagnóstico sobre la presencia subversiva en Lima y habían decidido ejecutar un plan para neutralizarla. Dividieron la capital en cuatro sectores —norte, sur, este y oeste— y encargaron al general EP César Ramal Pesantes y, luego, al general EP Luis Pérez Documet el sur y el este; al general EP Rojas le encargaron el control de las zonas norte y oeste.<sup>557</sup> La táctica era atraer a los sectores de la población dispuestos a colaborar en la ubicación y combate de los núcleos del PCP-SL. Para ello, se contaba con la totalidad de militares acantonados en Lima, los que deberían movilizarse para llevar a cabo acciones cívicas. Por otro lado, se debía afinar los mecanismos de información e inteligencia, organizar comités de autodefensa (CAD) y apoyar e intentar conseguir acuerdos con los dirigentes locales que se enfrentaban al PCP-SL.

Sin embargo, la gravedad de lo que venía ocurriendo en Raucana condujo a otra decisión. El 6 de septiembre de 1991, el Ejército colocó una base en Raucana. Sorpresivamente, un numeroso contingente de soldados anilló el poblado, estrechando paulatinamente el cerco, mientras anuncian por altavoces que no se alarmaran porque llegaban a hacer una acción cívica. Para la prensa, ese día miles de pobladores de Raucana exclamaron «Basta de violencia y muertes absurdas. El terrorismo no pasará. El Perú es nuestro y lo será siempre», mientras dos niños, un anciano y una mujer, en representación del pueblo, izaron el pabellón nacional en la plaza principal del poblado.

La tropa fue dirigida por el jefe de la Primera División de las Fuerzas Especiales del Ejército, general de división EP César Ramal Pesantes. Durante su discurso, exhortó a la población a defender y hacer respetar el emblema nacional. Además, refirió que, con la colaboración de los vecinos, las tropas habían conseguido descubrir una fábrica clandestina de explosivos, dirigida por el estudiante de la facultad de Química de la Universidad Nacional de Ingeniería Gregorio Pedro Rivera Lapa y su conviviente, quienes se encontraban prófugos.<sup>558</sup>

Los días siguientes, el PCP-SL dejó sentir su presencia. En zonas cercanas a Raucana, en el kilómetro 7 de la Carretera Central, estallaron cinco artefactos explosivos que motivaron que los militares respondieran con disparos al aire como medida disuasiva ante un eventual ataque de los subversivos.<sup>559</sup>

La llegada de los soldados tomó por sorpresa a la población. La señora CA relata el acontecimiento con mayores detalles:

No me acuerdo la fecha exacta, llegó una mañana; las que más se deben recordar son las viudas porque ese día hubo seis muertos, ese día entraron los militares.<sup>560</sup> Nosotros nos cuidábamos más que entremos por la avenida Esperanza, por San Antonio o por San Gregorio, pero nunca nos imaginábamos que iban a entrar por Amauta. Me acuerdo que era las 9 de la mañana; yo había mandado a mi hijo a la escuela porque estudiaba cerca; estaba en mi casa preparando el almuerzo y, en eso, los vecinos gritan «¡alerta!, ¡alerta!», salimos y nos dicen «miren vecinos»; miramos al frente en el cerro y vimos sobre un asentamiento que se llama Fátima, sobre Fátima había bastantes soldaditos, todo estaba rodeado de militares, todos nos asustamos, había rumores de que Raucana tenía que desaparecer. Entraron hablando con megáfonos que se iba a hacer acción cívica, no se asusten. (18 de julio de 2002)

No hay precisión acerca de la hora en que ingresó el Ejército: para unos, «[los soldados] llegaron a las 6 de la mañana, toditos»; para otros, fue a las 9 o 10 de la mañana; hay quienes dicen que fue «de noche, en la madrugada». Sobre la cantidad de soldados que llegaron entonces tampoco pudieron dar una versión uniforme. La cifra varía entre 150 y trescientos pero en algo coinciden todas las versiones: a medida que pasaron los años fue disminuyendo. La base permaneció hasta el año 2000, cuando una decisión del gobierno transitorio de Valentín Paniagua dio por finalizadas sus labores.

¿Por qué estuvo tanto tiempo la base si era conocido que, por lo menos desde 1994, la subversión ya no era un peligro? Eso mismo se preguntaba la gente de Raucana y, a modo de explicación —bastante certera, por cierto—, se propagó la siguiente explicación que comentó el dirigente CS:

Se prolongó más porque como vinieron los periodistas extranjeros y dijeron que acá había terroristas [subversivos]; comenzaban a tomar fotos; se dijo que Raucana era el foco del PCP-SL, se hizo una propaganda a nivel

<sup>557</sup> Antonio Morales. «Soldados de barrio». La República, suplemento Domingo, 19 de julio de 1992.

<sup>558</sup> Desco. Banco de datos. Ficha 013013, 8 de setiembre de 1991. Fuente: La República.

<sup>559</sup> Desco. Banco de datos. Ficha 013058, 10 de setiembre de 1991. Fuente: El Comercio.

<sup>560</sup> La señora CA está condensando dos momentos en uno. Refiere un evento en el que hubo «seis muertos», que, en realidad, ocurrió el 28 de abril de 1992 cuando los pobladores de Raucana tuvieron un enfrentamiento con los militares de la base.

mundial. La base se quedó permanente, porque [Alberto] Fujimori estaba luchando contra el terrorismo. Nosotros ya habíamos comprado el terreno al dueño pero la base se quedó hasta esa época.

La decisión de dejar la base militar tanto tiempo se refleja en una conversación que tuvo Vladimiro Montesinos con Álex Kouri, alcalde del Callao, el año 1998, donde asumieron que «Raucana era "zona liberada", no se podía entrar [...] la gente tenía una actitud de zozobra, pasaban las tanquetas y al toque sacaban el trapito rojo con la hoz y el martillo, ponían [ininteligible] están haciendo las escuelas de entrenamiento de Raucana, que son [ininteligible] un cáncer que [ininteligible] empieza».<sup>561</sup>

#### 14.7. LA ACCIÓN CÍVICA

La tropa ingresó repartiendo víveres y luego el personal del Ejército cortó el pelo a los niños y realizó exámenes médicos y bucales. Era la nueva táctica de acercamiento a la población de las Fuerzas Armadas. En efecto, luego de intentar aplacar los temores de la población mediante el uso de altoparlantes, el ingreso del Ejército a Raucana se realizó en medio de un ambiente que se esforzaba por ser festivo. Regalos, discursos y la banda de músicos sin dejar de tocar. Por supuesto, la prensa había sido convocada al evento para que diera constancia de las novedosas formas que se habían adoptado para combatir la subversión, «ganando los corazones y mentes de la población civil».

Todo transcurrió dentro de lo previsto. Se izó el pabellón nacional, se dieron vivas por el Perú y se explicaron los motivos de la medida adoptada. Luego los jefes militares se retiraron y, tras de ellos, los periodistas, pero los soldados no hicieron lo mismo. Por el contrario, instalaron al caer la noche sus carpas de campaña.

La señora CA asumió, como todos, que debía estar serena y se dijo, «ya pues, acción cívica». En ese momento, «todos los recibimos tranquilos, les dimos pasos para que entren los camiones, trajeron carpas, dieron atención médica, repartieron víveres y después ropa; ese día estuvo bonito porque incluso trajeron su banda, todo estuvo bonito» (18 de julio de 2002).

No obstante, la preocupación vino después:

Llegaba la noche y no se retiraban; nosotros nos preocupábamos, por qué no se van, la acción cívica ya terminó, deben irse, pero nada. Llegó la noche y, justo aquí en el sector 5, había un sitio desocupado para hacer un parque; los militares empezaron a armar sus carpas; antes de eso, en la zona donde ahora es hospital, era un sitio bien lindo, había grass, era el estadio de San Gregorio, y allí empezaron los militares también a armar sus carpas. Los camiones abrieron una entrada y allí se quedaron y, en la puerta donde hacíamos guardia, también se apostaron, lo mismo que en los torreones; quedamos bajo el mando de los militares. (18 de julio de 2002)

A partir de ese momento, la vida en Raucana era un asunto que debían resolver la población, sus dirigentes y los militares. Nadie esperaba que estos últimos se quedaran; tampoco los integrantes del PCP-SL. Éstos habían evaluado que Raucana, su «comité popular abierto», sería invadido violentamente y prepararon a sus «masas organizadas en función al equilibrio estratégico» anticipando que al «Estado reaccionario» no le quedaba otra salida que el genocidio.

Los cuadros del PCP-SL alojados en el asentamiento pudieron burlar el cerco tendido y escaparon. Sólo quedaron los dirigentes visibles, aquellos que habían expuesto su identidad para hacer frente a la eventualidad presentada. Así, el secretario general Valentín Capcha, FC y Santiago cargaron con la responsabilidad de representar a la población y de elaborar una nueva estrategia para enfrentar a los militares.

Las acciones cívicas, reducidas luego a repartos de alimentos y eventuales asistencias médicas en el local de la base, tuvieron una corta vigencia. La CVR no cuenta con información precisa, pero todo parece indicar que el reparto de alimentos se reanudó luego de un período de gran actividad represiva. Cuando esto se produjo, paulatinamente se fueron expresando críticas que terminaron siendo airadas al comprobarse que los alimentos donados no eran aptos para el consumo humano.

Un enojado señor P1 recuerda: «Nosotros hemos pedido siempre que haya acción cívica, que nos apoyaran, pero lo que nos indignaba era que nos manden alimentos podridos, eso era un abuso, dañaron nuestra

<sup>561</sup> Congreso de la República. Código: 873 / Tipo de información: video / Fecha de recepción: 26 de febrero de 2001 / Fecha del evento: 28 de enero de 1998 / Fecha de exhibición: 28 de febrero de 2001. Título: Dr. Álex Kouri Bumachar - Dr. Montesinos Torres.

moral, cómo se juegan así. Porque ni nuestros animalitos ni el pollo quería el trigo que nos traían. Eso era una burla [...] Todos los alimentos estaban vencidos [...]. Casi lo mismo afirma la señora CA: «Incluso una vez no les quisimos recibir, daban cosas en mal estado. Más también no les querían recibir porque se habían llevado a la gente, se habían muerto, nos sentíamos impotentes, no era igual enfrentarse con una persona que estaba desarmada y una persona que estaba armada y que podía involucrarte en lo que le daba la gana, no le podías decir nada, si le decías algo ya te acusaba [...]».

Aun así, para los más pobres entre los pobres de Raucana, parece que no había alternativa, como nos lo comunicó la señora V2 cuando refirió que «daban alimentos pasados, gorgojeados; otros comieron así nomás, lavando, los pobres que no tenían nada [...]».

#### 14.8. LA TROPA Y LA POBLACIÓN

La tropa se estableció en un espacio que, hasta ese momento, estaba parcialmente desocupado: las antiguas caballerizas. Los pobladores habían levantado allí sus minigranjas comunales.

Durante los nueve años que permaneció la base, circularon muchos jefes y oficiales cuyas conductas no son valoradas en idéntica forma. El de más ingrato recuerdo es el primer capitán que comandó la base en Raucana, «un gordo, ya de edad». Es necesario subrayar que ningún poblador o dirigente quiso decir los nombres de los oficiales que habían estado destacados en este lugar.<sup>562</sup> Un ex secretario general fue el único que lo identificó: «[era] el capitán EP Manolo [¿Manuel?] Gonzales Calderón, más conocido como el *comandante Pedro*». Si con los jefes y oficiales se entablaron relaciones tensas, algo diferente, pero igualmente difícil, sucedió entre la tropa y la población: «Daban pena los soldaditos», manifestó la señora CA:

No parecían de Lima, eran de provincias y se morían de hambre; a veces, pasaban por detrás de mi choza, otros me decían «tía [o mami] dame un pancito». Un día estábamos haciendo mazamorra y me pidieron pancito; en ese momento, no tenía un pan, saqué un plato de mazamorra y veo que los pobres se lo comían caliente; en eso viene su jefe y se los llevaron a la plaza, les castigaron fuerte, pero ellos [los oficiales] sí estaban bien comidos; los soldaditos también han sufrido bastante con el frío. (18 de julio de 2002)

Lo primero que hicieron los militares fue elaborar un censo en el que «se tomó nota de tu nombre, dónde vives, de dónde vienes, todo se tomó nota, nada se escapaba, todo fue analizado». Esta práctica se realizaba periódicamente. Luego de identificar a los pobladores, los militares empezaron a realizar algunas acciones que serían constantes durante los nueve años de su permanencia como las redadas para capturar a los indocumentados para luego conducirlos al local de la base, donde efectuaban una primera «selección».

CS aseveró que las redadas empezaron apenas llegaron los militares:

Ese día comenzaron a rodearnos, nos pidieron documentos; ellos al toque se organizaron e hicieron su base; se pararon en cada esquina donde nosotros hacíamos guardia, entraron de frente, se cuadraron y decían «documentos señores, de acá nadie va a salir, terroristas desgraciados»; al que no tenía documentos, se lo levantaban, algunos lloraban y decían «¿qué pasa? ¿Cree que somos terroristas?». (18 de julio de 2002)

El indocumentado o el sospechoso tenía que soportar un primer «ablandamiento» en la base. Los que sufrieron esta experiencia cuentan que no sólo los tenían toda la noche amarrados y vendados, sino que «Con el Ejército no se podía caminar después de las 7 de la noche, te agarraban y te llevaban al fondo, te metían al pozo de agua, como antes esto era caballeriza al fondo tenía pozos, allí te castigaban, a veces decían “¿quiénes son?”, pero como uno no sabe nada, no puede decir nada» (CS, 18 de julio de 2002).

Luego eran trasladados a la División de las Fuerzas Especiales (DIFE), en Chorrillos, donde volvían a sufrir otra sesión de torturas. Si allí consideraban que un detenido era sospechoso, lo trasladaban a la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE); si el detenido no demostraba su inocencia o no pagaba una cuota en dinero (como sostienen algunas fuentes), era pasado a Canto Grande en condición de inculpado. Ya recluido, debía ver la forma de pagar a las autoridades y al abogado que lo defendería en el juicio de acuerdo con el atestado remitido. Por las referencias recogidas, la lógica de estas detenciones parecía ser que los habitantes de Raucana eran culpables mientras no demostraran su inocencia. Una experiencia por el estilo tuvo el señor P1:

<sup>562</sup> Cuando la CVR les pidió que los identificaran por su nombre, le manifestaron su miedo de que se llegara a saber que los habían señalado y temían las represalias que podían tomar contra ellos.

Me decían que era terrorista, de frente a uno le decían. Por ejemplo, en mi caso, me decían que «usted ha participado en un acto, te han llamado por tu nombre pero lo único que te salva es el último apellido», dijo. Así me amedrentaban, era maltrato psicológico. No hubo juicio; han aprovechado esos 15 días que estaban incomunicado para amedrentar a la familia que estaba desesperada y sacarle plata diciendo «tenemos pruebas, le hemos encontrado con muchas pruebas». Fue también tanta coima a pesar de que no hubo ninguna prueba. Lo único que en DINCOTE para salir, a pesar de que no tenían por qué detenerme, tenía que pedir coimas haciendo chantaje a tu familia que no conoce nada de esos procedimientos, diciendo que él se va a quedar veinte años, treinta años, acusándoles con otras pruebas. Como no te comunicabas, estabas incomunicado 15 días; esos días aprovechaban a todo dar de una u otra manera para asustar a tu familia, que no conoce el procedimiento, cae en la desesperación, incluso tuvieron que darle algo de 500 soles a esos de la DINCOTE y recién se pudieron comunicar conmigo. Al último, se comprueba, uno tranquilamente en su conciencia sabe que nada tiene que ver. Hubo muchos [que estaban comprometidos], no se puede negar pero los que realmente estamos acá somos lo que realmente necesitamos techo. (17 de julio de 2002)

Otra práctica reiterada de los militares fueron los rastrillajes. Hacia 1990, estos operativos ya eran corrientes en los barrios marginales de Lima, pero en Raucana empezaron con la llegada de los soldados; éstos normalmente operaban encapuchados, aunque tampoco era inusual que lo hicieran con el rostro descubierto, e ingresaban a los domicilios siempre después de la medianoche. Prácticamente la totalidad de los habitantes de Raucana vivió esta experiencia en más de una oportunidad: «A cada rato entraban, a mi casa varias veces han entrado, toda la cama lo volteaban, las frazadas y hasta la tierra con un fierro chancaban, yo le decía “no sé nada”» (PJ, 17 de julio de 2002).

El temor mayor era que encontraran algún objeto los militares pudieran considerar sospechoso. La señora V1 ilustra bien lo que sentían en esos momentos:

Teníamos miedo porque en la noche entraban y podías desaparecer; el que no ha hecho nada no teme nada, pero, de todas maneras, la gente comentaba que a los inocentes se los estaban llevando, que esto, que el otro, teníamos miedo de que en la noche podían entrar y nos podían desaparecer cuando empezaron a llevar a otros vecinos, a los vecinos los llevaban, ya no amanecían, nosotros con temor dormíamos también. De allí, poco a poco, ya no actuaban ya. (19 de julio de 2002)

Hubo otras formas de infundir miedo a la población. CA comenta que «lo que más nos asustaba era lo que hacían en la noche, disparaban al aire». Constantemente, los soldados eran formados la madrugada y se les ordenaba realizar masivas descargas de fusilería. Los vecinos que residían en los alrededores de la base recuerdan cómo sus casas se llenaban de humo de pólvora y, a esas horas, debían salir a la intemperie para no ahogarse. Una variante de esta modalidad era utilizar explosivos en lugar de disparos de fusil: una seguidilla de detonaciones fue una característica habitual del paisaje nocturno en este rincón de Ate-Vitarte. Otro recurso era sacar a correr a los soldados por las callejuelas de Raucana entonando cánticos amenazadores contra los pobladores. Incluso hubo prácticas que resultan más difíciles de explicar que las anteriores como refirió el ex secretario general FC:

Muchos de los comedores criaban a sus animalitos, porque no podíamos vivir con animales mayores y menores; entonces, le dimos un lugar allá [parte de la caballeriza]. Ojalá se encuentre acá un vecino que se hizo presente en el momento oportuno cuando se le hizo el llamado. Al vecino Marcelino Morante. Ese vecino se quejó del corte de los vientres de los chanchos; otro vecino, Perales, también [...]. (18 de septiembre de 2002)

#### 14.9. LA DESARTICULACIÓN DEL PCP-SL

El 11 de septiembre de 1991, sólo días después del ingreso de los militares a Raucana, se presentó una denuncia contra el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Primera División de las Fuerzas Especiales del Ejército, los que fueron acusados de cometer una serie de abusos en este asentamiento humano. Paralelamente, se había interpuesto un recurso de hábeas corpus ante el Noveno Juzgado de Instrucción de Lima —por los mismos cargos— que rápidamente fue declarado improcedente. El firmante de estos papeles era el secretario general de Raucana, Valentín Capcha Espíritu, respaldado con las rúbricas de varios «abogados democráticos». <sup>563</sup> Las exigencias algo descabelladas de Valentín Capcha, el apoyo de conocidos abogados al PCP-SL y la

---

<sup>563</sup> Así eran conocidos los abogados del PCP-SL porque estaban agrupados en la Asociación de Abogados Democráticos.

absurda posición de negar la presencia del PCP-SL en Raucana sólo motivaron para que la Policía Nacional preparara un plan de seguimiento a su persona.

Valentín Capcha era cargador en el mercado mayorista. El 21 de octubre de 1991, un patrullero que estaba realizando un operativo de saturación por los alrededores del mercado interceptó un taxi que llevaba como pasajeros a Valentín Capcha y su esposa, Bertha Rivera Ordóñez. La revista *Caretas* cubrió dicha situación como sigue:

En la revisión, que los policías llamaron «de rutina», apareció repentinamente el entripado: dos bolsas y dos mochilas. El contenido no dejaba lugar a dudas: toda una gama de productos que iban desde municiones, granadas y fulminantes, hasta pólvora, dinamita y polvo de aluminio, pasando por planos de ataque a diversos lugares, folletos senderistas [del PCP-SL] y una relación de supuestos miembros o vinculados al PCP-SL.<sup>564</sup>

En realidad, Valentín Capcha ya había empezado a ser materia de interés para la inteligencia policial desde el momento que se presentó en el Congreso de la República para tratar de conseguir apoyo entre los legisladores. Su captura fue un primer e importante golpe al PCP-SL en Raucana. Valentín Capcha era supuestamente uno de los dirigentes más importantes y su captura, además de revelar las dificultades que le causaba la presencia de la base, también demostraba que el PCP-SL ya no poseía los reflejos para reaccionar rápida y adecuadamente como en años anteriores. Valentín Capcha fue reemplazado por FC en la conducción del asentamiento.

Como los más importantes dirigentes del PCP-SL, aquellos que integraban la «central» y otros que tal vez permanecían refugiados en este lugar, salieron apenas llegaron los militares, las cabezas visibles tenían ahora la misión de conducir la situación hacia un terreno más adecuado a los intereses del partido. De alguna manera, FC siguió el mismo esquema de Valentín Capcha, pero aparentemente estaba mejor preparado que éste e impulsó reclamos ante las autoridades y denunció en los medios a los oficiales encargados de la base. Como él mismo afirmó:

[...] [Días después del ingreso de la base] ha sido la detención de nuestro secretario general, que actualmente se encuentra preso, señor Valentín Capcha Espíritu. A raíz de esto, muchos temían tomar responsabilidades dentro de la población, pero el que no debe no teme. Era delegado de un sector, el sector cuatro, y una asamblea de delegados me nombran como secretario general de emergencia, interino. Luego fue ratificado en una asamblea general, en presencia de los señores miembros del Ejército, comandados por el señor Manolo [¿Manuel?] Gonzales Calderón, más conocido como el comandante Pedro.

Siendo secretario general, FC debió manejar un caso sumamente delicado: el asesinato de Johnny Acha Rafael:

En el mes de noviembre, el 7 de noviembre [de 1991], ocurre un caso en otro asentamiento humano. El poblador Johnny Acha Rafael fue asesinado y botado en un costal en un lugar llamado Jardín Azul, que está a unas cuadras de aquí. Esto no quedó allí, se hizo público, se denunció a nivel internacional por los medios de comunicación, CNN, se denunció por la prensa ECO, entre otras más, France Presse, y también se hizo una denuncia pública a través de una revista, *El Ayllu*, cuya fecha es 21 de noviembre de 1991, que pongo en manos de ustedes [CVR] esta copia. En ese entonces, le reclamamos [a los militares] por la pérdida de un vecino, los dirigentes y la población. Sin embargo, a raíz de esa denuncia, los dirigentes sufrimos persecución, humillación, sufrimos el terror en esta población. Nosotros teníamos que ingresar como si estuviéramos en una base militar. No respetaron a nuestras madres, a nuestros niños, a nuestros ancianos. Yo reclamé eso. (18 de septiembre de 2002)

Efectivamente, Johnny Acha Rafael apareció muerto en una acequia de Huanchihuaylas. Se le recuerda como un muchacho alegre, al que le gustaba jugar vóley. Según los vecinos, los militares lo sacaron de su choza de noche y, al día siguiente, encontraron su cuerpo envuelto en un costalillo de harina de pan, con una herida de bala en la cabeza. Los motivos de su asesinato nunca quedaron claros, pero un dato que puede ser importante es que el hermano de Johnny Acha Rafael estuvo recluido en Canto Grande, junto a un actual poblador del asentamiento, bajo cargo de subversión. Ambos salieron por falta de pruebas.

A continuación, FC relata las consecuencias de su reclamo:

Yo tuve muchas conversaciones con el comandante, capitán, encargado de este lugar. Pero, sin embargo, lo único que he podido conseguir es una persecución y, al final, el 27 de abril del año 1992, fui secuestrado, aproximadamente a la 1:30, 2 de la tarde. No tengo miedo en decirlo [...] No tengo por qué temer. Ese día fui vilmente tortu-

<sup>564</sup> *Caretas*. «Desenmascarado», 28 de octubre de 1991.

rado en la caballeriza del fondo. Me amordazaron, me pusieron grilletes, entre otras cosas más. Sólo la valentía y el coraje de querer estar con mi pueblo, voy a hablar [...] Me detienen, entonces, desde el 27 de abril, me llevan a una base militar después de torturarme así. Antes de llevarme a la base militar, antes de salir, en la puerta de atrás, logré quitarme la mordaza y pedí auxilio. Escucharon muchos de los pobladores, el compañero Pedro Heredia Torres [...]. (18 de septiembre de 2002)

Enterados los pobladores de su detención y temerosos de que lo desaparecieran, como a otros dirigentes (aunque es preciso decir que en ningún caso se dieron datos específicos sobre esta afirmación), optaron por movilizarse para impedir la salida de *FC*, quien ya estaba en un vehículo listo para ser trasladado fuera de Raucana. Las versiones recogidas aseguran que se apostaron en una de las puertas de entrada y, en determinado momento, al ponerse tensa la situación, el capitán EP Gonzales Calderón ordenó disparar a la multitud. El resultado fue un civil muerto y no menos de 11 heridos —dos de ellos miembros del Ejército—.

La señora CA recuerda así aquel día:

Le dije al delegado «vecinos, un ratito, voy y vengo, voy a ver mi lenteja, no se vaya a quemar y se incendia mi choza, me vengo corriendo». En eso, cuando voy a llegar a mi choza, comienzan los disparos fuertes de ametralladora. Yo me quedé paralizada, me di media vuelta y regresé, el tiroteo ya había parado, regresé y, en el camino, vi a una vecina que venía con los brazos alzados, le habían disparado, le habían hecho un hueco así como una papa sanchada cuando se revienta, así. Sigo caminando no rápido sino asustada y veo a otra vecina que decía «¡a mi esposo lo han matado!», no lo habían matado sino le dieron un balazo, le volaron toda la pierna, en el tobillo, la señora fue a su casa, trajo una carretilla y con eso lo llevaron. Seguí caminando y veía a otros vecinos que se arrastraban, estaban heridos. Volví a ayudar a la vecina. Ese día hubo seis muertos [la versión oficial dice que fue uno].

La misma señora CA explica los motivos de este hecho:

Esa vez el problema fue por *FC*, más me acuerdo que fue por él, del otro me acuerdo de vista [Heredia], pero era por *FC* que queríamos que lo suelten. A Valentín [Capcha] no se lo llevaron de aquí, Valentín se iba a trabajar con su esposa al mercado de frutas, acompañaba a su esposa a trabajar, a él lo detuvieron en un taxi rojo, eso salió en primera plana de los periódicos al día siguiente. Decían que lo habían agarrado con volantes, con estatuas de Mao o de Abimael [Guzmán], algo así, de allí se lo llevaron. También hubo un grupo de tres hermanos que se los llevaron, pero ¿qué habría pasado? Ellos eran de Cañete, los vinieron a visitar, al día siguiente, como hubo requisa, en su huerto encontraron tirado mechaz; por eso, se lo llevaron a los tres, eran los hermanos Zárate. Salieron hace poco.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Defensa, publicado por la mayoría de los diarios,<sup>565</sup> los hechos se desencadenaron cuando aproximadamente trescientos pobladores, dirigidos por «elementos terroristas infiltrados», atacaron la base del Ejército en esa zona. Ese portafolio informó que el civil fallecido era Ernesto Romero Osorio. De acuerdo con esta fuente, la noche del 27 de abril miembros del Ejército apostados a un costado de dicho asentamiento humano detuvieron a *FC* y a otro sospechoso, quienes fueron llevados a la Primera División de Fuerzas Especiales del Ejército para ser investigados. Esta intervención provocó la reacción de los pobladores de Raucana.

El 28 de abril al mediodía, la trifulca se desencadenó, según *La República*, fruto de la tensión reinante entre los pobladores desde que en horas de la madrugada los miembros del Ejército acantonados en ese lugar realizaron un operativo y sacaron de sus domicilios a los dirigentes.<sup>566</sup> Los militares justificaron la intervención y detención de los dirigentes comunales aduciendo que:

Les encontraron en su poder un plano del asentamiento Raucana y detalles sobre la ubicación y compartimientos del campamento de la Primera División de las Fuerzas Especiales del Ejército, que se encuentra en ese lugar desde el año pasado realizando acción cívica a favor de la población, pero también con la misión de efectuar una férrea vigilancia para evitar la infiltración del grupo extremista el PCP-SL. (ibídem)

Desde las primeras horas de la mañana —continuó *La República*—, los pobladores, en su mayoría mujeres y ancianos, habían planeado movilizarse masivamente hacia la Prefectura de Lima, en la avenida España, para reclamar la inmediata libertad de sus detenidos. La marcha no llegó a realizarse porque el Ejército, con apoyo de la Policía, cercó todo el perímetro del asentamiento humano, principalmente las entradas anterior y posterior, impidiendo la salida de los moradores. Se obstaculizó, asimismo, el ingreso de periodistas. Cuando una brigada militar retornó al asentamiento humano, un oficial informó que los detenidos habían pasado a la DIRCOTE,

<sup>565</sup> Desco. Banco de datos. Ficha 018261, 29 de abril de 1992. Fuente: La mayoría de los diarios.

<sup>566</sup> Ibídem.

porque se les había encontrado documentos comprometedores. Los pobladores siguieron reclamando la libertad de los dirigentes: «Vivos los llevaron, vivos los queremos», «No al genocidio», gritaban a viva voz.

Según el diario *Expreso*, medio millar de pobladores con palos y piedras avanzó hacia la zona rígida gritando que no les importaba morir por reclamar justicia. Trataron de atravesar el muro de casi cuarenta centímetros de alto que delimita el poblado de la zona militar. De pronto, un soldado recibió una pedrada en el cuerpo. Ésta fue la señal. Aunque ningún jefe dio la orden de disparar, el soldado, nervioso y sorprendido, hizo varios disparos y, entonces, el pelotón lo imitó. Entre los heridos que fueron trasladados al hospital del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) de Vitarte figuraban Mario Flores Ríos (25), Silverio Quispe Pandos (33), Olga Vivas Nahuripa (28), Leodoro Conchalla Morales (60), Pedro Paulín Miranda (39), Julia Cuya Huiza (23), Hernán Gómez Quispe (23) y Luis Ferro Chavarría (39).<sup>567</sup>

Finalmente, FC fue sacado de Raucana:

¿Qué hicieron los señores miembros del Ejército? Nos acusaron de terroristas, nos acusaron de muchas cosas. Me llevaron a una base militar, a un cuartel militar, según..., era el Pentagonito. Allí sufrí la tortura, señores. Esa noche no dormí, esa noche sufrí la tortura, lo más terrible que puede sufrir un ser humano. Me golpearon, me dieron vuelta los brazos, me aventaron a un cuarto de un metro, que a la justa daba vuelta mi cuerpo, había ratas muertas, orines podridos y otras cosas más. Volvieron a pasar y me obligaban a decir cosas, ¿qué cosas podía decir si yo no sé? Al final, ¿saben lo que hicieron señores? Me metieron ají a los ojos, a los miembros inferiores, me metieron ají al ano, no tengo vergüenza de decirlo, no tengo miedo, señor.

Luego de la captura de FC, sucedió la de Santiago. A esas alturas, era casi imposible que la dirigencia supuestamente ligada al PCP-SL pudiera remontar la situación a su favor. El esquema organizativo se desarticuló. Los vecinos, temerosos, evitaban asumir cargos. Así, por ejemplo, la señora NH era por entonces una vigorosa líder de los comedores populares de Raucana. Bastante dinámica, en más de una ocasión tuvo roces con los oficiales de la base y, por este motivo, no tardaron en señalarla como subversiva. A pesar de las amenazas, la señora NH continuó con sus labores hasta que ocurrió lo previsible. Una madrugada, un grupo de soldados irrumpió en su choza rompiendo la puerta, gritando groserías, y, después de ingresar al cuarto donde dormía con sus hijos, intentaron maniatarla mientras los hijos se escondían debajo de las camas. El escándalo alertó a sus vecinos, quienes llegaron en su ayuda. De esa manera, la señora Hilario se salvó de ser secuestrada. Posteriormente, hubo un segundo intento que tuvo el mismo desenlace. El resultado fue que esta lideresa natural, que muestra aún muchos recursos para la conducción y la organización, se deprimiera y optara por no asumir nunca más ninguna responsabilidad en la comunidad. Actualmente integra un grupo católico de base y, desde esta instancia, trata de reordenar su vida.

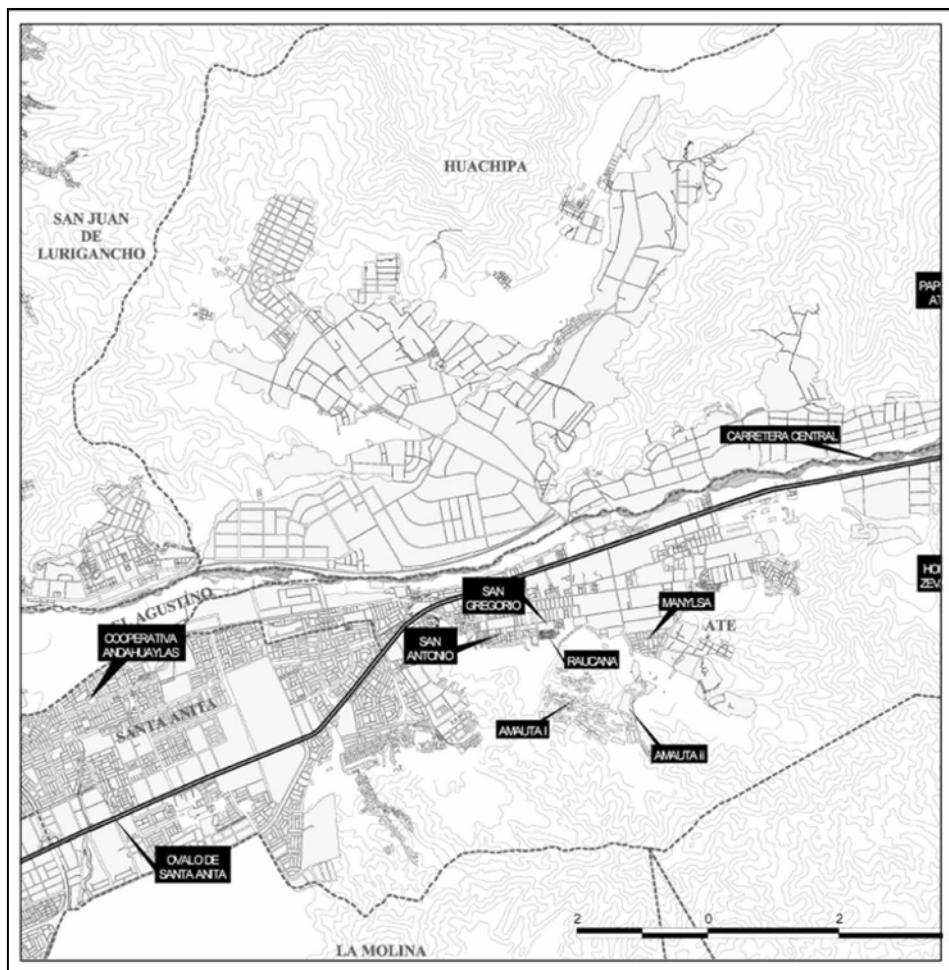
En medio de la convulsión, la familia Ísola no se había inhibido de reclamar sus derechos sobre el terreno a pesar de su retiro momentáneo del juicio antes mencionado. Controlada la situación, volvieron a la carga. Los vecinos ya no podían organizarse para el enfrentamiento y debieron aceptar las negociaciones bajo la amenaza de perder el terreno. La única opción razonable, en este sentido, fue la compra; pero, para realizarla, Raucana debería dejar de ser asentamiento humano y formalizarse como una asociación de vivienda.

Así, Raucana pasó a ser una asociación de vivienda cuando en los hechos era y sigue siendo un asentamiento humano. Esto que parece un asunto formal, en realidad tuvo consecuencias profundas. El terreno se valorizó en 280 mil dólares americanos y esta suma debía ser pagada por las 530 personas que se inscribieron como socios, en partes iguales y mediante cuotas mensuales. Con la lotización definitiva, se le asignó a cada socio un terreno de 120 metros cuadrados. Incluso, los Ísola incluyeron una cláusula en el contrato por la que comprometía a la asociación de Raucana a otorgar lotes de terreno a los antiguos trabajadores de su caballeriza. Estas personas formaron el asentamiento humano Fátima, contiguo a Raucana.

La debilidad organizativa fomentada por la presencia militar hizo que todo este proceso estuviera colmado de dudas y sospechas para los socios. Entre gente que se iba y otros que llegaban sin haber participado en las «jornadas de lucha», acusaciones de tráfico de terrenos, colusión con los militares y sospechas de infidencia, además de exigencias para que se rindieran cuentas del dinero de las cuotas, fue creándose un ambiente que los vecinos califican de irregular, frente al cual no existían canales para controlar la actuación de los dirigentes.

<sup>567</sup> Ibídem.

Para entonces, un grupo de personas había decidido tomar las riendas de Raucana. Liderados por Máximo Cahuana, vecinos como Agustín Huamán y Carlos Lavalle fueron elegidos como miembros de la junta directiva y los cuestionamientos recayeron sobre ellos, especialmente sobre el último de los nombrados.



Carlos Lavalle era secretario de economía y, además, boxeador —dicen que llegó a ser campeón nacional de peso medio—. Una de sus tareas era recoger las cuotas de los socios y realizar el depósito en la cuenta bancaria correspondiente. Esto le acarreó un problema de consecuencias funestas. Según una pobladora, Carlos Lavalle: «Se agarró una buena cantidad de dinero; como hicimos el trance con el dueño, comenzamos a pagar mensualmente cada socio veinte dólares y, entonces, se dijo, por comentarios, yo no lo vi personalmente, que el señor [Agustín] Huamán y el finado [Carlos] Lavalle se daban la gran vida, tomaban, cuando iban al bar sacaban los dólares y gastaban, entonces los vecinos comenzaron a decir eso». Para otro vecino: «Chocolate [así le decían a Carlos Lavalle] necesitaba dinero para ir a un campeonato de box en Cuba. Como no lo tenía, sacó de la caja. Cuando lo denunciamos, él dijo que había sacado pero no todo lo que faltaba allí. Como algunos vecinos siguieron acusándolo, él agarró y empezó a pegarles. Era boxeador pues».

En la mañana del 15 de abril de 1994 los vecinos de Raucana escucharon disparos seguidos de una explosión. Habitados a este tipo de ruidos, el ambiente no se alteró hasta que empezó a correr el grito de que habían asesinado a Carlos Lavalle en las inmediaciones de uno de los pozos de agua: «Dos jóvenes que habían venido [...] le dispararon; cuando ya estaba herido en el piso, le pusieron encima una dinamita; él se inclina un poco, vio que su hija venía llorando, no se sabe de dónde sacó fuerza, la agarró y logró tirarle al pozo de agua; luego estalló la dinamita».

El asesinato de Carlos Lavalle tuvo otras explicaciones. Para Amnistía Internacional, el motivo fue que éste era un dirigente que había hecho pública su oposición a los esfuerzos hechos por el PCP-SL para controlar

el poblado en donde residía con su familia. Dicha organización agrega luego lo siguiente: «Se dice que su asesinato es parte de una campaña de amenazas e intimidación realizada por miembros del PCP-SL contra dirigentes vecinales que intentan resolver pacíficamente los problemas de posesión del terreno».<sup>568</sup>

La afirmación de Amnistía Internacional está apoyada por lo que manifestó una vecina:

En ese momento [asesinato de Carlos Lavalle], estábamos en tratos con el dueño para hacer negocio. Antes esto era asentamiento humano. Para que se haga el trato debía ser asociación, pero algunos vecinos no estaban de acuerdo en comprarlo, pero muchos sí estábamos de acuerdo, porque ya queríamos salir de este problema del desalojo, de los militares y todo, nosotros pensamos que siendo asociación y ya comprando los militares se iban a ir, pero no fue así, se quedaron por varios años.

Para los vecinos, el autor del asesinato fue el PCP-SL, cuya reaparición en Raucana con un acto de «justicia popular» quería dejar la impresión de que jamás se había retirado. Los responsables nunca fueron ubicados y apresados. Sin embargo, en ese momento muchos consideraban que el lote ya no podía conseguirse combatiendo y resistiendo, sino comprándolo. Si al inicio de la experiencia el PCP-SL buscó sintonizar políticamente con las necesidades de los vecinos, ahora manifestaba precisamente lo contrario. En 1994, la derrota militar de esta organización era palpable en todo el país.

#### 14.10. LOS HÉROES SILENCIOSOS

Luego de su violento nacimiento, Raucana debió dirigirse hacia una vida «normal» en los términos que esto se entiende en los asentamientos humanos, es decir, enfrentando la pobreza y precariedad mediante la organización comunal, formando redes de solidaridad con el exterior y aplicando diversas estrategias con las dependencias públicas para ser abastecidos de servicios básicos. En todo caso, se decía que el objetivo primordial de la política de pacificación tenía este sentido. Sin embargo, no fue así. Ocho años después, algunos periodistas se acercaron al lugar y quedaron impresionados con lo que vieron. Los muros y torreones de vigilancia se mantenían en pie sin que nadie pudiera explicar su utilidad en esos momentos.<sup>569</sup> Al ingresar, se encontraron con un cuadro «desgarrador». *El Comercio* publicó un informe que prestó mucho interés a la gran cantidad de niños minusválidos que vivían en ese lugar.<sup>570</sup> *La República*, por su lado, publicó igualmente una crónica:

Y es que este recóndito poblado sobrevive al mal tiempo. [Los miles de personas] que habitan el asentamiento humano están, desde hace años, en la absoluta miseria. No tienen trabajo fijo, la mayoría apenas mastica el castellano, la ropa que visten da pena, se pelan de frío, carecen de agua potable, desagüe y, literalmente, comen cuando hay suerte. Ni hablar de una posta médica o una capilla donde rezar.<sup>571</sup>

La crónica incluye las declaraciones del dirigente Valeriano Francia, el único hombre respetable que había encontrado, según el diario, en Raucana, pues los otros o estaban borrachos o son delincuentes, quien resumió la situación de esta manera: «Si es verdad que el infierno existe, no puede ser peor que Raucana». Los periodistas asociaron estas manifestaciones con el clima de violencia provocado por el PCP-SL. Llama la atención, sin embargo, que en ninguna de las dos crónicas se haya mencionado algo evidente: la presencia de la base militar en Raucana. Es seguro que los pobladores evitaron hablar sobre este asunto, pero eso no debió ser motivo para dejar de averiguar qué funciones desempeñaba allí, más aún cuando hacía mucho tiempo que la subversión había dejado de ser una amenaza. En suma, parecía una ausencia sintomática.

En la actualidad, Raucana cuenta con energía eléctrica y redes de agua y desagüe, además de una posta médica que también brinda servicios a la zona circundante. Nada de esto evita que el extraño se percate de la extrema pobreza de sus habitantes.

Raucana sólo tiene un título de propiedad colectivo que aún no ha terminado de sanearse legalmente. Esta realidad muestra el fracaso del proyecto del PCP-SL. El precio emocional que los vecinos debieron pagar para obtener un lugar donde vivir fue mucho más alto que en otros asentamientos humanos. Pero el «comité popular abierto» organizado por el PCP-SL no fue, según lo reconocen quienes vivieron bajo su influencia,

<sup>568</sup> Amnesty International. External Ai Index. AMR 46/11/94

<sup>569</sup> Posteriormente estas construcciones fueron derruidas.

<sup>570</sup> El Comercio. «Desgarrador drama viven niños especiales de Raucana». 28 de julio de 1998.

<sup>571</sup> Adriana León. «Esta gente se muere de hambre». La República, suplemento Domingo, 9 de agosto de 1998.

algo impuesto por amenazas o intimidaciones ni por asesinatos a los dirigentes o por su desplazamiento forzado. La población se movilizó tras del comité conciente de lo que era y aceptando sus condiciones por el interés de conseguir un terreno. Esta apuesta tuvo resultados inesperados.

Desde el momento en que se instaló la base militar, la situación varió sustancialmente en el asentamiento según la percepción de los pobladores. Durante nueve años debieron sufrir una sistemática intervención de las Fuerzas Armadas, cuya finalidad era, además de diluir la influencia del PCP-SL, sustituirla por un régimen disciplinario que evitara cualquier expresión diferente de la manifestada por la autoridad militar.

En ese sentido, lo que debió ser una participación para ganar «corazones y mentes», terminó convertida en una acción dirigida a destruirlos, con todas las funestas consecuencias que esto acarreó a la vida social, la vida familiar y la integridad de las personas.

La intervención militar no fomentó tampoco el desarrollo comunal sino que, de alguna manera, lo inhibió al impedir cualquier intento de organización.

Como afirma FA:

La instalación de una base militar del Ejército lamentablemente ha sido para nosotros un retraso general, realmente no nos dejaban avanzar, no nos dejaban organizarnos. Todos nosotros los pobladores [hemos recibido] un trato humillante, con un trato de sobra, un trato de amordazamiento, ¿no? Y hasta ha habido torturas, detenciones, rastrillajes a cada momento, tenían que empadronar injustamente a mucha gente. Empadronar cada cierto tiempo y, después de anotar los nombres, no pasaba ni una semana, creo que cinco, diez vecinos ya no estaban, desaparecían, se los llevaban tal vez a Las Palmas, tal vez a alguna base militar o algún lugar, y algunos que salían, salían pues totalmente golpeados, totalmente con torturas y hasta ahorita se están viendo algunas secuelas.

La pregunta que durante estos años siguen haciéndose los habitantes es por qué la necesidad de lograr la propiedad de un terreno terminó estigmatizándolos de subversivos. No hay una respuesta concluyente.

## 15. LOS SINDICATOS DE LA CARRETERA CENTRAL: ENTRE EL RADICALISMO Y LA RESIGNACIÓN

Durante los últimos años de la década de 1980 y los primeros de la de 1990, al ritmo de una intensa presencia en Lima metropolitana, el PCP-SL y, en menor medida, el MRTA, parecían expandirse de manera vertiginosa en los sindicatos. Era previsible que así sucediera. A estas alturas, el fenómeno subversivo empezaba a afectar casi la totalidad de la vida nacional y el sector laboral no podía quedar de lado, más aún cuando Abimael Guzmán y otros dirigentes de su partido habían trazado ya las líneas matrices que debían conducir la «guerra popular» a partir de 1988, cuando las urbes adquirieran importancia y, en consecuencia, el movimiento sindical era un mecanismo fundamental para sus acciones.

No era un esquema novedoso: había sido habitual que la izquierda legal utilizara a los sindicatos como correas de transmisión de sus objetivos políticos, cuestión importante para entender el desarrollo de una concepción clasista en el sindicalismo peruano que, en la medida en que estos partidos empezaron a mostrar inequívocos síntomas de desestructuración, adquirió altos grados de autonomía y, en muchas oportunidades, actuó en contraposición a las consignas partidarias. En cambio, el PCP-SL, que trató de arraigarse en la población apelando precisamente a esta tradición, quiso reproducir escenarios anteriores, pretendiendo subordinar la actividad gremial exclusivamente a sus propios fines conduciéndola a un extremismo inédito. Así, aprovechó la coyuntura singular de la crisis industrial que, a fines de los años ochenta, había afectado la organización de los sindicatos más combativos y radicales y las graves dificultades que tenían las organizaciones de izquierda para crear mecanismos de contención y, de manera amplia, articular un proyecto nacional.

El sindicalismo clasista había nacido y crecido bajo un patrón de acumulación económica determinado por las políticas de sustitución de importaciones que hacia los años ochenta manifestaba claros signos de agotamiento. Ello facilitó el cambio hacia una economía más abierta y, finalmente, la implantación de un modelo neoliberal. Esta circunstancia trajo como consecuencia la descapitalización del sector industrial, la reducción de personal, el cierre de turnos y la paralización de la producción, mientras el Estado dejaba de intervenir en los conflictos laborales alentando los mecanismos de consenso que podían construir entre sí los sectores laboral y empresarial. En este escenario no era muy fácil que las organizaciones gremiales negociasen exitosamen-

te sus demandas para atenuar los altos índices de inflación y la pérdida de poder adquisitivo como demuestran los modestos resultados de sus protestas masivas. Por lo demás, se mantenía el enfrentamiento entre las diversas federaciones, pese a los esfuerzos centralizadores.

Otro factor importante fue que los partidos de izquierda, después de incrementar apreciablemente su espacio político con las luchas sindicales de los años setenta y su protagonismo en la caída del régimen militar (1968-1980), trasladaron su atención hacia los ámbitos barrial y municipal, algo que los dirigentes obreros interpretaron como un abandono a los trabajadores, aunque, como contraparte esto aumentó su autonomía funcional y las tendencias caudillistas encontraron terrenos más propicios para su reproducción (en realidad, nunca dejaron de manifestarse).

En segundo lugar, y como correlato de lo anterior, si bien se esperaba que los partidos de la izquierda se convirtieran en voceros políticos del movimiento sindical, lo cierto es que esto no fue todo lo eficaz que se esperaba y las limitaciones de los partidos no hicieron posible una adecuada intermediación política que, dada la naturaleza de los conflictos, era indispensable.

En suma, el PCP-SL intentó radicalizar las luchas de los sindicatos ubicados a lo largo de la Carretera Central y justificó sus acciones con el supuesto abandono del clasismo que hicieron los dirigentes identificados con los partidos de la izquierda legal. Así, llevaron a cabo acciones de destrucción de infraestructura —como fue el caso de Nissan—, influyeron en las manifestaciones más violentas de protesta sindical —como fueron los casos de Papelera Atlas, Manylsa, COPE, Carbólán, entre otros—, intentaron formar un organismo de centralización sindical local —la Coordinadora de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central (CLOTCC)—, asesinaron dirigentes sindicales —como Enrique Castilla de Tejidos La Unión— y una serie de funcionarios e impulsaron diversos «paros armados». Los resultados fueron catastróficos para un movimiento obrero que estaba en una situación de reflujo y ocasionaron la formación de una resistencia muy grande a los intentos de penetración del PCP-SL, aunque, en perspectiva, sirvió al PCP-SL para entrenar a algunos cuadros partidarios que luego participaron en el movimiento barrial de Ate-Vitarte.

#### 15.1. ENTRE EL COLAPSO ECONÓMICO Y LA VIOLENCIA

Pasados los efectos de una recuperación intentada con una política heterodoxa, durante el gobierno de Alan García (1985-1990), el reajuste económico sobrevino en 1990 y demolió la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las posibilidades de empleo medianamente remunerado. Sus efectos duraron hasta 1993. Entre 1984 y 1993, el sector informal del empleo urbano aumentó del 35% al 45%. En el mismo período, el desempleo abierto aumentó del 8.9% al 9.9%, lo que significó que el índice de precariedad laboral (personas con problemas de empleo) aumentara del 50.5% al 58.7% y que el subempleo se constituyera en la actividad mayor (70.7%) entre los asalariados.<sup>572</sup>

Eso no fue todo. Como afirma Ricardo Infante, la intensificación de contratos de trabajo que pasaron de permanentes a eventuales como resultado de las modificaciones en la legislación laboral, afectó enormemente el poder adquisitivo de los trabajadores. A su vez, entre los años mencionados, hubo un crecimiento persistente de la oferta laboral, pero el sector moderno de la economía no generó empleo suficiente, debido, en gran parte, al comportamiento de las grandes empresas (con más de cien trabajadores), que se contrajeron al ritmo del 1.6% anual entre 1984 y 1990, con lo cual su participación en el empleo privado se redujo del 37.1% al 26.2%.

Esto contrastaba con el comportamiento de las empresas pequeñas (diez a 19 trabajadores) y medianas (veinte a cien trabajadores), cuyos niveles de ocupación crecieron entre un 8.3% y un 7.1% en el período mencionado, pasando a sustentar la generación de empleos en el sector moderno privado, lo que además de afectar a los trabajadores también disminuyó las utilidades de las empresas. Por otro lado, la poca flexibilidad de los niveles de empleo en el sector moderno condujo a una disminución de la productividad del trabajo, pero fue contrarrestada con creces por la fuerte reducción de los salarios reales, el deterioro del tipo de cambio, las bajas tarifas de los servicios públicos y los subsidios arancelarios. Se puede afirmar, con un alto grado de probabilidad, que el margen total de ganancias en el sector moderno no sólo se mantuvo, sino que aumentó hacia

---

<sup>572</sup> Infante, Ricardo. Perú. Ajuste del mercado laboral urbano y sus efectos sociales: evolución y políticas. Lima: Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, 1995.

finales del período en mención, mientras que su participación en la ocupación urbana total se redujo del 38.8% en 1984 al 36.7% en 1990.

Una situación tan crítica determinó que los trabajadores volvieran a convocar paros nacionales, algo que no se presentaba desde 1984. El primero de ellos fue el 19 de mayo de 1987 y su éxito, en buena cuenta, dependió de la coincidencia con un paro policial. El siguiente se llevó a cabo el 28 de enero de 1988, convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)<sup>573</sup> y la Asamblea Nacional Popular (ANP), durante el cual las direcciones sindicales y políticas de izquierda deslindaron y se enfrentaron con el PCP-SL. El mismo año se convocaron dos paros más (19-20 de julio y 13 de octubre); en ellos también se volvieron a expresar tajantes diferencias con el PCP-SL.

El PCP-SL no era un actor reciente en el movimiento laboral. Ya en los años setenta había organizado el Movimiento Obrero de Trabajadores Clasistas (MOTC), cuyo objetivo era articular al partido con los trabajadores urbanos, aunque, en la práctica, no tuvo presencia entre las masas sindicalizadas, sino, más bien, entre ambulantes e informales. Quizá por eso se oponía a los paros, tildándolos de «revisionistas» por el solo hecho de que su conducción estaba en manos de la CGTP. En los años siguientes, organizó una escuela sindical entre los mineros de Cerro de Pasco con la intención de captar y formar cuadros; pero, aparentemente, no le fue bien y perdió notoriedad en ese ámbito hasta mediados de los años ochenta cuando reapareció empleando otras modalidades tácticas. Es probable que, desde esta época, fueran integrando y educando a los trabajadores que años después dirigirían los atentados perpetrados en este sector.

## 15.2. INCENDIANDO LA CIUDAD

El paro nacional de mayo de 1987 se realizó cuando aún la reactivación económica se reflejaba en sorprendentes tasas de crecimiento en el sector industrial y en una significativa recuperación del salario real (24.2% para 1986 y 45% para 1987). Podría parecer contradictorio que, frente a esa situación, los trabajadores reaccionasen protestando, pero el establecimiento de topes salariales, en momentos que se daba un crecimiento de las utilidades de las empresas, los hacía sentirse excluidos del modelo político y económico. Por lo demás, hacia fines del mismo año ya era evidente que la política económica implementada durante los dos primeros años de gobierno aprista era insostenible. En diciembre se iniciaron una serie de devaluaciones que incidían sobre el costo de vida de la población y motivaron la convocatoria de otro paro nacional en enero de 1988.

Lo peor aún estaba por venir. A mediados de ese año se puso fin al control de cambios y se aceleró la devaluación, lo que generó mayor inflación y la caída de los ingresos reales. El sindicalismo reaccionó convocando otro paro (el 19 de julio) a sólo seis meses del anterior, aunque no logró repetir sus resultados. En septiembre, sobrevino un conjunto de medidas económicas y tributarias que llevó la inflación al 114% e hizo que los salarios reales volvieran al nivel de 1985, con lo cual la población perdió todo lo que había recuperado en los años anteriores.

La CGTP volvió a llamar a un paro nacional en octubre y otro más en diciembre. El primero resultó bastante débil y el segundo fue un fracaso. La recesión, la pérdida de poder adquisitivo y la hiperinflación minaban la voluntad de lucha de los trabajadores y los conducían a una actitud conservadora contra las previsiones de la dirigencia que creía que iba a impulsarlos a una mayor protesta. Temerosos de perderlo todo, los trabajadores preferían garantizar sus ingresos antes que arriesgarlos en una medida que sólo manifestaba su descontento. Era innegable, por otra parte, que el ambiente se enturbiaba y las acusaciones de subversión eran frecuentes ante cualquier acto de protesta.

---

<sup>573</sup> La CGTP se había vuelto a fundar en 1968, luego de una larga lucha para reorientar el movimiento obrero hacia posiciones clasistas.. A partir de ese año hasta 1975, sobrevino la mejor etapa para el sindicalismo peruano, durante la vigencia del decreto ley 18471 de estabilidad laboral, que permitió la aparición de una cantidad de sindicatos nunca vista hasta el momento. Esto fue acompañado por el uso generalizado de medidas radicales, como la huelga y las tomas de instalaciones como formas de lucha contra los sectores empresariales y el Estado. Esta tradición sindical prolongó su vigencia hasta los años ochenta, cuando, debido a la crisis económica y los canales de negociación abiertos muy tenuamente por el régimen democrático, los dirigentes vieron la necesidad de considerar otras formas de negociación que apelaran menos al enfrentamiento. Aun así, cuando las conversaciones fracasaron y los convenios no fueron cumplidos, las centrales obreras, especialmente la CGTP, consideraron que volver a las convocatorias de paros nacionales podía ser eficaz como forma de presión.

En este contexto, ocurrió un hecho importante durante el paro de octubre. La Policía Nacional allanó el local de la Federación de Luz y Fuerza y se llevó detenidos a tres dirigentes y un trabajador —el secretario general, el secretario general de la sección norte, el secretario de relaciones exteriores y el portero del local— a quienes acusó de ser subversivos. Como pruebas, la Policía Nacional mostró volantes del PCP-SL, cartuchos de dinamita, llantas y explosivos que, según su versión, había encontrado en el referido lugar. El secretario de Defensa de la Federación, Noé Rospigliosi, reveló que esas pruebas habían sido «sembradas» por los integrantes de las Fuerzas Policiales y denunció, además, que su organización había sido objeto de un robo de 400 mil intis y destrucción de computadoras, equipos telefónicos, máquinas de escribir, equipos de amplificación y calculadoras.

Desde hacía un tiempo, la Federación de Luz y Fuerza estaba en la mira de las fuerzas del orden debido a los constantes sabotajes en las líneas de tendido eléctrico. Se sostenía que algunos de sus agremiados proporcionaban información al PCP-SL, que al parecer había infiltrado Electro Lima y Electro Perú para realizar sus atentados.<sup>574</sup> Esta sospecha se reforzaba además porque la dirigencia mantenía una línea crítica a la dirección de la CGTP.<sup>575</sup>

Durante 1989 este cuadro se agudizó, aunque algunos cambios de actitud se manifestaban entre los dirigentes obreros. Hasta ese momento, las respuestas obedecían a un uso intensivo del único recurso con que contaban, es decir, las huelgas y tomas de instalaciones, pero cada vez se mostraban más ineficaces. Frente a la recesión, la reducción de las jornadas de trabajo o los cierres temporales de las plantas de producción sólo quedaba la negociación pragmática, confiando en el diálogo antes que el enfrentamiento. El despido y cese masivo de sindicalizados, su reemplazo por eventuales y personal acogidos en el PROEM, así como la sistemática reducción de los salarios reales, no vislumbraban otra alternativa.

Tampoco era ya apropiado, como lo fue en el primer quinquenio de los años ochenta, promover la centralización sindical, buscando movilizar la solidaridad de clase para darle mayor fuerza a las demandas. Lo que se impuso fue, más bien, la negociación. Ello dependía de la capacidad que tuvieran los sindicatos.

La prioridad que adquirió la lucha salarial fortaleció la vida sindical: 1988 fue el año de la más violenta caída salarial que registró la historia (hasta ese momento), pero también el de mayor intensidad huelguística. Lo que se pretendía era eliminar los topes salariales y presionar para que los ingresos se recuperasen frente al proceso inflacionario. La movilización de sectores íntegros, como bancarios y textiles, exigía la anulación del decreto supremo 041.<sup>576</sup> Una gran cantidad de paros y huelgas buscó preservar los niveles de los salarios, algo que fue visto como un derecho adquirido.

#### 15.2.1. La década de los ochenta en cifras<sup>577</sup>

Emilio Calla, secretario de Prensa y Propaganda de la FETIMP, señalaba lo siguiente: «La recesión nos ha afectado desde septiembre. En este momento, la empresa no está produciendo nada; desde el 24 de abril, ya no se produce ni una pila. La empresa tiene además una cantidad de stock y, en este momento, no tiene mucha demanda».<sup>578</sup>

---

<sup>574</sup> Desde 1985 hasta mayo de 1989, fueron derribadas 592 torres de alta tensión. En esos cuatro años, Electro Perú tuvo una pérdida de 68 millones de dólares por acciones terroristas.

<sup>575</sup> Casi un año después, en agosto de 1989, cuando los sindicatos de Electro Lima y Electro Perú presentaban su pliego de reclamos, el director de la PT, general Fernando Reyes, reiteró estas afirmaciones.

<sup>576</sup> El decreto supremo 041 anulaba lo dispuesto por el decreto legislativo 025, de agosto de 1988, que establecía indexaciones salariales aunque con topes.

<sup>577</sup> Reyes, José. «La década en cifras». Cuadernos Laborales 57, febrero-marzo de 1990.

<sup>578</sup> Balbi, Carmen Rosa, «La recesión silenciosa. Estrategias obreras». *Quehacer*, n.º 59, junio-julio de 1989.

Cuadro 1

PERÚ 1980-1989: ÍNDICE DEL SUELDO REAL POR AÑO			
AÑOS	NOMINAL (MENSUAL)	REAL (MENSUAL)	ÍNDICE DE SUELDO REAL
1980	68.24	42.87	107.40
1981	121.74	43.60	109.20
1982	216.02	47.05	117.80
1983	391.12	40.34	101.00
1984	758.03	37.20	93.20
1985	1,840.89	34.29	85.90
1986	4,766.96	49.91	125.00
1987	9,272.99	52.24	130.80
1988	49,419.63	36.19	90.60
1989	1,083,541.83	22.68	56.80

Fuente: MTPS-DGE

Cuadro 2

PERÚ 1980-1989: ÍNDICE DEL SALARIO REAL POR AÑO			
AÑOS	NOMINAL (DIARIO)	REAL (DIARIO)	ÍNDICE DE SALARIO REAL
1980	1.51	0.95	105.80
1981	2.59	0.93	103.60
1982	4.32	0.94	105.00
1983	7.56	0.78	86.80
1984	13.55	0.67	74.10
1985	30.82	0.57	64.00
1986	80.00	0.84	82.80
1987	161.37	0.91	101.00
1988	814.35	0.60	66.30
1989	18,593.76	0.39	43.20

Fuente: MTPS-DGE

### 15.3. EL PEZ QUE SE TOMA EL AGUA

Este título fue propuesto por Carmen Vildoso y Denis Sulmont para graficar la acción del PCP-SL en los sindicatos.<sup>579</sup> En efecto, luego del primer congreso del PCP-SL, en 1987, las directivas sobre qué hacer en las ciudades eran claras. Bajo la premisa de «conquistar bases», el PCP-SL definió la necesidad de crear en las ciudades: «El Movimiento Revolucionario de Defensa del Pueblo (MRDP), con centros de resistencia que hacen la «guerra popular» y preparan la futura insurrección, que se dará cuando las fuerzas del campo asalten las ciudades en combinación con la insurrección desde dentro».<sup>580</sup>

El MRDP estaría conformado por «organismos autogenerados», semiclandestinos, que ligarían el partido con las masas y realizarían su trabajo en sindicatos, federaciones, asociaciones de comedores populares, barrios, universidades, etc. En el caso de los sindicatos, se asignaba al MOTC la responsabilidad de las tareas descritas.

Hacia 1987 era común que los miembros del PCP-SL realizaran una intensa labor de repartición de volantes en las puertas de las fábricas y lanzaran arengas a favor de su organización. No obstante, el desarrollo del

<sup>579</sup> Vildoso, Carmen y Denis Sulmont. «Sendero Luminoso y la clase trabajadora: el pez que se toma el agua». En Denis Sulmont y otros. *Violencia y movimiento sindical*. Lima: Red Peruana de Educación Popular y Sindicalismo, 1989.

<sup>580</sup> Arce Borja, Luis (ed.). «Guerra popular en el Perú: el pensamiento Gonzalo». Bruselas, 1989.

«gran plan de conquistar bases de apoyo» en las ciudades implicaba algo más que estas tareas de propaganda como la destrucción de la infraestructura de las fábricas que se encontraban en conflictos laborales; tal el caso de Nylon, Bata-Rímac, Nissan y otras. Asimismo, procedieron a ejecutar a funcionarios de empresas. En marzo de 1988, mientras el sindicato de la empresa COPE, ubicada en la Carretera Central, se aprestaba a discutir su pliego de reclamos, una mujer asesinó al gerente de relaciones industriales.<sup>581</sup> Luego, al lograr el control de la situación mediante amenazas, los subversivos decretaron una huelga general indefinida y la toma de las instalaciones.<sup>582</sup> Después de cincuenta días, hubo un violento desalojo, los dirigentes fueron despedidos, el sindicato descabezado y los trabajadores no consiguieron que se atendiera uno solo de sus reclamos.

De igual manera, en abril de 1988 un grupo de subversivos que se hallaba confundido entre los trabajadores en huelga hirió mortalmente al gerente de la fábrica Hilados S.A. Los trabajadores lo rechazaron y auxiliaron a la persona herida. Sin embargo, pocos días después (12 de abril), el vocero del PCP-SL, *El Diario*, señalaba lo «correcto» de la acción.

El PCP-SL no sólo seleccionaba a sus enemigos según un criterio de clase, sino también según la resistencia que les ofrecían otras agrupaciones políticas de izquierda que le disputaban espacio en los sindicatos, tildeándolas de «revisionistas». El paro nacional de enero de 1988, convocado por la CGTP, fue la ocasión escogida para forzar su radicalización e intentar aislar a los dirigentes y conducir al movimiento sindical de la capital. Más grave aún: el día del paro (28 de enero), algunos de sus militantes se infiltraron encapuchados en la marcha que se realizaba en la plaza 2 de Mayo, y luego pretendieron dinamitar el local de la CGTP y asesinar al líder del Partido Comunista, Jorge del Prado, lo que desencadenó una balacera que terminó con la huída de los provocadores.

Desde ese momento, modificó su táctica creando «bases propias» que respondieran a situaciones específicas. Por ejemplo, en mayo de 1988, luego de un trabajo de infiltración, convocó a unos cien delegados de diversas bases gremiales del cono este de Lima y los reunió en Ñaña para participar en el denominado «Primer Plenario de Trabajadores Clasistas de la Carretera Central» y conformó el CLOTCCC. Paralelamente, apareció en la zona una base del MRDP, que fue utilizada como aparato para lanzar una lucha frontal en sindicatos que se encontraban en conflicto con las empresas, como las ya mencionadas Nylon, COPE y Bata, además de FAM, Atlas, Tabacalera Nacional, Tejidos La Unión, Carbolán (Pelikan), entre otras.

Según *El Diario*, la constitución del CLOTCCC fue un «hito histórico [...] que se diferenció marcadamente de las [organizaciones] que acostumbran organizar los «revisionistas», oportunistas de Izquierda Unida y el Apra fascista».<sup>583</sup> Goyo Moscoso, de Papelera Atlas y presidente de la comisión organizadora, afirmó que «nuestro objetivo es centralizar a las masas trabajadoras dotándolas de una organización de nuevo tipo acorde a la coyuntura actual, en otras palabras, poner lo organizativo en función de la toma del poder». Al finalizar el evento, Goyo Moscoso sería ratificado como presidente de la mesa directiva.

El manifiesto de fundación del CLOTCCC, publicado a toda página por *El Diario* en su edición del 29 de mayo de 1988, fue muy claro sobre las intenciones del PCP-SL en el sindicalismo. El texto se abre con una cita de Marx: «La clase obrera es revolucionaria o no es nada. La conquista del poder político ha devenido a ser, por lo tanto, el gran deber de la clase obrera». Su plataforma consistía de nueve puntos, entre los que resaltaban exigencias al gobierno aprista, «fascista y corporativo encabezado por el demagogo [Alan] García», de pliegos renovables en lugar de los anuales, con lo cual el PCP-SL estimaba que podía garantizar una situación de enfrentamiento permanente, «teniendo en cuenta que sólo se conquistan derechos y beneficios con lucha y se defienden con lucha, ya que el problema se reduce a las fuerzas respectivas de los contendientes». En segundo lugar, presentaron otras demandas como aumento de salario de quinientos intis diarios, reducción de la jornada de trabajo, mejores condiciones laborales, mayor atención médica y el cumplimiento de pactos y convenios colectivos. Finalmente, establecieron como bandera de lucha la estabilidad laboral para los eventuales y personal de PROEM, así como «la defensa de los sindicatos de clase, contra el paralelismo corporativo». También incluían mejores condiciones de trabajo para las mujeres y niños.

<sup>581</sup> COPE producía tubos colapsables para pasta dental, envases para productos alimenticios y envases de plástico y hojalata para lubricantes. Era una fábrica única en su género en el país y su rentabilidad era tan alta como la de las cervecerías Cristal y Pilsen.

<sup>582</sup> Los trabajadores de COPE tomaron la fábrica en lucha por su pliego de reclamos y por el nombramiento de los contratados. Como podrá notarse, el planteamiento era similar al propuesto por el CLOTCCC.

<sup>583</sup> «Preparar a las masas para la toma del poder». *El Diario*, 27 de marzo de 1988.

Según se deduce de este texto, el PCP-SL aspiraba a introducir entre los obreros la idea de que sus demandas no podían ser atendidas en las condiciones imperantes y que la única salida era la «guerra popular» que ellos estaban impulsando. De otra forma, parece ilógico asumir, por ejemplo, que la demanda de darle estabilidad a los eventuales pudiera ser escuchada por las autoridades de trabajo.

Hubo, al parecer, varios motivos para que el PCP-SL realzara estos ajustes organizativos. En primer lugar, como se afirmó en los estudios elaborados sobre Huaycán y Raucana,<sup>584</sup> la Carretera Central fue considerada por el PCP-SL como prioritaria para su trabajo político, debido a sus características socioeconómicas. En segundo lugar, al ser una zona eminentemente industrial, era razonable pensar que la crisis del sector impactaría allí de manera importante. Como tercer punto, en Ate-Vitarte existía una fuerte tradición del sindicalismo radical. Por último, se suponía que no había mayores distancias entre trabajadores y pobladores —los residentes en la zona eran mayoritariamente los obreros que laboraban en las fábricas allí asentadas— y, en teoría, esto facilitaría la articulación del movimiento sindical con el barrial. Si ése fue el razonamiento del PCP-SL, entonces tuvo un clamoroso error de apreciación. Por todas las consideraciones que se han venido exponiendo, la acción sindical no podía ejercerse con el simple expediente del enfrentamiento y muchos de los dirigentes de esta zona así lo entendieron.

Al procesar el sector industrial una crisis terminal, los dirigentes de izquierda estimaron que mucho mejor provecho tendrían las negociaciones con los empresarios que los enfrentamientos directos que sólo acelerarían una situación en la que los obreros podrían salir muy perjudicados.

Por otro lado, las nuevas modalidades de reclutamiento laboral afectaron de manera decisiva la organización sindical. La masa de trabajadores residente en el distrito se fue diversificando paulatinamente con obreros que provenían de otros lugares, como los conos sur y norte, que difícilmente se integraban a la dinámica de los pobladores de la zona.<sup>585</sup> Las dificultades para el PCP-SL no se hicieron esperar. Al hecho de que veía a los sindicatos como parte de un engranaje que reforzaba los objetivos del partido, se sumó una clamorosa ausencia de representación. Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas y presidente del CLOTCCC, se quejaba en 1991 de que:

[...] el Comité de Lucha de la Carretera Central no funciona hasta el momento. Hace ya tres años se hizo el plenario. Aquí en la carretera Central lo formaron los compañeros que se llaman del Partido Comunista Peruano bajo el lema de Sendero Luminoso, pero, desde ese día hasta hoy, ni un comunicado, ni una reunión, ni una coordinación. ¿Quiénes son? [...] Solamente son voces que hablan, pero al final desaparecen, no se les conoce de qué base son.<sup>586</sup>

Un ejemplo palpable de cómo conducía el PCP-SL los asuntos sindicales fue Nylon S.A. Era una empresa relativamente antigua —fundada en 1961—, cuyo principal accionista era Benjamín Sabal. Entre 1974 y 1975, Sabal decidió ampliar el negocio haciendo una cuantiosa inversión, pero el proyecto se truncó por algunos problemas entre los accionistas que dejaron como pasivo una deuda de 8 millones de dólares avalados por el Banco Industrial del Perú (BIP). Ante la insolvencia, el BIP asumió el control de la empresa y compró el 67% del capital social. Esta entidad se comprometió a reflotar la empresa y poner en marcha el proyecto inconcluso, pero una pésima gestión impidió el objetivo. Nylon se encontraba desfinanciada y reflotarla era imposible. El remate público pendía sobre su destino.

Alertados de lo que denominaron «sabotaje a la producción por parte de los funcionarios», los trabajadores acordaron el traslado de la propiedad de la fábrica. En mayo de 1988 se dirigieron al presidente Alan García y le manifestaron su deseo de comprar la planta y su rotundo rechazo al remate. Esta posición no era consensual y un grupo de trabajadores opinaba que el reflotamiento podía garantizarse con una «pronta gestión privada» como expresaron en un comunicado publicado en *El Comercio* el 29 de septiembre de 1988. En el centro mismo de las diferencias estaba el asunto de la estabilidad laboral. La vía propuesta por el sindicato implicaba su defensa, algo que no se garantizaba si la empresa pasaba a manos privadas.

¿Cuál fue la posición de los trabajadores del PCP-SL? Según Carmen Vildoso, oscilaron entre «La indiferencia frente a la posible venta de MANYLSA, asumiendo que son los empresarios privados y no los trabajadores».

<sup>584</sup> Véanse los estudios sobre Huaycán y Raucana en este mismo tomo.

<sup>585</sup> Irigoyen, Marina. «Ate-Vitarte, industria y movimiento sindical: 1975-1984». Lima: IDEAS, 1985.

<sup>586</sup> «En el filo de la navaja; habla Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas». *Quehacer*, n.º 68, diciembre de 1990 - enero de 1991.

dores quienes deben preocuparse de los problemas de la empresa, y la propuesta de luchar por la administración del centro de trabajo, siguiendo el ejemplo de los compañeros de COPE, que han tomado la fábrica».<sup>587</sup>

COPE fue otro ejemplo muy claro. Al igual que Nylon, la Compañía Peruana de Envases era una empresa antigua —tenía 37 años de existencia— donde trabajaban más de trescientas personas y cuyos principales accionistas eran las familias Rodríguez-Mariátegui y Ratto Divinich. El conflicto empezó a agudizarse cuando los propietarios decidieron dar vacaciones al personal ante la falta de demanda de sus productos con la esperanza de que éstos recuperaran sus precios. Entonces, la comunidad industrial y los sindicatos de obreros y empleados formaron un frente único que tomó la fábrica el 11 de abril de 1988. Entre tanto, el PCP-SL asesinó al gerente de Relaciones Industriales.

Los dirigentes laborales denunciaron que los propietarios de COPE estaban trasladando la materia prima de los depósitos a una empresa que habían formado con otra razón social, Envases Varios, ubicada en Chorillos, incorporando su cartera de clientes y canalizando las utilidades hacia las empresas de servicios ARASA, MOSA y ATUR, de su propiedad, con lo cual obviamente descapitalizaban a COPE.

El punto de vista de los empresarios era diferente. En un aviso pagado, publicado en el diario *El Comercio* el domingo 17 de abril de 1988 (y reproducido luego por los semanarios *Caretas y Sí*), argumentaban que la toma de la fábrica, manejada por grupos extremistas, era la causa del incumplimiento a los clientes. Un mes después, el 23 de mayo de 1988, durante una reunión convocada por la Comisión de Pacificación del Senado de la República, Luis Rodríguez-Mariátegui, quien asistía como representante de la CONFIEP, manifestaba que el caso de COPE era ilustrativo para evaluar la situación de la subversión en ese momento:

Ésta ha sido una toma de fábrica cantada, publicada con anticipación en un plenario de trabajadores de la carretera Central [se refiere al plenario del CLOTCCC], en el cual presenta una moción el sindicato de esta misma compañía, calificando al Partido Aprista Peruano de gobierno genocida y corporativo, Izquierda Unida de capitulacionista [sic] y revisionista, con frases como: «una clase trabajadora que no aprende el manejo de las armas, sólo merece que se les llame esclavos» [...] Yo diría que el problema básico es de desconcierto, no se sabe cómo actuar [...] cuando se produce el día viernes la diligencia judicial para constatar la inspección ocular, la toma de la fábrica, aparecen setenta personas y son 330 los trabajadores; es decir, hay exactamente el 20% adentro. Sobre la pregunta de la capacidad de reacción de los trabajadores, yo no diría que ese 20% sean senderistas [del PCP-SL], de ninguna manera; yo creo que hay muchos que están intimidados. Se sabe que hay gente que ha sido amenazada, como entran y salen le dicen: «si tú no regresas, vas a ver lo que te pasa a ti, a tu familia». O sea, se está empleando por medio de esta gente infiltrada dentro de cada uno de los sindicatos, tácticas realmente de intimidación y de presión.

Y, en cuanto a la zona, yo creo que la Carretera Central es la más álgida, indiscutiblemente, porque lo que hemos visto de las minas y de las mismas industrias, este comité de trabajadores clasistas tienen bases en casi todas las fábricas de la zona, funcionan al margen de los sindicatos, al margen de las propias directivas que responden a las confederaciones que actúan democrática y legítimamente; hay gente que está infiltrada por dentro y que está tratando de crecer y creo que es el momento de evitar que esto se produzca.<sup>588</sup>

Los trabajadores rechazaron cualquier relación con el PCP-SL<sup>589</sup> en un comunicado firmado por los sindicatos y la comunidad industrial en el que proponían a las autoridades que les entregasen la conducción de la empresa, dadas las dificultades de sus propietarios. Sin embargo, la duda ya estaba sembrada y los subversivos aprovecharon políticamente esta circunstancia para perjudicar a los sindicalistas. Como se señaló líneas arriba, cincuenta días después de la toma serían violentamente desalojados sin lograr la atención de un solo punto de sus reclamos.

El resultado de este conflicto no interesó al PCP-SL sino para acrecentar su presencia potenciando el CLOTCCC o creando el Comité de Lucha de Obreros Clasistas de la Avenida Argentina (CLOCAA) para utilizarlos en «paros armados» que, entre 1988 y 1992, fueron organizando según sus «planes de guerra»:

- 1988

27, 28 y 29 de septiembre. Paro de 72 horas en la Carretera Central, que coincidió con el inicio de las acciones armadas en esa zona.

<sup>587</sup> Vildoso, Carmen. «Manufacturas Nylon, un desafío a la cogestión». Lima: Edaprospo, 1991.

<sup>588</sup> Senado de la Repùblica, ob. cit.

<sup>589</sup> «En forma indignante, algunos medios de comunicación distorsionan lucha de trabajadores de COPE». *Kausachum*, n.º 312, 30 de mayo de 1988.

- 1989
  - 19 de enero. Segundo «*paro clasista*» en la avenida Argentina.
  - 20 de julio. Primer «*paro armado clasista*» en Lima.
  - 3 de noviembre. Segundo «*paro armado*», convocado por el MRDP contra las elecciones municipales de ese mes.
- 1990
  - 28 de marzo. Tercer «*paro armado*» en Lima. Por primera vez, el transporte público suspendió sus actividades.
  - 28 de agosto. Cuarto «*paro armado*», contra el *fujishock*; lo hicieron coincidir con el de la CGTP.
  - 24 de octubre. Quinto «*paro armado*». Fue de 48 horas y no hubo ni transporte ni energía eléctrica.
- 1991
  - 29 de mayo. Sexto «*paro armado*».
- 1992
  - 14 de febrero. Séptimo «*paro armado*».
  - 29 de mayo. Octavo «*paro armado*», en Canto Grande.
  - 23 de julio. Noveno «*paro armado*».

Una evaluación en perspectiva permite afirmar que estos paros no alcanzaron los objetivos deseados por sus promotores. Los «paros armados clasistas» del 20 de julio de 1989 y del 3 de noviembre del mismo año (este último perseguía boicotear las elecciones municipales) mostraron los escasos avances del PCP-SL entre los gremios laborales limeños, pese a que realizó una agresiva campaña psicológica e ideológica, especialmente contra los dirigentes de los transportistas (envío de cartas amenazantes y presiones personales).

Dos días antes del paro de noviembre, sus militantes efectuaron una marcha armada como forma de propaganda y agitación. Aparentando formar parte de una manifestación de evangelistas que se había reunido en la plaza Manco Cápac para dirigirse al cementerio El Ángel, fueron descubiertos por una patrulla policial que custodiaba el lugar —cerca de allí se hallaba el local de RBC Televisión y el cuartel de Radio Patrulla—. Uno de los policías realizó un disparo al aire que originó el enfrentamiento con el resultado de tres subversivos muertos, 24 personas heridas y más de 140 detenidos.<sup>590</sup> Ante este hecho, el gobierno dispuso que las Fuerzas Armadas se encargasen del orden interno en Lima y Callao en el marco del estado de emergencia.

En las siguientes convocatorias, el PCP-SL afinó sus mecanismos de presión y logró, en varias oportunidades, que los transportistas prefirieran dejar de laborar ante la eventualidad de ser asesinados por no acatar la medida o ver destruidos sus vehículos. Programado con una semana de anticipación, el paro de febrero de 1992 fue acompañado de acciones muy violentas que empezaron el día 7 de febrero cuando hicieron explotar una potente bomba en el local de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) y un coche bomba en la embajada estadounidense. Luego de este «ablandamiento», asesinaron brutalmente a la dirigente barrial María Elena Moyano (se dice que por orden expresa de Abimael Guzmán) por la firme resistencia que les había opuesto en Villa El Salvador.

El vocero del PCP-SL, *El Diario*, resumió estos eventos el 21 de febrero afirmando que «la inmensa masa (casi 8'000,000 de habitantes en Lima) vivió la fuerza del nuevo poder a través del MRDP, la existencia del nuevo Estado y el cuestionamiento y la negativa del viejo Estado». Luego agregaría: «Los mercados, bodegas, ambulantes, universidades [...] permanecieron cerrados, se sujetaron a la autoridad del nuevo poder, a la convocatoria del MRDP».

En julio repitieron el mismo esquema. Las acciones comenzaron el día 16 de ese mes con el coche bomba que estalló en el jirón Tarata de Miraflores y hostigamientos en diferentes comisarías. Estas acciones mantu-

---

<sup>590</sup> «Sangriento enfrentamiento de policías y terroristas». *Expreso*, 2 de noviembre de 1989.

vieron su intensidad —muy superior a la de febrero— hasta el día mismo del paro. Ya en agosto, las culminaron con los asesinatos de diversos dirigentes barriales.

Cuadro 3

DIRIGENTES Y POBLADORES BARRIALES ASESINADOS	
AÑO	CANTIDAD
1984	1
1985	1
1987	4
1989	11
1990	7
1991	14
1992	24

Fuente: DESCO

Otro de sus objetivos militares preferidos, tal como sucedió al inicio de su presencia en las plantas fabriles, eran los funcionarios que tenían a su cargo las relaciones laborales con los sindicatos. Aunque no fue muy frecuente entre 1987 y 1989, a partir de 1990 intensificó los asesinatos.

- 1987
  - 1 de octubre. Gerente de relaciones industriales de Rayón, Nelson Pozo.
- 1988
  - 17 de marzo. Gerente de relaciones industriales de COPE.
  - 12 de abril. Gerente general de Hilados S.A., Brankco Pejnovil Baigm.
- 1990
  - 20 de febrero. Dos funcionarios de FAMESA (Fábrica de Mechias S.A.), Juan Chacaltana y su asistente.
  - 20 de marzo. Gerente de relaciones industriales de La Unión, Joel Podestá. En la carretera Central.
  - 24 de marzo. Roberto Barriga, gerente de CORSA, cuando salía de su casa.
  - 17 de abril. Pedro Muller, jefe de seguridad de Hilos Cadena S.A.
  - 18 de abril. Manuel Sumaria, director de producción de Constructora ISSSA.
  - 2 de junio. Tomás Irigoyen, gerente de CITECIL, fábrica que se encontraba en huelga desde hacía un mes.
  - 20 de julio. Antonio Rosales, presidente ejecutivo de Lima Cauchó S.A.
  - 20 de agosto. Edmundo Aguilar, propietario de la pequeña empresa Confecciones Eagle, por no pagar cupos.
  - 27 de agosto. Jaime Navarro, gerente de relaciones industriales de FAM (Récord).
  - 02 de noviembre. Segundo Álvarez, jefe de personal de la fábrica de calzado El Diamante.
- 1991
  - 28 de enero. Intento de asesinato a ejecutivo de Paramonga. Queda herido.
  - 31 de enero. Gabriel Bonifaz, gerente de INOX, al ingresar a la fábrica.
  - 1 de febrero. Hernán Marco Mauricio, gerente general de la procesadora de café Garci.
  - 24 de abril. Julio Zevallos Ruiz, gerente de producción de Pesa Perú.
  - 25 de abril. Intentan asesinar a Alberto Nakangawa, gerente de FAMESA. Lo dejan gravemente herido.

28 de mayo. Dante Obregón, gerente de Bata Rímac. Fue emboscado y ametrallado en Chosica.

3 de junio. Galina Ivanova, funcionaria de Tejidos La Unión.

17 de junio. Armando Díaz, ejecutivo de Tejidos La Unión. Fue asesinado en la puerta de la fábrica.

▪ 1992

13 de febrero. Gonzalo García, asesor de la empresa Candados Peruanos S.A.

13 de febrero. Asesinaron al subgerente de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI)

#### 15.4. UN HÉROE SINDICAL: ENRIQUE CASTILLA

El PCP-SL también atentó contra los dirigentes sindicales que se le oponían. Sin duda el caso más importante, por las connotaciones que tuvo, fue el del obrero textil Enrique Castilla Linares. El 31 de octubre de 1989, el PCP-SL dio el ejemplo más claro de lo que era su estrategia contra los «revisionistas» (es decir, contra todos aquellos que osaran interponerse en sus planes) asesinándolo de tres balazos. Tenía entonces 48 años y representaba al típico sindicalista forjado en la tradición del clasismo. Sus adversarios le reconocían habilidad en las negociaciones y en la creación de redes de contacto, pero también le criticaban que no hubiese superado la práctica caudillista que caracterizaba a su generación. Desde 1962, trabajaba en el complejo La Unión (de lejos, el más importante en el sector textil),<sup>591</sup> que agrupaba a 12 fábricas de la familia Brescia. Vinculado tempranamente con el sindicalismo clasista, desde 1963 ya formaba parte de su dirigencia, mientras políticamente se acercó al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Tres años después, asumió la secretaría general de su sindicato y, como tal, fue delegado ante la federación, donde se enfrentó con los dirigentes apristas.

Las reformas del gobierno militar (1968-1980) lo entusiasmaron por lo que promovió la comunidad industrial en su planta. Fue entonces cuando sufrió el primer atentado contra su vida. Mientras trabajaba un bosquejo de lo que sería la ley de comunidades, alguien llamó a su casa y, cuando abrió la puerta, los anónimos visitantes le arrojaron una botella con ácido. Aunque la investigación quedó trunca, las sospechas recayeron sobre los propietarios de la fábrica. Luego fue víctima de intentos de secuestro y asesinato.

En 1970, cuando se organizó la Unión Sindical que centralizaba a todos los sindicatos del complejo La Unión, Enrique Castilla fue elegido secretario general y presidente de la comunidad industrial. Después del período de reformas, se integró al Comité de Unificación y Reorganización de la FTTP, desde donde se buscaba aislar a los apristas de la dirección de la Federación. Asimismo, fundó la Unidad Democrática Popular y participó en recordado paro de 1977 (que obligó al gobierno del general EP Francisco Morales Bermúdez a convocar a elecciones para una Asamblea Constituyente al año siguiente). Fue uno de los gestores del Comité de Lucha de la Carretera Central.

Durante los años ochenta, se le ve nuevamente intentando sacar a los apristas de la Federación, pero el sindicalismo pasaba por tiempos muy duros y la necesidad de agrupar esfuerzos lo empujó a formar parte de una dirigencia compartida. Desde allí logró crear la Unión Sindical, instancia que no fue reconocida por la empresa; por eso propuso transformarla en Federación de Empresa. Así logró el aval oficial, el 23 de mayo de 1986. Como era de esperar, la empresa tampoco quiso reconocer a FEDEUNION, por lo que se inició una huelga que forzó a los propietarios a firmar un acta de reconocimiento, lo que los trabajadores asumieron como un gran triunfo. De poco les valdría. Dos años después (en abril de 1988) la FEDEUNION iría de nuevo a la huelga, esta vez durante 84 días, porque su pliego de reclamos fue rechazado por los propietarios. Castilla demostró en este proceso la habilidad que lo caracterizaba: logró que las autoridades de trabajo reconocieran como legales los días de la paralización, sentando jurisprudencia en materia laboral.

Sin embargo, su exitosa gestión en nombre del sindicalismo fue vista con sumo desagrado por el PCP-SL, que tomó la decisión de asesinarlo. Para ello eligió el paro armado del 3 de noviembre de 1989. En el 8 Congreso de la Federación de Trabajadores Textiles del Perú (5-7 de octubre de 1989), durante el cual la delegación aprista tuvo que retirarse, fue elegida una directiva clasista con el apoyo de Enrique Castilla.

<sup>591</sup> Los datos biográficos han sido tomados de Rodríguez C., Juan. «Enrique Castilla: nervio y corazón de dirigente». Lima: Edaprospo, 1990.

Cuando éste se reincorporó a su centro de trabajo, fue permanentemente amenazado con pintas en las paredes («¡Muerte al traidor Castilla!»).

La multitud que asistió a su sepelio expresó el repudio a este asesinato, que dio inicio a un rápido y profundo des prestigio del PCP-SL, lo que, por supuesto, no pareció interesarle demasiado. Un año después, *El Diario* admitía que su muerte había sido un «error» por una mala evaluación de los plazos. Según su análisis, el asesinato debió ocurrir «cuando las masas aún lo querían».

Al eliminarlo, el PCP-SL salvó momentáneamente el principal escollo que tenía para seguir avanzando en Tejidos La Unión, la fábrica más grande del país en su sector (tenía aproximadamente 3,800 trabajadores) y, consecuentemente, un objetivo muy apreciado para sus planes. Enrique Castilla no fue su única víctima. Tal como ha sido consignado en la lista de funcionarios asesinados, en marzo de 1990 balearon al gerente de relaciones industriales de La Unión, Joel Podestá, y en junio de 1991 corrieron la misma suerte otros dos funcionarios. Días después apareció la siguiente pinta en una de las paredes de la planta: «Muerte a los explotadores, no hay revolución sin sangre, la injusticia no quedará sin venganza y mataremos a todos los soplones».

Según el semanario *Caretas*:

David [Armando] Díaz Hinostroza ya había sido secuestrado y mantenido en calidad de rehén hasta en dos oportunidades por miembros del sindicato, en circunstancias que se discutía el pliego de reclamos; por esa razón es que —al ser puesto en libertad— despidió a dos dirigentes involucrados en el asunto. Su principal función administrativa era, precisamente, servir de intermediario entre los directivos de la empresa y los 12 sindicatos que conforman la Federación Textil de Tejidos La Unión.<sup>592</sup>

Pero, ¿cuál fue el motivo para asesinar a la ciudadana soviética Galina Ivanova, encargada de diseño de la misma empresa? Ésta es la versión de un dirigente sindical del PCP-SL entrevistado por Carmen Rosa Balbi en 1992:<sup>593</sup>

Voy a dar un ejemplo concreto: la gerente que mataron en Textil La Unión, una mujer, una rusa. La aniquilaron porque antes, una semana antes, un trabajador dirigente clasista había venido siendo hostilizado, adrede, como en todos sitios y luego, como no había producción, detuvieron la producción de la máquina y le dieron trabajos menores, de limpieza, y él barriá; hay que pintar, y él pintaba; hay que lavar el baño, y un poco que ya [...] Él tenía 54 años de edad. Entonces, los otros vieron que lo estaban degradando a un técnico, que un ayudante de limpieza podía haber hecho eso. Entonces, él se unió con algunos y dijo que no iba a limpiar el baño.

La cuestión era que lo botaban del trabajo con esta nueva ley. Entonces, la cuestión era que se enfrente. Entonces, fue a pedir su tarjeta y pedir permiso para ir al Seguro. Pero, como no había limpiado el baño, el gerente de relaciones industriales no le dio la tarjeta y le cerró la puerta.

Tanta fue la impresión que tuvo, que le afectó, le dio una especie de convulsiones al corazón y salió afuera y se cayó. Dijeron que él se estaba haciendo el mañoso. Veinte minutos después murió. ¿Se merece o no se merece que se le haga justicia a esa mujer? Por eso se le mató.

El informante no parece haber estado en el teatro de los acontecimientos, pues ha condensado en un solo hecho los asesinatos de Joel Podestá (gerente de relaciones industriales) y de Galina Ivanova (directora de diseños). Aún así, su testimonio contiene pasajes interesantes para comprender la opinión que tenía el PCP-SL del sindicalismo y su dilema frente al conflicto armado interno. En términos generales, consideraba que «el movimiento obrero no está debilitado. Al contrario, vemos, más bien, cómo se potencian con beligerancia sus reclamos [...] el problema es qué línea le aplicas [...] para que avance más o para que lo contengas [...] Ésa es toda la cuestión».

Sobre los dirigentes sindicales señalaba:

Los mejores cuadros, los hombres que, de alguna u otra manera, a finales del sesenta o del setenta asumieron una posición revolucionaria, en la práctica, se han vuelto reformistas, negadores de su propio discurso en los sindicatos, de tal manera que ahora hasta se atornillan en el Parlamento [...] Los dirigentes de la CGTP son vende- obreros. Lo demuestran los hechos: juegan con las necesidades de la clase. Tal sindicato en huelga, pliego, solución, por un salario justo. Algo así plantean y ésa no es una posición marxista. No podemos exigir un salario justo en un sistema capitalista, porque su ley de ellos te da para que sobrevivas y la ganancia ellos lo van a manejar. Entonces, no podemos pedir un salario justo.

<sup>592</sup> «Asedio textil, lo que está pasando en Tejidos La Unión». *Caretas*, nº 1165, 24 de junio de 1991.

<sup>593</sup> «Habla dirigente senderista». Entrevista de Carmen Rosa Balbi. *Quehacer*, nº 77, mayo-junio de 1992.

¿Qué hacer, entonces? El entrevistado creía firmemente en la aplicación de los puntos contenidos en el manifiesto del CLOTCCC:

La jornada de trabajo debe ser de ocho horas; hay que estar en contra del sobretiempo. ¿Por qué no planteamos que todos los contratados se sindicalicen? Deben entrar en el sindicato porque el sindicato es una escuela de socialismo. Los sindicalizados somos minoría. Y si no levantamos como bandera aglutinar a esa gran mayoría, entonces no estamos haciendo nada por la clase. Otra cuestión es eso de la jubilación [...] hay que jubilarse por años de servicio [...].

Para lograr estos objetivos debían realizar algunas acciones, por ejemplo, los «paros armados», que, en su opinión, eran más eficaces que los paros convocados por la CGTP, los paros cívicos:

Los paros armados son más eficaces. Es algo que te educa. Tú ves quién es tu enemigo. ¿Quiénes son los que convocan a que ataque a la ciudadanía? Todo el gobierno, pero ¿quiénes salen a las calles a patrullar? ¿No son las Fuerzas Armadas, las fuerzas reaccionarias las que apalean a los maestros, las que van y nos sacan de las casas de los pueblos jóvenes? Entonces, ése es nuestro enemigo.

Con respecto a las tomas de fábricas, hace una importante aclaración:

Eran las formas en que el obrero expresaba ese odio fiero que tiene contra los explotadores. No había otra forma. Pero ahora en esta década tenemos partidos políticos que sí te cubren esas necesidades y tú das el salto del sindicato a ese partido y lo asumes con el costo que requiere. Por eso, ahorita una toma de fábrica no corresponde al movimiento obrero; es llevar al inmovilismo a la masa [...] En el caso de la fábrica COPE hubo un análisis de eso en Carretera Central y los obreros entendemos que se saca lecciones [...].

De igual manera, los aniquilamientos selectivos, en su opinión, partían de ciertas consideraciones:

No se aplican indiscriminadamente [...] eso es porque cubren una necesidad de justicia: como mataron al búfalo Pacheco, como mataron a ese que estafaba a los jubilados, Salaverry [...] la gente ve en esto una actitud justiciera. En esos casos en que ha habido aniquilamientos de gente de empresas, han sido casos en que ha habido conflictos en que maltrataban [...] No solamente a ellos: también mataron a Cantoral y a otros dirigentes. Yo me acuerdo de Diamante, en concreto, el Diamante es de mi zona, de la avenida Argentina. Pinasco, que es el dueño de Diamante, hizo una defensa de Chiara. Yo creo que, cuando me muera, el patrón nunca me va a defender, porque él pertenece a otra clase. Los perros defienden a los perros.

En conclusión, la lucha sindical, como parte de la inevitable revolución, tenía que ser permanente:

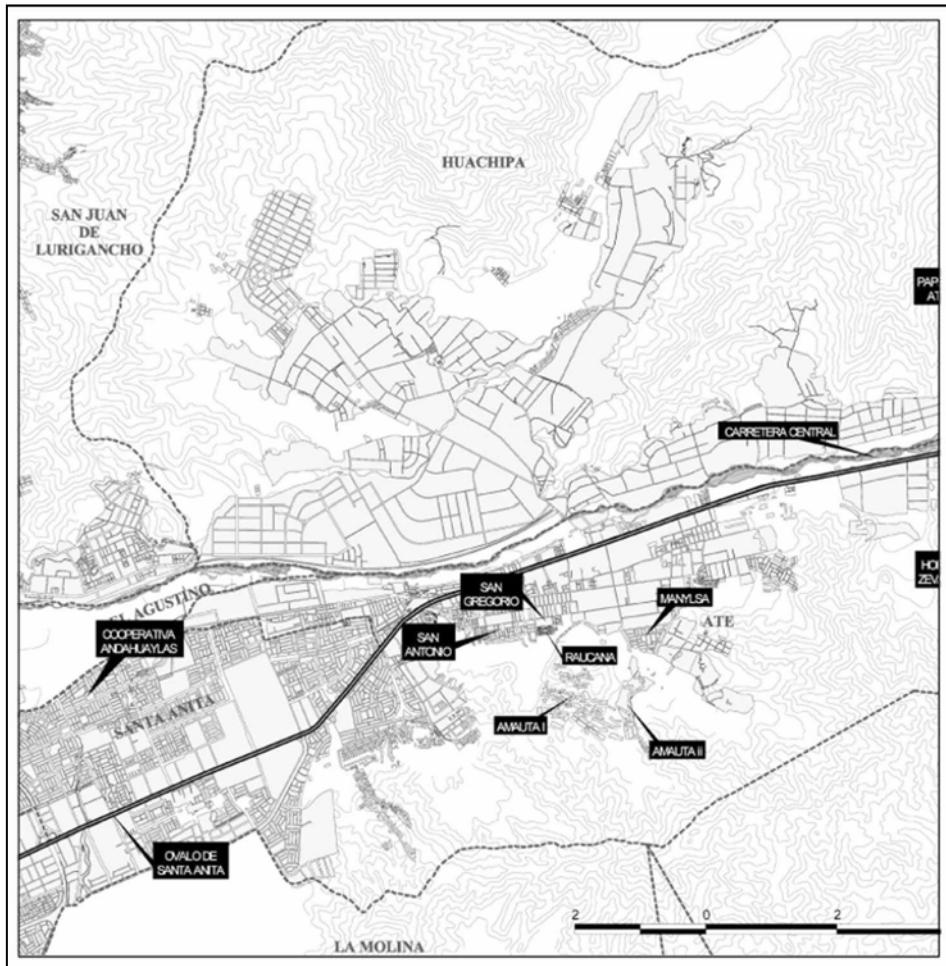
Es en la lucha diaria del sindicato que tú vas entendiendo, pues. Por más sensible, mano blanda o guante blanco que use el patrón, siempre hay oportunidad de desenmascararlo, siempre. Stalin decía, por ejemplo, en las lecciones para el sindicalismo, decía que, cuando un dirigente quiere poner en movimiento a la clase, al sindicato, tiene que analizar todos los problemas y, si todos están solucionados, vaya al baño y rompa el vidrio y reclame por el vidrio. Eso es cierto, pues; tú no puedes estar con las aguas quietas, ese inmovilismo hace mucho daño.

Es difícil creer que esta posición concitara la mínima simpatía entre algunos obreros. Sin embargo así fue, al menos cuando las acciones del PCP-SL parecían encaminadas a ejercer justicia allí donde la intransigencia de los empresarios y la inoperatividad del Estado para canalizar e institucionalizar adecuadamente los conflictos obstaculizaban cualquier posibilidad de negociar las demandas de los trabajadores. Como confesó una obrera textil de la fábrica BOMOSA - perteneciente al complejo La Unión - con respecto al asesinato de Joel Podestá, gerente de relaciones industriales: «Cuando lo mataron, hacía meses que no me sentía tan contenta, porque ese gerente era un explotador [...] Los empresarios creían que los trabajadores eran de Sendero Luminoso [el PCP-SL] y ya nos empezaron a mirar con temor y respeto [...] Cuando la compañera que estaba vinculada al PCP-SL renunció, nos sentimos como huérfanas».

Asimismo, Goyo Moscoso, secretario general de Papelera Atlas y presidente del congreso fundacional del CLOTCC, fue enfático al señalar la imposibilidad de cualquier concertación:

¿En qué forma podemos concertar? ¿A más hambre, más concertación? ¿A más golpiza del gobierno, más concertación? Creemos que no [...] Con los empresarios no es posible coincidir ni para enfrentar la recesión [...] No, no, no podemos nosotros estar transando con el capitalismo en el sentido de conciliar, de concertar. ¿En qué forma nosotros vamos a concertar?<sup>594</sup>

<sup>594</sup> Balbi. Ob. cit.



El PCP-SL pudo verse favorecido por otros factores subjetivos, como la admiración que probablemente despertaban ciertas actitudes, acaso calificadas de heroicas, como la identidad, en la medida en que los trabajadores seguían reconociendo que los subversivos podían estar equivocados, pero tenían el mismo origen étnico y clasista. Vicente Otta manifestaba:

En discusiones con compañeros dirigentes obreros de acá, de la Carretera Central, ellos me dicen: «Bueno, pues, los compañeros dan la vida, se la están jugando, hacen la lucha armada [...] Si no se hace esto, uno está fregado»; y, en segundo lugar, Sendero [el PCP-SL] es el hombre del pueblo, es el trabajador, es el cholo, el mestizo como él [...] Entonces, cuando tú no tienes claro que éste es un proyecto político, antagónico al tuyo, los lazos sociales de comunidad laboral, de identidad racial, son más fuertes y no puedes enfrentarlo. Eso es lo que he encontrado con compañeros dirigentes.<sup>595</sup>

Esta ausencia de claridad y fuerza para deslindar con un proyecto que significaba la destrucción de los sindicatos tuvo profundas consecuencias, no sólo por lo que correspondía a su debilitamiento y a su creciente incapacidad de negociación, sino también por la confusa posición de los trabajadores sobre el origen de las agresiones que sufrían. Al asumir que los subversivos, por muy equivocados que estuviesen, eran parte de ellos, les fue muy difícil interiorizar la opción del crimen contra aquellos que se oponían a sus planes. Por ese motivo, asesinatos como el de Enrique Castilla siempre estuvieron rodeados de dudas sobre sus verdaderos autores. Lo más sorprendente es que, implícitamente, se aceptaba la violencia.

<sup>595</sup> Otta, Vicente. «Violencia y movimiento sindical». En Denis Sulmont y otros. *Violencia y movimiento sindical*. Lima: Red Peruana de Educación Popular y Sindicalismo, 1989.

### 15.5. CONCLUSIONES

La violencia en el ámbito sindical no fue un factor circunscrito al período del conflicto armado interno. En términos generales, siempre estuvo presente y fue un componente importante en la vida de los organismos sindicales y en las relaciones que mantenían con las empresas y el Estado. La cultura radical que ellos generaron puede explicarse por su vinculación con los partidos de izquierda, pero otros factores también contribuyeron, como el comportamiento autoritario del empresariado, vertical y excluyente frente a las decisiones adoptadas en el proceso productivo.

A su vez, el Estado no sólo fue ineficaz en su papel de mediador en los conflictos laborales sino que, muchas veces, dado el desorden imperante en la administración pública, el alto grado de corrupción y la ausencia de un mínimo criterio organizativo, fomentó aún más el desacuerdo y las actitudes extremas.

A pesar de esta dimensión estructural, sin duda alguna debe reconocerse que la violencia impulsada por el PCP-SL adquirió contornos nunca antes vistos: el asesinato sistemático de dirigentes y funcionarios de las empresas, la convocatoria a paros armados y las virulentas tomas de fábricas eran expresiones inéditas que desbordaban la tradición radical enraizada desde los años setenta. Algunos analistas señalan que la estrategia del PCP-SL fue introducir en los sindicatos la lógica de la guerra, rezagando cualquier otra demanda reivindicativa o subordinándola para alimentar los objetivos políticos de la «guerra popular». El resultado fue catastrófico, e incluso allí donde el PCP-SL no logró imponer una presencia significativa, los trabajadores se vieron envueltos en situaciones extremas sin obtener a cambio ningún tipo de beneficio.

Por otro lado, la violencia no era una variable desconocida en la relación empresas-sindicatos, ni siquiera en su expresión más extrema (los asesinatos). La probable actuación de grupos irregulares, los mecanismos de información, así como prácticas de intimidación que en su momento no fueron investigadas, son materias pendientes, y surge la necesidad de conocer este recurso antidemocrático desde el lado de los propietarios. No es un secreto que muchas de estas actividades intimidatorias fueron realizadas por organismos de seguridad privada. La falta de efectividad del Estado para proveer la necesaria seguridad a las unidades productivas fue cubierta por este sistema, así como ocurrió en las minas, donde, ante la presencia subversiva, se respondió con el retiro paulatino de las unidades policiales. Por eso se impone también la necesidad de conocer exactamente cuáles fueron las actividades desarrolladas por la seguridad privada.

Finalmente, no puede excluirse al Estado, y no se hace referencia a su legítimo derecho de recurrir a la violencia para defender el país contra la subversión sino a la actuación parcializada de sus agentes y a su incapacidad para encontrar fórmulas eficaces que canalizaran y resolvieran adecuadamente los conflictos laborales. Estos factores legitimaron el supuesto de los trabajadores según el cual el Estado, por medio de mecanismos legales, hacia recaer sobre sus hombros el peso de la crisis económica o reducía sus posibilidades de beneficios en los períodos de recuperación.

La formalización de las relaciones laborales en un marco de fomento institucional democrático, con reglas claras y generadoras de obligaciones entre las partes comprometidas, está por construirse y resulta indispensable para no correr el peligro de que vuelvan a expresarse tendencias extremas y opuestas a la negociación y al diálogo.

### 16. LA BATALLA POR LAS BARRIADAS DE LIMA: EL CASO DE VILLA EL SALVADOR

Lima y los pueblos jóvenes son el escenario en el cual la batalla final de la guerra popular será definida.<sup>596</sup>

La historia reciente del distrito popular de Villa El Salvador (VES) representa uno de los capítulos más importantes del período del conflicto armado interno vivido en el Perú entre los años 1980 y 2000. VES es un distrito reconocido por su organización, su capacidad de autogestión y la participación de sus pobladores en la toma de decisiones locales. Fue, además, desde su fundación en 1971, un bastión de los principales partidos de izquierda, por lo cual representó para los grupos alzados en armas una suerte de trofeo bastante ansiado.

<sup>596</sup> El Diario, julio de 1992.

Para el PCP-SL, el proyecto de autogestión impulsado por la izquierda en VES representaba el «revisionismo» que había que destruir como parte de su plan de establecimiento de un «nuevo estado». En ese sentido, VES representaba un objetivo político más que militar, aunque el PCP-SL también buscó reclutar jóvenes e imponer su presencia entre las distintas organizaciones y zonas del distrito.

El MRTA también tuvo presencia en VES. Sin embargo, se distinguía del PCP-SL tanto por su forma de relacionarse con las organizaciones populares y la Izquierda Unida (IU) como por su metodología de combate. Por un lado, el MRTA se concebía a sí mismo como el brazo armado de IU (aunque ésta no hubiera apoyado tal tesis) y, por lo tanto, buscaba generar simpatías entre los sectores organizados de la población, en particular con aquellos directamente vinculados con la izquierda. Por otro lado, mientras que el PCP-SL atacó frontalmente a la IU —a la que concebía como un enemigo igual a las autoridades del Estado y a las Fuerzas Armadas y Policiales—, el MRTA se imaginaba como el defensor y representante armado de ésta.

Las fuerzas del orden designaron tempranamente a VES como «zona roja». Como consecuencia de esto, los pobladores soportaron operativos de rastrillaje que a menudo significaban la detención arbitraria de cientos de personas. Cuando la presencia del PCP-SL se hizo más evidente, las Fuerzas Armadas instalaron una base militar en la zona e intentaron establecer alianzas con las autoridades del distrito y con ciertos dirigentes amenazados por los miembros del PCP-SL, con el supuesto fin de protegerlos. Varios dirigentes han señalado, sin embargo, que, en lugar de sentirse protegidos, temían ser objeto de represalias del PCP-SL. Esto demuestra la fuerte presencia que tuvo el PCP-SL en la zona y la sensación de absoluta desprotección que invadía a los pobladores y, sobre todo, a los dirigentes.

El panorama cambió radicalmente en los meses que siguieron a la captura de Abimael Guzmán. El PCP-SL se retrajo y las fuerzas de seguridad tomaron la ofensiva. En ese contexto, se registraron nuevamente detenciones arbitrarias como parte de la estrategia estatal de desarticular lo que quedaba de la organización del PCP-SL. Hacia finales de los años noventa, la violencia dejó de ser un tema de importancia; sin embargo, sus secuelas se manifestaron de distintas formas: se generalizó el miedo a participar en la política, así como la debilidad organizativa y la fragmentación social.

La combinación de una devastadora crisis económica y el colapso de los principales canales de mediación entre el Estado y la sociedad fue la base sobre la cual el PCP-SL incrementó sus actividades en Lima después de 1988. La crisis fiscal del Estado a partir de 1988 erosionó la capacidad del gobierno de responder a las crecientes demandas por vivienda e infraestructura. El debilitamiento de los mecanismos tradicionales de representación de intereses, tales como los partidos políticos y los sindicatos (por débiles que fueran), significó que los sectores con menos recursos tuvieran menos posibilidades de encontrar solución a sus problemas básicos. La combinación de estos factores ayuda a entender por qué el PCP-SL fortaleció su presencia en las barriadas de la capital con más facilidad de la que se imaginaba.

A su vez, factores como el desmoronamiento del Estado, la fuerte crisis de los partidos políticos hacia finales de los años ochenta y el efecto debilitador que esto tuvo sobre la sociedad civil contribuyeron a reducir las capacidades locales de resistencia frente a la arremetida del PCP-SL. La violencia también jugó un papel importantísimo en ese sentido, ya que el miedo y el terror contribuyeron a disuadir a los pobladores de participar en la política y en las organizaciones sociales. El Estado tuvo también una responsabilidad particular en el desarrollo de este proceso, al no poder brindar condiciones mínimas de seguridad ciudadana.

Esta investigación confirma la tesis de que el debilitamiento de la autoridad del Estado y su repliegue en importantes zonas del país, sumado a la endeblez de la sociedad política y civil organizada, contribuyeron a abrir espacios políticos y sociales para que el PCP-SL lograra infiltrarse y actuar en terrenos que no parecían posibles. Sin embargo, aunque es indudable que las condiciones estructurales favorecieron el ingreso de PCP-SL a la capital y su avance en las barriadas limeñas, un análisis estructural no resulta suficiente para entender a cabalidad estos hechos. Tampoco ayuda a comprender las dinámicas de acomodo y resistencia de la sociedad civil local frente al avance del PCP-SL. Por ello, este informe busca analizar, en primer lugar, la estrategia política y militar de PCP-SL, y en segundo lugar, las respuestas populares a su creciente presencia en la capital por medio del examen del caso de VES. El PCP-SL desarrolló estrategias para insertarse en los intersticios de la sociedad y agitar sobre las contradicciones y conflictos existentes para ganar simpatía, apoyo, o simplemente para establecer alianzas contra quienes consideraba sus principales enemigos.

## 16.1. VES: DE LOS ORÍGENES A LA VIOLENCIA

### 16.1.1. Los orígenes de VES: la época velasquista

VES fue fundada en 1971 como respuesta del gobierno militar reformista del general EP Juan Velasco Alvarado (1968-1975) a una invasión de tierras organizada por inmigrantes de origen rural y pobladores de los tugurios y callejones de Lima.<sup>597</sup> La invasión original de terrenos estatales fue organizada por unas doscientas familias, pero en sólo unos días unas 9 mil familias más se unieron a la invasión, que ya desbordaba la propiedad estatal y afectaba terrenos de propiedad privada. El presidente Juan Velasco Alvarado, presionado para demostrar su compromiso con los sectores pobres a los que su régimen prometía beneficiar, decidió reubicar a los invasores en un extenso arenal ubicado a 26 kilómetros al sur de Lima. Miles de familias pobres recibieron tierras en este nuevo asentamiento, al que los pobladores dieron el nombre de Villa El Salvador, y que se convertiría en la vitrina urbana de la revolución velasquista. Los funcionarios del Estado tuvieron la tarea de convertir esta invasión en la primera comunidad urbana planificada en el Perú, para lo cual idearon un diseño espacial compuesto por la agrupación de lotes en manzanas, de manzanas en grupos residenciales y de grupos residenciales en los llamados sectores. Este modelo arquitectónico facilitó la formación de una estructura organizativa compuesta por dirigencias de manzanas, grupos residenciales y sectores, agrupados a su vez en una dirigencia central de toda la comunidad. El conjunto del territorio de la localidad, a su vez, fue dividido en tres espacios o zonas claramente diferenciadas, dedicadas al uso residencial, industrial y agrícola.<sup>598</sup>

Mientras los funcionarios estatales supervisaban las iniciativas comunales a través del Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS), el modelo autogestionario promovido por el régimen velasquista ayudó a nutrir una red dinámica de organizaciones sociales que movilizaron la participación vecinal en beneficio de la comunidad. El más importante fue la Comunidad Urbana Autogestionaria de VES (CUAVES), la organización vecinal central del distrito, que supervisaría el desarrollo de la comunidad y la representaría ante el gobierno y los demás agentes externos.

### 16.1.2. El repliegue del Estado y la crisis de la CUAVES

El derrocamiento del general EP Juan Velasco Alvarado en 1975 marcó un viraje del gobierno militar hacia la derecha y un endurecimiento que se mostró en una creciente actitud represiva hacia los sectores populares. La puesta en marcha de medidas de austeridad motivó masivas manifestaciones populares y dos importantes paros nacionales. En el caso de VES, el gobierno central abandonó su programa de ayuda, lo cual significó la pérdida de recursos estatales para los proyectos diseñados. Aunque VES dependía administrativamente del distrito de Villa María del Triunfo, tampoco recibió los recursos necesarios del gobierno municipal para proporcionar la infraestructura básica a su creciente población.<sup>599</sup>

Frente al abandono del Estado, los pobladores de VES participaron en movilizaciones masivas para demandarle la provisión de sus necesidades básicas. También impulsaron la creación de organizaciones populares para enfrentar los desafíos locales. Por ejemplo, con ayuda de la Iglesia, las mujeres comenzaron a organizarse después de 1979 para satisfacer las necesidades alimentarias de sus familias con los comedores populares. En ese contexto, los emergentes partidos de la llamada nueva izquierda florecieron en el distrito.

El retiro del apoyo estatal tuvo consecuencias negativas a largo plazo para la organización más importante de VES: la CUAVES. Al perder su principal fuente de recursos, muchos de sus proyectos comunales se desmoronaron, aunque también hubo acusaciones de corrupción en el manejo de tales proyectos. Tal fue el caso, por ejemplo, de la caja comunal, donde muchas familias, creyendo en el proyecto de VES y la CUAVES, depositaron —y luego perdieron— sus ahorros. Otro factor de desconcierto fueron las disputas faccionales entre los partidos de izquierda al interior de la CUAVES.<sup>600</sup>

<sup>597</sup> Para una historia más detallada de la creación y trayectoria de Villa El Salvador, véase Zapata (1996) y Azcueta (s.f.). Sobre las mujeres en VES, véase Blondet (1991).

<sup>598</sup> Véase el mapa. Asimismo, sobre el diseño arquitectónico original de VES, véase Romero (1992).

<sup>599</sup> De 105 mil residentes en 1973, la población de VES creció a 168 mil habitantes en 1984.

<sup>600</sup> Véase Burt y Espejo 1995.

A pesar del cambio a un gobierno democrático en 1980 con la elección de Fernando Belaunde Terry (1980-1985), la crisis económica continuaba y las necesidades de la población seguían sin solución. En ese contexto, surgió un movimiento amplio por establecer a VES como un distrito municipal independiente, lo cual fue aprobado por el Congreso Nacional en 1983.

#### 16.1.3. La IU en VES: una hegemonía en disputa

Desde que se formó VES en 1983, IU fue el actor político dominante. Michel Azcueta, quien lideró la campaña para establecer a VES como una municipalidad independiente, fue elegido alcalde en la lista de IU por dos períodos sucesivos, entre 1983 y 1989. Su administración tuvo varios logros importantes. Partiendo de cero, construyó la administración municipal, inicialmente con apoyo voluntario. A su vez, buscó promover el modelo izquierdista de participación popular a través de la formación de nuevas organizaciones sociales, como la Asociación de Pequeños y Micro Empresarios de VES (APEMIVES), una asociación de vendedores ambulantes (FUCOMIVES) y devolviendo el control de los programas municipales a las organizaciones populares. Tal fue el caso, por ejemplo, del programa del vaso de leche, iniciado durante la administración municipal de Alfonso Barrantes Lingán, que pasó a ser administrado por la Federación Popular de Mujeres de VES (FEPMUVES).

Michel Azcueta también consiguió financiamiento de la cooperación internacional para diversos proyectos locales. En colaboración con algunas ONG —varias de las cuales promovieron pequeños talleres productivos y brindaban asistencia a organizaciones populares, como los comedores populares y los comités del vaso de leche— el gobierno municipal diseñó un Plan Integral de Desarrollo que formuló una serie de propuestas para el distrito en ámbitos distintos, como vivienda, industria y educación.<sup>601</sup> El alcalde también obtuvo asistencia estatal e internacional para desarrollar el parque industrial, que para 1990 albergó los talleres productivos de unos doscientos pequeños empresarios.

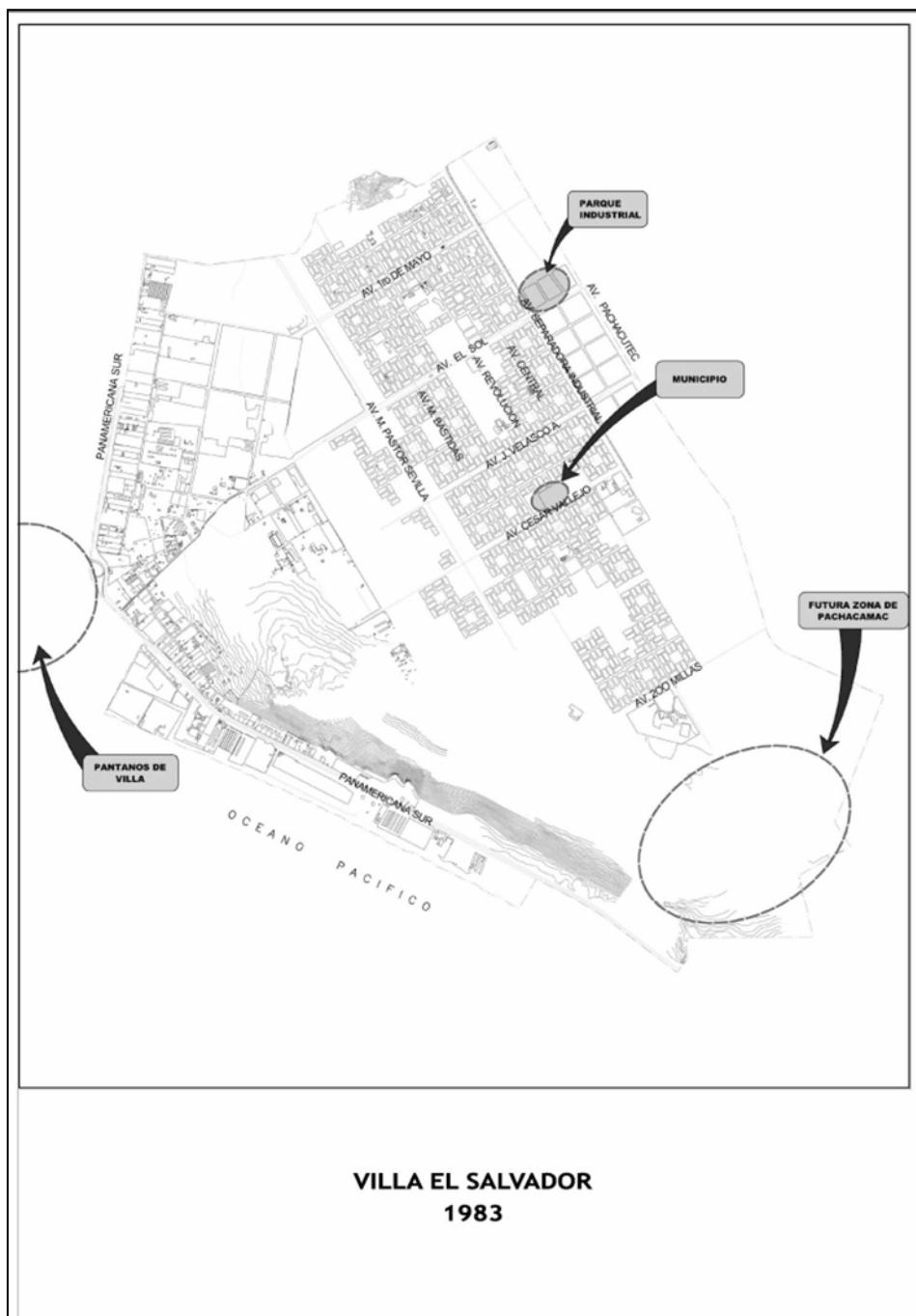
Estos logros ayudaron a fortalecer la hegemonía de la IU en VES, que, de ese modo, continuó siendo un importante bastión de izquierda y una de las principales bases de apoyo para las elecciones presidenciales de 1990. La gestión de la IU en la municipalidad de VES demostró tanto su capacidad de gobernar eficazmente y de ofrecer soluciones concretas a los problemas estructurales de pobreza y desempleo como su compromiso con los ideales de participación popular.

Sin embargo, dicha hegemonía fue disputada por otras organizaciones, lo que permite entender el desarrollo posterior de la violencia en el distrito. Por un lado, existía un grupo de dirigentes dentro de la CUAVES —los llamados «cuavistas»— que se opusieron a la creación del municipio desde un inicio. Estos dirigentes se consideraban de izquierda, pero muchos no participaron en la IU, y había fricciones entre la CUAVES y el municipio por motivos tanto institucionales como políticos. Existían también conflictos dentro de otras organizaciones importantes de VES, como la FEPMUVES y APEMIVES, por ciertos grupos que se sentían aislados o marginados de la toma de decisiones y el manejo de recursos. Asimismo, había competencia política y rivalidades personales en juego, que luego fueron aprovechadas por el PCP-SL.

Otro conflicto se daba entre los diferentes grupos de izquierda de la IU que competía por establecer su hegemonía en las organizaciones de base, a pesar de ser miembros de la misma coalición electoral. Estos conflictos se agudizaron después de las divisiones que sufrió la izquierda entre 1988 y 1989. De particular importancia para VES fue la división inicial del Partido Unificado Mariateguista (PUM), el partido más grande de IU. Un grupo que salió del PUM formó el Partido Mariateguista Revolucionario (PMR), que incluía al ex alcalde Michel Azcueta y a Johnny Rodríguez, quien fue elegido alcalde por IU en VES en 1989. María Elena Moyano, ex presidenta de la FEPMUVES, también salió del PUM para formar parte de la dirección de un pequeño partido de la izquierda cristiana, el Movimiento de Afirmación Socialista (MAS). Tanto el PMR como el MAS se en la IU, pero la realidad en distritos populares como VES fue de fragmentación política y de divisiones que luego fueron aprovechadas por el PCP-SL.

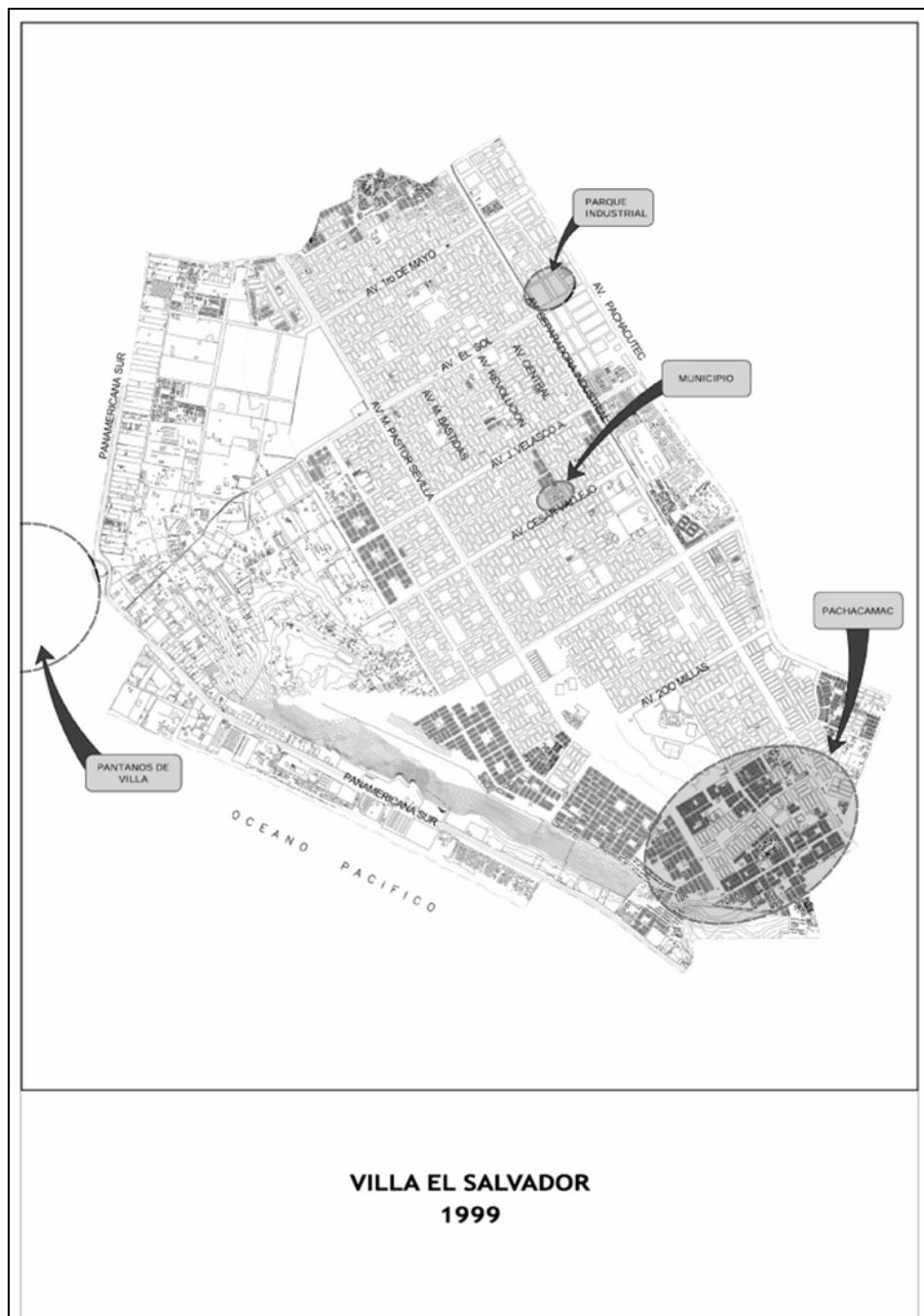
---

<sup>601</sup> Véase el Plan integral de desarrollo de Villa El Salvador. Lima: Desco/Municipalidad de Villa El Salvador, 1986.



Durante la administración municipal de Johnny Rodríguez y María Elena Moyano, que fue elegida teniente alcalde, la situación nacional se había deteriorado seriamente. Aunque los gobiernos municipales siempre operaron con serias limitaciones debido a la aguda centralización de la política peruana, la crisis económica y la crisis fiscal del Estado hacia finales de los años ochenta agravaron aún más la situación. La hiperinflación de 1988-1990 diezmó los presupuestos estatales y municipales. A su vez, VES seguía creciendo, pero la organización social ya no bastaba para resolver los problemas de los habitantes de las nuevas invasiones en la periferia del distrito, y el gobierno municipal carecía de recursos para responder a las demandas de infraestructura básica en esas zonas.<sup>602</sup>

<sup>602</sup> Véanse los mapas de VES en los que se refleja este crecimiento explosivo, que desbordó completamente las previsiones de servicios urbanos y la planificación del uso territorial del diseño original.



En este contexto, el PCP-SL y el MRTA comenzaron a actuar más políticamente en el distrito. El MRTA buscó generar simpatía entre los grupos de izquierda más radicales, particularmente luego de la división de IU en 1989. Por su parte, el PCP-SL se enfrentó a IU, a la vez que intentó construir alianzas con otros grupos que tenían conflictos con la izquierda. En ese sentido, el PCP-SL manipuló rivalidades con astucia, forjando alianzas con dirigentes de la CUAVES, la FEPOMUVES y la APIMIVES, así como con otros sectores que veían a los grupos de izquierda y a los sectores vinculados al municipio con mucho recelo. Establecer alianzas con esos grupos contra un enemigo común —los llamados «revisionistas» de la Municipalidad— le permitió al PCP-SL agudizar las contradicciones dentro del distrito, deslegitimar a IU y destruir el modelo de ciudad alternativa que VES representaba para la izquierda legal peruana. El enfrentamiento con la Municipalidad y los representantes de izquierda encontró un caldo de cultivo ideal en los reclamos de los nuevos asentamientos por servicios como agua, desagüe, luz, pistas, veredas y recojo de basura. Estas demandas, así como los conflictos que generaban, fueron utilizadas por el PCP-SL, que logró desarrollar su presencia, sobre todo en

las zonas nuevas del distrito, producto de invasiones recientes o de la ejecución de planes gubernamentales, como fue el caso de la zona de Pachacamac (véase el mapa).

#### 16.2. SEMBRANDO EL TERRENO: LA ORGANIZACIÓN SUBTERRÁNEA DEL PCP-SL EN VES

Mientras durante buena parte de los años ochenta el PCP-SL concentró su actividad en las zonas rurales del país, hacia finales de esa década realizó un viraje en su estrategia e incorporó a las ciudades —principalmente a la capital— como un complemento de su estrategia rural. Según documentos del PCP-SL, la «guerra popular prolongada» en el campo se había desarrollado a tal punto que ya era hora de preparar el terreno para la «insurrección urbana», que los llevaría a la «toma del poder». Un elemento clave para establecer una cabeza de puente en Lima sería controlar los enormes pueblos jóvenes que rodean la capital y albergan a casi la mitad de su población.

Estratégica y geopolíticamente, VES era un objetivo importante para el PCP-SL. Era el distrito popular más grande del cono sur limeño, una zona fundamental en el plan mayor de cercar Lima y establecer el «equilibrio estratégico». Pero VES era quizás más importante para el PCP-SL en términos políticos. Era una comunidad donde la izquierda democrática estuvo fuertemente arraigada y reconocida internacionalmente por su organización, por lo cual representaba una alternativa política y un obstáculo al desarrollo de la «guerra popular». En la lógica del PCP-SL, la organización pacífica entorpecía la revolución al ofrecer nada más que paletivos para la población; en cambio, solamente la «guerra revolucionaria» producía cambios reales para los peruanos pobres y marginados. Ganar influencia en zonas como VES permitiría al PCP-SL desenmascarar el supuesto «revisionismo» de la izquierda legal y probar que su «guerra popular» representaba la única vía verdadera de cambio social.

El PCP-SL comenzó su actuación en VES a inicios de los años ochenta de manera clandestina. En efecto, se ha registrado un número relativamente pequeño de incursiones armadas en VES entre 1981 y 1986, dirigidas a entidades gubernamentales, la única comisaría del distrito, los bancos y las torres de electricidad. También organizaron actividades ocasionales de agitación y propaganda, como la iluminación de inmensas fogatas con el símbolo de la hoz y el martillo en los cerros que rodean el distrito.

El PCP-SL buscó ganar influencia en el magisterio en barriadas como VES: maestros de escuelas —como fue el caso de Nelly Evans— fueron reclutados a la causa del PCP-SL para que reclutarán, a su vez, a jóvenes. Asimismo, un pequeño núcleo de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos organizó grupos de estudio en VES (y otros pueblos jóvenes) para así reclutar a nuevos militantes. Desde los colegios, buscaban ganar jóvenes estudiantes para su causa. Como señala un dirigente político de VES:

En el caso de los universitarios, es un trabajo bien interesante, porque lo hacían en los barrios, en su propio barrio hacían su trabajo de captación, hacían amigos, haciendo deportes, yendo a las polladas, emborrachándose, así hacen política. No era la clásica, era el contacto uno a uno. Hacían su lista de posibles y cogían ahí y seleccionaban y empezaban así conversando, conversando este discurso bastante coherente de la revolución mundial, donde ellos son la vanguardia, y que la situación, el cambio radical, fácil de legitimar además en un contexto donde hay crisis fuerte, crisis también de los partidos políticos, de la división de la izquierda. Hay todo un contexto muy favorable para ello. Ellos crecieron mucho por el lado de los barrios y otro fue los colegios, los docentes con sus alumnos; ahí hay una relación de autoridad, cierta generación que trabajan los profesores senderistas [del PCP-SL]. (Diciembre 2002)

De 1987 hacia adelante hubo ciertas evidencias de la intención del PCP-SL por establecer una presencia más orgánica en VES. Mientras que las actividades de sabotaje proseguían, había señales de un activismo político más intenso en la base. Por ejemplo, se crearon grupos de estudio y asociaciones culturales que servían para reclutar militantes. También se establecieron academias técnicas, un lugar propicio para reclutar a jóvenes recién egresados del colegio que tenían pocas posibilidades de ingresar a la universidad y buscaban prepararse para un mercado laboral poco prometedor.

A partir de 1988, las actividades de agitación y propaganda del PCP-SL se hicieron más visibles. Por ejemplo, pequeños contingentes de subversivos participaron en marchas de protesta organizadas por grupos vinculados a la IU en VES. Tales actividades y movilizaciones estuvieron dirigidas a cuestionar las medidas económicas del gobierno o los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad. Como señala un dirigente de IU:

En 1986 organizamos una serie de actos culturales en la Plaza de la Solidaridad para concientizar a la población sobre la violación de los derechos humanos de parte de los militares. Una vez armamos una cadena humana por la paz con jóvenes de Villa [El Salvador]. Otra vez pusimos carteles con fotos y historias de personas desaparecidas por los militares en Ayacucho y otras zonas rurales. Un par de senderistas estuvieron ahí dando vueltas durante el día, conversando con la gente y hablando a favor de la guerra popular.<sup>603</sup>

### 16.3. DESTRUYENDO EL MITO: LA POLÍTICA DEL ENFRENTAMIENTO

En 1989, en el marco del anuncio de la llegada al «equilibrio estratégico», el PCP-SL cambió de perfil en VES y buscó disputar la hegemonía a la izquierda para así desenmascarar la supuesta inutilidad de su opción pacífica de cambio social. Esto se unía con su estrategia —ya probada en el campo— de crear vacíos de poder, para así afirmar su presencia. De esta manera, el PCP-SL se enfrentó abiertamente con la izquierda legal en el distrito, intentando desestimular a su liderazgo político y social, amenazando y, en algunos casos, asesinando a quienes se opusieran a su «guerra popular».

Para ello, el PCP-SL agitó una serie de conflictos ya existentes entre diferentes grupos sociales y políticos de VES y las estructuras del poder local, dominadas desde mediados de los años ochenta por la IU. De esta manera, trataban de desestimular a la IU mientras avanzaba su presencia e influencia en el distrito. A su vez, levantaban ciertas demandas populares y pretendían radicalizarlas con el fin de demostrar la supuesta inviabilidad del modelo autogestionario y de cambio social por la vía pacífica, por tratarse de una vía estrechamente relacionada con el «Estado burgués» que, en el proyecto del PCP-SL, había que destruir.

Al radicalizar y exacerbar los conflictos sociales existentes en el distrito, el PCP-SL también intentaba provocar la represión militar —una estrategia que había seguido en el campo y en otras zonas de la capital, como Raucaña— creyendo que una intensificación de la polarización obligaría a la población a tomar posiciones y que, entre ellos y las fuerzas de seguridad, la población se uniría a la «guerra popular».<sup>604</sup> Las entrevistas revelan que el PCP-SL logró generar cierta simpatía y hasta apoyo, sobre todo en aquellas zonas de reciente creación, donde resultaban cruciales las demandas por servicios urbanos. Sin embargo, el grueso de la población miraba a esta organización a la distancia y con cierto temor. El PCP-SL quiso imponer violentamente sus métodos y liderazgo, pero su autoritarismo extremo finalmente minó su posibilidad de lograr un verdadero apoyo popular.

#### 16.3.1. El aumento de la violencia en VES

Antes no teníamos claro lo que el PCP-SL quería en Villa [El Salvador]. Pensamos que pudimos de alguna manera coexistir. Pero pronto nos dimos cuenta que el PCP-SL no quería coexistir con nosotros, quería desaparecernos, desaparecer a Villa [El Salvador].<sup>605</sup>

A lo largo de los años 1989 y 1990 el PCP-SL incrementó sus actos de sabotaje y propaganda en el distrito, como la quema de buses, atentados contra las instalaciones de luz y agua, la comisaría y el local del partido de gobierno (Cambio 90). También se registraron asaltos a hospitales en el distrito, presumiblemente para llevar medicinas y otros bienes para atender a sus heridos. Otras acciones se pueden definir como actos de agitación y propaganda: distribución de volantes en mercados y colegios, interceptación de camiones y repartición de los comestibles que llevaban.<sup>606</sup>

A mediados de 1991 se puede reconocer una serie de actos de violencia e intimidación en el marco de la estrategia de crear vacíos de poder. El PCP-SL parecía haber decidido iniciar una campaña para intimidar y eliminar a las autoridades locales en el distrito. El primer acto en ese sentido se registró el 23 de junio de 1991, cuando asesinaron a Alejandro Magno Gómez, prefecto del distrito y miembro de Cambio 90.<sup>607</sup> Las autorida-

<sup>603</sup> Entrevista, agosto de 1993.

<sup>604</sup> Véase el estudio sobre el caso de Raucaña en este tomo.

<sup>605</sup> Entrevista con Gerardo en VES, abril de 1994.

<sup>606</sup> El 24 de enero de 1991, una columna del PCP-SL interceptó un camión cargado con más de trescientas cajas de aceite vegetal que luego repartió en un mercado en VES (Banco de datos de Descos. Ficha 006623). El 10 de abril, miembros del PCP-SL intentaron incitar a la población a saquear un camión que distribuía bebidas gaseosas (Banco de datos de Descos. Ficha 013584).

<sup>607</sup> La República, 23 de junio de 1991.

des locales, particularmente el alcalde Johnny Rodríguez, la teniente alcalde María Elena Moyano y el ex alcalde Michel Azcueta, comenzaron a recibir amenazas de muerte.

En septiembre de 1991 una bomba explotó y destrozó uno de los centros de acopio de la FEPOMUVES, donde la organización almacenaba alimentos que distribuían a los comedores populares. *El Diario*, vocero del PCP-SL, frecuentemente denunciaba al proyecto izquierdista de VES como una farsa «castr[a] la combatividad y el potencial revolucionario de las masas»; en ese contexto, María Elena Moyano acusó públicamente al PCP-SL del atentado. En volantes que se distribuyeron en VES, el PCP-SL negó su responsabilidad y acusó a María Elena Moyano de haber orquestado el atentado para encubrir el mal uso de los recursos de la FEPOMUVES. Ésta respondió inmediatamente negando tener participación alguna en el atentado y reiteró la acusación de que el responsable de éste era el PCP-SL.

Al preguntar a las dirigentes de la FEPOMUVES qué había pasado y si creían que efectivamente el PCP-SL era el responsable del atentado contra el centro de acopio, se hizo evidente que no tenían certeza sobre ello. Normalmente, el PCP-SL nunca rehuyó la responsabilidad de sus actos y atentados (por ejemplo, publicaron artículos reconociendo la autoría del asesinato de María Elena Moyano). Sin embargo, algunos observadores señalan que un grupo vinculado al PCP-SL del sexto sector llevó a cabo el atentado sin autorización de sus superiores. Según una dirigente: «Para mí, personalmente que haya sido el PCP-SL me queda la duda, porque el PCP-SL no lo hubiera hecho, no tenía necesidad de hacerlo, pero [...] si ha sido el PCP-SL, han sido los empíricos, los locales que han querido fregar a alguien de la FEPOMUVES como es a [...] que le tenían bronca».<sup>608</sup>

Otra posibilidad es que los miembros locales del PCP-SL habrían exigido una colaboración de las dirigentes de tal centro de acopio y, debido a que éstas se rehusaron, colocaron una bomba como represalia y como amenaza para obligarlas a colaborar en el futuro. Sin embargo, otros entrevistados afirman que el PCP-SL no fue responsable del atentado y que, efectivamente, en ese centro había malos manejos de las dirigentes.

El PCP-SL tuvo la habilidad de explotar los conflictos y problemas locales, a la vez que azuzaba la suspicacia entre los activistas de base contra los supuestos malos manejos de los dirigentes. La corrupción —nunca confirmada ni probada— frecuentemente fue aceptada como un hecho por un buen sector de la población. Se podría tratar, al fin y a cabo, de una campaña del PCP-SL por desestimular a la FEPOMUVES y, más concretamente, a María Elena Moyano para que, luego de haberla asesinado, pudiesen justificar su muerte al señalar su supuesta corrupción.

Un grupo de dirigentes importantes del PMR y MAS, los dos partidos que gobernaban la Municipalidad, se iban dando cuenta de que el PCP-SL no sólo buscaba infiltrar al distrito y así incrementar su presencia, sino que tenía claras intenciones de descabezar las organizaciones sociales más importantes y destruir el proyecto autogestionario de VES. El atentado contra el centro de acopio de la FEPOMUVES fue importante en ese sentido, como lo señalan las palabras de la desaparecida dirigente María Elena Moyano:

Hasta hace un tiempo yo pensaba que el PCP-SL era un grupo equivocado y que, de alguna manera, intentaba luchar por alguna justicia. Pero cuando mataron al dirigente obrero [Enrique] Castillo [en octubre de 1989], tuvieron todo mi repudio. Sin embargo, yo no me atrevía a condenar esta actitud terrorista del PCP-SL. Ahora han tocado las organizaciones de base, donde están los más pobres. [...] Pretenden socavar este tipo de organizaciones. [...] [Y] o ya no considero al PCP-SL un grupo revolucionario; es solamente un grupo terrorista.<sup>609</sup>

A inicios de 1992 se registra una serie de atentados, asesinatos e intentos de asesinato, supuestamente cometidos por PCP-SL, lo cual correspondería a la creciente presencia del PCP-SL en VES y a su trabajo de base en ciertos sectores del distrito.

El 13 de enero de 1992 una columna de 11 subversivos atacó a tres suboficiales de la Policía Nacional que hacían vigilancia cerca al mercado central del distrito. Un policía murió en el atentado y, a pesar de que los medios de comunicación reportaron la captura de los responsables, el hecho de realizarse un ataque así en el

<sup>608</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

<sup>609</sup> La República, 22 de septiembre de 1991. El primer asesinato de un dirigente del programa del vaso de leche o de los comedores populares fue el de Juana López, dirigente de un comedor popular en Callao, asesinada por el PCP-SL el 31 de agosto de 1991. El 31 de diciembre de 1991 hubo un atentado contra la dirigente de los comedores populares Emma Hilario, de San Juan de Miraflores. María Elena Moyano fue asesinada por el PCP-SL el 15 de febrero de 1992.

corazón de la vida pública local —el mercado central conocido como la Chanchería— infundió mucho temor en la población.<sup>610</sup>

El mismo 13 de enero, un obrero del primer sector fue baleado en la puerta de su domicilio.<sup>611</sup> El 10 de febrero, un anciano vigilante fue asesinado y un cartel con el símbolo de la hoz y el martillo que decía «Así mueren los soplones» fue colocado sobre su cuerpo.<sup>612</sup> Dos días después, Juan Huamán Valle, un dirigente vecinal de 52 años, fue baleado por supuestos integrantes del PCP-SL en la puerta de su casa.<sup>613</sup> La escalada de la violencia era cada vez más evidente. Frente a ello, algunos sectores de la dirigencia izquierdista tomaron la decisión de armarse para proteger sus vidas. De hecho, varios dirigentes comenzaron a dormir fuera de sus casas y a tomar otras precauciones.

#### 16.4. LA RESISTENCIA LOCAL: UNA LUCHA DESIGUAL

Luego del atentado contra el centro de acopio, en una entrevista en *La República*, María Elena Moyano afirmó que las organizaciones de mujeres de VES resistirían al PCP-SL y que ella promovería la creación de rondas urbanas para combatir su presencia. María Elena Moyano explicó que serían rondas autónomas, sin relación alguna con las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, pues el pueblo no confiaba en estas instituciones. Sin embargo, los esfuerzos iniciales por organizar rondas se desarmaron luego de que el PCP-SL visitara a los organizadores, casa por casa, amenazando y advirtiéndole de que desistan de organizarlas, pues ellos se encargarían de los problemas de la delincuencia y la droga. Según un activista de derechos humanos del distrito:

Yo me enteré sobre las amenazas a las rondas por casualidad. Estaba tratando de organizar comités de derechos humanos en los grupos residenciales y en las conversaciones que iba teniendo con los dirigentes me di cuenta de que el PCP-SL había visitado a los líderes de las rondas y les decía que no se preocupen, que ellos se iban a responsabilizar por el problema de la delincuencia.<sup>614</sup>

A finales de 1991 el alcalde Johnny Rodríguez intentó crear un frente amplio contra el PCP-SL desde la Municipalidad. Se fundó la Mesa por la Paz y el Desarrollo, que pretendió ser un espacio de concertación entre las organizaciones populares, los grupos de derechos humanos, la Iglesia Católica y el gobierno municipal. El objetivo de la Mesa por la Paz y el Desarrollo era proponer alternativas para responder a los problemas sociales de VES y detener la creciente influencia del PCP-SL en la comunidad. A pesar de sus buenas intenciones, las estrategias de la Mesa no resultaron suficientes para enfrentar un enemigo dispuesto a utilizar la violencia para conseguir sus objetivos.

#### 16.5. LA LUCHA POR EL PARQUE INDUSTRIAL

El 9 de febrero de 1992 marcó un momento decisivo en VES. Se llevaron a cabo elecciones en la APEMIVES y un microempresario de la zona, Máximo Huarcaya, fue elegido presidente, supuestamente con el respaldo del PCP-SL. Algunos miembros de la Mesa por la Paz y Desarrollo, incluyendo a María Elena Moyano, intentaron prevenir su elección al tratar de convencer a los distintos partidos de izquierda de respaldar a un candidato único en las elecciones. Sin embargo, la reciente historia de las divisiones había marcado profundamente las relaciones entre los distintos partidos de izquierda en VES y no llegaron a un acuerdo para apoyar un candidato único. Con la izquierda dividida, Máximo Huarcaya pudo ganar la elección.

La APEMIVES era una de las instituciones que conformaban la Autoridad Autónoma (AA), el cuerpo rector del parque industrial de VES. Los otros actores que participaban en la AA eran el alcalde distrital, un representante del gobierno central, uno de la industria privada y el presidente de la CUAVES. Los conflictos desatados por la administración del Parque Industrial fueron utilizados por el PCP-SL para agitar a los pequeños empresarios y movilizarlos en contra de la AA y, en particular, en contra del alcalde. Algunos de estos conflictos tenían un trasfondo personal y político.

<sup>610</sup> Cronología de Desco. Ficha 015851.

<sup>611</sup> Cronología de Desco. Ficha 015855.

<sup>612</sup> Cronología de Desco. Ficha 016477.

<sup>613</sup> Cronología de Desco. Ficha 016514.

<sup>614</sup> CVR. Entrevista con Arturo, 28 de diciembre de 2002.

En primer lugar, la AA había cedido terrenos a los microempresarios con la condición de que construyeran sus talleres dentro de un plazo fijo. El anuncio de que la AA exigiría la devolución de los lotes cedidos a quienes incumplieran lo establecido generó fuertes críticas entre los pequeños empresarios. Varios de ellos habían sido duramente golpeados por la crisis económica y carecían de recursos para hacerlo.

Máximo Huarcaya lideró un grupo de pequeños empresarios que exigían que nadie fuese expulsado del parque industrial. Éste acusó a la AA de utilizar su poder para asignar los lotes a pequeños empresarios ligados al ex alcalde Michel Azcueta y su partido, el PMR. A su vez, acusó a la AA de falta de transparencia en el manejo de las donaciones internacionales y de un programa de préstamos para microempresarios creado con el apoyo de la cooperación internacional. La AA se defendió argumentando que los libros contables estaban en orden y abiertos para quien quisiera revisarlos. Sin embargo, las acusaciones de corrupción persistían.

Máximo Huarcaya exigió que el control de los recursos del parque industrial fuera transferido exclusivamente a la APEMIVES. Sostuvo que los beneficiarios de las donaciones eran los pequeños empresarios y, por lo tanto, la asociación que los representaba debería manejarlas sin interferencia de las demás instituciones. Este discurso caló entre los pequeños empresarios, sobre todo al agudizarse la crisis económica, pero también mostró la desconfianza que se iba generando en un contexto de crisis económica aguda.<sup>615</sup> El PCP-SL, a su vez, recogió estos argumentos y los manipuló para sus fines,<sup>616</sup> logrando articular la desconfianza de muchos pequeños empresarios ante la AA encargada de administrar el parque industrial.

El testimonio de un dirigente de la Municipalidad en el que recuerda un encuentro que tuvo con un pequeño empresario del parque industrial y dirigente de APEMIVES, que fue señalado como filo-senderista, muestra no sólo el trabajo político del PCP-SL para captar adeptos, sino también cómo algunos dirigentes que se sentían marginados de la estructura de poder local utilizaban una supuesta afiliación con el PCP-SL para afirmar su persona y su poder:

Me dijo: «Mira, nosotros los ayacuchanos, los huancavelicanos, somos los más pobres y el partido nos ha unido, nos ha organizado y nosotros tenemos que ser leales con el partido, porque al final Michel Azcueta nunca nos ha defendido; el único que nos puede defender es el partido y yo tengo que ser leal al partido. Hay otros que se están enriqueciendo, hay otros capitalistas que tienen plata y pueden construir sus terrenos. Nosotros no tenemos plata, yo más bien he venido de una quiebra, yo he tenido mi taller artesanal y, de pronto, me puse a vender hierbas en los mercados, la situación empeoró para mí y, en medio de esa situación así de pobreza en la que había caído, vino el partido y me rescató y el partido hizo algo por mí, y ahora tú vienes a buscarme. Tú no viniste a buscarme, tú no viniste a verme cuando yo estaba jodido, y ahora tú vienes a verme y yo te hablo de igual a igual porque yo soy del partido» [...] [A]sí fue la cosa en el parque industrial como así fue la cosa en todo creo yo con el PCP-SL. El PCP-SL ubicaba bien a las personas, ubicaba cómo pensaba, ubicaba su compromiso hacia determinadas causas, ubicaba también sus grados de pobreza y se presentaba a través de una persona, a través de un cuadro como el que los podía ayudar.<sup>617</sup>

Cuatro días después de la victoria de Máximo Huarcaya hubo una reunión de emergencia en el parque industrial para discutir la situación. María Elena Moyano exigió a Máximo Huarcaya y a Filadelfo Roa, presidente de la CUAVES que apoyó la candidatura de Huarcaya, que firmaran un documento de deslinde con el PCP-SL. Ambos se rehusaron. Según Máximo Huarcaya, consultó con las bases de la APEMIVES, las que votaron en contra de firmar el documento; además, para no firmar el documento, argumentó el temor a las represalias del PCP-SL.<sup>618</sup>

#### 16.5.1. El asesinato de María Elena Moyano

Para los dirigentes cercanos a la Municipalidad, esto fue la evidencia de una relación de los dirigentes de APEMIVES y CUAVES con el PCP-SL. María Elena Moyano decidió que había llegado el momento de desafiarlos abiertamente. El PCP-SL había decretado un «paro armado» en Lima para el día siguiente, 14 de febrero de 1992, y María Elena Moyano planteó que VES y sus organizaciones debían protestar contra dicho paro mediante una manifestación pública denominada la «Marcha por la paz». Muchos activistas declinaron participar por

<sup>615</sup> Delpino (1991) se refiere a este discurso como «la ideología del asistido».

<sup>616</sup> Véase SASE-Instituto Apoyo (1993).

<sup>617</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

<sup>618</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

temor al PCP-SL. A su vez, otros grupos de izquierda también se rehusaron a participar aludiendo la necesidad de mantener sus propios perfiles en el distrito, lo que reflejaba otra vez la división de la izquierda.<sup>619</sup> La marcha se realizó, pero sólo participaron unas cincuenta personas portando banderas blancas como símbolo de la paz.

Ese mismo día, un paquete de quinientos gramos de dinamita fue colocado en la puerta de la casa del ex alcalde del distrito, Michel Azcueta.<sup>620</sup> No hubo heridos ni muertos pero el mensaje era claro: el PCP-SL tenía a la dirigencia de VES en la mira. Efectivamente, al día siguiente, 15 de febrero de 1992, un comando de aniquilamiento del PCP-SL asesinó a María Elena Moyano a balazos en una pollada en el grupo 23 del primer sector del distrito. Después de matarla, llevaron su cuerpo a la puerta del local comunal y lo destrozaron detonando una carga explosiva de unos cinco kilos de dinamita.

María Elena Moyano había sido invitada a la pollada varios días antes. Según el recuerdo de sus amigos y colegas, la señora que le hizo llegar la invitación insistía en que no dejara de asistir a la pollada. El día del asesinato había ido a la playa con sus dos hijos y un sobrino y, antes de regresar a casa, decidió asistir un momento a la pollada. Delante de sus hijos, el comando de aniquilamiento del PCP-SL baleó a su guarda espaldas (un policía) y luego la emprendió contra ella.

Durante los días siguientes, circularon por todo el distrito volantes del PCP-SL que reivindicaban la autoría del atentado y justificaban la muerte de María Elena Moyano acusándola de «corrupción», «favoritismo» y de ser una «soplona».

Al hablar de la muerte de María Elena Moyano, muchos hacen alusión a una muerte anunciada. Efectivamente, enfrentar de modo directo al PCP-SL cuando sus acciones estaban en pleno auge en toda Lima resultaba muy peligroso. ¿Cómo se llegó a tal situación?

A partir del atentado contra el centro de acopio a mediados de 1991, María Elena Moyano libró una batalla directa y abierta en contra del PCP-SL. Ella demostró su indignación por los atentados contra dos dirigentes populares —el asesinato de una dirigente del vaso de leche del Callao, Juana López, el 31 de agosto de 1991, y un atentado contra Emma Hilario, dirigenta de los comedores populares en San Juan de Miraflores— y, en particular, en contra de la organización que ayudó a construir, la FEPOMUVES.

María Elena Moyano comenzó a denunciar al PCP-SL públicamente en los medios de comunicación masivos. Había respondido a los ataques hacia su persona publicados en el periódico del PCP-SL, *El Diario*, hacia finales de 1990, pero el atentado contra el centro de acopio —y la acusación del PCP-SL de que ella misma fuese la responsable— la llevó a asumir cada vez más una actitud de enfrentamiento con dicha organización. En las mismas palabras de María Elena Moyano:

Hace un año, *El Diario* atacó a la Federación de Mujeres y también a mí. Decían que somos un colchón del sistema y que no reivindicamos ni revaloramos a la mujer, porque ésta se emancipa sólo con la guerra. Que somos asistentistas. Que yo soy una revisionista y estoy manipulando a las mujeres. Han tomado fotos de La Casa de la Mujer [el local de la FEPOMUVES] y las han publicado. Es una amenaza permanente. Me parece que su primer objetivo ha sido desestimular a la Federación de Mujeres, para luego golpear. Creo que es parte de su táctica. Nosotros les respondimos hace un año [...] Si yo tengo el coraje es porque las mujeres de la Federación me lo han dado. El mismo día que pusieron la bomba en nuestro local, nos reunimos. Reaccionamos rápidamente. A mí, eso me dio fuerza y valor. Ahí las mujeres acordaron rechazar y repudiar al PCP-SL. La asamblea metropolitana de comedores también ha acordado una movilización, tomando el ejemplo de Villa El Salvador han decidido levantar dos consignas: contra el hambre y contra el terror.<sup>621</sup>

<sup>619</sup> Citando las palabras de Michel Azcueta en una carta abierta publicada a dos días de la muerte de María Elena Moyano: «Llevamos más de una semana María Elena [Moyano], Yoni [Rodríguez], [José] Polo y yo hablando claro sobre las intenciones del PCP-SL en Villa El Salvador y sobre las amenazas continuas —lamentablemente confirmadas— contra nuestras vidas. Lo hemos hecho público una y otra vez por todos los medios posibles. Nadie dijo nada. Al contrario, y lo digo sin ningún tipo de odio personal sino pensando en el futuro, el mismo domingo, a la mañana, María Elena [Moyano] pidió al PUM que apoyara una acción unitaria en el Parque Industrial, ante la evaluación de los planes del PCP-SL. ¿Cuál fue la evaluación del PUM? “No, pues tenemos que fortalecer nuestro perfil propio”. Respuesta textual dicha a la propia María Elena [Moyano]. Los resultados ya se conocen. [N]i el PUM, ni el PC, ni mucho menos la UDP o el Bloque [Revolucionario] apoyaron la “Marcha por la Paz”, importante acto simbólico en el mismo día del paro». Publicada en Última Hora, 17 de febrero de 1992.

<sup>620</sup> Banco de datos de Desco. Ficha 016599.

<sup>621</sup> Entrevista a María Elena Moyano publicada en *La República* el 22 de septiembre de 1991. Una valiosa colección de entrevistas,

Ella comenzó a aparecer frecuentemente en los noticieros y programas de televisión, donde hizo declaraciones muy fuertes contra el PCP-SL:

Después del atentado [al centro de acopio de la FEPOMUVES], las cámaras ya comienzan a poncharla; entonces, ella era un personaje de la sociedad civil que comenzaba a enfrentarse, ya no solamente era el Ejército sino también era la sociedad quien se ponía enfrente del PCP-SL entonces ahí la televisaban [...] María Elena [Moyano] se vio envuelta en un remolino que ya no sabía como controlarlo.<sup>622</sup>

La prensa escrita la señaló como un modelo de dirigente popular que combatía al PCP-SL; a finales de 1991, el periódico *La República* la nombró «Personaje del año», mientras la revista semanal *Caretas* la declaró «Madre Coraje» en el número de fin de año. No obstante, María Elena Moyano estaba peligrosamente sola frente a la fuerza de un grupo armado obsesionado por aparentar una situación de equilibrio estratégico en su lucha contra el Estado y de imponer su control sobre las organizaciones sociales de VES.

#### 16.5.2. Ejemplo de fortaleza

Otro elemento importante es cómo la propia María Elena Moyano interpretó su situación. Como dirigente, ella sentía la necesidad de ser un ejemplo de fortaleza y liderazgo a fin de que las demás dirigentes de la FEPOMUVES no se retrajeran por el miedo. El telón de fondo de esta situación fue la creciente presencia del PCP-SL en VES y, en particular, en los comedores populares y comités de vaso de leche que formaban la base social de la FEPOMUVES. El PCP-SL había comenzado a actuar como un fiscalizador de las dirigentes de la organización, algo visto con buenos ojos por muchas activistas de base debido a la debilidad de los mecanismos de control de los recursos y las donaciones dentro de las organizaciones femeninas. Como comentó una dirigente de la FEPOMUVES que coordinaba una de las centrales del vaso de leche: «Yo era dirigente de la central y encapuchados [los subversivos] iban a los comités del vaso de leche a destaparles las ollas. ¿Esto es lo que sirven? ¿Esto es lo que dan? ¿Cuánto dan?» O sea, un carácter de fiscalización.<sup>623</sup>

A su vez, María Elena Moyano estaba convencida de que, como conocía a los cuadros locales del PCP-SL, no corría peligro de que la maten. Esto está íntimamente vinculado con su certeza de que habría que pelear con el PCP-SL en el terreno político, no el militar. Esto lo señaló con sus propias palabras:

La derrota del PCP-SL tiene que ser política e ideológica. Ellos no hacen solamente una lucha militar. Frente a una propuesta política del PCP-SL, tiene que nacer una alternativa distinta. Por eso, yo digo que hay que exigir a las fuerzas de izquierda. Así lo hicimos las mujeres: antes de que se rompa la izquierda nos acercamos, inútilmente, a [Alfonso] Barrantes, a [Javier] Diez Canseco [del PUM] y a [Manuel] Dammert [del PCR]. Los tres nos trataron mal. Se dividió la izquierda y ahí están las consecuencias. El país necesita esa unidad.<sup>624</sup>

Otro aspecto poco señalado por los medios de comunicación y otros observadores es que era una mujer involucrada en la política y que tenía claras responsabilidades y anhelos de liderazgo. Cuando se integró al MAS, pasó a formar parte de su consejo directivo y lo hizo pensando que era uno de los partidos mejor situados para volver a construir la unidad de la izquierda.<sup>625</sup> Había sido elegida teniente alcaldesa de VES en 1989 y aspiraba a la alcaldía en 1992. Según varios entrevistados cercanos a ella, su actuación frente al PCP-SL tenía mucho que ver con la campaña electoral que se acercaba. Uno de sus íntimos amigos ligados al gobierno municipal relata que:

Ella estaba ya haciendo campaña para levantar su perfil para las elecciones municipales [de 1992]. La lucha contra el PCP-SL le permitía levantar su perfil [...] Pensó que la lucha [con el PCP-SL] era sólo política. Le dijimos que no, que también se trataba de una lucha de otro nivel, de un nivel militar, y que no se podía enfrentarlos sólo a nivel político [...] Ella todavía estaba confundida qué cosa era PCP-SL, era guerrilla revolucionaria o qué, y eso la llevó a la respuesta equivocada. El PCP-SL era un grupo terrorista. Lo más lógico era una alianza con la policía.<sup>626</sup>

palabras escritas y poemas de María Elena Moyano fue hecha por Diana Miloslavich Tupac (1993).

<sup>622</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

<sup>623</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

<sup>624</sup> Entrevista a María Elena Moyano publicada en *La República* el 22 de septiembre de 1991.

<sup>625</sup> CVR. Entrevista con Rolando Ames, diciembre de 2002.

<sup>626</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

### 16.5.3. ¿Aliarse con el Estado en contra del PCP-SL?

Existían, pues, ciertas tensiones entre los dirigentes más importantes de VES sobre la necesidad de construir una alianza con la Policía para poder hacer frente al PCP-SL en el distrito. Según un dirigente nacional importante del MAS, María Elena Moyano tenía cierto recelo frente a la estrategia que venían desarrollando desde el municipio a pesar de ser ella también autoridad municipal. No estaba de acuerdo con establecer una alianza con la Policía. Según aquel dirigente, en una reunión Moyano les dijo: «Ustedes pueden recurrir al sistema de seguridad del Estado, pero eso es mal visto por la población. No es que sea del PCP-SL, pero el PCP-SL está en la base y se habla de otra manera. Una cosa así sería para que nos acusen de que preferimos los de arriba, los militares. Ustedes en el poder ponen en riesgo nuestro trabajo en la base y a nosotros mismos». <sup>627</sup>

Estas tensiones y discusiones acerca de la posibilidad y necesidad de una alianza con el Estado frente a la violencia del PCP-SL ilustran que las cosas en VES habían llegado a una situación límite. Dirigentes como María Elena Moyano se encontraban solas frente a un grupo dispuesto a utilizar la violencia en contra de quienes consideraban sus enemigos.

Sin embargo, María Elena Moyano seguía denunciando al PCP-SL públicamente. A su vez, había comenzado la presión del Ejército para coordinar sus acciones en el distrito con el municipio y con dirigentes populares como Moyano que se oponían al PCP-SL. El alcalde en ese entonces, Johnny Rodríguez, menciona que, cuando el Ejército empezó a trabajar con más fuerza en el distrito a partir de 1991, lo buscaron para coordinar acciones. Oficiales del Ejército también se habían acercado a Moyano para que los acompañe en sus acciones cívicas en las zonas más pobres de VES, aparentemente para darles mayor legitimidad, pero ella se negó a participar.<sup>628</sup> Como señaló un colega de VES del MAS:

«[E]l Ejército estaba haciendo en esos tiempos campaña de repartición de alimentos, queriendo cambiar su imagen, ya no iban a reprimir sino iban a los asentamientos humanos y repartían alimentos, entonces le pedían a María Elena que vaya y acompañe esas caravanas, esas campañas de apoyo hacia las personas pobres y ahí ella se resistió, no lo aceptó». <sup>629</sup>

María Elena Moyano trató de trazar una línea muy fina tanto en contra del PCP-SL como de una forma de presencia estatal que violaba los derechos humanos y no respondía cabalmente a las necesidades básicas de la población. Pero en esa época resultaba muy difícil mantener la neutralidad y, a su vez, denunciar a ambos lados.

### 16.5.4. Respuestas a la muerte de María Elena Moyano: entre la indignación y el miedo

En tiempos tan difíciles como esos, la gente cree que todos roban, todos, incluso dirigentes populares como María Elena [Moyano]. (Dirigente de la FEPOMUVES, marzo de 1994)

Luego de la muerte de María Elena Moyano, hubo una procesión funeraria masiva en VES que fue señalada por muchos como muestra del rechazo popular al PCP-SL. Numerosos dirigentes indignados por el brutal asesinato de Moyano participaron en el acto, a pesar del clima de miedo y terror que se acrecentaba en VES.

Sin embargo, numerosos observadores señalaron también que la presencia de dirigentes y pobladores de VES fue reducida y que la mayoría de los participantes llegaron de fuera; de hecho, varias personalidades y dirigentes nacionales se hicieron presentes, incluyendo el ex presidente Fernando Belaunde Terry. Durante los días y semanas posteriores, se hizo más que evidente que el objetivo principal del PCP-SL al asesinar a Moyano había sido logrado: generar miedo e inhibir cualquier acto de resistencia en VES (y en el país en general) ante su supuesto «equilibrio estratégico». Las dirigentes de FEPOMUVES se repliegaron por presión de sus

<sup>627</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

<sup>628</sup> «Si el pueblo no ha respondido hasta ahora [al PCP-SL] es porque no hay confianza. ¡Se han violado tantos derechos humanos! Se ha asesinado a jóvenes, se ha hecho desaparecer a jóvenes. Ahí tenemos el caso ocurrido en Villa El Salvador, el de la desaparición de un joven estudiante [Ernesto Castillo Páez, estudiante de la Facultad de Sociología de la Universidad Católica, quien desapareció luego de ser detenido por un patrullero de la Policía en el segundo sector de Villa El Salvador el 27 de octubre de 1990]. Entonces, el pueblo no ha podido responder porque adónde va a ir, si no hay confianza en este Estado ni en sus Fuerzas Armadas». María Elena Moyano, citada en Miloslavich Túpac (1993: 59).

<sup>629</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

familias y por miedo de ser las próximas víctimas. Y frente a ese repliegue, dirigentes aparentemente cercanas al PCP-SL tomaron las riendas de la organización femenina.

Los testimonios recogidos sugieren dos interpretaciones y reacciones que no son necesariamente contradictorias, sino que muestran la complejidad de la situación. Por un lado, el asesinato de María Elena Moyano generó rechazo entre los dirigentes nacionales y locales que ya habían definido una posición en contra del PCP-SL y sus actos violentos. También hizo que algunos dirigentes y pobladores que vieron al PCP-SL con cierta simpatía cambiaran de opinión. Un entrevistado afirma, por ejemplo, que su padre, un dirigente sindical de construcción civil que mostraba simpatía por el PCP-SL, cambió de opinión al enterarse del asesinato de María Elena Moyano: «Eso está mal», dijo. «Se han equivocado [...] No es posible que maten al pueblo». <sup>630</sup>

A su vez, sin embargo, algunos sectores en cierto modo aprobaron el «castigo» que María Elena Moyano había recibido del PCP-SL. Las acusaciones de favoritismo político, de corrupción y de haberse alejado de las bases fueron citadas como justificaciones del atentado en su contra. En ese contexto, el trabajo que el PCP-SL venía realizando en las bases de la FEPOMUVES se hizo evidente. Como señala una alta dirigente de la FEPOMUVES en aquella época:

Sentía una desarticulación [en la organización]. Sentía una especie de malestar en algunas bases, de cuestionamiento de María Elena [Moyano] y que ese cuestionamiento después de la muerte de María Elena [Moyano] sale justificado en los panfletos [del PCP-SL] como corrupta, entonces una base cuando hace cuestionamiento de esa manera que ella es corrupta y está haciendo una corrupción, entonces no puedo pensar que fue, que ellos [el PCP-SL] estaban infiltrados en nuestra organización, sería una desestabilidad por ese lado y por otro lado pues creaba un desconcierto entre unas y otras, se creaba un clima de desconcierto de querer alejarse de las cosas. [...] En ese momento, no sentí que esas personas estaban infiltradas y yo pensé que era el miedo, el temor que nos hace sentir y por eso accionamos así, pero no era miedo. Bueno, las dirigentes comenzaron a dudar, de tener desconfianza las unas a las otras porque sentíamos de que cualquiera podía ser [del PCP-SL] y esto llevaba a que nos separáramos. A veces, sentíamos una frustración, una impotencia y en nuestras bases se sentía bastante temor, cerraban los comedores, los comités del vaso de leche, ya no querían apoyar o a veces la dirigente simplemente renunciaba porque sus esposos les decían que no.<sup>631</sup>

El PCP-SL buscó aprovechar la situación de tensión y conflicto en el manejo de las donaciones y se colocó como defensor y agente fiscalizador:

Yo era dirigente de la central [del vaso de leche] y encapuchados [los subversivos] iban a los comités del vaso de leche a destaparles las ollas, «¿esto es lo que sirven?, ¿esto es lo que dan?, ¿cuánto dan?», o sea, un carácter de fiscalización. Yo a mis dirigentes de mi central [...] acordamos poner un papelógrafo grande y digan «cuánto reciben, cuánto reparten a cada grupo y en los comités de base en los que preparan, cuánta avena, cuánta leche diaria», yo les decía «no les cierran [a los subversivos] la puerta, ábranles la puerta y díganle que revisen todas las ollas, que no hay problema, que no tenemos miedo de decir la verdad y de recibir lo que recibimos» y preguntaban por las dirigentes [...] Bueno, si dicen que luchan por el pueblo, qué nos van a hacer a nosotras, si se creen los fiscalizadores aquí está, démosles las cuentas, ábranles las puertas, enséñenles las ollas, enséñenles los víveres, dónde están.<sup>632</sup>

Las acusaciones de corrupción eran aceptadas como verdad aunque no existiera prueba alguna. Para muchos, cuando el PCP-SL decía que sancionaba a dirigentes supuestamente corruptos, era aceptado como una suerte de justicia. El contexto de extrema pobreza alimentaba la desconfianza y la suspicacia hacia los líderes y a quienes tienen acceso a recursos y poder. El PCP-SL buscó exacerbar este clima de sospecha y desconfianza para quebrar la relación entre los dirigentes y sus bases y fragmentar, de esa forma, la organización autónoma de los pobladores.

Poco después de la muerte de María Elena Moyano, la presidenta de la FEPOMUVES, Ester Flores, sufrió un colapso nervioso y salió del país. Según ella, parte de su decisión de alejarse tuvo que ver con la forma en que los medios de comunicación buscaron crearle una imagen de sucesora de María Elena Moyano, identificándola como la que seguiría liderando la resistencia al PCP-SL:

Yo estuve muy desconcertada, muy dolida por la muerte de María Elena [Moyano] por la forma como se llevó y yo sentía que, a pesar de eso, yo continuaba trabajando con mucha dificultad pero continuaba, pero que había

<sup>630</sup> Entrevista, junio de 1994.

<sup>631</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

<sup>632</sup> Ibídem.

una presión muy, muy fuerte de parte de mi familia, psicológicamente mis hijos se traumaron. Los periódicos sensacionalistas tomaron mi nombre y dijeron que yo era la futura [dirigente] que se iba a enfrentar al PCP-SL y que sería la próxima víctima y sacaron un reportaje diciendo que yo públicamente denunciaba al PCP-SL, cosa que nunca lo había hecho, cosa que no lo había hablado con ningún periodista y que yo pedía que se me apoye con seguridad y tales cosas porque ellos me estaban acechando.<sup>633</sup>

Ester Flores también señaló que las fuerzas del orden —lejos de prestarle seguridad como se pretendía— fueron un factor de mayor inseguridad para ella y contribuyeron a su decisión de retirarse del país:

Un día cuando bajé de una reunión hacia mi casa encontré un tanque y dos policías en mi casa y yo no entendía por qué y me dijeron que era simplemente la seguridad, que el Estado había mandado. Mis hijos estaban desesperados y, al ver eso, y creo que el PCP-SL optó por explotar una bomba un poco más allá de mi casa, entonces seguramente ellos creyeron que yo los iba a denunciar o había pedido [protección del Estado] pero no, yo no he pedido, simplemente me lo mandaron y por eso mi padre dijo «qué están haciendo acá, están haciendo crear más problemas en mi casa», y ellos le respondieron que «no tenemos nada que ver» y se plantaron ahí. Entonces, cuando vi en el periódico [...] mi cara y mis [supuestas] declaraciones [en contra del PCP-SL] me quedé paralizada [...] Fueron esos motivos, más que mi crisis emocional [que me llevó a optar] por salir del país al Uruguay.<sup>634</sup>

Muchas dirigentas renunciaron a sus cargos, mientras otras seguían trabajando pero evitaban todo discurso político. En ese sentido, el PCP-SL había logrado un objetivo clave para sus fines: el descabezamiento y la desarticulación de la FEPOMUVES.

En ese contexto de vacío dirigencial, la vicepresidenta, Pilar Anchita, asumió el cargo de presidenta de la organización. Anchita ya había sido señalada públicamente como una persona que tenía simpatía por el PCP-SL pero que no necesariamente era una militante de dicha organización. Según una dirigente de la Federación de Mujeres, a pesar de la cercanía y amistad que antes compartían María Elena Moyano y Pilar Anchita:

Cuando empieza la violencia y María Elena [Moyano] todavía estaba viva, ella [Pilar Anchita] la cuestionaba, ella la cuestionaba completamente y yo no entendía por qué, pensé que eran celos. María Elena [Moyano] me decía que no le hiciera caso, María Elena [Moyano] nunca me dijo, ella me decía simplemente ella lo sabe por qué. Ella [Pilar Anchita] actuó un tiempo acá como una fiscalizadora muy radical y cuando ya María Elena [Moyano] estuvo muy amenazada, ella se alejó de nosotras pero sin embargo accionaba, infundiendo temor, infundiendo una cosa y lo que he visto en ella es el desprecio constante contra María Elena [Moyano], así sin piedad.<sup>635</sup>

Pilar Anchita niega toda afiliación con el grupo maoísta y explica que, debido a su origen ayacuchano y su cuestionamiento a María Elena Moyano y a otras dirigentas por actos de corrupción y clientelismo político, fue acusada de ser subversiva.<sup>636</sup> Estas acusaciones fueron hechas públicas en varios medios de comunicación durante 1992 y 1993. Pilar Anchita fue detenida en 1997 y liberada por falta de pruebas pocos meses después.

#### **16.5.5. Los comedores populares: ¿amortiguadores del sistema o potenciales «bases de apoyo»?**

A finales de los años ochenta, *El Diario* criticaba tajantemente a los comedores populares y al programa del vaso de leche como los «amortiguadores» del sistema dominante, que inhibían la conciencia revolucionaria del pueblo. Según declaró el propio Abimael Guzmán en la llamada «Entrevista del siglo», publicada en *El Diario* en 1988, estas organizaciones «venderí[an] la revolución por un plato de frejoles». Pero a inicios de los años noventa, el PCP-SL cambió su discurso y dijo que no estaba en contra de estas organizaciones sino de los dirigentes corruptos que se habían «vendido». Resulta instructivo comparar dos citas de *El Diario*, una de 1989 y la segunda de 1992, que ilustran este giro:

La denominada autogestión, tesis del más recalcitrante revisionismo, aplicado en nuestro país, específicamente por la IU con el propósito de hacer que las masas no combatan a este Estado terrateniente burocrático y, más bien, se conformen con paliativos dentro del sistema para dizeque solucionar sus problemas. [...] Lo mismo ocurre con los comedores populares y vasos de leche, es decir, hacer que la masa, realizando trabajo gratuito, se conforme con recibir dádivas del centro de ayuda [las ONGD] verdaderas agencias del imperialismo y no luche por sus derechos.<sup>637</sup>

<sup>633</sup> CVR. Entrevista con Ester Flores, 14 de diciembre de 2002.

<sup>634</sup> Ibídem.

<sup>635</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

<sup>636</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

<sup>637</sup> El Diario, n.º 551, 1989.

El PCP no está en contra de los comedores populares, el vaso de leche y los clubes de madres, como malignamente vociferan el genocida vendepatria [Alberto] Fujimori, AP, APRA, IU, MAS, PUM, IS, UDP, MRTA y toda la prensa reaccionaria. Pero sí estamos en contra de aquellos contra revolucionarios que salen en defensa del viejo Estado y su orden de explotación y opresión [...] Estamos en contra de aquellos que trafican con las reivindicaciones populares [...] Estamos en contra de aquellos que quieren hacernos eternamente pobres para eternamente recibir caridad, lástima, ayuda y filantropía de los ricos del país y el extranjero a través del [sic] ONG, los que sólo entregan migajas y desechos de las grandes riquezas que extraen de la sangre y sudor de nuestro pueblo.<sup>638</sup>

De este modo, el PCP-SL no sólo buscaba controlar a la dirigencia de la Federación, sino también ganar simpatizantes entre las bases, aprovechando los conflictos existentes en la organización. Temas tales como los estilos de liderazgo —mayor o menor autoritarismo, marginalización a otros dirigentes, manipulación y clientelismo político, favoritismo— y el manejo de los recursos y de las donaciones recibidas fueron utilizados para ganar espacios y copar dirigencias. En particular, explotaba el tema del manejo de los recursos y la corrupción en organizaciones como la FEPOMUVES, ya que, en general, carecían de mecanismos de control de los recursos y la administración. En general, la literatura sobre comedores populares y otras organizaciones populares tiende a no reconocer estos problemas, pero algunos estudios sugieren que, en el caso de las organizaciones femeninas, existía una debilidad institucional que creaba la oportunidad para que las prácticas de corrupción, favoritismo y clientelismo florecieran.<sup>639</sup> Esto fue indudablemente exacerbado por el contexto de crisis económica, que incrementó las sospechas de aquellos que, como los dirigentes populares, miembros de los gobiernos locales y activistas de las ONG, contaban con acceso a recursos.<sup>640</sup>

#### 16.5.6. Las repercusiones de la muerte de María Elena Moyano en VES

La muerte de María Elena Moyano tuvo fuertes repercusiones en todo el distrito. La Mesa por la Paz y Desarrollo se desarticuló, aunque Johnny Rodríguez y sus aliados cercanos continuaron denunciando al PCP-SL y a los grupos cercanos a ellos dentro de VES. Criticaban en particular a la dirigencia de la CUAVES por su supuesta complicidad con el PCP-SL y por su negativa a denunciar el asesinato de María Elena Moyano.

En una entrevista concedida a la revista *Sí*, el entonces secretario general de la CUAVES, Filadelfo Roa, acusó a Michel Azcueta de ser el responsable de la muerte de María Elena Moyano por haberla manipulado.<sup>641</sup> Esta declaración y otras de la dirigencia de la CUAVES, que criticaban a la autoridad municipal en términos muy parecidos a los utilizados por el PCP-SL, hicieron a muchos sospechar una suerte de alianza entre algunos sectores ligados a la CUAVES y el PCP-SL para enfrentar a la IU y el gobierno municipal.

Esta alianza táctica parecía evidente poco después de la muerte de María Elena Moyano. En marzo de 1992, el comité ejecutivo de la CUAVES y el Comité de Lucha Distrital —un grupo de fachada del PCP-SL— movilizaron a cientos de personas en una protesta contra el gobierno municipal. Exigieron la destitución de Johnny Rodríguez como alcalde «por promover la militarización de Villa El Salvador» (debido a la instalación de una base militar en Pachacamac luego del asesinato de Moyano); también demandaron que se declarara persona no grata a Michel Azcueta. El contingente más grande era de Pachacamac, donde el PCP-SL había afirmado su presencia agitando un conflicto preexistente: la tenencia de terrenos. El PCP-SL no sólo buscó establecer una suerte de «zona liberada» en Pachacámac, sino también buscó copar cargos dirigenciales en los distintos grupos residenciales, sobre todo en las zonas periféricas del distrito, para luego poder infiltrar a la CUAVES y, en general, consolidar su presencia en VES.

#### 16.6. PACHACAMAC: LEVANTANDO LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN

Pachacamac era el cuarto sector de VES (véase el mapa). Una parte de este sector había sido tomada por el gobierno de Fernando Belaunde Terry (1980-1985) para crear una zona urbana distinta al patrón del resto de

<sup>638</sup> El Diario, n.º 620, 1992.

<sup>639</sup> Véase, por ejemplo, a Delpino (1991).

<sup>640</sup> Véanse López Ricci (1993) y Burt y Espejo (1995).

<sup>641</sup> Sí, 6 de abril de 1992.

VES. El gobierno construyó varios conjuntos habitacionales, pero nunca fueron adjudicados y se quedaron abandonados hasta 1989, cuando diferentes grupos movilizaron invasiones para apropiarse de los terrenos.

Según observadores y participantes en este proceso, militantes del PCP-SL estuvieron presentes en estas invasiones, sobre todo en ciertas zonas nuevas y muy pobres de Pachacamac, donde lograron copar dirigencias y crear «comités de apoyo». Pachacamac fue visto por el PCP-SL como una zona de refugio y entrenamiento. De acuerdo con varios entrevistados, los subversivos llegaron a realizar marchas y ejercicios militares en esta zona en la madrugada o hacia el anochecer.

Para extender sus «bases de apoyo», el PCP-SL buscó canalizar las demandas de la población, específicamente el reclamo de los invasores recientes por títulos de propiedad de los terrenos que habían invadido. Con ello, el PCP-SL no sólo ganó simpatía entre los pobladores, sino también logró establecer un importante control sobre éstos, como señala un dirigente político y ex regidor de VES: «Hay un mecanismo de coacción. El que no va a las reuniones y no cumple le declaran en blanco el lote y se van, entonces ahí hay un mecanismo de coacción que es muy eficaz, por ejemplo, en las marchas toman listas, dos o tres faltas y lo sacan del lote, entonces ellos [el PCP-SL] llegan a mantener ese control».<sup>642</sup>

El control ejercido por el PCP-SL en Pachacamac se hizo evidente unos meses más tarde, cuando, por la influencia que ejercían sobre los dirigentes de Pachacamac, y haciendo alianzas con grupos de dirigentes dentro de la CUAVES, logró copar la VI Convención de la CUAVES en agosto de 1992.

La adjudicación de los lotes seguía sin solucionarse cuando ocurrió el asesinato de María Elena Moyano el 15 de febrero de 1992. A raíz de ello, el Ejército estableció una base militar en Pachacamac. Esto despertó el miedo de los pobladores a una represión indiscriminada en su contra, el cual fue aprovechado y azuzado por el PCP-SL. Éste logró convencer a muchos en la zona de que el alcalde habría invitado al Ejército a Pachacamac para expulsarlos de sus terrenos y logró movilizar una marcha masiva a la sede del gobierno municipal, en la cual denunciaban al alcalde y la supuesta militarización de VES. Esta marcha hizo evidente el trabajo político de base realizado por el PCP-SL en Pachacamac. Ante ello, los dirigentes municipales intentaron ir a Pachacamac y retar a PCP-SL, pero fueron atacados a balazos y tuvieron que huir de la zona.

La presencia del Ejército en VES y el mayor despliegue de agentes de seguridad y de inteligencia, así como el avance del PCP-SL y su violencia contra dirigentes de la zona, acrecentó el temor entre la población. Muchos activistas de base comenzaron a alejarse de la vida pública y evitaron participar en cualquier actividad que pudiera comprometerlos. A eso contribuyó también el golpe del 5 de abril de 1992, tras el cual el presidente Alberto Fujimori cerró el Congreso de la República y suspendió la Constitución Política con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Unos días después del 5 de abril, el PCP-SL lanzó una fuerte ofensiva en Lima. Un potente ómnibus-bomba fue lanzado contra la fachada de la Municipalidad de VES, que quedó parcialmente destruida, así como la comisaría, el Centro de Comunicación Popular —una ONG creada por Michel Azcueta para promover la educación popular— y decenas de casas colindantes. Un oficial de la Policía Nacional murió en el atentado y otros resultaron heridos.

#### 16.7. LA BATALLA POR LA CUAVES

La influencia que había logrado tener el PCP-SL en VES era cada vez más evidente, pero el control que ejerció sobre la VI Convención de la CUAVES, realizada a finales de agosto de 1992, sorprendió a todos los observadores.

Tanto el PCP-SL como el MRTA habían realizado actos de presencia durante reuniones de la asamblea general de la CUAVES entre 1989 y 1991 según confirmaron varios entrevistados. Pero la influencia del PCP-SL dentro de la CUAVES no se hizo evidente sino hasta 1991, cuando un sector de dirigentes —muchos de ellos simpatizantes del MRTA— forjaron una alianza táctica con los dirigentes afines al PCP-SL para sacar al secretario general de la organización, Roque Quispe.

---

<sup>642</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

Roque Quispe, un militante de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR), había sido elegido secretario general de la CUAVES con el respaldo de los dirigentes vinculados al PMR, el partido de Michel Azcueta y el alcalde de aquel entonces, Johnny Rodríguez. A pesar de que el MRTA y el PCP-SL se disputaban el control de la CUAVES, primero buscaron apartar a Roque Quispe de su cargo.

Y la manera como lograron hacerlo es bastante instructiva, ya que muestra cómo el PCP-SL se montó sobre las demandas populares para alcanzar sus propios fines. En una asamblea de la CUAVES en 1991, el gobierno municipal presentó una propuesta sobre las prioridades de inversión del impuesto predial, o autoavalúo, que se cobraría aquel año. En esta reunión, los grupos radicales —los «cuavistas», con el apoyo implícito de los dirigentes del MRTA y del PCP-SL— presentaron una moción afirmando que, dada la situación económica, el municipio no debería cobrar el impuesto. Los dirigentes del UNIR y PMR argumentaron que una ley nacional amparaba el cobro del tributo y que la reunión trataba únicamente de decidir las prioridades de inversión de los impuestos recaudados. Además, argumentaron que el impuesto sería escalonado según el tipo de vivienda, lo cual significaba que las familias más pobres pagarían menos impuestos que las familias mejor situadas. Sin embargo, en un contexto de hiperinflación, estancamiento económico y caída real de los salarios, la propuesta de los grupos radicales de no cobrar el impuesto predial se hizo popular entre muchos dirigentes que participaban en la asamblea, gran parte de los cuales no tenían vínculo alguno con los grupos radicales ni con los grupos alzados en armas. La propuesta del no pago al autoavalúo fue aprobada. Los grupos radicales habían logrado cambiar la agenda de la reunión —discutir las prioridades de inversión del autoavalúo— a una que efectivamente desconocía el poder de la Municipalidad.

El alcalde Johnny Rodríguez se reunió con Roque Quispe y acordaron volver a llevar a consulta la propuesta municipal. En la nueva votación se desconoció el voto anterior y se aprobó una escala de pagos mínima. Una semana después, los sectores que encabezaron la propuesta del no pago al autoavalúo, liderados por Filadelfo Roa, subsecretario de la CUAVES, convocaron a una asamblea de dirigentes para destituir a Quispe por haber desconocido una votación de la asamblea. Lograron su fin: mediante votación se destituyó a Roque Quispe de su cargo y Roa asumió el cargo de secretario general de la CUAVES.

Para los dirigentes cercanos a la Municipalidad, este episodio demostró la colusión de Roa y sus aliados con el PCP-SL. Cuando luego del asesinato de María Elena Moyano Roa se rehusó a firmar un documento denunciando su muerte, confirmó para aquellos que había establecido una alianza con el PCP-SL para sus propios fines.

#### 16.7.1. El conflicto CUAVES-Municipio

Para entender cómo la violencia se sobrepuso a conflictos ya existentes dentro de VES, es importante comprender el trasfondo de esta situación; principalmente, el conflicto entre la Municipalidad y la CUAVES, así como entre los grupos de izquierda vinculados con cada institución. Efectivamente, algunos grupos aprovecharon el miedo y consternación por la violencia para avanzar en sus intereses políticos y personales y establecer alianzas con el MRTA y con el PCP-SL para enfrentar a la Municipalidad.

Desde el momento de la creación del gobierno municipal, existían fuertes tensiones entre los dirigentes de izquierda, conocidos como la corriente cuavista, y el sector de izquierda articulado en torno a la figura de Michel Azcueta, que participaba en la IU y que buscó afirmar su poder a través de la Municipalidad.<sup>643</sup>

Cuando se formó el gobierno municipal, los cuavistas temían que éste no respetara la autonomía de la CUAVES y su papel como la principal organización comunal de VES. El primer acto de gobierno de Michel Azcueta al asumir la alcaldía en 1984 fue firmar el acta de compromiso entre la Municipalidad y la CUAVES, la cual estableció el principio de que «ley comunal es ley municipal», estableciendo así —al menos en teoría— que la Municipalidad no sólo respetaría la autonomía de la CUAVES sino que reconocería los acuerdos tomados por esta organización.

Sin embargo, los dirigentes cuavistas sintieron pronto que el gobierno municipal no respetó tal acuerdo y que buscó hegemonizar el poder en el distrito a costa de la organización comunal. Este conflicto tuvo sus raíces

---

<sup>643</sup> Véase Tuesta (1989) para una detallada descripción de la rivalidad entre la CUAVES y el gobierno municipal.

en la misma creación del municipio, el cual fue apoyado por la mayoría de los grupos de izquierda aglutinados en IU, pero rechazado por algunos dirigentes de la CUAVES. Como señalara un alto dirigente de la CUAVES:

Nosotros en la CUAVES nos opusimos a la distritalización de Villa [El Salvador], los cuavistas nunca estuvieron de acuerdo a que Villa El Salvador fuera un distrito [...] porque no queríamos que parte de la estructura del Estado estuviera en nuestras propias casas, porque irrumpía y entorpecía el proceso de desarrollo político. [...] Nosotros el temor que teníamos [al formarse el gobierno municipal] es que nos vaya a sobrepasar, que nos vaya a imponer, que nos vaya a dominar. Entonces, nosotros qué queríamos [...] considerábamos que la comunidad, en su conjunto, con su sabiduría, como la madre de familia tiene dos hijos y a cada hijo le da una diferente especialización para hacer la misma cosa, velar por sus intereses de madre, entonces elige una autoridad municipal para que maneje el eje, para que maneje el presupuesto, pero también elige un dirigente vecinal para que custodie intereses y para que se dé una democracia y para que haya una dinámica constante, pero que esos dos son para que pasen igual, para que se pongan de acuerdo. Uno va poniendo lo legal, lo formal; el otro va poniendo lo popular y todo es fuerza popular [...] [N]inguno de los dos pudiera estar al margen del otro, tomando decisiones de cualquier naturaleza, de cualquier proyecto o programas que hayan acuerdos, ¿no?, para aprovechar los pocos recursos que se puedan tener, aprovechar lo mejor [...] Entonces, ése es el primer acto que se hace con el acta de compromiso [entre el gobierno municipal y la CUAVES]. Lamentablemente, el compañero Michel [Azcueta] no la respetó acá. Sin embargo, fue una carta de presentación para fuera. La publicitó enormemente: «Yo tengo muchos documentos que me han hecho llegar un amigo de afuera donde habla maravillas; sin embargo, acá nunca respetó esa acta y nunca concertó con los dirigentes». Entonces, vino de ahí un enfrentamiento lamentablemente, porque la izquierda se cerró mucho en parte de la estructura del Estado, de la municipalidad, quiso potenciar mucho al municipio y eso debilitó [a la CUAVES].

Había una diferencia conceptual entre quienes se alinearon con la visión de los dirigentes cuavistas, que se opusieron a que la izquierda trabajara desde el Estado buscando hacerlo únicamente desde las organizaciones sociales, y quienes optaron por trabajar dentro del sistema, participando en elecciones y en el gobierno municipal. Pero había también una disputa política por el poder en el distrito que, a través del tiempo, se convirtió en una pelea personal entre los dirigentes máximos de cada sector. Efectivamente, desde mediados de los años ochenta, los cuavistas consideraban que los dirigentes de IU en el Municipio buscaban hegemonizar el espacio político en el distrito a costa de la autonomía de las organizaciones.

Por su lado, los militantes y líderes de IU comenzaron a ver a la CUAVES como una organización conglomerada en el tiempo. Desde el Municipio, la IU apoyó la formación de nuevas organizaciones sociales en VES como la FEPOMUVES, la APEMIVES y la Coordinadora Juvenil. Sus esfuerzos de integrarlos a la CUAVES exacerbaron las tensiones con las cuavistas, para quienes tal propuesta representaba una desfiguración de la organización comunal dirigida a usurpar su espacio político. Para los dirigentes de la IU, la negativa de estos sectores de la CUAVES de incorporar las nuevas organizaciones sociales evidenciaba la poca disposición de esta organización de abrirse a las nuevas demandas de la sociedad.

De esa manera, los conflictos entre la CUAVES y el gobierno municipal sobre cuestiones de poder, proyectos sociales y políticos, manejo de recursos, así como rivalidades políticas y personales, fueron acrecentándose a lo largo de los años ochenta.

#### **16.7.2. El MRTA y el PCP-SL disputan el control de la CUAVES**

En la medida en que el poder de la IU se iba consolidando en el distrito, la brecha entre los dos grupos políticos —los izquierdistas independientes agrupados en la CUAVES y los izquierdistas de la IU—, así como entre las dos instituciones —la CUAVES y el Municipio—, se fue acrecentando. Utilizando esa brecha, los grupos subversivos buscaron establecer alianzas con los sectores radicalizados de la CUAVES, para formar un frente común contra la IU y la Municipalidad.

Según un dirigente cuavista que simpatizaba con el MRTA, los dirigentes de izquierda no vinculados a los partidos políticos se sentían aislados, y cuando el MRTA y el PCP-SL comenzaron a buscarlos, vieron la posibilidad de ganar aliados poderosos en su antigua lucha en contra de la IU y el gobierno municipal; otros sintieron que podían avanzar en sus objetivos personales y políticos con una alianza con esos grupos. Como manifiesta este dirigente:

Los otros dirigentes, los que no tienen partidos entonces, ¿qué hacen allí? Te encuentras con el PCP-SL o te encuentras con el MRTA; son los únicos que te pueden respaldar, te pueden apoyar, que te escuchan, pero sabes

que tú, en algún momento eres un tonto útil, porque a lo mejor te están aprovechando al acercarte pero no para impulsarte a ti como líder salvo que te conquisten y te capten, si no, te están utilizando y, en esos momentos, comienza la lucha entre esos dos por querer copar la CUAVES.<sup>644</sup>

A su vez, sin embargo, hubo dirigentes que efectivamente simpatizaron con el MRTA como afirmó uno de ellos: «Yo mostraba siempre una simpatía por el MRTA, con quien nunca he tenido confrontaciones muy fuertes [...] [Y]o conozco mucha gente que abiertamente podía decir, “bueno pues, yo respaldo esto, por esto”. Son frustraciones históricas que, al final, en un momento dado, con un grupo tal, dices, “con esos puede haber soluciones”». <sup>645</sup>

Una joven que trabajaba cerca de la CUAVES y que militó en el Bloque Popular Revolucionario también contó de su simpatía hacia el MRTA:

Por supuesto, la CUAVES nace como un proyecto socialista en sí, y yo creo que, a diferencia del PCP-SL, el MRTA hizo suyo el proyecto de la CUAVES, el de poder popular, a diferencia del PCP-SL que quiso hegemonizar la CUAVES como un punto de referencia de repente a su trabajo. Al PCP-SL no le importaba si la CUAVES como proyecto seguía, a diferencia del MRTA que sí apostaba por ejercer la CUAVES como el proyecto mismo de ellos y ellos sí participaban en el quehacer diario de la CUAVES, como también lo hacía la gente de Izquierda Unida con el mismo proyecto también, pero de repente las formas que utilizaron fueron distintas porque ya en los años noventa tanto el MRTA como el PCP-SL hacían presencia en las asambleas, ellos entraban a las asambleas encapuchados, repartían, daban su mensaje y yo pienso que fue así que el MRTA respetó la organización siempre, a diferencia del PCP-SL, que sí el PCP-SL atropellaba y pienso que ellos apostaban al proyecto de la CUAVES a diferencia del PCP-SL que no.

Sobre todo yo he admirado el respeto que tuvieron [el MRTA] a la organización, el respeto que tuvieron al espacio vecinal y el apostar también por el proyecto de CUAVES es lo que de repente me ganó la admiración. Porque conocí también mucha gente y compartí de repente en algunos momentos que era gente preparada, no era gente común, no era gente cegada, era gente con la cual tú podías conversar y te abrían de repente la visión de las cosas, no era gente que te imponía su idea, era gente que te escuchaba y que a la vez tú podías compartir un momento de conversación, por eso de repente y como repito la manera como actuaron, si bien es cierto después en el distrito hubo algunos atentados que se les atribuyeron y que no fueron de mi agrado, recuerdo que en esa época en 1991 mataron a un dirigente que se apellidaba... Sosa creo que era, con esas cosas claro yo nunca compartí.<sup>646</sup>

Efectivamente, algunos dirigentes de la CUAVES optaron por formar una suerte de alianza táctica con el PCP-SL y con el MRTA para hacer un frente contra un enemigo común: la izquierda legal que venía manejando el gobierno municipal desde hacía una década. Algunos por pragmatismo y otros por convicción establecieron una alianza bajo el supuesto de que «el enemigo de mi enemigo es mi amigo». El PCP-SL fue hábil —y sumamente pragmático— en canalizar el resentimiento de algunos grupos que podrían promover sus objetivos de largo plazo

#### 16.7.3. La toma de la CUAVES

La VI Convención de la CUAVES, realizada en agosto de 1992, fue copada por el PCP-SL, tal como se demuestra al leer el documento final de esa reunión.<sup>647</sup> Este documento ataca abiertamente a la Municipalidad como parte del «Estado podrido y caduco» y exige su desactivación. Exige además el retiro de las Fuerzas Armadas de VES, las rondas urbanas, las ONG y ciertas empresas privadas, así como la derogación del impuesto predial. Demanda también que toda asistencia técnica y financiera de la cooperación internacional fuese canalizada por la CUAVES, por ser la organización más representativa de la comunidad. De acuerdo con algunos entrevistados, el borrador inicial incluía una lista de nombres de varios dirigentes que debían ser liquidados, pero esta lista no fue incluida en el documento final. Menos de la mitad de los quinientos delegados que normalmente participan en las convenciones de la CUAVES asistieron; algunos no lo hicieron por miedo, mientras que los delegados ligados al PMR, el MAS y el PUM se abstuvieron de participar para no darle legitimidad y argumentaron que el PCP-SL había tomado el control de la CUAVES y que la Convención estaba siendo manipulada por ellos.

<sup>644</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

<sup>645</sup> Ibídem.

<sup>646</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002. Se refiere al asesinato a Andrés Sosa, dirigente del Bloque Popular Revolucionario, supuestamente asesinado por un comando del MRTA el 24 de enero de 1992 en VES.

<sup>647</sup> «Acuerdos de la VI Convención de la CUAVES», mimeo, 30 de agosto de 1992.

Concluida la VI Convención, el gobierno municipal denunció públicamente a la dirigencia de la CUAVES, la acusó de estar coludida con el PCP-SL y rehusó reconocer la legitimidad de la Convención y de la dirigencia de la CUAVES.<sup>648</sup> A su vez, unos cuarenta miembros de base de la CUAVES emitieron un comunicado conjunto en el que señalaban su negativa a reconocer a la dirigencia de la organización comunal y su intención de renovar la organización desde las bases. Eso fue un acto de resistencia importante, ya que el PCP-SL había demostrado, con el asesinato de María Elena Moyano, que estaba dispuesto a matar a quienes se le opusieran.

A pesar de este cuestionamiento a la VI Convención y de que la CUAVES había perdido el papel central que alguna vez jugó en VES, seguía siendo una referencia simbólicamente importante para el distrito. Por ello, el copamiento de la CUAVES y de la VI Convención era una victoria significativa para el PCP-SL, la cual mostraba que había logrado una importante influencia dentro de VES y sus organizaciones. Esto repercutía no sólo dentro de VES sino también a escala nacional, ya que demostraba cómo el PCP-SL iba extendiendo su influencia en las barriadas de Lima y cómo lograba arrebatarle espacio político a la izquierda legal. También demostró que el PCP-SL no buscó liderar organizaciones como la CUAVES, sino simplemente coparlas y destruirlas. Luego de la VI Convención, muchos dirigentes se replegaron por miedo a las represalias del PCP-SL y de las fuerzas del orden.

La VI Convención sucedió paralelamente al auge del PCP-SL en el Parque Industrial. Luego de la elección de Máximo Huarcaya como presidente de la APEMIVES, la cooperación internacional cortó sus programas de asistencia técnica y financiera con el parque. El gobierno también se retiró y dejó que el proyecto colapsara. Sin embargo, el PCP-SL había alcanzado sus objetivos en ambos casos. Demostraron que eran más hábiles en la política de lo que se imaginaban, ya que lograron forjar alianzas con ciertos grupos, lo que les permitía influenciar en ambas organizaciones. Pero tanto en el caso de la CUAVES como la APEMIVES (y la FEPOMUVES), el objetivo del PCP-SL no era tomar el control directo de estas organizaciones, sino infiltrarlas y utilizarlas para sus propios fines: destruir el proyecto izquierdista de autogestión que estas organizaciones representaban, ampliar su influencia en el distrito y, finalmente, provocar la represión militar para obligar a la población a tomar posición en su favor. En su lógica de «profundizar las contradicciones», el PCP-SL buscó agudizar los conflictos sociales y así generar mayor polarización para acelerar el supuesto triunfo de su «guerra popular».

#### 16.8. CAPTURA DE ABIMAELO GUZMÁN Y REPLIEGUE DEL PCP-SL EN VES

El 12 de septiembre de 1992, el líder principal del PCP-SL, Abimael Guzmán, fue arrestado junto con otros altos dirigentes de esa organización. Esta sorpresiva captura produjo un cambio radical en el equilibrio de fuerzas tanto a escala nacional como en los contextos locales. En el caso de VES, el PCP-SL siguió activo por varios meses luego de la captura de Abimael Guzmán. Pero luego de que éste llamara a sus seguidores a desistir de la «lucha armada» y buscar un «acuerdo de paz», las actividades se redujeron drásticamente. El último acto de violencia registrado en el distrito ocurrió el 4 de febrero de 1997 cuando tres supuestos integrantes del PCP-SL hirieron de bala a un miembro de la Policía Nacional.

Durante septiembre de 1992 y finales de 1993, sin embargo, el PCP-SL siguió actuando bajo los mismos patrones previos a la captura de Abimael Guzmán. En particular en el contexto de las elecciones locales de 1993, continuó con su estrategia de crear vacíos de poder al asesinar a dos candidatos a la alcaldía, Rolando Galindo y A. Pantigoso, el 11 y 28 de enero respectivamente.

Rolando Galindo, miembro del PCP Unidad, reemplazó a María Elena Moyano como teniente alcalde de VES luego de su muerte. Un cartel encontrado junto a su cuerpo decía: «¡Abajo las elecciones! ¡Viva el PCP!», lo cual llevó a muchos a sindicar al PCP-SL como autor de su muerte. Sin embargo, algunos entrevistados mostraron dudas al respecto. En el caso de Pantigoso, que fue acribillado en su domicilio junto a su esposa, G. León, podría haberse tratado de un ajuste de cuentas por parte del PCP-SL. Como recuerda un dirigente de VES:

[Pantigoso] era presidente de la Apafa [Asociación de padres de familia] del colegio República de Nicaragua y ahí parece que habían profesores del PCP-SL [...] Él después comienza a criticar a los profesores, a cuestionar, no media las consecuencias y en una ocasión le colgaron un perro muerto en la puerta del colegio [...] A mí no me

<sup>648</sup> Véase el comunicado de prensa emitido por el gobierno municipal publicado en Expreso el 31 de agosto de 1992.

quedó claro si era por candidato o por lo de la Apafa, a mí me parece que era lo segundo porque de ser candidato no se enteraba nadie. Además, no era la primera vez que las cosas las solucionan así.<sup>649</sup>

El asesinato de dos candidatos al gobierno municipal enrareció el clima político en VES. A ello contribuyeron dos ataques a la Policía Nacional perpetrados por el PCP-SL. El 29 de enero, tres subversivos dispararon a un patrullero de la Policía Nacional; el 27 de febrero, decenas de subversivos atacaron la comisaría de VES con ráfagas de ametralladoras y explosivos.

El 17 de junio, el ex alcalde de VES, Michel Azcueta, resultó herido cuando un grupo de aniquilamiento del PCP-SL trató de asesinarlo en la puerta del colegio Fe y Alegría, donde era profesor. Resultaron heridos un policía miembro de su escolta, un amigo de Azcueta y cuatro escolares. Ocurrieron, asimismo, al menos cuatro intentos de asesinato a dirigentes vecinales y autoridades locales por parte de PCP-SL (incluyendo el intento de asesinar al teniente alcalde, César Soplín, el 26 de julio) pero todos fracasaron, una muestra quizás de la creciente dificultad que enfrentaba el grupo maoísta al actuar con su líder en la cárcel, con el Estado a la ofensiva y con el aura de invencibilidad destrozada.

De igual importancia es la creciente evidencia de la poca durabilidad de la presencia del PCP-SL en VES. Con Abimael Guzmán en la cárcel y sus cuadros en repliegue, la naturaleza tentativa y superficial de las alianzas políticas del PCP-SL en VES se mostró con claridad. Al centrar su actuación política en VES en la radicalización de los reclamos populares (como la reivindicación de los títulos de propiedad en Pachacamac, por ejemplo, o el no pago al autoavalúo) y la promoción del enfrentamiento y la polarización, el PCP-SL efectivamente pudo ganar espacios en el ámbito local, identificando los puntos débiles dentro de los contextos específicos y explotándolos en su provecho para establecer alianzas con grupos descontentos, generar simpatía al apoyar demandas locales y agudizar los conflictos preexistentes.

#### 16.9. LAS SECUELAS DE LA VIOLENCIA EN VES

Unos nos trataban de terroristas, otros nos trataron como traidores. El dirigente se refugió en el silencio. (Dirigente de la CUAVES, diciembre de 2002)

Entre 1994 y 2000, la violencia en VES disminuyó considerablemente: sólo hubo unos cuantos episodios de menor importancia. Sin embargo, reflejando las tendencias a escala nacional, se registró la mayor presencia de las Fuerzas Armadas en el distrito a través de rastrellajes y las llamadas acciones cívicas. A su vez, fueron detenidos varios dirigentes y pobladores por sus presuntos vínculos con la subversión.

Muchos de los entrevistados señalaron que una de las secuelas más importantes de la violencia entre 1980 y 2000 fue el efecto desintegrador que tuvo la detención de decenas o quizás cientos de personas y dirigentes por supuestos vínculos con los grupos alzados en armas, lo cual afectó la organización social y política en el distrito. Los testimonios indican varios casos de dirigentes de izquierda que, a pesar de no tener filiación con los grupos subversivos, fueron detenidos y sufrieron largos años de prisión por haber sido falsamente acusados de ser subversivos. De hecho, hay varios casos de personas detenidas y convictas bajo la legislación antiterrorista que luego fueron liberadas por la comisión ad hoc, la cual revisó los casos de supuestos inocentes. Durante estos años, la sensación compartida por casi todos fue que el miedo vivido durante esa época permanecía; a su vez, mucha gente decidió no participar en las organizaciones sociales. Según un dirigente y ex regidor del Municipio:

Yo creo que ha sido, no sé cómo explicártelo, pero ha sido extenuante porque ha terminado agotando a muchos sectores de mi país, no solamente por el accionar del PCP-SL sino muy claramente por lo menos visto del campo popular, quien ha tenido mucha responsabilidad han sido los gobiernos de turno, en el caso de [Alberto] Fujimori más claramente, el interés muy claro de desarticular las organizaciones sociales, de corporativizar, de desarticular las organizaciones políticas y de parte del PCP-SL también muy evidente el hecho de atacar a los dirigentes y buscar que copar las organizaciones para involucrarlas en sus actividades. Me parece que para los sectores populares ha sido bastante extenuante, tanto así que, bueno, primero que las organizaciones se han desarticulado en su gran mayoría, ha habido un buen período y todavía se está en esto de ausencia de liderazgo y también de ausencia de participación. (CVR. Entrevista, diciembre de 2002)

<sup>649</sup> CVR. Entrevista, diciembre de 2002.

Finalmente, los entrevistados declaran que la violencia se ha vuelto un método comúnmente aceptado por los pobladores para solucionar problemas y que se ha ido manifestando en la creciente ola de violencia social (delincuencia común, asaltos, homicidios, etc.). Como señala una dirigente de la FEPOMUVES:

Creo que después de diez años la gente se ha vuelto violenta. Los jóvenes se han vuelto sin esperanzas, violentos, donde todo es solamente crisis para ellos o para la gente. Se ha perdido los valores; antes VES era solidario. Todos los vecinos nos reuníamos para celebrar la Navidad, nos apreciábamos entre los vecinos, nos dábamos la mano entre los vecinos. Ahora no, no les interesa, si tiene que hacerte daño por algo que necesitan, simplemente te lo hacen y esta solidaridad de hace diez años atrás ya se está perdiendo. (CVR. Entrevista, diciembre de 2002)

#### 16.10. CONCLUSIONES

El PCP-SL logró despertar cierta simpatía, sobre todo en las zonas más marginales de VES, y especialmente donde el tejido social y político era relativamente débil, las necesidades básicas muy grandes y los pobladores no encontraban a quién acudir para solucionarlas. Como ocurrió en otras zonas del país, tanto urbanas como rurales, allí donde la presencia del Estado era débil y era incapaz de garantizar la seguridad ciudadana, el PCP-SL se presentó como un justiciero local que castigaba a delincuentes, drogadictos y dirigentes corruptos.

Sin embargo, el PCP-SL no pudo consolidar esta simpatía. La violencia y autoritarismo de los subversivos empezó a infundir mucho temor entre la población. El punto de tensión más grave fue la forma cobarde y brutal en que asesinaron a María Elena Moyano el 15 de febrero de 1992. A su vez, el PCP-SL nunca buscó ofrecer al pueblo alternativas viables a sus problemas y necesidades. De hecho, no mostraba interés en la construcción de un movimiento popular de masas o en encabezar a las organizaciones locales. Al contrario, el PCP-SL operaba bajo su propia lógica político-militar, la cual establecía que, al provocar enfrentamientos y polarizaciones extremas, se aceleraría el colapso del orden estatal vigente. Esta incapacidad para forjar bases sociales más duraderas significó que, con la captura de la alta dirigencia del PCP-SL y la subsiguiente retirada de sus cuadros más preparados, la presencia del PCP-SL en el distrito de VES se desarticulara casi completamente.

Esto último significó también que los grupos que se oponían al PCP-SL dentro de las organizaciones reco-braran fuerza y capacidad para enfrentarse nuevamente con dirigentes que se habían aliado o vinculado con las organizaciones subversivas anteriormente. Éste fue el caso, en especial, de la FEPOMUVES y la Coordinadora Juvenil. El 10 de septiembre de 1993, la FEPOMUVES llevó a cabo una asamblea extraordinaria en medio de gran tensión y temor. Los jóvenes de la Coordinadora Juvenil brindaban seguridad. Algunas dirigentes, lideradas por Donatilda Gamarra, criticaron a la presidenta, Pilar Anchita, y la acusaron de estar coludida con el PCP-SL. Cuando ella se negó a firmar un documento de deslinde con el PCP-SL, los participantes de la asamblea votaron para destituirla del cargo. Gamarra fue elegida como la nueva presidenta de la FEPOMUVES. Con el repliegue del PCP-SL, los problemas anteriores comenzaron a desaparecer. Había nuevos retos para la organización, que incluían los intentos de cerrarla por parte del alcalde elegido en 1993, Jorge Vásquez, quien luego fue arrestado y destituido de su cargo por abuso de autoridad y manipulación política de las donaciones canalizadas por el gobierno fujimorista. No obstante, la época de violencia parecía haber llegado a su fin.

En el caso del parque industrial, la cooperación internacional retiró su apoyo luego de que los conflictos se exacerbaron. Pero, a partir de 1996, cuando Michel Azcueta asumió la alcaldía nuevamente, el parque industrial comenzó a retomar fuerza y hoy en día es un centro de producción y venta importante en Lima.

La CUAVES, sin embargo, aún no supera su desarticulación y pérdida de influencia, hecho reflejado en su deteriorada imagen, así como en la dificultad de reconstrucción de las dirigencias en las manzanas, grupos residenciales y sectores. A la extrema politización e infiltración de las organizaciones subversivas, se sumó la ofensiva de las fuerzas del orden, sobre todo después de la captura de Abimael Guzmán mediante rastrellajes, detenciones arbitrarias de dirigentes y las llamadas acciones cívicas. Importantes dirigentes de la CUAVES como Juan Pecho, anterior secretario general de la organización comunal, fueron arrestados por su supuesta vinculación con los grupos alzados en armas. Eso contribuyó a la desarticulación de la CUAVES y aumentó el miedo de los dirigentes a participar en la vida pública. Pecho, como muchos otros, posteriormente fue declarado inocente de los cargos imputados en su contra; pero el efecto desintegrador que su detención y la de muchos otros dirigentes tuvo sobre la organización social fue inmenso.

## 17. EL PCP-SL Y LA BATALLA POR PUNO

### 17.1. LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS EMPRESAS AGRARIAS

En la visión de Alan García Pérez, Puno aparecía como el caso piloto de la recuperación de la sierra para la democracia. No más «mancha india»; en el trapecio andino —el gran bolsón de atraso y pobreza del sur andino—, el Perú daría la batalla contra la subversión. El propio mandatario, personalmente, pretendía asumir el liderazgo contra los alzados.

Pero no era un asunto sencillo. Asiduo visitante de la región, pues entre el inicio de su campaña electoral a comienzos de 1984 y noviembre de 1986, Alan García Pérez visitó Puno en 18 ocasiones, el presidente conocía bien las complejidades del problema: la red de intereses creados en torno a las empresas asociativas (EEAA), el intrincado trasfondo de las demandas de comunidades y parcialidades, el dinamismo de los gremios campesinos, la presencia de la izquierda marxista y el compromiso de la Iglesia con la lucha comunal. El mismo día en que el régimen se inauguraba, la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP) había presentado un proyecto de ley de reestructuración. Autoridades eclesiásticas del sur habían hecho conocer al gobierno su preocupación por la situación puneña. La comisión parlamentaria encargada de investigar las denuncias de corrupción en la EEAA de Puno seguía sin dar resultados. A comienzos de diciembre, las tomas de Kunurana habían mostrado la ansiedad reinante.

Sobre este tenso panorama, la temporada de lluvias 1985-1986 devino en diluvio. Tras él sobrevinieron los desbordes, la desesperación y, como en 1983, el hambre de tierra, la profusión de actividades y asambleas, los debates sobre el futuro regional. En 1985-1986, por si fuera poco, cayeron los precios de la fibra de alpaca, cuya producción estaba, fundamentalmente, en manos de campesinos. Una avalancha de «pliegos, solicitudes y memoriales» —reportó la FDCP— descendía sobre «las oficinas estatales de Puno y Lima». <sup>650</sup>

Había llegado la hora de enfrentar la reestructuración, pues de otro modo, peligraba el futuro del plan para la sierra sur. Así lo comprendió el Presidente de la República que, a fines de enero de 1986, convocó a Palacio de Gobierno a un grupo de autoridades y profesionales puneños con el fin de discutir los posibles escenarios de afectación de las empresas altiplánicas. Menudearon las objeciones de carácter técnico. Al mandatario le preocupaban más los aspectos políticos. Desde esta perspectiva, no quedaba sino intervenir. Las opiniones se dividieron. Unos, optimistas, pensaban que era el verdadero inicio de la transformación del trapecio andino. Otros, sin negar la urgencia de tomar una decisión, temían que una medida apresurada ocasionase la destrucción de una rica acumulación empresarial.<sup>651</sup>

El 7 de febrero de 1986, los decretos supremos 005 y 006, que daban inicio a la reestructuración, fueron finalmente promulgados. En un plazo de 120 días, una comisión determinaría los montos de tierra que debían revertir al Estado para su posterior adjudicación a las comunidades. Al día siguiente, Alan García Pérez se presentó en Puno, donde fustigó a los dirigentes de la Asamblea Popular Regional —acusándolos de agitar irresponsablemente la necesidad campesina— tanto como a los miembros de su propio partido, insensibles —dijo— ante la grave situación que se vivía en la región.<sup>652</sup> No aclaró, sin embargo, qué porcentaje del 1'741,743 de hectáreas bajo control empresarial habría de pasar a manos comuneras y si las parcialidades o las comunidades no reconocidas tenían también derecho a tierra.

La incertidumbre acrecentó la exasperación. La Empresa Rural de Propiedad Social (ERPS) Kunurana, nuevamente, fue escenario de enfrentamientos entre los grupos en pugna. Ahí, acatando los decretos del 7 de febrero —que dictaminaban que ni las parcelaciones privadas ni las ocupaciones ilegales serían válidas en términos de futuras adjudicaciones—, las comunidades que habían invadido en diciembre del año anterior habían decidido replegarse. Esto no impidió que la vecina comunidad de Macarí fuera objeto de agresión:

La comunidad —relató el párroco de la localidad— había desalojado las tierras de la empresa, como también su campamento sobre esas tierras. Estaba pasteando su ganado en sus propias tierras cerca del pueblo y del salón comunal. A la 1:00 p.m. llegaron a pie desde la central Kunurana unos 120 hombres, 15 a 20 mujeres y 15 a 20 jinetes,

<sup>650</sup> FDCP. «Acuerdos del Tercer Congreso». agosto de 1986.

<sup>651</sup> Entrevista con Walter Aguirre. Puno, 14 de junio de 1993.

<sup>652</sup> «Tomas de tierras en Puno». *Sur*, n.º 92, pp. 8-28.

todos con casco blanco o rojo, caras pintadas de negro o blanco, camuflados con chalinas y pasamontañas, en las manos, hondas, palos, fierros. En primer lugar, fueron a quemar las chozas de paja que habían hecho los comuneros en el rincón ocupado. Después [...] los jinetes se lanzaron pasando a las tierras de la comunidad atropellando y arreando el ganado de los comuneros mientras los otros se acercaban en grupo compacto, lanzando piedras contra los comuneros que defendían su ganado. Fue una batalla atroz entre esa gente y los comuneros que se encontraban en menor número y sin nada entre las manos la mayoría. Entonces, los comuneros tuvieron que refugiarse en el salón comunal que fue totalmente rodeado por los asaltantes y bombardeado furiosamente con piedras.<sup>653</sup>

¿Quiénes eran los agresores? ¿Acaso una versión moderna de las bandas gamonales de los años veinte? ¿O se trataba, más bien, de feudatarios en defensa desesperada de su patrimonio? El hilo de los acontecimientos se pierde en un mar de acusaciones mutuas. Sobre los puntos de vista de los supuestos atacantes algo revelan los volantes que la Federación Nacional de Trabajadores de Propiedad Social (FENATEPS) —la entidad representativa de los trabajadores de las ERPS— distribuyó por aquellos días en Ayaviri: ellos eran las verdaderas víctimas y defensores de la reforma agraria velasquista, «el triunfo histórico más importante y justiciero en toda la vida del país». Contra lo que afirmaban sus calumniadores, a pesar de las adversidades, las empresas —decían— habían hecho progresos importantes: no habían dejado de colaborar con las comunidades y estaban dispuestas al «diálogo fraternal» con miras a ceder «tierras ociosas para los campesinos sin tierra» para que fuesen explotadas en forma comunal —insistían— no para que las parcelen y terminen sirviendo a «ambiciones personales».

No eran los «verdaderos comuneros», entonces, los que estaban contra ellos —continuaba la argumentación— sino los politiqueros, los «curas extranjeros» y su red de «mercenarios a sueldo» que, financiados por «los dólares de las agencias de los socialdemócratas franceses», pretendían destruir sus centros de trabajo. Con sus «sociólogos, ingenieros, pensadores», estos autotitulados «defensores de las comunidades» buscaban enfrentar a los campesinos de la provincia de Melgar. Llamaban, por ello, a los comuneros melgarrinos a buscar un entendimiento al margen de estos «grupos financiados desde el exterior que sólo buscan copar la región de Puno». «Estamos en pie de lucha —afirmaron— no frente a las comunidades campesinas sino en contra de los agitadores oportunistas y electoreros de la gente de izquierda que, después de salir electos, son nuestros enemigos número 1».

Solicitaban, por lo tanto, 1) una «reestructuración concertada» que no implicara desmembramiento o parcelación de la tierra asociativa; 2) la presencia de las Fuerzas Armadas en «las provincias asoladas por el terrorismo y el clima de violencia»; y, finalmente, 3) la intervención de la Fiscalía de la Nación y del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para investigar «los orígenes de los millonarios fondos que manejan los Centros de Investigación Social de procedencia foránea, como el TECIRA que financia toda la propaganda y movilización disociadora y sedicia, para boicotear los buenos propósitos del gobierno burgués».<sup>654</sup>

Unas semanas después, no obstante, la directiva de la Central de Empresas Campesinas (CENEAMP) se ofreció a colaborar.<sup>655</sup> Su nuevo portavoz —el ingeniero Juan Carlos Málaga Arce— procuró reemplazar el tono aguerrido y politizado con uno de corte técnico. «Que ha habido malos manejos —declaró Málaga— totalmente de acuerdo», pero no por ello podía satanizarse al conjunto del sector; las denuncias debían hacerse «con nombre propio» ante el Poder Judicial, buscar una sanción legal antes que amenazar o recurrir a la violencia. Con la asesoría de Málaga, varias empresas elaborarían sus propias propuestas de reestructuración. Éstas, sin desatender el problema social, impedirían la destrucción de aquello que «se había levantado a través de años de esfuerzo y sacrificio».<sup>656</sup>

Sólo a comienzos de mayo de 1986, la comisión reestructuradora designada por el Ejecutivo arribó a Puno encabezada por Gonzalo Bravo Mejía —un funcionario de carrera del Ministerio de Agricultura—. Su labor se realizaría bajo grandes presiones: las del propio Presidente de la República, las de las autoridades agrarias locales, que «como eran ex hacendados tenían contra nosotros una oposición total» y, por supues-

<sup>653</sup> «Relato de los hechos ocurridos en Macarí los días 28 de febrero y 4 de marzo de 1986 tales como los conoce el P. René, párroco» y «Comunicado de solidaridad con la Iglesia de Ayaviri», firmado por los agentes pastorales de la Diócesis de Puno y la Prelatura de Juli. Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de Puno (AVSP de aquí en adelante).

<sup>654</sup> Central de Empresas Campesinas Puno. «A la conciencia nacional». Marzo de 1986.

<sup>655</sup> «Entrevista». Hojas Escritas, n.º 7, pp. 40-43. Véanse también los comunicados de la CENEAMP-Puno. «No al derramamiento de sangre» (26 de abril de 1986) y «¿Puede la democracia permitir un derramamiento de sangre, pudiendo evitarlo?» (30 de mayo de 1986).

<sup>656</sup> Ibídem, p. 42.

to, las de la FDCP y las comunidades que exigían tierras a cualquier costo.<sup>657</sup> La carencia de medios logísticos, su desconocimiento de la realidad puneña y falta de información confiable —casi no existían catastros comunales y muchas empresas se resistían a abrir sus archivos a los interventores— complicarían su tarea aún más. A la larga —habría de confesar Bravo Mejía años después—, «no nos fue posible realizar un proceso realmente técnico, había demasiada impaciencia para aceptar procedimientos inevitablemente prolongados, teníamos que concentrarnos en repartir».<sup>658</sup>

La extrema lentitud con que el proceso de reestructuración venía desenvolviéndose, así como la débil respuesta del gobierno a los desastres naturales que castigaban a Puno, crearon condiciones para actuar. En efecto, cuando el plazo de 120 días dado para completar los estudios de base se cumplía, la comisión Bravo Mejía estaba llegando a Puno. En mayo, tras cuatro meses de lluvias intensas, entre el 30% y el 40% de la superficie cultivada del departamento estaba prácticamente perdido. Las inundaciones habían afectado importantes vías de comunicación, así como a los barrios populares de la capital departamental. Los damnificados sumaban miles. Faltaban alimentos, viviendas y maquinaria para rehabilitar las carreteras. Peor aún, la situación económica comenzaba a dar señales de deterioro. Las posibilidades de emigrar, entretanto, se estrechaban, obligando al poblador rural —como declaró un asistente al Rimanakuy de Puno— «a mirar hacia el campo» como única alternativa.<sup>659</sup>

## 17.2. ANDE ROJO *VERSUS* TRAPECIO ANDINO

La Asamblea Popular Regional de Puno era un «poder popular en ciernes», en tanto que, en las demandas de regionalización, se vislumbraban las «semillas del autogobierno».<sup>660</sup> En ella, el PUM cifraba sus mayores esperanzas. Para apoyar su conducción, la dirección del partido creó una instancia coordinadora integrada por dirigentes de todo el sur andino. La denominaron Ande Rojo como respuesta al Trapecio Andino del PAP. La táctica era «desenmascarar» las intenciones «autoritarias» y «centralistas» del plan aprista; «profundizar el desgaste» del régimen, «jaqueándolo» y «emplazándolo» sin tregua, buscando sobre esa base «determinadas conquistas y reformas políticas» que permitieran «acumular fuerzas en perspectiva estratégica». ¿La alternativa? Un vagamente definido «autogobierno de masas» que se construiría «desde la comunidad campesina hacia arriba», sin latifundios y sin poderes locales gamonales, con una estructura productiva basada en empresas comunales que, con el apoyo técnico necesario, señalarían un «nuevo camino para el desarrollo del agro puneño y nacional».<sup>661</sup>

Las luchas puneñas, ciertamente, no eran producto de la imaginación. Las tomas de Kunurana en diciembre de 1985 fueron seguidas por nuevas movilizaciones. A inicios de abril, se produjo un paro departamental. Con el alcalde Paca Pantigoso a la cabeza, un grupo de dirigentes populares se mantuvo en huelga de hambre por varios días. El gobierno se vio obligado a enviar una comisión negociadora. La oficialización de Puno como región piloto, la reestructuración con participación campesina y el rechazo a la militarización aparecían como demandas principales al lado de los reclamos salariales y las demandas «históricas» de la región: construcción de la hidroeléctrica de San Gabán, inicio de la explotación de los yacimientos auríferos de San Antonio de Poto y asfaltado de la carretera Puno-Moquegua.

Lo que hacía del remoto Puno una noticia nacional, sin embargo, era la combinación de lucha social, desastre natural y repunte subversivo que ahí se presentaba. Solamente durante 1986, hubo en Puno tantas acciones subversivas como durante los cinco años previos. Era, básicamente, una profundización de la campaña del PCP-SL de 1985, enfocada en erradicar la autoridad del campo y desbaratar la propiedad asociativa, en la «eliminación» de los dirigentes apristas y de los símbolos de la «revolución alanista».<sup>662</sup> A mediados de junio, el ataque del PCP-SL a la ERPS Kunurana marcaría un hito en la vida de la provincia de Melgar.

<sup>657</sup> Entrevista. Lima, 29 de julio de 1992. Véase también, Bravo Mejía Muñoz, Gonzalo. «La reestructuración revolucionaria y democrática de las empresas campesinas iniciada en Puno» (manuscrito) en Centro de Documentación del CEPES.

<sup>658</sup> Entrevista con Gonzalo Bravo Mejía. Lima, junio de 1989.

<sup>659</sup> «Rimanakuy Puno: tierra y paz, el pedido de los campesinos». Sur, n.º 100, octubre de 1986, pp. 15-24.

<sup>660</sup> PUM, Frente Regional de Puno. «Documento del partido», abril de 1986.

<sup>661</sup> Ibídem. «Reunión del Ande Rojo». Boletín interno de la Comisión Nacional Campesina del PUM, n.o 3, noviembre de 1985; PUM. «Acuerdos del Ande Rojo» (segunda reunión plenaria), octubre de 1986; y PUM, Comisión Política. «La ley de bases de la regionalización y las tareas de la lucha descentralista». Marzo de 1987.

<sup>662</sup> El comunicado de CORPUNO, «Puno: alto al pro-senderismo», del 7 de julio de 1986, mencionaba siete «mártires apristas víctimas del

Todo comenzó con la detención, cerca de la sede administrativa de esa empresa, de varios camiones repletos de pasajeros que se trasladaban de Macarí al mercado de Ayaviri. Eran alrededor de doscientas personas las que, según los testimonios, fueron obligadas por el PCP-SL a participar en el saqueo de sus instalaciones. Mientras la masa recibía un discurso, siete trabajadores apristas eran asesinados. A la frialdad prosiguió la vesania: a las víctimas les cortaron las orejas, la lengua, a uno le sacaron los ojos, según contaron los que habían visto los cadáveres. Puesta sobre aviso, la Policía de Ayaviri dio alcance al destacamento del PCP-SL en el puente de Chuquibambilla. Se produjo el enfrentamiento. Los subversivos huyeron y dejaron dos bajas.

En respuesta, las Fuerzas Policiales y el Ejército ingresaron a varias comunidades de Azángaro y Melgar y dejaron tras de sí innumerables denuncias de abusos y atropellos. Evitar la implantación del modelo de emergencia aplicado en Ayacucho se convirtió, entonces, en la preocupación prioritaria del movimiento regional puneño expresada en la consigna «paz con justicia social». Regionalización y reestructuración debían ocurrir sin militarización. Era la mejor garantía para cerrar el paso a los alzados en armas.<sup>663</sup>

En julio de 1986 se produjo un nuevo paro departamental. En Ayaviri, entretanto, un gigantesco mitin organizado por la Federación Única de Campesinos de Melgar (FUCAM) volvió a demandar la aceleración de la reestructuración. Con el renovado apoyo de la Iglesia y organizaciones gremiales y profesionales de la capital departamental, el movimiento por la tierra alcanzó un grado apreciable de legitimidad.<sup>664</sup> A la defensiva, el gobierno suspendió la realización del Rimanakuy puneño en dos ocasiones.

En abril, Rómulo León Alegría —el enviado del gobierno a negociar con la Asamblea Regional Popular— aprovechó su presencia en Puno para acusar al PUM de valerse de instituciones como el TECIRA para acceder a fondos de la cooperación internacional. Son 72 centros de investigación —manifestó León Alegría— los que el PUM «utiliza como fachada» para subvencionar «un proselitismo político que ensalza la lucha armada».<sup>665</sup> Otras figuras apristas, simultáneamente, adoptaban un tono conciliador:<sup>666</sup> Javier Tantaleán Arbulú —y otros en la dirección del INP— principalmente, quien, en el Rimanakuy puneño invitaría a «mariateguistas y hayistas» a luchar «por la paz y la vida», a resolver el problema de la tierra y construir conjuntamente «una democracia revolucionaria».<sup>667</sup>

«Hayistas» y «mariateguistas» estaban en Puno unos frente a los otros y conformaban redes partidarias rivales orientadas, respectivamente, a colocar bajo su liderazgo las múltiples dinámicas desatadas por los diversos desastres —naturales, sociales y económicos— que habían abatido a Puno a lo largo del último lustro. Del conflicto de Kunurana a las demandas de los clubes de madres de la capital departamental emergían las fragmentadas fuerzas que el PAP y la izquierda pretendían conducir. Sin embargo, la reestructuración de las empresas asociativas seguía siendo, a mediados de 1986, la principal arena de disputa.

La realización, entre agosto y septiembre de 1986, de las mayores reuniones campesinas en la historia reciente de Puno —el III Congreso de la FDCP y el Rimanakuy del gobierno— sirvió para subrayar las diferencias entre lo que los integrantes del PUM denominaban las vías burocrática y democrática de la reestructuración.

Con el anuncio en el mensaje a la nación por fiestas patrias el 28 de julio 1986 de que 1'100,000 hectáreas serían distribuidas entre las comunidades de Puno, se había creado una situación nueva. Por segunda vez la intervención presidencial rompía el trance. Las 744 mil hectáreas que la comisión Bravo Mejía había recomendado reestructurar quedaban largamente sobrepasadas.

Con el PCP-SL amenazando en Azángaro y Melgar y en vista de la inesperada capacidad que gerentes y burócratas mostraban para realizar la reestructuración, la táctica de «conquistar espacios legales» no bastaba, pensaban los dirigentes del PUM. Se requería «generar movimientos de masas» con «la fuerza suficiente para

terrorismo.

<sup>663</sup> Asamblea Popular Regional de Puno. «Manifiesto al pueblo peruano». 27 de junio de 1986.

<sup>664</sup> Sobre la posición de la Iglesia del sur andino con respecto al problema de la tierra y la militarización, véanse los documentos: «Urgidos por nuestra fidelidad». *Sur*, n.º 92, febrero de 1986, pp. 27-28; «La tierra, don de Dios - derecho del pueblo». *Sur*, n.º 94, abril de 1986, pp. 31-41; y «Puno quiere la paz». *Sur*, n.º 101, noviembre de 1986, pp. 34-36.

<sup>665</sup> Desco. *Violencia política en el Perú*. Lima: Desco, pp. 460-61.

<sup>666</sup> Entrevista con Jaime Johnson. Lima, 3 de agosto de 1992.

<sup>667</sup> «Rimanakuy Puno: crónica del evento». *Sur*, n.º 100, octubre de 1986, pp. 7-24.

alcanzar los objetivos trazados». Volver, en otras palabras, al camino señalado por las tomas de Kunurana de diciembre de 1985.<sup>668</sup>

Las evaluaciones partidarias de la FDCP realizadas en mayo de 1986 llamaban la atención sobre tres aspectos críticos:

- La Federación no había estado a la cabeza de la lucha de los damnificados por las inundaciones, a la que habían unificado con su reivindicación por la tierra.
- No existía «una propuesta de reestructuración departamental que unificara las expectativas de comuneros y feudatarios».
- Se había fracasado en «extender el movimiento de tomas de tierras» de Santa Rosa y Macarí al resto del departamento. La falta de «un equipo de dirigentes a nivel departamental» era, asimismo, un problema central. En la práctica, había solamente dos. Tal ausencia había llevado al debilitamiento de las «direcciones provinciales intermedias». La FUCAM era la única que mantenía continuidad, sobre todo en Azángaro, Puno, Lampa, Melgar y Huancané. En el resto del departamento, la FDCP prácticamente no existía.

Frente al anuncio de la reestructuración de 1'100,000 hectáreas, los miembros del PUM sintieron que podían arrebatar al PAP la conducción de «su» base más importante y optaron por radicalizar la lucha. Frente a la cautela de los cuadros locales, fueron los dirigentes nacionales del PUM quienes impulsaron la consigna de liquidación de las EEAA. Poco tiempo después, sin mayor dilación y con grandes muestras de entusiasmo, el congreso de la FDCP se pronunciaba en favor del acuerdo aprobado en el Ande Rojo. El anuncio del 28 de julio de 1986 había creado la expectativa y el envalentonamiento que, ahora, la izquierda parecía capitalizar.

El congreso de la FDCP, al cual asistieron 850 delegados de todo el departamento, aprobó que las EEAA fueran intervenidas de inmediato con participación de representantes comunales y de la FDCP. Habría sanción para los gerentes. Toda la propiedad asociativa —1'750,000 hectáreas aproximadamente— pasaría a un fondo departamental de tierras a partir del cual se realizarían las adjudicaciones a comunidades y parcialidades. A continuación, con apoyo del Estado, se promoverían empresas comunales. La inversión pública se concentraría en el agro. Las políticas de precios, crédito, comercialización y transferencia de tecnología se ajustarían a las necesidades comunales.

Poco tiempo después, se celebró el Rimanacuy con representantes de 473 comunidades y 230 parcialidades puneñas que asistieron a la convocatoria del gobierno. Varias decenas más procedían de los vecinos departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna. Reunidos en 19 comisiones de trabajo, los asistentes discutieron los diversos aspectos de la problemática comunera. En las conclusiones, quedó registrado el amplio repertorio de sus aspiraciones.

Entre las críticas a la verticalidad de los organismos de gobierno y los abusos cometidos por sus funcionarios, se insinuaba un reclamo de fondo: «las autoridades distritales y provinciales nos amenazan y nos desprecian», y los marginaban por completo de las decisiones que tomaban, incluso «en contra de nuestras propiedades».<sup>669</sup> Los funcionarios de microrregiones y del Ministerio de Agricultura, en particular, «planifican y programan sin la participación de los comuneros y a espaldas de la realidad campesina»; por eso, mientras por un lado realizan «obras inservibles» y «gastos insulsos», por otro, exigen a las comunidades que paguen por «largos y costosos» trámites de reconocimiento.<sup>670</sup>

También demandaban el reconocimiento de su autonomía dentro del marco general del sistema político nacional. El derecho a nombrar sus propios jueces, exoneración de todos los impuestos y la asignación de funciones municipales hicieron de la comunidad la célula básica del Estado de la que el presidente Alan García Pérez hablaba.

Pero, sin duda, la reestructuración fue el tema que concitó mayor interés. En sus diversos ángulos, la crítica a las empresas y la meticulosa sustentación del derecho communal a la tierra aparecen en las conclusiones de casi todas las comisiones.

<sup>668</sup> PUM-PUNO. «Propuesta agraria», mayo de 1986.

<sup>669</sup> «Rimanakuy 86: hablan los campesinos del Perú», p. 255.

<sup>670</sup> Ibídem, p. 260.

Palabras más, palabras menos, eran los mismos acuerdos del III Congreso de la FDCP.<sup>671</sup> En las conclusiones del evento Rimanakuy, la visión comunera quedaba desplegada en toda su contradictoria dimensión: el anhelo de protección y reconocimiento al lado de las demandas de participación y autonomía; las apelaciones a la tradición y las actitudes pragmáticas. Sin mencionarlo, los miembros de la comisión de participación e integración comunal dejaron constancia de sus críticas al PUM, al referirse al «divisionismo y politización de los organismos representativos del campesinado» y al control que de éstos ejercían «determinados partidos políticos». No existía, como consecuencia, «una verdadera y efectiva representatividad campesina», por lo que se subrayaba la necesidad de «que las organizaciones sean netamente gremiales».<sup>672</sup>

Sorprendido por la contundencia de las críticas, el presidente Alan García Pérez intentó —en la ceremonia de clausura— despejar las dudas que siete meses de inefectiva reestructuración habían dejado. «Me adelanto —dijo— a las objeciones de “los vendedores de la duda”, esos “políticos ambulantes que van a cada comunidad repartiendo odio”, desacreditando un proceso que avanza, que se realiza sin propiciar la “guerra social” que algunos querían». «Si creen en mí —concluyó— no me cobren altos intereses por ese crédito, hagan lo mismo que yo».

Se refería a los préstamos con crédito cero concebidos por el Banco Agrario. De hecho, problemas con el reparto de préstamos directos a las comunidades asistentes habían estado a punto de provocar el retiro definitivo de los representantes de parcialidades al enterarse de que la entrega de fondos prometidos sólo favorecería a las comunidades. Al día siguiente se reintegraron, luego de conversaciones con una comisión formada para atender este problema. Las parcialidades no podían acceder a los fondos mencionados por los jefes del INP por no tener un estatus legal similar al de las comunidades. Los numerosos tenientes gobernadores y presidentes de parcialidades consideraron, sin embargo, que éste no era argumento suficiente para no recibir el dinero.<sup>673</sup>

Al concluir su discurso, el Presidente de la República abandonó la reunión, sin participar —como estipulaba el programa— en la sesión plenaria final. Sin su presencia, como manifestó el relator de una de las comisiones, «no tenía sentido leer las conclusiones, porque no había nadie que los escuchara y les diera alguna solución o planteamiento».<sup>674</sup> El diálogo entre presidentes se había frustrado. Medio millón de hectáreas había sido repartido al concluir el evento, pero no quedaba claro cuándo serían repartidas las restantes 600 mil.

Un sentimiento de enorme impaciencia, más bien, embargó a muchos de los flamantes beneficiarios cuando, con sus resoluciones de entrega de tierra en la mano, se percataron del rosario de problemas que los reestructuradores habían dejado: un mismo lote había sido adjudicado a varios beneficiarios; abundaban los errores en la delimitación de linderos. En muchos casos, los terrenos asignados se ubicaban en zonas alejadas del domicilio de los adjudicatarios. No había claridad sobre el destino de los bienes empresariales; proliferaban las denuncias de saca ilegal de ganado y, en general, la tierra distribuida era la de peor calidad. Se estaba reconociendo comunidades fantasmas con el fin de legalizar adjudicaciones fraudulentas. Era el caso de las seis comunidades en formación que, en representación de los 682 trabajadores de la CAP Gigante, habían recibido 203,391 hectáreas de las 222,837 hectáreas originalmente controladas por esa empresa. Las autoridades no habían tomado tampoco en cuenta los títulos de los antepasados.

La realidad era que, el limitado control que el Ejecutivo tenía de los operadores locales no aseguraba la llegada de la pretendida «revolución aprista» a los confines del país. Menos aún en Puno, donde, frente a las exigencias comunales que el propio Presidente de la República alentaba, se erigía una maraña de poderes locales con probada capacidad para «subordinar a sus intereses las inversiones públicas y el poder normativo, judicial y coercitivo del Estado».<sup>675</sup>

Discursos de lado, la responsabilidad de decidir «todo el destino de la tierra en Puno» quedaba en manos de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y de la Dirección de Reforma Agraria. En alianza explícita o implícita con los gerentes y los llamados grupos de poder empresarial, serían aquéllos quienes quedaban a cargo de bregar con la presión comunal. Más que una estrategia clara, los cohesionaba un objetivo inmediato: evitar el completo desmantelamiento de ERPS, SAIS y CAP, protegiendo los intereses de sus aliados. Sabían

<sup>671</sup> FDCP. «Acuerdos del III Congreso de la FDCP presentados al Rimanakuy». septiembre de 1986.

<sup>672</sup> Ibídem, p. 261.

<sup>673</sup> «Rimanakuy Puno: crónica del evento». Sur, n.º 100, octubre, 1986, pp. 7-24.

<sup>674</sup> Ibídem, p. 282.

<sup>675</sup> Rojas Alcalde, Telmo. «Límites y posibilidades del desarrollo microrregional» (notas de una experiencia en la región sur).

que no podían enfrentar abiertamente la reestructuración, pues equivalía a ponerse en contra del Presidente de la República. Intentaron ganar tiempo embrollando a los adjudicatarios, dilatando procedimientos, usando sus influencias para movilizar en su apoyo a las autoridades policiales y militares, acaso confiando en que, si lograban resistir lo suficiente, algún giro en la inestable situación política nacional les podría permitir recobrar la iniciativa. Paradójicamente, la presencia del PCP-SL en Puno hacía factible pensar en que una militarización de las provincias conflictivas traería el fin de la agitación comunal.

Si con los decretos supremos 005 y 006 se había abierto una intensa disputa por influir el curso del proceso de reestructuración, el anuncio el 28 de julio de la entrega de las primeras 600 mil hectáreas terminó de abrir la caja de Pandora. Ahora, a los procedimientos de afectación y adjudicación se añadían los reclamos de los beneficiarios insatisfechos y la desesperada movilización por obtener reconocimiento comunal; de ello dependía obtener algo de las 1'100,000 hectáreas que se iban a repartir.

Seguir los detalles de las intrincadas dinámicas locales no era tarea fácil en aquellos días agitados. Bastaba, sin embargo, visitar las oficinas del sector Agricultura en la ciudad de Puno para percibir el conflicto que se maceraba: la indolencia de los funcionarios, los delegados comunales merodeando en los despachos, los memoriales —redactados al instante por un mecanógrafo callejero— en sus manos encallecidas, buscando cómo penetrar el cerco burocrático. No menos complicada aparecía la situación desde la otra ribera. La influencia de ex hacendados y propietarios agrarios —reconocería un funcionario de la Región Agraria XXI— no era el único factor que entorpecía el proceso: los medios eran mínimos, los procedimientos que había que emprender complejos y las presiones enormes.<sup>676</sup>

Sobre este trasfondo, los comicios municipales aparecían como un capítulo decisivo de la lucha por la primacía política en la región. «Las próximas elecciones municipales —rezaba una declaración del Ande Rojo— son una batalla política».<sup>677</sup>

Confirmado la tendencia establecida en las elecciones del año anterior, el PAP absorbió el voto de Acción Popular (AP) —que no presentó candidatos en esta oportunidad— y del FNTC —más interesado, esta vez, en ganar la alcaldía de la ciudad de Arequipa— para obtener un 53% del voto departamental, resultado que le significaba tener mayoría en siete de las diez provincias altiplánicas y, con ello, un control masivo de la instancia municipal en el departamento. Era la votación más elevada obtenida por el PAP en Puno en toda su historia electoral.

El éxito del PAP —afirmaría un dirigente del PUM— había sido lograr «alejarnos de los sectores medios y atrasados». <sup>678</sup> No era que la IU hubiese hecho una gran labor municipal en los tres años previos. La verdad era, sin embargo, que las cifras reflejaban en parte un uso clientelista de los recursos estatales como, por supuesto, el magnetismo que el líder aprista seguía ejerciendo sobre la población. Hasta en tres oportunidades, el Presidente de la República se había hecho presente en Puno para apoyar a los candidatos de su partido, en especial a Luis Dueñas, candidato a la alcaldía provincial de la capital altiplánica, quien había llegado a Puno en agosto de 1985 y se identificó rápidamente como el vocero local de la «revolución alanista». García Pérez lo impuso como candidato, a pesar de las resistencias que suscitaba en el medio local.<sup>679</sup> Denunciar la cercanía del PUM con los insurgentes y atacar a la Iglesia progresista estuvieron entre sus

<sup>676</sup> Véas Rénique, J.L. «Estado, partidos políticos y lucha por la tierra en Puno». Debate Agrario n.º1, octubre de 1987, pp. 1-27.

<sup>677</sup> PUM. «Acuerdos del Ande Rojo» (Segunda Sesión Plenaria). Puno, mayo de 1986, p. 7.

<sup>678</sup> Entrevista con Víctor Torres.

<sup>679</sup> El discurso de Dueñas capturó el ánimo de los votantes en la capital departamental. En el norte del departamento, sin embargo, donde la FDCP tenía mayor influencia, la votación izquierdista se incrementó con respecto a las elecciones municipales anteriores: 4% en Azángaro, 24% en Carabaya, 10% en Melgar, 17% en Sandia y 25% en Lampa. En la primera de estas provincias, la izquierda había logrado retener la alcaldía provincial. En los distritos de Asillo, San Juan de Salinas, San Antón, José Domingo Choquehuanca, Chupa y Potoni, los representantes izquierdistas no habían tenido competidor puesto que el PAP se abstuvo de presentar candidatos. En Muñani, el candidato de IU derrotó al del partido del gobierno. Lo contrario ocurrió en Arapa y Huatasani. En Chupa, el FNTC fue el vencedor en lo que sería uno de los escasos cuatro municipios distritales que el cacerismo ganaría en todo el departamento.

Por 54% contra 42%, el triunfo fue para el PAP en la provincia de Melgar. En Ayaviri, la capital provincial, la izquierda perdió esa vez por una diferencia inapelable. Retuvo, sin embargo, sus bases locales más importantes —Macará, Nuñoa, Umachiri, Cupi— y perdió por escaso margen en Santa Rosa y Orurillo. En Lampa y Huancané, por el contrario, el PAP alcanzó hegemonía casi completa, incluso en distritos en los que la FDCP reclamaba tener algunas de sus bases más combativas. En esta última provincia, así como en Puno y San Román —las más urbanas del departamento—, fue donde la izquierda perdió votación: -10%, -23% y -17%, respectivamente. Las cifras electorales departamentales y provinciales han sido tomadas de Tuesta Soldevilla, Fernando. «Perú político en cifras». Lima: Fundación F. Ebert, 1994.

temas de campaña favoritos. Incripaba al PAP y a la burocracia local, asimismo, por haber sido el freno a las transformaciones impulsadas por el mandatario: «Yo critico a la gente del PAP —decía— por no acelerar la reestructuración para evitar que otros aprovecharan de esto».

Los efectos de la derrota izquierdista no se limitaban a Puno y no sólo se reavivaban las críticas al liderazgo del frente IU, sino que obligaban a plantearse la cuestión de su agotamiento definitivo. El debate sobre el futuro de la IU causaba división incluso dentro de los propios partidos integrantes del frente. En el PUM, mientras unos destacaban la necesidad de acelerar la construcción del «partido revolucionario de masas», otros se inclinaban por convocar a un acuerdo nacional teniendo a la IU como eje fundamental.

Mientras el PUM mostraba todas las intenciones de pasar a la acción y, en el PAP, la tendencia más dialógante entraba en repliegue, el intento de concertación encabezado por Juan Carlos Málaga desde la CENECAMP daba señales de colapso. Moviendo influencias, empresas como Sollocota y Aricoma consiguieron la instalación en sus predios de las Fuerzas Policiales y del Ejército. Era la oportunidad de asentar un golpe contundente a la reestructuración. El conflicto entre la comunidad campesina de Chapioco y la CAP Parina es ilustrativo del problema que estaba generándose.<sup>680</sup>

La CAP Parina, según la denuncia, estaba gestionando su reconocimiento como comunidad empresarial, uno de cuyos gestores era un directivo de la cooperativa que es «empleado desde el tiempo de la Sociedad Ganadera del Sur». Por tal motivo: «[...] ya que el Ministerio no nos atiende ni los de Parina, la comunidad ha decidido tomar el terreno adjudicado en cualquier momento; porque tenemos el título de propiedad y un acta de entrega de la misma cooperativa de Parina en la fecha de 14 de octubre de 1986 por los señores de la comisión de reestructuración».<sup>681</sup>

Definitivamente, el anuncio de la entrega del 1'100,000 de hectáreas y su desmentido en la práctica había agudizado la tensión rural.

Desde inicios de diciembre en adelante, una serie de marchas y tomas de tierras espontáneas comenzó a producirse en las provincias de Azángaro y Melgar. La Policía Nacional respondió con dureza. De pronto, todos en el campo eran sospechosos y, con la misma tenacidad con que solicitaban la tierra, las comunidades se veían obligadas a pedir garantías y demostrar que sus miembros no estaban involucrados en ningún acto de subversión.<sup>682</sup>

A inicios de abril, el IV Consejo Directivo de la FDCP convocó a una jornada de movilización para el 19 de mayo, fecha fijada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) para realizar un paro nacional. Tomar la tierra para establecer empresas comunales fue el objetivo del movimiento.

A fin de cuentas, por sus propios medios, sobre pasando la indolencia de los funcionarios locales, las comunidades darían cumplimiento a las medidas promulgadas por el Presidente de la República. Así, sobre los hombros de campesinos como los de Chapioco y Punta Jallapisi —con el respaldo de los parlamentarios del PUM, una serie de ONG y el de la Iglesia local— la FDCP se convirtió en la instancia coordinadora de la más amplia movilización rural que la sierra haya visto en décadas.

### 17.3. EL 19 DE MAYO DE 1987

En las primeras horas del 19 de mayo todo estuvo dispuesto para la movilización. Como ríos humanos, los comuneros discurrirán hacia los terrenos sobre los que reclaman —a veces por generaciones— derecho de

<sup>680</sup> «[...] en el Rimancay 86 fue entregado el título de propiedad n.o 308-86 por el señor Presidente de la República, según la resolución directoral 817-86 DCGR/AR de fecha 12 de septiembre de 1986, en donde a la comunidad de Chapioco le fue adjudicada una parte de la Cooperativa Agraria de Parina [...] Hasta la fecha no recibimos el terreno; solamente tenemos papel y no el terreno, porque los señores de la Cooperativa se resisten a entregarnos de dicho fundo y dicen que ellos no quieren saber nada de las leyes ni de la reestructuración [...] el jefe de la reestructuración de la Región Agraria de Puno dice que Parina no les puede entregar porque ellos son dueños, eso nos hace pensar que hay un convenio o soborno por parte de la Cooperativa».

<sup>681</sup> Memorial de la Federación Unitaria de Campesinos de Aricoma al Presidente de la República, doctor Alan García Pérez. Archivo de la FDCP (AFDCP de aquí en adelante).

<sup>682</sup> Acta de la Asamblea Extraordinaria de la Comunidad Campesina de San Miguel (Asillo), 19 de diciembre de 1986.

propiedad. En las actas redactadas al culminar la jornada es posible apreciar el sentido que los propios campesinos atribuían a los hechos que protagonizaron.<sup>683</sup>

Justificar de manera exhaustiva por qué recurrían a una acción de fuerza fue su preocupación mayor. La unanimidad de la decisión, la tradición comunal y el derecho legítimo a la justicia fueron algunos de los argumentos justificativos. El incumplimiento de las leyes dictadas en favor de las comunidades por autoridades locales «corruptas y abusivas» surgió como el argumento central. Ante éstas, la comunidad aparecía como organismo natural de la sociedad campesina, como instancia local del sistema político, moralmente capacitada para actuar en contra de quienes —al desoír las órdenes del gobierno— incurrián en una acción ilegal. Según los personeros de la comunidad Señor de Huanca del distrito José Domingo Choquehuanca:

Después de recorrer las nueve horas de marcha de sacrificio con todos los padres, madres e hijos y ancianos, dentro de los cuales se incluye minusválidos, haciéndole prevalecer nuestra solicitud interpuesta al Ministerio acatando los decretos supremos 005 y 006 en vista de que nos encontramos en unas parcelas de no más de dos hectáreas, que no alcanzan para trabajar en agrícola y crianza de ganados, visto que no tenemos solución en el Ministerio, decidimos nuestra marcha a los fundos solicitados [...].

En algunos casos, hay un énfasis más directo en la responsabilidad que cabe al Ejecutivo. Los comuneros de Jilla Cajamarca, en el distrito de Potoni, por ejemplo, afirman que su decisión de actuar tiene su origen en el hecho de que: «el gobierno central de la república hizo caso omiso a la reestructuración de tierra para los campesinos». De una mayor beligerancia da muestras el memorial de los comuneros de Catuyo del mismo distrito de Potoni. Son «las falsas promesas y engaños del doctor Alan García Pérez y su gobierno aprista», sus «demagogias y corrupciones», lo que los impulsaba a reivindicar «nuestras tierras que ha sido quitado de nuestros antepasados» y a rechazar «todas las violencias militares que hace este gobierno». El alza del costo de vida, la inflación, los bajos precios de «nuestros productos pecuarios» y una serie de servicios desatendidos completan la larga lista de quejas y demandas.

Unos se movilizaban en protesta por el incumplimiento de los decretos de febrero; otros buscando corregir los desaciertos del proceso de reestructuración. Son «los malos funcionarios de Reforma Agraria», coludidos con «el grupo de poder de la SAIS Huayna Cápac» —alega la comunidad Choquechambi-Carpani del distrito de Muñani—, quienes «nos han postergado nuevamente» de los beneficios de la reestructuración.

Igualmente insatisfechas, algunas comunidades de los distritos de Paratía y Santa Lucía, provincia de Lampa —Caluta, anexo Chullunquiani, Ipocate y Chingani— suscribieron un memorial colectivo en el que exponían un conjunto de quejas. A Ipocate —la más poblada— se le había adjudicado el fundo Cerrillos que tenía una serie de limitaciones: «se encuentra a un día de camino y nos separa el caudaloso río Verde», además que «es secano de reducida extensión de 1,050 hectáreas», por lo que no sirve «para poder realizar trabajos y producir». Reclamaban, por lo tanto, la entrega de «la Unidad Andamarca por ser cerca y colindancia y de más hectareaje [sic]». La comunidad de Caluta, de otro lado, solicitaba el fundo Pocomoro, «ya que necesita pastos por ser año secano». La resolución directoral que se la adjudicaba fue expedida en junio. Ésta no se había hecho efectiva aún, debido a «la apelación interpuesta por parte de la CAT Santa Lucía» mediante un expediente «firmado por el gerente y empleados, compadres y ahijados, sin participación de los directos trabajadores». De todas maneras, siendo Pocomoro insuficiente para «trabajar y producir como empresa comunal, por ser rocoso, secano y mayor parte es de ichus o pajas», se solicitó la adjudicación de otros terrenos adicionales que, para prevenir que sean tomados por otras comunidades, fueron señalizados en la jornada del 19 de mayo.

El relato que los comuneros de Cancollay hacen de la toma de las 3 mil hectáreas que reclaman como propias describe un patrón generalizado:

Se procedió a tomar y posesionar las tierras de los fundos arriba mencionados con las costumbres que se realizan a nivel del campo: orando al señor creador y luego se entonó las sagradas notas de nuestro himno nacional y luego se procedió a dar abrazos de fraternidad entre comuneros como signo de posesión de las tierras de Pachacha-ca, Cayconi, Sapapugio y el anexo Chejollohuata, y la recuperación de las tierras de nuestros antepasados, una vez hecho todo de acuerdo a las costumbres se procedió a instalar las chocitas y toldos con sus banderas.

---

<sup>683</sup> Copias de los documentos que se citan a continuación fueron obtenidas en la propia sede de la FDCP en la ciudad de Puno durante los días que prosiguieron a las tomas. Por razones de espacio, omitimos la referencia específica a cada documento.

Por tratarse de una movilización con escasa coordinación, se presentaron casos en que varios grupos aspiraron al mismo terreno. Así, al amanecer del 19 de mayo, cuando se hallaban abocados a la colocación de los hitos que demarcaban la propiedad bajo reclamo, los comuneros de Unión Antauta encontraron «a nuestros compañeros comuneros de Chimpachuquisani y Killca Vilacollo haciendo un intercambio de ideas y buena amistad recíprocamente y luego se procedió [a firmar] un acta con el feudatario Cipriano Vilca Quispe con fines de trabajar unánimemente».

De hecho, fue en los alrededores de la SAIS Aricoma donde se produjeron las más duras disputas de la jornada.

La existencia de la Federación Unitaria de Campesinos de Aricoma (FUCA) —una cohesionada federación local que reunía a 35 comunidades de 11 distritos de las provincias de Carabaya, Sandia y Azángaro— explica las medidas defensivas a las que recurrieron empresas como Aricoma o Sollocota. La FUCA había sido creada a inicios de 1986 con el fin de «hacer frente al no cumplimiento de las leyes del gobierno para la reestructuración». A fines de abril de 1987, la FUCA organizó una marcha de sacrificio que movilizó a cerca de 8 mil campesinos —según los organizadores—, respaldados por «los señores alcaldes de los concejos municipales de Crucero, Potoni y Usicayos», más el apoyo del «señor gobernador del distrito de Crucero, los tenientes gobernadores, comisarios y agentes municipales». Se comprometieron entonces a «jamás aceptar tierras de mala calidad» como lo «están haciendo las demás comunidades campesinas» y exigieron, asimismo, «un mínimo de 2 mil hectáreas por comunidad, ya que hay tierra sin trabajar por de más en estas empresas». Para el 19 de mayo, la FUCA acordó que las comunidades demarcaran con «un cercado de champas o terrones, pacíficamente» la tierra que reclamaban, y construyeran además chozas, en las cuales permanecerían por 48 horas. El objetivo era lograr el envío inmediato de una «comisión reestructuradora democrática» que, con el aval del Presidente de la República, terminara con la inoperancia de los funcionarios locales y el «despotismo de los gerentes». La SAIS Aricoma, sin embargo, se preparó para hacer frente al desafío.

Desde las primeras horas de la mañana del día 19, grupos compuestos por *sinchis*, soldados y feudatarios hostilizan a los manifestantes. Así, mientras colocaban sus hitos «de piedra y champas» en el «lugar denominado Tayquicunca», comuneros de Potoni Cangalli fueron interceptados:

[...] por la patrulla de la Fuerza Armada solicitada por la SAIS Aricoma [...] movilizando en los vehículos de la empresa a 24 soldados y un teniente, el conductor de un volquete llamado don Marcos Apaza, y el camión fue conducido por don Martín López Pacha y acompañado de un guia dor don Martín Condori Huayaca y otros [...] El jefe del comando nos obligó a destruir los hitos y también fuimos arrebatados de una bandera nacional de tamaño un metro y treinta aproximadamente y para cumplir con la destrucción de los hitos nos hemos visto custodiados por cinco soldados y más un representante de la SAIS Aricoma.

Los invasores, sin embargo, no se rindieron. Se replegaron temporalmente y esperaron la noche para retornar. Al día siguiente, los vigilantes de la SAIS iniciaron el desalojo. Se buscó identificar a los dirigentes. En algunos casos, feudatarios encapuchados los señalaban. Se les interrogó con aspereza. «Como no le hemos dado razón —denuncia el memorial de la comunidad Ccancolly—, nos reprimió a todos los varones y, como es una decisión de la comunidad, también las mujeres se subieron al camión».

Por la tarde del 20, la central Cayacachi de la SAIS Aricoma comenzó a llenarse de detenidos. La gente de Condoriri Suchini, Nueva Esperanza de Bajo Chilluma, Yaurefina Catuyo Chico y Ajoyani llevó la peor parte. Fueron enfrentados por un grupo de *sinchis* reforzado por «los señores feudatarios y comunidades socias de la empresa» que llegaron de improviso a bordo de varios camiones. «Quemaron nuestras chozas y derramaron nuestros alimentos y apachurraron nuestra bandera peruana muy prepotentemente», asevera el testimonio. «Éramos como setenta —afirma otro— entre hombres, mujeres, niños, niñas, madres gestantes, madres con bebés, ancianos y ancianas que han sido llevados presos de una manera violenta».

En la central Cayacachi, mientras tanto, los detenidos han sido depositados en la sala de esquila de ganado:

[...] con hambre y frío, porque hemos dormido sobre el cemento, sin frazadas ni cueros, vigilados noche y día por los *sinchis*. Y en la noche, a horas 7 p.m. del 20, los *sinchis* llamaron a las chicas, diciendo que esta noche van a dormir con ellas y nosotros no hemos permitido y, al mismo tiempo, amenazándonos de muerte a todos los presentes, que fuimos en número de 75 entre hombres y mujeres.

Al mediodía del 21, los detenidos llegaban a trescientos. «Defendiéndose como leones», para ese entonces, la mayoría de sus bases comunales completó las 48 horas de ocupación acordadas y comenzaron a confluir al pueblo de Crucero. Ahí, Porfirio Suni —secretario general de la FUCA— organizó el traslado de unos 2,500 campesinos —«en más de diez camiones colaborados por el pueblo»— hasta la propia central Cayacachi, con el fin de reclamar la libertad de los detenidos. «Después de un diálogo amplio con los feudatarios y el capitán de las fuerzas del orden», todos los detenidos menos uno —«por encontrársele una frase de senderista»— fueron liberados de su precaria prisión. Al día siguiente, un paro de 24 horas convocado por la FUCA y el SUTEP culminó con un mitin en la plaza de Crucero. Los agentes del orden se hicieron nuevamente presentes, «armados hasta los dientes, como si fueran a la guerra entre el Perú y Chile». Un capitán se dirigió a la audiencia: reconoció la legitimidad del reclamo de tierras y ofreció volver con Harold Rafael Chávez para tener un diálogo directo sobre la cuestión de la tierra: «toda la masa estuvo esperando hasta la noche —relata el informe de la FUCA— y no se hizo presente ni el gerente ni el capitán con sus sinchis; el pueblo y el campesinado comprendió que esto era una burla».

Mayor aún sería la irritación cuando, al día siguiente, «los sinchis en cantidad de treinta y feudatarios en más de doscientos rodearon a la comunidad de Sallaconi» armados y encapuchados «como verdaderos sediciosos» con el fin de desalojarlos. La violencia se extendió entonces a otras zonas y se produjeron redadas en las comunidades vecinas a San Antón. Los dirigentes —denunció un portavoz de la federación de San Antón— fueron acusados de ser subversivos por los militares. Los militares contaban con una lista de nombres, y un chofer de la SAIS Kenamari —dicen— actuaba como guía. En Muñani —según un informe de la parroquia local— una familia de gamonales consiguió el envío de tropas de la ciudad de Puno. Al llegar, «les regalaron corderos y ofrecieron una pachamanca para ganarles» y les indicaron quiénes eran «los cabecillas de los terroristas». En el enfrentamiento que se produjo resultó muerto el comunero Pedro Laura Ochochoque.

En rigor, la movilización se había limitado al ámbito tradicional de influencia del PUM. El gran peso de la lucha había recaído en el puñado de federaciones distritales que en Melgar, Azángaro y Carabaya, constituyan el verdadero sostén de la FDCP. En esos lugares, se produjo el 70% de las movilizaciones. En Huancané y en Chucuito tan solo hubo una acción. En Lampa y San Román, de la misma manera, el movimiento fue muy limitado. Las de Melgar tenían la ventaja de contar con el apoyo de la FUCAM, la única federación provincial con existencia real en todo el departamento. El anuncio de las tomas, sin embargo, había provocado una ola de invasiones que iba más allá de lo que la FDCP era capaz de controlar. Tal como decía la persona enviada por la comunidad Pantipantini de Arapa al dar cuenta de la toma del fundo Rancho Chico de la SAIS Makaya, «le hacemos presente a la federación para que ellos defiendan a nivel provincial y departamental».

Incluso en el caso de la FUCA —la federación distrital que había llevado sobre sus hombros el peso mayor del combate del 19 de mayo—, la presencia del gremio departamental había sido nula. De ahí que su informe a la FDCP —fechado el 24 de mayo y firmado por Porfirio Suni— culminara con la siguiente exhortación:

Compañero secretario general, esperamos su denuncia, apoyo y defensa a esta organización del FUCA, que integra a más de 35 comunidades, que, durante estos días, está sufriendo atropellos por de más deplorables en la historia de Carabaya, Sandia y Azángaro. Hasta el momento, no contamos con ningún apoyo ni de la FDCP, derechos humanos, ni de los compañeros parlamentarios por Puno. Nos sentimos muy solos y esperamos que venga algún representante a alestarnos y apoyarnos, pero si nuestra lucha es fuerte, nunca retrocederemos, seguiremos con más fuerza hasta el triunfo.

A todas estas flaquezas se sumaba un hecho fundamental: que la movilización no había culminado en una ocupación efectiva de la tierra. Muchas de las marchas —como los protagonistas lo especificaban en sus actas— se habían limitado a demarcar los territorios bajo reclamo. Una vez concluida la colocación de hitos, se habían retirado con la esperanza de que —debido a las tomas— el gobierno enviaría comisionados con autoridad para proceder a la transferencia y titulación de la tierra. Básicamente, lo que los comuneros requerían en ese punto era que la FDCP obtuviera una sanción legal para sus reclamos.

Por eso una de las demandas presentadas en el diálogo del 5 de junio al Ministro de Agricultura fue «el reconocimiento de la FDCP como central máxima del campesinado puneño».<sup>684</sup>

---

<sup>684</sup> FDCP. «Planteamientos para el diálogo con el ministro de Agricultura, Remigio Morales Bermúdez». junio de 1987.

De Lima, la comisión de la FDCP no volvió con las manos vacías. El gobierno había aceptado formar una comisión con capacidad resolutiva, con la participación de comunidades y feudatarios y la expresa exclusión de los gerentes. Había aceptado, además, legalizar las tomas y adoptar medidas para prevenir el saqueo del ganado. La Región Agraria XXI, asimismo, sería prontamente reorganizada. Poco era, no obstante, lo que la federación podía hacer para fiscalizar el cumplimiento de estos acuerdos. Los representantes de las EEAA, por su parte, no permanecieron inmóviles. Lograron que se convocara a una reunión con el fin de exponer ante los representantes del gobierno sus propios puntos de vista sobre los acontecimientos altiplánicos, a saber: que las tomas estaban provocando la destrucción de la industria ganadera puneña. Así, el 18 de junio de 1987, en la sala de reuniones de la CENECAMP en el centro de Lima, un grupo de gerentes y trabajadores se entrevistó con el viceministro de Agricultura. Entre los puntos que los representantes empresariales tocaron estaban la superficiabilidad de los estudios de la comisión reestructuradora, las acciones ilegales contra propiedades tituladas y los desmanes de los agitadores. «Nosotros no tenemos administradores, soy un trabajador» aseveró el representante de la SAIS Huayna Cápac, en cuyos terrenos se había producido la única baja fatal del 19 de mayo:

[...] nuestra empresa ha sido invadida por comuneros de Choquechambi-Carpani del distrito de Muñani, quienes dirigidos por el gobernador, alcalde, párroco, han invadido trescientas hectáreas de la mejor tierra de la empresa. Han introducido animales indiscriminadamente, extremadamente parasitados [sic], lo que hace peligrar nuestro ganado. Han destruido los cercos de alambre, se han apoderado de ganado ovino. Los daños superan los cuatro millones de intis. Los invasores han violado la Constitución [Política]. Desconocen nuestros derechos como vecinos, han negado nuestras peticiones para inscribir partidas, pagar autoavalúo. El párroco se niega a celebrar misas. Nos encontramos totalmente discriminados, sin amparo de ninguna clase, podemos sufrir nuevos atropellos.

A la comunidad Choquechambi-Carpani —continuó— se le habían adjudicado 1,675 hectáreas de los fundos Callatomasa y Puquini; invadieron, sin embargo, el fundo Muñani Chico, en el que «trabajamos 453 jefes de familia entre socios y trabajadores eventuales, con una población de 1,200 habitantes».

De manera similar, Harold Rafael Chávez —gerente de la SAIS Aricoma, centro de la lucha del 19 de mayo—, luego de justificar la presencia de las tropas en las instalaciones de su empresa, advirtió del desastre productivo que el «avasallamiento» de las empresas habría de significar:

Se trata de más de un millón de hectáreas y de cerca de un millón de unidades ovinas. Todo un potencial ganadero muy importante para el país. Puno es un importante abastecedor de lana. La base de esto es el ganado seleccionado. ¿Qué va a ocurrir con ese ganado? ¿En manos de quién va a caer? No desprecio a los comuneros, ellos son pobres y tienen sus necesidades, pero nunca han manejado una ganadería de la forma como lo hemos hecho nosotros. Nosotros tenemos profesionales, gente de experiencia, ellos nada. En este proceso de reestructuración no se está beneficiando el campesinado pobre, éste no tiene ganado y no puede entrar al área de tomas. La empresa comunal puede resultar, aunque tengo mis dudas porque la comunidad no existe en la práctica. Son grupos de parceleros acostumbrados a la propiedad privada. Va a ser muy difícil integrarlos empresarialmente.

Al final de la tarde, el viceministro aseguró a los asistentes que, en ningún caso, el gobierno accedería a las demandas de liquidación de las empresas. Que, por el contrario, una vez redimensionadas, éstas recibirían el apoyo necesario para su desarrollo. El 24 de junio —día del campesino—, más aún, se daría por concluido el proceso reestructurador y se entregaría títulos de propiedad a las empresas que todavía no contaban con ellos.

En tales circunstancias, los asesores de la FDCP decidieron programar una nueva oleada de tomas para el mismo 24 de junio, cuyos objetivos eran: convertir las marchas en tomas, es decir, pasar a ocupar directamente la tierra demarcada en la movilización anterior; ocupar tierras fraudulentamente adjudicadas a comunidades en formación ficticias; fortalecer o establecer federaciones distritales que reforzaran la capacidad de la FDCP de conducir los procesos de desmantelamiento de la propiedad asociativa; avanzar en la ocupación —estableciendo pactos entre comuneros y feudatarios— de empresas que, como las SAIS Makaya, San José e Illary, estaban sin mando gerencial y al borde de la liquidación; expandir la oleada de tomas a la zona sur del departamento, y avanzar, en la medida de lo posible, en la toma de las propiedades de autoridades como el jefe de la Región Agraria XXI y los directores de Reforma Agraria y CORPUNO.<sup>685</sup>

---

<sup>685</sup> Anónimo. «Conclusiones de las tomas del 19 de mayo y directivas para el 24 de junio».

#### 17.4. LA APLICACIÓN DEL «PENSAMIENTO GONZALO»

Sorpresivamente, las acciones del PCP-SL pasaron de un «virtual autismo» a un «desesperado esfuerzo por explicar sus propuestas».<sup>686</sup> Respondía así a las nuevas condiciones en que se desenvolvía su alzamiento: su expansión fuera del escenario ayacuchano, la entrada a zonas nuevas con cuadros procedentes de otras regiones, la necesidad de dar coherencia a una lucha cada vez más descentralizada, así como la creciente competencia en Puno con otras fuerzas políticas como el PUM. Con referencias a las acciones del PUM en documentos partidarios o en artículos publicados en *El Diario*, la dirección del PCP-SL dio inicio a una suerte de polémica no declarada con los antiguos vanguardistas.

Tres puntos sobresalieron en este hipotético intercambio: la política agraria; la naturaleza del partido, y la construcción del «nuevo poder».

Con respecto al primero, el tema central era la crítica que el PCP-SL hacía del enfoque gremialista del PUM y, sobre todo, a su recurso a la táctica de toma de tierras. En el altiplano, sostenía Abimael Guzmán, la rebelión campesina no podía detenerse. En circunstancias en que los campesinos tomaban la tierra por decisión propia, no obstante, la CCP se interponía como instancia negociadora. Ellos —continuaba el argumento— estaban buscando arreglos, en tanto que las masas «por sí solas pueden pasar a realizar las acciones que les ha enseñado el partido». <sup>687</sup>

Sin «lucha armada», las tomas de tierras, simplemente, derivaban «en evolución dentro de las leyes agrarias». Invasiones, cosechas colectivas, repartos de ganado, confiscación de terrenos —«apuntando a la propiedad asociativa y conjurando la no asociativa»—, todo «bajo la dirección del partido» y «estableciendo bases de apoyo con lucha armada», eran la única garantía de triunfo.<sup>688</sup> La tierra —señalaría a inicios de 1986 el líder maoísta— «la defienden los campesinos, no nosotros». Son ellos «quienes tienen que aprender que la tierra se conquista con las armas y que con las armas se defiende [...] En esta línea tenemos que poner a miles de campesinos y que los demás vean lo que hacemos para que también lo hagan ellos. Con energía endiablada tenemos que organizar y organizar todo lo que podamos».<sup>689</sup>

Algunas semanas después, el PCP-SL reclamó para sí la conducción real del movimiento altiplánico:

En el sur, sobre todo en el convulsionado Puno, se han llevado adelante asaltos a puestos policiales como el de San Antón, toma de pueblos como en San José y Chupa, arrasamientos y sabotajes a SAIS, así como la invasión armada de tierras movilizando a 10,000 campesinos contra las EEAA que concentran inmensamente la tierra en su poder, lo cual ha llevado a las FFPP a declarar zonas rojas a las provincias de San Román, Azángaro, Melgar y que crezca el clamor reaccionario pidiendo se declare el estado de emergencia e intervengan las fuerzas armadas; así la miseria, las catástrofes naturales y la acción armada están haciendo de Puno un volcán altamente explosivo.<sup>690</sup>

A mediados de 1988, Abimael Guzmán reiteró el tema en la llamada «Entrevista del siglo». «Somos nosotros —afirmó— los que empezamos las invasiones de tierras en Puno mientras que el PUM discutía con el PAP sobre cómo hacerlo». Más que conducir un movimiento de ruptura —sostendría el líder del PCP-SL—, el PAP y el PUM se habían dado la mano para «bajar la presión de las aguas», en tanto que «la simple consecución de la tierra» desligada de «una lucha por la conquista del poder» únicamente generaba «un mayor acoplamiento al sistema». En Puno, por lo tanto, el PUM había reeditado «lo que hicieron en 1974 cuando eran VR»: negociar, transar, liquidar el movimiento. «Hagan acto de contrición —les demandaba Guzmán— y vean si no han servido incluso delatando para que sean golpeadas nuestras fuerzas».<sup>691</sup>

Sin embargo, —reconocía Guzmán— lo hecho en Puno por el PUM demostraba la «explosividad [sic] de las masas» en esa región del país.<sup>692</sup> Demostraba, más aún, cuán importante era no descuidar las demandas de la población. «Se nos imputa no tener línea específica para la lucha económica y política de las masas», afirmó,

<sup>686</sup> Wiener, Raúl (ed.). *Guerra e ideología. Debate entre el PUM y el PCP-SL*. Lima: Amauta, 1990, p. 9.

<sup>687</sup> PCP-SL. «Reunión nacional de dirigentes y cuadros», 7 de abril de 1986. AGC.

<sup>688</sup> PCP-SL. «Conclusiones del proceso de la lucha armada», marzo de 1984. AGC.

<sup>689</sup> PCP-SL. «Intervención de la dirección», p. 4.

<sup>690</sup> «Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial». Agosto de 1986. En L. Arce Borja. *Guerra popular en el Perú*, pp. 217-304.

<sup>691</sup> «Entrevista del siglo», p. 37.

<sup>692</sup> PCP-SL. «Tercera sesión preparatoria del Primer Congreso». Primera parte, enero de 1988.

pero no es así; lo que sucede es que tenemos otra manera —«contraria a la oportunista y revisionista, nueva y distinta a la tradicional»— de acoger las demandas concretas de la población. «Desarrollar la lucha reivindicativa en función del poder», ése era, según el PCP-SL, «el principio político incommovible del trabajo de masas».⁶⁹³ Tal era la distinción última entre el «campesinismo pumista» y la «guerra popular»: la mera agitación sin perspectiva revolucionaria *versus* la construcción del «nuevo poder».

«Descoyuntar al poder gamonal» tomando al «trabajo campesino como base» y al «trabajo militar como guía». Así definía Abimael Guzmán el trabajo de su organización en el campo.<sup>694</sup> Tal objetivo implicaba «ir a lo hondo y profundo de las masas» y buscar levantarlas contra esa «costra» dirigencial «que sirve a la reacción».<sup>695</sup> La acción de sus columnas generaría una polarización de los conflictos locales que iría socavando el edificio organizativo que el «revisionismo» había levantado con el fin de «aherrojar» a las masas para desviarlas de su camino de rebeldía. Los «paros armados» eran, en tal sentido, el instrumento más adecuado para traerse abajo dicha organización «revisionista», ya que éstos, aparte de enfrentar al Estado, cuestionaban los Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP) y otras «formas gremiales y asociativas caducas» que «la reacción necesita como patitas para apoyarse, y el revisionismo y el oportunismo para cabalgar sobre las masas».<sup>696</sup>

La creación de «comités populares abiertos» era el objetivo hacia el cual el PCP-SL debía orientarse al promediar 1988.<sup>697</sup> Hacerlo requería apurar el paso, dejar la «defensa pasiva» y prestar «cada vez mayor atención a golpear autoridades. Es bueno. Se acerca al medio centenar de alcaldes aniquilados. En Vietnam del Sur, se aniquiló trece mil autoridades para generar vacío de poder».<sup>698</sup> Para ser efectivos, sin embargo, los aniquilamientos selectivos debían ser adecuadamente preparados. Debía escogerse a «los más recalcitrantes y odiados», «cuanto más cargo y nivel tengan mejor». Los alcaldes, jueces y «toda la variopinta de gamonales» no eran, a fin de cuentas, sino «felipillos locales», quienes «aunque con tez y apariencia de humildes campesinos, sirvieron y sirven a los explotadores y traicionan a su clase; lo hicieron en la época de la Conquista y lo hacen ahora en la República. Estos felipillos ya están condenados por el pueblo».<sup>699</sup>

Al respecto, los documentos del PCP-SL aconsejaban no cometer el error de creer que la «masa» entendería espontáneamente estas verdades históricas. Los aniquilamientos, por lo tanto, debían ser explicados con el mayor cuidado. No hacerlo produciría graves malentendidos. De ello un buen ejemplo era lo ocurrido con el dirigente textil del PUM Enrique Castilla, asesinado por un comando del PCP-SL en las afueras de Lima a fines de octubre de 1989:

En el caso del vendeobrero [sic] del PUM, el problema que se presentó fue ejecutarlo sin haberlo desenmascarado ante el proletariado y el pueblo; debieron difundirse todas sus maldades, cómo traicionaba las luchas, cómo se vendía a la empresa, cómo suspendía el congreso textil cada vez que nosotros actuábamos, revelando temor al debate y delatándonos como «infiltrados». Si todo esto no se difunde, si no se hace campaña para desenmascararlo, entonces la masa no conoce sino un solo aspecto y tergiversado de su comportamiento.<sup>700</sup>

Frente a la impotencia del PUM y el fracaso del Trapecio Andino aprista, en medio de lo que se comenzaba a denominar como «la más profunda crisis del país desde la Guerra del Pacífico», el PCP-SL podía reclamar haber convertido a la sierra en su conjunto en el «gran teatro de la guerra popular».<sup>701</sup> Como aseveraría la dirección del PCP-SL algunos años más tarde: «queda claro que estamos desenvolviéndonos en la sierra del país», en el área que había sido históricamente el «eje de vertebración» del país, donde «cuando los incas, en la guerra con Chile fue la parte que más se defendió y es donde pueden replegarse fuerzas ante un ataque extranjero».<sup>702</sup>

<sup>693</sup> PCP-SL. «Bases de discusión», p. 387.

<sup>694</sup> PCP-SL. «Conclusiones del proceso de la lucha armada».

<sup>695</sup> PCP-SL. «Bases de discusión», p. 387.

<sup>696</sup> PCP-SL. «Tercera sesión preparatoria del Primer Congreso». Primera parte. p. 16.

<sup>697</sup> Véase «Los comités populares abiertos: en una base guerrillera. Reportaje a mando político». *El Diario Internacional*, n.º 11, Bruselas, febrero de 1992, pp. 10-12.

<sup>698</sup> Ibídem, p. 5.

<sup>699</sup> Causa proletaria 5, s/f. AGC.

<sup>700</sup> PCP-SL. «Sobre el balance de la aplicación de la primera campaña del plan para impulsar el desarrollo de las bases de apoyo». febrero de 1990.

<sup>701</sup> *El Diario*, 24 de julio de 1988, p. 27.

<sup>702</sup> PCP-SL, Comité Central. «¡Elecciones, no! ¡Guerra popular, sí! Balance y perspectiva de la guerra popular en el Perú» (1990). *El Diario*, 8 de febrero de 1991, p. 4.

Como ya se ha explicado, 1986 fue un punto de quiebre en la intensidad de la «guerra popular» en el norte del altiplano. Sistemáticamente, las principales empresas del área fueron objeto de arrasamientos. Al incendio de las instalaciones prosiguió el saqueo y el robo de ganado. Eran grupos pequeños los que actuaban. En otras ocasiones, como en los asaltos a la SAIS Macaya en marzo o a la ERPS Kunurana en junio, decenas de pobladores fueron convocados a participar.

No es fácil saber con exactitud el mensaje que los cuadros del PCP-SL portaban. En todas partes se referían, por supuesto, al problema de la tierra. En los fundos Altagracia y San Miguel de la SAIS San José —según un testimonio— prometieron «asesorar en diversos problemas, incluso técnicos». En otra incursión, anunciaron «estar organizando una fuerza de base del ejército popular, una organización que salga del pueblo, que no pertenezca ni al PAP ni a IU», cuyo objetivo sería saldar, definitivamente, el problema de la tierra.

Impartían, asimismo, una justicia cruda y elemental: ajusticiaban abigeos, amonestaban a choferes abusivos, conminaban a profesores a cumplir sus labores con responsabilidad. Los policías que actuaban contra el pueblo eran los que llevaban la peor parte. Afirmaron en diversas oportunidades no tener nada contra la Iglesia, pues más adelante «vendrá la lucha ideológica». «No son ustedes sino el Estado —habría manifestado un cuadro del PCP-SL a un sacerdote local— nuestro enemigo principal». Impresiona también su dinamismo y movilidad en un extenso territorio. Manejaban al detalle el movimiento de vehículos cuya captura les permitía breves e intensas campañas, al cabo de las cuales los integrantes de la columna armada se camuflaban en los barrios juliaqueños o puneños.

La toma de pueblos y el «ajusticiamiento» de autoridades complementaban el arrasamiento empresarial. Un ejemplo de ello fue la toma de Chupa, que Abimael Guzmán exhibió en su documento de agosto de 1986 como prueba de la primacía de su partido en el altiplano. Fueron veinte individuos los que entraron a esa localidad el 16 de febrero de 1986. Las principales autoridades del pueblo fueron capturadas de inmediato, las tiendas principales saqueadas y los víveres que almacenaban repartidos. Comenzó el «juicio popular» y el infeliz gobernador fue el primero en caer; la población rogó a los subversivos que pararan la matanza y éstos accedieron. La advertencia había sido hecha y todas las autoridades de Chupa renunciaron poco después.

Los dos asesinatos de 1985 habrían de convertirse en 32 al año siguiente. Entre mayo y junio de 1986, y nuevamente en diciembre y enero del año siguiente, se produjeron operativos policiales que suscitaron múltiples protestas. Debido a que la participación de algunos profesores en acciones subversivas ya era un hecho comprobado, escuelas y personal docente fueron blancos habituales de la acción represiva. Los memoriales denunciando robos, vejámenes y detenciones injustificadas se acumulaban en los archivos del CODEH-Puno y en las Vicarías de la Solidaridad. A comienzos de enero, la noticia de que una lista de supuestos colaboradores había caído en manos de la Policía Nacional acrecentó el miedo a la presencia subversiva. Entre el 14 y el 16 de ese mes 37 personas fueron detenidas en Asillo. El 21 de enero, la asamblea de alcaldes distritales de la provincia de Azángaro se pronunció: «[...] las fuerzas combinadas de seguridad del Ejército, Policía de Investigaciones, Guardia Civil y Guardia Republicana, desarrollan acciones de violencia deteniendo en las carreteras y comunidades campesinas en forma discriminada. Como autoridades, hemos recibido las quejas de los agraviados quienes manifiestan que sufren maltratos, despojos de enseres e inclusive dinero en efectivo».

Los datos revelados por la población permitían a la Policía Nacional reconstruir la estructura de las células y «bases de apoyo». Los integrantes de la «fuerza principal» —veteranos de otras regiones y con más de un ingreso a prisión en su mayoría— fueron rápidamente identificados.

El 15 de diciembre el PCP-SL atacó la mina San Rafael, en el distrito de Antauta, Carabaya. Unos 800 millones de intis y más de doscientas cajas de dinamita fueron sustraídos. Un médico y dos ingenieros fueron asesinados. Fue el mayor robo de explosivos ocurrido en la región. Un par de días después, en la localidad de Chacocanca, dos de los atacantes fueron intervenidos por la Policía Nacional en una acción de rutina. Se les encontró una ametralladora, bombas caseras y municiones. Fueron obligados a revelar el paradero de sus cómplices. Se produjo un enfrentamiento y dos policías quedaron heridos, mientras una integrante de la «fuerza local» fue muerta y los otros apresados, pero la «fuerza principal» completa logró abrirse paso a balazos.

Los detenidos proporcionaron algunas pistas sobre la composición de la fuerza armada del PCP-SL.<sup>703</sup> Fueron seis hombres y una mujer, todos ellos oriundos de Puno.

Luego, realizaron los ataques a la Municipalidad de Chupas y a la SAIS Illary, donde murieron los guardias Fuentes y Sulluca. En todas estas acciones, los miembros de la «fuerza local» actuaban como personal de apoyo.

*Teófilo* es un agricultor de 20 años. Afirmó ser miembro del PCP-SL desde julio de 1986, cuando participó en el ataque contra una EEAA azangarina: «Posteriormente —continúa— me retiré de las acciones subversivas por motivos de trabajo, ya que tenía que realizar gestiones con el Banco Agrario sobre préstamos de dinero para labrar mis tierras ubicadas en la comunidad de San Miguel (Asillo)».

En noviembre, *Rubén* lo reclutó nuevamente —bajo amenazas, según su declaración— con el fin de atacar la SAIS Illary. Con respecto a las muertes ahí ocurridas, *Teófilo* afirma que «los autores de tales hechos han sido los de la fuerza principal, ya que yo siempre iba más atrás, con los demás compañeros, cuidando las espaldas». Como *Pedro* en el ataque a la mina de San Rafael, recibió granadas caseras «para que las utilizara en caso de que vengan extraños, ubicándome fuera de la mina». Los dirigentes «fueron los que entraron a la mina y después de un rato me llamaron para cargar las cajas de dinamita».

Como en los casos anteriores, *Alberto* (21 años), *Juana* (16 años) —estudiante de primero de secundaria— y *Esteban* (13 años), de la localidad de Curayollo, Azángaro, reconocieron haber actuado bajo amenazas en el asalto de la mina San Rafael. Una foto de estos últimos tomada al momento de su detención muestra a dos jovencitos atemorizados. *Juana* —con polleras y descalza— parece estar a punto de llorar.

*Esteban* revela haber participado en siete «escuelas populares» dirigidas por *Anselmo* y *Ricardo*. En una de ellas estuvieron presentes «toda la célula y los padres de familia de la escuela primaria de Huaraypata, habiendo asistido algo más de cuarenta personas». En vísperas del asalto a la mina, los miembros de la «fuerza local» habían sido reunidos en Progreso, cerca de Asillo, donde uno de los «principales» les había mostrado un plano de la mina, instruyéndolos de la siguiente manera: «Por nuestro presidente *Gonzalo*, saludando al PCP, su sujeción plena e incondicional, les voy a bajar la tarea de atacar la mina de San Rafael».

*Horacio* y *Pascual* —que no habían participado en esa acción— fueron detenidos algunos meses después. Sus declaraciones coinciden con las anteriores. De 28 años y domiciliado en la parcialidad de Urpi-Jallapisi, *Horacio* declaró ser operador de tractor en el fundo San Martín, a tres kilómetros de la ciudad de Azángaro. Su historia es la siguiente: el 2 de diciembre, dos sujetos llegaron al fundo en que trabajaba «preguntando por el nombre de mi patrón». Al contestarles que no se encontraba, indicaron que estaban ahí para pasar la noche. Minutos después, hizo su aparición un grupo de 13 personas. Mientras unos dormían —manifiesta *Horacio*— «otros vigilaban por turnos los alrededores de la casa». Al día siguiente, «me llamaron para matar carnero para que comieran», para luego celebrar una fiesta por el «día del onomástico del camarada *Gonzalo*». El día 18 *Horacio* volvió a tener contacto con los subversivos. Es entonces cuando *Anselmo* «me hizo entrega de un millón de intis para que los guardara y, si fuera posible, los cambiara en dólares, ya que la Policía lo estaba persiguiendo, ya que habían tenido un enfrentamiento con ellos en la comunidad de Chacocunca».

Siguiendo las instrucciones, *Horacio* obtuvo los dólares en un establecimiento comercial de los alrededores del mercado de Juliaca. En las semanas siguientes, dos enviados de *Anselmo* llegaron a solicitarle determinadas sumas de dinero. En abril, finalmente, el propio *Anselmo* retornó para recoger el dinero restante. Fue la última vez que supo de él.

Agricultor y estudiante del Instituto Superior Pedagógico de Azángaro, *Pascual* reconoce haber participado por lo menos en dos acciones. Reside con sus padres en el fundo Balsapata, en Azángaro. La noche del 3 de diciembre fue intervenido por dos individuos armados que le pidieron que los llevara en su moto a un lugar que resultó ser el fundo San Martín. Ahí se encontró a un grupo que «bebía licor y bailaba»: «Siendo las tres de la mañana —continúa *Pascual*—, y encontrándome en estado de ebriedad, me retiré. Hago presente que, cuando me encontraba con los terroristas celebrando el día del presidente *Gonzalo*, todos nosotros dábamos vivas a la lucha armada».

---

<sup>703</sup> La información que prosigue ha sido tomada de copias de atestados policiales depositadas en el archivo del Comité de Derechos Humanos de Puno (CODEH-Puno).

Días después, *Pascual* recibió la visita de *Alfredo*, quien le comunicó que «todos los componentes del PCP-SL íbamos a tener una reunión en el campo y nos dirigimos a un cerro llamado Punta Sahuacasi». Tres días después, caminando de noche y ocultándose de día, llegaron a Tirapata. Es entonces cuando «*Anselmo* nos dice a todos que vamos a cumplir una tarea, o sea golpear el puesto del destacamento de la GRP». *Pascual* recibió una pistola ametralladora y dos granadas de mano. En un volquete robado, luego de occasionar dos bajas y apoderarse de armamento, los subversivos huyeron con dirección a Ayaviri. Al llegar a la ciudad, sostuvieron un nuevo enfrentamiento con tres miembros de la GR. Herido en el ataque de Tirapata, *Juan* agonizó en la tolva del vehículo. De ahí:

Nos dirigimos a la comunidad de Huamanruro, lugar donde llega cadáver el *Juan*, y con la ayuda de varias personas de la referida comunidad, enterramos al *Juan* y *Anselmo* tomó la palabra y dijo que era un compañero que había luchado por los intereses del pueblo, y hoy se nos va, y comenzó a llorar, ya que dijo que ambos se conocieron cuando iniciaron la lucha armada, envolviéndolo con una frazada lo enterramos.

Luego del sepelio, «nos dirigimos a la comunidad, en donde nos invitaron comida y nos quedamos toda la noche» para caminar al día siguiente hasta Santa Rosa. Una vez ahí, relata *Pascual*:

[...] al *Anselmo* le dije que me diera permiso para que me matriculara en el instituto y me negó el permiso y al insistir, accedió a mi petición y luego me retiré hacia Azángaro y en el mes de mayo [1987] me enteré que mis compañeros habían muerto en un enfrentamiento [...] Yo no participé en el asalto a la mina de San Rafael, enterándome por información periodística de lo sucedido, presumiendo que los autores son los mismos que atacamos los puestos de la Guardia Republicana de Tirapata y Ayaviri.

Impulsada por una singular combinación de voluntarismo y tenacidad, en doce escasos meses la columna dirigida por *Anselmo* había colocado a Puno en el mapa nacional de la violencia. Precaria y audaz, su supervivencia dependía, en última instancia, de la colaboración de una población que acaso la respetaba porque la temía, pero que no parecía dispuesta a desistir ni de la lucha legal ni de la movilización a través de los gremios «revisionistas». Fue en San Juan de Salinas donde este delicado equilibrio se rompió por primera vez.

Debido a su ubicación estratégica —como uno de los puntos que, con Asillo y San José, definen el triángulo de acción subversiva en el norte de Puno— el control de San Juan de Salinas revistió para PCP-SL una importancia especial. Ahí nació la FDCP en 1979. A mediados de 1986, Zenobio Huarsaya —fundador de la FDCP— era uno de los colaboradores con que los insurgentes contaban en dicha población. Segundino Machaca Quispe era el otro. A mediados de octubre, Machaca fue ajusticiado por soplón. Su cadáver fue arrojado en las afueras del pueblo «con orden de que no lo toquen»; su tío, juez de paz, desobedeció y corrió por ello la misma suerte.

La columna había ingresado a San Juan de Salinas en varias oportunidades e incendiado la empresa municipal de la sal —el recurso económico más importante del pueblo— buscando zanjar los problemas que enfrentaban a los trabajadores con el concesionario de los saladeros. La sede municipal tuvo similar destino en dos oportunidades. La posta médica fue despojada de equipo y medicamentos. Los comerciantes del pueblo se encontraban amenazados y eran obligados a pagar cupos. *Anselmo* entró al pueblo en cierta ocasión «con unas 25 cabezas de ganado indicando que las maten para comerlas». La gente no le hizo caso. La Policía Nacional llegó poco después y las recuperó. A raíz de este incidente —concluye el testimonio—, varios residentes fueron tildados de «soplones».<sup>704</sup>

Hacia fines de octubre de 1986, San Juan de Salinas era un pueblo sin autoridades ni representantes, intimidado y expuesto a las furias de policías y subversivos. En esas circunstancias, en cabildo abierto, los vecinos pidieron a Zenobio Huarsaya que lanzara su postulación a la alcaldía. Huarsaya obtuvo 303 de los 552 votos emitidos. Los *ayacuchanos* —afirma el testimonio— no podían permitirlo, y el 8 de abril de 1987, el *hippie* enfrentó su destino. Siete hombres y dos mujeres lo arrastraron de su domicilio hasta la plaza una mañana de miércoles. Su mujer y sus hijos miraban desesperados: «Lo arrodillaron ante doscientas personas, preguntaron si lo mataban y la gente clamó que no lo hicieran pidiendo que le den tiempo para que renunciara, a lo que los terroristas indicaron que estaban en guerra y que de todas maneras Huarsaya trabajaba para el gobierno. La gente estaba enardecida».<sup>705</sup>

<sup>704</sup> Guardia Civil del Perú, Jefatura Provincial de San Román. Atestado 21-SSE-JP.

<sup>705</sup> Ibídem.

No fue suficiente como para animarse a avasallar al puñado de encapuchados —sólo uno tenía la cara descubierta— que conducían a Huarsaya a su fin. La venganza vino más tarde, bajo la forma de una colaboración con la Policía Nacional. Días después del crimen, en efecto, la columna armada comandada por *Anselmo* fue diezmada cerca de San Juan de Salinas. Los sobrevivientes huyeron hacia el Cusco.

#### 17.5. LUCHA ARMADA *VERSUS* TERCERA VÍA

Los acontecimientos puneños de abril y mayo de 1987 fueron motivo de optimismo para aquellos que seguían creyendo en una tercera vía. Al demostrar que un sólido movimiento social podía ser capaz de contener la polarización, el norte puneño aparecía como modelo de pacificación sin militarización. Según el Instituto de Defensa Legal, en Puno:

[...] como quizá en ningún otro lugar del país, se configura un tipo de sociedad civil en la que convergen una importante organización campesina, partidos de izquierda de significativa influencia en la vida gremial, una Iglesia con fuerte asentamiento campesino, ONG legitimadas y con propuestas de desarrollo para la región y organismos de derechos humanos con cierto nivel de desarrollo. Todo ello había convertido a Puno en un referente nacional, de una forma relativamente exitosa de enfrentar el problema de la violencia, no basada principalmente en la represión y en el contraterror [sic], sino asentada en la movilización y la organización de la población.

En Puno —aseveró el diputado del PUM Alberto Quintanilla Chacón— el PCP-SL «ha sido derrotado política y militarmente; pueden reconstituirse, pero no podrán afirmarse en esta tierra que ya los ha rechazado».<sup>706</sup>

En lo inmediato, la contención del PCP-SL podía permitir: un fortalecimiento de la FDCP canalizando el espíritu combativo desplegado durante las tomas de tierras del 19 de mayo hacia la creación de organismos que —como las federaciones de Aricoma o San Antón— centralizaran las luchas de un conjunto de comunidades en una determinada extensión territorial, y también consolidar a la FDCP como portavoz indiscutido del movimiento campesino departamental. De obtener para los campesinos la titulación de la tierra tomada —observó un trabajador del IER Waqrani—, «las federaciones crecerían como la espuma».<sup>707</sup> De ser así, quizás el PUM podría llegar a ser para la sierra sur lo que el PAP para la costa norte: la fuerza hegemónica, el gran agente de reivindicación social y cambio político.

Acaso conociendo las debilidades del movimiento encabezado por el PUM, el gobierno no mostraba mayor interés en cumplir con los acuerdos pactados en el diálogo entre el Ministro de Agricultura y la FDCP. Un mes y medio después, ninguno de los puntos acordados había sido cumplido.<sup>708</sup> Sólo en septiembre, la Región Agraria XXI fue finalmente reorganizada. La FDCP pactó un nuevo acuerdo con su flamante director. Se estipularon medidas para poner en funcionamiento la «comisión paritaria» —sin gerentes y con participación de feudatarios y comunidades— acordada cuatro meses atrás. Desconociendo pactos previos, sin embargo, no se le reconocía capacidad resolutiva. Se limitaría a «tratar los problemas irresueltos referentes al proceso de reestructuración».<sup>709</sup>

El problema de fondo, no obstante, seguía en pie: el gobierno pretendía dar por concluida la reestructuración de las EEAA habiendo repartido menos de la mitad de las 1'100,000 hectáreas prometidas, y se negaba, de otro lado, a titular otras 364 mil hectáreas tomadas directamente por los campesinos del 19 de mayo en adelante. Desafiante, en el mes de octubre, la FDCP anunció que estas últimas serían tituladas por el propio gremio campesino.

El gremio y las autoridades llegaron a nuevos acuerdos que serían, una vez más, mayormente incumplidos. La guerra de comunicados continuaría por varios meses. De hecho, se produjeron nuevas movilizaciones. La del 24 de junio, por ejemplo, que transfirió a las comunidades varios miles de hectáreas más, o la toma de la central Moro, que abrió paso a la liquidación de la SAIS Buenavista. Pero la FDCP tenía un papel cada vez menor. Fueron tres oleadas de tomas las que se produjeron entre 1985 y 1987, recordaría Alberto Quintanilla Chacón años después. De ellas, la primera —Kunurana en diciembre de 1985— había sido bien organizada. La siguiente —19

<sup>706</sup> *La República*, 26 de julio de 1987, p. 19.

<sup>707</sup> Entrevista con Fortunato Alegría. Ayaviri, 14 de mayo de 1987.

<sup>708</sup> FDCP. «Nuevo plan aprista: cerrar la reestructuración y reprimir al campesinado». *La República*, 24 de julio de 1987.

<sup>709</sup> CCP. «Puno: un paso adelante en la lucha por la tierra y la paz». *La Voz*, 10 de abril de 1987.

de mayo de 1987— «no tuvo el mismo nivel de preparación, fue en realidad un desborde». <sup>710</sup> Menos planificada todavía fue la tercera oleada de junio/julio, ocurrida cuando las empresas habían recobrado algo de iniciativa.

En julio de 1989, de visita en Puno, el Ministro del Interior planteó la posibilidad de armar a los feudatarios convirtiendo a las EEAA en una suerte de bases contrasubversivas. Objetada por «diversas instituciones y personalidades», la propuesta fue dejada de lado. Este hecho, sumado a las incursiones de la recientemente creada Unidad Táctica Contrasubversiva (UTA) contra las comunidades conflictivas, complicaba la posibilidad de fortalecer a las federaciones locales, como la federación del distrito de Aricoma (FUCA), provincia de Carabaya, que resultaría, una vez más, poco menos que paradigmática.

A fines de septiembre, cinco asistentes a un «cursillo de fertilización y siembra de papas» organizado por esa federación en la localidad de Crucero fueron detenidos por la Policía Nacional, que, «a patadas y culatazos y sin ninguna explicación», los condujo en una camioneta de la empresa Aricoma «a los calabozos de la central Cayacachi». <sup>711</sup> Como había ocurrido en mayo, al día siguiente 250 «delegados de las comunidades» se dirigieron a ese lugar —sede de la SAIS Aricoma— con el fin de demandar la libertad de los detenidos. De pronto: «[...] nos alcanzaron los policías de la central Cayacachi en número de veinte, acompañados de civiles, soltando balas a diestra y siniestra, hiriéndonos a siete comuneros de gravedad en diferentes partes del cuerpo, contra todos nosotros indefensos, sin armas de ninguna naturaleza, cuando íbamos a conversar y hacer nuestros reclamos en forma tranquila y pacífica».

En las horas que prosiguieron al choque —según sostiene el testimonio de Porfirio Suni, su secretario general— las comunidades de Usicayos y Coaza fueron intervenidas por las fuerzas del orden, las que «quemaron ropas, chozas, salón comunal, llevándose sogas, *llikllas*, frazadas, radiograbadoras, dinero, relojes, gallinas y diciéndonos que los vamos a matar haciendo parrilladas y que Alan [García Pérez] nos manda que estemos contra el campesino, golpeando a las mujeres como les venía en gana y a algunos varones les han metido guano de caballo a la boca diciendo hablen ahora». <sup>712</sup>

La violencia policial se había convertido en un problema endémico. «Sin ruidos ni grandes despliegues — observó la Vicaría de la Solidaridad — Puno se militariza»: «Llegan a los pueblos y levantan su cuartel en locales comunales o en centros de servicio como centros de salud o escuelas. Nadie protesta, ni denuncia, ni condena. Se van aceptando las cosas así, por miedo a los unos y a los otros, imponiéndose, poco a poco, la ley del terror, de la resignación y de la muerte». <sup>713</sup>

El 30 de marzo de 1988, finalmente, el gobierno anunció la conclusión del proceso de reestructuración. La «fase de transferencia de tierra» quedaba definitivamente cerrada. A partir de entonces, la tierra «en poder de las empresas reestructuradas» adquiría la condición de intangible. <sup>714</sup>

Cinco semanas después —al cabo de casi un año de silencio tras el aniquilamiento de su columna en Cututuni, Azángaro— el PCP-SL reaparecía en el norte del departamento con un devastador ataque al puesto policial de Crucero. Seis policías y el juez de paz de la localidad fueron victimados en la acción. «No está confirmado —informó la Vicaría de la Solidaridad de Puno— si sus cuerpos fueron quemados antes o después de muertos». <sup>715</sup> A continuación, los subversivos se apoderaron de dos camionetas de la Misión Luterana, a bordo de las cuales se dirigieron a la central Cambría de la SAIS Picotani, «donde causan destrozos en un camión, volquete, almacén, oficinas y otras instalaciones». El 19 de mayo, finalmente, entraron al fundo Caluyo de la SAIS Cerro Grande —en la frontera de las provincias de Azángaro y Huancané—, donde causaron similar destrucción y realizaron «repartos de ganado ovino y vacuno a las comunidades campesinas cercanas al fun-

<sup>710</sup> Entrevista con Alberto Quintanilla Chacón, 12 de agosto de 1992.

<sup>711</sup> FUCA. «Sucesos ocurridos los días 24 y 25 de septiembre en Crucero-Carabaya», 25 de septiembre de 1987. Las citas que prosiguen provienen de este documento.

<sup>712</sup> Ibídem.

<sup>713</sup> «¿Qué pasa en Puno? Mensaje de la Vicaría de la Solidaridad». septiembre-octubre de 1987. En AVSP pueden encontrarse numerosos testimonios de denuncias de abusos policiales como, por ejemplo, los ocurridos en fiestas patrias de 1987 en la comunidad de Kenamari Bajo y Llali en la provincia de Melgar; el asesinato de la niña Juana Choque Miranda el 5 de octubre del mismo año por un policía en estado de ebriedad del puesto de Arapa, y la muerte del joven Juan Gutiérrez Mamani en un baile social realizado en Pucará a manos de un miembro de la Guardia Civil también en estado de ebriedad.

<sup>714</sup> Ministerio de Agricultura. «Comunicado a los productores agrarios de Puno». La República, 2 de abril de 1988.

<sup>715</sup> A menos que se indique lo contrario, la información que a continuación se incluye procede de la cronología sobre la violencia en Puno preparada por la Vicaría de la Solidaridad de ese departamento.

do». Un mes después, Jaime Centeno Jove, sucesor de Zenobio Huarsaya en la alcaldía de San Juan de Salinas, fue asesinado en la plaza principal de la ciudad de Azángaro.

Inmediatamente después del ataque al puesto de Crucero, policías de la central Cayacachi detuvieron a Porfirio Suni —secretario general de la FUCA—, quien, esa misma noche, «con violencia y malos tratos, es conducido a Ayaviri en el mismo camión que transportaba los cadáveres de los policías muertos el día anterior». Bajo tortura, Suni fue obligado a declarar que había colaborado en el ataque al puesto policial, implicando, asimismo, al párroco de Crucero, Bertho Muriel Pino.

En las semanas siguientes, la UTA realizó un operativo de rastillaje en las provincias de Melgar, Ayaviri y Azángaro. Fueron objeto de la acción represiva dirigentes gremiales como Julián Páucar y Timoteo Huanaco Manani, de la federación distrital de Santa Rosa; líderes comunales como Martina Tapara Quispe y Evaristo Germán Huaytara de Nuñoa, Melgar, así como misioneros laicos y animadores cristianos como Brígida Chevallay y Vladimiro Sotomayor Estrada. «Banderolas usadas en marchas, folletos sobre la reestructuración, libros de lectura popular» y propaganda del PUM (en los casos de Páucar y Huanaco) fueron exhibidos como pruebas de sus vínculos con la subversión.

La conexión entre el PCP-SL y el PUM es la tesis que la CENECAMP intentó reafirmar, aprovechando la coincidencia de la reaparición del PCP-SL con la publicación de un polémico artículo de Ricardo Letts en el cual, según la CENECAMP, el dirigente del PUM proponía la necesidad de integrar la lucha legal de los partidos revolucionarios (PUM), las actividades legales e ilegales del movimiento campesino (CCP) y la guerra que desarrollan los grupos alzados en armas (PCP-SL y MRTA).<sup>716</sup> Lo que el «desclasado latifundista Letts» y su «movimiento capitaneado por rabiosos burgueses miraflorinos, entre los cuales no hay un solo campesino auténtico» pretendían —sostuvo la CENECAMP— era destruir las «empresas socializadas» para reemplazarlas por «minifundios individuales en los que es imposible aplicar cualquier forma de organización socialista y producción tecnificada».<sup>717</sup>

La violencia, sin embargo, no fue sólo verbal. En junio, Marcial Couderc, párroco de Ayaviri, fue detenido por feudatarios de la ERPS Sora cerca de la localidad de Macarí. Tildado de «cura extranjero agitador de comuneros», Couderc fue retenido por varias horas para luego ser canjeado por un grupo de feudatarios que, a su vez, había sido apresado por comuneros de la zona.<sup>718</sup> Casas parroquiales fueron allanadas por la Policía Nacional. El propio alcalde de Puno encabezaba una implacable campaña denunciando la alianza de los curas extranjeros con la subversión. Se sabe, además, que el Ejército los miraba con considerable sospecha.<sup>719</sup> La Iglesia puneña se encontraba a la defensiva. La prelatura de Ayaviri se vio obligada a demostrar que las acusaciones que vinculaban al párroco Couderc con el asalto al puesto policial eran absurdas.<sup>720</sup>

Con relativa frecuencia, los representantes de la Iglesia debían acudir a los despachos de la autoridad militar con el fin de esclarecer sospechas o demandar sanción para los abusos que el personal policial cometía. Para evitar confusiones riesgosas, la Vicaría de la Solidaridad acordó que, aunque seguiría preocupándose por «la vida e integridad» de todos los detenidos, no defendería a «los comprometidos o integrantes de grupos terroristas» en los juicios propiamente dichos.<sup>721</sup>

Mientras tanto, el PCP-SL actuó con eficiencia. El 30 de junio, interrumpiendo su participación en acciones rurales, *David* y *Silver* bajaron a la ciudad de Puno con el fin de asesinar al alcalde Luis Dueñas. Un par de días después, el obispo de Puno celebró una misa por el eterno descanso de quien, durante sus últimos dos años de vida, se había dedicado a satanizar a los curas progresistas. Dos días después del funeral, la antena de radio Onda Azul, de propiedad del obispado, fue inutilizada con un artefacto explosivo. Hubo consenso en atribuir al comando Rodrigo Franco la autoría del ataque. Del asalto al puesto de Crucero al asesinato del alcalde Dueñas, en tan sólo tres meses, la frágil paz de 1987 había estallado en pedazos.

<sup>716</sup> Se refiere al artículo «La trenza». *La República*, 8 de junio de 1988.

<sup>717</sup> CENECAMP. «Basta de agresiones y calumnias contra el campesinado puneño». *La República*, 9 de septiembre de 1988.

<sup>718</sup> «Testimonio del P. Marcial Couderc, párroco de Ayaviri, sobre los hechos ocurridos en Sora». AVSP, 25 de junio de 1987.

<sup>719</sup> DIGIMIN. «Apreciación general por área y establecimiento de la subversión». Lima, 1987.

<sup>720</sup> «Comunicado de la Prelatura de Ayaviri». Ayaviri, 19 de junio de 1988.

<sup>721</sup> «Reunión de Vicarías de Solidaridad de los días 19 y 20 de diciembre de 1988». En: AVSP.

Para el PCP-SL la acción de Crucero llevaba un mensaje contundente: reiterar su presencia en Puno llevando la «guerra popular» ahí donde la masa había sido más agredida y mostrado mayor combatividad; contraponer a la futilidad de la negociación la efectividad de la lucha armada, mostrando la ausencia de dirección política del PUM en tanto que la lucha por la tierra y el acoso policial eran cotidianos; enmendar un grave error: el hecho de que, si bien a partir de 1982 ellos habían encabezado la liquidación de las empresas, no habían logrado aprovechar políticamente un indudable éxito militar. Así, con toda la importancia que Puno tenía dentro de la marcha de la «guerra popular», el trabajo ahí adolecía de serias debilidades.

Rubén Muelle Góngora, *Lino* —integrante de la Primera Compañía del PCP-SL, veterano del ataque a la cárcel de Ayacucho de marzo de 1982— había sido designado para recomponer la «fuerza principal» del norte altiplánico a inicios de 1988. Había fugado de la cárcel de Puno en diciembre de 1987. En las provincias altas del Cusco, se reunió con los sobrevivientes de la columna de *Anselmo*. Eran ocho cuando retornaron a Puno y, luego de un par de acciones menores en el área de Melgar, comenzaron en Crucero una campaña que —después del aniquilamiento del alcalde Dueñas— continuó con acciones contra miembros de la Policía, la SAIS Sollocota y Ayaviri y las tomas de Paratía y Calapuja hacia fines de año.

Era la fase preparatoria de un Plan Estratégico Operativo (PEO) que buscaba ampliar el ámbito de acción de la columna y desperdigar al enemigo abriendo varios frentes y obligándolo a «asentarse pasivamente». <sup>722</sup> En términos del PCP-SL, el objetivo era «especificar la base de apoyo, la red territorial y la red móvil», restableciendo contactos y determinando «líneas de movimiento». <sup>723</sup> Efectuar, en suma, el mejor reconocimiento posible; puesto que, como manifestó la dirección, «sin un buen reconocimiento no hay plan, porque es el punto de partida. De otra manera, sería como entrar en una casa a ciegas. No conviene». <sup>724</sup>

A *Adrián*, nuevo jefe del Comando Regional del Sur, le correspondía recuperar la iniciativa en Puno. <sup>725</sup> No sólo tendría que vérselas con un PUM fortalecido por su papel en las tomas, sino que las UTC habían dotado a las fuerzas del gobierno con mayor movilidad y poder de fuego en las áreas rurales. En noviembre, *Lino* y *David* fueron reconocidos en una calle de Juliaca, pero lograron fugar después de una breve balacera. *Adrián* ordenó, poco después, que elementos de la «fuerza principal» puneña apoyaran la fase preparatoria del PEO del comité zonal del Cusco. *Lino* marchó a la cabeza. Perdió la vida en un enfrentamiento en la localidad de Viluyo, en las alturas de Sicuani. Dos de sus compañeros fueron detenidos, mientras que los sobrevivientes retornaron a su base de origen. El comité cuzqueño quedó desactivado. En manos del comité zonal de Puno quedó, entonces, la responsabilidad de mantener viva la guerra popular en toda la región del sur. La tarea quedó a cargo de un joven arequipeño de 22 años, ex alumno del colegio jesuita de Arequipa, Juan Carlos Olivares del Carpio, *Daniel*, más conocido como *Gringo* por su tez clara y su estatura por encima del promedio local. Sobreviviente de la columna de *Anselmo*, *Daniel* asumió la tarea de completar el plan iniciado por el desaparecido *Lino*. Requirió, para tal efecto, reconstruir la «fuerza principal». Eran ocho al momento de atacar Crucero. Se redujeron a cinco después de la incursión en el Cusco. Para el mes de diciembre, con refuerzos llegados de Arequipa, sumaban no menos de 18. Herido por una esquirla de granada en el ataque al puesto de la GR de Calapuja, Olivares se recuperó, por ese entonces, en una casa de la zona céntrica de la capital departamental, a pocas cuadras de comisarías y cuarteles. Se cumplió, mientras tanto, la primera ofensiva del PEO, consistente en acciones de agitación y propaganda, aniquilamiento del gobernador de Acora, sabotaje a la subprefectura de Azángaro y la Zona de Educación en Puno y una acción de sabotaje y aniquilamiento contra el Proyecto Pampa, en las afueras de Juliaca. Sólo en enero Olivares estuvo en condiciones de internarse en las alturas de Azángaro para dar inicio a la primera ofensiva del PEO.

El asalto a la mina Los Rosales de Lampa —el 14 de febrero de 1989— fue una de las primeras acciones encabezadas por el *Gringo* Olivares tras su recuperación. Sustrajeron alrededor de doscientas cajas de dinamita que luego transportaron a diversos puntos del departamento. Con parte del botín en las manos, tres elementos de apoyo fueron detenidos una semana después en las inmediaciones de Juliaca. El hecho ocasionó el

<sup>722</sup> Ibídem, p. 21

<sup>723</sup> PCP-SL. «Información sobre el plan de la Tercera Campaña». Segunda parte.

<sup>724</sup> PCP-SL. «Tercera sesión preparatoria del Primer Congreso». Primera parte.

<sup>725</sup> Según un reporte del PCP-SL, este comité regional consta de tres comités zonales —Puno, Arequipa y Cusco— que declaran tener un número aproximado de 5 mil, 2 mil y 3 mil miembros, respectivamente.

desmantelamiento de buena parte de la red urbana constituida en el segundo semestre del año anterior. Las declaraciones de los detenidos permitieron conocer la dinámica interna del mecanismo subversivo.

A los 20 años, *Rosa* es una veterana de la «guerra popular». Su militancia data de 1986, cuando a *Adrián* mientras visitaba a un pariente en el CRAS Lurigancho. A instancias de éste, se vinculó a actividades con los familiares de los presos del PCP-SL. Se involucró, en algún momento, en acciones armadas. Acusada de participar en el asesinato de Rodrigo Franco, cumplió condena en el CRAS Canto Grande.<sup>726</sup> En octubre de 1987, recobró su libertad. Durante 1988 viajó en dos oportunidades a Arequipa, donde desempeñó varias tareas: «reglaje» del alcalde de Socabaya, reconocimiento para un atentado contra un comandante de la PIP, ataque al puesto de la GC de Porongoche y otras. A fines de año, estaba en Puno designada para intervenir en el aniquilamiento —al lado de *Silver* y *Tomás*— del oficial de la Armada Peruana Juan Vega Llona, agregado naval en La Paz, Bolivia. Permaneció en casa de *Maria* entre el 27 de noviembre y 31 de diciembre. Cumplida la tarea, retornó a Arequipa, donde permaneció hasta febrero de 1989, cuando viajó a Juliaca para servir bajo las órdenes de un viejo conocido: *Adrián*.

Luego de cumplir sentencia en la cárcel de Lurigancho, *Tomás* permaneció por algún tiempo en Arequipa donde, al menos en dos ocasiones, fue nuevamente detenido por la Policía Nacional. A mediados de 1988, estuvo en Puno como parte de la columna de *Lino*. Participó en las acciones de Paratía y Calapuja, en el atentado contra el Proyecto Pampa y en el asesinato de Vega Llona. Realizó un viaje previo a Bolivia con el fin de establecer contactos con elementos de apoyo en ese país.

El 3 de diciembre de 1988, éstos y otros integrantes de la red urbana del PCP-SL se reunieron en casa de *Maria* para celebrar el onomástico de *Gonzalo* y despedir a quienes viajaban a La Paz con el propósito de vengar a sus camaradas caídos en junio de 1986 en la prisión de El Frontón, isla frente al puerto de El Callao. Vega Llona —al mando de un escuadrón de helicópteros— había participado en el sangriento aplacamiento del motín subversivo.

*David* era otro de los veteranos del grupo. Había pasado cuatro años en Lurigancho. A Puno llegó también vía Arequipa. Se instaló en Juliaca y comenzó su actividad subversiva en la región con el ataque a Crucero.

Los otros detenidos eran jóvenes oriundos de Puno que se habían ido sumando de diversas maneras al núcleo de la casa de *Maria*. *Laura* conoció a esta última por su cuñada *Amalia*: la reclutaron para atender la herida del *Gringo Olivares*. Admitió su asistencia a la fiesta del 3 de diciembre, pero alegó no tener mayor conexión con el PCP-SL. *Juan Carlos* —que aportó información vital para planear ataques a Radio Nacional y al Ministerio de Transportes— se conectó a través de *Amalia*, quien fue «conviviente de su tío». Ésta, a su vez, inició su vinculación con el grupo cuando accedió al pedido de *Maria* de alojar a un miembro de la «fuerza principal».

*Nélida, Alicia y Juan Carlos* —cuyas edades fluctuaban entre los 18 y los 21— conocieron al *Gringo* en casa de *Maria* y su participación se limitó —según declararon— a dar información y a colaborar en el transporte de la dinamita. *Tatiana*, de 22 años, se incorporó en 1988, pero ya había participado en acciones armadas, como la incursión a Paratía. Luego se retiró a Puno, donde *Maria* le ordenó participar en un congreso del Instituto Superior Pedagógico de Juliaca. *Manuel*, un economista de la Universidad de Puno, ex empleado de CORPUNO y del Proyecto Pampa, colaboró en la planificación del atentado contra éste último. *Maria*, finalmente, con 21 años, fue sindicada por la Policía como la responsable del PCP-SL en Puno. Militaba —según declaró— desde mayo de 1988. Su experiencia de combate se reducía al ataque al Proyecto Pampa, donde fue victimado un empleado de dicha entidad.

Colocar el «trabajo militar como guía» apostando a que la autoridad que «emanaba del fusil» se tradujese en condiciones favorables para la construcción del nuevo poder era la clave de las acciones del PCP-SL. El *Gringo Olivares*, en ese sentido, era un jefe capaz de sorprender a sus adversarios desplegando una capacidad militar inesperada, teniendo en cuenta los limitados recursos de que disponía y los sucesivos golpes que su organización había experimentado.

Bajo su mando, la primera semana de enero de 1989 la «fuerza principal» penetró al «triángulo guerrillero» y dio comienzo así a la segunda ofensiva del PEO. Su incursión reavivó a las masas atraídas en campañas

---

<sup>726</sup> Rodrigo Franco fue un funcionario del gobierno aprista asesinado por integrantes del PCP-SL en las afueras de Lima en 1987. Al año siguiente, su nombre fue adoptado por un comando paramilitar auspiciado, al parecer, por el Ministerio del Interior.

anteriores. El ataque a San José, en la madrugada del 29 de enero, estableció con claridad la decisión del PCP-SL de librar el campo de todo tipo de «felipillos». Fueron —según el reporte de la Vicaría de la Solidaridad de Puno— alrededor de cien personas las que participaron en la acción. Se repartieron por el pueblo con el fin de detectar quiénes deberían ser sometidos a «juicio popular». «Después de conducirlos a la plaza, donde los amenazaron y cantaron sus consignas, los llevaron al Concejo Municipal y, siendo las 3:00 a.m., los ejecutaron». Entre autoridades, un dirigente de la SAIS San José y dos civiles más de filiación desconocida, fueron siete los asesinados. Saquearon, a continuación, las oficinas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y algunas tiendas. Se marcharon y dejaron una advertencia a autoridades y dirigentes para que renunciaran a sus cargos.

Los recuentos internos del PCP-SL revelaron algunos datos de la campaña política que antecedió y prosiguió a la incursión en San José. Se habían realizado 13 «asambleas populares», seis acciones de corte de carreteras, dos acciones de sabotaje y tres de agitación y propaganda.<sup>727</sup> Según otro documento, la ofensiva de enero resultó en 13 «comités populares» en Azángaro, 663 personas de masa directamente movilizadas, 2,650 indirectamente movilizados y 142 integrantes de la «fuerza de base». A fines de febrero, la detención de varios miembros de la red urbana fue un duro golpe para el PCP-SL. Entre los documentos que la Policía logró capturar, se encontraban listas de alumnos de colegios de Juliaca y de contactos en la Universidad Nacional del Altiplano. La columna subversiva se mantuvo intacta, pero la ausencia de apoyo efectivo en la ciudad, sin embargo, afectó inevitablemente sus acciones.

En el IV Congreso de la FDCP —celebrado en enero de 1989 en el distrito de Coata, provincia de Puno— más de mil delegados de todo el departamento se pronunciaron en favor de una huelga campesina regional, demandando reiniciar la reestructuración y medidas de emergencia para el sector agropecuario. De su II Congreso Nacional (junio, 1988), por otro lado, el PUM emergió dispuesto a disputar con el PCP-SL el control del sur andino mediante la constitución de organismos de autodefensa y otras medidas de preparación militar.

A fines de febrero de 1989, el PCP-SL decretó tres días de «paro armado» en Azángaro. Una serie de explosiones en diversos puntos de la capital provincial confirmaron la seriedad de la convocatoria. Nada se movió en la provincia. La vital comunicación con Juliaca quedó interrumpida. Tres días después, se inició la huelga de la FDCP. Se prolongó por 21 días. Se produjeron algunas tomas de tierras, bloqueos de carreteras y marchas a la capital departamental, que culminaron con un paro de 48 horas convocado por el recientemente formado Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Puno. La medida concluyó con la firma de una nutritiva acta de compromiso que formaba una «comisión mixta partidaria» encargada de vigilar los múltiples y numerosos acuerdos.<sup>728</sup>

A mediados de abril, la réplica del PCP-SL a la supuesta victoria del bloque FDCP-PUM comenzó a tomar forma. «Fuerzas locales» emprendieron acciones de arrasamiento y reparto de ganado en la provincia de Azángaro. Un mes después, la «fuerza principal» retomó su campaña contra las autoridades locales. El 13 de mayo atacó Muñani e ingresó en la Municipalidad en medio de una celebración popular. Entre decenas de pobladores tendidos en el suelo, los atacantes buscaron infructuosamente al alcalde y al teniente gobernador. Terminaron ajusticiando al secretario de la Municipalidad y al ex gerente de la SAIS Huayna Cápac. Quemaron posteriormente el local municipal, la biblioteca municipal y el local de Entelperú. Seis días después, mientras dirigía la reconstrucción de un puente dinamitado durante el paro armado de febrero, el alcalde de Azángaro Marcelino Pachari fue abatido a balazos: «se había advertido que nadie tocara ese puente y él, embriagado, se jactó de que no le temía al partido y lo desafió», explicaría años después un líder del PCP-SL.<sup>729</sup>

Al lado de su cuerpo, un letrero advertía: «Así mueren las autoridades burócratas, servidoras del viejo orden». La noche del 21 de mayo los subversivos se presentaron en el local del IER Waqrani, propiedad de la

<sup>727</sup> PCP-SL. «Información sobre el Plan de la Tercera Campaña». Segunda parte.

<sup>728</sup> CCP. «Movilización campesina: respuesta democrática», pp. 36 y ss. Los acuerdos negociados con las autoridades establecían procedimientos sumamente específicos cuyo cumplimiento iba a ser muy difícil de vigilar. Con respecto a la actividad minera en la provincia de Sandia, por ejemplo, se estipuló lo siguiente: «[...] inicialmente, el distrito de Yanahuaya recibirá todos los domingos, desde el primer domingo de mayo, una brigada de rescate de oro de la posta de Sandia para determinar el volumen de oro producido mensualmente y posteriormente, de acuerdo a lo captado, establecer los precios».

<sup>729</sup> CVR. Entrevista con Osmán Morote. Prisión de Yanamayo, junio de 2002.

Iglesia Católica, en las afueras de Ayaviri. En un par de horas, destruyeron las instalaciones educativas y administrativas, así como vehículos, generadores y maquinaria.

En la estación experimental de la Universidad del Altiplano de Chuquibambilla se observó una destrucción similar a la del IER. Sólo que ahí varios ejemplares de ganado seleccionado también fueron aniquilados.

En Macarí, gran dolor causó el asesinato del juez César Vera y el teniente gobernador Toribio Challco, dos autoridades que, paradójicamente, habían apoyado las tomas de tierra. Alguien desplegó el letrero dejado cerca de los cuerpos: «Así morirán los alcaldes, regidores, prefectos, gobernadores, teniente-gobernadores, funcionarios de CORDES, micro regiones, proyecto Pampa y todo representante del gobierno aprista fascista».

Hasta marzo de 1986, según Ricardo Vega, el PCP-SL no había reivindicado la lucha por la tierra y, lejos de centrarse en las EEAA, se había dedicado a atacar puestos policiales, asesinar autoridades políticas y hostilizar a líderes gremiales.

Fue solamente después del decreto de reestructuración en marzo de 1986 que empezó a escucharse en Azángaro sobre incursiones a las empresas, y en Melgar comenzó con el ataque a la central Huacauta en junio de 1986.

Luego de incursionar en Langui-Layo (Canas), en el vecino departamento del Cusco, el destacamento del PCP-SL enfrió nuevamente hacia Puno. Atacó en La Raya a otras dos estaciones experimentales universitarias. El 26 de mayo, en Nuñoa, asesinó a dos técnicos en la ERPS Alianza. Se dirigió de ahí hacia la zona de Azángaro donde, el día 29 de mayo, asesinó al alcalde de Ayrampuni. «Acto seguido —relata el informe de la Vicaría— amenazaron a la población para que no recogiera el cadáver bajo pena de muerte, por lo que éste permaneció botado por tres días hasta que fue recogido por una patrulla militar». En 16 días, la columna guerrillera recorrió setecientos kilómetros, promediando un ataque diario y asesinando a siete personas.

Nunca antes en la historia del conflicto armado interno la Iglesia había sido blanco del PCP-SL de manera similar. Los voceros eclesiásticos aprovecharon la oportunidad para marcar diferencias entre la lucha justa de los campesinos y la acción subversiva, para recordar al país, asimismo, que su solidaridad con los primeros era acaso la mejor manera de confrontar al PCP-SL en lugares como el altiplano puneño, donde la injusticia ofrecía condiciones favorables para su expansión. «Nuestra mística es mayor que la de el PCP-SL» declaró el Obispo de Puno a la prensa de Lima.<sup>730</sup> A finales de junio, la celebración de un cuarto de siglo de fundación del IER Waqrani motivó una amplia demostración de solidaridad y de cohesión de las fuerzas comprometidas con la tercera vía.

Nada volvería a ser como antes, sin embargo, después de la campaña del PCP-SL de mayo de 1989.

En los meses siguientes, la violencia alcanzó nuevas cotas de intensidad. A inicios de julio, en una emboscada a un vehículo de la SAIS Sollocota que transportaba personal policial murieron seis oficiales. Ocho de los atacantes fueron más tarde eliminados en un enfrentamiento con policías que acudieron al rescate de sus compañeros. El PCP-SL aparecía más decidido que nunca a no ceder en su empeño de afirmarse en la región y alcanzó su momento de auge luego de casi una década de presencia en Puno. Al compás de estas acciones audaces, la fama del *Gringo* Olivares crecía a niveles míticos. Con una mezcla de temor y respeto se habla de su frialdad para enfrentarse a la muerte. La distinción entre «senderistas buenos» y «senderistas malos» se diluyó ante el comportamiento sanguinario del nuevo jefe.

A mediados de año, un periodista capitalino que visitó la región hizo eco de una de las muchas historias que se tejen —ficción en su mayor parte— en torno a la columna encabezada por el *Gringo*. En Huancané —asevera su reporte— los subversivos visitaban las comunidades en helicóptero. Se hablaba, además, de una posible alianza con narcotraficantes que proveían a la columna de Olivares del armamento sofisticado, lo que explicaría su aparente superioridad militar.<sup>731</sup>

Entre enero y julio de 1989, el PCP-SL causó 23 bajas en las Fuerzas Policiales y asesinó a 14 autoridades. Al menos un par de docenas más suman las víctimas no reconocidas que murieron por «robar a nombre del

<sup>730</sup> «Entrevista con monseñor Jesús Mateo Calderón». *La República*, 30 de julio de 1989. Véase también «No hay relación entre lucha por la tierra y el terrorismo en Puno. Obispo de Ayaviri protesta por documental de Panorama». *La República*, 2 de junio de 1989.

<sup>731</sup> Munive, Mario, «Iglesia y la IU jaquean al PCP-SL». *La República*, 7 de julio de 1989.

partido», incurrir en abigeato, «soplonejo» o deserción. Sus cuerpos fueron arrojados en caminos transitados como símbolos del poder desafiante, apresurado y contundente que el PCP-SL construía en Puno. La Iglesia, las organizaciones campesinas, el conjunto del bloque regional de apoyo a la lucha por la tierra sintió el impacto de la presión del PCP-SL. Las evaluaciones internas de los miembros de las vicarías comenzaron a transmitir preocupación, miedo y sorpresa, esta vez en proporciones mayores a la mística y al coraje.

Ante esta situación, los integrantes de las vicarías de Ayaviri, Sicuani, Juli y Puno subrayaron la «necesidad de conocer datos, proyectos y caminar del PCP-SL por la zona» y de desarrollar un «código de claves para la comunicación interna y de radios». <sup>732</sup> En el mes de agosto, realizaron una constatación angustiante: «la infiltración del PCP-SL y las Fuerzas Armadas en todo tipo de organización popular, principalmente juvenil». Atravesamos —concuerdan— «por un momento difícil donde nuestro análisis debe ser mucho más claro y no debemos dejarnos confundir con informaciones falsas y especulativas». <sup>733</sup> Al mes siguiente, se verificó un agravamiento de esta situación. Frente a la infiltración del PCP-SL —sostienen los miembros de las vicarías— «no debemos ser ingenuos» y se debe ser particularmente cuidadoso en los casos de cursos de derechos humanos dictados a grupos amplios.

Se reafirmó, asimismo, que se había detectado la presencia del PCP-SL en sectores juveniles, en los institutos pedagógicos, tecnológicos e incluso en movimientos cristianos, así como en el SUTE y la Coordinadora Clasista. Se sugirió que cada vicaría realizara un «pequeño estudio sobre el SUTE y la Coordinadora Clasista», vista por muchos como organismo de fachada del PCP-SL. <sup>734</sup>

Evaluaciones de tono similar provinieron de otros sectores del movimiento democrático pro campesino. En septiembre, Santiago Aragón, militante del PUM que asumió la alcaldía de Azángaro en reemplazo de Marcelino Pachari declara:

En muchas comunidades han renunciado las autoridades por temor de ser asesinadas por el PCP-SL. Azángaro era a nivel de la FDCP una de las bases más fuertes, pero en estos últimos meses se ha resquebrajado ese nivel de organización. Operamos en condiciones muy difíciles, inclusive no nos permiten como antes salir a distritos ni a sitios alejados para apoyar las demandas de las comunidades. Antes desfilaban en fiestas patrias hasta noventa tenientes gobernadores, en 1989 desfilaron menos de veinte. Casi las tres cuartas partes han renunciado por amenazas y el subprefecto se ha visto obligado a recibir estas denuncias sin ofrecer alternativa alguna. <sup>735</sup>

El PCP-SL, sin embargo, no era la única fuente de violencia en el campo: ésta provenía también de la acción represiva del Estado. A lo largo de 1989 y 1990 —aun antes de que se declarara al norte del departamento en estado de emergencia en octubre de 1990—, varias provincias altiplánicas vivían una militarización de facto. Una característica de la acción represiva era su incapacidad para establecer diferencias entre los actos legales y de fuerza de los gremios campesinos y la actividad subversiva. Un informe de inteligencia militar de aquellos días aseveraba que «existen organismos de fachada, que en forma indirecta estarían apoyando a elementos sediciosos, tal es así los denominados “clubes de madres”, Movimiento de Obreros Clasistas y otras organizaciones gremiales y laborales y organizaciones estudiantiles existentes en Puno que son controladas por líderes identificados con la ideología y doctrina del PCP-SL».

En consecuencia, decenas de dirigentes fueron hostilizados, cuando no torturados y retenidos ilegalmente en condiciones inhumanas. En septiembre de 1990 se produjo el acontecimiento más dramático de aquella sombría ola de violencia oficial: en la comunidad de Chillutira, una incursión de la Dirección de Operaciones Especiales (DOES) culminó con la desaparición de varios dirigentes comunales que aparecieron posteriormente muertos, entre ellos, Dionisio Cantani Hancco, secretario general de la federación distrital de Orurillo. A las primeras denuncias de desapariciones, surgieron los temores de que Puno deviniera en otro Ayacucho. Un factor de optimismo era que, a pesar de su relativo debilitamiento, existía en Puno una Iglesia sumamente activa que, a través de una red de vicarías de la solidaridad que contaba con el apoyo de comités locales de derechos humanos, se encargaba de seguir al detalle los sucesos ocurridos en las zonas más alejadas, estableciendo una suerte de fiscalización. Así, mediante la denuncia rápida y amplia, la Iglesia lograba poner algu-

<sup>732</sup> Acta de la reunión de Vicarías. Ayaviri, 28-29 de junio de 1989. En AVSP.

<sup>733</sup> Acta de la reunión de Vicarías. Ayaviri, 13 de agosto de 1989. En AVSP.

<sup>734</sup> Ibídem.

<sup>735</sup> «Azángaro en estado de emergencia no declarado». *Sur*, n.º 125, septiembre 1989, p. 17.

nos límites a la violencia represiva que, al ahondar la desconfianza de la masa rural hacia las autoridades, terminaba favoreciendo a la insurgencia.

El infortunado profesor de Crucero, Porfirio Suni, sobrevivió para contar ante una cámara de video las torturas a que había sido sometido en el afán policial por culparlo del ataque al puesto policial de Crucero en mayo de 1988.

En septiembre de 1989 la FDCP conservaba todavía fuerzas para convocar a una segunda huelga campesina del sur como antesala a las elecciones municipales y regionales de noviembre. Como había ocurrido en marzo, se produjeron bloqueos, movilizaciones y algunas tomas aisladas. Catorce días después se levantó la medida y se estableció un nuevo diálogo con las autoridades que llevó a la formación de nuevas comisiones encargadas de hacer cumplir el pliego campesino. La respuesta del PCP-SL, sin embargo, fue inmediata: «golpea los mandos comunales para afirmar sus comités populares y realizar acciones de aniquilamiento». De tal suerte: «Frente a las limitaciones que tiene el partido para encarar el plan del PCP-SL, sólo nos queda la táctica del vacío y el repliegue de nuestros cuadros». Mientras la táctica del PUM de huelgas de masas parecía empantanarse, la columna armada del PCP-SL afinaba sus fuerzas para perturbar las elecciones municipales de noviembre.

La campaña se inició a comienzos de ese mes con una serie de ataques a autoridades locales.<sup>736</sup> El 13 de octubre, incursionaron en Muñani, donde asesinaron al encargado de la alcaldía, a un regidor y al secretario de la federación distrital de campesinos. Días después, una fuerza de aproximadamente cien individuos asaltó el asiento minero de San Antonio de Poto. Nueve policías, un gobernador y los alcaldes de Ananea y San Juan del Oro fueron asesinados. Solamente en Azángaro, entre el 3 y el 11 de noviembre, una veintena de personas, entre autoridades, candidatos y campesinos comunes y corrientes fueron asesinadas por los insurgentes en un esfuerzo por contener con sangre la voluntad de votar. El sufragio se realizó al día siguiente y solamente en cinco distritos azangarinos el PCP-SL consiguió impedir la celebración de los comicios. En los otros cinco, como en el resto del departamento, la votación siguió su curso con relativa normalidad.

El ataque contra autoridades locales no se detuvo tras los comicios. Entre el 29 de noviembre y el 3 de diciembre, 12 personas —miembros de IU en su mayoría— fueron victimadas en distritos de Azángaro y Melgar. De candidatos y autoridades electas, la persecución se extendió a las autoridades comunales. Ocurrió así en la comunidad de Choquepiñas, que perdió a tres de ellas, además de su gobernador. Fueron los sucesos de Orurillo del 3 de diciembre, sin embargo, los que mayor indignación provocaron en el núcleo del PUM de Melgar y entre los activistas de la FUCAM.

La noche del 3 de diciembre —según un informe— una columna ingresó a Orurillo, en las alturas de Melgar, y asesinó a ocho personas, entre las cuales estaba el alcalde electo de IU Tomás Quispesayhua, secretario general de la federación campesina distrital; Godofredo Marrón, secretario general del SUTEP; Pedro Pablo Tito Limache, profesor primario; Julio Céspedes, director del Colegio Agropecuario; Víctor Quispesayhua, gobernador; Nicolás Cahuata, juez de paz; Mario Lizardo López Quispe, campesino; Benito Isidro Mamani Condori, chofer. Luego de la matanza, los senderistas dinamitaron el municipio, la posta médica y prendieron fuego a las viviendas de sus víctimas.<sup>737</sup>

«En el distrito de Orurillo —manifiesta la viuda de Víctor Quispesayhua— había mucho miedo y su esposo, desde la fecha que quemaron el puesto de la Policía ya no era igual». Cuando tomaba —revela— lloraba y tenía miedo «dice me van matar, me van matar, decía mi esposo». Para ese entonces, salvo su esposo, «ninguna autoridad había, ellos vivían en otras partes, no teníamos a dónde quejarnos». La viuda de don Mario Lizandro, presidente de la CAP Quisuni, quiso defender a su esposo y recibió por ello un disparo en la pierna izquierda. Vinieron luego los tres tiros que terminaron con su cónyuge. Uno le dio en la cabeza, «por eso todos sus sesos estaban por todo el cuarto, y los huecos de las tres balas están hasta ahora en el cuarto». Y tras ello la sentencia final: «¡Así van a morir todas las malas hierbas del campo!, que no haya autoridades, para que todos tengan todo por igual, nosotros buscamos la igualdad para todos». Al despedirse, una mujer a quien llamaban *Nancy* le dijo «vamos a ganar, todo esto lo hacemos por ustedes, me abrazó y lloró».

Tomás Quispesayhua Aguilar, de 32 años, era el menor del grupo de victimados cuya edad promedio sobrepasaba los 40. Todos estaban casados. Tomás Quispesayhua —cuyo hermano es el gobernador de la locali-

<sup>736</sup> Aparte de los antes citados informes de la Vicaría de la Solidaridad de Puno, la información contenida en los párrafos siguientes ha sido tomada del Instituto de Defensa Legal. Perú 1989: en la espiral de la violencia, pp. 41-42.

<sup>737</sup> Ibídem, p. 42.

dad— se había vinculado con el PUM, en el que era considerado como uno de los más destacados militantes campesinos. Su prestigio provenía de su participación en la lucha por la reestructuración de las EEAA al frente de la federación de Orurillo, que reunía a unas cuarenta comunidades. Parte de esa lucha consistió en centralizar la venta de lana de alpaca y ovino. «Gracias a ello, Orurillo fue el primer distrito —según un informe del CODEH-Puno— que negoció directamente, y con buenos precios, la producción de lana frente a los monopolios». El ajusticiamiento masivo del 3 de diciembre dejó a Orurillo ya no sólo sin autoridades sino sin dirigentes, también con ocho viudas y 31 niños huérfanos.

Con 82 víctimas, que superaban largamente a las 23 del año anterior culminaba lo que había sido el año de mayor violencia en la historia reciente de Puno. A pesar de no haber logrado su objetivo de frustrar la campaña electoral, en doce meses, el PCP-SL había conseguido inclinar a su favor el balance del poder en las zonas rurales del norte del departamento. Entre sus logros de mayor relevancia cabe destacar los siguientes: copar el conjunto del «triángulo guerrillero», convirtiéndolo en base de lanzamiento para desplazamientos que cubrían un extenso abanico territorial: de San Juan del Oro (Sandia) y Cojata (Huancané) —sobre la línea fronteriza con Bolivia— hasta Calapuja (Lampa), Nuñoa (Melgar) —cerca del límite con el Cusco— y Crucero (Carabaya) al norte; establecer dos pelotones con sus respectivas «fuerzas de apoyo» y una amplia red de contactos que se movían entre Azángaro, Melgar y Carabaya, la primera y por la provincia de Huancané la segunda (la primera estaba conformada por cuarenta individuos y por unos veinte la segunda); y desplazar al PUM de su bastión azangarino valiéndose de su presencia militar en la localidad, la intimidación de dirigentes y la destrucción del IER Waqrani.

Eran éstas, en el esquema del PCP-SL, las condiciones adecuadas para impulsar sin dilaciones la construcción del «nuevo poder». «Si no se organiza a toda la masa —era lo que al respecto estipulaba el "pensamiento Gonzalo"— el nuevo poder no podrá sostenerse por mucho tiempo. No cabe masas amorfas ni poder sin masas organizadas bajo la dirección del partido». <sup>738</sup>

Acaso ensobrecido por sus éxitos del año anterior, en la madrugada del 20 de enero de 1990 Olivares se lanzó sobre la SAIS Sollocota encabezando una columna de unos treinta insurgentes. El destacamento de la Policía Nacional ahí instalado logró repeler el asalto. Los atacantes iniciaron el repliegue dividiéndose por grupos. Las fuerzas del orden emprendieron la persecución. Hacia el mediodía, alcanzaron al grupo encabezado por el *Gringo*, quien murió acompañado de cuatro de sus camaradas. El mito Olivares había terminado. «Lo calificaban —comentó la prensa capitalina— como el terrorista más sanguinario del que se haya tenido noticia en el Altiplano». <sup>739</sup> Cinco días después de la muerte de Olivares, en la ciudad de Huancané, Romeo Paca Pantigoso —militante del PUM por ese entonces— encabezaba la instalación del nuevo gobierno regional de la región José Carlos Mariátegui, integrada por los departamentos de Puno, Tacna y Moquegua. Era, sin duda, el paradójico desenlace de un año por de más trágico.

#### 17.6. ADIÓS A LA TERCERA VÍA

Al PUM, la presidencia de la región no podía llegarle en peor momento. Prácticamente toda su breve historia se había ido en concebir una alternativa frente al corporativismo de PAP y el «proyecto dictatorial pequeño-burgués» del PCP-SL. Hacia noviembre de 1989 —cuando los votos puneños emigraron nuevamente hacia la izquierda— ese proceso había llegado a un punto muerto. Era una verdadera paradoja —observó un militante del PUM— cuando el partido «se sumía en su más grande crisis, éste y la agonizante IU alcanzaban una importante victoria electoral». <sup>740</sup> Más que por los votos, a lo largo del último año, los sectores más radicales del PUM habían estado preocupados por encontrar la manera de hacer frente al desafío del PCP-SL en el campo.

La campaña de la columna encabezada por Olivares, en efecto, había prácticamente cercenado la capacidad del partido para actuar en el campo. A los golpes del PCP-SL, el PUM respondería con la llamada «táctica del vacío», que no era otra cosa que aprovechar la capacidad informativa de la red de la Iglesia con el fin de replegar a cuadros y dirigentes en situación de peligro. El dispositivo dejaba cierto margen de acción durante

<sup>738</sup> PCP-SL. «Bases de discusión», p. 391.

<sup>739</sup> *La República*, 28 de enero de 1990, p. 3

<sup>740</sup> PUM. «El camino a lo nuevo. Informe y balance de dos años del "Plan piloto Ande Rojo y de los esfuerzos por llevar a cabo los acuerdos del II Congreso Nacional"», 1 de noviembre de 1991, p. 8.

períodos de descenso de la actividad subversiva. De la destrucción del IER Waqrani, sin embargo, no había recuperación posible. El hecho obligaba al partido a crear sus propias estructuras. Había que imaginar proyectos «invisibles —recomendó la dirección del partido— que nosotros podamos seguir utilizando enmascarando más estrictamente nuestra presencia».<sup>741</sup> Las consecuencias del arrasamiento del IER, sin embargo, iban más allá de los aspectos logísticos: habían significado un duro golpe para la red institucional en la que el PUM basaba su presencia departamental.

Tras los bandazos dirigenciales y el desconcierto de la militancia —que observaba, desmoralizada, «la nula respuesta del partido frente a las agresiones sufridas por parte del PCP- SL»—,<sup>742</sup> los datos implacables de una nueva y efervescente realidad rural terminarían por convencer a los estrategas del PUM de que la era del Ande Rojo había llegado a su fin:

Nos encerramos en la defensa de supuestos intereses comunales y en alternativas de corte colectivista, sin apreciar que el proceso de diferenciación campesina en curso y la recomposición de poderes locales venía redefiniendo las relaciones entre comuneros, entre éstos y los feudatarios y entre los diversos sectores de la sociedad rural, impactada, además, por una prolongada crisis económica, por políticos populistas [Alan García Pérez] y asistenciaлистas (ONG, Iglesia), por una década de desastres naturales y por la creciente violencia que actuaba como factor desestructurador y desestabilizador.<sup>743</sup>

En circunstancias tales —y con el PCP-SL plenamente embarcado en su fase post *Gringo Olivares*—, la presidencia de la flamante región José Carlos Mariátegui más que una oportunidad para avanzar era un lugar para sobrevivir. Su fuerza electoral en el campo había llevado a la izquierda a ser mayoría en la asamblea regional. En la formación del primer Consejo Regional, el PUM apareció como la primera fuerza. Un análisis posterior del propio partido reconocería lo poco preparados para aquella responsabilidad que estaban sus cuadros: «A pesar del importante papel desempeñado por nuestro partido en el debate parlamentario sobre la regionalización y de la participación de nuestros cuadros en las luchas regionalistas, lo cierto es que no se realizó el cálculo ni se tomó las previsiones para un eventual ejercicio de gobierno en alguna región».<sup>744</sup>

En efecto, a pesar de que el PUM había conducido por varios años la lucha por la regionalización, nunca había dejado de verla como un «espacio de acumulación», como un mero terreno de conflicto aprovechable en la perspectiva de generar un movimiento de masas poderoso. En otras palabras, la cuestión de ejercer el gobierno no revestía importancia estratégica. De ahí que, mientras sus militantes se esforzaban por asumir las tareas de gobierno, su partido emitía la directiva de que había que impulsar un «gobierno de confrontación y no de concertación».

Sobre estas inciertas bases se formó, en enero de 1990, un gobierno conformado por una alianza de agrupaciones de la IU encabezadas por el PUM que sobreviviría ocho meses. En octubre, el UNIR y el PCP se asociaban al PAP y al Frente Democrático (FREDEMO) para constituir un nuevo gobierno, manteniendo al ingeniero Romeo Paca como presidente, quien, de esta manera, hacía abandono de su militancia del PUM para presidir un ejecutivo regional plural. El PUM quedaba así aislado y en camino de la marginalidad: «Habíamos soñado con una sierra poblada de empresas comunales —recuerda otro dirigente del PUM— olvidando que se trataba de un campesinado pobre». Se hubiesen necesitado subsidios ingentes para poner en marcha a las decenas de empresas comunales que esperábamos formar. «¿Cómo protegerlas sin violentar el mercado?».<sup>745</sup> El gran error había sido: «No apreciar procesos económicos que tienen muchos años. Creer que podíamos derrotar al mercado en base a transferir recursos de programas de desarrollo. Mantener la tensión comunero-feudatario había sido absurdo. Pretender establecer cualquier forma colectivista o estatista era contrario a la historia. En todos los sitios en que habíamos tenido esa experiencia se había manifestado así».<sup>746</sup>

En las áreas tocadas por las tomas, en efecto, un complejo panorama que se resistía a cualquier tipo de ordenamiento desde arriba comenzaba a prevalecer. A la par que los amedrentamientos e intentos de desalojo se sucedían los acuerdos entre comunidades y cooperativas —ambas de reciente formación— mientras antiguas

<sup>741</sup> PUM. «Evaluación del partido», febrero de 1990, p. 4.

<sup>742</sup> PUM. «Balance de la situación del partido». VII Comité Central, junio de 1990, p. 4.

<sup>743</sup> PUM. «El camino a lo nuevo», p. 7.

<sup>744</sup> «Región José Carlos Mariátegui: organización para un gobierno de izquierda (logros y limitaciones)». Manuscrito.

<sup>745</sup> Entrevista con Víctor Torres Lozada.

<sup>746</sup> Entrevista con Dante Vera Miller. Lima, 19 de agosto de 1993.

parcialidades volvían a quedar marginadas. Surgían —observó Víctor Caballero Martín— nuevas contradicciones que escapaban al control de la FDCP, enfrentamientos entre comuneros y feudatarios, entre comuneros y comuneros, entre feudatarios y familias no campesinas que recibieron tierras, etc. Una verdadera eclosión de «negociaciones, luchas, acuerdos, actas, compromisos» conducida «por los propios comuneros y feudatarios», procesos que culminaban en acuerdos informales que los funcionarios estatales se limitaban a consagrar.<sup>747</sup> Ante el fracaso del partido para organizarla, la «autodefensa» campesina tomaba un curso similar.

En algunos casos, los pueblos parecían aceptar las condiciones impuestas por el PCP-SL, estableciendo, al mismo tiempo, «mecanismos de protección de la autoridad local».<sup>748</sup> Asumir rotativamente los cargos directivos era otra opción. La organización comunal se camuflaba, en ciertos casos, bajo el «comité popular» del PCP-SL, desde el cual —a pesar de la oposición de sus mandos— se mantuvieron vínculos con las contadas entidades de desarrollo que actuaban en la «zona roja» del departamento. Núcleos de feudatarios cerraron filas con gerentes de EEAA en defensa de lo que quedaba de sus propiedades. Se armó y gestionó la instalación en sus predios de guardiciones militares o se negoció algún tipo de pacto con la columna del PCP-SL.

Ante el conflicto armado interno y las nuevas realidades económicas, el campesino respondió con un «cálculo realista de sus propias capacidades».<sup>749</sup> Obtuvo la tierra, buscó la manera de protegerla; optó tal vez por parcelarla. Si los riesgos se incrementaban, la dejaba encargada, migraba y retornaba apenas las condiciones lo permitieran. «Sobre esta situación política y militar concreta es que el campesinado comunero actúa, ordena su vida, la producción y sus festividades; calcula, resiste y aprende sin comprometerse; calla, oculta, apoya, denuncia; hasta que decide castigar con sus propias manos y organizarse para autoprotegerse».<sup>750</sup>

Un trágico incidente ocurrido en la CAT Quisuni es ilustrativo de las tensiones que atravesaban al movimiento democrático pro campesino. Dirigidas por la FDCP, varias comunidades tomaron tierras de dicha cooperativa en julio de 1990. Sorpresivamente, se hizo presente la columna del PCP-SL y asesinó a seis trabajadores de esa entidad, reiterando su consigna de que el único camino para conseguir la tierra es «con las armas en la mano». En los días subsiguientes proliferaron las acusaciones contra el PUM, la FDCP y los «curas comunistas» de la Prelatura de Ayaviri. ¿Era sensato seguir alentando la lucha por la tierra si no se podía proteger a los implicados? Bajo presión, en un comunicado bastante firme, la propia Prelatura de Ayaviri se distanció de las tomas, afirmó su rechazo a cualquier tipo de acto de violencia e invocó a que el problema de la tierra se solucionara por la vía del diálogo y la democracia. Por último, deslindó responsabilidades y señaló, con nombre propio, a quienes por varios años han dirigido el IER Waqrani como personas que «actúan a título personal».<sup>751</sup> La radicalización del movimiento —reconocería un dirigente del PUM— tendría sobre el bloque pro comunero un «efecto disolvente».<sup>752</sup> De ahí que, frente a la declaración, en octubre de 1990, de varias provincias altiplánicas en estado de emergencia, no se produjese una movilización similar a la de mediados de los años ochenta. La medida parecía ser el final de la ya debilitada tercera vía, a la vez que reavivaba los temores de que Puno se convirtiese en otro Ayacucho.

## 17.7. LOS CAMINOS DE LA CONTRAINSURGENCIA

Desde su entrada a fines de 1982 a Ayacucho hasta fines de 1990, se habían producido cambios significativos en la visión contrainsurgente de los militares peruanos: ahora incidían en ganar el respaldo de la población.<sup>753</sup>

Al cabo de una década de experimentación, podría decirse que las Fuerzas Armadas avanzaron en el camino de una estrategia propia con «notorio carácter autoritario» aunque sin los visos genocidas de, por ejem-

<sup>747</sup> Víctor Caballero Martín. «La realidad de las reestructuración de las empresas asociativas en Puno». En *Puno, tierra y alternativa comunal (experiencias y propuestas de política agraria)*. Lima, 1991, pp. 133-157.

<sup>748</sup> Rodríguez, Yolanda, «Los actores sociales y la violencia política en Puno». *Allpachis*, n.º 39, 1992, pp. 131-154.

<sup>749</sup> Consejo de Desarrollo Alternativo de Puno. Situación y perspectivas del proceso político-social y de la guerra interna en Puno. Propuestas y alternativas de pacificación. Puno, noviembre de 1992, p. 7.

<sup>750</sup> Ibídem.

<sup>751</sup> «Comunicado de la Prelatura de Ayaviri», 31 de julio de 1990.

<sup>752</sup> Entrevista con Víctor Torres Lozada.

<sup>753</sup> Además de los trabajos de Gorriti y Obando sobre la evolución de la estrategia contrasubversiva de las Fuerzas Armadas peruanas, véanse: Philip Mauceri. *Militares: insurgencia y democratización en el Perú, 1980-1988*. Lima: IEP, 1990 y Degregori, Carlos I. y Rivera, Carlos. *FF.AA., subversión y democracia: 1980-1993*. Lima: IEP, documento de trabajo n.º 53, 1993.

plo, la seguida años antes por los militares guatemaltecos.<sup>754</sup> Su aplicación colocó al régimen civil ante la disyuntiva de asumir la conducción directa de la guerra subordinando a cualquier costo a las Fuerzas Armadas o promulgar el marco legal demandado por los militares como condición imprescindible para terminar con la subversión. El golpe de Estado del 5 de abril de 1992 fue la respuesta a dicho dilema.

En Puno, como en otros departamentos serranos, los policías tradicionales habían constituido la primera línea de contención frente al PCP-SL. Sin entrenamiento y pobemente armados, fueron obligados a replegarse. En una segunda etapa, se introdujeron fuerzas especializadas y se intentaron nuevas fórmulas de acción conjunta policial-militar (Unidades Tácticas Contrasubversivas y Destacamentos de Operaciones Especiales). Emplazados en EEAA y centros mineros, su presencia significó una recuperación parcial de la iniciativa en las zonas rurales. Su actuación, sin embargo, creó controversia. «No queremos que Puno viva los momentos dramáticos que vive el pueblo de Ayacucho —sostuvo una declaración de las vicarías de solidaridad, pocas semanas después del inicio de la emergencia— como producto de una “guerra sucia”, donde la principal víctima ha sido y sigue siendo el pueblo pobre». Los temores, sin embargo, fueron diluyéndose con el correr de los meses. Un año más tarde, un representante de la Vicaría de Juli declaraba:

Nuestra relación con las Fuerzas Armadas era en un principio tirante. Pero cuando como Vicarías de la Solidaridad les llevamos denuncias de violaciones de derechos humanos y de abusos contra la población civil, reaccionaron diferente. Investigaban y sancionaban rápidamente. La relación se ha modificado. No hay desapariciones y salvo el caso de Chillutira, tampoco ejecuciones extrajudiciales. Ellos llegaron con la consigna de armar a las rondas campesinas, y como hubo una fuerte oposición canalizada por el gobierno regional, desistieron de eso. Son permeables entonces.<sup>755</sup>

El Ejército, en suma, mostró un sorprendente autocontrol y, tras la aparente pasividad, sin embargo, se desplegó una nueva estrategia en la que muchos vieron una sospechosa pasividad para actuar contra el PCP-SL. Se llegó a sostener que la estrategia militar consistía en esperar que el PCP-SL y el movimiento campesino «se enfrenten y se desgasten solos».<sup>756</sup> Los propios militares explicaron de otra forma su cautelosa actuación: «Fácil sería ordenar un ataque masivo a una comunidad presuntamente terrorista, pero eso sería perder todo lo que se ha avanzado hasta ahora en apoyo a la población [...] Sabíamos que después de su derrota [del PCP-SL] en Ayacucho, Puno iba a ser su teatro de operaciones más importante. Aquí, el problema era que la subversión había penetrado en todas las esferas sociales. Se requería, por lo tanto, una estrategia global».<sup>757</sup>

Ganar a las ONG, los proyectos de desarrollo y la Iglesia al lado de la contrainsurgencia era, en tal sentido, un paso crucial que los militares acometieron mediante la adopción de una política que combinaba las presiones, el diálogo y una relativa apertura.

La instalación, a inicios de 1990, de la región José Carlos Mariátegui (RJCM) permitiría a la izquierda reactivar el planteamiento de una pacificación bajo conducción civil y con participación de la población. Aunque reconocía «el hartazgo con la persistencia de la violencia y la muerte» prevaleciente en amplios sectores de la población regional, el PUM —cuyos militantes ocupaban las más altas posiciones del nuevo gobierno regional— confirmaba la necesidad de impedir que «el gobierno, las Fuerzas Armadas y la reacción» capitalizaran este «pacifismo elemental e instintivo» para convertirlo en «respaldo a la guerra contrasubversiva». Reafirmaba, por lo tanto, su posición de «denunciar al gobierno como factor contrario a una paz verdadera, duradera y justiciera» acordando una «plataforma mínima» para crear las condiciones para «una salida política y democrática a la guerra» que incluiría «el diálogo con los grupos alzados en armas».<sup>758</sup>

<sup>754</sup> Ibídem, p. 14. Sobre el caso guatemalteco, véanse, Carmack, Robert M., (ed.). *Harvest of Violence. The Maya Indian and the Guatemalan Crisis*. Norman y Londres: University of Oklahoma Press, 1988 y Fall, Ricardo. *Massacres in the Jungle. Ixcán, Guatemala 1975-1982*. Boulder, Colorado: Westview Press, 1992.

<sup>755</sup> Gallegos, Guido, «El PCP-SL nos ve como sus enemigos políticos». *Idee* n.º 32-33, diciembre de 1991. p. 31. Los cambios en la percepción de la situación puneña pueden seguirse en los siguientes artículos publicados por Ideele a lo largo de 1991: «Estado de emergencia en el sur, persistiendo en el error» (n.º 24); «¿Qué pasa en las nuevas zonas en "emergencia"?» (n.º 25); «Puno: entre la emergencia y la pacificación» (n.º 28); «Puno y San Martín: la paz busca un camino» (n.º 32 y 33); y «La batalla por Puno» (n.º 39).

<sup>756</sup> Paca, Romeo, «Política de pacificación en la región José Carlos Mariátegui». En *Una ruta posible. Propuestas de la I Conferencia por la Paz*. Lima: IDS, 1991, pp. 81-91.

<sup>757</sup> Entrevista con el coronel EP Alberto Pinto Cárdenas. Puno, 24 de febrero de 1995.

<sup>758</sup> PUM. «Lineamientos de táctica sobre la pacificación», 24 de mayo de 1991.

Para ese entonces, no obstante, muchos en la izquierda legal creían en la necesidad de tender puentes a las Fuerzas Armadas como condición para derrotar al PCP-SL. Desacuerdos en torno a este tema distanciaron a Romeo Paca Pantigoso del PUM. En un inicio, Paca Pantigoso había subrayado el compromiso de su gobierno de culminar el proceso de reestructuración, «terminando con los gerentes antidemocráticos y corruptos» e incluyendo «a la totalidad de las maquinarias y el capital» de las EEAA en dicho proceso. Había incidido, asimismo, en buscar «paz con justicia social» llegando incluso a apelar a los subversivos, a quienes llamó a dejar el camino «absolutamente equivocado» de su «jefe regional» (*Gringo Olivares*) y a integrarse a comunidades campesinas, sindicatos y organizaciones gremiales, en la lucha por la descentralización.

Las iniciativas de incluir al Ejército en el debate de la estrategia regional de pacificación fueron vistas desde el PUM como intentos por conformar un «gobierno regional cívico-militar». Inicialmente, el gobierno regional había explorado la posibilidad de formar grupos de autodefensa. Al menos en un caso, sin embargo, tal experimento había suscitado duras represalias del PCP-SL y el plan abortó tempranamente. Desde mayo de 1991, cuando el PCP-SL ingresó a Macusani arrasando el local municipal, el alcalde de Carabaya, Justo Pastor Luque Quico (IU), encargado de derechos humanos del gobierno regional, se vio obligado a residir en Puno. «La crisis de la fibra de alpaca ha favorecido mucho la penetración del PCP-SL en esa zona», dijo. «Los jóvenes sin tierra —añadió—, los sectores más inestables, acosados por el Ejército, son los que se van con el PCP-SL». Por la misma época en que el alcalde Luque se refugiaba en Puno, el PCP-SL asesinó en una calle de Juliaca a otro miembro de la Asamblea Regional: Porfirio Suni, víctima un par de años antes de la violencia de las fuerzas del Estado.

Ante los hechos, el presidente regional definió su posición con respecto a la pacificación y propuso que el gobierno regional ayudara a que las Fuerzas Armadas se convirtieran en aliados del movimiento popular.

De manera similar, el núcleo partidario del PUM de la provincia de Melgar se había declarado en rebeldía contra la dirección nacional del partido. El origen de esta pugna se remontaba a los tiempos del ataque al IER Waqrani cuando, según Ricardo Vega, el PUM había abandonado a su gente en Ayaviri a su propia suerte.

En los meses siguientes, la división se trasladó al seno de la FDCP. A comienzos de 1991, con ocasión del IV Congreso de la FDCP, quedó en evidencia que las diferencias habían llegado a un punto irreconciliable. El evento se redujo prácticamente a la pugna entre dos facciones por el control de la federación. A la división partidaria proseguía la división del gremio y, con ello, la quiebra del bloque pro comunero gestado en torno al respaldo de la lucha por la tierra.

El presidente del gobierno regional adoptó una actitud crítica hacia la FDCP y cuestionó su representatividad. En ese contexto, un grupo de ex asesores de la FDCP —incluido Ricardo Vega Posadas— optó por trabajar en la formación de un Consejo Unitario de Productores Agrarios, concebido como una representación más acorde con los múltiples intereses del campo puneño. A este nuevo espacio se sumó CENECAMP y la organización de los trabajadores de las empresas asociativas (FENATEPS) que, favorecidas por el nuevo clima político, encontraron las condiciones para salvar parte de su patrimonio, las ERPS sobre todo, que no tenían la presión comunal que las SAIS confrontaban. Paca —según otro vocero del sector asociativo— había prometido que «en menos de treinta días él liquidaba todas las empresas campesinas», pero no lo pudo hacer porque CENECAMP «ya no era la antigua fuerza de los gerentes» sino que ahora «había fuerzas y participación de los trabajadores» que lo habían hecho retroceder.<sup>759</sup> En tales condiciones, a mediados de 1991 el obispo de Puno, Jesús Calderón, fustigó de la siguiente manera a sus antiguos amigos: «Aquí en Puno la propia Federación está dividida a raíz de la ruptura del PUM, esto es escandaloso. ¿Cómo entonces se puede hacer causa común contra la violencia? A la región le corresponde abrazar el pluralismo, no estoy de acuerdo en que sea hegemonizado [sic] por un solo partido. Esto es lo que la está haciendo fracasar».<sup>760</sup>

El PUM, la FDCP y el movimiento democrático, que habían sido soporte de la tercera vía, habían entrado en la etapa final de su disgregación.

De hecho, para muchos dentro de la Iglesia, la lucha por la paz no implicaba el enfretamiento con el gobierno de los años ochenta. A inicios de 1992, la Iglesia había asumido la organización del semioficial Consejo por la Paz y la Vida. En los días que siguieron al golpe de Estado del 5 de abril de 1992, algunos de sus inte-

<sup>759</sup> Entrevista con Luis Ortiz (presidente de la CENECAMP de Puno). Puno, agosto de 1992.

<sup>760</sup> Ideele, n.º 28, agosto de 1991, p. 12.

grantes propusieron hacer público un pronunciamiento sobre los acontecimientos. Fue imposible, no obstante, lograr un acuerdo. Uno de sus miembros sostuvo que éste debía pronunciarse en contra del golpe en coordinación «con todos los partidos políticos y dirigentes de las diferentes organizaciones». Otro propuso dirigirse al Presidente de la República para «expresarle el amplio apoyo y respaldo a las medidas tomadas por el supremo gobierno para moralizar el Parlamento y al Poder Judicial» y pedirle «que se tomen las medidas necesarias para que la pacificación nacional no se viera envuelta en situaciones de violencia». Finalmente, un tercer miembro se opuso a hacer un pronunciamiento, porque sería visto como una cuestión política mientras que «la organización que instalamos el 24 de marzo pasado en la ciudad lacustre sólo persigue lograr la pacificación en el Perú teniendo como esencia los principios cristianos». El desacuerdo era el punto final de un breve e intenso proceso en el cual, uno tras otro, el PAP, la izquierda, la regionalización y el PCP-SL colapsarían, dejando el terreno libre a la imposición del fujimorismo.

#### 17.8. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La crisis del Puno ganadero de las grandes haciendas y la ruta de la lana —de las alturas de Melgar a Manchester, Inglaterra—, las nuevas contradicciones creadas por la Reforma Agraria y la debilidad de las propuestas regionales crearon el contexto en que diversas prácticas y discursos intentaron encabezar la transición hacia un nuevo orden: proyectos políticos nacionales que veían en Puno una valiosa frontera de expansión —Puno como cabeza de un Ande Rojo; Puno como capital del trapecio andino, Puno como trinchera de combate del sur—. Todos, de diversas maneras, buscaron captar las energías que las demandas campesinas generaban. Los diversos enfoques ideológicos que en ese afán pusieron en juego asignaban a la protesta rural diversos grados de potencial transformador. Los apristas rememoraron viejos ideales agraristas y recuperaron antiguas visiones más bien románticas de la comunidad. Otro tanto hicieron sus adversarios del PUM que, a su vez, pretendían crear un nuevo tipo de movimiento regional impulsado por la «fuerza histórica» del campesinado. El PCP-SL, por su parte, llegó a la región con un esquema maoísta que colocaba al campesinado pobre como protagonista central de la revolución. Todas estas fuerzas, en diverso grado, llegaban dispuestas al uso de la violencia. La política puneña, entonces, tomó la forma de una compleja batalla regional. ¿Logró el PCP-SL afirmarse en Puno? ¿Fue la «tercera vía» una posibilidad real? ¿Quién ganó?

Más allá de las interpretaciones que de los acontecimientos regionales hacen los activistas partidarios o del posible uso que éstos buscan dar al capital político acumulado en los confines del sistema político, son los propios campesinos quienes —en concordancia con su particular visión de los acontecimientos regionales y nacionales— tomaron las decisiones clave que determinaron la evolución de la «batalla por Puno». Ellos toleran, respaldan o sancionan a la guerrilla; se alían con los agentes pastorales y los militantes izquierdistas para realizar su propia agenda o toman la palabra al Presidente, encargándose de velar por el cumplimiento de sus ofertas, llevando hasta su conclusión última la lógica pro comunera de su discurso. Su aceptación condicionada del programa militar terminó siendo, asimismo, el factor esencial del desenlace de la contienda. Fueron ellos, a fin de cuentas, quienes con sus acciones hicieron de la «tercera vía» una posibilidad alcanzable y quienes sancionaron su posterior irrelevancia.

Es en el contexto comunal —con todas sus contradicciones y diferenciaciones internas— donde se tomaron las decisiones que determinaron el sentido de la acción campesina. Frente a las propuestas —revolucionarias, reformistas o modernizantes— de los intelectuales partidarios, eclesiásticos o estatales, los campesinos articularon visiones políticas sustentadas en tradiciones locales de larga data. El sentido de continuidad de tales visiones, sin embargo, no suprime la actualidad y pragmatismo de las decisiones contemporáneas.

En el caso del campesinado del norte puneño, tal requisito obliga a referirse a las primeras décadas del siglo, cuando el proyecto comunal fue derrotado por las haciendas en el contexto de una expansión de la actividad exportadora lanera. El triunfo de las haciendas no significó la proletarización masiva de los campesinos ni, mucho menos, la desaparición de la comunidad. Fue el inicio, más bien, de una sorda lucha que, a lo largo de varias décadas, implicó la incorporación de nuevos actores y nuevos esquemas de dominación que aseguraran la continuidad del esquema definido hacia 1920. Es en la prolongada brega con proyectos de desarrollo, organismos internacionales, misiones adventistas y congregaciones católicas, agencias estatales y ONG, como se fue forjando la cultura política del campesinado altiplánico a través de múltiples alianzas y coaliciones,

efímeras o más o menos duraderas, genuinas o engañosas, acaso cruciales para garantizar su supervivencia, no así para asegurar el fin de su marginación.



## 18. LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

Luego de haber sido clausurada a raíz de la Guerra del Pacífico, el 24 de abril de 1957 el gobierno de Manuel Prado promulgó la ley 12828, que reabriría la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSC). El 3 de julio de 1959, la UNSC reinició sus actividades con 228 alumnos. La reapertura de la UNSC se produjo en el contexto del proceso de modernización del Estado; en este sentido, fue concebida como una entidad promotora del desarrollo local.

La presencia de la Universidad generaría un cambio en el mapa político de la región y la ciudad de Ayacucho: permitió la aparición y expansión de nuevos grupos políticos de tendencia opuesta a los poderes tradicionales encarnados en la jerarquía de la Iglesia Católica y el PAP.

Una de las incógnitas centrales que esta investigación intenta desentrañar es en qué medida los profesores y estudiantes de dicho centro de estudios fueron, efectivamente, promotores de la violencia y por qué, a lo largo del conflicto armado éstos fueron estigmatizados, visión alimentada por el hecho de que parte de la dirigencia del PCP-SL perteneció a la UNSCH.

#### 18.1. LA UNSCH RETORNA AL ESCENARIO AYACUCHANO

En 1961, cuando la Universidad todavía tenía menos de cuatrocientos alumnos, se formó el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), impulsado por la Juventud del Partido Comunista que integraba a un conjunto de vertientes izquierdistas e independientes.

En 1962, el FER apoyó la elección de Efraín Morote Best como rector de la UNSCH. A partir de ese momento, la hegemonía de las corrientes marxistas sobre el PAP y los social-cristianos se impuso con mayor claridad. La hegemonía del FER puede ser entendida en función de su trabajo político en el ciclo básico o estudios generales, concebido como un espacio en el que el alumno universitario pudiera subsanar las carencias de la educación secundaria. El control de este espacio era fundamental, ya que en él confluyían los alumnos que luego se integrarían a las diversas facultades.

En esta época, la UNSCH se convirtió en un polo de atracción para docentes provenientes de diversas universidades del país. Uno de los nuevos profesores en integrarse fue Abimael Guzmán, que se convirtió en uno de los principales promotores del trabajo político del FER y del Partido Comunista en la Universidad y la región.<sup>761</sup>

Paralelamente, la Universidad recibió a docentes de la Escuela Normal Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, institución que había sido relanzada a inicios de los años cincuenta dentro de la misma ola modernizadora que inspirara la reapertura de la UNSCH. Fueron precisamente estos docentes, conocidos como «cantuteros» los que impulsaron, en 1964, la creación de los Planteles de Aplicación Guamán Poma de Ayala. La apertura de estos planteles permitiría ampliar el trabajo del FER hacia los estudiantes secundarios; en esta labor, era fundamental el trabajo político de los estudiantes de Educación que hacían allí sus prácticas docentes. El fruto de esta labor proselitista fue la formación del Frente Revolucionario Estudiantil Secundario (FRES), que posteriormente permitió la articulación de una federación de estudiantes secundarios denominada FUESA, que tuvo una importante participación en los sucesos de Huanta en junio de 1969.

Este primer contacto inició una larga relación entre la UNSCH y La Cantuta, que permitirá el flujo de docentes entre los años sesenta y setenta, relación que fue utilizada más tarde por el PCP-SL para su expansión política en Lima. Entre el grupo de «cantuteros» que llegó a Huamanga se encontraba el profesor de teatro Víctor Zavala Cataño, quien se integraría a la organización del PCP-SL en La Cantuta y, posteriormente, en la década de los ochenta, sería uno de los principales dirigentes de Socorro Popular en Lima, organismo de apoyo al trabajo político-militar del PCP-SL.

A inicios de la década de 1960 también se formaría la Federación Universitaria de San Cristóbal de Huamanga (FUSCH) la cual pronto sería controlada por el FER, que indiscutiblemente era la organización con mayor presencia en los claustros huamanguinos.

Justamente en el momento en que el FER comenzó a lograr mayor presencia en diversas universidades del país, se produjeron las pugnas entre las tendencias pro chinas y pro soviéticas del Partido Comunista. En este contexto, en 1964, luego de una conferencia nacional, el Partido Comunista se dividió y surgieron el PCP Unidad, que asumió la línea oficial de la Unión Soviética de Nikita Kruchev, y el PCP Bandera Roja, identificado con la China de Mao Tse Tung. La mayor parte de las bases campesinas y juveniles comunistas se integraron al PCP Bandera Roja, mientras que los sectores obreros mayoritariamente optaron por el PCP Unidad. El FER

<sup>761</sup> En 1962, Abimael Guzmán se incorporó a la UNSCH; en 1964, Guzmán fue nombrado director del Ciclo Básico (Estudios Generales); posteriormente, ocupó la jefatura de personal, y durante su permanencia en Huamanga, registró una gran influencia en la Facultad de Educación. Fuente: Jiménez, Benedicto. *Inicio, desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú*. Lima, 2000.

en Huamanga también se vio afectado por esta división y, si bien mayoritariamente sus dirigentes se integraron al PCP Bandera Roja, un sector disidente formó su propio frente estudiantil, denominado Movimiento Universitario Revolucionario (MUR), grupo que se identificó con el PCP Unidad y tuvo poca influencia en la vida universitaria. De este modo, a mediados de los años sesenta, había tres movimientos importantes en la UNSCH, de los cuales, sin lugar a dudas, el que tenía mayor apoyo estudiantil era el FER, cada día más claramente identificado con el pensamiento de Mao.

En 1966, el país vivía convulsionado por diversos problemas políticos y sociales que terminarían con el derrocamiento del gobierno de Fernando Belaunde Terry en 1968 por un sector de generales del Ejército. Un año antes, en 1965, se habían producido movimientos guerrilleros y la insatisfacción social frente al gobierno era creciente.<sup>762</sup> En este contexto, la UNSCH fue percibida como peligrosa y subversiva, lo cual explicaría que el gobierno central intentara recortar su presupuesto. Este hecho generó el rechazo no solamente de la comunidad universitaria sino del conjunto del pueblo ayacuchano, lo cual demostraba la enorme influencia en la vida social, cultural y económica que tenía la UNSCH.

El rector Efraín Morote consideró que era necesario que el pueblo de Ayacucho defendiera su Universidad, y obtuvo el apoyo de organizaciones como la Federación de Barrios. Esta coyuntura dio pie al surgimiento del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que tomó como una bandera central la lucha por la defensa de la Universidad y, luego de masivas movilizaciones, el gobierno fue obligado a rectificar su decisión. El Frente de Defensa permitió al PCP Bandera Roja ampliar su influencia desde la Universidad hacia los barrios y las organizaciones sociales.

En 1967, el PAP, en ese entonces aliado de los sectores oligárquicos y el clero huamanguino, decidió crear la Universidad Católica de Ayacucho, la cual luego tomaría el nombre de Universidad Particular de Ayacucho Víctor Andrés Belaunde (UPA). Con el fin de lograr este objetivo, pidieron el apoyo de Luis Alberto Sánchez, en ese entonces rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La colaboración de Luis Alberto Sánchez permitió que la UPA recibiera presupuesto público para su fundación; pero, pese al apoyo recibido, el PAP y la Iglesia local no pudieron mantener el control en dicha Universidad, que pronto fue copada por el PCP Patria Roja, una de las facciones desprendidas del PCP Bandera Roja a finales de los años sesenta.

En 1968, en medio de una profunda crisis política, se produjo un golpe militar y asumió la presidencia el general EP Juan Velasco Alvarado, que impulsó diversas reformas sociales entre 1968 y 1975. Estas reformas terminaron por liquidar el régimen oligárquico en crisis, y en el caso de Ayacucho, afectaron seriamente los poderes locales de los latifundistas y gamonales. En este proceso, cobró mayor importancia la intelectualidad local formada en la UNSCH, que ocupó los espacios creados por el vacío de poder. En este proceso, es importante no perder de vista la relación entre la UNSCH y el frente de Defensa del Pueblo.<sup>763</sup>

Las reformas del gobierno militar fueron evaluadas por la mayor parte de la izquierda como medidas que buscaban frenar el avance del movimiento social en ascenso a finales de los sesenta; sin embargo, al interior de la izquierda hubo posiciones divergentes, desde las posturas maoístas radicales que vieron en el gobierno militar la encarnación del fascismo, hasta el «apoyo crítico» brindado por el PCP Unidad.<sup>764</sup>

Al interior del PCP Bandera Roja se produjeron las lecturas más ortodoxas y singulares del proceso. La afirmación del carácter semifeudal de la sociedad y la calificación del régimen como fascista generaron innumerables debates al interior del partido y de su filial en Huamanga, el Comité Regional José Carlos Mariátegui. Ya para esta fecha estaba claro el liderazgo que ejercía Abimael Guzmán.

El poder del PCP Bandera Roja en la UNSCH aumentó en 1968, cuando finalizó la gestión de Efraín Morote en el rectorado.<sup>765</sup> En 1969, el gobierno militar promulgó la ley 17437, que buscaba reordenar y despolitizar a las universidades públicas, sustituyendo los consejos universitarios legalmente elegidos por consejos ejecutivos.

<sup>762</sup> En 1965, hubo actividades guerrilleras del MIR y ELN en la provincia ayacuchana de La Mar. Aunque no repercutieron en la vida universitaria, sí aumentaron los temores del gobierno central sobre la posibilidad de que, desde la UNSCH, se alentaran actividades subversivas (Degregori 1986).

<sup>763</sup> Degregori, Carlos Iván. *El surgimiento del PCP-SL*. Lima: IEP, 1990.

<sup>764</sup> Los debates de la época se centrarían en la caracterización del régimen militar y sus reformas. Las múltiples rupturas de las organizaciones de izquierda, cuyas distintas vertientes ensayaron diversas interpretaciones sobre el proceso que vivía el Perú, generaron un conjunto de organizaciones políticas de siglas muy parecidas, que periódicamente experimentaban procesos de división.

<sup>765</sup> Degregori, Carlos Iván. Ob. cit.

tivos que podían manejar verticalmente la vida universitaria. Lo paradójico de la medida era que, en muchos casos, permitió que justamente los sectores más radicalizados de la universidad llegaran a los consejos. En estas circunstancias, Abimael Guzmán logró tener presencia en el Consejo Ejecutivo y ocupó las importantes jefaturas de Personal y Bienestar Estudiantil.

La presencia de Abimael Guzmán, así como la de Antonio Díaz Martínez en las jefaturas de Personal y Bienestar, respectivamente, no solo obedecía a la fuerza política del sector que los respaldaba, sino fundamentalmente al prestigio que ambos se habían ganado en la comunidad universitaria. Sin embargo, una vez ocupados estos puestos, el manejo que se ejerció desde ellos fue fundamentalmente partidario. Luego de la ruptura del PCP Bandera Roja, el PCP-SL heredaría su poder e influencia al interior de la UNSCH.

Para fines de los años sesenta, el entonces profesor Abimael Guzmán ya había ocupado varios cargos de importancia como director del Ciclo Básico y miembro del Consejo Universitario.

En junio de 1969, el gobierno militar promulgó el decreto 006, que recortaba la cobertura de la educación gratuita. Esta medida desató una importante movilización social de rechazo, en la que destacó la presencia de la Asociación de Pequeños Propietarios y las organizaciones ligadas al PCP Bandera Roja. En Ayacucho, la lucha fue dirigida por el Frente de Defensa, pero en Huanta el movimiento se tornó mucho más violento y con presencia de campesinos. El gobierno reaccionó con extremada dureza, reprimiendo la protesta y encarcelando a los dirigentes, pero finalmente derogó el cuestionado decreto 006. Este suceso ha perdurado en la memoria de la población como la lucha por la gratuidad de la enseñanza; incluso inspiró la letra de la canción popular «Flor de retama», en la cual se relata la entrada de las fuerzas del orden a la ciudad de Huanta y la represión contra campesinos y estudiantes movilizados.

Los sucesos de Huanta marcaron un hito importante en el inicio del proceso de reconstitución del Partido Comunista. Cuando ocurrió el movimiento de Huanta, el PCP Bandera Roja estaba en franco proceso de desintegración. En 1965, el PCP Bandera Roja se dividió por primera vez y surgió de su interior el Partido Comunista Marxista Leninista. Posteriormente, en 1967, la Juventud de Bandera Roja mostró discrepancias con su dirección nacional y pidió a Abimael Guzmán que encabezara una nueva división. Guzmán no aceptó y, finalmente, las bases juveniles y magisteriales impulsaron, en 1968, la formación de un nuevo partido conocido como PCP Patria Roja.

Los sucesos de junio del 1969 fueron la prueba de fuego que convenció al sector del PCP Bandera Roja, liderado por Abimael Guzmán, de iniciar un camino propio hacia lo que ellos denominaron la reconstitución del Partido Comunista.<sup>766</sup> La lucha de Huanta marcó un punto de inflexión en la historia regional ayacuchana y la formación del PCP-SL, ya que significó una victoria parcial que posteriormente fue aprovechada políticamente:

Así, en la primera política estratégica de la reconstitución, se desenvuelven los inicios del trabajo de masas del partido [...] dirigiendo las históricas luchas del 20, 21, 22 de junio de 1969 de Ayacucho y Huanta, movilizando a las masas de estudiantes secundarios y padres de familia contra el decreto 006 de Velasco [Alvarado] consiguiendo su derogación; organizó el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, reorganizó el Frente Estudiantil Revolucionario, creó el Movimiento Femenino Popular, el Centro de Trabajo Intelectual Mariátegui, el Frente Revolucionario de Estudiantes Secundarios y el principal de todos, el Movimiento de Campesinos Pobres. Así sentó nuevas políticas de trabajo de masas, nuevas formas de lucha y formas orgánicas.<sup>767</sup>

## 18.2. MASIFICACIÓN SIN PROYECTO UNIVERSITARIO (1970-1978)

A inicios de la década de 1970, la UNSCH experimentó una expansión y llegó a contar con aproximadamente 3 mil estudiantes, como se muestra en el siguiente cuadro.

---

<sup>766</sup> El propio Abimael Guzmán, entonces dirigente del Comité Regional José Carlos Mariátegui del PCP Bandera Roja, fue encarcelado debido a los sucesos de Huanta.

<sup>767</sup> <[www.solrojo.org](http://www.solrojo.org)>.

**Cuadro 4**

INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA UNSCH ENTRE 1969 Y 1977				
Año	1969	1971	1974	1977
Población	2,241	3,319	4,467	7,610

Fuente: UNSCH. Dirección Universitaria de Planificación.

Esto se produce en un contexto en el cual se masificó la educación universitaria en todo el país. Estos procesos de expansión de la matrícula estudiantil carecían de un proyecto concreto sobre la función que la universidad debería cumplir en los procesos de desarrollo regional y nacional. La expansión educativa permitió que la composición social de los estudiantes se tornara más heterogénea. A la par que aumentó el número de alumnos provenientes de distintas zonas del país, subió el de aquellos originarios del interior de Ayacucho.

Como se aprecia en los cuadros siguientes, a medida que aumentaba la población estudiantil en la UNSCH, se reducía el porcentaje de estudiantes huamanguinos y se incrementaba el número de alumnos procedentes de otras provincias del departamento, muchos de ellos llegados de pequeños poblados o ciudades intermedias.

También se observa que, entre 1965 y 1976, la composición del programa de Educación siempre fue más ayacuchana y con mayor presencia de estudiantes provenientes de zonas distintas de la capital departamental. Otro dato adicional importante a tener en cuenta es que, en el programa de Educación, durante los años setenta, hay un incremento de los estudiantes provenientes de Cangallo y Víctor Fajardo, provincias donde el PCP-SL desarrollaba un intenso trabajo con maestros y escolares.<sup>768</sup>

**Cuadro 5**

UNSC 1968-1976: PORCENTAJE DE ALUMNADO AYACUCHANO SEGÚN PROVINCIA DE PROCEDENCIA			
PROVINCIA	1968	1973	1976
<b>TOTAL</b>	100.00	100.00	100.00
Base: Nro. Alumnos	(789)	(1754)	(2309)
Huamanga	66.40	52.80	45.90
Cangallo - Víctor Faja	12.80	17.00	28.80
Huanta	10.70	11.10	8.30
La Mar	7.20	7.40	6.30
Lucanas	2.00	8.10	7.90

Fuente: UNSCH. Dirección Universitaria de Planificación.

Desde fines de la década de 1960, paulatinamente se incrementó el porcentaje de alumnos no ayacuchanos en la UNSCH, hasta llegar a ser dos tercios en 1976. Como se aprecia en el cuadro 6, un proceso distinto se vivió en la facultad de Educación, donde, pese al incremento de alumnos de fuera del departamento, esta facultad mantuvo un perfil más ayacuchano.

La diversificación de la procedencia de los estudiantes hizo que el FER pusiera mucho interés por influir en la Serie 100 o Ciclo Básico (Estudios Generales), donde se puso en marcha el trabajo con la presencia de algunos docentes en cursos claves. De manera paralela, también aprovechó la colaboración de estudiantes egresados del Guamán Poma de Ayala, quienes contaban ya con cierta formación política.

<sup>768</sup> Para mayor información, véase en especial el estudio sobre el comité zonal fundamental.

**Cuadro 6**

UNSCH 1965-1976: PORCENTAJE DE ALUMNOS AYACUCHANOS Y NO AYACUCHANOS EN LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN		
AÑO	% de alumnos ayacuchanos en Educación	% de alumnos no ayacuchanos en Educación
1965	69.40	30.60
1968	60.90	39.10
1973	63.00	37.00
1976	61.60	38.40

Fuente: UNSCH. Dirección Universitaria de Planificación.

A inicios de los años setenta, el sector dirigido por Abimael Guzmán, aprovechando su influencia sobre el Consejo Ejecutivo de la UNSCH, presionó para introducir un conjunto de cambios curriculares, lo que significó la proliferación de cursos basados en los manuales del marxismo leninismo producidos mayoritariamente por la Academia de Ciencias de la URSS.<sup>769</sup> La introducción de estos cursos promovió la presencia de posiciones teóricas dogmáticas que descalificaban a todo aquel que pensara distinto o tuviera una actitud crítica: «La reivindicación de la “actitud crítica” es una típica idea burguesa. En cuanto al dogmatismo, es cierto que es anticientífico pretender copiar soluciones mecánicamente [...] la “libertad de crítica” no es sino un repique burgués. Hoy, cuando precisamente la teoría científica tiene que enfrentar a los desbordes ideológicos de la burguesía, el antidogmatismo tiene un profundo sabor antimarxista».<sup>770</sup>

La justificación para estos cambios curriculares apeló a que se debería desarrollar una posición científica (el marxismo leninismo), aporte teórico que recogería el aporte práctico de las luchas durante la década de 1960, por lo cual consideraban que el aspecto académico en ningún momento se debería desligar de la política, entendida como proselitismo.

La influencia de los cambios curriculares fue considerable en facultades como Educación, Sociales y Agronomía, donde había mayor asistencia de alumnos provenientes del ámbito rural, de pequeños poblados y de ciudades intermedias. Precisamente es en estas facultades donde el FER concentró sus mayores fuerzas. También hubo importante presencia del FER en especialidades con mayor asistencia femenina, como Servicio Social, Obstetricia y Enfermería. Las mujeres luego tendrán una participación destacada en el trabajo político del PCP-SL.

La introducción de los nuevos cursos encontró resistencias en las especialidades de Ingeniería, en las cuales el FER tenía menor influencia y había un bloque más consolidado de oposición.

Como Abimael Guzmán era director de Personal se encargó de nombrar profesores no tanto por méritos académicos sino por clientelas partidarias: «Todo docente que no estaba dentro de la orientación ideológica de Sendero [el PCP-SL] se le buscaba cualquier motivo [...] un error pequeño era agrandado y calificado como incapacidad académica, eso era motivo de tacha, y en ese entonces el director de Personal era Abimael Guzmán» (ex dirigente del sindicato docente).

De igual manera, la presencia de Antonio Díaz Martínez en Bienestar Estudiantil permitió tejer relaciones clientelares con los estudiantes, muchos de ellos provenientes de las provincias del departamento de Ayacucho y para quienes el comedor y la vivienda resultaban indispensables.

Si bien en el FER había militantes provenientes de ciudades intermedias, pequeños poblados y zonas rurales, alrededor de Abimael Guzmán se había formado un entorno de dirección de otra extracción social, que tenía lazos familiares en común y que, a la larga, se convertiría en la dirección del partido:

El vínculo era el hijo del campesino que estaba estudiando aquí en la universidad y que los acompañaba, pero no incorporaron a éstos como dirigentes políticos, ya fueron los Guzmán, los Cárdenas, los Morote, los Durand, los

<sup>769</sup> Degregori, Carlos Iván. «La revolución de los manuales: la expansión del marxismo leninismo en las ciencias sociales y la génesis de Sendero Luminoso». *Revista Peruana de Ciencias Sociales*, vol 2, n.º 3, 1990.

<sup>770</sup> «Investigaciones». *Revista de Ciencias Histórico-Sociales de la UNSCH*, vol. 2, tomo II, 1979, p. 154.

Casanova, éste ese fue el tipo de dirigente que tuvieron, eso era porque los otros llegaron siempre siendo los de logística a segundo orden, porque al final Sendero [el PCP-SL] empezó a funcionar como grupo cerrado. (Ex militante de Vanguardia Revolucionaria)

A medida que el grupo de Abimael Guzmán iba adquiriendo mayor poder en la Universidad, las discrepancias con la dirección del PCP Bandera Roja, conducido por Saturnino Paredes,<sup>771</sup> se fueron acrecentando hasta llegar a un punto en que el grupo de Guzmán decidió romper definitivamente con el grupo de Paredes e iniciar el proceso de reconstitución del Partido Comunista:

En lucha de dos líneas lidió [Abimael Guzmán] contra el revisionismo que llevaba a las masas al electoreroísmo [sic] [con referencia al PCP Unidad] [...] combatió a [el PCP] Patria Roja forma de revisionismo que traficaba como hasta hoy con el lema «el poder nace del fusil» [...] derrotó al liquidacionismo [sic] de derecha [PCP-Bandera Roja de Saturnino Paredes] que diluía la dirección del partido en las masas, pregonaba el legalismo [sic] y se expresaba a través de la Confederación Campesina del Perú.<sup>772</sup>

La división del PCP Bandera Roja también produjo la división del FER entre el denominado FER de la Montañas, ligado inicialmente al PCP Bandera Roja, y el FER «por el Luminoso Sendero de Mariátegui», formado por los seguidores de Abimael Guzmán y por cuyo lema se conocería popularmente al nuevo partido recién creado.

En Ayacucho, al interior del Comité Regional Mariátegui, la mayor parte de las bases estudiantiles y magisteriales siguieron a Abimael Guzmán, mientras que las bases campesinas se mantuvieron fieles al grupo de Saturnino Paredes. Al poco tiempo, sin embargo, el PCP Bandera Roja volvió a procesar una división; esta vez, sus comités de Lima, Cusco y Huanta se apartaron y formaron el sector conocido en los medios universitarios como FER Antifascista: «El FER llamado de Los Cerros que era de la dirección de [el PCP] Bandera Roja con Saturnino Paredes, luego se configura en dos facciones: el FER Bandera y el FER Antifascista, entre los setenta precisamente hasta los ochenta, desarrollándose relativamente más el FER Antifascista» (ex militante del FER Antifascista).

El FER Antifascista, como su similar de Lima, no expresó a un partido en especial, sino a un conjunto de tendencias maoistas y pro albanesas. Su composición social fue similar a la del FER del PCP-SL y ambas organizaciones mantuvieron una fuerte rivalidad al interior de la UNSCH. A inicios de los años setenta, fue clara la hegemonía del PCP-SL en la federación de estudiantes (FUSCH) y el sindicato docente (SUTE UNSCH).

A diferencia de la diáspora producida al interior en la facción dirigida por Saturnino Paredes,<sup>773</sup> el sector liderado por Abimael Guzmán se concentró desde la UNSCH en un febril trabajo político por la reconstitución del Partido Comunista. Para ello, se basaron en la exacerbación de la ortodoxia ideológica y la lectura exegética de los escritos de José Carlos Mariátegui, y mantuvieron, pese a todos los indicios empíricos, la tesis de la semifeudalidad y semicolonialidad del Perú, tal como lo expresa la siguiente cita: «El Perú es un país semifeudal y semi-colonial y lo prueba y lo demuestra en su esquema del proceso económico de nuestro país. [José Carlos] Mariátegui nos hace un esbozo de las clases en el Perú y de su evolución histórica, nos habla con otras palabras lo que hoy día el pensamiento marxista en el Perú sigue desarrollando bajo el pensamiento de Mao».<sup>774</sup>

El PCP-SL basaba su actividad no solamente en la ortodoxia de sus argumentos y la descalificación de sus oponentes, sino también en el uso de la fuerza como medio para mantener su control sobre la Universidad. Todo esto en medio de un clima de intolerancia: «En esa época, ya hay un terrorismo ideológico, porque asistí a una asamblea universitaria que era en el paraninfo universitario, y Sendero [el PCP-SL] dirigía el sindicato, allí observé que asistían porque tenían la obligación de asistir y el que se oponía o discrepábamos eran totalmente apabullados» (ex dirigente del sindicato docente).

<sup>771</sup> Saturnino Paredes era el principal dirigente del PCP Bandera Roja y de una de las facciones de la Confederación Campesina del Perú (CCP).

<sup>772</sup> <[www.solrojo.org](http://www.solrojo.org)>.

<sup>773</sup> Las sucesivas divisiones llevaron, en la práctica, a la desaparición del PCP Bandera Roja. La última presencia pública importante de Saturnino Paredes fue su elección como constituyente en 1978 por el FOCEP, frente electoral integrado por sectores trotskistas liderados por Hugo Blanco, el abogado izquierdista Genaro Ledesma y lo que quedaba del antiguo PCP Bandera Roja.

<sup>774</sup> Guzmán, Abimael. «Para entender a Mariátegui». Conferencia pública en la UNSCH, publicada en <[www.geocities.com/comunismo\\_peru](http://www.geocities.com/comunismo_peru)>.

Pronto surgieron, sin embargo, corrientes críticas de docentes que planteaban mayor reflexión académica sobre los procesos sociales, muchas de ellas conformadas por profesores ligados a los partidos de la nueva izquierda, en especial del MIR, que si bien tenían cierta influencia del pensamiento maoísta, comenzaban a producir reflexiones teóricas más flexibles que cuestionaban las visiones dogmáticas impuestas por el PCP-SL:<sup>775</sup>

El MIR era un grupo, lo que podríamos decir ahora, de intelectuales, gente que podía argumentar mejor, los otros [el PCP-SL] eran gente que repetían mecánicamente todo igualito, y desde el primer hasta el último te repetían la misma cosa, no había alguien que le pusiera particularidad; entre los MIR la gente podía y notaba algunas cosas nuevas que aparecían. (Ex militante de Vanguardia Revolucionaria)

La presencia del MIR hizo que el PCP-SL perdiera su hegemonía en el sindicato docente. Los docentes ligados al grupo de Abimael Guzmán se vieron obligados a formar un sindicato docente paralelo. Para 1974 este sindicato, ligado al PCP-SL, era claramente minoritario.

El PCP-SL pasó a la ofensiva para revertir sus retrocesos en el movimiento docente y convocó, en 1974, a un congreso nacional de la FENDUP.<sup>776</sup> En este congreso, fueron derrotados por los grupos opositores, lo cual implicaba, al mismo tiempo, una dura derrota al interior del movimiento docente. La creación de organizaciones paralelas o el intento de copar las existentes fueron prácticas muy arraigadas entre los seguidores de Abimael Guzmán. En el intento de formar una CCP<sup>777</sup> paralela a la dirigida por Saturnino Paredes y a la dirigida por Vanguardia Revolucionaria, el PCP-SL organizó un congreso campesino cuyos asistentes eran, en gran parte, estudiantes universitarios huamanguinos.

La oposición hacia el PCP-SL prontó creció también entre los estudiantes. De este modo, en 1973 se conformó la alianza denominada Frente Único de Estudiantes (FUE), integrada por el FER Antifascista, el MIR, Vanguardia Revolucionaria, el PCP Bandera Roja, el PAP, los demócratas cristianos, entre otros. Pese a la heterogeneidad del FUE, en su interior había una clara hegemonía de los sectores de izquierda, entre los cuales destacaba el MIR.

El FUE logró capitalizar el sentimiento anti PCP-SL. El 17 de julio de 1973, el FUE derrotó al FER en las elecciones para renovar la junta directiva de la FUSCH.<sup>778</sup> En este mismo contexto, las fuerzas del FUE también lograron desplazar al FER de la residencia universitaria luego de una batalla campal, como lo manifiesta la siguiente entrevista:

Siendo el enemigo común este grupo del FER de Sendero Luminoso [PCP-SL], hay una alianza entre MIR, Vanguardia, grupo de Huanta,<sup>779</sup> [el PCP] Patria Roja y que se plasma en una pelea abierta física aquí en la residencia. El FER estaba dentro de la residencia controlando el proceso electoral y los otros están en afuera [...] logran prácticamente dominarlos físicamente, porque fue una pelea con piedras, con waracas, con palos, etc.; ha habido contusos, cabezas rotas y tomaron la residencia finalmente. (Docente, ex militante Pukallacta)

Sin embargo, dos años después de la derrota del FER, la FUSCH quedó acéfala y se convocó a nuevas elecciones, en las cuales ganó el FER por un pequeño margen. El PCP-SL retomó la federación en 1976 con Guillermo Durand a la cabeza. En 1978 los dirigentes estudiantiles del PCP-SL abandonaron paulatinamente sus cargos para dedicarse a las tareas de preparación del inicio de la «guerra popular».<sup>780</sup>

En 1974, el grupo de Abimael Guzmán perdió poder en el Consejo Ejecutivo. Un año después, el PCP-SL tomó los Planteles de Aplicación del Guamán Poma de Ayala en un intento por mantener su influencia en

<sup>775</sup> La nueva izquierda en la UNSCH estuvo representada fundamentalmente por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y, en menor medida, por Vanguardia Revolucionaria. También se difundía la revista teórica Crítica marxista leninista, publicación del Partido Comunista Revolucionario.

<sup>776</sup> La FENDUP era el gremio que agrupaba a los docentes universitarios de todo el país.

<sup>777</sup> La CCP es la Confederación Campesina del Perú. Durante los años setenta funcionó una CCP mayoritaria controlada por Vanguardia Revolucionaria y otra minoritaria dirigida por el PCP Bandera Roja. El PCP-SL intentó sin éxito formar una tercera CCP.

<sup>778</sup> El FUE, encabezado por el estudiante Aníbal Pérez, logró mayor apoyo en aquellas facultades que, como Ingeniería Química, Minas y Biología, tenían mayor presencia de estudiantes procedentes de sectores urbanos.

<sup>779</sup> El grupo de Huanta también era conocido como el Comité Lenin y era uno de los desprendimientos del PCP Bandera Roja, que, en su conjunto, formaban el sector denominado antifascista.

<sup>780</sup> La última aparición pública de la Junta Directiva de la FUSCH se produjo a finales de 1978, durante el XVI Congreso de la FEP en el Cusco, donde el PCP-SL —aliado del grupo Pukallaqta y los Antifascistas— protagonizó una batalla campal contra el PCP Patria Roja, en la que finalmente fueron derrotados y se vieron obligados a retirarse.

éstos, que estaban en proceso de reorganización.<sup>781</sup> La toma de los planteles duró casi un año y medio; pese a que lograron que se reconociera el año cursado por los escolares durante la toma, al final se vieron obligados a abandonar uno de sus principales espacios de reproducción ideológica.

En 1975 se produjo el cese definitivo de Abimael Guzmán como docente de la Facultad de Educación. Dicha facultad, que había sido utilizada de manera partidaria por el grupo de Guzmán, empezó a ser reorganizada, lo que debilitó enormemente al PCP-SL al interior de la UNSCH. A partir de entonces, los principales dirigentes del PCP-SL siguieron el mismo camino de su líder y salieron paulatinamente de la Universidad, a la par que anuncianaban que «la reconstitución del Partido Comunista del Perú estaba llegando a su última etapa».

El año 1977 fue particularmente importante para la UNSCH, no sólo por el conjunto de actividades organizadas en el marco de su tricentenario, sino también por la incorporación de los alumnos de la UPA a sus aulas. Pese a su denominación como universidad privada, la UPA dependía del presupuesto público, lo cual había generado diversas discusiones sobre la pertinencia de su funcionamiento. En 1977, luego de un período de inestabilidad, la UPA fue disuelta y sus facultades se integraron a la UNSCH.<sup>782</sup> Es en este año que la UNSCH aumentó su matrícula en más de dos mil alumnos y llegó a tener una población de 7,610<sup>783</sup> estudiantes. Esto permitió que la UNSCH integrara nuevas especialidades como Derecho, Economía y Ciencias Administrativas. Este hecho también tuvo importancia política, ya que el PCP Patria Roja tenía hegemonía en la UPA. Por ello, con su integración, se ampliaba el conjunto de fuerzas opuestas al PCP-SL.

Para finales de la década de 1970, la UNSCH había diversificado su alumnado, ya que solamente la mitad de éste provenía de Ayacucho; la otra mitad procedía fundamentalmente de departamentos como Junín, Lima e Ica, entre otros.<sup>784</sup> Para ese entonces, la UNSCH ya había perdido, en gran parte, el horizonte como polo de desarrollo regional que fue fundamental en los momentos de su reapertura. Su calidad académica se había deteriorado. Una muestra de ello es que, luego de tres décadas de funcionamiento, solamente 2,289 de sus alumnos habían alcanzado el grado profesional.<sup>785</sup>

### 18.3. INICIO DE LA VIOLENCIA (1978-1982)

Con el convencimiento de que estaban dadas las condiciones para iniciar la «lucha armada», el PCP-SL preparó su salida de la UNSCH para realizar un intenso trabajo en otros espacios de la sociedad ayacuchana:

Ellos tenían un trabajo, hacían las escuelas populares, ellos controlaban los barrios a través de la federación de barrios, gremios; había hecho un buen trabajo con estudiantes de secundaria, a nivel de SUTE. (Ex dirigente del sindicato docente)

Para mí, ese trabajo básicamente fue cerrado, trabajo clandestino ya para armar cuadros ya para la lucha armada, a través de contactos de profesores, algunos ex alumnos de la universidad ya en su condición de profesores o a nivel de otra profesión. (Docente, ex militante Pukallacta)

Incluso se intentó superar la poca influencia que tenía el PCP-SL entre los campesinos con el retorno de ex alumnos de la UNSCH a sus comunidades de origen o con el trabajo de profesores en las escuelas rurales:

Entre los años 1977, 1978 y 1979 es bastante notorio que [los militantes del PCP-SL] viajaban específicamente a las provincias de Víctor Fajardo y Cangallo a formar escuelas populares y captar estudiantes; al mismo tiempo que trabajaban en estas zonas, seguían consiguiendo militantes en la universidad, específicamente de las facultades de Educación, Sociales y Agronomía. (Ponencias del taller «Universidad y violencia política»)

Mientras el gobierno militar anunciaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la entrega del poder a los civiles en medio de un clima de intensa agitación popular, el PCP-SL mantuvo una constante acti-

<sup>781</sup> En el contexto de la toma de los planteles de aplicación, el PCP-SL publicó el folleto «No basta tener la razón», en el que intenta explicar las motivaciones de la medida de fuerza asumida.

<sup>782</sup> Granados, Manuel Jesús. *El PCP Sendero Luminoso y su ideología*. Lima, 1992.

<sup>783</sup> Esta cantidad de alumnado es elevada si se tiene en cuenta que la población de la ciudad de Ayacucho a fines de los años setenta bordeaba los 70 mil habitantes. Esto puede ser corroborado con el dato censal de 1981, donde los distritos de Ayacucho, Carmen Alto y San Juan Bautista sumaban 73,699 habitantes.

<sup>784</sup> Granados. Ob. cit.

<sup>785</sup> Ibídem.

tud de boicot y abstención frente a las movilizaciones populares y los procesos electorales. Su perfil básicamente era el de un partido local arraigado en Ayacucho y sus posiciones, expresadas mediante su periódico *Voz Popular*, generaban la burla de las otras organizaciones de izquierda, que lo ubicaban como uno más en la constelación de grupos denominados como «infantiles de izquierda».<sup>786</sup>

A fines de los años setenta, las acciones del PCP-SL contra las agrupaciones de izquierda que decidieron participar en los procesos electorales se volvieron más beligerantes. Un ejemplo de ello fue que, en el marco de la llegada a Ayacucho de una delegación de dirigentes nacionales de la UDP<sup>787</sup> (grupo que participó en la Asamblea Constituyente y en las elecciones generales de 1980), el PCP-SL se negó a polemizar en la Universidad y atacaron a uno de los dirigentes:

En el contexto de la constituyente [...] un grupo de políticos de Lima viajan hacia allá [Ayacucho], entre ellos Carlos Malpica y Javier Diez Canseco, para hacer proselitismo político, y en esas mismas circunstancias convocan a debate a Julio Casanova; ahí se produce un conato, unas peleas bajo el hecho de que Sendero [el PCP-SL] no acepta el debate y cuestiona el oportunismo de estas personas a las que califica de electoreras [sic]. (Ponencias del taller «Universidad y violencia política»)

Una treintena de militantes del PCP-SL atacó con petardos el mitin organizado por la UDP durante la campaña electoral de 1980. Se realizaron pintas con inscripciones que decían «¡APRA, UDP y CIA, la misma porquería!». Pese a estas hostilidades, la lista de la UDP obtuvo la mayor votación entre las cinco listas de izquierda que se presentaron a las elecciones de 1980.<sup>788</sup>

Paralelamente, los cuadros del PCP-SL habían abandonado progresivamente la UNSCH. La despedida definitiva fue el Día Internacional del Trabajo. El 1 de mayo de 1980, realizaron un último mitin en la UNSCH en el cual, bajo un bosque de banderas rojas, los militantes del PCP-SL, vestidos con chaquetas y gorros similares a los usados por los guardias rojos en la Revolución Cultural China, anunciaron el inicio de la «guerra popular»:

Pusieron banderas en las esquinas, en el tercer piso estaba Biología, no sé si tú has visto, todavía hay unos laboratorios de biología, estaba iluminadito, estilo chino [...] me quedé, llegó más gente y empezaron los discursos bélicos, «vamos a reconstruir la historia», discursos proféticos, me dicen que Edith Lagos habló allí [...] Casanova, Zorrilla, Durand, hablaban del futuro que había que construir, recuerdo las palabras de Durand que dijo algo parecido a esto: «Nuestros hijos cosecharán lo que hagamos, aunque muramos, ellos verán nuevo futuro», un discurso para irse a luchar; luego de esa reunión desaparecieron. (Ex estudiante y actual trabajador no docente)

Despidiendo a Mezzich que se iba al campo con toda la parafernalia de China, de la guerra popular, con imágenes de Mao Tse Tung, banderas, estrellas, bosque de banderas, ya sabíamos que estaban iniciando su guerra. (Ex militante del FER Antifascista)

En mayo de 1980, cuando se organizaban las elecciones presidenciales que permitirían transferir el poder a los civiles, un grupo armado del PCP-SL quemó las ánforas y padrones electorales del poblado de Chuschi. El hecho habría podido pasar desapercibido si no fuera porque fue el punto de inicio de un conjunto de acciones violentas que pronto pondrían en alerta a todo el país.

El hecho de que connotados líderes del PCP-SL hubieran ocupado importantes cargos en la UNSCH puso a ésta en la mira de los informes policiacos y periodísticos una vez que se conocieron los primeros actos subversivos en Ayacucho. La prensa comenzó a informar sobre los supuestos nexos entre la UNSCH y el PCP-SL. Ello obligó a que, el 18 de septiembre de 1980, las autoridades de la UNSCH convocaran a una conferencia de prensa para negar que la institución se encontrara comprometida en actos terroristas. Las fuerzas políticas con presencia en la Universidad, en un primer momento, tendieron a subestimar las posibilidades del PCP-SL, sin embargo, a medida que fueron aumentando las acciones subversivas, el discurso del PCP-SL logró inicialmente obtener la simpatía de un sector de la población que sentía que ésta era una respuesta al abandono que vivía Ayacucho. En este tipo de respuestas, se encuentra una amalgama de suerte de regionalismo ayacuchano con la apuesta por la revolución nacional y mundial.

<sup>786</sup> Véase el estudio sobre la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.

<sup>787</sup> La UDP era un frente conformado por diversas facciones del MIR, Vanguardia Revolucionaria y el Partido Comunista Revolucionario. Tanto el MIR como VR tenían una importante presencia en la UNSCH y se habían caracterizado por su fuerte oposición hacia el PCP-SL.

<sup>788</sup> Para las elecciones a diputados por el departamento de Ayacucho en 1980, las fuerzas de izquierda en conjunto lograron el 27% de los votos; la votación más alta entre ellas fue para la lista conformada por la UDP (*Quehacer*, n.º 5, 1980).

Estas reacciones generaron debates en ciertas organizaciones, como los Antifascistas o Pukallacta, que tenían mayores cercanías ideológicas con el PCP-SL. Incluso sectores de sus militantes solicitaban integrarse al proyecto armado. Sin embargo, el PCP-SL no aceptó que se integrasen como organizaciones sino a título personal e incluso no les brindó el apoyo necesario, por lo que fueron rápidamente desarticulados: «Sectores de [el PCP] Patria Roja, Pukallacta se enrolan a la lucha armada pidiendo a Sendero [al PCP-SL] que se les reconozca niveles de diálogo, pero Sendero [el PCP-SL] no acepta, igual a los grupos de las facciones que quedaban de Bandera [Roja] en el FER Antifascista, entre otros, también se incorporan a la lucha pero como militantes de base y no en un nivel de alianza [...] se van a la lucha armada pero como dije son abandonados a su suerte» (ex militante del FER Antifascista).

El enorme sectarismo del PCP-SL no le permitió hacer alianzas con estos sectores que se consideraban ideológicamente cercanos y que apostaban también por la estrategia de la «guerra popular». El considerar que había culminado la reconstitución del Partido Comunista permitía justificar la exclusión de otros sectores políticos. Esta actitud a la larga fue minando la expectativa inicial generada en cierto sector radicalizado, que podía ver en el PCP-SL la solución a los problemas de postergación que vivía el departamento de Ayacucho. Sin embargo, es bueno puntualizar que, en este primer momento, las acciones del PCP-SL se concentraron en una incansable campaña propagandística en las escuelas, para lo cual les fue muy útil la red de profesores formada en los años setenta. Por otro lado, también realizaron acciones de propaganda al interior de la UNSCH, sin embargo, hay que apuntar que los cuadros del PCP-SL ya se habían retirado de ella y las actividades de difusión fueron realizadas por su periferia. Estas actividades consistían en la colocación de pizarras con las siglas PCP, en las cuales hacían proselitismo político e informaban sobre las primeras acciones armadas realizadas en Ayacucho. En la Universidad, el PCP-SL mantuvo un mural en el que señalaban sus acciones «victoriosas».

En junio de 1981 las Fuerzas Policiales anuncian la captura de dos células del PCP-SL y señalan que sus integrantes eran estudiantes de la UNSCH. Este hecho fue utilizado para reforzar la hipótesis sobre la existencia de nexos entre la Universidad y el PCP-SL. El estigma sobre la Universidad convertida en «una jauría de comunistas» (docente ex militante de Pukallacta) y potenciales subversivos comenzó a tomar fuerza.

Otra idea que se difundió en diversos medios era que la Universidad como institución protegía a los subversivos. Esta afirmación era compartida por las autoridades gubernamentales; frente al aumento de las dificultades para el desarrollo normal de las actividades académicas y el incremento de la violencia, la comunidad universitaria y la ciudadanía de Ayacucho se afirmaron en la necesidad de defender su Universidad para evitar que fuera intervenida o recesada.

El 14 de octubre de 1981 se declaró el estado de emergencia en cinco provincias del departamento de Ayacucho, tras lo cual las Fuerzas Policiales allanaron la residencia universitaria y detuvieron a medio centenar de estudiantes. En este allanamiento no se encontraron armas ni ningún tipo de indicio que relacionara a la Universidad con actos de subversión:<sup>789</sup> «Esa intervención a la residencia fue con presencia del rector y presencia de la fiscalía y no encontraron ningún arma que decían había en el pabellón Stalin y en el pabellón Marx de la Universidad de Huamanga» (ex militante del FER Antifascista).

El 16 de octubre, dos días después de ser declarado el estado de emergencia, la UNSCH suspendió temporalmente sus clases. Esta medida, sumada al allanamiento de la residencia, anunciaba el inicio de tiempos difíciles para la Universidad.

El 2 de marzo de 1982, un comando del PCP-SL atacó el penal de Ayacucho y liberó a 247 reclusos. Esta demostración de fuerza política y militar del PCP-SL sobre los representantes estatales impactó en la comunidad huamanguina y, sin lugar a dudas, aumentó las iniciales simpatías de un sector de la población hacia esta agrupación.

La primera semana de agosto de 1982 se produjo el ataque al fundo Allpachaca, de propiedad de la UNSCH. Este fundo era un centro experimental para el cultivo y manejo de pastos de altura, así como para la promoción de tecnologías agropecuarias modernas en la perspectiva de lograr la mejora de la productividad en las comuni-

---

<sup>789</sup> «La Policía allanó en la madrugada de ayer las instalaciones de la residencia de estudiantes, deteniendo a medio centenar de ellos [...] los estudiantes detenidos fueron interrogados sobre la procedencia del material impreso que poseían. No se encontró ningún tipo de armas ni explosivos» (Panorama Ayacuchano, 15 de octubre de 1981).

dades rurales. El PCP-SL arrasó el fundo, ya que consideraba que desde allí se servía al imperialismo y se traficaba con los bienes producidos. Para la acción utilizó a campesinos que vivían en las zonas aledañas:

Esta incursión de Sendero [el PCP-SL] en Allpachaca, al fundo de la Universidad, con un contingente de campesinos de los alrededores del fundo se calcula que fueron por lo menos trescientos a cuatrocientos campesinos [...] que destruyen la infraestructura, matan el ganado, destruyen los tractores, porque la tecnología no era una cosa que estaba en sus esquemas y representaba a la burguesía. Además de ello se justifican diciendo que el queso y el vino que se maceraba en este fundo beneficiaban a un pequeño grupo y no al campesinado, entonces reparten los quesos y la carne a los campesinos que habían ido. (Ponencias del taller «Universidad y violencia política»)

El hecho motivó la protesta del conjunto de la comunidad universitaria huamanguina, sin embargo, a fines de agosto, un comando del PCP-SL incursionó en las instalaciones de la UNSCH y repartió propaganda llamando a los estudiantes a sumarse a la lucha armada.

En septiembre de 1982 murió la lideresa del PCP-SL Edith Lagos en un enfrentamiento con la Policía. Su entierro constituyó una de las mayores concentraciones públicas de la década de 1980, en la cual participaron muchos miembros de la comunidad universitaria. La muerte de Edith Lagos fue capitalizada por el PCP-SL, ya que muchos vieron en ella la representación de la rebeldía ayacuchana:

El perfil de Edith [Lagos], una chica de una familia acomodada con rasgos mestizos, típicos ayacuchanos, ya tenía toda la aureola previa de perseguida, encarcelada, liberada de la prisión y trabajo en el campo y aparece ejecutada, entonces se convierte en un símbolo de las jóvenes mestizas de Ayacucho y de un ideal, la personificación del ideal y la entrega por una causa en la que ella es víctima, cosa que después va a revertirse totalmente por las acciones de Sendero [el PCP-SL]. (Ex militante del FER Antifascista)

Pronto esa aureola de rebeldía y heroicidad se fue desvaneciendo por los propios actos del PCP-SL. El 14 de noviembre de 1982, un comando del PCP-SL atacó otra vez el fundo Allpachaca, en esta ocasión con gran violencia, causando la muerte a dos mujeres no identificadas.<sup>790</sup>

A fines de 1982, la violencia se tornó más aguda. En este contexto, el gobierno central autorizó el ingreso de las Fuerzas Armadas a Ayacucho y comenzó la militarización.

#### 18.4. LA UNSCH EN EL PROCESO DE MILITARIZACIÓN (1983-1988)

El ingreso de las Fuerzas Armadas a fines de 1982 y la instalación del comando político militar cambiaron radicalmente la vida en Huamanga. El recrudecimiento de la violencia y la militarización de la sociedad generaron condiciones en las cuales cada día se tornaba más difícil el funcionamiento de la UNSCH.

El 4 de febrero de 1983 un comando del PCP-SL asesinó a un estudiante al que acusaron de haber tomado el nombre de la organización subversiva para ejercer la extorsión; de allí en adelante, ocurrieron sucesivos asesinatos de estudiantes y las amenazas contra las autoridades de la UNSCH fueron cada día más frecuentes. Desde las esferas gubernamentales también se originó una serie de presiones. De este modo surgió una acusación fiscal contra las autoridades y ex autoridades universitarias. Como consecuencia de ésta, en 1983 fue detenido un conjunto de personalidades, entre las cuales estaba el ex rector Enrique Moya.

En medio de este clima de incertidumbre, los grupos políticos comenzaron a reducir sus actividades. El temor hacia el PCP-SL, la presencia de las Fuerzas Armadas y la lenta pero efectiva infiltración de los agentes del Servicio de Inteligencia fueron haciendo cada día más peligrosa cualquier actividad política:

Yo mismo, que estaba vinculado a uno de los grupos del FER Antifascista me retire en el 84-85 porque a inicios del 84 la cosa se hace muy difícil para salidas mínimas al campo o para el desarrollo regular de tus actividades académicas, porque ya no sabes con quién estás dialogando en el aula, tanto presiones de Sendero [el PCP-SL] por un discurso como el asunto de vigilancia del Servicio de Inteligencia. (Ex militante del FER Antifascista)

Por otro lado, en la vida institucional, la vida política en términos de organizaciones, centros federados, centros de estudiantes estaban en picada, o sea nadie quería asumir, por lo que recuerdo, nadie quería asumir cargos de ese tipo, la desconfianza en general terminó por un lado desestructurando estos espacios estudiantiles organizativos de centros federados. (Ex dirigente estudiantil de los años ochenta)

<sup>790</sup> Cifras y cronología de la violencia política: 1980-1991. Huancayo: SERPAR, 1992.

Durante esta época, eran frecuentes en la ciudad de Ayacucho las intervenciones a las viviendas y la posesión de cualquier tipo de bibliografía relacionada al marxismo podía significar que las personas fueran acusadas de pertenecer a los grupos subversivos. Por ello, algunos lugares públicos de Ayacucho amanecían con libros arrojados por sus dueños para evitar ser detenidos:

La ciudad terminó amaneciendo con ciertos lugares, como la Alameda por ejemplo, con las rumas de libros sobre Marx, Lenin, Mariátegui, porque cualquier indicio o cualquier título de libro que dijera socialismo o que estuviera vinculado a la URSS o China, vinculado a Marx, Lenin, Mao, automáticamente era evidencia con algún vínculo que podías tener con la subversión, entonces profesores y estudiantes terminaron arrojando u ocultándolos. (Ex rector de la UNSCH)

Conforme se agravaba la situación en la UNSCH, las autoridades comenzaron a tomar medidas para desvirtuar cualquier tipo de vinculación con la subversión, como, por ejemplo, rebautizar los pabellones de la residencia de estudiantes, que hasta ese entonces ostentaban los nombres de los clásicos del marxismo. Igualmente, en 1983 se iniciaron cambios en los contenidos curriculares y se modificaron los cursos inspirados en el «marxismo de manual», introducidos en la reforma de inicios de los años setenta. Muchos de estos cursos, tanto por su contenido como por la bibliografía utilizada, ponían en peligro a los alumnos frente a la ola represiva que se extendía por Huamanga. Para 1986, ya existían nuevos planes curriculares. Solamente en la Facultad de Educación se mantuvieron hasta finales de los años ochenta algunos cursos de marxismo esquemáticos, de manual.

En 1984, después de un período de rectorado interino y de la redacción de un nuevo estatuto para la UNSCH que incorporaba la participación estudiantil plena en la Asamblea Universitaria, se eligió a José Castañeda como nuevo rector. Éste ejerció su cargo hasta 1987, año en el que renunció. Fue sustituido por el ingeniero Alberto Morote, hasta ese entonces vicerrector administrativo.

El 11 de abril de 1985 un comando del PCP-SL ingresó en el comedor universitario y anunció un «paro armado» para los días 13, 14 y 15 de abril; del mismo modo, hizo un llamado a los estudiantes para que apoyaran el boicot a las elecciones presidenciales. Pese a este tipo de apariciones públicas, en esta etapa la presencia del PCP-SL en la Universidad se tornó menos intensa y más discreta. La razón fue la prioridad que tuvo para ellos el trabajo en las zonas rurales, elegidas como escenario para desarrollar la «guerra popular». A esto se suma la adopción de un perfil bajo ante el grado de infiltración de los servicios de inteligencia al interior de la Universidad. A pesar de ello, el PCP-SL mantuvo cierta presencia en algunos espacios universitarios, como la Facultad de Educación y en particular en la residencia de estudiantes.

Otro espacio en el cual el PCP-SL tuvo presencia por intermedio de sectores cercanos a su discurso fue el Sindicato de Trabajadores no Docentes. Su influencia se limitó a la persuasión o presión sobre los trabajadores administrativos, como también sobre la distribución de los recursos que dependían de la Dirección de Bienes-estar Estudiantil.

En marzo de 1988 un grupo de desconocidos detonó bombas al interior de la Universidad; en julio del mismo año, la Universidad apareció embanderada con estandartes en los que se leía «Comando Rodrigo Franco». En octubre, durante una fiesta estudiantil, estallaron cargas explosivas que hirieron a 26 estudiantes. Nunca se supo quiénes cometieron estos actos. Estos hechos marcaron el inicio de una creciente actividad de comandos paramilitares contra la Universidad, actividad que se tornó más agresiva entre 1988 y 1991. Es importante tener en cuenta que, en la década de 1980, existió un fuerte consenso sobre la necesidad del respeto a la autonomía de la institución universitaria. En ese sentido, a finales de los años ochenta, dado que era muy difícil una intervención abierta contra la Universidad, agentes estatales empezaron a realizar acciones encubiertas que fueron desde la infiltración hasta los actos de sabotaje, e incluso los asesinatos.

#### 18.5. LA UNSCH CERCADA POR LA VIOLENCIA (1989-1991)

Entre 1989 y 1991, sin lugar a dudas, la UNSCH vivió sus momentos más difíciles como institución, ya que no sólo tuvo que sufrir la infiltración de los servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas, sino también la agresión de agentes estatales, comandos paramilitares y del PCP-SL. En este sentido, es importante tener en cuenta que, en el mismo período, también se produjo una serie de asesinatos en la Universidad Nacional del Centro, crímenes que, en muchos casos, tuvieron patrones similares a los ocurridos en Huamanga, lo que habla de una práctica sistemática de violación de los derechos humanos.

Este período es el que presenta el saldo más alto de víctimas de los tres estamentos universitarios: estudiantes, docentes y trabajadores. En ese sentido, la tendencia a la despolitización y apatía se acentuó en los claustros universitarios; sin embargo, se mantuvo la organización estudiantil a través de los centros federados, los cuales formaron una coordinadora centrada en la atención de los problemas académicos o administrativos.

En este difícil contexto, el 3 de julio de 1988 fue nombrado como obispo auxiliar de Ayacucho monseñor Juan Luis Cipriani y, con ello, surgió un nuevo actor político, que tuvo paulatinamente una mayor influencia en la vida política de la UNSCH.

En diciembre de 1988, el general EP José Valdivia, jefe del Comando Político Militar, solicitó al rector Alberto Morote permiso para intervenir la vivienda universitaria. El permiso fue denegado por la autoridad universitaria, lo que al parecer ahondó las diferencias entre el general EP José Valdivia y las autoridades de la UNSCH. A los pocos días, el 3 de enero, fueron atacados los locales de la UNSCH con cargas explosivas. En la acción fue herido un trabajador no docente. Testimonios recogidos entre los ex rectores de la UNSCH apuntan a la hipótesis de que el general EP José Valdivia fue el autor intelectual de los atentados contra las instalaciones universitarias.<sup>791</sup>

El 29 de mayo de 1989, a plena luz del día, personas no identificadas asesinaron al profesor Marcial Capeletti mientras dictaba clases.

Pidió a un alumno que borrara la pizarra; el alumno borró la pizarra [...] y mi padre les dijo: «Bueno, alumnos, el examen consta de cinco preguntas», volteó para escribir las cinco preguntas y, en lo que está escribiendo la segunda pregunta, empujan la puerta [...] y entra el asesino, ¿no? [...] con un tiro certero que le da el primero en la sien, el segundo en el cuello y el tercero en el hombro [...] y [...] los asesinos salieron de la Universidad.<sup>792</sup>

Marcial Capeletti no solamente había sido docente de la UNSCH, sino que era uno de los dirigentes del entonces gobernante PAP; además, había presidido la Corporación Departamental de Desarrollo (CORDE Ayacucho), uno de los organismos del gobierno central más importantes en el departamento. Durante su gestión, se habían producido diversos problemas y denuncias surgidas de su propio partido. Para ese entonces, el PAP vivía una profunda división en Ayacucho: su juventud había asumido discursos radicales denominándose ARE Rojo y, en general, dicho partido experimentaba un conjunto de pugnas internas entre las cuales destacaba la rivalidad entre dos tendencias muy definidas: «Indudablemente estuvimos divididos en dos grupos, lo que en Ayacucho se llamaba el capelitismo y el valencismo. Los capelitistas eran los alanistas y los valencistas éramos de los alvistas, y llegaba momentos en que no podíamos ni vernos» (ex docente militante del PAP).

Por estos motivos, un ex rector de la UNSCH afirmó que era muy probable que el asesinato de Marcial Capeletti no estuviera relacionado con su condición de docente universitario sino con su actuación pública en el gobierno. Según esta hipótesis, el crimen sería producto de las pugnas al interior del PAP. Sin embargo, es importante anotar que la versión más difundida es que esta acción fue desarrollada por el PCP-SL.

En junio de 1989 terminó el período de Alberto Morote como rector de la UNSCH. Fue sustituido por un rector interino, el cual se encargó de convocar a la Asamblea Universitaria para la elección del nuevo rector. Después de una serie de problemas, fue elegido Pedro Villena.

El 26 de junio, las fuerzas del orden detuvieron y posteriormente desaparecieron a los estudiantes José Carlos Mansilla (Ingeniería de Minas) y Alexander Mansilla (Educación). Ambos eran hijos de un docente de la UNSCH. El hecho ocurrió en el domicilio de los jóvenes, como relata su madre:

Bueno, el hecho ocurrió en la mañana [...] a las nueve de la mañana del 26 de junio de 1989 [...] mi [...] yo y mi hijo José Carlos realizábamos la limpieza de la tienda de mi casa [...] Yo entré, un momento, hacia el fondo de la casa [...] En ese momento, habían entrado cuatro hombres, me dijeron. Lo agarraron, lo golpearon y casi desmayado lo sacaban a la calle. [...] a una cuadra venía su hermano mayor Alexander y, al ver el hecho, se acercó para preguntar. Inmediatamente, él también fue golpeado. Lo metieron a un carro y se lo llevaron a la comandancia.<sup>793</sup>

<sup>791</sup> El general EP José Valdivia aparece relacionado con diversos casos de violación de los derechos humanos, entre los cuales se incluye la masacre de campesinos de Cayara en mayo de 1988 (Perú Debate Network).

<sup>792</sup> Testimonio presentado por los familiares de Marcial Capeletti en audiencia pública. Ayacucho, 11 de abril de 2002.

<sup>793</sup> CVR. Testimonio presentado por los padres de los estudiantes Mansilla en audiencia pública. Ayacucho, 11 de abril de 2002.

Octubre de 1989 fue, sin lugar a dudas, uno de los meses más duros para la UNSCH. El 19, un comando del PCP-SL asesinó a un estudiante de la Facultad de Educación que pertenecía al MRTA.

El 28 de octubre, la Universidad sufrió otro de los peores atentados que causó daños a la residencia, el comedor, el tópico de salud, once unidades de transporte y la imprenta. El ataque fue realizado por grupos de uniformados, probablemente paramilitares o agentes estatales. Las pérdidas fueron incalculables.

El mismo día por la tarde, se llevó a cabo el allanamiento de fuerzas combinadas del Ejército y la Policía a las instalaciones de la residencia universitaria; fueron detenidos más de treinta estudiantes. Antes de esta acción, un atentado contra una comandancia policial causó la muerte de dos policías.

Las fuerzas del orden señalaron que en la imprenta de la Universidad se editaba material subversivo y que los miembros del PCP-SL utilizaban los Servicios de Bienestar Universitario para su provecho. Sin embargo, después de estos atentados quedó claro que era imposible para los militantes del PCP-SL usar como refugio las instalaciones universitarias. Por ello, los estudiantes vinculados al PCP-SL abandonaron definitivamente la residencia universitaria.

El 11 de noviembre, la Junta de Vigilancia del Comedor y la Coordinadora de Centros Federados realizaron una movilización pidiendo la ampliación de rentas para la Universidad y denunciando los planes del gobierno para cerrarla. En esta marcha, murió atropellado el estudiante Cayo Yupanqui y, durante su entierro, se produjo otra movilización de protesta en contra, fundamentalmente, del gobierno del PAP. El 27 de noviembre, desconocidos asesinaron en su domicilio al abogado Hugo Luna Ballón, ex asesor legal y docente de la UNSCH. Tampoco se ha determinado quiénes fueron los autores de dicho crimen.

El 28 de enero de 1990 fue asesinado el trabajador no docente Tomás Evangelista Carranza, quien pertenecía a las filas del PAP y, al igual que Marcial Capeletti, había ejercido un cargo de confianza en la CORDE Ayacucho.

El año 1990 fue particularmente importante porque se produjeron las elecciones presidenciales: Éstas se realizaron en medio de una serie de amenazas y «paros armados» organizados por el PCP-SL, en su intento por boicotear el proceso electoral. El clima de incertidumbre se generalizó y la violencia contra la UNSCH se acrecentó. En julio de ese año, personas no identificadas ametrallaron los laboratorios de Arqueología y occasionaron cuantiosos daños materiales. Existe la sospecha de que esta acción pudo haber sido cometida por grupos paramilitares.

El 21 de julio de 1990 un comando paramilitar asesinó a Fernando Colonio, abogado que trabajaba para la UNSCH, quien había realizado una serie de denuncias sobre las violaciones de los derechos humanos que venían cometiendo las fuerzas del orden:

Las fuerzas contrasubversivas tuvieron una estrategia militar en la Universidad para lograr hacer un seguimiento de militantes, de simpatizantes y lograr coger la madeja de Sendero [el PCP-SL]; dentro de esa estrategia, ellos también generan un conjunto de muertes de profesores, del asesor legal de la Universidad, un joven Fernando Colonio, que horas antes había denunciado en la municipalidad de Ayacucho la violación de derechos humanos a nombre de la Universidad, y por la noche es liquidado con un tiro con silenciador. (Ponencias del taller «Universidad y violencia política»)

Tres días después, el 24 de julio, fue asesinado, en circunstancias similares, Ciro Aramburú, jefe de Bienes-  
tar Universitario, dependencia que había sido blanco de los peores ataques de los grupos paramilitares y las fuerzas del orden. Ciro Aramburú fue asesinado en su domicilio. El comando que lo asesinó utilizó silenciadores, recurso característico de los comandos de las fuerzas del orden que realizaban operaciones contrasubversivas encubiertas.<sup>794</sup> Un mes después de estos asesinatos, sujetos desconocidos dinamitaron el local de la Facultad de Agronomía, lo que causó graves pérdidas económicas a la Universidad.

El año 1990 fue duro. Para 1991 las cosas tampoco mejoraron y, aunque el PCP-SL había sufrido derrotas los comités de autodefensa (CAD) en Huanta, todavía mantenía una intensa actividad en Huamanga. Al mismo tiempo, las fuerzas del orden siguieron realizando operaciones encubiertas para eliminar a los presun-

---

<sup>794</sup> El uso de armas de fuego con silenciadores es una modalidad utilizada en casi todos los asesinatos cometidos entre 1989 y 1991 por elementos contrarios a las fuerzas subversivas.

tos colaboradores de la subversión; la ciudad vivía en una constante zozobra y era generalizada la idea de que, en cualquier momento, se ordenaría el cierre de la Universidad.

En este difícil contexto, el 19 de julio de 1991 un comando militar realizó una operación encubierta en el domicilio del docente universitario Francisco Solier García, quien fue asesinado junto con su esposa y su hijo. Para el crimen se utilizaron armas con silenciadores. Algunos testimonios plantean que el móvil del asesinato fue que el Ejército identificaba al ingeniero Solier como un presunto colaborador de los grupos subversivos.

Otras versiones afirman que el móvil también pudo haber sido que su esposa había presenciado el asesinato del periodista Luis Morales, victimado a plena luz del día y a cien metros de la plaza central por un comando del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). A los pocos días de este asesinato aparecieron en la UNSCH volantes presuntamente elaborados por el PCP-SL en los cuales se denunciaba la muerte de Francisco Solier y se culpaba de ella a los grupos paramilitares. A los dos días del asesinato de Solier, aparecieron sin vida los cuerpos de Mariscote Santa Cruz y Leoncio Espinoza, ambos estudiantes de la especialidad de Obstetricia. Dichos estudiantes habían sido secuestrados una semana antes.

Octubre de 1991 fue un mes particularmente violento para los miembros de la comunidad universitaria. El 12 de ese mes, desconocidos asesinaron al estudiante Antonio Huacache Chávez cuando retornaba a su domicilio. En similares circunstancias, el 19 de octubre fue asesinado Camilo Fernández Flores, estudiante de la Facultad de Educación. El día 23 se produjo un atentado contra el doctor Juan Luis Pérez Coronado, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales. Éste se salvó de morir al ser defendido por un enorme perro que tenía en su domicilio.

El 21 de diciembre de 1991 fue asesinada en la puerta de un centro educativo la ex alcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora Concha, quien laboraba como docente en la especialidad de Servicio Social de la UNSCH. Leonor Zamora había asumido la alcaldía de Huamanga en un período particularmente complicado: 1984. Eran conocidos sus conflictos con el comando político militar, originados por sus denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, que se habían incrementado con la presencia de los militares en la ciudad. Según diversas investigaciones periodísticas, este asesinato pudo haber sido cometido por el mismo comando del SIE que asesinó a Francisco Solier. Ambos casos están siendo actualmente investigados dentro de un conjunto mayor de acciones atribuidas al grupo Colina. Testimonios de ex docentes de la UNSCH señalan que por aquella época vivía en Huamanga el suboficial Sosa, quien posteriormente fue identificado por uno de los ex docentes entrevistados como uno de los integrantes del grupo Colina.

#### 18.6. LA POSGUERRA (1992-2000)

Para inicios de 1990, la ciudad de Huanta estaba relativamente pacificada gracias a la acción de los CAD. Esta situación generó que, entre 1990 y 1991, tanto las acciones del PCP-SL como del Ejército se concentraran en Huamanga, especialmente en la UNSCH, que había sido estigmatizada por casi una década como semillero de subversivos. Sin embargo, para 1992, la actividad subversiva comenzó a decaer, los «paros armados» paulatinamente dejaron de ser acatados y en septiembre de 1992 fue capturado Abimael Guzmán y los principales dirigentes de su organización. Posteriormente, parte de la dirección del PCP-SL se comprometió a un «acuerdo de paz» con el gobierno de Alberto Fujimori y se produjo una división interna en el PCP-SL. Todos estos hechos explican la significativa reducción de la violencia en Huamanga.

Entre 1989 y 1991, la UNSCH había estado al punto del colapso como producto de la violencia que experimentaba Huamanga. Con la llegada de Pedro Villena al rectorado, se inició un proceso que buscaba mejorar las relaciones entre la institución universitaria y los poderes de facto en Ayacucho: el Ejército y la cúpula de la Iglesia Católica.

Para entender este proceso, es necesario remitirse al rectorado de Pedro Villena. Su elección se produjo a inicios de los años noventa en momentos en que la Universidad vivía una enorme crisis y se pensaba en la posibilidad de una intervención o receso: «[Pedro] Villena era un ingeniero con una actitud más democrática, más abierta y con capacidad e imaginación para salir de ese atolladero que estaba la Universidad porque nosotros esperábamos en cualquier momento una intervención» (ex militante del FER Antifascista).

Cuando Pedro Villena asumió el rectorado, las organizaciones universitarias estaban totalmente desestructuradas; incluso desapareció la Junta de Vigilancia de Comedores, organismo que había protagonizado las movilizaciones de la segunda mitad de los años ochenta. Muchos docentes habían abandonado la Universidad huyendo de la violencia o de las amenazas de los paramilitares.<sup>795</sup> El ingeniero Villena buscó apoyo externo para mantener la continuidad de la UNSCH; este apoyo lo encontró en el sector más conservador de la Iglesia, liderado por monseñor Juan Luis Cipriani, y de esta manera logró contactos con el gobierno central<sup>796</sup> y la cúpula del Ejército. Para ese entonces ya era conocida la posición contraria a la defensa de los derechos humanos del monseñor Juan Luis Cipriani, pero además era pública su enemistad con la UNSCH, a la cual consideraba un refugio de comunistas. Para ese entonces, el Obispo Auxiliar de Ayacucho había acumulado mucho poder, lo que lo hacía explícito en sus homilías que eran utilizadas para influir en las decisiones de las autoridades locales e incluso nacionales:

Porque evidentemente las autoridades nacionales le preguntaban a él [monseñor Juan Luis Cipriani] sobre el futuro del funcionamiento, no solamente de la Universidad sino probablemente de muchas de las actividades de la ciudad. Y tener una opinión favorable de él era sumamente importante para la gestión administrativa de la Universidad. Además, los sermones de [Juan Luis] Cipriani en aquella época se convirtieron en un discurso político, todo sermón de [Juan Luis] Cipriani durante el tiempo del terrorismo era el termómetro para entender qué cosas estaba pasando. (Ex rector de la UNSCH)

De esta manera, el Rector de la UNSCH se vinculó personalmente con el Obispo Auxiliar de Ayacucho, con lo que logró ganar la confianza de los sectores militares, hasta ese entonces adversarios de la Universidad y, lo más importante, tener acceso a Alberto Fujimori, con lo cual podía asegurarse apoyo del gobierno central, en especial frente al importante tema de las rentas.

Este conjunto de alianzas determinó que surgiera una relación en la cual la institución universitaria mantenía silencio frente a la actuación de los militares y el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, a la par que los claustros universitarios se veían envueltos en la apatía. Pese a la oposición de un sector de los docentes, el rector Villena nombró profesor honorario a monseñor Juan Luis Cipriani y firmó una carta que avalaba su elección como Arzobispo de Ayacucho.<sup>797</sup>

Posteriormente, las buenas relaciones del ingeniero Villena con el gobierno de Alberto Fujimori le permitieron ocupar el cargo de Ministro de Estado. Al finalizar el período de Pedro Villena, la Asamblea Universitaria eligió a Enrique González Carré como nuevo rector. En su gestión, se inició una suerte de recuperación de la UNSCH mediante el establecimiento de una relación pragmática de armonía con monseñor Juan Luis Cipriani y el comando político militar; además, con la reducción de la violencia, se abrió la posibilidad de restablecer vínculos de cooperación entre la UNSCH y otras instituciones académicas y culturales.

#### 18.7. CONCLUSIONES

Durante los años sesenta y setenta, la UNSCH tuvo una enorme influencia en Huamanga, pequeña ciudad capital de un departamento con un pobre desarrollo económico, social y cultural, el cual además vio acentuadas sus carencias y postergación en la medida en que avanzaba el proceso de modernización, fundamentalmente en las zonas urbanas de la costa del país. En este sentido, no es raro que, al interior de esta Universidad, un pequeño grupo de docentes, en su mayoría procedentes de una intelectualidad provinciana, pudieran construir una estructura partidaria vertical, que alimentaría sus bases fundamentalmente de los jóvenes provenientes de ciudades intermedias y pequeños poblados de las provincias pobres del departamento de Ayacucho y su zona de influencia. Éstos llegaban a la Universidad con grandes expectativas, pero a la larga iban comprendiendo que eran muy pocas sus posibilidades de movilidad social por la estructura centralista y desigual del país. Las expectativas generadas en estos jóvenes fueron llenadas por una propuesta basada en el fundamentalismo político, la cultura del enfrentamiento y una lectura ideologizada de los procesos sociales que experimentaba el Perú.

<sup>795</sup> En 1990, un supuesto comando paramilitar denominado Movimiento Anti Terrorista de Ayacucho (MATA) publicó una lista de docentes que estaban condenados a morir; la mayoría de ellos tuvo que salir de Ayacucho.

<sup>796</sup> Hay que tener en cuenta que existía una gran cercanía política entre monseñor Juan Luis Cipriani y Alberto Fujimori.

<sup>797</sup> Finalmente, monseñor Juan Luis Cipriani fue nombrado arzobispo de Ayacucho el 13 de mayo de 1995, con lo cual su poder se hizo mayor. Este cargo lo ejerció hasta enero de 1999, cuando asumió el Arzobispado de Lima.

La experiencia en la UNSCH convenció al PCP-SL de que le era imperativo el control de los estratégicos Servicios de Bienestar Universitario, con los cuales podía tejer relaciones clientelares con los estudiantes más pobres o con menos redes sociales. Su presencia en la Facultad de Educación le permitió controlar una red de docentes jóvenes, los cuales, al ejercer la docencia en las escuelas rurales y urbanas marginales, podrían lograr la inserción del partido en sectores sociales en los que no tenía influencia. En este sentido, el PCP-SL apeló al paternalismo y la verticalidad y mostró, de este modo, características de continuidad con los rasgos de la política más tradicional, que intentaron ocultar tras un discurso revolucionario y radical. Esta suerte de aprendizaje piloto en la UNSCH luego sirvió de modelo para el trabajo del PCP-SL en otras universidades públicas del país, y explica la prioridad que dieron a las facultades de Educación en el desarrollo de su labor política y de reproducción ideológica.

En la primera mitad de los años setenta, el proceso de diversificación y expansión de la UNSCH, sumado a la práctica política excluyente del PCP-SL, generó un conjunto de resistencias en la Universidad, en especial en los sectores procedentes de medios urbanos, lo que permitió que el PCP-SL fuera desplazado de importantes espacios de poder y de la conducción de los gremios de docentes y estudiantes. Cuando el PCP-SL comenzó a perder fuerza en el movimiento social, para mantenerse políticamente apeló al enfrentamiento y la búsqueda de una suerte de pureza ideológica en una lectura dogmática de los textos de José Carlos Mariátegui y el desarrollo de lo que denominaron el marxismo-leninismo-maoísmo. Estos elementos los combinó con una apuesta mesiánica basada en considerarse el grupo elegido para encabezar la revolución que todos los otros estaban, de una u otra manera, traicionando. Esta lectura ideologizada era compartida por otros grupos radicales derivados de la vertiente maoísta, sin embargo, el PCP-SL marcó la diferencia al llevar este razonamiento hasta sus consecuencias extremas. Así dio inicio a su proyecto armado.

El hecho de que importantes líderes del PCP-SL hubieran ocupado cargos de conducción en la UNSCH a inicios de los setenta, generó que, desde el inicio de la violencia, en 1980, esta institución fuera blanco de diversos ataques. Desde el primer momento, las autoridades del gobierno central pensaron erróneamente que desde el espacio universitario se dirigía la «lucha armada». Esta suposición partía de desconocer el hecho de que en la segunda mitad de los setenta los militantes del PCP-SL habían abandonado la Universidad para insertarse en el campo, escenario que concebían como fundamental para el desarrollo de su proyecto armado.

Con el ingreso del comando político militar a fines de 1982, la UNSCH quedó bajo la mira de las Fuerzas Armadas, las cuales se infiltraron en la Universidad y detuvieron a muchos de sus integrantes bajo la acusación de apoyar las acciones subversivas. Posteriormente, hacia finales de la década de 1980, el convencimiento de que la UNSCH albergaba a integrantes del PCP-SL llevó a que miembros de las Fuerzas Armadas desarrollaran acciones de represalia, que se materializaron en la destrucción de instalaciones físicas de la Universidad y el asesinato selectivo de determinados miembros de la comunidad universitaria a quienes se acusaba de tener vinculaciones con los grupos subversivos. Para 1989 era claro que, para un sector de las Fuerzas Armadas, la estrategia contrasubversiva pasaba por la eliminación de la UNSCH, a la que consideraba un nido de subversivos.

La Universidad también fue blanco de los ataques del PCP-SL que, desde 1982 en adelante, destruyó instalaciones, amenazó y asesinó a miembros de la comunidad universitaria. De este modo, la UNSCH quedó atrapada entre dos fuegos, lo que originó un clima de inestabilidad que afectó su funcionamiento. Esto fue utilizado por algunos sectores para realizar actos de venganza política contra personas a las que consideraban sus adversarios. En este sentido, durante la segunda mitad de los años ochenta, hubo una serie de crímenes en los que estuvieron involucrados agentes estatales, grupos paramilitares y el PCP-SL.

El incremento de la violencia motivó, desde 1983 en adelante, la desmovilización y el miedo de los actores políticos. En este contexto, se ensayaron estrategias para asegurar la sobrevivencia de la institución universitaria a fin de evitar su receso o intervención. Para ellos se aplicaron medidas de autocensura que pasaron por diversos cambios curriculares que tuvieron como eje central la eliminación de los cursos y bibliografía que pudieran servir de pretexto para la detención de los miembros de la comunidad universitaria. Este proceso se desarrolló entre 1983 y 1989.

Para 1990, el rectorado de la Universidad tejió una suerte de alianza con el sector conservador de la Iglesia Católica, liderado por monseñor Juan Luis Cipriani, lo que permitió a las autoridades universitarias de entonces iniciar una aproximación a las Fuerzas Armadas y el gobierno de Alberto Fujimori. Esta alianza, que tuvo

una alta dosis de pragmatismo, puede ayudar a comprender las razones por las cuales la UNSCH no fue intervenida ni militar ni administrativamente, como sí lo fueron otras universidades públicas entre 1991 y 2000.

Como saldo del proceso de violencia, la UNSCH perdió el liderazgo regional con el que surgió. Su imagen quedó seriamente resquebrajada al ser relacionada equivocadamente con la subversión. Los miembros de la comunidad universitaria fueron estigmatizados y, en muchos casos, tuvieron que optar por el silencio o emigrar.

Con ello, la UNSCH perdió capacidad académica, pues la nueva plana docente, en algunos casos, no tenía las calificaciones suficientes. La violencia también aisló a la UNSCH de otras instituciones académicas y, en muchos casos, ésta se limitó a sobrevivir en medio de la precariedad, a lo que se añade las enormes pérdidas económicas causadas por los atentados del PCP-SL, las fuerzas del orden y los grupos paramilitares. La pérdida de capacidades y perspectivas de la UNSCH fue el resultado final de veinte años de conflicto armado en la región.

## 19. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE LA CANTUTA

Emergiendo como parte de un proceso de modernización educativa dirigido desde el Estado, proyecto que terminó frustrándose, la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (UNE), también conocida como La Cantuta, devino en una de las principales referencias para las juventudes de provincias, que vieron en la universidad una posibilidad de integrarse a un sistema cada vez más cambiante y excluyente.

Cuando La Cantuta fue reabierta, en agosto de 1980, se iniciaba una etapa institucional que culminó con una mayor radicalización de la izquierda y con el deterioro de la gestión universitaria, espacio que aprovechó el PCP-SL para consolidar su propuesta y presencia.

El objetivo central de esta investigación es explicar, dentro del proceso de violencia, la progresiva inserción y arraigo del PCP-SL en La Cantuta, que tuvo como desenlace la intervención militar de 1991 y su expresión represiva más contundente en la ejecución de nueve estudiantes y el profesor Hugo Muñoz en julio de 1992.

Para el PCP-SL, las facultades de Educación constituyeron la principal fuente de reclutamiento y bastión de transmisión de su ideología, planes y estrategia. En este contexto, La Cantuta representó para este grupo un lugar central donde captar adeptos y difundir sus principios ideológicos.

Cabe preguntarse por las circunstancias que permitieron el arraigo del PCP-SL en La Cantuta, así como por el significado que adquirió para poder erigirse como mecanismo de control de esta entidad educativa dentro del marco de la estrategia subversiva. Igualmente, interesa preguntarse por la respuesta del Estado ante estos hechos.

Desde un inicio, es preciso interpretar la violencia en La Cantuta como parte de un proceso que manifiesta tres peculiaridades que hicieron atractivo para el PCP-SL su inserción y establecimiento en la Universidad:

- La ubicación geográfica del campus universitario, conectado con el interior del país a través de la Carretera Central
- La estrecha relación de esta Universidad con el magisterio público, principalmente de provincias
- Su posición con respecto a la cultura política radical predominante en el movimiento estudiantil de las últimas décadas.

Sin embargo, el PCP-SL no fue el único actor presente. El mosaico político e ideológico presente en La Cantuta en los años ochenta era la expresión de tendencias existentes en décadas previas al interior de la izquierda peruana.

### 19.1. ANTECEDENTES: BREVE RECUENTO HISTÓRICO (1951-1980)

La Cantuta tuvo como precedente la Escuela Normal Superior de Varones, que fue parte de un proyecto que buscaba modernizar la enseñanza y la formación docente. Entre 1951 y 1960, La Cantuta experimentó profundas innovaciones en la formación de los maestros, bajo la dirección de Walter Peñaloza Ramella. Esta experiencia culminó intempestivamente con la derogación por la bancada apro-pradista de la ley 12502, que disponía el cese de Peñaloza y otros profesores considerados comunistas, y el paso de la Escuela Normal a manos

del Ministerio Público. Esto motivó uno de los mayores movimientos de protesta estudiantil e involucró a la totalidad del magisterio nacional. Se instaló una comisión interventora, mientras los estudiantes realizaban una marcha de sacrificio a Lima. Ya desde esos años, se percibía a La Cantuta como un espacio de subversión por la influencia de los grupos de izquierda, cuyas acciones en contra de la legislación universitaria originaron varios conflictos entre la Escuela Normal Superior y el gobierno de Prado.

**Tabla 1**

FECHA	PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
1822	Creación de la Escuela de Preceptores
1951	Traslado al distrito de Chosica y despegue institucional
6/7/1953	Inauguración de la Escuela Normal Superior de Varones
31/7/1955	Escuela Normal Superior Enrique Guzmán y Valle adquiere rango universitario y autonomía administrativa y académica por ley 12502
1960	Se deroga ley 12502
1965	Se convierte en Universidad Nacional de Educación (UNE) por ley 15519
23/5/1967	Entra en vigencia el estatuto de la Universidad con las facultades de Pedagogía, Ciencias Humanas y Estudios Tecnológicos <sup>798</sup>
20/2/1977	Receso de la Universidad durante el gobierno militar <sup>799</sup>
8/1980	Reapertura de la Universidad por presión del magisterio nacional

En 1960, ante la intervención estatal, se produjo una masiva huelga de universitarios y docentes. En 1964 la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) organizó una segunda huelga universitaria y logró la aprobación de la ley 15519, por la cual la Escuela Normal Superior se convirtió en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle el 23 de mayo de 1967.

Para entonces, el Movimiento Estudiantil Cantuteño (MOVEC) y Vanguardia Revolucionaria eran los grupos de mayor influencia en la UNE. Tras restablecerse las funciones de La Cantuta, a partir de 1967, las protestas estudiantiles se concentraron en boicotear los procesos electorales para deslegitimar la legislación vigente. Entonces, mientras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se suspendían las elecciones, en La Cantuta y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se tomaban los locales entre noviembre y diciembre de 1969.

Por otra parte, tras viajar a China (1965-1966), Abimael Guzmán organizó, con algunos profesores de la UNE, el Grupo de Trabajo Intelectual Mariátegui. A partir de esta experiencia, Víctor Zavala Cataño y Nilda Atanasio iniciaron un trabajo de selección y adoctrinamiento de cuadros del PCP-SL en la UNE.<sup>800</sup>

En febrero de 1969, a cuatro meses de tomar el poder mediante un golpe de Estado, el gobierno de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto ley 17437 a partir del cual se eliminaron temporalmente las instituciones estudiantiles y se creó el Consejo Nacional de la Universidad Peruana (CONUP), que centralizaba la gestión y el control universitario. Rúa señala que un documento suscrito por Abimael Guzmán en 1969, donde éste se manifestaba en contra del decreto legislativo 17437 del gobierno militar, fue acompañado por las firmas de destacados docentes de la UNMSM, la UNE y la UNSCH(Rúa 1996: 44). Esto significaba que, durante gran parte de los años setenta, el discurso del PCP-SL coincidía con la línea de oposición al gobierno militar

<sup>798</sup> Cuenta actualmente con siete facultades de Educación: Ciencias; Ciencias Sociales y Humanidades; Tecnología; Pedagogía y Cultura Física; Agropecuaria y Nutrición; Ciencias Administrativas, Económicas y Turismo; y una facultad de Educación Inicial en proceso de instalación.

<sup>799</sup> El 20 de febrero de 1977, durante el gobierno del general EP Francisco Morales Bermúdez, la Universidad Nacional de Educación fue rechazada en un contexto de intensa politización y radicalización de los estamentos universitarios, bajo la hegemonía del PCP Patria Roja, que logra desplazar a Vanguardia Revolucionaria y al PCP Bandera Roja de las federaciones de estudiantes y de los gremios magisteriales.

<sup>800</sup> A inicios de los años ochenta, Víctor Zavala y Nilda Atanasio, tras el período de receso institucional, causaron un gran impacto en la población estudiantil que retornaba a las aulas y entre quienes recién ingresaban a la vida universitaria. El profesor Víctor Zavala Cataño abandonó su puesto en la UNE en 1983 y se convirtió en dirigente del comité metropolitano de Lima del PCP-SL. Por su parte, Nilda Atanasio abandonó el país en 1986, se separó de su esposo, el profesor Hugo Muñoz, y de sus vínculos con el PCP-SL. Hay que anotar que Hugo Muñoz, el profesor asesinado en 1992, participó en diversas movilizaciones estudiantiles en Huanta y Lima como integrante del MOVEC.

de distintos gremios docentes, aunque posteriormente las diferencias y adhesiones con el proyecto subversivo siguieron caminos insospechados. En la UNE, el 25 de mayo de 1970 se modificó el sistema de facultades y se estableció un sistema departamental.

El PCP Patria Roja, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Educación (FEUNE), combatió radicalmente al gobierno militar y a la ley general de educación promulgada en 1972 (decreto ley 19326). Mediante dicha ley, se recuperaba la autonomía universitaria, pero seguía vigente el estatuto de la ley de 1969, pues no se aprobó el reglamento de la nueva ley. Ya desde entonces se construyó la imagen de los estudiantes de esta universidad como revoltosos peligrosos. El gobierno militar acusaba constantemente a los estudiantes cantuteños de realizar actividades de agitación política, como izar banderas rojas, guardar armas dentro de la Universidad y bloquear la línea del ferrocarril que conectaba a Lima con las zonas mineras del centro del país.<sup>801</sup>

El 20 de febrero de 1977, el CONUP, por resolución 4661-77, recesó las actividades académicas en La Cantuta, detuvo a 651 estudiantes y conformó un comité interventor de administración. Durante la intervención falleció el estudiante Walter Bravo Trinidad. En esos momentos, la UNE contaba con más de 6 mil alumnos matriculados. La Universidad fue cerrada por 41 meses. Este hecho no produjo movilizaciones entre la población estudiantil y docente, debido a las pugnas internas entre los estudiantes.

Durante los meses de receso, el PCP Patria Roja sufrió una ruptura interna y los dirigentes de la FEUNE tomaron partido por la facción denominada Pukallacta. Pese a que la Universidad estaba cerrada, esta junta directiva del FEUNE representó a La Cantuta en diversos eventos hasta 1980. En todas estas oportunidades, defendieron abiertamente las posiciones de Pukallacta, que pregonaba la «guerra popular del campo a la ciudad» y boicoteaba los paros nacionales por considerarlos paros «revisionistas». La UNE ofreció a los alumnos la posibilidad de trasladarse a otras universidades. A los alumnos de los últimos ciclos se les brindó facilidades para que, mediante un ciclo acelerado, accedieran a la titulación. Paralelamente, los ciclos de verano de actualización docente fueron impartidos en el colegio Ricardo Palma, ubicado en el distrito de Surquillo, en Lima.

Pukallacta, escindido del PCP Patria Roja en 1978, fue desplazándose hacia posiciones más radicales. Por otra parte, incluso el PCP Unidad – que era el representante de la facción moscovita legalizada – pasó por un período de escisiones. Casi al margen quedaron las corrientes trotskistas y heterodoxas de la izquierda, como Vanguardia Revolucionaria, que tendrían un papel fundamental en los años ochenta en el nuevo escenario que inauguraba el gobierno de Fernando Belaunde Terry y la aprobación de la ley universitaria 23733 de 1984.<sup>802</sup>

## 19.2. REAPERTURA DE LA UNIVERSIDAD Y LOS DISTINTOS ACTORES EN ESCENA

El 10 de agosto de 1980, el electo presidente Fernando Belaunde Terry levantó el receso impuesto a la UNE por el CONUP en 1977. Así, luego de tres años y ocho meses se reiniciaban las labores académicas con la instalación de la Comisión de Gobierno de la Universidad.

Los grupos políticos que tuvieron presencia en La Cantuta durante los años ochenta se organizaron en los siguientes frentes de estudiantes:

**Tabla 2**

GRUPO	FRENTE POLÍTICO
Pukallacta	Frente Estudiantil Unidad y Lucha (FEUL)
Patria Roja UNIR	Frente Estudiantil Revolucionario del Perú (FER del Perú)
Partido Comunista Unidad	Juventud Comunista Peruana (JCP) Movimiento Universitario Revolucionario (MUR)
UNIR Combatiente	FER Bolchevique / Izquierda Combatiente Revolucionaria (ICR)
Unidad Democrática Popular (UDP) Pueblo en Marcha	Frente Estudiantil Democrático Revolucionario (FEDR)

<sup>801</sup> «Golpe de gracia a La Cantuta». *Marka*, n.º 144, 1980.

<sup>802</sup> Vanguardia Revolucionaria apareció luego de la escisión del MIR-Histórico. En 1977, conformó, con otras agrupaciones de izquierda, la Unidad Democrática Popular (UDP) y, en 1980, participó en la formación de Izquierda Unida (IU).

Vanguardia Comunista Marxista Leninista (ML)	Vanguardia Estudiantil Revolucionaria (VER-ML)
Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso (PCP-SL)	Movimiento Juvenil Popular
Partido Aprista Peruano (PAP)	Comando Universitario Aprista / Alianza Revolucionaria Estudiantil (ARE)
Partido Socialista de los Trabajadores (PST)	Juventud Socialista
Partido Unificado Mariateguista (PUM)	Juventud Mariateguista

Es evidente la fragmentación de los grupos de izquierda y la tendencia a sectorizar el espacio universitario. Tanto el PCP-SL como el MRTA irrumpían boicoteando las actividades de la izquierda legal a medida que adquiría mayor presencia en la Universidad. En otras palabras, ante el proceso de quiebre y disolución de las izquierdas que culminó en 1987, opciones radicales como el PCP-SL y el MRTA buscaron absorber las bases de los partidos de izquierda legal.

En 1984, el movimiento estudiantil de La Cantuta, al igual que el de las otras universidades públicas, se movilizó masivamente contra la denominada ley Alayza-Sánchez (ley 23733). Posteriormente, con la aplicación de la ley, se disolvieron los programas académicos, se instalaron las facultades y se eligieron nuevas autoridades. En 1985 resultó elegido como rector el profesor Milciades Hidalgo, un candidato propuesto por el PCP Unidad y apoyado por el PUM y el PCP Patria Roja.<sup>803</sup> Con la llegada del nuevo rector y de los nuevos decanos, los partidos políticos se repartieron las facultades y tuvieron injerencia en el nombramiento de profesores.

En este proceso, se consolidó la presencia del PCP Patria Roja en el sindicato de docentes (SUDUNE). También se produjo la elección de las nuevas directivas para la FEUNE y los centros federados, que también fueron ganados por el PCP Patria Roja. Éste desplazó a la antigua dirigencia de Pukallacta, que formó el frente denominado FEUL.

Con ocasión de las elecciones de septiembre de 1987, se constituyeron tres listas para la FEUNE y cuatro para los centros federados. Ganó la lista de Izquierda Unida (IU), constituida por la alianza entre el VER, PUM y el MUR, que desplazó a las listas constituidas por el UNIR de Patria Roja (que también se presentó como IU) y a la alianza del Frente Estudiantil Democrático Revolucionario (FEDR), integrada por la Unidad Democrática Popular, el Movimiento Pueblo en Marcha y el UNIR Combatiente. Estas elecciones se realizaron en un clima de inestabilidad y violencia, ya que el PCP-SL llamaba a boicotearlas. Por su parte, el PCP Unidad llevó a gente del sindicato de Construcción Civil para garantizar las elecciones. El MRTA participó en las elecciones estudiantiles por intermedio del FEDR, lista que quedó en último lugar y que recurrió a UDP Pueblo en Marcha y también al FER Bolchevique, el cual posteriormente perdió sus militantes, quienes se integraron al PCP-SL.

Meses antes de este proceso electoral, se produjo una intervención policial en diversas universidades de Lima, incluyendo la UNE. Este hecho, si bien no era el primero en la larga tradición de represión al movimiento universitario, inauguraba un nuevo ciclo de represión estatal en las universidades de la capital, que ya se intensificaba en la sierra central, particularmente en la Universidad Nacional del Centro del Perú. A su vez, la directiva del PCP-SL propiciaba el enfrentamiento con el Estado, lo que repercutió gravemente en la imagen de universidades públicas como la UNMSM y La Cantuta, que terminaron siendo consideradas como «nidos de terroristas» y, por lo tanto, devaluadas como instituciones y, literalmente, convertidas en «tierras de nadie».

En este escenario de disputas, que se extendió hasta el noventa, se encuentran dos líneas de tensión. Por un lado están el proceso electoral y el sistema democrático en su conjunto, que fueron el referente a partir del cual se articularon las demandas de la izquierda legal. Ésta perdió legitimidad estudiantil por sus prácticas clientelistas y su ineficacia en resolver la crisis de la universidad. Por otro lado, irrumpía la «lucha armada», encabezada por los grupos subversivos que, tras ubicarse en el mismo proceso de radicalización de la izquierda, se presentaron ante los estudiantes como la realización de las promesas incumplidas del sector legal de la izquierda, pero principalmente como una herramienta para el cambio violento de sus precarias condiciones de vida.

<sup>803</sup> Es importante anotar que, en 1984, se formó el PUM no solamente sobre la base de la UDP, sino también con participación de trotskistas del PRT, que luego se integraron con su base al PUM. Esto convirtió al PUM en la principal fuerza de izquierda, que logró arrebatársela la hegemonía al PCP Patria Roja en la FEUNE y los centros federados. Hay que tener en cuenta que, a inicios de los noventa, el rector fue Ramos Geldres, de las filas del PUM.

En suma, para el caso particular de la UNE, ante la falta de consensos, la carencia de objetivos, planes institucionales claros y corrupción existente, se produjo un vacío que fue cubierto por el proyecto organizativo e ideológico del PCP-SL en un clima de abierto enfrentamiento a partir de 1987, con una izquierda fragmentada y con el MRTA luchando por obtener el control total de La Cantuta:

Si había un profesor que era del PAP o del PUM, no lo dejábamos entrar en Administración y, de la misma manera, lo hacían en otras facultades; era política parcelaria, sectaria que se hacía en la Universidad, sin ningún fin, no había un objetivo político y menos proyectos ¡obviamente!, era repartija de cargos nada más y tener el poder [...] [teníamos] una idea de crear el poder y una de las cosas que nosotros decíamos era: «El poder popular se crea integrando todos los elementos de una sociedad, el discurso político, el programa educativo». Pero solamente en eso quedó, no llegamos a discutir grandes cosas porque todo estaba en función del control administrativo, de la Universidad, el copamiento a nivel de docentes, nada más que eso [...] No tuvimos la suficiente capacidad para poder, primero, plantear [un] proyecto de universidad, en función de una alternativa para la sociedad. Nunca lo hicimos, y a la vez permitimos con eso que SL tuviera gran presencia en la universidad. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P340. Varón, miembro de la juventud comunista, 1983-1987)

### 19.3. PRESENCIA DEL MRTA EN LA UNE

El MRTA, surgido de la alianza entre el MIR El Militante y el Partido Socialista Revolucionario Marxista Leninista, comenzó a tener mayor actividad desde 1984. Ese año se instaló en la Facultad de Educación Física de la UNE una célula del MRTA, que fue desbaratada posteriormente por la Policía.

En esta fase, el MRTA recurrió a actividades propagandísticas y al alarde de fuerza, participando en enfrentamientos con el PCP-SL por el control de los internados, que eran objeto de una disputa permanente por su papel estratégico en la generación de clientelas partidarias.

La residencia estaba dividida. Patria Roja era muy fuerte, tenía un control Bolchevique, Pabellón «A» y Pabellón «B», y Pabellón «A» Patria Roja. Pabellón «B» ya estaba repartido, Bolcheviques, VER, PUM también había en el «A», gente del VER en el último piso. Pero sigilosamente fueron entrando gente del PCP-SL y del MRTA, pero no tenían el control del pabellón en ese entonces. Como anécdota, por ejemplo, de que el control lo tenía Patria Roja, el FER del Perú [el año 1985 ingresa con] cachiporras, puñete, y haciendo uso de todo instrumento de agresión, se repartieron los bienes, los oficios que les llamaban, los oficiales y los bolcheviques. Fue una guerra, una batalla campal. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P335. Miembro del PUM, 1986-1992)

El MRTA empezó a fortalecerse a partir del apoyo de agrupaciones como Pueblo en Marcha y su alianza con el FER Bolchevique, que tuvo un papel importante en las disputas por la vivienda universitaria. El MRTA, finalmente, se instaló en uno de los pabellones y se abrió, a partir de entonces, un espacio de enfrentamientos con el PCP-SL.

Cuando el PUM pierde, nuestra ruptura, va apareciendo en el año 84 el MRTA en la zona, en el área, en la universidad, y ellos son los que después dan el golpe al interior de una de las residencias, porque había dos y después ya lo tiene UDP, de Pueblo en Marcha, pero que después pasan todos a ser MRTA. Otro pabellón, porque eran dos, en el año 87-86, pasa a ser controlado por UNIR-Combatiente, que fue una ruptura que se produjo en el 85-86. Pero era una ruptura de tránsito hacia el PCP-SL, ya incluso con una suerte de fusiles de madera hicieron una marcha, pero el PCP-SL se reía porque estaba haciendo trabajo interno. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P329. Miembro de juventud mariateguista, 1982-1987)

En este período, el MRTA mantiene un perfil bajo, principalmente porque su función en el claustro no tenía un carácter estratégico sino táctico, a lo que se añade que, a pesar de que contaba con la simpatía de algunos sectores estudiantiles, no tenía la organización ni la capacidad operativa que el PCP-SL desplegaba, aunque se mantenía firme en sus espacios, como Humanidades y un pabellón del internado de varones. Cuando en 1991 fueron dinamitados los pabellones, el MRTA prácticamente había desalojado este espacio.

### 19.4. EL PCP-SL EN EL ESCENARIO

El hecho de que La Cantuta sea una universidad relativamente poco comunicada con el resto de la ciudad, a unos cuarenta kilómetros de Lima, con un alumnado en su mayoría proveniente de provincias o de las periferias de Lima metropolitana (generalmente pertenecientes a familias con economías precarias) y con una antigua tra-

dición de lucha (sintetizada en la conocida frase del maestro Ricardo Dolorier «ser maestro en el Perú es una forma muy peligrosa de vivir») ayudó mucho al tipo de labor ideológica realizada por el PCP-SL en su primera fase. Este trabajo fue apoyado por algunos alumnos provenientes de provincias que se trasladaron a la UNE.

A inicios de 1980, el PCP-SL tuvo una discreta presencia en la UNE mediante la labor del Movimiento Juvenil y el apoyo de algunos docentes, entre los que destacaron los profesores Nilda Atanasio y Víctor Zavala Cataño. Ambos docentes lograron formar una importante escuela maoísta al interior de la Universidad, donde se debatía frontalmente con militantes de Pukallacta.

Como señala el siguiente testimonio, la función de Nilda Atanasio era preparar el terreno al PCP-SL mediante el debate ideológico con los sectores más radicalizados de la Universidad:

[Nilda Atanasio] decía «traigamos a fulano de tal», que era un hombre fuerte de Pukallacta y el poder de la universidad y [decía para] traerlo acá [al debate en Filosofía], «y lo desnudamos y le demostramos que no sabe nada, porque no saben nada, solamente son fraseros [sic], puro cliché, el marxismo no es solamente mencionar marxismo o repetir alguna frase, alguna cita». No le gustaba ninguna cita, ni ninguna apología, ninguna alusión a la autoridad del genio, entonces ella nunca formó un estudiante para gritar, formó gente, o sea con ella germinó el primer núcleo senderista en la Universidad. Y su misión no era otra, no era para la guerra sino era para ir construyendo un tejido que podía dominar a la Universidad en función de la guerra, para los años siguientes probablemente. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P329. Miembro de la juventud mariateguista, 1982-1987)

A medida que transcurrieron los años, los militantes de Pukallacta fueron absorbidos por el PCP-SL, hasta desaparecer como grupo alrededor de 1987. Así, desde el primer cisma del PCP Patria Roja, la mayoría de los sectores radicalizados de Pukallacta, que tenía un trabajo político en sindicatos y en el campesinado, pasaron a militar en las filas del PCP-SL, mientras en la Universidad iban siendo incorporados ideológicamente, con mayor impulso desde 1984, y eran reducidos a un frente estudiantil con pocos cuadros activos.

Así, la penetración ideológica inicial fue encabezada por Nilda Atanasio y otros intelectuales que, fogueados en el debate de ideas, abrieron el terreno para la consolidación del PCP-SL en la UNE. Este proceso se manifestó en el dominio de espacios estratégicos de la vida estudiantil, como el manejo del comedor y el control de la vivienda universitaria y el transporte.

Nilda Atanasio, huantina y destacada ex alumna de Abimael Guzmán en la UNSCH, llegó a Lima en los años setenta para postular a la cátedra de Ciencias Sociales en la UNE. Desde su llegada, formó círculos de estudio y pasó a formar parte del PCP-SL, hasta que se ordenó el receso de la UNE en 1977. Hugo Muñoz, entonces esposo de Nilda Atanasio, fue destacado a provincias. Ambos terminaron viajando a China. A su regreso, Nilda Atanasio se incorporó a la docencia en la UNE y desarrolló abiertamente su trabajo de proselitismo a favor del PCP-SL, aunque luego tuviera que tomar precauciones a medida que los estragos del conflicto armado interno mostraron la necesidad de realizar un trabajo político más clandestino:

[...] las pocas veces o la única vez que yo tuve oportunidad de escucharla hablar de [Abimael] Guzmán fue cuando dijo: «El doctor Guzmán tiene un esquema de evolución que es científico y de altísima calidad», o sea, ella tenía una alta reverencia a [Abimael] Guzmán, ninguno de sus cuadros podrían haberlo aludido a él en términos de tú. Ahí es donde me di cuenta que su labor era esa [adoctrinar] y ella sabía quiénes eran los designados del autor para compartir con ella todas sus conversaciones en el café. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P329. Miembro de la juventud mariateguista, 1982-1987)

En 1982, el PCP-SL era todavía una fuerza políticamente minoritaria en la UNE, mientras que el bloque de la IU constituyó el proyecto «Nueva Universidad», que involucró a docentes, autoridades y estudiantes. En este primer momento, el PCP-SL articuló su trabajo en el Movimiento de Obreros y Trabajadores Clasistas (MOTC) de la Carretera Central. Posteriormente, el PCP-SL llegó a controlar la USE de Ate Vitarte en coordinación con Pukallacta y el UNIR-Bolchevique, lo que le permitió, en 1989, impulsar el Comité de Lucha de los Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central.<sup>804</sup>

Sendero [el PCP-SL] no tenía la capacidad de llegar a la Federación, por eso es que no le dieron mucho interés a eso, ellos estaban más enmarcados en hacer un desarrollo de trabajo de la Carretera Central. Por eso es que ellos crean, si no me equivoco, el Movimiento de Trabajadores Clasistas de la Carretera Central. Todo era en función de eso, el trabajo era eso. Por eso entendíamos que el trabajo no era llegar a la Federación, hacían trabajos a nivel

<sup>804</sup> Véase el estudio sobre los sindicatos en la Carretera Central en este tomo.

estudiantil para ganar militantes a nivel de estudiantes, de aulas, etc. Pero después empiezan una etapa más agresiva. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P340. Miembro de la juventud comunista, 1983-1987)

El proceso de captación de cuadros fue definido como una etapa más de las acciones del PCP-SL. La izquierda legal se sintió impotente para frenar este avance, particularmente entre 1982 y 1986. En ese intervalo, el PCP-SL comenzó a desarrollar un trabajo de expansión gradual en diversas facultades, donde combinó las «escuelas populares» con las acciones de propaganda (los denominados «petardistas»). A partir de 1984, el PCP-SL comenzó a absorber a Pukallacta y a fuerzas con escasa presencia política, como Vanguardia Revolucionaria Proletario Comunista (VR-PC). Así experimentó un crecimiento exponencial y obtuvo el control de espacios considerados vitales.

#### 19.4.1. El PCP-SL y su revolución radical

En general, el recurso a la violencia sería un componente importante del discurso radical, que se alimentó de varias fuentes y tradiciones políticas, y que fue luego reelaborado en los años sesenta y una parte de los años ochenta, especialmente en el espacio de la universidad. Junto con esto, predominaría una actitud de enfrentamiento político, que privilegió los conflictos a la búsqueda de consensos y la formación de una voluntad colectiva.

Los cursos que se impartían jugaron un papel central en la difusión y transmisión de estas ideas revolucionarias y actitudes de ofensiva, así como las prácticas institucionalizadas que definieron una concepción homogeneizadora y una perspectiva instrumental de la violencia.

A través de los cursos de materialismo histórico y dialéctico, y desde diferentes espacios de interlocución y debate ideológico, los diferentes grupos políticos sostuvieron un discurso y visión crítica de la sociedad peruana que jugaron un papel fundamental (aunque no determinante) en la reproducción de este imaginario violento, como revela el testimonio de una estudiante que posteriormente se convirtió en militante del PCP-SL:

[...] cuando ya ingresé a la Universidad, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico te abre los ojos [...] Comprendí más el proceso, el proceso de la lucha, que el pueblo siempre ha luchado y luchará y esa lucha misma sirve para transformar. Se estudió la revolución francesa, que ha sido sangrienta, que ha habido excesos, que ha sido violenta, sí, pero eso de qué sirvió, de transformar a la sociedad y eso es lo que pesa y ahora pues, si no se hubiera dado esa situación, ¿cuántos años más hubieran pasado para que pueda devenir todo lo que es el capitalismo ahora? Hubiera demorado más; ellos han tenido trescientos años para tomar el poder y consolidarse en el poder. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P343. Estudiante de la UNE 1985-1990, integrante del PCP-SL, recluida en el penal de Santa Mónica)

El aprendizaje de textos y su exégesis fueron mecanismos de persuasión para el trabajo político. Por otra parte, las disputas internas expresadas en las luchas por las pizarras, en las pintas y debates realizados en aulas y el comedor, expresaban la estrategia de inserción del PCP-SL en la población estudiantil como parte de un proyecto pedagógico que presentaba una visión esquemática del mundo y de la historia y que justificaba la violencia.

En la percepción de uno de los entrevistados, lo que diferenciaba al militante del PCP-SL de aquellos años precisamente era una propensión al estudio y al diálogo, que con el paso de los años se fue haciendo menor, por lo que quedó simplemente la intolerancia y la coerción:

Sendero [el PCP-SL] llega a esa etapa [1981-1982] vivió una etapa ideológica, básicamente una labor de construir en el ámbito académico. No eran malos, eh, eran de lo mejor que había en la Universidad, en las aulas, tipos muy estudiosos. Libro en mano, siguiendo la tradición de [Abimael] Guzmán, con el libro en el sobaco [...] conmigo por lo menos y con mucha gente eran muy receptivos pero [también] muy duros, implacables en el plano académico, no aceptaban a la gente superficial. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P329. Miembro de la juventud mariateguista, 1983-1988)

Recapitulando, es posible decir que la oposición al gobierno militar en los años setenta y la fragmentación y división de la izquierda frente a la participación en el gobierno a partir de los procesos electorales de 1978 y 1980 propiciaron el debate y las disputas al interior de los grupos universitarios. A esto se añadió la dramática reducción del presupuesto asignado a las universidades, en contraste con el incremento explosivo de su población estudiantil en el contexto de agudización de la crisis económica a mediados de los ochenta. Todos

estos factores fueron determinantes del vacío de poder que se generó en la UNE. Las sensibilidades radicales terminaron por desplazarse hacia PCP-SL y, en menor medida, hacia el MRTA.

#### 19.5. EL PCP-SL SE POSESIONA DEL ESPACIO

Desde la segunda mitad de los años ochenta, el PCP-SL cambiaba su estrategia en la ciudad y pasaba de los sabotajes y asesinatos selectivos a la infiltración de organizaciones y movimientos sindicales y barriales. Para 1987, el PCP-SL había reunido las condiciones para desplazar a los otros actores políticos de la UNE, proceso que se profundizó hacia finales de los ochenta con la sustitución de los gremios estudiantiles por una nueva forma de organización, que permitía al PCP-SL controlar la vida cotidiana en la Universidad.

La mirada vigilante de Abimael Guzmán, dibujado en las paredes del comedor universitario poco después de la matanza de los penales en 1986, simbolizaba el dominio del PCP-SL sobre la Universidad. Todo esto se extremó, pues había una línea militar definida en la capital, que correspondía al inicio del «Gran plan de desarrollar bases en función de la conquista del poder», cuya primera campaña «Impulsar el desarrollo de las bases de apoyo» (agosto 1989-febrero 1990) debía ser preparatoria para alcanzar el «equilibrio estratégico».

Entre 1987 y 1991, empezaron a desaparecer los centros federados y los estudiantes cercanos al PCP-SL ocuparon las dirigencias estudiantiles, en la mayoría de los casos impuestos en asambleas donde era evidente la presión del PCP-SL, mientras el CIUNE controlaba las viviendas. Los estudiantes percibían que ser maestro en el Perú seguía siendo una vocación comprometida, pero que no tenía que reducirse a los intereses de un grupo por el poder, sino a la recuperación del país como parte de un proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad:

Teníamos mucho interés [...] en hacer un estudio, a dedicarse uno a estudiar en la universidad para ser un profesional, para ser un profesor. Porque queríamos ser maestros, un maestro pero con una visión bien amplia de las cosas, no con las restricciones, no con la metafísica, las cosas idealistas, no iba eso. Y lo otro era que había demasiadas injusticias [...] se hablaba de tanta opresión, de tanta miseria y de que la participación, de que el estudiante debía, tenía que tener en esa guerra interna, pero como parte del movimiento revolucionario o sea la guerra popular de esa época. Entonces, no todos, como yo, han ido a la guerra. Sin embargo, simpatizábamos mucho con todas las posiciones y las ideas del Partido Comunista [PCP-SL], y hasta el día de hoy pienso que si no hubiese sido por circunstancias históricas y otra cosa la situación hubiera sido diferente y muy buena para las grandes mayorías. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P333. Estudiante de la UNE, 1990-1991)

En este contexto, la situación de la Universidad era crítica. Por un lado, el PCP-SL se apropió de las marchas convocadas en 1987 por la Federación en un momento que coincidió con la crisis de la FEUNE, crisis que se acentuaba por la división en la IU entre el PUM y el PCP Patria Roja que se disputaban la dirección de la FEP:<sup>805</sup>

Hicimos la gran marcha de sacrificio, desde Milcíades Hidalgo y todas las autoridades a la cabeza, pero Sendero [el PCP-SL] nos robó todas las consignas de toda la marcha. Eran más de 3 mil a 4 mil alumnos que veníamos hacia Lima y ya no podíamos nosotros con Sendero [el PCP-SL], ya no podíamos, o sea Sendero [el PCP-SL] te comía todas las marchas, todas las marchas, [a] todas las consignas de «combatir, resistir, consigna popular», [replícalo] «combatir, resistir, guerra popular» estábamos cagados, disculpe pero estábamos cagados porque ya nos disgregábamos [...] Toda esta promoción que éramos los que todavía tuvimos el control de la última federación universitaria, éramos gente que veníamos del 82 pero nos dividíamos, y qué dejábamos si no quedaba nadie. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P329. Miembro de la juventud mariateguista, 1982-1987)

Como señala un militante del PCP-SL que participó en aquella marcha, el objetivo político implicaba un costo que debía pagarse con una cuota de sacrificio:

Se produce una protesta, si no me equivoco era por el medio pasaje; hicimos una manifestación, una movilización, en marcha de sacrificio, bajamos de Chosica a Lima, si no me equivoco, es el 87, una de las primeras grandes movilizaciones cantuteras después del receso. Llegamos a Lima, hicimos nuestra movilización, llegamos al ministerio de Educación. La Asamblea Nacional de Rectores quería eliminar el medio pasaje y eso nos costó mantenerlo, nos costó también represión de la Policía. Muchos estudiantes llegaron mal a Lima, con las plantas san-

<sup>805</sup> Esto se muestra en el comunicado de la FEUNE publicado el 16 de agosto de 1987, donde la dirigencia de la FEUNE, ligada al PUM y al PCP Unidad, expresaba lo siguiente: «Rechazar y desconocer a la falsa comisión organizadora del congreso de la FEP que encabeza Edgar Coa, que en la práctica representa sólo a su grupo partidario: Patria Roja “oficial”».

grantes y eso no es más que consecuencia de un estudiantado consecuente con sus ideas. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P337. Miembro del PCP-SL recluido en el penal Castro Castro)

La apelación a una mística consecuente como una ética del compromiso de clase fue apropiada por el PCP-SL, que logró atraer a sus filas incluso a los militantes descontentos con los partidos de la izquierda legal. Este avance en La Cantuta fue reforzado por la instalación de una coordinadora «clasista» en la Carretera Central, zona estrechamente ligada a la Universidad, cuya infraestructura era usada como zona de refugio y almacenamiento de materiales en abierto disputa con los otros grupos partidarios.<sup>806</sup>

En líneas generales, a fines de los años ochenta, los estudiantes de La Cantuta tenían la sensación de estar viviendo en el borde de una situación insostenible:

[...] cuando el PAP asume el gobierno en 1985 a La Cantuta le da epilepsia, más aún, Sendero [el PCP-SL] arremete, peor [...] A la Universidad le comienza a llegar poco presupuesto, Bienestar Universitario comienza a hacer lo que puede [...] en los internados [...] se caían las paredes y todo, era un pabellón así en completo abandono, y después [...] lo toma el MRTA [...], tenía presencia en el internado de varones y se comienza a pelear con Sendero [el PCP-SL] por la hegemonía de ese espacio y ésa era una lucha permanente. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P329. Secretaria general ARE, 1985-1990)

Desde 1988, el PCP-SL logró el control del Comité Lucha de Comensales y desplazó al PCP Patria Roja y a lo que quedaba del FEUL. Previamente, luego de la masacre de los penales en 1986, el PCP-SL instaló en la UNE una serie de murales con temas y lemas alusivos a la «lucha armada» como forma de expresar su poder al interior de dicho espacio en una fase en que monopolizaron los debates ideológicos. Este avance político se concretó en 1988, cuando el PCP-SL logró expulsar al VER-ML de la vivienda universitaria. En repetidas ocasiones, el PCP-SL utilizaba la violencia física y una campaña de acoso y amenazas para expulsar a sus oponentes, al igual que el MRTA. Así, tras disputárselo al PUM, llegaron a apoderarse del Comité de Comensales:

[...] su dominio primero fue del comedor, vivienda, ciertos eslabones importantes de las facultades, sobre todo de Ciencias Sociales y Humanidades. Después se fue trasladando a otras facultades, pero ya era un aparatazo, era un partido enorme, ya no podíamos hacer nada, nosotros no crecíamos, nos disgregábamos, no había el contrapeso interno, Sendero [el PCP-SL] queda solo en el 88, los amigos que quedaron no pudieron hacer nada. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P329. Miembro de la juventud mariateguista, 1982-1987)

Con el poder adquirido, el PCP-SL comenzó a presionar a las autoridades para tener control sobre el manejo administrativo. Logró que se autorice la utilización de los sótanos de la biblioteca para el desarrollo de sus «escuelas populares» e incluso gestionó la donación de un horno para los presos procesados por terrorismo:

Ese horno con el carro de la propia Universidad fue trasladado al pabellón Británico de Lurigancho, no sé si te enteraste de esto. Esto fue un apoyo administrativo que dio como institución la Universidad a los presos políticos de Sendero [PCP-SL], a sus prisioneros de guerra, con esto te doy a entender cuál era la presión y la presencia de Sendero [PCP-SL] en los años 87, 88 más o menos. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P340. Miembro de la juventud comunista, 1983-1987)

El proyecto pedagógico original del PCP-SL fue progresivamente desplazado por un proyecto mucho más pragmático en función al avance de la «guerra popular», cuyo contenido deslegitimaba reivindicaciones de otras formas de discriminación y opresión. El «odio de clase» tenía un gran efecto en un sector de las juventudes cantuteñas y se manifestaba como una revelación y una posibilidad de revertir las condiciones estructurales mediante la violencia.

En síntesis, junto con el clima de terror, el PCP-SL tenía la capacidad de apelar a motivaciones presentes en las capas juveniles, que terminaban siendo atraídas por el PCP-SL frente a la evidencia objetiva de la desigualdad económica: «[...] [El PCP-SL apelaba a] rabias [...] no sé si ocultas, rabias directas, abiertas y creo ese fue un poco el mensaje que fue jalando a muchos estudiantes cantuteños a Sendero Luminoso [PCP-SL]. Ese odio de clase, esa gran diferencia social que había: gente con tanto dinero y gente que no tiene, porque todos estábamos en esa misma situación» (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P334. Ex estudiante dirigente, 1989-1992).

---

<sup>806</sup> La coordinadora es el Comité de Lucha de Obreros y Trabajadores Clasistas de la Carretera Central (CLOTCCC), conformado en abril de 1988, cuya dirigencia fue copada por el PCP-SL y que convocó a una serie de «paros combativos» en abierto enfrentamiento con la CGTP. Véase el apartado sobre los sindicatos en la Carretera Central.

En términos de una militante del PCP-SL recluida en el penal Santa Mónica, se trata de una lucha de dos líneas, donde lo viejo será finalmente desplazado por lo nuevo y donde lo principal es la opresión de clase, deslegitimando cualquier otro tipo de demanda centrada en especificidades de género, étnicas o raciales:

No es problema de luchar contra tu otro sexo, [eso] llama a desunir, y no pueden luchar juntos por sus derechos, porque además de luchar contra quien me explota también luchó contra el que no es de mi sexo [...] esas ideas de machismo, son ideas feudales [...] como el racismo, que con el tiempo van a desaparecer [...] [El profesor Campos] decía que luchaba contra el racismo, pero él era racista, ¿por qué? Porque solamente los negros tenían que dominar, los negros, negros; eso no es así, igual la mujer, solamente la mujer. O sea: como el negro está explotado, que el negro domine, como la mujer está explotada, que la mujer domine. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad 343. Estudiante de la UNE, 1985-1990, integrante del PCP-SL recluida en Santa Mónica)

En efecto, para 1989, la presencia de PCP-SL se tornó más violenta y logró controlar diversos gremios (Pedagogía, Ciencias Naturales, Matemáticas, Sociales). En la práctica desapareció la FEUNE, así como todos los partidos que se oponían al PCP-SL. A su vez, los sectores pro PCP-SL reorganizaron la FEUNE, pero en adelante los estudiantes ya no elegirían su federación mediante elecciones. En el internado, el poder del PCP-SL era total. El discurso del PCP-SL se centraba en mejorar las raciones del comedor y el servicio de transporte, ambos servicios vitales por el aislamiento geográfico de la Universidad. Éste fue un mecanismo clave en su control del campus a inicios de los noventa. Al mismo tiempo, se hicieron presentes agentes infiltrados del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) en la academia Amauta con el objetivo de ubicar a los principales activistas del PCP-SL en la UNE.

Los centros federados fueron remplazados por cuatro comisiones o comités: Comedor, Transporte, Internos (Vivienda) y Cultura. Esta última estuvo ligada a los grupos de teatro y música popular que se presentaban en los asentamientos humanos ubicados en el eje de la Carretera Central (Chosica, Vitarte), lo cual estaba ligado con las prioridades del trabajo del PCP-SL, pues la Carretera Central era concebida como la «puerta de entrada al corazón del estado burocrático».

Un espacio donde se expresaban todos los símbolos del PCP-SL fueron los actos político-culturales que se iniciaban cantando el himno de La Internacional. Dentro del programa, se incluían actos musicales, recitales poéticos y representaciones teatrales. Llegaron a tener gran poder de convocatoria, sin que ello necesariamente significara una adhesión masiva al proyecto del PCP-SL:

Íbamos alumnos internos, alumnos externos y creo que alguna vez me mostraron un video, ahí nomás el año 91, cuando hicieron las capturas, y eran una gran cantidad de gente: trescientas o cuatrocientas personas. Y no creo porque todos hayan tenido [...] tal vez ni siquiera una afinidad con Sendero Luminoso [el PCP-SL]. Será [...] la participación misma, a mí me gustaba ir, no creo que haya faltado a ninguno de ellos, estaba allí dentro de la universidad, a veces no tenía nada que hacer, iba a los actos culturales. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad 334. Ex estudiante, ex dirigente de la residencia de mujeres, 1989-1992)

Tales actos eran posibles por la existencia de talleres internos, compuestos en su mayoría por estudiantes de Humanidades, los cuales realizaban el «teatro popular» en la tradición del «teatro campesino» del profesor Zavala Cataño.

En 1990, al finalizar el período de Milciades Hidalgo, los partidos que lo habían sostenido en el rectorado (PCP Unidad y PCP Patria Roja) no lograron acordar la elección de su sucesor. De este modo, la UNE ingresó a un período de transitoriedad en el cual el rectorado fue ocupado por Octavio Rojas, un docente antiguo pero sin apoyo de ninguna fuerza política importante. El vacío que se generó fue aprovechado por el PCP-SL, que logró controlar la administración de Bienestar Universitario y, mediante la presión a las autoridades, influyó en el manejo administrativo de la Universidad. Como ocurrió en Raucana, el PCP-SL intentó organizar la vida de los residentes por medio del control de los servicios básicos. Así, cuando se realizaron las obras de alcantarillado de la Universidad, la licencia fue ganada por la empresa Electrocol, a la que se acusaba de ser fachada del PCP-SL.

Por otra parte, cada día se hacía más evidente que se sustraían insumos de Bienestar Universitario para ser donados a los presos del PCP-SL del penal de Canto Grande. En dichas acciones estuvo involucrado Hugo Muñoz, encargado de la oficina de Bienestar durante 1991, lo cual le valió ser sindicado como subversivo por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

### 19.6. LA CRISIS DEL ESPACIO UNIVERSITARIO Y LA RESPUESTA REPRESIVA DEL ESTADO (1987-1991)

En la UNE, la crisis institucional estalló en 1987 con el fracaso del proyecto «Nueva Universidad» de IU. La gestión universitaria entró en una etapa de franco deterioro que generaba redes de corrupción.

Las pugnas entre el PCP Patria Roja, el PUM y el PCP Unidad trajeron como consecuencia que, en los procesos electorales, surgieran varias listas que reclamaban para sí el membrete de IU. Por otra parte, el PCP Patria Roja se dividió y surgió la facción denominada UNIR-Bolchevique que pronto fue asimilada por el PCP-SL, que logró incrementar su presencia en La Cantuta a través del control del pabellón de internos y otros espacios. Apoyados en el discurso del «independiente consecuente» que luchaba por la causa del pueblo oponiéndose a la corrupción de los partidos de izquierda, que trabajaban por sus intereses particulares y no demostraban una práctica coherente con sus doctrinas, el PCP-SL, e incluso el MRTA, fueron copando espacios, recurriendo cada vez más a la fuerza, en medio de la crisis y rupturas de la izquierda legal:

El año 87 hubo la incursión en las universidades y Sendero [el PCP-SL] no se vio afectado en lo más mínimo porque ellos no tenían presencia en la vivienda. Una de ellas era nuestra, en la que estaba mucha gente que también no era del PUM y la otra era de Patria Roja, [...] en el 87 cambia el primer pabellón a manos del MRTA. El MRTA, también surgió como Pueblo en Marcha [...] después UDP y MRTA subió su presencia hacia el año 85-86, se divide en Patria Roja, Bolcheviques y son ellos recién en el año 87 que van a lograr sacar a Patria Roja de ahí a balazos, y nosotros tuvimos también que controlar a balazo. Teníamos ciertos tubos para defendernos, porque había que tomar el control y lo hemos defendido de Sendero [el PCP-SL], cuando UNIR Combatiente, mucha de esta gente se pasa ya definitivamente a Sendero [el PCP-SL]. Tuvimos que defender lo nuestro, y eso fueron abiertos enfrentamientos dentro de la Universidad. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P329. Miembro de la juventud mariateguista, 1982-1987)

El 13 de febrero de 1987, durante el estado de emergencia y en medio del toque de queda impuesto en Lima, alrededor de 4 mil policías ingresaron en la madrugada a las residencias universitarias de tres universidades estatales de Lima: la UNMSM, la UNI y La Cantuta. El Ministro del Interior señaló que esto se hizo para cerciorarse de la existencia de centros de preparación de grupos subversivos en el interior de las universidades e informó sobre 793 estudiantes detenidos, la mayoría por indocumentados, y otros por poseer antecedentes como subversivos. Hubo cuantiosos daños y varios heridos. Los rectores protestaron por la medida, que violaba el principio de autonomía universitaria.

Posteriormente, la madrugada del 20 de abril de 1989, fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía ingresaron a la UNMSM y La Cantuta, y detuvieron a más de quinientas personas. Durante el proceso que originó la intervención militar (1991-2000), el gobierno elaboró un manual de lucha contrasubversiva, en donde se calificó a la UNMSM como centro de captación y a la UNE como un centro de preparación militar. Estos operativos no impidieron el avance del PCP-SL en la universidad; por el contrario, generaron el rechazo de la comunidad universitaria, porque a los cantuteños se les estigmatizaba como subversivos. El incremento de las medidas represivas exacerbó las posiciones y pasiones de las facciones partidarias:

[Cuando] la Universidad es allanada por la Policía, varios de nuestros amigos cayeron detenidos, nosotros estábamos afuera y en ese entonces la reacción fue de rechazo unánime, a pesar de que se sabía que muchos de ellos estaban iniciándose en organizaciones que hoy llamaríamos subversivas. En ese entonces la intromisión de las Fuerzas Policiales evidentemente sólo podría provocar rechazo e indignación. Recuerdo la detención de algunos compañeros que por primera vez visitaban un calabozo en Seguridad del Estado, pero eso para muchos fue considerado como un mérito, [...] regresaron la mayoría de ellos fortalecidos y convencidos de la inoperancia del operativo policial. [...] Los estudiantes vieron que eso no iba a mellar su estado de ánimo y continuaron adelante. Lo que sí tengo la impresión es que ya había gente que había tomado el camino de las armas y que había armas en la Universidad. Más tarde, me enteraría que había ciertos lugares donde escondían las armas. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P335. Miembro del PUM, 1986-1992)

En enero de 1991, grupos lanzando consignas del PCP-SL se movilizaron por la Carretera Central protestando contra la intervención militar de Estados Unidos en Irak. La violencia y el hostigamiento contra los estudiantes se generalizaron al extremo. El 26 de enero, una estación local de televisión proyectó un video que mostraba un acto político cultural celebrado en la UNE, donde se apreciaba que, con la participación de mandos del PCP-SL, universitarios y estudiantes de un centro escolar desfilaban enarbolando banderas del PCP-SL y cantando himnos a Abimael Guzmán. Daba la impresión de que la UNE se había convertido en una «zona liberada». A partir de entonces, los estudiantes fueron sometidos a vigilancia por agentes especiales de

inteligencia infiltrados en el campus. Ése fue el caso de la mayoría de quienes posteriormente fueron asesinados por el grupo Colina en 1992.

En efecto, el SIN comenzó a destacar agentes de inteligencia en diferentes universidades y academias, que informaban semanalmente sobre las actividades estudiantiles y sus orientaciones políticas. En ese contexto, nueve estudiantes y un profesor, en julio de 1992, fueron asesinados por el grupo paramilitar Colina.

A raíz de la difusión del mencionado video, empezó a crecer la certeza de una inminente intervención policial.

Antes de la intervención militarizada de 1991, el Comité de Lucha de Comensales tomó como rehenes a dos autoridades ante la denuncia que hiciera el rector Geldres a la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) sobre un supuesto artefacto explosivo colocado en la Universidad. En esta coyuntura, la violencia ejercida por los estudiantes no dejaba de tener un referente inmediato, el «castigo ejemplar», propio del PCP-SL:

Ahí, aparte de haberlos insultado, y dicho lo que piensan, la pregunta era clara: ¿Cuál es el objetivo de las autoridades? ¿Qué cosa es lo que están buscando, una intervención militar, qué es lo que quieren? Y yo me acuerdo que alguien —no sé quién— propuso que les raparan la cabeza y que los sacaran amarrados con su letrero, algo como traidores. Eso ya no me pareció correcto porque no sé si realmente el objetivo de ellos era ir creando las bases para una intervención, pero sí me daba pena que les hiciéramos eso. Entonces, yo me opuse, no sé ni cuántos estudiantes estaban en el comedor porque era ya casi la hora de la cena, más o menos las siete de la noche. Yo dije que no, que no estaba de acuerdo porque eso me parecía demasiado. Y que, al final de cuentas, que cada uno quede con su conciencia de lo que había hecho. Y salieron de la universidad, los acompañamos hasta la puerta, hasta la calle y luego volvimos a cenar. Ya como para la semana, o ahí mismo empezó a salir información —creo que fue en *Expreso*— que La Cantuta es un nido de terroristas y no sé qué tanto, y que en los internados se esconden los mandos políticos-militares y [...]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P334. Dirigente de Comité de Internos Mujeres, 1989-1992)

La Cantuta fue intervenida militarmente tras una visita del entonces presidente Alberto Fujimori al campus. Las tropas militares irrumpieron en la Universidad a las tres de la mañana del 22 de mayo de 1991. Para entonces, la mayoría de los trescientos residentes estaba enterada de la situación y había logrado abandonar el local. Entre los estudiantes intervenidos se encontraban Armando Amaro Condor, Marcelino Rosales y Felipe Flores Chipana, quienes, al año siguiente, fueron asesinados por el grupo Colina.

#### 19.7. MILITARIZACIÓN DE LA VIDA ESTUDIANTIL (1991-1995)

La UNE fue intervenida militarmente desde mayo de 1991, al día siguiente de la accidentada visita de Alberto Fujimori, quien se vio impedido de ingresar al campus por el rechazo masivo que generó su presencia entre los jóvenes universitarios. Este hecho apareció ante la opinión pública como el detonante que produjo la instalación de una base militar en la Universidad. Las pintas fueron borradas y el comedor tomado por la tropa, que instaló un severo control militar que incluía el toque de queda. Los simpatizantes y miembros del PCP-SL pensaron, inicialmente, que se agudizarían las contradicciones pero, poco a poco las cosas fueron tomando un rumbo que no esperaban. En realidad, la intervención de las universidades públicas formaba parte de la estrategia contrainsurgente encaminada a liquidar de manera selectiva a las principales dirigencias del PCP-SL y del MRTA. La Cantuta aparecía, nuevamente, como un foco subversivo y se detectaba una predominancia absoluta del PCP-SL en Pedagogía, facultad bajo la responsabilidad de Hugo Muñoz, sindicado como responsable del Movimiento Intelectual Popular, organismo de fachada del PCP-SL. A su vez, los agentes de inteligencia señalaron a Bertila Lozano como un mando del PCP-SL que hacía proselitismo político en Raucana. El documento de inteligencia, dirigido durante los primeros meses de 1992 al comandante de la Primera División de Fuerzas Especiales del Ejército (DIFE), general EP Luis Pérez Documet, identificaba hasta medio centenar de miembros del PCP-SL con influencia en las facultades de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y, en menor medida, Electromecánica.

A pesar de la instalación de una base militar en el campus de La Cantuta, las tensiones continuaron en un clima represivo que progresivamente comenzó a controlar los espacios y mecanismos de intermediación y representación estudiantil, con el evidente malestar de gran parte del alumnado. Mientras tanto, en Lima, un mes después de dicha intervención militar, la Policía detenía, el 23 de junio de 1991, a Víctor Zavala Cataño, sindicado como el jefe del Comité de Planeamiento y Aniquilamiento del PCP-SL a escala nacional. Esta acción formaba parte de una serie de capturas de los principales dirigentes del PCP-SL (como Tito Valle Trave-

saño y Yovanka Pardavé de Socorro Popular), que llevaron a la posterior captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992.

El secuestro de nueve estudiantes y el profesor Hugo Muñoz ocurrió la madrugada del 18 de julio. Fueron extraídos de la residencia universitaria de la UNE y asesinados horas después por integrantes del denominado grupo Colina.<sup>807</sup>

Los alumnos sufrieron una serie de vejaciones por parte de la tropa acantonada en el campus, frente a lo cual debían recurrir a tácticas de protección solidaria:

Cuando tú ingresabas a la Universidad, estaban siempre como cinco del Ejército, de los cuales te revisaban, incluso había hasta personas [...] mañasas podría decirse, que te lo hacían [...] con el fin de revisarte, te llevaban a un lado y te comenzaban a revisar. A veces, ya por ejemplo [...] habíamos quedado que si a una la revisaban, si decían que se pongan a un lado, todas teníamos que ir, y había también detenciones de esa manera, porque cuando tú ingresabas, enseñasabas tu carné y, si tú estabas en una lista que ellos tenían, ahí te apartaban y de allí ya no sabían qué había pasado con esas personas; nosotros no supimos de varias personas que así se las habían llevado, así que siempre nosotros como estudiantes decíamos «Si a ti te dicen que te pongas a un lado, todas vamos y, si te quieren llevarte a ti sola, no, vamos todas». (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P342. Estudiante de la UNE, 1989-1992, integrante del PCP-SL recluida en el penal Santa Mónica)

Los años iniciales de la militarización fueron de gran incertidumbre para la población estudiantil, que en muchos casos se vio en la necesidad de dejar los estudios. Se hablaba de torturas y desapariciones de manera frecuente y, en medio del toque de queda, corrieron rumores de violaciones sexuales contra las alumnas que no acataban la medida. A su vez, se daba inicio a un proceso de «profilaxis ideológica». Las tropas se dedicaron al pintado de paredes, borraron las pintas y, a menudo, colocaron lemas a favor del gobierno, afirmando la autoridad de Alberto Fujimori por encima de la de Abimael Guzmán («El presidente de la República del Perú es Fujimori») o afirmando la autoridad de las armas («¿Quién le va a ayudar al estudiante? ¿Quién es la fuerza más valiente? Las Fuerzas Armadas, el Ejército Peruano»).

Esta situación era muy difícil de sobrellevar, pues implicaba, de modo similar a lo que hizo el PCP-SL, un control progresivo de los espacios públicos y privados.

A pesar de lo duro de las condiciones, durante la militarización, también se produjo la interacción entre estudiantes y soldados, a menudo con el objeto de hacerles entender que formaban parte del mismo bando, esto es, de los desposeídos. Sin embargo, a fin de cuentas, las brechas entre estudiantes y soldados imposibilitaban cualquier acercamiento:

Veíamos por ejemplo que entre el soldado y el oficial era un trato bien distinto, al oficial tú lo podía ver así, comiendo cosas ricas, en cambio a los soldados [...] Hablábamos con ellos y nos decían que ellos no querían estar acá, pero bueno, qué iban a hacer, incluso nos contaban que ellos venían de otros lugares y [...] entonces, nosotros allí hicimos una movilización, una gran movilización hicimos [...] En contra de que ellos entraran allí al comedor y comenzaran a racionarnos nuestra ración alimenticia, inclusive nosotros ya para entrar al comedor íbamos a tener que enseñar siempre nuestro carné, el que no tenía carné no comía, una situación así, entonces todos nos movilizamos [...] en un momento por ahí comenzaron a decir «al suelo, al suelo» y todos nos tiramos al suelo y nos dimos cuenta que ellos en realidad estaban disparando al aire para asustarnos [...] hemos avanzado, logrando entrar a donde estaba el rector, y le hemos dicho que él no puede violar la (autonomía), (el rector) no quiso ir [...] Pero sería una constante de que los soldados nos sirvan a nosotros nuestros almuerzos y se llevaban a la mayoría de trabajadores que estaban en contra de esa situación, se los llevaban y decían que eran subversivos, terroristas. A varios han detenido, a varios comensales los han detenido como senderistas, como terroristas, inclusive los que han muerto en La Cantuta, yo los he conocido, ellos también eran comensales. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P342. Estudiante de la UNE 1989-1992, miembro del PCP-SL recluida en Santa Mónica)

Mientras los cuadros del PCP-SL abandonaron los claustros universitarios, los estudiantes fueron los más afectados por estas medidas.

Con la instalación de la base militar, a cargo de la DIFE, se impuso un riguroso toque de queda de 10:00 p.m. a 6:00 a.m. En este período, fueron detenidos y amedrentados muchos estudiantes, docentes y trabajadores, que

<sup>807</sup> Algunos agentes del SIE estaban infiltrados en la academia preuniversitaria César Vallejo, controlada por el PCP-SL, y que tenía su local en la residencia universitaria. Se presume que el SIE tenía informantes también entre profesores.

fueron acusados de realizar actividades subversivas y, prácticamente, se militarizó la vida estudiantil. En efecto, se estableció todo un régimen de vigilancia, donde primero estaba prohibido todo tipo de movilización o de agrupamientos. Las pocas movilizaciones que se lograron organizar eran dispersadas a balazos. También se hizo habitual la presencia de agentes de inteligencia que tomaban fotos o filmaban en los interiores de la Universidad. Se reguló, además, los horarios de los estudiantes residentes en la vivienda, quienes sólo podían circular libremente hasta las 8:00 p.m.; asimismo, se bloquearon las comunicaciones entre los internados de hombres y mujeres. Además, eran constantes los ataques y agravios de contenido sexual por los soldados:

Cuando pasábamos al internado de damas, por ejemplo, como allí en la capilla era su base, siempre había treinta cuarenta o cincuenta sentados o comiendo. No sólo te piropeaban — fuera bueno —, sino te insultaban, te decían: prostituta, perra, terruca [subversiva], de todo. Al menos a mí me incomodaba eso enormemente. Yo he ido a quejarme dos o tres veces pero a la oficina de Bienestar. Primero cuando estaba Hugo Muñoz y luego cuando lo cambiaron, que estaba no sé quién. Porque cada que pasaban nos insultaban y yo dije: «Bueno, estos tipos qué se creen». Yo les he dicho varias veces: «Oye, si eres hombre ven y dime en mi cara, pero no te escondas en la multitud», porque se escondían dentro de su batallón y de allí salían los gritos. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P 334. Dirigente de Comité de Internos Mujeres, 1989-1992)

En líneas generales, las reacciones frente a la intervención fueron diversas; así, aunque incómodos, muchos estudiantes se sintieron liberados de la saturación ideológica del PCP-SL, mientras los grupos subversivos se veían obligados a refugiarse en la clandestinidad. Algunos de sus militantes abandonaron por entonces la residencia e incluso la Universidad, principalmente sus cuadros más importantes, aunque el PCP-SL continuó su trabajo en la academia preuniversitaria y en las comisiones que habían formado en la Universidad.

Al igual que otras universidades públicas, como la UNSCH y la Universidad Nacional del Centro, también la Universidad La Cantuta sufrió el deterioro de sus ambientes y de su infraestructura. En junio de 1991, el diputado César Barrera Bazán denunció que los soldados encargados de pintar en La Cantuta quemaron una gran cantidad de libros de la Biblioteca Central con la excusa de que alentaban la subversión. Se corría el rumor de que en los sótanos de la Biblioteca llegó a funcionar una «escuela popular». Según el actual jefe de la Biblioteca, lo que ocurrió fue un «secuestro de libros» calificados de intocables, que fueron escondidos durante diez años. Así, las obras de Mao Tse Tung, Marx, Engels y Lenin y diversos manuales de materialismo dialéctico automáticamente fueron al sótano.

Asimismo, fueron demolidos los pabellones del Internado de Varones, considerados nidos de subversivos, es decir, centros de formación política e ideológica:

[Los militares] agarran y deciden eliminar las dos residencias para estudiantes ¿no? Y las hacen volar, y es allí donde ellos advierten, que ahí abajo habían escuelas o centros de preparación, pero ese era un edificio abandonado con anticipación, por qué, porque el terremoto [...] No lo hacía óptimo para nada [...] Que yo recuerde, no reaccionaron los estudiantes [...] No había ningún docente viviendo ahí; es más, no había estudiantes viviendo ahí, y qué se yo, no hubo reacción en ese momento, será porque estuvo los militares acá adentro, ¿no?, que era la época de Ramos. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P331. Docente de la UNE)

Éste fue un golpe contundente para la preponderante presencia del PCP-SL en La Cantuta, puesto que ponía en evidencia la diferencia de poderes existentes entre el PCP-SL y las fuerzas armadas:

En el tiempo que se da la intervención no se podía [colocar profesores contratados]; prácticamente como el rector estaba, como quien dice se amparaba en las Fuerzas Armadas [...] Allí se da esa situación, ese enfrentamiento dentro del estudiantado y las Fuerzas Armadas, después de eso ya se da que un día [...] la destruyeron, entonces los estudiantes que vivían allí, en la vivienda universitaria tenían que ir a dormir en la vivienda de mujeres [...] Estuvimos en contra cuando la derribaron, nos movilizamos. No querían que haya ningún tipo de movilización, tampoco querían que haya ningún tipo de reunión, cuando había una reunión allí se ponían y empezaban a rastillar sus armas diciendo que no debía haber. Y siempre cuando tú ibas a tu clase estaban allí, en la universidad, allí en el salón estaban presentes. Prácticamente si tú hablabas algo, tenías posición de que el sistema debía cambiar, que sólo así se podrían solucionar los problemas, si decías así, ya tú era senderista, subversivo, eras terrorista y así pasó con varios. Y así pasó con varios, varios que decían que la situación, que el problema es del sistema, mas no de qué presidente está en el país, prácticamente esas personas las han desaparecido o las han detenido diciéndoles que eran subversivos, senderistas [del PCP-SL]. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P 342. Estudiante de la UNE, 1989-1992, integrante del PCP-SL recluida en el penal Santa Mónica)

Meses antes del asesinato de los estudiantes y el profesor, el 4 de septiembre de 1991, fue asesinada la supervisora del Internado de Mujeres de la UNE, Rosa Pretell. El crimen fue reivindicado por el PCP-SL, quien alegó que Rosa Pretell brindaba información de los internos al Ejército:

También denunciamos la actitud de soplonaje de la supervisora del internado y otros reaccionarios que cumplen su negro papel en contra de los hijos del pueblo, negros sueños que el PCP y la guerra popular los aplastará (*El Nacional*, 6 de septiembre de 1991).

Yo escuché que esta señora era soplona, pero no sé si era esa señora Rosa que se dice, que era soplona, que era la que daba información a las Fuerzas Armadas para que detuvieran a varios y es ahí cuando nosotros nos enteramos que la habían asesinado, y los que la conocían directamente, los de la vivienda universitaria, decían que estaba bien porque esa señora era prácticamente una soplona que daba información a las Fuerzas Armadas. Inclusive por la situación de que ella individualmente, si ella se lleva mal [...] por ejemplo, una de las chicas que vivía allí en la vivienda universitaria decía «Yo estoy tratando que esa señora no vea algo malo en mí, porque si ve algo en mí, inclusive individualmente, si ve un rechazo en mí, hasta me puede culpar a mí de senderista [integrante del PCP-SL] y ser luego desaparecida». Yo sé que se daba esa situación. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P342. Estudiante de la UNE, 1989-1992, integrante del PCP-SL recluida en el penal Santa Mónica)

La madrugada del 18 de julio de 1992, nueve estudiantes (Juan Gabriel Mariño, Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Robert Teodoro Espinoza, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Amaro Condor y Heráclides Pablo Meza) y el profesor Hugo Muñoz Sánchez fueron secuestrados de la vivienda universitaria y, posteriormente, asesinados por miembros del SIE dirigidos por el mayor EP Santiago Martín Rivas, líder del grupo Colina. Investigaciones posteriores demostraron que los secuestrados habían sido objeto de seguimiento por personal de inteligencia. Según el informe 140 Dinto-Dincote, por lo menos Bertila Lozano era objeto de constante seguimiento por los agentes de inteligencia asignados a La Cantuta.

Con respecto a los actores involucrados en el caso de La Cantuta, según opinión de Benedicto Jiménez, Pedro Ruiz Canales, trabajador de la dirección de transportes de la UNE, era responsable de un destacamento de la zonal de Chosica del PCP-SL. Pedro Ruiz formaba parte del Movimiento de Artistas Populares (MAP) que actuaba dentro de la UNE, conformado, en su mayoría, por músicos folclóricos. El día de la matanza, Ruiz no se encontraba en la residencia. El grupo Colina ignoraba la presencia de este destacamento y creyeron o hicieron creer a su comando que los universitarios que tocaban en el MAP fueron los autores del atentado a Tarata. Ello involucraba directamente a Armando Amaro, Flores Chipana, Pablo Meza y Robert Teodoro, que tocaban música folclórica, aunque no pertenecían a dicho movimiento. En realidad, todo parece indicar que los estudiantes asesinados no fueron seleccionados al azar y que, de alguna manera, pertenecían o estaban influenciados por el radicalismo que impregnaba la vida universitaria. ¿Militaban en el PCP-SL? Tal vez como simpatizantes periféricos, aunque sí destacaban al frente de las luchas de los grupos estudiantiles. Otro factor que los integraba era el hecho de que la mayoría tenía en común procedencias regionales y padres provincianos. Con respecto al profesor Hugo Muñoz, su trayectoria política y personal demuestra que estuvo muy cercano al PCP-SL, aunque ello no es una prueba concluyente de su responsabilidad en los atentados de Tarata.

Luego de este secuestro, se desencadenó un sentimiento de temor generalizado en la Universidad. Los frentes y comisiones promovidos por el PCP-SL se debilitaron; los estudiantes se replegaron en el silencio y los familiares de los desaparecidos iniciaron una intensa campaña de búsqueda de las víctimas. Tras el descubrimiento de sus restos y el impacto que produjo en la opinión pública el modo en que se intentó encubrir la matanza, desde 1994 se comenzó a rendir homenajes, cada 18 de julio, a los estudiantes y el profesor asesinados. El primer homenaje fue organizado por el Centro de Estudiantes Democráticos (CEDEUNE), que mantenía una actividad reivindicativa en torno a temas coyunturales y el servicio del comedor. En septiembre del mismo año, apareció un comunicado clandestino firmado por el Movimiento Estudiantil Cantuteño (MOVEC), siglas de un antiguo frente maoísta, con un lenguaje cercano al PCP-SL, en el que se reivindicaba a los nueve estudiantes y el profesor asesinados como los mejores hijos del pueblo.

Como producto de la militarización del espacio universitario, en la actualidad, sólo en el penal de Canto Grande hay 35 estudiantes cantuteños condenados por delito de terrorismo o traición a la patria, la mayoría procedente de las facultades de Humanidades, Ciencias y Tecnología.

En 1995, el Congreso de la República aprobó una ley que daba amnistía a los militares y los exoneraba de las múltiples violaciones de derechos humanos efectuadas en el transcurso del conflicto armado interno. Este

hecho, conjuntamente con la intervención administrativa de la UNE, abrió un nuevo período del proceso de la violencia en la Universidad que desembocó en un silencio institucionalizado:

Yo me acuerdo, que en el 92, 91, voy a la universidad a ver mis papeles porque ya estaba por sacarlos y cuando veo, pues, a las tropas metidas, fue algo bien impactante [...] tú caminabas y ni bien caminabas había tres soldados, en la biblioteca había tres soldados, en todos lados había tres soldados, en todo sitio había tres soldados, ya parecía un lugar, parecía un cuerpo militar, un cuartel parecía La Cantuta y lo curioso ahí [es] que los FEULES, los del UNIR, [PCP] Patria Roja, ahí, nada, ni gritaban «Muere gobierno genocida, fascista» que por aquí, «¡Fuera [Alberto] Fujimori!». Nada, calladitos, así estaban, pucha, metidos bajo su cama, bajo la carpeta y unos de éos, yo me encuentro con un antiguo dirigente que todavía estaba ahí y le digo: «Oye, ¿y cuándo te vas a ir de acá?». Le digo: «¿Cuándo te vas a titular?». «No, que todavía tengo cursos», «¿Pero cuándo te vas a titular?». «No, que todavía debo cursos». «Ya ves, eso pasa porque no estudias» le digo. Entonces, qué pasa, que ahí [...] y yo le digo «qué hacen esos soldados, por qué no los botas». «No, la represión está fuerte» decía, pero eran cosas así anecdoticas, era un miserable. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P339. Secretaría general ARE, 1985-1990)

Probablemente, el factor central que repercutió en el abandono de los cuadros del PCP-SL de La Cantuta fue la captura de Abimael Guzmán y de casi todo el comité central del grupo maoísta.

#### 19.8. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y CAMBIO GENERACIONAL (SEGUNDA MITAD DE LOS AÑOS NOVENTA)

El 25 de mayo de 1995, entró en vigencia la ley 26457, que declaró en reorganización las universidades públicas del país y la destitución de sus autoridades. Entre los antecedentes de la aprobación de la ley, trascendió la existencia de un pronunciamiento que señalaba el supuesto resurgimiento de la actividad subversiva al interior de los claustros universitarios. Como ocurrió con la matanza de 1992, en que se secuestró y asesinó a estudiantes sindicados como subversivos poco después del atentado en Tarata, en esta oportunidad el gobierno expuso como argumento justificatorio de la ley un atentado explosivo en el Hotel María Angola. Se formó una Comisión Reorganizadora en la UNE (COREUNE), que culminó sus funciones el 28 de noviembre de 2000, según la ley 27366, fecha en que se instaló el Comité Transitorio de Gobierno presidido por Rolando Vizarraga y Guillermo Vargas.

Durante este período, se produjo el cese de profesores vinculados a los antiguos partidos de izquierda. Posteriormente, la COREUNE facilitó, mediante la reducción del número de créditos, la graduación de los estudiantes antiguos. En 1996, no hubo examen de admisión con el objeto de lograr que saliera la mayor parte de estudiantes antiguos; adicionalmente, se prohibió todo tipo de reunión política. Las nuevas juventudes que ingresaron en 1997 empezaron a organizarse formando el Centro de Estudiantes (CEUNE), organismo que se liga con otras universidades en la lucha contra el fujimorismo y por recuperar la autonomía universitaria.

A seis años de instalada la comisión interventora en la UNE, los alumnos denunciaron ante la prensa ser víctimas constantes de abusos contra sus derechos por las autoridades. Señalaron que las represalias fueron realizadas contra profesores, a quienes se intimidaba con amenazas de expulsión. Afirieron que incluso se llegó a expulsar a profesores que criticaban al gobierno, mientras otros optaron por retirarse al llegar la Comisión. Los alumnos manifestaron temer a las represalias, pero ya no tener miedo a la dictadura. Algunos, que no quisieron identificarse, afirmaron que las autoridades habían negado el ingreso a diez alumnos por repartir volantes anunciando una conferencia de Gloria Helfer, conocida opositora del fujimorismo que formó parte de la comisión investigadora del caso La Cantuta en el Congreso de la República. Los estudiantes denunciaron entonces que, casos como éstos, eran vigilados por el SIN, que se hallaba infiltrado en las universidades para detectar el menor rebrote de subversión.

Distinguir a los nuevos actores surgidos en los últimos años en la UNE requiere situar los significados que fue adquiriendo la matanza de los estudiantes durante el proceso de cuestionamiento al régimen fujimorista. Las actuales memorias de la violencia de los docentes manifiestan un bloqueo que impide una evaluación crítica de parte de los propios docentes. Esto se expresa en la evaluación que uno de los profesores más antiguos hace de la política universitaria:

La Cantuta no ha sido una excepción, que La Cantuta lo hayan señalado como un foco de rebeldía eso es hasta interesado. Por ejemplo, me llama la atención que usted me pregunte de [PCP] Patria Roja, porque ahorita está el gobierno en una campaña contra [PCP] Patria Roja, además todos los días en su programa cualquier cosa menciona a [PCP] Patria Roja, en los periódicos sale que [PCP] Patria Roja está moviendo los comités regionales y co-

sas, no, cosa que no hay acá si usted ve, y observa bien, no hay ninguna actividad de tipo político [...] Es bien difícil que uno tenga en la memoria lo que ha sucedido desde 1970, son más de treinta años, lo único que yo puedo decir es que esa universidad, guiada por su doctrina, trató de formar hombres pensantes, hombres que nunca estuvieron callados y que siempre han objetado lo bueno y lo malo de los sucesivos gobiernos. Entonces, era una institución contestataria simple y llanamente, pero de ahí a la violencia que se produjo en la guerra interna es otra cosa. Eso es diferente, eso no tiene nada que ver con la universidad. Es un movimiento nacional que infiltró a todas las instituciones del país, hasta el Ejército estaba metido y estaba metido también el Servicio de Inteligencia, estaba metido por todas partes y hasta ahora creo que está en la Universidad. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P34. Docente de la UNE)

Cabe añadir que, en la actualidad, existe una brecha generacional entre docentes y alumnos que impide una mejor apreciación de la nueva heterogeneidad juvenil por los profesores, que prescinden de los viejos esquemas de interpretación de la política. De esta manera evalúa a la juventud cantutena actual un docente que tuvo como maestros a Nilda Atanasio y a Víctor Zavala Cataño:

El ochenta es una situación caótica dentro de la universidad, de esta Universidad en particular; en San Marcos [la UNMSM] también, porque yo estudiaba en el ochenta en San Marcos [en la UNMSM], era un caos, una pérdida de tiempo [...] hay mucha [gente] que se ha ido o mucha que está muerta por A o B motivos, hay gente nueva que ha venido, muchos sin saber y otros sabían. Hay gente que sabe demasiado y hay gente que no sabe nada, absolutamente nada, entonces no saben cómo es el robo o la destrucción [...] Yo creo que ahora [los estudiantes son] casi más de Lima [que de provincias] y es un estudiantado menos político, más [...] más afectista [sic], o sea, toman decisiones por afecto, por cariño y no por cuestiones políticas [sino por algo] estrictamente personal. (CVR. BDI-Entrevista en profundidad P341. Docente de la UNE)

#### 19.9. CONCLUSIONES

Casi desde el inicio del conflicto armado interno, pero principalmente a partir de mediados de los años ochenta, el interés del PCP-SL en La Cantuta fue derivando de un trabajo pedagógico y formativo hacia una actitud proselitista e instrumental a través del progresivo control de diferentes espacios estratégicos de la ciudad universitaria, como el comedor, la vivienda universitaria y el servicio de transporte, como también del reemplazo de las instancias representativas, que perdieron legitimidad mientras la crisis económica y universitaria se profundizaba.

No cabe duda de que, con el control del magisterio y la presencia de los diferentes gremios de trabajadores y dirigencias barriales ubicadas a lo largo de la Carretera Central, la UNE fue considerada un espacio estratégico dentro de los planes militares del PCP-SL. Por ello, la UNE, concebida inicialmente como un espacio de reclutamiento y captación de cuadros, pasó a convertirse en una plataforma para el asalto a la capital.

El PCP-SL nunca dominó la FEUNE, ya que no creía en los cargos electos. Más bien, siempre buscó destruir la federación, lo que finalmente logró. En el mismo sentido, siempre atacó a los representantes del tercio acusándolos de «vendidos a las autoridades».

Surge entonces la pregunta sobre cómo logró el PCP-SL montarse sobre las organizaciones de estudiantes y docentes y, finalmente, controlar el espacio universitario a inicios de los años noventa.

Hasta tres ideas surgen del análisis del caso. Primero, la apropiación de lo que se conoce como un «discurso radical economicista» para la captación de cuadros, que se reduce a reivindicar medidas económicas básicas. El trabajo político del PCP-SL en la UNE siguió etapas definidas: enfrentó ideológicamente a las facciones que manifestaban una mayor afinidad ideológica con la lucha armada (es el caso de Pukallacta o los Bolcheviques), para seguidamente realizar un trabajo de copamiento simbólico del espacio universitario (como expresión del «nuevo poder»), hasta finalmente tener una presencia más activa en la administración de los bienes y recursos de la UNE, favorecida por la mala gestión de las autoridades elegidas democráticamente, cuyas prácticas de clientelaje terminaron provocando un mayor distanciamiento del estudiantado y una mayor aceptación del discurso del PCP-SL.

La otra idea es la creencia en el «equilibrio estratégico», que dotó a los militantes del PCP-SL de una convicción firme con objetivos a mediano plazo, agudizando los conflictos existentes en el desarticulado movimiento estudiantil.

La tercera idea tiene que ver con el pragmatismo que adoptó el PCP-SL durante los años noventa y que definió una línea de acción común a su desarrollo.

El PCP-SL supo ubicarse como fuerza opositora. El uso de la fuerza y la amenaza que encarnaba implicó para alumnos y profesores estar entre la espada y la pared o, mejor dicho, entre la vida y la muerte, ya que el PCP-SL representó una fuerza a la cual nadie se podía enfrentar sin arriesgar su integridad física.

En síntesis, mientras que la debilidad de los actores políticos y las autoridades universitarias permitió el progresivo crecimiento del PCP-SL, tanto mediante una primera fase de persuasión (Nilda Atanasio) como mediante la absorción de militantes de izquierda radicalizados (el proceso de desaparición de Pukallacta fue el primer precedente de este desplazamiento) o a través del hostigamiento y la amenaza directa (principalmente a la dirigencia del FEUNE), en los años noventa, la intervención del Estado en la gestión universitaria buscó recuperar la institución.

La tradición radical y la mística de La Cantuta, en cierta manera, fueron confirmadas con el asesinato de los nueve estudiantes y un profesor que, finalmente, alimentaría una suerte de radicalismo contestatario en cuyo imaginario estas víctimas son mártires que recuerdan la larga tradición de agresiones estatales al *alma mater* de la Educación. Esta tradición de lucha es sentida como un valor positivo, pero externamente es, más bien, una razón de estigmatización. Por ello, una de las secuelas del proceso de violencia es el silencio de la Universidad como institución, silencio que convive con el sentimiento de una institución que se siente agredida desde el exterior. Esto, en perspectiva, puede ser sumamente peligroso en la medida en que puede terminar abonando un discurso que justifique nuevamente la violencia.

## 20. LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) no solamente es una de las universidades públicas más antiguas de América del Sur, sino también la más grande e importante del Perú. Su evolución como centro educativo refleja claramente los profundos cambios vividos en el país, donde una vertiginosa demanda educativa irrumpió en el escenario en los últimos cuarenta años. Al mismo tiempo, los procesos seguidos por esta Universidad reflejan la compleja dinámica del diverso panorama político y educativo peruano.

La UNMSM ha sido durante la época de la violencia una de las universidades que albergaba la mayor cantidad de estudiantes. Igualmente, en comparación con otras universidades, siempre se ha caracterizado por su complejidad y pluralidad.

Es indispensable entender, en este contexto, que el PCP-SL no fue el único actor en la dinámica de la violencia desarrollada en la UNMSM, y también que el PCP-SL no fue apoyado por toda la comunidad universitaria.

La extendida y perniciosa idea de pensar que todo sanmarquino era subversivo fue precisamente la falsa convicción que justificó que la opinión pública apoyara en gran medida, y viera con buenos ojos, las cruentas y represivas acciones del Estado y la instalación de una base militar en ésta como en otras universidades sindicadas como bases subversivas.

La principal interrogante que recorre este estudio es indagar por los factores que facilitaron la entrada y presencia de la propuesta del PCP-SL. Igualmente, interesa comprender la participación del Estado en este contexto.

La UNMSM no ha constituido un mundo aparte en el desarrollo y evolución de la violencia. Esta guerra no declarada no se ha limitado o generado en su interior. Por el contrario, la dinámica universitaria ha interactuado con procesos externos que han influido en la exacerbación de contradicciones, calando hondo en las coyunturas más frágiles.

El PCP-SL representa, además, una postura vertical y autoritaria, donde predominan los personajes masculinos en la toma de decisiones. De esta manera, la adhesión y aceptación de estudiantes, docentes y personal administrativo del PCP-SL se mezcló con la generación de un ambiente de coerción y terror. A pesar de estas características, sin embargo, la idea central que cruza el estudio es que, al igual que en otros casos, el PCP-SL apareció como un ente ordenador ante la corrupción de autoridades y funcionarios de la escena universitaria.

## 20.1. CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO

La UNMSM contaba en 1970 con 19,461 estudiantes matriculados.<sup>808</sup> Si bien no existen registros sobre su procedencia, estudios de corte cualitativo<sup>809</sup> afirman que la mayoría de ellos eran inmigrantes. Este dato es corroborado por el hecho de que para dicha época solamente existían 17 universidades fuera de Lima,<sup>810</sup> muchas de ellas con menos de cinco años de funcionamiento. Por tanto, la oferta profesional para el estudiante provinciano era bastante limitada y la UNMSM se presentaba como una alternativa por su prestigio y la diversidad de carreras que ofrecía. Estos estudiantes provincianos que accedían a la universidad como un medio de movilidad social fueron la base para el radicalismo político sanmarquino, el cual los organizó alrededor de demandas inmediatas, como la ampliación de los servicios de bienestar universitario, postergando temas relevantes como la mejora de la calidad académica, cada día más deteriorada.

Para 1980, la población estudiantil sanmarquina se había incrementado notablemente: llegaba a 32,916 estudiantes. Esta cifra se elevó de manera sostenida anualmente, hasta llegar a 45,354 estudiantes en 1987. Para ese año también había crecido la oferta de universidades provincianas, que llegaban a sumar 31. Este hecho, entre otros, produjo que se incrementara la proporción de los estudiantes limeños frente a los provincianos.<sup>811</sup> Es importante anotar que el inicio de la década de 1980 no solamente se caracterizó por el incremento acelerado del número de estudiantes, sino también por la crisis del radicalismo universitario, que poco a poco perdió su base social y fue sustituido por agrupaciones políticas de la izquierda legal.

Entre 1987 y 1988, la crisis económica y social se profundizó. Este hecho tuvo un impacto sobre la matrícula universitaria que, en el lapso de un año, cayó a 26,028 estudiantes. Luego de esa fecha, el número de estudiantes se mantendrá en ese promedio, incluso hasta el final de la década de 1990. El impacto de la crisis, sin lugar a dudas, obligó a un importante porcentaje de los estudiantes a abandonar sus estudios. Ello afectó especialmente a los estudiantes más pobres. Es importante anotar que, por esos años, también se incrementó la violencia en la Universidad. La reducción de las posibilidades de desarrollo y la desesperanza frente al futuro arrojaron a un sector de los estudiantes hacia posiciones violentistas, lo cual fue aprovechado por los grupos subversivos. Sin embargo, la tendencia mayoritaria en el estudiantado fue de apatía e indiferencia frente al convulsionado escenario político y social; además, los diversos testimonios recogidos permiten afirmar que, producto de la crisis de finales de los años ochenta, el perfil del sanmarquino se volvió progresivamente más mesocrático.<sup>812</sup>

Por otro lado, la UNMSM es una universidad bastante heterogénea, ya que la composición social de su alumnado varía notablemente según facultades y, en su seno, coexisten diversos microclimas sociales y políticos. Las facultades en general muestran dinámicas diversas, tanto las ubicadas en la ciudad universitaria de la avenida Universitaria como aquellas ubicadas fuera —la facultad de Medicina de San Fernando y anexos en la avenida Grau, la facultad de Veterinaria en la avenida Circunvalación o Educación Física en la avenida 28 de Julio—. También hay que tener en cuenta las dinámicas propias de las residencias universitarias (en la ciudad universitaria y la avenida Grau) o de los comedores (en el jirón Cangallo y la ciudad universitaria). Por ello, en algunas partes del estudio se harán referencias a la dinámica de un espacio específico; pero, por lo general, el foco de atención estará en los procesos asociados a la dinámica de la ciudad universitaria.

## 20.2. EL COMPLICADO PANORAMA DE LOS GRUPOS DE IZQUIERDA

La salida del PAP de la conducción de la Universidad en 1969 cuando Luis Alberto Sánchez fue forzado a renunciar al rectorado de la UNMSM, creó las condiciones para que las corrientes políticas de izquierda sentaran las bases para su hegemonía.

En los años setenta, pese al intento del gobierno militar por despolitizar las universidades, en la UNMSM se consolidó la hegemonía de los grupos de inspiración marxista. La mayoría de éstos fueron influenciados

<sup>808</sup> Todos los datos demográficos sobre la UNMSM fueron obtenidos de la Dirección de Estadística e Informática de la Asamblea Nacional de Rectores.

<sup>809</sup> Lynch, Nicolás. Los jóvenes rojos de San Marcos. El radicalismo universitario de los años setenta. Lima: El Zorro de Abajo, 1990.

<sup>810</sup> GRADE. Educación superior en el Perú. Datos para el análisis. Documento de trabajo n.º 9. Lima, 1990.

<sup>811</sup> Ibídem.

<sup>812</sup> Para esa fecha, no existía ningún registro sobre el perfil socioeconómico del estudiante de la UNMSM; la Universidad hizo su primer estudio censal en el 2001.

por la vertiente ideológica denominada maoísta. La diferencia entre estas organizaciones radicaba en la caracterización que hacían del gobierno militar y la sociedad peruana.

La mayor parte de estos partidos de izquierda reivindican para sí la representación del auténtico Frente Estudiantil Revolucionario (FER).<sup>813</sup> Por ello, durante la década de 1970 más de cinco grupos políticos distintos utilizaban las siglas del FER y luchaban entre sí por lograr el control de la Federación de Estudiantes (FUSM) y los principales espacios universitarios. Entre estas organizaciones, las que tenían, sin duda, la mayor fuerza política y estructura partidaria eran los Antifascistas, el PCP Patria Roja y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), todas ellas en distinta medida reivindicaban la vigencia del pensamiento de Mao Tse Tung.

La cultura política de los grupos sanmarquinos más radicales<sup>814</sup> generalmente estaba fundamentada en la descalificación del opositor y, para ello, se acudía a la cita textual, lo cual implicaba el aprendizaje memorístico de los textos y manuales, como lo manifiesta la siguiente entrevista:<sup>815</sup>

Kawata nos decía; éste es un libro [el Manifiesto Comunista] del que debemos tener por lo menos cinco o seis, porque la primera vez que lo lean, van a hacer sus comentarios, porque hay que leer línea por línea, párrafo por párrafo, hay que interpretar bien cada párrafo y después ver la relación párrafo con párrafo porque ahí está la esencia. Entonces, su idea era que cada vez que uno lo leía, los comentarios o apreciaciones o las ideas fuerzas que nos producía el libro iban a ir cambiando, superándose, como uno tenía la obligación de garabatear o escribir en el libro entonces en la quinta o sexta vez, la calidad de lo que podías comentar era superior. (Ex dirigente estudiantil del PCR)

Además, existía un grupo con características distintas llamado Unión Estudiantil (UE), que había sido fundado por iniciativa de un núcleo de militantes de un pequeño partido surgido de las múltiples divisiones del PCP Bandera Roja. El perfil de la UE era más reformista y menos opositor al gobierno militar, con una preocupación más centrada en los asuntos académicos, lo cual le valió mantener una influencia en el Ciclo Básico y, posteriormente, en las especialidades de Ciencias e Ingenierías.

Durante la década del setenta, los departamentos académicos designaban a los profesores. Por ello, se convirtieron en el centro de la presión estudiantil. Generalmente, los jefes de los departamentos designaban como docentes a aquellos profesores que eran propuestos por los grupos estudiantiles que mantenían la hegemonía en cada programa académico. Esta práctica evitaba la generación de conflictos entre los beligerantes grupos estudiantiles y las autoridades, pero promovió que la universidad quedara dividida en cuotas impuestas por los frentes políticos mencionados. Igual sistema de cuotas se impuso en los servicios universitarios que dependían de Bienestar Estudiantil, como la residencia y el comedor:

El comedor sí era uno de sus feudos, para decirlo de algún modo, y era defendido a capa y espada, incluso estoy recordando conversaciones que decían que eso era una táctica general de [el PCP] Bandera Roja, es decir, controlar comedores no sólo en San Marcos [la UNMSM], también los controlaban en la [Universidad Nacional] Agraria [...] Ésto, más allá del plan anecdótico, tenía un por qué: controlando comedores podían controlar proveedores, podían generar clientes. (Ex dirigente estudiantil de Historia)

A inicios de los años ochenta hay una debilitada presencia de sectores ultraizquierdistas provenientes del maoísmo los cuales son denominados por los partidos de la izquierda legal como sectores «infantiles de izquierda»<sup>816</sup> por su apelación constante a un discurso ideologizado combinado con demandas de corte económico en los tres estamentos universitarios (estudiantes, docentes y no docentes). Dichos sectores, en el nuevo escenario político de los años ochenta, intentaron ocupar un lugar intermedio entre la IU, que participaba en los espacios legales, y los grupos subversivos que habían iniciado un camino insurreccional.

El grupo más representativo de estos sectores fue el denominado FER Antifascista. Su discurso combinaba el radicalismo ideológico con el pragmatismo de la reivindicación, que se expresaba en demandas como el no pago

<sup>813</sup> El FER se había formado veinte años antes como un frente de diversas fuerzas progresistas enfrentadas al PAP; el Partido Comunista poseía la hegemonía entre éstas. Posteriormente, en 1964, el PC se dividió entre sus facciones prochininas y prosoviéticas y se inició un proceso de sucesivas divisiones que terminaron dividiendo al FER.

<sup>814</sup> En especial entre los seguidores más radicales del denominado pensamiento Mao Tse Tung.

<sup>815</sup> Durante la década de 1970, hay una notable difusión de manuales sobre el marxismo, la mayoría de ellos producidos por la Academia de Ciencias de la URSS, los cuales paradójicamente fueron utilizados por los grupos maoístas (Degregori 1990).

<sup>816</sup> Se recoge el término «infantiles» de la tradición leninista, que calificaba como tales a aquellos sectores que se consideraba que tenían una desviación ultraizquierdista.

de matrículas, más raciones en el comedor, más unidades de transporte, entre otras. Con estas acciones, esperaban mantenerse vigentes dentro de la Universidad, el único espacio político en el que tenían algo de presencia.

En 1973 y 1976, las elecciones a la FUSM fueron ganadas sucesivamente por el denominado FER Antifascista, que tuvo una gran influencia en los estudiantes provincianos, defensores del ala radical de la revolución cultural china, seducidos por el discurso de reivindicación del campesino. En las elecciones de 1976 también participó el FER Luminoso, pero quedó en último lugar, con una votación realmente marginal. Era común que, en este período, ninguno de los grupos políticos tomara en serio las posiciones del PCP-SL, y mucho menos podían creer que estaban a punto de iniciar su proyecto de «guerra popular prolongada del campo a la ciudad». Es más, cuando a finales de los años setenta desaparecieron de la UNMSM, se pensaba que se habían disuelto como grupo, proceso muy frecuente entre los grupos de izquierda.

Hacia finales de los años setenta, el FER Antifascista sufrió un proceso de des prestigio por los límites de su discurso centrado en reivindicaciones de corto plazo que se traducían en su abstencionismo frente al cogobierno estudiantil (que era una forma de no asumir la necesidad de formular un proyecto para la universidad) y su práctica aislacionista con relación al conjunto del movimiento popular.

El período iniciado en 1979 estuvo marcado por el impulso de corrientes renovadoras al interior de la Universidad, que presionaban por una mayor democratización y la superación de la crisis acentuada durante el gobierno militar. Estas corrientes intentarán marcar una ruptura con los discursos centrados en demandas de supervivencia que caracterizaron la hegemonía de los Antifascistas.<sup>817</sup>

En 1979, durante un plebiscito sobre la participación de los estudiantes en el cogobierno, se formó una alianza entre el PCP Patria Roja, el PCR y otros grupos de la izquierda legal,<sup>818</sup> que logró derrotar a la corriente liderada por los Antifascistas y otros grupos radicales.<sup>819</sup> Posteriormente, esta misma alianza derrotó a los Antifascistas en las elecciones de la FUSM y del importante Centro Federado de Letras, como afirman los testigos:

La gran derrota [del FER Antifascista] fue no tanto haber perdido la FUSM sino haber perdido el Centro Federado de Letras y esto fue motivo, hasta donde yo sé, de un gran debate interno, un gran debate de criterios internos que terminaron por expulsar a sus dirigentes principales. (Ex dirigente estudiantil de Historia)

Había un grupo de estudiantes antifascistas radical y al año le ganó el otro grupo. Izquierda Unida se quedó un tiempazo [...] a San Marcos [la UNMSM] ya no he vuelto, salvo para hacer reportajes. (Periodista sanmarquino recluido en el penal de Canto Grande)

En efecto, en 1979 se produjeron las elecciones para la FUSM y fueron ganadas por Enrique Jacoby (PCR), apoyado por la alianza conformada por el PCP Patria Roja, PCR y UE. Estos partidos formarían en 1980, junto con otras agrupaciones de izquierda, la IU. Este hecho significó la puesta en escena de una propuesta estudiantil de corte político, pero también académico y cultural:

Fue una época en la que se promovieron un montón de cosas por el lado cultural; fue la mejor época, se volvieron a restaurar los juegos florales que después de 15 años no se hacían en San Marcos [la UNMSM], empezaron a publicar varias revistas en diversas facultades, pero por supuesto [la Facultad de] Letras fue donde se congregaron más iniciativas; después hubo una preocupación por la promoción social. (Ex dirigente estudiantil del PCR)

Luego de la gestión de Jacoby, IU ganó la mayoría de los procesos electorales hasta las últimas elecciones de la FUSM en 1989; sin embargo, las gestiones posteriores perdieron paulatinamente el espíritu renovador inicial y la tendencia fue que se acentuara una práctica política mercantilista, autoritaria e instrumental. Si bien IU estaba conformada por diversos grupos, es claro que, a su interior, el PCP Patria Roja logró la hege-

<sup>817</sup> El punto culminante de este proceso fue la elección de Antonio Cornejo Polar como rector y el impulso de un proyecto que buscaba recuperar a la UNMSM como universidad democrática, concebida dentro de un proyecto nacional. La falta de apoyo del Estado y las contradicciones internas de las fuerzas que llevaron a Cornejo Polar al rectorado abonaron el fracaso del proyecto. Desde el Estado tampoco hubo la respuesta que la universidad pública necesitaba, ya que la nueva ley universitaria no estuvo a la altura de la crisis que enfrentaba y la reducción paulatina de rentas marcó el divorcio definitivo entre Estado y universidad pública. En este período también se registró un lento pero persistente trabajo político del PCP-SL entre los estudiantes más golpeados por la crisis, que luego le permitirá tener una presencia más pública en la Universidad.

<sup>818</sup> Para 1979, la alianza se denominó Frente Democrático Popular; posteriormente, con la fundación de Izquierda Unida, en 1980, tomó el nombre de IU-San Marcos.

<sup>819</sup> Esta corriente propiciaba que los estudiantes no participaran en ninguna forma de cogobierno o tercio estudiantil.

monía, lo cual quedó demostrado cuando militantes del PCP Patria Roja ocuparon la presidencia de la FUSM en las tres juntas directivas que sucedieron a la de Jacoby:

En IU, San Marcos [la UNMSM] nos gana [el PCP] Patria Roja; impone su candidato que fue Mendieta, [...] Mientras la legitimidad de Jacoby o la tendencia política que estaba detrás de él era de mucha simpatía, y a pesar de que como PCR nos multiplicamos cinco veces en ese período, [el PCP] Patria [Roja] pudo tener más capacidad en movilizar, de convocar. (Ex dirigente estudiantil del PCR)

[Hubo] otros líderes que ahora se les reconoce, uno de ellos fue de la Facultad de Economía apellidado Mendieta, él fue considerado como un buen líder estudiantil [...] creo que de [el PCP] Patria [Roja]. (Ex militante de la UDP)

La década del setenta se cerró en el país con el fin del gobierno militar, y en la UNMSM con la crisis del radicalismo maoísta y la nueva hegemonía de sectores de izquierda que, progresivamente, entre 1978 y 1980, se integraron a la legalidad y a los espacios que les ofrecía el regreso a la institucionalidad democrática. Paralelamente, ya desde la clandestinidad, el PCP-SL se encontraba preparando el inicio de la «lucha armada», hecho que marcó definitivamente los procesos políticos nacionales y universitarios.

A finales de la década de 1970, una de las consecuencias del fin del gobierno militar y el inicio de la transición democrática fue la integración de gran parte de la izquierda a la legalidad. Entonces, la tensión central de la izquierda legal siempre fluctuó entre un discurso que apelaba a la acumulación política para la toma violenta del poder y la práctica cotidiana de inserción al aparato estatal y, posteriormente, a la conducción institucional de la universidad. Las expectativas que creó la articulación de la izquierda legal a finales de 1979 pronto fueron afectadas con el inicio de la lucha armada en 1980 y el desconcierto y ambigüedad que ésta produjo entre su militancia, en cuya formación política adquirió centralidad el discurso de la violencia revolucionaria.

A finales de los años ochenta, en medio de la crisis política y el avance de los grupos subversivos, la izquierda legal, en alianza con las comunidades cristianas y grupos independientes, logró articular algunas estrategias de contención contra el PCP-SL. Estas estrategias no tuvieron continuidad, ya que pronto la propia división de la izquierda, los juegos internos de poder y la crisis del pensamiento marxista llevaron a la práctica desaparición de las agrupaciones políticas. Luego de la intervención militar y frente al golpe de Estado de 1992, se articularon nuevos referentes que, manteniendo algunas tradiciones de la antigua izquierda, intentaron dar un contenido ético y democrático a su actividad política.

### 20.3. LAS ETAPAS DE LA VIOLENCIA EN LA UNMSM

La primera mitad de la década de 1980 estuvo caracterizada por un reordenamiento general de la sociedad en torno al proceso de retorno a la institucionalidad democrática, el cual también fue vivido al interior de la Universidad. La Universidad elaboró su propio estatuto, eligió democráticamente a sus nuevas autoridades y se institucionalizó el cogobierno estudiantil. Esto produjo cambios al interior de la institución educativa.

De la misma manera, el sistema universitario recuperó su autonomía con la disolución del CONUP (institución interventora) y la instalación de la Asamblea Nacional de Rectores. Otro proceso importante fue la incorporación a la legalidad de gran parte de la izquierda, con lo cual accedió a espacios de representación democrática, lo que motivó cambios en su discurso y práctica política.

Desde la instalación del gobierno democrático de Fernando Belaunde Terry en 1980, los estudiantes empezaron una serie de movilizaciones para lograr la derogatoria de las leyes impuestas durante el gobierno militar y exigieron la ampliación del presupuesto para las universidades. El lema central de las movilizaciones encabezadas por la FUSM era: «Por rentas y autonomía»; paralelamente, se sucedieron diversas luchas para mantener la vigencia del medio pasaje universitario, muchas de las cuales terminaron en el bloqueo de la avenida Universitaria y la retención de unidades de transporte público dentro del campus universitario. Este tipo de acciones, en cierta medida, fueron consolidando en la opinión pública la imagen del sanmarquino como un estudiante vandálico y con una dirigencia devaluada, cuyo discurso no podía generar una opinión pública favorable.

En 1983 la Comisión de Educación del Senado comenzó la discusión de la nueva ley universitaria, pero sin tomar en cuenta las reivindicaciones de la comunidad universitaria. La FUSM encabezó las protestas en Lima, las que con frecuencia terminaron en violentos enfrentamientos con estudiantes apristas de la Universidad Federico Villarreal. Finalmente, la ley 23733, inspirada por los senadores Ernesto Alayza (PPC) y Luis

Alberto Sánchez (PAP), fue aprobada por la mayoría de los senadores. En ese contexto, en los primeros meses de 1984 se reanimaron las movilizaciones. Las protestas contra la ley Alayza-Sánchez fueron las últimas movilizaciones masivas en la UNMSM durante la década de 1980, las cuales tenían un carácter triestamental (estudiantes, docentes, trabajadores). Éstas fueron conducidas por la FUSM y los partidos integrantes de la IU y lograron controlar a los sectores más radicalizados como el FER Antifascista y el FEUL Pukallacta. En estas movilizaciones, a pesar de que en muchos casos tomaron un giro violento, no hubo presencia significativa del PCP-SL: «De esas movilizaciones siempre recuerdo el especial cuidado que tuvo la dirigencia de la FUSM para evitar que algún grupo empiece a utilizar la movilización con propósitos políticos, se cuidó bastante, y esto porque el PCP-SL ya empezaba a tener cierta presencia» (ex dirigente estudiantil de Historia).

Las movilizaciones no lograron variar el sentido de la ley, pero sí consolidaron el liderazgo de los partidos de la izquierda legal, lo cual se apreció en los resultados de las elecciones para la Asamblea Estatutaria, donde quedaron derrotadas tanto la lista apoyada por los Antifascistas como la lista apoyada por el PAP.

En 1984, promulgada la nueva ley universitaria, se produjo la salida del rector Pons Muzzo y se convocó a una asamblea estatutaria y, posteriormente, se eligió como nuevo rector a Antonio Cornejo Polar (apoyado por las fuerzas de izquierda). La elección de Cornejo Polar fue complicada, ya que tenía que enfrentar al Movimiento Académico (último esfuerzo del PAP al interior de la Universidad), el cual tenía mayoría entre los docentes. El apoyo a Cornejo Polar provenía del Movimiento Renovación (minoritario en docentes) e IU (mayoritario en los estudiantes). Al no contar con los votos suficientes en la Asamblea, Cornejo Polar tuvo que aliarse con el FDR (Antifascistas y UDP) y aceptar que Alfredo Torero, de la UDP, asumiera el cargo de vice-rector administrativo (9 de marzo de 1985).

Cornejo Polar encarnó una aspiración modernizadora para la Universidad, que implicaba superar las condiciones de pauperización debido al bajo presupuesto, asumir cambios académicos y recuperar el sentido de la autoridad. Desde el primer momento, sin embargo, tuvo discrepancias con el grupo representado por el vicerrector Alfredo Torero, y se vio obligado a afrontar la indisciplina de los docentes que se negaban a la evaluación de los servicios académicos, las largas huelgas de trabajadores que dejaban sin servicios a la Universidad y la beligerancia estudiantil del FER Antifascista, que tomó más de diez locales universitarios. Por su parte, el gobierno central presidido por el PAP tampoco cumplió con las promesas de mayores partidas presupuestarias para superar la crisis que vivía la UNMSM. Presionado, Cornejo Polar se vio obligado a renunciar a mediados de 1986. Este momento marcó la derrota del proyecto renovador de un sector de izquierda en la UNMSM, lo que profundizó la crisis y la pérdida de la autoridad al interior de la Universidad.

En la segunda mitad de los años ochenta, el país comenzó a vivir un paulatino deterioro con la profundización de la crisis económica y el avance de la violencia, la que se trasladó a las ciudades y, frente a la acción del PCP-SL y el MRTA, se produjeron violentas respuestas desde el Estado. Las violaciones de derechos humanos se agravaron con la aparición del grupo paramilitar Rodrigo Franco.

Las universidades fueron cada día más estigmatizadas como lugares de adoctrinamiento de subversivos. Desde 1987 las intervenciones policiales se hicieron cada día más frecuentes y generaron detenciones masivas de estudiantes. Ante la opinión pública, el hecho de ser sanmarquino se convirtió en sinónimo de subversivo. Por este tiempo comenzó a pegar la consigna: «Somos estudiantes y no terroristas; terroristas son los búfalos apristas».

Paralelamente, las movilizaciones estudiantiles se volvieron menos masivas, pero más violentas. Cada día fue más frecuente su infiltración por elementos subversivos.

Para mediados de 1986 ya era evidente el fracaso del proyecto renovador que, en algún momento, encabezaron los partidos integrantes de la IU, lo que se tradujo en un creciente proceso de pérdida de legitimidad. La administración de la Universidad, con hegemonía del PCP Patria Roja, se dedicó a manejar la crisis y sacar las mayores ventajas de ésta para sí misma. Es entonces cuando el PCP-SL encontró las condiciones para crecer entre un sector radicalizado del estudiantado, que comenzó a relacionar a los partidos de izquierda legal con la corrupción. La respuesta del Estado frente a la presencia del PCP-SL fue típicamente represiva e indiscriminada. Ello afectó, en mayor medida, a los militantes de la izquierda legal, que internamente enfrentaban al PCP-SL.

A finales de la década de 1980 todo el sistema político entró en crisis, proceso que afectó con más fuerza a los partidos de la izquierda legal que se encontraban entre la violencia irracional del PCP-SL y la respuesta

desmedida del Estado. Todo ello en el contexto de la crisis del paradigma marxista, del cual era depositario el pensamiento de izquierda. En términos generales, todos los demás grupos políticos entraron también en crisis, se fraccionaron y perdieron paulatinamente militantes.

La propia FUSM terminó siendo identificada como un espacio de dirigentes eternos y sin representación, como producto de un estilo de conducción que confundió el espacio gremial con el espacio partidario. Esto se agravó aún más cuando, como resultado de la pugna por la conducción de la Federación de Estudiantes del Perú, se dividió la ya deslegitimada junta directiva de la FUSM y la coalición de partidos que la sustentaba. Al final del período, lo que quedaba de la izquierda legal, con el apoyo de las comunidades cristianas, recompuso de manera efímera a la IU para hacer frente a la violencia generada por la presencia de los grupos subversivos en la Universidad.

Tras la renuncia de Cornejo Polar, fue elegido como rector Jorge Campos Rey de Castro, quien fue una autoridad con perfil bajo, al igual que su sucesor, Wilson Reátegui, vinculado al PCP Patria Roja. Durante esta última gestión se profundizó la corrupción porque el PCP Patria Roja utilizó a la Universidad como su caja chica.

En 1987 el PCP Patria Roja volvió a experimentar una división y surgió una ala disidente denominada Bolchevique. Ésta formó luego el FER Bolchevique, que llegó a controlar bases importantes como Derecho y Educación, donde se produjeron violentos enfrentamientos contra los defensores de la línea oficial del PCP Patria Roja. En ese momento, la alianza de partidos que conformaban IU en la UNMSM estaba totalmente fraccionada y, ante la pérdida de prestigio del conjunto de organizaciones políticas, en muchos casos se recurrió a la violencia o al fraude para mantener el control de los gremios. Además, frente al avance de la violencia en Lima (estado de emergencia, presencia y rastillajes de las Fuerzas Armadas e incremento de la cantidad y virulencia de los atentados del PCP-SL y el MRTA), las diversas agrupaciones de la izquierda legal comenzaron a debatir sobre el uso de la violencia para enfrentar tanto al PCP-SL como a las Fuerzas Armadas. En este contexto, también se realizaron interminables debates sobre la caracterización del PCP-SL y el MRTA, que, a la larga, generaron desconcierto entre la militancia de los partidos, en especial entre sus juventudes universitarias, que vivían un proceso de radicalización y aislamiento del resto de los estudiantes. Los partidos se reciclaron con sus mismos militantes y se fraccionaron. Un ejemplo de ello fue el PUM, que terminó dividido en tres grupos en 1989.

En la madrugada del 13 de febrero de 1987, las Fuerzas Policiales intervinieron la UNMSM. En la intervención murió un trabajador no docente. Detuvieron a un gran número de estudiantes. Pese a la magnitud del operativo, sus logros concretos no fueron significativos. Sin embargo, dicha intervención marcó el fin de una manera de entender la autonomía universitaria. En adelante, las Fuerzas Policiales penetraron en la Universidad en sucesivas ocasiones, lo que generó la protesta de la comunidad universitaria y diversas movilizaciones estudiantiles, en las cuales comenzó a notarse una mayor presencia de grupos subversivos que repartían volantes o coreaban consignas. Las movilizaciones fueron fuertemente reprimidas y, poco a poco, perdieron intensidad. El movimiento estudiantil mostraba, de este modo, un enorme desgaste.

Entre 1987 y 1989 se produjeron incursiones policiales sistemáticas al campus universitario, las cuales generalmente terminaron con la detención masiva de estudiantes, en especial residentes de la vivienda universitaria. Estas intervenciones no tuvieron ningún efecto positivo con respecto a la detención de elementos subversivos, aunque en la opinión pública se fue consolidando una imagen cada día más deteriorada de la UNMSM.

El año 1988 se caracterizó por la desproporcionada represión policial a las movilizaciones estudiantiles, lo cual causó, entre mayo y octubre de 1988, la muerte de tres estudiantes: Javier Arrasco, Carlos Barnet y Hernán Pozo Barrientos. En los tres casos, las muertes ocurrieron porque la Policía disparó sus armas de fuego de manera irresponsable.

La muerte de Javier Arrasco se produjo el 31 de mayo de 1988, cuando el Comité de Lucha de Comensales de Cangallo<sup>820</sup> realizaba una manifestación de protesta contra la masacre de campesinos en Cayara.<sup>821</sup> Luego del asesinato de Javier Arrasco, la Junta Directiva de Comensales publicó un pronunciamiento de protesta por la represión policial, en el cual también se criticaba la actitud provocadora del PCP-SL:

<sup>820</sup> El comedor de Cangallo se ubica en el jirón del mismo nombre, al costado de la Facultad de Medicina de San Fernando.

<sup>821</sup> La movilización se desarrolló en la céntrica avenida Grau.

Rechazamos enérgicamente el intento de desvirtuar los hechos y nuestra justa protesta por parte del gobierno aprista mediante el comunicado de las Fuerzas Policiales, así como de la prensa reaccionaria. De igual manera, rechazamos el aprovechamiento político de una instancia gremial por parte de una organización que, llamándose revolucionaria, pone a las masas entre dos fuegos y que, con sus acciones, no hace sino juego a la derecha, dando pie para que justifique este alevoso asesinato.<sup>822</sup>

Era claro que, sin mencionar el nombre de la organización, la Junta Directiva de los Comensales del comedor del jirón Cangallo se refería al PCP-SL, organización que tuvo como uno de sus más ansiados objetivos controlar espacios como el comedor, donde logró cierta hegemonía y que le permitía inclusive contar con raciones para militantes del PCP-SL que no pertenecían a la Universidad.

En la perspectiva de lograr mayor apoyo entre algunos estudiantes radicalizados, el PCP-SL intentó llevar las protestas al extremo y luego presentarse como los únicos consecuentes frente a las demandas estudiantiles.

Los militantes y simpatizantes del PCP-SL pusieron en marcha una estrategia que buscaba provocar a los policías para que actuaran de manera violenta y hubiera una gran cantidad de heridos, detenidos, e incluso víctimas mortales. Con ello, el PCP-SL esperaba polarizar el escenario político universitario atrayendo para sí a los sectores más radicalizados del estudiantado: «Yo me sentía a gusto de participar en esas movilizaciones, pero luego empiezo a sentir miedo, porque en esas movilizaciones siempre había gente del PCP-SL y empiezan a detonar bombas [...] en el año 86 me llevaron, pasé tres días en Seguridad del Estado» (ex militante de la UDP).

La estrategia del PCP-SL de provocar el mayor enfrentamiento con las Fuerzas Policiales, al parecer, tuvo éxito ya que meses después, en otra movilización, murió baleado por la Policía el estudiante Carlos Barnett (octubre de 1988). Durante una nueva movilización murió también Hernán Pozo Barrientos, estudiante de Antropología que se encontraba en el patio de Letras cuando las Fuerzas Policiales empezaron a disparar en el campus universitario.

Estas muertes se debieron, básicamente, a la provocación de los grupos subversivos, que se infiltraban en las movilizaciones estudiantiles, a lo que se sumaba una irresponsable y abusiva acción de las Fuerzas Policiales, que disparaban indiscriminadamente contra los manifestantes. La muerte de los tres estudiantes y el incremento de heridos durante las movilizaciones causó su efecto entre los sectores más radicalizados, lo cual tuvo como consecuencia el avance del PCP-SL en el comedor de Cangallo, la vivienda universitaria, el sindicato de trabajadores (SUTUSM) y algunos sectores de docentes.

#### 20.4. RESISTENCIAS AL PCP-SL Y LA ÚLTIMA ELECCIÓN A LA FUSM

En agosto de 1987, debido a la pugna por desplazar al PCP Patria Roja de la dirección de la Federación de Estudiantes del Perú, la FUSM se dividió. La Asamblea de Secretarios Generales de ese entonces destituyó al presidente de la FUSM, Miguel Cruzado (militante del PCP Patria Roja), quien fue reemplazado por Víctor Andrés Ponce (militante del PUM).

Los partidos de la izquierda legal, que habían intentado la reorientación de la FUSM, estaban totalmente divididos y enfrentados y sus militantes se habían convertido en dirigentes eternos sin ninguna representatividad. La junta directiva presidida por Miguel Cruzado se mantuvo más de seis años sin realizar elecciones, lo cual originó que la FUSM entrara en una crisis que terminó con su desaparición.

En abril de 1988 se realizaron las elecciones para renovar los tercios estudiantiles, el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. En dichas elecciones participaron cuatro listas:

- El Frente Democrático de Bases (FDB), que agrupaba a los sectores más radicalizados de la izquierda (UDP, FER Antifascista y FER Bolchevique).
- IU-Frente Amplio Sanmarquino, alianza de un sector de IU (PUM, PCP Unidad, Unión Estudiantil).
- IU-San Marcos, en la que participaba solitariamente el PCP Patria Roja.
- El ARE, frente de la Juventud Aprista.

En dicha elección, ganó la lista de los sectores más radicales de la izquierda (FDB). Las dos listas de IU quedaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Después de casi diez años, los sectores que conforma-

<sup>822</sup> «Comunicado del Comité de Lucha de Comensales 1/6/88», publicado en el periódico Cambio.

ban la izquierda legal eran, por primera vez, derrotados por una lista que agrupaba a los sectores que mantenían posiciones muy cercanas a la de los movimientos subversivos (en especial al MRTA).

En este escenario de avance de los grupos de la izquierda más radicales, y frente a la presencia cada día más agresiva del PCP-SL, se comenzaron a ensayar diversas estrategias estudiantiles de contención de los grupos subversivos, las cuales fueron desde el enfrentamiento simbólico a su discurso hasta el enfrentamiento violento. Una de las experiencias más interesantes fue la formación de la Coordinadora de Defensa de San Marcos, en la cual participaban las comunidades cristianas y los partidos de la izquierda legal, como lo relata uno de los entrevistados:

En esta suerte de coordinadora se agruparon alguna gente de izquierda, militantes de partidos políticos inclusive, básicamente de Izquierda Unida y, sobre todo, recuerdo que había un buen contingente de grupos de católicos de base; bueno, a partir de ellos, apareció un referente de gente que claramente deslindaba con el PCP-SL y, por lo mismo, ese núcleo empezó a ser una suerte de blanco de las amenazas. (Ex militante de los Cristianos de Izquierda)

Desde 1988, la Coordinadora animó un conjunto de actividades, de las cuales la más importante era cambiar el sentido de las pintas del PCP-SL, intentando crear y difundir nuevas concepciones acerca del problema de la paz: Entonces, eso mismo es lo que hubo en [la facultad de] Letras y en otras partes; la pinta estaba tal cual, sino que se le daba aditamentos y después terminaba completamente diferente, desaparecía o incluso terminaba diciendo lo contrario si es que ese era el caso. (Ex militante de los Cristianos de Izquierda)

Esta iniciativa logró consenso y apoyo, por lo cual el PCP-SL no pudo actuar contra sus impulsores pese a que, en muchos casos, intentó intimidarlos sin mucho éxito.

Los partidos de la izquierda legal también comenzaron a adquirir mayores habilidades para enfrentar violentamente y resistir la estrategia del PCP-SL e incluso disputarles espacios como el comedor. Esta estrategia fue posible en la medida en que dichos partidos adoptaron una actitud de clara condena al PCP-SL: «Una voluntad política en términos concretos para defender ese espacio [la Universidad], incluso en términos físicos y de enfrentamiento bastante fuerte [...] eso es parte de la historia que deberíamos investigar un poco más» (ex dirigente del PCP Patria Roja en Derecho).

Éste es el caso de algunos partidos como el PCP Patria Roja, que, mientras contaba con una estructura orgánica fuerte, logró mantener al PCP-SL fuera de su bastión: la Facultad de Economía. Otros partidos, de una manera u otra también realizaron demostraciones de fuerza para frenar al PCP-SL. En ese sentido, cabe resaltar el papel del PCP Unidad y el PUM.<sup>823</sup>

A finales de 1989, las diversas estrategias aplicadas por la izquierda legal para enfrentar la lógica de los grupos subversivos les permitió recuperar su unidad y se presentaron en la lista de IU para la FUSM.

Las elecciones fueron ganadas por Luis Hoces, militante del PCP Patria Roja que postuló con la bandera de IU, lo que le permitió superar a la lista del FDB, integrada por sectores radicalizados de la izquierda. Este triunfo fue un hecho significativo con el cual la izquierda legal intentó frenar el avance del PCP-SL en la Universidad, sin embargo, este logro pronto se desdibujó ante la poca cohesión interna de la izquierda: «Claro, pero después, cuando Hoces es elegido, hay una ruptura al interior de esa directiva [de la FUSM] y Hoces conforma una comisión de trabajo de la federación en la Universidad de San Marcos» (ex dirigente del PCP Patria Roja en Derecho).

La división de la junta directiva de la FUSM motivó la renuncia de casi la totalidad de ésta. El presidente de la FUSM quedó aislado y nombró arbitrariamente una comisión en la que los militantes del PCP Patria Roja poseían la hegemonía. Este hecho marcó, en la práctica, la desaparición de la FUSM. Solamente los centros federados y centros de estudiantes continuaron funcionando.

#### 20.4.1. Abriendo trocha en la UNMSM

A inicios de los años ochenta, la presencia del PCP-SL fue mínima en la UNMSM: sus actividades estuvieron se circunscribieron a algunas acciones de difusión mediante las pizarras del Movimiento Juvenil, la distribu-

<sup>823</sup> El PCP-Unidad, el PUM y el PCP Patria Roja en ese entonces eran integrantes de IU.

ción de volantes y ocasionales colectas de los familiares de los presos procesados por terrorismo y el denominado Socorro Popular.<sup>824</sup>

La violencia inicialmente se percibió como un fenómeno rural y andino, alejada de las grandes ciudades. La UNMSM no fue ajena a esta percepción. Solamente a mediados de la década se empezó a tomar conciencia de su paulatina expansión. En ese mismo sentido, en la primera mitad de los años ochenta, la presencia del PCP-SL se percibía como externa, ya que, generalmente, sus actividades las realizaban militantes que no pertenecían a la UNMSM, sino a La Cantuta, la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y la Universidad del Callao.

Hacia 1984, el PCP-SL se hizo notar mediante la presencia de pequeños grupos en algunos programas académicos como Historia, Educación, Psicología, Química e Ingeniería Electrónica:

La presencia [del PCP-SL] ha sido desde el año 84, 85, 86, 87, donde se ha sentido más la captación y su presencia porque había estudiantes que aparecían en los cursos de práctica, generalmente en los que tienen afinidad con Ciencias Sociales. (Ex militante de la UDP en Psicología)

La aparición de algunos núcleos de activistas en el comedor, en Derecho, en Ciencias Sociales, y a partir de estos pequeños núcleos de activistas, aumenta su presencia física en la Universidad vía la multiplicación de pintas, periódicos murales, pronunciamientos en las paredes y también de actividades que comienzan a desarrollar como conferencias, actos culturales, que era una suerte de mitin que mezclaba lo de arte. (Ex dirigente del PCP Patria Roja en Derecho)

En la mayoría de los casos, para lograr esta presencia orgánica contaron con el apoyo de militantes radicalizados que abandonaron el FER Antifascista y el FEUL<sup>825</sup> (frente dirigido por Pukallacta) y algunos docentes de Historia, Educación y Psicología. Caso aparte es el de Derecho, donde realizaron un intenso trabajo político mediante la denominada Asociación de Abogados Democráticos.<sup>826</sup> La penetración del PCP-SL fue más intensa en el sindicato de trabajadores no docentes; para ello, utilizó al movimiento FUC-MUB:<sup>827</sup> «Pero Sendero [el PCP-SL] llegó a controlar el sindicato no docente; ellos pensaban que el rectorado era el gobierno y para no permitir que funcionara normalmente llegaban con martillo y destruían las puertas del rectorado» (ex dirigente del PCP Patria Roja en Economía).

Durante este período, también el PCP-SL intentó tener presencia política en el comedor y la residencia. El motivo para concentrarse en estos espacios no era lograr el control del conjunto de la Universidad sino tener acceso a los estudiantes más pobres, en su mayoría provenientes del interior del país y que, por tanto, dependían de los servicios de bienestar estudiantil. Para el logro de sus objetivos, el PCP-SL peleó estos espacios con un discurso moral, acusando a los partidos como los promotores de la corrupción en los gremios, los tercios y la conducción de la Universidad.

Así, para 1983, el PCP-SL comenzó a tener mayor presencia en el campus universitario:

Porque sería un mitin [de IU] fácil de 2 mil personas, estaba repleto el patio de Letras [...] entonces llega el PCP-SL con cien, 150 personas y logra dispersarlo [...] Ellos [los miembros del PCP-SL] después de hacernos correr por todos lados se organizaron en columnas, en este pasaje que va desde el patio de Letras hasta el Muro de la Vergüenza, los alineó pues ahí una profesora de Psicología, que era una de las profesoras que, sin haber sido inicialmente del PCP-SL, sino más bien del FER Antifascista, acabó integrada al PCP-SL. (Ex dirigente estudiantil del PCR)

En la segunda mitad de los años ochenta, la presencia del PCP-SL ya no se basó solo en militantes de otras organizaciones, sino también en ingresantes provenientes de las academias César Vallejo y ADUNI, donde el PCP-SL había articulado un trabajo político.

<sup>824</sup> Este organismo creado por el PCP-SL fue de vital importancia para la explicación de la violencia en Lima Metropolitana. Incluso llegó a desplazar al comité metropolitano de Lima.

<sup>825</sup> FEUL significaba Frente Estudiantil Unificación y Lucha. En algunas facultades, Pukallacta aparecía como FEUL; en otras, como FER-FEUL.

<sup>826</sup> A finales de los años setenta, la Asociación de Abogados Democráticos, al parecer, era una organización que agrupaba a abogados de distintas corrientes de izquierda; posteriormente, el PCP-SL adquiere hegemonía en ella. En este proceso, es importante la presencia de la abogada sanmarquina Martha Huatay, que años después fue la encargada principal de Socorro Popular.

<sup>827</sup> FUC-MUB es el Frente Único Clasista del Movimiento Unitario de Bases. Desde el FUC-MUB, el PCP-SL realizó una intensa labor política en el sindicato de trabajadores (SUTUSM).

Pero, pese a su intenso trabajo, el PCP-SL no logró imponerse en la residencia, donde diversos grupos controlaban la Asociación de Residentes de la Vivienda Universitaria (ARVU): «La residencia tenía mucho que ver con quien finalmente estaba en la federación universitaria, más aún la residencia siempre fue un espacio en el que todos los grupos políticos iban a tener cuotas» (ex dirigente de Historia).

Donde sí logró una mayor presencia fue en el Comité de Lucha de Comensales, y para afirmarlo elaboró un conjunto de murales en el comedor, que inicialmente solamente funcionaba en el local del jirón Cangallo, al costado de la Facultad de Medicina:

[...] las pintas [en el comedor] eran bien bonitas, con mensajes alusivos al PCP-SL y me sorprendía, por momentos lo veía muy bien, y por momentos discrepancia, ahí se veía ya, pues, la fuerza, el poder más alucinante del PCP-SL, considerando a Abimael [Guzmán] como el más grande marxista viviente en la tierra. (Ex militante de la UDP)

Lo que sí me acuerdo clarito es de *El Diario*, incluso a la salida del comedor, ahí estaba a manera de periódico mural, *El Diario*, eso lo he observado. (Estudiante de Medicina recluido en el penal de Cantogrande).

Durante el reparto de los alimentos, militantes del PCP-SL dirigían discursos alusivos a la «lucha armada»: «Yo asistía al comedor e ingresaban quienes decían pertenecer al Partido Comunista del Perú y nos exponían sus ideas» (militante del PCP-SL, ex estudiante de Derecho).

Sin embargo, el PCP-SL no controlaba totalmente a los comensales, ya que, pese a la enorme presión que los subversivos ejercían sobre ellos, incluso el radicalizado Comité de Lucha de Comensales se atrevió a denunciar el aprovechamiento político que hacía el PCP-SL de las luchas estudiantiles. En efecto, las movilizaciones y marchas tendieron a ser más violentas por la presión de los estudiantes vinculados al PCP-SL: «Ya nos empezamos a dar cuenta que era gente del PCP-SL y no podíamos hacer nada, porque empezaban a explotar bombas en las movilizaciones» (ex dirigente del Centro Federado de Psicología).

Otro de los espacios donde el PCP-SL trabajó fue al interior de los grupos de danza, teatro y música popular. Ahí planteó la necesidad de ligar el arte con una «posición de clase» y la «lucha armada»: «Ellos [los integrantes del PCP-SL] todo lo enfocaban en relación a la lucha de clases, por ejemplo, le daban ese sentido a una danza que se baila a la margen derecha del río Mantaro, en la que se representa el proceso de la cosecha de maíz, y se baila con la hoz» (ex dirigente de la Juventud Aprista en Derecho).

Igualmente, el PCP-SL logró infiltrarse en los actos políticos culturales, donde, junto con la presentación de grupos culturales, difundían mensajes de apoyo a la «lucha armada»: «Yo sí he asistido a los eventos políticos culturales; a veces, ellos ingresaban a exponer sus ideas, pero que estuvieran controlando quién entra o quién no entra eso es parte de una campaña negra como muchas que han montado contra el Partido Comunista del Perú» (militante del PCP-SL, ex estudiante de Derecho).

En la Facultad de Derecho se articuló también un núcleo del PCP-SL, donde predominaron las actividades que realizaba con la Asociación de Abogados Democráticos, que agrupaba a los abogados especializados en la defensa de los presos del PCP-SL. Posteriormente, el trabajo del PCP-SL se vio reforzado con la formación del FER Bolchevique, que, surgido de una facción del PCP Patria Roja, se convirtió en el grupo más importante de Derecho. Los militantes de este grupo iniciaron un proceso de radicalización que terminó con la incorporación de muchos de ellos al PCP-SL. Todo este trabajo posibilitó una presencia significativa del PCP-SL en diversas bases o promociones: «A nivel de mi facultad [Derecho], habían más compañeros que llegaron a integrar el PCP-SL, que participaban activamente [en las actividades estudiantiles], pero tú te enterabas cuando ellos caían» (ex dirigente del PCP Patria Roja en Derecho).

El PCP-SL comenzó también a trabajar fuertemente en la Facultad de Ciencias Sociales, en la cual aprovechó las tensiones existentes en torno a las demandas por la construcción de su pabellón. En este sentido, vieron oportunidades de alianzas con docentes provenientes del PCP Bandera Roja y del FER Antifascista, los cuales encontraron en el PCP-SL la posibilidad de reforzar su hegemonía frente al PCP Patria Roja. Más adelante, por las mismas razones, este grupo de docentes terminó aliándose con la comisión reorganizadora, nombrada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Un caso importante para analizar la presencia del PCP-SL en la facultad de Ciencias Sociales es el trabajo que realizó en la especialidad de Historia, donde desplazó inicialmente a los militantes de la izquierda legal en alianza con otros grupos políticos y luego terminó desplazando a sus propios

aliados: «Al dirigente del FER Antifascista, un buen día le dijeron ya no hay torta para ti, fuera, lo botaron y así hasta que se quedaron solamente ellos [los miembros del PCP-SL]» (ex dirigente estudiantil de Historia).

En facultades como Educación, Ingeniería Electrónica y Psicología, el PCP-SL aprovechó la estructura del FER Antifascista para desarrollar su trabajo político. La estrategia que el PCP-SL utilizó para desplazar o destruir a los otros grupos fue aprovechar la figura de los independientes radicales o estudiantes de base que criticaban la corrupción de los partidos. Con esta estrategia, el PCP-SL, sin ser mayoritario entre los estudiantes o docentes, logró bloquear a los partidos, en especial los de la izquierda legal. Algo importante en el trabajo que realizó el PCP-SL fue su participación en los denominados comités de lucha pro facultad y los comités de lucha por el traslado interno.

La izquierda legal no logró articular un discurso coherente frente al incremento de la presencia del PCP-SL y el surgimiento del MRTA. Es más, comenzó a sentir internamente la presión de la presencia de los grupos alzados en armas.

Otros grupos, como Pukallacta, intentaron mantener un discurso que compitiera con el conflicto iniciado por el PCP-SL. Por ello, comenzaron a realizar pintas en la Universidad con el lema «Desarrollar la guerra de guerrillas» y firmaban como PC del P, haciendo una ligera diferenciación con las siglas PCP usadas por el PCP-SL. Lo que en apariencia era una sutil diferencia de letras, en realidad expresaba la tensión en un sector político cada día más cuestionado por el hecho de que el PCP-SL estaba desarrollando la esperada «guerra popular», que exigía definiciones concretas de su dirección (las cuales nunca llegaron). A la larga, frente a la indecisión de la dirigencia, los militantes se decidieron por aquello que consideraban más coherente con su discurso: la «guerra popular». Este proceso brindó al PCP-SL un contingente de cuadros entrenados en la política universitaria sanmarquina, del que hasta ese momento carecían.

Entre 1987 y 1989, el PCP-SL introdujo varios cambios en su estrategia urbana y dio mayor énfasis a su trabajo con jóvenes y maestros. En este período, la presencia del PCP-SL aumentó considerablemente en la Universidad, mientras que el resto de grupos se iba debilitando como producto de la propia división de la izquierda legal. Hacia finales de 1990 e inicios de 1991, ya no había partidos realmente organizados en la UNMSM. En ese contexto, el PCP-SL se mostró más agresivo y empezó a castigar físicamente a los estudiantes que retiraban o malograaban propaganda. Este tipo de acciones, a la larga, resultó contraproducente. Un ejemplo de ello fue la Facultad de Psicología, donde como producto de la arbitrariedad del PCP-SL se organizó un movimiento estudiantil en respuesta.

Para fines de los años ochenta, el PCP-SL había logrado una importante presencia pública, sin embargo no tenía un organismo o frente de fachada permanente. En algunos casos, utilizaba nombres como Movimiento de Estudiantes Clasistas o Movimiento Democrático de Bases, en la perspectiva de articular demandas de corto plazo: «Mira, el PCP-SL en San Marcos [la UNMSM] apuntó a lo que se llamaba la política de frente, pero había dos matices dentro de la política de frente: uno que era abiertamente pro Sendero y otro de un discurso más amplio de reivindicación estudiantil, éste es el caso del MDB. Los del MDB eran los únicos que apoyaban las marchas sobre el derecho a la gratuidad» (ex estudiante de Derecho recluido en el penal de Cantogrande).

En cambio, para expresar posiciones a favor de la «lucha armada», pegaba pronunciamientos en las paredes escritos con letras rojas, a veces sin firma o firmados por el Partido Comunista del Perú. Otra característica importante fue que, entre sus militantes, adquirió enorme importancia la figura de Abimael Guzmán, a quien atribuían un aporte fundamental al desarrollo del pensamiento marxista:

Pero Mariátegui fue del treinta y de ahí pasaron muchas cosas, por eso se tenía que reestructurar a Mariátegui [...] Entonces se necesitaba que todo eso sea especificado y se necesitaba alguien que tenga una comprensión clara de la historia, de la realidad social peruana y esa persona es Abimael Guzmán. (Militante del PCP-SL, ex estudiante de Educación Física)

Estudiar y principalmente aplicar el pensamiento *Gonzalo* es decisivo para servir más y mejor al partido, al desarrollo de la guerra popular y a la revolución proletaria mundial; así como aprender del presidente *Gonzalo* es decisivo para servir de todo corazón al pueblo.<sup>828</sup>

<sup>828</sup> «Documentos fundamentales del Partido Comunista del Perú». Suplemento especial de El Diario, 7 de febrero de 1988.

El PCP-SL trabajó preferentemente con estudiantes provenientes de los estratos sociales económicamente más deprimidos, sobre todo de los conos periféricos de la ciudad o inmigrantes, para lo cual centró su discurso en necesidades concretas e inmediatas:

Un nuevo grupo de estudiantes nos juntamos para luchar por nuestras propias reivindicaciones como mayor renta, mejores condiciones de estudio, contra el alza de pasajes [...] Recuerdo que peleábamos porque comenzaban a cobrar las matrículas [...] Un papel muy importante allí cumplió la Facultad de Educación, sinceramente Educación, Sociales y Derecho fueron tres facultades que se han destacado y siempre han estado en la vanguardia de todo este trabajo. (Militante del PCP-SL, ex estudiante de Educación Física)

El PCP-SL aprovechó la frustración de sectores juveniles, que, pese a su inserción en la educación superior, tenían limitadas posibilidades de movilidad social. Este patrón se presentó de manera muy fuerte en especialidades como Historia, Educación y las de Ciencias Básicas. Los estudiantes de estas facultades, que requieren de un menor puntaje para su ingreso, llegaron con la expectativa de, luego de ingresar, trasladarse a otras especialidades. Por ello, uno de los espacios claves para el PCP-SL en este período fueron los Comités de Lucha por el Traslado Interno.

De acuerdo con las percepciones de los entrevistados, los estudiantes que eran reconocidos como miembros del PCP-SL mostraban ciertas actitudes que los diferenciaban de sus demás compañeros de estudio:

Por ejemplo, en términos físicos era gente con el prototipo del provinciano pobre y además era algo que de hecho ellos no sólo no disfrazaban sino afirmaban, yo creo que intencionalmente [...] Eran muy reacios de juntarse con otra gente, sólo entre ellos se juntaban, lo cual los hacía identificables [...] Mucha gente que se pasó al PCP-SL manejaba un lenguaje confrontacional [sic] que creo no deja de ser atractivo para mucha gente. (Ex militante de los Cristianos de Izquierda)

Yo veía que ellos tenían un radicalismo, pero no un radicalismo político sino un radicalismo emocional, es decir, eran chicos con mucha rabia contenida. (Ex dirigente estudiantil de Historia)

Según las entrevistas, los militantes del PCP-SL tenían una percepción excluyente y sectaria, incluso de aquellos grupos que se encontraban ideológicamente cercanos a ellos, como el FER Antifascista: «Al FER yo nunca lo vi que se pronunciara a favor de los estudiantes, muy por el contrario, ellos discriminaban, jalaban gente para su molino, pero del conjunto de las necesidades de los estudiantes nunca se ha preocupado» (militante del PCP-SL, ex estudiante de Derecho).

Como el PCP-SL nunca logró el consenso necesario en los espacios estudiantiles, para hacer sentir su presencia, cotidianamente ingresaba a los salones a lanzar sus consignas e incluso llegó a realizar algunas detonaciones con fines propagandísticos. En términos generales, el PCP-SL no realizaba acciones militares dentro de la Universidad. La estrategia del PCP-SL buscaba, fundamentalmente, realizar un trabajo político de captación y tener en la Universidad un lugar de refugio y almacenamiento de materiales. La capacidad de movilización del PCP-SL, en la Universidad era limitada. No podían organizar movilizaciones masivas, pero sí desfilaban muy ordenados, organizados y con apoyo de militantes externos, que eran identificados por el tipo de consignas que coreaban.

Esta orfandad y carencia de apoyo estudiantil se mostró claramente en las elecciones para tercios estudiantiles que se realizaron luego de la intervención militar. En dichas elecciones, la lista denominada FADE, conformada por estudiantes pro PCP-SL, quedó en el último lugar: «El PCP-SL se presenta a través del FADE, Frente Amplio Democrático Estudiantil, creo que se llamaba así; recuerdo que es la primera oportunidad en que el PCP-SL se presenta así en elecciones, porque por lo general ellos no participaban en elecciones [...] Esa vez tiene el tercer o cuarto lugar» (militante de Voz Comunista).

Ésta fue la única vez que el PCP-SL participó en una elección al cogobierno estudiantil. Teniendo en cuenta su tradición abstencionista, ante la reducción del margen para realizar sus actividades políticas debido a la presencia militar, el PCP-SL intentó utilizar su participación electoral como un medio para realizar actividades de propaganda en una forma más abierta.

Durante la permanencia de los militares en la Universidad, el único incidente grave fue el ataque a un camión militar en la ciudad universitaria en agosto de 1991. La resistencia del PCP-SL a la intervención militar no

fue violenta, sino, más bien, política, mediante la realización de marchas de protesta, en las cuales buscaba aprovechar el rechazo que causaban algunas conductas arbitrarias de los militares al interior de la Universidad.

La captura de Abimael Guzmán y los principales cuadros del PCP-SL entre 1992 y 1994, desarticuló la estructura del PCP-SL, que, por ser extremadamente jerarquizada, tenía pocas posibilidades de recomposición. Muchos de los militantes del PCP-SL fueron apresados o se vieron forzados a dejar la Universidad. Algunos sectores que simpatizaron o colaboraron con el PCP-SL, posteriormente terminaron vinculados a la comisión reorganizadora nombrada por el gobierno de Alberto Fujimori.

Al inicio de los años noventa, el PCP-SL pareció instalarse frente al vacío de poder y caos reinante en la Universidad. Sin embargo, tuvo que enfrentar la resistencia de determinados grupos estudiantiles, como la Unión de Estudiantes de Psicología (UNEP). En ese contexto, el Estado ingresó a la Universidad, pero no para responder a las carencias que originó la crisis sino dentro de la lógica de la estrategia contrasubversiva. La militarización de la vida universitaria no logró desplazar al PCP-SL. La posterior intervención administrativa se realizó cuando la presencia de los grupos subversivos era casi nula en la Universidad, solución que agravó los problemas de fondo que originaron la crisis universitaria y permitieron el surgimiento de actuaciones violentas.

Tras la llegada de los militares a la Universidad, el PCP-SL comenzó a actuar con mayor discreción, pero siguió activo. Esto cambió luego de la captura de Abimael Guzmán (en septiembre de 1992) y la carta del líder del PCP-SL pidiendo un «acuerdo de paz». Este último hecho generó la división del PCP-SL, que entró en crisis y comenzó a perder militantes. En esa coyuntura, el PCP-SL tuvo que reemplazar sus cuadros con gente nueva, que fue rápidamente capturada. Ello produjo la paulatina desaparición del PCP-SL en la UNMSM:

La estructura que tenía el PCP-SL lo hacía depender demasiado de Abimael Guzmán; entonces la detención afecta a toda su estructura y una de ellas, la universitaria. Entonces, no es tanto porque ingresó el Ejército en la Universidad que el PCP-SL se fue retirando, hubieron otras cosas de carácter interno que debilitaron un poco la presencia senderista [del PCP-SL]. (Ex dirigente del PCP Patria Roja en Derecho)

## 20.5. LA INTERVENCIÓN MILITAR

En mayo de 1991, Alberto Fujimori y una comitiva presidencial ingresaron a la Universidad. El Presidente fue apedreado por alrededor de trescientos estudiantes. Por la mañana de ese mismo día, Fujimori había estado en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y recibió similar acogida. En este grupo, había gente de diversas tendencias de izquierda y, en menor medida, simpatizantes del PCP-SL: «El tipo entró [Alberto Fujimori] y hubo un sector pequeño que reaccionó en contra, yo estuve en ese sector. Pero la gran mayoría no lo hizo. Y ése fue uno de los momentos en los cuales yo particularmente me di cuenta que la crisis de representatividad tenía profundidades» (ex dirigente del PCP Patria Roja en Derecho).

Este acontecimiento fue el pretexto para instalar una base militar en la Universidad. Cuando los militares ingresaron al campus, realizaron requisas, intervenciones en las facultades y borraron las pintas. Estas acciones no tuvieron mayor impacto en el PCP-SL, que más bien pensaba que se agudizaban las contradicciones y estaban más cerca del «equilibrio estratégico».

La intervención militar fue apoyada por un sector mayoritario de los estudiantes, ya que sentían que se recuperaba a la UNMSM del caos, como expresa una revista sanmarquina de la época:

Cuando los militares ingresan a San Marcos [la UNMSM] y son recibidos en distintas facultades con aplausos y claras muestras de simpatía, los estudiantes que habían apostado por resolver los problemas de la Universidad — incluido el de la violencia y la actividad senderista [del PCP-SL]— sin participación foránea se sintieron de una manera u otra derrotados.<sup>829</sup>

Cuando Alberto Fujimori dio el golpe de Estado el 5 de abril y disolvió el Congreso de la República, ganó popularidad entre los estudiantes más cercanos al discurso centrado en la demanda de orden frente al aumento de la violencia, a la crisis del sistema político de representación y al deterioro de la situación económica. Por otro lado, comenzaron a aparecer pequeños grupos de estudiantes opuestos tanto a la dictadura de Alber-

<sup>829</sup> Herejes y renegados, año II, n.º 9, noviembre-diciembre de 1992, p. 17.

to Fujimori como al cada vez más violento PCP-SL. Sin embargo, entre estos grupos hubo un creciente temor por los métodos represivos que se comenzaron a usar contra los opositores al régimen fujimorista:

¿Qué cosas cambian?, Lo que sí obviamente comienza a ocurrir son detenciones de pronto, o sea, en cualquier momento, de pronto cerraban la puerta, más de una vez cerraban la puerta y todo el que salía tenía que identificarse y se quedaban con alguna gente. Hay un temor generalizado en el sentido de que aún la gente de la izquierda legal ya no se anima a activar abiertamente por temor a ser confundido con el PCP-SL. (Ex militante de los Cristianos de Izquierda)

## 20.6. DESAPARICIÓN DE ESTUDIANTES

El 11 de junio de 1991, cuando Alberto Fujimori ingresaba en medio de disturbios a la UNMSM, integrantes de las Fuerzas Policiales detenían en la puerta de la Facultad de Odontología al estudiante Juan Gregorio Felipe Maquera, de 19 años. Nunca más se volvió a saber su paradero. Año y medio después, en diciembre de 1992, cuando el Ejército ya había instalado una base en la Universidad, fue detenido y desaparecido el estudiante Juan Vargas Vallejo, residente de la vivienda universitaria, cuyo paradero hasta hoy es desconocido.<sup>830</sup>

Estos casos no fueron aislados. Por la misma época fueron detenidos y desaparecidos dos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú.<sup>831</sup> Al parecer, el objetivo de esta práctica era generar terror entre los simpatizantes y potenciales militantes de las organizaciones subversivas. La presencia de la base militar también implicó que se organizaran operaciones de rastreo durante las horas de clases. En estas operaciones se detenía a diversos estudiantes y, para ello, los militares contaban con listas en las cuales se consignaba los nombres de los estudiantes supuestamente involucrados en actividades subversivas.

## 20.7. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNMSM

En mayo de 1995, el gobierno de Fujimori intervino administrativamente la UNMSM y formó una comisión reorganizadora (CORE) que destituyó a las autoridades universitarias y a los tercios estudiantiles y tomó diversas medidas arbitrarias. El pretexto para esta intervención fue la anulación de los resultados de las elecciones del nuevo rector:

Ahora hay condiciones coyunturales que posibilitan que sectores de profesores con determinados vínculos al gobierno se sienten marginados de la conducción de la universidad [...] Porque se anula una elección que ellos habían ganado [MUSA] y los perdedores [vinculados al PCP Patria Roja] organizan una nueva elección sin la participación del MUSA y reelegan a Wilson Reátegui. (Docente de Ciencias Sociales)

La intervención administrativa tenía la finalidad de entregar el control de la UNMSM a docentes cercanos al fujimorismo y, de esta manera, iniciar una reorganización que evitara que, desde la Universidad, se articularan movimientos opositores al régimen autoritario. Un importante sector de docentes que habían simpatizado inicialmente con el PCP-SL terminaron colaborando con las autoridades interventoras, e incluso ocupando cargos de importancia.<sup>832</sup> En este sentido, hay que tener en cuenta que, ya en 1993, durante el referéndum para aprobar la Constitución Política fujimorista, un gran número de estudiantes se movilizó a favor del no.

La instalación de la comisión reorganizadora significó la introducción de medidas más represivas contra cualquier expresión opositora: «Primero te vigilaban de manera encubierta, porque tú notabas miradas, notabas seguimientos. Pero después la vigilancia fue de manera descarada, con cámaras [...] En todos lados, a toda hora, permanentemente» (ex dirigente del PCP Patria Roja en Derecho).

Frente a la arbitrariedad mostrada por el gobierno y el autoritarismo de la comisión reorganizadora, se comenzaron a formar nuevos grupos estudiantiles como el Colectivo Amauta, Integración Estudiantil y Juventud Popular, los cuales lograron articular la protesta contra el gobierno de Alberto Fujimori y el rechazo a

<sup>830</sup> El caso de Juan Gregorio Felipe Maquera fue asumido por APRODEH, mientras que el caso de Juan Vargas Vallejo fue asumido por COMISIDEH.

<sup>831</sup> Ernesto Castillo (desaparecido en octubre de 1990) y Miguel Crispín (desaparecido en agosto de 1991).

<sup>832</sup> Un caso bastante representativo fue el de un conocido docente que, luego de apoyar activamente al PCP-SL durante los años ochenta, terminó con una importante ubicación en la lista parlamentaria fujimorista denominada Perú 2000.

la comisión reorganizadora. Finalmente, estos grupos tuvieron una importante participación en el movimiento interuniversitario que buscó la caída del gobierno de Alberto Fujimori.

La UNMSM protagonizó nuevas movilizaciones, pero esta vez de carácter pacífico y masivo. Un elemento importante de este proceso fue que se vio a la comunidad universitaria (en especial los estudiantes) como un actor clave en el camino de retorno a la democracia.

El MRTA, por su parte, concibió a la UNMSM como un espacio fundamentalmente de propaganda política y militar. Por ello, su presencia estuvo asociada a desfiles con armas y ropa militar. La diferencia entre el PCP-SL y el MRTA es que este último no tuvo la necesidad de articular una estrategia política al interior de la Universidad. El hecho de contar con el apoyo de grupos políticos como Pueblo en Marcha, UDP y posteriormente el BPR le permitió tener acceso a las dirigencias estudiantiles e incluso establecer alianzas con algunos partidos de la izquierda legal, lo cual fue fundamental para su estrategia de captar nuevos cuadros e integrarlos a sus filas. El MRTA no recurrió al enfrentamiento porque percibió en los otros grupos estudiantiles un espacio potencial para crecer. El MRTA experimentó su mayor crecimiento político en la UNMSM entre 1986 y 1987, cuando el MIR, grupo con trabajo político en la Universidad, se integró a la estructura del MRTA.

Sin embargo, el MRTA terminó siendo desplazado por el PCP-SL, organización que logró monopolizar el discurso del conflicto armado. Además, parte de los brazos políticos del MRTA comenzaron a tomar distancia por la denominada «senderización» del MRTA. Al final, esta organización quedó aislada y poco a poco perdió militantes y los que se quedaron fueron capturados por las fuerzas del orden.

## 20.8. CONCLUSIONES

La intervención del Estado en la Universidad atravesó cuatro etapas definidas en tiempos políticos distintos. Inicialmente se mostró indiferente a los problemas de la UNMSM. En un segundo momento, la represión policial fue indiscriminada y desproporcionada. El tercer momento estuvo caracterizado por la militarización de la vida universitaria, cuando la Universidad fue incluida en los objetivos de la lucha contrasubversiva. En un cuarto momento, cuando la subversión estaba totalmente controlada, el Estado intervino administrativamente la Universidad para subordinarla a los intereses del gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Es importante tener en cuenta que, en este cuarto momento, las autoridades interventoras contaron con la colaboración de un sector de docentes que, durante los años ochenta, apoyaron la expansión del PCP-SL.

La estrategia del Estado giró alrededor de las demandas de una opinión pública alimentada de imágenes totalmente tergiversadas. Así, a inicios de los años ochenta predominaba el perfil del universitario vándalo (que correspondió con la etapa de la indiferencia estatal). Posteriormente, tomó cuerpo la idea del estudiante sanmarquino como sinónimo de subversivo. La consecuencia de esto fue la militarización de la vida universitaria. Esta estrategia, en el fondo, fue la continuidad de la indiferencia estatal, ya que ignoró la capacidad de la Universidad para controlar a los grupos subversivos, e incluso terminó frenando las diversas iniciativas universitarias contra la violencia.

El espacio de los grupos políticos universitarios fue marcadamente masculino, no solamente por la presencia mayoritaria de hombres en las dirigencias, sino fundamentalmente por la subordinación de la mujer en el mundo de la política, el cual se ligaba a características relacionadas con la fuerza y la dominación. Por ello, si bien había mujeres, su presencia apareció masculinizada o subordinada. Dos testimonios sirven de ejemplo de lo dicho. El primero alude a la presencia de una docente de Psicología que encabezaba con gran autoritarismo y verticalidad una movilización del PCP-SL. El segundo menciona a un ex dirigente estudiantil que empleó el término «política húmeda» para referirse a la utilización de la mujer como señuelo para la captación de militantes varones.

Para fines de los años ochenta, la Universidad tuvo que enfrentar la violencia proveniente de los grupos subversivos y del mismo Estado. En ese contexto, se ensayaron, desde la Universidad, estrategias para contener las lógicas basadas en la violencia. Sin embargo, no se les dio la suficiente importancia.

Frente a la presencia de manifestaciones de grupos subversivos, el Estado respondió con la represión policial indiscriminada en la segunda mitad de los años ochenta y la militarización de la vida universitaria en los

años noventa. La identificación de la Universidad con la violencia y la estigmatización de los sanmarquinos como subversivos produjo que las respuestas represivas del Estado fueran cada día más violentas.

La respuesta estatal, basada en la idea difundida acerca de la necesidad de poner orden al interior de una Universidad supuestamente caótica, creó el clima necesario para que el PCP-SL pudiera crecer en el sector de los estudiantes radicalizados que, al sentirse entre dos fuegos, se vieron atraídos por su estrategia militar.

A inicios de los años noventa, pese a que había presencia subversiva en la Universidad, ésta no era mayoritaria. Cuando la educación superior fue incorporada a la lógica de la lucha contrasubversiva, la Universidad fue intervenida y en su interior se instaló una base militar. Este hecho no produjo la derrota del PCP-SL y fueron, más bien, acontecimientos como la captura de los principales militantes del MRTA y del PCP-SL —entre ellos, Abimael Guzmán en 1992—, la posterior firma del denominado «acuerdo de paz» entre los líderes del PCP-SL y el fujimorismo y la división interna del PCP-SL los que, a la larga, condujeron al desgaste y desaparición de las organizaciones subversivas.

## 21. LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO

La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) tuvo sus orígenes en los esfuerzos que las comunidades campesinas del valle del Mantaro desplegaron a finales de los años cincuenta. Así, en 1959, se fundó la Universidad Comunal del Centro: «su acta de fundación se firmó el 11 de julio de 1959, suscribiendo la Escritura Pública de Constitución de la Universidad con fecha 30 de agosto del mismo año, como Asociación Comunal del Centro». El 16 de diciembre del mismo año fue reconocida oficialmente mediante «decreto supremo 46, con fecha 16 de diciembre de 1959, rubricado por el Presidente de la Republica, doctor Manuel Prado Ugarteche, y se autoriza su funcionamiento con carácter de Universidad Particular con sede en la ciudad de Huancayo, iniciando sus actividades un 2 de abril de 1960». Posteriormente, con fecha 2 de enero de 1962, mediante ley 13827, se convirtió en Universidad Nacional del Centro del Perú. Este inicio demuestra la importancia que, en el imaginario popular de la región, tiene la educación.

Su estatuto fue aprobado el 18 de abril de 1984. Esta norma democratizó la gestión institucional y restableció los tercios estudiantiles en los Consejos de Facultad, el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, así como la elección universal y secreta de estos órganos de gobierno. Lo peculiar de la UNCP es que se concibió que cada especialidad fuera una facultad; por ello, actualmente existen 22 facultades.

Son miles los jóvenes que han pasado por esta Universidad (7,289 en 1980 y 10,189 el año 2000). Una amplia proporción procede del entorno inmediato de la ciudad de Huancayo y del valle del Mantaro, con un significativo 10% proveniente de Huancavelica. Otro porcentaje corresponde al propio departamento: dos tercios pertenecen al valle del Mantaro (Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca) y un contingente importante llega de la provincia de Yauli, especialmente de la ciudad de la Oroya, que en los últimos años ha ido disminuyendo, debido a la retracción de sueldos y empleos en la actividad minero metalúrgica. En la región del Centro, gran parte de profesionales que prestan servicios en las instituciones de gestión pública o privada se han formado en la UNCP: ingenieros, economistas, agrónomos, zootécnicos, arquitectos, docentes de primaria y secundaria, enfermeras y, últimamente, médicos. Estas razones convierten a la institución en un factor gravitante para el desarrollo de la región del Centro.

### 21.1. PRELUDIO: DÉCADA DEL SETENTA

#### 21.1.1. El discurso de la violencia

La idea del uso de la violencia formó parte del discurso de los partidos de izquierda que actuaban en las universidades. Estas agrupaciones formaron el sentido común de los jóvenes que reflexionaban y debatían sobre los problemas de la sociedad peruana y la propia universidad. Al decir de un docente: «[...] para esa época, era una discusión como ahora se discute la calidad total, la eficiencia [...] la mayor productividad, la mayor rentabilidad [...]» (Efraín, profesor de Economía). La izquierda, sin ponderar en el largo plazo las consecuencias de sus mensajes, restringía el debate político en la universidad a éste: «[...] quién plantea con más serie-

dad o mayor convicción el tema de la lucha armada, la guerra popular del campo a la ciudad, incluso se acusaba a los que de alguna forma mostraban ciertas tesis o algunos puntos de vista diferentes como que eran reformistas [...]» (Gabriel, ex alumno de Ingeniería Química).

Esta idea fuerza tuvo vigencia casi incuestionable hasta mediados de los años ochenta «[...] porque hasta aquel entonces obviamente nosotros teníamos nuestro lema también: “El poder nace del fusil” [...]» (Manolo, profesor de antropología), aforismo que diferenciaba a los revolucionarios de los reformistas.

Otro aspecto era la conducta irreverente y agresiva que los estudiantes, especialmente dirigentes que se respaldaban en la posición dominante de sus grupos políticos, adquirían en los gremios estudiantiles, como relata una profesora:

[...] llamaron a una reunión de profesores [...] nos sentaron a los profesores en sillas y [...] en el auditorio estaban los estudiantes, empezaron los estudiantes a insultar a los profesores ¿no?, les decían corruptos, en fin una serie de insultos [...], desconcertada ella —que recién se había incorporado a la universidad— preguntó a un colega sobre la conducta de los estudiantes [...] me dijeron, pues, que en ese momento estaba en la dirección del centro federado, un movimiento que está muy fuerte [...]. (Alicia)

### 21.1.2. Los partidos políticos y sus expresiones estudiantiles

Durante la década de 1970, el movimiento estudiantil estuvo fuertemente influido por los partidos de izquierda, mientras el PAP fue paulatinamente desplazado. Se encontraban el Partido Comunista Peruano Unidad (PCP Unidad), el partido Vanguardia Revolucionaria (VR), el Partido Comunista del Perú Patria Roja (PCP Patria Roja), el Partido Comunista Peruano Bandera Roja (PCP BanderaRoja)<sup>833</sup>. El PCP Unidad era el único partido legal, debido a su declarado apoyo a la junta militar de gobierno; los restantes eran clandestinos, con formas y mecanismos semilegales para influir en el movimiento gremial y social. Uno de estos mecanismos, dentro de la Universidad, era la organización de frentes que servían como «correas de transmisión» de sus propuestas doctrinarias y programáticas, y medios para captar militantes.

El PCP Unidad organizó la Juventud Comunista Peruana (JCP), mientras que los otros partidos tuvieron que organizar frentes como el Frente Estudiantil Revolucionario (FER) o Vanguardia Estudiantil Revolucionaria (VER). El FER fue ganando mayor influencia y notoriedad desde la década anterior, y grupos como el PCP Patria Roja o el PCP Bandera Roja se disputaban el nombre, agregándole un apéndice: FER del Perú, FER Antifascista, etc. Si bien en otras universidades (Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga o Universidad Nacional Mayor de San Marcos) existía el FER «por el Luminoso Sendero de Mariátegui», en Huancayo éste no llegó a formarse. En la UNCP existieron otros grupos pequeños, como el Partido Comunista Revolucionario (PCR), derivado de VR en 1974, y el Partido Comunista del Perú «Pukallacta», derivado del PCP PR en 1978. Este mismo año surgió VR Proletario Comunista.<sup>834</sup> El PAP actuaba bajo la denominación de Alianza Revolucionaria Estudiantil (ARE).

Los partidos buscaban dos objetivos centrales en la Universidad: ganar influencia en contingentes juveniles universitarios controlando los gremios universitarios (federaciones, centros federados, tercios estudiantiles) y tamizar militantes, pues militar en «[...] una organización política [...] era algo así como el ciclo de preparación y capacitación y, luego de ello, pasar a una responsabilidad mayor» (Manolo, profesor de Antropología).

De este período, destacan hechos que luego redundaron directamente en el crecimiento del PCP-SL. Al final de la década, el intenso debate sobre la participación electoral de la izquierda devino en rompimientos

<sup>833</sup> Como es conocido, estos partidos se diferenciaban por la posición asumida frente al gobierno militar entonces vigente —el PCP Unidad lo consideraba revolucionario, mientras que los restantes, contrarrevolucionario y fascista o «fascizante»—, por la caracterización que hacían de la sociedad peruana —capitalista el PCP Unidad y VR; semifeudal el PCP Patria Roja y el PCP Bandera Roja—, por la apreciación que se tenía de la relación del Perú con los países desarrollados —semicolonial el PCP Unidad, VR y el PCP Bandera Roja, o neocolonial el PCP Patria Roja—, por la opción elegida en el conflicto existente del bloque socialista —el que se alineaba con la Unión Soviética era el PCP Unidad; los defensores de la República Popular China eran el PCP Patria Roja y el PCP Bandera Roja; y los que no se alineaban con ninguno, como VR—, y, finalmente, por la orientación ideológica adoptada —marxismo leninismo por el PCP Unidad y VR; marxismo, leninismo, maoísmo por el PCP Patria Roja y el PCP Bandera Roja—. Como se nota, el elemento en común constituía el marxismo leninismo, asumido con estilos particulares por cada uno.

<sup>834</sup> El PCP Pukallacta y VR Proletario Comunista fueron los primeros síntomas de la radicalización «campesinista» que venían experimentando algunos sectores estudiantiles; muchos de estos militantes posteriormente engrosaron las filas del PCP-SL.

internos que debilitaron la presencia de estos partidos que influían en la federación de estudiantes y en la mayoría de centros federados, y luego de su ruptura no volvieron a recuperar esos espacios, mientras que las facciones disidentes radicalizadas y dogmáticamente maoístas, opuestas a la participación electoral, terminaron integrándose al PCP-SL.

De otro lado, el PCP Bandera Roja, desde 1975-1976 empezó a controlar el comedor universitario, experiencia que luego heredó el PCP-SL.

[...] fue creciendo a través del comedor, nosotros logramos tener células del partido en cada una de las facultades [...] porque al comedor van de todas las facultades; en segundo lugar [...] son la gente más pobre, en tercer lugar, con los estudiantes del comedor los sábados y domingos era un encuentro de solidaridad [...] los alumnos por grupos de amistades se organizaban [...] trascendía las aulas [...] el comedor era de lunes a viernes y, sábado y domingo, ¿dónde se comía? Entonces se hacía una especie de ollas comunes informales [...] Entonces ahí encontrabas [...] amigos de antropología, sociología, eléctrica, mecánica, y obviamente ese escenario era importantísimo para el mensaje político [...] nosotros como partido le poníamos esa idea, los chicos venían sanos para reunirse y ayudarse, nosotros [...] realizábamos labor política y se identificaba cuadros [...] en las elecciones casi todos los candidatos que presentamos para los centros federados eran del comedor y con decisión ¿no? Gente pobre, decidida a luchar, a cambiar. (Gabriel, ex alumno de Ingeniería Química)

#### 21.1.3. El gobierno militar y las universidades públicas

Otro elemento que marcó la naturaleza del movimiento estudiantil en este período fue el contradictorio intento modernizador de las universidades por el gobierno militar,<sup>835</sup> que buscó despolitizar a los estudiantes quitándoles el derecho de participar en el cogobierno de la universidad y crea una estructura administrativa vertical con los departamentos académicos. No obstante, a la vez, levantó el veto existente para la literatura marxista. Por consiguiente, las universidades se vieron inundadas por manuales y tratados marxistas de toda índole. El resultado fue un movimiento estudiantil altamente politizado y radicalizado en su enfrentamiento con lo que consideraba la dictadura militar.

Por otro lado, la conducción de la UNCP estaba a cargo de una comisión de gobierno encabezada por tres personas muy desprestigiadas debido a la corrupción que habían generado en la institución: Renán Ruiz, Jesús Véliz y Carlos Carvo.

El movimiento estudiantil emergió con fuerza en contra de esta comisión, realizando en 1980 una toma del local central de la Universidad que duraría algo más de dos meses: «ahí se formó un movimiento estudiantil por querer que eso cambie y que su punto culminante fue el ochenta, en el cual tomamos el local central [...] y que trajo como consecuencia un proceso de reorganización de la Universidad» (Gabriel, ex alumno de Antropología).

El éxito del movimiento estimuló la redefinición de fuerzas entre los docentes, porque, hasta entonces, la gran mayoría de ellos se alineaba detrás de las autoridades consideradas corruptas y empezó a perfilarse un movimiento llamado Renovación, que buscaba reorientar los destinos de la Universidad: «Entonces, organizamos un movimiento en contra de esa comisión de gobierno, empezamos a pelear [...] al final, ganamos, el CONUP en esa época mandó una resolución de cambio de autoridades, se eligió un rector encargado, entonces empezamos a trabajar más tranquilos» (Alicia, profesora de Pedagogía).

#### 21.1.4. Planes de estudios y contenidos curriculares

En los planes de estudios de los años setenta, especialmente en Ciencias Sociales, se constata una orientación fundamentalmente marxista: «creo que era muy coherente con el escenario [...] la presencia de asignaturas de Filosofía, de Historia, etc., todas ellas con un contenido materialista, de cambio, crítica, ésa era la característica, se buscaba formar un profesional crítico, revolucionario [...]» (Efraín, profesor de Economía).

Los planes se caracterizaban por su simplicidad y muchas veces constituían meros listados de asignaturas con breves descripciones:

---

<sup>835</sup> Degregori, Carlos Iván. «La revolución de los manuales. La expansión de marxismo leninismo en las ciencias sociales y la génesis del PCP-SL». *Revista Peruana de Ciencias Sociales*, vol. 2, n.º 3, septiembre-noviembre, 1990.

[...] en el caso de Economía, era un simple listado de cursos [...] cerca del 80% o 70% tenía un sesgo político, en el plan de estudios del 70, 76; el 85 inclusive se refuerza ese sesgo [...] que no tenía razón de ser porque [el marxismo] es una escuela económica, pero no es la única y la Universidad debe tener una diversidad de escuelas para que el profesional salga formado multidisciplinariamente y no sesgado a un solo lado. (Jesús, decano de Economía)

Algunos profesores consideraban que fue un marxismo mal asimilado y peor dictado en las aulas:

Se hacen marxistas de última hora muchos profesores. Y el marxismo [...] en vez de ayudar a la creatividad [...] más bien, la aplana, la anula, porque los contenidos curriculares [...] se basaban más bien en el marxismo más simplón [...] en uno como el de Marta Harnecker, o el que hacían algunos estudiosos soviéticos, con el materialismo dialéctico, histórico [...] el problema estaba resuelto y no había nada más que hacer, tan sólo incorporar algunas frases, algunas verdades o semiverdades y ya [...] eso hacia que la formación universitaria, sobre todo en el área de Ciencias Sociales, carezca de profundidad o de creatividad para poder resolver o tratar de analizar los problemas sociales [...] la tendencia general es al análisis macro o estructural; la vida cotidiana, los problemas personales, aparentemente menos gravitantes, eran dejados de lado. (Lucas)

## 21.2. EL PCP-SL EN LA UNIVERSIDAD

Para el PCP-SL, la UNCP fue un espacio importante desde los inicios de su «guerra popular». Si bien en los primeros momentos realizó un trabajo silencioso y soterrado de proselitismo y para captar militantes entre cientos de jóvenes, muchos de ellos provenientes de sectores rurales y urbanos marginales, tributarios de la secular pobreza de la sierra peruana, ávidos de salidas inmediatas a sus limitaciones personales y familiares, víctimas de un proceso educativo mediocre, de un ambiente de estrechez material e inopia intelectual deprimente; estos jóvenes, en el paisaje social de donde provenían, poseían mayor preparación. Y el PCP-SL buscaba estas calificaciones para luego enviarlos a desarrollar trabajo político fuera de la Universidad. Este hecho no pasó desapercibido para las fuerzas del orden, por lo que consideraron a la Universidad como foco subversivo.

Además, el PCP-SL percibió a la Universidad como una fuente de recursos. En ese sentido, tuvo un papel clave el comedor universitario. Es probable que el comedor haya cobijado a muchos militantes que no eran estudiantes, a los que alimentaba cotidianamente.

### 21.2.1. Antecedentes

Un primer indicio de la presencia del PCP-SL en la Universidad fue la llegada del antropólogo Osmán Morote Barrionuevo, quien venía de participar, conjuntamente con Luis Kawata Makabe, en la II Reunión Nacional de Organismos Generados, donde se trató la cuestión de la construcción partidaria del PCP-SL en marzo de 1977. Contratado como profesor auxiliar entre el 1 de mayo de 1977 y el 28 de febrero de 1978 por el Programa de Ciencias Sociales, Departamento Académico de Antropología, dictó cursos como Introducción a las Ciencias Sociales, Historia de las Ideas Políticas y Antropología General:

[...] era un personaje más o menos serio, pero que mantenía una postura un poco aislada o de distanciamiento con otros profesores. (Lucas, profesor de Sociología)

Mencionan que causaba muy buena impresión, como una persona lúcida, muy clara, y se le notaba con mucho bagaje intelectual, académico. O sea, no era aquella persona que entraba y de lleno te daba un discurso político. (Manolo, profesor de Antropología)

Otro dirigente del PCP-SL que llegó fue Luis Kawata Makabe, quien no fue contratado por la UNCP pero se dedicaba a dictar conferencias en ella. Kawata Makabe fue expulsado del PCP-SL a mediados de 1979.

Morote dejó la ciudad de Huancayo en 1978, mientras que Kawata se quedó dictando clases en una academia preuniversitaria: «Acá en Huancayo, el 88 o el 89, el PCP-SL hizo la academia Euclides; por eso es que ahí vino a dictar Luis Kawata los cursos de materialismo dialéctico, materialismo histórico y dialéctica de la naturaleza [...] Euclides tiene cierta cercanía con el PCP-SL porque era regentado por un ex alumno de la UNI» (Gabriel, ex alumno de Ingeniería Química).

Otro fenómeno que abonó para el posterior desarrollo del PCP-SL en la Universidad fueron las derivaciones del PCP Patria Roja y VR, PCP Pukallacta y VR Proletario Comunista, BR CP, que consideraban llegado el

momento de iniciar la insurrección del campo a la ciudad, y muchos de cuyos militantes terminaron enrolándose en el PCP-SL.

### 21.2.2. Los inicios (1980-1986)

*Feliciano*, mando político del Comité Regional del Centro del PCP-SL entre 1981 y 1985, escribió una carta a Abimael Guzmán el 3 de diciembre de 1981, donde se nota la organización primigenia en la Universidad: «En cuanto a la Universidad del Centro de Huancayo, informaba que se había formado un destacamento con varios estudiantes de dicho centro superior de estudios» (Jiménez Baca). Lentamente se fue formando la primera hornada de militantes del PCP-SL especialmente en la facultad de Pedagogía, quienes a mediados de la década salieron de la Universidad para actuar en diferentes frentes, el magisterio principalmente. Los militantes del PCP-SL, se limitaban al proselitismo individual, a actuar en el interior de los gremios estudiantiles para captar simpatizantes y difundir sus propuestas de manera bastante reservada. Su presencia y predica se notaban débiles y esporádicas, sin embargo, ya causaba ciertas confusiones: «al inicio, todo el mundo lo ha confundido como un grupo más. Porque había tantos grupos de izquierda, de derecha que, en el fondo, todo el mundo aceptaba [...] que pueda haber otros. Y ninguno, bueno, asoció eso a la idea de que, realmente estaba [por la vía de la lucha armada]. Algunos probablemente aceptaban, inclusive, esa propuesta» (Jesús, decano de Economía).

Ésta fue la etapa en la que sectores radicalizados y con fuertes sesgos campesinistas de organizaciones como PLP, VR Proletario Comunista y BR CP fueron incorporándose paulatinamente al proyecto del PCP-SL. El primer salto cuantitativo que dio el PCP-SL lo hizo:

[...] a costa de aglutinar a la gente que ya existía en la Universidad, de influir, en todo caso, a estos grupos que existían, no había una construcción propia, entiendo, acá adentro, sino que mucha gente en ese momento tal vez optó por nuclearse [sic], simpatizar con la predica de [esta organización] que luego se fue desarrollando a tal punto que cuando yo ya dejó de trabajar en la Universidad [1988] su presencia ya es muy fuerte acá. (Efraín, profesor de Economía)

Pese a que Ayacucho y Huancavelica estaban en abierto conflicto, en Huancayo no se mostraban muy radicales. *Manolo*, regidor provincial por IU a la sazón, recuerda las advertencias que recibía de jóvenes recién egresados de la Universidad: «[...] tuve la visita de algunos ex compañeros el año 81, 82 y me dijeron: "Nosotros te apreciamos a ti, pero quisiéramos que no sigas en estas salsas, que dentro de poco revientan cosas y el centro va a ser el aparato del Estado y éste es el aparato del Estado, ¿no?, entonces, te anticipamos que las cosas van a ser más difíciles"» (*Manolo*, profesor de Antropología).

Hacia 1984 llegó a Huancayo Herminio Parra, quien se presentaba como integrante de un taller de investigaciones dirigido por Pablo Macera y cuya labor consistía en desarrollar conferencias dentro de la Universidad y fuera de ella, además de reuniones de círculos reducidos en viviendas particulares; su mensaje era radical y nítidamente orientado a generar simpatías por el PCP-SL. Fue asesinado en octubre de 1988.

En este quinquenio, el PCP-SL desarrolló acciones intermitentemente en la ciudad de Huancayo y sus alrededores: pintas, amenazas a autoridades, ingresos para agitación en colegios, toma de emisoras de radio, atentados a locales públicos y de importantes empresas, ataques a policías para robarles sus armas y frecuentes derribamientos de torres de alta tensión.

El 20 de enero de 1983, cuatro hombres y una mujer del PCP-SL tomaron el comedor de la Universidad, distribuyeron folletos sobre la guerra de guerrillas y solicitaron apoyo económico. Horas después, miembros de la la GR y de la PIP entraron a la ciudad universitaria. El 25 de abril de 1984, mientras los estudiantes realizaban una masiva marcha de protesta por el alza de pasajes, la Policía incursionó nuevamente en la Universidad y mató al estudiante Isaías Bravo Flores, de Agronomía. El 4 de junio de 1984, mientras se realizaban las elecciones estudiantiles, el acto fue boicoteado por el FER Pukallacta, organización que se enfrentó con el FURE en una batalla campal en la cual salieron a relucir armas de fuego. Varios estudiantes resultaron heridos. En julio de 1984, el PCP-SL asesinó al alcalde provincial Saúl Muñoz. El 27 de mayo de 1985 fue izada una bandera roja en lo alto de la biblioteca, donde permaneció varios días; el 8 de noviembre de 1985 el campus universitario amaneció con banderas del PCP-SL cuando se iban a realizar elecciones estudiantiles.

Cabe recordar que los estudiantes tenían mucho peso en las decisiones que se tomaban en las facultades y la Universidad en general, gracias a la restitución de los tercios estudiantiles y el reconocimiento al derecho de tacha: «Encuentro a los estudiantes con mucha autoridad para decidir quién ingresaba a la Universidad y quién no [...] Los profesores habían perdido la autoridad frente a los estudiantes, tanto la autoridad académica y la autoridad personal» (Jorge, profesor de Pedagogía).

La izquierda recibía advertencias sobre el peligro representado por el PCP-SL:

[...] la gente de Ayacucho nos alertaba, nos decían «Compañeros, la gente de la izquierda tenemos que consolidarnos, tenemos que trabajar bajo otros métodos, bajo otros criterios para que el PCP-SL no llegue. Porque si llega, se jodieron». Entonces, aquí en la región Central no había un nivel de conciencia respecto al PCP-SL en la misma gente de la izquierda. (*Manolo*, profesor de Antropología)

### 21.2.3. Consolidación (1987-1989)

La presencia del PCP-SL se fue haciendo notoria y, en 1986, aparecieron las primeras pintas rojas referidas a la «guerra popular» y al presidente *Gonzalo*:

[...] pero ya por el año 86 fue donde se notó la presencia, por lo menos a nivel de propaganda, de publicidad, del activismo, de organizaciones como MRTA o el PCP-SL, ya empezó a aparecer aquí en la Universidad. (Efraín, profesor de Economía)

[...] los mismos alumnos empezaban a manifestar que en las noches [...] encontraban ciertos grupos de personas que no eran de las características de la Universidad [...] era muy evidente que había la presencia de ciertas personas que no eran parte del sector de estudiantes, ni de los profesores, eran personas más bien extrañas. (Ana, profesora de Trabajo Social)

Los dirigentes estudiantiles eran amedrentados, como sucedió en la Facultad de Sociología cuando estudiantes del PCP-SL tacharon a una profesora, militante de Izquierda Unida (IU), dirigenta del sindicato de docentes y opositora al PCP-SL; los estudiantes debían firmar obligatoriamente el memorial pidiendo su salida de la Universidad, pero un grupo de estudiantes de IU se opuso:

Les dijeron «por qué vamos a tachar a la profesora, a nosotros nos parece que está bien» [replicando los otros] «pero es una incapaz, una inepta, y además friega el trabajo del partido» [...] «A nosotros no nos interesa que friegue el trabajo de su partido, y no vamos a firmar». Y a los seis los han encerrado en el salón [...] y [...] pintado de amarillo [...] Pero a la mayoría los sometían, la mayoría tenía mucho miedo, había mucho pánico. La gente no quería exponerse. (*Iskra*, profesora de Sociología)

Contribuía también al caos que vivía la Universidad la suspensión de clases por diversos motivos: paros y huelgas de docentes y trabajadores, movilizaciones de estudiantes, fiestas de cachimbos o de promoción, festivales y bailes folclóricos (cortamontes o yunzas). En este contexto, el PCP-SL encontró motivos adecuados para actuar:

[...] de un momento a otro desapareció, [los juegos de dados] qué había pasado, que estos grupos armados los habían cogido [...] cortado el pelo y les habían quitado todo el dinero que en ese momento había estado jugándose y les dijeron que, si los volvían a sorprender, los castigarían más drásticamente [...] después se eliminaron los cortamontes [...] con la presencia de estos grupos [armados] se eliminó toda esta cuestión, en ese sentido, fue bastante positivo. (*Óscar*, ex alumno, miembro del grupo de teatro Movimientos)

La conducta de los profesores también estuvo en cuestión: «desapareció, y fue muy positivo dentro de la Universidad, el chantaje sexual de los profesores, desapareció el cobro para aprobar a un alumno, había cierto temor, cierto respeto porque estos grupos en las incursiones señalaban que estas acciones negativas no tenían por qué estar sucediendo y que los castigarían» (*Ibidem*).

Se constata la misma modalidad de legitimación que el PCP-SL desarrolló en diferentes espacios sociales, urbanos o rurales: el castigo a quienes tuvieran conductas inmorales.

Comenzó así el espejismo que luego se trocaría en pesadilla. Las acciones iniciales le granjearían la simpatía de sectores estudiantiles; pues, junto con un intenso trabajo de proselitismo en círculos de estudios, estas acciones usaban como principal argumento que ellos impulsaban «luchas estudiantiles por sacar a profesores ineptos, corruptos, inmorales, chantajistas sexuales, traficantes y vendedores de notas» (*Percy*).

### *21.2.3.1. Militantes*

Un primer rasgo destacado era el origen rural o urbano marginal de los militantes del PCP-SL. Muchos de ellos vivían solos en la ciudad, lo cual representaba ventajas para el partido: estaban fuera del control de sus padres; sus habitaciones podían convertirse en almacén, lugar de reunión o reposo para los militantes, etc.

Otro elemento común de estos militantes de origen rural era la pobreza: «Eran chicos así un poco que no tienen nivel cultural, venían de casas humildes [...] Generalmente, los padres eran gente de campo [...] y ellos venían solamente para estudiar a la ciudad [...] eran de escasos recursos, eran pensionados, aparte de eso, ellos tenían que vérselas de mil formas para subsistir, recurrían al comedor para comer» (Judith, ex alumna de Antropología).

Otro aspecto importante era la preparación militar. Un estudiante que participó en el comedor universitario recuerda que «nos dijeron que primero había que hacer trabajo de base [...] poner banderas, pintas; luego otro paso ya era hacer trabajo de contención, de campana, era un poco más estratégico, de mayor responsabilidad [...] y así, poco a poco, te daban mayor responsabilidad; después [...] ya entrabas a hacer trabajo de campo, lo que llamaban ellos acciones, dinamitar, matar [...]» (Héctor Paul, ex alumno de Pedagogía).

La siguiente fase era la integración a una célula propiamente militar, para lo cual había que eliminar cualquier sensibilidad del militante frente a la muerte: «Un chico me contaba que tenían que prepararse matando perros, primero pequeños, después más grandes, diversas formas de matarlos, entonces se endurecían y, cuando estaban ya endurecidos y preparados, listos, entonces entraban ya a formar parte de los equipos» (Alicia, profesora de Pedagogía).

### *21.2.3.2. El comedor universitario*

Al igual que en otras universidades, un elemento clave para entender el crecimiento del PCP-SL en la UNCP fue el comedor universitario, al cual llegaban los estudiantes de familias pobres que, generalmente, vivían solos en la ciudad; para ellos, el comedor constituía una condición necesaria para su permanencia en la Universidad. El comensal, por estas circunstancias, desarrollaba sentimientos de gratitud hacia el partido.

El comedor atendía de lunes a viernes un número considerable de estudiantes: «Mil doscientos estudiantes [...] en el almuerzo y en el desayuno habría pues un promedio de seiscientos a quinientos estudiantes, de igual manera en la cena».

Durante los años de predominio del PCP-SL (1988-1993), gozar del beneficio del comedor suponía pasar por su criba política, con mayor razón para integrar el Comité de Lucha de Comensales (CLC). El control que ejercía el CLC no era solamente político.

Considerando este control absoluto del comedor, no es exagerado suponer que el PCP-SL se sirvió de éste para facilitar alimentación a sus cuadros y militantes que no eran estudiantes de la Universidad.

Los mismos militantes reconocen el papel jugado por esta instancia: «en el comedor generalmente se hacían las charlas, se agrupaba gente del partido [...] Allí [...] era el cuartel del partido. Allí era donde se organizaba toda la gente y salían ya a las facultades» (Pablo, simpatizante del PCP-SL, preso). Se puede afirmar que toda acción desarrollada en la Universidad se planificaba y realizaba a partir del comedor: «ahí se gestaba todo [...] las protestas universitarias [...] una movilización, los dirigentes organizaban, nos retenían [...] a la hora del almuerzo [...] y ahí ellos se manifestaban, hacían escuchar su ideología y abiertamente hacían vivas por el PCP-SL, por el presidente Gonzalo, por la lucha armada [...] y de ahí nos sacaban a bloquear las pistas [...]» (Héctor Paúl, ex alumno de Pedagogía).

El comedor era visto por la comunidad universitaria con mucha desconfianza y temor, pues corrían rumores de que en él sucedían cosas siniestras, especialmente en las noches. Un empleado cuenta que los trabajadores del comedor le decían que escuchaban «[...] gritos, hay lamentos, seguramente castigaban, torturaban a alguien» (Juan, trabajador de comedor universitario). De allí salían grupos para realizar acciones:

[...] del comedor salían los terroristas, los encapuchados [¿Y ellos detenían a algún estudiante a la fuerza?] Sí, a la fuerza se los llevaban y los ponían debajo del tanque cisterna y allí los golpeaban, llamábamos a la Policía, que les estaban pegando, que los están matando y no venían, cómo gritaba el chico, de susto no más nos íbamos nosotros

y al día siguiente el cadáver botado [...] Otro estudiante se agarró de la malla que estaba al frente y gritaba; «¡auxilio, sálvenme, me van a matar!» Pero ellos con sus armas, encapuchados se lo llevaron y al día siguiente muerto. (Ibídem)

Por todo ello, cuando las fuerzas del orden ingresaban a la Universidad, centraban su atención en este espacio.

#### *21.2.3.3. Docentes*

Crucial para entender el crecimiento del PCP-SL fue el papel jugado por los docentes en este proceso. Analizando sus conductas, se identifican tres actitudes: una de oposición activa, que caracterizó a un reducido grupo de docentes y que, rápidamente, fue neutralizada por el PCP-SL. Cuando los dirigentes del sindicato plantearon la necesidad de un frente de defensa, surgieron amenazas directas: «En primer lugar, con el presidente de la asociación, socióloga Dora Gómez, entonces ella renunció, íbamos quedando vicepresidente [...] optó por salir del país [...] Gustavo Gómez y, bueno, el resto ya optó por renunciar, hicimos todos una renuncia pública con una especie de informe y balance a los docentes» (Felipe, profesor de Zootecnia).

La segunda actitud fue de indiferencia o neutralidad, imperantes en el ánimo de la mayoría de docentes, quienes dejaron hacer y pasar y llegaron incluso a ensayar justificaciones como que «no se podía ir en contra del carro de la historia»; evidentemente, detrás de ello se agazapaba el temor que el PCP-SL había logrado instalar en la institución: «El temor nos había vencido, el temor era generalizado» (Tomás). La preocupación, en esos momentos, era preservar el puesto de trabajo y, también, la vida.

La tercera actitud fue la adhesión de un grupo nada despreciable de docentes que se comprometieron, directa o indirectamente, con el proyecto del PCP-SL.

No hay que olvidar que si los integrantes del PCP-SL querían expulsar a un docente incómodo, lo hacían sin remordimientos; visto desde otro ángulo, se podría tomar como «una falta de fortaleza intelectual, incluso, en algunos casos, una falta de honestidad intelectual» (Efraín). Lo cierto es que a muchos docentes no les importó arrimarse a esta fuerza, incluidas las autoridades:

Decanos, nosotros tuvimos uno en la facultad [...] no tenía nada que ver con el PCP-SL, pero se aliaron ¿no? [...] no por principios, sino por supervivencia [sic] [...] Por conveniencia mutua, no querían que los tocaran como autoridades. Entonces, miraban, dejaban, daban facilidades y se hacían los locos. [...] Unos que no tenían nada que ver con la ideología, pero que se acomodaron muy bien, ¿no? por preservar sus puestos. (Iskra, profesora de Sociología)

Otros docentes sí se adhirieron porque coincidían ideológicamente con el PCP-SL: «[...] habían profesores que simpatizaban mucho con el PCP-SL, porque eran selectivos. Entonces, uno sabía a qué atenerse, es decir, si el PCP-SL entraba y uno sabía que era honesto, no tenía problemas [...] se sentía relativamente seguro, en cambio, los que eran deshonestos, corruptos, entonces estaban temblando porque podía llegarles el juzgamiento» (Alicia, profesora de Pedagogía).

Todo esto permitía al PCP-SL desarrollar convocatorias que encontraban eco: «Iban profesores, por lo menos a la reunión que yo fui, había una buena cantidad [...] habría unos treinta profesores»:

Habían algunos docentes que sí ya realmente empezaron a mostrar ese nivel de simpatía y se veía que ya ellos tenían pues unas reuniones casi permanentes [...] No era una buena cantidad, pero era suficiente como para poder convencer a las masas estudiantiles. (Felipe, profesor de Zootecnia)

[...] En una ocasión, me invitaron a una reunión [...] Al principio se presentaron como que no eran, o sea, era un grupo de profesores intelectuales que querían luchar por la moralización y el mayor desarrollo académico [...] los que se presentaron empezaron a dar una serie de consignas que yo identifiqué, porque los había escuchado hablar a mis alumnos y algunos colegas [...] En esas reuniones captaban profesores [...] de toda la Universidad. (Alicia, profesora de Pedagogía)

#### *21.2.3.4. Amenazas e incursiones del PCP-SL*

Luego de generar simpatías por sus actos de moralización, el PCP-SL pasó a una siguiente etapa de imposición de sus intereses al conjunto de la Universidad valiéndose de amenazas y amedrentamientos: «Se planteó un nuevo plan y ahí vinieron los famosos volantes [...] hasta incendiaron mi departamento, mi escritorio, todo

[...] y apareció un cartelón amenazando que si no me iba, me mataban. Sin embargo, yo me quedé en la facultad porque yo pensaba que no estaba haciendo nada malo, nada fuera de lo que era favorable para la carrera» (Jesús, decano de Economía).

Otro ejemplo fue la denuncia presentada en sesión del Consejo Universitario, el 9 de febrero de 1989, por el decano de Química, profesor Romero: «[...] hay estudiantes de esta Universidad que están asumiendo posiciones matonescas [sic] y de intimidación mediante agresiones verbales en unos casos, físicas en otros [...] han dejado de asistir muchos alumnos por la intimidación antedicha». Era el año 1989 y el PCP-SL presionaba en los concursos de cátedra para imponer personas allegadas, golpeando, amenazando y pintando a los pocos dirigentes estudiantiles que se resistían o, cortando el cabello a los que ellos consideraban inmorales.

Otra práctica común del PCP-SL fueron las incursiones en los salones cuando se desarrollaban las clases, en los paraninfos durante actividades que reunían gran número de estudiantes o docentes, incursiones para sacar a los estudiantes de las aulas y concentrarlos en el campo deportivo y, aunque parezca paradójico, incursiones en el comedor universitario. Era habitual que, en cualquier momento, interrumpieran las clases para arrengar a los estudiantes y pintar los salones.

#### *21.2.3.5. Los crímenes*

El PCP-SL empezó a combatir cualquier cuestionamiento u oposición, sea del MRTA o de algunos militantes aislados de partidos legales o de la Policía que hacía labores de inteligencia. En 1989, se inició una secuela de crímenes del PCP-SL. El 12 de marzo, «de dos tiros en la cabeza y luego degollado salvajemente fue asesinado un joven efectivo de la Policía Nacional en el interior de la ciudad universitaria; el hecho sucedió en horas de la tarde»; se trataba del cabo PNP Néstor Landeo Lozano. El 27 de abril por la tarde, capturaron dentro de la Universidad a los estudiantes Héctor Pérez Morales, Alcides Velásquez Castellares y Juan Víctor Rivera, de las facultades de Zootecnia los dos primeros y de Economía el tercero. Al día siguiente, fueron hallados muertos con huellas de tortura; eran militantes del PAP. Sobre sus cadáveres colocaron un cartel que decía: «¡Así mueren los miserables del Rodrigo Franco! ¡Viva el PCP! ¡Viva el EGP!».

Jorge Munguía Crisóstomo, dirigente de la JCP e integrante de la federación de estudiantes, activo opositor del PCP-SL, en la sesión del 28 de febrero del Consejo Universitario, denunció que fue agredido y amenazado de muerte por gente del PCP-SL. En sesión del 2 de marzo, Jorge Munguía pidió a Jorge Huarocc, conocido estudiante del PCP-SL, «que deje de estar amedrentando a los estudiantes a través de quienes conforman los comensales» (Acta de sesión del CU, 2 de marzo de 1989). El 25 de mayo, cuando viajaba a Satipo, Jorge Munguía fue asesinado por una columna del PCP-SL que lo bajó del carro. El Consejo Universitario en ningún momento trató el tema ni se pronunció.

El 18 de julio fue atacado el profesor de la Facultad de Pedagogía Luis Aguilar Romaní, simpatizante del MRTA, por tres elementos que lo ubicaron en la oficina del decano Jaime Cerrón Palomino, testigo directo. Le dispararon varios tiros y lo dejaron agonizante; días después falleció. En sesión del Consejo Universitario del 21 de julio se trató sobre este crimen. Todos se mostraron compungidos y se refirieron al hecho como un accidente; las preocupaciones se centraron en la forma de ayuda económica a los familiares de la víctima (aportes, descuentos, seguro social, etc.). Nadie señaló la naturaleza política del hecho; tampoco la necesidad de investigarlo.

Al indagar sobre las razones de estas muertes, se encontró entre los militantes del PCP-SL explicaciones que pretenden justificarlas:

[...] había que comprender las razones de por qué había muerto [...] pienso de que si alguien lo reivindicaba y decía las razones tú podías hacer una evaluación y decir, bueno pues, desde tu punto de vista [...] estuvo bien o estuvo mal; pero si vemos el aspecto estrictamente humano, yo pienso que quitar la vida [...] es doloroso. [Doloroso, ¿pero hasta qué punto había justificación para quitar la vida a las personas?] Pienso que sí debe haber habido, porque no creo que se haya tratado de dementes, de locos o de simples excesos, yo pienso que ha habido justificación y habría que investigar más bien las causales, el porqué murió fulano, zutano, perencejo o qué es lo que hizo para merecer semejante cosa. (Percy, militante del PCP-SL, preso)

Es decir, existían razones para matar al oponente y no eran «meros excesos». Éste es el razonamiento que se impuso en la Universidad.

#### 21.2.4. Control de la Universidad (1990-1992)

Entonces me dijo «usted no sabe —me recuerdo mucho sus palabras— que esta universidad es territorio liberado». Yo me quedé con la boca abierta [...] «Esta Universidad, para que sepa usted, profesora, es territorio liberado. Acá está el partido, acá está la revolución. (Iskra, profesora de Pedagogía)

Tres años duró el dominio del PCP-SL en la UNCP, en muchos casos con la complicidad de autoridades y docentes, y contra los deseos de amplios sectores pasmados por el terror: «Los alumnos hacían y deshacían dentro de la Universidad. Dictaban qué nota debía ser, qué profesores debían ascender, qué profesores debían ser autoridades, en fin, quiénes debían ingresar. Entonces se desató, pues, el oportunismo más descarado» (Lucas, profesor de Sociología).

En 1989, los estudiantes presionaron para cambiar el reglamento de elecciones a gremios estudiantiles y lograron que en sesión del Consejo Universitario del 20 de diciembre se aprobara la modificación sin mayores resistencias.

En marzo de 1990, se convocó a elecciones con los cambios que erradicaban la elección universal y secreta y consagraban la elección directa en cada salón e indirecta entre los delegados así designados; los representantes al tercio estudiantil, los centros federados y la federación eran elegidos por y entre los delegados de salones, mecanismo que se ajustaba perfectamente a los estilos de trabajo del PCP-SL. El 23 de abril se incorporaron al Consejo Universitario once representantes estudiantiles, entre los cuales se encontraban a Alcides Ccopa Taipe, Eliseo Alberto Romero, Francisco Fernández, Jhon Raymundo y otros notorios dirigentes del PCP-SL.

Mientras la gran mayoría de estudiantes establecía distancias con estos dirigentes, una profesora que los observaba con atención llegó a la siguiente conclusión:

No considero de que hubo un apoyo de masas en la UNCP [...] No hubo un apoyo [...] consciente, militante de la gente, ¿no? pero sí el éxito de ellos es que armaron una buena estructura partidaria, lograron hacer un buen aparato [...] con sus estructuras bien definidas, su militancia, su mística, su vehemencia, su consecuencia en las tontorriás que planteaban [...] con una metodología de terror salió todo aparentemente muy bien. Entonces, eso fue el éxito de Sendero [el PCP-SL] en realidad. (Iskra, profesora de Pedagogía)

Aquí radica la razón por la cual muchos simpatizantes, sin pertenecer al aparato partidario del PCP-SL, fueron ejecutados o desaparecidos.

También se eligieron las nuevas autoridades universitarias en abril de 1990:

[...] en la asamblea universitaria que eligen a Vizcardo, el movimiento estudiantil estaba muy influido por este grupo. Los profesores, mucho oportunismo, dejar hacer, dejar pasar, cuadrarse, no hacer nada. Y se dan el lujo ellos de conversar quién iba a ser el rector, y ellos deciden que a quien mejor podían manipular y acercarse era a Vizcardo. Vizcardo nunca había sido senderista [del PCP-SL], pero dentro de todas las posibilidades era el hueso menos duro de roer [...] y ponen como vicerrector académico a Cerrón [Palomino]. Ése fue el momento, el pico más alto que tuvo el PCP-SL. (Iskra, profesora de Pedagogía)

Es opinión generalizada que el PCP-SL decidía la elección de autoridades y se notaba una especie de transacción entre estudiantes, profesores y autoridades, donde cada estamento obtenía alguna ventaja.

Abrial de 1990 marcó el inicio de la influencia casi total del PCP-SL en la Universidad, gracias a la elección de autoridades y del tercio impuesto como representación estudiantil, reconocido oficialmente en el Consejo Universitario. Seguidamente, se trataba de remover todas las instancias de la institución; para ello, optaron por señalar que ninguna se libraba de la corrupción. Por lo tanto, había que investigar cada dependencia y se propuso la formación de comisiones investigadoras. Cuatro trabajadores de la unidad de transporte fueron sacados en burros, pintaron de amarillo al secretario general del sindicato y a varios trabajadores. En sesión de Consejo Universitario del 17 de mayo de 1990, el alumno Eliseo Alberto dijo: «hay desgobierno en la Universidad, el presupuesto se va por un forado gracias a la mala administración [...] No vamos a dar garantías a nadie porque no nos corresponde hacerlo, el movimiento estudiantil ha reaccionado contra los malos empleados» (Actas de sesión del Consejo Universitario, 17 de mayo de 1990). De igual manera, se pronunció el alumno Alcides Ccopa: «Las versiones de los trabajadores no reflejan la realidad [...] hablan de intervención del

gobierno a la Universidad y con eso le hacen el juego a la reacción [...] A los empleados los acusamos de inmorales [...] Nos han tratado de delincuentes, esa palabra la usa la reacción a todo aquel que dice la verdad».

Los representantes de los trabajadores se oponían tímidamente a esta arremetida; el sindicato convocó una asamblea y propusieron un paro de 72 horas, pero no encontró eco. Rodolfo Bernedo, también dirigente, dijo en ese momento: «Parece que las autoridades están maniatadas por los estudiantes que el día de ayer pintaron de amarillo al secretario general, se nos amenaza de muerte por teléfono y si estas cosas las dejamos pasar, se estarán dando funestos antecedentes y no permitiremos más vejaciones».

Las opiniones de los trabajadores no eran homogéneas; se escuchaban voces que contemporizaban con los estudiantes: «Reconoció que en la Universidad hay podredumbre, para evitar excesos sugiere que a las personas que se les juzgue se haga en el Consejo Universitario, no en los centros de producción y oficinas» (Ibidem).

Entre las autoridades se notaba una posición aquiescente, permisiva, sin voluntad firme para oponerse a esta arremetida:

[...] parece que se ha iniciado en la UNCP un proceso de moralización y eso está bien, debemos buscar canales de solución, pero no vamos a cortar cabezas por gusto, para eso hay reglamentos.

[...] desde que soy decano, en el Consejo Universitario he escuchado muchos discursos pero nada en concreto, debemos ser prácticos, opino que la moralización es justa y necesaria, ya no se puede tolerar tanto desorden [...] Los estudiantes ya no pueden seguir contemplando tanto desorden, por eso actúan así.

Es decir, se descubría que todo estaba mal en la Universidad y «en vista de que se ha tomado conciencia de los problemas de la Universidad» se acordó formar nueve comisiones investigadoras (de las oficinas de Personal, Economía, Bienestar Universitario, Obras, Transportes, Mantenimiento y servicios, Estación Experimental Agropecuaria, Planificación y Asuntos académicos), integradas por decanos y estudiantes, con un plazo de treinta días para entregar sus informes. Llama la atención que, en estas sesiones del Consejo Universitario, en ningún momento se trataron los crímenes que el PCP-SL venía cometiendo dentro y fuera de la Universidad contra estudiantes desde hacía un año.

Sin embargo, el aprovechamiento por el PCP-SL de los recursos de la Universidad continuaba, al igual que la gran influencia que ejercía para colocar profesores y trabajadores administrativos.

El control se tornaba asfixiante, incluso durante las calificaciones para contratar empleados: «participaba en los concursos [...] al extremo que entraban a la reunión de comisiones del concurso con armas, encañonaban al vicerrector, al secretario general del sindicato y decían “estas personas son las que tienen que ganar el concurso”, ya tenían, o sea, una lista» (Rodolfo).

Esta presencia empezó a ser frenada a mediados del año con el secuestro, el 8 de junio de 1990, y posterior ejecución arbitraria del vicerrector académico, Jaime Cerrón Palomino, y su chofer. Aunque no existen evidencias de que haya pertenecido al aparato del PCP-SL, la impresión de gran parte de la comunidad universitaria es que pertenecía o simpatizaba con él: «cuando lo asesinan a Cerrón [Palomino] se supone que lo asesinan porque fue puesto y respondía a los intereses del PCP-SL» (Efraín). En sesión del Consejo Universitario del 12 de junio de 1990 se informó sobre este hecho y sobre las acciones que las autoridades universitarias realizaban indagando por el paradero de los secuestrados; los estudiantes acusaron «a ciertos decanos de su indiferencia, también acusó al rector y al vicerrector administrativo por su insensibilidad» (Actas de sesión del Consejo Universitario, 12 de junio de 1990) y exigieron al Consejo Universitario que se pronunciara. Durante la sesión, el estudiante Alcides Ccopa dijo «que habían personas extrañas e invitó a que salgan de la sala de sesiones». Uno de los asesores legales señaló que «los estudiantes quizás tienen razón, el trato que recibimos de la Policía no es igual que otros años, porque se manifiestan muy duros con nosotros, hay mucha actividad de espionaje dentro y fuera de la Universidad y sería bueno que este tipo de sesiones sean reservadas».

La sesión terminó siendo secreta y en ella se acordó formar una comisión para dialogar con las autoridades políticas y militares, la publicación de un pronunciamiento y el otorgamiento de 10 millones de intis a la esposa del profesor Jaime Cerrón Palomino.

A este asesinato seguirían desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias de varios estudiantes: en junio, dos estudiantes y, entre septiembre y octubre, seis más, entre ellos Alcides Ccopa Taipe, Francisco Fer-

nández Gálvez y Dora Marín Aire, conocidos dirigentes del PCP-SL. Comenzaría con ello una secuela de ejecuciones y desapariciones de estudiantes por las fuerzas del orden.

Al año siguiente, el gobierno decidió tener un control más riguroso de las universidades, con intervenciones militares más constantes, pese a lo cual los estudiantes, en abierto desafío, quemaron, en noviembre de 1991, dos camionetas y gran cantidad de alimentos que el gobierno había enviado para la Universidad. A mediados de 1991, llegó a Huancayo Angélica Salas de la Cruz, nombrada responsable del comité subzonal del valle del Mantaro del PCP-SL, bajo cuyas órdenes trabajó un tal *Henry*, estudiante universitario. Angélica Salas fue capturada el 18 de agosto de 1993, en la casa de una profesora de la Facultad de Trabajo Social.<sup>836</sup>

### 21.3. EL MRTA

A inicios de la década de 1980 existían en la UNCP partidos pequeños con una estrategia de sesgo militarista, como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y sus diversas vertientes,<sup>837</sup> el Partido Socialista Revolucionario Marxista Leninista (PSR-ML) y el Partido Comunista Peruano Mayoría.<sup>838</sup> Éstos se desenvolvían cautelosamente y no formaron una organización específicamente estudiantil para actuar dentro de la Universidad. Consideraban que el Perú vivía una situación prerrevolucionaria y, por lo tanto, debía prepararse la insurrección armada. Otro pequeño grupo fue el Movimiento Revolucionario Socialista (MRS).

En la UNCP, algunos militantes del MIR y el PSR-ML empezaron a compartir preocupaciones bajo el genérico nombre de la ORGA. Bautista,<sup>839</sup> entonces joven estudiante de la Facultad de Pedagogía, relata: «Yo no sabía nada de esto, llego yo a la Universidad en el año 1980, más o menos entre los meses de julio, agosto y septiembre se está preparando una toma de local de la Universidad. Entonces, ahí conozco a alguien que venía, que ya estaba en esto, que no tenía el nombre del MRTA, sino que era la ORGA».

Recuérdese la toma del local central de la Universidad para expulsar a la «camarilla corrupta» que la gobernaba. En estas semanas, «al calor de la lucha», «conversamos y siento que hay un discurso mucho más orgánico, más doctrinario» (Ibidem).

Huancayo, el valle del Mantaro y su amplio *hinterland* fueron espacios considerados estratégicos por el MRTA, que continuó el trabajo del MIR-EM en la región del Centro, a partir de la ciudad de Huancayo, adonde llegaron Peter Cárdenas Schultz y Víctor Polay Campos:

[...] ellos llegan en los años 1977, 1978 –más o menos–, incluso Polay Campos vive acá casi un año o año y medio [...] Claro, desarrollando actividades políticas [...] Yo después lo conozco acá también a Peter Cárdenas [...] Entonces, ellos incluso vivían en una casa, ya estarían procesando probablemente la unidad. Luego estaba Pastor Anaya, que era un investigador, dirigente en Jicamarca y como dirigente lo habían mandado aquí y que vivía aquí, llegué a conocer incluso su casa. (Bautista)

En 1982, estos grupos emergentes organizaron el Frente Único Estudiantil (FUE), que reunió estudiantes del MIR-EM, PSR-ML, MRS, cuyas afinidades ideológicas se fueron perfilando. Mientras los partidos comunistas semilegales se iba debilitando y sufriendo procesos de escisión, el FUE adquirió fuerza en facultades como Economía, Pedagogía, Agronomía; al decir de ellos «la mejor gente que había en las facultades se acercaba [al FUE]. Y se acercaba por la actitud, la consecuencia, eran gente joven y encima el discurso. Un discurso nuevo, distinto que preludiaba no una guerra estrictamente campesinista» (Bautista).

Paulatinamente fueron ganando adeptos y, en 1983, «habían dos grupitos [...] un grupito en la provincia de Jauja que empezaba» (Bautista). José Porta Solano, activo militante, decidió ingresar a la Universidad en 1985 al regresar de la fallida experiencia del MRTA en el Cusco, para ganar militantes y, desde ella, proyectarse hacia la región: «Ya había gente en las provincias Concepción, Jauja, incluso en Pampas había gente ya des-

<sup>836</sup> Jiménez, Benedicto. ob. cit.

<sup>837</sup> El MIR de Luis de la Puente Uceda y Guillermo Lobatón sufrió sucesivas rupturas: MIR Voz Rebelde, MIR El Militante, MIR Yahuarina, MIR Centro, MIR El Rebelde, MIR 9 de Junio, etc. Todos ellos reivindicaban el legado y la vigencia de la insurgencia guerrillera de 1965 y el guevarismo. Compartían también su no adscripción a tendencias prosoviéticas, prochinanas o, finalmente, trotskistas.

<sup>838</sup> El PCP Mayoría fue una escisión del PCP Unidad, muy crítica por la conducta adoptada por el PC frente al gobierno militar en su segunda etapa; posteriormente, se comprometería en el surgimiento del MRTA.

<sup>839</sup> Bautista llegó a participar de la fundación del MRTA, formó parte de la Dirección Nacional y fue responsable político de la región del centro hasta 1990.

de acá. El grupo universitario era el que estaba dirigiendo toda esta situación» (Bautista). Moverse entre la universidad y los sectores populares, entre el campo y la ciudad, ya era una constante en ellos, no sólo en la región central, sino también en Cusco y el oriente.

Este grupo de iniciadores, muy activo en la región del Centro, estuvo presente en 1983 en el acto fundacional del movimiento: «Vamos a la ciudad de Lima a la fundación del MRTA. Somos los únicos que vamos, sólo están la Dirección. La Dirección eran tres de cada uno, tres integrantes del MIR y tres integrantes del PSR-ML y entramos nosotros» (Ibídem).

Empezaron con algunas acciones para conseguir dinero y cubrir sus necesidades personales y políticas:

[...] no teníamos nada, incluso el primer revólver es del papá de uno, el papá era policía [...] nos metemos a un par de farmacias, a unas tiendas comerciales y vamos sacando dinero y empezamos a comprar algunas armas. Incluso alquilamos un cuarto para tener un sitio donde reunirnos, donde recibir la propaganda *Voz Rebelde*, el *Venceremos* [...] Ahí habíamos llevado nuestro mimeógrafo manual [...] nuestras pinturas ahí llegaban. La primera base que hubo aquí en Huancayo estaba a la espalda del Hotel de Turistas, en la calle de Huamanmarca, en esa callecita estaba el cuarto [...] Esto fue como producto de eso, de las recuperaciones que se hacían.

Hacia 1984, en la Universidad se dio el primer intento de unificar a las fuerzas de izquierda en una alianza que hiciera frente a los sectores radicalizados agrupados en el FER Pukallacta y a la ARE aprista. Se formó así el Frente Único Revolucionario Estudiantil (FURE), que ganó, en diciembre de 1983, las elecciones estudiantiles para la Asamblea Estatutaria, encargada de elaborar los nuevos estatutos de la UNCP, donde se reinstauran las facultades académicas y el cogobierno en la Universidad con los tercios estudiantiles.

Paralelamente a esta experiencia, surgió la Unidad Democrática Popular (UDP) como instancia legal y de convocatoria de masas impulsada por el MRTA, ya oficialmente creada en 1984. Un poco más adelante, apareció Pueblo en Marcha, otra instancia legal del MRTA, y luego se unificó en un solo proyecto.

En la UNCP actuaron en este período importantes dirigentes de estos grupos que posteriormente acabaron muertos o encarcelados: Alberto Chavarría (Facultad de Pedagogía, especialidad en Lengua y Literatura), del PSR-ML, actualmente encarcelado; Juan Ramos Cahuana (Facultad de Economía), del MIR-EM, hoy en la cárcel; Melby Zacarías (Pedagogía), vicepresidenta de la Federación de Estudiantes, representante de Pueblo en Marcha, actualmente asilada; José Gamarra Ramos, dirigente de Pedagogía y reconocido poeta huancaíno, desaparecido en 1988 en la ciudad de Pucallpa; Sócrates y José Porta Solano, de la vertiente de MIR-EM, el primero secretario general del Centro Federado de Agronomía y el segundo dirigente en la Facultad de Pedagogía, muertos en acciones armadas (en el secuestro del general (r) Jerí y en el enfrentamiento en Los Molinos, respectivamente).

A partir de 1984, el MRTA empezó a desarrollar trabajos de propaganda en la Universidad con pintas y distribución de volantes. José Porta fue detenido en 1985 cuando repartía volantes en un encuentro nacional universitario de folclor, que se realizaba en el coliseo Huanta.

En 1985 el MRTA inició también su propaganda armada en el valle del Mantaro, con pintas, embanderamientos e iluminaciones en Huancayo y Jauja; al año siguiente, intensificó su propaganda y organizó un primer ataque a una comisaría en el distrito de San Agustín de Cajas.

Aunque el objetivo del MRTA era expandirse en toda la Universidad, su presencia era más notoria en algunas facultades, como Pedagogía, Agronomía, Economía y Trabajo Social. Varios estudiantes de estas facultades, militantes del MRTA, murieron o desaparecieron posteriormente: de Agronomía, Sócrates Porta Solano, José Velásquez Urcohuaranga, Zenón Yarasca Huamaní, David Churampi Buendía y Luis Cerrón Acosta;<sup>840</sup> de Pedagogía, José Porta Solano, Yolanda Yauri Arias, José Gamarra Ramos, Griselda Palomino Fuentes; de Economía, César Vílchez Simeón y otros. Todos ellos fueron importantes mandos políticos y militares fuera de la Universidad. Es lógico suponer que muchos más estudiantes estaban organizados en los círculos de estudios formados con la finalidad de captar y adoctrinar nuevos militantes.

Cuando el PAP asumió el gobierno del país en 1985, la Dirección Nacional del MRTA declaró una tregua en sus acciones militares por un año, decisión inconsulta que causó desconcierto entre sus militantes.

<sup>840</sup> Sobre Luis Cerrón existen dos versiones contradictorias: la primera que niega su militancia en el MRTA y reivindica su papel cristiano en agrupaciones juveniles y Cáritas; la otra se deriva del testimonio de un ex militante del MRTA (Miguel), quien señala que era subresponsable del trabajo universitario y que personalmente trató con él.

Durante esta tregua, el MRTA envió militantes a Colombia a formar parte del publicitado Batallón América, juntamente con el Movimiento 19 de Abril de Colombia y Alfaro Vive de Ecuador. De la UNCP, viajaron seis u ocho estudiantes, «el núcleo central de ese grupo que va allá éramos de acá» (Bautista), entre ellos Sócrates Porta y Alberto Chavarría.

En 1986 se procesó la unidad entre UDP y Pueblo en Marcha y el espacio de cooptación de militantes se amplió para el MRTA: «La gente que llegaba a nivel medio, por ejemplo, en Pueblo en Marcha ya sabía que esto iba para ese lado [es decir, hacia el MRTA]» (Juan B.) Durante este año, gran parte de los gremios estudiantiles estaban dirigidos por activistas de Pueblo en Marcha, bajo el nombre de FURE, entre ellos la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes, Melvy Zacarías Espinoza, *Amelia*, de la Facultad de Pedagogía. Esta importante presencia en la Universidad se vio muy afectada por el desplazamiento de militantes «para llevarlos al frente nororiental sacamos la gente [...] los cuadros más importantes de la Universidad y se quedaron los cuadros más pequeños» y porque, en enero de 1987, Melvy Zacarías fue detenida junto con otros estudiantes. Ello marcó el inicio de la debacle de Pueblo en Marcha, del cual era la principal animadora, mientras que el PCP-SL empezó a expresarse abiertamente.

El MRTA experimenta un baño de popularidad con su emergencia militar pública en el nororiente, que impactó a muchos jóvenes que se integraron a sus filas: «En el año 1987 que ellos hicieron la toma de San José de Sisa, y todas esas zonas, me impactó, fue una forma, bastante, cómo podríamos decir, una influencia fuerte» (Miguel).

Este crecimiento del MRTA compitió con el del PCP-SL. Las pugnas por los espacios universitarios fueron constantes: pintura roja, el PCP-SL; negra, MRTA; lo que una noche pintaba uno, la siguiente lo borraba el otro.

[...] el MRTA [...] no generó mayores simpatías o no atrajo gran cantidad de adherentes, pero no generó rechazo. Y, en muchos casos, sirvió como contención al PCP-SL dentro de la Universidad [...] generó cierta, no diría simpatía, cierta expectativa, porque su comportamiento era distinto, cualitativamente distinto al del PCP-SL [...]Y muchos profesores que estábamos al margen del violentismo de esos años, percibimos cierto alivio cuando el MRTA empezó a manifestar su presencia dentro de la Universidad. (Lucas)

Algunos profesores mostraron simpatías por el MRTA, aunque no se tiene noticia de alguno que haya sido un reconocido ideólogo o vocero político de esta agrupación.

Mientras el MRTA se enfascaba en el enfrentamiento con el PCP-SL, sufrió un golpe demoledor: una columna subversiva fue aniquilada en Jauja, Los Molinos, el 28 de abril de 1989.<sup>841</sup>

Un gran golpe, es como si, pucha, nos hubieran dado un golpe bien fuerte, ¿no? Un gran desaliento por parte de la gente. No sólo entre nosotros, sino también en sectores populares que simpatizaban [...] Hubo algunos que se desanimaron, porque hubo un buen grupo de compañeros que estaban trabajando [...] gente que, como tú sabes, habían salido de la Universidad. (Miguel)

Las repercusiones de lo ocurrido en Los Molinos fueron graves para el MRTA en la Universidad, pues se desarticuló el trabajo organizativo y se creó desconcierto entre sus militantes.

El PCP-SL aprovechó la coyuntura para golpear y desplazar al MRTA y presentar sus propuestas como inviables: «Se creían amos y señores de la Universidad, especialmente cuando cayeron la gente de Molinos». El MRTA se vio obligado a desplazar militantes para reconstruir la columna del subfrente Pariahuanca y también recomponer sus fuerzas en el valle del Mantaro. La Universidad pasó a un segundo plano y el PCP-SL aprovechó el momento de debilidad y asesinó un duro golpe al MRTA: asesinó, la tarde del 25 de julio de 1989, al profesor Luis Aguilar, muy cercano al MRTA e importante líder del movimiento barrial, presidente del asentamiento humano Justicia, Paz y Vida.

Sólo luego de un año el MRTA se encontró en mejores condiciones y decidió una contraofensiva contra el PCP-SL:

[...] se dio una respuesta [...] y el MRTA lo asumió, la muerte del otro catedrático, Aguirre Palomino [15 de octubre de 1990]. Ésa fue una de las respuestas [¿Eso lo hizo el MRTA?] Eso lo hizo el MRTA [...] también se buscaba a varios otros catedráticos, ¿no?, que estaban vinculados directamente al PCP-SL [...] que el partido sabía que

<sup>841</sup> Véase estudio sobre Los Molinos.

eran ellos. [...] pero no se logró ubicar, o sea, ya prácticamente se habían enterado de la noticia [...] y se ocultaron, ¿no?, porque si los hubieran encontrado, hubieran sido más los muertos. (Miguel)

[El 19 de octubre de 1990] publican en las paredes de la Universidad una lista negra. Varios carteles fueron colgados con la firma del MRTA [...] reivindican el asesinato del profesor Roberto Aguirre, para luego apuntar los nombres de otras 44 personas, entre profesores y alumnos, de quienes indican ser senderistas [del PCP-SL] y correrán la misma suerte del antecesor. Por cada atentado criminal que cometan dentro de la Universidad los *saco largos* [miembros del PCP-SL], morirán diez de estos miserables [...] la sangre se paga con creces. Al mediodía, un grupo de estudiantes provistos de agua y piedras procedieron a borrar los carteles. (Diario Correo)

Ésta fue una de las últimas noticias que se tuvo de las maniobras del MRTA en la UNCP. En 1991 y 1992, el MRTA sufrió duros golpes de las fuerzas del orden: varios de sus militantes fueron muertos o desaparecidos y la promulgación de la ley de arrepentimiento causó estragos en sus filas. Con ello, nunca más tuvieron presencia en la UNCP.

#### 21.4. LAS ACCIONES CONTRASUBVERSIVAS

[...] nosotros estábamos a salvo fuera de la Universidad; se puede decir que podíamos respirar y decir me salvé. (Gisella, ex alumna de la Facultad de Antropología, miembro del tercio estudiantil en 1990)

Entre 1989 y 1993, fueron más de cien los estudiantes de distintas facultades de la UNCP que desaparecieron o fueron asesinados. De ellos, alrededor de cuarenta desapariciones forzadas y otras tantas ejecuciones arbitrarias corresponden a violaciones perpetradas por miembros del Ejército y la Policía Nacional. Igualmente, en estos años fueron más de 15 veces las que la Policía, el Ejército o ambos en operación combinada ingresaron a la Universidad, registraron el campus, ficharon a los alumnos, profesores y trabajadores allí presentes, hicieron destrozos y, finalmente, detuvieron a decenas de jóvenes estudiantes, docentes y personal administrativo por sospecha de terrorismo. Muchos de ellos, posteriormente, fueron desaparecidos o ejecutados arbitrariamente.

A medida que avanzaba la década de 1980, las movilizaciones estudiantiles dentro y fuera de la Universidad se hacían cada vez más frecuentes, así como la aparición de consignas del PCP-SL o el MRTA en éstas. En respuesta, la represión ejercida por la Policía se hacía más brutal, al extremo de llegar, en dos oportunidades, a causar la muerte de estudiantes. Por lo general, las intervenciones policiales se quedaban en los extramuros de la Universidad debido a la tenaz resistencia de estudiantes, al reclamo de las autoridades universitarias y la condena de la opinión pública por la violación a la autonomía universitaria, derecho esgrimido, en primer lugar, por los grupos subversivos, los que comenzaban a consolidar su presencia en la Universidad.

Asimismo, en este período se registraron las primeras detenciones de militantes y allanamientos de locales subversivos por las fuerzas del orden como muestra de la eficacia que iban teniendo sus investigaciones. Sin embargo, ningún mando de importancia fue detenido en la Universidad o tenía estrecha vinculación con ella.

El 30 de diciembre de 1988, mediante el decreto supremo 049-88-IN, se declaró el estado de emergencia en el departamento de Junín y el comando político militar asumió el control de la zona. En esta época, la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) fue convertida en Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE). Asimismo, en el primer semestre de 1990, se produjo un importante cambio en la estrategia contrasubversiva de las Fuerzas Armadas mediante la creación de frentes. En la región se constituyó el frente Mantaro, cuyos responsables fueron los generales Manuel Delgado Rojas (enero 1989-diciembre 1990), Luis Pérez Documet (enero 1991-diciembre 1991), Carlos Torres Rodríguez (enero 1992-diciembre 1992), David Jaime Sobrevilla (enero 1993-diciembre 1994). El responsable de la Octava Región Policial fue el general PNP Federico Hurtado E.

##### 21.4.1. Estrategia contrasubversiva en la UNCP

En la medida en que las acciones de violencia y proselitismo ejercido por los grupos subversivos en la Universidad —a la par que en la región— se intensificaron, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pasaron a constituirse en actores protagónicos con el objetivo de desbaratarlos. La UNCP, a la vista de todos, se había convertido no sólo en espacio de adoctrinamiento de nuevos militantes, sino también de propaganda y de obtención de recursos para la «lucha armada».

El 8 de marzo de 1989 se realizó la primera incursión de fuerzas combinadas (Ejército y Policía Nacional) en la UNCP. El 10 de marzo de 1989 fue asesinado el primer integrante de las fuerzas del orden dentro de la ciudad universitaria, luego de ser cruelmente torturado.

Las intervención militar y policial a la UNCP tenía también objetivos psicosociales, ya que sus acciones provocaban gran pánico en la comunidad universitaria por la forma violenta con la que se hacían, así como por las humillaciones y maltratos que se ejercían en forma indiscriminada y arbitraria contra estudiantes, docentes, trabajadores y autoridades.

Debido a las muertes causadas al interior de la Universidad por los subversivos, las intervenciones se hicieron más frecuentes. Con ello también los responsables de llevar a cabo estas acciones y los operativos de inteligencia comenzaron a ser fuerzas especiales del Ejército o la Policía:

[...] en estas intervenciones quiero puntualizar que han participado grupos especializados, por ejemplo tenemos a los del departamento contra el terrorismo, que estaban agrupados en Alfa 1, en Alfa 2; ellos eran los que venían a hacer la intervención. De igual manera, los agentes de inteligencia, de la Oficina Regional de Inteligencia. Del Ejército, del Servicio de Inteligencia Nacional, habían grupos especializados. Están agrupados en la G-1, en la G-2, y [...] se debería agregar la acción de grupos paramilitares, en su momento Rodrigo Franco, o el Grupo Colina que posteriormente adoptó en el valle del Mantaro como grupo Escorpión, ¿no? Aparte que hay indicios de la existencia del denominado GATO, ¿no? Grupo Antiterrorista Operativo, que era del Ejército. (Percy, preso del PCP-SL)

El principal signo de sospecha era la pertenencia al comedor universitario, lugar donde se iniciaban las acciones represivas; asimismo, poseer libros de materialismo dialéctico o materialismo histórico o tener tickets del comedor universitario al momento de la inspección era arriesgarse a ser detenido.

A mediados de 1989, en una de las más grandes incursiones realizadas por las fuerzas combinadas y cuando la mayor cantidad de alumnado se encontraba en la ciudad universitaria, ésta fue cercada y se retuvo a cientos de estudiantes, docentes y empleados administrativos con el objetivo de realizar un censo. Se les asignó un número y se fotografió a cada uno. A partir de este censo y de las labores de inteligencia en la Universidad, se podría afirmar que fueron en aumento las desapariciones forzadas sistemáticas y el posterior hallazgo de cadáveres en diversas zonas del valle del Mantaro.

Otra de las tácticas fue utilizar encapuchados: estudiantes previamente detenidos para que identificasen a presuntos subversivos durante los operativos de revisión del campus universitario.

Uno de los momentos más recordados por la comunidad universitaria y que fue particular, porque, después de ocurrido, se pudo deducir cómo trabajaba el servicio de inteligencia en la Universidad, fue la presentación en el campus de la cantante Martina Portocarrero en agosto o septiembre de 1990:

Me acuerdo que vino Martina Portocarrero, la trajeron los chicos de la federación [...] ella estaba cantando, detrás de ella había muchos alumnos dirigentes [...] si mal no recuerdo fue un viernes esa presentación. El mismo viernes y el martes comenzaron a buscar a todos los alumnos dirigentes, y éstos a desaparecer. Pareciera que la presencia de Martina fue un momento como para enfocar a estos chicos. (Edith, trabajadora de la UNCP)

Según manifiesta esta informante, Alcides Ccopa Taipe y Juan Francisco Fernández Gálvez, ambos estudiantes de Antropología y dirigentes estudiantiles, estuvieron presentes en esta actividad; dos meses después desaparecieron sin dejar rastro.

Hacia mediados de 1991, se debatía en el país por primera vez una legislación acorde para la pacificación que proponía la aprobación de varios decretos legislativos, entre ellos el 726 y el 749, que posibilitaban el ingreso de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional a los recintos universitarios.

Al mismo tiempo que se iniciaba ese debate, en junio de 1991, llegó en visita de inspección a la UNCP, el presidente de la República Alberto Fujimori Fujimori, quien en compañía del Ministro de Defensa, el Ministro de Transportes, el jefe político militar del frente Mantaro, el Rector de la UNCP y periodistas nacionales y extranjeros, se dirigió a la Biblioteca Central, donde dijo:

[...] frente a la inacción de las autoridades universitarias en los últimos años, creo que es necesario que les digamos basta ya y pongamos orden en las universidades, y que los grupos terroristas no deben aquí dominar [...] Creemos que por parte de los mismos grupos terroristas ha habido violación de la autonomía universitaria y que

las autoridades de estos centros de estudios poco han hecho para recobrar precisamente esta autonomía, probablemente por los métodos de terror que han venido utilizando. (*Diario Correo*, Huancayo, 9 de julio de 1991)

Las críticas del Presidente de la República hacia la conducta de las autoridades con respecto al control de sus instituciones tenían el objetivo claro de aprobar, bajo cualquier medio, el ya famoso decreto legislativo 726: «Previa autorización del Ministerio de Defensa o del Interior, o de los Comandos Militares o Policiales en su caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú podrán ingresar a los locales universitarios cuando tomen conocimiento que elementos o grupos terroristas perturben la paz y el orden interno».

De esta manera quedaba sin efecto la autonomía universitaria, hecho que provocaría la reacción de la comunidad universitaria nacional. La militarización de las universidades estaba en ciernes, sin embargo el PCP-SL no dejó de actuar al interior de ellas, ni la región.

En la UNCP, al igual que en otros centros superiores de estudio, la intervención militar fue pacífica. Los militares procedieron de inmediato a la limpieza de las instalaciones y el pintado de paredes. Su trabajo se vio facilitado por el apoyo de la opinión pública y de un sector mayoritario de la comunidad universitaria.

La base militar quedó instalada en el comedor universitario, a la entrada del campus universitario, y permaneció allí por muchos años, al punto que llegó a percibirse su presencia como algo cotidiano y normal. Cuando Javier Valle Riestra asumió el cargo de Primer Ministro del gobierno de Alberto Fujimori, se decretó su retiro.

Las cifras revelan que, a pesar del aparente clima de tranquilidad que se vivía, fue precisamente en 1992 cuando se sucedieron con mayor profusión las desapariciones forzadas selectivas de los estudiantes. Las labores de inteligencia realizadas dentro de la Universidad estaban dando resultados en operativos realizados fuera de ella.

### *Ejecuciones arbitrarias*

Éstas fueron una modalidad desarrollada previa labor de inteligencia y planificación para combatir a los subversivos. El primer paso era la detención de la víctima, en la vía pública o en su domicilio; luego se la mantenía detenida, según indicios, en los cuarteles militares durante varios días, donde era interrogada y maltratada, con el propósito de lograr una confesión de militancia o que señale nuevos nombres. Finalmente, era ejecutada y arrojada en algún lugar del valle del Mantaro.

Así sucedió con el profesor Jaime Cerrón Palomino, vicerrector académico de la Universidad, secuestrado al salir de su domicilio el 9 de junio de 1990 junto con su chofer Armando Tapia Gutiérrez; sus cuerpos fueron hallados el 17 del mismo mes en el distrito de Sincos, en la margen derecha del valle del Mantaro, aproximadamente a veinte kilómetros al norte de Huancayo. Un diario local describe cómo fue encontrado: «Con las extremidades cercenadas, una bala en la cabeza y signos de haber sido fuertemente maltratado, fue hallado el cadáver del que fuera vicerrector académico de la UNCP, Jaime Cerrón Palomino. Junto a él, se encontraba el chofer de la camioneta Armando Tapia» (*diario Correo*, Huancayo, 10 de junio de 1990).

También se puede citar el caso del estudiante de Pedagogía Ángel Luis Huaynate, cuyo cadáver fue encontrado por sus familiares con signos de tortura en octubre de 1990. En una de sus mejillas presentaba quemaduras; sus manos estaban atadas detrás de la espalda; según sus familiares, sus ojos estaban cubiertos con una venda de color verde «del mismo color de la camisa de los policías»; tenía una herida de bala a la altura del corazón y dos heridas más en la cabeza. No se le encontró ningún documento de identidad ni artículos personales. El mismo día que encontraron el cuerpo de Ángel Luis Huaynate en la morgue, los familiares fueron a la Policía para sentar la denuncia del asesinato: «la venda, la mecha y los casquillos de bala los metí en una bolsa negra y se los llevé a los de la PIP para que investiguen. Un policía me recibió la bolsa y me dijo: "Pero si ya se murió, qué vamos hacer si ya está muerto [...] Ahorita no se va a poder poner la denuncia, estás muy alterada, ve, entierra a tu hermano y vuelves después". Así me dijo [...] sólo recibió la bolsa y no me dijo nada más» (CVR. Testimonio 304010).

Junto con Ángel Luis Huaynate murió Edson Espinoza Tueros, estudiante del quinto año de la Facultad de Pedagogía. Según el diario *Correo* de Huancayo, ambos hechos fueron atribuidos al MRTA, pero era sabido que el Ejército solía inculpar de sus acciones a uno de los grupos subversivos aduciendo un ajuste de cuentas entre ellos. Ésta fue la misma estrategia que utilizaron con Dante Édgar Granados Gómez, estudiante de Inge-

niería de Minas. El 7 de octubre de 1992, Adrián Granados Espinoza recogió el cuerpo de su hijo y encontró un cartel en su pecho que decía: «Así mueren los soplones», con un dibujo de la hoz y el martillo. Sin embargo, algunas personas que trabajaban cerca del lugar observaron que los «morocos» cuidaban el lugar donde estuvo arrojado el cadáver de Édgar Granados. Su cuerpo tenía huellas de tortura, quemaduras en la cara, en las manos y en el brazo (CVR. Testimonio 300544).

Un ejecutado arbitrariamente podía ser reconocido no sólo por la forma como era asesinado (torturado previamente, emmarrocado y con disparos de bala, uno de ellos entre los ojos a manera de tiro de gracia), sino también porque sus restos, al cabo de unos días de la desaparición, aparecían «botados» en algún lugar del valle. Ése fue el caso de Justiniano Fredy Vicente Rivera, que a los veinte días de su desaparición, ocurrida el 7 de septiembre de 1992, apareció muerto flotando en el canal de irrigación a la altura del grifo Cahuide, cerca de la ciudad universitaria. Tenía la yugular cortada y las rodillas maltratadas. La madre de Ever Lijarza Carrillo, estudiante de Pedagogía desaparecido el 4 de junio de 1990, señala:

En una oportunidad, nos dijeron que a orillas del río Mantaro, a la altura de Huamanmarca, ubicado en el distrito de Huayucachi, provincia de Huancayo [...] tiraban a los muertos, y fuimos con mi hijo tempranito [...] Cuando nos acercábamos vimos que llegaba el carro del Ejército, y nos escondimos para que no nos vean, miramos cómo botaban bolsas negras en forma rápida y se fueron, nos acercamos y eran un montón de muertos, que eran jóvenes torturados, con alambres en el cuello, con mucha sangre, los pies rotos, muy golpeados. (CVR. Testimonio 300038)

### *Desapariciones forzadas*

Otra modalidad utilizada por las fuerzas del orden fueron las desapariciones forzadas. Aquí ocurría lo mismo que en el caso anterior, la única diferencia es que los cuerpos nunca fueron encontrados. Es el caso del profesor de la Facultad de Economía Víctor Raúl Lavado Olivera, quien radicaba en la ciudad de Jauja. Fue detenido junto con su hermano en su domicilio por un grupo de soldados encapuchados el 6 de abril de 1990. También es el caso de la estudiante de Trabajo Social Milagro Flor Túpac González, sacada de su domicilio la madrugada del 12 de febrero de 1993 también por un grupo de encapuchados y de quien nunca más se supo su paradero pese a los esfuerzos del padre por ubicarla.

Las desapariciones y asesinatos de estudiantes y docentes universitarios fueron continuos en la región, como señaló un diario local el 9 de septiembre de 1992:

Unos veinte estudiantes de la UNCP han desaparecido en un lapso de seis meses, y tanto los padres de familia como las autoridades universitarias han presentado la denuncia respectiva a la fiscalía de los derechos humanos. Los asesores legales de la casa superior de estudios se encuentran abocados en la investigación y búsqueda de los estudiantes que han desaparecido. Todo lo efectúan en completa reserva, para así evitar cualquier represalia contra los que investigan el caso, o contra las denuncias de los padres de familia. De otro lado, se supo que las personas que aparecen baleadas en diferentes lugares de la zona serían estudiantes universitarios venidos de lejos y es por ello que muchos no son reconocidos. Asesoría jurídica de la universidad está en las investigaciones para saber quiénes son los asesinos de estos jóvenes que aparecen con disparos en la cabeza después de ser torturados. (Diario Correo, Huancayo, 9 de septiembre de 1992)

Otra nota periodística del 10 de octubre de 1992 dice que la Policía:

[...] viene manejando la hipótesis que los autores de los secuestros y posteriores asesinatos de jóvenes estudiantes universitarios de la UNCP podrían ser integrantes de un movimiento clandestino antisubversivo [sic], similar al movimiento antisubversivo [sic] ayacuchano (MATA) que en ese departamento ha reivindicado varios atentados. Como se sabe, en los últimos meses se han registrado 26 desapariciones de estudiantes de la referida casa de estudios. Catorce de ellos fueron encontrados luego sin vida en distintos puntos de la ciudad. Hasta la fecha, sin embargo, las autoridades policiales no han podido dar con los responsables de esta matanza de estudiantes. Según informó ayer a *Correo*, el Coronel Néstor Castañeda, de la Oficina de Pacificación y Derechos Humanos de la Octava Región Policial, existen algunos indicios de que ello podría estar ocurriendo, empero, aclaró que no había que olvidarse que, dada la rivalidad existente entre senderistas [integrantes del PCP-SL] y emerretistas [miembros del MRTA], no sería raro que se tratase de un ajuste de cuentas entre los grupos sediciosos. (Diario Correo, Huancayo, 10 de octubre de 1992)

Este fue un argumento utilizado con frecuencia por las fuerzas del orden para encubrir sus acciones.

Además de estos asesinatos y desapariciones de estudiantes, tuvo también impacto la promulgación de la ley de arrepentimiento en mayo de 1992, inmediatamente después del golpe de Estado del 5 de abril, aunque sólo fue reglamentada un año después. Muchos estudiantes detenidos fueron obligados a dar nombres, muchos de ellos quizás de inocentes, como sucedió en agosto de 1993 cuando:

Capturan a 15 estudiantes de la UNCP acusados de pertenecer a grupos subversivos. Se supo que estas detenciones son a raíz de que hace 15 días capturaron a varios estudiantes y éstos, acogiéndose a la Ley de Arrepentimiento y por congraciarse con la Policía, están dando nombres de universitarios, profesores o trabajadores, involucrándolos inocentemente. (Diario *Correo*, Huancayo, 9 de agosto de 1993)

#### 21.5. LOS AÑOS DE LA IMPUNIDAD

En 1993, las desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias continuaban, aunque en menor grado que en 1992, y las denuncias contra las Fuerzas Armadas como perpetradoras de estos hechos causaban preocupación entre los círculos castrenses. Al asumir el mando como jefe político militar del frente Mantaro, el general EP David Jaime Sobrevilla se vio en la obligación de señalar lo siguiente:

Los derechos humanos en Huancayo no han sido violados por el Ejército como se intenta hacer creer según versiones y deducciones antojadizas. Lo que ocurre es que al interior de la subversión existe una guerra, una pugna que trae como consecuencia las violaciones de los derechos humanos entre uno y otro bando. Para el general Sobrevilla, de acuerdo con sus apreciaciones hechas en la reunión con miembros de derechos humanos, el Ejército en esta lucha pretende ser desestimado. La guerra psicológica que aplica la subversión es la de poner en tela de juicio el papel importante que desarrollan los militares en el proceso de pacificación en nuestro país. (Diario *Correo*, Huancayo, 13 de febrero de 1993)

El miedo a denunciar, la pasividad de la sociedad civil, la renuencia de abogados a tomar casos por temor a ser considerados subversivos, la lenidad de los fiscales de derechos humanos y los impedimentos con los que se tropezaban las iglesias y los organismos de derechos humanos en sus indagaciones vinieron a institucionalizar la impunidad.

La única institución que se preocupó —aunque de manera peculiar, como se explicará más adelante— por apoyar a los desesperados familiares fue la UNCP a través de su oficina de Bienestar Universitario. El ánimo de los familiares de los jóvenes estudiantes detenidos se mantuvo firme durante mucho tiempo; muchos de ellos continúan sus indagaciones hasta el momento de la elaboración de este Informe: «En otra oportunidad, la señora María logró entrar al cuartel 9 de diciembre, suplicó de rodillas que le digan o muestren dónde estaba su hijo, la respuesta del personal de esa dependencia fue: "Se va o le dispara", amenazándola con el arma» (CVR. Testimonio 300544).

Esta escena se repitió en la puerta de los diferentes cuarteles donde presumiblemente tenían detenidos a los estudiantes: 9 de diciembre de Huancayo, fuerte Cáceres de Jauja, cuartel de Pampas (Tayacaja, Huancavelica), DINCOTE, etc. Ningún civil estaba autorizado a ingresar a los cuarteles y, recién en 1996, la Defensoría del Pueblo entró en ellos.

Los estudiantes que aparecieron con vida señalan que fueron conducidos a un establecimiento militar, donde permanecieron incomunicados varios días. Es el caso de Miguel Ángel Cieza Galván, hijo de un policía, quien apareció el 7 de octubre de 1992 luego de ser detenido en Huancayo y haber permanecido 13 días en el fuerte Cáceres de Jauja.<sup>842</sup>

Las acciones de *habeas habeas* no lograron el registro de cuarteles y comisarías en busca de detenidos.

El Poder Judicial, a través de las cuatro fiscalías penales que actuaban en Huancayo en esos años, recibió las denuncias sobre desapariciones. Las diligencias más comunes actuadas en el ámbito fiscal fueron:

- Pedido de información al Ejército y la Policía sobre si habían intervenido a estas personas, si habían realizado algún operativo en la fecha y lugar indicado o si estaban detenidos.
- Pedido de información a los centros de salud y morgue sobre si habían atendido a estas personas o había acta de defunción.

<sup>842</sup> Veco, Mónica. «No hay pista alguna de 26 estudiantes». La República, 20 de enero de 1994, p. 16.

- Pedido de información al entonces Registro Electoral para obtener datos personales del desaparecido (documento de identidad, dirección domiciliaria, etc.).
- Pedido de información a la UNCP para confirmar la situación de estudiante.

Sin mayor información (sindicación de responsables, claridad en la ocurrencia del hecho, etc.), las investigaciones —que podían durar hasta cinco años o más— eran cerradas o finalmente elevadas al Fiscal Decano, quien a su vez las derivaba a la fiscalía de turno, la cual las observaba como delito común. En todo caso, y por tratarse de una violación de derechos humanos, se derivaba a la Fiscalía Especializada de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos si es que antes la denuncia no era interpuesta a su dependencia.

El caso de Régulo Túpac Alan, padre de Milagro Flor Túpac, estudiante de Trabajo Social desparecida en febrero de 1993, es representativo. Acompañado de la madre de Rony Guerra (estudiante de Antropología, desaparecido en la misma fecha), recorrieron todas las dependencias policiales y militares de Huancayo y provincias cercanas, pusieron su denuncia y viajaron a Lima para denunciar la desaparición de sus hijos. El día 24 de marzo, ambos presentaron un documento ante el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente Democrático, Róger Cáceres Velásquez, y lograron entrevistarse algún tiempo después con los integrantes de dicha comisión. Los congresistas fujimoristas, en particular —como manifiesta el señor Túpac— Martha Chávez, no prestaron mayor atención a su denuncia. Más bien, otro congresista, Miguel Velit, trató de convencerlo de que desistiera «Para qué estás haciendo tanta denuncia». Por último, en su intento por entrevistarse con Lourdes Flores Nano, don Régulo le mostró su carné de militante del PPC, a lo que ésta le respondió: «Por favor, un momentito y ya regreso» y nunca más volvió. Una de las personas que apoyó a don Régulo Túpac y a la señora Blancas en sus gestiones en Lima fue la congresista Gloria Helfer Palacios, quien concertó una entrevista con la Fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán. La Fiscal atendió personalmente la denuncia de don Régulo. En ese mismo momento, y en su presencia, llamó al Comandante General del Ejército y al jefe de la Policía Federico Hurtado Ezquerre. La Fiscal habló con ambos. Al final de la conversación, le manifestó a don Régulo que «ellos no han detenido a nadie, por lo tanto, no tienen nada que hacer [...] Entonces si ellos no han detenido a tu hija, [...] son los terroristas que la han secuestrado».

Por último, acudió a APRODEH para denunciar la desaparición de su hija y del hijo de la señora Blancas de Guerra.

Algún tiempo después, se nombró un fiscal *ad hoc* para que investigase las denuncias sobre la detención y desaparición de los estudiantes universitarios. El doctor Enrique Miranda Palma, asumió las investigaciones en abril de 1993 ante el pedido de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente y la Fiscal de la Nación de entonces, Blanca Nélida Colán Maguiño. Él debía investigar la desaparición masiva de estudiantes de la UNCP, que en 1992 superaba los cincuenta casos y, en 1993, pasaba de diez.<sup>843</sup>

Aduciendo falta de apoyo del Ministerio Público para realizar sus pesquisas y apoyo presupuestal primordialmente, el doctor Miranda no abrió proceso penal en ninguno de los casos, según él «porque no se ha logrado identificar a los responsables».<sup>844</sup>

#### 21.5.1. La reacción universitaria

La actitud asumida por la comunidad universitaria de la UNCP fue, por lo general, de indiferencia ante las violaciones perpetradas, incluso dentro de su institución; la única excepción fue la Oficina de Bienestar Universitario, que por medio de sus asistentas sociales ayudó, económicamente sobre todo, a los familiares de los estudiantes muertos o desaparecidos y, junto con el asesor legal de la Universidad, realizó averiguaciones sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Entre los estudiantes, uno de los pocos esfuerzos provino de grupos católicos que decidieron formar, entre 1988 y 1989, luego de una reunión organizada por el Arzobispado de Huancayo y la Comisión de Juventud del Arzobispado, un equipo de estudiantes católicos de la UNCP al que denominaron Equipo de Pastoral Universitaria: «Se trataba el aspecto del terror, de la violencia en el país, y se presentaba testimonios de personas desplazadas etc., etc., y en ese momento con todos los participantes ahí, miembros de muchos grupos

<sup>843</sup> La República, art. cit.

<sup>844</sup> Ibídem.

juveniles [...] nos encontramos en esa reunión y nos dimos cuenta que había que hacer algo, cada uno de ellos en su ámbito» (miembro del Equipo Pastoral).

## 21.6. LA DECADENCIA ACADÉMICA

A partir de la segunda mitad de la década de 1980, la UNCP fue perdiendo su imagen de centro académico para constituirse en un referente de politización aguda y lugar de riesgos permanentes. La cantidad de postulantes fue disminuyendo paulatinamente y la composición socioeconómica de sus estudiantes cambió considerablemente.

Los contenidos curriculares, la calidad pedagógica, las instalaciones, el espíritu crítico y las inquietudes científicas se fueron deteriorando irremediablemente, al extremo de querer instaurarse un curso sobre el «pensamiento Gonzalo», como atestigua una estudiante de la Facultad de Pedagogía en ese entonces:

[...] incluso le diría que llegó un año en que querían legalizar la doctrina de Abimael Guzmán [...] Sí, querían enseñarnos toda la doctrina de Abimael [Guzmán], querían legalizarlo, llevarlo como un curso, ¿no?, y eso es lo que muchos de nosotros por debajo empezamos a pelear para que no suceda [...] Había rumores de que hay que llevar esa doctrina que es muy buena [...] [pero no prosperó] Es que había mucha gente que no querían [...] tenían miedo [...] en mi facultad y mi salón especialmente era gente que no todos eran del PCP-SL y del MRTA. (Pastoral Universitaria)

Como se lee en el sílabo de la asignatura de Materialismo Histórico, dictada por el profesor Víctor Lavado Olivera, detenido y desaparecido el 6 de junio de 1990 por presuntos miembros del Ejército en la Facultad de Economía, la bibliografía consigna: Documentos fundamentales del I Congreso del PCP, suplementos especiales de *El Diario*, «Línea internacional del PCP», «El PCP y los instrumentos de la revolución», «El PCP y la revolución democrática» y un suplemento especial de *El Diario*, todos publicados en 1988.

El activismo político predominó en desmedro del estudio:

[...] había un desprecio completo a lo académico, lo académico era un buen pretexto para seguir funcionando la Universidad, yo creo que se perdió autoridad por parte de las mismas autoridades, se perdió autoridad por parte de los entes, y comenzó a ser una influencia [...] de los grupos levantados en armas y [...] la Universidad se convirtió, en conjunto como institución, en un espacio, digamos, donde se captaba gente para los movimientos subversivos en conjunto. (Jorge Montoya, profesor de Pedagogía)

La investigación prácticamente desapareció y ocurrieron atentados contra centros de investigación locales:

[...] eliminó diversos centros experimentales, de varias universidades públicas. Rechazó la vocación por la investigación, por ejemplo, ¿no? El profesor era [considerado] servil, pues, a las ciencias burguesas [...] y otras tonterías, ¿no? Aquí en Huancayo destruyeron algunos centros experimentales, no necesariamente de la Universidad, pero sí el Centro Internacional de la Papa, los que hubieron en las zonas altinas [sic], en las zonas ganaderas. Inculcaron el desprecio hacia la investigación y las ciencias para privilegiar una supuesta investigación marxista, ¿no? [...] la Universidad no se ha recuperado [...] pese al esfuerzo de muchos docentes universitarios, de algunas autoridades, porque el Estado no atiende a la universidad. (Lucas)

Surgió entonces la imagen de una Universidad subversiva, foco de la subversión, lo que afectó las posibilidades de prácticas de los estudiantes y restringió los espacios de ejercicio profesional de sus egresados:

[...] el efecto más negativo que hemos tenido [...] es que hemos perdido esos mercados [laborales], los más importantes, las empresas más grandes. Porque anteriormente, por ejemplo, venía la Cerro de Pasco [...] y asimilaba una gran cantidad de profesionales de Economía. Y, cuando se dio ese contexto, prácticamente, nos aislaron, ¿no? Eso era en la parte de la minería. Y de repente en el Estado, igual sucedió. El Estado en ese momento se estaba achicando y [...] salimos excluidos. Y el estigma más fuerte que teníamos era eso, ¿no? O sea, de ser violentistas [...] así tú no seas simpatizante, estabas con ese estigma. (Sánchez Marín)

Estar en la Universidad se convirtió no sólo en un peligro constante sino también en una pérdida de tiempo. Muchos optaron por dejar los estudios y dedicarse a subsistir. Algunos desertaron de la Universidad para ir al campo y sumarse a la «lucha armada»; otros fueron desaparecidos y asesinados: «Hubo mucha deserción, bastante deserción, hubieron muchos que dejaron la Universidad y hay otros que permanecieron pero, cuando me encuentro con ellos, me dicen: "Señorita, no hemos aprendido nada en esos años", ¿no?, porque más

era el tiempo de escapar que de concentrarse en los estudios, esos años fueron muy, muy flojos y fueron de terror constante» (Alicia Véliz).

## 21.7. EXPECTATIVAS

Algunos de los testigos del conflicto armado alrededor de la UNCP comentaron sobre su experiencia y esbozaron algunas ideas de lo que se anhelan para el futuro de este centro de estudios:

[...] hemos vivido una época o sea [...] de bastante zozobra, inestabilidad, pero que a la vez nos ha enriquecido porque de todas maneras hemos aprendido en el sentido de que cómo se comportan estos grupos, cómo se comporta el Estado, el gobierno, y esto nos ha permitido también crecer profesionalmente como personas y [...] un poco valorar lo que ahora tenemos, ¿no? Ahora tenemos, por ejemplo, como usted verá, una Universidad más tranquila, en donde [...] la vida académica es preponderante ahora. (Laily Maravi)

Un militante del PCP-SL, hoy preso, reflexiona sobre las condiciones que se dieron durante el conflicto armado interno y, a pesar de que él sí obtuvo un juicio, considera que la justicia no se dio por igual para todos los miembros de la UNCP:

[...] Si doy este testimonio es para contribuir a ellos, ¿no? Por ejemplo, que se sepa cuántos estudiantes universitarios pasaron en las celdas del cuartel 9 de Diciembre. Cuántos fueron detenidos, torturados, masacrados, y cuántos de ellos desaparecieron. O sus cadáveres ejecutados extrajudicialmente y regados en el valle del Mantaro para generar una psicosis colectiva, una psicosis social, del terror [...] terror de Estado diría yo. Y cuántos estudiantes no aparecieron y hoy continúan desaparecidos, dónde están, adónde los llevaron. [...] Considero de que si habían sospechas que estudiantes universitarios tenían simpatías o estaban en cierto modo vinculados, o con cierto grado de organización en los grupos alzados en armas, yo pienso que debieron darles el derecho a un juicio justo, equitativo e imparcial. Un juicio en el cual pudieran demostrar hasta su inocencia, porque yo estoy seguro que muchos de los estudiantes universitarios desaparecidos han sido confundidos y asesinados, o mínimo su culpabilidad en el conflicto interno. Que se sancione, que se investigue en primer lugar, que se investigue a los responsables, y de aquellos estudiantes que pudiesen estar en alguna fosa, se les entregue sus restos mortales a sus familiares para que se les dé cristiana sepultura. Pienso que esto sería una de las cosas que llevarían a poner las primeras piedras, dar los primeros pasos para alcanzar una reconciliación nacional, que la sociedad peruana la requiere. (Percy)

Para otros, ante la inefficiencia del Poder Judicial, la impotencia y la desidia de la sociedad, lo único que queda finalmente es reclamar la justicia divina: «Dios quiera que algún día se llegue a la verdad, para mí la mejor justicia la va a hacer Dios, porque un mal todo se termina, yo he visto a muchos padres llorar acá buscando a sus hijos, yo los he consolado» (Vallejo, trabajador de la UNCP).

En ese sentido, la mayor exigencia es investigar el grado de responsabilidad de los actores del conflicto armado interno (PCP-SL, MRTA, Fuerzas Armadas, agentes infiltrados del Servicio de Inteligencia en la Universidad, grupos paramilitares). Sin embargo, muchos consideran que la institución universitaria tiene mucho que responder sobre su responsabilidad con relación a la complacencia y sumisión a los grupos subversivos y hacia la represión estatal.

Las palabras de la madre de un joven estudiante asesinado resumen los deseos y expectativas de todos los que sufrieron el conflicto armado en la UNCP:

Me da pena la forma en que ha pasado esos años de terror, he vivido una desesperación [...] entonces, esto yo quisiera que las autoridades, el gobierno vean mejor, que nunca más vuelva a suceder estas cosas [...] No quisiera recordarme de esos tiempos que nosotros vivíamos desesperados, temblando, ya aparecía un muerto aquí, otro muerto allá, en la misma Universidad por costado [...] pero gracias a Dios que no ha pasado nada con nosotros... lamento la muerte de mi hijo porque él podría ser otra clase de hombre, otra clase de persona... con tantas profesiones que hubiera podido vivir y no sólo una [...] tanto nos hemos desesperado que ingrese a la Universidad, que ingrese a la Universidad, y el ingreso a la Universidad lo ha llevado a la muerte [...]. (Rogelia)

## 21.8. CONCLUSIONES

### Grupos subversivos (PCP-SL y MRTA)

Las violaciones de derechos humanos fueron cotidianas y crearon un clima de inseguridad y miedo. Los contenidos curriculares, la calidad pedagógica, las instalaciones académicas, el espíritu crítico y las inquietudes científicas se fueron deteriorando irremediablemente.

La UNCP fue considerada como un espacio importante por el PCP-SL, que realizó un trabajo inicial silencioso y soterrado para luego irrumpir violentamente. La Universidad se convirtió en escenario de mortales enfrentamientos con el PCP-SL, organización que controló los aspectos administrativos y académicos y condicionó la elección de dirigentes estudiantiles y, autoridades universitarias, así como el acceso a la docencia. Asimismo, liquidó los sindicatos de trabajadores y de docentes y controló el comedor universitario.

Para lograr este control, principalmente entre 1989 y 1992, el PCP-SL no dudó en asesinar a quienes consideraba sus enemigos: miembros de las fuerzas del orden (Policía Nacional y Ejército), estudiantes y catedráticos que mostraran oposición, militantes del MRTA o desertores del PCP-SL.

Aun cuando la actividad del MRTA fue menor y más breve, algunos de los episodios más sangrientos se debieron a sus enfrentamientos con el PCP-SL.

Respondiendo a una nueva estrategia de pacificación, el 30 de diciembre de 1988, mediante el decreto supremo 049-88-IN, el gobierno declaró el estado de emergencia en el departamento de Junín y el comando político militar asumió el control de la zona.

El momento culminante de la intervención de las fuerzas del orden en la UNCP ocurrió en 1992, cuando el Ejército estableció una base en su interior mientras aumentaron considerablemente las ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas de estudiantes, catedráticos y trabajadores universitarios en operativos militares realizados fuera de la Universidad.

Las cifras reunidas por la CVR indican: 28 estudiantes asesinados, 36 ejecutados extrajudicialmente, 29 desaparecidos, 8 profesores y 4 trabajadores muertos y varios casos más por esclarecer.

La fuente más común que originaba la detención y la desaparición de alguna persona era la información recabada por miembros del servicio de inteligencia o la brindada por estudiantes detenidos que eran encapuchados para identificar a posibles subversivos, información que se cruzaba con los censos realizados en el campus.

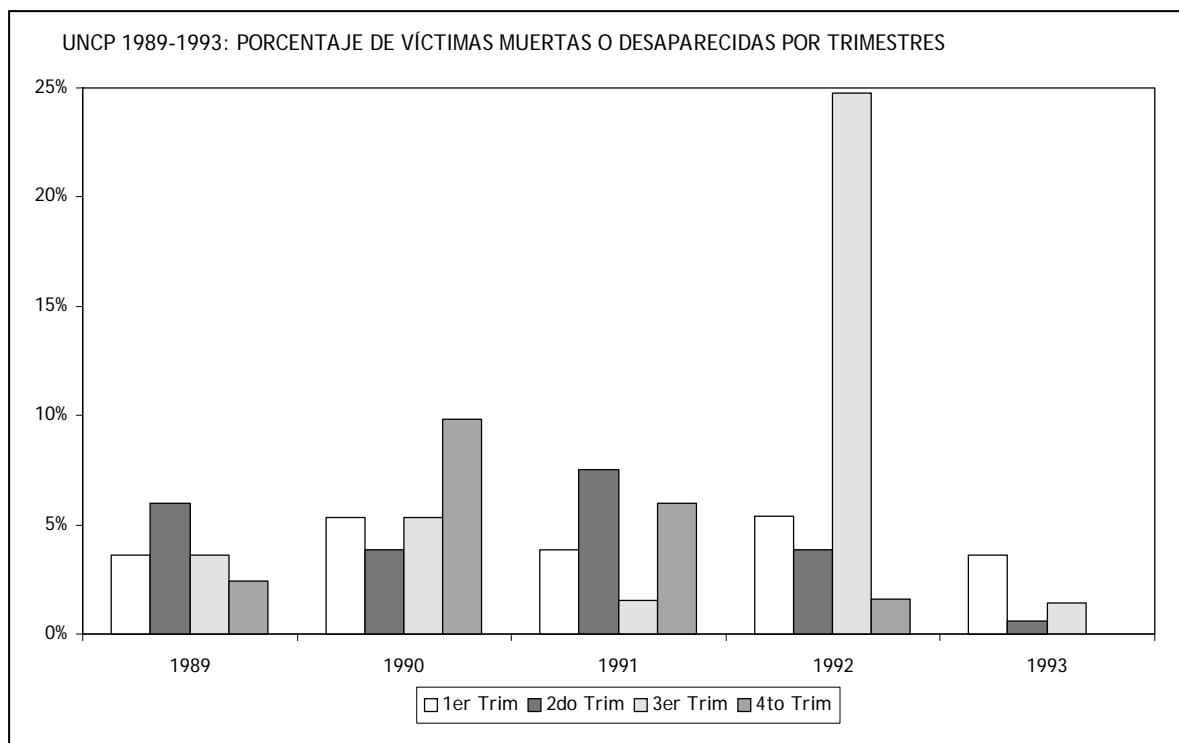
Motivo de sospecha resultaba ser beneficiario del comedor universitario, dirigente del tercio estudiantil o del consejo universitario, o simplemente, pertenecer a las facultades de Pedagogía, Sociología o Agronomía.

Las detenciones y posteriores desapariciones de estudiantes siguieron un patrón característico: la detención de las víctimas por agentes militares en uniforme o vestidos de civil, identificables por las armas que portaban y otras características; una posición oficial de negación de responsabilidad por tales desapariciones; falta de investigación de las autoridades públicas sobre la situación de las víctimas; ineeficacia de los recursos interpuestos; tortura y ejecución arbitraria de las víctimas; impunidad absoluta, reforzada por la subsiguiente amnistía.

Gráfico 1



Gráfico 2



## 22. LAS CÁRCELES

Durante los años de violencia, las cárceles no sólo fueron espacios de detención de procesados o condenados por delitos de terrorismo sino escenarios en los que el PCP-SL y, en menor medida, el MRTA, extendieron el conflicto armado. El conflicto armado, desatado principalmente por el PCP-SL, tuvo una dimensión nacional que se muestra en el desarrollo de sus planes militares y su capacidad para organizar atentados y, ciertamente, en la respuesta del Estado a través de la Policía, las Fuerzas Armadas y los comandos políticos militares. Esta situación tuvo sus réplicas en espacios regionales en los cuales el conflicto se desenvolvió con sus propias particularidades geográficas, étnicas o socioeconómicas. Al lado de lo nacional y de lo regional, se ubicó una dimensión de características especiales: las cárceles. A medida que las capturas y detenciones se incrementaban, aumentaba también la importancia de lo que ocurría en ellas, de modo que las cárceles no fueron ni en los años ochenta ni en los años noventa pequeños islotes ajenos al curso del conflicto armado interno que influían y eran influenciadas por éste.

Se calcula que por las cárceles han pasado, a lo largo de veinte años, aproximadamente 20 mil personas cuya situación jurídica tardaba en definirse. Los trasladados de internos se volvieron frecuentes a medida que se iban construyendo nuevos penales. A fines de los años noventa, había internos por terrorismo en más de veinte penales del país. A lo largo de todo el conflicto armado, el PCP-SL actuó en las cárceles bajo las directivas de sus líderes, reproduciendo su organización partidaria y guiado por su ideología. De ahí la sincronización de sus acciones propagandísticas o la simultaneidad de sus protestas, que le servían para proyectar una imagen de disciplina y de fuerza militar. Las cárceles fueron una especie de altavoz orientado hacia la prensa nacional y extranjera, pero también hacia sus propios cuadros de combate, de cuyo éxito revolucionario dependía su futura libertad.

El Estado demoró en comprender que, en las cárceles, también se jugaba el curso del conflicto armado, es decir, que el sistema penitenciario era un componente clave en la estrategia contrasubversiva. Durante los primeros años, el desconcierto no sólo era de los políticos en la reestrenada democracia sino que alcanzó también a los jueces y al personal penitenciario. Era notorio que la administración de justicia y el sistema penitenciario no estaban en capacidad de enfrentar un fenómeno que iba en aumento y cuyos actos, de una criminalidad cada vez más decidida, infundían temor e inseguridad entre sus miembros. En los veinte años de violencia, los penales fueron el reflejo de la debilidad institucional del Estado, en la que se incluye, aunque parezca paradójico, el uso desproporcionado de la fuerza en circunstancias críticas y, desde luego, el aprovechamiento de los movimientos subversivos de esa debilidad; pero, también, en los años noventa, reflejó la severidad de un régimen que propició numerosas violaciones de los derechos humanos. El Estado demoró también en comprender que la población penitenciaria no era homogénea y que cabían percepciones diferenciadas de su situación y sus expectativas. En las cárceles se encontraban los llamados «acuerdistas», un grupo de internos que mantiene su pertenencia al PCP-SL y que se adhirió, en su momento, al acuerdo de paz propuesto por Abimael Guzmán; los miembros de Proseguir, un grupo pequeño que expresa su voluntad de continuar la «guerra popular»; los integrantes del MRTA; los «desvinculados», internos que han abandonado la militancia en el PCP-SL o el MRTA; los «independientes», que son aquellos que afirman no haber pertenecido nunca al PCP-SL o el MRTA; y los «arrepentidos», que son los internos que se acogieron a la ley de arrepentimiento.

Dado que los internos son actores centrales del conflicto, la CVR en coordinación con las autoridades penitenciarias organizó visitas a los penales para recibir sus testimonios. Del mismo modo, se les dio a conocer los avances del trabajo de las diversas áreas de la CVR y, especialmente, se inició una reflexión conjunta sobre el sentido y las posibilidades que la reconciliación tiene para ellos y para el país. Las actividades desplegadas permitieron comprobar que el PCP-SL es una organización que existe y actúa dentro de las cárceles; esto recuerda la vigencia de problemas no completamente superados y la necesidad de diseñar una estrategia que, en el marco de la democracia y de los derechos humanos, contribuya a asegurar la paz en el Perú.

La CVR recibió 1,158 testimonios en 21 penales del país, de los cuales 60.2% corresponden al PCP-SL, 10.4% al MRTA, 27.5% a internos que no tienen filiación política y 2% a otros. La presencia de hombres (82.1%) es ligeramente mayor que la de mujeres (17.8%) y, si se considera el tiempo de condena, se diría que alrededor del 80% eran jóvenes en los años de la violencia. Los hispanohablantes son mayoría: 71.1% en el caso del PCP-SL y 85.8% en el caso del MRTA. En general, habla quechua el 24.7% y otras lenguas nativas el 1.9%. Un importante dato

que arroja la base de la CVR es que el nivel educativo de los internos del PCP-SL es —entre educación superior y secundaria completa— de 65.1%, siendo los de primaria o secundaria incompleta 32.4% y los analfabetos sólo el 2.5%. Estas cifras no difieren substancialmente en el caso del MRTA. Además, las actividades de donde provenían son principalmente, los estudios universitarios (PCP-SL: 24.9%; MRTA: 15.3%); luego se ubican los vendedores y comerciantes con un 16.3% y 31.4%, respectivamente; otras actividades, 38.3% y 34.7%. Eran campesinos sólo un 20.5% en el caso del PCP-SL y 26.5% en el MRTA. Llama la atención igualmente que, en ambas organizaciones subversivas de raíz marxista, el 76.16% sean católicos, el 10.7% evangélicos y el 4.6% profesan otras religiones, mientras que los que no profesan ninguna sean sólo 8.5%, bajando a 0.98% en el caso del MRTA. Finalmente, destaca el dato del lugar de nacimiento, sobre todo en el caso del PCP-SL, cuyos internos son en un 28.2% limeños; los ayacuchanos quedan a cierta distancia con el 11% y los demás, de otros departamentos, con porcentajes menores. Si hubiera que trazar un perfil general de ambos alzamientos armados por el tipo de interno, se diría que fueron llevados adelante principalmente por varones, jóvenes, ciudadanos, hispanohablantes, con buen nivel educativo, estudiantes, comerciantes o trabajadores independientes en su mayoría y que, desde entonces o en reclusión, abrazaron el catolicismo como fe religiosa.

La opinión pública, en general, no muestra un interés positivo por la suerte de los internos en las cárceles. Hay una idea muy extendida de la pena como castigo, que suele exacerbarse cuando se trata de delitos muy graves. A menudo se oyen expresiones extremadamente duras que revelan poca disposición para comprender un fenómeno tan complejo como éste. En el caso de los internos por terrorismo, los crímenes en los que han participado y la zozobra sembrada en el país están presentes en la memoria de la gente al punto de mirar con complacencia las severas restricciones a los derechos a las que fueron sometidos. Pese a esto, es obligación del Estado restituir derechos fundamentales compatibles con la reclusión y transmitir a la ciudadanía una idea más exacta de la vida en las cárceles, especialmente en la que vivieron y aún viven alrededor de 2 mil presos por terrorismo.

## 22.1. CÁRCELES: LA GUERRA QUE NO CESÁ

### 22.1.1. Tierra de nadie

Cuando la violencia estalló en las alturas de Chuschi en mayo de 1980, sorprendió al país y a la democracia, que se aprestaban a elegir a un gobierno constitucional luego de doce años de dictadura militar. El sistema carcelario, tras las primeras detenciones de miembros del PCP-SL, mostró serias limitaciones para garantizar la reclusión de internos que traían un componente nuevo y substancial: su fuerte ideologización. Venían de cometer delitos horrendos pero, a la vez, mostraban rasgos de disciplina partidaria que eran ajenos a la historia habitual de los presidios en el Perú. Al poco tiempo, hicieron de las cárceles una extensión del conflicto y las llamaron «luminosas trincheras de combate». Abimael Guzmán lo dice claramente:

Nosotros los comunistas del Perú siempre hemos demostrado ante el mundo que los comunistas siguen luchando en cualquier condición, por eso, convertimos las prisiones en luminosas trincheras de combate sirviendo a nuestra causa, no importa lo que nos pase como individuos [...] Así te encuentres en la soledad más fría, hallarás el calor de la luz del marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo y contarás con un plan de trabajo resultado de una política, de una ideología y combatirás aplastando negros objetivos de capitulación, de aislamiento o de arrepentimiento.<sup>845</sup>

El episodio del centro penitenciario de Huamanga grafica exactamente esta situación. Era marzo de 1982 y decenas de miembros del comité regional principal del PCP-SL habían caído presos. Desde fuera, se organizaba un operativo de rescate. Un contingente del PCP-SL atacó la cárcel y consiguió la fuga de 78 de sus miembros y 169 internos por delitos comunes. Los guardias republicanos resistieron la embestida varias horas, pero fueron abatidos. En represalia, algunos de sus compañeros se dirigieron al hospital de Ayacucho en busca de tres subversivos internados, los llevaron a una calle aledaña y les dieron muerte.

La verdad es que, antes de Huamanga, ya habían ocurrido dos casos de fuga, uno de 14 internos del PCP-SL del centro penitenciario de Pasco, que dejó varios policías republicanos heridos, y otro del centro penitenciario de Arequipa, del que lograron evadirse con ayuda externa dos reclusas y donde resultó muerto un cabo

<sup>845</sup> <[www.geocities.com/comunismo\\_peru/asumir93.htm](http://www.geocities.com/comunismo_peru/asumir93.htm)>

de la GR. El PCP-SL consideró estas operaciones como parte de su estrategia de recuperación de cuadros y las elevó al rango de hito histórico.

Luego de estos hechos, el gobierno tomó la decisión de centralizar la reclusión de subversivos en los penales de máxima seguridad de Lima: El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. Tres años después, se construyó el penal de régimen cerrado especial Miguel Castro Castro y dos penales más durante los ochenta en Chiclayo y Trujillo. En los noventa se construyeron nueve penales más, entre los que se cuentan los cuestionados Yanamayo en Puno y Challapalca en la sierra de Tacna, así como el penal de la base naval del Callao.

No obstante estas precauciones, a medida que avanzaba el conflicto y el PCP-SL mostraba la entraña brutal de su proyecto, era fácilmente observable la debilidad de la autoridad policial y penitenciaria en las cárceles. Los subversivos habían llegado demasiado lejos y el control de los penales se le escapaba de las manos a la autoridad. En la cárcel de El Callao, las mujeres desfilaban vestidas de rojo y negro conmemorando el día del Socorro Popular y, en la rotonda de Castro Castro, internos, hombres y mujeres, en una ocasión, marcharon durante una hora portando una gigantesca pancarta con el rostro de Abimael Guzmán ante la mirada atónita y distante de la Policía.

Para entonces, Abimael Guzmán había ganado terreno en la mente de sus militantes y exigían, en nombre de la revolución, sacrificios mayores. La muerte era un costo de la guerra que había que asumir pero, además, una contribución al fortalecimiento de la causa. Abimael Guzmán había tasado el valor político de la muerte y, en adelante, sus planes incluirían este componente. Las acciones del PCP-SL ganaban, pues, en temeridad y en frenesí.

La debilidad del Estado en los penales no tardaría en traer peores consecuencias. El 4 de octubre de 1985, los internos del penal de Lurigancho se amotinaron para evitar una requisita. La GR deboló el motín con un saldo de treinta internos muertos. El ministro de Justicia de entonces, Luis González Posada, sustentó ante la Cámara de Diputados que los internos fueron quemados por sus propios compañeros y se comprometió a una exhaustiva investigación. Esa investigación nunca llegó a conclusiones. Testimonios<sup>846</sup> ofrecidos a la CVR dan cuenta del uso de dinamita y bombas incendiarias con fósforo líquido y de disparos al cuerpo de los reclusos por la GR. Veintitrés días después, el alcaide de ese penal, Miguel Castro Castro, fue emboscado y asesinado. Abimael Guzmán declaró el 4 de octubre como «día del prisionero de guerra».

En ese caldeado escenario, el PCP-SL asesinó al contralmirante AP Ponce Canessa, oficial del Estado Mayor de la Marina de Guerra. Es de conocimiento público que en su sepelio se oyó decir al comandante general de la Marina de Guerra, Víctor Nicolini del Castillo, «sepan los subversivos que han despertado al león».

Ocho meses después del primer motín, ocurriría la mayor masacre en la historia penitenciaria del Perú. Luego de resistirse a ser trasladados al penal de Castro Castro, los internos tomaron rehenes en El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho e iniciaron en simultáneo un violento motín. El presidente Alan García Pérez era en esos días el anfitrión del XVII Congreso de la Internacional Socialista, sobre el que la prensa internacional había volteado los ojos. A las ocho de la mañana, hora del descierro, se inició el debelamiento. Luego de dos días, terminaría con cifras horrorosas de muertos. En El Frontón, murieron 118; en Lurigancho, 124, y en Santa Bárbara, dos. Como toda explicación, García Pérez dijo al país que el gobierno había cumplido con restituir el principio de autoridad y que los excesos serían investigados. La comisión parlamentaria que indagó los hechos dio detalles sobre el tipo de armamento usado por los integrantes del Ejército y del momento en el que los internos del pabellón industrial de Lurigancho se rindieron y fueron forzados a echarse en el piso y eliminados uno a uno. Varios testimonios coinciden con esta versión (véase el caso ilustrativo en el tomo VII).

La justicia militar encontró responsabilidad penal por homicidio calificado en el coronel Rolando Cabezas y en ocho guardias republicanos de un total de 177 miembros de la GR y 19 del Ejército procesados por lo ocurrido en Lurigancho. En noviembre de 2002, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado que investigara, procesara y sancionara a los responsables. De este modo, la justicia peruana tuvo que volver una vez más por sus pasos para cumplir con juicios ajustados a ley. El proceso penal a los responsables de los hechos de El Frontón y Santa Bárbara fue sobreseído en la justicia militar.

---

<sup>846</sup> CVR. Testimonios 700145 y 700149.

El uso ilegal y desproporcionado de la fuerza debilitó la capacidad moral del Estado para enfrentar a la subversión, lo hizo blanco de la condena internacional por las graves violaciones de los derechos humanos y provocó en las organizaciones alzadas en armas un reforzamiento de sus convicciones y de su organización. Abimael Guzmán había conseguido dar al concepto de «prisionero de guerra» una importante connotación actuante y a los trágicos sucesos de los penales un barniz de heroicidad que le abría el camino para seguir exigiendo de sus militantes una mayor «cuota de sangre». La revolución se alimentaba de muertes con una indisoluble voracidad. En su lógica, el «baño de sangre» convertía en genocida al gobierno y en heroico al PCP-SL. No tardó Guzmán en declarar al 18 de junio como «día de la heroicidad».

Luego de estas masacres, el orden no sobrevino a los penales. El PCP-SL mantuvo el control territorial y, cada cierto tiempo, transmitía a los medios de comunicación sus acciones de adoctrinamiento político. En Castro Castro, el control policial era mínimo. A los pabellones del PCP-SL, ubicados en la zona de la rotonda, no entraba nadie, ni siquiera la Policía, que, además, había suspendido las requisas. Por su parte, el MRTA construyó un enorme túnel por el que, el 9 de julio de 1990, 48 internos de esa organización se fugaron del penal Castro Castro en lo que fue considerado el colmo de la negligencia policial o de la complicidad.

### 22.1.2. Cambio de régimen

Luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, el gobierno de reconstrucción nacional, mediante el decreto ley 25421, encargó a la Policía Nacional la seguridad interna y externa de los establecimientos penitenciarios. De esta manera, limitó las funciones del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y dio respuesta a la campaña iniciada por algunos medios de comunicación que denunciaban que los penales y, en especial el penal de Castro Castro, eran una «zona liberada» por los subversivos. Estas medidas tuvieron aceptación popular, entre otras razones, por el desorden y la debilidad preexistentes y el desprestigio de la clase política, cuyos intentos de oposición ya no tenían eco entre la población. El presidente Alberto Fujimori había logrado encaramarse en el poder a partir de una alianza con las Fuerzas Armadas y Policiales e iniciado un proceso de copamiento de los poderes públicos. La mano dura era bien vista, y más aún si era aplicada contra los subversivos, causantes de tantas muertes.

En esa circunstancia de ascenso de un poder autoritario, ocurrió la masacre de mayo de 1992. Los internos del PCP-SL, ante la orden de trasladar a las mujeres desde Castro Castro a la cárcel de máxima seguridad de mujeres en Chorrillos —todavía no totalmente acondicionada— se amotinaron. Aprovechando la gran tolerancia del régimen penitenciario de aquel entonces, los presos del PCP-SL habían habilitado una comunicación subterránea entre los pabellones 4-B y 1-A a través de los ductos. La madrugada del 6 de mayo, la Policía, al observar que se negaban a salir, intentó abrir un boquete, tras descartar cualquier negociación. Numerosos policías se ubicaron en los techos del pabellón A y del venusterio; al cabo de unas horas, el penal estaba sitiado. Los internos pidieron garantías, así como la presencia de la Cruz Roja Internacional, del Ministerio Público, de sus abogados y sus familiares. Su pedido no fue atendido. Entonces, se atrincheraron y hubo un enfrentamiento que dejó varios muertos y heridos. Un estudiante de Medicina que apoyó a los heridos relata en su testimonio: «A eso de las 10 del mañana del día 6 comenzaron los disparos contra el pabellón 4-B. Posteriormente, comenzaron a llegar más heridos pero era sobre el pabellón 1-A, donde agentes de la Policía disparaban mayor cantidad de fuego mediante instalazas y fusilería». <sup>847</sup>

El mismo declarante narra que atendió, con los escasos medios con los que contaba, entre disparos y bombas lacrimógenas, a los siguientes heridos: Elio Quispe, con herida de bala en el cráneo; Jorge Muñoz, con un impacto de bala en el abdomen; Marco Camargo Callocunto, quien murió al no poder brindarle la atención adecuada ese mismo día 6; Richard Cahuana, con una bala en los glúteos; un tal Rolando, cuyo apellido no recuerda; y Víctor Olivos Peña, con una herida en el abdomen y el pie.

Había francotiradores que apuntaban sobre los que intentaban pasar de un pabellón a otro. En el pabellón 4-B de varones, había unos cuatrocientos internos y, en el 1-A, 135 mujeres. Otro testimonio relata:

El 7 u 8 de mayo salieron de los pabellones los supervivientes y varios de ellos fueron asesinados con ráfagas de metralletas y morteros. Tuvimos que caminar por encima de los muertos. Muertos por acá, muertos por allá, pedazos de cabezas por allá, pedazos de brazos por acá... te detenías un poco y un balazo, te detenías, por ejemplo,

<sup>847</sup> CVR. Testimonio 700072.

a recoger un amigo que habías vivido juntos, tu amigo estaba allí mal herido diciendo «llévame, llévame, estoy herido, llévame». Te detenías y pum, otro balazo. Dice que allí murieron Tito Valle Travesaño y su esposa.<sup>848</sup>

El día 7 de mayo hubo un relevo de las fuerzas de la Policía y de integrantes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES). Lanzaron bombas lacrimógenas. Hubo un llamado a las autoridades para solicitar que los heridos fueran evacuados, pero fue desoído. En la noche, hicieron salir a los heridos y a las mujeres embarazadas a la rotonda, pero no los evacuaron porque se exigió que antes salieran todas las mujeres para el traslado. Fue el día 8, a las 6 de la tarde, cuando les dijeron que los heridos iban a ser evacuados. Uno de ellos afirma en su testimonio que alrededor de treinta heridos, incluido él, fueron evacuados por la ventana del mirador y que había mujeres gestantes, y el resto, la mayoría, eran heridos de bala.

El mismo testimonio revela que la evacuación fue nuevamente denegada y que los heridos pasaron toda la noche a la intemperie. El 9 de mayo, salió un sol abrasador y los policías les prohibieron moverse. Los heridos no recibieron ninguna atención porque no permitían que nadie se acercara. El día 9 se realizó un operativo policial militar denominado Mudanza Uno. A las 3:00 p.m. se intensificó el ataque con instalazas y ráfagas de fusil. El ataque atronador duró hasta las 5:00 p.m., cuando se escuchó que se abría la puerta frontal del pabellón 4-B. Se oyó por un momento el canto de La Internacional y, en seguida, ráfagas de fusil y explosiones de granadas. Los heridos que iban llegando decían entre quejidos: «Han asesinado a prisioneros».

Cuando salían rendidos —relata un testimoniante— varios internos fueron ejecutados, entre ellos los miembros del comité central del PCP-SL Deodato Juárez Cruzat, Yovanka Pardavé Trujillo, Elvia Sanabria Pacheco y Tito Valle Travesaño.<sup>849</sup> En esto coinciden los testimonios de cuatro internas mujeres que estuvieron en el pabellón 1-A. Coincidieron también en que los heridos no fueron atendidos a pesar de los insistentes requerimientos.

En algunos testimonios, se afirma que varios cadáveres fueron enterrados en el propio penal.

Algunos compañeros cuando nos van a ayudar a pasar del 1-A al 4-B mueren en el trayecto y algunos llegan agonizando y no sabíamos qué íbamos a hacer con los cadáveres [...] se propone que mejor enterrarlos y los enterramos en lo que ellos llamaban «tierra de nadie», eran cinco: Vilma Aguilar, Rosa Ponte, Carlos Aguilar, eran dos mujeres y tres hombres.<sup>850</sup>

Había muertos que tuvimos que enterrarlos, sus cuerpos se empezaban a descomponer... en el jardín del pabellón. Después dijeron que entre nosotros mismos nos habíamos matado, a los que querían rendirse. Falso, totalmente falso.<sup>851</sup>

Según la versión oficial, fueron 35 los reclusos que resultaron muertos; pero, en los registros de la Morgue Central de Lima, la cifra es de 42 cadáveres de internos ingresados en esos días. Los sobrevivientes hablan hasta de ochenta muertos.

No se permitió la mediación de un alto funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente en Lima por esas fechas ni de la Cruz Roja Internacional, tampoco de la Iglesia ni de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. La ausencia de un reporte oficial del operativo despertó sospechas fundadas de que se hubieran cometido ejecuciones extrajudiciales.

El presidente Alberto Fujimori, lejos de ocultar los hechos, los exhibió como una muestra de la eficacia de la nueva estrategia que estaba decidido a llevar adelante. En una conferencia de prensa, cuestionó la democracia pusilánime que dejó sin protección a 22 millones de peruanos para favorecer a los subversivos y, a renglón seguido, advirtió que «vamos a restablecer el orden, el respeto y el principio de autoridad en los penales. El Estado no puede permitir que funcionen como escuela de formación política o lugares de descanso de los delincuentes terroristas».<sup>852</sup> Era, evidentemente, el inicio de una nueva estrategia contra la subversión que, legislativamente, se materializaría en la dación de los decretos ley 25475 y 25744, que establecieron el régimen de máxima seguridad, el aislamiento celular, la reducción de las visitas y de los beneficios penitenciarios, entre otras medidas. El 12 de septiembre de ese mismo año, Abimael Guzmán, líder del PCP-SL, fue capturado.

<sup>848</sup> CVR. Testimonio 100146.

<sup>849</sup> CVR. Testimonio 700072.

<sup>850</sup> CVR. Testimonio 700088.

<sup>851</sup> CVR. Testimonio 700191.

<sup>852</sup> El Comercio, 9 de mayo de 1992.

Con el resultado del motín de mayo de 1992 en Castro Castro, el presidente Alberto Fujimori había lanzando un claro mensaje respecto de su idea de la autoridad. El motín no sólo fue debelado tan sangrientamente como los anteriores (murieron 52 internos), sino que marcó el inicio de un sistema penitenciario destinado a poner contra la pared al interno, minar su moral y hacerle sentir a cada momento que estaba derrotado. El aislamiento celular fue la mayor expresión de la dureza del régimen. Los internos pasaban 23 horas y media al día dentro de una celda, generalmente de dos por tres metros, que albergaba a tres personas: dos dormían en camas y una en el suelo. Las comidas eran pasadas por debajo de la puerta y, a la menor protesta por su mala calidad, les limitaban la salida al patio a sólo unos minutos cada quince días o un mes.

Las prisiones de máxima seguridad fueron construidas dando prioridad al factor seguridad y no al tratamiento penitenciario al que todo interno tiene derecho. Muchas de las celdas carecían de servicios higiénicos y las pequeñas ventanas, en forma de persianas, impedían la iluminación natural y la ventilación. Un interno recuerda que, en esos años del fenómeno del niño, la celda era un horno: «Por intervención de la Cruz Roja logramos que al menos la ventanita de 15 centímetros se quede abierta para que ventile».<sup>853</sup>

Se bloqueó toda comunicación con el exterior en procura de desconectarlos de la vida del país y, de ese modo, cancelar cualquier posibilidad de influir sobre los acontecimientos o enviar mensajes a los miembros de sus organizaciones. Sólo los familiares directos, previa «carnetización», podían verlos. Para hacerlo, pasaban por registros corporales claramente vejatorios que incluían, en el caso de las mujeres, revisiones vaginales.

La visita discurría por locutorio, una vez al mes y por media hora: «Ocho años por el locutorio, no poder tocar a nuestros familiares, el sufrimiento era también castigo para ellos. La malla era de un centímetro cuadrado y era doble, ni nuestros dedos entraban». <sup>854</sup>

Así como para el trabajo se les negó todo material, para la escritura igual. No contaban con lápiz ni papel y menos con luz eléctrica para la lectura. Dos internas lo cuentan de este modo: «No querían que trabajemos, estaba prohibido hasta el punto que si nos encontraban algo, una aguja, algo que sirva para trabajar, nos castigaban quitándonos el patio 15 días»;<sup>855</sup> «estuvimos aisladas y prohibidas de todo y nos fue negado el derecho a trabajar, pensar, escribir, leer y comunicarse». <sup>856</sup>

La alimentación era muy deficiente. Varios testimoniantes coinciden en señalar que venía con heces de ratones, virutas de metal, vidrios molidos y que incluso escupían y orinaban sobre ella. A estas agraviantes prácticas, se sumaba la limitación de acceso a comidas complementarias que los familiares sí podían traer a otros internos en los días de visita. Esta deficiencia se extendía a las atenciones legales, sociales y de salud. Casi no había medicinas para el tratamiento y se incrementaron enfermedades como la tuberculosis.

Estas condiciones de total incomunicación dieron a la autoridad penitenciaria facultades ilimitadas. Su poder dentro del penal no era fiscalizado por nadie, lo que facilitó la multiplicación de los maltratos. Las requisas eran sinónimo de golpes. Si encontraban los alimentos del día, los arrojaban al baño o los dejaban regados por el piso. Las pocas cosas que tenían eran destruidas, quemadas. En algunas ocasiones, las lesiones eran graves, como en el caso de este interno que, en su testimonio, cuenta que un día:

[...] un señor me pasa una nota que decía «Amigo, estamos aquí presos y cualquier cosa que necesites estamos aquí para ayudarte». Sabía que no tenía visita. Esa nota la encuentra el policía, me pregunta quién te la ha dado, me saca de la celda, me lleva al frente y me comienza a pegar. Cada uno debe vivir por su cuenta así se mueran, me dijo. Me pegaba con una manguera envuelta con alambre. Yo estaba allí tirado en el piso y él apretando mi rodilla me daba con las dos manos en la planta de los pies. Me dejó bien enfermo. Recuerdo que no podía andar. Quince días estuve echado, no podía moverme. No me llevaron al tópico.<sup>857</sup>

Era frecuente también que en los traslados externos, conocidos como «lanchadas», los internos pasaran por un callejón oscuro donde recibían una golpiza y, enmarrocados, los arrojaban al carro sin saber cuál era el penal de destino. El trato dispensado no tenía, obviamente, ningún objetivo rehabilitador. Según los mentores del régimen, no bastaba con la supresión de la libertad sino que además había que castigarlos hasta el límite

<sup>853</sup> CVR. Testimonio 700400.

<sup>854</sup> CVR. Testimonio 700136.

<sup>855</sup> CVR. Testimonio 700136.

<sup>856</sup> CVR. Testimonio 700184.

<sup>857</sup> CVR. Testimonio 700461.

de su resistencia. Este sistema violó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos dadas por la Organización de las Naciones Unidas.

## 22.2. DETENIDOS Y TORTURADOS

Los maltratos y violaciones de los derechos humanos en contra de personas detenidas ocurrieron a lo largo de los veinte años de violencia subversiva. La dureza de la cárcel sólo es comparable por su gravedad con los hechos ocurridos en otras dependencias del Estado en los días que seguían a las detenciones, como inadecuadas condiciones en las que se cumplió la detención, así como los métodos de investigación a los que fueron sometidos los detenidos, que consistían en torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos hechos se produjeron en ambientes de la DIVICOTE, JECOTE, DIRCOTE, DINCOTE, bases y cuarteles militares, comisarías, jefaturas policiales y centros de detención provisional. Casi la totalidad de los testimoniantes revela haber sido objeto de alguna forma de tortura, lo que convierte a esta violación del derecho a la integridad física y psicológica en sistemática y generalizada, rasgos propios de los delitos de lesa humanidad. Se incluyen en esta parte los hechos ocurridos en dependencias policiales y militares, por ser lugares de detención mencionados constantemente en los testimonios de los internos.

### 22.2.1. Graves violaciones de los derechos humanos en dependencias policiales (DINCOTE, DIRCOTE, comisarías y jefaturas)

Los detenidos cuentan a la CVR que fueron ubicados en celdas pequeñas sin cama ni colchón. Se les privó de sus alimentos y, en muchos casos, no se les permitía utilizar los servicios higiénicos. Los mantenían durante varias horas con las manos hacia arriba o de cuclillas, o de pie con los ojos vendados contra la pared, con la finalidad de causarles una extenuación física. A esto se le llamaba «el ablandamiento», paso previo a la tortura. Una declarante señala que, al ser detenida y trasladada a la DINCOTE de Lima, fue ubicada en la celda número 8: «Yo estaba aislada, sólo había una rendija de diez por diez para que entrara el aire. Por varios días no me dejaron ir al baño, dormía con un periódico y una frazada que me llevó mi familia después». <sup>858</sup>

Otro declarante refiere que, durante su detención en la DINCOTE de la ciudad de Abancay, fue ubicado en una celda de un metro cuadrado: «Yo estaba solo en la celda, era de un metro cuadrado, no puedes estirar ni el pie; [era] chico y era oscuro, no tenía colchón, en el rinconcito era su baño». <sup>859</sup>

Otros testimonios dan cuenta de que sumergían a los detenidos en una tina de agua o los llevaban al mar e intentaban ahogarlos. Luego los devolvían a sus celdas completamente mojados, sin posibilidad de mudar de ropa y sin proporcionarles frazadas u otro tipo de abrigo.

En la DINCOTE de Lima, un declarante recuerda que «al tercer día me metían a un cilindro con Ace, luego me golpeaban en las yemas de las manos, luego me dijeron que me iban a hacer “el peluquero”, me arrodiillaban y con el zapato me golpeaban en el cuero cabelludo [...] sentía un dolor horrible [...] en dos momentos perdí el conocimiento [...] me ponían una frazada mojada y hacía frío». <sup>860</sup>

El fenómeno de la tortura se fue intensificando a medida que avanzaba el conflicto armado. Examinadas las modalidades empleadas, se advierte la forma rudimentaria de esta práctica en la década de 1980, pero se fue sofisticando en los años noventa al punto de casi no dejar huellas gracias a los envoltorios de jebes, sogas o frazadas que amortiguaban el impacto de los golpes:

[...] me llegaron a romper la costilla del lado izquierdo [...] colgaduras, fue después de dos días, primero eran golpes y después nos decían que todo lo que habían oído eran tonterías y que querían cosas más fuertes [...] No les satisfacía con lo que le decía [...] nos comenzaron a atar de las manos y a levantarnos, [las manos] hacia atrás, nos pusieron una especie de un material, un plástico, como jebe y nos comenzaron a amarrar y nos levantaron,

<sup>858</sup> CVR. Testimonio 700228

<sup>859</sup> CVR. Testimonio 700340.

<sup>860</sup> CVR. Testimonio 700473.

pensé que me habían roto los brazos, nos tenían en eso y jugaban con corriente, nos pasaban corriente en el cuerpo [...] nos tenían un rato ahí en el piso después de golpearnos y nos despertaban con corriente.<sup>861</sup>

Numerosos testimonios contienen los detalles de la aplicación de estas modalidades.

#### **22.2.1.1. «La tineada»**

Esta forma de tortura consistía en sumergir a la persona detenida en una tina llena de agua. Se la ataba de los pies con una cuerda sujetada en el techo. Luego, la persona era bajada a la tina de agua y subida sucesivamente. Una variante de esta modalidad agregaba el uso de una tabla a la que se ataba al detenido, desnudo y vendado, y se le echaba enseguida a la tina para sumergirlo una y otra vez en el agua.

En abril de 1993, cuenta un testimoniante detenido en Puerto Maldonado, que, al tercer día, cuando llegaron miembros de las Fuerzas Policiales del Cusco, empezaron a torturarlo:

[...] Ellos nos hicieron todo [...] primero la colgada con las manos atrás amarradas, con la finalidad que aceptaras lo que te estaban diciendo [...] Muchos tenían que reconocer por la tortura [...] detergente disuelto [...] lo que le llaman la tineada [...] y cargas eléctricas en los genitales [...] También quemaduras de cigarrillo que aún tengo las marcas [...] y golpes [...] Las secuelas ahora se van sintiendo [...] ellos nos dijeron que nos ibamos a pudrir en la cárcel y por eso no temían que sepámos sus nombres, hasta se sacaron la capucha, y nos decían conózcanme [...] Nos pegaban con libros, con varas [...] unos se hacían los buenos, y otros los malos.<sup>862</sup>

Una declarante relata que fue desnudada en la estación de la PIP de Chincha:

[...] luego que me sacan, escuchó que le dice uno al otro, sácale la ropa [...] me sacaron la ropa, me emmarcaron los pies, pensé que me iban a matar [...] me han levantado y me hundieron al agua ahogándome, me metieron totalmente en algo lleno como colgándome de manos atrás, he sentido que me han metido todo al agua sentí ahogarme, no aguantaba más luego me sacaban y me decían que sí, que tú has hablado en la radio.<sup>863</sup>

Y agrega: «[...] yo sentía, [que] me sumergían toda la cabeza dentro para que me ahogara, y como se daban cuenta de que yo no respiraba, me sacaron y me decían que me pasaba de viva y otra vez hasta que me atoraba».<sup>864</sup>

Al agua de la tina le solían agregar detergente, ají y hasta excrementos, lo que provocaba fuerte ardor en los ojos y la garganta cuando este líquido era tragado.

En una ocasión, narra un declarante, miembros de la PIP de Huaraz lo condujeron dicha dependencia, donde fue torturado de varias maneras. En una de ellas fue echado sobre una tabla de tal forma que su espalda tocaba la madera y su cabeza sobrepasaba el borde de la tabla, luego lo vendaron, envolvieron con jebes y ataron con una soga: «Se supone me pusieron al borde de la tina, y levantaban la tabla y mi cabeza entraba al agua y al sentir el agua uno siente, tenía sabor a podredumbre, heces, con Ace».<sup>865</sup>

#### **22.2.1.2. Palanqueada o pollo broster**

En esta tortura el detenido era colocado en posición decúbito ventral sobre el piso. Uno de los torturadores se sentaba sobre su cintura y le empujaba ambas manos hacia adelante; el otro colocaba la cabeza del detenido entre sus piernas, tomaba sus manos y terminaba de jalarlas hacia adelante a modo de palanca. El testimonio de un detenido en 1990 y llevado a las instalaciones de la Policía Técnica de Caraz, describe la forma en que fue golpeado y torturado:

[...] me tiraron al piso y me quitaron toda la ropa [...] Con los brazos hacia atrás comenzaron a torcérme los para adelante y en la planta de los pies uno con una vara comenzó a golpear [...] en el suelo, lo que le llaman la palanqueada o pollo broster, porque te ponen los brazos para atrás, uno se arrodilla, pone sus piernas entre tu cabeza y

<sup>861</sup> CVR. Testimonio 700568.

<sup>862</sup> CVR. Testimonio 700562.

<sup>863</sup> CVR. Testimonio 700567.

<sup>864</sup> CVR. Testimonio 700012.

<sup>865</sup> CVR. Testimonio 700493.

agarra los brazos y otro se sienta en tu espalda y empuja los brazos entre dos [...] uno jala y el otro empuja y otro me golpeaba en la planta de los pies.<sup>866</sup>

#### *22.2.1.3. La colgada o la pita*

Fue la forma de tortura más generalizada. Una de sus variantes consistía en colocar a la persona detenida, generalmente desnuda o envuelta en jebe, sogas o frazadas, con las manos atadas hacia arriba. La soga pasaba por una especie de polea ubicada en el techo que servía para levantar y bajar constantemente al detenido. Esta tortura se complementaba con golpes, manoseos, varazos e intentos de violación en el caso tanto de mujeres como de varones. Al respecto, un declarante cuenta que, en la PIP de Huaraz, una de las noches en que lo torturaban, fue trasladado a un ambiente en donde lo desnudaron, le ataron las manos hacia atrás y le envolvieron el cuerpo al parecer con un jebe: «Tenían, creo, algo en el techo porque yo no veía, me amarraron con hilo y estuve colgado con las manos hacia atrás [...] me preguntaban una y otra cosa que ni siquiera recuerdo, cada vez que venían y no hablaba simplemente daban un pequeño jalón al pie y te hacían gritar».<sup>867</sup>

Otro testimonio narra lo siguientes:

[...] me llevaron a otro ambiente donde había una cuerda amarrada al techo, me pusieron los brazos atrás, me vendaron, parecía cuero o jebe, los brazos cruzados hacia atrás, tenía enmarcados los pies, los cuales con la cinta del fusil chancaron las marrocas para que se ajuste lo máximo, yo sentía como si las marrocas me estuviera rompiendo los tobillos.<sup>868</sup>

#### *22.2.1.4. Descargas eléctricas sobre el cuerpo*

Las descargas eléctricas eran aplicadas en diferentes partes del cuerpo, especialmente en los genitales, los senos, dedos de las manos o plantas de los pies. Otros detenidos eran previamente desnudados y mojados. Y, en ocasiones, se envolvía a la persona en jebes, plásticos o frazadas y luego le aplicaban las descargas eléctricas.

En la JECOTE de Huaraz, un declarante relata que en «una oportunidad me han pasado como electricidad, con cable, me echaban agua, me parecía que era una toalla, una frazada, algo así, yo estaba desnudo, ellos me sacaban la ropa, después me han golpeado con esos cables que estaban con electricidad».<sup>869</sup>

Otra declarante refiere que fue detenida en julio de 1986 en la ciudad de Tarma por miembros del Ejército del cuartel de La Oroya y trasladada a la DINCOTE en Lima. En esta dependencia fue maltratada; la introdujeron en una tina con agua sucia y le pasaron corriente eléctrica: «te meten en el agua y después descargas eléctricas, en la vagina, en las manos y en la espalda»<sup>870</sup>.

Y otra recuerda que «el dolor es terrible y la descarga no es nada en comparación de las secuelas: se abren rojas las zonas afectadas, los pezones se te abren y sangran, uno no puede ponerse el brasier por el dolor, ni caminar bien».<sup>871</sup>

#### *22.2.1.5. Intentos de ahogamiento en el mar*

En 1993, un declarante fue torturado en repetidas ocasiones en la DINCOTE de Lima. Lo llevaban a la playa para interrogarlo e intentaban ahogarlo: «Nos ataron los pies con las manos y nos pusieron la frazada y nos soltaron al agua [...] Ellos agarraban las frazadas y nos soltaban y, cuando ya estábamos casi ahogados, nos sacaban y nos decían: "Bueno, ¿van a hablar o no?", teníamos que autoinculparnos [...] Tenía miedo de morir».<sup>872</sup>

---

<sup>866</sup> CVR. Testimonio 700563.

<sup>867</sup> CVR. Testimonio 700493.

<sup>868</sup> CVR. Testimonio 700563.

<sup>869</sup> CVR. Testimonio 700238.

<sup>870</sup> CVR. Testimonio 700041.

<sup>871</sup> CVR. Testimonio 700184.

<sup>872</sup> CVR. Testimonio 700568.

### 22.2.1.6. Violación sexual como forma de tortura

La violación sexual y la violencia sexual han sido utilizadas como formas de tortura tanto contra varones como contra mujeres. Un testimoniante detenido en la DINCOTE de Lima contó este pasaje particularmente dramático:

[...] después de eso [de tomar una taza de café que le dieron los policías] no podía contenerme, se me caían las lágrimas y luego me dijeron: «Te crees machito», ellos me sacaron la ropa y por el ano me metieron un palo, no sé qué más. Mientras eso sucedía, me decían que era terrorista, yo acepté todo, firmé papeles, me dijeron que iban a traer a mi madre y hermanos.<sup>873</sup>

Y una mujer narró que, cuando se encontraba detenida en la DINCOTE, fue trasladada a la playa en un vehículo junto con otros detenidos, la colocaron en el asiento delantero del vehículo y la desvistieron a la fuerza. Luego la bajaron y en la arena fue violada: «me violaron ellos y con sus armas. Estaba desesperada pensando que iba a morir, me senté en la arena con las piernas abiertas y los brazos doblados. Me insultaban todo el tiempo y sentía en todo momento el contacto de cuerpos. Estaban arrodillados sobre mí».<sup>874</sup> Luego la arrojaron al mar amenazándola con ahogarla si no confesaba, hasta que perdió el conocimiento.

En otras ocasiones, las amenazaban con violarlas, como ocurrió en la DINCOTE en julio de 1989:

[...] me amenazaban con violarme, me metían la mano en mis partes genitales y no uno, varios, no podía defenderme y como no podían violarme me vejaban y puso su pene por la cara, querían que abra la boca, es humillante y eso era cada vez que me interrogaban, yo tenía 18 años [...] Me decían «Terruca [subversiva]; no abres, con cuántos te habrás acostado» [...] Me decían que me iban a probar y que iba a probar lo que era rico y me cacheaban, puñetas en el estómago y en la espalda, golpes contra la pared y enmarrocada; tanto eran los golpes que arrojé sangre por la boca y la nariz.<sup>875</sup>

Otras formas de tortura practicadas fueron la del «teléfono» y «el potro». Muchas veces estas torturas se llevaron a cabo en ambientes especialmente preparados, lo que demuestra que constituyan una práctica usual, y también en jefaturas policiales y comisarías como la de San Martín de Porres.

### 22.2.2. Violaciones de los derechos humanos en dependencias militares (bases, cuarteles)

#### 22.2.2.1. Inadecuadas condiciones de detención

Los detenidos en la base militar de Chorrillos (DIFE) declararon haber sido ubicados en ambientes que anteriormente habían sido usados como establos para los caballos. En Juanjuí, los detenidos en el cuartel del Ejército fueron metidos en una especie de reservorio pequeño:

[...] Me pusieron en un hueco de cemento, era como un reservorio pequeño, estaba solo; en la noche me echaban agua, era puro cemento y como tenía mi cuerpo pegado a la pared me agarraban del cabello y me golpeaban contra el muro. Era un cuadrado, una especie de depósito donde se guardaba agua o algo. Estaba sentado, no podía estar parado.<sup>876</sup>

Y en el cuartel de Huánuco ocurría lo siguiente: «Me depositan en el calabozo que se llama el bote, es un hueco con tapa tipo buzón [...] Era pequeño, cuando estás sentado no podías estirarte tus pies, no lo puedes estirar, en cuclillas no más puedes estar».<sup>877</sup>

Con relación a los alimentos, a diferencia de la DINCOTE y otras dependencias policiales, las bases militares tenían asignadas raciones para los detenidos, sin embargo, los alimentos eran de mala calidad: «La comida [era] de la tropa, una comida de porquería que uno tenía que comer, pero, en fin, horrible, [...] Venía cuatro, cinco pescaditos, cabecita con espinas, como los que los traían eran los perros [...] ellos se lo comían todo».<sup>878</sup>

<sup>873</sup> CVR. Testimonio 700334.

<sup>874</sup> CVR. Testimonio 700008.

<sup>875</sup> CVR. Testimonio 700056.

<sup>876</sup> CVR. Testimonio 700488.

<sup>877</sup> CVR. Testimonio 700329.

<sup>878</sup> CVR. Testimonio 700569.

En las bases y cuarteles militares, al igual que en las dependencias policiales, ninguna autoridad fiscalizó las condiciones en las que permanecían los detenidos.

#### *22.2.2.2. Torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes*

Varios de los declarantes que permanecieron detenidos en alguna dependencia del Ministerio de Defensa señalaron que eran trasladados de una base o cuartel a otro, generalmente en helicópteros. En el trayecto, fueron objeto de intentos de lanzamiento de la nave. Otros aseguran haber sido lanzados atados de una cuerda. Al respecto, una declarante refiere que, cuando fue detenida junto con otras personas en mayo de 1982, fue trasladada a un cuartel en la localidad de Vizchongo, Cangallo, Ayacucho. Durante el traslado en el helicóptero hacia la base la empujaban y la jalaban preguntándole dónde estaban la guerrilla y las armas.

Un declarante, detenido en junio de 1992 cuando tenía 19 años, cuenta que, en el cuartel del Ejército de Juanjuí, fue torturado y arrojado a un río. Lo metieron a un costal de polietileno, atado con las manos hacia atrás y luego lo tiraron al agua:

[...] Yo sentía que flotaba, como el costal era de polietileno que demora en meterse al agua; claro que había oxígeno dentro, habrá demorado unos diez o quince minutos adentro del agua y sentía que flotaba, cada vez entraba el agua y se hacía pequeño el ambiente del oxígeno [...] no tenía las fuerzas para mover los brazos y comencé a agitarme cada vez más y era momento de botar pura agua, habré demorado en el agua, no sé, porque pierdo el conocimiento.<sup>879</sup>

Las secuelas de las detenciones y del encierro se manifiestan en la salud física de los internos. Padecen con frecuencia dolores a la columna, musculares, adormecimientos de las extremidades, tuberculosis, úlceras. Otros muestran los tabiques rotos, la visión debilitada y severos problemas bronquiales. Hay, igualmente, problemas de salud mental y otros de tipo familiar y social.

#### *22.2.2.3. Tortura psicológica*

Además de las torturas físicas, los detenidos también fueron sometidos a torturas psicológicas.

##### Detención de familiares (esposa, hijos, padres, hermanos)

El testimoniante dio la dirección donde vivía, pero al llegar la Policía encontraron el cuarto sin sus cosas, porque la dueña de casa las había retirado al enterarse de que estaba detenido. La policía detuvo al dueño de la casa, a su esposa y a su hija de 15 años y los llevaron a la comisaría de Jaén, donde los amenazaron con violar a su hija si no declaraban como ellos querían.<sup>880</sup>

Me amenazaban con que mi hijo iba a ir a parar al grupo Rodrigo Franco, y que si llegaba allí ya no lo iban a encontrar e inclusive yo iba a ir a parar a manos de ellos, y si llegaba a allí, ya nadie me iba a encontrar».<sup>881</sup>

El año de 1990, detienen a mi hermana Haydee Gómez Paquiyauri 11 días en la DINCOTE, esto para presionar a su hermano para que se autoinculpe.<sup>882</sup>

Ante mi rehusamiento, los policías pasaron a usar otro método del chantaje y la tortura psicológica, amenazando detener a toda mi familia y meter en prisión a mi esposa y a mi hijo a un albergue infantil, lo cual también rechacé; nos reunieron en un local acondicionado donde había en todos los alrededores micrófonos escondidos, a mi esposa y mi hijo de apenas tres años para que conversáramos sobre nuestra situación, y para que recapacitemos sobre nuestros hijos y familiares. Pero su treta tampoco les dio resultados porque lo que oían eran los reproches y las imputaciones e infamias que estaban cometiendo con nosotros, sin embargo, mi esposa y mi hijo seguían detenidos diez días en la misma celda.<sup>883</sup>

<sup>879</sup> CVR. Testimonio 700448.

<sup>880</sup> CVR. Testimonio 700608.

<sup>881</sup> CVR. Testimonio 700398.

<sup>882</sup> CVR. Testimonio 700212.

<sup>883</sup> CVR. Testimonio 750095.

### Amenazas de tortura contra familiares

[...] La Policía me detiene cuando vivía en Comas, en el kilómetro 18 y medio; primero han detenido a mi esposa <R. I. T. C>, a mis dos hermanos <A. L. R.> de 22 años y <F. L. R.> de 24 años, a mi padre <H. L. R.> para chantajearme; el pretexto era que me autoinculpara.<sup>884</sup>

Los maltratos y torturas combinaron golpes físicos – desde patadas en todo el cuerpo, ser colgados de los brazos, y algunos sometidos a electricidad – y maltratos psicológicos: chantajes como detener a sus padres. El declarante manifiesta «muchos declararon y afirmaron lo que la Policía quería escuchar».<sup>885</sup>

Ingresaron a mi domicilio con armas de largo alcance y lo detuvieron junto con su hermano menor, los golpearon, no les permitían hablar, ni explicaban el motivo de detención. Asimismo le golpearon a su madre por interceder en la detención de sus hijos. [Un policía dijo, refiriéndose a su esposa]: «A esa chola también hay que llevarla. Son terroristas. Si hablan, hay que matarlos. Si nos siguen, hay que desaparecerlos».<sup>886</sup>

### Mostrar a familiares desnudos o en momentos en que eran torturados

Un testímonio cuenta que fue conducido junto a su esposa al mar, donde fue desnudado y duramente torturado, al igual que su esposa con los ojos vendados y las manos amarradas a la espalda. Le hicieron escuchar cuando interrogaban a su esposa y le decían: «Habla terruca de mierda, porque tu esposo ya nos dijo la verdad». Él alcanzó a oír que les respondía, «Yo no sé nada, no sé nada, si mi esposo ha hablado, el problema háganlo con él, yo quiero ver a mis hijos». Y después le quitaron la venda de los ojos y vio que su esposa y él estaban completamente desnudos, boca abajo y con las manos atadas hacia atrás, sobre la arena. Uno de los policías le dijo: «Mírala, compadre, no queremos hacerte daño, solamente quiero que nos digas dos cosas [...] y te vamos a dar libertad a ti y a tu señora».<sup>887</sup> A al ver que no tenía nada que decir, violaron sexualmente a su esposa y a él lo golpearon duramente hasta que perdió el conocimiento. A su esposa la dejaron en libertad luego de 11 días, después de haber sido ultrajada en presencia del declarante.

Otro testímonio narra que «un día en mi presencia violaron sexualmente a tres chicas, a cada una la violaron más de treinta soldados, luego las mataron cortándoles con una motosierra sus miembros y desaparecieron sus cuerpos».<sup>888</sup> El declarante fue enseguida amenazado con ser asesinado de la misma forma.

### Escuchar los gritos de otros torturados

[...] en la JECOTE le torturaron, le torcieron los brazos por encima de la cabeza, le colgaron, le trajeron de ahogar y le aplicaron descargas eléctricas en los genitales. Escuchaba ruidos y gritos, por lo que cree que a otros detenidos también se les torturaba.<sup>889</sup>

### Escuchar el llanto de sus hijos menores

Un declarante precisa que, además de la tortura física, le aplicaron tortura psicológica, haciéndole escuchar grabaciones en las que sus hijos lloraban y le pedían que dijera la verdad: «Han sido cinco días de tortura física, después viene la presión psicológica, me decían “si tú no reconoces, se va a joder tu padre y tus hermanos y el carro se lo vamos a quitar”. Es allí cuando me autoinculpo y acepto que apoyaba».<sup>890</sup>

Otra detenida declara:

[...] [En la DINCOTE] le dijeron que le habían hecho seguimiento, le mostraban fotos entrando a la clínica con su papá, otra foto en Zárate en una capilla, pero igual la detuvieron durante un mes: no tuvo maltrato físico, pero sí maltrato psicológico, la amenazaban con llevar detenido a su padre, quien se encontraba internado en la clínica Internacional, y su padre murió cuando estaba aún en la DINCOTE.

<sup>884</sup> CVR. Testimonio 700219.

<sup>885</sup> CVR. Testimonio 510195.

<sup>886</sup> CVR. Testimonio 700823.

<sup>887</sup> CVR. Testimonio 700593.

<sup>888</sup> CVR. Testimonio 700596.

<sup>889</sup> CVR. Testimonio 700808.

<sup>890</sup> CVR. Testimonio 700619.

El maltrato psicológico consistía en hacerme escuchar el llanto de mi hijo, a quien todavía estaba lactando, y cuando solicitaba que me llevaran donde mi hijo me decían que no estaba allí, insistiendo siempre para que diga dónde estaba.<sup>891</sup>

#### *22.2.2.4. Condiciones de salubridad en los penales*

El hacinamiento, la estrechez de las celdas y la poca atención que la autoridad penitenciaria ponía en los servicios hicieron que las condiciones de salubridad de las cárceles fueran las peores. Una detenida en la base militar de La Joya manifiesta con rabia que «hubo condiciones siniestras» y señala que, en su celda de detención, debía llamar a un custodio para que jalara la palanca del inodoro luego de hacer sus necesidades fisiológicas, pues ésta no se encontraba a su alcance; igualmente tuvo que depender de él hasta para que le alcanzara toallas higiénicas.

En algunos casos, la cohabitación se tornó problemática. En Chorrillos, una testimoniante relata que ella y su compañera de celda se vieron en apuros cuando la privaron del agua teniendo a un bebé en la celda. Situaciones como éstas se presentaban tanto en penales acondicionados como en los que fueron construidos para internos por terrorismo. Las celdas no consideraban la necesidad de servicios higiénicos.

A continuación algunos testimonios revelan esta situación:

#### Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Miguel Castro Castro (Canto Grande)

La colocaron en una celda con dos personas en un primer momento y después de algunos días con cinco. Además de la incomodidad de la que sufrían, no les permitieron tener agua en la celda.<sup>892</sup>

Estaban en celdas bipersonales, pero era compartida por tres personas en un espacio de un metro y medio por tres. El baño estaba en la misma celda.<sup>893</sup>

Estuve reducido, a tres internos por celda, en una celda pequeñísima que habían hecho de dos metros cuadrados. Allí dormías, allí comías, allí te bañabas, allí defecabas, hacías todas tus necesidades allí, allí trabajabas.<sup>894</sup>

#### Establecimiento Penitenciario de Régimen Cerrado Especial de Mujeres de Chorrillos

Había habido una interna que había dado a luz, tenía una bebita y la ponen a vivir conmigo. ¡Imagínese! Si ya era difícil acostumbrarnos a vivir en un espacio tan reducido, encerradas 23 horas y media, mucho más difícil se nos hizo vivir con una criatura, con una recién nacida. A veces, a la bebita le daba cólico de gases. No teníamos nada, absolutamente nada que darle, porque la chica no tenía ni termo, porque no nos permitían ni termo. En la jarra recibíamos agua hervida, porque venía la jarra del medio día, nos daban una jarra de agua.<sup>895</sup>

Cuenta una interna que, en una celda diseñada para dos personas, vivían seis. Eran celdas oscuras y húmedas y tenían incorporado el baño: «También son muy frías, porque las ventanas que se encuentran enfrente de cada una, han sido diseñadas de tal forma que el aire ingresa por el suelo; sólo le daban dos frazadas a cada interna en el invierno».<sup>896</sup>

Totalmente oprobioso [...] Comienza a funcionar el año celular [...] Metida en un cuartito chiquitito para dos personas [...] Después me van hacinado con tres personas más, una dormía en el suelo, así rotábamos. No había ningún tipo de aseo... Totalmente represivo, terrible, no podíamos dar un paso más acá o más allá [...] La cárcel de Chorrillos era la más represiva y retrógrada en el trato. Dice que era como una especie de venganza.<sup>897</sup>

<sup>891</sup> CVR. Testimonio 700021.

<sup>892</sup> CVR. Testimonio 700003.

<sup>893</sup> CVR. Testimonio 700756.

<sup>894</sup> CVR. Testimonio 700069.

<sup>895</sup> CVR. Testimonio 700020.

<sup>896</sup> CVR. Testimonio 700124.

<sup>897</sup> CVR. Testimonio 700748.

### Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Ica (Cachiche)

Durante 15 días no les fue dada agua ni ropa; las presas que se encontraban en dicho penal, compadeciéndose, ayudaron a las recién llegadas brindándoles comida, agua y sus propias ropas.

En el mes de septiembre llega al penal, en calidad de director, un capitán llamado Canchesto Vargas, quien [...] nos restringía el agua, la comida y las visitas, tapió todas las ventanas y, cuando producto de ello se desató una epidemia entre las internas [...].<sup>898</sup>

### Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Trujillo (El Milagro)

Allí no había penal de máxima seguridad, pero había un pabellón adecuado, era el tercer piso y cada celda que era para cinco, habíamos quince [...] me tocó dormir cerca al baño. [...] la celda era aproximadamente de dos metros y medio por tres, había cinco camas, dormían dos internos en cada cama y cinco dormían en el piso. Dentro de la misma celda estaba el baño.<sup>899</sup>

### Penal de Chiclayo

Cuenta un testimoniante que este penal, ubicado a tres cuadras de la plaza de armas, había sido anteriormente una hacienda y que sus caballerizas habían sido acondicionadas para los sentenciados a penas altas: «Eran de este tamaño, donde cabía una cama. Era la cama y un pedacito así, donde solamente se podía parar. Lo único que habían hecho nada más era ponerle piso, cemento y tenían la forma de una tumba, no tenían ni baño, nada, o, sea una no se podía parar dentro de la celda, no se podía caminar dentro de la celda».<sup>900</sup>

En estas celdas permanecían 23 horas y media del día: «Nos sacaban en la mañana, media hora solamente para bañarme, hacer nuestras necesidades, lavar nuestra ropa y media hora de patio que nos correspondía. En la celda, teníamos que tener un bacín. En ese lugar, estábamos todo el día, comíamos, dormíamos y hacíamos nuestras necesidades. ¡Era terrible!».<sup>901</sup>

### Establecimiento Penitenciario de Picci (Chiclayo)

Una testimoniante declaró que estuvo detenida bajo «duras condiciones de carcelería». Todos permanecían en celdas bipersonales oscuras que estaban en el sótano y no se le permitió salir a tomar sol durante tres meses. No tuvo visitas porque estaban prohibidas, tampoco se le permitía leer ni hacer ningún trabajo. «Los alimentos eran pésimos y no había atención médica».<sup>902</sup>

Con respecto al trato y condiciones carcelarias, una testimoniante dice que estaba en una celda bipersonal: «Teníamos media hora de patio, no teníamos luz en el día y era un lugar oscuro [...] No teníamos agua [...] uno tenía que buscar su envase para recoger el agua, un envase de cinco galones, o sea que equivale a treinta litros [...] para demorar dos o tres días para utilizar para bañar, tomar [...]».<sup>903</sup>

### Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Régimen Cerrado de Máxima Seguridad de Yanamayo (Puno)

No había agua. Venía de seis de la mañana a diez de la mañana, pero había veces que no había agua, por ejemplo, en tiempos de heladas. Se congelaban las cañerías y no llegaba agua. A veces nos pasábamos con dos baldecitos. Poníamos los bidones, se cerraba, por donde desaguaba el patio, cerraba y se acumulaba ahí en el patio. De eso se recogía con los bidones para echar en los baños y era vivir con dos baldecitos de agua, hasta seis días.<sup>904</sup>

Vivíamos dos personas en una celda [...] para asearnos. Lo usábamos para lavar los utensilios que usábamos para comer y después para echar en el baño, porque ahí mismo nos ocupábamos en el baño y peor usábamos el agua para lavar las cosas o para hacernos un lavado, así ligero y echábamos con las justas unas tacitas de agua y

<sup>898</sup> CVR. Testimonio 700098.

<sup>899</sup> CVR. Testimonio 700784.

<sup>900</sup> CVR. Testimonio 700084.

<sup>901</sup> CVR. Testimonio 700084.

<sup>902</sup> CVR. Testimonio 700755.

<sup>903</sup> CVR. Testimonio 700767.

<sup>904</sup> CVR. Testimonio 700020.

el olor del baño era horrible. Era insoportable el olor, le decíamos: «Sáquennos, porque el olor del baño es insoportable, mire que no hay agua, aunque sea al pasadizo». Eso era lo más terrible, estar encerrados ahí con el frío y el olor del baño.<sup>905</sup>

Si llovía había agua; si no, nada. Poníamos nuestro balde esperando a Dios que nos dé agua para lavarnos la cara.<sup>906</sup>

### Base Aérea de La Joya (Arequipa)

En la base militar hubo condiciones siniestras, el principio de que no viéramos, no escucháramos, que no habláramos, es decir de eliminar los sentidos y toda la capacidad para trabajar, para pensar, era el mismo objetivo que tienen en Guantánamo; no poder jalar la palanca del excusado cuando lo necesitaba, que no pudiera hacer uso del agua cuando me fue necesario, de poder echarme cuando tenía ganas, sino actuar como un animalito, dependiendo de otro, del que recluye, incluso para usar una toalla higiénica [...].<sup>907</sup>

## 22.3. INTRAMUROS

### 22.3.1. La cárcel como escenario del conflicto armado

Como era previsible, los integrantes del PCP-SL, a medida que fueron cayendo presos, procuraron trasladar el partido a la cárcel. Lo que no estaba en los cálculos de nadie es el valor político que Abimael Guzmán asignaría a la permanencia de sus partidarios tras las rejas. No solamente instrumentalizaría la vida exigiendo «cuotas de sangre» sino también la libertad. La cárcel era una línea más de batalla, quizás privilegiada por su visibilidad y contacto con el Estado; en ella, el partido debía demostrar su consecuencia, resistiendo los rigores del régimen y mitificando el encierro. Pese a los altos muros que rodean las prisiones, los integrantes del PCP-SL se las ingenaron para estar continuamente en el ojo de la prensa y de la opinión pública. No fueron pocos los gestos de disciplina y de superioridad mostrados con el fin de no ser vistos como presos comunes, pero también como forma de enviar mensajes de sacrificio hacia los que combatían fuera.

La estructura del partido se mantenía de una forma tan jerarquizada que incluso en El Frontón los miembros del «Ejército Guerrillero Popular» (EGP) recibían una mejor alimentación para estar más fuertes en caso de que hubiera enfrentamiento. Pero de toda su rutina carcelaria la educación fue la expresión más fuerte. Las «escuelas populares» que se habían constituido desde años antes en la ciudad y en el campo como mecanismos de adoc- trinamiento y de integración de militantes a partir del análisis de sus problemas locales y como instrumento de distribución de cuadros en los organismos autogenerados y en el propio EGP, les sirvió en la cárcel como eje de irradiación de su ideología y de captación de nuevos militantes. Dedicaban muchas horas a la lectura y al adoc- trinamiento, procurando sobre todo nivelar políticamente a la gente que ingresaba con una formación muy pobre. Rendían exámenes en muchos casos con una inconfundible letra de imprenta, sobre materias propias de su ideología. El marxismo, en versiones rudimentarias, era impartido con la certeza con que se transmiten dogmas pétreos en un escenario acrítico. En Castro Castro, durante los «jueves culturales», hombres y mujeres se reunían en uno de los pabellones y representaban escenas muy realistas de asesinato de policías o derribamiento de torres, coronadas por discursos políticos de aleccionamiento, en una especie de escalofriante teatro pedagógico.

Sobre la forma de vida de los subversivos en El Frontón durante los primeros años del conflicto armado, cuenta W. Zabarburú, ex interno:

El PCP-SL organizaba su vida como partido y tenía una férrea disciplina, y bastante eficaz, al interior. Diariamente se podían ver grupitos pequeños que se encerraban y hacían escuelas, escuelas de militantes, que leían, discutían, y tercero, el PCP-SL desarrolló lo que ellos llamaban formas de lucha, pues ellos consideraron la prisión como la luminosa trinchera de combate, pues así como había combatientes que luchan en el campo, en la ciudad, ellos luchaban dentro de la prisión y desarrollaban la guerra en condiciones de prisión, contra el Estado. Consistió en desarrollar una permanente, sistemática y cotidiana acción de agitación [...] El PCP-SL andaba en permanente guerra con el Estado.

<sup>905</sup> CVR. Testimonio 700020.

<sup>906</sup> CVR. Testimonio 700748.

<sup>907</sup> CVR. Testimonio 700183.

En la cárcel, el partido era la estructura que cobijaba a todos y la escuela el medio de generar cohesión ideológica, autoafirmación en la presunta justicia de su causa y lealtad a los líderes, especialmente a Abimael Guzmán, considerado depositario de la última palabra en todos los aspectos de la vida. Fundidos en el partido e indiferenciados por la ideología, casi no quedaba espacio para la vida privada y, por consiguiente, para ensayar alguna duda razonable sobre su pasado o su presente.

### 22.3.2. La doble cárcel

La extrema intolerancia mostrada por el PCP-SL desde sus inicios, se reprodujo en las relaciones con los otros internos. Un interno cuenta que, desde que llegó, fue presionado para organizarse; en una oportunidad, lo amenazaron con golpearlo si no lo hacía y tuvo que pedir cambio al pabellón piloto. Este testimonio coincide con el de dos internas que, en un penal distinto, relatan el infierno que fue soportar las discusiones entre «acuerdistas» y «felicianistas», y resistir el trato hostil por no formar parte de sus grupos: «Por qué no piensas como nosotras, eres una renegada, una arrepentida». «Hay personas en los otros pabellones que están sometidas por el temor a que las traten de arrepentidas. No las dejan desenvolverse por sí mismas», relatan. El penal, además de privar de la libertad al procesado o sentenciado y someterlo a partir del año 1992 a reglas extremadamente duras, se convirtió en un escenario de doble carcelería para muchos de los internos. No sólo había que soportar el encierro, sino, además, los actos continuos de hostilización que los presos por delitos de terrorismo y traición a la patria del PCP-SL realizaban en contra de los que no pensaban como ellos.

Aproximadamente unos sesenta presos provenientes de partidos de izquierda como Patria Roja, Bandera Roja o MIR fueron, a partir de 1981, en El Frontón y Lurigancho, hostigados de diversas maneras, dada la proximidad física y la ausencia de control en lo que los internos denominaron «la doble cárcel», en vista de que se trataba de un castigo adicional.

Después de El Frontón llegamos a diferenciarnos físicamente de ellos, separándonos y dividiéndonos en un lugar que decíamos «El Chaparral». Eso significaba salir del pabellón azul, porque éramos sometidos a cierta coacción de parte del PCP-SL. Había mucha presión psicológica por imponer su móvil y género de vida, cuando en realidad no se condecía con cómo debía ser la práctica de los detenidos políticos. Pero eso yo estoy hablando del 82, 83.<sup>908</sup>

Otro testimonio agrega: «Los senderistas [miembros del PCP-SL] tenían un delegado de sus filas que dirigía el pabellón y que algunas veces llamaba a todos los reclusos a gritar, cantar o reunirse».<sup>909</sup> Señala que, si bien algunas veces participaba en dichas actividades, en otras ocasiones hallaba la forma de evitarlas, argumentando que estaba enfermo a causa de la comida. Cuenta además que «todos hacían limpieza, todos cocinábamos, todos cargábamos agua para vivir, nadie se exceptuaba salvo algunos dirigentes, como por ejemplo [Osmán] Morote; a ellos prácticamente había que atenderlos como a patrón».

La hostilización sistemática tenía como objetivo aplicar presión sobre los internos para que cerraran filas con el PCP-SL. En algunos casos, la intolerancia tenía forma de agitación y propaganda pero, en otros, recurrieron al insulto, al chantaje y al amedrentamiento, incluso de familiares que llegaban al penal en los días de visita: «Llegué a Castro Castro en abril de 1995, ingresando al pabellón 2 B, donde permanecí todo el año 1995 y 1996 y todo este tiempo sufri presiones de parte de los internos organizados. En ese pabellón a veces me decían que era felicianista o Proseguir; luego fui trasladado».<sup>910</sup>

Otra interna cuenta que pidió estar en una celda sola. Al saber esto, las internas le comenzaron a decir «traidora» y iban a hacer escarmiento con ella, porque era «un mal ejemplo y otras chicas más podían seguirme [...] Su política era que todos me vieran mal, la Policía, el director y ellos mismos por mala conducta y hablaban con los demás internos, corrían todo tipo de informe, que era una soplona, que era la [...] me amenazaban, me insultaban y también comenzaron a hostigar a mi familia».<sup>911</sup>

Una interna relata que, al llegar al penal, fue acosada por una reclusa que la conminó a definirse como miembro del PCP-SL. Ante su negativa, fue aislada y acusada de tener TBC: «Ellas marcaron todos mis utensi-

<sup>908</sup> CVR. Testimonio 700447.

<sup>909</sup> CVR. Testimonio 100146.

<sup>910</sup> CVR. Testimonio 700847.

<sup>911</sup> CVR. Testimonio 700398.

lios para la comida y me prohibieron realizar cualquier otra actividad. Era considerada como nada».<sup>912</sup> El examen médico que se hizo para descartar la TBC arrojó negativo. Sólo las oraciones, dice, la ayudaron a soportar las humillaciones.

Todo esto ocurría en el pabellón B, donde se encontraban concentradas las reclusas que pertenecían al PCP-SL.

[...] Creen que tienen la verdad absoluta, pero hay otras verdades. Creen que la realidad es la misma, y no es así. Es para volverse loca [...] se creen dioses, repiten sus consignas.

Otra interna cuenta que fue recluida en el penal Miguel Castro Castro, donde estuvo 15 meses. Allí:

[...] me di cuenta que mi apreciación del 87 fue superficial, y que realmente lo que hay en el penal era una dictadura y no un mundo justo, y fui más presa de ellas que de la Policía. Si no pensabas igual que ellas, tu pasabas a ser un enemigo, si tú preguntabas estabas en contra y ya me encontraba embarazada, en esa época tenía que cuidarme de la Policía y de las internas.<sup>913</sup>

El PCP-SL desarrolló, además, una campaña de hostigamiento y provocación sistemática contra la GR, incluso contra los empleados civiles. Esta hostilidad incluía gritos cotidianos de consignas como «Guardia Republicana, carne de cañón», caldeando los ánimos de los guardianes, ya bastante alterados por los aniquilamientos a mansalva de miembros de las Fuerzas Policiales en las calles de Lima y otras ciudades.

#### 22.3.3. Los desvinculados

Pese al predominio del PCP-SL dentro de las cárceles y la presencia menos numerosa y menos beligerante de integrantes del MRTA – quienes, además, reclamaban para sí un perfil político propio –, se dieron procesos de desvinculación ideológica y partidaria. Sobre la base de más de 100 mil testimonios tomados en los penales, se pudo comprobar que aproximadamente el 50% de los internos se ha desvinculado de las organizaciones subversivas a las que pertenecieron. Se trataba de gente que ha tomado distancia ideológica y partidaria del PCP-SL o el MRTA en algunos casos antes de caer detenidos pero, en la mayoría de ellos, mientras purgaban sus condenas. Aseguran en sus testimonios que ahora responden por sí mismos y que están dispuestos a pasar a un nuevo momento histórico en el que la «lucha armada» ya no tiene lugar.

En algunos casos, la desvinculación se fue produciendo a medida que descubrieron la crueldad de muchas de las acciones calificadas de revolucionarias y que no eran sino asesinatos, en su mayoría de población civil indefensa. Comprobar que el partido asesinaba los alejó para siempre y los llevó a recusar el proyecto violentista. En otros casos, fueron las discrepancias ideológicas el móvil del alejamiento. Pero también hubo quienes se acogieron a los beneficios del arrepentimiento para ganar su libertad.

El PCP-SL impuso sus reglas de organización pasando por encima de las circunstancias individuales de los internos. En la comida, por ejemplo, había quienes, por sus dolencias gastrointestinales, requerían de una dieta especial que sus familiares les traían con esfuerzo, sin embargo, todo era centralizado a la fuerza: «Pedí mi traslado de pabellón, pues no compartía la forma de vida con los senderistas [miembros del PCP-SL], sobre todo el compartir con las personas del pabellón todo lo que mis visitas me traían».<sup>914</sup>

No coincidir con sus ideas o retrasarse en las tareas encomendadas era motivo para sufrir sus agresiones, como se comprueba en los dos siguientes testimonios:

Luego se conformó un grupo de veinte internos que no querían mantenerse en ese pabellón, ya que era organizado, por lo que pidieron al director del penal que los cambiase de pabellón. Ante esto los organizados de ese pabellón los agredieron físicamente.<sup>915</sup>

Cuando es trasladado al penal Miguel Castro Castro, los subversivos organizados lo golpearon por no aceptar órdenes y acciones que tomaban como grupo, y que además no es el único caso de este tipo, por lo que el INPE lo reubicó en el 6A, pero allí lo rechazaban y se ha reubicado en el 6B.<sup>916</sup>

<sup>912</sup> CVR. Testimonio 700002.

<sup>913</sup> CVR. Testimonio 700023.

<sup>914</sup> CVR. Testimonio 700840.

<sup>915</sup> CVR. Testimonio 700839.

<sup>916</sup> CVR. Testimonio 700812.

La experiencia más interesante de desvinculación se dio en los pabellones piloto de Castro Castro. A fines de 1994, unos cincuenta internos decidieron desvincularse de los «organizados» y de sus prácticas políticas. Ellos encontraron en los agentes pastorales de diversas iglesias el apoyo y la comprensión que requerían para afianzar su desvinculación. Hoy son aproximadamente doscientos los que están en esta situación. Para el propósito reconciliador de la CVR esta experiencia es enormemente aleccionadora. Un interno del penal Castro Castro reflexiona de esta manera: «Había tres prisiones, la prisión de las rejas de la autoridad, la prisión de los grupos organizados y la prisión mental para salir de las ideas que te habían conducido a las rejas, por eso la primera libertad que conquisté fue la libertad de mi conciencia dentro de las tres cárceles».<sup>917</sup>

En los primeros años de la década del ochenta, había población penitenciaria que pertenecía a grupos de izquierda no vinculados al PCP-SL. Un testigo cuenta que «lo que no se sabe es que el grupo de izquierda nunca llegamos a comulgar con la metodología del PCP-SL. Hacíamos una lucha interna al interior de los penales, o sea, armamos un comité de presos políticos al interior, de una lucha ideológica política bien fuerte por reprobar esos métodos que nos parecían bárbaros y que no tenían nada que ver respecto a las leyes humanitarias. [...] El comité creció hasta tener 187 participantes a fines del 84. Esto provocó una tensión fuerte con los senderistas [miembros del PCP-SL] que desarrollaron una política como la del Frontón: considerar que Lurigancho también era una trinchera de combate». <sup>918</sup> William Zabarburú manifiesta que «la separación de los senderistas [miembros del PCP-SL] fue importante y premonitoria porque logró salvar la vida de los “compañeros”, pues sospecha que, cuando se dio la masacre de los penales, pudieron haber muerto todos, también los no senderistas [los que no eran miembros del PCP-SL]. Dice él que hay testimonios de quienes estuvieron presos en el otro pabellón durante esos momentos que fueron testigos silenciosos, casi impotentes para evitar lo que ocurrió en el pabellón industrial.

## 22.4. OBLIGADO APRENDIZAJE

### 22.4.1. El INPE y las políticas penitenciarias

En 1980, cuando los establecimientos penitenciarios del país empezaron a albergar internos e internas acusados por el delito de terrorismo y luego por traición a la patria, la seguridad y la administración de los penales se encontraba a cargo de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). El régimen que se aplicaba a dichos internos era similar al de los acusados por delitos comunes, es decir, tenían derecho a permanecer en los patios, las visitas no se encontraban restringidas, etc. En 1991, con la dación del decreto legislativo 734, se autorizó el ingreso de las Fuerzas Armadas a los establecimientos penitenciarios, «cuando la situación imperante en dichos establecimientos provocadas o propiciadas por acciones de la delincuencia terrorista desbordó el control del personal encargado de la custodia interna y externa de los mencionados Centros de Reclusión». Posteriormente, en 1992, el régimen penitenciario varió con la dación del decreto ley 25475, restringiéndose el ejercicio de los derechos de los internos e internas acusados por los delitos de terrorismo y traición a la patria. Este decreto dispuso también que la PNP se haría cargo de la seguridad en los establecimientos penitenciarios. El personal del INPE pasó al área administrativa de los penales. El Órgano de Tratamiento de cada penal lo integró únicamente personal del INPE, y la seguridad interna y externa corrió a cargo de personal policial.

Luego de varios años, progresivamente, personal del INPE recobró las labores propias de vigilancia de la seguridad en los penales, empero, ya se veían casos en los cuales aquellas labores eran compartidas por su personal y el de la PNP, generalmente en penales ubicados en el interior del país, como es el caso del penal de Huamancaca en Huancayo. Los penales que albergaban a un gran número de internos por delitos de terrorismo y traición a la patria, los de Lima principalmente, estuvieron a cargo de la PNP, que aplicó criterios de seguridad máxima.

### 22.4.2. Los comités de familiares

La experiencia de los comités de familiares de internos por delitos de terrorismo y traición a la patria en el Perú se inició en el departamento de Lima, cuando la mayoría de internos estaba recluida en el penal de El

<sup>917</sup> CVR. Entrevista a interno en taller de reflexiones sobre reconciliación en el penal Castro Castro, noviembre del 2002.

<sup>918</sup> CVR. Testimonio 700447.

Frontón. No se tiene una evidencia de que estos comités se crearan en los departamentos del interior del país, a pesar de que un número también considerable de internos e internas se encontraba recluido en penales como el de Ayacucho.

El primer comité que se formó en Lima fue el Comité de Familiares de Presos Políticos. Durante los viajes en lancha hacia El Frontón los días de visita, advirtieron que varios de ellos provenían del interior del país, muchos tenían poco o nulo conocimiento acerca de aspectos legales concernientes con el proceso judicial de sus familiares y muchos otros volvían en su busca luego de una larga temporada en la que por razones económicas no habían podido viajar. En estas circunstancias comenzaron a agruparse, con la finalidad de apoyarse en aspectos legales y económicos principalmente.

No todos consideraron conveniente sumarse a este comité. Un grupo pequeño de familiares buscó diferenciarse de los que agrupaban a familiares de miembros del MRTA, y especialmente de los llamados organismos generados del PCP-SL. Ellos se dirigieron a la Comisión Episcopal para buscar ayuda económica y legal y, en septiembre de 1982, formaron el Comité de Familiares de Presos Políticos de Izquierda Unida Independiente, integrado por treinta personas aproximadamente. Este comité también brindó ayuda legal a familiares de provincias, especialmente a los que eran analfabetos. Formó comisiones para acudir a los medios de comunicación o hacer seguimiento de los procesos judiciales. Asimismo, consiguió materiales para la realización de trabajos manuales y, en general, desarrolló acciones para mejorar la calidad de vida de sus familiares presos. Este comité funcionó ocho años.

Posteriormente se crearon otros comités o agrupaciones de familiares de personas internas en los establecimientos penitenciarios, como el Comité de Familiares de Presos Políticos, Prisioneros de Guerra y Desaparecidos, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio (AFADEVIG) y la Asociación de Familiares de Presos Políticos del MRTA, que actualmente realizan labores de apoyo legal, primordialmente de sus familiares detenidos. Cabe señalar también que los familiares de internos que alegan ser inocentes de los delitos de terrorismo y traición a la patria por los que fueron condenados han estado y están presentes en la lucha por lograr la excarcelación de sus familiares y mejores condiciones de reintegración a la sociedad, aunque no estén formalmente constituidos como asociación.

#### 22.4.3. Reconciliación y propuestas

En octubre de 1993, Abimael Guzmán admitió que su captura y la de varios miembros de la dirección del PCP-SL había constituido un golpe muy duro a su organización que afectaba sustancialmente las condiciones para continuar la «guerra popular». Públicamente, Guzmán propuso un acuerdo de paz. Hoy esa propuesta ha sido reformulada como «solución política a los problemas derivados de la guerra», y en ella se plantea la revisión de sus expedientes y acceso al régimen penitenciario común; amnistía general en función a una futura reconciliación nacional; cierre de los penales de Yanamayo, Challapalca y base naval del Callao; revisión de la legislación antiterrorista, etc.

En la actualidad hay aproximadamente 2 mil internos por terrorismo con condenas diversas, incluida la cadena perpetua. En mérito a una sentencia del Tribunal Constitucional, a muchos de ellos se les está volviendo a juzgar. Los problemas en la administración de los penales, en el régimen y el tratamiento penitenciarios no han cesado, como no han cesado tampoco las actividades del PCP-SL fuera de los penales, lo que haría presumir una reactivación de la violencia y que las cárceles vuelvan a ser un escenario del conflicto. En este clima de tensión y desasosiego, la CVR debe tratar el tema de la reconciliación a sabiendas de las incomprendiciones que esta parte de su trabajo despierta.

El decreto supremo 065 dice: «La Comisión [...] propenderá a la reconciliación nacional. La liberación mediante indulto y derecho de gracia de cientos de presos inocentes injustamente procesados y condenados por delitos de terrorismo ha sido un paso importante en este sentido. Del mismo modo, la recuperación de la democracia significa de por sí la normalización del Estado de Derecho y, por tanto, la sujeción a normas y resoluciones del derecho interno e internacional que tienen y tendrán un impacto en la reconciliación. A esto hay que agregar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y los procesos espontáneos de reconciliación surgidos en las comunidades. A esta tendencia se suma el trabajo de la CVR. El objetivo es dar al proceso de reconciliación una orientación más meditada que asegure su continuidad. De hecho, la verdad, la justicia y la reparación abonan sustancialmente en favor de la reconciliación: la verdad, por su capacidad para develar las zonas oscuras de

la historia y darles una explicación y por el reconocimiento de la voz de las víctimas; la justicia, porque pone punto final a la impunidad, fuente de venganzas personales y sentimientos de exclusión, y la reparación, porque expresa la intención del Estado y de la sociedad de aliviar en algo el sufrimiento de las víctimas. Este es un proceso largo, complejo, muy particular e ineludible que la CVR impulsa y transfiere a la sociedad y al Estado. Este proceso tiene actores diversos y los internos que pertenecen o pertenecieron a organizaciones subversivas son uno de ellos. La reconciliación en este particular caso demanda un sentido y una metodología propios.

Es pertinente ubicar el proceso de reconciliación dentro de la transición democrática para comprender mejor sus alcances. Toda transición es un esfuerzo por dejar atrás graves perjuicios a la vida ciudadana cuya subsistencia implica la necesidad de normalizar el Estado de Derecho. En el caso peruano, durante los veinte años de violencia el Estado se apartó del modelo constitucional y de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos en la creencia de que por ese camino sería más eficaz en su lucha contra la subversión. No obstante, la transición peruana, por sus propias características, no supone pactos de impunidad porque las fuerzas regresivas que podrían exigir un estatuto especial están derrotadas. En consecuencia, la reconciliación no es ni puede ser un proceso de negociación de beneficios justificada en las experiencias de otros países por el riesgo que acarreaba para la transición desarrollar a plenitud el Estado de Derecho. En el Perú hay autoridades constitucionalmente elegidas y nada impide una ofensiva democratizadora sin concesiones a las fuerzas salientes.

La CVR comprende que las heridas del conflicto armado interno no han sanado aún y que, en las actuales circunstancias, el temor ciudadano a un resurgimiento de la violencia afecta la buena disposición que este proceso necesita. Pese a ello, la reconciliación es una necesidad que trasciende el ambiente poco optimista en el que le toca desenvolverse. Para algunos sectores de la sociedad, es un asunto inaplazable y, para otros, carece de sentido. Es deber de la CVR explicar convincentemente la urgencia de vivir reconciliados y dejar al país un conjunto de pautas que encaminen el proceso.

La reconciliación no es olvido ni es impunidad. La verdad garantiza que el pasado se vuelva presente comprendido y referente obligado de nuestras decisiones. La justicia de los tribunales, hasta donde sea posible, saldrá cuentas con los autores de los crímenes y violaciones de derechos humanos. En esa medida, queda descartada cualquier propuesta de amnistía. Perdonar queda reservado al fuero personal de la víctima. La CVR favorece el pedir perdón y el perdonar si ellos se hace con sinceridad, consciente de que recordar sin rencor contribuye a restaurar la confianza y el vínculo perdidos. Es vital que la reconciliación sea comprendida por la ciudadanía como un imperativo ético y como una necesidad práctica, en ambos casos perfectamente coherentes con los postulados de la democracia y los derechos humanos.

Un primer paso reconciliador dado por la CVR fue incorporar las declaraciones de los internos por terrorismo como parte de la búsqueda de la verdad. A renglón seguido, realizó talleres de reflexión sobre el tema de reconciliación en los penales de Picci (Chiclayo), El Milagro (Trujillo), Huacariz (Cajamarca), Cachiche (Ica), Chorrillos (Lima), Aucallama (Huaral), lo mismo que en Huancayo y Puno. En el penal de Castro Castro, que alberga al mayor número de subversivos, se realizó asimismo una reunión de debate sobre este tema. Pese a los logros, hay que admitir que, en este proceso, se avanza y se retrocede. Como era previsible, no todos los internos han reaccionado de la misma manera. En el caso del MRTA, de los desvinculados y de cierto grupo de militantes del PCP-SL, la disposición para la reconciliación es favorable. Sin embargo, hay un sector todavía numeroso del PCP-SL cuyo dogmatismo lo lleva a justificar los crímenes cometidos y a preservar las tesis ideológicas sobre las cuales montaron su proyecto armado. Es el caso de Proseguir, cuyo miembros están manifiestamente a favor de la continuación del conflicto armado, lo que torna impracticable el debate sobre este tema.

El punto de partida es la necesidad de restablecer el diálogo y aceptar que, a través de la palabra, es posible progresar en la superación de las diferencias. De este modo, en los talleres fue posible aproximarse a la idea de «conciencia del daño causado», o sea, al aspecto fundamental de la reconciliación que consiste en aceptar que las acciones realizadas afectaron derechos de las personas. No se puede en este punto hablar de «costo de la guerra», porque los costos son para quien decide ir a la guerra y se expone a posibles menoscabos en su integridad; en este caso, se trata de miles de seres humanos que no participaron directamente en el conflicto y a quienes se les causó deliberadamente daños físicos, psicológicos, sociales, económicos, etc. A partir de la conciencia del daño causado, es posible dar un paso hacia el reconocimiento de formas y grados de responsabilidad. Y, aunque hubo quienes, coherentes con sus pedidos de «no a la impunidad», admitieron sus condenas, hubo otros que no llamaron a los crímenes por su nombre sino que sostuvieron en todo momento

que se trató de «excesos, errores y limitaciones». En cuanto a las responsabilidades políticas, hay una mejor disposición para la autocritica que los lleva a una posición de deseo de superación del pasado. Consideran que éste es un nuevo momento histórico en el que no hay condiciones para la lucha armada, aunque un sector importante no abandona la idea de la violencia como instrumento de transformación. La superación del pasado implica también pedidos de disculpas o perdón que varios expresaron claramente.

La CVR comprende que la reconciliación entre víctimas y victimarios es la más exigente de todas. Urge, por consiguiente, evaluar realistamente las posibilidades de restaurar esa relación rota a raíz del conflicto armado interno. No hay que olvidar que hay internos cuyas penas ya se cumplieron o se cumplirán en los próximos años y cuyo retorno a la vida social requiere de procesos locales de reconciliación que faciliten su integración. Pero, mientras se mantenga la pertenencia al partido, la sujeción a los líderes que no han variado su posición y la adhesión a una ideología de muerte y destrucción, la reconciliación no será posible. En una frase, mientras el PCP-SL siga siendo el PCP-SL, la reconciliación es inviable. Lo mismo en el caso del MRTA. Esto no quita que se pueda intentar una aproximación personal, lo cual implica pasar por una fase previa de desvinculación que abra el camino a la reconciliación.

Entender las razones o sinrazones de los perpetradores no es lo mismo que excusarlos, pero sí es condición indispensable para la aplicación de una política de reconciliación. La democracia no claudica si se acerca a los internos del PCP-SL o el MRTA. Esta fase previa, fundamentalmente comunicacional y educativa, está dirigida a la recuperación de la individualidad, el desarrollo del pensamiento crítico, la actualización del conocimiento, la revaloración de la vida como un derecho absoluto a partir del cual —y no contra él— se desarrolla la praxis política, el reconocimiento de que la democracia ofrece espacios de participación y que hoy significa el principal consenso nacional y mundial. Este espacio es de apertura a la diversidad y no menoscaba el derecho a la libertad de creencias.

La fase previa a la reconciliación debe formar parte del tratamiento penitenciario entendiendo que el interno por terrorismo trae un componente político privativo, por lo que las metodologías de rehabilitación, reeducación y resocialización no pueden ser las mismas que se aplican a los internos comunes. No hay que perder de vista, además, que en la población penal por terrorismo hay diferentes grupos: desde los totalmente desvinculados de las organizaciones subversivas hasta los que no han variado un ápice su posición y pertenencia políticas. El tratamiento penitenciario debe, en consecuencia, partir de una adecuada caracterización del interno, que no se reduce a un examen criminológico.

En el plano jurídico, la adecuación de las normas a los estándares internacionales es de obligatorio cumplimiento para la democracia peruana. En esa medida, deben observarse las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos y sus principios básicos aprobados por las Naciones Unidas y los instrumentos de derechos humanos de carácter general y las recomendaciones y resoluciones de los organismos internacionales de derechos humanos. Del mismo modo, se debe acatar el fallo del Tribunal Constitucional en materia de legislación antiterrorista. En este marco de respeto a las exigencias internacionales y nacionales del más alto nivel, las normas contenidas en el código de ejecución penal y los decretos supremos que regulan el sistema penitenciario deben restituir y preservar los derechos de los internos que sean compatibles con la reclusión, sin afectar en lo más mínimo la seguridad y la tranquilidad de la sociedad y el normal desenvolvimiento de la vida penitenciaria, así como la lucha actual contra los grupos todavía alzados en armas.

Políticamente, el clima más favorable a una reconciliación es una democracia viable y exitosa que deje sin fundamento los proyectos totalitarios y en cuyo seno la participación política sea activa e incluyente. En esta medida, la democracia no debe ser ajena a las transformaciones que puedan operarse en las organizaciones subversivas. Es necesario evaluar con extrema cautela cualquier propuesta de legalización, teniendo presente que una pretensión en este sentido pasa por el cese definitivo del alzamiento armado y la sujeción al Estado de Derecho.

En resumen, la CVR considera que:

- La reconciliación es un proceso ya iniciado, especialmente complejo si se trata de propender al restablecimiento del vínculo entre internos condenados por terrorismo y la sociedad y el Estado peruanos. El conocimiento de la verdad, la contribución con la justicia y las propuestas de reparación a las víctimas son pasos importantes en la reconciliación. Queda descartada la amnistía.

- La reconciliación es un deber y una decisión práctica que asegura, sin olvido y sin impunidad, el término de la violencia armada. Para que haya reconciliación debe haber, en quienes han perpetrado crímenes, conciencia del daño causado, reconocimiento de responsabilidades, expresión de disculpas o perdón y deseo de superar el pasado en términos de una nueva convivencia regida por las reglas de la democracia y los derechos humanos.
- La reconciliación no es viable con aquellos internos vinculados a las organizaciones subversivas que mantienen su ideología y su proyecto armado. Es condición previa, en estos casos, propiciar la desvinculación hasta donde sea posible.
- La aplicación del tratamiento penitenciario debe ser diferenciada en atención al componente político de los internos por terrorismo, para lo cual convendría la creación de una instancia especializada en aplicar dicha política. El acento debe estar puesto en los aspectos educativo y comunicacional, buscando crear espacios de recuperación de la capacidad crítica personal, de conocimiento del mundo actual, de revaloración de la vida como derecho absoluto, de reconocimiento de la democracia como sistema de participación política, etc. Se deben propiciar formas de reintegración a la vida social de aquellos internos que son liberados por cumplimiento de sus condenas. Una buena manera es impulsar procesos locales de reconciliación.
- Los derechos de los internos que sean compatibles con la reclusión deben ser preservados o restituidos en cumplimiento de las normas, resoluciones y recomendaciones nacionales e internacionales.
- La reconciliación es un tema del presente pero, sobre todo, del futuro. Está sometida a las tensiones que surgen del deseo de vivir en armonía y la realidad de los conflictos subsistentes. El pasado, sin embargo, no es una carga sino una fuerza que impulsa al país hacia delante premunido de las lecciones que evitarán que vuelva a sucumbir en el horror. Queda abierta la enorme responsabilidad de ahondar en la reconciliación hasta lograr compartir un ideal mínimo de vida que disuelva la sensación de amenaza y de peligro que surge del dramático pasado reciente y de la prédica extremista. La CVR halla presente este ideal en la democracia y los derechos humanos.

## APÉNDICE: ALGUNAS CARTAS ESCRITAS EN LAS CÁRCELES

El desarrollo de la ideología fundamentalista entre la militancia del PCP-SL alcanzó varios niveles. Debido a su carácter vertical y dogmático, los grados de ideologización fueron variados. En las esferas más altas del aparato partidario, se puede hallar una mayor ortodoxia y dureza de pensamiento. En los cuadros intermedios, pero en especial entre los militantes de base y la periferia, el grado de ideologización fue menor. Esta característica se refleja también entre los reclusos y reclusas que albergan las cárceles, acusados de pertenecer al PCP-SL. La CVR recibió las dos cartas que a continuación reproduce en su totalidad desde los penales de Yanamayo y Chorrillos, y cree conveniente publicarlas ya que muestran con claridad lo expresado.

*Carta desde el penal de Yanamayo*

Señor Doctor Salomón Lerner

Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación

Lima.

Acudimos a Ud. Doctor Lerner y a su representada nuevamente, reiterando nuestros saludos, y manifestarle lo siguiente:

Hacemos conocer a Uds., nuestra posición de pleno acuerdo, apoyo y respaldo decidido, asumiendo a cabalidad la iniciativa y solicitud, que les hiciera a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Dr. Abimael Guzmán Reinoso — Presidente Gonzalo — y Elena Iparraguirre Revoredo — camarada Miriam —; para que por vuestro intermedio pueda viaabilizarse ante el gobierno del Dr. Toledo, el que acceda y autorice una reunión en el PMBNC, entre el Presidente Gonzalo y c. Miriam con los militantes designados por ellos, con el objetivo de definir y decidir la posición oficial del PCP ante la CVR y la Reconciliación Nacional que propugnamos.

La importancia y trascendencia de dicha iniciativa y solicitud, son innegables, sirviendo a construir el complejo proceso de una futura Reconciliación Nacional, guiados por el rumbo ético de Servir al Pueblo de Todo Corazón.

Derivado de la aceptación y concreción de dicha importante reunión, juzgamos oportuno, solicitar a Ud. Dr. Lerner y a la CVR, analice, acceda y autorice, una Audiencia Pública, en la cual participe como protagonista de la guerra popular el PCP, representado por su Jefatura el Presidente Gonzalo y c. Miriam; y, otra Audiencia Pública en la cual participemos los prisioneros políticos y prisioneros de guerra, de los diversos penales de la República, cuya agenda proponemos sea el tratar sobre la política y legislación penitenciaria y condiciones de reclusión aplicadas en las décadas del 80 y 90, en el contexto de la guerra interna vivida en el Perú.

Como es de vuestro conocimiento, así como de la opinión pública. Nosotros, prisioneros políticos y prisioneros de guerra del PCP, venimos bregando resueltamente por la necesaria Solución Política a los problemas derivados de la guerra interna; iniciativa política fundamentada solidamente por el Presidente Gonzalo, Jefatura estratégica y decisiva del PCP y la Revolución, en su contenido de 5 puntos, de innegable repercusión histórica. La cual aprobamos, estamos decididamente de acuerdo y luchamos activamente por hacerla realidad.

Al asumir ante Uds., nuestro resuelto apoyo y pleno respaldo con los testimonios del P. Gonzalo y c. Miriam, ante la CVR. Documentos de reconocido valor histórico. Solicitamos a Uds. los hagan públicos, pues, sirven a esclarecer la Auténtica Verdad Histórica de la guerra popular, a combatir la impunidad del genocidio, demandando juicio y sanción, no venganza, a quienes dirigieron el Estado en los sucesivos gobiernos del 80 al 2000, a sus más altos representantes y responsables, aun sueltos en plaza, quienes persisten obcecadamente en eximirse y no asumir ninguna responsabilidad de las políticas de Estado, la línea y política genocida que aplicaron a través de sus FFAA y FFPP.

El presidente Gonzalo y c. Miriam, han asumido responsabilidad política en representación del PCP, de la preparación y dirección de la guerra popular en el Perú, el más grande movimiento social revolucionario de la historia peruana, de sus limitaciones, errores y excesos. A lo cual se suman los testimonios de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra del PCP, tanto colectivos como individuales, los debates políticos con algunos Srs. Comisionados y funcionarios de la CVR, en particular de su sede Sur Andina; en base al mutuo respeto, venciendo incomprendiciones, resistencias y oposiciones, con el fin de alcanzar la verdad histórica y ésta se abra paso. Expresamos nuestro desacuerdo por no recibir respuesta a la anterior carta que le enviáramos desde Yanamayo, al iniciar nuestro trabajo dentro de la CVR; y, recientemente, por la

suspensión de la anunciada y confirmada visita de 3 comisionados (Monseñor Antunez de Mayolo, Padre Garatea y Pastoy Lay Sun), lo cual evidencia los serios problemas y la ladeamiento que venimos denunciando; a más de los entrabamientos y oposición a que desenvuelvan su trabajo en penales, por parte del gobierno y las altas autoridades del Ministerio de Justicia y del INPE.

Seguimos con especial atención, las declaraciones públicas de los Srs. Comisionados, las cuales no sólo comprometen a la propia CVR, ante la opinión pública, sin ser desmentidas o aclaradas, como los reiterados e interesados despropósitos y exabruptos del Sr. Tapia, quien manifiesta una odiosidad patológica al P. Gonzalo y al PCP; del Sr. Degregori, el Sr. Morote, la Sra. Maccher, e incluso algunas suyas Dr. Lerner. Cuyo objetivo político es manifiesto, cargar la responsabilidad total en el PCP, encubrir, eximir y buscar la impunidad del genocidio; poniendo en riesgo la propia credibilidad y trabajo que por ley cumplen, expresando una tendencia de servir a los intereses políticos del actual gobierno, opuesto a tratar la Solución Política y negociación global demandada.

Dr. Lerner, le expresamos nuestro más enérgico rechazo, condena e indignación, desenmascarando el «especial» publicado por la prensa escrita y en particular el programa difundido en TNP el 22 de diciembre en curso; publicitado como informe oficial de la CVR sobre Lucanamarca. Reportaje irresponsable, superficial, subjetivo y unilateral; mostrando carencia de nivel y luces para hacer una evaluación objetiva de los hechos, que sirva a esclarecerlos y a sentar sólidas bases a una futura Reconciliación Nacional, definiendo con meridiana objetividad la responsabilidad de ambas partes, no una judicialización arbitraria. En dicho programa de la TNP, con asistencia de los Comisionados Sra. Maccher y Sr. Degregori, pese a reconocer ambiguamente que fue un enfrentamiento entre ronderos armados, dirigidos y usados como carne de cañón por el gobierno y sus FFAA, en aplicación de la política genocida del Estado para combatir a la subversión, en la guerra antisubversiva; y del otro lado combatientes del Ejército Guerrillero Popular, dirigidos por el PCP, guiados por su política proletaria marxista-leninista-maoísta, pensamiento Gonzalo. Previo al enfrentamiento, las cabezas negras de los ronderos fueron cominados a rendirse lo cual rechazaron, escudándose cobardemente en mujeres y niños. Este enfrentamiento armado que Uds. niegan, lo pretenden presentar como un hecho aislado, como en otros casos «emblemáticos»; fuera del contexto político, militar, social, económico, cultural, de las complejas contradicciones sociales y aguda lucha de clases que en dicha zona se desarrollaba. Así, Lucanamarca, fue un hecho bélico, en el cual el PCP logró rotundo éxito, al conquistar el objetivo político buscado a través de dicha acción armada; frenó y quebró el plan contrasubversivo del gobierno de Belaunde y sus FFAA, de organizar, armar y usar mesnadas como fuerzas complementarias, enfrentando masas contra masas; no como ilusamente vociferan «el campesinado entre dos fuegos»; dicha acción armada fue acordada, aprobada, planificada y dirigida por el PCP, no fue un «acto de violencia irracional, de venganza», demandado reiteradamente por las masas del campesinado pobre, de la propia comunidad de Lucanamarca y de las aledañas, para someter a juicio popular a las cabezas negras y gamonales, quienes instigados por las FFAA, habían asesinado a militantes del PCP y a masas acusadas de apoyarlos, sufrían las correrías, abusos, opresión del poder local y sus ronderos de Lucanamarca. Adrede, en dicho programa ignoran la red de bases antisubversivas instaladas en dicha región por el gobierno y sus FFAA, así como, la posición oficial del PCP, hecha pública luego del balance hecho por su Comité Central; encubren el nefasto papel cumplido por las cabezas negras de los ronderos, gamonales, su red de soplónaje y de todos quienes medraron de la guerra contrarrevolucionaria a la cual sirvieron activamente. Lo principal, de este enfrentamiento armado, es que el PCP, mostró su capacidad de respuesta contundente que paralizó el negro accionar del gobierno, a los pocos meses de decidir el ingreso de las FFAA en aplicación de su política genocida dirigiendo la guerra contra subversiva, cosechó un fracaso y revés político y militar decisivo. Lo secundario, es el exceso, que en modo alguno niega o minimiza lo principal. Exceso producto del enfrentamiento armado. Ahí no se cortaron barrigas de gestantes, como arteramente imputan, ni menos hay pretendidas fosas comunes, todas las tumbas exhumadas por Uds. Están identificadas y fueron sepultados los cadáveres por sus deudos. No estamos de acuerdo con el espectáculo réprobo que montaron en una iglesia limeña y el innegable uso político que de él hicieron. Otra de las negras campañas montadas contra el P. Gonzalo y el PCP, la guerra popular, que rechazamos y condenamos enfáticamente. Son rotundos actos de guerra, ya grabados indelebles en la mente de las amplias masas del pueblo y en la historia, que un amañado e interesado informe «oficial» bajo la guía del «interés de seguridad del Estado, en defensa de la democracia», no se puede ni podrán negar. Lo claro y concreto es su inútil afán y propósito de acallar el grito y clamor creciente de las verdaderas fosas comunes, como Cayara, Umaru, Bellavista, el genocidio de los penales en el 86 y 92 y muchos cientos más, a las cuales la CVR no sólo no presta atención oponiéndose a su exhumación e investigación de los hechos, en defensa del interés político del estado y gobierno que la nombró; más, su perentorio eco seguirá retumbando en vuestras conciencias. Tampoco hacen denuncia alguna, al acoso, hostigamiento, persecución a muchas de las masas, quienes denunciaron el genocidio y a los genocidas en sus testimonios en Audiencias Públicas; menos les preocupa o toman interés por las denuncias de nuestros familiares y amigos. Nosotros al ejercer el derecho fundamental por excelencia, la Rebelión se Justifica, contra el caduco Estado reaccionario peruano, levantándonos

en armas bajo dirección del PCP; no hemos cometido crímenes contra la humanidad. Dentro de su orden reaccionario, el delito políticosocial es lo que nos pueden imputar, nosotros ya hemos saldado y cumplido la deuda con la sociedad y la libertad es nuestro derecho; la cual se abrirá paso. La historia, el pueblo son el tribunal inexorable ante el cual asumimos responsabilidad, no tenemos nada de que arrepentirnos.

Todos estos hechos se producen en un complejo, difícil escenario político de agudización de contradicciones en la otra colina, y en el propio seno del gobierno de turno. El Tribunal Constitucional, está por dar su fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad de la legislación antiterrorista. Culmina la legislación, sin que el Congreso promulgue las nuevas leyes, demandadas por la Corte Interamericana de Justicia. Los tribunales dilatan resolver en segunda instancia los juicios anulados en la primera instancia, por acciones de Habeas Hábeas. Mantiene las ilegales y anticonstitucionales leyes dadas por el gobierno del genocida vende patria de Fujimori. Tras invocar terminar con los «rezagos del terrorismo», como denominan a lo que queda de la acción armada, prosigue con los planes de pacificación, operativos policiales y militares, sin necesidad de declarar el Estado de Emergencia, restablece bases antisubversivas, reimpulsa las cuestionadas rondas urbanas y rurales; trafica demagógicamente con la pobreza, para proseguir aplicando su nefasto plan neoliberal, correlato de la imperialista globalización repudiada en todo el orbe; generando mayor rechazo del pueblo, sometido a más opresión, explotación, hambre, miseria, desempleo. Es pública la posición oficial del gobierno del Dr. Toledo de actuar dentro de la estrategia de «guerra contra el terrorismo mundial» y ha firmado una «alianza estratégica» con el gobierno de Bush. Rechazamos el término de «terrorismo» con que los imperialistas yanquis, justifican como gendarme del orbe, el combate a la lucha de los pueblos y naciones oprimidas, que empiezan a salir políticamente del repliegue.

A esto se suma la ilegal e inconstitucional Resolución del Ministerio de Justicia y del INPE, disponiendo arbitrarios trasladados, con torturas, saqueo y rapiña de pertenencias, con el objetivo de reconcentrar prisioneros políticos y prisioneros de guerra en Yanamayo. En venganza por la exitosa huelga de hambre de inicios de año, y al indudable éxito político de los cientos de juicios anulados, siendo el principal el de la c. Miriam. Dentro del cada vez más importante desarrollo de un nuevo momento de la lucha popular creciente. Por democracia y desarrollo que beneficie al pueblo, parte de la cual es lograr la libertad de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra.

¿De qué Reconciliación, pretende tratar ignorando a uno de los protagonistas de la guerra interna vivida en el país, la que siguen negando, pese a ser el objeto de vuestro trabajo?

Agradecemos la atención que preste a la presente.

Atentamente.

Delegados de los prisioneros políticos y prisioneros de guerra del Partido Comunista del Perú, recluidos en el EPMS de Yanamayo, Puno:

Edmundo Cox Beuzeville  
 Mario Efraín Gilvonio Misari  
 Roller Cometivos Utia  
 Felipe Tenorio Barbarán  
 Rodolfo Luna Delgado

[Carta recibida por la Sede Zonal Ayaviri - Puno de la CVR el 16 de enero de 2003, la que se ha transcrita respetando la ortografía y redacción originales].

#### *Carta desde el penal de Chorrillos*

Cuando no se tiene más que el amor,  
 Por única razón,  
 Por única canción  
 Y por única ayuda.  
*Jacques Brel*

Escribimos esta carta, confiadas en que, quienes recojan hoy, nuestro dolor, nuestros momentos de sufrimiento y, también nuestros sueños y nuestro clamor de libertad, son verdaderos seres humanos y, eso, nos basta. Les saludamos, llenas de esperanza, pues, los sabemos solidarios y creemos que sabrán mirarnos a los ojos, que, hoy, nuestras almas transitan en un intento desesperado de tocar los suyos.

Nosotras, mujeres, mujeres encarceladas, sentenciadas por delito de terrorismo y traición a la patria, por jueces sin rostro. Habitamos el Pabellón «A», que es el pabellón piloto, de mínima seguridad del establecimiento penal de Régimen Especial de Mujeres de Chorrillos y, que, en esta oportunidad, queremos, darles a conocer sobre nosotras.

Aquí, habemos, mujeres inocentes, que hemos sido sentenciadas injustamente y, esperamos el indulto desde hace mucho tiempo. Otras, estamos aquí, el tiempo suficiente, ya, como para merecer un beneficio de semilibertad, que, legalmente nos corresponde solicitarlo. Otras; hemos tenido una vinculación periférica, circunstancial que hemos reconocido y somos testimonio vivos de lo que por años venimos demostrando, que hemos cambiado sinceramente, incluso desde antes de ser detenidas y esperamos que la Comisión de Comutación evalúe nuestros expedientes. En otros casos, esperamos una reducción de pena por la aplicación de la Ley de Adecuación de la Pena o que se nos haga procedente un recurso de revisión.

En esta parte de nuestra carta; en estos minutos en los que se cuenta nuestra vida misma, con todos sus sueños, con todos nuestros deseos inmensos de permitirnos siempre vida a nuestro alrededor pero, también, esta misma vida, con todos sus fracasos, con todos sus heridas, con todos sus errores; quienes sí, con nuestra participación (periférica, circunstancial), con nuestros silencios, con nuestros temores, también con nuestros afectos, hemos ayudado a sostener este otro lado de la violencia, sentimos, desde aquí, inmensos deseos de decir tantas cosas... tantas... También, porque, además, no es tan fácil decir, si hemos sido solamente víctimas, o hemos sido solamente testigos... Después de todo, creemos que cada una, somos un poco responsables del mundo en que vivimos... y, pues, hemos encontrado que sentimos por el pasado, pero también en ellos hallamos una manera de expresarles toda la ternura de nuestra humanidad presente.

Y en esta hora fría, en que la tierra  
trasciende a polvo humano y es tan triste,  
quisiera ya tocar, todas las puertas,  
y suplicar a no sé quién perdón  
y hacerle pedacitos de pan fresco  
aquí, en el horno de mi corazón

Un día, irrumpieron en nuestras vidas y pretendieron quitárnosla; nos sacaron del hogar y nos arrancaron de nuestros padres, de nuestros hijos, de quienes éramos su alegría y su sostén. Vinieron por nosotros sin conocernos. Muchos ni siquiera entendían el por qué. Desde entonces, nos encerraron y cambian nuestra vida por un expediente.

Han pasado muchos años ya, y, hemos soportado tantos sufrimientos: 23 horas y media de encierro; media hora de patio; visita por locutorios una vez al mes, sólo por media hora, en el que apenas alcanzabas ver la sombra de tu ser querido, la visita de nuestros hijos cada tres meses, sólo una hora. Aquí hemos sentido morir muchas veces; pero, cada vez, nos hemos aferrado desesperadamente a la vida, por amor a nuestros hijos, por amor a nuestros padres, por amor a la vida misma y, por nuestros sueños de libertad.

El Pabellón «A» se consideró, desde el inicio, como un pabellón que albergaría a quienes, al margen de ser culpables o inocentes, demostraríamos independencia de cualquier organización política subversiva; a pesar, de saber que, teníamos que salir obligatoriamente a cocinar en las peores condiciones de trabajo; a sabiendas que, por ello no recibíamos ningún beneficio.

No nos resignamos, al dolor, al encierro, a las sentencias injustas y desproporcionadas. Sin embargo hay quienes piensan que deberíamos ser encerrados. Nos juzgan tan fácilmente, sin pensar, que no sólo se trata de nuestras vidas, sino también la de nuestros hijos, la de nuestros padres. Comprendemos. Es la situación dolorosa que hemos vivido, por años, hubieron muchas pérdidas humanas, mucha destrucción en manos de los grupos subversivos que, tampoco tuvieron en cuenta las vidas que habían detrás. Pero, quienes no apuestan por nosotras hoy, no saben, tampoco, de dónde venimos, qué fue de nuestras vidas. Tampoco saben cómo fueron nuestros juicios, cómo inventaron pruebas; que no tuvimos defensa o la tuvimos insuficientemente. No saben que, en nombre de la paz, encerraron a miles de inocentes que perdieron gran parte de sus vidas en cárcel y que aún claman por libertad. No saben que hay quienes hemos pasado 10, 12, 14 años en prisión y que ya nos corresponde salir. Pero: entendemos, que quienes no desean nuestra libertad no nos conocen. Lamentablemente: de nosotras, sólo se dice que somos «terroristas» o que somos «unos monstruos». Ojalá pudiéramos tener más posibilidades de darnos a conocer y demostrar que somos, sencillamente seres humanos.

Entonces, lo que tratamos, hoy, es tocarles el alma a todos ustedes que, tan humanamente acogen nuestra carta urgente; para decirles que, merecemos ir a nuestra casa; por todo lo dicho, por todo lo que las palabras no alcanzan expresar, por todo el nudo que se ata y desata en nuestra garganta y, sobre todo por nuestros deseos inmensos de estar con nuestros hijos, de compartir sus penas y alegrías, de verlos y hacerlos crecer en humanidad. Por nuestros deseos inmensos de co-

menzar y terminar el día con sus miradas, con sus sonrisas, por nuestros deseos de llenarlos de besos al despertarlos y no dejar ni un solo día, sin decirles cuanto los amamos. Por nuestros padres; porque no sigan llorando más nuestra ausencia, porque no sigan andando, por años, desolados de aquí por allá, tocando puertas sin tener respuesta; porque no sigan envejeciendo más de dolor y de impotencia. Por nosotras mismas, por nuestros inmensos deseos de vivir; por nuestros sueños, que Dios los sabe buenas. Ya no queremos más despedidas. Por Dios ¿hasta cuándo? Ya es mucho tiempo de amar y acariciar a la distancia. Ya es mucho tiempo de angustia de no saber nada de la familia y ni siquiera tener un teléfono para volver a vivir. Ya es mucho tiempo de no tener una respuesta cuando nuestros niños preguntan ¿cuándo mamá?; lo que soñamos es poder decirles, mañana y, a la noche, mirar juntos las estrellas y llamarlos a cada uno por su nombre.

No sabemos, que manos benditas, sostengan esta carta, pero, como dijimos, son las de un ser humano y eso nos basta, para enviarles este clamor de libertad y de justicia que sale de lo más profundo de nuestro corazón que, a pesar, del dolor no se ha secado de amargura y que, al contrario se enriquece y continúa amando y soñando.

Que Dios los bendiga

Con esperanza

Desde el pabellón «A» Establecimiento Penal de Régimen Cerrado Especial de Mujeres-Chorrillos.

[Recibida por la CVR, sede Lima, el 23 de septiembre de 2002. Se ha transcrita la carta respetando la ortografía y redacción originales].

## 23. NARCOTRÁFICO, CONFLICTO ARMADO INTERNO Y CORRUPCIÓN

Este apartado resume tres extensos estudios realizados por la CVR sobre la vinculación entre el narcotráfico y el conflicto armado interno. El primero de estos estudios analizó el marco legal internacional y nacional diseñado para combatir las redes de narcotráfico, que condiciona decisiones políticas importantes. El segundo estudio recogió todas las evidencias que relacionan el narcotráfico con la corrupción, y la constitución de verdaderas redes que comprometen a todos los actores presentes en el escenario de la guerra interna. El tercer estudio se orientó, en un trabajo de campo directo, hacia la comprensión del microcosmos social de un centro urbano, Aucayacu, ubicado en el corazón del área cocalera, la historia de su violencia y las dinámicas de relación con los espacios rurales vinculados a él.

Cabe aclarar que el presente resumen analiza exclusivamente la dinámica del valle del río Huallaga, principal cuenca cocalera del país. Al respecto, se ha señalado en la historia de la Región Nororiental preparada por la CVR, que el contexto socioeconómico cocalero facilitó la inserción de los grupos subversivos en este espacio a la vez que condicionó la respuesta contrasubversiva. También es cierto que el *boom* del precio de los derivados ilícitos de la coca, sobre todo en la segunda mitad de la década de 1980, casi se corresponde con el mayor índice de violencia vivido en la cuenca del Huallaga. Por último, la expansión en la fabricación de derivados ilícitos de la hoja de coca está en relación directa con el aumento sostenido del consumo de drogas en países desarrollados del hemisferio norte y los precios de estos derivados se originan, en buena medida, tanto por aquella demanda como por su condición de ilegalidad.

«Narcoterrorismo» es un término comúnmente aceptado, pero con los mismos argumentos se podría hablar de «narcopolicía» o «narcoejército» luego de conocer la maraña de corrupción surgida a raíz de la intervención policial y luego militar en el Huallaga. En otras palabras, estas calificaciones son meros eufemismos y no explican la dinámica de la relación entre el narcotráfico y los actores presentes en el ciclo del conflicto armado interno.

La compleja vinculación entre narcotráfico y violencia tiene incluso particularidades regionales que merecen ser destacadas. Así, si en el valle del Huallaga el dinero proveniente del narcotráfico sirvió para financiar a las columnas del PCP-SL en su lucha contra el Ejército, en la selva del río Apurímac, en Ayacucho, el dinero proveniente de la pasta básica de cocaína (PBC) sirvió precisamente para financiar a las rondas campesinas, evangélicos, cocaleros y representantes de firmas que, finalmente, derrotaron y expulsaron al PCP-SL de la zona.

### 23.1. LA EXPANSIÓN DE LOS COCALES Y LA LÓGICA DE LA POLÍTICA ANTIDROGAS

El tráfico de cocaína es una actividad multinacional que, según algunos cálculos, moviliza un promedio de 100 mil millones de dólares anuales, es decir, se trata de una industria casi tan grande y poderosa como el petróleo y que tuvo por décadas sus áreas de producción de materia prima en Perú y Bolivia, su centro de procesamiento industrial en Colombia y su gran mercado de consumo en Estados Unidos de Norteamérica y cuyo auge, en la selva del Huallaga, en el cual se involucraron poblaciones enteras, abarca las décadas de 1970 y 1980.

La coca se cultiva en la selva alta, que tiene 275,491 kilómetros cuadrados (21.5% del territorio del Perú). Allí se ubican los 16 valles cocaleros —tradicionales y no tradicionales— sobre la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, en los departamentos de Amazonas, San Martín, Ucayali, Junín, Huánuco, Cerro de Pasco, Ayacucho, Cusco, Puno y Madre de Dios.

Las cifras propuestas sobre el territorio utilizado para el cultivo de los cacaos difieren mucho entre sí. La CVR se remite a un informe del Senado de la República en el cual se afirmó que la superficie cultivada de coca en forma legal en el país era, en 1980, de 17,862 hectáreas, mientras que la superficie ilegal alcanzaba las 50 mil hectáreas, de las cuales 10 mil estaban en el Alto Huallaga. Seis años después, en 1986, los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Tocache (FEDIPT), declararon que los cultivos ilegales de coca, sólo en el Alto Huallaga, alcanzaban 195,000 hectáreas. De otra parte, si en 1980 el ingreso por esta actividad en el país se calculaba que provenía en un 97% del comercio de la PBC bruta, el 0.6% por PBC lavada y el 2.4% del clorhidrato de cocaína, siete años después se calculaba la PBC bruta en un 13.5%, la PBC lavada en 80% y el clor-

hidrato de cocaína en 6.5%. Según algunos analistas, este crecimiento se explica por la transformación progresiva de campesinos cultivadores de coca en campesinos maceradores de pasta básica.

En cumplimiento de acuerdos establecidos con el gobierno estadounidense y, en concordancia con normas internacionales, el Estado impulsó a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 una política de combate al narcotráfico a través de programas de erradicación, sustitución e interdicción policial. Los productores campesinos de hoja de coca se convirtieron en el principal blanco de esta política, que afectó la actividad económica fundamental de amplios sectores de productores del Huallaga.

Desde la promulgación en 1978 del decreto ley 22095, dirigido a combatir el narcotráfico, el Perú no sólo puso en vigencia un marco legal adecuado, sino también un aparato policial especializado — denominado Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) —, un programa de sustitución de cultivos, la creación de un ente de Control y Reducción del cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH), una Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (OFECOD) a cargo del resguardo de los bienes incautados y el COMUCOD, entidad multisectorial, que se sumaron a la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), único ente autorizado a comprar la coca legal. El financiamiento de este frondoso aparato burocrático, derivado de una concepción policial del problema, implicó para el Estado un alto costo económico y también humano en vidas de funcionarios civiles y policías que murieron en la guerra de la coca, pero los resultados de esta batalla no compensaron, de ninguna manera, ese costo.

En los valles cocaleros, los operativos de interdicción policial antinarcóticos se realizaron en el marco de una estrategia de lucha contrasubversiva más amplia, con diversos impactos sociales y políticos sobre la población local producto de la actividad de los diversos actores presentes en las regiones cocaleras de la selva alta: los grupos armados (PCP-SL y MRTA); los organismos de seguridad del Estado encargados de combatirlos, primero la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, luego la Policía Nacional; y miembros del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, que desde 1984 se encargaron de la seguridad e incluso del orden público en dichas regiones, en el marco de los estados de emergencia instaurados y mantenidos de manera continua por los gobiernos de Fernando Belaunde, Alan García y Alberto Fujimori.

En el segundo semestre de 1979 se realizó el operativo Verde Mar, con resultados pobres en lo que respecta a destrucción de cocalas y secadoras, pero lamentables en cuanto a la aplicación de métodos violentos. Luego vendría el operativo Verde Mar II, durante el cual los abusos se hicieron mayores y se llegó a detener a cientos de agricultores acusándolos de narcotráfico. A los que tenían grandes extensiones se les exigió erradicar sus cocalas y plantar otros cultivos como una señal de arrepentimiento. Más aún, el gobierno de Belaunde Terry estableció, mediante el decreto ley 22927 del 4 de marzo de 1980, la prohibición de compra de coca por la ENACO desde 1981, con lo cual la situación de los productores se agravó. En 1982, miles de campesinos cocaleros de Chinchao, Monzón, Leoncio Prado, Tocache y Padre Abad se trasladaron a la ciudad de Tingo María para iniciar una huelga indefinida con el pedido principal de reanudación del comercio legal de la coca a través de ENACO. Luego de 11 días de huelga, el gobierno derogó el dispositivo y restituyó el comercio legal de la coca. Esta prohibición tuvo un efecto contrario, pues durante casi dos años la coca fue a parar al mercado negro a precios bajos, con lo cual la producción y comercio de sus derivados tuvo un crecimiento sostenido y espectacular que incluso llevó a algunos analistas a relacionar al gobierno con el narcotráfico, beneficiario directo de los dispositivos legales. Era el inicio de un ciclo de auge de la producción ilegal, lo que se ha llamado el «boom del narcotráfico».

En resumen, al inicio del ciclo de violencia nacional en 1980, la acción de las fuerzas de seguridad se repartía entre la lucha antinarcóticos, a cargo de la DINANDRO y la UMOPAR, y la lucha contra las nacientes columnas del PCP-SL, a cargo de las Fuerzas Armadas. Fue una constante la aplicación concertada de las estrategias policiales y militares de persecución, así como medidas de emergencia en el juzgamiento, como consecuencia de la aplicación de las directrices emanadas de los principales instrumentos internacionales, dirigidas preferiblemente contra el sector campesino, productor de la materia prima. De otra parte, las relaciones bilaterales con los Estados Unidos han estado teñidas por las frecuentes diferencias y pocos consensos a los que se llegaba sobre el tema, según los intereses de este país. La guerra contra las drogas, anunciada el 5 de septiembre de 1989, y la Estrategia Andina de US\$ 2,200 millones para cinco años, constituyeron la herramienta con la cual se pretendió encauzar la política bilateral.

En términos generales, el resultado de las medidas orientadas a la interdicción del narcotráfico fue muy magro por varios factores, entre los cuales destacan el aumento del precio internacional de la cocaína y la

debilidad del Estado para poner en marcha una eficiente política antidrogas. Precisamente, las intenciones y fracasos de las medidas coercitivas permitieron a los grupos subversivos, sobre todo al PCP-SL, obtener apoyo social y relativo éxito en zonas donde la coca y el narcotráfico, junto con la corrupción de la burocracia estatal y la ineeficacia de los programas de desarrollo alternativo, creaban las condiciones para impulsar el uso de la violencia a cambio de «un nuevo orden y justicia social».

En 1983, el diputado por Tingo María, de los registros del partido gobernante Acción Popular (AP), Reynaldo Rivera Romero, fue desaforado del Congreso de la República luego de que se comprobaran sus vínculos con el narcotráfico y, en abril de 1984, fue asesinado el dirigente cocalero Tito Jaime Fernández cuando ocupaba el cargo de alcalde de la provincia de Leoncio Prado por segunda vez, con lo que la defensa de la coca perdía un dirigente importante. Un hito en la historia regional fue el asesinato de 19 trabajadores del CORAH, en noviembre de 1984, lo que obligó a suspender la erradicación de plantíos de coca no sólo por los peligros contra la vida de todo el personal del CORAH sino también por los problemas que ocasionaba la erradicación forzada entre la población: abusos, robos, corrupción y, sobre todo, la incapacidad para generar actividades económicas alternativas. Cocaleros erradicados, la creciente inseguridad ciudadana, ausencia de un poder efectivo del Estado, en resumen, facilitaron el ingreso de los cuadros del PCP-SL a la región.

También en 1984 se declaró el estado de emergencia e ingresó el Ejército en la selva alta del Huallaga. En diciembre de 1985, el presidente Alan García levantó el estado de emergencia, permitiendo el retorno de la Policía y la continuación de las arbitrariedades contra la población campesina, así como las acciones de erradicación manual forzada. El resultado fue que la subversión incrementó sus «bases de apoyo» en las zonas cocaleras.

Otro hito crucial de esta historia ocurrió el 27 de marzo de 1989 con el ataque del PCP-SL a la estación policial de Uchiza, provincia de Mariscal Cáceres, que marcó un punto de quiebre con respecto a la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas en su lucha contra la subversión.

La presencia de la subversión en las regiones cocaleras desde 1984 causó frecuentes dificultades políticas y operacionales en la conducción de los esfuerzos antidrogas: mientras las Fuerzas Armadas tuvieron la responsabilidad de combatir al PCP-SL y el MRTA, la Policía Antidrogas —financiada básicamente por Estados Unidos— mantuvo su función de interdicción. Ello produjo constantes roces entre las Fuerzas Armadas y la Embajada de los Estados Unidos en Lima, así como entre las propias agencias de seguridad y orden público peruanas. En 1989, durante la gestión del general Arciniega como jefe del comando político militar de la zona del Huallaga, se dejó de perseguir al campesino cocalero y se dio prioridad a la lucha contra las columnas del PCP-SL y, simultáneamente, surgieron las acusaciones de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas asentadas en el Huallaga, procedentes principalmente de la prensa y funcionarios norteamericanos.

Diversas modalidades de corrupción atravesaron a todos los actores armados presentes en la zona, lo que afectó la posibilidad de hacer trabajos coordinados o de separar la guerra contra la subversión de una adecuada política de control de cultivos y de drogas, incluso antes de la existencia de la mafia controlada por Vladimiro Montesinos Torres.

Aunque hasta 1990 el Perú fue reacio a una vinculación castrense por los riesgos de corrupción y por su prioridad en la lucha contra el PCP-SL, esta situación cambió con el advenimiento de Alberto Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos. Desde abril de 1995 se produjo una gran crisis en la cuenca del Huallaga por diversas razones, entre las que destacan el *sobrestock* de cocaína en los mercados internacionales; la autoprovisión de hoja de coca y de PBC de grupos en territorio colombiano y los efectos de la interdicción aérea. La arroba de coca (cinco kilos y medio) fue descendiendo del precio de los mejores tiempos, US\$ 20, hasta llegar a menos de la mitad de esa cantidad. En 1997, se creó la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS), encargada de la política de cultivos sustitutos. Esta institución fue convertida por el gobierno de Alejandro Toledo en DEVIDA y enfrentada nuevamente a paros y huelgas de productores cocaleros, a quienes se sigue considerando como ciudadanos casi fuera de la ley.

## 23.2. EL PCP-SL Y EL NARCOTRÁFICO

La comisión especial del Senado sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación decía rotundamente en 1989:

La asociación entre el narcotráfico y Sendero Luminoso [el PCP-SL] está ampliamente comprobada y opera en el departamento de Huánuco y la margen izquierda del Alto Huallaga. El objetivo es liberar dicho territorio de la presencia del Estado y otorgarse muchas facilidades para sus actividades. De esa manera, es Sendero [el PCP-SL] quien controla los precios que se pagan a los campesinos productores de coca y obtiene una participación garantizando al mismo tiempo las cosechas y entregas por un lado, y la protección militar por el otro, a los narcotraficantes que, a su vez, los provee de armas. (Comisión del Senado sobre violencia y pacificación, p. 342)

En este acápite se presentará la vinculación entre los productores cocaleros, las redes de comercialización de derivados ilícitos y el proyecto del PCP-SL en el valle del Huallaga, con especial énfasis en el pueblo de Aucayacu.

Es fundamental recordar que la importante presencia del PCP-SL en el Huallaga significó la aceptación y el apoyo a sus postulados de amplios sectores de la población. Explicar este apoyo ayudará no sólo en la construcción de una memoria colectiva que reconozca esta aceptación sino también en la atención a problemas que fueron y son desatendidos. Por lo tanto, hay que señalar como punto de partida la importancia que el reclamo por la justicia llegó a adquirir a raíz del apogeo del narcotráfico y el papel central que jugaba el uso de la fuerza para lograr esa justicia.

De otra parte, se constata con claridad una distribución de los territorios cocaleros de la cuenca del Huallaga, con diferente actuación de los grupos armados según sus propias estrategias y concepciones del problema agrario y de la coca en el país. Se puede distinguir entre el Alto Huallaga, con presencia del PCP-SL, del Huallaga Central y Bajo, con presencia del MRTA.

### **23.2.1. El *boom* de la coca: «Entre la suerte y la muerte hay un paso»**

La influencia del PCP-SL en el Alto Huallaga sigue un vector temporal que se inició a principios de la década de 1980 y a partir de 1993, empezó a perder fuerza rápidamente, sin llegar a desaparecer por completo hasta la actualidad. Si bien el proyecto del PCP-SL no se propuso establecer vínculos con el narcotráfico, el objetivo de ampliar su base social llevó a los responsables regionales del PCP-SL en el Huallaga, desde su inserción en el valle a partir de los primeros años de los ochenta, a un acercamiento creciente con el negocio de los derivados de la hoja de coca, intentando intervenir en los puntos vitales de ese mercado y regular las relaciones sociales que se crearon alrededor de éste. Algo similar ocurrió años más tarde con el MRTA conforme se ampliaron los espacios cocaleros hacia el departamento de San Martín.

Es importante igualmente reconocer que si el narcotráfico remite a estructuras y variantes que gobiernan el desarrollo de ese comercio ilícito, el boom marcó un punto de quiebre a partir del cual se instaló una nueva forma de vida con valores que, en el Alto Huallaga, parecían poner al mundo al revés, pues lo ilegal era aceptado y practicado libremente mientras el dinero venía fácil y resolvía todos los problemas. Esto se reflejaba en una particular geografía social en la cual todos los actores tenían relación con el tráfico de drogas, directa o indirectamente.

Lo que resalta del PCP-SL como movimiento político es el carácter estatal y totalizador de los vínculos que buscó establecer con las poblaciones donde llegó a asentarse para construir su nuevo orden. La importancia del Alto Huallaga para entender ese proceso reside en que fue uno de los pocos lugares del país donde el PCP-SL consiguió dominar un territorio amplio y por un tiempo relativamente largo: entre diez y quince años. Según opinan muchos residentes del valle del Huallaga, el PCP-SL llegó a ejercer una hegemonía efectiva sobre las zonas rurales a partir de la mitad de la década de 1980. Al «tomar el campo», el PCP-SL estableció medidas de coacción sobre la producción de la pasta básica de cocaína y generó con ello su sustento de apoyo social. Aunque la verdadera dimensión de su dominio no es del todo clara y los matices del gobierno que desplegó son difíciles de precisar, resulta evidente que éste varió de lugar a lugar debido a la heterogeneidad de las personas en posiciones de mando y el nivel de adhesión de la población rural a la política del PCP-SL; pero también a causa de otros factores, como la relativa cercanía de los cuerpos armados del Estado o de los grandes mercados del narcotráfico, como Uchiza o Ramal de Aspzana, entre otros.

### 23.2.2. Geografía social

El primer objetivo del PCP-SL fue hacer desaparecer cualquier representación del Estado —cierre de ENACO, de proyectos del AID, del CORAH, etc.— estrategia que puso en marcha junto con el asesinato de diversas autoridades y líderes de la sociedad civil (alcaldes, prefectos, policías, dirigentes de partidos políticos y gremios). Pero es necesario aclarar el impacto diferenciado del apogeo de la droga en el campo y la ciudad (en realidad, en el Huallaga, casi sinónimo de pueblo grande), así como de un segmento del mercado (o de clase) a otro. Sin duda, la cara más visible se conoció en las pequeñas zonas urbanas —Uchiza, Tocache, Aucayacu, entre otros—, donde desfilaron gracias a jugosos contratos conjuntos musicales, artistas y *vedettes* de fama nacional, así como se instalaron sucursales bancarias de los principales bancos del país que, sin ningún impedimento, compraban dólares baratos provenientes del negocio de la droga. Era el tiempo de los aerotaxis y motos en cantidad y de todos los modelos. En suma, una vida acelerada y peligrosa, con fronteras resguardadas por grupos armados, comunidades cerradas y, sobre todo, muchos muertos.

Un buen ejemplo del impacto del *boom* en la ciudad puede ser el pueblo de Tocache, con el burdel como centro de socialización, mientras el campo puede estar representado por el pequeño caserío de Pacota, distrito de Nuevo Progreso, donde los mandos del PCP-SL pretendían regular todo, hasta la vida sentimental de las personas. La imagen urbana remite al libertinaje, el derroche de dinero y cerveza sin límites, donde predominaba la ley del más fuerte. En el campo, por el contrario, se imponía desde fuera un código moral radical. Éste era el ámbito del PCP-SL, donde las infracciones se pagaban muchas veces con la muerte y se observaba, fiscalizaba e investigaba todo, donde no había «mujeres de bar» y, a veces, ni se vendía alcohol.

En la memoria colectiva de la zona ha quedado que primero llegaron los colombianos, clandestinamente, a internarse en el monte sin acercarse al pueblo, pero luego fueron apareciendo poco a poco hasta andar abiertamente por las calles de Tocache, previo pago a las autoridades de turno, cada uno con su grupo de hombres armados, sus sicarios. Así empezó el apogeo, casi de la noche a la mañana. Luego apareció el pandillaje y la rivalidad entre las distintas firmas, con encuentros repentinos que casi siempre terminaban a balazos. Desde mediados hasta fines de los años ochenta fue casi imposible transitar entre Tingo María y Tocache sin ver por lo menos un muerto botado al borde del camino, con o sin un letrero acusador.

La fama de El Vampiro radicó no sólo en que era tocachino neto, sino que fue el primer peruano en Tocache en armar su propio grupo, el primero y más sanguinario, el que les hizo la guerra a los colombianos. Se constata, entonces, que la expansión de las firmas, primero colombianas y luego peruanas, y sus sicarios fue paralela al ingreso del PCP-SL en el Huallaga, ambos favorecidos por el auge de precios de derivados ilícitos de la coca.

El análisis de las actividades del PCP-SL en el Alto Huallaga tiende a girar alrededor de una tensión entre lo político y lo económico. Se suele presentar el vínculo de la población con el PCP-SL como algo poco profundo, meramente de conveniencia y, por lo tanto, pasajero. Si bien es cierto que, por tratarse de una población de colonos e inmigrantes temporales, es lógico suponer que las motivaciones económicas pesaran mucho más que las políticas y que el contenido ideológico del discurso del PCP-SL, que no tenía gran resonancia en el Alto Huallaga, la relación compleja entre política y economía obliga a entender el régimen de control que aplicó el PCP-SL en los lugares donde logró consolidarse y consiguió control territorial.

Se parte de que el espíritu del proyecto del PCP-SL fue altamente moralista, es esencial considerar la fuerza de atracción que debió haber representado en el Alto Huallaga, espacio de desorden social que exigía o reclamaba el orden que llegó con la intervención del PCP-SL. Es decir, habría que preguntarse si no fue la vida desenfadada del apogeo la que creó las condiciones en las cuales el mensaje justiciero del PCP-SL encontró eco.

El inicio del apogeo de la droga en el Huallaga data de 1974 o 1975, en los pueblos inmediatamente al norte de Tingo María. Al parecer, su centro fue el caserío de Anda. Los focos tempranos fueron relativamente discretos, pues la droga se elaboraba en lugares escondidos en el monte y, una vez procesada, no circulaba de modo abierto en los caseríos o pueblos. El apogeo se manifestaba entonces básicamente en el consumo suntuario de la población local, en las fiestas alborotadas y en la aparición de artículos de lujo: carros, motocicletas, ropa ostentosa, joyas, relojes. Por su parte, la presencia del PCP-SL en el Alto Huallaga no comenzó a notarse sino hasta unos seis años después. Como se ha resumido en la historia de la Región Nororiental, poco después de los operativos antinarcóticos Verde Mar I y II, el terreno quedó abonado para la prédica del PCP-SL en defensa de los cocaleros ante la represión estatal. Los pobladores de Aucayacu, como también autoridades municipales de ese

entonces, mencionan la huelga de cocaleros en 1981 como el acontecimiento que contó por primera vez con presencia oculta de cuadros del PCP-SL. Según se deduce de la información recopilada, son tres las zonas donde el PCP-SL se asentó para organizar el campo. Dos estaban en la margen izquierda del río Huallaga: una de ellas comprendía el puerto Venenillo y los caseríos La Merced, Locro, Corvina, Los Cedros, entre otros, que luego conformaría el llamado bolsón Cuchara; otra reunía los caseríos de San José de Pucate, San Martín de Pucate y Primavera, frente a Aucayacu. La tercera zona fue el sector Gocen-Nueva Esperanza, situado en la margen derecha del río Huallaga, al norte de Pucayacu, cerca del caserío de Consuelo. Se debe recordar que la primera acción armada del PCP-SL en el Huallaga fue un ataque al puesto de la Policía Forestal de Pucayacu en 1982, un blanco a pocos kilómetros de la zona de Gocen, lo cual refuerza la hipótesis de que Gocen-Nueva Esperanza habría sido el primer núcleo de dicha organización subversiva en el Alto Huallaga.

Lo cierto es que, a inicios de 1982, grupos del PCP-SL ya visitaban los caseríos situados a lo largo de la margen izquierda del Huallaga, desde Venenillo hasta la Morada y Huamuco, y reunían a los pobladores para pregonar su política y anunciar las nuevas reglas que los pobladores debían acatar. Vistiendo polos negros, pasamontañas y portando escopetas, tramperos y revólveres, estos primeros grupos predicaban la necesidad de emprender acciones armadas contra el Estado en defensa de los cultivos de coca en vista de que las huelgas pacíficas, según ellos, no conducían a nada.

A la par del creciente control del PCP-SL sobre el campo, se constata el surgimiento de Ramal de Aspuzana como centro abierto de la droga. El término centro abierto de la droga se refiere a la etapa de apogeo, cuando se comercializaba PBC e insumos libremente en las calles de los pueblos. Ramal de Aspuzana brotó como mercado importante entre 1981 y 1982, casi paralelamente al surgimiento del poblado de Paraíso y a los pueblos más grandes de Uchiza y Tocache. El grado de clandestinidad del negocio de la droga dependía de la Policía. El narcotráfico se ejercía abierta o libremente sólo en ausencia de represión policial, sea por falta de una delegación policial, sea por el soborno o la amenaza de violencia en su contra. Estos sitios serían seguidos posteriormente por Puerto Pizana y Sión, aunque nada impedía que un pueblo que dependía del narcotráfico oscilara múltiples veces entre centro abierto y centro cerrado o clandestino de la droga, siempre y cuando se produjeran momentos en que las Fuerzas Policiales dejaban de reprimir el negocio.

En las calles de Ramal de Aspuzana se produjo una actividad comercial bulliciosa, donde el dólar había desplazado a la moneda nacional, aunque el movimiento más importante se encontraba al otro lado del río, en el sector de Magdalena, donde operaban aeropuertos clandestinos desde los cuales se embarcaba la droga. Las primeras relaciones entre narcotraficantes importantes y el PCP-SL datarían de esa época, principalmente por el control de las pistas, es decir, la concesión de permisos de uso a cambio de los pagos de derecho, y luego por la protección que los miembros del PCP-SL proveerían contra los operativos que efectuaba la UMOPAR en la zona.

En términos globales, la expansión del PCP-SL en el Alto Huallaga siguió una tendencia de sur a norte por todo el espacio rural del valle, buscando organizar el campo y acercarse poco a poco a la ciudad o centros urbanos más importantes de cada sector. Siguiendo ese patrón, los dos atentados de gran envergadura en el pueblo de Aucayacu contra puestos de la GC se dieron sólo después de la consolidación del control del PCP-SL en las zonas aledañas al pueblo, aunque antes de estas incursiones hubo una serie de acciones menores como el atentado no mortal contra el ex alcalde Augusto Tovar Tovar a fines de 1982, el intento de asesinato en 1983 del gobernador en la puerta de su casa, una carta firmada a principios de 1984 por el grupo Pukallacta exigiendo la renuncia de todas las autoridades municipales, y el atentado e incendio de la casa del alcalde Enrique Bruckman Falcón.

Entre 1983 y 1985, el PCP-SL instaló sus propias autoridades, con distintos grados de clandestinidad, en la mayoría de los caseríos de la zona rural desde Tulumayo hasta Yanajanca. Su presencia abierta se concentraba en las comunidades ubicadas a la derecha de la Carretera Marginal, pero retiradas varios kilómetros de ésta, y en la margen izquierda del río Huallaga —sobre todo en la zona de Cuchara, frente a los pueblos de Aucayacu y Ramal de Aspuzana, y los sectores de la Morada y Huamuco—.

### 23.2.3. El poder y los negocios

A la vez que el narcotráfico impuso una nueva técnica para refinar la droga, pues las bolas de «bruta» cedieron en importancia frente a paquetes de pasta básica lavada, conocida como la «base», el PCP-SL organizó su «nuevo Estado» en los numerosos caseríos que controlaba, convertidos en «comités populares». Desde ahí

gobernaba los asuntos de la comunidad de una manera mucho más fuerte e intrusiva que la desplazada directiva comunal. En efecto, la nueva autoridad se encargaba de organizar al pueblo, es decir, aplicar las instrucciones de la subversión y repartir las enseñanzas y tareas políticas del partido. Si llegaba una persona nueva buscando terreno, ésta tenía que entrevistarse con el delegado, quien antes de darle permiso para residir allí, la interrogaba exhaustivamente sobre su procedencia, su historia y sus propósitos. Sólo si conocía a alguien del caserío y venía recomendada encontraba acogida.

Nombrar autoridades era uno de los mecanismos centrales que utilizaba el PCP-SL para someter a los individuos al régimen administrativo dentro de su «red territorial». Con ese nombramiento comenzaban las responsabilidades y tareas: la obligación tanto de rendir cuentas cada cierto tiempo a las autoridades superiores del partido (especialmente cuando llegaba la «fuerza principal»), así como aceptar sus directivas, que no siempre eran fáciles de cumplir.

Al principio, el PCP-SL eliminó a la gente acusada o percibida como maleante, pero luego asesinó selectivamente a las personas que no quisieron vivir bajo su dominio o las obligó a salir de los caseríos. Todos los cocaleros, con excepción de los agricultores más pobres, tenían que entregar un porcentaje de cada cosecha al «comité» y la droga, que antes se procesaba de forma clandestina, se vendía públicamente en toda la margen izquierda del río Huallaga, en compra/venta libre aunque controlada, pues sólo se permitía esa compra en sitios designados por el partido, bajo la vigilancia de uno de sus militantes. Para entrar a comprar, los acopiadores necesitaban una recomendación, es decir, contar con alguien de la zona que los contactara con los delegados del PCP-SL y los avalara antes de recibir autorización. Una vez autorizado, el acopiador podía comprar, pero acatando las reglas que establecía el PCP-SL.

En la zona de Aucayacu y en otros lugares, la intervención del PCP-SL en la transacción misma de la droga se explica a partir de los abusos que cometían los traqueteros, que pesaban los kilos de PBC con una balanza adulterada o calculaban excesivamente el descuento que se aplicaba a la droga por agua o impurezas. El PCP-SL encontró una solución formal a estas tretas de los traqueteros con la instalación de la balanza bajo administración del «comité popular» de cada comunidad. El control de la balanza funcionaba en puntos establecidos a lo largo de la margen izquierda del río Huallaga, ubicados cerca de los puertos principales y de acceso fácil para los traqueteros, que cruzaban el río en pequeños botes desde Aucayacu o Ramal de Aspuzana. Había balanzas en Cerro Alegre (frente a Aucayacu), San Martín de Pucate (frente a Las Mercedes) y San José de Pucate (frente a Cotomono), así como en los puertos de Moena y Muyuna, aunque parece ser que, en la margen izquierda del río, la institución de la balanza legal se extendía desde Venenillo hasta Magdalena y la Morada.

Además de la administración de cocales confiscados y su producción, el cobro de tributo a los cocaleros y la regulación de las transacciones de la droga dentro de sus respectivos sectores, los «comités populares» también controlaban las pistas o aeropuertos clandestinos desde los cuales las empresas o firmas de narcotraficantes embarcaban sus cargamentos de PBC, como en Bolognesi y Pavayacu (Aucayacu); Magdalena; La Morada, Huamuco y Nueva Esperanza (Consuelo); entre otros.

A mediados de 1987, el PCP-SL amplió la organización de los «comités populares» en la margen izquierda del río Huallaga y diversificó la cadena y responsabilidades de los representantes del partido. El «comité» ya no dependía de un delegado sino de cinco, de los cuales tres eran principales: el mando político, el mando militar y el mando logístico. El mando político coordinaba las asambleas y se responsabilizaba por impartir la enseñanza política del PCP-SL. El militar velaba por la seguridad de la comunidad, organizaba a la «fuerza de base» y seleccionaba a los mejores combatientes para incorporarlos a la «fuerza local» o «fuerza principal» del Ejército Popular Guerrillero. Pero también cumplía funciones policiales, como detener a personas que habían transgredido las reglas del partido. El tesorero del «comité» era el mando logístico, el encargado de administrar los fondos y propiedades del pueblo, pero también de suministrar las medicinas o provisiones que requiriese el partido.

Entre nueve y doce «comités populares» conformaban un «bolsón», de los cuales, en la margen izquierda del río Huallaga, se conocen el «bolsón» Cuchara (Venenillo), el «bolsón» Pucayacu (Primavera, Cerro Alegre, Bolognesi, San José y San Martín de Pucaté, entre otros), el «bolsón» Magdalena, el «bolsón» la Morada y el «bolsón» Huánuco. En orden jerárquico, después del «bolsón» estaba el «comité regional» del partido.

En la estructura militar del PCP-SL, las «fuerzas principales» conformaban la llamada «red móvil», sin base fija y que se movilizaba de sitio en sitio. La «fuerza local» generalmente se desplazaba dentro de la «red territorial», es decir, las áreas ya organizadas y administradas por el partido, y promovía acciones de menor envergadura. El PCP-SL llegó a dividir el valle del Alto Huallaga en cuatro zonas territoriales (T1, T2, T3, T4) desde Monzón hasta Campanilla y se supone que cada «fuerza local» operaba dentro de un territorio determinado, si bien las fechas de inicio y terminación de la existencia real de estos territorios no están claras. Mientras tanto, la «fuerza principal» operaba centralmente en áreas que todavía no habían sido organizadas o que se habían perdido a raíz de las acciones contrasubversivas de las Fuerzas Armadas. Aunque la «fuerza principal» desarrollaba campañas de larga duración desplazándose entre corredores que comunican sierra y selva, solía emprender acciones, con el apoyo de las zonas ya organizadas hacia zonas colindantes o fronterizas con éstas. Para acciones a gran escala, por ejemplo la toma de pueblos grandes donde había presencia de cuerpos armados del Estado, no actuaba sola sino que se reforzaba con combatientes de las «fuerzas locales» y «de base» de los «comités populares».

#### 23.2.4. El PCP-SL se expande con la coca

A mediados de la década de 1980, el PCP-SL comenzó a desplazarse río abajo en el Huallaga, en dirección norte, hacia lo que para ese entonces emergía como la zona más importante del mercado de la droga: Uchiza, Paraíso y Tocache. A diferencia de la parte sur, desde Anda a Ramal de Aspuzana, donde en los primeros años del apogeo el narcotráfico no se ejercía con una extrema violencia, en la zona norte del Huallaga era mucho más común ver a patrones o narcotraficantes circular con pequeños ejércitos de sicarios que les servían de seguridad y como un instrumento de poder, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. La llegada del PCP-SL significó que les sería más difícil, cuando no imposible, operar con libertad en el campo, y los campesinos cocaleros hipotéticamente tenían quién representase sus intereses no solamente frente a las agresiones del Estado sino también frente a las presiones de los otros actores del mercado de la droga.

El PCP-SL entró a Paraíso, al principio, de modo clandestino y luego abiertamente a partir de una incursión armada, que inició el dominio sobre el pueblo que duraría hasta fines de los años noventa. Fue sólo en 1978 cuando apareció el cultivo de coca en Paraíso, y apenas dos años después se convirtió en un centro de narcotráfico. Paraíso antecedió a Uchiza como un centro totalmente abierto al comercio de la droga por dos o tres años y, según algunas versiones, lo superó en volumen de negocio hasta que Uchiza emergió como el mercado más activo del Huallaga a partir de 1984-1985, posición que defendería hasta 1990. Paraíso resultó un lugar estratégico por ser un enclave de narcotraficantes donde no había presencia de las Fuerzas Policiales por su relativo alejamiento de una vía de acceso rápido y por sus fuertes nexos con los mercados y firmas de Uchiza y Tocache. El estallido inesperado del apogeo en 1980 había transformado un paraje netamente rural en un pueblo bullicioso y acaudalado, lo que atrajo a personas no sólo de todas partes del país sino de México, Bolivia y Brasil, si bien el grueso de la colonia extranjera la formaban los colombianos. De pequeña colonia agraria, Paraíso se transformó en punto de concentración para todos los elementos del apogeo tanto urbano como rural. En Paraíso vivían patrones colombianos y peruanos en «bonitas casas» con sus sicarios y traqueteros. Las calles principales se llenaron de restaurantes, bares y discotecas. A poca distancia se cultivaba coca, se maceraba la hoja y aterrizaban las avionetas. Lo único que lo diferenciaba de los otros centros de la droga era que no había autoridades del Estado. Paraíso abarcaba entre 18 y 20 caseríos, cada uno con sus respectivas zonas de cultivo. Contaba, además, con ocho pistas de aterrizaje que, en realidad, eran simples caminos vecinales que comunicaban a los distintos sectores y funcionaban como pistas para despachar cargamentos de pasta básica al extranjero.

A partir de su llegada al caserío de Paraíso, las cosas marcharon muy rápido. El PCP-SL organizó todos los sectores de Paraíso, pero también las zonas de cultivos alrededor de Nuevo Progreso, Tocache y Uchiza, y tomó así poco a poco el campo. Los patrones que antes tenían carta abierta para presionar a los campesinos con sus bandas de sicarios se vieron obligados a desplazarse hacia las zonas urbanas por miedo a que los agricultores informaran a los delegados de los «comités populares».

Un buen ejemplo de este ejercicio de justicia y orden fue cuando un grupo armado de integrantes del PCP-SL ingresó al pueblo de Nuevo Progreso y reunió a toda la población en la plaza de armas. Decían que venían «a poner orden» a causa de las muchas quejas que habían recibido contra los traqueteros que estafaban a los agricultores en la compra de la droga y porque las firmas recibían droga fiada pero no cancelaban sus

deudas. Dieron un plazo de 24 horas para que todos remediaran sus problemas de pago. «Y los hombres al ver que las cosas eran serias», cuenta un testigo, «se han puesto a derecho, creo que desde esa fecha la gente empezó a valorar su vida y a no deber». Poco después, se formó un «comité» en Nuevo Progreso y, desde entonces, cualquiera que tuviera problema de cobranzas podía buscar al delegado y presentar su denuncia, sabiendo que allí «harían justicia».

La llegada del PCP-SL a Tocache sería más sutil al principio, quizá por tratarse de un pueblo más grande o quizá porque la situación era totalmente diferente. Según relata un ex sicario que trabajó para una de las firmas principales, una persona de confianza de *Machi* fue a Tocache para presentar a un emisario del PCP-SL a los narcotraficantes más importantes, entre ellos *Vampiro*, *Mashico*, *Aníbal*, *Shushupe*, *Áureo*, el *gato Gerber*. El representante del PCP-SL anunció que su organización iba a entrar al pueblo, pero no para enfrentarse con los narcotraficantes sino para ayudarlos a ordenar la ciudad, así como para poner en jaque a la Policía y acabar con la delincuencia que azotaba a la zona urbana. Fue un ofrecimiento que, al parecer, la mayoría de los narcotraficantes recibió con agrado. El PCP-SL habría convencido a los jefes de firmas de que el apoyo de su organización al ordenamiento del pueblo sería más eficiente si ellos invertían en el trabajo de los subversivos, trayéndoles incluso armamento de guerra de Colombia. Fue precisamente entre 1987 y 1988 que se notó una transformación en el armamento que utilizaban los grupos del PCP-SL, pues si antes portaban revólveres y escopetas, luego llevarían metralletas, AKM, FAL y RPG.

En 1986 los vuelos con droga comenzaron a salir con gran frecuencia del aeropuerto municipal de Tocache, a veces hasta cuatro o cinco veces al día. El narcotráfico estaba en pleno apogeo y la droga circulaba abiertamente.

*Chatín*, importante mando logístico del PCP-SL que abarcaba todo el sector de Tocache, manifestó luego de su captura que él controlaba el negocio de la droga cobrando un porcentaje por cada kilo de PBC que salía por la pista clandestina de Cañuto, ubicada apenas a cuarenta minutos de la base de Bambamarca y a dos horas de Tocache. Según diversos testimonios, la pista fue construida por el coronel EP Luis Aparicio Manrique con maquinaria pesada del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH). El PCP-SL cobraba por el uso de la pista, como anteriormente lo había hecho en Uchiza, donde fijó la «matrícula» (pago anual) que permitía a las firmas operar en el lugar pagando cupos de 10 mil dólares por cada vuelo. *Chatín* se encargaba de administrar la pista de Cañuto y, además, era un elemento sanguinario, pues había asesinado por lo menos a cuarenta personas, entre militares y civiles.

Es indudable que el PCP-SL entabló una relación con el mercado de la droga mucho más profunda que la desarrollada por Fuerzas Policiales, el Ejército o la Fuerza Aérea (FAP). Los nexos del grupo maoísta con la producción, comercio y distribución de la PBC son múltiples: en el cultivo y elaboración, los «comités populares» controlaban la tenencia de tierras y, con ello, el primer eslabón del mercado de la droga: el cultivo de la coca; en el acopio, el PCP-SL disponía los términos y condiciones de todos los que entraban a las zonas rurales para comprar la droga, acopiadores y traqueteros; en la distribución, por medio de la vigilancia que ejercía sobre pistas clandestinas de aterrizaje en la zona rural, y en las concesiones a empresas locales de la droga obligadas a sujetarse al partido.

Esta injerencia múltiple muestra claramente que, hacia fines de la década de 1980, el PCP-SL buscaba imponerse más sobre el mercado local y sustentaba su expansión inicial en la administración de justicia y protección contra la represión de los operativos antinarcóticos, sobre todo de la UMOPAR, y luego contra las labores de erradicación (CORAH).

En los primeros meses de 1987 ya había cientos de combatientes del PCP-SL concentrados en Tocache controlando a la población. El PCP-SL nombró delegados en cada manzana y organizó a los varones en una ronda nueva, esta vez sin la presencia de los sicarios. La llamada «ronda de cuadra» vigilaba las calles de la ciudad durante las noches. Pequeños grupos de vecinos caminaban por sectores de tres manzanas y reportaban cualquier situación que no podían resolver al «Club Obrero», donde elementos armados del PCP-SL habían establecido un «comité de justicia popular». A fines de 1986 y comienzos de 1987, el PCP-SL avanzó hacia el norte organizando a los pueblos y caseríos al norte de Tocache: Bambamarca, Nuevo Horizonte, Escote y Santa Rosa de Mishollo, entre otros, en una expansión rápida e intensiva alimentada por el fuerte movimiento de la droga en Puente Pizana, mercado importante de este producto a fines de los ochenta. La expansión de sus tareas organizativas llegaría hasta Punta Arenas/Campanilla y se vio frustrada a partir de Juanjuí por la presencia del MRTA.

Durante esta época, el PCP-SL habría comenzado a organizar los «comités de poder popular paralelo» (CPPP) en los pueblos mayores que tenían presencia importante de fuerzas del orden, conocidos en el habla popular del Huallaga como «las urbanas». La función de «las urbanas» era mantener una red de espionaje, dedicarse al cobro de impuestos o colaboraciones de comerciantes y al asesinato selectivo de «malos elementos». Aucayacu sería un caso singular, pero más tarde se sumaría a la lista Uchiza y Tocache y una serie de caseríos pequeños a lo largo de la Carretera Marginal. En Aucayacu, tuvieron una fuerte presencia de 1986 a 1989, hasta que fueron totalmente eliminadas en 1992. En Tocache, «la urbana» duraría, según afirman algunos, hasta 1995.

A fines de mayo de 1987, el PCP-SL atacó por primera vez el puesto policial de Uchiza y, en junio, declararía un «paro armado» en el Alto Huallaga. Entre Tulumayo y Nuevo Progreso, obligaría a la población rural a participar en el bloqueo de la carretera, la destrucción de asfaltado y la pinta de fachadas de viviendas a lo largo de la Carretera Marginal. Estos primeros paros serían una poderosa medida de fuerza, con la cual el PCP-SL no sólo lograba cortar la comunicación de vehículos entre Tingo María y el resto del Alto Huallaga, sino también demostraba su control total sobre el campo. Poco después, comenzaría la destrucción de puentes sobre los ríos Pendencia, Pacae y Angashyacu. Con la destrucción de pistas y puentes, el viaje de cuarenta kilómetros entre Tingo María y Aucayacu, que antes se hacía en 45 minutos, se extendía a dos horas y media, sobre todo durante la estación lluviosa. El siguiente paso del PCP-SL fue la instalación de garitas de control a lo largo de la Carretera Marginal.

Parecía que el Alto Huallaga ya estaba bajo dominio del PCP-SL, cuando el 15 de julio de 1987 paracaidistas de unidades especializadas de la Policía tomaron el pueblo de Tocache en un gran operativo denominado Relámpago. A todas luces, el PCP-SL y los narcotraficantes esperaban un contraataque policial, porque ambos grupos se retiraron de la zona urbana antes del arribo de los primeros policías. Unidades especiales de la Policía se instalaron en Tocache y en Nuevo Progreso, donde la presencia del PCP-SL se volvió clandestina; si bien el abandono de Tocache debía de haber parecido en el momento sólo una retirada estratégica, el PCP-SL nunca volvería a intentar la ocupación abierta de un centro urbano en la zona del Huallaga. En ese sentido, la toma y ocupación de Tocache, por ser la primera y última vez que el PCP-SL tuvo un control abierto sobre la ciudad, fue un caso límite. La regla fue, más bien, hostigar y presionar a la zona urbana desde el campo y, en ocasiones muy especiales, acumular fuerzas de todos sus «bolsones» para lanzar un ataque, entrar por algunas pocas horas y salir deprisa antes de que llegaran refuerzos de las Fuerzas Policiales o castrenses.

A raíz del operativo Relámpago y la fuga al campo de las principales firmas, Tocache decayó como centro abierto de la droga y surgió Sión como nuevo foco de ese mercado. Sin embargo, Tocache seguirá siendo importante dentro del circuito del narcotráfico como centro de abastecimiento de insumos para la elaboración de la droga y productos de consumo como cerveza y gaseosa. Continuarían saliendo los vuelos del aeropuerto municipal, pero ya con menos frecuencia y de modo menos atrevido. Tocache tomaría un lugar muy secundario frente a Uchiza, donde el narcotráfico se mantendría en pleno apogeo y con una fuerza creciente hasta fines de la década de 1980.

Hacia mediados de 1987, comenzaron a presentarse en Paraíso los primeros conflictos con los narcotraficantes cuando se produjo la ruptura entre *Machi*, el capo local, y el PCP-SL. Hay diversas versiones sobre la causa detonante. Algunos dicen que mientras *Machi* estaba de viaje en Colombia, el PCP-SL habría matado a su hija o a toda su familia. Otros afirman, más bien, que los muertos eran once trabajadores de *Machi* que gente del PCP-SL vio hablando por radio y pensaron que se estaban comunicando con el Ejército cuando sólo conversaban con su jefe; los del PCP-SL dieron muerte a siete hombres del grupo de *Machi* en la plaza de armas de Paraíso y perdonaron a los cuatro restantes con la condición de incorporarse a las filas de su movimiento. También existe una tercera interpretación que señala que *Machi* había ordenado que un grupo de seis de sus hombres secuestrara a un ganadero de Paraíso, pero, por fortuna, la víctima conocía a sus captores y logró convencerlos de que lo soltaran. Poco después, el PCP-SL se enteró del secuestro y decidió enfrentarse con *Machi*. Sea cual fuere el inicio del conflicto, *Machi* llegó a declarar la guerra al PCP-SL y, con la ayuda de la Policía, armó un ejército de cien hombres. Vistiendo uniforme policial «con rango de mayor o comandante» fue de Paraíso hasta Ramal de Aspuzana matando a cualquier persona que consideraba del PCP-SL. El momento decisivo del conflicto ocurrió en el mes de noviembre de 1987 cuando, en un episodio que ya ha tomado matices de leyenda, las fuerzas del PCP-SL le tendieron una emboscada en la entrada de Paraíso. La emboscada fracasó. Sólo lo hirieron de bala. *Machi* se atrincheró en el enorme fortín de concreto armado que

había construido en el pueblo. Allí se inició una batalla que duró, cuando menos, 24 horas y dejó docenas o cientos de víctimas según diferentes versiones. Atrapado en su reducto, *Machi* sufrió numerosas bajas entre su gente, pero al final logró salvarse gracias a dos helicópteros de la Policía que llegaron en su auxilio.

En el segundo asalto al pueblo de Uchiza, el 17 de marzo de 1989, la matanza de policías no sólo fue un hecho humillante para la institución policial sino que demostró, una vez más, el apoyo campesino a los integrantes del PCP-SL y el alto grado de corrupción de los responsables del destacamento policial. La táctica del PCP-SL de captar el rencor popular contra la Policía para convertirlo en un argumento de poder propio se expresó en esta oportunidad con claridad. Pero 1989 marcó un punto crítico en el despliegue del PCP-SL en el Alto Huallaga, pues el ataque a Uchiza coincidió con una fuerte crisis en el precio de la droga que fuentes locales suelen atribuir ahora a la persecución policial a los carteles de Medellín y Cali. El transporte de la droga al extranjero disminuyó de modo radical, lo cual causó una acumulación inusitada de PBC y una saturación del mercado local. Como consecuencia, el precio por kilo de «base» en el Huallaga comenzó a desplomarse aceleradamente en 1990-1991, perdió más de la mitad de su valor y siguió bajando hasta tal punto que ya no era negocio procesar la droga. La caída de los precios y la contracción del negocio significaron, para el PCP-SL, el final de su «nuevo orden» en el Huallaga.

### 23.3. LA CORROSIÓN DE LA DROGA

Ninguno de los actores presentes en el ciclo de violencia en el Huallaga escapó del inmenso poder corrosivo del narcotráfico. Algunos integrantes de la Policía, por ejemplo, extorsionaron a los productores de coca de manera generalizada desde mediados de los años setenta hasta principios de los años ochenta, aunque nunca intentaron organizar a la población rural. Cobraron cupos por el embarque de droga desde los aeropuertos clandestinos, pero no lo hacían en zonas rurales dominadas por el PCP-SL. También recibieron sobornos de las firmas locales para «hacerse de la vista gorda» con respecto a sus actividades en los centros urbanos, pero no trataron de arbitrar los conflictos que surgían entre ellas. Miembros de las Fuerzas Armadas, por su lado, recibieron pagos de los narcotraficantes locales para «dejarlos trabajar». Se sabe que ayudaron en distintos momentos con los embarques de PBC al extranjero y protegieron la entrada y salida de avionetas en pistas clandestinas cerca a sus bases.

En el presente acápite, se resume la historia de la corrupción generada por el tráfico ilícito de derivados de la coca al interior del aparato del Estado antes y durante el período de conflicto armado interno. Ya ha sido mencionado que, por mandato constitucional, la prevención y el combate al narcotráfico están a cargo de la Policía, y fue durante el gobierno del general EP Francisco Morales Bermúdez que se promulgó la ley de represión del tráfico ilícito de drogas (decreto legislativo 22095), el 2 de marzo de 1978. En ella se establecían los objetivos generales de la represión del Tráfico Ilícito de Drogas (TID) así como las pautas de acción de los órganos encargados de controlar la producción y comercialización de todas las variedades de coca, adormidera y marihuana. Se encargaba a la Policía Forestal la reducción y sustitución de los cultivos y a la PIP, la investigación y represión de los cultivadores.

Con esta ley, se declararon en emergencia los departamentos de Huánuco y San Martín, así como la provincia de Coronel Portillo, entonces perteneciente al departamento de Loreto, con fines exclusivamente de control del cultivo ilegal de la hoja de coca y represión al narcotráfico, debido, según se menciona en aquella ley, «al notable incremento del cultivo de la coca con fines ilícitos en tierras que antes estuvieron dedicadas a cultivos de panllevar».

Por primera vez también se encargó al Ministerio del Interior el planeamiento, organización y conducción de los operativos con el apoyo de los institutos de las Fuerzas Armadas, además de los otros sectores, y se creó la Oficina de Control de Drogas (OFECOD).

Casi una década después, en pleno curso de las acciones subversivas, en septiembre de 1987, se creó el comando político militar del Huallaga, con un destacamento al mando del coronel EP Rafael Moral Rengifo, encargado de conducir las operaciones militares contrasubversivas en los departamentos de Huánuco y San Martín.

En las postrimerías de su segundo mandato, en marzo de 1985, Belaunde Terry dictó la ley 24150, que supestitó al control militar extensas áreas geográficas que habían sido declaradas en emergencia. En consecuen-

cia, en los ámbitos de influencia del narcotráfico, como el Alto Huallaga, la Policía tuvo que subordinar su función y acciones de prevención y combate al narcotráfico a la autorización del comando político militar. Eso colocó a las Fuerzas Armadas en permanente contacto con la problemática de las drogas.

### 23.3.1. A sangre y fuego

De la misma manera que la vinculación entre el PCP-SL y el narcotráfico fue notoria, también se conocía del alto grado de corrupción entre elementos de la PIP y la GC acantonados en el Alto Huallaga, que tuvo como detonante el ataque a la comandancia de Uchiza por el PCP-SL en marzo de 1989. Durante el enfrentamiento, que duró tres horas, perdieron la vida diez policías, incluyendo el jefe del destacamento policial, mayor Carlos Farfán Correa, quien fue ajusticiado por miembros del PCP-SL en la plaza de armas de Uchiza, poco después de ser tomado como rehén junto a un grupo de guardias, mientras los atacantes saqueaban e incendiaban el puesto policial.

Pocos meses antes del ataque, en un informe ante la asamblea de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1988, Enrique Bernales aseguró que en el Huallaga existían 100 mil hectáreas de cultivos ilegales prácticamente bajo control del PCP-SL, convertido en una suerte de intermediario entre el cocalero y las firmas a cambio de una comisión. El gobierno de Estados Unidos ya estaba al tanto de esta conexión, según demuestran una serie de documentos internos del Consejo de Seguridad Nacional, pero no aprobó la estrategia del general EP Alberto Arciniega Huby de alianza con los campesinos cocaleros. Arciniega había llegado comisionado por el comandante general del Ejército, general EP Artemio Palomino Toledo, para restablecer el orden interno al Alto Huallaga luego del asalto al puesto policial de Uchiza con el objetivo de ganarse al campesino cocalero, que precisamente era la base social utilizada por el PCP-SL para ejecutar sus ataques. De hecho, esta estrategia, sumada a intensos operativos militares, marcaría el inicio de la derrota del PCP-SL en el Huallaga. Sin embargo, la «política Arciniega» no satisfizo a Washington, que propició su salida del comando político militar del Huallaga en noviembre de 1989, bajo la sospecha de estar aliado al narcotráfico, algo que, por supuesto, el general Arciniega ha rechazado tajantemente y las autoridades estadounidenses jamás han logrado probar.

Como estaba previsto, en mayo de 1991, Alberto Fujimori suscribió el convenio marco con los Estados Unidos, que en la práctica autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos con todos los riesgos que ello involucraba. Para ello, el 26 de septiembre de 1991 se expidió el decreto supremo 137-91-PCM, que subordinó la labor de la Policía a las disposiciones de comando político militar en materia de subversión y narcotráfico.

### 23.3.2. Policía y corrupción

Durante la época del general EP Francisco Morales Bermúdez, la famosa promoción de la PIP, a la cual pertenecían 35 generales, se adueñó, entre otras direcciones, de la Dirección de Delitos contra el Patrimonio para repartirse los bienes que eran recuperados y proteger a ciertas bandas a cambio de compartir el producto de sus robos. Esta descomposición —sólo comparable a la ocurrida dos décadas después en el Ejército con la promoción Montesinos, que copó los puestos de mando y se corrompió de la mano del ex asesor Vladimiro Montesinos— alcanzó su máxima expresión durante la gestión de Eduardo Ipinze Rebatta como director superior de la PIP en 1983.

Al llegar Ipinze Rebatta a la Dirección Superior, el negocio ilícito del narcotráfico comenzó a cambiar de dueños. La PIP barrió a los pequeños distribuidores y *paqueteros* que eran protegidos por la GC y se concentró en las grandes mafias que llegaban a Lima procedentes del Huallaga.

La estación PIP de Apolo, en La Victoria, adonde iban a parar los traficantes intervenidos en la Carretera Central, era una mina de oro apetecida por muchos policías. Algo similar ocurría con la estación PIP del Callao, lugar al que llegaban las personas detenidas con droga en el aeropuerto Jorge Chávez. Ser destacado a estos lugares llegó a costar 10 mil dólares; pero, en la época de Ipinze Rebatta, de la venta de los puestos más productivos se pasó al alquiler. En otras palabras, una estación o división PIP debía producir una determinada cantidad mensual de dinero que era distribuida entre las cabezas de la promoción. No fue simple coincidencia que Reynaldo Rodríguez López, (a) *El Padrino*, dueño de la llamada *Villa coca*, diera comienzo a una desconcertante prosperidad en tiempos de Ipinze Rebatta. Cuando el general Rómulo Alayza asumió la Di-

rección Superior de la PIP, se asegura que Rodríguez López le ofreció un espléndido banquete al cual asistió en pleno *La Promoción*, que ya controlaba los altos mandos y todos los puestos clave de la PIP.

Con la captura de Rodríguez López quedó al descubierto la famosa red de protección oficial de la que gozaba. No sólo fue dado de baja y apresado el general PIP José Jorge Zárate, *Pepe Jorge*; también fueron implicados en el caso de Villa Coca todos los jefes de la Policía entre 1980 y 1985, los jefes policiales antidrogas, un asesor del Primer Ministro y varios empresarios. El general PIP Irwin Jaime Llamosas, jefe de la División de Investigación Financiera de la PIP, fue dado de baja definitivamente y años más tarde aparecería como cercano colaborador de Vladimiro Montesinos en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). También fue dado de baja el general PIP Antonio Ketín Vidal, quien según algunos proveía de información privilegiada a la mafia aprovechando su puesto en la División de Inteligencia de la PIP. Partes de inteligencia suscritos de su puño y letra fueron hallados en una caja fuerte de *El Padrino* Rodríguez López.

Otro ejemplo de la corrupción en las filas de la Policía se constata en 1984 a raíz del juicio al narcotraficante colombiano Evaristo Porras Ardila, detenido en Lima cuando intentaba comercializar veinte kilogramos de clorhidrato de cocaína. Vladimiro Montesinos ejerció la defensa de Porras, quien fue enviado al penal de Lurigancho, pero, a fines de ese mismo año, fugó del país en una avioneta con la ayuda precisamente de Montesinos y la complicidad de la Policía que lo estaba investigando, pues fue la propia Policía, según el coronel Pércovich, la que sugirió su traslado al hospital Daniel A. Carrión del Callao, de donde fugó disfrazado de médico junto a dos miembros de la PIP apellidados Calderón y Delgado, con rumbo al aeropuerto Jorge Chávez. El comandante Rivera Portel, jefe de Migraciones, y Gamero Febres, jefe de Extranjería, lo ayudaron a embarcarse. Años después, ambos serían convocados por Vladimiro Montesinos para trabajar en el SIN.

A partir de 1984, con la ayuda de la CIA y la creación de la Policía Aérea, el Ministerio del Interior logró detectar 48 aeropuertos clandestinos, los cuales fueron fotografiados y permitieron formular el operativo Cónedor, de bombardeo masivo de pistas tanto en Perú como en Colombia, llevado a cabo con la ayuda de las autoridades estadounidenses. Una de las pistas dinamitadas pertenecía a un laboratorio clandestino ubicado en la frontera con Colombia, donde el narcotraficante Lucio Tijero producía clorhidrato de cocaína de alta pureza, una proeza para la época. Además, contaba en su haber con dos avionetas, una incalculable fortuna en bienes inmuebles en Iquitos y en Lima y, por supuesto, protección policial.

Como se verá a continuación, la descomposición policial fue un factor importante que permitió a las mafias operar con total impunidad en el Perú desde la década de 1960. Precisamente, el allanamiento del complejo narcoindustrial de Tijero en Callarú, en agosto de 1985, dentro de la denominada operación Cónedor y a las tres semanas de haberse instalado el gobierno de Alan García Pérez, mostró el crecimiento desmesurado del poderío económico del narcotráfico, su colusión con el poder y su peligrosa alianza con los carteles colombianos de la droga.

### 23.3.3. Se fortalece la DIGIMIN

Según la opinión del general (r) Edgar Luque Freyre, quien se desempeñó durante cuatro años, entre 1987 y 1990, como director de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN) durante la gestión de José Barzalo Burga y posteriormente con Agustín Mantilla Campos, una de las principales medidas del gobierno aprista fue organizar, desde la DIGIMIN, un sistema de inteligencia lo suficientemente competente como para hacer frente con éxito al fenómeno de la subversión y también a las mafias internacionales de la droga que se habían instalado en el Perú. El propio Luque Freyre admite que entonces ya existían pruebas concretas de la alianza entre la subversión y el narcotráfico: «El narcotráfico abastecía determinado tipo de armamento y la subversión le protegía los vuelos para llevar droga al exterior. Nosotros presentamos testimonios, fotografías, pero el gobierno [de Alan García] prefirió mantenerlo oculto por razones que a veces son difíciles de entender».

Desde su particular percepción, el narcotráfico había infiltrado numerosas esferas del poder, desde el Congreso de la República hasta los organismos que se supone tenían que perseguir el delito, y ni qué decir de la propia Policía. La serie de escándalos como el referido al ex asesor Luis López Vergara, brazo derecho del ex ministro del Interior Luis Pércovich Roca, involucrado con el narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, o la defenestración del senador Yashimura por su sociedad con Guillermo Cárdenas Guzmán, *Mosca Loca*, en cuyo avión bautizado Blanquita se habían trasladado los principales candidatos de AP durante la campaña de

1980, no serían casos aislados. La captura del diputado aprista Miguel Ángel del Pomar, involucrado con una red de narcotráfico internacional que enviaba cocaína a Alemania, o la del diplomático Francisco Tweedle, en cuya valija fueron hallados varios paquetes con droga, fueron evidencias rotundas de su alto poder corrosivo. Años después, la grabación de una conversación telefónica entre el congresista de Cambio 90 por Chachapoyas, Manuel La Torre Bardales, el narcotraficante Abel Muñoz Seijas —contador de Demetrio Chávez Peñahe rrera— y un sujeto identificado como Carpio, en marzo de 1993, confirmaría que estas acciones ilegales continuaron durante el gobierno fujimorista.

La corrupción entre elementos de la Policía Nacional, llámese PIP, GC o GR, se complementaba con el repliegue de estas instituciones de los espacios rurales ante el hostigamiento y los ataques cada vez más frecuentes del PCP-SL contra blancos policiales. La situación se modificó radicalmente al llegar Alberto Fujimori al poder, momento en el cual el Ministerio del Interior fue tomado por las Fuerzas Armadas. El general EP Cáceres fue nombrado para dirigir la DIGIMIN y el general Alvarado reemplazó a Agustín Mantilla. Todo el personal preparado para producir inteligencia en la DIGIMIN fue reclutado por el SIN de Vladimiro Montesinos. Sus equipos fueron transferidos y, según Luque Freyre, la información de inteligencia que existía sobre subversión y narcotráfico fue capturada por el asesor Montesinos. No sólo se desmanteló el aparato de inteligencia del Ministerio del Interior, sino que su actividad quedó subordinada a los comandos político militares en las zonas en emergencia, por lo cual, por lo menos durante una década, la Policía no volvería a recuperar su autonomía y presupuesto, ni siquiera en la lucha antidrogas.

#### **23.3.4. Uchiza: el mejor ejemplo, hito crucial**

El detonante de la situación fue el ataque al puesto policial de Uchiza, ocurrido el 27 de marzo de 1989. Aquel día, una columna de doscientos miembros del PCP-SL se enfrentó a cerca de cincuenta policías durante tres horas. Perdieron la vida diez policías, incluyendo el jefe del destacamento policial, mayor PNP Carlos Farfán Correa, quien fue asesinado por los subversivos en la plaza de armas de Uchiza, poco después de ser tomado como rehén junto a un grupo de guardias. Todo indica que algunos grupos de narcotraficantes también participaron en el ataque debido, según diversos testimonios, a los cupos cada vez más altos que exigía la Policía por brindar seguridad a los vuelos que decolaban con droga en el aeropuerto de Uchiza. Esta afirmación fue corroborada por el Informe de Inspectoría 01-89-IG-PNP de marzo de 1989.

Ante el dramático pedido de auxilio hecho por radio por el mayor Farfán en pleno ataque al puesto policial bajo su mando, la comandancia 76-CPNP de Tocache, ubicada apenas a una hora de Uchiza, respondió que no tenía orden del Jefe de Unidad para brindar su apoyo, mientras que el destacamento de la 64-CPNP-UMOPAR de Santa Lucía manifestó que no podía salir porque estaba lloviendo. Por su parte, el Ejército acantonado en Tingo María esperó órdenes superiores para salir en auxilio de los policías. Esta ayuda que nunca llegó muestra patéticamente no sólo las descoordinaciones existentes entre las fuerzas del orden sino también los intereses existentes.

Un policía sobreviviente del ataque a Uchiza, Marco Urtecho Meléndez, responsabilizó directamente al mayor Carlos Farfán y al capitán Walter Moscoso por permitir el aterrizaje de avionetas colombianas a cambio de 10 mil dólares. De su declaración se desprende que los clases y guardias recibían 120 dólares por vuelo; mientras que a los alfereces, capitanes y mayores les correspondía trescientos, quinientos y ochocientos dólares, respectivamente. Tal era el grado de protección e impunidad que en cualquier momento del día o de la noche las avionetas decolaban de Uchiza para recoger su ilícita carga en una operación que apenas tomaba entre cinco y ocho minutos. A nadie le preocupaba que las naves exhibieran matrícula y bandera colombiana. La orden del capitán PIP Walter Moscoso Carrera era que personal de la DOES permaneciera en alerta en la parte externa del aeropuerto por si aparecían sorpresivamente helicópteros de la DEA o de UMOPAR, en cuyo caso debían intervenir a los colombianos que se hallaban en el aeropuerto de Uchiza. Los arreglos se hacían en la propia base policial, hasta donde llegaban los jefes de las firmas para reunirse con el mayor Farfán Correa y el capitán Moscoso, quienes exigían 10 mil dólares de cupo por cada vuelo. Había días en que despegaban hasta cinco vuelos con droga. Según la información disponible, en la zona de Uchiza operaban 41 firmas de narcotraficantes, que tenían acuerdo con el PCP-SL para recibir seguridad en los aeropuertos clandestinos ubicados en Paraíso, Puerto Pizana, Pólvora y otros lugares adyacentes a Uchiza y Tocache a cambio de dinero y armamento.

En Paraíso, al sur de Uchiza, el PCP-SL utilizaba la avenida principal del pueblo como aeropuerto clan-destino. El 1987, *Ormeño* era el mando militar del PCP-SL en la zona; con el tiempo, sería mando militar del comité regional de Huallaga del PCP-SL y brazo derecho del responsable regional *Artemio*. Ex licenciado del Ejército, de 38 años y contextura delgada, *Ormeño* tenía bajo su mando sesenta hombres, en su mayoría procedentes de Pativilca, Barranca, Huánuco y Lima, los cuales, según el testimonio de un deserto, participaron en el ataque a Uchiza. Quien encabezó las acciones fue un sujeto conocido como *Tocino*, de 35 años, natural de Pucallpa, delegado del PCP-SL en Paraíso. Según se desprende de la investigación policial, el ataque fue planificado por las firmas debido a las exigencias del personal de la 64 Comandancia de la PNP-UMOPAR, al mando del mayor PNP Carlos Farfán, contra la población, que se contradecían también con el interés del PCP-SL por controlar los cupos por el «*trasteo*» de droga en el Alto Huallaga.

Al poco tiempo de terminado el régimen aprista, cuando Agustín Mantilla Campos y su hermano abrieron una cuenta en el Dunmore Management en la agencia del UBS en Miami, informaron al banco que «operaban un servicio de minibuses y eran propietarios de una empresa de seguridad», actividades que hasta ahora han permanecido en el misterio. Con el tiempo, las cuentas se abultaron hasta llegar a más de 2'500,000 dólares. Hasta abril de 1995, cuando Mantilla ya estaba en libertad, se realizaron numerosos débitos, incluidos 21 pagos *swift* «hacia beneficiarios desconocidos», entre los que podría haber estado Vladimiro Montesinos. Parte de estos depósitos provendría de jugosas comisiones por la compra de armas y equipos electrónicos cuando Agustín Mantilla era viceministro y luego ministro del Interior, entre 1987 y 1989, y llegaron a sumar en total 74 millones de dólares.

Un «Reporte de Actividades Sospechosas», emitido por la filial del Swiss Bank Corporation (SBC) en Nueva York en el 2002, indica que Agustín y Jorge Luis Mantilla abrieron la cuenta con 300 mil dólares bajo la denominación «Killarney Management» el 26 de diciembre de 1990. Dos semanas después, Jorge Luis Mantilla abrió otra cuenta por un monto similar. En el mismo reporte del SBC, se señala que se detectaron, además, otras dos cuentas a nombre de los traficantes de armas de origen israelí Zvi Sudit Wasserman e Ilan Weil Levy, lo que confirmaría que el dinero depositado en ellas provino de comisiones por la venta de armas. Mantilla ha dicho a quienes han querido escucharlo que Zvi Sudit fue quien le presentó a Vladimiro Montesinos, aunque no ha precisado la fecha.

Tras el golpe de Estado del 5 de abril de 1992, Mantilla fue sacado de su domicilio y luego acusado de tenencia ilegal de armas. Se le reconoce el coraje de haberse sometido a la justicia. Estuvo recluido en el Hospital de Policía durante quince meses. Lo que jamás se ha conocido son las verdaderas razones de su detención, máxime cuando durante el gobierno aprista, gracias a su buena relación con Mantilla, Vladimiro Montesinos tuvo acceso privilegiado a información sobre narcotráfico y seguridad nacional. Incluso, hay quienes refieren que más de una vez los vieron llegar juntos a Palma del Espino, en Tocache, donde se quedaban a pasar la noche.

### 23.3.5. El Ejército entra al Huallaga

En mayo de 1991, Alberto Fujimori suscribió un convenio marco con los Estados Unidos, que en la práctica autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, con todos los riesgos que ello involucraba. Un mes después de la firma del memorando de entendimiento entre el gobierno peruano y el de Estados Unidos, se amplió la capacidad de los institutos armados para asegurar y reforzar el control sobre las zonas cocaleras y de tráfico ilícito de drogas como el Alto Huallaga. Así, asumían una nueva responsabilidad a la que no estaban autorizados por la Constitución Política. La Policía, desgastada por largos años de lucha contra el TID y la subversión y la alarmante corrupción en sus filas, quedó así subordinada a la autoridad política militar y los operativos antidrogas a la protección oficiosa del Ejército.

Cuando Roberto Arciniega llegó a la zona del Huallaga en 1989, la situación era explosiva. Un mes antes del ataque al puesto policial de Uchiza, la Policía se había visto obligada a cesar la erradicación debido a acciones cada vez más violentas de los cocaleros, que acusaban a la DEA de estar utilizando *Spike*, un insecticida altamente dañino para todo tipo de cultivos. Por su parte, los arroceros de San Martín habían bloqueado en varios tramos la Carretera Marginal, demandando que el gobierno les comprase su producción y mantenían un paro indefinido en toda la región convocado por el Frente de Defensa de los Intereses de San Martín, con su dirigente Lucas Cachay a la cabeza. La sede del Banco Agrario en Tarapoto había sido quemada por miembros del PCP-SL, que mantenían secuestrado al presidente de la Corporación de Desarrollo de San Martín, y la

actividad petrolera se encontraba semiparalizada por la actividad subversiva, que extendía sostenidamente sus «zonas de control» en el Huallaga.

Era un hecho que en San Martín existía un problema social creado por la incapacidad del gobierno aprista para resolver las demandas de arroceros y maiceros, a quienes la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI) había dejado de comprar su producción, situación que el MRTA había capitalizado a su favor. El general Arciniega decidió licenciar al 30% de la tropa para incorporar a reclutas de la zona por su gran conocimiento del terreno y porque en materia de derechos humanos «respetaban a su gente», según palabras del mismo general. Además, inició un diálogo con los cocaleros, a quienes les prometió no combatir: «Si lo graba que le dieran la espalda a Sendero [al PCP-SL], su derrota en el campo militar sería más sencilla y nos tomaría menos tiempo», reflexiona. Por lo mismo, en la primera oportunidad que tuvo de dialogar con los cocaleros, fue directo: «Les dije que no eran narcotraficantes ni subversivos y me comprometí a que nadie los tocara en tanto yo permaneciera en el Huallaga».

Arciniega propuso, en esencia, que no sería posible reconstituir el orden interno si el Estado continuaba reprimiendo a la población en general. Su decisión de prohibir la actuación de las Fuerzas Policiales o la continuación de los programas de destrucción de los cultivos de la coca en el Huallaga reflejó su entendimiento de que dicha represión dañaba las posibilidades de exigir a la población una alianza con las fuerzas del orden para disputarle al PCP-SL sus bases de legitimidad.

Desde 1989, la expansión de las actividades del Ejército en el Huallaga trajo consigo otros tres cambios que, a la larga, afectaron el avance del PCP-SL: la colocación de bases militares en Uchiza, Palma del Espino (Santa Lucía), Tocache y Madre Mía, juntamente con la reorganización o refuerzo de la presencia del Ejército en Auca-yacu; la reanudación de trabajos de inteligencia y el mejoramiento de la Carretera Marginal. En 1990, se consolidó la presencia del Ejército con nuevas bases en Tulumayo, Nuevo Progreso, Pizana y Punta Arenas, mientras el negocio de la droga comenzó a perder la fuerza que lo había caracterizado durante buena parte de la década de los años ochenta. Las redes de narcotráfico se desplazaron hacia el Bajo Huallaga (Juanjuí, Bellavista, Picota) y, en mayor medida, hacia Aguaytía y Pichis-Palcazu. Hasta allí los seguirían elementos del PCP-SL.

Arciniega, cuestionado por las autoridades estadounidenses, fue sucedido en el cargo por el general EP Chacón Tejada, quien sólo permaneció cuatro meses en la jefatura política militar del frente Huallaga. Su sucesor, Mario Brito Gamero, fue abaleado por el MRTA apenas asumió el cargo, lo cual generó una gran inestabilidad en el Huallaga a pocos meses de que Alberto Fujimori se instalara en el gobierno.

Entre 1990 y 1992, la corrosión del narcotráfico alcanzó a numerosos miembros del Ejército. En Uchiza, lugar de donde la Policía fue expulsada por la subversión en 1989, el Ejército había asumido el control total, al punto que, incluso, «arbitraba las actividades de narcotráfico y repartía los cupos» como se menciona en el Informe de Inspectoría 001/BCS 26, del 29 de enero de 1992, elevado al comandante general del frente Huallaga por el coronel Luis Aparicio Manrique.

No resulta tan sorprendente comprobar que prácticamente todo el pueblo de Uchiza, incluyendo a su alcalde Demetrio Díaz Guevara y el resto de sus autoridades, estaba comprometido con el narcotráfico. Así lo revelaría el propio Díaz Guevara, quien aseguró que, en la repartición de los cupos por cada avioneta que despegaba con droga, participaban el Ejército (2 mil dólares), el gobernador (2 mil dólares), el alcalde (2 mil dólares) y el frente cocalero (2 mil dólares). No se menciona al PCP-SL, pero es un hecho que también participaba del reparto con 3,500 dólares, cifra similar a la percibida por la Policía de Santa Lucía.

### 23.3.6. Pistas y bases militares

En algo que muy pocos repararon entonces es en que no era mera coincidencia que la mayoría de las bases contrasubversivas emplazadas en el Alto Huallaga, como Saposoa, Bellavista, Barranca, Punta Arenas, Síon, Pizana, Bambamarca, Uchiza, Nuevo Progreso, Aucayacu y Monzón, entre otras, se hallaran muy cerca de pistas clandestinas que recién comenzaron a ser dinamitadas desde fines de 1992 y durante 1993.

A inicios de 1993, había 18 pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico que estaban emplazadas cerca de una base contrasubversiva en el Huallaga:

Pista Convento (BCS 30 Tarapoto)

Pista Saposoa (BCS Saposoa)  
 Pista Sacanche (BCS Bellavista)  
 Pista Barranca (BCS Barranca)  
 Pista Santa Bárbara (BCS Huicungo)  
 Pista Campanilla (BCS Punta Arenas)  
 Pista Sión (BCS Sión)  
 Pistas Pólvora y Tanata (BCS Pto. Pizana)  
 Pista Cañuto (BCS Bambamarca)  
 Pista Uchiza (BCS Uchiza)  
 Pista Progreso (BCS Nuevo Progreso)  
 Pistas Km 19 y Km 8 (BCS Aucayacu)  
 Pistas Cachicoto, Tantamayo y Maravillas (BCS Monzón)  
 Pista Agua Blanca (BCS 313 Tingo María)

La más importante, sin lugar a dudas, era la de Campanilla, por el volumen de droga que desde ahí se movilizaba; según el capo local, Demetrio Chávez, *Vaticano*, en dos años salieron 280 vuelos. Incluso llegaron a operar de noche con luz halógena para eludir los vuelos de interdicción aérea de los Tucano.

Por los efectos del hongo —*Fusarium oxysporum*— aparecido en 1991 en Nuevo Paraíso, por la represión policial y militar, por el propio conflicto armado interno, pero, sobre todo, por la caída de los precios internacionales, los productores se vieron forzados a abrir nuevos cultivos al norte de la región, bajando el curso del Huallaga: Campanilla, Juanjuí, Bellavista, Saposoa y, de allí, el Bajo Huallaga surgieron como nuevos centros de narcotráfico.

### 23.3.7. Informe Chanamé

La realidad de Campanilla está crudamente descrita en el informe confidencial 016/91 de 1991, elaborado por un oficial de inteligencia de la DINTE identificado con el alias de Chanamé, quien efectuó un recorrido de diez días por las localidades de Picota, Bellavista, Sacanche, Campanilla y Juanjuí. Según este agente, en el eje de la Carretera Marginal, en un tramo de 140 kilómetros comprendidos entre Sacanche, Juanjuí, Campanilla y el puente Punta Arenas, existían pequeños poblados donde la gran mayoría de sus habitantes se dedicaban al narcotráfico protegidos en forma permanente por el PCP-SL y con el apoyo y conveniencia de las fuerzas del orden.

Las actividades de *Vaticano* en Campanilla comenzaron luego de que este narcotraficante rompiera sus vínculos con el PCP-SL y se desplazara desde Uchiza a esa localidad, que el PCP-SL intentó tomar infructuosamente en más de cinco oportunidades. *Vaticano* se independizó del ordenamiento del PCP-SL y logró apoyo del Ejército para solventar una milicia propia mientras operaba su negocio ilícito de acopio y embarque de droga. Chávez, con la ayuda de altos oficiales del Ejército, se convirtió así en un símbolo invencible y peligroso para la hegemonía ejercida por el PCP-SL en el negocio de la droga en el Huallaga.

En Campanilla, según se menciona en el informe Chanamé, existía un destacamento militar de la base contrasubversiva n.º 30 de Punta Arenas. Todos sus integrantes, como dice textualmente ese informe, estaban «coludidos con el narcotráfico».

Para llegar a Campanilla era preciso hacer un recorrido de aproximadamente dos horas y treinta minutos por río a bordo de un deslizador con motor fuera de borda, el medio de transporte más rápido utilizado por narcotraficantes y traqueteros para llevar su carga ilícita hacia Campanilla, desde donde era embarcada para Colombia. Sobre el eje del río Huayabamba, afluente del río Huallaga, en caseríos como Pachiza, Huicungo y Dos de Mayo, los pobladores también estaban dedicados al narcotráfico. En este sector, el PCL-SL había logrado expulsar definitivamente al MRTA luego de encarnizados enfrentamientos con bajas en ambos bandos. El PCP-SL controlaba un número importante de aeropuertos clandestinos, como el de Dos de Mayo, según menciona Chanamé: «En este lugar [Campanilla], los narcotraficantes se desplazan a bordo de camionetas rurales resguardados por sus sicarios que usan ropas ligeras. Se puede notar que portan armas como revólver y pistolas automáticas y metralletas colgadas del cuello, a vista y paciencia de los efectivos del Ejército».

Según el reporte, las caletas y laboratorios se encontraban en pleno centro de Campanilla; incluso existía una a dos cuadras de la base militar. Al caminar por las calles, era notoria la presencia de gran cantidad de jóvenes con mochilas, llamados transportistas o traqueteros, sentados en las veredas, a la espera de sus pagos

por la droga transportada. Se escuchaban casi públicamente las comunicaciones radiales de las firmas para coordinar con sus compradores en Colombia algún vuelo programado para el día. Uno de estos vuelos, según este reporte de inteligencia, decoló el 9 de noviembre de 1991, a las 15:00 horas. Se trataba de una avioneta de matrícula nacional cuya carga y descarga duró apenas entre tres a cuatro minutos, para lo cual utilizó parte de la carretera adaptada por *Limoniel*, conocido luego como *Vaticano*. Al jefe de la base militar le correspondían 4 mil dólares por vuelo y, si cada día llegaban tres a cuatro vuelos, los cupos significaban cerca de 10 mil dólares diarios. Para esta actividad, conforme anotó *Chanamé*, se cerraban las calles, a las que sólo tenían acceso los dueños de las firmas, sicarios y encargados de la seguridad perimetral. Eso no es todo: la corrupción alcanzaba a mandos superiores del Ejército, como el comandante Arias Córdova, *Chuck Norris*, quien hacía *trasteos*, es decir, traslados de volúmenes mayores de droga a bordo de helicópteros del Ejército. Un testigo presencial de este *trato* para llevar la droga de Sión a Bellavista explica su porqué: «Por una razón muy simple: si llevaban la droga por carretera, tenían que pagarle a la Policía, al Ejército, a los subversivos; pero si la sacaban en un helicóptero, sólo abonaban los 50 mil dólares que costaba el vuelo y podían mover una tonelada».

Precisamente, uno de los principales argumentos del general Bellido Mora para deslindar su vinculación con el narcotráfico es la cantidad de oficiales del Ejército que fueron dados de baja y denunciados por su vínculo con el negocio ilícito entre 1992 y 1993, cuando ocupó la jefatura política militar del frente Huallaga. Se menciona la cifra de 56 oficiales denunciados ante la justicia militar, de los cuales sólo cinco fueron condenados.

El 16 de agosto de 1996, *Vaticano*, quien había sido el narcotraficante más importante de Campanilla, denunció en plena audiencia judicial a Vladimiro Montesinos por haberle cobrado 50 mil dólares mensuales para operar en la pista de Campanilla. En una audiencia posterior, el denunciante se presentó en estado deplorable con evidentes lagunas mentales y un lenguaje incoherente.

Cuando Campanilla florecía con el narcotráfico, en enero de 1992, las fuerzas del orden presentes en el área geográfica del frente Huallaga eran las siguientes:

- División Antidrogas del Alto Huallaga (DA DDAH-PNP) con base en Santa Lucía (120 policías) y destacamentos en Tingo María, Tocache y Nuevo Progreso.
- Ministerio Público; dos fiscales *ad hoc* permanentes
- DEA (Agencia Antidrogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos), con su propio personal, diez helicópteros, aviones AWAC y Orión e ingentes recursos económicos para operaciones y pago de informantes.
- Personal del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, instalada con medios electrónicos en el puesto de comando del frente Huallaga a partir del 1 de marzo de 1992 para interceptar comunicaciones radiales.
- VI Región Aérea Territorial de la FAP (VI RAT), al mando de un mayor general; contaba con tres aviones Tucano y pilotos para interceptación área.
- Destacamento Leoncio Prado del Ejército, con batallones contrasubversivos y bases contrasubversivas.

¿Qué responsabilidad tiene cada una de estas entidades antidrogas, que han sido incapaces durante tres décadas de contrarrestar el creciente desarrollo de las mafias dedicadas a la ilegal exportación de la droga e impedir su expansión del Huallaga a nuevas zonas cocaleras?

Los ejemplos del alto grado de corrupción ejercida por el narcotráfico entre integrantes del Ejército abundan y están plenamente documentados. El cierre de la pista a fines de 1992 obligó a las firmas a abandonar Campanilla, lo cual repercutió seriamente en la economía de la tropa, que vio mermada su ración alimenticia, y que, sobre todo, dejó de percibir los cupos que hasta entonces pagaban las firmas a cambio de seguridad. Catorce hombres de la tropa, entre clases y soldados, decidieron entonces desertar llevándose consigo sus armas; esto puso en alerta al Ejército, debido a que fácilmente podían terminar del lado de la subversión, pero finalmente se presentaron en el cuartel de Tarapoto. La deserción de este puñado de soldados de la base contrasubversiva n.º 30 de Punta Arenas, ocurrida en marzo de 1993, puso al descubierto la escandalosa colusión de, por lo menos, una decena de oficiales con el narcotráfico, pero además mostró el alto grado de corrupción entre la tropa y los clases a partir de los famosos cupos de la droga.

En octubre de 1992, ocho narcotraficantes fueron asaltados y asesinados por una patrulla del Ejército al mando del alférez EP Werner Huamaní, apodado *Ninja*, en la zona conocida como boca del río Balsayacu,

para arrebatarles una carga de 350 kilos de pasta básica de cocaína. Sus cuerpos fueron arrojados al río y los ocho sacos con droga quedaron escondidos entre la vegetación para ser vendidos luego.

Otro ejemplo, documentado en el testimonio brindado por el SO2 Alfonso Sánchez Pacheco, Pocho, ante el inspector del frente Huallaga de ese entonces, coronel EP Óscar Córdova Reyes, sucedió la noche del 14 de agosto de 1993, cuando una avioneta de narcotraficantes aterrizó en el aeródromo de Saposoa, con la protección y ayuda de una patrulla del Ejército de la base contrasubversiva acantonada en esa localidad. Por prestar seguridad, cada soldado de la tropa recibía treinta dólares. Al suboficial Pocho le tocaron 2 mil dólares y el técnico Charlie recibió una cifra similar de manos de quien realizaba el reparto, el teniente EP José Díaz Dávila, Dante.

En 1994, el capitán de caballería Gilmar Valdivieso Rejas, apodado *Cienfuegos*, abandonó su puesto y se presentó ante la Subcomisión de Narcotráfico del Congreso Constituyente, que presidía Julio Castro Gómez, para denunciar la colusión de ciertos oficiales del Ejército con el narcotráfico. Entre los denunciados figuraba su propio jefe, el comandante EP Miguel Nájar Acosta, quien dirigía el batallón contrasubversivo n.º 26 de Tocache, donde se había producido la escandalosa liberación de *Chatín* a cambio del pago de 180 mil dólares. *Chatín* era un importante mando logístico de la llamada T-4 del PCP-SL, que comprendía todo el sector de Tocache. Al momento de su captura, el 5 de abril de 1993, por una patrulla del Ejército al mando de *Cienfuegos*, en el paraje denominado Chahuallacu, tenía en su poder doscientos kilos de droga. *Chatín* fue llevado con la droga a la base de Bambamarca, pero no tardaría mucho tiempo en ser liberado gracias a la intermediación del narcotraficante apodado *Cero Cero*, quien acordó con el comandante Nájar Acosta el pago de 180 mil dólares a fin de dejar libre al detenido y devolver la droga. El oficial exigió además al PCP-SL un lote de armas que debía ser entregada a los capitanes Gustavo Bernuy Bobadilla, *Ruiz*, y Manuel Olgún Luna, *Sosa*, como si se tratara de armas «recuperadas» en enfrentamientos.

Valdivieso Rejas fue el primero en denunciar cómo se hacían los famosos arreglos en las bases militares de Pizana, Sión, Punta Arenas y Uchiza, que se hallaban dentro de la jurisdicción del puesto de comando del batallón contrasubversivo n.º 26 de Tocache, al mando del comandante EP Nájar Acosta: «Por cada vuelo se pagaban 10 mil dólares y todos los arreglos eran directamente con el comandante [Nájar Acosta]. Los narcos [narcotraficantes] ingresaban a la base de Tocache como si fuera su casa».

También denunció que, en Uchiza, el capitán Delgado, jefe de la base militar, alquilaba armamento a las firmas para dar seguridad a sus vuelos. Estas bases contrasubversivas no recibían abastecimiento de víveres del Ejército, pues éstos los pagaban las firmas de narcotraficantes como quedó en claro durante el juicio al general EP Jaime Ríos Araico, quien tuvo que aceptar durante el proceso judicial que existió un pacto en este sentido, pero no directamente con el narcotráfico sino a través de las autoridades locales.

Luego de denunciar a Nájar Acosta, Valdivieso estuvo a punto de ser asesinado por miembros de su propia institución. Además, se le abrió un proceso por insulto al superior, desobediencia, abuso de autoridad y falsedad. Para preservar su vida, se vio obligado a abandonar el país junto con su familia, pero volvió clandestinamente y, meses más tarde, fue detenido cuando intentaba ingresar al Congreso de la República. Fue confinado durante varios meses en una celda de la prisión militar, desde donde batalló con el apoyo del Instituto de Defensa Legal a fin de demostrar su inocencia. Finalmente logró ser absuelto, pero la justicia militar condicionó su liberación a no enjuiciar al Ejército por daños y perjuicios. Hoy su expediente engrosa la ruma de papeles de aquellos oficiales que aguardan ser reincorporados al Ejército.

Mediante el decreto legislativo 824, del 23 de abril de 1996, el Congreso de la República dispuso el retiro definitivo de las Fuerzas Armadas de la lucha contra el narcotráfico. Luego de revisar todos estos hechos, no cabe duda de que tienen mucha razón quienes sostienen que el costo que tuvo que pagar el Ejército fue muy alto por los efectos nocivos del narcotráfico entre sus filas y su secuela corruptora, que contribuyó a su descrédito y desgaste.

### 23.3.8. El SIN en el negocio

Apenas Alberto Fujimori asumió el gobierno, se expidió la ley orgánica del Sistema de Inteligencia Nacional, mediante la cual Vladimiro Montesinos tomó absoluto control del manejo y funcionamiento de los servicios de inteligencia de los institutos armados y la Policía Nacional, con lo que se le facilitó su interrelación, entre otros delitos, con el de narcotráfico. En 1991, al llegar al Huallaga, el general Jaime Ríos Araico

detectó un destacamento de Inteligencia procedente de Lima al mando del comandante EP Esparza Morgan, que operaba autónomamente. Se desconocía cuáles eran su misión y funciones. El propio Ríos Araico señaló, durante el proceso judicial en su contra, que Esparza jamás le proporcionó información alguna de inteligencia. Queda claro que el SIN estableció un canal directo con los responsables de inteligencia (G2) de las regiones militares y, en el caso particular del Huallaga, con el G2 del destacamento Leoncio Prado, Eduardo Alvarado Revoredo, quien, bajo la cubierta de Juan, operó inusualmente durante los años de mayor apogeo del narcotráfico (1992-1993), cuando Campanilla era el epicentro del «trasteo» de cocaína hacia Colombia y Vaticano era uno de los mayores jefes de firma.

En 1993, durante la puesta en marcha del plan de operaciones Tentáculo, se instalaron siete puestos de inteligencia (PI) dedicados exclusivamente a informar sobre el movimiento del narcotráfico en el Huallaga, todos a cargo de personal del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE): los PI *Minimarket* y *Bazar* en Tarapoto, el PI *Colectivo* en Juanjuí-Yurimaguas, el PI *Cambista* en Uchiza, el PI *Latero* Tocache-Juanjuí, el PI *Colectivo* en Moyobamba y *Colectivo* en Huánuco. Además, la DINTI designó a cuatro agentes directamente a la jefatura de inteligencia del frente Huallaga. En suma, el SIE resultó también, según múltiples evidencias, un actor más en la maraña corrosiva del narcotráfico.

#### 23.4. CONCLUSIONES

El tráfico de cocaína es una actividad multinacional tan grande y poderosa como el petróleo, que tuvo por décadas sus áreas de producción de materia prima en Perú y Bolivia, su centro de procesamiento industrial en Colombia y su gran mercado de consumo en Estados Unidos de Norteamérica. Su auge en la selva del Huallaga durante el cual se involucraron poblaciones enteras, abarcó las décadas de 1970 y 1980.

En cumplimiento de acuerdos con el gobierno estadounidense y en concordancia con normas internacionales, el Estado impulsó desde la década de 1970 una política de combate al narcotráfico a través de programas de erradicación, sustitución e interdicción policial. Los productores campesinos de hoja de coca se convirtieron en el principal blanco de esta política, que afectó la actividad económica fundamental de amplios sectores de productores del Huallaga.

Antes de que llegara el PCP-SL, el *boom* del narcotráfico creó una grave crisis de gobernabilidad para el Estado, pero simultáneamente una crisis de justicia para la población del Alto Huallaga. Ambos problemas nacieron a raíz de la magnitud del mercado de la droga, que convirtió un negocio ilegal en una práctica generalizada entre la población y en la actividad predominante del valle. Además del impacto financiero que condujo a los bancos de Lima a abrir sucursales en los principales pueblos del Alto Huallaga con el fin de comprar los dólares baratos del narcotráfico e introducirlos a la circulación legal, el poder económico del apogeo de la droga tuvo un impacto aún más profundo en el mismo Estado. Gustavo Gorriti ha comentado sobre el poder sorprendente del narcotráfico para capturar a las instituciones democráticas del país a lo largo del segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry y luego en el de Alan García.

La influencia del PCP-SL en el Alto Huallaga se inició a principios de la década de 1980 y comenzó a perder fuerza rápidamente a partir de 1993, sin llegar a desaparecer por completo hasta la actualidad. Si bien el proyecto del PCP-SL no se propuso establecer vínculos con el narcotráfico, el objetivo de ampliar su base social llevó a los responsables regionales del PCP-SL en el Huallaga, desde su inserción en el valle a partir de los primeros años de la década de 1980, a un acercamiento creciente con el negocio de los derivados de la hoja de coca, intentando intervenir en los puntos vitales de ese mercado y regular las relaciones sociales que se crearon alrededor de éste. Algo similar ocurrió años más tarde con el MRTA, conforme se ampliaron los espacios cocaleros hacia el departamento de San Martín. El Alto Huallaga fue uno de los pocos lugares del país donde el PCP-SL consiguió dominar un territorio amplio por un tiempo relativamente largo, entre diez y quince años.

El PCP-SL distinguió dos espacios definidos: el rural y el urbano. En una primera etapa, en las zonas rurales formó sus «comités populares»; luego, en las zonas urbanas, surgieron los «comités» llamados «la urbana». Pero era en el campo donde la moral del PCP-SL se imponía con mayor severidad y donde la captación de sujetos aptos de seguir con la revolución era activa.

La complejidad de la relación del PCP-SL con el Alto Huallaga durante los años del auge del narcotráfico debería contribuir al rechazo de la idea de una identificación simple entre el PCP-SL como movimiento políti-

co militar y la empresa de la pasta básica de cocaína como se ha pretendido con el empleo del término «narco-terrorismo». De la misma manera, no es posible hablar de «narcopolicía» o «narcoejército» a pesar de que la corrupción generada por el narcotráfico alcanzó niveles insospechados entre los mandos y subalternos policiales y militares.

Son numerosos los casos de puestos policiales y bases contrasubversivas involucradas directamente en el negocio del narcotráfico. Es posible afirmar que ninguno de los actores presentes en el ciclo de violencia en el Huallaga escapó del inmenso poder corrosivo del narcotráfico.

En mayo de 1991, Alberto Fujimori suscribió un convenio marco con los Estados Unidos, que en la práctica autorizó la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha antinarcóticos, con todos los riesgos que ello involucraba. La Policía, desgastada por largos años de lucha contra el TID y el terrorismo y la alarmante corrupción en sus filas, quedó así subordinada a la autoridad político militar y los operativos antidrogas fueron encargados al Ejército.

En 1989, el general Arciniega manifestó que era imposible reconstituir el orden interno si el Estado continuaba reprimiendo a la población en general y si lo que pretendía era una alianza de ésta con las fuerzas del orden para disputar al PCP-SL sus bases de legitimidad. Desde 1989, la expansión de las actividades del Ejército en el Huallaga trajo consigo otros tres cambios que, a la larga, afectaron el avance del PCP-SL: la colocación de bases militares en Uchiza, Palma del Espino (Santa Lucía), Tocache y Madre Mía, juntamente con la reorganización o refuerzo de la presencia del Ejército en Aucayacu; la reanudación de trabajos de inteligencia, y el mejoramiento de la Carretera Marginal.

No obstante, entre 1990 y 1992, la corrosión del narcotráfico alcanzó a numerosos miembros del Ejército, de tal manera que no se puede aceptar como mera coincidencia que la mayoría de las bases contrasubversivas emplazadas en el Alto Huallaga se hallaran muy cerca de pistas clandestinas que sólo comenzaron a ser dinamitadas desde fines de 1992 y durante 1993.

Se menciona la cifra de 56 oficiales del frente Huallaga denunciados ante la justicia militar por tráfico de drogas, de los cuales sólo cinco han sido condenados (véase la lista en el anexo).

Apenas Alberto Fujimori asumió el gobierno, se expidió la ley orgánica del Sistema de Inteligencia Nacional, gracias a la cual Vladimiro Montesinos Torres tomó absoluto control del manejo y funcionamiento de los servicios de inteligencia de los institutos armados y la Policía Nacional, con lo que se le facilitó su interrelación, entre otros delitos, con el de narcotráfico.

En esta relación compleja entre narcotráfico y conflicto armado interno, persiste un gran enigma con respecto al destino de los fondos captados por los mandos del PCP-SL en el Huallaga, que no se expresaron en armamento adquirido ni en el envío de remesas a la dirección nacional del PCP-SL, pues los documentos incautados a ésta muestran un profundo desconocimiento tanto de las actividades de los mandos regionales del Huallaga como de los fondos que manejaban, lo cual sugiere una autonomía de operaciones casi absoluta. Parece ser que el PCP-SL en el Huallaga no dependía de las órdenes de Abimael Guzmán, y su propuesta de justicia en medio del auge de la coca originó el pragmatismo de los cuadros regionales involucrados en el negocio. De la misma manera que muchos oficiales del Ejército y de la Policía, fueron incapaces de resistir al poder corrosivo del dinero proveniente del TID.

APÉNDICE: ALGUNOS PROCESOS CONTRA MILITARES POR TID: 1992-1995

*Caso Capulina (1992)*

My. Rafael Franco De la Cuba

- Presunta vinculación del personal militar de la BCS de Punta Arenas en actividades de TID

*Caso Ríos Araico (1992)*

Gral. Brig. Jaime Ríos Araico

TC Marko Zárate Rotta

My. Marco Lander Moscol

My. Alejandro Muñante Salazar

Tco. 3 Roberto Zárate Aguilar

Civil Demetrio Díaz Guevara (alcalde)

Civil Carlos Rodríguez Chumioque (gobernador)

- Presunto TID por jefe de CEC 115, personal de oficiales, personal auxiliar y civiles en Uchiza durante 1991.

*Caso Claudio (1992)*

Tte. Gregorio Velarde Queirolo, *Claudio*

- Presunta vinculación del personal militar de la BCS de Punta Arenas en actividades de TID

*Caso Campana (1992)*

My. Evaristo Castillo Aste

- Responsable de la pérdida de documentos clasificados (Plan Campana, su Anexo de Inteligencia y el Informe 016/91/22 NOV 91).

*Caso Capitán Paris (1992)*

Cap. Víctor Gómez Gutiérrez

- Relacionado a la participación del jefe de la BCS Leopard de Saposoa en operativo de la PNP/DEA de Santa Lucía.

*Caso Madre Mía (1992)*

Cap. Ricardo Falconí Álvarez

Cap. Ignacio Trauco Rojas

Tte. Víctor Auza Montalvo

Stte. Guillermo Guerra Pinedo

SO1 Jorge Santistevan Chicoma

SO1 Wálter Marín Salazar

SO2 Florentino Silva Chinguel

- Presunto TID, seguridad a vuelos de avionetas de narcotráfico en el kilómetro 19 de la Carretera Marginal, por personal de la BCS de Madre Mía del BCS 313 de Tingo María.

***Caso Ninja (1993)***

Cap. José Penas Sandoval

Tte. Werner Huamaní Tipismaná

Tte. Rosemberg Salazar Sarmiento

Tco. Aurelio Herrera Cáceres

SO1 Severiano Mancilla Contreras

SO2 Francisco Palomino Arévalo

- Por el asesinato de ocho narcotraficantes ocurrido en Balsayacu, San Martín, el 28 de octubre de 1992, para robarles 300 kilos de droga.

***Caso Balsayacu (1993)***

Crl. Eduardo Alvarado Revoredo

Tc. Walter Bueno Castillo

- Presunto TID (se negoció la droga robada por la patrulla).

***Caso Bueno (1993)***

Tc. Wálter Bueno Castillo

Tte. Julio Cruz Albán

- Presunto TID del Jefe de la BCS 30 de Punta Arenas.

***Caso el Sauce (1993)***

Stte. Wálter Chávarri Stechmann

- Presunto TID del Jefe de la BCS del Sauce del batallón contrasubversivo 30 de Tarapoto.

***Caso Saposoa (1993)***

Mayor FAP

5 subalternos FAP

2 capitanes PNP

Oficiales del Ejército

- Acciones de narcotráfico (protección a vuelos) detectadas por operación de interdicción aérea de Tucanos de la FAP durante la noche en el aeródromo de Saposoa.

***Caso Cienfuegos (1993)***

Crl. Miguel Nájar Acosta

Crl. Héctor Rodríguez Cateriano

Cap. Antonio Saldaña Cabanillas

Cap. Manuel Olgún Luna

Cap. Gustavo Bernuy Bobadilla

Cap. Gustavo Flores Huamaní

Cap. Alejandro Cacho Costa

Cap. Marco Vizcarra Alegria

Cap. Luis Landívar Gutiérrez

- Presunto TID cometido por personal militar de la BCS 26 de Tocache, donde se liberó a los subversivos *Chatín* y Elder Soto Chávez a cambio de 140 mil dólares. Además, le devolvieron la droga incautada.

*Caso Vaticano (1994)*

Grl. Jaime Ríos Araico

Grl. Eduardo Bellido Mora

Cmte. Enrique Rodríguez Cateriano

Cap. Mario Vizcarra Alegria

Crl. Luis Aparicio Manrique

Crl. Marco Zárate Rotta

My. Marco Landor Moscol

My. Alejandro Muñante Salazar

My. Eliseo González Chávez

Cap. Oswaldo Zapata Corrales

Cap. Carlos Hernández Aparcana

Cap. Carlos Marín Lira

Tte. Rolando Chiotty Valverde

Tec. Roberto Zárate Aguilar

SO2 Luis Gómez Carrasco

- Procesados por presunta complicidad con el TID al permitir actividades del narcotraficante Demetrio Chávez Peñahe rrera entre 1991 y 1994 en el Alto Huallaga.

*Caso Pirucho (1994)*

Cap. Carlos Flores

Cap. Carlos Obregón

Cap. Miguel Carvajal

Cap. Víctor Tenorio

Cap. Antonio Ferrari

Cap. Mario Chala

Tte. Hidrón Llapapassa

Tte. José Guerra

Alf. Jorge Torres

Alf. Freddy Isla

Cte. Harold Guevara

- Acusados de la liberación del narcotraficante colombiano apodado *Pirucho* en la BCS de Aucayacu.

*Caso López Paredes (1995)*

Cmte. Ángel Dongo Caceres

Cmte. Iván

Tte. Luis Alberto Morales Pizarro

- Presunto TID por permitir la actividad ilícita de la organización, mantener vínculos y dar protección a los miembros de la mafia.

## BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO

- ARAMBURÚ, Carlos**
- 1982 «Expansión de la frontera agraria y demográfica en la selva alta peruana». En Carlos Aramburú y Eduardo Bedoya (comps.). *Colonización en la Amazonía peruana*. Lima: CIPA.
- 1989 «Cambios poblacionales y económicos en la Amazonía Peruana: notas para discutir». En Laureano del Castillo (comp.). *Comunidades campesinas y nativas. Normatividad y desarrollo*. Lima: SER.
- ARAMBURÚ, Carlos y Eduardo BEDOYA**
- 1987 «Poblamiento y uso de los recursos en la amazonía alta: el caso del Alto Huallaga». En *Desarrollo amazónico: una perspectiva latinoamericana*. Lima: CIPA-INANDEP.
- ARENDT, Hannah**
- 1970 *On Violence*. Nueva York: Harcourt Bruce Jovanovich.
- AZCUETA, Michel**
- s/f «Historia de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador (CUAVES): problemas y perspectivas». Lima, mimeo.
- BALBI, Carmen Rosa**
- 1989 «La recesión silenciosa. Estrategias obreras». *Quehacer*, n.º 59.
- BARCLAY, Frederica**
- 1989 *La colonia del Perené*. Iquitos: Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía (CETA).
- 1990 «Protagonismo del Estado en el proceso de incorporación de la Amazonía». En *Amazonía 1940-1990. El extravío de una Ilusión*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- BEDOYA, Eduardo**
- 1982 «Expansión de la frontera agraria y demográfica en la selva alta peruana». En Carlos Aramburú y Eduardo Bedoya (comps.). *Colonización en la Amazonía peruana*. Lima: CIPA.
- BELAUNDE, Fernando**
- 1959 *La conquista del Perú por los peruanos*. Lima: Minerva.
- BLONDETT, Cecilia**
- 1991 *Las mujeres y el poder: una historia de Villa El Salvador*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- BROWN, M. y E. FERNÁNDEZ**
- 1991 *War of Shadows; The struggle for Utopia in the Peruvian Amazon*. California: University of California Press.
- BURT, Jo-Marie**
- 1997 «Political Violence and the Grassroots in Lima, Peru». En Douglas Chalmers y otros. *The New Politics of Inequality in Latin America. Rethinking Participation and Representation*. Londres: Oxford University Press, pp. 281-309.
- 1998 «Shining Path and the "Decisive Battle" for Lima's Barriadas: The Case of Villa El Salvador». En Steve Stern (ed.). *Shining and Other Paths. War and Society in Peru, 1980-1995*. Durham: Duke University Press, pp. 267-306.
- 1999 «El PCP-SL y la "batalla decisiva" en las barriadas de Lima: el caso de Villa El Salvador». En Steve Stern (ed.). *Los senderos insólitos del Perú*. Lima: IEP.
- BURT, Jo-Marie y César ESPEJO**
- 1995 «The Struggles of a Self-Built Community». *NACLA Report on the Ameritas*, vol. 28, n.º 4, enero-febrero.
- CABALLERO, Víctor**
- 1990 «Cambios en la propiedad de la tierra: estudio de la SAIS Cahuide y las comunidades socias». Lima: Sepia.
- CARMACK, Robert M. (ed.)**
- 1988 *Harvest of Violence. The Maya Indian and the Guatemalan Crisis*. Norman y Londres: University of Oklahoma Press.

- CHIRIF, Alberto**
- 1983      «El colonialismo interno en un país colonizado». En Alberto Chirif. *Saqueo amazónico*. Iquitos: CETA.
- 1996      «Identidad y movimiento organizativo en la Amazonía peruana». *Horizontes antropológicos: sociedades indígenas*, año 3, vol. 6, n.º 6, pp. 135-159.
- CHIRIF, Alberto y Carlos MORA**
- 1977      *Atlas de comunidades nativas*. Lima: SINAMOS.
- COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS**
- 1994      *Los sucesos del Alto Huallaga*. Lima: CNDDHH.
- DEGREGORI, Carlos Iván**
- 1986      *Ayacucho, raíces de una crisis*. Ayacucho: IER José María Arguedas.
- 1990      *El surgimiento del PCP-SL*. Lima: IEP.
- 2000      *La década de la antipolítica. Auge y huida de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- DEGREGORI, Carlos Iván y Carlos RIVERA**
- 1993      *FF.AA., subversión y democracia: 1980-1993*. Lima: IEP, documento de trabajo n.º 53.
- DELPINO, Nena**
- 1991      «Las organizaciones femeninas por la alimentación: un menú sazonado». En Luis Pásara y otros. *La otra cara de la Luna: nuevos actores sociales en el Perú*. Lima: CEDYS, pp. 29-72.
- DESCO**
- 1986      *Plan integral de desarrollo de Villa El Salvador*. Lima: Desco, Municipalidad de Villa El Salvador.
- 1989      *Violencia y pacificación. Comisión Especial del Senado sobre las causas de la violencia y alternativas de pacificación en el Perú*. Lima: DESCO, Comisión Andina de Juristas.
- 1994      *Resumen Semanal*. Abril-mayo. Lima: Desco.
- DOUROJEANNI, Marc**
- 1988      «Deterioro ambiental y conservación en el Perú». *AMIDEP*, n.º 57.
- ESTRELLA, Gregorio**
- 1973      *Cuentos del hombre cacataibo (cashibo) y la obra civilizadora de Bolívar*. Colección literaria de los grupos idiomáticos de la selva. Programa de educación bilingüe de la selva. Lima: Ministerio de Educación.
- FALL, Ricardo**
- 1992      *Massacres in the Jungle. Ixcán, Guatemala 1975-1982*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- FERNÁNDEZ, E.**
- 1986      *Para que nuestra historia no se pierda: testimonios de los asháninca y nomatsiguenga sobre la colonización de la región Satipo-Pangoa*. Lima: CIPA.
- FRANK, Ervin**
- 1990      «Pacificar al hombre malo o escenas de la historia aculturativa Uni desde la perspectiva de la víctimas». *Amazonía Indígena*, año 10, n.º 16. Lima: COPAL.
- 1994      «Los Uni». En *Guía etnográfica de la Alta Amazonía*. V.II. Quito: FLACSO e IFEA, pp. 131-237.
- GALLO, Mario, Luis TELLO y Lelis RIVERA**
- 1994      *El impacto del cultivo de la coca. Valle del Huallaga y La Convención*. Lima: Cedro.
- GEF/PNUD/UNOPS**
- 1997      *Amazonía peruana. Comunidades indígenas, conocimientos y tierras tituladas. Atlas y base de datos*. Lima.
- GONZÁLES, José**
- 1990      «Perú: Sendero Luminoso en el valle de la coca». En Diego García Sayán (ed.). *Coca, cocaína y narcotráfico. Laberinto en los Andes*. 2.ª edición. Lima: Comisión Andina de Juristas.
- GONZÁLES, Raúl**
- 1988      «El Huallaga un año después: el retorno de lo reprimido». *Quehacer*, n.º 54.
- 1994      «El itinerario de Sendero». En Heraclio Bonilla (comp.). *Perú en el fin del milenio*. México D.F.: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

- GORRITI, Gustavo  
1991 *Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú.* 4.ª edición. Lima: Apoyo.
- GRADE  
1990 *Educación superior en el Perú. Datos para el análisis.* Documento de trabajo n.º 9. Lima.
- HOSOYA, Hiromi  
2003 *La memoria post-colonial: tiempo, espacio y discursos sobre los sucesos de Uchuraccay.* Documento de trabajo. Lima: IEP.
- IDL  
1990 *Perú 1990. La oportunidad perdida.* Lima: IDL
- INFANTE, Ricardo  
1995 *Perú. Ajuste del mercado laboral urbano y sus efectos sociales: evolución y políticas.* Lima: Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe.
- INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS MINEROS  
1991 *La importancia económica de la minería en el Perú.* Lima.
- INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL (IPES)  
1997 *Diagnóstico socioeconómico del distrito de Ate-Vitarte.* Lima: s/e.
- INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN AGROPECUARIA Y PECUARIA XIV  
1968-1988 *Informe costo de producción agrícola: Tingo María.* Lima.
- JUSCAMAITA, Enrique  
1983 «La economía cocalera y su impacto en la dinámica regional: el caso del valle del río Apurímac-Ayacucho». *Socialismo y Participación*, n.º 24, diciembre.
- LÓPEZ RICCI, José  
1993 «Las organizaciones populares en San Martín de Porres». Informe de investigación (manuscrito no publicado). Lima: Centro Alternativa.
- LYNCH, Nicolás  
1990 *Los jóvenes rojos de San Marcos. El radicalismo universitario de los años setenta.* Lima: El Zorro de Abajo.
- MARTÍNEZ, Héctor  
1976 *Las colonizaciones selváticas dirigidas en el Perú. Antecedentes, actualidad y perspectiva.* Lima: CEDEP [mimeo].
- MAUCERI, Philip  
1990 *Militares: insurgencia y democratización en el Perú, 1980-1988.* Lima: IEP.
- MAYER, Enrique  
1992 «Peru In Deep Trouble: Mario Vargas Llosa's "Inquest in the Andes" Reexamined». En George Marcus (ed.). *Rereading Cultural Anthropology*. Durham y Londres: Duke University Press.
- MÉNDEZ, Cecilia  
2002 *El poder del nombre, o la construcción de identidades étnicas y nacionales en el Perú: mito e historia de los iquichanos.* Lima: IEP, documento de trabajo n.º 115.
- MIOSLAVICH TÚPAC, Diana (comp.)  
1993 *María Elena Moyano: en busca de una esperanza.* Lima: Flora Tristán.
- MONTOYA, Rodrigo  
1972 *La SAIS Cahuide y sus contradicciones.* Lima: UNMSM.
- MORÍN, Françoise  
1998 «Los shipibo-conibo». En *Guía etnográfica de la Alta Amazonía*. V. III. Quito: FLACSO e IFEA, pp. 275-438.
- NORMAN, Long y Bryan ROBERTS  
2001 *Mineros campesinos y empresarios en la sierra central del Perú.* Lima: IEP.

- OBANDO, Enrique  
1991 «Diez años de guerra *antisubversiva*: una pequeña historia». *Quehacer*, n.º 72, pp. 46-50.
- OTTA, Vicente  
1989 «Violencia y movimiento sindical». En Denis Sulmont y otros. *Violencia y movimiento sindical*. Lima: Red Peruana de Educación Popular y Sindicalismo.
- QUINTANILLA, Lino  
1981 *Andahuaylas: la lucha por la tierra (testimonio de un militante)*. Lima: Mosca Azul.
- REINA, Percy  
2002 *Las guerras del Canipaco: los distintos rostros de la violencia*. Huancayo: Red de Ciencias Sociales.
- ROMERO SOTELO, Miguel  
1992 *Hábitat popular: un camino propio*. Lima.
- RUMRIL, Roger  
1982 *Amazonía hoy. Crónicas de emergencia*. Serie Debate amazónico. Iquitos: CAAAP y CETA.
- SAIGNES, Thierry  
1981 «Continuités et discontinuités dans la colonisation du piedemont Amazonien des Andes». En *Les Phénomènes de frontière dans les pays tropicaux. Travaux et mémoires de l'Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine*, n.º 34.
- SÁNCHEZ ENRÍQUEZ, Rodrigo  
1989 «Las SAIS de Junín y la alternativa comunal». *Debate agrario*, n.º 7.
- SANTOS, Fernando  
1985 «Crónica breve de un etnocidio o génesis del mito del vacío amazónico». *Amazonía Peruana*, n.º 11.  
1990 «Integración económica, identidad y estrategias indígenas en la Amazonía». En A. Chirif, N. Manrique, y A. Quijandría (eds.). *Perú: problema agrario en debate*. Lima: SEPIA.  
1992 *Etnohistoria de la Alta Amazonía*. Quito: Abya Yala.
- SANTOS, Fernando y Frederica BARCLAY  
1995 *Órdenes y desórdenes en la selva central*. Lima: IEP.
- SASE-INSTITUTO APOYO  
1993 *El desarrollo institucional de las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) en el Perú*. Lima: SASE/Instituto APOYO.
- SCOTT, J.  
1985 *Weapons of the Weak. Everyday forms of peasant resistance*. New Haven: Yale University Press.
- SOBERÓN, Ricardo  
1989 «Violencia, contraviolencia y derechos humanos». En *I Seminario de Investigaciones Sociales en la Amazonía*. Iquitos: CAAAP, CETA, CIAAP/UNAP, CONCYTEC, IIAP, INC.
- STERN, Steve J.  
1999 *Los senderos insólitos del Perú*. Lima: IEP-UNSCH.
- SULMONT, Denis y Alfredo SILVA  
1983 *La minería y los mineros en el Perú*. Lima: Asociación Trabajo y Cultura.
- TANTAHUILCA, César  
1990 «Economía cocalera y violencia social». Lima: Sepia.
- TUESTA, Fernando  
1989 *Villa El Salvador: izquierda, gestión municipal y organización popular*. Lima: CEDYS (manuscrito no publicado).
- USAID  
1981 *Fundación para el desarrollo nacional*. Lima: USAID.

- VARGAS LLOSA, Mario  
1990 «Historia de una matanza». En *Contra viento y marea*. Vol. 3. Lima: PEISA, pp. 139-170.
- VARESE, Stefano  
1973 *La sal de los cerros. Una aproximación al mundo asháninka*. Lima: Retablo de papel.
- VÁSQUEZ, Norma y Leslie VILLAPOLO  
1993 «Las consecuencias psicológicas y socioculturales del conflicto armado interno en la población infantil asháninka». *América Indígena*, n.º 53, pp. 103-124.
- VILDOSO, Carmen y Denis SULMONT  
1989 «Sendero Luminoso y la clase trabajadora: el pez que se toma el agua». En Denis Sulmont y otros. *Violencia y movimiento sindical*. Lima: Red Peruana de Educación Popular y Sindicalismo.
- VILLAPOLO, Leslie  
1994 «Informe 94: Trabajo de apoyo psicológico y sociocultural a la población asháninka de Puerto Ocopa». Documento interno inédito del CAAAP.
- En prensa *El PCP-SL del desengaño: construcción de memorias, identidades colectivas y proyectos de futuro en una comunidad asháninka*. Lima.
- VILLANUEVA, César  
1989 «Problemática de la violencia y el narcotráfico en la región de la selva». En: Laureano del Castillo (comp.). *Comunidades campesinas y nativas. Normatividad y desarrollo*. Lima: SER.
- WEISS, G.  
1975 «Campa cosmology: the world of a forest tribe in South America». *Anthropological papers of the American Museum of Natural History*, vol. 52, n.º 5.
- WIENER, Raúl (ed.)  
1990 *Guerra e ideología. Debate entre el PUM y el PCP-SL*. Lima: Amauta.
- ZAPATA, Antonio  
1996 *Sociedad y poder local: la comunidad de Villa El Salvador, 1971-1996*. Lima: Desco.

DIARIOS Y REVISTAS CONSULTADOS

*El Comercio*, año 1994.  
*Expreso*, año 1994.  
*Gestión*, abril de 1994.  
*La República*, año 1994.

*Sí*, abril-mayo de 1994.  
*Caretas*, abril-mayo de 1994.  
*Oiga*, año 1994.  
*Que Hacer*, años 1989.  
*Nueva Minería*, año 1991.

INFORMES PERIODÍSTICOS  
Canal 2. Luis Iberico. 19 de mayo de 1994.



